



VERSIÓN PÚBLICA

Unidad Administrativa que clasifica:
Secretaría Técnica

Número de acta y fecha en la que se aprobó por el Comité:
COT-011-2019
Veinte de marzo de dos mil diecinueve

Descripción del documento:

Versión pública de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el siete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente IO-001-2015.

Tipo de información clasificada y fundamento legal:

La información testada con: "A", "B" y "***", es confidencial de conformidad con lo siguiente:

A	Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica.	Se trata de datos personales de personas físicas cuya difusión requiere el consentimiento de su titular, o corresponde a una persona identificada o identificable.
B	Artículos 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 116, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica.	Información que refiere al patrimonio, hechos o actos de carácter económico, jurídico o administrativo de alguno de los agentes económicos emplazados, entregada durante el procedimiento.
**	Artículos 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 116, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica.	Información identificada por la Autoridad Investigadora que refiere al patrimonio, hechos o actos de carácter económico, jurídico o administrativo de alguno de los agentes económicos emplazados, entregada durante el procedimiento.

Páginas que contienen información clasificada:

1 a 7, 9, 10, 11, 26 a 30, 32 a 36, 40 a 53, 55, 57 a 65, 73, 78, 81 a 83, 85 a 90, 92, 94 a 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113 a 115, 117, 120 a 122, 124, 125, 127 a 130, 167, 169, 172 a 176, 178, 179, 181 a 186, 189 a 197, 211, 214, 215, 222, 224, 234 a 237, 240 a 244, 247, 248, 254, 256 a 264, 273, 275 a 277, 279 a 283, 287 a 290, 293 a 303, 305, 306, 308, 312, 313, 315, 316, 317, 319, 320, 330, 338, 346, 347, 349, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 362, 363 a 369, 370, 371 a 373, 376 a 380, 387, 390, 395, 396, 398, 399, 405, 406, 408 a 412, 414, 416 a 418, 421 a 424, 426, 429 a 435, 437 a 439, 441, 444, 446, 450, 468 a 472, 474, 475, 477, 478, 480 a 483, 486, 488, 489, 491 a 496, 498 a 503, 505 a 508, 511 a 538, 540 a 544, 556, 558, 562, 566, 571, 573, 578, 582, 585, 587, 588, 589 a 591, 593, 599, 600, 601, 604, 605, 607, 613, 615 a 619, 624, 625, 626, 633, 635 a 637, 642, 648 a 652, 656, 657, 659 a 661, 664 a 667, 669, 671 y 672.


Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico


Myrna Mustieles García
Directora General de Asuntos Jurídicos



Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecinueve.- Vistas las constancias que integran el expediente al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica, en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos primero, segundo, décimo cuarto, vigésimo, fracciones I y VI y vigésimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º, 4º, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 18, 19, 20, fracciones V, XI y XII, 52, 54, 55, 56, fracciones V y X, 83, fracción VI y 85 de la Ley Federal de Competencia Económica;¹ así como 1, 4, fracción I, 5, fracciones I, VI y XXXIX, 6, 7 y 8, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica,² resolvió de acuerdo con los antecedentes, y consideraciones de Derecho y resolutive que a continuación se expresan:

GLOSARIO

ACCIONISTA(S) O USUARIO(S) ACCIONISTA(S)	Categoría de USUARIO(S) que está(n) afiliado(s) a TUM y que al mismo tiempo es(son) uno de sus principales accionistas que contaron con representantes en el CONSEJO. Dentro de esta categoría se encuentran: ***
ACTA(S)	Actas de las sesiones del CONSEJO, entregadas por TUM y DUN mediante escrito de veintiocho de abril de dos mil diecisiete.
ACUERDO DE ACCESO	Acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por la AI, mediante el cual permite el acceso a los probables responsables a determinada información previamente considerada confidencial.
ACUERDO DE INICIO	Acuerdo emitido por la AI el cinco de enero de dos mil quince, mediante el cual se da inicio a la investigación bajo el número de expediente IO-001-2015.
ACUERDO DE RECOMENDACIONES	Acuerdo CFCE-150-2014 emitido por el PLENO el siete de julio de dos mil catorce en el expediente REC-001-2014, mediante el cual se presentan recomendaciones derivadas del trabajo de investigación sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Financiero y sus Mercados.
AFIRME	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
AI	Autoridad Investigadora de la COFECE.

Eliminado: seis palabras

¹ Publicada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce, vigente al inicio del procedimiento y aplicable al mismo.

² Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce, con su reforma publicada en el DOF el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.



44535

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

ALEGATOS

El escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho en la OFICIALÍA, signado por el Titular de la AI, por medio del cual formula alegatos.

BANAMEX

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

BANCO AZTECA

Banco Azteca S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple.

BANCOMER

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

BANCOPPEL

Bancoppel S.A., Institución de Banca Múltiple.

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

BANXICO

Banco de México.

BD

Base de Datos.

BPD

Base Primaria de Datos.

**BURÓ DE CRÉDITO O
BC**

Nombre comercial cuyo titular es TUM.³

De conformidad con la [REDACTED] del CONTRATO TUM Y DUN, TUM le permite a DUN, [REDACTED]

CC

Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia.

CCF

Código Civil Federal.

CFPC

Código Federal de Procedimientos Civiles.

CIRCULAR 17/2014

La "CIRCULAR 17/2014, dirigida a los Almacenes Generales de Depósito, Instituciones de Fianzas, Instituciones de Seguros, Casas de Bolsa, Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo, Organismos Públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos, Fideicomisos de Fomento Económico

³ De conformidad con los artículos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, el nombre comercial se registrará, en lo que sea aplicable, por lo establecido en dicha Ley para las marcas. El nombre comercial distingue a la empresa y su uso es exclusivo, el cual se encuentra protegido, sin necesidad de registro, que abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa, mismo que se extiende a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional. Asimismo, quien se encuentre usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su publicación en la Gaceta de éste, lo que producirá el efecto presuntivo de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial por un plazo de diez años, pudiendo ser renovado.

Eliminado: tres renglones, catorce palabras



49536

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

constituidos por el Gobierno Federal, Uniones de Crédito, Sociedades de Ahorro y Préstamo; Sociedades Financieras Comunitarias; Sociedades Financieras Populares y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV; Entidades Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que otorguen o administren crédito, préstamo o financiamiento al público, así como a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas, relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a la información que las entidades financieras deben proporcionar a las [SIC]" emitida por BANXICO, publicada en el DOF el tres de octubre de dos mil catorce.

CLIENTE

De conformidad con la fracción II del artículo 2, de la LRSIC, es cualquier persona física o moral que solicite o sobre la cual se solicite información a una sociedad.

CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CO

Créditos proporcionados por las EMPRESAS COMERCIALES.

COMISIÓN O COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica.

CONSEJO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUM

Órgano encargado de la administración de TUM, integrado por un [REDACTED] **, conforme lo determine su Asamblea de Accionistas, entre los cuales se encuentran los [REDACTED] **, en términos de la cláusula [REDACTED] ** de los Estatutos Sociales de TUM.

CONTESTACIÓN DUN

El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, signados por SEPZ, en su calidad de representante legal de DUN, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.

CONTESTACIÓN MAGR

El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, signado por MAGR, actuando por su propio derecho, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.

CONTESTACIÓN SEPZ

El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, signado por SEPZ, actuando por su propio derecho, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.

CONTESTACIÓN TUM

El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, signados por SEPZ, en su calidad de representante legal de TUM, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.

Eliminado: trece palabras



49531

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM y DUN & BRADSTREET

**CONTRATO DE
INTERCAMBIO**

Contrato para el intercambio de la BPD en el segmento de PF
celebrado entre TUM y CC el [REDACTED]
incluyendo sus convenios modificatorios de fechas [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED]

**CONTRATO TUM Y
DUN**

Contrato de prestación de servicios administrativos y operativos
celebrado entre TUM y DUN [REDACTED]

[REDACTED]

CONTRATO DUN Y CC

Contrato celebrado el [REDACTED] entre DUN
y CC, con el objeto de pactar los términos y condiciones en virtud
de los cuales cumplirán con las disposiciones contenidas en el
artículo 36 bis de la LRSIC.

CONTRATO TUM Y CC

Contrato celebrado el [REDACTED] entre
TUM y CIRCULO DE CRÉDITO, con el objeto de pactar los
términos y condiciones en virtud de los cuales cumplirán con las
disposiciones contenidas en el artículo 36 bis de la LRSIC.

**CONTRATO MARCO
CC**

Contrato que se celebra entre CC y sus USUARIOS con [REDACTED]

**CONTRATO MARCO
DUN**

Contrato que se celebra entre DUN y sus USUARIOS por medio
del cual DUN presta a sus USUARIOS los servicios de:

[REDACTED]

**CONTRATO MARCO
TUM**

Contrato que se celebra entre TUM y sus USUARIOS por medio
del cual TUM presta a sus USUARIOS los servicios de:

[REDACTED]

Eliminado: diecinueve renglones, cincuenta y seis palabras



	<p>***</p>
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CRIF	CRIF S.A. de C.V.
DECRETO	Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
DESCUENTO ADICIONAL	Descuento identificado en el DPR como la diferencia que existió entre el descuento que efectivamente fue otorgado a un USUARIO y el DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma del DESCUENTO EXTRAORDINARIO más el DESCUENTO RESIDUAL.
DESCUENTO EXTRAORDINARIO	Descuento establecido fuera del CONTRATO MARCO TUM, otorgado a quienes cumplieran con una meta mínima de consumo.
DESCUENTO ORDINARIO	Descuento establecido en el CONTRATO MARCO TUM, donde se premia el consumo de los RC de PF, ***
DESCUENTO DEL 5.8%	Descuento no establecido en el CONTRATO MARCO TUM que, conforme al dicho de esta SIC, fue orientado para compensar el impacto monetario en los USUARIOS que generó la implementación del intercambio de información requerida en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.
DESCUENTO POR LEALTAD	Descuento no establecido en el CONTRATO MARCO TUM, que, de conformidad con lo señalado en el DPR, habría premiado a los USUARIOS la entrega exclusiva de sus registros con el HC de sus CLIENTES a TUM, además del consumo exclusivo de sus productos.
DESCUENTO RESIDUAL	Descuento identificado en el DPR que habría sido otorgado por TUM a través de las NOTAS DE CRÉDITO.
DGAJ	La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o la Directora General de Asuntos Jurídicos, según corresponda.
DGIM	Dirección General de Investigaciones de Mercado o su titular.

Eliminado: seis renglones, cinco palabras



49539

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

DICTAMEN DUN

El documento "PRUEBA DOCUMENTAL DUN-----ESPECIALISTA EN ECONOMÍA: [la PERITO]---- CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2018", ofrecido por DUN como prueba en la CONTESTACIÓN DUN.

DICTAMEN RG

Dictamen en materia de economía emitido por [REDACTED] A [REDACTED], el cual fue ofrecido como prueba documental privada por TUM, SEPZ y MAGR en sus respectivas contestaciones al DPR.

DR

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce, cuya última modificación aplicable al presente procedimiento se publicó en el DOF el cinco de febrero de dos mil dieciséis.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

DPR o DICTAMEN

Dictamen de Probable Responsabilidad.

DUN

Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia.

**EMPRESA(S)
COMERCIAL(ES)⁴**

Persona moral u organismo público distinto de las ENTIDADES FINANCIERAS, que realiza operaciones de crédito relacionadas con la venta de sus productos o prestación de servicios, u otras de naturaleza análoga; los fideicomisos de fomento económico constituidos por los Estados de la República y por la Ciudad de México (antes Distrito Federal), así como la persona moral y el fideicomiso que adquieran o administren cartera crediticia.

**ENTIDAD(ES)
FINANCIERA(S)⁵**


Aquella autorizada para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan como tal, incluyendo a las que se refiere el artículo 7° de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras: la banca de desarrollo; los organismos públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos; así como los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal; las uniones de crédito; las sociedades de ahorro y préstamo, y las entidades de ahorro y crédito popular, con excepción de las SOFOMES. Continuarán considerándose como tales entidades las personas mencionadas, no obstante que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.

Eliminado: cuatro palabras

⁴ Definida en el artículo 2, fracción IV de la LRSIC.

⁵ Definida en el artículo 2, fracción V de la LRSIC.



ESCRITO DUN	Escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por TUM y DUN, ⁶ en desahogo al REQUERIMIENTO.
ESTATUTO	Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce.
EUA	Estados Unidos de América.
EXCEL	Documento en Excel presentado por TUM como respuesta al REQUERIMIENTO, que obra en el disco compacto que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.
EXPEDIENTE	Expediente administrativo IO-001-2015. En adelante, todas las referencias relativas a folios se harán respecto del EXPEDIENTE, salvo señalamiento específico en contrario.
EXPERIAN	Experian Soluciones de Información, S.A. de C.V.
GIE	Grupo de interés económico.
GRUPO BURÓ DE CRÉDITO O GBC	Grupo Buró de Crédito (TUM y DUN, como un GIE).
HC	Historial(es) Crediticio(s).
HIT	Una respuesta de la SIC complementaria ⁷ a la SIC originadora, ⁸ a solicitud de esta última, consistente en un HC de un CLIENTE para la emisión de un RC, en la que se incluía 
HSBC	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

⁶ Folios 2120 a 2131 y sus anexos en los folios 2132 a 5802.

⁷ Se entiende por SIC complementaria, a aquella SIC que es consultada por la SIC originadora con el fin de que esta última pueda emitir un RC solicitado por un USUARIO, en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC.

⁸ Se entiende por SIC originadora, a aquella SIC a la que un USUARIO solicita la emisión de un RC, en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.



49541

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

IC	Información Crediticia.
IHH	Índice Herfindahl-Hirschman. Definido en los "Criterios Técnicos para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la Concentración del Mercado", publicados en el DOF el catorce de mayo de dos mil quince.
INCIDENTE	Escrito presentado por DUN el quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual promovió un "incidente innominado de acceso a información clasificada como confidencial".
LEY ANTERIOR	Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce.
LFCE	Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete de julio del mismo año.
LIC	Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el DOF el dieciocho de julio de mil novecientos noventa.
LMV	Ley del Mercado de Valores.
LRSIC	Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el DOF el quince de enero de dos mil dos, cuya última reforma antes de la emisión del DPR fue publicada en el DOF el diez de enero de dos mil catorce.
MAGR	Mauricio Aurelio Gamboa Rullán.
MANCERA	Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited.
MERCADO INVESTIGADO	Generación, procesamiento y comercialización de IC.
MERCADO RELACIONADO	Mercado relacionado de la comercialización de los productos de IC de PM.
MR	Mercado Relevante.
MR DE PF	Mercado relevante de la comercialización de RC de PF con una dimensión geográfica nacional.
MR DE PM	Mercado relevante de la recopilación y procesamiento de IC de las PM con una dimensión geográfica nacional.
NO HIT	Una respuesta de la SIC complementaria a la SIC originadora, a solicitud de esta última, consistente en un HC de un CLIENTE (o



en la falta total de dicho HC) para la emisión de un RC, de la cual se desprenda que en la BD de la SIC complementaria: **

[REDACTED]

**OFICIALÍA
OFICIO 176**

Oficialía de Partes de la COFECE.

Oficio número COFECE-AI-2018-176, signado por el titular de la AI, presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual, en respuesta a la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-063, adicionó, entre otras cuestiones, el cuestionario de la pericial ofrecida por DUN.

PERICIAL DUN

Dictamen pericial desahogado por la PERITO el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual respondió el cuestionario de preguntas ofrecido por DUN en la CONTESTACIÓN DUN y por la AI en el OFICIO 176.

**PERIODO DE
INVESTIGACIÓN**

Periodo que abarca del cinco de enero de dos mil quince al once de agosto de dos mil diecisiete.

PERITO

A

PF

Personas físicas.

PFAE

Persona física con actividad empresarial.

PLENO

Pleno de la COFECE.

PM

Personas morales y PFAE.

PMR

Práctica Monopólica Relativa

Eliminado: quince renglones, una palabra



49543

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

**PRIMER DESAHOGO
CNBV**

Oficio con anexos [REDACTED] presentado en OFICIALÍA el diecisiete de marzo de dos mil quince,⁹ firmado por el Director General de Supervisión de Participantes en Redes y por el Director General Contencioso, ambos de la CNBV, en desahogo a la solicitud de información y documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-011¹⁰ emitido por la DGIM el diecinueve de febrero de dos mil quince en el EXPEDIENTE.

**PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD**

Principio que señala que, conforme al artículo 26 de la LRSIC, las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les proporcionen información para la realización de su objeto.

PS

Poder Sustancial

PSFJ

Procedimiento seguido en forma de juicio.

RC

Reporte(s) de Crédito: en términos del artículo 2, fracción VIII de la LRSIC es "[...] *la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad para ser proporcionada al Usuario que lo haya solicitado en términos de esta ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 bis de esta ley, sin hacer mención de la denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comerciales o sofomes E.N.R. acreedoras [...].*"

RCE

Reporte de Crédito Especial: En términos del artículo 2, fracción IX de la LRSIC es "[...] *la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad que contenga el historial crediticio de un Cliente que lo solicita en términos de esta ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 Bis de esta ley, y que incluye la denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comerciales o sofomes E.N.R. acreedoras [...].*"

RCI

Reporte de crédito integral.

**REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA**

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la COFECE, publicado en el DOF el diez de mayo de dos mil diecisiete.

REQUERIMIENTO

Requerimiento de información y documentos emitido en el EXPEDIENTE a TUM y DUN por la DGIM mediante oficio COFECE-AI-DGIM-2015-029,¹¹ de veinte de abril de dos mil quince.

Eliminado: una palabra

⁹ Folios 648 a 655, y sus anexos en los folios 656 a 748.

¹⁰ Folios 533 a 543.

¹¹ Folios 791 a 808.



RFC	Registro Federal de Contribuyentes.
RLFCE	Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica publicado en el DOF el doce de octubre de dos mil siete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
SANTANDER	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.
SANTANDER CONSUMO	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, Entidad Regulada Grupo Financiero Santander México.
SCOTIABANK	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
SEGMENTO CO	Segmento de la BD de DUN o de CC que comprende el HC proveniente de las PM que es reportado por las EMPRESAS COMERCIALES.
SEGUNDO DESAHOGO BANXICO	Oficio con anexos número DGASF/30/2015 presentado en la OFICIALÍA el seis de mayo de dos mil quince, firmado por el Director General de Asuntos del Sistema Financiero e Integrante del Grupo de Coordinación de BANXICO. ¹²
SEGUNDO DESAHOGO CNBV	Oficio con anexos ¹³ número **, presentado en la OFICIALÍA el diecisiete de diciembre de dos mil quince signado por la Directora General Contenciosa de la CNBV.
SEPZ	Sergio Enrique Peña Zazueta
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIC	Sociedad(es) de Información Crediticia.
SOFOM(ES)	Sociedad financiera de objeto múltiple no regulada.
SRE	Secretaría de Relaciones Exteriores.
ST	Secretaría Técnica de la COFECE o su titular, según corresponda.
TERCER DESAHOGO BANXICO	Oficio con anexos ¹⁴ firmado por el Director General de Asuntos del Sistema Financiero e Integrante del Grupo de Coordinación de BANXICO, en desahogo a la solicitud de información y documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-009 ¹⁵ emitido por la DGIM el catorce de enero de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE.

¹² Folios 868 y 869, y sus anexos en los folios 870 a 896.

¹³ Folios 23503 a 23507 y sus anexos en los folios 23508 a 23519.

¹⁴ Folios 24909 a 24937.

¹⁵ Folios 24684 a 24693.



49545

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

TU LLC	Trans Union LLC.
TU SRL	TransUnion Soluciones de Información, S. de R.L. de C.V.
TUM	Trans Unión de México S.A., Sociedad de Información Crediticia.
UDIS	Unidades de Inversión.
USUARIO(S)	Son las ENTIDADES FINANCIERAS, las EMPRESAS COMERCIALES y las SOFOMES, que proporcionan información o realizan consultas a las SIC. ¹⁶
VISTA DUN	El escrito con anexo presentado el doce de abril de dos mil dieciocho en la OFICIALÍA, signado por la Directora General de la Oficina de Coordinación adscrita a la AI, en suplencia por ausencia del titular de la AI, mediante el cual desahogó la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, respecto de las manifestaciones al DPR y las pruebas ofrecidas, en la CONTESTACIÓN DUN.
VISTA TUM	El escrito con anexo presentado el doce de abril de dos mil dieciocho en la OFICIALÍA, signado por la Directora General de la Oficina de Coordinación adscrita a la AI, en suplencia por ausencia del titular de la AI, mediante el cual desahogó la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, respecto de las manifestaciones al DPR y las pruebas ofrecidas, en la CONTESTACIÓN TUM, en la CONTESTACIÓN SEPZ y en la CONTESTACIÓN MAGR.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. El cinco de enero de dos mil quince, el Titular de la AI emitió el ACUERDO DE INICIO mediante el cual ordenó dar inicio a una investigación de oficio bajo el EXPEDIENTE, por la probable comisión de conductas que podrían actualizar lo dispuesto por los artículos 10, fracciones X o XI de la LEY ANTERIOR; así como 56, fracciones X o XI, de la LFCE, en el mercado relativo a la generación, procesamiento y comercialización de IC.¹⁷

SEGUNDO. En términos del artículo 71 de la LFCE, el PERIODO DE INVESTIGACIÓN inició el cinco de enero de dos mil quince y se amplió en varias ocasiones, tal como se señala a continuación:

¹⁶ De conformidad con la fracción XV del artículo 2 de la LRSIC.

¹⁷ Folios 1 a 12 del EXPEDIENTE. En términos del artículo 55 de las DR, el aviso de inicio de la investigación se publicó el tres de febrero de dos mil quince en la página de Internet de la COFECE, apartado "Publicaciones de la Autoridad Investigadora" (visible en la página de internet: <https://www.cofece.mx/autoridad-investigadora/avisos-3/>). Asimismo, dicho aviso se publicó en el DOF el cuatro de febrero de dos mil quince (folios 531 y 532).

Cuadro 1. Periodos de investigación.

Periodo	Inicio	Vencimiento	Emisión del acuerdo de ampliación	Publicación en listas
Primero	05.01.2015	03.07.2015	23.06.2015 ¹⁸	26.06.2015
Segundo	06.07.2015	20.01.2016	07.01.2016 ¹⁹	12.01.2016 ²⁰
Tercero	21.01.2016	01.08.2016	01.07.2016 ²¹	12.07.2016 ²²
Cuarto	02.08.2016	02.02.2017	20.01.2017 ²³	26.01.2017 ²⁴
Quinto	03.02.2017	16.08.2017	N/A	N/A

TERCERO. El once de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 63 de las DR, el titular de la AI emitió el acuerdo de conclusión de la investigación.²⁵

CUARTO. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el titular de la AI emitió el DPR,²⁶ el cual fue entregado en la OFICIALÍA el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete para su presentación al PLENO en términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la LFCE.

QUINTO. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Titular de la AI emitió un acuerdo²⁷ mediante el cual indicó que diversa información identificada como confidencial no debía ser testada en las versiones del DPR que se notificaran a las probables responsables.

SEXTO. El seis de octubre de dos mil diecisiete, la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez presentó una solicitud de excusa para emitir voto en relación con las determinaciones que el PLENO llegara a tomar en el EXPEDIENTE.²⁸ Dicha excusa se calificó como procedente en sesión de doce de octubre de dos mil diecisiete.²⁹

SÉPTIMO. El doce de octubre de dos mil diecisiete, el PLENO emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) ordenó a la ST dar inicio al PSFJ dentro del EXPEDIENTE, mediante el emplazamiento con el DPR a los agentes económicos señalados como probables responsables; (ii) informó a los probables responsables que una vez emplazados tendrían acceso al EXPEDIENTE y contarían con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, improrrogables, para manifestar lo que a su derecho conviniera, adjuntar los medios de prueba

¹⁸ Folios 8976 y 8977.

¹⁹ Folios 23687 y 23688.

²⁰ Publicado en el sitio de internet de la COFECE, apartado "Publicaciones de la Autoridad Investigadora"

²¹ Folios 25703 y 25704.

²² Publicado en el sitio de internet de la COFECE, apartado "Publicaciones de la Autoridad Investigadora"

²³ Folios 27159 y 27160.

²⁴ Publicado en el sitio de internet de la COFECE, apartado "Publicaciones de la Autoridad Investigadora"

²⁵ Folios 30882 a 30884.

²⁶ Folios 30885 a 31217.

²⁷ Folios 31218 al 31228.

²⁸ Folios 31229 y 31230.

²⁹ Folios 31232 a 31237.

documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo; y (iii) requirió a los emplazados para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles presentaran copia de sus declaraciones anuales de impuestos de los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil dieciséis, a efecto de que esta COFECE, en su caso, pudiera verificar su capacidad económica, así como sus ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así, se presumiría que contaban con la capacidad económica necesaria para hacer frente a las sanciones que, en su caso, llegara a imponer el PLENO.³⁰

OCTAVO. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el ST emitió un acuerdo mediante el cual ordenó integrar al EXPEDIENTE: (i) la traducción al idioma inglés, realizada por perito traductor, de la versión confidencial del DPR; (ii) la copia simple de la versión del DPR traducida al inglés que corresponde a TU LLC y que fue remitida a la ST mediante el memorándum COFECE-AI-2017-419; y (iii) las traducciones al idioma inglés del acuerdo emitido por el titular de la AI el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y del acuerdo emitido por el PLENO el doce de octubre de dos mil diecisiete.³¹

NOVENO. Mediante oficios UPVAI-COFECE-2017-092³² y UPVAI-COFECE-2017-093³³ de primero y tres de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, esta COFECE solicitó a la SRE auxilio jurídico para la práctica de la diligencia internacional consistente en el emplazamiento con el DPR a TU LLC, remitiendo la documentación correspondiente para dicha diligencia.

DÉCIMO. El DPR se notificó a los emplazados y éstos presentaron sus respectivas contestaciones en la OFICIALÍA de conformidad con las fechas que a continuación se señalan:

Cuadro 2. Fechas de notificación y contestaciones del DPR.

Agente económico	Fecha de notificación del DPR	Fecha en que surtió efectos la notificación	Día en que empezó a correr el plazo para contestar el DPR	Fecha límite para contestar el DPR	Fecha en que presentaron la contestación al DPR
BANAMEX	27.10.2017 ³⁴	30.10.2017	31.10.2017	18.01.2018	16.01.2018 ³⁵
MAGR	27.10.2017 ³⁶	30.10.2017	31.10.2017	18.01.2018	16.01.2018 ³⁷

³⁰ Folios 31239 a 31241.

³¹ Folios 31263 y 31264.

³² Véase el acuse de recibo correspondiente en los folios 31844 a 31849.

³³ Véase el acuse de recibo correspondiente en el folio 31822.

³⁴ La cédula de notificación por instructivo de BANAMEX obra en los folios 31253 y 31254. Asimismo, la cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31244 y 31245.

³⁵ Folios 32778 a 33159.

³⁶ La cédula de notificación por instructivo de MAGR obra en los folios 31255 y 31256. Asimismo, la cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31246 y 31247.

³⁷ Folios 36524 a 37959.

TUM	27.10.2017 ³⁸	30.10.2017	31.10.2017	18.01.2018	16.01.2018 ³⁹
DUN	27.10.2017 ⁴⁰	30.10.2017	31.10.2017	18.01.2018	16.01.2018 ⁴¹
BANCOMER	03.11.2017 ⁴²	06.11.2017	07.11.2017	25.01.2018	24.01.2018 ⁴³ y 25.01.2018 ⁴⁴
SANTANDER	03.11.2017 ⁴⁵	06.11.2017	07.11.2017	25.01.2018	24.01.2018 ⁴⁶
BANORTE	03.11.2017 ⁴⁷	06.11.2017	07.11.2017	25.01.2018	25.01.2018 ⁴⁸
SCOTIABANK	03.11.2017 ⁴⁹	06.11.2017	07.11.2017	25.01.2018	24.01.2018 ⁵⁰
HSBC	03.11.2017 ⁵¹	06.11.2017	07.11.2017	25.01.2018	24.01.2018 ⁵²
SEPZ	07.11.2017 ⁵³	08.11.2017	09.11.2017	29.01.2018	16.01.2018 ⁵⁴

³⁸ La cédula de notificación por instructivo de TUM obra en los folios 31257 y 31258. Asimismo, la cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31248 y 31249.

³⁹ Folios 33160 a 34409.

⁴⁰ La cédula de notificación por instructivo de DUN obra en los folios 31259 y 31260. Asimismo, la cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31242 y 31243.

⁴¹ Folios 34410 a 35049.

⁴² La cédula de notificación personal de BANCOMER obra en los folios 31639 y 31640. Asimismo, la cédula de citatorio del dos de noviembre de dos mil diecisiete obra en los folios 31632 y 31633.

⁴³ Folios 40245 a 40713.

⁴⁴ BANCOMER presentó un escrito en alcance a su Contestación al DPR, mediante el cual ofrece una prueba adicional. Folios 41566 a 41608.

⁴⁵ La cédula de notificación personal de SANTANDER obra en los folios 31646 a 31727. No precedió citatorio a dicha diligencia.

⁴⁶ Folios 39802 a 40244.

⁴⁷ La cédula de notificación personal de BANORTE obra en los folios 31728 a 31741. Asimismo, la cédula de citatorio del dos de noviembre de dos mil diecisiete obra en los folios 31628 a 31631.

⁴⁸ Folios 40717 a 41565.

⁴⁹ La cédula de notificación personal de SCOTIABANK obra en los folios 31742 a 31774. No precedió citatorio a dicha diligencia.

⁵⁰ Folios 37971 a 38636.

⁵¹ La cédula de notificación personal de HSBC obra en los folios 31780 a 31821. No precedió citatorio a dicha diligencia.

⁵² Folios 38637 a 39801.

⁵³ La cédula de notificación por instructivo de SEPZ obra en los folios 31841 a 31842. La cédula de citatorio de seis de noviembre de dos mil diecisiete obra en los folios 31828 a 31829. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete emitido por el ST, se ordenó dejar sin efectos el citatorio de tres de noviembre de dos mil diecisiete visible en los folios 31778 y 31779, por las razones señaladas en dicho acuerdo, el cual obra en los folios 31823 y 31824.

⁵⁴ Folios 35050 a 36523.



49547

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

TU LLC	04.12.2017 ⁵⁵	05.12.2017	06.12.2017	23.02.2018	NO APLICA ⁵⁶
--------	--------------------------	------------	------------	------------	-------------------------

DÉCIMO PRIMERO. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, MAGR, SEPZ, DUN y TUM presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos mediante los cuales, entre otras cuestiones, solicitaron a la COFECE otorgar acceso completo, sin limitación y condicionante alguna, con carácter de urgente, a determinada información clasificada como confidencial dentro del DPR.⁵⁷ En relación con dichas solicitudes, el ST emitió el primero de diciembre de dos mil diecisiete un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, indicó a MAGR, SEPZ, DUN y TUM, que no se acordaba de conformidad su solicitud de acceso a determinada información clasificada en el EXPEDIENTE como confidencial en virtud de las consideraciones referidas en el acuerdo.⁵⁸

El quince de diciembre de dos mil diecisiete MAGR, SEPZ, DUN y TUM, presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos mediante los cuales promovieron un incidente innominado de acceso a información considerada confidencial en el EXPEDIENTE.⁵⁹ En virtud de lo anterior, el doce de enero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, desechó de plano, por notoriamente improcedentes, los incidentes referidos por las razones indicadas en el acuerdo.⁶⁰

DÉCIMO SEGUNDO. El once de enero de dos mil dieciocho el ST emitió un acuerdo mediante el cual, con fundamento en los artículos 18, 20, fracciones IV, XI y LVI, 24, fracción V y 32, fracciones III y X del ESTATUTO, turnó el EXPEDIENTE a la DGAJ. Dicho acuerdo se notificó por lista el doce de enero dos mil dieciocho.⁶¹

DÉCIMO TERCERO. Los días veintiséis de enero, así como el primero, siete y nueve de febrero, todos de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió cinco acuerdos por medio de los cuales, entre

⁵⁵ El diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la ST el memorándum UPVAI-2018-014, en el cual se anexa el oficio ASJ-00503 presentado en la OFICIALÍA el nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual, la SRE remite a la COFECE diversa información, enviada a través del Consulado General de México en Chicago, Illinois, EUA, relativa a la notificación del DPR realizada a TU LLC el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; entre otros: (1) el acta circunstanciada, por duplicado, levantada por el Cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos, con facultad delegada del Cónsul General de México en Chicago (en adelante "ACTA CIRCUNSTANCIADA"), en la que se hace constar que el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de primero de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la notificación por instructivo a TU LLC de la copia certificada debidamente apostillada y traducida al idioma inglés por perito traductor autorizado de los siguientes documentos, los cuales se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia: (a) la versión del DPR correspondiente a TU LLC, (b) el acuerdo emitido por el titular de la AI el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete dentro del EXPEDIENTE, y (c) el acuerdo emitido por el PLENO el doce de octubre de dos mil diecisiete; (2) copia simple de la identificación del Cónsul que levantó el ACTA CIRCUNSTANCIADA; (3) diez impresiones fotográficas entre las que se encuentran las impresiones fotográficas de la cédula de notificación por instructivo y de la cédula de citatorio referidas en el ACTA CIRCUNSTANCIADA. Folios 32666 a 32700.

⁵⁶ TU LLC no presentó escrito de contestación al DPR.

⁵⁷ El escrito de MAGR obra a folios 32116 a 32127. El escrito de SEPZ obra a folios 32128 a 32139. El escrito de DUN obra a folios 32140 a 32152. El escrito de TUM obra a folios 32153 a 32164.

⁵⁸ Folios 32246 a 32269.

⁵⁹ El escrito de MAGR obra a folios 32374 a 32443. El escrito de SEPZ obra a folios 32444 a 32513. El escrito de DUN obra a folios 32514 a 32586. El escrito de TUM obra a folios 32587 a 32656.

⁶⁰ Folios 32706 a 32718. Dicho acuerdo fue notificado por comparecencias y por lista el quince de enero de dos mil dieciocho.

⁶¹ Folios 32704 y 32705.

otras cuestiones: (i) tuvo por presentadas en tiempo las contestaciones al DPR de: (a) MAGR, SEPZ, TUM y DUN;⁶² (b) BANAMEX;⁶³ (c) SCOTIABANK;⁶⁴ (d) SANTANDER;⁶⁵ y (e) BANORTE;⁶⁶ respectivamente; (ii) tuvo por desahogado el requerimiento formulado a dichos emplazados en el resolutivo "SEXTO" del DPR, toda vez que presentaron sus declaraciones anuales de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil dieciséis y dejó sin efectos el apercibimiento decretado en dicho resolutivo respecto de estos probables responsables; y (iii) respecto de las manifestaciones y elementos de convicción presentados por dichos emplazados, se indicó que por cuestión de orden en la secuela procesal del asunto, y tomando en cuenta que aún no vencía el plazo de los demás emplazados para realizar manifestaciones y ofrecer los elementos de convicción que estimaran pertinentes, la autoridad se reservaba acordar lo conducente en el momento procesal oportuno.

Asimismo, el siete de febrero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió dos acuerdos por medio de los cuales, entre otras cuestiones: (i) tuvo por presentadas en tiempo la contestación al DPR de BANCOMER y su escrito en alcance;⁶⁷ así como la contestación al DPR de HSBC;⁶⁸ (ii) hizo efectivo el apercibimiento decretado en el resolutivo "SEXTO" del DPR respecto de BANCOMER y HSBC, toda vez que no presentaron sus declaraciones anuales de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil dieciséis y señaló que esta autoridad podría presumir que BANCOMER y HSBC cuentan con la capacidad económica necesaria para hacer frente a la sanción que, en su caso, impusiera el PLENO, en tanto no desahogaran el requerimiento referido; y (iii) respecto de las manifestaciones y elementos de convicción presentados por dichos emplazados, se indicó que por cuestión de orden en la secuela procesal del asunto, y tomando en cuenta que aún no vencía el plazo de los demás emplazados para realizar manifestaciones y ofrecer los elementos de convicción que estimaran pertinentes, la autoridad se reservaba acordar lo conducente en el momento procesal oportuno.

DÉCIMO CUARTO. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual, entre otras cuestiones: (i) señaló que a la fecha de elaboración de dicho acuerdo TU LLC no había presentado su contestación al DPR, ni había ofrecido o adjuntado pruebas; (ii) tuvo por precluido el derecho de TU LLC *"para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo"* e indicó que respecto de la imputación contenida en el DPR en contra de TU LLC se actualizaba lo señalado en el artículo 83, fracción I, párrafo segundo, de la LFCE y se tenían por ciertos los hechos imputados en su contra en el DPR, salvo prueba en contrario; y (iii) ordenó dar vista a la AI para que, en un plazo máximo de quince días hábiles,

⁶² El acuerdo emitido el veintiséis de enero de dos mil dieciocho respecto de dichas contestaciones obra a folios 41609 a 41623.

⁶³ El acuerdo emitido el primero de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41632 a 41641.

⁶⁴ El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41660 a 41668.

⁶⁵ El acuerdo emitido el nueve de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41669 a 41682.

⁶⁶ El acuerdo emitido el nueve de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41683 a 41694.

⁶⁷ El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41642 a 41654.

⁶⁸ El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41655 a 41659.

se pronunciara respecto a los argumentos y pruebas ofrecidas por los probables responsables.⁶⁹

DÉCIMO QUINTO. El oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, enviado por la titular de la DGAJ al titular de la AI ("OFICIO"), mediante el cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 83, fracción II, de la LFCE y en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la AI de las manifestaciones de los probables responsables dentro del EXPEDIENTE, para que, en un plazo máximo de quince días hábiles, se pronunciara respecto a los argumentos y pruebas ofrecidas.⁷⁰

DÉCIMO SEXTO. El doce de abril de dos mil dieciocho se recibieron en la OFICIALÍA ocho escritos con anexos, signados por la Directora General de la Oficina de Coordinación adscrita a la AI, en suplencia por ausencia del titular de la AI,⁷¹ mediante los cuales desahogó la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024, realizó manifestaciones respecto de los argumentos y pruebas ofrecidas por diversos emplazados en sus contestaciones al DPR, solicitó tener por reiteradas las consideraciones contenidas en el DPR y pidió tener por ciertos los hechos sobre los cuales no se hubieran pronunciado los emplazados, en particular respecto de las contestaciones al DPR de: (a) TUM, SEPZ Y MAGR; (b) DUN; (c) BANCOMER; (d) HSBC; (e) SANTANDER; (f) BANAMEX; (g) BANORTE; y (h) SCOTIABANK.⁷²

DÉCIMO SÉPTIMO. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió tres acuerdos por medio de los cuales, entre otras cuestiones: (1) se tuvieron por presentados en tiempo los ocho escritos con anexos de doce de abril de dos mil dieciocho referidos en el antecedente anterior; (2) en relación con la solicitud de la AI relativa a acordar lo conducente respecto de las objeciones, alcance y valor de las pruebas, la DGAJ indicó que corresponde al PLENO la apreciación de los medios de convicción conducentes al emitir la resolución correspondiente; y (3) se indicó que la DGAJ acordaría lo conducente respecto de la prevención, admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por los emplazados, y garantizaría la participación de la AI en los términos de la LFCE, en relación con las pruebas que, en su caso, fueran admitidas.⁷³

DÉCIMO OCTAVO. El once de junio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo, mediante el cual: (i) se realizaron diversas prevenciones respecto de las pruebas ofrecidas en las contestaciones al DPR de BANCOMER, BANORTE, HSBC y SEPZ; y (ii) se indicó a los

⁶⁹ Folios 43151 a 43157.

⁷⁰ El acuse de recibido de dicho OFICIO obra en el folio 43161.

⁷¹ En el oficio COFECE-AI-2018-070 de cinco de abril de dos mil dieciocho, enviado por el Titular de la AI a la Directora General de la Oficina de Coordinación, se advierte que el Titular de la AI informó a la Directora referida que: "el suscrito se ausentará del diez al trece de abril de dos mil dieciocho, para que supla mi ausencia y ejerza las facultades que me confiere la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), sus Disposiciones Regulatorias, el Estatuto y demás disposiciones jurídicas aplicables, durante el periodo señalado". Dicho oficio se acompañó en copia certificada a cada uno de los escritos referidos. Véanse los folios 43541, 43693, 43818, 43897, 43982, 44094, 44202 y 44322.

⁷² Folios 43229 a 44323.

⁷³ Folios 44342 a 44401.

emplazados y a la AI que una vez desahogadas las prevenciones referidas o transcurrido el plazo para ello, se acordaría lo conducente respecto de la admisión, desechamiento y, en su caso, desahogo de las pruebas ofrecidas por los emplazados en el EXPEDIENTE.⁷⁴

Los días veintidós, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciocho, BANORTE, BANCOMER, SEPZ y HSBC presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos mediante los cuales, entre otras cuestiones, ocurrieron a desahogar las prevenciones realizadas en el acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho.⁷⁵

El seis de julio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo, mediante el cual, entre otras cuestiones: (1) se tuvieron por presentados en tiempo los escritos de veintidós, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciocho; (2) se tuvieron por desahogadas diversas prevenciones y, en otros casos, se hicieron efectivos diversos apercibimientos al no haber sido desahogadas las prevenciones correspondientes; (3) se indicó que la DGAJ acordaría lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por los emplazados en el momento procesal oportuno.⁷⁶

DÉCIMO NOVENO. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el ST emitió un oficio mediante el cual se requirió diversa información al Administrador Central de Declaraciones y Pagos, de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de conocer la capacidad económica y los ingresos acumulables de las personas emplazadas en el EXPEDIENTE.⁷⁷

El nueve de julio de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el oficio con anexos identificado con número 400-01-02-00-00-2018-0215, emitido por la Administradora de Declaraciones y Pagos "2" de la Administración Central de Declaraciones y Pagos perteneciente a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual, entre otras cuestiones, presentó diversa información en atención al oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitido por el ST.⁷⁸

El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (1) se tuvo por presentado el oficio 400-01-02-00-00-2018-0215; (2) se tuvo por desahogado parcialmente el oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitido por el ST, al observar que diversa información correspondiente a BANCOMER se

⁷⁴ Folios 44426 a 44438.

⁷⁵ Folios 44473 a 44521.

⁷⁶ Folios 44526 a 44543.

⁷⁷ Específicamente, en dicho oficio se solicitó la remisión de: "[...] las declaraciones anuales de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y/o cualquier documentación necesaria que obre en sus archivos, a efecto de conocer la capacidad económica y los ingresos acumulables de los agentes económicos y personas físicas que a continuación se mencionan: [DUN, TUM, BANAMEX; BANCOMER, BANORTE, HSBC, SANTANDER, SCOTIABANK, TU LLC; SEPZ y MAGR] [...]". El acuse de recibo de dicho oficio obra en los folios 44522 a 44524 del EXPEDIENTE.

⁷⁸ Folios 44544 a 44695.



49353

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

encontraba incompleta; y (3) se requirió la colaboración del Servicio de Administración Tributaria a fin de remitir a esta COFECE la información de forma completa.⁷⁹

El veinte de julio de dos mil dieciocho, el ST de esta COFECE emitió un oficio mediante el cual se requirió al Administrador Central de Declaraciones y Pagos, de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que remitiera a la COFECE la información señalada.⁸⁰

El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el oficio con anexos identificado con número 400-01-02-00-00-2018-0251, emitido por la Administradora de Declaraciones y Pagos "2" de la Administración Central de Declaraciones y Pagos perteneciente a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual, entre otras cuestiones, presentó diversa información en atención al oficio de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho emitido por el ST.⁸¹

El quince de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo, mediante el cual, entre otras cuestiones: (1) se tuvo por presentado el oficio 400-01-02-00-00-2018-0251; y (2) se tuvieron por desahogados en su totalidad los requerimientos contenidos en los oficios de diecinueve de junio y de veinte de julio de dos mil dieciocho emitidos por el ST.⁸²

VIGÉSIMO. El diez de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual, entre otras cuestiones, se proveyó respecto la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por los emplazados. Asimismo, se ordenó dar vista a la AI para que, en su caso y en un plazo máximo de cinco días hábiles, adicionara el o los cuestionarios de repreguntas respecto de las periciales admitidas; así como el interrogatorio de preguntas respecto de la prueba testimonial también admitida.⁸³

Las notificaciones del acuerdo anteriormente mencionado se realizaron a HSBC, BANAMEX, SCOTIABANK, BANCOMER, BANORTE, SEPZ, TUM, DUN y MAGR, a través de notificación personal el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.⁸⁴

El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió el oficio número DGAJ-CFCE-2018-063, mediante el cual se dio vista a la AI en términos de lo dispuesto en el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho.⁸⁵ Dicho oficio se notificó a la AI el veinte de agosto de dos mil dieciocho.

El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el oficio con anexo número COFECE-AI-2018-176, signado por el titular de la AI, mediante el cual, en respuesta a la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-063: (i) adicionó los cuestionarios

⁷⁹ Folios 46900 y 46901.

⁸⁰ El acuse de recibo de dicho oficio obra en los folios 46902 y 46903.

⁸¹ Folios 46978 a 46993.

⁸² Folios 46994 a 46996.

⁸³ Folios 46910 a 46977.

⁸⁴ Folios 46998 a 47015.

⁸⁵ El acuse de recibo del oficio referido obra en el folio 47016.

de repreguntas respecto de las periciales ofrecidas por BANAMEX, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK, HSBC, TUM y DUN; y (2) adicionó el interrogatorio respecto de la prueba testimonial ofrecida por HSBC.⁸⁶

VIGÉSIMO PRIMERO. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, SEPZ, MAGR, TUM y DUN presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos con anexos, mediante los cuales, manifestaron su intención de sustituir al perito que cada uno designó inicialmente para el desahogo de la prueba pericial en Economía ofrecida, en virtud de una imposibilidad física de presentarlo a ratificar y protestar su encargo.⁸⁷

El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, se autorizó por única ocasión la sustitución del perito para el desahogo de las pruebas periciales en Economía ofrecidas por TUM, SEPZ, MAGR y DUN, de conformidad con los fundamentos y razonamientos referidos en dicho acuerdo.⁸⁸

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los días veintidós, veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho comparecieron ante la COFECE para aceptar el cargo de peritos y manifestar la ratificación de sus nombramientos, los peritos de las pruebas periciales ofrecidas por BANAMEX, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK, HSBC, TUM, SEPZ, MAGR y DUN.⁸⁹

VIGÉSIMO TERCERO. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, HSBC presentó en la OFICIALÍA un escrito con anexo, mediante el cual solicitó nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial que ofreció, en virtud de una imposibilidad de presentar al testigo en la fecha y hora que se señaló en el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho.⁹⁰

El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por HSBC, en virtud de que HSBC acreditó la imposibilidad física de presentar al testigo a desahogar la prueba testimonial el día y hora señalados por esta COFECE en el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho.⁹¹

VIGÉSIMO CUARTO. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por acreditada la personalidad de diversos peritos designados por los emplazados, así como por ratificados sus nombramientos, aceptados sus encargos y protestado el desempeño de los mismos; (iii) se tuvo por presentado en tiempo el oficio número COFECE-AI-2018-176 emitido por la AI; (iv) se tuvo por adicionado el interrogatorio de preguntas relacionado con la prueba testimonial ofrecida por HSBC; (v) se tuvo por adicionados los cuestionarios en relación con las pruebas periciales

⁸⁶ Folios 47115 a 47124.

⁸⁷ Folios 47017 a 47080. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, TUM, SEPZ, MAGR y DUN aclararon que los escritos de sustitución de perito fueron promovidos dentro del expediente IO-001-2015 y no en un expediente diverso.

⁸⁸ Folios 47083 a 47086.

⁸⁹ Folios 47087 a 47093, 47102 a 47106 y 47125 a 47126.

⁹⁰ Folios 47110 a 47114.

⁹¹ Folios 47133 a 47135.

ofrecidas por BANAMEX, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK, HSBC, TUM y DUN; y (vi) se indicó que la AI no había adicionado un cuestionario de repreguntas respecto de las periciales ofrecidas por SEPZ y MAGR.⁹²

VIGÉSIMO QUINTO. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo en las instalaciones de esta COFECE el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por HSBC en su escrito de contestación al DPR.⁹³

VIGÉSIMO SEXTO. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, TUM, DUN, SEPZ y MAGR presentaron en la OFICIALÍA un escrito mediante el cual realizaron diversas manifestaciones y solicitaron prórroga para que su perito designado rindiera sus respectivos dictámenes periciales.⁹⁴

El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por presentado el escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y por hechas las manifestaciones en éste contenidas; y (ii) se concedió un plazo adicional de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que feneciera el primer plazo para desahogar cada una las pruebas periciales correspondientes, para que se presentaran en la OFICIALÍA los dictámenes periciales en materia de Economía ofrecidos por DUN, TUM, SEPZ y MAGR.⁹⁵

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, SCOTIABANK, HSBC y BANAMEX presentaron tres escritos mediante los cuales realizaron diversas manifestaciones y solicitaron prórroga para que sus peritos designados rindieran sus respectivos dictámenes periciales.⁹⁶

El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvieron por presentados los tres escritos de veinte de septiembre de dos mil dieciocho y por hechas las manifestaciones en estos contenidas; y (ii) se concedió un plazo adicional de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que feneciera el primer plazo para desahogar cada una las pruebas periciales referidas, para presentar en la OFICIALÍA los dictámenes periciales ofrecidos por SCOTIABANK, HSBC y BANAMEX.⁹⁷

VIGÉSIMO OCTAVO. Los dictámenes periciales de BANCOMER, BANORTE, MAGR, SEPZ, SCOTIABANK, TUM, DUN, BANAMEX y HSBC fueron presentados en la OFICIALÍA y se tuvieron por desahogados por la DGAJ, previas las aclaraciones realizadas en su caso, por los peritos correspondientes, en las fechas que se refieren a continuación:

⁹² Folios 47149 a 47154.

⁹³ El acta correspondiente al desahogo de la prueba testimonial obra en los folios 47179 a 47205.

⁹⁴ Folios 47206 a 47208.

⁹⁵ Folios 47212 a 47216.

⁹⁶ Folios 47232 a 47242.

⁹⁷ Folios 47243 a 47249.

Agente económico	Materia de la prueba pericial	Fecha de presentación del Dictamen Pericial	Requerimiento realizado al perito ⁹⁸	Desahogo del Requerimiento realizado al perito ⁹⁹	Acuerdo de desahogo de la prueba pericial
BANCOMER	Actuaría	25.09.2018 ¹⁰⁰	N.A.	N.A.	04.10.2018 ¹⁰¹
BANORTE	Contabilidad	25.09.2018 ¹⁰²	N.A.	N.A.	04.10.2018 ¹⁰³
MAGR	Economía	08.10.2018 ¹⁰⁴	18.10.2018 ¹⁰⁵	14.11.2018 ¹⁰⁶	23.11.2018 ¹⁰⁷
SEPZ	Economía	08.10.2018 ¹⁰⁸	18.10.2018 ¹⁰⁹	14.11.2018 ¹¹⁰	23.11.2018 ¹¹¹
SCOTIABANK	Economía	15.10.2018 ¹¹²	N.A.	N.A.	24.10.2018 ¹¹³
TUM	Economía	16.10.2018 ¹¹⁴	24.10.2018 ¹¹⁵	22.11.2018 ¹¹⁶	05.12.2018 ¹¹⁷
DUN	Economía	16.10.2018 ¹¹⁸	24.10.2018 ¹¹⁹	22.11.2018 ¹²⁰	05.12.2018 ¹²¹
BANAMEX	Economía	16.10.2018 ¹²²	N.A.	N.A.	24.10.2018 ¹²³
HSBC	Economía	16.10.2018 ¹²⁴	N.A.	N.A.	24.10.2018 ¹²⁵

⁹⁸ En la presente tabla se indica "N.A." para aquellos casos en los que esta autoridad no consideró necesario citar o emitir requerimiento de información a los peritos que rindieron los dictámenes correspondientes, para formularles preguntas a efecto de aclarar los puntos de sus dictámenes, ni para exigirles la práctica de nuevas diligencias a dichos peritos.

⁹⁹ En la presente tabla se indica "N.A." para aquellos casos en los que esta autoridad no consideró necesario citar o emitir requerimiento de información a los peritos que rindieron los dictámenes correspondientes, para formularles preguntas a efecto de aclarar los puntos de sus dictámenes, ni para exigirles la práctica de nuevas diligencias a dichos peritos.

¹⁰⁰ Folios 47250 a 47260.

¹⁰¹ Folios 47299 a 47303.

¹⁰² Folios 47261 a 47295.

¹⁰³ Folios 47299 a 47303.

¹⁰⁴ Folios 47306 a 47430.

¹⁰⁵ Folios 48146 a 48150.

¹⁰⁶ Folios 48519 a 48521.

¹⁰⁷ Folios 48787 a 48789.

¹⁰⁸ Folios 47431 a 47535.

¹⁰⁹ Folios 48146 a 48150.

¹¹⁰ Folios 48519 a 48521.

¹¹¹ Folios 48787 a 48789.

¹¹² Folios 47560 a 47641.

¹¹³ Folios 48203 a 48206.

¹¹⁴ Folios 47642 a 47796.

¹¹⁵ Folios 48207 a 48215.

¹¹⁶ Folios 48761 a 48764.

¹¹⁷ Folios 48807 a 48808.

¹¹⁸ Folios 47797 a 47880.

¹¹⁹ Folios 48207 a 48215.

¹²⁰ Folios 48761 a 48764.

¹²¹ Folios 48807 a 48808.

¹²² Folios 47881 a 48059.

¹²³ Folios 48207 a 48215.

¹²⁴ Folios 48062 a 48142.

¹²⁵ Folios 48207 a 48215.

VIGÉSIMO NOVENO.- El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el Comisionado José Eduardo Mendoza Contreras presentó una solicitud de calificación de excusa para emitir voto en relación con las determinaciones que el PLENO llegara a tomar en el EXPEDIENTE.¹²⁶ Dicha excusa se calificó como improcedente en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.¹²⁷

TRIGÉSIMO. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual señaló que no consideraba necesario ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer y, con fundamento en lo establecido en el artículo 83, fracciones IV y V de la LFCE, concedió a los emplazados y a la AI, un plazo de diez días hábiles para que formularan por escrito los alegatos que en derecho correspondieran.

TRIGÉSIMO PRIMERO. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho el titular de la AI presentó por escrito los alegatos correspondientes mediante el oficio COFECE-AI-2018-279.¹²⁸ El siete de enero de dos mil diecinueve TUM, DUN, MAGR, SEPZ, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK y SANTANDER presentaron sus alegatos por escrito.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. El ocho de enero de dos mil diecinueve, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del cual, entre otras cuestiones, tuvo por presentados los alegatos de la AI, así como de TUM, DUN, MAGR, SEPZ, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK y SANTANDER. Asimismo, la DGA tuvo por precluido el derecho de HSBC, Banamex y TU LLC para presentar los alegatos que correspondieran y tuvo por integrado el EXPEDIENTE al siete de enero de dos mil diecinueve.

TRIGÉSIMO TERCERO. Los días catorce, dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve HSBC, SCOTIABANK, SANTANDER, BANAMEX, SEPZ, MAGR, TUM y DUN solicitaron la celebración de una audiencia oral en términos de los artículos 83, fracción VI de la LFCE y 82 de las DR.¹²⁹

Al respecto, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el PLENO acordó de conformidad la celebración de una audiencia oral.

En consecuencia, el cinco de febrero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia oral autorizada por el PLENO en términos de los artículos 83, fracción VI de la LFCE y 82 de las DR.

II. CONSIDERACIONES DE DERECHO

PRIMERA. El PLENO es competente para resolver los procedimientos seguidos en forma de juicio, con fundamento en los artículos citados en el proemio de esta resolución.

¹²⁶ Folios 48060 a 48061.

¹²⁷ Folios 48226 a 48232.

¹²⁸ Folios 48839 a 48910.

¹²⁹ HSBC y SCOTIABANK presentaron sus escritos ante la OFICIALÍA el día catorce de enero de dos mil diecinueve. SANTANDER y BANAMEX presentaron sus escritos en la OFICIALÍA el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve. SEPZ, MAGR, TUM y DUN presentaron sus escritos en la OFICIALÍA el día veintitrés de enero de dos mil diecinueve.



SEGUNDA. En el DPR se analizaron, principalmente, los elementos que a continuación se resumen:

I. Causa objetiva¹³⁰

En el ACUERDO DE INICIO se refirió la existencia de indicios de que TUM, DUN y CC posiblemente realizaban las conductas establecidas en la fracción X o XI tanto del artículo 10 de la LEY ANTERIOR como del 56 de la LFCE y que estas pudieran tener como objeto o efecto desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos en algún mercado relevante que se determine dentro del MERCADO INVESTIGADO.

II. Conductas investigadas¹³¹

El DPR señala que las conductas investigadas consisten en la discriminación de precios y negativa de trato presuntamente realizadas por TUM y DUN, respectivamente. Dichas conductas presuntamente actualizaron los supuestos previstos en el artículo 56, fracciones V y X, de la LFCE, así como lo dispuesto en el artículo 54 de la LFCE.

El DPR puntualiza que la discriminación de precios habría consistido en el establecimiento por parte de TUM de distintos precios a USUARIOS compradores de RC de PF situados en condiciones equivalentes, con el objeto y efecto de otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito; así como impedir sustancialmente el acceso de CC, así como de otros competidores potenciales al MR de la comercialización de RC de PF.

Asimismo, el DPR refiere que la negativa de trato consistiría en que DUN se habría rehusado a proporcionar a CC la información correspondiente a la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, con el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al mercado de la recopilación y procesamiento de IC de PM y al MERCADO RELACIONADO.

Por último, el DPR explica que a pesar de que la investigación comenzó bajo los supuestos previstos en las fracciones X o XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE, a partir de dicha investigación se pudo advertir la probable existencia de la conducta de negativa de trato prevista en la fracción V del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y en la fracción V del artículo 56 de la LFCE realizada por DUN.

III. Periodo de investigación y periodo investigado¹³²

El DPR indica que el PERIODO DE INVESTIGACIÓN comprende desde el cinco de enero de dos mil quince hasta el once de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, en el DPR se indica que el periodo investigado comprendió de dos mil diez a dos mil quince.

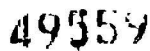
IV. Aplicación de la LFCE¹³³

¹³⁰ Páginas 49 y 50 del DPR, folios 30933 y 30934.

¹³¹ Páginas 50 y 51 del DPR, folios 30934 y 30935.

¹³² Páginas 51 a 52, 166 y 254 del DPR, folios 30935 y 30936.

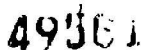
¹³³ Páginas 52 a 61 del DPR, folios 30936 a 30945.





DUN	<p>Tiene por objeto social: "[...] la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas morales y físicas con actividad empresarial, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales y SOFOMES E.N.R., como dichos términos se definen en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia". El consejo de administración de DUN se encuentra conformado por un **</p> <p>De la información proporcionada por TUM y DUN, se advierte que los accionistas que designan a los Consejeros Proprietarios y Suplentes que conforman el Consejo de Administración de DUN, son los siguientes:</p> <p>**</p>
BANAMEX	<p>Tiene por objeto social: " **</p> <p>[...]</p>
BANCOMER	<p>Tiene por objeto social: **</p> <p>Es tenedora del ** del capital contable de su subsidiaria ** por lo que pertenecen al mismo GIE.</p>
BANORTE	<p>Tiene por objeto social: B</p> <p>Hasta el dos mil quince fue tenedora del B del capital contable de su subsidiaria B por lo que pertenecen al mismo GIE.</p>
HSBC	<p>Tiene por objeto B</p>

Eliminado: treinta y dos renglones, ochenta y cuatro palabras



Eliminado: veintiún renglones, setenta y nueve palabras

• **GRUPO BURÓ DE CRÉDITO o GBC**

1) TUM y DUN tienen intereses comerciales y financieros afines, y coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común

140 La cual de conformidad con el DPR representa casi el ** de la estructura total accionaria de ambas SIC. Véanse las páginas 73 y 74 del DPR.

pero DUN tiene como accionista a [REDACTED] **;¹⁴¹ (b) a través del CONTRATO TUM Y DUN, TUM permite a DUN, [REDACTED] **

[REDACTED] **;¹⁴² (c) se observa que un representante de DUN - [REDACTED] ** - participa en órganos colegiados de TUM;¹⁴³ (d) las asambleas de accionistas de TUM y DUN aprueban el informe rendido por sus respectivos Consejos de Administración, el cual incluye, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios a la situación financiera y las notas a los estados financieros, por lo tanto, dado que el informe se propone por los mismos ACCIONISTAS que tienen representación en dichos Consejos de Administración, quienes aprueban dichos informes en cada una de las asambleas de accionistas de estas SIC tienen una identidad de [REDACTED] ** de los accionistas;¹⁴⁴ y (e) cuando iniciaron operaciones, el objeto de TUM y DUN no estaba limitado a que la primera solo prestara el servicio de información a PF y la segunda a PM o PFAE; no obstante, a partir del veintitrés de marzo de dos mil seis se aprobó por la SHCP la especialización en el mercado de generación, procesamiento y comercialización de IC por ambas SIC, lo que implicó que actuaran como un solo agente económico, dada la estructura accionaria de TUM y DUN, y su posicionamiento comercial a través de un mismo nombre comercial.¹⁴⁵

Asimismo, el DPR señala que TUM y DUN coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común, pues: (a) comparten el mismo personal; y (b) los accionistas que nombran a los miembros de los Consejos de Administración de TUM y DUN, son los mismos. En este sentido, el DPR concluye que la coordinación de actividades es consecuencia de que, por un lado, los consejeros de ambas SIC representan a los mismos accionistas de la Serie A de cada SIC y son los encargados de adoptar las resoluciones que impactan en la política de las SIC y, por otro lado, las personas encargadas de ejecutar y operar los objetivos de TUM y DUN son las mismas, lo que tiene como consecuencia que al poseer información estratégica de ambas SIC, puedan tomarse decisiones coordinadas con el fin de beneficiar a ambas.¹⁴⁶

2) TUM, indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y, además, puede ejercer una influencia decisiva o control sobre DUN

El DPR señala que TUM, indirectamente, coordina las actividades del GBC para operar en el mercado de IC y, además, puede ejercer una influencia decisiva sobre DUN, derivado del CONTRATO TUM Y DUN, el cual tiene como características que: (i) [REDACTED] **

¹⁴¹ El DPR indica la nota al pie 88 visible en la página 73 que: "[...]" [REDACTED] **

páginas 68 y 73 del DPR.

¹⁴² Véase la página 74 del DPR.

¹⁴³ Véase las páginas 74 y 75 del DPR.

¹⁴⁴ Véase la página 75 del DPR.

¹⁴⁵ Véase las páginas 75 a 78 del DPR.

¹⁴⁶ Véase las páginas 78 a 81 del DPR.



49363

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

En virtud de lo anterior, el DPR concluye que el personal de TUM es el mismo que está encargado de ejecutar las políticas de DUN, lo que tiene como consecuencia que el personal de TUM ejerza una influencia decisiva sobre DUN; asimismo, DUN, por lo que es dependiente de TUM, lo que se refuerza con la identificación de ambas SIC hacia los USUARIOS y CLIENTES a través del nombre comercial "Buró de Crédito", En este sentido, según el DPR, DUN depende para su funcionamiento de la operación y administración que lleva a cabo TUM.¹⁴⁷

• Otros agentes económicos y autoridades relacionados con la investigación

El DPR identifica como agentes económicos relacionadas con la investigación a los siguientes:

- a. **BANCOPPEL, BANCO AZTECA y AFIRME:** tienen por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, así como de las operaciones y servicios bancarios en términos de la LIC.¹⁴⁸
- b. **CC:** tiene por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al HC de PF y PM, así como la relativa a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y SOFOMES en los términos definidos por el artículo quinto de la LRSIC.¹⁴⁹
- c. **CRIF:** tiene como objeto, entre otros, ¹⁵⁰
- d. **EXPERIAN:** tiene por objeto la ¹⁵¹

¹⁴⁷ Véase las páginas 81 y 82 del DPR.

¹⁴⁸ Véase las páginas 91 y 92 del DPR.

¹⁴⁹ Véase las páginas 92 y 93 del DPR.

¹⁵⁰ Véase la página 93 del DPR.

¹⁵¹ Véase la página 94 del DPR.



Asimismo, el DPR identifica como autoridades relacionadas con la investigación a: BANXICO, CNBV y SHCP.

VI. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de IC¹⁵²

El DPR explica que el intercambio de IC concede mayor certeza a los prestamistas, lo que contribuye a reducir el costo del crédito otorgado, facilitar la intermediación financiera e incrementar la oferta crediticia. Asimismo, señala que las SIC cumplen una función nodal en el intercambio de IC entre instituciones que otorgan créditos y préstamos, pues son organizaciones enfocadas en recopilar IC relevante, así como en facilitar y ordenar el intercambio de la IC de los CLIENTES. En este sentido, el DPR refiere que los productos ofrecidos por las SIC tienen como objetivo general disminuir la asimetría de información existente en el mercado de crédito.

• **Estructura del mercado de IC**

El DPR describe la estructura del mercado de generación, procesamiento y comercialización de IC indicando que en México dicho mercado se integra por: TUM, DUN y CC.

El DPR indica que TUM comenzó a operar desde el año mil novecientos noventa y cinco y, a partir de dos mil cinco, está enfocada a la provisión de productos crediticios de PF. Por otro lado, DUN comenzó a operar desde el año mil novecientos noventa y siete y, a partir de dos mil cinco, se enfocó en el segmento de PM. TUM y DUN, como se indicó, forman parte del mismo GIE.

Por otra parte, CC comenzó a operar desde el año dos mil cinco proveyendo sólo reportes relativos a PF y, a partir del veinticuatro de abril de dos mil doce, CC recibió autorización para ampliar sus operaciones al segmento de PM.

De igual forma, el DPR refiere a los USUARIOS y los CLIENTES como actores importantes del MERCADO INVESTIGADO, siendo que los CLIENTES son la fuente primaria de la IC que los USUARIOS obtienen y entregan a las SIC para su recopilación, procesamiento y conversión en productos de IC, mismos que a su vez, serán distribuidos a los CLIENTES y USUARIOS.

Por otra parte, el DPR señala que el MERCADO INVESTIGADO presenta cuatro características principales:

1. Los USUARIOS de las SIC son los proveedores de la IC y, a su vez, son los demandantes de los productos finales de las SIC, lo que implica una doble relación entre estas instituciones financieras y las SIC. En México dicha relación se formaliza mediante contrato (en el caso de TUM, se le denomina CONTRATO MARCO TUM).
2. Las tres empresas que actualmente operan en dicho mercado son propiedad, de forma mayoritaria, de sus USUARIOS; es decir existe integración vertical en el mercado de IC y otorgamiento de crédito.

¹⁵² Páginas 97 a 125 del DPR, folios 30981 a 31009.

3. Existen importantes economías de escala en la producción. La elaboración de productos de IC como los RC o productos de valor agregado genera altos costos fijos; así como, costos marginales cercanos a cero.
4. El mercado presenta economías de red derivadas del beneficio que le proporciona a los USUARIOS el acceder a una BD más completa, con la mayor cantidad de registros disponibles.

De acuerdo con lo señalado en el DPR, las economías de escala y de red potencialmente han generado concentración en el MERCADO INVESTIGADO.

Posteriormente el DPR señala que otro elemento que caracteriza al mercado de IC en México es la elevada rentabilidad que han manifestado TUM, CC y DUN. Según el DPR, la elevada rentabilidad que muestran principalmente TUM y DUN podría explicarse por la concentración que existe en el mercado o por mejoras constantes en la utilización de los recursos productivos. Al respecto, el DPR indica que al evaluar la relación entre la rentabilidad de las SIC y su eficiencia, los valores del índice de Boone [REDACTED]¹⁵³ para todo el periodo de dos mil siete a dos mil doce, con excepción del dos mil nueve. Por lo que el DPR concluye, presuntivamente, que no se encontró bajo esta metodología una relación estrecha entre las altas tasas de rentabilidad de las SIC, medidas a través de las ROAs¹⁵⁴ y las reducciones en sus costos de operación.

- **Elaboración de los productos de IC**

El DPR describe que la cadena productiva de la industria de IC consta principalmente de tres etapas: la generación de la IC, su procesamiento y la comercialización de los productos o servicios relacionados con el comportamiento crediticio de los CLIENTES.

De conformidad con el DPR: (i) la SIC se encarga de recopilar la información provista por los USUARIOS y la consolida mediante BD, las cuales están conformadas por los registros de la información relacionada con el HC de los CLIENTES; (ii) estas BD se ordenan, analizan y actualizan continuamente para elaborar productos y proveer servicios que le permitan a dichos USUARIOS hacer más eficiente el otorgamiento del crédito, mejorar la administración de la cartera crediticia o asignar una calificación o valoración al portafolio de créditos otorgados; asimismo, también les permitirá a los CLIENTES de los servicios financieros monitorear la evolución de su HC; y (iii) las SIC ponen a disposición del público dichos productos, los cuales son elaborados bajo demanda.

1. **Generación de la IC**

El DPR indica que la generación y recopilación de la IC consta de varias etapas. En la fase inicial, los USUARIOS obtienen la IC de los CLIENTES para posteriormente enviarla a las SIC para su recopilación y consolidación.

¹⁵³ El DPR indica que entre más cercano se encuentre el indicador a cero habrá una menor relación entre rentabilidad y eficiencias por costos.

¹⁵⁴ En inglés "Return On Assets", la cual según el DPR se calcula al dividir la utilidad neta entre los activos totales.



De conformidad con el DPR, las BD de las SIC están conformadas por registros (un registro corresponde a un crédito), siendo que el conjunto de registros correspondientes a una misma PF o PM, constituye un expediente.

Asimismo, el DPR refiere que los USUARIOS deben entregar sus BD a las SIC [REDACTED] **
[REDACTED] a la firma del contrato de afiliación, siendo que [REDACTED] **

[REDACTED] Una vez que la información es validada por la SIC, se integra a su BD.

El DPR señala que el HC de los CLIENTES se compone de información negativa y positiva, siendo la información negativa la que se incluye en la BPD y la que es motivo de intercambio mensual entre las SIC,¹⁵⁵ una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado. De acuerdo con el DPR, las SIC deben acordar las condiciones y las cantidades a pagar por el intercambio de dicha información, siendo que los acuerdos respectivos deben presentarse a la CNBV para su autorización. El DPR refiere que en el caso de PF, la CNBV autorizó a TUM y a CC un intercambio mensual de BPD a un precio de [REDACTED] ** por registro. Asimismo, el DPR señala que en el caso de PM dicho intercambio no se ha llevado a cabo hasta el momento.

De igual forma, el DPR establece que la LRSIC no obliga a las SIC a compartir la información positiva de forma masiva y periódica, sino que, en este caso, la compartición se hace de forma puntual respecto de un determinado CLIENTE.

El DPR indica que en términos del artículo 2, de la LRSIC, los RC contienen la información formulada por una SIC para ser proporcionada al USUARIO que lo haya solicitado, sin hacer mención de la denominación de los USUARIOS acreedores; en tanto que los RCE son solicitados por el propio CLIENTE; y contienen su HC, mencionando la denominación de los USUARIOS acreedores.

Asimismo, el DPR refiere que los Usuarios al consultar la información de un Cliente deben contar con la información proveniente de las BD de todas las SIC en el mercado. De esta forma, los USUARIOS pueden optar por solicitar un RC: (i) con el fin de que se integre la información proveniente de las BD de todas las SIC en el mercado; o (ii) en el cual avise a la SIC originadora que únicamente consulte la información proveniente de su BD, en cuyo caso, el USUARIO deberá consultar de forma separada a las demás SIC. El DPR explica que el intercambio de información entre SIC con motivo de un RC obliga a la SIC originadora a pagar una contraprestación a la SIC complementaria, [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] B ¹⁵⁶ lo que a su vez repercute en la tarifa que se cobra al USUARIO,

¹⁵⁵ El DPR señala que la información negativa comprende la información de cartera vencida y aquella relacionada con operaciones fraudulentas.

¹⁵⁶ Específicamente, el DPR señala lo siguiente: [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] B [REDACTED]



49387

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

por lo que en los casos en los que se consulta información entre SIC, el USUARIO no tiene conocimiento previo del precio que pagará por el RC.¹⁵⁷

En este sentido, el DPR especifica que, dado que la SIC complementaria es la propietaria del HC que proporciona, [REDACTED]

Posteriormente, el DPR indica que en el caso de las PF, dado que sí hay intercambio de la BPD (información negativa) y las SIC no tienen obligación de intercambiar, de forma masiva, la BD con información positiva, la tarifa asociada por la consulta de información de una SIC a otra con motivo de un RC, en la que se proporcionó información positiva considerada como HIT, es de [REDACTED] más IVA.¹⁵⁸ Para el caso de PM, en la que no existe intercambio de la BPD (información negativa) la tarifa asociada por la consulta de información de una SIC a otra, con motivo de un RC, en la que se proporcionó información negativa y/o positiva considerada como HIT, es de [REDACTED]

2. Procesamiento de la IC

El DPR refiere que una vez que los USUARIOS han entregado la información, las SIC la verifican para asegurar la calidad de la información, adoptando medidas de seguridad y control. Posteriormente, una vez que la información ha sido validada se la integra a las BD. De conformidad con el DPR, las SIC: [REDACTED]

3. Comercialización de la IC

El DPR indica que las SIC comercializan sus productos, principalmente, con los USUARIOS y, en menor medida, con los CLIENTES (ya sea PF o PM). Asimismo, señala que la mayoría de los USUARIOS afiliados a cualquiera de las SIC son las EMPRESAS COMERCIALES, seguidos para el caso de CC y DUN, por las ENTIDADES FINANCIERAS y las SOFOMES. En este sentido, el DPR puntualiza que en el MERCADO INVESTIGADO los USUARIOS asumen el papel de oferentes y demandantes en distintos eslabones de la cadena productiva.

¹⁵⁷ El DPR señala que ello ocurre dado que el Usuario no puede prever si como resultado de la consulta entre SIC habrá información que tenga el carácter de HIT. Asimismo, en el DPR se indica que esto es distinto cuando el USUARIO avisa que hará cada consulta de forma separada para cada SIC, en cuyo caso, el precio del RC es el precio base (menos descuentos).

¹⁵⁸ De acuerdo con el DPR, [REDACTED]

Eliminado: cuatro renglones, sesenta y tres palabras

De conformidad con el DPR, TUM, DUN y CC han aplicado el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD en varias ocasiones del dos mil diez al dos mil quince, el cual significa que para acceder a los productos crediticios ofrecidos por una SIC, el USUARIO le debe proporcionar su IC.

Asimismo, el DPR señala que, si bien la LRSIC no impide que los USUARIOS firmen un acuerdo de afiliación con más de una SIC, esto no es lo habitual.

De acuerdo con el DPR, con algunas excepciones, los productos que comercializan las SIC son vendidos sobre demanda. Asimismo, el DPR indica que las SIC proporcionarán los RC a un USUARIO únicamente cuando éste cuente con la autorización expresa del CLIENTE.¹⁵⁹

Respecto de los productos ofrecidos por las SIC, el DPR señala que éstos tienen como objetivo general disminuir la asimetría de información existente en el mercado de crédito y pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de necesidad que atienden y con el destinatario final del producto.

El DPR señala que todas las SIC presentes en el mercado ofrecen productos básicos y de valor agregado a sus USUARIOS y a sus CLIENTES, siendo los USUARIOS los principales consumidores, y el RC el principal producto comercializado.

Al respecto, el DPR describe los productos básicos -RC y RCE- conforme a lo siguiente:

- a. RC: principal producto básico ofrecido a los USUARIOS que contiene el HC del CLIENTE con respecto a los créditos que hayan contratado en un plazo de hasta setenta y dos meses. Su elaboración requiere tanto de información positiva como negativa, pero no se menciona la denominación de los acreedores. La CNBV autorizó un precio máximo de ** a CC y TUM para los RC de PF y de ** a CC y DUN para los RC de PM, incluyendo el costo generado por el intercambio de información entre SIC.
- b. RCE: dirigidos exclusivamente a los propios CLIENTES, incluyen el HC completo, los acreedores que recientemente han consultado el HC del CLIENTE y la información de todos los USUARIOS que en su momento le han otorgado algún crédito. Los CLIENTES tienen derecho a recibir un RCE de forma gratuita cada año, pagando por un segundo ejemplar en el caso de TUM y DUN entre ** y ** según el medio de entrega que elijan, y en caso de CC, entre ** y **, de acuerdo con el medio de entrega seleccionado. Los precios para el RCE no dependen de si el solicitante se trata de una PF o PM.

En términos del artículo 36 Bis de la LRSIC la CNBV sólo cuenta con facultades para autorizar el precio del RC y de los RCE que contienen información de todas las SIC existentes

¹⁵⁹ En el DPR se especifica que la autorización no será necesaria en el caso de PM con créditos superiores a 400,000 UDIS (cuatrocientas mil UDIS) ni en el servicio de calificación de créditos mediante valoraciones numéricas que sean solicitadas por ENTIDADES FINANCIERAS.



49509

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

en el mercado y, por tanto, no cuenta con facultades para autorizar las tarifas de otros productos o servicios que ofrecen las SIC al público.

Según el DPR, en el segmento de las PF es donde se comercializan la

A ala que durante el dos mil catorce el [REDACTED] de la totalidad de los RC gene de PM. Asimismo, más del [REDACTED] Por su parte, CC sólo comercializó el [REDACTED] de la totalidad de RC ofrecidos a los USUARIOS.

Con respecto a los precios, el DPR explica que las SIC aplican descuentos a los USUARIOS dependiendo de diversos factores, siendo que en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC, a la tarifa autorizada por la CNBV, las SIC, "(...) de manera conjunta, podrán aplicar descuentos con base en: a) la cantidad de consultas realizadas por el Usuario de que se trate respecto de este tipo de Reportes de Crédito, y b) cualquier otro factor que incida en la determinación del precio".

El DPR especifica que de acuerdo con lo manifestado por TUM y

c [REDACTED] m ó que [REDACTED]

En este sentido, el DPR afirma que además de los factores que mencionó TUM para la aplicación de descuentos a los USUARIOS, han existido diversas clases de descuentos determinados fuera de lo estipulado en el CONTRATO MARCO TUM y que también inciden en el precio de los RC de PF de esta SIC.

Por otra parte, respecto de los productos de valor agregado, el DPR explica que estos comprenden la manipulación, el procesamiento y el análisis de datos crediticios existentes, para generar herramientas que pueden integrarse con facilidad en los procesos de aprobación de créditos o préstamos, así como en la gestión del riesgo de las ENTIDADES FINANCIERAS o de aquellas entidades que otorgan financiamiento. En este sentido, el DPR refiere que los productos de valor agregado tienen la función de optimizar el tiempo y los recursos empleados en el análisis de la IC, mejorando así la eficiencia operativa de las entidades.

Así, el DPR señala que los productos de valor agregado trascienden la cualidad descriptiva de los RC para cumplir funciones más sofisticadas de predicción de comportamiento o análisis de cartera, abarcando desde calificaciones que sintetizan el comportamiento crediticio de los CLIENTES o avisos relacionados con los expedientes, hasta scores que predicen el comportamiento crediticio de los sujetos de crédito en el futuro inmediato.

Al respecto, según el DPR, estos productos han sido clasificados en dos tipos: (i) productos de administración de cartera, destinados a los USUARIOS para monitorear el desempeño de sus

Eliminado: dos renglones, sesenta y una palabras

CLIENTES para fines de evaluación de la cartera crediticia; y (ii) productos de calificación crediticia, los cuales tratan de predecir, a partir del comportamiento crediticio pasado del CLIENTE, su comportamiento crediticio futuro.

VII. Análisis de la primera conducta: Discriminación de Precios¹⁶⁰

De conformidad con el DPR, desde enero de dos mil diez hasta marzo del dos mil quince, TUM redujo considerablemente los precios de los RC de PF a los cuales accedieron principalmente los ACCIONISTAS. Dicha reducción se habría llevado a cabo a través de la implementación de varios descuentos: DESCUENTOS ORDINARIOS, DESCUENTO EXTRAORDINARIO, DESCUENTO DEL 5.8%, DESCUENTO POR LEALTAD y DESCUENTO RESIDUAL. La orientación de los descuentos, según el DPR, acredita la conducta tipificada en la fracción X del artículo 56 de la LFCE porque habría beneficiado a los ACCIONISTAS de forma discriminatoria, en detrimento del resto de los USUARIOS con quienes aquellos compiten en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito.

De igual forma, el DPR indica que TUM es un agente económico con PS en el MR de la comercialización de RC de PF, los cuales carecen de sustitutos cercanos, pues han constituido un requisito necesario en el otorgamiento de crédito.

Adicionalmente, el DPR señala que la conducta de TUM, probablemente, ha tenido como objeto y efecto impedir sustancialmente el ingreso al mercado de la comercialización de RC de PF de su único competidor: CC; además, de inhibir la entrada de otros potenciales competidores.

• MR de PF

Según el DPR, el MR corresponde a la comercialización de RC de PF, con una dimensión geográfica nacional. En este sentido, en el DPR se señalan como elementos que sostienen dicho análisis los siguientes:

- a) Fracción I del artículo 58 de la LFCE.¹⁶¹ el DPR indica que los RC de PF son productos sin sustitutos alternativos cercanos debido, entre otros motivos, a que la normativa obliga tanto a los oferentes como a los demandantes de RC, directa o indirectamente, a ofrecer o utilizar, respectivamente, estos productos para el proceso de otorgamiento de crédito y para el control de los riesgos asociados con esta actividad.

Respecto de la sustitución por el lado de la demanda, el DPR señala que el RC de PF carece de sustitutos cercanos que, simultáneamente, contengan la misma información que estos

¹⁶⁰ Páginas 127 a 264 del DPR, folios 31011 a 31148.

¹⁶¹ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; [...]".

reportes, permitan satisfacer los requerimientos normativos establecidos por la autoridad y sean equivalentes en cuanto al costo de este producto.¹⁶²

En cuanto a la sustitución por el lado de la oferta, el DPR refiere que: (i) no existen posibles oferentes, actuales o potenciales, que puedan incursionar en la comercialización de RC de PF en el corto plazo (menor a un año), pues tendrían que constituirse en una SIC para poder ser un sustituto por la oferta; y (ii) las SIC que están autorizadas para comercializar RC de PM, aun cuando quisieran incursionar en la comercialización de los RC de PF, se enfrentarían a la dificultad del acceso a la información necesaria, en este caso la BD de PF.

Derivado de lo anterior, el DPR concluye que aún ante un incremento en el precio del RC de PF, los USUARIOS no cuentan con productos alternativos que sean sustitutos factibles, siendo que los únicos oferentes actuales de los RC de PF son TUM y CC.¹⁶³

b) Fracción II del artículo 58 de la LFCE:¹⁶⁴ según el DPR, en general las SIC distribuyen y/o comercializan sus productos por vía electrónica, ya sea a través de sus respectivas páginas de internet o mediante conexión directa entre los USUARIOS y las SIC, por lo que transmitir un RC representa el mismo costo sin distinción del lugar en donde se haya llevado a cabo la solicitud del reporte. Del mismo modo, el DPR señala que el abastecimiento o recopilación de la IC (esto es, el insumo más importante para la generación de los RC de PF) también se realiza de manera electrónica, por lo que la ubicación de los USUARIOS y la otra SIC tampoco genera diferencia en los costos de distribución de los insumos. Además, abastecerse de la información generada por los USUARIOS no le genera costos relevantes a las SIC. Adicionalmente, el DPR indica que derivado de que no existen sustitutos provenientes de otras regiones o países, no se analizan los criterios señalados al respecto en la fracción II del artículo 58 de la LFCE relativos a los sustitutos del bien desde otras regiones y del extranjero.

c) Fracción III del artículo 58 de la LFCE:¹⁶⁵ de conformidad con el DPR, el MR de la comercialización de RC de PF cuenta con una dimensión geográfica nacional. Según el DPR, los USUARIOS sólo pueden acceder a los productos ofrecidos por las SIC autorizadas por el gobierno mexicano, por lo que no es factible que recurran a otros mercados para

¹⁶² El DPR refiere que las propias autoridades, así como los USUARIOS manifestaron que hasta el momento no existen alternativas que contengan información completa del sistema financiero, más que los RC de PF.

¹⁶³ El DPR indica que cuando un USUARIO solicita un RC de PF, sin optar por la consulta individual, la SIC originadora consulta la IC de la SIC complementaria, por lo que siempre será un RC con la información tanto de TUM como de CC. Asimismo, señala que dado que *ex-ante* el USUARIO no sabe si habrá HIT, los RC de PF de TUM y CC son sustitutos. Al respecto, el DPR señala también que los RC de PF comercializados por TUM y CC son prácticamente iguales en contenido, con poca diferencia en la presentación y en los precios.

¹⁶⁴ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; [...]".

¹⁶⁵ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; [...]".

satisfacer sus necesidades de productos de IC y, por ende, no hay costos asociados por ello.

- d) Fracción IV del artículo 58 de la LFCE:¹⁶⁶ el DPR refiere que la LRSIC restringe el acceso de los USUARIOS y CLIENTES a fuentes de abasto alternas a las SIC; así como el acceso de los proveedores de IC (USUARIOS) a CLIENTES alternativos a las SIC (quienes son las únicas que pueden recopilar la IC necesaria para elaborar los RC de PF).
- e) Fracción V del artículo 58 de la LFCE:¹⁶⁷ de conformidad con el DPR, del análisis de la información que obra en el EXPEDIENTE se concluye que: (i) los únicos productos que pueden sustituir a los RC de PF producidos por TUM son los RC de PF producidos por CC, y viceversa; la razón más importante por la cual no existen sustitutos por el lado de la demanda es porque los RC de PF son la única alternativa normativa, según el tipo de crédito a otorgar, así como la menos costosa para satisfacer lo requerido por la autoridad; (ii) no existen oferentes o productos alternativos al RC de PF que puedan ser producidos de forma rápida y sin incurrir en cuantiosas inversiones por los oferentes actuales o potenciales; y (iii) la dimensión geográfica de este mercado es nacional, ya que la comercialización de los RC es una atribución exclusiva de las SIC y la normativa no permite acceder a proveedores establecidos en otros países.

• **Determinación del PS de Mercado**

De conformidad con el DPR, el análisis de PS se circunscribe al MR de la comercialización de RC de PF. En este sentido, el DPR concluye que al momento en que se llevaron a cabo las conductas investigadas, TUM tuvo PS en el MR de la comercialización de RC de PF de conformidad con el análisis de cada fracción del artículo 59 de la LFCE y sus correlativos 7 y 8 de las DR:

- a) Fracción I del artículo 59 de la LFCE:¹⁶⁸ de conformidad con el DPR, al calcular las participaciones de mercado de cada uno de los agentes económicos que concurre en el MR DE PF, se concluye que las participaciones de mercado de TUM han sido siempre mayores comparadas con las de CC, su único competidor en dicho mercado. Para lo anterior, el DPR

¹⁶⁶ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos [...]"

¹⁶⁷ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]". Al respecto, el DPR señala que el artículo 5 de las DR establece criterios para la determinación del MR y que la COFECE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del MR. En este sentido, el DPR indica que el artículo 5 de las DR establece que se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente; así como que se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incurrir en costos significativos.

¹⁶⁸ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder; [...]"

utilizó los indicadores de: (i) número de unidades vendidas de RC de PF; (ii) ingresos obtenidos por estas ventas; (iii) número de USUARIOS afiliados; y (iv) la cantidad de USUARIOS que por lo menos adquirieron un RC de PF, y obtuvo que incluso comparando la menor participación de mercado que tuvo TUM en promedio, la diferencia entre las participaciones de ambas SIC siguió siendo alta, en promedio de [REDACTED] **

- b) Fracción II del artículo 59 de la LFCE:¹⁶⁹ derivado del análisis de los elementos establecidos en el artículo 7 de las DR, el DPR concluyó que los elementos considerados como barreras a la entrada para el mercado de comercialización de RC de PF, eran los siguientes: (i) obtener una cuota mínima de mercado que le permita al nuevo participante en la industria cubrir sus costos operativos (lo cual implica alcanzar una participación de mercado cercana al [REDACTED] de la totalidad de RC de PF emitidos), lo que podría representar la principal barrera considerando que los USUARIOS que consumen la mayor cantidad de los RC de PF son accionistas de las SIC ya establecidas; (ii) limitantes para que la marca o nombre comercial adquiera presencia en el mercado que le permita competir con las marcas ya establecidas en el mismo; y (iii) las autorizaciones o requerimientos que debe cubrir una empresa para poder constituirse como SIC.
- c) Fracción III del artículo 59 de la LFCE:¹⁷⁰ de conformidad con el DPR, el poder de mercado de los competidores de TUM es limitado y no cuentan con la capacidad suficiente para limitar el incremento de precios que lleve a cabo TUM. Asimismo, el DPR refiere que las participaciones de mercado de TUM han sido muy altas durante el periodo investigado y que ello indica que CC, no ha significado suficiente presión competitiva en el segmento de RC de PF. De igual forma, el DPR indica que el IHH para dos mil catorce supera las dos mil (2,000) unidades en todos los casos (ventas de RC de PF, ingresos obtenidos por estas ventas, afiliación de USUARIOS y número de USUARIOS que por lo menos adquirieron un RC de PF), lo cual, según el DPR, denota que existe una alta concentración en el mercado de la comercialización de RC de PF, sin que algún competidor contrarreste el poder de mercado de TUM.
- d) Fracción IV del artículo 59 de la LFCE:¹⁷¹ según el DPR, el principal insumo para elaborar los RC de PF son los registros de IC integrados en sus BD de PF, siendo que el proceso para la recopilación y conformación de una extensa BD lleva tiempo y depende de la conformación de una base de USUARIOS. En este sentido, el DPR refiere que el acceso a la IC necesaria para elaborar los RC de PF puede constituirse como una barrera a la entrada significativa. De igual forma, el DPR señala que una SIC entrante puede abastecerse de

¹⁶⁹ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores; [...]"

¹⁷⁰ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] III. La existencia y poder de sus competidores; [...]"

¹⁷¹ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos; [...]"

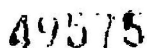
información afiliando a más USUARIOS para incrementar la extensión de su BD o recurriendo a TUM y a CC. De tal forma, el DPR concluye que la SIC que desee incorporarse en el mercado, además de cubrir una cuota mínima de mercado para poder subsistir, deberá de acceder y, por tanto, cubrir el costo de compartir la BPD con las otras SIC previamente establecidas (para obtener información negativa tendría que adquirir las BPD de TUM y CC cubriendo un costo de aproximadamente *** cada mes; además de realizar el intercambio finalid rmación positiva para la elaboración de estos reportes).

- e) Fracción V del artículo 59 de la LFCE:¹⁷² el DPR indica que se identificaron diversas modificaciones en el esquema tarifario de las SIC.
- f) Fracción VI del artículo 59 de la LFCE:¹⁷³ de conformidad con los elementos del artículo 8 de las DR, el DPR indica que: (i) el RC de PF de TUM es el mejor posicionado considerando la participación de mercado que tiene TUM; (ii) no es factible importar los productos de IC desde otros países porque la LRSIC no lo permite; y (iii) se identificaron dos factores que pueden incrementar los costos en que incurren los consumidores por cambiar de proveedor, la incertidumbre respecto de si los productos de otra SIC cuentan con toda la información que deben contener y la integración vertical que existe entre las SIC y los USUARIOS (la cual implica que difícilmente los principales Usuarios difícilmente cambiarán de SIC). Además, el DPR señala que los descuentos adicionales que ofrece TUM y el trato preferencial a ciertos USUARIOS contribuyen a incrementar la lealtad y a reducir la posibilidad de que uno de estos USUARIOS cambie de proveedor de RC de PF.

Por último, respecto de la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, el DPR señala que: (i) en términos de la LRSIC, TUM no puede restringir el abasto de productos de IC, en particular de RC de PF, en tanto el USUARIO cumpla con las formalidades establecidas en dicha ley; y (ii) existe un considerable diferencial entre el precio máximo que TUM puede cobrar por un reporte derivado del CONTRATO TUM Y CC y su costo unitario, lo que refleja la capacidad de TUM para fijar, por sí mismo, precios por encima de sus costos medios, sin que los agentes competidores puedan contrarrestar esta capacidad. Adicionalmente, el DPR señala

¹⁷² "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y [...]"

¹⁷³ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]". Al respecto, el DPR cita el artículo 8 de las DR y señala que la COFECE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del PS. El Artículo 8 de las DR establece que "Artículo 8.- Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, se deben considerar los criterios siguientes: I. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante; II. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación, y III. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a otros proveedores."



**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

que durante el periodo investigado (dos mil diez a dos mil quince), el margen operativo de TUM fue muy superior al de CC.¹⁷⁴

- **Análisis de la conducta: Discriminación de precios**

De conformidad con el DPR, en el transcurso de la investigación se identificaron indicios que permitieron acreditar de manera presuntiva la actualización de los supuestos jurídicos previstos en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, que consiste en el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes.

En específico, el DPR expone los siguientes razonamientos para concluir que la hipótesis establecida en la fracción X del artículo 56 de la LFCE fue presuntamente acreditada:

a) TUM estableció distintos precios o condiciones de venta para diferentes USUARIOS del RC de PF

De conformidad con el DPR, de dos mil diez a dos mil quince TUM otorgaba precios distintos para los diferentes USUARIOS que adquirían RC de PF a través de su política de descuentos. Al respecto, indica que la mayor parte de los USUARIOS obtuvo precios netos cercanos al precio base debido a que no accedieron a descuentos importantes, mientras algunos USUARIOS recibieron precios mucho menores pues accedieron a descuentos considerables.¹⁷⁵

Según el DPR, la política de descuentos de TUM fue la siguiente:¹⁷⁶

Tipo	Periodo	Descripción
------	---------	-------------

¹⁷⁴ Según El DPR, los altos niveles del margen operativo de TUM, a diferencia de los de CC, pueden relacionarse en mayor medida con los altos ingresos con los que cuenta TUM, más que con una eficiencia por la reducción de sus costos.

175 El DPR aclara que veintiséis USUARIOS () obtuvieron precios iguales o menores a ()
 (), mientras que el () de los USUARIOS accedieron a precios
 superiores a () y el () obtuvo precios
 entre () y ()

176 Según el DPR, MAGR reconoció la existencia del DESCUENTO EXTRAORDINARIO y del DESCUENTO DEL 5.8%, como descuentos establecidos fuera del CONTRATO MARCO TUM, mientras SEPZ y GCA, negaron tener conocimiento de la existencia de descuentos distintos a los contemplados en el CONTRATO MARCO TUM. Adicionalmente, el DPR señala que TUM mencionó los DESCUENTOS ORDINARIOS, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, así como el DESCUENTO DEL 5.8%; sin embargo, según el DPR, no explicó de manera satisfactoria los excedentes en la determinación de los descuentos finalmente obtenidos y facturados respecto de los aplicables, lo cual dio origen a lo que se denominó en el DPR como DESCUENTO RESIDUAL.

DESCUENTO ORDINARIO	Enero de 2010 – al menos a marzo de 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Descuento establecido en el CONTRATO MARCO TUM, donde se premia el ** • Generó la mayor parte de los descuentos obtenidos por los USUARIOS. • Incluye el descuento por ** (dichos descuentos son acumulativos si se cumple con ambos criterios), siendo que ambos se determinan en función de: (a) ** • El descuento por ** se otorga si se cumple con los incisos c) y e) arriba señalados, mientras el ** se otorga si se cumple con el inciso d) arriba señalado. • El porcentaje de descuento que se otorga para ambos casos depende de lo señalado en los incisos a) y b) y se modificó en diversas ocasiones del año dos mil diez a dos mil quince. • Generó menores precios para los USUARIOS que consumieron mayor cantidad de RC de PF. • La gran mayoría de los USUARIOS ** cubrieron precios que oscilaron entre ** de los USUARIOS accedió a precios de entre ** y ** por cada RC de PF, como consecuencia de la implementación del DESCUENTO ORDINARIO. Los ACCIONISTAS formaron parte de este último grupo.
DESCUENTO EXTRAORDINARIO	Agosto 2010 – diciembre de 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Descuento establecido fuera del CONTRATO MARCO TUM, otorgado a quienes cumplieran con una meta mínima de consumo. • Orientado a favorecer a los ACCIONISTAS, según el DPR. • Fue otorgado a través de ** • La condición para acceder a dicho descuento es que el USUARIO facturara por lo menos ** de productos de IC **. No queda claro cómo se definió el monto de ** de ahí la subjetividad atribuida al criterio, el cual además no se estableció en el CONTRATO MARCO TUM. • El monto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO otorgado ascendió a ** en el transcurso de cuatro años. • No existía una manera clara de determinar el monto total a ser asignado, sino que se determinaba en función **. Tampoco existió certeza sobre el descuento final, pues a cada uno de ellos les correspondía el ** • Según TUM, la lógica del descuento es ** y, así premiar a quienes consumen en mayor cantidad; no obstante, la orientación del descuento contradice el objetivo pues excluye a los USUARIOS que menos consumen. • A lo largo de los cuatro años que estuvo activo, alrededor del ** de la asignación total del DESCUENTO EXTRAORDINARIO estuvo orientado hacia los ACCIONISTAS. • TUM estableció distintos precios o condiciones de venta para diferentes USUARIOS del RC de PF, pues el otorgamiento discriminatorio de este descuento impactó finalmente en el precio que los USUARIOS pagaron por cada uno de los RC de PF adquiridos. • En las ACTAS no se manifestó la existencia del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, pero sí del **, que según el DPR es lo mismo.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Según el DPR, la diferencia más notable es que el segundo incluye como beneficiario a **

49577

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

DESCUENTO DEL 5.8%	Julio 2013 - mayo 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Descuento no establecido en el CONTRATO MARCO TUM, otorgado conforme al dicho de TUM para compensar el impacto monetario en los USUARIOS por el intercambio de información requerido en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC. • Descuento ** • Este descuento, según TUM, habría sido implementado sobre el total de la facturación realizada por la compra de RC de PF, como consecuencia a las modificaciones a la LRSIC, ** • En el DPR se indica que el DESCUENTO DEL 5.8% guarda "suficientes elementos en común" con el DESCUENTO POR LEALTAD Y EXCLUSIVIDAD, el cual fue descrito en las ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUM, por lo que el DPR considera que es altamente probable que ambos sean el mismo descuento. • Este descuento mostró un método poco claro y transparente de asignación. Podían ir de un ** • Estuvo orientado a favorecer sobre todo a aquellos USUARIOS que accedieron al mayor DESCUENTO ORDINARIO de **, por lo que su porcentaje de descuento se incrementó hasta alcanzar el ** • El ** del monto total de este descuento fue dirigido hacia los ACCIONISTAS. • No existió un criterio claro ni transparente en su asignación. Es muy probable que su existencia y la forma en que se asignaron estos descuentos no formara parte del común conocimiento de todos los USUARIOS. • TUM no explicó por qué a algunos USUARIOS les fue otorgado un descuento distinto de otros ni por qué se excluyó a la gran mayoría de los USUARIOS de dicho descuento. Tampoco proporcionó metodología alguna para definir el porcentaje asignado a cada uno de los beneficiarios. • TUM menciona que fue una política que consistió **, lo cual muestra el carácter subjetivo en la determinación de este descuento. • En junio de dos mil catorce se generalizó al 5.8% (cinco punto ocho por ciento).
DESCUENTO RESIDUAL	Enero 2010 - marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Descuento otorgado por TUM, a través de las NOTAS DE CRÉDITO, que no se explica por el otorgamiento del DESCUENTO ORDINARIO ni del DESCUENTO EXTRAORDINARIO. • Se aplicó de forma recurrente y estuvo orientado a favorecer a los ACCIONISTAS. • TUM otorgó regularmente a determinados USUARIOS descuentos mayores de los que resultaban al implementar su esquema definido en el CONTRATO MARCO TUM. • Ninguno de los elementos señalados por TUM justifica las discrepancias respecto de lo que debía obtenerse como DESCUENTO ORDINARIO y lo que efectivamente TUM otorgó como descuento. • De acuerdo con TUM, ** • Según el DPR, la aplicación en conjunto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO y del DESCUENTO RESIDUAL tendió a favorecer a los ACCIONISTAS, ** de los DESCUENTOS ADICIONALES del dos mil diez hasta dos mil quince. • Inclusive, entre USUARIOS que facturaron montos similares cada año, el DESCUENTO ADICIONAL al que accedieron fue notablemente distinto. • El otorgamiento de los DESCUENTOS ADICIONALES favoreció principalmente a los ACCIONISTAS por virtud del establecimiento de distintos precios, en detrimento del resto de USUARIOS, al permitirles adquirir los productos de TUM a un menor precio sin justificación alguna. • Los DESCUENTOS ORDINARIOS ya premian el alto consumo de parte de los USUARIOS. TUM otorgó el DESCUENTO RESIDUAL sin justificación aparente y sin corresponder a lo dispuesto en la LRSIC.

Eliminado: ciento cuatro palabras, cinco renglones

DESCUENTO ADICIONAL	Enero 2010 – marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Es la diferencia que existió entre el descuento que efectivamente fue otorgado a un USUARIO y el DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma del DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO RESIDUAL.
DESCUENTO POR LEALTAD	Julio 2013 – marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Descuento establecido fuera del CONTRATO MARCO TUM que, según el DPR, premia a los USUARIOS la entrega exclusiva de sus registros con el HC de sus CLIENTES a TUM, además del consumo exclusivo de sus productos. Este descuento no fue mencionado por TUM ni sus funcionarios, pero fue observado en las ACTAS. Existe la posibilidad de que fuera el mismo que el DESCUENTO DEL 5.8%, pues coinciden en la periodicidad de su aplicación y en los porcentajes presuntamente asignados; no obstante, el objeto señalado para ambos no coincide. La diferencia detectada entre la tabla del DESCUENTO DE LEALTAD, con respecto a la correspondiente por descuento [REDACTED] que estuvo funcionando en ese mismo periodo de tiempo, fue de [REDACTED]. A esto habría que añadirle el [REDACTED] de descuento por exclusividad en la entrega de la BD. La suma de ambos porcentajes pudo alcanzar hasta [REDACTED] que coincide con el porcentaje otorgado mediante el DESCUENTO DEL 5.8%.

El DPR refiere a manera de resumen que:

- (i) TUM estableció distintos precios del RC de PF para diferentes USUARIOS a través de la implementación de los descuentos referidos.
- (ii) Los precios resultaron considerablemente menores para un grupo menor conformado principalmente por los ACCIONISTAS.
- (iii) El ejercicio de los distintos descuentos ofrecidos por TUM careció de una metodología clara, objetiva y transparente para determinar la totalidad del monto asignado y las condiciones para su distribución.
- (iv) No se explica por qué gran parte de los USUARIOS fueron excluidos de estos beneficios.
- (v) Los descuentos beneficiaron casi exclusivamente a los ACCIONISTAS y algunos de los descuentos fueron establecidos con base en criterios de lealtad y exclusividad en la entrega de la información, aparentemente, sin apearse a la LRSIC.
- (vi) El porcentaje de los DESCUENTOS ORDINARIOS varió principalmente en función [REDACTED].
- (vii) En el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, la cantidad asignada estuvo determinada por la participación de cada USUARIO en los ingresos generados por TUM en un determinado periodo de tiempo, siendo que TUM separó a la totalidad de sus USUARIOS en dos grupos al imponer como condición para acceder al descuento que facturaran más de [REDACTED], de dos mil diez hasta dos mil trece.
- (viii) Como consta en las ACTAS, TUM clasificó a los beneficiarios del DESCUENTO EXTRAORDINARIO conforme a su condición de Accionista o no Accionista, asignando un porcentaje a repartirse entre cada grupo, siendo que los "Accionistas Clientes" accedieron al mayor porcentaje cada año. Durante la investigación, TUM no explicó la manera de determinar los porcentajes asignados a cada grupo.

Eliminado: cincuenta y dos palabras



49579

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

- (ix) Respecto del DESCUENTO DEL 5.8% y, posiblemente, del DESCUENTO POR LEALTAD, TUM asignó porcentajes de descuento que iban desde el [REDACTED] hasta el [REDACTED] sin justificar el trato diferente entre los beneficiarios, n s USUARIOS fueron excluidos. TUM no definió un criterio de asignación claro y transparente respecto del DESCUENTO DEL 5.8%. Sin embargo, los principales beneficiarios fueron casi en su totalidad los ACCIONISTAS.
- (x) Respecto del DESCUENTO RESIDUAL, todos sus beneficiarios accedieron a cantidades distintas de descuento que también redundaron en precios distintos para todos los USUARIOS. TUM no proporcionó la definición de un criterio para distribuir este descuento. Aparentemente, tanto el DESCUENTO EXTRAORDINARIO como el DESCUENTO RESIDUAL, fueron designados conforme a la condición del USUARIO: si se trata de accionista o no; o, simultáneamente, si se trata de uno de los mayores CLIENTES de TUM.
- (xi) En el DESCUENTO POR LEALTAD, los beneficiarios fueron aquellos que otorgaron su BD o IC de forma exclusiva a TUM. Además de asignarles un descuento por [REDACTED], con p [REDACTED] cuento fue la lealtad mostrada a TUM y conforme al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, implicó no sólo negarles IC a otras SIC, sino también no adquirir productos de los competidores de TUM en el mercado (CC).

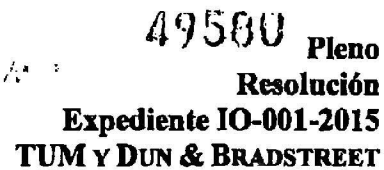
b) Segundo elemento: dichos USUARIOS de RC de PF se encontraban en condiciones equivalentes.

En esta sección el DPR busca sustentar que los agentes económicos beneficiarios de los descuentos señalados se encontraban en condiciones equivalentes respecto de aquellos que no accedieron a ellos y, por lo tanto, TUM discriminó entre USUARIOS en la asignación de descuentos, lo cual probablemente habría actualizado lo establecido en el segundo elemento contenido en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

De conformidad con el DPR, la LRSIC y el CONTRATO MARCO TUM establecen los elementos que deben cumplir las instituciones financieras para poder constituirse como USUARIO y luego poder afiliarse a TUM. Por lo tanto, según el DPR, cualquier agente económico, otorgante de crédito, que cumpla con lo establecido en ellos será considerado como un USUARIO de TUM, y ningún otro elemento deberá de tomarse en consideración.

En este sentido, el DPR afirma que todos los USUARIOS afiliados a TUM gozaron de la misma calidad y, por lo tanto, debieron de acceder a los mismos términos y condiciones para adquirir un RC de PF, ya que se trata de un bien homogéneo cuyo costo de producción no depende del USUARIO que lo esté adquiriendo. Características o elementos no contemplados en los dos instrumentos jurídicos mencionados, como (i) ser accionista o propietario de las SIC; (ii) ser uno de los principales clientes que consumen la mayor cantidad en la facturación; o (iii) ser uno de los principales proveedores de información crediticia o registros a la base de datos de la SIC, son aspectos que no alteran la calidad de USUARIO y, por lo tanto, no deberían de

Eliminado: veinticinco palabras



178

Al respecto, el DPR identifica lo siguiente respecto de los descuentos antes referidos:

DESCUENTO DEL 5.8% y DESCUENTO RESIDUAL	<ul style="list-style-type: none"> No contraron con un criterio o mecanismo de asignación claro, transparente, objetivo, ni fueron establecidos por razones de eficiencia desde el punto de vista económico. TUM no definió un mecanismo de asignación; inclusive, TUM no reconoció la existencia del DESCUENTO RESIDUAL. TUM no definió el conjunto de características que los beneficiarios debían reunir para acceder a esos descuentos, [REDACTED] **. Por ende, todos los USUARIOS debieron acceder a estos descuentos en la misma proporción. No obstante, como resultado de la implementación de estos dos descuentos, los precios de los RC de PF para USUARIOS que se encontraban en condiciones equivalentes fueron distintos.
DESCUENTO EXTRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> TUM mostró un criterio de asignación, pero no fue claro, transparente ni objetivo, y mucho menos eficiente. El criterio de asignación distinguió a los USUARIOS por su grado de facturación: TUM definió que serían su [REDACTED] e facturación de [REDACTED] **. Este criterio no es claro porque no se explica la razón por la que dicho límite era idóneo para implementar el descuento; tampoco se brinda claridad respecto de la cantidad total asignada para este descuento, la cual fue determinada [REDACTED] **. [REDACTED] ** por lo que [REDACTED] **. Ello generó incertidumbre. No obstante, los ACCIONISTAS contaron con la capacidad de modificar la cifra asignada por este descuento (pues nombran a los miembros del CONSEJO), por lo que pudieron conocer el beneficio potencial al que podían acceder con anticipación, e inclusive incorporarlo dentro de sus presupuestos. [REDACTED] **. [REDACTED] **. en función de la relación que se mantuvo con dicha sociedad. Lo anterior, muestra la orientación subjetiva del criterio de asignación. Este DESCUENTO EXTRAORDINARIO parece confeccionado, principalmente, para favorecer a los ACCIONISTAS al asignarles una mayor proporción de descuento a repartirse que a los USUARIOS no accionistas, considerando que se encuentran en condiciones equivalentes. Tampoco se considera que haya sido eficiente porque restringió la capacidad del USUARIO para elegir al fijar un límite mínimo de consumo, por lo que parece que el objeto real del descuento ha sido generar lealtad más que incentivar el consumo. Por tanto, satisfacer este criterio obligó a los USUARIOS a orientar gran parte de su consumo en productos de IC generados por TUM, y no de sus competidores.

Eliminado: tres renglones, ochenta y seis palabras

¹⁷⁸ Según el DPR, dentro del CONTRATO MARCO TUM

DESCUENTO POR LEALTAD	<ul style="list-style-type: none">• El criterio de asignación no fue claro porque no se d[] satisfactorios, cómo se determinaron los porcentajes que incluye la tabla del [] a emplearse por los USUARIOS fieles a TUM.• En caso de que este DESCUENTO POR LEALTAD sea realmente el DESCUENTO DEL 5.8%, tampoco resulta claro ni transparente cómo se asignaron los porcentajes de descuento asignados a cada USUARIO.• Este descuento tampoco fue objetivo porque sus beneficiarios fueron difíciles de verificar.• Existe la posibilidad de que su establecimiento no esté acorde con lo señalado en el artículo 35 de la LRSIC.¹⁷⁹ Debido a lo anterior, es poco probable que el resto de los USUARIOS estuvieran al tanto de la existencia de este descuento y, por lo tanto, pudieran verificar quiénes lo cumplieron, y así se genera certeza respecto de que los descuentos no estén siendo utilizados para beneficiar solamente a un grupo.• Todo indica que fue confeccionado a la medida de un grupo de USUARIOS en particular. La condición que impuso TUM para acceder a este descuento requirió restringirle información a CC, debido al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Ello obligó a que los beneficiarios no adquirieran productos de cualquier otro proveedor, lo cual tuvo como principal objeto limitar la capacidad para elegir de los USUARIOS, en un afán de impedir sustancialmente el acceso al mercado al competidor de TUM.• El descuento separó a los USUARIOS en función de la fidelidad que mostraron a TUM al proporcionarle su información y adquirir sus productos de forma exclusiva, siendo que la fidelidad no es un elemento válido para alterar la calidad del USUARIO. El criterio empleado por TUM no fue claro, transparente, objetivo ni eficiente.
-----------------------	---

Por lo anterior, el DPR concluye que existen elementos suficientes para considerar que TUM, presuntamente, llevó a cabo la conducta establecida en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, pues se otorgaron descuentos al margen del CONTRATO MARCO TUM, que derivaron en menores precios para un grupo determinado de USUARIOS, en detrimento de quienes no lo recibieron, siendo que dichos USUARIOS se encontraban en condiciones equivalentes al no existir criterios claros, transparentes, objetivos ni eficientes desde el punto de vista económico que explicaran las diferencias en los precios ofrecidos.

- Probables responsabilidades por haber coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de la conducta prevista en el artículo 56, fracción X, de la LFCE.

El DPR indica que los [] tomaron las decisiones en las que se acordó autorizar el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8% y el DESCUENTO POR LEALTAD y propiciaron la comisión de la conducta prevista en el artículo 56, fracción X de la LFCE, por las siguientes consideraciones: (i) la integración del CONSEJO se conformó por la representación de las acciones de []; (ii) corresponde al CONSEJO la determinación de los precios a cobrarse por los servicios prestados por TUM; (iii) los Consejeros, que votaron las resoluciones mediante las cuales se autorizaron el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8% y el DESCUENTO POR LEALTAD, representan las acciones de los ACCIONISTAS y [], siendo que dichos consejeros además ocupaban cargos dentro de la

¹⁷⁹ El artículo 35 de la LRSIC establece que: "Las Sociedades no podrán establecer políticas o criterios de operación que restrinjan, obstaculicen o impongan requisitos excesivos para proporcionar o recibir información, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente ley. Las Sociedades no podrán impedir a sus Usuarios que proporcionen o soliciten información a otras Sociedades. Las Sociedades tampoco podrán establecer límites cuantitativos al número de consultas que puedan realizar los Usuarios." [Énfasis añadido].

estructura organizacional de los Usuarios-ACCIONISTAS y [REDACTED] **; (iv) los ACCIONISTAS¹⁸⁰ y [REDACTED] ** habrían propiciado la conducta al autorizar los descuentos referidos a través de la votación de los Consejeros que representan los intereses de sus acciones, lo cual habría beneficiado principalmente a los ACCIONISTAS; (v) los Consejeros actuaron en representación de los ACCIONISTAS y [REDACTED] **, ya que su actuación en el CONSEJO incide y repercute en los intereses de aquellos; (vi) se observa una conducta sistemática en la manera en que se votaron [REDACTED] **, las autorizaciones del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8% y DESCUENTO POR LEALTAD; (vii) la conducta de discriminación de precios se propicia porque la estructura accionaria, sus órganos de administración y la conformación de derechos y obligaciones por los accionistas, se contemplan en los Estatutos Sociales, cuya aprobación y modificación le corresponde a la Asamblea de Accionistas; (viii) conforme a los Estatutos Sociales, derivado del porcentaje de sus acciones, los ACCIONISTAS y [REDACTED] ** tenían derecho a nombrar un Consejero; y (ix) si bien los ACCIONISTAS de acuerdo con la LRSIC y sus Estatutos Sociales tenían derecho a nombrar Consejeros que fueran sus funcionarios, éstos pudieron haber establecido salvaguardas para evitar el conflicto de interés entre los Consejeros designados por los ACCIONISTAS al votar en la política de precios de TUM, la cual tuvo, entre otras consecuencias, la de beneficiar los intereses de los ACCIONISTAS a los que representaban, quienes participan en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito.

Finalmente, el DPR señala que refuerza la imputación hacia los ACCIONISTAS y [REDACTED] ** como propiciadores de las conductas discriminatorias, el hecho de que el [REDACTED] ** del monto total destinado para los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS fue en beneficio de los ACCIONISTAS, así como también lo fue el [REDACTED] ** del monto total destinado por el DESCUENTO DEL 5.8%. En el caso de [REDACTED] **, el beneficio por el DESCUENTO EXTRAORDINARIO fue de [REDACTED] **.

Por lo anterior, el DPR concluye que los ACCIONISTAS y [REDACTED] ** tuvieron una participación en la comisión de la probable PMR consistente en la discriminación de precios en el mercado de la comercialización de RC de PF, al propiciarla en los términos descritos.

- Probables responsabilidades por haber participado en representación de TUM en la comisión de la conducta prevista en el artículo 56, fracción X, de la LFCE.

De conformidad con el DPR, MAGR [REDACTED] * y SEPZ [REDACTED] ** participaron directamente en representación de TUM en la comisión de la probable PMR consistente en la discriminación de precios en el mercado de la comercialización de RC de PF, al proponer al CONSEJO la autorización del DESCUENTO

¹⁸⁰ El DPR refiere que, en el caso del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, [REDACTED] **. Asimismo, indica que [REDACTED] **. Por otro lado, indica que para el caso del DESCUENTO POR LEALTAD no estuvo presente para su autorización [REDACTED] **.

EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO POR LEALTAD, así como al realizar las acciones pertinentes para instrumentar las autorizaciones llevadas a cabo por el CONSEJO.

El DPR señala que el [REDACTED] y el [REDACTED] participaron directamente en la comisión de la conducta prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE tanto por las funciones de dirección, coordinación, supervisión y seguimiento, como por cumplir las instrucciones ordenadas por el CONSEJO. Asimismo, el DPR refiere los siguientes elementos considerados en la imputación en contra de MAGR y SEPZ:

- a. El [REDACTED] y el [REDACTED] participaron directamente en la comisión de la conducta prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE tanto por las funciones de dirección, coordinación, supervisión y seguimiento, como por cumplir las instrucciones ordenadas por el CONSEJO.
- b. El [REDACTED] tiene a su cargo [REDACTED] de TUM, así como [REDACTED]
- c. El [REDACTED] tiene a su [REDACTED]
- d. Ambos funcionarios participaron en el CONSEJO al proponer los descuentos presuntamente discriminatorios; y
- e. Ambos funcionarios se encargan de implementar la política de precios y descuentos, por lo que participaron en instrumentar los descuentos presuntamente discriminatorios.

• **Objeto o efecto de la conducta: Discriminación de Precios**

El DPR señala que los descuentos aplicados a la compra de los RC de PF, tales como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL, DESCUENTO DEL 5.8%, así como el DESCUENTO POR LEALTAD tuvieron el objeto y efecto de:

- a. Otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito.

Según el DPR, la política de precios y descuentos de TUM consistente en el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO DEL 5.8% (o DESCUENTO POR LEALTAD) estuvo dirigida a beneficiar principalmente a los ACCIONISTAS. Lo anterior, habría significado otorgarle ventajas exclusivas principalmente a esta clase de USUARIOS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, al reducir significativamente el precio que dichos USUARIOS pagan por cada RC de PF.

El DPR señala que la conducta imputada benefició principalmente a los USUARIOS-ACCIONISTAS al propiciar que ellos pudieran adquirir RC de PF con un precio menor y en condiciones más favorables que el resto de los USUARIOS que no habrían sido favorecidos por los descuentos ofrecidos. El impacto general de la política de descuentos, de acuerdo con el

Eliminado: dos renglones, cincuenta y ocho palabras

DPR, habría sido una disminución significativa en los precios que pagan los USUARIOS que más facturaron a TUM, comparativamente con lo que paga el resto de los compradores de RC de PF.

El DPR refiere que la integración vertical que existe entre los ACCIONISTAS y la SIC ha generado los incentivos para que TUM modifique los precios de sus productos en beneficio de sus propietarios. En este sentido, según el DPR, los ACCIONISTAS deben nombrar a sus representantes en el CONSEJO y, con ello, cuentan con la capacidad de establecer los precios a cobrarse por los servicios que presta la SIC a los USUARIOS, por lo que podrían fijar precios, implementar descuentos y establecer condiciones de venta de los productos crediticios de la SIC a conveniencia; lo cual podría colocar en una posición de desventaja al resto de los USUARIOS.

Al respecto, el DPR señala que el [REDACTED] de los descuentos otorgados por TUM (incluyendo los DESCUENTOS ORDINARIOS y los DESCUENTOS ADICIONALES) fueron orientados hacia los ACCIONISTAS (seis USUARIOS de los [REDACTED] registrados por TUM que adquirieron por lo menos un RC de PF durante el PERIODO INVESTIGADO). Por otra parte, de conformidad con el DPR, TUM habría reconocido a través de las ACTAS que la disminución en los precios ofrecidos a los beneficiarios de sus descuentos era consecuencia de la implementación de los descuentos; en particular, del DESCUENTO EXTRAORDINARIO.

Asimismo, el DPR refiere que la aplicación del esquema de descuentos de TUM se habría traducido en importantes disminuciones en los precios del RC de PF, lo cual habría brindado ventajas exclusivas principalmente a los ACCIONISTAS, dada la importancia que tiene el RC como requerimiento insustituible del proceso de otorgamiento de crédito.

En este sentido, concluye el DPR que el ACCIONISTA que mayor reducción experimentó fue [REDACTED] seguido muy de cerca por [REDACTED]. En contraste, el USUARIO promedio habría obtenido tan solo un reajuste equivalente al [REDACTED].

- b. Impedir sustancialmente el acceso de CC, así como de otros competidores potenciales al MR de la comercialización de RC de PF.

Según el DPR, los descuentos imputados tuvieron como objeto y efecto generar lealtad, retener a los CLIENTES principales de TUM, y con ello reducir las posibilidades de que USUARIOS beneficiarios se afiliaran a CC y adquirieran RC de PF de dicho competidor.¹⁸¹

¹⁸¹ El DPR señala que la política de precios y descuentos de TUM consistente en el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO DEL 5.8% (o DESCUENTO POR LEALTAD) estuvo orientada a favorecer a los USUARIOS que consumen grandes cantidades de RC de PF. Según el DPR, dicha política premió el consumo de los grandes USUARIOS con el objeto y efectos de retenerlos e impedir que se afiliaran con otra SIC. De ese modo, la conducta habría buscado limitar la capacidad de elección de los USUARIOS y habría reducido la posibilidad de que los grandes consumidores recurran a otros proveedores (CC en particular). Al retener a los Usuarios que consumen grandes cantidades de RC de PC, la conducta también



49585

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

El DPR señala la conducta de TUM que buscó retener a sus CLIENTES principales se explica por la dependencia de TUM respecto de la venta de RC de PF a los ACCIONISTAS; los cuales además son los principales abastecedores de registros de información para TUM. De conformidad con el DPR, el RC de PF es el principal producto ofrecido por las SIC, en buena medida, porque constituye un insumo indispensable para extender un préstamo. Al respecto, el DPR señala que la venta de este producto generó el [REDACTED] de los ingresos brutos de TUM en el PERIODO INVESTIGADO.

En este sentido, el DPR explica que al ser los ACCIONISTAS los principales otorgantes de crédito en el país también son quienes más RC de PF solicitan (adquirieron el [REDACTED] del total de los RC de PF comercializados y representan el [REDACTED], de las ventas brutas generadas por este reporte para TUM). De esta manera, según el DPR, la venta de RC de PF a los ACCIONISTAS equivale al [REDACTED] de la totalidad de los ingresos brutos generados por TUM.

Por otra parte, el DPR señala que otra consecuencia de la conducta habría sido mantener, de forma exclusiva, la aportación de registros que los USUARIOS beneficiados por los descuentos hacen a la BD de PF de TUM. De esta manera, el DPR muestra que los [REDACTED] favorecidos por el DESCUENTO EXTRAORDINARIO contribuyeron con el [REDACTED] de los registros que conformaron la BD de TUM.

El DPR explica que posiblemente, como consecuencia de la implementación de los descuentos, muchos de los USUARIOS que más RC de PF consumieron y que más registros aportaron permanecieron afiliados a TUM de enero del dos mil diez hasta marzo de dos mil quince, acentuándose lo anterior por los importantes efectos de red que caracterizan al MERCADO INVESTIGADO.

El DPR señala que el valor que un USUARIO le asigna a la BD de PF de una SIC depende de su magnitud, siendo que a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD de PF sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores y ello implica menores costos.¹⁸²

De esta manera, el DPR enfatiza que los efectos de red presentes en este mercado incrementaron los costos para cambiarse de proveedor, ya sea a uno nuevo o a otro agente con una BD de PF de menor magnitud, pues existe una predilección marcada por acceder a la red más grande. Dicho efecto se acentúa cuando se generan beneficios o incentivos adicionales para permanecer con un proveedor. Por lo anterior, el DPR afirma que la política de precios y descuentos de TUM incrementó los costos -aún más de lo que ya eran debido al efecto red- de un USUARIO de TUM para afiliarse a CC.

habría desincentivado la incursión de nuevos competidores en el MR. Así, de acuerdo con el DPR, la implementación de la política de precios y descuentos de TUM habría tenido como objeto y efecto impedir sustancialmente que otros competidores ingresaran al mercado de la comercialización de RC de PF.

¹⁸² Adicionalmente, el DPR señala que una BD de PF más amplia, con mayor número de expedientes y registros disponibles, permite conocer mejor la calidad de un solicitante de crédito.

Eliminado: caurenta palabras



49586

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Según el DPR, es posible que este incremento en los costos de cambiar de proveedor disminuyera la capacidad de CC para competir en la comercialización de RC de PF. Al respecto, el DPR explica que el DESCUENTO EXTRAORDINA

de proveedor por dos razones: (i) el USUARIO debía ******
****** en un lapso de siete meses, lo que disminuye la posibilidad de que algún USUARIO decida comprarle p

Asimismo, el DPR explica que el DESCUENTO POR LEALTAD podría haber inhibido la afiliación de nuevos USUARIOS a CC, pues la lealtad que buscó generar este descuento redujo la posibilidad de que los USUARIOS proporcionaran IC a CC y, con ello, tampoco con

s ******

Por tanto, el DPR concluye que la evidencia apunta a que el objeto y efecto de este descuento fue impedir que sus beneficiarios se afiliaran a CC, y les comenzaran a compartir su BD, así como adquirir RC de PF.

El DPR enfati ******

En resumen, el DPR explica que de dos mil diez hasta dos mil quince la implementación de todos los descuentos que forman parte de la política comercial de TUM redujeron p os RC de PF,

****** Lo anterior, según el DPR, dificultó aún más que los ACCIONISTAS, así como otros consumidores importantes de RC de PF cambiaran de SIC.

En virtud de lo anterior, el DPR concluye que la conducta implementada por TUM habría tenido por objeto y efecto: (i) beneficiar, principalmente, a los ACCIONISTAS al propiciar que ellos pudieran adquirir RC de PF con un precio menor y en condiciones más favorables que al resto de los USUARIOS que no fueron favorecidos por los distintos descuentos ofrecidos; (ii) el afán de la conducta habría sido impedir sustancialmente el acceso de CC en la comercialización de RC de PF, así como inhibir la entrada de más agentes económicos oferentes al mercado, pues redujo la posibilidad, para una empresa entrante de alcanzar una cuota mínima de USUARIOS para ser rentable; (iii) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO POR LEALTAD habrían tenido como objeto y efecto retener y mantener a los principales consumidores de productos (entre los cuales se encuentran

Eliminado: ocho renglones, sesenta y tres palabras



49587

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

los ACCIONISTAS), y con ello impedir que acudieran a otra SIC para adquirir RC de PF; y (iv) la implementación colectiva de todos los descuentos disminuyeron significativamente los precios erogados por los USUARIOS beneficiarios, por lo que la probabilidad de cambiar de proveedor de RC de PF disminuyó aún más; restringiendo, así, la posibilidad de un mayor crecimiento orgánico de CC.

VIII. Análisis de la segunda conducta: Negativa de Trato¹⁸³

El DPR refiere que la segunda conducta consiste en la negativa de DUN a intercambiar su BPD con CC. Según el DPR, CC realizó la solicitud por escrito en julio de dos mil doce; no obstante, DUN nunca accedió a realizar dicho intercambio. En este sentido, el DPR indica que vencido el plazo legal para que DUN llevara a cabo el intercambio, CC le notificó a la CNBV la omisión de DUN solicitando que fuera sancionado. Al respecto, el DPR señala que a la fecha de su emisión DUN no había sido sancionado.

Asimismo, el DPR indica que la alternativa planteada por DUN no resultó conveniente para CC porque no le ha transferido la totalidad de la información utilizada para elaborar productos de IC, ya que omite el SEGMENTO CO.

Por último, el DPR señala que DUN ha contado con PS en el MR DE PM y que su conducta ha tenido el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM, así como al MERCADO RELACIONADO.

• **MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM**

El DPR concluye que el MR DE PM corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de las PM con una dimensión geográfica nacional, de conformidad con los siguientes elementos:

- a. Fracción I del artículo 58 de la LFCE.¹⁸⁴ El DPR indica que la IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos.

Respecto de la sustitución por el lado de la demanda, el DPR indica que: (i) en términos de lo señalado por la LRSIC y BANXICO¹⁸⁵ todos los USUARIOS están obligados a proporcionar su IC al menos a una SIC; (ii) la información del HC de una PF no podría ser un sustituto de la IC de una PM debido a que se tendría información incompleta o diferente; (iii) la BD de las SIC se puede abastecer de IC de forma directa, mediante la IC proporcionada por sus propios USUARIOS afiliados, o de forma indirecta, mediante el intercambio de información con otra SIC, siendo que ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente: los USUARIOS afiliados a

¹⁸³ Páginas 265 a 325 del DPR, folios 31149 a 31209.

¹⁸⁴ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; [...]".

¹⁸⁵ A través de las "Disposiciones de carácter general aplicables a la información que las ENTIDADES FINANCIERAS deben proporcionar a las SIC's".

cualquiera de las dos SIC;¹⁸⁶ (iv) existe dependencia de una SIC respecto de la otra, pues la LRSIC no obliga a entregar la información a todas las SIC existentes en el mercado y existe la necesidad de que ambas SIC intercambien información para generar productos que contengan toda la IC disponible; no obstante, aunque la necesidad de consultar a la otra SIC es recíproca, es más importante para aquella que cuenta con el menor número de USUARIOS afiliados;¹⁸⁷ (v) la BD de PM de cada SIC contiene información provista por USUARIOS casi totalmente distintos, por lo que son complementarias y, en consecuencia, la interconexión entre ambas SIC resulta indispensable e insustituible para que los RC y otros productos de IC contengan toda la información disponible; (vi) el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD establece que los USUARIOS sólo podrán obtener productos de IC cuando proporcionen su información a la SIC que les presta sus servicios; (vii) los USUARIOS no cobran por proporcionar su información, ni las SIC por concepto de afiliación o por recibir su IC; (viii) si bien la información proporcionada por los USUARIOS a la SIC puede ser complementada por la que les entregan las autoridades fiscales, además de por la Lista de Personas Políticamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero, dicha información no constituye un sustituto que cumpla con la misma función que la IC, sino que es información complementaria. Por lo anterior, el DPR refiere que no existe información que pueda cumplir con la misma función que la IC proporcionada por los USUARIOS, además de que las demandantes (las SIC) no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes (los USUARIOS) dado que éstos tienen la obligación de proporcionar la IC de sus CLIENTES al menos una SIC.

Respecto de la sustitución por el lado de la oferta, el DPR indica que: (i) conforme a la LRSIC los USUARIOS sólo pueden proveer de IC, con fines comerciales, a las SIC; (ii) por normatividad, no podrían existir oferentes de IC distintos de los USUARIOS, toda vez que se estaría violando el secreto financiero; (iii) además de las autoridades financieras, las SIC son las únicas habilitadas para recolectar IC y compartirla sin que se considere una violación al secreto financiero; (iv) por el momento no existe la posibilidad de que existan proveedores alternativos en el mercado de IC, como agencias gubernamentales, que se encarguen de recopilar IC para después abastecer a las SIC; y (v) la ** y BANXICO son las únicas entidades gubernamentales que recopilan IC en el sistema financiero mexicano: BANXICO recibe información de las instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo para constituir una BD que no está relacionada con el propósito de las SIC ni se distribuye a éstas y la CNBV no solicita información relacionada con el HC de los CLIENTES, por lo

¹⁸⁶ El DPR señala que el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de IC y que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de IC. Por otra parte, el DPR señala que, **

¹⁸⁷ Al respecto, el DPR puntualiza que DUN contó, aproximadamente, **

que difícilmente podría constituirse como una alternativa a los USUARIOS como proveedor de IC relativa a PM.

El DPR concluye que la IC de PM, la cual es provista por los USUARIOS, y recopilada además de procesada por las SIC, carece de sustitutos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta.

- b. Fracción II del artículo 58 de la LFCE:¹⁸⁸ Según el DPR, la recopilación y procesamiento de IC se hace principalmente a través de medios electrónicos. Asimismo, el DPR indica que los costos de distribución del insumo principal, la IC, no dependen de la ubicación del USUARIO y no existen complementos ni sustitutos provenientes de otras regiones o del extranjero, por lo que el mercado de IC tiene una dimensión geográfica nacional, debido a que las SIC se abastece de la información proveniente de sus USUARIOS ubicados a lo largo de todo el país.
- c. Fracción III del artículo 58 de la LFCE:¹⁸⁹ De conformidad con el DPR, las SIC son los consumidores de la información generada por los USUARIOS y por las otras SIC en el mercado. Asimismo, el DPR refiere que derivado de que la LRSIC obliga a los USUARIOS a proporcionar su información y ordena el intercambio de información entre las SIC, las SIC no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados.
- d. Fracción IV del artículo 58 de la LFCE:¹⁹⁰ Según el DPR, la normativa impide a las SIC abastecerse de fuentes distintas de los USUARIOS, porque se estaría violando el secreto financiero. Asimismo, el DPR indica que los USUARIOS no pueden contratar los servicios de un agente económico distinto a una SIC para que les provea, en un futuro, un RC de PM debido a que las SIC son las únicas facultadas para recopilar, organizar, enviar y comercializar la IC de los USUARIOS.
- e. Fracción V del artículo 58 de la LFCE:¹⁹¹ Según el DPR, no existe alternativa a la IC proporcionada de forma directa o indirecta por los USUARIOS, puesto que quienes otorgan

¹⁸⁸ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; [...]".

¹⁸⁹ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; [...]".

¹⁹⁰ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos [...]".

¹⁹¹ "Artículo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: [...] V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]". Al respecto, el DPR señala que el artículo 5 de las DR establece criterios para la determinación del MR y que la COFECE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del MR. En este sentido, el DPR indica que el artículo 5 de las DR establece que se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente; así como que se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incurrir en costos significativos.

el crédito y le dan seguimiento son los propios USUARIOS. Asimismo, el DPR refiere que, si bien las agencias gubernamentales también obtienen registros e IC, éstas persiguen otros objetivos y sus productos nunca son proporcionados a las SIC.

• **Determinación del PS de Mercado**

De conformidad con el DPR, el análisis de PS se circunscribe al MR DE PM. En este sentido, el DPR concluye que al momento en que se llevaron a cabo las conductas investigadas, DUN tuvo PS en el MR DE PM de conformidad con el análisis de cada fracción del artículo 59 de la LFCE y sus correlativos 7 y 8 de las DR:

- a. Fracción I del artículo 59 de la LFCE:¹⁹² El DPR afirma que del dos mil doce hasta el dos mil quince, DUN contó con una elevada participación en el MR DE PM y con la capacidad de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de IC, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. El DPR refiere que DUN mostró cuotas de mercado bastante elevadas en comparación con CC al considerar tanto el promedio mensual por año de CLIENTES con HC en la BD de PM, como el promedio mensual por año de los créditos registrados en la BD de PM.¹⁹³

Adicionalmente, en el DPR se indica que DUN ha sido la SIC que contó con el mayor número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM (en promedio, **
194

El DPR concluye que las participaciones de mercado para cada variable relacionada con la magnitud de la IC con la que cuentan las SIC, muestran que DUN ha mantenido desde el dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas, superando siempre el ** durante estos años.

En este sentido, el DPR refiere que, si bien un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún al combinarse con otras

¹⁹² "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder; [...]"

¹⁹³ El DPR indica que las variables utilizadas para medir la participación de mercado se relacionan con la dimensión de la BD de las SIC. Lo anterior, con la finalidad de observar la magnitud de la IC contenida en la BD con la que cuenta cada una de las SIC establecidas en el mercado.

¹⁹⁴ De conformidad con el DPR, las SIC se abastecen de información a través de sus USUARIOS afiliados, por lo que es muy probable que entre mayor sea la cantidad de USUARIOS afiliados, mayor sea la dimensión o tamaño de la BD de PM de una SIC. Según el DPR, la integración vertical entre los bancos y DUN ha favorecido que DUN cuente con el mayor número de USUARIOS que le suministran de registros y, a su vez, consumen los productos finales. De igual forma, el DPR señala que los efectos de red favorecen que el resto de los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión. Por lo anterior, el DPR indica que la mayor parte de la IC de PM se encuentra en la BD de DUN, lo cual genera que esta SIC ** con sus USUARIOS afiliados, ya que sólo podrán obtener productos de IC los USUARIOS que proporcionen su información a la SIC que les presta sus servicios. En consecuencia, según el DPR, la participación de mercado respecto de los USUARIOS afiliados y que adquirieron algún producto de IC puede considerarse indicativo de la dimensión de la BD de PM y, por lo tanto, del poder de mercado en la recopilación y procesamiento de IC de PM.

características del mercado, como la presencia de economías de escala o barreras a la entrada.

- b. Fracción II del artículo 59 de la LFCE:¹⁹⁵ Derivado del análisis de los elementos establecidos en el artículo 7 de las DR, el DPR identificó diversas barreras a la entrada para el MR DE PF: (i) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (ii) la posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos generados, para ser rentable en la comercialización de los RC de PM; (iii) las restricciones normativas (permisos y autorizaciones gubernamentales para operar como una SIC), ya que se requiere por lo menos un año para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC; (iv) la presencia de economías de red, y (v) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales usuarios, los cuales desincentivan a estos últimos a utilizar los servicios de CC.
- c. Fracción III del artículo 59 de la LFCE:¹⁹⁶ De conformidad con el DPR, el poder de mercado de los competidores de DUN es limitado y no cuentan con la capacidad suficiente para incrementar precios o restringir el abasto. Respecto a la imposibilidad de fijar precios, el DPR reitera que ni los USUARIOS cobran por proporcionar su IC ni las SIC por concepto de afiliación o por recibir la IC de los USUARIOS. Adicionalmente, el DPR señala que la alta participación de mercado en la afiliación de USUARIOS, la casi nula existencia de USUARIOS afiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la BD de DUN indican que CC no ha representado competencia en el segmento de PM. Respecto del IHH, el DPR señala que para dos mil catorce dicho índice supera las dos mil unidades (cifra que denota mercados altamente concentrados) y muestra valores cercanos a los diez mil puntos (máximo valor que asume cuando la estructura del mercado tiende a ser un monopolio), tanto considerando la variable de CLIENTES con HC como la de créditos registrados en la BD de PM [] y [] unidades, respectivamente). Por lo anterior, el DPR concluye que para todas las variables analizadas se puede observar la existencia de una alta concentración en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC de PM, sin que su único competidor, CC, contrarreste el poder de mercado de DUN.
- d. Fracción IV del artículo 59 de la LFCE:¹⁹⁷ De conformidad con el DPR, el acceso total a la IC disponible de los otorgantes de crédito puede constituirse como la barrera a la entrada más importante. Según el DPR, para mantenerse en la industria, una SIC requiere contar con suficientes USUARIOS que le provean de IC, además de tener acceso a la BD de la otra SIC. Asimismo, el DPR refiere que el principal insumo son los registros cuyos proveedores son los USUARIOS, por lo que abastecerse implica afiliar USUARIOS para, posteriormente,

¹⁹⁵ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores; [...]".

¹⁹⁶ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] III. La existencia y poder de sus competidores; [...]".

¹⁹⁷ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos: [...]".

intercambiar la BPD con las otras empresas en la industria. Al respecto, el DPR señala que la primera alternativa es remota considerando que la mayor parte de los USUARIOS ya se encuentran afiliados a DUN y respecto de la segunda se indica que, si se considera que DUN factura considerablemente más productos de IC, sus requerimientos de realizar consultas a la BD de CC son mayores. Al respecto, el DPR indica que el [REDACTED] - de los RC de PM fueron emitidos por DUN.

- e. Fracción V del artículo 59 de la LFCE:¹⁹⁸ Según el DPR, la alta participación de mercado que mantiene DUN no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que provee, siendo que el número de productos de valor agregado generados por ambas SIC refleja un bajo desarrollo en este mercado.¹⁹⁹
- f. Fracción VI del artículo 59 de la LFCE:²⁰⁰ De conformidad con el DPR: (i) la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada debido a la ausencia de sustitutos factibles, siendo DUN la SIC mejor posicionada frente a CC (el DPR indica que este agente económico no tiene una participación significativa en este mercado); (ii) no es posible importar o comercializar la IC desde otras regiones o países; y (iii) CC no tiene otra alternativa para acceder a la IC de los USUARIOS afiliados a DUN, por lo que los costos de recurrir a una alternativa son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.

Por último, respecto de la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, el DPR señala que: (i) DUN cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de IC (en la forma de registros) a CC; y (ii) el costo que asumen los USUARIOS afiliados a CC por el intercambio de información está determinado mediante el CONTRATO DUN Y CC, por lo que ninguna SIC cuenta, de acuerdo con el DPR, con la capacidad de alterar los precios ya acordados.

• **Análisis de la conducta: Negativa de trato**

De conformidad con el DPR, en el transcurso de la investigación se advirtió la existencia de elementos que podrían configurar la conducta establecida en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, la cual reside en la acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar

¹⁹⁸ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y [...]"

¹⁹⁹ El DPR muestra que del dos mil diez al dos mil quince, DUN sacó al mercado [REDACTED] productos de valor agregado orientados al mercado de PM, mientras CC hasta el dos mil quince [REDACTED]

²⁰⁰ "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]" Al respecto, el DPR cita el artículo 8 de las DR y señala que la COFECE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del PS. El Artículo 8 de las DR establece que "Artículo 8. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, se deben considerar los criterios siguientes:

I. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;
II. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación, y
III. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a otros proveedores."



49593

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

En específico, en el DPR se exponen los siguientes razonamientos para concluir que se actualizó presuntivamente la hipótesis establecida en la fracción V del artículo 56 de la LFCE:

- a) Primer elemento: DUN realizó la conducta de forma unilateral, la cual consistió en la negativa de intercambiar y, por tanto, de proporcionar su BPD de PM, así como el SEGMENTO CO en los RC de PM en favor de CC, quien en su momento los solicitó

El DPR señala que DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de forma unilateral.

Al respecto, el DPR indica que DUN y CC son las únicas SIC autorizadas para recopilar y procesar la IC disponible en el segmento de PM, por lo que DUN sólo puede negar una solicitud de CC. Asimismo, el DPR señala que la LRSIC obliga a la transmisión total de la BPD, por lo que ante la solicitud formal de CC, DUN debió atender dicha solicitud y empezar a intercambiar y actualizar constantemente la BPD. Por lo anterior, el DPR concluye que DUN se rehusó –tácitamente, mediante una negativa por omisión- a llevar a cabo el intercambio de la BPD de PM, previa solicitud de CC.

Según el DPR, [REDACTED]

De conformidad con el DPR, DUN contaba con un mes calendario para proporcionar la BPD en términos artículo 36 de la LRSIC, [REDACTED]

Según el DPR, tanto CC como DUN manifestaron que el intercambio de la BPD de PM no se ha llevado a cabo. Incluso, según el DPR, DUN admitió expresamente haberse rehusado (en forma tácita) a intercambiar con CC la BPD de PM: "[...]" [REDACTED]

Eliminado: diecinueve renglones, treinta y tres palabras

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

El DPR señala que pierde sentido el argumento relativo a que la problemática que presentaba la solicitud fue que CC sí está autorizada para operar en los dos segmentos de PF y PM y DUN no, toda vez que [REDACTED] **

[REDACTED] Asimismo, el DPR señala que la versión de DUN respecto de que [REDACTED] **
[REDACTED]
[REDACTED]

Respecto al cumplimiento de lo señalado en el artículo 36 Bis de la LRSIC, el DPR hace dos observaciones: (i) entre la fecha de la solicitud del intercambio de BPD ([REDACTED] **) y la firma del CONTRATO DUN Y CC, en el cual CC pudo ofrecer reportes con IC de DUN (celebrado el [REDACTED] **) transcurrió más de un año calendario, por lo que la posible alternativa al intercambio de la BPD que planteó DUN se implementó hasta después de doce meses, en los cuales CC estuvo impedido para ofrecer producto alguno que incluyera información de todo el mercado en el segmento de PM; y (ii) una vez que se formalizó el intercambio de información mediante la firma del CONTRATO DUN Y CC, [REDACTED] ** quien manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir la totalidad de la información disponible, pues [REDACTED] **
[REDACTED]

En este sentido, el DPR afirma en la página 306 que DUN reconoció que el intercambio correspondiente al SEGMENTO CO no se había llevado a cabo, aunque DUN argumentó que no lo ha hecho porque CC [REDACTED] **. Sin embargo, según el DPR, del CONTRATO DUN Y CC se desprende que [REDACTED] **
[REDACTED]

Finalmente, el DPR refiere que la LRSIC y sus reformas han tenido como finalidad el intercambio de IC para generar competencia económica entre las SIC. Según el DPR, el incumplimiento a la obligación de intercambiar información implica que la SIC solicitante no cuente con información suficiente que le permita competir en el MR de PM.

Por esta razón, el DPR señala que resulta intrascendente que, con posterioridad a la solicitud de intercambio de la BPD de PM, [REDACTED] **
[REDACTED] dado que en términos del artículo 36 de la LRSIC se debe transmitir en su totalidad la BPD que proporcionen las SIC, la cual no se ha dado.

- b) Segundo elemento: La BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, se encontraban disponibles y debían ser ofrecidos a terceros, en términos de los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC

Eliminado: seis renglones, setenta y seis palabras

Según el DPR, desde que CC se incorporó al MR DE PM el veintiocho de marzo de dos mil doce, han existido dos participantes, siendo que antes de esto DUN era la única empresa que recopilaba y procesaba la IC de las PM y que comercializaba los productos asociados. Por lo tanto, el DPR señala que si bien no es factible encontrar un antecedente ni algún otro agente económico al cual DUN le hubiera podido negar el intercambio de la BPD de PM, en términos del artículo 36 de la LRSIC dicho producto se encontraba y se encuentra disponible a terceros, al ser una obligación de las SIC proporcionar su BPD a otras SIC.

El DPR señala que el [REDACTED] sino también, de conformidad con el artículo 36 Bis de la LRSIC, las SIC están obligadas a proporcionar la información de manera oportuna, completa y sin distorsiones en relación con la que recibieron por los USUARIOS.

Al respecto, según el DPR, la LRSIC establece sanciones relacionadas con los artículos 36 y 36 Bis de dicho ordenamiento: *“Artículo 19.- La Secretaría, [...] podrá revocar la autorización otorgada en los casos en que la Sociedad: [...] VII. Omitan de manera reiterada transmitir o actualizar a otras Sociedades la información prevista en esta ley [...]” y “Artículo 62.- La Comisión sancionará con multa de 2,000 a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando: [...] V. Omitan compartir su información a otras Sociedades en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de esta ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada”.*

Por otra parte, el DPR refiere que existe el antecedente de intercambio de [REDACTED], el cual fue formalizado en términos del artículo 36 de la LRSIC mediante el CONTRATO DE INTERCAMBIO. Según el DPR, el intercambio referido constituye un antecedente pues, aunque [REDACTED] integran el GBC y el supuesto normativo es el mismo, por lo que tomando en cuenta que CC solicitó en [REDACTED] el intercambio de la BPD, entonces, la BPD se encontraba disponible y era normalmente ofrecida a terceros al momento de la solicitud de CC.

Asimismo, el DPR señala que no existe evidencia de que en el caso de PF la compartición de IC para los RC se dé de manera parcial o incompleta entre TUM y CC, por lo que también es un antecedente de que la compartición de IC completa para los RC se encontraba disponible y era normalmente ofrecida a terceros, lo que no acontece entre DUN y CC.

En este sentido, el DPR concluye que no se observa que exista una limitante o restricción a la compartición de la BPD de PM que por primera vez se solicite, máxime cuanto el artículo 36 de la LRSIC establece esta obligación, sin más limitaciones que las propiamente establecidas como condicionantes en dicho artículo.

• **Objeto o efecto de la conducta: Negativa de trato**

El DPR señala que la conducta realizada por DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y, también, al MERCADO RELACIONADO.

Para concluir lo anterior, el DPR expuso los siguientes razonamientos:

- a. La conducta que se le imputa a DUN tuvo por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO

El DPR refiere que, desde su origen, el intercambio de la información negativa contenida en la BPD se contempló como una medida destinada a evitar prácticas monopólicas entre las SIC. En este sentido, el DPR señala que la ruta principal por la cual se intercambian, de forma masiva y mensual, registros negativos es a través del intercambio de la BPD, siendo la alternativa compartir de forma puntual los registros negativos y positivos cuando se elabora un RC. Sin embargo, el DPR explica que esta alternativa no es un sustituto del intercambio de la BPD porque: (a) es más cara debido a los costos de la consulta de información entre SIC considerada como HIT;²⁰¹ (b) esta comparación se da de manera puntual y no de manera total o masiva; y (c) la información proporcionada [REDACTED] **

Según el DPR, al no intercambiarse la BPD de PM entre CC y DUN, se genera que CC tenga más casos de HIT [REDACTED] ** [REDACTED] en comparación con DUN y, por lo tanto, el USUARIO que solicite un RC a CC asume con mayor recurrencia un costo adicional por la información proporcionada por DUN, lo cual hace menos competitivo a CC en la medida en que la magnitud de su BD de PM sea menor en comparación con la de DUN. Al respecto, el DPR explica que si hubiese intercambio de la BPD entre CC y DUN la información considerada como HIT en un RC se limitaría a los casos de información positiva, lo que implica que se disminuiría la posibilidad de que CC tenga casos de HIT.

Adicionalmente, el DPR puntualiza que el hecho de que CC no cuente con la información de la BPD de DUN y que DUN no le proporcione la totalidad de la información consultada con motivo de un RC, impide que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS, pues CC no tiene información completa de qué tan morosos son los CLIENTES de los USUARIOS de DUN; incluso, el no intercambiar la BPD de PM impide que CC ofrezca a los USUARIOS productos para predecir comportamiento o análisis de cartera o de administración de cartera.²⁰²

De conformidad con el DPR, la negación al intercambio de la BPD de PM hizo depender a CC del intercambio puntual requerido para elaborar el RC; sin embargo, tampoco la entrega puntual establecida en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC se ha llevado a cabo en términos satisfactorios, ya que, presuntamente, DUN ha omitido la entrega de información del SEGMENTO CO. Lo anterior, según el DPR, carece de sentido económico, siendo que la única

²⁰¹ El DPR refiere que: [REDACTED] **

²⁰² El DPR señala que tal y como establece BANXICO, el desarrollo de productos de valor agregado para PM es pobre en México, lo que se explica por la insuficiente recopilación y procesamiento de IC en PM. En este sentido, el DPR explica que [REDACTED] ** [REDACTED]



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

motivación aparente para llevar a cabo este comportamiento ha sido dañar a la competencia, al propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información proporcionada por DUN, así como en la comercialización de los productos de IC. En otras palabras, el DPR explica que negar el acceso a la BPD de PM a CC no ha respondido a necesidades reales de los consumidores, ni se ha traducido en una mejora para los USUARIOS de DUN, sino que puede considerarse como una estrategia anticompetitiva.

Incluso, de acuerdo con el DPR, existen casos en que algunos USUARIOS manifestaron la preferencia por consultar la base de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de servicios: "BANCO AZTECA: [...]"

[REDACTED]

De esta forma, el DPR especifica que la omisión en el intercambio completo de la información, incluyendo notablemente la omisión del SEGMENTO CO por DUN, ha generado daños a la competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información, siendo que incluso en algunas ocasiones,

El DPR refiere que derivado de lo anterior y a diferencia de lo sucedido en el segmento de PF, en el segmento de PM las participaciones de mercado no se han acercado en los últimos años, siendo que DUN ha tenido una participación promedio del [REDACTED] del mercado de comercialización de RC. Inclusive, según el DPR, la participación de mercado de CC en la venta de RC de PM no ha crecido lo suficiente como para hacer esta actividad rentable.

Así, según el DPR, la AI no identificó algún otro beneficio que le genere a DUN no compartir su información (por la cual recibiría una contraprestación), más que dañar el proceso de competencia e impedir el acceso sustancial de CC al MR DE PM y, por ende, a la comercialización de productos de IC de PM.

De esta manera, el DPR concluye que DUN ha llevado a cabo la práctica con la intención de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, puesto que más allá de obstruir el proceso de competencia, la práctica carece de sentido económico, entre otras razones, porque compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos adicionales a DUN, pero sí le pudiera acarrear una sanción; además de que la otra empresa de GBC, TUM, sí lleva a cabo dicho intercambio.

- b. Otras manifestaciones de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de productos de IC

²⁰³ El DPR refiere [REDACTED]



49598

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

El DPR señala que otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la comercialización de productos de IC de PM es la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado. Al respecto, el DPR refiere que al comparar la generación de productos de TUM y DUN se advierte que, [REDACTED] **, [REDACTED] **, han puesto en el mercado [REDACTED] **, s de valor agregado, respectivamente.

En este sentido, el DPR agrega que el debido intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría una efectiva competencia entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se creen una mayor gama de productos de valor agregado.

Así, el DPR menciona que la AI no [REDACTED] **. [REDACTED] Asimismo, señala que aparentemente, [REDACTED] **, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

De igual forma, el DPR compara los productos de valor agregado que ofrece DUN con los tipos de servicios de valor agregado que señala Corporación Financiera Internacional y concluye que DUN no ofrece una gran variedad de éstos.

En este sentido, el DPR señala que la oferta de productos de valor agregado para PM es muy limitada en México: [REDACTED] ** y DUN ha ofrecido sólo [REDACTED] ** lo cual es un indicativo claro, según el DPR, de que el sector de IC en México no se ha desarrollado lo suficiente.

Por último, el DPR señala que otra consecuencia de la ausencia de competencia en la comercialización de productos de información de PM ha sido el incremento continuo, cercano al 8.66% (ocho punto sesenta y seis por ciento) de promedio anual, de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS.

Por lo anterior, el DPR concluye que impedir sustancialmente el acceso de CC al mercado de la recopilación y procesamiento de IC de las PM y, también, de la comercialización de los productos de IC de PM ha tenido como efecto, no sólo que se limite el crecimiento de CC en ambos mercados, sino también que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC de PM.

III. CONTESTACIONES AL DPR

El estudio de los argumentos vertidos por los emplazados se realizará de conformidad con el orden que a continuación se indica sin que las manifestaciones y argumentos que exponen los emplazados sean transcritos literalmente, ni se atienda al estricto orden expuesto por los

Eliminado: dos renglones, treinta y ocho palabras

mismos, toda vez que éstos se han agrupado conceptualmente con objeto de exponer de mejor manera las líneas de argumentación.²⁰⁴

Respecto de las manifestaciones vertidas por los emplazados debe precisarse lo siguiente en relación con la calificación de sus argumentos:

- i) **Señalamientos gratuitos, abstractos o generales.** En varias partes de las contestaciones al DPR, los emplazados realizan una serie de manifestaciones genéricas y gratuitas, sin que en realidad se establezcan argumentos lógico-jurídicos o se especifiquen las situaciones que sustentan esas manifestaciones. En este sentido, cuando lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resulta aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 81/2002 emitida por la Primera Sala de la SCJN, cuyo contenido es el siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.”²⁰⁵

Por ello, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dicha tesis se inserta a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que las mismas resultan gratuitas o cuando se haga el señalamiento de que

²⁰⁴ Lo anterior es posible, dado que, de conformidad con diversos criterios del PJJ, al realizar el estudio de los argumentos, no es obligatorio analizarlos en la forma o estructura en que se presenten, ya que lo importante es que se examinen todos y cada uno de los puntos controvertidos. Sirven de apoyo, por analogía, los criterios que a continuación se citan: (i) ***“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija [énfasis añadido]”***. Registro: 241958. [J]; 7a. Época; 3a. Sala; SJF; 48 Cuarta Parte; Pág. 15, y (ii) ***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma [énfasis añadido]”***. Registro: 196,477. [J]; 9a. Época; TCC; SJF; VII, Abril de 1998; Pág. 599.

²⁰⁵ Registro 185425. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; SJF; Tomo XVI, Diciembre de 2002; Pág. 61.

constituyen afirmaciones **generales o abstractas**. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

- ii) **Manifestaciones que no combaten el DPR.** Varios de los argumentos de los emplazados consisten en manifestaciones que en realidad no controvierten las razones y argumentos sostenidos en el DPR, debido a que se refieren a situaciones que no formaron parte de los pronunciamientos de este. En este sentido, cuando lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía, los siguientes criterios:

- a) La jurisprudencia número 1a./J.19/2012 de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la SCJN:

"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."²⁰⁶

- b) La siguiente jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJN:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."²⁰⁷

- c) La jurisprudencia I.6o.C. J/29, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS

²⁰⁶ Jurisprudencia; 10a. Época; 1ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 731. Registro: 159947.

²⁰⁷ Registro: 269435. [J]; 6a. Época; 3a. Sala; SJF; Volumen CXXVI, Cuarta Parte; Pág. 27.

RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado.²⁰⁸

d) La tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Común, cuyo contenido es:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el solicitante de garantías, no contienen ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a combatir los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias, son inoperantes."²⁰⁹

Por ello, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que los mismos **no combaten** las consideraciones y razonamientos en que se sustenta el DPR. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

iii) **Manifestaciones basadas en premisas falsas.** En algunas de sus manifestaciones los emplazados realizan señalamientos que se basan en premisas erróneas. Cuando lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía los siguientes criterios:

a) La tesis XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes."²¹⁰

²⁰⁸ Registro: 188864. [J]; 9a. Época; TCC; SJF; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 1147.

²⁰⁹ Registro: 226819. [TA]; 8a. Época; TCC; SJF; Tomo IV, Segunda Parte-I, Julio-Diciembre de 1989; Pág. 163.

²¹⁰ Jurisprudencia; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 14, Enero de 2015; Tomo II; Pág. 1605., Registro: 2 008 226.

- b) La jurisprudencia 2a./J. 108/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, cuyo contenido es:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conducirla su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."²¹¹

Así, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que las mismas se basan en premisas falsas. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

- iv) **Manifestaciones que no combaten la totalidad de las razones del DPR.** Varias de las manifestaciones de los emplazados sólo combaten de forma parcial las razones y argumentos sostenidos en el DPR. En este sentido, cuando lo señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía, los siguientes criterios:

- a) La jurisprudencia número 1a./J.19/2012 de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la SCJN:

"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."²¹²

- b) La jurisprudencia V.2o. J/54 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en Materia Administrativa, misma que señala:

"REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES. Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno de los conceptos de nulidad que se hacen valer por omisión de formalidades o violaciones de procedimiento, estimando fundados unos e infundados otros, y las autoridades

²¹¹ Jurisprudencia; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3; Pág. 1326. Registro: 2001825.

²¹² Jurisprudencia; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 731. Registro: 159947.

*recurrentes no combaten la totalidad de los razonamientos conforme a los cuales se consideran fundados diversos conceptos de nulidad, ello implica que los agravios sean inoperantes, por insuficientes, ya que con independencia de lo correcto o incorrecto de los mismos, lo cierto es que al no desvirtuar sendas consideraciones como cada una por separado, es suficiente para apoyar la legalidad de la sentencia impugnada, ésta queda firme pues no se demuestra la ilegalidad de los motivos y fundamentos que la sostienen, y de ahí que devengan inoperantes los agravios que en su contra se hagan valer.*²¹³

c) La tesis I.6o.A.40 A del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON CUANDO LA SENTENCIA DE LA SALA SE SUSTENTA EN DIVERSOS MOTIVOS SI NO SE CONTROVIERTEN EN SU TOTALIDAD POR LA RECURRENTE. Cuando la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se sustenta en dos o más razones, que por sí mismas pueden soportar, en forma independiente, el sentido de la resolución, y en los agravios la autoridad recurrente no combate todas y cada una de ellas, los agravios planteados resultan inoperantes porque aun cuando fuesen fundados no podrían conducir a declarar fundado el recurso, en virtud de que la consideración o consideraciones no atacadas, deberán seguir rigiendo el sentido de la resolución.

²¹⁴

d) La tesis II.A.62 A del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que señala:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los razonamientos de la sentencia reclamada, aquéllos se consideran inoperantes, ya que aun cuando alguno fuera fundado, no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, puesto que existen otras consideraciones de la sentencia que no se impugnaron y que este Tribunal Colegiado no puede estudiar, por ser el amparo en materia administrativa de estricto derecho; conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que lo expresado en ellos carece de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada con base en los intocados razonamientos en que se apoya.

²¹⁵

Así, deberá entenderse que adicionalmente dicha tesis se inserta a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que los mismos son **inoperantes**. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

En este aspecto, todos los supuestos anteriores constituyen manifestaciones que deben calificarse de **inoperantes** debido a que se actualiza algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien la realiza, la omisión de la expresión precisa de los mismos o su formulación material incorrecta o el incumplimiento de las condiciones atinentes a su contenido, lo cual puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las

²¹³ Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Agosto de 2001; Pág. 1110. Registro: 188962.

²¹⁴ Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVII, Enero de 2003; Pág. 1714. Registro: 185279.

²¹⁵ Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; IX, Mayo de 1999; Pág. 1001. Registro: 194031

consideraciones que rigen el DPR; y b) en caso de reclamar infracción a las normas del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al emplazado o su relevancia en el dictado del DPR; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida a esta COFECE el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza del procedimiento y del órgano que resuelve. Por tanto, respecto de dichas manifestaciones adicionalmente deberá entenderse aplicable la jurisprudencia 188/2009 de la Segunda Sala de la SCJN, la cual expresamente indica:

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado”²¹⁶

III. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

En este apartado se analizan las defensas formuladas por diversos agentes económicos emplazados en términos de la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

Esta COMISIÓN advierte la existencia de algunas defensas alegadas por TUM, SEPZ y MAGR que podrían ser **fundadas y suficientes** para tener por no acreditada la práctica monopólica imputada a la luz de los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE, aquéllos aportados por las personas emplazadas y los recabados por esta autoridad en el PSFJ. Por tal

²¹⁶ Jurisprudencia; 9a. Época; 2a. Sala; SJF y su Gaceta; XXX, noviembre de 2009; Pág. 424. Registro: 166031.

motivo, se procede a su estudio en primer orden, debido a que, de resultar fundadas, haría innecesario el análisis de los demás argumentos planteados por las personas emplazadas en su defensa, ya que a nada distinto conduciría, pues el sentido de la resolución no cambiaría.²¹⁷

Ahora bien, previo al análisis de los argumentos vertidos por los emplazados se indica que, tal y como lo reconoce la AI en la VISTA TUM²¹⁸ y se desprende del contenido del DPR,²¹⁹ la AI no imputó responsabilidad a ninguna de las personas emplazadas por el DESCUENTO ORDINARIO; por lo anterior, dicho descuento no será considerado en el presente análisis como parte de la política de descuentos imputada.

A continuación, se exponen las principales líneas argumentativas de TUM, SEPZ y MAGR.²²⁰

²¹⁷ Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.** De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional". Jurisprudencia P/J. 3/2005; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Febrero de 2005; Pág. 5; Registro No. 179 367.

²¹⁸ En la VISTA TUM la AI señaló lo siguiente: "[...] la AI aclara que el DPR no imputa responsabilidad por el DESCUENTO ORDINARIO, como se puede verificar en el análisis del segundo elemento para acreditar la conducta referente a que los Usuarios de RC de PF se encontraban en condiciones equivalentes. En esta sección no se analiza el criterio o mecanismo de asignación relativo a que los usuarios de RC de PF se encontraban en condiciones equivalentes respecto del DESCUENTO ORDINARIO". Página 124 de la VISTA TUM.

²¹⁹ En la página 53 del DPR se indica lo siguiente: "El DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8%, el DESCUENTO RESIDUAL, y en su caso, el DESCUENTO POR LEALTAD Y EXCLUSIVIDAD, tal y como se desarrolla en el análisis de la conducta de discriminación de precios, así como en el objeto y efecto del presente DICTAMEN, constituyeron diversas conductas realizadas por TUM en diversos momentos, que guardaban una identidad de propósito, debido a que todas éstas tuvieron el objeto y efecto de otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los USUARIOS - ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, así como impedir sustancialmente el acceso de CÍRCULO DE CRÉDITO y de otros competidores potenciales en el mercado relevante de la comercialización de RC de PF, con una dimensión geográfica nacional." Asimismo, en la página 251 del DPR se indica lo siguiente: "[...] se han expuesto los argumentos que permiten concluir que, de manera presuntiva, se configuró el supuesto normativo contenido en la fracción X del artículo 56 de la LFCE. Esto es, probablemente, TUM estableció distintos precios de venta de los RC de PF para diferentes USUARIOS situados en condiciones equivalentes. Los distintos precios de venta ofrecidos por TUM se generaron al conferir distintos descuentos previamente descritos: DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL, el DESCUENTO DEL 5.8%, así como el DESCUENTO POR LEALTAD Y EXCLUSIVIDAD." Véase adicionalmente los señalamientos incluidos en las páginas 215 a 222 y 251 a 252 del DPR.

²²⁰ Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate,

I. Sobre la inexistencia de diversos descuentos.

A. El DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL no existen.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:²²¹

El DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL no son descuentos, sino que es una conclusión falsa de la AI ante la falta de entendimiento y claridad respecto de: (a) el funcionamiento de la estrategia de precios de TUM, (b) el proceso de facturación; y (c) la mecánica, práctica de negocios y políticas para el otorgamiento de descuentos a los USUARIOS.

La AI requirió a TUM el desglose mensual de dos mil diez a dos mil quince de la aplicación de cada uno de los descuentos otorgados, incluyendo el monto facturado por cada USUARIO. Derivado de que conforme a la política de facturación y otorgamiento de descuentos de TUM, la aplicación de descuentos no necesariamente coincide con el mes en el que se realizan los consumos de RC (debido al cumplimiento de ciertas condicionantes, como es el caso del pago oportuno o solicitudes de aplicación anticipada de descuentos por USUARIOS), no fue posible para la AI cuadrar los descuentos aplicados (facturados) a los USUARIOS con los montos de descuentos aplicables. TUM explicó a la AI los distintos factores que podrían ocasionar estas discrepancias.

No obstante, la AI manifiesta la existencia de elementos adicionales o externos a los manifestados por TUM, como los únicos factores para el otorgamiento del DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL.

Como supuesta prueba presenta el caso de [REDACTED] B [REDACTED], en donde determina la existencia de dichos descuentos por la supuesta discrepancia entre los montos efectivamente otorgados (facturados) a dichos USUARIOS y los factores de descuentos aplicables. Haciendo especial énfasis que coincidentemente los USUARIOS que tienen acceso a mayores DESCUENTOS ORDINARIOS o DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS reciben mayores DESCUENTOS RESIDUALES y DESCUENTOS ADICIONALES, lo cual resulta por demás lógico ya que justamente los supuestos DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS ADICIONALES, no son más que los DESCUENTOS ORDINARIOS y los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS aplicados de tiempo en tiempo o a un grupo de USUARIOS (como

derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Jurisprudencia 2a./J. 58/2010; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 830; Registro No. 164 618.

²²¹ Páginas 146 a 161 de la CONTESTACIÓN TUM, 200 a 215 de la CONTESTACIÓN MAGR y 202 a 217 de la CONTESTACIÓN SEPZ.

los grupos corporativos y las asociaciones o micro financieras), de conformidad con la mecánica de descuentos, prácticas de negocios y políticas de TUM.

La forma de aplicación de TUM es a través de un sistema de cuenta corriente con USUARIOS (cargos y abonos recíprocos). Para efectos jurídicos, el sistema mencionado encuadra en la figura del crédito en cuenta corriente previsto en el artículo 295 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De esta forma, en virtud de que los descuentos se aplican hasta el mes siguiente en el que fueron devengados o de forma anticipada en función a los requerimientos de los USUARIOS, mediante la emisión de NOTAS DE CRÉDITO, TUM mantiene el control de las NOTAS DE CRÉDITO en favor del USUARIO respecto al descuento que fue aplicable en el mes en cuestión y que será otorgado en el mes siguiente, así como de cualquier solicitud de anticipo de descuentos efectuada por los USUARIOS. Así, el mes siguiente TUM aplicará el descuento que correspondía al USUARIO y que había sido calculado con base en los datos de consumo del mes anterior, mediante la compensación de adeudos recíprocos que tenga con ese USUARIO derivado del consumo que haya realizado el mismo; esta mecánica se repite mes a mes con todos los USUARIOS desde el inicio de operaciones de TUM. Con el objeto de ejemplificar la cuenta corriente existente entre TUM y sus USUARIOS se presenta el siguiente ejemplo:

Facturación Mes 1	\$1,000	
Descuento Aplicable al Mes 1	\$100	Total facturado en el Mes 1 \$1,000
Facturación Mes 2	\$1,000	
Descuento Aplicable al Mes 2	\$100	
Aplicación de Descuento Devengado en el Mes 1	-\$100	Total facturado en el Mes 2 \$900 derivado de (\$1,000-\$100=\$900).
Facturación Mes 3	\$1200	
Descuento Aplicable al Mes 3	\$120	
Aplicación de Descuento Devengado Mes 2	-\$100	Total facturado en el Mes 3 \$1100 derivado de (\$1,200-\$100=\$1,100)

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:

Ejemplo 1		
Cuenta		Cargo Abono
	1a	
Bancos		1,000
Ventas (Ingresos)		1,000
	1b	
Descuentos		100
Descuentos por aplicar 1		100
	2a	
Bancos		900
Descuentos por aplicar 1		100
Ventas (Ingresos)		1,000
	2b	
Descuentos		100
Descuentos por aplicar 2		100
	3a	
Bancos		1,100
Descuentos por aplicar 2		100
Ventas (Ingresos)		1,200
	3b	
Descuentos		120
Descuentos por aplicar 3		120

3,520 3,520

Como se desprende de lo anterior, hay una serie de cargos y abonos recíprocos entre las partes derivado de la aplicación de descuentos en el mes siguiente a su devengo.

Compliquemos el ejemplo para reflejar algunos de los factores enunciados por TUM durante la Investigación, respecto a las supuestas discrepancias detectadas por la AI. Imaginemos que el consumo del Mes 2 no fuera suficiente para compensar o aplicar el descuento devengado en el Mes 1, entonces tendríamos que:

49607

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Facturación Mes 1	\$1,000	
Descuento Aplicable Mes 1	\$10	Total facturado en el Mes 1 \$1,000
Facturación Mes 2	\$5	
Descuento Aplicable Mes 2	\$0.5	
Aplicación de Descuento Aplicable al Mes 1	-\$10	Total facturado en el Mes 2 -\$5, derivado de $(\$5 - \$10 = -\$5)$, por lo que se genera un crédito de \$5.
Facturación Mes 3	\$20	
Descuento Aplicable Mes 3	\$2	
Aplicación del Remanente (crédito) del Descuento Aplicable al Mes 1	-\$5	
Aplicación del Descuento Aplicable al Mes 2	-\$0.5	Total facturado en el Mes 3 \$14.5 derivado de $(\$20 - 0.5 - \$5 = \$14.5)$

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:

Ejemplo 2		
Cuenta		Cargo Abono
	1a	
Bancos		1,000
Ventas (Ingresos)		1,000
	1b	
Descuentos		10
Descuentos por aplicar 1		10
	2a	
Bancos		-
Descuentos por aplicar 1		5
Ventas (Ingresos)		5
	2b	
Descuentos		0.5
Descuentos por aplicar 2		0.5
	3a	
Bancos		14.5
Descuentos por aplicar 1		5
Descuentos por aplicar 2		0.5
Ventas (Ingresos)		20
	3b	
Descuentos		2
Descuentos por aplicar 3		2

1,038 1,038

Consideremos ahora otro factor hecho valer por TUM durante la Investigación. Imaginemos que el USUARIO en cuestión solicitó que se le anticipara en el Mes 1 el

descuento que se le aplicará el Mes 2 (ya que el descuento en del Mes 1 ya fue calculado más no otorgado):

Facturación Mes 1	\$1,000	
Descuento Aplicable Mes 1, y que será anticipado en la facturación del mismo mes.	\$10	
Aplicación Anticipada del Descuento Aplicable al Mes 1	-\$10	Total facturado en el Mes 1 \$990 derivado de (\$1000-\$10=\$990)
Facturación Mes 2	\$8,000	
Descuento Aplicable al Mes 2	\$80	
Aplicación de Descuento Aplicable al Mes 1	\$0 (ya fue aplicado de forma anticipada en el Mes 1)	Total facturado en el Mes 2 \$8,000

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:

Ejemplo 3			
Cuenta		Cargo	Abono
	1		
Bancos		990	
Descuentos		10	
Ventas (Ingresos)			1,000
	2a		
Bancos		8,000	
Ventas (Ingresos)			8,000
	2b		
Descuentos		80	
Descuentos por aplicar			80
		9,080	9,080

Queda evidenciado que los DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS ADICIONALES no existen.

Con base en lo anterior, las discrepancias señaladas por la AI en la Tabla 48 del DPR, se trata de los DESCUENTOS ORDINARIOS y DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS aplicados en distintos tiempos.

Así las cosas, debido a la confusión que tenía la AI respecto de los "Descuentos Aplicados" (todos los descuentos facturados incluyendo el DESCUENTO EXTRAORDINARIO), solicitó a TUM, entre otras cuestiones, incluir una columna denominada "Descuentos Aplicables", los cuales consisten en los DESCUENTOS ORDINARIOS que se hubieran otorgado a los USUARIOS de enero dos mil diez a



- 49611

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

marzo dos mil quince, incluyendo el DESCUENTO DEL 5.8%, siempre y cuando los USUARIOS hubieran cumplido con los requisitos necesarios para acceder a estos descuentos.

Por lo anterior y debido a la cuenta corriente que utiliza TUM, en enero de dos mil diez no se incluyó ningún "Descuento Aplicable" para ningún USUARIO y en el caso de marzo de dos mil quince no se muestran los anticipos de descuentos que se pudieron haber otorgado.

Los supuestos "Descuentos Aplicables" son por definición diferentes a los "Descuentos Aplicados" y en la columna denominada "Anticipo y/o Retro" del numeral 8.3 del REQUERIMIENTO, TUM incluyó la información referente a: (i) ajustes derivados de las solicitudes de los USUARIOS de diversa índole, relacionados, por ejemplo, con anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a meses posteriores derivados de la cuenta corriente; y (ii) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO. La sumatoria de la columna "Anticipo y/o Retro" es lo que la AI llama DESCUENTOS ADICIONALES y al restarle el DESCUENTO EXTRAORDINARIO obtiene un número que llamó DESCUENTO RESIDUAL, lo cual, en realidad no se trata de un descuento adicional, sino que es solo una diferencia numérica; prueba del error de la AI es que en la Tabla 48 se muestra que TUM le otorgó B

de DESCUENTO RESIDUAL, es decir se le otorgaron menos descuentos de los que le eran aplicables y que contradice la conclusión de la AI de que estos supuestos DESCUENTOS ADICIONALES o DESCUENTOS RESIDUALES se otorgaron en beneficio de los ACCIONISTAS. Ante tal confusión de conceptos por la AI y la falta de elementos para probar el DESCUENTO ADICIONAL y el DESCUENTO RESIDUAL es que se niega la existencia de estos.

Prueba de la falta de entendimiento de la AI y del incorrecto análisis que hizo es que, al considerar los supuestos DESCUENTOS ADICIONALES, la AI no considera a B con los demás USUARIOS que forman su grupo corporativo para efectos del cálculo de los descuentos y por ello llega a la errónea conclusión que con un menor consumo tuvo acceso a un mayor (y supuesto) DESCUENTO ADICIONAL. Si la AI hubiera considerado el volumen de RC de PF adquiridos por todos los Usuarios que se consideran parte del grupo B, se hubiera percatado que B y los demás USUARIOS que forman parte de su grupo corporativo tuvieron un volumen muy superior al de B y, en consecuencia, tuvieron acceso a un mayor número de descuentos.

No existe elemento externo alguno que determine descuentos adicionales a los USUARIOS a los que ya se han descrito y analizado. De existir, dichos descuentos no podrían haber sido aplicados toda vez que cualquier precio o descuento debe ser aprobado por la Asamblea de Accionistas o el CONSEJO, con el voto favorable de los accionistas o de los consejeros designados por los accionistas Serie "B", cuestión que no sucedió.

Eliminado: dieciocho palabras

Derivado de que lo anterior es una imputación por demás infundada que podría llevar incluso a constituir una violación de los estatutos sociales de TUM es que TUM solicitó a MANCERA, su auditor externo independiente, la realización de un trabajo especial de revisión y análisis de la aplicación de descuentos a los USUARIOS durante el período comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil quince, con el objeto de confirmar que la aplicación de los descuentos fue realizada de forma correcta y en cumplimiento a la estrategia de precios, las políticas y mecánicas de descuento aprobadas por el CONSEJO. Como resultado de dicho trabajo, MANCERA²²² concluyó que: (i) el total de la facturación y de los descuentos otorgados en dicho periodo coincide con los registros contables de TUM, no existiendo diferencias que ameriten una explicación por la administración de TUM; (ii) la denominada "*Base de Facturación de Reporte de Crédito*",²²³ coincide con la base total de facturación descrita en el numeral (i) anterior, no existiendo discrepancias u observaciones que ameriten una explicación por la administración de TUM; (iii) los USUARIOS incluidos en la Tabla No. 48 del DPR y que a dicho de la AI obtuvieron los principales DESCUENTOS RESIDUALES y DESCUENTOS ADICIONALES, únicamente obtuvieron los DESCUENTOS ORDINARIOS, DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y el DESCUENTO DEL 5.8%. En consecuencia, del informe de MANCERA se desprende que los descuentos han sido aplicados conforme a las políticas aprobadas por el CONSEJO y que no fueron observados otro tipo de descuentos distintos a ellos, por lo que el supuesto DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL son inexistentes.

Como resultado del Informe,²²⁴ MANCERA concluye que no se otorgó ningún descuento adicional o fuera de políticas; asimismo en los Anexos 4.1.1 y 4.2.1 se muestran claramente las explicaciones del supuesto DESCUENTO RESIDUAL para los ACCIONISTAS que la AI muestra en la Tabla 48 del DPR. El documento descrito constituye una prueba contundente respecto de la inexistencia del DESCUENTO RESIDUAL y del DESCUENTO ADICIONAL, descuentos producto de la imaginación de la AI, como única justificación de la falta de entendimiento de la información proporcionada por TUM.

Todas las imputaciones que realiza la AI de descuentos adicionales injustificados, carecen de toda fundamentación legal, ya que la AI se limitó a manifestar la existencia de estos sin fundamentar ni probar dicha existencia, violando el principio de legalidad que debe regir el actuar de toda autoridad.²²⁵

²²² TUM adjuntó a la CONTESTACIÓN TUM, dicho informe como Anexo 9, SEPZ adjuntó a la CONTESTACIÓN SEPZ dicho informe como Anexo 16 y MAGR adjuntó a la CONTESTACIÓN MAGR dicho informe como Anexo 16.

²²³ Información proporcionada a través de la respuesta al numeral 8.3 del REQUERIMIENTO.

²²⁴ En la página 157 de la CONTESTACIÓN TUM, así como en la página 211 de la CONTESTACIÓN MAGR y en la página 213 de la CONTESTACIÓN SEPZ se describe de forma breve la metodología del Informe elaborado por MANCERA.

²²⁵ Adicionalmente, TUM, SEPZ y MAGR señalan que de forma indebida la AI omitió otorgar valor probatorio a las diversas explicaciones y manifestaciones realizadas por TUM durante el periodo de investigación. Asimismo, señalan que la autoridad tiene la obligación de agotar la línea de investigación para esclarecer la verdad.

En ese sentido, el hecho de que la AI se limitara únicamente a señalar que la justificación de la existencia de los Descuentos Extraordinarios [sic] y los DESCUENTOS RESIDUALES fue la falta de explicación o explicación convincente (a juicio de la AI) por TUM respecto de ciertas discrepancias, sin considerar los diversos factores que TUM manifestó a la AI durante el Periodo de Investigación, sólo porque la AI nunca pudo entender la forma de facturar y aplicar descuentos de TUM en lugar de indagar y allegarse de mayores pruebas para esclarecer la verdad, resulta contrario a la finalidad de un procedimiento en el que se busca esclarecer la verdad y contrario a los principios que deben regir el actuar de la AI de conformidad con el artículo 33 de la LFCE.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²²⁶

El trabajo de MANCERA carece de cualquier rigor para determinar la correcta aplicación de los descuentos que TUM realizó. Lo anterior porque en dicho trabajo el auditor externo reconoció que *“los procedimientos aplicados antes citados no constituyen una auditoría, un examen o una revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría o con las Normas para Atestiguar o Normas de Revisión (...) Si hubiéramos aplicado procedimientos adicionales de acuerdo con [éstas] otros asuntos podrían haber surgido [...] no asumimos responsabilidad alguna frente a COFECE respecto al uso que dicha entidad de a la información contenida en dicho informe [...]”*; de tal suerte, que al no encontrarse administrada con el conjunto probatorio, carece del alcance y valor que los imputados pretenden otorgarle.

El DESCUENTO RESIDUAL se dedujo a partir del análisis de la información contable proporcionada por TUM. Como se expuso en el DPR, TUM adelantó descuentos de un grupo selecto de USUARIOS (no la totalidad) que todavía no se habían generado. Supuestamente, en algún momento futuro, TUM compensaría estos descuentos previamente adelantados, reduciendo los beneficios corrientes.

De acuerdo con TUM, cuando así conviniera a sus intereses, un USUARIO podía solicitar que se le adelantara o proporcionara un DESCUENTO ADICIONAL que le ayudara a reducir su nivel de facturación corriente en casos de que se esperara un consumo extraordinariamente alto de RC de PF o de cualquier otro producto. TUM no refuta la imputación realizada por la AI en cuanto a que es una práctica corriente que TUM adelante descuentos a un grupo reducido de USUARIOS, los cuales supuestamente luego compensa. Al respecto, conviene destacar que TUM no ofreció en sus manifestaciones al DPR ninguna evidencia que sea útil para acreditar sus respuestas.

Como lo refiere TUM, la columna «Anticipo y/o Retro» incluyó información referente a *“(i) ajustes derivados de las solicitudes de los USUARIOS de diversa índole relacionados por ejemplo con anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a meses posteriores derivados de la cuenta corriente; y (ii) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO.”*

²²⁶ Páginas 154 a 170 de la VISTA TUM.

Los adelantos de descuentos se realizaron de forma poco transparente, generando movimientos nada claros en la facturación que resultaron en las diferencias señaladas por el DPR, las cuales no se explican por el otorgamiento del DESCUENTO ORDINARIO, del DESCUENTO DEL 5.8% ni del DESCUENTO EXTRAORDINARIO. De acuerdo con la revisión de la información contable, hubo descuentos que se adelantaron, pero, aparentemente, no fueron compensados, las diferencias antes manifestadas persistieron, y las justificaciones ofrecidas por TUM en sus manifestaciones al DPR no aclaran, concretamente, si las diferencias descritas en el DPR se deben a errores en la contabilidad o cuál es el motivo por el que existieron diferencias entre los descuentos aplicables y los descuentos aplicados.

MANCERA estimó, entre otras cuestiones, el DESCUENTO ORDINARIO y lo contrastó con los resultados que TUM le entregó a la AI. El cómputo de los DESCUENTOS ORDINARIOS, recurriendo al mecanismo empleado por TUM y el calculado por MANCERA, arrojaron diferencias sustanciales; de las cuales no se documenta su origen, sólo se limita a señalar dichas diferencias.

Sin embargo, el DESCUENTO RESIDUAL no se refiere al cómputo erróneo del DESCUENTO ORDINARIO. La existencia del DESCUENTO RESIDUAL se explica por movimientos no compensados en la cuenta corriente de pasivos individual que mantuvo con cada uno de los USUARIOS-ACCIONISTAS; esto es, demasiados "abonos" a los que no le corresponden suficientes "cargos". Por ejemplo, durante el periodo analizado, a [REDACTED] **, [REDACTED] generando una diferencia entre el descuento aplicado con respecto al descuento aplicable.

Aparentemente, dichos movimientos contables no fueron compensados por TUM durante el periodo de análisis. En caso de que, efectivamente, se tratara de errores en la contabilidad que posteriormente fueron corregidos por la administración de TUM, debió de haberse documentado por TUM en el reporte MANCERA, o en el resto de sus manifestaciones al DPR, pero no se documenta que las Notas de Crédito que originaron las diferencias antes aludidas fueron finalmente compensadas para todos los beneficiarios del DESCUENTO RESIDUAL.

Lo que argumenta la AI y que no fue desestimado por TUM es que dichos ajustes solicitados por los USUARIOS fueron otorgados sólo a una minoría. TUM entregó descuentos por adelantado, que nunca compensó (y si lo hizo no muestra evidencia oportuna sobre ese hecho). Esta misma conclusión se observa en el reporte de MANCERA, donde se observan diferencias notables entre el concepto «Anticipo y/o Retro» con respecto al DESCUENTO EXTRAORDINARIO (Anexo 4.1.1). MANCERA arribó a la misma conclusión que la AI, cuando señala diferencias entre ambos conceptos.²²⁷

Las diferencias para algunos USUARIOS respecto de lo otorgado como «Anticipo y/o Retro» con respecto al DESCUENTO EXTRAORDINARIO no fueron explicadas con

²²⁷ La AI refiere que ese es el caso de [REDACTED] ** y afirma que MANCERA reporta la misma cifra identificada en la tabla 48 del DPR.



49615

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

claridad, de manera satisfactoria, durante la investigación ni en las manifestaciones al DPR. Por lo tanto, es falso lo que señalan TUM, SEPZ y MAGR con respecto a que hay evidencia de que los DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS ADICIONALES no existen.

Como lo señalan los emplazados, la AI consideró la mecánica de otorgamiento de DESCUENTOS ORDINARIOS, mediante la cual los descuentos del mes corriente son determinados considerando la facturación del mes anterior.

Como se demuestra en la Tabla 48 del DPR, la AI consideró al DESCUENTO EXTRAORDINARIO separado del DESCUENTO RESIDUAL, por lo que se entiende que ambos no son lo mismo. Sin embargo, no explican a qué se deben las enormes diferencias entre el «Descuento Aplicable» y el «Descuento Aplicado» que se observan, en particular, para los ACCIONISTAS durante el periodo analizado, sino que se limita a señalar que es “solo una diferencia numérica”. En el reporte de MANCERA, tampoco se ofrece evidencia suficiente que acredite o justifique las diferencias encontradas.

Por otro lado, para MANCERA tampoco fue posible “cuadrar” el resultado de los DESCUENTOS ORDINARIOS obtenidos por TUM (procedimiento 3.5 del Anexo 9). Lo cierto es que el DESCUENTO RESIDUAL no proviene de una mala interpretación de la AI, sino de la poca claridad y alta discrecionalidad con la cual TUM factura y otorga descuentos que probablemente no son compensados, lo anterior redunda eventualmente en diferencias entre los “Descuentos Aplicables” y los “Descuentos Aplicados”, exclusivamente, para los beneficiarios del DESCUENTO RESIDUAL.

Se observa que MANCERA obtuvo los mismos resultados que la AI en la estimación de diferencias e inconsistencias entre el «Descuento Aplicado», los descuentos anticipados o retroactivos representados por la columna «Anticipo y/o Retro» y los «Descuentos aplicables». Como se observa en el reporte MANCERA, la AI obtuvo cifras muy cercanas a lo reportado por dicho despacho. Inclusive, las cifras que muestra MANCERA para el caso de [REDACTED] también fueron negativas.

MANCERA obtuvo también un saldo positivo respecto de la columna «Anticipo y/o Retro», lo cual significa que TUM aplicó prospectivamente adelantos de descuentos que eventualmente no fueron compensados con el movimiento contrario. Parte de este saldo en la columna de «Anticipo y/o Retro» se explica por el otorgamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, pero el resto no. Los ACCIONISTAS obtuvieron remanentes en dicha columna «Anticipo y/o Retro» (o Total retro/anticipo como se muestra en el Anexo 4.1.1). Este exceso, en parte, no pudo explicarse por el otorgamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO. A dicho remanente, le llamamos DESCUENTO RESIDUAL, pues

Eliminado: una palabra

consiste en anticipos de descuentos, no compensados, pero que de cualquier modo funcionaron como transferencias en favor de dichos ACCIONISTAS.²²⁸

Por otra parte, la AI agrupó a ****** por lo que resulta falso el argumento de que la AI no consideró a los demás USUARIOS de este grupo corporativo.²²⁹

Asimismo, las explicaciones que ofrecen TUM, SEPZ y MAGR a través del reporte de MANCERA, respecto de las diferencias entre el concepto «Total retro/anticipo» y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO no desvirtúan lo acreditado en el DPR, máxime que no presentan elementos de convicción que sustenten dichas afirmaciones.

En cuanto a la manifestación según la cual ningún descuento puede aplicarse sin autorización del CONSEJO, se indica que las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR no desvirtúan lo acreditado en el DPR, porque sus argumentos van encaminados a que esta AI tenga que pronunciarse sobre el incumplimiento o violación a las disposiciones del Estatuto Orgánico de TUM, lo cual no resulta necesario para acreditar si se cometió la conducta.

En este sentido, si bien es cierto que los Estatutos Sociales de TUM señalan que ***** ello no implica que en los hechos necesariamente se cumpla con una disposición que se encuentra en el plano del “deber ser”, por lo que tratar de argumentar que no se realizó una conducta (plano fáctico o del “ser”) porque esté prohibida por una disposición estatutaria (plano normativo o del “deber ser”) resulta en un argumento falaz.

Por otra parte, MANCERA observó que existieron discrepancias respecto de la estimación de algunos de los descuentos que conforman la política comercial de TUM. Asimismo, se encontraron diferencias sustanciales entre la columna “Total Anticipo/Retro” y la columna DESCUENTO EXTRAORDINARIO. En ambos casos, las diferencias encontradas por MANCERA fueron solventadas, supuestamente, a partir de las aclaraciones realizadas por TUM. No obstante, las explicaciones ofrecidas por TUM no ofrecen mayor evidencia documental que las sustenten y tampoco MANCERA ofrece evidencia al respecto.

Además, en caso de que los descuentos anticipados, finalmente, se hubieran compensado o se trataran de errores en la contabilidad, se debió de acompañar evidencia que mostrara las correcciones realizadas, como notas de crédito que aclararan todos los movimientos contables que dieron origen al DESCUENTO RESIDUAL por cada uno de los beneficiarios; considerando que el reporte de MANCERA fue realizado “ex profeso” para contestar las aseveraciones realizadas en el DPR.

²²⁸ La AI señala que ****** obtuvo casi la mitad del DESCUENTO RESIDUAL y presenta en la página 162 de la Vista TUM una tabla denominada “Tabla 4.1.1: Resultados del proceso 4.1 del Reporte Mancera”.

²²⁹ La AI señala que el reporte MANCERA coincidió con los resultados obtenidos por la AI, en ambos casos.

En cuanto al argumento según el cual la AI debió allegarse de mayores pruebas para esclarecer la verdad, el mismo criterio invocado por TUM, MAGR y SEPZ refiere que los principios generales penales sustantivos no deben trasladarse de forma automática al derecho administrativo sancionador. Adicionalmente, ante las evidentes inconsistencias de la información proporcionada por TUM, la AI requirió a TUM diversas aclaraciones sobre la información proporcionada, por lo que al analizar la totalidad de la información presentada por TUM, la AI detectó inconsistencias que no pudieron ser aclaradas con la información proporcionada por TUM.

Los emplazados argumentan la inexistencia del DESCUENTO ADICIONAL. No obstante, dicho descuento fue definido en el DPR como “[...] *la diferencia que existió entre el descuento que efectivamente fue otorgado a un USUARIO y el DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma del DESCUENTO EXTRAORDINARIO más el DESCUENTO RESIDUAL*”.

En este sentido, el DESCUENTO ADICIONAL no se imputó en el DPR como un descuento diferente, sino que fue el nombre que se le otorgó a la suma de diversos descuentos que son distintos al DESCUENTO ORDINARIO. Por lo anterior, el DESCUENTO ADICIONAL no se analiza en la presente resolución como un descuento independiente a los descuentos imputados.

Por otro lado, es **fundado** el argumento de los emplazados relativo a que la AI no prueba la existencia del DESCUENTO RESIDUAL, tal como se desprende del siguiente análisis.

La AI deriva la existencia del DESCUENTO RESIDUAL de la información presentada por TUM mediante el EXCEL.²³⁰ Sin embargo, el DPR no refiere ningún otro indicio en el EXPEDIENTE (como documentos o declaraciones de los emplazados o de terceros) que sustente la existencia del DESCUENTO RESIDUAL.

Los emplazados indican en la CONTESTACIÓN TUM, en la CONTESTACIÓN SEPZ y en la CONTESTACIÓN MAGR que el DESCUENTO RESIDUAL no existe y señalan que **“el denominado ‘Descuento Residual’ [...] no son descuentos, sino que es una conclusión falsa de la AI ante la falta de entendimiento y claridad respecto al funcionamiento de la estrategia de precios de TUM [...] El punto de partida de esta falta de entendimiento es que la AI en el numeral 8.3 del [REQUERIMIENTO] y sus múltiples retiramientos requirió a TUM el desglose mensual de 2010 a 2015 de la aplicación de cada uno de los descuentos otorgados, incluyendo el monto facturado por cada Usuario. [...] conforme a la política de facturación y otorgamiento de descuentos de TUM, la aplicación de descuentos a Usuarios no necesariamente coincide con el mes en el que se realizan los consumos de reportes de crédito (debido al cumplimiento de ciertas condicionantes, como es el caso del pago oportuno o solicitudes de aplicación anticipada de descuentos por parte de Usuarios), no fue posible para la AI cuadrar los descuentos aplicados (facturados) a los Usuarios con los montos de descuentos aplicables que fueron el resultado de un ejercicio que abajo se indica. Por lo anterior, TUM explicó a la AI los distintos factores que podrían ocasionar estas discrepancias como se desprende de la**

²³⁰ En la VISTA TUM la AI señala que el DESCUENTO RESIDUAL se dedujo a partir del análisis de la información contable proporcionada por TUM. Como se indica en el DPR, la información que sustenta el análisis sobre la existencia del DESCUENTO RESIDUAL corresponde a un documento en Excel incluido en el disco compacto que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.

página 205 y 206 del DPR [...].²³¹ Adicionalmente, TUM, SEPZ y MAGR señalan que la AI omitió otorgar valor probatorio a las diversas explicaciones y manifestaciones realizadas por TUM durante el periodo de investigación.²³²

Por lo anterior, este PLENO analizó la información presentada por TUM en el EXCEL a la luz de lo señalado por TUM, SEPZ y MAGR en las CONTESTACIONES TUM, SEPZ y MAGR; así como la información presentada por TUM durante la investigación y a través de la CONTESTACIÓN TUM, a efecto de corroborar si de los datos del EXCEL podía desprenderse la existencia del DESCUENTO RESIDUAL o si, como indicaban los emplazados, las diversas inconsistencias encontradas por la AI en realidad se derivaban de una interpretación incorrecta de los datos del EXCEL.

Durante la investigación TUM señaló lo siguiente respecto de la aplicación de los descuentos y la información que se advierte en el EXCEL:

- A) Anexos 7.3 y 7.4 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince.²³³ En dichos anexos TUM explicó, entre otras cuestiones, que "[...]"
respectivamente.
- B) Anexo 7.3 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en OFICIALÍA el ocho de septiembre de dos mil quince.²³⁵ En dicho anexo TUM explicó, entre otras cuestiones, que una nota de crédito es el "[...]"
- C) Anexo 8.3 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en OFICIALÍA el veintinueve de octubre de dos mil quince.²³⁶ En dicho anexo TUM explicó, entre otras cuestiones, que "[...]"

²³¹ Página 146 de la CONTESTACIÓN TUM, página 202 de la CONTESTACIÓN SEPZ y página 200 de la CONTESTACIÓN MAGR.

²³² Véanse las manifestaciones incluidas en la página 158 de la CONTESTACIÓN TUM, así como en la página 214 de la CONTESTACIÓN SEPZ y en la página 212 de la CONTESTACIÓN MAGR.

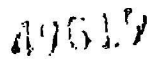
²³³ El escrito de desahogo presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince, obra a folios 6137 a 6141, el Anexo 7.3 de dicho escrito obra a folios 6175 a 6183 y el Anexo 7.4 del reiterado escrito obra a folios 6184 a 6185.

²³⁴ Ello es consistente con lo observado en el Anexo B del CONTRATO MARCO TUM (página 33 de dicho contrato), en el cual se indica que: "[...]"

En este sentido, el mismo CONTRATO MARCO TUM prevé la posibilidad de diferir en el tiempo la entrega del DO. Folios 5509 a 5553.

²³⁵ El escrito de desahogo presentado en la OFICIALÍA el ocho de septiembre de dos mil quince, obra a folios 16479 a 16489 y el Anexo 7.3 de dicho escrito obra a folios 16718 a 16724.

²³⁶ El escrito de desahogo presentado en la OFICIALÍA el veintinueve de octubre de dos mil quince, obra a folios 22720 a 22725 y el Anexo 8.3 de dicho escrito obra a folios 22735 a 22738.



Eliminado: tres párrafos, trece renglones, ochenta palabras

1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
 6. [REDACTED]
 7. [REDACTED]
 8. [REDACTED]
 9. [REDACTED]
 10. [REDACTED]
 11. [REDACTED]
 12. [REDACTED]
 13. [REDACTED]
 14. [REDACTED]
 15. [REDACTED]
 16. [REDACTED]
 17. [REDACTED]
 18. [REDACTED]
 19. [REDACTED]
 20. [REDACTED]
 21. [REDACTED]
 22. [REDACTED]
 23. [REDACTED]
 24. [REDACTED]
 25. [REDACTED]
 26. [REDACTED]
 27. [REDACTED]
 28. [REDACTED]
 29. [REDACTED]
 30. [REDACTED]
 31. [REDACTED]
 32. [REDACTED]
 33. [REDACTED]
 34. [REDACTED]
 35. [REDACTED]
 36. [REDACTED]
 37. [REDACTED]
 38. [REDACTED]
 39. [REDACTED]
 40. [REDACTED]
 41. [REDACTED]
 42. [REDACTED]
 43. [REDACTED]
 44. [REDACTED]
 45. [REDACTED]
 46. [REDACTED]
 47. [REDACTED]
 48. [REDACTED]
 49. [REDACTED]
 50. [REDACTED]
 51. [REDACTED]
 52. [REDACTED]
 53. [REDACTED]
 54. [REDACTED]
 55. [REDACTED]
 56. [REDACTED]
 57. [REDACTED]
 58. [REDACTED]
 59. [REDACTED]
 60. [REDACTED]
 61. [REDACTED]
 62. [REDACTED]
 63. [REDACTED]
 64. [REDACTED]
 65. [REDACTED]
 66. [REDACTED]
 67. [REDACTED]
 68. [REDACTED]
 69. [REDACTED]
 70. [REDACTED]
 71. [REDACTED]
 72. [REDACTED]
 73. [REDACTED]
 74. [REDACTED]
 75. [REDACTED]
 76. [REDACTED]
 77. [REDACTED]
 78. [REDACTED]
 79. [REDACTED]
 80. [REDACTED]
 81. [REDACTED]
 82. [REDACTED]
 83. [REDACTED]
 84. [REDACTED]
 85. [REDACTED]
 86. [REDACTED]
 87. [REDACTED]
 88. [REDACTED]
 89. [REDACTED]
 90. [REDACTED]
 91. [REDACTED]
 92. [REDACTED]
 93. [REDACTED]
 94. [REDACTED]
 95. [REDACTED]
 96. [REDACTED]
 97. [REDACTED]
 98. [REDACTED]
 99. [REDACTED]
 100. [REDACTED]

Folio 27556.

**

**

[énfasis añadido]”.

Asimismo, en las CONTESTACIONES TUM, SEPZ y MAGR, dichos emplazados refirieron que:

- Los DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS ADICIONALES, son los DESCUENTOS ORDINARIOS y los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS aplicados de tiempo en tiempo o a un grupo de USUARIOS, de conformidad con la mecánica de descuentos, prácticas de negocios y políticas de TUM.
- La forma de aplicación de TUM es a través de un sistema de cuenta corriente. Los descuentos se aplican hasta el mes siguiente en el que fueron devengados o de forma anticipada en función a los requerimientos de los USUARIOS, mediante la emisión de NOTAS DE CRÉDITO.
- Debido a la cuenta corriente que utiliza TUM, en enero de dos mil diez no se incluyó ningún “Descuento Aplicable” para ningún USUARIO y en el caso de marzo de dos mil quince no se muestran los anticipos de descuentos que se pudieron haber otorgado.
- En la columna denominada “Anticipo y/o Retro” del numeral 8.3 del REQUERIMIENTO, TUM incluyó la información referente a: (i) ajustes derivados de las solicitudes de los USUARIOS; por ejemplo, anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a meses posteriores; y (ii) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO.
- TUM solicitó a su auditor externo independiente, MANCERA, un análisis de la aplicación de descuentos a los USUARIOS durante el período comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil quince. Según los emplazados, del informe de MANCERA se desprende que no fueron observados otro tipo de descuentos distintos a los DESCUENTOS ORDINARIOS, DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y el DESCUENTO DEL 5.8%.

En atención a lo señalado por TUM tanto en la investigación como en el PSFJ, este PLENO analizó los datos presentados en el EXCEL para verificar la existencia del DESCUENTO RESIDUAL, lo anterior considerando adicionalmente que ese es el único elemento de convicción referido en el DPR para sustentar la existencia del DESCUENTO RESIDUAL.

El objetivo del ejercicio consistió en replicar los montos de DESCUENTO ORDINARIO que debían otorgarse a cada ACCIONISTA y posteriormente compararlos con los descuentos que efectivamente se otorgaron. Para ello, se siguió la siguiente metodología:

- Se eliminaron los registros correspondientes al primer y último mes que se advertía en el EXCEL (enero de dos mil diez y marzo de dos mil quince), toda vez que, de conformidad con lo señalado por los emplazados, los descuentos se generan en un mes, pero se aplican o ajustan al siguiente, por lo que no se contaba con información para saldar los montos correspondientes a dichos meses.
- Se calculó el DESCUENTO ORDINARIO que le correspondía en cada mes a cada ACCIONISTA y se comparó con el aplicado en el mes o meses siguientes.

Eliminado: un renglón, nueve palabras

- Se saldaron los montos que derivaban de descuentos retroactivos. Esto es, DESCUENTOS ORDINARIOS que inicialmente no se otorgaban por alguna razón (señalándose un 0% en el EXCEL o advirtiéndose una celda vacía) pero que posteriormente se advierte que se otorgaron.²³⁹
- Finalmente, al monto de descuento estimado se sumó el monto del descuento extraordinario correspondiente a cada ACCIONISTA y se comparó con el monto de descuento otorgado.

Al realizar el ejercicio anterior, se observó que: (i) diversos montos se saldaban al comparar el descuento generado en un mes con el otorgado en el mes o en los meses siguientes;²⁴⁰ (ii) se otorgaban diversos anticipos que posteriormente se reflejaban como notas de crédito negativas; y (iii) existían montos de descuentos retroactivos, es decir, que no se otorgaban inicialmente, pero que después se otorgaban al ACCIONISTA. Por lo tanto, se advirtió que, tal como lo señalaron TUM, SEPZ y MAGR diversos montos considerados por la AI como DESCUENTO RESIDUAL eran en realidad montos que le correspondían al ACCIONISTA por concepto de DESCUENTO ORDINARIO pero que eran aplicados con posterioridad a que se generaban.

A manera de ejemplo, se muestra la información proporcionada en el EXCEL respecto de los descuentos otorgados a [REDACTED] B [REDACTED] entre agosto de dos mil catorce y enero de dos mil quince.²⁴¹

Eliminado: un renglón, una palabra

²³⁹ Ello se considera consistente con los diversos elementos de convicción que se integraron al EXPEDIENTE durante la investigación, tales como la manifestación de TUM incluida en el escrito de catorce de abril de dos mil dieciséis (misma que se transcribió previamente en este apartado), las declaraciones realizadas por el Director Comercial y el Gerente Comercial de TUM (también transcritas previamente) e incluso lo establecido en el CONTRATO MARCO TUM respecto a la posibilidad de diferir la entrega del DESCUENTO ORDINARIO a través de notas de crédito.

²⁴⁰ En este sentido, contrario a lo manifestado por la AI en la VISTA TUM, y como se observa en los cuadros que se presentan a continuación, la mayor parte de las cantidades que supuestamente integran el DESCUENTO RESIDUAL sí se saldan o compensan en el mismo EXCEL.

²⁴¹

B

B

B

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM en el EXCEL que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.

Como se observa, las cantidades que aparecen en la columna "Anticipo y/o retro" de la tabla anterior, reflejan los montos que le correspondían a B por concepto de DESCUENTO ORDINARIO en meses anteriores, pero que no se le habían otorgado. En este sentido, dichas cifras (correspondientes a B) no pueden ser consideradas como un nuevo descuento, sino que, como lo señalan TUM, SEPZ y MAGR, es el DESCUENTO ORDINARIO aplicado de tiempo en tiempo.

Lo anterior se repite en múltiples ocasiones al analizar los datos incluidos en el EXCEL que corresponden al periodo entre febrero de dos mil diez a abril de dos mil quince y para todos los ACCIONISTAS.

En este sentido, al calcular el DESCUENTO ORDINARIO que le corresponde a cada ACCIONISTA y compararlo con el descuento que efectivamente se le otorgó, se advierte una reducción considerable en los montos no saldados que la AI consideró como DESCUENTO RESIDUAL. Es decir, únicamente las cifras reflejadas en la columna "Montos no saldados después de analizar los datos con la información proporcionada por TUM" no pueden explicarse por el DESCUENTO ORDINARIO, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% que le correspondía a cada ACCIONISTA:

B

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM en el EXCEL que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.

Eliminado: dos párrafos, once palabras

El monto del descuento aplicado que no pudo saldarse respecto del DESCUENTO ORDINARIO, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% que debía aplicarse a cada ACCIONISTA es menor al B en cinco de los seis casos y cercano a B para el caso de B

B

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM en el EXCEL que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.

Ahora bien, únicamente se observa un monto no saldado en favor de tres de los ACCIONISTAS: B y B. No obstante, en el EXPEDIENTE no existen elementos de convicción suficientes para acreditar que estos montos no saldados son un descuento distinto al DESCUENTO ORDINARIO, al DESCUENTO EXTRAORDINARIO y al DESCUENTO DEL 5.8% aplicado de tiempo en tiempo, siendo que dichos montos son consistentes con la evidencia que obra dentro del EXPEDIENTE y las manifestaciones realizadas por los emplazados respecto de la existencia de anticipos, descuentos retroactivos y pre-facturas.

Es decir, si bien con los datos que obran en el EXCEL no es posible saldar por completo los montos otorgados a los tres ACCIONISTAS referidos, la considerable disminución de los montos no saldados con respecto a lo que la AI identificó como DESCUENTO RESIDUAL, así como la dinámica comercial de TUM, no permiten concluir que dichos montos no saldados corresponden a un descuento distinto, máxime que las manifestaciones sobre la forma en que funciona la dinámica comercial de TUM que se realizaron durante la investigación y el PSFJ resultan consistentes con la información que se desprende de la misma cuenta corriente incluida en el EXCEL.

Adicionalmente, al considerar el precio efectivamente pagado por los ACCIONISTAS, se advirtió que, si se considera el DESCUENTO RESIDUAL como un descuento adicional otorgado, se concluiría que dichos ACCIONISTAS recibieron un DESCUENTO ORDINARIO menor que aquel que les correspondía en términos del CONTRATO MARCO TUM, lo cual carece de sentido.

Así, si bien el PJF ha permitido que las prácticas monopólicas se acrediten a través de pruebas indiciarias, ello únicamente es posible cuando del cúmulo de indicios se advierte que no existe ninguna otra explicación más que la conducta ilícita.²⁴² Lo anterior, no se da en el presente caso.

²⁴² Sirven de sustento los siguientes criterios judiciales: (i) "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran

Esto es así, toda vez que: (a) no existen indicios adicionales al EXCEL de los que pueda desprenderse la existencia del DESCUENTO RESIDUAL; y (b) la evidencia que obra dentro del EXPEDIENTE sobre la dinámica comercial de TUM (en particular, el EXCEL y las manifestaciones realizadas por TUM durante la investigación y el PSJF) sí permite explicar los montos no saldados, sin que de dicha evidencia se desprendan indicios adicionales sobre la existencia del denominado DESCUENTO RESIDUAL.

No pasa desapercibido para esta autoridad lo señalado por la AI respecto de que el dictamen de MANCERA carece de alcance y valor probatorio. No obstante, dicho dictamen es un indicio que se adminicula al análisis del resto de la información que obra en el EXPEDIENTE (en

plenamente acreditados para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una 'presunción abstracta'. Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una 'presunción concreta', la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una 'presunción abstracta' se convierte en 'concreta' -ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la fuerza probatoria de la 'presunción abstracta', pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica". [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013; Tomo 2; Pág. 1055. 1a. CCLXXXVII/2013 (10a.), Registro No. 2 004 754; y (ii) "PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como 'prueba presuncional', derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero si los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero si resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurren una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad". [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pág. 2982. I.Io.P. J/19. Registro No. 166 315.



19623

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

particular, el EXCEL, la información presentada por TUM y las declaraciones de los directivos de TUM) realizado por este PLENO.

Asimismo, la AI argumenta que TUM no refuta la imputación relativa a que adelantaba descuentos a un grupo reducido de USUARIOS; no obstante, el adelanto de descuentos no puede ser considerado como un descuento adicional cuando éste se compensa en meses posteriores, lo que, como se advierte de la explicación realizada anteriormente, sucede en la mayoría de los casos. Es decir, la poca transparencia que refiere la AI en el otorgamiento de descuentos no sustenta la existencia de un descuento diferente.

Adicionalmente, si bien la entrega anticipada de un descuento en algunos casos puede resultar anticompetitiva, en el presente caso el DPR no acredita que los montos reales no saldados correspondan al otorgamiento de anticipos otorgados de forma anticompetitiva en favor de los ACCIONISTAS (entre otras razones, porque la AI no explica por qué los ACCIONISTAS habrían instrumentado una política que prácticamente sólo habría beneficiado a [REDACTED] B). En lugar de ello, la AI imputó la existencia de un descuento distinto al DO (es decir, consideró el DESCUENTO RESIDUAL como un descuento en sí mismo), situación que no es consistente con la evidencia que obra en el expediente, ya que en realidad lo que se observa es la mecánica de aplicación del DO a lo largo del tiempo.

Respecto de la manifestación de la AI relativa a que MANCERA coincide con diversos resultados obtenidos por la AI, si bien es correcto que existen las discrepancias que señala la AI entre las columnas de "Anticipo y/o Retro" y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO otorgado, estas diferencias se explican en su mayoría por la manera en que se presentó la información en el EXCEL. En realidad, al calcular el DESCUENTO ORDINARIO y EL DESCUENTO EXTRAORDINARIO que le correspondía a cada ACCIONISTA y compararlo con la columna de "Descuento aplicado", las cantidades que se observan son mucho menores a las identificadas por la AI como DESCUENTO RESIDUAL.

Ahora bien, respecto de los montos que se observan en la columna "Montos no saldados después de analizar los datos con la información proporcionada por TUM" de la tabla referida anteriormente, es correcto lo señalado por la AI respecto de que existen algunas discrepancias entre el descuento que les correspondía a tres de los ACCIONISTAS y el descuento que se les otorgó. No obstante, no existen elementos suficientes para considerar que dichas discrepancias reflejan la existencia de un descuento distinto al DO, por las razones previamente expuestas en el presente apartado.

En este sentido, como se señaló anteriormente es fundado el argumento de los empleados relativo a que la AI no prueba la existencia del DESCUENTO RESIDUAL, ya que no existen elementos de convicción suficientes en el EXPEDIENTE que sustenten su existencia.

B. El DESCUENTOS POR LEALTAD es el mismo que el DESCUENTO DEL 5.8%.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:²⁴³

²⁴³ Página 141 CONTESTACIÓN TUM, página 197 de la CONTESTACIÓN SEPZ y página 195 de la CONTESTACIÓN MAGR.

Se confirma la presunción de la AI ya que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata del mismo descuento que en las ACTAS se identifica como "programa piloto", "lealtad", "retención" y "exclusividad". El que se aluda a dicho descuento de distintas formas en las ACTAS no implica que se trate de un descuento distinto. El cambio de terminología se debe principalmente a las distintas menciones que se hicieron respecto de este descuento. En conclusión, a lo que la AI denomina DESCUENTO POR LEALTAD, se trata en realidad y como bien presume la AI en las páginas 199, 212 y 213 del DPR, del DESCUENTO DEL 5.8%.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁴⁴

Se confirma que TUM proporcionó durante la investigación información inexacta o incompleta. Lo señalado por TUM, confirma que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata en realidad de lo que los ACCIONISTAS en el CONSEJO nombraron DESCUENTO POR LEALTAD.

De las manifestaciones realizadas por la AI en el DPR y en la VISTA TUM, y de conformidad con lo señalado por TUM, MAGR y SEPZ en sus contestaciones al DPR, se advierte que ambas partes coinciden en que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata en realidad del DESCUENTO POR LEALTAD, por lo que el DESCUENTO POR LEALTAD no será considerado como un descuento independiente o distinto al DESCUENTO DE 5.8% por esta autoridad.

II. El DESCUENTO EXTRAORDINARIO no estuvo orientado para favorecer principalmente a los ACCIONISTAS.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:²⁴⁵

Las manifestaciones realizadas por la AI respecto al objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO son falsas e infundadas. El DESCUENTO EXTRAORDINARIO fue creado por TUM para repartir los excedentes de las utilidades o efectivo generado en el año en cuestión entre los USUARIOS que tuvieran un volumen determinado de consumo.

De haber buscado TUM beneficiar a los ACCIONISTAS no hubiera implementado un DESCUENTO EXTRAORDINARIO, sino que hubiera decretado y pagado un dividendo a éstos y a TU LLC (quien también recibió el DESCUENTO EXTRAORDINARIO), beneficiándolos en mayor medida.

Conforme a los estatutos sociales de TUM, todo precio y descuento que TUM implemente debe ser aprobado por la Asamblea de Accionistas o el CONSEJO, contando con el voto afirmativo de los accionistas de la Serie "B". Así, cuando se decide proponer e implementar la aplicación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, se consideró también a TU LLC como beneficiario de este y así lograr la aprobación de tal descuento con el objeto de otorgar mayores

²⁴⁴ Página 140 de la VISTA TUM.

²⁴⁵ Páginas 134 a 140 y 184 de la CONTESTACIÓN TUM, páginas 190 a 196 y 240 de la CONTESTACIÓN SEPZ y páginas 188 a 194 y 238 de la CONTESTACIÓN MAGR.

beneficios a los USUARIOS. Es importante mencionar que justamente porque TU LLC no es USUARIO, en la información que se proporcionó a la AI, no se consideró el DESCUENTO EXTRAORDINARIO otorgado a TU LLC, como un descuento, toda vez que dicho DESCUENTO EXTRAORDINARIO en realidad no es un descuento sino [REDACTED] B [REDACTED] que se realiza en los términos establecidos en el contrato [REDACTED] B [REDACTED]

El Descuento Extraordinario es parte de los mecanismos mediante los cuales TUM incentiva a los USUARIOS (sean accionistas o no) a proveer información para que TUM pueda prestar servicios a todos los USUARIOS, pero no son los únicos, tan es así que por ello el DESCUENTO EXTRAORDINARIO también benefició a otros USUARIOS.

Complementario a esto, la implementación de los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS no puede ser atribuido en su totalidad a los RC ya que, en primer lugar, se otorgan sujetos a que la facturación total de los USUARIOS, no sólo de RC, rebase cierto umbral y, en segundo lugar, los descuentos se aplican a la facturación total que incluye otros productos. Una importante proporción de los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS fue otorgada con base en la facturación de otros productos, tanto de USUARIOS-ACCIONISTAS, como los no accionistas.

Adicionalmente, contrario a lo que manifiesta la AI en la página 214 del DPR, el hecho de que en las ACTAS en donde se aprueba el otorgamiento de los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS se clasifique entre [REDACTED] B [REDACTED], no implica que el objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO sea beneficiar exclusivamente a los ACCIONISTAS, sino que es una forma de presentar la información de forma didáctica a los miembros del CONSEJO, propia de una presentación a un consejo de administración, sin que por ello pueda deducirse cualquier conducta discriminatoria.

En relación con el requisito de procedencia, el monto igual o mayor a [REDACTED] B [REDACTED] resultó aplicable a los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS otorgados en dos mil doce y dos mil trece, siendo que en dos mil diez y dos mil once el monto aplicable fue de [REDACTED] B [REDACTED].²⁴⁷

Asimismo, el establecimiento del umbral estandarizado para acceder al DESCUENTO EXTRAORDINARIO fue establecido con la intención de favorecer a la mayor parte de la demanda, pero también considerando un volumen aceptable de consumo que implique el otorgamiento de un beneficio adicional. Este tipo de

²⁴⁶ TUM, SEPZ y MAGR señalaron que lo anterior consta en la cláusula [REDACTED] B [REDACTED].

²⁴⁷ TUM, SEPZ y MAGR señalaron que si bien en la contestación al requerimiento de información del numeral 8.3 del OFICIO COFECE-AI-DGIM-2015-029 se establece por error la nota relativa a que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO asciende a [REDACTED] B [REDACTED], las cantidades contenidas en dicho numeral respecto al DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el monto de facturación son consistentes con lo manifestado.

umbrales es el mismo para todos e incluye una proporción apreciable de facturación de los USUARIOS, por lo que no debe considerarse como anticompetitivo.

Las manifestaciones realizadas por la AI respecto a que las diferencias entre los beneficiarios del DESCUENTO EXTRAORDINARIO son para beneficiar a los ACCIONISTAS frente a los usuarios no accionistas, son falsas ya que entre los mismos ACCIONISTAS existen marcadas diferencias, por lo que dichas diferencias no son para favorecer a los ACCIONISTAS, sino derivadas del monto de facturación en sí.

Como se ha manifestado, los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y en general toda la política de descuentos crecientes o precios decrecientes establecida por TUM es un reflejo de las características del mercado que reflejan una racionalidad adecuada y no una supuesta intencionalidad de favorecer en forma discriminatoria a los otorgantes de crédito que realicen más consultas y alcancen una mayor facturación, tal y como se ha acreditado con el DICTAMEN RG.

Por lo tanto, los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS no constituyen una PMR en los términos de la LFCE.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁴⁸

Respecto de la supuesta falsedad del objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, la AI considera que se trata de argumentos gratuitos que no dan respuesta a los elementos con base en los cuales el DPR concluye lo señalado sobre el Rebate Extraordinario. Lo anterior, dado que TUM no desvirtúa que existieron dos versiones en el EXPEDIENTE de ese descuento o reparto de utilidades, por lo que, en primera instancia, TUM habría proporcionado información falsa o por lo menos incompleta a la AI.

TUM tampoco desconoce el mecanismo utilizado por el Consejo en su asignación, consistente en [asignar] determinado porcentaje en función de la calidad del USUARIO accionista o no. Tampoco desconoce que fue un reparto de utilidades asignado de forma discrecional, incluyendo a TU LLC, el cual no es USUARIO. Mucho menos brinda justificación respecto del umbral establecido para que los Usuarios accedieran al descuento [REDACTED] **

Como se expuso en el DPR, el reparto de utilidades que significó la asignación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO comprendió tres grupos: USUARIOS-ACCIONISTAS, resto de USUARIOS y TU LLC. Efectivamente, como TUM señala, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO se determinó discrecionalmente en el CONSEJO durante los años en que fue otorgado. La AI nunca negó que hubiera beneficiarios que no fueran ACCIONISTAS. Los usuarios no accionistas, grupo mayoritario en número, recibió beneficios sustancialmente menores que los ACCIONISTAS, los cuales aprobaron para ellos mismos el reparto de excedentes, como consta en las ACTAS.

²⁴⁸ Páginas 126 a 139 de la VISTA TUM.



49629

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

El DESCUENTO EXTRAORDINARIO consistió en un reparto de utilidades, cuyo mecanismo de asignación fue determinado por el CONSEJO, el cual determinó un umbral que excluyó a la mayoría de los usuarios y que definió un porcentaje mayor para los ACCIONISTAS (minoría de los Usuarios), uno menor para los USUARIOS que cumplieran con el umbral impuesto y el resto para TU LLC.

Así, los montos otorgados impactaron en la facturación de los USUARIOS de manera diferenciada, incrementando la discrepancia en los precios obtenidos para cada uno de ellos.

El DESCUENTO EXTRAORDINARIO incorporó como beneficiario a TU LLC, lo cual nunca fue aclarado por TUM durante la investigación. Ello es muestra de lo poco clara que es la conducción de su política de descuentos y comercial y que durante la investigación se le proporcionó a la AI información inconsistente, incompleta e inexacta.

Incorporar a TU LLC como beneficiario del DESCUENTO EXTRAORDINARIO muestra que los objetivos del reparto ~~nada tienen que ver~~ con recompensar a los USUARIOS por la entrega de la BD ~~o incentivar el consumo de RC de PF.~~

TUM se contradice pues primero señala que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO no es un descuento sino una contraprestación ofrecida a TU LLC, y luego, señala que es parte de los mecanismos para incentivar a los USUARIOS a proveer información.

La racionalidad de la política comercial y de descuentos de TUM, en particular del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es contradictoria. El DESCUENTO EXTRAORDINARIO consistió en un reparto de utilidades selectivo entre tres grupos, su otorgamiento no se determinó con base en criterios de ~~supuestos p~~ como beneficiario a TU LLC (que no es USUARIO) para obtener su aprobación.

No se negó que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO hubiera beneficiado al resto de USUARIOS. La cuestión es que benefició en desproporción a los ACCIONISTAS.

Estas anomalías descritas en el DPR que contemplan incluir beneficiarios que no son USUARIOS, establecer un umbral arbitrario para excluir a los USUARIOS con consumos menores y el trato desproporcionado en favor de los ACCIONISTAS, muestran la discrecionalidad con la cual TUM condujo su política comercial y de descuentos.

El Descuento Extraordinario estableció un umbral arbitrario para restringir el acceso de aquellos Usuarios que facturaran menos de ~~(dependiendo del año) en los primeros~~, como se manifestó en el DPR. Además, TUM no explicó en ~~al DPR~~, ni durante la investigación, cómo determinó dicho umbral, ni cuáles fueron los criterios para modificarlo posteriormente.

Es indudable que el otorgamiento discrecional del DESCUENTO EXTRAORDINARIO impactó los precios de los RC de PF pagados por los USUARIOS.

Eliminado: veintisiete palabras

Por otro lado, es falso que la AI haya sostenido que el objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO haya sido beneficiar exclusivamente a ACCIONISTAS, sino que en el DPR se señaló que los descuentos más altos fueron para los ACCIONISTAS, pero se incluyeron también los porcentajes aplicables a los accionistas tecnológicos y clientes no accionistas, lo que permite presumir su carácter discriminatorio.

TUM señaló que la mecánica de distribución del DESCUENTO EXTRAORDINARIO buscaría mantener la proporcionalidad entre los ACCIONISTAS, el resto de los accionistas y los CLIENTES de la sociedad.

Durante la exposición al CONSEJO, siempre se distinguió entre los beneficios destinados a repartir entre los ACCIONISTAS; TU LLC; y, finalmente el resto de los clientes (USUARIOS). Durante el dos mil doce, la distribución se presentó de la siguiente forma:

B

Durante el dos mil trece, así fue la asignación:

B

Adicionalmente TUM nunca explicó cómo se determinaron los porcentajes asignados entre los distintos beneficiarios, ni tampoco explicó si se determinaron primero estos porcentajes y luego la distribución por CLIENTE o ACCIONISTA, o en cambio si estos porcentajes fueron el resultado de aplicar el descuento por CLIENTE o ACCIONISTA. Por lo anterior, las manifestaciones de TUM no desvirtúan las imputaciones de la AI plasmadas en el DPR.

En el DPR, la AI argumentó que TUM no contaba con un criterio de asignación claro, transparente ni objetivo, y que fuera eficiente en términos económicos. Durante la investigación, TUM nunca explicó los cuestionamientos de la AI sobre cómo se determinaron los porcentajes otorgados entre los beneficiarios.

En este sentido, no se desvirtúa el carácter discriminatorio del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, pues no se aclara cómo TUM determinó el umbral de asignación, el cual privó a la gran mayoría de los USUARIOS de acceder a ese descuento (únicamente alrededor del diez por ciento de los USUARIOS accedió al DESCUENTO EXTRAORDINARIO), lo cual TUM no controvierte.

Tabla 45. USUARIOS que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO.

Eliminado: dos párrafos

AÑO	USUARIOS que consumieron algún producto de TUM	USUARIOS que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO	% respecto del total de USUARIOS
2010	B		
2011			
2012			
2013			

Tampoco se impugnó la manifestación realizada por la AI respecto de que los beneficios repartidos entre los ACCIONISTAS, al menos, duplicó lo obtenido por los CLIENTES no accionistas.

Existen diferencias sustanciales entre la aplicación del DESCUENTO ORDINARIO y del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, más allá de que el segundo proviene de un reparto de excedentes de TUM entre sus accionistas y los clientes que no son accionistas. Mientras el DESCUENTO ORDINARIO está establecido en el CONTRATO MARCO, el segundo no. El Descuento Ordinario recompensa la entrega de registros a la base de datos de TUM y el número de consultas a la base de datos de TUM. Por su parte, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO recompensó sólo el volumen de compras a TUM realizado hasta cierta fecha.

El DESCUENTO ORDINARIO se ejecuta al mes siguiente de que se llevó a cabo la compra. Es decir, existe certeza de cuánto recibirá el USUARIO, una vez que determina el número de registros aportados a la base de datos, la actualización puntual y completa de la información, el porcentaje de cuentas actualizadas, la cantidad de RC de PF adquiridos y si el pago se hizo de forma oportuna. Además, no es habitual que el porcentaje del descuento recibido cambie sustancialmente si la cantidad de registros aportados y el nivel de consumo no varía demasiado.

Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO no existe certeza del monto que se recibirá hasta que es percibido; potencialmente, un USUARIO podría recibir el descuento hasta después de siete meses de haber hecho la consulta (de enero hasta agosto). La cifra que recibe cada USUARIO, el cual pertenece a la minoría que supera el umbral arbitrario fijado por TUM, está en función de lo que los USUARIOS-ACCIONISTAS decidan repartir con el resto de los clientes y socio tecnológico. Adicionalmente, lo que recibe un beneficiario está sujeto a lo que el resto de los beneficiarios obtuvieron, es decir, cada uno de los USUARIOS accedió a un monto definido con base en su participación en la facturación total de ese año.

Por otra parte, TUM, SEPZ y MAGR, no refutan que el mecanismo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, premia solamente a sus principales USUARIOS; excluyendo alrededor del B de los USUARIOS.

Eliminado: dieciséis palabras

Esta clase de descuentos, se conocen como «rebates retroactivos» porque cubren todo lo consumido durante el periodo establecido: incluyendo lo consumido antes de alcanzar un umbral y el excedente sobre el umbral. Es posible que los beneficiarios de los «rebates retroactivos» estarían sujetos a lo que se denomina como “*lock-in-effect*”. Si un CLIENTE desea acceder a dicho rebate, tenderá a orientar y concentrar su consumo en una sola fuente. Si decide diversificar, disminuye la posibilidad de que cumpla con la meta y, por ende, no recibirá el descuento. Así, para que le resulte atractivo la opción de diversificar tendría que obtener de su proveedor alternativo, CC, un descuento lo suficientemente grande para cubrir no solo el porcentaje de descuento sobre las unidades adicionales que compre sino también sobre todas las unidades previas que compró entre enero y julio.

Por tanto, un «rebate retroactivo» induce a que los USUARIOS concentren su consumo en un solo proveedor; en lugar de recurrir a múltiples fuentes. Ello, se acentúa debido a la naturaleza contingente de este descuento, que implica incertidumbre respecto de la cantidad total a repartir, y de cuánto podría recibir cada uno de los beneficiarios. Solo se sabe que se mantendrán las proporciones de participación en las compras de RC de PF, y que el porcentaje de descuento a aplicar es mayor para los ACCIONISTAS, por lo que una oferta de descuento de CC tendría que implicar un porcentaje de descuento mayor para un usuario accionista que para un usuario no accionista. Entonces, este tipo de descuentos restringen las alternativas para los USUARIOS generando preferencias “artificiales” por determinados proveedores, disminuyendo la demanda residual de los otros competidores en el mercado.

Asimismo, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO se otorgó después de que el consumo fue realizado. Esto es, fue aprobado por los ACCIONISTAS una vez que supieron cuánto le correspondía a cada uno de ellos.

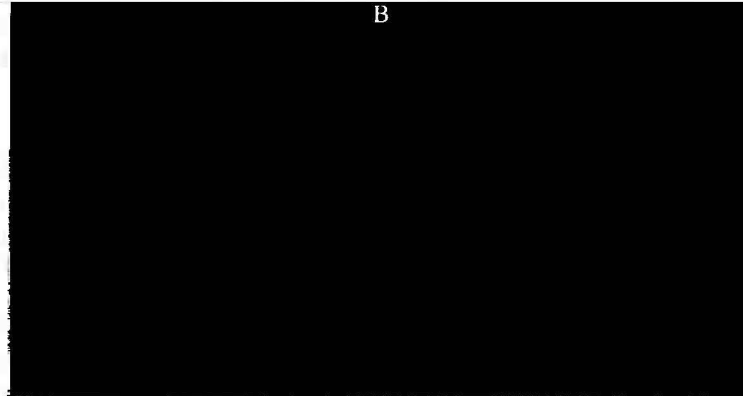
TUM manifiesta que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO favoreció a la mayor parte de la demanda, lo cual es cierto si se considera que los mayores demandantes son los ACCIONISTAS, pues el reparto de excedentes que significó el descuento favoreció principalmente a los ACCIONISTAS. Ellos mismos durante las sesiones del CONSEJO se adjudicaron recursos que, al menos, duplicaron los repartidos entre el resto de los USUARIOS, quienes representan más del **B** de los USUARIOS si añadimos a los que no recibieron ningún beneficio en absoluto.

Así, no se contradice la imputación de que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO generó precios distintos para amplios grupos de USUARIOS. El trato desproporcionado en favor de los ACCIONISTAS tuvo un impacto significativo en la facturación al disminuir sustancialmente los precios que erogaron. La implementación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, junto con el resto de los descuentos analizados, propició que los ACCIONISTAS accedieran a precios significativamente menores que los USUARIOS promedio, como se puede ver en la siguiente tabla.

Eliminado: una palabra

Tabla 60. Porcentaje de reducción en los precios pagados por los USUARIOS (2010-2015).

B



Al respecto, no se refuta la imputación hecha por la AI respecto de que la acción conjunta de los descuentos analizados en el DPR estableció distintos precios o condiciones de venta para diferentes USUARIOS del RC de PF, lo cual constituye el primer elemento del estándar probatorio definido en la página 169 del DPR. Por lo anterior, la mayor parte de los argumentos vertidos por TUM en su defensa tratan de justificar el sentido de implementar dichos descuentos, y no termina por objetar que la política de descuentos genera precios y condiciones de compra distintos entre los USUARIOS.

Eliminado: un párrafo

Esta autoridad considera **fundado** el argumento de TUM, SEPZ y MAGR relativo a que el monto otorgado a TU LLC en realidad no es un descuento.

En este sentido, con independencia de las razones por las cuales TUM otorgó a TU LLC el monto referido como "Rebate Extraordinario", este monto no puede considerarse como parte del análisis que realiza esta autoridad relativo a la acreditación o no de la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, consistente en "[e]l establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes".

Lo anterior ya que TU LLC no es un USUARIO de TUM y, en este sentido, no consume sus productos, por lo que TUM no puede establecerle un precio o condición de venta diferente a la de compradores situados en condiciones equivalentes. Es decir, TU LLC no puede estar sujeto a distintos precios o condiciones de compra puesto que no realiza compra alguna y no paga precio alguno.

Asimismo, es **fundado** el argumento de los emplazados relativo a que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO no estuvo orientado para favorecer principalmente a los ACCIONISTAS, por las razones que se expresan a continuación.

AY
D

Al analizar el comportamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO se observa que este se otorgó fundamentalmente con relación al nivel de facturación de los USUARIOS, sin que se beneficie de manera particular a los ACCIONISTAS como se observa en la siguiente tabla:

**

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM, que obra en el folio 6142 del EXPEDIENTE.

Si bien en la tabla anterior se advierte un mayor porcentaje de asignación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO en favor de los ACCIONISTAS, se observa una correspondencia con respecto al porcentaje de facturación que representan dichos ACCIONISTAS para TUM, advirtiéndose una correlación promedio entre el volumen de facturación y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO que se les otorgó cercano a uno ** en total por el tiempo que duró la aplicación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO).

Adicionalmente, de los datos proporcionados por TUM en la investigación, se desprende que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO no buscó favorecer en términos relativos a los ACCIONISTAS. Al ajustar el DESCUENTO EXTRAORDINARIO para que éste sólo considere la proporción del descuento que corresponde a la facturación de RC de PF con respecto a la facturación total de productos de TUM, se observa que el porcentaje de descuento otorgado con respecto al precio neto después del DESCUENTO ORDINARIO²⁴⁹ a los usuarios ACCIONISTAS es ligeramente menor que el porcentaje que recibieron el resto de los USUARIOS que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO (** - para los ACCIONISTAS y ** para el resto de los USUARIOS)..

En el mismo sentido, del análisis de los datos se desprende que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO por RC de PF promedio ponderado medido en pesos, es menor para los usuarios ACCIONISTAS **) que el descuento en pesos por RC de PF recibido por el resto de los USUARIOS que recibieron el DESCUENTO EXTRAORDINARIO **

Así, los ACCIONISTAS recibieron un DESCUENTO EXTRAORDINARIO en términos relativos (proporcionalmente y en pesos por reporte) por RC de PF menor que el resto de los USUARIOS que recibieron el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, por lo que no se observa que dicho descuento se otorgue principalmente en favor de los ACCIONISTAS. No obstante, no pasa

²⁴⁹ El precio neto después del DESCUENTO ORDINARIO es igual al precio bruto (sin descuentos) del RC de PF menos el DESCUENTO ORDINARIO.

desapercibido lo señalado por la AI respecto de que en las ACTAS siempre se distinguió entre los beneficios destinados a repartir entre los ACCIONISTAS, TU LLC, y el resto de los USUARIOS.

Al respecto, del análisis de la información presentada por TUM durante la investigación y el PSFJ, no se advierte que el otorgamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO haya beneficiado principalmente a los ACCIONISTAS en detrimento del resto de los USUARIOS con quienes aquellos compiten en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, como lo señala el DPR.

Por otro lado, es cierto que en las ACTAS se observan diversos señalamientos relacionados con la distribución del DESCUENTO EXTRAORDINARIO entre "[REDACTED]", "[REDACTED]" y "[REDACTED]". No obstante, en las ACTAS en las que se estableció el otorgamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO para dos mil diez y dos mil once, se indicó que éste se repartiría "con base en el monto facturado". Lo anterior se desprende de los siguientes documentos:

- a. En el ACTA emitida por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUM el veinticinco de agosto de dos mil diez se señaló lo siguiente respecto de la distribución del DESCUENTO EXTRAORDINARIO:²⁵⁰ "[REDACTED]"
[REDACTED]
- b. En el ACTA emitida por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUM el veinticuatro de agosto de dos mil once:²⁵¹ [REDACTED]
[REDACTED]

De este modo, la evidencia que obra dentro del EXPEDIENTE coincide con lo señalado por TUM respecto a que a cada USUARIO le correspondía el "porcentaje que la facturación de cada uno de estos Usuarios representaba respecto del total de los Usuarios que se habían hecho acreedores al descuento [DESCUENTO EXTRAORDINARIO]".

Por lo anterior, y dado que existe evidencia de una correlación cercana a uno entre la facturación de cada USUARIO y el monto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO al que accedió (ello con independencia del carácter que tuvieran los USUARIOS como accionistas o no accionistas) no es posible afirmar que el contenido de las ACTAS demuestra la asignación discriminatoria del DESCUENTO EXTRAORDINARIO para favorecer principalmente a los ACCIONISTAS.

III. Objeto y Efecto de la conducta: Ventajas exclusivas a los Usuarios Accionistas.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:²⁵²

²⁵⁰ Dicho documento se encuentra por duplicado en los folios 28325 a 28334 y 28418 a 28427.

²⁵¹ Dicho documento se encuentra por duplicado en los folios 28379 a 28389 y 28472 a 28482.

²⁵² Páginas 226 a 241 CONTESTACIÓN TUM, páginas 282 a 297 de la CONTESTACIÓN SEPZ y páginas 280 a 295 de la CONTESTACIÓN MAGR.

La AI pierde de vista que la finalidad del análisis del objeto y efecto de una PMR no es solo determinar si existe una ventaja exclusiva, sino más bien distinguir entre las ventajas exclusivas de competidores que sean resultado natural del proceso de competencia y que favorezcan el funcionamiento eficiente de los mercados (como lo es el caso en concreto), respecto de aquellas ventajas exclusivas que dañan el proceso de competencia y libre concurrencia y, por lo tanto, limitan las opciones de los consumidores y protegen posiciones dominantes de los agentes económicos establecidos.

Así únicamente se deben de considerar como presuntas PMR las conductas que limitan las alternativas de los consumidores y protegen o expanden posiciones monopólicas de los agentes económicos que los realizan. Ello debido a que dichos actos afectan el proceso de competencia en perjuicio del bienestar de los consumidores.

En el caso concreto y suponiendo sin conceder que existiera una ventaja exclusiva, la AI no acredita que las ventajas exclusivas dañan el proceso de competencia y libre concurrencia, limitando así las opciones de los competidores y protegiendo posiciones dominantes. Los descuentos otorgados no han pretendido crear ventajas exclusivas, sino que tienen justificación económica por las siguientes razones: (i) la presencia de economías de escala hace que los costos disminuyan a medida que aumenta el consumo de RC de PF, por lo que tiene sentido dar un menor precio a aquellos usuarios que consumen un mayor número de reportes; y (ii) los descuentos fueron diseñados para favorecer a los usuarios que mayor número de registros aportaron a la base de datos. De hecho, sesenta y siete por ciento (67%) de los registros que conforman la base de datos de TUM vienen de Usuarios que fueron beneficiados por los descuentos. Esto tiene racionalidad económica por las externalidades de red, ya que un mayor número de registros aumenta el valor de la información.

En ese sentido los descuentos imputados no tuvieron efectos anticompetitivos en el mercado de otorgamiento de crédito. De acuerdo con la AI *“la aplicación del esquema de descuentos de TUM se tradujo en importantes disminuciones en los precios del RC de PF lo cual le brindó ventajas exclusivas, principalmente a los [ACCIONISTAS], dada la importancia que tienen [sic] el RC como requerimiento insustituible del proceso de otorgamiento de crédito”*.

En relación con el supuesto objeto o efecto que encontró la AI de establecer ventajas exclusivas en favor de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, la AI supone que los ACCIONISTAS impulsaron los descuentos imputados para obtener o reforzar su poder frente a sus competidores, en el mercado de otorgamiento del crédito.

En consecuencia, para sancionar la práctica imputada, la AI tendría que haber probado que los ACCIONISTAS, a través de TUM, fueron capaces de aumentar su

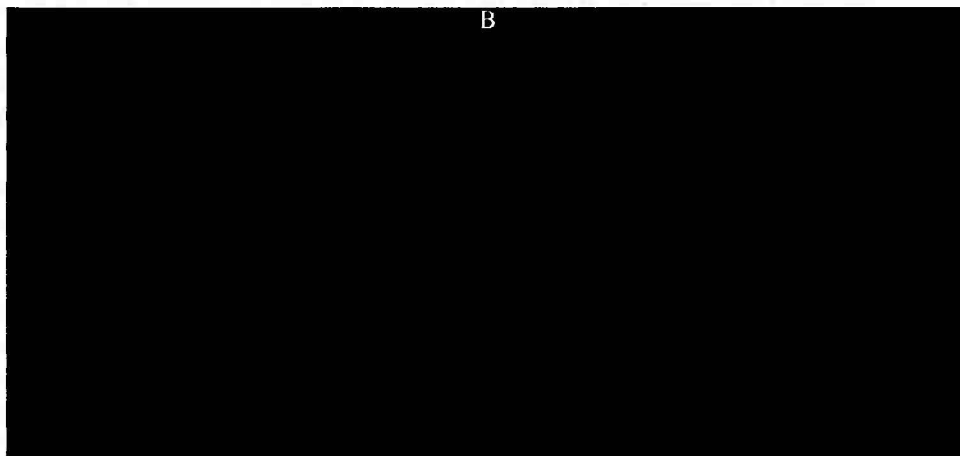
poder de mercado en el otorgamiento del crédito. Es decir, la AI debió haber analizado cuáles son los efectos que tienen los descuentos imputados en el otorgamiento de crédito.

Además, sus conclusiones carecieron de fundamento y resultaron equivocadas por las razones que se describen a continuación.

En primer lugar, el análisis de precios que presenta la AI ni siquiera es el adecuado porque el precio neto, en el que basa su análisis, incluye DESCUENTOS ORDINARIOS, y la misma AI reconoce que este descuento no tiene el objeto ni efecto de generar ventajas exclusivas al omitirlo de su análisis. La AI no presentó en su análisis información para comparar el precio que pagan los usuarios accionistas y no accionistas, una vez descontados únicamente los descuentos imputados.

En la gráfica que se presenta a continuación se muestra cómo durante el periodo investigado, los descuentos otorgados distintos al DESCUENTO ORDINARIO distaron mucho de ser discriminatorios, pues la tasa de dichos descuentos que obtuvieron los ACCIONISTAS y el resto de los USUARIOS fue prácticamente igual, con una diferencia de apenas diez puntos base.

Precios promedio y descuentos distintos al DESCUENTO ORDINARIO por tipo de USUARIO, durante el periodo investigado



Eliminado: un párrafo, cuatro palabras

Las tasas de descuento fueron aplicadas sobre precios promedio brutos distintos para cada grupo, por lo que el precio neto de descuentos imputados (es decir, el precio bruto menos todos los descuentos distintos al DESCUENTO ORDINARIO) fue ***** menor para el resto de los USUARIOS que para los ACCIONISTAS.

Es decir que, los descuentos imputados que la AI califica como discriminatorios por estar supuestamente dirigidos a disminuir los precios de los ACCIONISTAS, derivaron en precios promedio menores para los usuarios no accionistas.

Resulta incongruente que la AI concluya que los descuentos imputados son discriminatorios, cuando la tasa de descuento otorgada a los USUARIOS no ACCIONISTAS fue prácticamente idéntica a la que recibieron los ACCIONISTAS; y, más aún, cuando los precios percibidos por los usuarios no accionistas fueron menores en promedio que los que percibieron los ACCIONISTAS.

Por otro lado, a pesar de que la AI no presentó información suficiente para estimar el monto total que resulta exclusivamente de los descuentos imputados para analizar el impacto que esta diferencia en precios podría significar para las instituciones financieras al otorgar un crédito, es posible ver que el costo del RC es insignificante en comparación con los ingresos que obtienen las instituciones financieras por el otorgamiento de un crédito. Si se considera el precio promedio que en efecto fue cobrado por un RC de PF durante el periodo investigado,²⁵³ de [REDACTED] este representa apenas el [REDACTED] de los ingresos que se percibirían por un crédito personal con las características descritas y el [REDACTED] de los ingresos que se percibirían por un crédito hipotecario.

La diferencia en precios resultante de los descuentos no representa una restricción a la competencia ni favorece a los USUARIOS-ACCIONISTAS en las condiciones que pueden ofrecer para otorgar un crédito, de ahí que los argumentos que la AI utiliza para acreditar que el objeto de la conducta es otorgar una ventaja exclusiva está basada en meras especulaciones y no logra acreditar cómo esta supuesta ventaja competitiva lesiona el funcionamiento eficiente del mercado de otorgamiento de créditos. Es decir, los Usuarios-Accionistas no están en posibilidad de aumentar su poder de mercado en el otorgamiento de créditos a causa de observar menores precios (derivados de los descuentos imputados) en los RC. Así, resulta evidente que no hay un daño al proceso de competencia y libre concurrencia, toda vez que no se disminuye el funcionamiento eficiente del mercado relacionado de otorgamiento de créditos, ni mucho menos se disminuye, daña o impide la competencia y libre concurrencia.

En adición a lo anterior, es importante considerar que la AI contaba con información suficiente para realizar un impacto de la supuesta conducta en el mercado relacionado de otorgamiento de créditos, misma que contiene elementos que le hubieran permitido concluir a la AI que no hay efectos en el mercado

²⁵³ TUM, SEPZ y MAGR señalan que tomaron en cuenta el promedio de los precios netos pagados por cada Usuario en cada mes del periodo de enero dos mil diez a marzo dos mil quince, ponderando por el correspondiente número de RC de PF adquiridos en cada periodo por cada Usuario. Al respecto, indican que dicha información se encuentra contenida en la base de datos correspondiente al numeral 8.3 del requerimiento de información. Para acreditar su argumento e ilustrar lo poco significativo que es el costo de un RC de PF en relación con los ingresos que los otorgantes de crédito obtienen de otorgar préstamos de distintas índoles, TUM, SEPZ y MAGR presentan una estimación del porcentaje que representa el costo de adquisición de un RC de PF por parte de un otorgante de crédito, de los ingresos brutos que dicho otorgante de crédito percibiría por concepto de intereses pagados por el prestatario.

relacionado.²⁵⁴ Indebidamente, y de forma contraria a los principios que deben regir el actuar de la autoridad de conformidad con el artículo 33 de la LFCE, la AI omitió evaluar dicha información en el DPR.

Por otra parte, no se acredita un nexo causal entre el otorgamiento de descuentos imputados y la supuesta ventaja exclusiva de los USUARIOS-ACCIONISTAS.

Debe existir un nexo causal entre los descuentos imputados y el objeto de establecer ventajas exclusivas. El DPR se limita a mencionar que el descuento disminuyó el precio del RC de PF, y que esto otorgó una ventaja exclusiva a los ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de créditos al ser el RC un requerimiento insustituible. Aunque los usuarios no accionistas se enfrentaran a mayores precios, esto no los imposibilitaría para acceder a los RC porque el costo es insignificante en comparación con los ingresos que obtienen al otorgar un crédito.

El DPR no brinda elementos que expliquen por qué arribó a esas conclusiones toda vez que no acredita por qué la disminución de precios tiene por objeto otorgar una ventaja exclusiva en el mercado relacionado de otorgamiento de créditos.

La AI debió de acreditar que TUM tiene incentivos para establecer esa ventaja exclusiva, no obstante, se acreditó que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO es un descuento por volumen que busca incentivar el consumo de sus productos y que el DESCUENTO DEL 5.8% nació en beneficio de los USUARIOS dada la entrada en vigor de la obligatoriedad del RC Integrado. La AI se limita a concluir que el otorgamiento de esos descuentos disminuyó los precios e infiere que la consecuencia inherente a dicho otorgamiento es el otorgamiento de una ventaja exclusiva. Dejando por demás claro que el nexo causal entre el otorgamiento de descuentos, la baja de precios y el otorgamiento de la "ventaja exclusiva" (que, como ya se acreditó, no es exclusiva) está basado en especulaciones.

De haber analizado el nexo causal la AI hubiera podido concluir que el mercado de otorgamiento de créditos no se ve para nada afectado por los descuentos otorgados; como ha quedado acreditado, este gasto es marginal. Con base en la teoría de la *conditio sine qua non*, si los descuentos imputados fueran suprimidos, esto no tendría efecto alguno en el mercado relacionado del otorgamiento de créditos. De ahí que la AI carece de todo elemento y fundamentación para afirmar

²⁵⁴ TUM, SEPZ y MAGR refieren la información presentada por BANAMEX, BANCOMER, BANCOPPEL y BANCO AZTECA durante el periodo de investigación. En particular, los emplazados remiten a la información que obra en el Expediente en relación con: (i) precios de los productos ofrecidos por las SIC; (ii) costos asociados al otorgamiento de un crédito a un cliente; (iii) costo promedio que representa la consulta de reportes de crédito con respecto a los montos promedio de crédito que se otorgan; (iv) proceso para la evaluación de una solicitud de crédito; (v) segmentos de crédito que se atienden; (vi) descripción de los tipos de créditos que se otorgan; (vii) estadísticas mensuales de dos mil diez a dos mil quince sobre los segmentos del mercado de crédito que se atienden; (viii) participaciones de mercado de crédito global y en los distintos segmentos de mercado en los que se participa; (ix) información respecto a la importancia de la consulta de los productos ofrecidos por las SIC para el otorgamiento de créditos; y (x) número total de solicitudes de crédito recibidas.

que el otorgamiento de los descuentos imputados tiene por objeto y efecto otorgar ventajas exclusivas en favor de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de créditos.

De hecho, las afirmaciones de la AI acerca de que las políticas de precios y descuentos aplicadas por TUM pudieran dañar la competencia en el otorgamiento de crédito, son contrarias a las tendencias observadas en el mercado de crédito, donde varios indicadores de concentración han ido a la baja, revelando que, en general, los bancos de menor tamaño han venido registrando una participación creciente, lo que apunta a condiciones más favorables para la competencia.²⁵⁵

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁵⁶

No todos los descuentos que comprenden la política comercial de TUM recurren como factor de asignación al número de consultas y a la cantidad de información aportada a la BD de PF. En opinión de la AI, sólo el DESCUENTO ORDINARIO se basa en dichos factores.

El DESCUENTO ORDINARIO ya premia, de forma considerable, a los USUARIOS que más registros aportan a la BD de PF, y los que más consultas realizan a dicha BD. El Descuento Ordinario, por sí mismo, generó diferencias en los precios sustanciales, que, en un principio, al menos triplicaron las diferencias observadas entre el precio máximo y el mínimo, como se muestra en la Tabla 41 del DPR.

En opinión de TUM, SEPZ y MAGR, el resto de la política comercial de TUM también trató de premiar, aún más, a los grandes clientes que consumen más RC de PF y que más registros aportan a la BD de PF. Sin embargo, el resto de los descuentos que integran la política comercial contaron con criterios de selección poco claros, transparentes, subjetivos y carentes de sentido desde la perspectiva económica, aparentemente, fueron confeccionados para elegir directamente a sus beneficiarios. Aspectos como la lealtad, exclusividad, estatus societario (es decir, accionista o no accionista) y participación en los beneficios de la sociedad fueron los elementos que determinaron la orientación del resto de la política comercial de TUM.

Por otro lado, es incorrecto, como señalan TUM, SEPZ y MAGR, que la AI tuviera que probar que los ACCIONISTAS incrementaron o “fueron capaces” de incrementar su poder de mercado en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito. La AI no contaba con facultades para investigar un mercado distinto al que se definió en el ACUERDO DE INICIO.

El análisis de precios realizado por la AI no excluye al DESCUENTO ORDINARIO, como se aclara en el propio DPR, porque la contabilidad de TUM incluyó al DESCUENTO DEL 5.8% como DESCUENTO ORDINARIO. De la misma forma se realizó el análisis para poder

²⁵⁵ TUM, SEPZ y MAGR remiten al análisis contenido en el DICTAMEN RG y a la información contenida en los Informes Anuales 2010, 2011 y 2012 de la CNBV.

²⁵⁶ Páginas 240 a 252 de la VISTA TUM.

comparar precios con el USUARIO promedio, el cual no accedió a ninguno de los descuentos adicionales, pero sí al DESCUENTO ORDINARIO, aunque en un mucho menor porcentaje.

Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO POR LEALTAD (o DESCUENTO DEL 5.8%) y el DESCUENTO RESIDUAL, estos son considerados contrarios a la competencia porque en su asignación excluyeron a la gran mayoría de los USUARIOS (en un porcentaje mayor al **, sin brindar una justificación aceptable; además, su orientación estuvo claramente sesgada en favorecer a los grandes CLIENTES, principalmente, a los ACCIONISTAS, como se describió ampliamente en el DPR.

Respecto de la gráfica que se muestra en la página 230, como se prueba en el DPR, el USUARIO promedio accedió a un precio promedio de [REDACTED] B [REDACTED]. Cifra lejana a los datos que presenta TUM en esta

Por otro lado, TUM no explica la razón por la cual aplica precios base distintos para los ACCIONISTAS y los USUARIOS no accionistas, ni cómo se definieron cada uno de ellos. Además, es incorrecto partir de un precio base, sin DESCUENTO ORDINARIO, para medir el impacto total de los descuentos aquí aludidos.

De este modo, en la gráfica presentada en la página 230, TUM realizó un análisis sesgado donde comparó entre grupos de beneficiarios: accionistas y no accionistas; concluyendo que las diferencias en precios fueron relativamente pequeñas. La AI considera que lo correcto es realizar la comparación contra el USUARIO promedio de la totalidad del universo de USUARIOS que adquirieron los RC de PF (es decir, los mil trescientos treinta y nueve USUARIOS); y no únicamente contra los USUARIOS no accionistas que accedieron a los descuentos, los cuales son una minoría y forman parte del grupo que, finalmente, fue beneficiado por la conducta.

Incluso, suponiendo sin conceder que los datos mostrados por TUM sean correctos, del análisis presentado por TUM se comprueba que los descuentos otorgados a los ACCIONISTAS fueron superiores a los de otros USUARIOS no accionistas. Partiendo de distintos precios brutos, los descuentos son inferiores para el caso de los USUARIOS no accionistas, la reducción absoluta que tuvieron los ACCIONISTAS fue de [REDACTED] B [REDACTED] mientras que para los USUARIOS no accionistas fue de [REDACTED] B [REDACTED]

En conclusión, el análisis presentado por TUM compara a los ACCIONISTAS con el resto de los beneficiarios de los descuentos, cuando lo adecuado sería que los comparara con el resto de los USUARIOS excluidos, ya que los efectos de los descuentos discriminatorios se dan al generar ventajas exclusivas principalmente, pero no solamente, a los ACCIONISTAS respecto de los USUARIOS que no tuvieron acceso a los beneficios. En segundo término, porque los descuentos discriminatorios favorecieron a los grandes consumidores de RC de PF respecto de los consumidores más pequeños, con la intención de retener a los grandes consumidores como afiliados y CLIENTES de TUM y reducir la posibilidad de que acudieran a adquirir los RC de PF de CC, dados los precios

Eliminado: trece palabras

más bajos a los que tenían acceso con TUM mediante dichos descuentos. Así, la diferencia de precios relevante es la que permite dimensionar el descuento otorgado respecto de los precios a los que tienen acceso los USUARIOS de menor consumo.

En cuanto al argumento según el cual el costo del RC de PF es insignificante en comparación con los ingresos que obtienen las instituciones financieras, la AI considera que como evidencia de los beneficios exclusivos generados por la conducta deberán de tomarse en consideración los beneficios totales que le generó la política comercial de TUM, principalmente, a los ACCIONISTAS, lo cual les permitió importantes ahorros que pudieron orientarse a otros fines más rentables.

El impacto general de la política de descuentos ha sido una disminución significativa en los precios que pagan los USUARIOS que más le facturaron a TUM, comparativamente, con lo que paga el resto de los compradores de los RC de PF. Éste es un insumo insustituible, por el cual, el USUARIO promedio pagó [REDACTED] B por cada uno de ellos; mientras que los ACCIONISTAS erogaron precios mucho menores como se mostró ampliamente en el DPR, particularmente, en la Gráfica 18 contenida en la página 256 del DPR.

Como se puede apreciar en esa gráfica, la aplicación del esquema de descuentos de TUM se tradujo en importantes disminuciones en los precios del RC de PF, lo cual le brindó ventajas exclusivas, principalmente a los ACCIONISTAS.

Ello, se refleja cuando se observa que el USUARIO promedio obtuvo un porcentaje de reducción del [REDACTED] B mientras que [REDACTED] B obtuvo un porcentaje de reducción del [REDACTED] B [REDACTED] B del

[REDACTED] B [REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] B

[REDACTED]. Lo anterior, conlleva a otorgar una ventaja exclusiva a los ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, porque si bien el costo unitario de un RC de PF comparado con el ingreso promedio por extender un crédito es mucho menor, el monto total ahorrado es considerable, además de que el costo de oportunidad de utilizar estos ahorros potenciales en otros USUARIOS es alto, los cuales pudieran destinarlos en otros usos para promover más créditos.

En consecuencia, los ACCIONISTAS obtuvieron ahorros importantes y en una proporción que no es comparable con el resto de los mil trecientos treinta y nueve USUARIOS. Dichos ahorros de los ACCIONISTAS generaron mayores ganancias para éstos, que pudieran ser utilizados para las finalidades que determinaran conforme a sus propias estrategias, dando una desventaja a otros USUARIOS. Asimismo, la alta rentabilidad de TUM como su alto margen operativo, en comparación con CC, le permitió a TUM establecer los descuentos por los cuales se le imputa probable responsabilidad en el DPR y que benefician principalmente a los ACCIONISTAS, en una proporción que les representa una ventaja exclusiva en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito.

Eliminado: tres renglones, veinticuatro palabras

Por otra parte, en relación con el argumento según el cual no hay efecto en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito dado el bajo costo de los RC, así como respecto de las manifestaciones tendientes a afirmar que la AI actuó indebidamente al no haber buscado esclarecer la verdad con los elementos que tenía a su disposición, la AI señala remite a los señalamientos previamente realizados respecto a que la aplicación de los principios generales penales sustantivos no debe trasladarse de forma automática al derecho administrativo sancionador.

Asimismo, la AI señala que las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR son falsas y engañosas, toda vez que en el DPR no se señaló que la conducta desplegada por TUM haya tenido el objeto de desplazar indebidamente o impedir sustancialmente el acceso de competidores. Ello implica que no se tenga que analizar si los agentes económicos competidores en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito fueron desplazados o si se les impidió sustancialmente el acceso a dicho mercado. Por tanto, no se requiere analizar si hubo un aumento del poder de mercado de los Usuarios-Accionistas en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, sino únicamente si se dio alguna ventaja exclusiva en la venta de los RC de PF.

Así la AI realizó un análisis que, como quedó acreditado en el DPR, demostró que los USUARIOS-ACCIONISTAS que realizan actividades comerciales en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, se vieron beneficiados principalmente por la política de descuentos por la que se le imputó probable responsabilidad a TUM, ya que se acreditó que recibieron precios mucho menores que otros USUARIOS con los que compiten. Se otorgó una ventaja exclusiva principalmente a los USUARIOS-ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, porque el monto total ahorrado es muy alto y, por tanto, el costo de oportunidad de que otros Usuarios utilicen estos ahorros potenciales es alto, ya que pudieran destinarlos para promover una mayor originación de créditos.

En cuanto al señalamiento según el cual no se acredita un nexo causal entre el otorgamiento de descuentos y la supuesta ventaja exclusiva se indica que el nexo causal señalado por TUM, SEPZ y MAGR no corresponden con el manifestado por la AI en el DPR. La AI dejó claro que la práctica llevada a cabo por TUM tuvo el objeto y efecto de otorgar ventajas exclusivas en el mercado relacionado de otorgamiento crédito. Esto es distinto a afirmar que la práctica dañó dicho mercado, al desplazar indebidamente o impedir el acceso al mercado relacionado del otorgamiento de crédito, y que ello, implicara la imposibilidad en el crecimiento de algunos USUARIOS en el referido mercado relacionado.

Asimismo, la aseveración realizada por la AI se refiere a la competencia y libre concurrencia del mercado relacionado de otorgamiento de crédito, no a su desempeño. En este sentido, la AI es consciente de que el funcionamiento de dicho mercado relacionado en México, como en cualquier otro país, depende de innumerables factores y elementos que, indudablemente, tienen mayor repercusión que el precio de los RC de PF.

Aun suponiendo la posibilidad de que, con todo y la ejecución de la práctica llevada a cabo por TUM, el desempeño del mercado relacionado haya mejorado durante el periodo analizado, no desestima las afirmaciones realizadas por la AI.

Lo anterior, porque en el DPR se le imputa probable responsabilidad por *"otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito"*, es decir, con respecto al mercado relacionado del otorgamiento de crédito no se señaló en el DPR que la conducta desplegada por TUM haya tenido el objeto y efecto de desplazar indebidamente o impedir sustancialmente el acceso. Ello implica que no se tenga que analizar si los agentes económicos competidores en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito fueron desplazados o si se les impidió sustancialmente el acceso a dicho mercado, es decir, la afectación en dicho mercado relacionado. Por tanto, no se requiere analizar si hubo un aumento del poder de mercado de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, sino únicamente si dio una ventaja exclusiva en la venta de los RC de PF, las cuales emplean para la realización de su actividad comercial en dicho mercado relacionado.

Además, la integración vertical que existe entre TUM y los ACCIONISTAS implica que la representación de los intereses de los ACCIONISTAS (instituciones bancarias) no fue ajena en la actuación de TUM, la cual repercutió en un beneficio principalmente a los ACCIONISTAS, al obtener una reducción importante en los precios de los RC de PF frente a otros USUARIOS, mismo que es empleado para el ejercicio de las actividades comerciales en el mercado relacionado del otorgamiento del crédito tanto por los ACCIONISTAS como por otros USUARIOS y que no tiene sustitutos asequibles. Esto, tuvo como consecuencia otorgarles por TUM una ventaja exclusiva a los ACCIONISTAS, porque si bien no fueron los únicos beneficiados por los descuentos por los que se le imputa probable responsabilidad a TUM, sí recibieron un beneficio en una proporción incomparable, ya que el precio neto promedio cobrado a todos los USUARIOS fue de [REDACTED] ** [REDACTED] mientras que para los ACCIONISTAS rondó los [REDACTED] ** [REDACTED] como se acredita en el DPR.

En consecuencia, los ACCIONISTAS obtuvieron ahorros importantes y en una proporción que no es comparable con el resto de los USUARIOS. Dichos ahorros de los ACCIONISTAS generaron mayores ganancias para éstos, que pudieron ser utilizadas conforme a sus propias estrategias, lo que implicó una desventaja para otros USUARIOS. Asimismo, tanto la alta rentabilidad de TUM como su alto margen operativo, en comparación con CC, le permitió a TUM establecer los descuentos por los cuales se le imputa probable responsabilidad en el DPR y que benefician principalmente a los ACCIONISTAS, en una proporción que les representa una ventaja exclusiva en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito.

En este sentido, TUM, SEPZ y MAGR pierden de vista que los ACCIONISTAS compiten con el resto de los USUARIOS en el mercado de otorgamiento de crédito, y que el hecho de contar con precios menores para insumos, de los cuales no existen sustitutos asequibles, equivale a una ventaja exclusiva en los términos explicados previamente.



49585

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

La AI manifiesta que la racionalidad detrás de la implementación de los descuentos no puede ser otra más que la señalada en el DPR. No existe evidencia en el EXPEDIENTE de que el sacrificio de utilidades que representó la implementación de los descuentos se hizo con otra intención más que dañar el proceso de competencia en el mercado relacionado de crédito (otorgando beneficios exclusivos), o dañar la competencia en el MR de la comercialización de RC de PF.

Al cuestionarle a TUM sobre la racionalidad de llevar a cabo la práctica, sus explicaciones fueron notablemente exiguas: *"para mejorar las condiciones de los USUARIOS"; "incentivar el consumo de los productos de TUM"; "no había una política clara respecto a la aplicación del descuento, justamente por dicha razón, se decidió generalizar el descuento otorgado y establecerlo en 5.8%"; "otorgar descuentos adicionales [...] conforme a la estrategia comercial de TUM"; y aplicar descuentos "con el objetivo de retener CLIENTES"; y "con el objeto de procurar la retención de los CLIENTES".*

La AI no prejuzga sobre la invalidez de los objetivos arriba señalados y que gobernaron la política comercial de TUM, lo que cuestiona es que la alternativa empleada por dicho agente tuvo consecuencias contrarias a la competencia y libre concurrencia en los mercados.

Adicionalmente, la AI manifiesta que, lo alegado por TUM, SEPZ y MAGR no ataca la imputación contenida en el DPR, por lo que no trasciende ni es suficiente para combatir las imputaciones hechas en su contra, en los términos expuestos conforme al DPR.

Son **fundados** los argumentos de TUM, SEPZ y MAGR relativos a que: (i) el DPR carece de elementos y fundamentación para afirmar que el otorgamiento de los descuentos imputados tuvo por objeto y efecto otorgar ventajas exclusivas en favor de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito; y (ii) el análisis de precios que presenta la AI no es adecuado porque el precio neto, en el que basa su análisis, incluye el DESCUENTO ORDINARIO, el cual no fue imputado.

De conformidad con lo señalado en el DPR, los descuentos aplicados a la compra de los RC de PF, tales como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL, el DESCUENTO POR LEALTAD y el DESCUENTO DEL 5.8% tuvieron el objeto y efecto de otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito. No obstante, toda vez que no se acreditó la existencia del DESCUENTO RESIDUAL, éste no será considerado al analizar el posible objeto y/o efecto de los descuentos imputados.

1. Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO:

Como se señaló en el apartado "*Descuento Extraordinario*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, del análisis de la información que obra en el EXPEDIENTE no se acredita que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO se hubiera otorgado para beneficiar a los ACCIONISTAS, siendo que, por un lado, este descuento se otorgó fundamentalmente con relación al nivel de facturación de los USUARIOS, sin que beneficie de



manera particular a los ACCIONISTAS y, por otro lado, en términos relativos el DESCUENTO EXTRAORDINARIO favoreció en mayor proporción a los USUARIOS no accionistas que recibieron el descuento que a los ACCIONISTAS. Por lo anterior, no puede considerarse que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO tuvo por objeto y/o efecto otorgar una ventaja exclusiva, principalmente, a los ACCIONISTAS.

2. Respecto del DESCUENTO DEL 5.8% o DESCUENTO POR LEALTAD:²⁵⁷

A diferencia del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, del análisis de la información que obra en el EXPEDIENTE sí se advierte que el DESCUENTO DEL 5.8% benefició principalmente a los ACCIONISTAS.

No obstante, el DESCUENTO DEL 5.8% no redujo significativamente el precio que los ACCIONISTAS pagan y no se observa una diferencia significativa en el precio que pagan los ACCIONISTAS y los demás USUARIOS por los RC de PF con motivo de los descuentos imputados. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:

- a. Al analizarse de manera conjunta con el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, la política de descuentos imputada generó una disminución del precio muy similar para ACCIONISTAS y USUARIOS no accionistas: [REDACTED] B y [REDACTED] B [REDACTED] respectivamente durante el periodo investigado.

Lo anterior se aprecia en la siguiente tabla:

Distribución de los descuentos por tipo de usuario

[REDACTED]

Eliminado: un párrafo, ocho palabras

²⁵⁷ Como se indicó previamente, tanto la AI como TUM, SEPZ y MAGR señalan que el DESCUENTO DEL 5.8% en realidad es el mismo descuento que el denominado DESCUENTO POR LEALTAD, por lo que el DESCUENTO POR LEALTAD no será considerado como un descuento independiente o distinto al DESCUENTO DE 5.8% por esta autoridad.

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM en el EXCEL que obra en el folio 23129 del EXPEDIENTE.

La tabla anterior muestra el descuento promedio ponderado aplicado por grupo de USUARIO de enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince.

- b. El DESCUENTO DEL 5.8% se aplicó de manera diferenciada únicamente durante un periodo de diez meses, generalizándose con posterioridad. Dadas las particularidades del mercado, la duración de dicho descuento hace poco probable que este genere un problema de competencia, como se explica en los siguientes párrafos.
- c. El DESCUENTO DEL 5.8% tuvo un bajo impacto en el precio de RC de PF que pagaron los USUARIOS durante el periodo investigado.

3. Respecto de la política de descuentos en su conjunto:

En el DPR se afirma que la diferencia de precios genera una ventaja exclusiva en el mercado aguas abajo, es decir, en el mercado de otorgamiento de crédito porque la discriminación reduce "significativamente" el precio que los ACCIONISTAS pagan por cada RC de PF; no obstante, la caída "significativa" que se analiza en el DPR es producto del DESCUENTO ORDINARIO, el cual no fue imputado.

Ello incluso es reconocido por el propio DPR: "[...] el DESCUENTO ORDINARIO, establecido en el CONTRATO MARCO DE TUM, el cual generó la mayor parte de los descuentos obtenidos por los USUARIOS".²⁵⁸ Es decir, la disminución más significativa entre los precios brutos y netos pagados por los ACCIONISTAS respecto a los pagados por los USUARIOS no accionistas se debe al otorgamiento de dicho descuento.

Por lo anterior, en el DPR se sobreestimó el efecto de la caída en los precios con motivo de los descuentos imputados debido a que el análisis en materia del objeto y efecto vertical incluyó el efecto del DESCUENTO ORDINARIO.

En este sentido, no se observa la "caída significativa" en los precios de RC de PF con motivo de los descuentos imputados que se indica en el DPR si se considera el efecto de los descuentos existentes imputados (DESCUENTO EXTRAORDINARIO y DESCUENTO DEL 5.8%).

Así, los ACCIONISTAS recibieron en promedio, durante el periodo de enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince, un descuento total de [REDACTED] B mientras los USUARIOS no accionistas recibieron un descuento total de [REDACTED] B [REDACTED] es decir, [REDACTED] B mayor. No obstante, de esos [REDACTED] B de descuento adicional que recibieron los ACCIONISTAS [REDACTED] B [REDACTED] se deben al otorgamiento del DESCUENTO ORDINARIO, el cual no está imputado. Por lo anterior, la diferencia en la reducción de precios generada por los descuentos imputados existentes en favor de los ACCIONISTAS únicamente es de \$ [REDACTED] **

²⁵⁸ Página 174 del DPR.

En este sentido, en el DPR se realiza un análisis en materia del objeto y efecto de la conducta imputada considerando el impacto en el precio del DESCUENTO ORDINARIO, esto es, un descuento que no fue imputado y que explica la caída más importante en el precio de los RC de PF.

De este modo, las cifras reales que corresponden a la caída en los precios con motivo de los descuentos imputados existentes resultan considerablemente distintas a las señaladas en el DPR,²⁵⁹ por lo que resulta fundado el argumento de TUM, SEPZ y MAGR según el cual el análisis de precios que presenta la AI no es adecuado porque el precio neto, en el que se basó el análisis, incluye el DESCUENTO ORDINARIO que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, no fue imputado.

Por todo lo anterior, de la información que obra en el EXPEDIENTE no se acredita que el efecto que pudieron tener los descuentos imputados existentes sea susceptible de generar una ventaja exclusiva en términos del proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de otorgamiento de crédito en favor de los ACCIONISTAS.

Por una parte, la política de descuentos de TUM, en su conjunto, no favorece a los ACCIONISTAS en los términos señalados en el DPR: como se desprende de las tablas referidas, la política de descuentos de TUM consiste fundamentalmente en una política que, en mayor medida, se ha aplicado de forma proporcional al consumo y con independencia del carácter que tuvieran los USUARIOS como accionistas o no accionistas. Al respecto, el DPR no explica ni acredita cómo es que una política de descuentos con esas características es o puede ser anticompetitiva.²⁶⁰

Por otra parte, la diferencia entre los precios pagados por los diferentes USUARIOS derivada de los descuentos imputados existentes no es significativa y, por lo tanto, no se acredita que la política de descuentos imputada le haya otorgado ventajas exclusivas principalmente a los USUARIOS-ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, al reducir significativamente el precio que dichos USUARIOS pagan por cada RC de PF, como lo señala el DPR.

Adicionalmente, tampoco se acredita que el objeto de las diferencias en precios generadas por los descuentos imputados existentes fuera otorgar ventajas exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado del otorgamiento de crédito.

Tal como indican los emplazados, debe existir un nexo causal entre los descuentos imputados y el objeto de establecer ventajas exclusivas.

²⁵⁹ En el DPR se indica que "la mayor parte de los USUARIOS obtuvo precios netos cercanos al precio base, establecido por TUM en el rango de [REDACTED]". De hecho, y como se detalla en las siguientes dos imágenes, [REDACTED] USUARIOS obtuvieron precios iguales o menores a [REDACTED]. Este grupo de USUARIOS representó el [REDACTED] de la totalidad. Lo anterior contrasta con lo que sucede a la mayoría: el [REDACTED] de la totalidad de los USUARIOS accedieron a precios superiores a [REDACTED] y el [REDACTED] obtuvo precios entre [REDACTED] y [REDACTED]."

²⁶⁰ Si bien una política comercial consistente en el otorgamiento de descuentos por volumen pudiera llegar a ser contraria al proceso de competencia y libre concurrencia, en el presente caso el DPR no acredita que ello ocurra.

En este sentido, de la información que obra en el EXPEDIENTE, no se advierte que los descuentos imputados existentes tuvieran el objeto de establecer una ventaja exclusiva en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS, ya que:

- a. El DESCUENTO EXTRAORDINARIO: (i) no buscó favorecer en mayor medida a los ACCIONISTAS; (ii) se otorgó de forma proporcional al consumo a los usuarios (accionistas y no accionistas) que representan más del noventa y seis por ciento de la facturación; y (iii) en términos relativos, favoreció en mayor medida a los usuarios no accionistas.
- b. Si bien se observa que el DESCUENTO DE 5.8% favoreció a los ACCIONISTAS, el monto del descuento, su duración y su homologación a todos los USUARIOS después de diez meses, limitan la posibilidad de que dicho descuento tenga efectos en el mercado de otorgamiento de crédito.

En consecuencia, no existen elementos suficientes para acreditar que los descuentos imputados tuvieron como objeto o efecto otorgar una ventaja exclusiva en favor principalmente de los USUARIOS-ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito.

IV. Objeto y Efecto de la conducta: Impedir sustancialmente el acceso a CC y potenciales competidores.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:²⁶¹

La AI pierde de vista que la finalidad del análisis del objeto y efecto de una PMR no es solo determinar si existe un fenómeno de desplazamiento, sino más bien distinguir entre los fenómenos de desplazamiento o exclusión de competidores que sean resultado natural del proceso de competencia y que favorezcan el funcionamiento eficiente de los mercados, respecto de aquellos que dañan el proceso de competencia y libre concurrencia y, por lo tanto, limitan las opciones de los consumidores y protegen posiciones dominantes de los agentes económicos establecidos.

En este sentido, con el objeto de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, la LFCE únicamente prohíbe los actos que lesionan el funcionamiento eficiente de los mercados.²⁶² Así únicamente se deben de considerar como presuntas PMR las conductas que limitan las alternativas de los consumidores y protegen o expanden posiciones monopólicas de los agentes económicos que los realizan.

En el DPR no se acredita que el objeto de la conducta sea o pueda ser el de desplazar indebidamente a sus competidores. Para poder acreditar el objeto de una conducta es necesario que existan incentivos para causar el desplazamiento. Así el

²⁶¹ Páginas 241, 242, 250 a 259, 261 a 263 y 265 de la CONTESTACIÓN TUM, páginas 297, 298, 306 a 315, 317 a 319 y 321 de la CONTESTACIÓN SEPZ y páginas 295, 296, 304 a 313, 315 a 317 y 319 de la CONTESTACIÓN MAGR.

²⁶² En particular, TUM, SEPZ y MAGR remiten al contenido de los artículos 2, 8, 10 y 55 de la LFCE.

DPR nuevamente no presenta argumentación alguna que describa el nexo causal entre el otorgamiento de los descuentos imputados y el desplazamiento de su competidor. El DPR únicamente establece que por el hecho de otorgar los descuentos imputados TUM tenía por objeto y efecto generar lealtad e infiere que la consecuencia a dicha lealtad es el desplazamiento de CC, toda vez que se reducen las posibilidades de que los USUARIOS se afiliaran a CC.

No existe ninguna evidencia razonable de que el objeto o efecto de los descuentos fuera impedir que los USUARIOS se afiliaran a CC.²⁶³

Por otra parte, los descuentos otorgados por TUM permiten que tanto CC como otros competidores potenciales puedan competir eficazmente en términos de precios, de conformidad con los argumentos siguientes:

Primero, la AI debió demostrar que los descuentos imputados efectivamente tienen el efecto de reducir la contestabilidad del mercado de la comercialización de RC de PF, así como del mercado relacionado de otorgamiento del crédito.

De hecho, existe consenso entre los académicos de que un enfoque de análisis económico es lo más apropiado para implementar una evaluación en materia de competencia económica sobre los efectos que tienen los descuentos condicionales, especialmente si consideramos que existen beneficios que resultan de los mismos y que son comúnmente utilizados en todos los sectores industriales.

De acuerdo con los lineamientos publicados por la Comisión Europea en relación con el análisis de conductas excluyentes abusivas de empresas dominantes, *"si los datos sugieren claramente que un competidor con igual grado de eficiencia puede competir eficazmente con el comportamiento en términos de precios de la empresa dominante la Comisión deducirá en principio que no es probable que dicho comportamiento de la empresa dominante tenga un impacto negativo en la competencia efectiva, y por ende en los consumidores, y por lo tanto será improbable que intervenga. Si, por el contrario, los datos sugieren que el precio aplicado por la empresa dominante puede excluir a competidores con igual grado de eficiencia, entonces la Comisión incorporará este elemento en su evaluación general del cierre anticompetitivo del mercado [...], teniendo en cuenta otras pruebas cuantitativas y cualitativas pertinentes"*.

De manera más concreta, *"para determinar si es probable que incluso un competidor hipotético tan eficiente como la empresa dominante quede excluido del mercado resultante de la conducta en cuestión, la Comisión examinará los datos económicos relativos a los precios de costo y de venta, y, en especial, si la empresa dominante está aplicando unos precios inferiores al precio de coste"*.

En resumen, para evaluar si una política de descuentos constituye una práctica anticompetitiva, en el sentido de que efectivamente puede desplazar a sus competidores, es imprescindible analizar si la práctica tiene racionalidad

²⁶³ TUM, SEPZ y MAGR señalan que prueba de ello es que tanto

económica, más allá del beneficio que se puede obtener por los posibles desplazamientos que genera y, por lo tanto, tiene potencial de generar una pérdida en el bienestar de los consumidores.

Para tal propósito, es necesario estudiar su intencionalidad, analizando si el único beneficio potencial de una política de descuentos deriva del desplazamiento de competidores, o si se pueden esperar beneficios independientes. Asimismo, es necesario analizar si dicha conducta tiene la capacidad de generar un daño en los consumidores; y, por último, si los desplazamientos, potenciales u observados, tendrían lugar con un competidor al menos tan eficiente como la empresa que implementa la política de descuentos, pues proteger empresas ineficientes puede derivar en un mayor daño a los consumidores.

En segundo lugar, es importante medir el impacto de la política en cuestión, pues la magnitud del desplazamiento o incluso la misma factibilidad de que éste suceda, depende estrechamente de las condiciones y características del esquema mediante el cual se implemente la política. Esquemas prospectivos de descuentos condicionados, con umbrales generalizados, y limitados mediante el otorgamiento de un monto fijo de NOTAS DE CRÉDITO, tienen un efecto de desplazamiento restringido e incluso, dependiendo de los parámetros de dicha política, podrían ser nulos.

Es decir, no basta la implementación por sí sola de una política de descuentos para afirmar que ésta tiene el efecto de desplazar competidores, sino que deben de tomarse en cuenta las características de los descuentos para medir dicho impacto.

Contrario a lo que sugiere la práctica internacional en materia de competencia económica, la AI no presentó ningún análisis económico para demostrar que la estructura y condiciones para recibir los descuentos imputados efectivamente podían tener el efecto de desplazar a competidores actuales y potenciales de TUM.

Independientemente de que la AI no haya efectuado ese análisis, existen elementos para concluir que los descuentos imputados no tuvieron una incidencia dañina sobre el proceso de competencia y libre concurrencia.

En primer lugar, los descuentos otorgados por TUM no podrían excluir a un competidor con el mismo grado de eficiencia -lo que se conoce como el test "*As efficient As*"-, porque el costo de producir un RC está por debajo del precio más bajo al que accedieron los usuarios de TUM, inclusive considerando los DESCUENTOS ORDINARIOS.²⁶⁴

²⁶⁴ TUM, SEPX y MAGR presentan un análisis de costos para tratar de demostrar que CC puede atraer a cualquier usuario de TUM a través de la competencia en precios.

Por lo tanto, los descuentos otorgados por TUM permiten que tanto CC, como otros competidores potenciales, puedan competir libremente con TUM, inclusive después de otorgar los descuentos.

Para analizar el impacto específico que podría tener cada uno de los descuentos imputados, es importante reconocer que, como se mostró con anterioridad: i) no hay un DESCUENTO RESIDUAL (dicho descuento fue un concepto ideado por la AI debido a que no le cuadraron los descuentos); y ii) el DESCUENTO POR LEALTAD es el mismo que el DESCUENTO DEL 5.8%. Por estas razones, el análisis se centrará en mostrar que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% no presentan restricciones a la competencia en el mercado de RC de PF.

Por un lado, para entender el potencial efecto que podría tener el DESCUENTO EXTRAORDINARIO hay que tomar en cuenta que éste es un descuento que se otorga a todos los CLIENTES que facturan más de quinientos mil pesos o un millón de pesos, según corresponda, en el periodo de enero a julio. A pesar de que los descuentos condicionados representan beneficios para los USUARIOS, podrían generar efectos anticompetitivos cuando la empresa que los otorga cuenta con PS si tuvieran el efecto de reducir la capacidad de contestabilidad de sus competidores.

El impacto en contestabilidad se deriva de que los USUARIOS que están cercanos al umbral para recibir el descuento difícilmente cambiarán de agente, ya que el precio de una unidad adicional disminuye de manera considerable. Este efecto se diluye a medida que los USUARIOS se encuentran más lejos del umbral.

Ahora bien, los efectos anticompetitivos son poco probables cuando el condicionamiento es con base en un umbral estandarizado, contrario al caso en el que los umbrales son individualizados.

La misma Comisión Europea reconoce lo siguiente: *“suele ser importante considerar si el sistema de descuento se aplica con un umbral individual o estándar. Un umbral individual -basado en un porcentaje de las necesidades totales del cliente o en un objetivo individual de volumen- permite al proveedor dominante fijar el umbral en un nivel tal que resulta difícil que los clientes cambien de proveedores, creando así un efecto máximo de fidelización. Por el contrario, un umbral estándar de volumen -es decir, el umbral es el mismo para todos o para un grupo de clientes- puede ser demasiado alto para algunos de los clientes más pequeños y/o demasiado bajo para los clientes más grandes y no producirá un efecto de fidelización. Sin embargo, si puede establecerse que un umbral estándar de volumen se acerca a las necesidades de una proporción apreciable de clientes, la Comisión considerará probablemente que dicho sistema estándar de descuento puede producir efectos anticompetitivos de cierre del mercado”.*

Dicho esto, en el caso del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es importante analizar la proporción de USUARIOS para los cuales el umbral establecido genera un efecto de fidelización. Esto es, los USUARIOS para los cuales la facturación bruta es cercana a dicho umbral, de manera que el descuento pudo influir en su nivel de facturación.

En los años dos mil diez y dos mil once, la facturación bruta total de los USUARIOS de TUM cuya facturación bruta individual fue de hasta [B], es decir, cien por ciento mayor que el umbral de quinientos mil pesos para acceder al DESCUENTO EXTRAORDINARIO en dichos años, apenas representó [B] [B] de la facturación total de TUM, respectivamente; en los años subsecuentes, dos mil doce y dos mil trece, la facturación bruta total de los USUARIOS de TUM cuya facturación bruta individual fue de hasta [B], es decir, cien por ciento mayor que el umbral para acceder al DESCUENTO EXTRAORDINARIO en dichos años, apenas representó [B] [B], respectivamente.

Lo anterior implica que incluso tomando en cuenta un intervalo demasiado amplio (el doble del valor del umbral) del valor de la facturación bruta individual de los USUARIOS, para el cual se considere que dichos USUARIOS fueron cautivos de BDC por el efecto de fidelización del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, éstos no representan una parte significativa de los ingresos del BDC, por lo que no puede considerarse que tuvo el objeto o efecto de desplazar a CC.

De manera más específica, para determinar los USUARIOS para los cuáles el DESCUENTO EXTRAORDINARIO tuvo un efecto significativo, se consideró a aquellos USUARIOS cuya facturación bruta fuera mayor al umbral (es decir, que hubieran accedido al descuento) y cuya facturación neta del DESCUENTO EXTRAORDINARIO (es decir, su facturación bruta menos el monto absoluto del descuento que le fue otorgado) fuera menor que el umbral.²⁶⁵

Si se toma en cuenta el criterio expuesto, la facturación de los USUARIOS sobre los que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO pudo tener un efecto de fidelización es insignificante, nunca superior a [B] USUARIOS y en promedio de [B] USUARIOS por año. Asimismo, la facturación bruta total promedio de dichos USUARIOS en los años considerados es menor a [B] cantidad que no puede considerarse en absoluto suficiente para desplazar a CC.

En resumen, tomando en consideración que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO tuvo un criterio de asignación estandarizado y que el nivel del umbral genera un efecto significativo en una cantidad ínfima de USUARIOS, cuya facturación bruta no es en absoluto significativa, es posible concluir que el otorgamiento del DESCUENTO

²⁶⁵ Los emplazados indican que la racionalidad económica de este ejercicio se sustenta en que: (i) para aquellos USUARIOS cuya facturación bruta fue menor al umbral, el descuento no tuvo ningún impacto, porque no accedieron a éste; y (ii) para aquellos USUARIOS cuya facturación neta del DESCUENTO EXTRAORDINARIO fue mayor al umbral, el descuento aplicado únicamente disminuyó proporcionalmente su facturación bruta individual, sin generar un efecto de fidelización, pues su demanda, independientemente del descuento aplicado, habría superado el umbral. Asimismo, indican que para aquellos USUARIOS que accedieron al descuento, y que por lo tanto su facturación bruta individual fue mayor al umbral, pero que su facturación neta fue menor a éste, el descuento sí pudo generar un efecto de fidelización, pues su demanda, particularmente de las últimas unidades o unidades marginales, pudo estar motivada por el objetivo de alcanzar dicho umbral.

EXTRAORDINARIO no representó una restricción a la contestabilidad en el mercado de RC de PF.

Cabe reiterar, además, que los descuentos aplicables ex-post, sin penalización por cambio de proveedor previamente establecida por contrato, no son contrarios a la competencia ni cancelan la posibilidad de que los USUARIOS migren hacia proveedores más eficientes de IC que les puedan ofrecer un precio incluso inferior al precio con descuento ofertado por el proveedor original.

B

Para acreditar que se impidió el acceso a CC debe existir un nexo causal entre los descuentos imputados otorgados por TUM y el objeto de impedir el acceso. No obstante, el DPR se limita a afirmar, sin brindar elementos, que los descuentos imputados tuvieron por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso a CC en la comercialización de RC de PF, así como inhibir la entrada de más agentes económicos al mercado.

El DPR no acredita por qué la disminución de precios (a través del otorgamiento de los descuentos) tiene por objeto impedir sustancialmente el acceso a CC e inhibir la entrada de más agentes económicos al mercado. Tampoco explica por qué se redujo la posibilidad para una empresa entrante, de alcanzar la cuota mínima de USUARIOS para ser rentable. Únicamente menciona que ese es el objeto y efecto de los descuentos imputados, sin proveer una explicación y/o argumentación que le permita acreditar su dicho.

La AI debió acreditar que TUM tiene incentivos para establecer ese impedimento. No obstante, se acreditó que (i) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO es un descuento por volumen que busca incentivar el consumo de sus productos; y (ii) el DESCUENTO DEL 5.8% nació en beneficio de los USUARIOS dada la entrada en vigor de la obligatoriedad del RCI y con ello el incremento en el costo del RC que afectó los presupuestos de los USUARIOS de TUM. Dejando claro que el nexo causal entre los descuentos y el impedimento para que accediera CC y potenciales competidores al mercado está basado en especulaciones.

No se acredita el nexo causal entre la conducta imputada y sus supuestos efectos anticompetitivos.

De haber analizado el nexo causal, la AI hubiera podido concluir que no se impidió el acceso a CC y que, por el contrario, existe regulación que hace imposible que TUM lo desplace. De conformidad con la legislación aplicable y en relación con el otorgamiento del DESCUENTO DEL 5.8%, los USUARIOS deben consultar a dos SIC.

Eliminado: un párrafo

TUM, en aras de contrarrestar los efectos de dichas disposiciones otorga un descuento en beneficio de los USUARIOS. Por lo que hace al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el mismo es esencialmente un descuento por volumen, que por esa misma AI ha sido reconocido como un descuento que no tiene efectos anticompetitivos. En ese sentido si los DESCUENTOS ORDINARIOS (descuentos por volumen) no generan efectos anticompetitivos, entonces el DESCUENTO EXTRAORDINARIO tampoco.

Con base en la teoría de la *conditio sine qua non*, si los descuentos imputados fueran suprimidos esto no tendría efecto alguno en el mercado y la participación de CC no se vería afectada, ya que como ha quedado demostrado ésta creció por encima de su participación de mercado.²⁶⁶ De ahí que la AI carece de toda fundamentación para afirmar que el otorgamiento de los descuentos tiene por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso a CC en la comercialización del RC de PF, así como inhibir la entrada de más agentes económicos al mercado.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁶⁷

Para acreditar el objeto y efecto de la conducta, la AI recurrió a las propias manifestaciones de TUM realizadas a través de las ACTAS. Durante la investigación, TUM proporcionó versiones contradictorias respecto del objetivo de los descuentos que implementó durante el periodo analizado. En un principio, TUM llamó al DESCUENTO POR LEALTAD como DESCUENTO DEL 5.8%, y manifestó que su propósito era “mejorar las condiciones de los USUARIOS”. Asimismo, proporcionó información inexacta respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, cuyo verdadero nombre era «Rebate Extraordinario», cuyos montos otorgados en realidad fueron distintos.

Posteriormente, la AI encontró la motivación para implementar el DESCUENTO POR LEALTAD y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO. Considerando las propias manifestaciones de TUM, a través de las ACTAS, en el sentido de que el objeto de dichos descuentos fue

B” y “B”. Ello, sugiere que la racionalidad detrás de la implementación de dichos descuentos fue eliminar, completamente, la posibilidad de que dichos USUARIOS proporcionaran información a CC y adquirieran sus productos. Desde la perspectiva de la AI, no existe alternativa racional a la conducta de TUM más que impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PF. Ello, considerando que los descuentos aludidos representaron disminuciones importantes en las utilidades de TUM.

Por otra parte, el crecimiento de participaciones de CC en el número de USUARIOS afiliados se explica por el propio crecimiento del mercado: durante el periodo de análisis, CC afilió **. Ello no significa, sin embargo, que los grandes USUARIOS afiliados a TUM también se hubieran afiliado a

²⁶⁶ TUM, SEPZ y MAGR señalan que CC ha crecido de manera importante en el periodo analizado e inclusive en mayor proporción que TUM.

²⁶⁷ Páginas 252 a 267 de la VISTA TUM.

CC. Por lo tanto, es falsa la afirmación de que CC acapara parte del mercado que antes atendía TUM. El crecimiento de CC se ha dado a pesar de la práctica llevada a cabo por TUM y ningún beneficiario de los descuentos aludidos consumieron RC de CC. Por lo que hace al crecimiento de CC en créditos registrados y número de expedientes en su BD de PF, se aclara que dichos parámetros corresponden a otro fragmento de la cadena productiva, en específico, a la recopilación y procesamiento de información, por lo que ese hecho no afecta lo argumentado en el DPR.

La AI argumentó en el DPR que la política comercial de TUM tuvo por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de PF e inhibir la entrada de otros participantes. La AI juzgó que la racionalidad de la conducta llevada a cabo por TUM fue dañar el proceso de competencia en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, como también en el mercado de la comercialización de RC de PF. Al respecto, se argumentó en el DPR que TUM asignó precios menores a algún grupo crucial de consumidores, cargando un precio mayor al resto de compradores, y con ello, priva a su competidor directo de lograr una masa crítica de compradores que se requiere para resultar rentable.

Por tanto, la AI cuestiona la racionalidad económica de la conducta llevada a cabo por TUM. Simplemente, considerando el volumen total de descuentos otorgados, incluyendo el DESCUENTO ORDINARIO, exceden por mucho a los ingresos netos. Adicionalmente, considerando sólo los descuentos no contemplados en el CONTRATO MARCO TUM, se observa que exceden los ingresos de cualquier año del periodo analizado.

Dicho sacrificio de ingresos y beneficios no tiene ninguna racionalidad más que generar severos daños al proceso de competencia y libre concurrencia. Lo anterior, aunado al hecho de que la política comercial la dictan representantes de los ACCIONISTAS, difícilmente se puede encontrar otra explicación racional más que buscar impedir sustancialmente el acceso de CC a la comercialización de RC de PF.

En relación con el argumento según el cual la AI debió considerar el test "*As Efficient As*" y que el costo de producir un RC es menor que cualquier precio de TUM, la AI señala que la LFCE no establece, como condición para acreditar el objeto o efecto de una conducta, demostrar el desplazamiento de empresas al menos tan eficientes como la que está cometiendo la conducta. La LFCE establece que debe acreditarse que la conducta desplazó indebidamente a otros agentes económicos, impidió sustancialmente el acceso y que se establecieron ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos, en el mercado relevante o en algún otro mercado relacionado.

Adicionalmente, lo que cuestiona la AI, a través del DPR, es la reducción del precio base hasta obtener precios netos mucho menores para algunos USUARIOS. Todo parece indicar que la intención de la conducta fue retener a sus grandes CLIENTES con el objeto y efecto de impedir el crecimiento sustancial de CC.



49657

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Así, la AI cuestiona el trato distinto que TUM ofreció a los USUARIOS. En principio, como se acredita en el DPR, la política comercial de TUM tuvo por objeto obstruir el crecimiento de CC al establecer descuentos condicionados a no comprarle productos a la competencia; así como establecer umbrales de consumo para acceder a ellos. Del mismo modo, también la conducta tuvo el efecto de impedir que los beneficiarios de los descuentos que integraron la política comercial de TUM cambiaran de proveedor de RC de PF. En el DPR se enlistan a los USUARIOS que se afiliaron a CC durante el periodo analizado, concluyendo que ninguno de ellos compró RC de PF emitidos por esta última en ese periodo.

Por lo que hace a las manifestaciones relacionadas con el efecto de fidelización del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, TUM presenta conclusiones erróneas a partir de los datos que muestra. Expone que alrededor del **B** de la facturación anual proviene de los USUARIOS que no accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, y que, por tanto, facturaron menos de **B** en dos mil diez y dos mil once; y menos de **B** en dos mil doce e.

En este sentido, TUM arriba a una conclusión errónea cuando afirma que los descuentos retroactivos como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO sólo fideliza a los USUARIOS que consumen menos del umbral establecido. Salvo los ACCIONISTAS, el resto no conocía el monto que se repartiría entre ellos, pero sí sabían que, si permanecían leales a TUM, accederían a cada vez mayores descuentos. Lo anterior retuvo a los grandes USUARIOS, al reducir las posibilidades de que optaran por CC como proveedor.

No obstante, considerando como válidas estas cifras, lo anterior significa que los USUARIOS que sí accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO aportan el **B** de la facturación. Y, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, ellos represe on, en promedio, menos del **B** de la totalidad de los USUARIOS que adquirieron RC de PF **B** USUARIOS dura el periodo analizado). Lo anterior muestra la dependencia e va de TUM respecto de unos pocos de sus CLIENTES (desde luego, incluyendo a sus propietarios: los ACCIONISTAS). Dicho segmento de CLIENTES fue al que TUM le interesó fidelizar o mantener cautivo, no al grupo de menor facturación.

Así, y como se expone ampliamente en el DPR, TUM es dependiente de algunos CLIENTES grandes que aportan muchos registros y consumen RC en importantes cantidades, principalmente, los ACCIONISTAS. Por ello, a estos principales CLIENTES les otorgan descuentos indiscriminados, con el afán de retenerlos. La aplicación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO es una muestra patente de este razonamiento, se estableció un umbral para excluir a todos los USUARIOS poco relevantes y de los cuales TUM no depende, para que la porción correspondiente a los USUARIOS no accionistas se repartiera entre menos beneficiarios.

El DESCUENTO EXTRAORDINARIO, en combinación con el resto de los descuentos ofrecidos por TUM, redujeron significativamente los precios por RC pagados por los beneficiarios, lo cual contribuyó a mantenerlos cautivos, pues CC o cualquier otro

Eliminado: diez palabras

competidor tendría que ofrecerles menores precios a esos USUARIOS para que consumieran sus productos.

Respecto de las manifestaciones según las cuales el establecimiento de descuentos no es un mecanismo plausible de exclusión, se indica que al considerar las manifestaciones de TUM plasmadas en las ACTAS, donde se observa que el objeto de estos descuentos fue " " e incentivarlos " " " se advierte que la racionalidad de la conducta llevada a cabo por TUM fue proporcionar enormes descuentos a los USUARIOS de los cuales dependía, con el afán de acapararlos e impedir que balancearan su consumo con CC.

Por un lado, respecto del DESCUENTO POR LEALTAD, estuvo claro que el objeto de dicho descuento fue negarle información a CC para impedir que esta SIC incrementara su capacidad de atraer más CLIENTES y vender más productos. Así, los efectos de la conducta también fueron claros al impedir que cualesquiera de sus beneficiarios adquirieran productos de CC.

Por otro lado, y referente al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, como TUM bien señala, este descuento es en realidad un «Rebate», del tipo conocido como «retroactivo» porque impacta a todo el consumo cuando se supera un determinado umbral. Ello, debido al llamado «lock - in effect» o efecto retención, el cual implica que conforme el consumidor se acerca al umbral de consumo, la «penalización» por cambiar de proveedor se va haciendo más grande. Si un CLIENTE desea acceder a dicho rebate, tenderá a orientar y concentrar su consumo en una sola fuente. Si decide diversificar, disminuye la posibilidad de que cumpla con la meta señalada y, por ende, no recibirla el descuento. Para que le resulte atractivo la opción de diversificar tendría que obtener de su proveedor alternativo, en este caso, CC, un descuento lo suficientemente grande para cubrir no solo el porcentaje de descuento sobre las unidades adicionales que compre sino también sobre todas las unidades previas que compró entre enero y julio.

Por tanto, un «rebate retroactivo» induce a que los USUARIOS concentren su consumo en un solo proveedor, en vez de recurrir a múltiples fuentes, como le podría haber resultado más conveniente a los USUARIOS. Ello, se acentúa debido a la naturaleza contingente de este descuento, dada la incertidumbre por la cantidad total a repartir, y de cuánto podría recibir cada uno de los beneficiarios. Solo se sabe que se mantendrán las proporciones de participación en las compras y que el porcentaje de descuento a aplicar es mayor para los ACCIONISTAS, por lo que una oferta de descuento de CC tendría que implicar un porcentaje de descuento mayor para un ACCIONISTA que para un usuario no accionista.

Entonces, una de las consecuencias en materia de competencia económica más importantes de este tipo de descuentos, como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es que restringen las alternativas para los USUARIOS, esto es, generan preferencia «artificial» por determinados proveedores que no se explica por la calidad, ni por el precio, sino por el objetivo de superar el umbral establecido y por el otorgamiento de porcentajes de descuento más grandes para los ACCIONISTAS, disminuyendo la demanda residual de los

Eliminado: diez palabras



49657

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

otros competidores en el mercado. Así, se considera que uno de los efectos de un «Rebate», como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es que reduce la demanda contestable, y si la conducta la lleva a cabo un agente con PS, seguramente conlleva al desplazamiento de actuales o potenciales competidores.

Respecto de los argumentos según los cuales no se acredita un nexo causal entre el otorgamiento de descuentos y el supuesto impedimento a CC y potenciales competidores se remite a lo señalado en las páginas 252 y 260 a 264 del DPR. Asimismo, el nexo causal señalado por TUM, SEPZ y MAGR recae en las premisas de que CC ha crecido, que los descuentos por los que se imputa responsabilidad son por volumen y por hacer frente al aumento del costo del RC que afectó los presupuestos de los USUARIOS de TUM, así como que existe regulación que hace imposible que desplace a CC. Sin embargo, todas y cada una de ellas son falsas y no desvirtúan el DPR. En particular, no es cierto que la LRSIC obliga al USUARIO a consultar ambas SIC (artículo 36 BIS). El USUARIO puede optar por un RC individual pero no es obligatorio. Sin embargo, el RC de PF sí implica que entre las SIC se compartan información, en consecuencia, como se señaló en el análisis del MERCADO INVESTIGADO del DPR, este intercambio de información entre las SIC, obliga a la SIC originadora a pagar una contraprestación a la SIC complementaria, la cual está condicionada a que, como resultado de la consulta de información, se obtenga información considerada como HIT, lo que, tendrá repercusión en la tarifa que se cobra al USUARIO. Por ello, se reafirma lo señalado en el DPR de que *“un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de PF de la otra SIC”,* y por ello, *“los efectos de red presentes en este mercado incrementaron los costos para cambiarse de proveedor, ya sea a uno nuevo que recién esté incorporándose a la industria u otro agente con una BD de PF de menor magnitud, pues existe una predilección marcada por acceder a la red más grande. Dicho efecto se acentúa cuando se generan beneficios o incentivos adicionales para permanecer con un proveedor”.*

En este sentido, existe un nexo causal entre la política de precios y descuentos, por los que se les imputa probable responsabilidad, porque incrementar los costos de un USUARIO de TUM para afiliarse y adquirir RC de PF de CC, lo cual también sucedería para competidores potenciales, tiene como consecuencia impedir el acceso al MR DE PF.

Por otro lado, son falsas las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR de que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO sea esencialmente un descuento por volumen, porque como se acreditó en el DPR, no existe un criterio o mecanismo de asignación claro, transparente, objetivo ni eficiente en términos económicos, salvo el objeto y efecto señalado en el DPR, tan es así que incluso se benefició de este descuento a TU LLC, que no es USUARIO y que no adquiere RC de PF. El umbral de asignación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO en sí mismo es elevado porque excluye a los USUARIOS de poder participar de este beneficio. Del total de USUARIOS que consumieron productos de TUM pocos accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, en el dos mil diez sólo el

B tuvo acceso, en el dos mil once sólo el B
tuvo acceso, en el dos mil doce sólo el
y en el dos mil trece sólo el B

En relación con el DESCUENTO DEL 5.8%, también son falsas las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR de que hubiese sido para beneficiar a los USUARIOS por la entrada en vigor de la obligatoriedad del RC. Como se acreditó en el DPR, el criterio no contó con un mecanismo de asignación. De la información proporcionada por TUM o que obra en el EXPEDIENTE, se advierte únicamente una presunta justificación para su implementación. Sin embargo, al igual que sucede con el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y demás descuentos por los que se les imputa responsabilidad, el DESCUENTO DEL 5.8% benefició principalmente a los ACCIONISTAS, ya que sólo accedieron a éste B USUARIOS, de éstos B USUARIOS recibieron un promedio de B de este descuento, lo que representó únicamente el B del monto total entregado por el DESCUENTO DEL 5.8%. Por su parte, los ACCIONISTAS tuvieron el B del monto total otorgado por el DESCUENTO DEL 5.8%. Por ello, las afirmaciones falsas de TUM, SEPZ y MAGR los llevan al error de afirmar que no se acredita el nexo causal entre el otorgamiento de descuentos por los cuales se le imputa probable responsabilidad e impedir sustancialmente el acceso de CC y de otros competidores potenciales al MR DE PF. Los elementos por los cuales esta AI acredita que sí existe tal nexo causal se pueden resumir de la siguiente manera: (a) Un USUARIO tiene incentivos por afiliarse y adquirir RC de PF de la SIC cuya BD de PF sea la más grande, porque las probabilidades de requerir interconexión con otra es menor (porque existirían consultas entre SIC con NO HITS), lo que tiene como consecuencia que dicha SIC no le traslade ese costo de interconexión al USUARIO; (b) los efectos de red presentes en este mercado incrementaron los costos de un USUARIO para cambiarse de SIC; (c) los efectos se acentúan cuando se generan beneficios o incentivos adicionales para permanecer con una SIC, lo que acontece con los descuentos por los que se imputa probable responsabilidad a TUM; (d) la política de precios y descuentos de TUM incrementó los costos -aún más de lo que ya eran debido al efecto red- de un USUARIO de TUM para afiliarse a CC; (e) disminuyó la capacidad de CC para competir en la comercialización de RC de PF, no sólo por los efectos de red sino también por el incremento de costos para CC, y le impidió un crecimiento orgánico, lo que aplicaría para cualquier competidor potencial que quisiera entrar al MR DE PF; (f) de los B USUARIOS que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, ** se afiliaron CC, durante el periodo que fue implementado; (g) durante los cinco años en que se implementó ese descuento, ** se afiliaron a CC; (h) ninguno de los beneficiarios del DESCUENTO DEL 5.8% se afilió a CC mientras fue implementado y sólo B se afilió a CC después de la puesta en práctica de este descuento; (i) ninguno de los ACCIONISTAS de TUM adquirió RC de PF de CC (ni siquiera B y B que se afiliaron a CC).

Eliminado: sesenta y dos palabras

Todo lo anterior confirma CC no pudo crecer de forma orgánica en el MR DE PF debido a que los anteriores hechos disminuyeron la demanda (residual) que enfrentaba CC, por lo que, si hubiera cesado la discriminación de precios, la participación de mercado de CC hubiera sido significativamente superior a las presentadas históricamente.

Máxime si se considera, como se señaló en el DPR, que los ACCIONISTAS son demandantes de los productos de TUM que representaron el "(...) ******* del total de los RC de PF comercializados [por TUM] y el ******* de las ventas brutas generadas por este reporte para TUM [asimismo] la venta de RC de PF a los ACCIONISTAS equivale al ******* de la totalidad de los ingresos brutos generados por TUM (...)" y que incluso el ******* de los registros que conforman la BD de TUM proviene de los ******* USUARIOS favorecidos sólo por el DESCUENTO EXTRAORDINARIO.

Adicionalmente, la AI manifiesta que lo alegado por TUM, SEPZ y MAGR no ataca la imputación contenida en el DPR, por lo que no trasciende ni es suficiente para combatir las imputaciones hechas en su contra.

Los empleados realizan diversos argumentos para acreditar que la conducta no tuvo por objeto o efecto desplazar indebidamente a sus competidores. No obstante, la imputación realizada en el DPR no refiere que la conducta haya tenido como objeto o efecto desplazar a otros competidores, sino que ésta impidió sustancialmente el acceso de CC, así como de otros competidores potenciales al MR DE PF, con una dimensión geográfica nacional.

En este sentido, los argumentos relativos a que no se acreditó que el objeto o efecto de la conducta sea o pueda ser el de desplazar indebidamente a sus competidores son **inoperantes** ya que **no combaten** la imputación realizada en el DPR.

Ahora bien, son **fundados** los argumentos de TUM, SEPZ y MAGR relativos a que: (i) existen elementos dentro del EXPEDIENTE que permiten concluir que los descuentos imputados no tuvieron la incidencia dañina referida en el DPR sobre el proceso de competencia y libre concurrencia; (ii) no existe ninguna evidencia de que el objeto o efecto de los descuentos fuera impedir que los USUARIOS se afiliaran a CC, y (iii) no se advierte ni acredita un nexo causal entre la discriminación de precios imputada y el impedimento de acceso a CC o a los potenciales competidores de TUM.

El DPR señala que la política de descuentos "[...] *premió el consumo de los grandes Usuarios con el objeto y efecto de retenerlos e impedir que se afiliaran con otra SIC. Así, la conducta buscó limitar la capacidad de elección de los Usuarios y redujo la posibilidad de que los grandes consumidores recurran a otros proveedores de RC de PF, a saber, Circulo de Crédito. Al retenerlos, la conducta también desincentivó la incursión de nuevos competidores en el mercado relevante*".

No obstante, de los elementos que obran en el EXPEDIENTE no se acredita que la discriminación de precios generada a través de la implementación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% tuviera el objeto o efecto de impedir el acceso a CC y a otros competidores potenciales al MR DE PF debido a lo siguiente:

Por una parte, la imputación realizada en el DPR se refiere al supuesto establecido en la fracción X del artículo 56 de la LFCE. Ello es relevante debido a que el efecto de retención en los USUARIOS referido en el DPR, esto es, el incentivo a quedarse en TUM, podría generarse no meramente por un trato diferenciado entre los distintos tipos de USUARIOS (es decir, la discriminación de precios imputada), sino por la existencia de descuentos cuyas características (montos, estructura o condiciones para su otorgamiento) pudieran generar dicha "fidelidad".

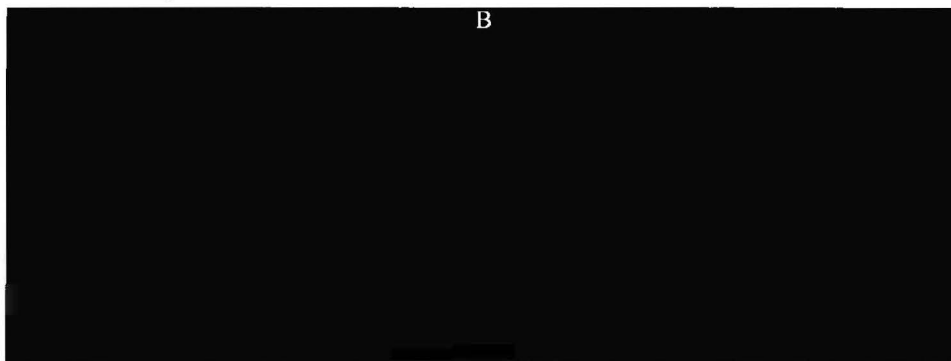
Así, en el presente caso no existe un nexo causal entre el establecimiento de distintos precios y la retención de los USUARIOS por TUM, puesto que la elección de los USUARIOS de quedarse con TUM se relaciona con los beneficios que les ofrece TUM respecto de los demás competidores y no por la diferencia en el trato generada por TUM a diversos USUARIOS.

Por otra parte, como se explica a continuación, el DPR no acredita cómo es que los montos de los descuentos, su estructura o las condiciones para el otorgamiento de los descuentos imputados existentes (esto es, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8%) influyen en las decisiones que toman los USUARIOS respecto de su consumo de RC de PF y la supuesta "lealtad" o "fidelidad" a TUM, de manera que no se advierte ni acredita un nexo causal entre la discriminación de precios imputada y el impedimento de acceso de CC o sus potenciales competidores

En primer lugar, el precio ofertado por TUM sin considerar los descuentos imputados ya genera por sí mismo incentivos suficientes para que los USUARIOS permanezcan con TUM.

A continuación, se muestra una tabla que permite comparar los precios promedios por RC de PF que habrían sido cobrados por TUM sin considerar los descuentos imputados y los precios promedios cobrados por CC:

B



Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM y CC, que obra en los folios 23129 y 6034 del EXPEDIENTE.

Como se observa, incluso sin los descuentos imputados, el precio promedio cobrado por TUM genera incentivos para que los USUARIOS consuman los productos de TUM y no de los de CC.

Es decir, de existir un incentivo de los USUARIOS a mantenerse con TUM, este se produce por la existencia del DESCUENTO ORDINARIO, el cual no está imputado y significó la mayor reducción en los precios ofertados por TUM.

Eliminado: un párrafo

Lo anterior es relevante debido a que tan sólo el DESCUENTO ORDINARIO hace más atractiva para los USUARIOS la oferta de TUM respecto de CC. Como se observa en la tabla denominada "Precios promedio por reportes de crédito PF", el precio promedio cobrado por TUM, sin considerar el impacto de los descuentos imputados existentes, es [REDACTED] B [REDACTED] y, de este modo, tiene la capacidad de generar incentivos para que los USUARIOS [REDACTED] B [REDACTED]

Por otra parte, la falta de afiliación a CC por los USUARIOS afiliados a TUM guarda relación con la ausencia de incentivos para que los USUARIOS cuenten con dos proveedores, ya que pueden acceder a un precio menor a través de un RCI pagando la tarifa de intercambio que solicitando dos RC independientes, uno a cada SIC. Lo anterior, ya que [REDACTED] ** [REDACTED]

268

Adicionalmente, el hecho de que [REDACTED] B [REDACTED] genera incentivos para que dichos bancos consuman los productos de TUM, puesto que al final son partícipes de las utilidades provenientes de dichas ventas (así como beneficiarios de sus descuentos), y en este sentido, podrían preferir consumir los productos de TUM que los de CC.

En efecto, los USUARIOS-ACCIONISTAS, con quienes TUM se encuentra verticalmente integrado, representan, de acuerdo con las propias cifras referidas en el DPR, el [REDACTED] ** [REDACTED] del total de los RC de PF comercializados y el [REDACTED] ** [REDACTED] de las ventas brutas generadas por este reporte para TUM.²⁶⁹

De este modo, del EXPEDIENTE no se desprenden elementos de convicción suficientes para acreditar que los USUARIOS que no se afiliaron a CC o que no consumieron sus productos hayan actuado de esa manera debido a los descuentos imputados, ni que TUM hubiera establecido la diferencia de precios entre USUARIOS para impedir que éstos se afiliaran a CC o consumieran sus productos.

En este sentido, no se advierte ni acredita un nexo causal entre la discriminación de precios imputada en el DPR y la hipótesis sobre el impedimento de acceso de CC y de competidores potenciales al MR de la comercialización de RC de PF.

Asimismo, para evitar mayores repeticiones y en relación con los demás señalamientos que realiza la AI relativo al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, se remite a los señalamientos realizados previamente en el presente apartado, así como al apartado "El DESCUENTO EXTRAORDINARIO no estuvo orientado para favorecer principalmente a los ACCIONISTAS" de la presente resolución.

268

B

269 Véanse las páginas 258 y 259 del DPR.

V. Conclusiones.

En términos de lo descrito en los numerales I a V del apartado “III. I Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE” de la presente resolución, este PLENO considera que no existen elementos suficientes en el EXPEDIENTE para sustentar la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de la comisión por TUM de la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

Asimismo, no existen elementos suficientes en el EXPEDIENTE para sustentar la imputación presuntiva contenida en el DPR en contra de TU LLC, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER, BANORTE, HSBC, SCOTIABANK, MAGR y SEPZ toda vez que, al no haberse acreditado la comisión por TUM de la PMR imputada en el DPR, no es posible concluir que dichas personas hubieran propiciado la comisión de dicha práctica o participado en ella de forma directa en representación de TUM.

Al respecto, la fracción XI del artículo 127 de la LFCE señala que se impondrá una “[m]ulta hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario vigente [...] a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de prácticas monopólicas [...]”.

En este sentido, para que se configure el supuesto normativo, es necesario que se determine la comisión de una práctica monopólica respecto de la cual los emplazados hayan coadyuvado, propiciado o inducido.

Así, la imputación realizada a una persona física o moral por coadyuvar, propiciar o inducir una práctica monopólica, se encuentra sujeta a que, en primer lugar, se determine la existencia de la práctica monopólica y, en segundo lugar, se acredite su participación como coadyuvante, propiciador o inductor de ésta.

Lo anterior es consistente por analogía con lo señalado por la Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 626/2012, en el cual indicó lo siguiente respecto de la responsabilidad de las personas físicas que actúan en representación de una persona moral:

“[...]

52. De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos con anterioridad se extrae que la actualización de la responsabilidad que en este caso se pregona para las personas físicas, como integrantes de una persona moral, se constituye a partir de los elementos consistentes en:

a) La existencia de una práctica monopólica absoluta.

b) La participación directa del individuo en la conformación de esa conducta ya en representación o bien por cuenta y orden de la persona moral involucrada.

53. Se trata de la previsión de un modelo de responsabilidad que presupone un medio de participación en la ejecución de una infracción autónoma a la que se vincula, y con la que a pesar de ello guarda diferencias configurativas.

54. Dicho de otra manera, en lo que aquí importa, las conductas sancionables que el legislador decidió reservar para el ámbito de actuación de las personas físicas vinculadas con determinada empresa son aquellas que involucran una manera de participación específica en la ejecución de

prácticas monopólicas absolutas, cuya actualización, aun cuando depende de la verificación de éstas, adquiere una dimensión distinta en cuanto a su extensión y medios de comprobación.

55. Esto es así porque, como se veía, si bien la demostrada existencia de una práctica monopólica absoluta, en cualquiera de sus formas, constituye el punto de partida de la responsabilidad que puede alcanzar a las personas físicas, también lo es que no es ésta, en lo individual, lo que en ese plano la Ley reprocha a tales sujetos, sino más bien su participación directa en la ejecución con base en condiciones especiales; de ahí que la verificación de su actualización o no debe atravesar por la necesaria atención de medios de convicción específicos, exclusivos para ese ámbito, que no necesariamente coinciden con los que pueden llevar a la comprobación de la práctica monopólica y viceversa [...].²⁷⁰

En este sentido, la determinación de la responsabilidad de TU LLC, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER, BANORTE, HSBC, SCOTIABANK, MAGR y SEPZ dependía de la acreditación de la comisión de la PMR por TUM.²⁷¹

Por lo anterior, no es necesario entrar al estudio, análisis y valoración del resto de los argumentos y las pruebas presentadas por TUM, SEPZ, MAGR, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER, BANORTE, HSBC y SCOTIABANK,²⁷² toda vez que el análisis de dichos elementos no cambiaría las conclusiones referidas.

No pasa desapercibido que bajo el apartado titulado "ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DE NEGATIVA DE TRATO" de su contestación al DPR,²⁷³ BANAMEX realizó diversas manifestaciones respecto de la imputación relativa a la probable PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE. No obstante, tal como manifiesta el propio BANAMEX "no se

²⁷⁰ Páginas 24 y 25 de la Versión Pública de dicha ejecutoria, la cual se encuentra disponible para su consulta en la página de Internet: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144601>, consultada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

²⁷¹ Sirve de apoyo por analogía la siguiente jurisprudencia: "**PARTICIPACIÓN ACCESORIA DEL ACUSADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO. DEBE ACREDITARSE PRIMORDIALMENTE EL DESAPODERAMIENTO ILEGAL DEL VEHÍCULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).** Para tener por acreditada la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de robo de vehículo, en términos del artículo 11, fracción VII, del Código Penal del Estado de México, abrogado, es necesaria la demostración de los siguientes elementos: a) que alguien se apodere sin derecho ni consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley, de un objeto mueble (autor principal); b) que otra persona, por acuerdo anterior a la consumación del delito, auxilie al autor principal; de esa manera, si no se acreditó a través de medio probatorio alguno que el propietario del vehículo afecto a la causa, cuya existencia acreditó la fe ministerial y que fuera encontrado en el domicilio del peticionario de garantías, haya sido desapoderado ilícitamente del mismo, no se configura el supuesto principal o sustancial que requiere la fracción VII del artículo 11 en mención, lo cual técnicamente impide estimar al inconforme como partícipe accesorio del delito, porque para que se surta la participación accesorio que se imputa al amparista, resultaba necesario que primero se hubiese acreditado que alguien desapoderó a su propietario injustamente del vehículo mencionado. Tesis Aislada 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, febrero de 2001; Pág. 1777. II, I.o.P.88 P. Registro No. 190293.

²⁷² Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "**AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.** Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conducirla si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado". Jurisprudencia VI.2o.A. 1/9; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Enero de 2006; Pág. 2147; Registro No. 176 398.

²⁷³ Páginas 86 a 113 de dicha contestación al DPR.

trata de una conducta imputada [a BANAMEX]”, por lo que dichos argumentos no se analizan en la presente resolución.

Al respecto, en términos de los artículos 81 y 83, fracción I, de la LFCE, únicamente el emplazado, esto es, a quien se considera probable responsable por la realización de una práctica monopólica o una concentración prohibida, puede manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio que se tramita en términos de los artículos 80, 81, 82 y 83 de la LFCE.²⁷⁴

En este sentido, BANAMEX no fue emplazado y no es probable responsable de cometer o participar de forma alguna en la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, por lo que no es parte ni cuenta con interés jurídico para realizar manifestaciones al respecto en términos de los artículos 82 y 83 de la LFCE.²⁷⁵

Lo anterior máxime cuando las conclusiones a las que llegué este PLENO respecto de la acreditación o no de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, en nada trascienden en la imputación realizada en contra de BANAMEX.

III. 2 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Previo al análisis de los argumentos señalados por DUN para desvirtuar el DPR, se indica que en la VISTA DUN, la AI reiteró todo lo señalado en el DPR y solicitó que se tuviera por ciertos los hechos sobre los que DUN no se pronunció: “[...] se reiteran las consideraciones contenidas en el DPR, de las que se desprenden elementos de convicción suficientes para sustentar la probable responsabilidad de DUN, cuestión que deberá ser tomada en cuenta por el Pleno de la COMISIÓN al momento de emitir la resolución correspondiente. [...] se manifiesta que los hechos sobre los cuales no se haya pronunciado DUN respecto del DPR deberán tenerse por ciertos de conformidad con lo establecido en el artículo 83, fracción I, párrafo segundo de la LFCE”.²⁷⁶

En este sentido, al analizar los argumentos de DUN este PLENO toma en consideración, tanto lo señalado en el DPR como las manifestaciones de la AI y advierte que efectivamente DUN no combatió: (i) ser un agente económico; (ii) no haber intercambiado la BPD; y (iii) no haber

²⁷⁴ El artículo 81 de la LFCE establece claramente que “son partes en el procedimiento seguido en forma de juicio, el Agente Económico contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y la Autoridad Investigadora”. Asimismo, en la fracción I del artículo 83 de la LFCE se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente: “Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente y un plazo de cuarenta y cinco días improrrogables para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo. El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de probable responsabilidad [...]”.

²⁷⁵ BANAMEX manifestó que “interesa a [BANAMEX] compartir las siguientes apreciaciones con la Comisión”, esto es, BANAMEX señaló que tenía interés en “compartir” con la COMISIÓN diversas apreciaciones relativas a la negativa de trato imputada únicamente a DUN. Sin embargo, se reitera que BANAMEX no es parte ni tiene interés jurídico en términos de los artículos 81 y 83 de la LFCE para realizar manifestaciones y/o presentar pruebas en contra de la imputación que corresponde a la negativa de trato descrita en el DPR. De hecho, BANAMEX ni siquiera explica o acredita por qué considera que es parte o tiene interés jurídico en términos de la LFCE para dichos efectos.

²⁷⁶ Página 1 de la Vista DUN.

proporcionado la información completa para la elaboración de los RC de PM en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC,²⁷⁷ por tal motivo, se tienen por ciertos los hechos referidos.

Con independencia de lo anterior, a continuación, se analizan los argumentos señalados por DUN:

I. Manifestaciones sobre cuestiones intraprocesales y/o diversas violaciones:

A. La investigación constituye una pesquisa general violatoria de los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

DUN manifestó:²⁷⁸

El DPR resulta ilegal al ser violatorio de los artículos 14 y 16 de la CPEUM, ya que la investigación constituye una pesquisa en mi contra, toda vez que inició para verificar la posible comisión de las PMR previstas en las fracciones X u XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y X u XI del artículo 56 de la LFCE (como se desprende del aviso de investigación IO-001-2015 publicado en el DOF el cuatro de febrero de dos mil quince) y, con base en ello, la AI me realizó un requerimiento de información. Dicho requerimiento no acreditaba que la información requerida resultaba relevante y pertinente para el procedimiento de investigación, tan es así que, no obstante, no era objeto de la investigación, se me emplazó con motivo de la posible comisión de la práctica prevista en la fracción V del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE.

Por tanto, todos los actos de investigación debieron tender a la comprobación de dichas conductas y no otras, puesto que, si así lo hubiera pretendido la AI, estas debían haber sido incluidas en el objeto de la investigación.

La AI me solicitó documentos e información que detalló en el REQUERIMIENTO, argumentando que la información requerida resultaba relevante y pertinente para el procedimiento respectivo. Al efecto, la AI estableció lo siguiente: "*Ahora bien, [TUM] y [DUN], son agentes económicos que guardan relación con los hechos que se investigan [...] al participar en el [MERCADO INVESTIGADO], se encuentran relacionados con los hechos que son materia del presente procedimiento de investigación y pueden tener información relevante y necesaria para sustanciar debidamente el presente procedimiento de investigación y cumplir con el objeto de la LFCE [...]*". Para pretender justificar la relevancia y pertinencia señaló: "*La información y documentos solicitados [...] se estiman necesarios [...] toda vez que tienen el propósito de allegarse de la información o los elementos de convicción, para estar en posibilidad de determinar si existen o no las conductas investigadas, previstas en las fracciones X y/o XI del artículo 10 de la [LEY ANTERIOR], así como las fracciones X y/o XI del artículo 56 de la LFCE. Asimismo, son relevantes y*

²⁷⁷ DUN alega, entre otras cuestiones, que la definición del SEGMENTO CO contenida en el DPR es incorrecta y que, en su opinión el "*Verdadero Segmento CO*" no forma ni ha formado parte del HC y en consecuencia tampoco de la BPD de PM de DUN. Dichos argumentos y todos los demás contenidos en la CONTESTACIÓN DUN se analizan en la presente resolución. No obstante, DUN no combate que no entregó la IC completa para la elaboración de RC de PM.

²⁷⁸ Páginas 6 a 10 de la CONTESTACIÓN DUN.

pertinentes para que la COFECE esté en posibilidad de realizar el análisis a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 13 bis de la [LEY ANTERIOR], los artículos 58 y 59 de la LFCE; los artículos 11, 12 y 13 del RLFCE, así como los artículos 5, 7, 8 y 9 de las DISPOSICIONES".

Lejos de indicar los motivos específicos por los que consideraba que en cada caso la información requerida resultaba relevante, pertinente y necesaria para la investigación, la AI se limitó a señalar de manera genérica que dicha relevancia radicaba, en un primer término, en el carácter de participante en el MERCADO INVESTIGADO, y en segundo, en el simple hecho de que la documentación requerida supuestamente le permitiría allegarse de los elementos de convicción necesarios para estar en posibilidad de determinar la probable existencia de conductas contrarias a la LFCE, sin que del REQUERIMIENTO se desprenda cuáles son las conductas que en su caso se acreditarían con esa información, ni se acredite que la información requerida resulta pertinente, relevante y necesaria en relación con los hechos materia del procedimiento de investigación. Justificación que, por su generalidad, podría predicarse con respecto a cualquier requerimiento de información que en cualquier procedimiento de investigación formulara la COMISIÓN.

Así, la justificación no puede ser considerada como la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la CPEUM y, por lo tanto, constituye una pesquisa.

En la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 707/2012; se determinó que los informes y documentación requeridos por la CFC deben estar vinculados con la investigación y ser relevantes para la misma. Aun cuando no se establezca en la legislación secundaria, la obligación de demostrar que la información requerida está vinculada a la investigación y es importante para la misma, deviene del principio constitucional de legalidad.

El legal ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 73 de la LFCE, depende necesariamente de que la COFECE demuestre que la información requerida ineludiblemente resulta importante y conducente; de lo contrario, el requerimiento resulta ilegal al constituir un ejercicio indebido de dicha atribución.

Derivado del ilegal REQUERIMIENTO de información, al haber proporcionado toda la información que me requirieron, esa AI concluyó en el DPR que la conducta que me fue atribuida es una completamente distinta a aquellas por las que se inició la investigación y en relación con las cuales, supuestamente, se solicitó la información. La propia AI reconoce en la página 51 del DPR que fue derivado de la investigación que tuvo por presuntamente acreditada la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Asimismo, de los trece (13) elementos probatorios analizados por la AI (páginas 295 y 296 del DPR), al menos seis (6) derivan directamente de la información que proporcioné en desahogo del REQUERIMIENTO y sus reiteramientos.

Ello demuestra que la AI me requirió información de una manera tan genérica y tan amplia que, con base en ésta, me imputó una conducta en nada relacionada con la investigada, lo que constituye una pesquisa ilegal e inconstitucional.

Si la AI encontró algún indicio de la posible actualización del supuesto previsto en el artículo 56 fracción V, debió iniciar una investigación independiente.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁷⁹

Tal como se señaló en el ACUERDO DE INICIO, los actos que pudieran constituir violaciones a la LFCE se determinarían con la emisión del DPR, toda vez que el ACUERDO DE INICIO se refirió únicamente al inicio de un procedimiento de investigación en el que aún no se habían identificado en definitiva las conductas que constituyeron una violación a la LFCE, ni los probables responsables de una infracción a la misma, pues la LFCE únicamente exige contar con una causa objetiva para el inicio de una investigación, es decir, cualquier indicio de la existencia de una práctica monopólica. Por ello, dicho procedimiento de investigación no puede entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la LFCE.²⁸⁰

Así, en caso de considerar que existen elementos para acreditar conductas que pudieran ser violatorias de la LFCE, la AI emitirá el DPR en el cual deberán precisarse las conductas presuntamente violatorias de la LFCE, así como la normativa que, se presume ha sido transgredida. Al momento de la emisión del DPR es cuando la AI debe fundar y motivar la imputación respecto de la probable violación de determinada disposición de la LFCE, por lo que no está impedida ni obligada a imputar en el DPR las mismas posibles violaciones señaladas en el acuerdo de inicio respectivo. Por lo tanto, es incorrecto que los actos de la investigación debieron ser todos tendientes a comprobar las conductas señaladas en el ACUERDO DE INICIO.

Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

Los argumentos y las manifestaciones de DUN resultan **infundados**, de conformidad con los siguientes razonamientos:

DUN argumenta que la investigación realizada por la AI constituye una pesquisa por haber señalado en el ACUERDO DE INICIO que la investigación tenía por objeto verificar la comisión de las PMR previstas en las fracciones X y XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR, o en el artículo 56, fracciones X y XI de la LFCE; y finalmente haber imputado a DUN su responsabilidad por la comisión de la conducta prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE. DUN señala que todos los actos de investigación debieron tender a la comprobación

²⁷⁹ Páginas 5 a 7 de la VISTA DUN.

²⁸⁰ La AI refiere el siguiente criterio: "**PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. LA CAUSA OBJETIVA QUE MOTIVA SU INICIO NO CONDICIONA NI LIMITA LA CONDUCTA QUE PUEDE IMPUTARSE EN EL OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD.**" Tesis I.1o.I.1o.A.E.224 A (10a.), Registro:2016301. *Semanario Judicial de la Federación*, publicada el veintitrés de febrero de 2018.

de las conductas referidas en el ACUERDO DE INICIO y que, si la AI encontró algún indicio de la posible actualización del supuesto previsto en el artículo 56 fracción V, ésta debió iniciar una investigación distinta e independiente.

Al respecto, el ACUERDO DE INICIO señala lo siguiente:

"[...]

Aviso del inicio de la investigación de oficio bajo el número de expediente IO-001-2015, por la posible realización de conductas que podrían actualizar lo dispuesto por los artículos 10, fracciones X o XI, 11, 12, 13 y 13 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce, disposición vigente al momento en que posiblemente se realizaron las conductas que dan origen a esta investigación correspondiente al periodo de abril de dos mil catorce; así como el artículo 56, fracciones X o XI de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete de julio del mismo año (LFCE), disposición vigente al momento de la presente investigación respecto de todas las posibles conductas que se pudieran acreditar con posterioridad a la entrada en vigor de la LFCE en el mercado relevante que se determine dentro del mercado investigado relativo a la 'GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CREDITICIA'.

Lo anterior en la inteligencia de que los actos que puedan constituir violaciones a la LFCE habrán de determinarse, en su caso, en el dictamen de probable responsabilidad a que se refiere el artículo 79 y 80 de la LFCE, toda vez que el presente acuerdo se refiere únicamente al inicio de un procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la LFCE, ni está determinado en definitiva el o los sujetos a quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma.

El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, tal como se dispone en el segundo párrafo del artículo 54 de las Disposiciones Regulatorias de la LFCE, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la LFCE, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la misma, se procederá en términos de los artículos 78 y 80 de la LFCE.

[...] [Énfasis añadido]."²⁸¹

Así, en el ACUERDO DE INICIO se señaló que la investigación comenzó para indagar la posible realización de conductas que podrían actualizar lo dispuesto en las fracciones X o XI, del artículo 10 de la LEY ANTERIOR, así como fracciones X o XI del artículo 56 de la LFCE. Como se advierte, se señaló que dichas disposiciones podrían llegar a actualizarse, como una posibilidad, sin emitir un juicio definitivo o final sobre la actualización de alguna conducta.

Lo anterior, ya que precisamente la investigación tiene como objeto verificar si existen elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos por posibles violaciones a la normativa de competencia, siendo que la AI tiene un conocimiento muy limitado al dictar el ACUERDO DE INICIO de los hechos que pueden constituir una infracción a la LFCE. En este sentido, el ACUERDO DE INICIO solo tuvo como objeto dar a

²⁸¹ Folios 011 y 012.

conocer la investigación que se estaba llevando en el MERCADO INVESTIGADO con la finalidad de darle publicidad para que cualquier persona pudiera coadyuvar. Sin embargo, no contiene imputación alguna, ni constituye un acto de molestia o un prejuzgamiento respecto de agentes económicos responsables o probables conductas a sancionar.

Asimismo, nada limita a la AI a que como consecuencia de la investigación y la información recabada de conformidad con la LFCE y las DR, a través de requerimientos de información y otras diligencias, emita un DPR en el que se determine una probable responsabilidad por conductas que presuntamente actualizan fundamentos jurídicos distintos a los señalados en el ACUERDO DE INICIO, precisamente porque es durante la investigación cuando la AI se allega de la información para poder esclarecer y definir concretamente las conductas, los agentes económicos y los fundamentos jurídicos aplicables.

Es importante distinguir que los fundamentos jurídicos que se describen en un acuerdo de inicio únicamente constituyen la justificación de que existe una causa objetiva, es decir un indicio suficiente para iniciar una investigación. Sin embargo, la emisión de un acuerdo de inicio es un acto tan preliminar que no prejuzga sobre la existencia de las conductas o los responsables de estas, ni existe limitante para que en el curso de la investigación y con la información suficiente la AI amplíe los hechos, conductas e hipótesis normativas que potencialmente podrían culminar en una imputación a determinados agentes económicos a través de un DPR.

Al respecto, el PJF estableció el siguiente criterio:

“PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. LA CAUSA OBJETIVA QUE MOTIVA SU INICIO NO CONDICIONA NI LIMITA LA CONDUCTA QUE PUEDE IMPUTARSE EN EL OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD. *El ejercicio de la facultad de investigación de la autoridad de competencia económica requiere de una causa objetiva que le sirva de motivo o la legitime para averiguar respecto de información o datos en poder de personas físicas o morales; de ahí que deba existir correspondencia entre los hechos que serán motivo del procedimiento de investigación y algún precepto posiblemente infringido, pero sin limitar las amplias facultades indagatorias previstas en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que éstas pueden concluir con una declaratoria sobre esos hechos u otros más que se descubran o conozcan durante la investigación e, incluso, por la violación a una norma diversa de la Ley Federal de Competencia Económica. En ese contexto, sólo la conclusión final o terminal será el tema de imputación que determine el alcance y contenido del oficio de probable responsabilidad, el cual no podrá variarse, alterarse o adicionarse, al ser base y fundamento de la presunta infracción. En otras palabras, la causa objetiva es el sustento tanto del inicio de la facultad indagatoria, como de las consecuentes acciones de la autoridad para desarrollarla, porque se vincula con las razones que la motivaron, sin que ello la obligue o vincule a emitir un oficio de probable responsabilidad en el que se impute únicamente la conducta señalada como causa objetiva, pues ésta se puede ampliar, perfeccionar, modificar, definir o sustituir, si por los datos, información y conocimientos adquiridos, la autoridad tiene conocimiento de otras transgresiones a la ley que deben ser igualmente sancionadas, entendidas como concausas objetivas o suficientes*

*para determinar cuál debe ser el presupuesto del oficio de probable responsabilidad. [Énfasis añadido]*²⁸²

Del criterio anterior se desprende lo siguiente:

- El ejercicio de la facultad de investigación de la AI requiere de una causa objetiva que le sirva de motivo o la legitime para averiguar respecto de información o datos en poder de diversas personas, pero dicha causa objetiva no puede limitar las facultades indagatorias previstas en el artículo 28 de la CPEUM;
- La investigación puede concluir con una declaratoria sobre los hechos conocidos al inicio de esta u otros más que se descubran o conozcan durante la investigación, e incluso por la violación a una hipótesis normativa diversa prevista en la LFCE;
- La causa objetiva es el sustento tanto del inicio de la facultad indagatoria, como de las consecuentes acciones de la autoridad para desarrollarla, sin que ello obligue o vincule a la AI a emitir un oficio o dictamen de probable responsabilidad en el que se impute únicamente la conducta señalada como causa objetiva, pues ésta se puede ampliar, perfeccionar, modificar, definir o sustituir, si por los datos, información y conocimiento adquiridos, la autoridad tiene conocimiento de otras transgresiones a la ley que deben ser igualmente sancionadas.
- El oficio de probable responsabilidad (ahora dictamen de probable responsabilidad) es el que sirve de base y fundamento de la presunta infracción, por lo que no puede variarse, alterarse o adicionarse.

El PSFJ inicia con la emisión del Dictamen de Probable Responsabilidad, en el cual se imputa a uno o más agentes económicos la probable comisión de prácticas monopólicas contrarias a la ley de la materia, y constituye la base sobre la cual deben descansar las resoluciones de carácter sancionatorio; en este último es donde el emplazado tendrá la posibilidad de desvirtuar los hechos que se le imputan, a través del ofrecimiento de los medios de prueba que considere pertinentes, para concluir con la emisión de una resolución en la que se determinará si se cometieron o no las prácticas monopólicas y, en caso de acreditarse su comisión, la autoridad impondrá la sanción correspondiente.

En caso de que el acuerdo de inicio de la investigación contenga una causa objetiva distinta a la imputación realizada en el Dictamen de Probable Responsabilidad no produce indefensión al agente investigado, pues dicha actuación constituye el inicio de esa etapa, en la cual, aún no hay imputación alguna ni mucho menos una determinación sobre la probable responsabilidad del agente.

Por lo tanto, la AI no está limitada a acotar la imputación definida en un dictamen de probable responsabilidad a las hipótesis normativas señaladas en un acuerdo de inicio, por lo que, si derivado de la investigación, la AI conoció elementos adicionales que le permitieron presumir

²⁸² Tesis I.1o.I.1o.A.E.224 A (10a.), Registro:2016301. *Semanario Judicial de la Federación*, publicada el veintitrés de febrero de 2018.

una posible transgresión a la normativa de competencia distinta a aquella por la cual se inició la presente investigación, la AI podía imputarla.

El hecho de que la LFCE señale que se debe especificar en el ACUERDO DE INICIO la probable violación a investigar no implica que la AI se deba acotar a esta al emitir el dictamen de probable responsabilidad, pues en la fase de investigación no existe aún la identificación de los hechos que puedan constituir una infracción.²⁸³ Es hasta la emisión del DPR, una vez concluida la investigación (y por lo tanto posterior a la emisión del ACUERDO DE INICIO e, incluso, posterior a la emisión del REQUERIMIENTO), que se definen las fracciones y artículos que se actualizan en concreto, y por la que corresponde emplazar a los probables responsables a un PSFJ.

Lo anterior, fue reconocido por la propia AI en el ACUERDO DE INICIO al señalar que: “[...] toda vez que el presente acuerdo se refiere únicamente al inicio de un procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la LFCE, ni está determinado en definitiva el o los sujetos a quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma. [...] [Énfasis añadido]”

En este sentido, es razonable que una vez que la AI ha concluido con las respectivas diligencias y se ha allegado de los elementos de convicción necesarios, al concluir la existencia de diversas conductas del mismo MERCADO INVESTIGADO y teniendo los elementos objetivos, decida emplazar por las conductas que actualizan los supuestos previstos en la LFCE como actos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. Tal es el caso del EXPEDIENTE en el que se decidió emplazar a DUN por la posible comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Por lo tanto, es **infundado** el argumento de DUN en el sentido de que al emitirse el DPR que establece una probable responsabilidad para DUN con base en una conducta distinta a la que se señaló en el ACUERDO DE INICIO y con fundamento en disposiciones jurídicas adicionales, la investigación se trate de una pesquisa, y que si la AI encontró algún indicio de la posible

²⁸³ Sirve de sustento la siguiente tesis: “**COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE INVESTIGACIÓN DE ACTOS QUE SE ESTIMAN LESIVOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTICULARES, QUE EFECTÚA DICHO ÓRGANO, NO ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.** Del examen de lo dispuesto en los artículos 24, fracción I, 30 y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, se advierte que la Comisión Federal de Competencia tiene facultades para iniciar, de oficio, un procedimiento de investigación para determinar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas por la propia ley, para lo cual podrá requerir de los particulares y demás agentes económicos los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate; sin embargo, estos proveídos no constituyen fases de un procedimiento que se tramite en forma de juicio, sino sólo el inicio de un procedimiento investigador en el que no existe aún la identificación de los hechos que puedan constituir una infracción, ni está determinado el sujeto a quien deberá oírse en defensa como probable responsable de una infracción a la ley. Luego, los referidos proveídos se ubican dentro de la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de las autoridades administrativas, previsto en la primera parte de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo y, por tanto, el quejoso no tiene que esperar a que se dicte resolución definitiva para promover la demanda de garantías. Tesis Aislada, 9a. época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, agosto de 2000; Pág. 103. P. CVIII/2000. Número de registro 191363.

actualización del supuesto previsto en el artículo 56 fracción V, debió iniciar una investigación independiente, pues contrario a lo que argumenta DUN, la AI actuó dentro de los límites legales correspondientes, y tanto el ACUERDO DE INICIO, como el DPR y la investigación se apegaron a derecho.

Asimismo, resultan **infundados** los argumentos tendientes a señalar que la investigación realizada por la AI constituye una pesquisa y que el REQUERIMIENTO se encuentra indebidamente motivado y fundado, de conformidad con lo siguiente.

DUN señala que la AI le solicitó información y documentación mediante el REQUERIMIENTO sin indicar los motivos específicos por los que consideraba que la información requerida resultaba relevante, pertinente y necesaria para la investigación, por lo cual dicha investigación constituye una pesquisa. Por otra parte, DUN señala que el REQUERIMIENTO de la AI fue tan genérico y tan amplio que, con base en éste, se le imputó una conducta en nada relacionada con la conducta supuestamente investigada.

Asimismo, DUN señala que, de los trece elementos probatorios analizados por la AI, al menos seis derivan directamente de la información que proporcionó en desahogo al REQUERIMIENTO y sus reiteraciones.

Respecto a la supuesta ilegalidad del REQUERIMIENTO de información, el artículo 12, fracción III, de la LFCE, señala que: *“La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: [...] III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; [...] [Énfasis añadido]”*.

Asimismo, el artículo 28 de la LFCE establece que: *“La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: [...] II. Conducir las investigaciones sobre probables violaciones a esta Ley, para lo cual podrá requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos y, en su caso, realizar visitas de verificación; [...] [Énfasis añadido]”* y el artículo 73 de la LFCE establece que: *“La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones [...] [Énfasis añadido]”*.

En este sentido, el artículo 119 de la LFCE indica que: *“Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la Comisión o con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en el término de diez días la información, cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le sean requeridos; de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir que se realicen las visitas de verificación [...] [Énfasis añadido]”*.

Así, la LFCE establece la facultad con la que cuenta la AI para requerir la información que estime necesaria para realizar sus investigaciones y la obligación de los agentes económicos para proporcionar la información requerida.

Esta facultad no está limitada a los hechos conocidos al inicio de la investigación. Ello debido a que el objetivo de la investigación es precisamente descubrir o conocer, durante el transcurso de dicha investigación, hechos que puedan constituir una violación a la LFCE y no es sino hasta la emisión del DPR que se puede generar una afectación que pudiera trascender como un acto privativo en la esfera jurídica de los agentes económicos.²⁸⁴

Ahora bien, es cierto que la facultad de requerir información debe observar los principios de debida fundamentación y motivación. En este sentido, el REQUERIMIENTO fue emitido en concordancia con lo señalado por el artículo 57 de las DR,²⁸⁵ el cual indica los requisitos con

²⁸⁴ Véase al respecto el criterio contenido en la siguiente tesis: "COMPETENCIA ECONÓMICA. DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, IGUAL QUE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO RIGE EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La finalidad que se persigue tanto con la integración de una averiguación previa por el Ministerio Público, como con la fase de investigación que lleva a cabo la Comisión Federal de Competencia Económica es, sustancialmente, prevenir y proteger el interés general, en el primer caso, mediante la conservación del orden público y la seguridad de los gobernados a través de la prevención y el castigo de los delitos y, en el segundo, proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios, con el fin de permitir el libre acceso de consumidores y productores en condiciones de igualdad en beneficio de la colectividad, sancionando severamente prácticas monopólicas. Correlativamente, una vez acreditadas e imputadas las conductas configuradoras del ilícito, se abre una segunda etapa, esta vez ante un órgano distinto, de carácter sancionador que, eventualmente, puede emitir un acto de privación, el cual requiere como antecedente de legitimidad, seguir un procedimiento en forma de juicio donde se respete el debido proceso legal con el fin de asegurar un auténtico, real y funcional derecho de defensa para rebatir las imputaciones. Así, el Estado, para conseguir los objetivos del procedimiento de investigación, lleva a cabo un sinnúmero de actos que pueden implicar molestias o, excepcionalmente, intervenciones que constituyen límites y restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a la necesidad de ejercer las pesquisas con la mayor eficiencia, siempre que se consideren inevitables y justificadas en razón de existir intereses sociales así como otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación de derechos, en cuanto condición para promover el bienestar general. En este orden de ideas, la afectación que pudieran ocasionar los actos llevados a cabo durante la investigación administrativa o la averiguación previa, será hasta que concluya la fase de investigación y, a partir del momento en que se emita el oficio de probable responsabilidad o se consignen los hechos ante la autoridad judicial, será posible verificar un acto de privación, pues en esa fase es donde se determina la conducta o los hechos que configuran presuntivamente un delito, una práctica monopólica o concentración prohibidas, así como la identificación del probable responsable. Lo anterior lleva a concluir que durante la fase de investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica, igual que en la averiguación previa a cargo del Ministerio Público, no rige el debido proceso legal en términos de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque durante esos periodos no se efectúan actos tendientes a disminuir o privar de manera definitiva de sus derechos a los agentes económicos involucrados o al indiciado." [Énfasis añadido] Número de Registro: 2003937. I.4o.A.58 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Pág. 1357

²⁸⁵ El artículo referido estipula lo siguiente: "ARTÍCULO 57. El requerimiento de información que realice la Autoridad Investigadora durante los procedimientos de investigación debe contener:

- I. Un extracto del acuerdo de inicio del procedimiento, que debe incluir el mercado que se investiga, el número de expediente correspondiente y, en su caso, la mención de la o las fechas en que se acordó ampliar el periodo de investigación. En el caso del procedimiento de investigación por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, el extracto debe contener el artículo de la Ley que se estime posiblemente actualizado;
- II. La relación que guarda el requerido con el mercado que se investiga o con la materia del procedimiento;
- III. En el caso del procedimiento de investigación por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, el carácter que tiene el requerido en el procedimiento que se tramita;
- IV. El derecho que le asiste al requerido para solicitar que cierta información sea clasificada como confidencial en términos del artículo 125 de la Ley; y
- V. La obligación que tiene de proporcionar la información o documentos requeridos, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo que sea fijado y las consecuencias del incumplimiento al requerimiento o de presentar información falsa.

los que deben contar los requerimientos de información que emita la AI en ejercicio de sus facultades, a efecto de que estos se encuentren debidamente fundados y motivados.

En específico, mediante el REQUERIMIENTO: (i) se hizo del conocimiento de DUN el inicio de la investigación; (ii) se transcribió un extracto del ACUERDO DE INICIO, en el cual se incluyó el MERCADO INVESTIGADO, el número de expediente correspondiente y los artículos de la LEY ANTERIOR y de la LFCE que se estimaban posiblemente actualizados; (iii) se indicó que el PERIODO DE INVESTIGACIÓN se encontraba vigente a la fecha de emisión del REQUERIMIENTO; (iv) se señaló el MERCADO INVESTIGADO; (v) se explicó por qué DUN guardaba relación con los hechos materia del procedimiento de investigación y se indicó que podía tener información relevante y necesaria para sustanciar debidamente el procedimiento de investigación y cumplir con el objeto de la LFCE al participar en el MERCADO INVESTIGADO; (vi) se especificó que el carácter que guardaba DUN en la investigación era como tercero coadyuvante que participa en el MERCADO INVESTIGADO; (vii) se señaló a DUN que, en caso de que considerara que cierta información tenía el carácter de confidencial, debía señalarlo, acreditarlo y presentar un resumen; (viii) se le indicó a DUN la obligación de proporcionar la información y documentos requeridos, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo fijado y las consecuencias del incumplimiento al REQUERIMIENTO y de presentar información falsa; (ix) se le explicó a DUN que la información y documentos solicitados se estimaban necesarios para el procedimiento ya que tenían el propósito de allegarse de información para estar en posibilidad de determinar la existencia de las conductas investigadas, así como que eran relevantes y pertinentes para que la COFECE estuviera en posibilidad de realizar el análisis de MR y PS; y (x) se detallaron las preguntas concretas que la AI requirió a DUN responder.

Así, la AI cumplió con todos los requisitos que impone la normativa de competencia para la elaboración de requerimientos e incluso señaló que dicha información resultaba necesaria, relevante y pertinente para el procedimiento de investigación respectivo.

DUN argumenta que la AI no indicó los motivos específicos por los que consideraba que en cada caso la información requerida resultaba relevante, pertinente y necesaria para la investigación; no obstante, el hecho de que la AI deba justificar jurídicamente el requerimiento no implica que tenga que hacerse una referencia pormenorizada por cada rubro, documento o género de éste, ni por cada elemento o bloque de información, toda vez que no se encuentra obligada a revelar las líneas de investigación de manera que se afecte la eficiencia de la COFECE, tal como se desprende del siguiente criterio judicial:

“REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADO POR LA AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL HECHO DE QUE DEBA JUSTIFICARSE JURÍDICAMENTE, NO IMPLICA QUE TENGA QUE HACERSE UNA REFERENCIA PORMENORIZADA POR CADA RUBRO, DOCUMENTO O GÉNERO DE ÉSTE, NI POR CADA ELEMENTO O BLOQUE DE INFORMACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014). Conforme a los artículos 24, fracción I y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, vigente hasta el 6 de julio de 2014, el órgano

Al requerimiento se anexará copia certificada del acuerdo de suplencia del servidor público que emite el requerimiento, cuando corresponda. [...] [Énfasis añadido].”

regulador en la materia está facultado para requerir a los gobernados la información o documentación que estime relevante y pertinente para sus investigaciones, esto es, la que considere necesaria o conveniente para conocer los mercados relativos, los sujetos que participen en ellos, las condiciones en que se desarrollan, así como los datos que puedan ser reveladores de hechos de los cuales pueda advertirse la comisión de una práctica anticompetitiva en ellos. Estos requerimientos, como todo mandato de autoridad que imponga una carga al gobernado, deberán justificarse jurídicamente, en la inteligencia de que es la información lo que permite a la autoridad desplegar sus funciones, entre las que se encuentran las de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes de la materia, y la correctiva, en caso de que advierta que los agentes económicos realizan prácticas contrarias al proceso de competencia y a la libre concurrencia y tomar las decisiones, por lo que la información y los documentos que solicite deben guardar una razonable conexión con la materia de la investigación correspondiente. Sin embargo, esta exigencia no debe considerarse como una referencia pormenorizada por cada rubro, documento o género de éste, ni por cada elemento o bloque de información, de manera que afecte la eficiencia del órgano, pero debe ser suficiente para verificar que no se trata de un ejercicio arbitrario ni caprichoso de sus atribuciones [énfasis añadido]".

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 37, diciembre de 2016; Tomo II; Pág. 1851. I.Io.A.E.188 A (10a.); Registro No. 2 013 354.

En este sentido, mediante el REQUERIMIENTO la AI señaló que la información y documentos solicitados se estimaban necesarios para el procedimiento ya que tenían el propósito de allegarse de información para estar en posibilidad de determinar la existencia de las conductas investigadas, así como que eran relevantes y pertinentes para que la COFECE estuviera en posibilidad de realizar el análisis de MR y PS.²⁸⁶ Asimismo, indicó que DUN podía tener información necesaria y relevante para la investigación derivado de que participa en el MERCADO INVESTIGADO.²⁸⁷

Por lo anterior, la AI justificó correctamente el REQUERIMIENTO de información realizado a DUN, máxime cuando de la lectura de las preguntas y solicitudes de información y documentos se advierte que éstos están encaminados a obtener información necesaria, relevante y pertinente para la investigación. En específico, en el REQUERIMIENTO se solicitó información y documentos "para conocer los mercados relativos, los sujetos que participan en ellos, las condiciones en que se desarrollan, así como los datos que puedan ser reveladores de hechos de los cuales pueda advertirse la comisión de una práctica anticompetitiva". Entre ellos, se solicitó información y documentos relacionados con la estructura y funcionamiento del MERCADO

²⁸⁶ "La información y documentos solicitados en todos y cada uno de los numerales contenidos en el anexo antes citado, se estiman necesarios [...] toda vez que tienen el propósito de allegarse de la información o los elementos de convicción, para estar en posibilidad de determinar si existen o no las conductas investigadas, previstas en las fracciones X y/o XI del artículo 10 de la [LEY ANTERIOR], así como las fracciones X y/o XI del artículo 56 de la LECE. Asimismo, son relevantes y pertinentes para que la COFECE esté en posibilidad de realizar el análisis a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 13 bis de la [LEY ANTERIOR], los artículos 58 y 59 de la LFCE; los artículos 11, 12 y 13 del RLFCE, así como los artículos 5, 7, 8 y 9 de las [DR]". Página 4 del REQUERIMIENTO.

²⁸⁷ "[...] [TUM] y [DUN], son agentes económicos que guardan relación con los hechos que se investigan [...] al participar en el [MERCADO INVESTIGADO], se encuentran relacionados con los hechos que son materia del presente procedimiento de investigación y pueden tener información relevante y necesaria para sustanciar debidamente el presente procedimiento de investigación y cumplir con el objeto de la LFCE [...]".

INVESTIGADO y de los agentes económicos que participan en él; así como de los productos que se ofrecen, sus ventas, tarifas, insumos, sustitutos, proveedores y demandantes.

Incluso, DUN no señala ninguna información o documentación que hubiera sido solicitada y que no fuera necesaria, relevante y/o pertinente para la investigación y únicamente se limita a señalar una supuesta falta de motivación en la solicitud.

Ni en la LFCE, ni en otro ordenamiento aplicable a la materia, existe la obligación de demostrar *“que la información requerida al particular ineludiblemente resulta importante y conducente para la indagatoria correspondiente”*.²⁸⁸ Ello debido precisamente a que es a través de las respuestas que proporcionen los requeridos por la AI, así como de otros elementos, que se obtiene un cúmulo de información que en su momento será analizada y administrada con otros elementos de convicción para llegar a conclusiones que trasciendan al DPR que se llegue a emitir.

De conformidad con los razonamientos, fundamentos legales y criterios del PJF expuestos no es posible exigir a la AI que demuestre al realizar un requerimiento, que la información requerida *“ineludiblemente”* resulta importante y conducente para la indagatoria, pues para dicho momento la AI aún no cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse respecto de los hechos y las normas que se consideran contrarios a la LFCE (como se indicó, ello sólo es exigible al momento de la emisión del DPR), por lo que no puede haber un pronunciamiento *ex ante* por la AI de que la información que solicita trascenderá o no a la imputación.

Por lo tanto, contrario a lo señalado por DUN, que la AI se basara en mayor o menor medida en la información y documentación solicitada en el REQUERIMIENTO y sus reiteraciones para acreditar una conducta distinta a las señaladas en el ACUERDO DE INICIO es acorde a la normativa de competencia, ya que la AI puede utilizar, para efectos de la emisión de su DPR, todos los elementos de convicción que considere necesarios, relevantes y relacionados con la materia investigada, tanto de los agentes económicos requeridos que finalmente resulten probables responsables como de otros agentes económicos que coadyuven en la investigación, en términos del artículo 73 de la LFCE.

En virtud de lo expuesto, no se advierte una violación a los derechos de DUN por los actos realizados por la AI, en particular el REQUERIMIENTO o sus reiteraciones, tendientes a identificar y conocer las conductas que podrían constituir una violación a la LFCE,

B. Violación a diversos derechos humanos por no dar acceso a la totalidad de la información que resultaba indispensable para poderse manifestar sobre su contenido.

DUN manifestó:²⁸⁹

Se violan mis derechos humanos de defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad jurídica al

²⁸⁸ Folio 34418.

²⁸⁹ Páginas 10 a 17 de la CONTESTACIÓN DUN. Folios 34419 a 34426.

impedirme conocer la totalidad de los hechos en los que la AI motiva su resolución, y con ello limita la posibilidad de que éstos sean combatidos.

En la versión del DPR que me fue entregada existe diversa información clasificada como confidencial que no pude consultar para la elaboración de las manifestaciones a pesar de haberlo solicitado y aunque la propia AI utilizó la misma como los hechos que motivaron el DPR, citándola de manera testada. Lo anterior en una franca violación del derecho humano de audiencia.²⁹⁰

Asimismo, con el concepto “formalidades esenciales del procedimiento”, la CPEUM hace referencia al “debido proceso”, respecto del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (...) acto del Estado que pueda afectarlos”. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales debe respetar el debido proceso legal.²⁹¹

Conforme al artículo 1º de la CPEUM todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos -entre ellos, el derecho de audiencia- debiendo a la luz del principio *pro homine*, favorecer en todo momento la protección más amplia a favor de las personas.

Así, ignorar el mandato constitucional, como lo hizo la AI, implica el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional de velar por la máxima efectividad y eficacia en la protección a los derechos fundamentales en atención al principio *pro homine*, obligatorio para todas las autoridades que integran al Estado Mexicano.

La SCJN ha establecido en jurisprudencia²⁹² los elementos indispensables para garantizar al gobernado una adecuada y oportuna defensa previa al acto de privación por la autoridad, a saber: (1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (3) la oportunidad de alegar; y (4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

²⁹⁰ DUN refiere la jurisprudencia, de rubro: “AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA. ESTA GARANTÍA”. Jurisprudencia 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, agosto de 2008; Pág. 799. I.7o.A. J/41. Registro no. 169 143

²⁹¹ DUN refiere que este criterio se contiene en varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por ejemplo, en el caso Ivcher Bronstein, sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 102 y en la opinión consultiva 18/03, párrafo 123.

²⁹² DUN hace referencia a las siguientes jurisprudencias: (i) “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.” Jurisprudencia 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, diciembre de 1995; Pág. 133. P./I. 47/95. Registro no. 200 234; y (ii) “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFINITIVO” Jurisprudencia 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, septiembre de 2003; Pág. 553. 2a./I. 80/2003. Registro no. 183 211

Así, la primera formalidad esencial del procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado también exige poner a su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del referido procedimiento.

Esta primera formalidad exige un conocimiento completo del acto, tal y como lo estableció el Pleno de la SCJN al señalar que el conocimiento que del acto de autoridad tenga el particular debe ser cierto y para ello se requiere que la notificación sea eficaz, porque de otra manera, notificar de cualquier manera al particular sin cuidar que tenga conocimiento del acto de autoridad que pueda tener interés en impugnar, es hacer nugatoria la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la CPEUM.²⁹³

En el mismo sentido, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la SCJN,²⁹⁴ el derecho fundamental de audiencia exige que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse.

Lo anterior incluso fue reconocido por la AI, ya que en el ACUERDO DE ACCESO la AI manifestó que *"a efecto e [sic] emplazar a los Probables Responsables [...] y que estén en posibilidad de conocer los elementos señalados en el artículo 79, fracciones II, III y IV de la LFCE y ejercer los derechos que les confiere el artículo 83, fracción I de la LFCE, [...] esta [AI] considera indispensable permitir el acceso a los Probables Responsables a determinada información relacionada con los hechos materia de las probables prácticas monopólicas, así como a las pruebas y a los demás elementos de convicción [...] aun cuando haya sido considerada con el carácter de confidencial [...] a fin de que en el emplazamiento se conozcan los elementos de imputación a que hace referencia el artículo 79 de la LFCE, los cuales resultan necesarios para el debido desahogo del [PSFJ] a que se refiere el artículo 89 de la LFCE"*. La AI manifestó que su determinación se motiva exclusivamente en la necesidad de hacer accesible a los probables responsables cierta información necesaria para hacer efectiva su defensa.

Con base en lo anterior, mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, solicité acceso completo, sin limitación y condicionante alguna, con carácter de urgente a la información clasificada como confidencial dentro del DPR. Lo anterior en el entendido que dicha información resultaba necesaria para hacer efectiva mi defensa y bajo la premisa de que el acceso a dicha información no

²⁹³ DUN hace referencia a la jurisprudencia: "COOPERACIÓN, DERECHOS DE CITACIONES PERIODÍSTICAS (LEY DE PLANIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE)." Tesis Aislada 7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 103-108, Primera Parte; Pág. 146. Registro no. 232 706

²⁹⁴ DUN hace referencia a la jurisprudencia: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA." Jurisprudencia; 7a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen 199-204, Tercera Parte; Pág. 85. Registro no. 237 291

desconoce su naturaleza de información confidencial. Máxime cuando existe información respecto de la cual no se explica la clasificación de confidencialidad.

No obstante, el acceso a dicha información confidencial fue negado, mediante el acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete con base, esencialmente, en las siguientes razones: (i) la ST tiene la obligación de resguardar y proteger la información confidencial; (ii) si bien por regla general los agentes económicos con interés jurídico deben tener acceso al expediente, la información confidencial constituye una excepción a dicha regla; (iii) la ST no puede modificar la clasificación realizada por la AI; (iv) diversa información fue adminiculada con diversos elementos para sustentar el análisis que con base en la misma se realiza y las conclusiones o señalamientos que derivan de esa información no fueron testados o se puede acceder a ellos en el EXPEDIENTE; (v) diversa información si bien se encontraba testada en el DPR, se encuentra disponible para su consulta en el EXPEDIENTE. Asimismo, el ST señaló en el ACUERDO DE ACCESO que en todo caso corresponde al PLENO resolver respecto de la afectación a mis defensas por la clasificación de la AI.

En virtud de lo anterior, presenté el INCIDENTE solicitando acceso a determinada información, el cual se desechó argumentando que el análisis relativo a la trascendencia de la información confidencial en el ejercicio de los derechos de defensa debe realizarse por el PLENO al emitir la resolución que ponga fin al procedimiento.

Derivado de tal negativa, resulta evidente la violación procesal en mi perjuicio que transgrede mis derechos humanos de defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad jurídica, todos ellos protegidos constitucional y convencionalmente.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:²⁹⁵

DUN interpreta el ACUERDO DE ACCESO como un reconocimiento de AI a su garantía de audiencia, lo que, a su entender, lo posibilita para tener acceso a toda la información de carácter confidencial que solicite, por considerarla necesaria para hacer efectiva su defensa. No obstante, como se puede apreciar en el acuerdo, la AI hizo del conocimiento de DUN información clasificada como confidencial dentro del EXPEDIENTE y contenida en el DPR, ya que dicha información era de su conocimiento al estar relacionado directa o indirectamente con la misma o porque se trataba de datos que podían desprenderse de fuentes de acceso público. De no haberse configurado estos supuestos, no podría haberse hecho del conocimiento de DUN.

DUN se duele del acuerdo del primero de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual la ST le niega el acceso a la información confidencial solicitada sin limitante y condición alguna. Esta AI comparte los razonamientos expuestos por la ST y agrega que no se

²⁹⁵ Páginas 7 a 12 de la VISTA DUN. Folios 43549 al 43554.

advierte que la información solicitada por DUN haya trascendido a la imputación contenida en el DPR y, en consecuencia, no se advierte de qué manera pudieran haberse afectado sus derechos. DUN no acreditó que la información implicara un *thema probandi*, ya que se limitó a señalar que esta información resultaba indispensable para su defensa, sin motivar su dicho. Por lo anterior, los argumentos de DUN deben ser desestimados.²⁹⁶

En concreto, la información que fue solicitada por DUN fue: participaciones de mercado en la determinación de poder sustancial; información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos de una empresa; los métodos de evaluación de costos, secretos y procesos de producción; cantidades producidas y vendidas; tarifas y precios de los RC; políticas internas, entre otras. Dar a conocer la información solicitada podría causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, revelar datos personales cuya difusión requiere de su consentimiento o poner en riesgo la seguridad de los agentes económicos que la proporcionaron. Por lo tanto, esa información debe ser manejada con reserva, al tratarse de secretos y datos personales, bajo tutela constitucional.

De ahí que la LFCE sea enfática al establecer el tipo de información que se considera confidencial, por lo que esta restricción legal es acorde con los límites que la propia CPEUM impone al acceso a la información, pues los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten límites, los cuales corresponde al legislador ordinario estipular en ley.²⁹⁷

Por último, la identificación de información confidencial y, por tanto, la restricción de su acceso no implica el desconocimiento del contenido del artículo 1º de la CPEUM. Por el contrario, ha sido criterio de la SCJN que si bien la reforma a dicho numeral, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona o *pro homine*), ello no significa que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de no observarlos, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.²⁹⁸

²⁹⁶ La AI señala la tesis de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. PARA DETERMINAR SI ES INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA DEFENSA DE LAS PARTES EN EL AMPARO SE REQUIERE DE UNA LABOR ARGUMENTATIVA, A PARTIR DE LA INVOCACIÓN DE HECHOS CONCRETOS, QUE EVIDENCIE LA ACTUALIZACIÓN DEL FIN O PROPÓSITO LEGAL PREVISTO". Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo III; Pág. 2308. I.1o.A.E.50 K (10a.). Registro no. 2 011 560.

²⁹⁷ La AI refiere el siguiente criterio de la SCJN: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES". Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo III; Pág. 2133. I.1o.A.E.133 A (10a.). Registro no. 2 011 541

²⁹⁸ La AI refiere el siguiente criterio: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU

Por todo lo anterior, deben desestimarse los argumentos expuestos por DUN, los cuales además no atacan la imputación contenida en el DPR.

Son **infundados** los argumentos de DUN de conformidad con las razones que se expresan a continuación.

DUN señala que la versión del DPR es ilegal en tanto que le impide conocer la totalidad de los hechos en los que la AI motiva su resolución y, con ello limita la posibilidad de que dichos hechos sean combatidos. Asimismo, DUN indica que la negativa de la ST de darle acceso a determinada información que se encontraba testada en la versión del DPR que se le notificó, configura una violación procesal en perjuicio de sus derechos de defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad jurídica.

Al respecto, mediante el escrito presentado en la OFICIALÍA el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete,²⁹⁹ DUN solicitó el acceso a diversa información testada del DPR, sin limitación y condicionante alguna, al considerar que *“dicha información resulta necesaria para hacer efectiva la defensa de mi representada y bajo la premisa de que el acceso a dicha información no desconoce su naturaleza de información confidencial, por lo que la misma será utilizada única y exclusivamente para la preparación de la defensa de mi representada, sin que se lleve a cabo de manera alguna su divulgación”*.

En virtud de dicho escrito, mediante el acuerdo de primero de diciembre de dos mil diecisiete,³⁰⁰ el ST señaló, entre otras cuestiones,³⁰¹ lo siguiente respecto de la solicitud de acceso a información confidencial formulada por DUN:

“[...]

Por lo que respecta a la información clasificada dentro del EXPEDIENTE como confidencial por la [AI] a la que hace referencia el inciso i) anterior,³⁰² se le indica a [...] DUN [...] que no se acuerda de conformidad con lo solicitado en virtud de las siguientes consideraciones:

A.- Obligación de resguardar la información confidencial.

El artículo 3, fracción IX de la [LFCE] define qué debe entenderse por información confidencial, en los siguientes términos:

‘Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

[...]

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL”. Jurisprudencia; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo II; Pág. 772. 2a./I. 56/2014 (10a.). Registro no. 2 006 485

²⁹⁹ Folios 32140 a 32152.

³⁰⁰ Folios 32246 a 32259

³⁰¹ Con independencia de las consideraciones generales que se transcriben, mediante dicho acuerdo el ST analizó de manera específica cada registro respecto del cual DUN solicitó acceso. Lo anterior, será analizado más adelante en el presente argumento.

³⁰² Dicho inciso se refiere a: *“Información testada en el DPR por la [AI] que fue identificada o clasificada como confidencial mediante acuerdos emitidos por el [DGIM] y que el Titular de la [AI] no refiere en el [ACUERDO DE ACCESO], es decir, la [AI] clasificó o identificó dicha información como confidencial y no consideró indispensable permitir el acceso a ella a los probables responsables mediante el [ACUERDO DE ACCESO]”*.

LX. Información Confidencial: Aquella que de divulgarse puede causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación;

[...]

Por su parte, el artículo 124 de la LFCE establece específicamente lo siguiente en relación con las personas que pueden tener acceso a un expediente en la secuela de un procedimiento que hubiese sido tramitado por la [AI] y la excepción prevista en la LFCE en materia de acceso a la información identificada como confidencial:

'Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, únicamente los Agentes Económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a aquella información clasificada como confidencial. [Énfasis añadido]

Asimismo, en su artículo 125, la LFCE establece que la COFECE tiene la obligación de resguardar la información identificada como confidencial de conformidad con lo establecido en dicho precepto:

'Artículo 125. [...]

La Comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información Confidencial ni podrá publicarla y deberá guardarla en el seguro que para tal efecto tenga.

[...] [Énfasis añadido]'

Dicha obligación también se encuentra establecida en el artículo 55 del [ESTATUTO]:

'Artículo 55.- Los servidores públicos que laboren en la Comisión deberán guardar confidencialidad, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia, respecto de la información y documentación que por razones de su trabajo manejen y que estén relacionadas con la tramitación de los procedimientos radicados ante la Comisión.

El incumplimiento a esta disposición se sancionará en los términos de la legislación administrativa aplicable y sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial en la que se incurra por la divulgación de la información y documentación.'

Por su parte, el artículo 35 del [REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA], señala lo siguiente:

'Artículo 35. Los expedientes relacionados con asuntos que tramite la Comisión en el ejercicio de sus funciones, en tanto no se actualice lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley General y 98 de la Ley, se registrarán única y exclusivamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia. En este caso, las Unidades Administrativas identificarán y separarán la información a que se refiere la fracción IX del artículo 3 de la Ley de Competencia, para evitar que los demás Agentes Económicos con acceso al expediente puedan consultarla, reproducirla u obtener copias de la misma, en perjuicio del titular de esa información. Para identificarla se elaborarán carátulas que señalen la fecha en la que se acordó su archivo por separado, el tipo de información de que se trate, el fundamento legal, el agente económico que es titular de la información y, se adjuntará el resumen elaborado por el agente económico o por la Comisión, según corresponda.' [Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones antes citadas, la Secretaría Técnica tiene una obligación de resguardar y proteger la información confidencial del Expediente.

B.- Excepción al derecho de acceso a la información que obra dentro de un expediente.

Si bien los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho de acceder al expediente durante la secuela del procedimiento –en este caso, en el [PSFJ] que se tramita dentro del Expediente en términos de lo previsto en el artículo 83 de la LFCE–, el artículo 124 de la LFCE expresamente exceptúa la posibilidad de acceder a la información que ha sido previamente identificada como confidencial.

‘Artículo 124. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, será considerada como Información Reservada, Información Confidencial o Información Pública, en términos del artículo 125.

Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, únicamente los Agentes Económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a aquella información clasificada como confidencial.

[...] [Énfasis añadido]’

Asimismo, en términos del artículo 43 de las [DR] en ningún caso los agentes económicos pueden obtener copias de la información confidencial que obra en el Expediente y de la cual no son titulares.

“ARTÍCULO 43. Quien tenga interés jurídico en un procedimiento seguido ante la Comisión puede consultar el expediente y utilizar cualquier medio de reproducción para obtener copias de los documentos que obren en el mismo, previa exhibición de su identificación oficial vigente en original o copia certificada, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

[...]

En ningún caso se pueden obtener copias de los datos y documentos confidenciales que obren en el expediente, excepto sus titulares.

[...] [Énfasis añadido]”.

Como se desprende de los artículos citados, la excepción señalada es aplicable expresamente dentro del procedimiento tramitado dentro del Expediente, por lo que de conformidad con los razonamientos expuestos no es posible acordar favorablemente la solicitud de [...] DUN [...], relativa a que esta COFECE proporcione o permita acceder a la información clasificada dentro del EXPEDIENTE como confidencial por la [AI] y que dicha autoridad no consideró indispensable permitir el acceso a ella a los probables responsables mediante el [ACUERDO DE ACCESO].

Al respecto, se indica adicionalmente que en términos de los artículos citados en los incisos A y B anteriores, si la [AI] en su momento consideró cierta información como confidencial dentro de sus facultades para llevar a cabo el procedimiento de investigación, así como de elaborar las versiones confidenciales del DPR correspondientes a cada emplazado, esta autoridad se encuentra obligada al resguardo de dicha información y no se encuentra facultada para desclasificarla,³⁰³ divulgarla, ni dar acceso a ésta a personas distintas de los titulares de la misma, sus representantes o autorizados.³⁰⁴

³⁰³ La nota al pie original señala lo siguiente: “Incluso en términos del artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el cuatro de mayo de dos mil quince, ‘la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica [...] no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa [énfasis añadido]’”.

³⁰⁴ La nota al pie original señala lo siguiente: “Con excepción de lo señalado en la normatividad de transparencia.”

Lo anterior, máxime cuando en términos del artículo 17 del Estatuto es atribución de la AI 'Identificar, conforme a lo previsto en la Ley, así como clasificar, de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, la información y documentos que haya recibido u obtenido en el ejercicio de sus atribuciones'. Asimismo, en términos del artículo 26 de la LFCE, la [AI], en el ejercicio de sus atribuciones, está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.³⁰⁵

En consecuencia, no le corresponde a la [ST] modificar la clasificación realizada por la AI respecto de información presentada por los agentes económicos durante la investigación.

[...].³⁰⁶

Posteriormente, mediante escrito de quince de diciembre de dos mil diecisiete, DUN interpuso el INCIDENTE y solicitó:³⁰⁷ “[...] el acceso a la información descrita en la tabla adjunta como Anexo 3 misma que precisa la información a la que solicité acceso directamente a la [ST] y que me fue negada, así como información adicional que se requiere para poder preparar mi defensa [...] El desconocimiento de dicha información imposibilita mi defensa en el presente procedimiento [...] resulta necesaria para hacer efectiva mi defensa y bajo la premisa de que el acceso a dicha información no desconoce su naturaleza de información confidencial, por lo que la misma será utilizada única y exclusivamente para la preparación de mi defensa, sin que se lleve a cabo de manera alguna su divulgación”.

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, la DGAI con fundamento en el artículo 57 del CFPC: (i) desechó de plano, por notoriamente improcedente el INCIDENTE; (ii) y manifestó que:

“[...]”

Del cuadro anterior y de los escritos presentados por los PROMOVENTES se desprende, entre otras cuestiones, que: (i) la totalidad de la información a la que solicitan tener acceso los PROMOVENTES en el Anexo 3 del [...] ESCRITO II DE DUN [...] deriva de constancias que han sido identificadas o clasificadas como confidenciales mediante los acuerdos emitidos por el DGIM; y (ii) los PROMOVENTES consideran que debe darse el acceso a dicha información, respecto de la cual 'no desconocen su naturaleza de información confidencial', al ser necesaria para su defensa.

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 57 del [CFPC], se desechan de plano, por notoriamente improcedentes los INCIDENTES, al tenor de lo siguiente.

En primer lugar, con independencia de si el [PLENO] está facultado o no para otorgar acceso a los emplazados a información confidencial cuando ésta es esencial para su defensa, los Incidentes son notoriamente improcedentes al no ser idóneos para alcanzar dicho fin, por las siguientes razones:

El análisis relativo a la trascendencia de la información confidencial en el ejercicio de los derechos de defensa de los emplazados debe realizarse por el PLENO al momento de emitir la resolución que ponga fin al presente procedimiento.

³⁰⁵ La nota al pie original señala lo siguiente: “Específicamente, el artículo 26 de la LFCE señala lo siguiente: '[...] En el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad Investigadora estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.'”

³⁰⁶ Folios 32259 a 32262.

³⁰⁷ Folios 32514 al 32586.

En términos del artículo 117 de las DISPOSICIONES los incidentes innominados tienen como finalidad la resolución de 'cualquier cuestión procesal accesoria al procedimiento principal que no tenga prevista una tramitación especial en la Ley'; no obstante, la determinación de que la falta de acceso a determinada información contenida en el DPR violenta los derechos de defensa de los emplazados es una cuestión propia del procedimiento principal al referirse al estudio de una de las formalidades esenciales de dicho procedimiento.

En este sentido, el artículo 275 del CFPC indica que '[l]as reclamaciones de las partes por violaciones del procedimiento se reservarán para decidir sobre ellas al pronunciar la sentencia', por lo que la determinación de la vulneración o no de los derechos de defensa de los PROMOVENTES derivado de la falta de acceso a la información clasificada o identificada como confidencial por la AI es una cuestión que debe resolverse al momento de emitir la resolución a que se refiere el artículo 83, fracción VI, de la LFCE y no mediante un incidente.

En este sentido, los mismos PROMOVENTES señalaron en el ESCRITO I DE MAGR, el ESCRITO I DE SEPZ, el ESCRITO I DE DUN y el ESCRITO I DE TUM, que: "la negativa de acceso a diversa información dentro del expediente se traduce en una violación procesal [...] que transgrede [mis] derechos humanos de defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad jurídica, todos ellos protegidos constitucional y convencionalmente". Asimismo, en el ESCRITO II DE MAGR, el ESCRITO II DE SEPZ, el ESCRITO II DE DUN y el ESCRITO II DE TUM los PROMOVENTES señalan en diversas ocasiones que requieren el acceso a la información referida en los escritos en virtud de que la consideran necesaria para ejercer su derecho de defensa. De este modo, de conformidad con los razonamientos y fundamentos expuestos, lo procedente es que el estudio de dicha reclamación relacionada con el ejercicio de su derecho de defensa se realice al momento de emitir la resolución correspondiente.

[...]

Por otro lado, los INCIDENTES son notoriamente improcedentes debido a que su objeto es que el PLENO les otorgue a los PROMOVENTES el acceso a diversa información confidencial que consideran necesaria para hacer efectiva su defensa; no obstante, en términos de los artículos 124 y 125 de la LFCE esta COFECE tiene la obligación de resguardar la información confidencial, de tal manera que sería ocioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal la apertura de dicho [INCIDENTE], máxime cuando los mismos PROMOVENTES indican que 'no desconocen su naturaleza de información confidencial'.

De hecho, para garantizar la agilidad con la que deben tramitarse y resolverse los asuntos, el artículo 122 de la LFCE expresamente señala lo siguiente:

[...]

Para crear certidumbre y confiabilidad esta autoridad debe acudir a las normas expresamente previstas en la LFCE, sin obstaculizar la tramitación y resolución de los asuntos mediante la apertura de incidentes innominados que no resultan idóneos para atender las solicitudes planteadas por los agentes económicos.

En este sentido, de las disposiciones que aplican al presente procedimiento se advierte lo siguiente:

A.- Obligación de resguardar la información confidencial.

El artículo 3, fracción IX de la LFCE define qué debe entenderse por información confidencial, en los siguientes términos:

[...]

Por su parte, el artículo 124 de la LFCE establece específicamente lo siguiente en relación con las personas que pueden tener acceso a un expediente en la secuela de un procedimiento que

hubiese sido tramitado por la AI y la excepción prevista en la LFCE en materia de acceso a la información identificada como confidencial:

[...]

Asimismo, en su artículo 125, la LFCE establece que la COFECE tiene la obligación resguardar la información identificada como confidencial de conformidad con lo establecido en dicho precepto:

[...]

Dicha obligación también se encuentra establecida en el artículo 55 del [ESTATUTO]:

[...]

Por su parte, el artículo 35 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Datos Personales de la COFECE,³⁰⁸ señala lo siguiente:

[...]

De acuerdo con las disposiciones antes citadas, la [ST] tiene una obligación de resguardar y proteger la información confidencial del EXPEDIENTE.

B.- Excepción al derecho de acceso a la información que obra dentro de un expediente.

Si bien los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho de acceder al expediente durante la secuela del procedimiento—en este caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio que se tramita dentro del EXPEDIENTE en términos de lo previsto en el artículo 83 de la LFCE—, el artículo 124 de la LFCE expresamente exceptúa a la información previamente identificada como confidencial, tal y como puede apreciarse en la anterior transcripción de dicho precepto.

Asimismo, en términos del artículo 43 de las DISPOSICIONES, en ningún caso los agentes económicos pueden obtener copias de la información confidencial que obra en el EXPEDIENTE y de la cual no son titulares:

[...]

En segundo lugar, con independencia de lo señalado anteriormente, los INCIDENTES, en su caso, serían notoriamente improcedentes por extemporáneos, ya que en términos de lo señalado en el artículo 114 in fine de la LFCE,³⁰⁹ en relación con los artículos 117 a 119 de las DISPOSICIONES, al no preverse un plazo específico, resulta aplicable el término genérico de cinco días hábiles y los PROMOVENTES promovieron los INCIDENTES después de que dicho plazo había transcurrido.

[...]

En consecuencia, los INCIDENTES resultan notoriamente improcedentes, de conformidad con los razonamientos y fundamentos expuestos. [énfasis añadido] [...].”

En este sentido, tal como se señaló en los acuerdos referidos, la totalidad de la información que fue testada en el DPR que se le notificó a DUN y respecto de la cual solicita que se le de acceso, fue clasificada o identificada como confidencial por la AI.

Al respecto, esta COFECE tiene la obligación de resguardar y de no proporcionar la información señalada como confidencial, según lo establecen los artículos 3, 124 y 125, de la LFCE; 55, del ESTATUTO; y 35 del REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA. Asimismo, de conformidad con

³⁰⁸ La nota al pie original señala lo siguiente: “Publicado en el DOF el diez de mayo de dos mil diecisiete.”

³⁰⁹ La nota al pie original señala lo siguiente: “Dicho párrafo establece que: “Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación”.”

los artículos 124 de la LFCE y 43 de las DR, existe una excepción al derecho de acceso a los expedientes cuando se trata de información clasificada o identificada como confidencial.

De lo anterior se desprende que la COFECE y sus funcionarios públicos se encuentran impedidos por la propia legislación de la materia, para dar acceso a las constancias que hayan sido clasificadas con carácter de confidencial a personas distintas de los titulares la información y sus autorizados. Siendo que, en atención al principio de legalidad, esta autoridad no tiene facultades para inaplicar una disposición legal.

De esta manera, el ST no vulneró los derechos de DUN al negar el acceso a información previamente clasificada o identificada como confidencial, ya que lo hizo en cumplimiento a las obligaciones que le impone la normativa en materia de competencia.

Lo anterior, máxime cuando la AI en ejercicio de sus facultades para llevar a cabo el procedimiento de investigación, así como para elaborar las versiones del DPR correspondientes a cada emplazado, consideró cierta información como confidencial, por lo que la ST no se encuentra facultada para desclasificarla,³¹⁰ divulgarla o dar acceso a ésta a personas distintas de sus titulares, sus representantes o autorizados.³¹¹

Ahora bien, se hace notar a DUN que el mandato contenido en el artículo 1 de la CPEUM no implica que dejen de atenderse el resto de los preceptos legales, como en este caso son los preceptos que obligan a esta COFECE a identificar cierta información como confidencial y a no divulgar su contenido, tal como lo reconoció la SCJN en el siguiente criterio judicial:

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función."³¹² [Énfasis Añadido].

³¹⁰ En términos del artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el cuatro de mayo de dos mil quince, la AI: "[...] no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa".

³¹¹ Con excepción de los supuestos referidos en la normatividad de transparencia.

³¹² Jurisprudencia 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo II; Pág. 772. 2a./I. 56/2014 (10a.). Registro no. 2 006 485

En virtud de lo anterior, es improcedente que, como solicita DUN, se le deba dar acceso a la información testada en la versión del DPR que se le notificó por haber sido identificada como confidencial, pues el derecho de DUN a acceder a la información contenida en el DPR no es absoluto y, por lo tanto, su ejercicio no implica que se dejen de respetar el resto de los derechos fundamentales de terceros y mucho menos las disposiciones de la LFCE.

Asimismo, como se desprende del contenido del ACUERDO DE ACCESO y de la versión del DPR que se notificó a DUN y que fue elaborada por la propia AI, fue la AI y no el ST quien determinó a qué información previamente identificada como confidencial podía darse acceso a DUN, por considerar que la misma obraba en fuentes de acceso público o que ya era o podía ser de su conocimiento. Es decir, tanto del ACUERDO DE ACCESO como de la versión del DPR que se notificó a DUN se desprende que la AI no consideró que DUN pudiera tener acceso a toda la información clasificada o identificada como confidencial que se incluyó en el DPR.

Por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, resulta falso que en la etapa del PSFJ, la COFECE deba conceder el acceso a toda la información confidencial del DPR, aun cuando DUN no sea su titular,³¹³ pues tal aseveración implicaría dejar de reconocer las propias restricciones que impone el marco jurídico al derecho de acceso a la información, relativas al resguardo de aquella información que merece ser reconocida como confidencial. Lo que pretende DUN es que la autoridad incumpla con su obligación de resguardar dicha información identificada como confidencial en protección de los agentes económicos titulares de la misma, situación que no tiene sustento en la LFCE.

En este sentido, no es posible sostener que la aplicación del principio *pro-homine* en favor de DUN pudiera hacerse a costa de la violación de los derechos de otros agentes económicos, relativos al resguardo de su información confidencial.

³¹³ Resulta aplicable el siguiente criterio: "**INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. PONDERACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL JUZGADOR DE AMPARO PARA PERMITIR O NEGAR EL ACCESO A ÉSTA.** No toda la información clasificada como confidencial en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, exhibida con el informe justificado, puede considerarse como "indispensable para la adecuada defensa de las partes" en el amparo, en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 121/2014, pues si bien es cierto que la información gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima publicidad, entendiendo por aquella, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, o bien, que se halla en registros o fuentes de acceso público, también lo es que ese derecho fundamental tiene restricciones, y una de ellas guarda relación con la información proveniente de otros gobernados, que merece ser manejada con confidencialidad, como son los secretos (industriales, comerciales, profesional, fiscal, etcétera), considerados como bienes preciados y que también merecen tutela conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la par de los datos personales y la vida privada, que igualmente tienen fundamento y protección constitucionales, ostentando este conjunto de información el carácter o cualidad de confidencial. Por tanto, en los casos de tensiones entre los derechos fundamentales que protegen la confidencialidad y el derecho de defensa, debe ponderarse, en cada caso particular, el valor de los intereses en juego y el grado de afectación efectivo o real, para concluir la norma individualizada o regla pertinente, lo que no significa que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la Norma Fundamental, ya que, de no hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función judicial [énfasis añadido]". Tesis Aislada, 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 29, abril de 2016; Tomo III; Pág. 2304. I.1o.A.E.52 K (10a.). Registro no. 2 011 557

Adicionalmente, DUN manifiesta que se violan sus derechos humanos al impedirle conocer la totalidad de los hechos en los que la AI motiva su resolución y con ello limitar la posibilidad de que éstos sean combatidos. De entre las garantías que manifiesta le han sido transgredidas, DUN centra su argumentación en la supuesta violación de su garantía de audiencia, al señalar que la primera formalidad esencial del procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente, poniéndose a su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del referido procedimiento.

No obstante, es **infundado** que, al no haberle dado acceso a DUN a la totalidad de la información del DPR, incluida aquella clasificada como confidencial, se haya afectado su derecho de audiencia, ya que, por un lado, existen restricciones a dicho derecho y, por otro lado, el testado de determinada información no afectó su posibilidad de defensa, como se explica más adelante en este apartado.

En primer lugar, no solo no existe ningún precepto legal ni criterio jurisprudencial que sostenga que para que un acto administrativo sea notificado correctamente, el particular debe conocer la totalidad de la información en él contenido, incluyendo aquella información confidencial de la que no es titular; sino que además, como fue señalado, la legislación aplicable a la materia impone precisamente una obligación contraria, a saber, la obligación a las autoridades de la COFECE de resguardar y proteger la información confidencial de los agentes económicos, otorgando acceso únicamente a su titular. Por lo tanto, la legislación aplicable impone a las autoridades una obligación que es contraria a la pretensión de DUN.

Ningún criterio judicial de los citados por DUN sirve para apoyar su pretensión. Lo que sí sostienen los criterios judiciales relativos a la garantía de audiencia que cita DUN es que, para cumplir con dicha garantía, la autoridad debe cumplir con determinados requisitos legales, que en el caso concreto sí fueron observados dentro del PSFJ.

No obstante, DUN pretende extender el alcance de diversos criterios judiciales que señalan las formalidades que las autoridades deben seguir en los procedimientos para argumentar que las notificaciones a los particulares solo gozan de legalidad si le dan a conocer al notificado la totalidad de la información contenida en el acto notificado, aún la información confidencial de la cual no es titular y que se encuentra protegida en términos de la legislación aplicable.

Al respecto, el criterio citado por DUN identificado bajo el rubro "**AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA**",³¹⁴ señala que todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, distintas etapas que configuran la garantía de audiencia, a saber: (i) que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, así como de la cuestión que será objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, (ii) que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente con el derecho de acreditar

³¹⁴ Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, agosto de 2008; Pág. 799. I.7o.A. J/41. Registro no. 169 143

sus excepciones; (iii) que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, (iv) que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.

En el mismo sentido, los criterios citados por DUN que al rubro rezan: ***“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”***,³¹⁵ y ***“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFINITIVO”***,³¹⁶ señalan que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, e impone a las autoridades la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento: (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En relación con lo anterior, en el PSFJ tramitado ante la COFECE, y en el que DUN participó, se siguieron todas las formalidades del procedimiento que indican los criterios anteriores.

En primer lugar, a DUN se le notificó personalmente el DPR el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.³¹⁷ La notificación fue cierta y eficaz y DUN tuvo conocimiento del contenido del DPR, tan es así que estuvo en posibilidad de defenderse. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, DUN presentó su escrito de manifestaciones y ofreció diversas pruebas.³¹⁸ Asimismo, mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho se le otorgó la posibilidad de rendir sus alegatos, lo cual realizó mediante su escrito de siete de enero de dos mil diecinueve. También, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, DUN solicitó al PLENO la celebración de una audiencia oral en términos de los artículos 83, fracción VI, de la LFCE y 82 de las DR, la cual se celebró el cinco de febrero de dos mil diecinueve y en la cual DUN realizó las manifestaciones que estimó pertinentes. Finalmente, por este medio el PLENO emite la presente resolución en la que se analizan las manifestaciones y las pruebas admitidas que fueron ofrecidas por DUN. Por lo tanto, todas las formalidades indicadas en los criterios judiciales que citó DUN fueron observadas en el caso concreto. Por lo tanto, esta autoridad cumplió con todos los elementos del debido proceso, que analizan los criterios judiciales citados por DUN.

³¹⁵ Jurisprudencia; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, diciembre de 1995; Pág. 133. P./J. 47/95. Registro no. 200 234

³¹⁶ Jurisprudencia 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, septiembre de 2003; Pág. 553. 2a./J. 80/2003. Registro no. 183 211.

³¹⁷ La cédula de notificación por instructivo de DUN obra a folios 31259 y 31260. La cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, obra a folios 31242 y 31243.

³¹⁸ Dicho escrito obra a folios 34410 a 35049.

El que no se le haya dado acceso ilimitado al DPR no implica una violación a la garantía de audiencia de DUN, toda vez que la información testada en la versión que le fue notificada se trata de información confidencial de otros agentes económicos que fue testada por disposición legal.

Por otra parte, DUN hace referencia al criterio que al rubro señala *“COOPERACION, DERECHOS DE CITACIONES PERIODISTICAS (LEY DE PLANIFICACION Y URBANIZACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE)”*.³¹⁹ Sin embargo, dicho criterio tampoco apoya su argumento. De acuerdo con el mismo, la garantía de audiencia inicia con la notificación eficaz al particular afectado del acto que se le impone, que implica que el particular debe tener conocimiento cierto del acto. Dicho criterio establece que notificar de cualquier manera al particular, sin cuidar que tenga conocimiento del acto de autoridad que pueda tener interés en impugnar, es hacer nugatoria la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la CPEUM.

En el caso al que hace referencia el criterio judicial que se analiza, la autoridad había citado a los particulares por medio de publicaciones periodísticas que, de acuerdo con la interpretación judicial, no constituyeron una notificación eficiente, porque no se podía tener la certeza de que la misma haya llegado al conocimiento del particular.

A diferencia del caso al que hace referencia dicho precedente judicial, en el caso que nos ocupa la notificación del DPR a DUN se realizó siguiendo todas las formalidades prescritas por la legislación aplicable y no dejó lugar a incertidumbre. Lo anterior se comprueba mediante la cédula de notificación por instructivo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete³²⁰ y se confirma con el hecho de que DUN dio respuesta en tiempo y forma al DPR, realizó manifestaciones y aportó pruebas, demostrando con ello que ejerció su oportunidad de defensa.

Finalmente, DUN cita como criterio aplicable la tesis identificada bajo el rubro *“AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTIA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA.”*³²¹ De acuerdo con dicho criterio, la garantía de audiencia consiste en la oportunidad que se concede al particular de poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos. Esto presupone, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular.

Dicho criterio tampoco apoya el dicho de DUN, pues en el caso concreto DUN sí tuvo conocimiento del acto de autoridad, se le concedió la oportunidad de defenderse, de rendir pruebas y de formular alegatos. DUN tuvo acceso a la información contenida en el DPR sobre

³¹⁹ Tesis Aislada; 7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 103-108, Primera Parte; Pág. 146. Registro No. 232 706.

³²⁰ La cédula de notificación por instructivo de DUN obra a folios 31259 y 31260. La cédula de citatorio de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, obra a folios 31242 y 31243.

³²¹ Jurisprudencia; 7a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen 199-204, Tercera Parte; Pág. 85. Registro no. 237 291



la cual se basó la imputación. Inclusive la AI le dio acceso a determinada información que había clasificado o identificado como confidencial con la finalidad de asegurar el derecho de defensa de DUN, mediante el ACUERDO DE ACCESO.

Se reitera que ninguno de los criterios que cita DUN señala que para que la garantía de audiencia sea plena el particular notificado deba tener acceso total e irrestricto a toda la información en el acto notificado, inclusive aquella que ha sido identificada o clasificada como confidencial en estricto cumplimiento de la legislación aplicable.

Por otra parte, DUN indica de forma general que se transgredieron sus derechos de audiencia, defensa y tutela efectiva, sin ser totalmente claro en precisar de qué forma la AI viola sus derechos y se limita a indicar de forma abstracta que haber testado ciertas partes del DPR como confidenciales viola su garantía de audiencia, sin expresar cómo es que efectivamente ello habría acontecido.

Además, DUN no explica de qué manera la versión del DPR que le fue notificada le impidió conocer los hechos torales en los que la AI sustenta su imputación, pues del contenido de la CONTESTACIÓN DUN se aprecia que tuvo conocimiento sobre el contenido del DPR, e incluso hace referencia de forma precisa a los apartados y los hechos que contesta en relación con todos y cada uno de los elementos que en términos de la LFCE deben analizarse para poder acreditar la existencia de una PMR. Adicionalmente, de los apartados en los que enuncia la información que considera fue testada, se advierte que DUN estuvo en aptitud de comprender las razones que impulsaron a la AI a emitir las conclusiones señaladas en el DPR. Por lo tanto, sí pudo hacer efectiva su defensa.

Ahora bien, del contenido de la versión que le fue notificada a DUN se desprende que hay apartados del DPR que se encuentran totalmente destapados y otros que contienen ciertos apartados testados, pero sin que se haya ocultado información que resulte fundamental para la defensa de DUN, pues se encuentra destapada aquella información que explica o desarrolla puntos torales de la información analizada y de las conclusiones a las que llegó la AI en la etapa de investigación. De este modo, en muchos de los casos incluso es posible saber o inferir el tipo de información que se encuentra testada; en consecuencia, puede afirmarse que DUN sí contó con la información esencial para su defensa, encontrándose en posibilidad de decidir qué pruebas aportar y qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos vertidos en el DPR.

A mayor abundamiento, a continuación, se analizan cada uno de los registros testados que fueron identificados por DUN, a efecto de comprobar que dichos apartados no son esenciales para su defensa, que no hacen que el DPR resulte incomprensible y que en la mayoría de los casos el contenido general de la información testada puede desprenderse de la lectura del contexto en que se ubica.

Se reitera que no toda la información que obra en el DPR debe ser considerada de manera indiscriminada como indispensable para la defensa de las partes. En particular, la protección de la información confidencial es acorde con los límites que la propia CPEUM impone, pues

los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten límites, los cuales corresponde al legislador ordinario estipular en ley.

Resulta aplicable al argumento que se analiza la resolución del recurso de queja número 129/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal (ahora, Ciudad de México) y jurisdicción en toda la República decretó lo siguiente:

“41. Esto significa que no toda la información que obre en los expedientes de las autoridades merece ser considerada de manera indiscriminada como << indispensable para la adecuada defensa de las partes >>. Y es en éste contexto, que la inconforme no razona el por qué le resulta indispensable tener acceso a la debatida información que fue clasificada por las responsables de la COFECE como confidencial y en tanto no existan razones de peso para estimar ilegítima o revocar esa calificación, debe de prevalecer la declaratoria y tratamiento.

42. Es cierto que la información gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima publicidad, entendiendo por información pública aquella que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público o bien, se halle en registros o fuentes de acceso públicos; y en especial, resulta accesible toda la que implique un valor probatorio y pueda incidir en el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes [...]. Sin embargo, ese derecho fundamental tiene restricciones y una de ellas guarda relación con la información proveniente de otros gobernados que merece ser manejada con reserva, como son los secretos³²², considerados como bienes preciados y que también merecen tutela conforme al artículo 16 constitucional, a la par de los datos personales y la vida privada que igualmente tienen un fundamento y protección constitucional, ostentando este conjunto de información el carácter o cualidad de confidencial. [...]

57. De ahí que sea correcta la decisión de la jueza, pues tomando en cuenta que el procedimiento ante la COFECE está en la etapa de investigación, y la ley de la materia prohíbe durante ella tener acceso al expediente, además de ser enfática en señalar qué tipo de información se considera confidencial y exponerse la razón, siendo esta la que pueda causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación, es que dicha restricción legal es acorde con los límites que la propia Constitución impone, pues se debe recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten límites, los cuales corresponde al legislador ordinario estipular en ley.

58. Por su parte, también debe resaltarse que en el caso no se acredita que la información clasificada corresponda y sea pertinente a hechos que impliquen un thema probandi – hechos disputados o base de una determinada acción y decisivos para la litis que son objeto y exigen prueba- como necesario fundamento para que el argumento base de la pretensión prospere. [...]

59. Así, se estima que no existe violación a los derechos de audiencia, defensa y tutela judicial efectiva, siendo correcta y pertinente la decisión de la a quo de restringir el acceso a la información clasificada como confidencial.”³²²

DUN no acredita que la información testada en la versión del DPR que se le notificó haya sido indispensable y esencial para su defensa, ni que se le hubiera impedido elaborar argumentos

³²² La versión pública de esta resolución se encuentra visible en el siguiente link: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1304/13040000182715170003003004.doc_1&sec=Rogelio_Perez_Ballesteros&svp=1

para desvirtuar las conclusiones del DPR, lo cual se desprende del análisis de cada uno de los apartados respecto de los cuales DUN se inconforma.

A pesar de que en su escrito de manifestaciones al DPR, DUN no refiere de forma específica los apartados del DPR que se encuentran testados y ni presenta argumentos concretos respecto de los pasajes testados en el DPR a los que no tuvo acceso, en esta sección se realizará el análisis de cada uno de los pasajes testados a los que hace referencia DUN en los escritos de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en el INCIDENTE, a fin de acreditar que tales pasajes no contienen información indispensable para ejercer su defensa y que no vulneran sus derechos.

Para efectos del análisis individual de cada pasaje testado referido por DUN en los escritos de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en el INCIDENTE, que se realizará a continuación, la presente resolución identifica cada caso de acuerdo con el numeral (registro) señalado por DUN en la tabla incluida en el Anexo 3 del INCIDENTE, misma que identifica un total de 45 registros.³²³

i. Información disponible en el EXPEDIENTE

Respecto de los registros 5, 13, 21 y 34, mediante el acuerdo emitido el primero de diciembre de dos mil diecisiete se le indicó a DUN que la información correspondiente se encontraba disponible y accesible en los tomos principales del EXPEDIENTE o que no había sido testada en la versión que se le notificó.³²⁴

En este sentido, DUN tuvo acceso a la información señalada en los registros 5, 13, 21 y 34, por lo que no se advierte ninguna violación a sus derechos respecto de dichos registros.

ii. Información relativa al MERCADO INVESTIGADO

Con independencia de lo señalado en el inciso anterior, la información identificada por DUN en los primeros veinte registros³²⁵ respecto de la cual solicita acceso al encontrarse testada

³²³ Como se indica en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho mediante el cual el ST desechó el INCIDENTE, dicha tabla incluye el numeral con el cual DUN identifica la información a la cual solicitó acceso; el número de página del DPR que contiene la información a la que solicitó acceso; la descripción de la información testada o identificada como confidencial en el DPR; en algunos casos, los folios del EXPEDIENTE en los que podría ubicarse la información de referencia; algunas manifestaciones sobre la forma en que DUN considera se afecta su derecho a la defensa por el desconocimiento de la información; la respuesta proporcionada por el ST en el acuerdo de primero de diciembre de dos mil diecisiete; y algunas manifestaciones de DUN respecto de la respuesta proporcionada por el ST.

³²⁴ Como se indica en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho mediante el cual el ST desechó el INCIDENTE, incluso DUN manifestó, en relación con la información señalada en el Anexo 3 de su escrito, que los numerales 5, 13, 21 y 34 se refieren a información que se encuentra disponible, por lo que se trata de "información ya no requerida al estar disponible". Véase la columna titulada "Manifestaciones a la respuesta de la Secretaría Técnica" en el Anexo 3 del INCIDENTE.

³²⁵ Estos numerales corresponden a la información referida en la: (1) página 101, Ilustración 5. Integración vertical en el mercado de IC y otorgamiento de crédito; (2) páginas 103 y 104, Gráfica 3. Participación accionaria de CC; (3) página 105, ROA promedio de CC; (4) página 106, Gráfica 4. Rentabilidad de TUM/DUN y de CC; (5) pte de página 110, Mecanismos para entrega de información definido en contrato marco SIC; (6) página 111, Precio de intercambio mensual por registro de BPD autorizado por CNBV; (7) página 114, Concepto de seguridad proporcionado por CC; (8) página 115, Porcentaje de consultas realizadas por usuarios; (9) página 115, Tabla 14. Demanda de productos de IC; (10) página 116, Tabla 15. Tipo de usuario afiliado a cada SIC; (11) Página 116. Porcentaje de CC; (12) Pte de la página 116, Excepciones PRINCIPIO DE

en el DPR, se refiere a información que se ubica en el apartado “IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia”. En dicho apartado, el DPR describe las características y condiciones del MERCADO INVESTIGADO.

Al referirse a los registros 1 a 3, 7, 10 a 12 y 14 a 20, DUN manifestó en el Anexo 3 del INCIDENTE que necesitaba conocer la información correspondiente ya que para la existencia de las PMR es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza. No obstante, el análisis de la acreditación o no de las PMR se realiza en función de un MR que se define en el DPR y que es distinto al MERCADO INVESTIGADO.

El PJF ha definido al MR como “[...] el espacio geográfico en el que se ofrecen o demandan productos o servicios similares, lo que le otorga una doble dimensión: De productos o servicios y geográfica o territorial. En esa tesitura, para que exista mercado relevante es necesario que un conjunto de bienes o servicios iguales o similares estén al alcance del consumidor en un territorio lo suficientemente extenso como para que el consumidor esté dispuesto a obtener la mercancía o servicio en algún punto de ese espacio geográfico, en el tiempo en que aquél esté dispuesto a esperar para satisfacer su necesidad. En ese orden de ideas, se advierte que este concepto, que tiene una triple delimitación: objetiva, geográfica y temporal, adquiere importancia si se considera que es en dicho mercado donde existe el riesgo de que los agentes económicos incurran en prácticas anticompetitivas que distorsionan la concurrencia y eficiencia económicas”.³²⁶

Por su parte, el mercado investigado es el mercado en el cual se realiza la investigación y según lo señalado por el PJF,³²⁷ la finalidad de su definición es que cualquier persona pueda auxiliar en la investigación.

En términos del artículo 54 de la LFCE, para determinar la existencia de una PMR debe acreditarse que el acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación: (i) encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la LFCE; (ii) se lleve a cabo por uno o más agentes económicos que individual o conjuntamente tengan PS en el mismo MR en que se realiza la práctica; y (iii) tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el MR o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles

RECIPROCIDAD; (13) Página 117, Requisitos para afiliarse a una SIC, objeto de PM; (14) Página 119, Tabla 16 y 17. Productos generados por las SIC por tipo de demandante; (15) Página 119, Tabla 18. Participación en los ingresos netos por ventas (2014); (16) Página 121. Tabla 19 tarifas y precios de los RC (precios en MN de CC); (17) Página 122. Precios de CC por segundo RCE; (18) Página 123, Número de RC solicitados por usuarios, porcentaje de la totalidad de RC que comercializó CC; (19) Página 123, Tabla 21. Número de RC comercializados (2014); y (20) Página 124, Factores considerados para descuentos de CC.

³²⁶ Véase la jurisprudencia de rubro “MERCADO RELEVANTE. SU CONCEPTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA” con los siguientes datos de identificación: Jurisprudencia I.4o.A. J/75; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, octubre de 2008; Pág. 2225; Registro No. 168 609.

³²⁷ Véase el criterio de rubro: “PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFINICIÓN DE ‘MERCADO INVESTIGADO’ QUE SE HACE EN EL ACUERDO DE INICIO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE MAYO DE 2011)”, con los siguientes datos de identificación: Tesis Aislada I.1o.A.E.179 A (10a.); 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 36, Noviembre de 2016; Tomo IV; Pág. 2487; Registro No. 2 013 122.



sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.

Así, es la definición del MR, mas no la descripción de las características del mercado investigado, la que determina la dimensión geográfica y de productos o servicios, respecto de las cuales debe analizarse la existencia del PS y de la conducta anticompetitiva.

En este sentido, la imputación realizada a DUN se determina en el DPR a través del análisis sustentado en los apartados correspondientes a "*XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato*", "*XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado*", "*XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato*" y "*XIV. Objeto o efecto de la conducta: Negativa de trato*", siendo que la caracterización del MERCADO INVESTIGADO en el DPR se utiliza fundamentalmente con fines descriptivos, pues permite tener una mayor comprensión del funcionamiento del mercado. Así, como se explica a detalle a continuación, la información testada que se incluyó para efectos de la caracterización del mercado investigado dentro del apartado "*IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia*" del DPR no es parte de la imputación por una PMR realizada en contra de DUN.³²⁸

Por lo anterior, la censura o el testado de determinada información utilizada en el apartado "*IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia*" del DPR, no constituye una vulneración a los derechos de DUN pues la información cuyo acceso fue solicitado no fue utilizada para sustentar la imputación por la realización de una PMR en contra de dicho agente económico, por lo que DUN tuvo la oportunidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas respecto de la comisión de la PMR imputada.

A mayor abundamiento, se analiza cada uno de los veinte registros referidos y respecto de los cuales DUN solicitó acceso, excluyendo los registros 5 y 13, pues como se señaló en el inciso anterior, dicha información en todo momento ha sido disponible para DUN:³²⁹

- Registros 1, 2, 3 y 4

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

³²⁸ El mismo DUN señala que dicha información no forma parte de la imputación, toda vez que afirma que, en su opinión, la información que corresponde a la descripción o determinación del mercado investigado es necesaria e importante "*aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizada para la determinación de la práctica monopólica.*" Véanse dichas manifestaciones en los folios 32565, 32566 y 32 del EXPEDIENTE. Al respecto, DUN no explica cómo la información que no sustenta la imputación por la realización de una PMR puede ser o ha sido utilizada para la determinación de la práctica monopólica.

³²⁹ Se aclara, que el siguiente análisis únicamente considera la información efectivamente testada en la versión del DPR que se le notificó a DUN, es decir, en algunas ocasiones DUN refiere como "*Información clasificada como confidencial*" tablas completas, siendo que únicamente se testaron en la versión del DPR que se le notificó, algunos de los datos de la tabla, por lo que en dichos casos, únicamente se analizará la información efectivamente testada a pesar de haber sido referida por DUN la tabla completa, ya que tuvo acceso a los demás datos.

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³³⁰	Fojas del Expendiente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1º de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
1	101	Ilustración 5. Integración vertical en el mercado de [IC] y otorgamiento de crédito		[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	Información que no se utiliza para sustentar la imputación en materia de la negativa de trato o discriminación de precios	Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las [PMR] es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizado para la determinación de la práctica monopólica.
2	103, 104	Gráfica 3. Participación accionaria de [CC]				
3	105	ROA promedio de [CC] (return of assets)				
4	106	Gráfica 4. Rentabilidad de TUM/DUN y [CC]	2701 1, 2576 8 y 2632 3			
					La información testada sustenta el análisis del mercado investigado y corresponde a cifras o datos cuya trascendencia o uso en el DPR se refiere en párrafos o apartados no testados, dado que las conclusiones o los señalamientos que derivan de dicha información no fue testada por la AI. [...]	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta.

[...].³³¹

La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 1 y 2, corresponde a una ilustración de la que se desprende la integración vertical de CC en el mercado y otorgamiento de crédito y a la participación accionaria de CC, respectivamente.

No era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la sección "B.3. Características del mercado de información crediticia" del apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

De las páginas 99 a 101 del DPR se desprende lo siguiente: (i) el MERCADO INVESTIGADO presenta cuatro características principales; (ii) la segunda característica del MERCADO

³³⁰ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

³³¹ Folio 32565.

INVESTIGADO es que las tres empresas que actualmente operan en dicho mercado (TUM, DUN y CC) son propiedad, de forma mayoritaria, de sus USUARIOS; es decir que existe integración vertical en el mercado y otorgamiento de crédito; (iii) en cuanto a la estructura accionaria, las tres SIC cuentan con acciones de la Serie A y de la Serie B; y (iv) en el caso de TUM y DUN, los accionistas que tienen mayor participación en el capital social, son principalmente las instituciones bancarias; y en el caso de CC son EMPRESAS COMERCIALES e instituciones bancarias, aunque una parte minoritaria de esta última SIC lo detentan **B** PF.

En cuanto a la información que corresponde al **registro 1** se indica adicionalmente que aun cuando DUN no tuvo acceso a la ilustración sí pudo conocer que la AI considera que existe integración vertical en el mercado y otorgamiento de crédito. Que DUN conociera la información relativa a la estructura de CC no era necesario pues no forma parte de la imputación, ni de la conducta investigada y se trata solo de un elemento de contexto en la caracterización del MERCADO INVESTIGADO, el cual además pudo ser conocido por DUN.

En cuanto al **registro 2**, de la información a la que DUN tuvo acceso se desprende que la mayor parte de la tenencia accionaria de CC se encuentra en manos de las instituciones bancarias y EMPRESAS COMERCIALES, en tanto que la menor parte la detentan **B** PF. Ahora bien, para propósitos de defensa de DUN es irrelevante que haya conocido el porcentaje exacto de participación accionaria que detentan las instituciones bancarias y las EMPRESAS COMERCIALES, así como el porcentaje que detentan las PF.

Por su parte, la información testada relativa al **registro 3** corresponde al porcentaje exacto del valor promedio del ROA (*return on assets*) de CC, mientras el **registro 4** se refiere a la "Gráfica 4. Rentabilidad de TUM, [DUN] y [CC]".

Al respecto, si bien la "Gráfica 4. Rentabilidad de TUM, [DUN] y [CC]" (**registro 4**) fue elaborada a partir de información de TUM, DUN y CC que fue clasificada como confidencial por la AI, la información utilizada que corresponde a DUN y a TUM, sí es del conocimiento de DUN.

Ahora bien, no era necesario que DUN conociera la información de CC para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la sección "B.4. Rentabilidad en el mercado de información crediticia" en el apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" y por lo tanto manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección. Ello toda vez que la información a la que sí tuvo acceso es suficiente para estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En específico, de la información a la que sí tuvo acceso DUN, se desprende que: (i) uno de los elementos que caracterizan al mercado en México es la elevada rentabilidad que han manifestado las tres SIC que conforman la industria; (ii) utilizando la ROA como métrica, desde dos mil diez hasta dos mil quince, la rentabilidad de TUM y DUN fueron superiores a lo reportado por CC; y, (iii) DUN conoció que el valor de ROA para DUN en dicho periodo fue del ****** y para TUM del ******. De dicha información puede advertir que el ROA de CC fue menor a la reportada para DUN y TUM y que CC tiene una rentabilidad elevada.

Por lo tanto, aunque DUN no tuvo acceso a la Gráfica 4 ni al porcentaje específico de ROA de CC, estuvo en posibilidad de conocer las conclusiones que se derivan de estos y tuvo acceso a la información propia de DUN que sustenta el análisis respecto de la rentabilidad que se le atribuyó.

En este sentido, a partir de la propia información de DUN y TUM a la que DUN tiene acceso, es posible que DUN confirme los porcentajes de ROA para el caso de DUN y de TUM, señalados en el último párrafo de la página 105 del DPR.

DUN señala que era necesaria la información referida en el **registro 4** para saber si la AI arribó a las conclusiones correctas; no obstante, DUN no argumenta ni acredita como es que el análisis de la rentabilidad de las SIC contenido en dicha sección del DPR, trasciende a su imputación. DUN tampoco explica por qué no podía verificar que las conclusiones eran correctas respecto de su propia rentabilidad, dado que conoce la información de la que proviene dicha conclusión.

Asimismo, la omisión de los datos testados (**registros 1 a 4**) en nada cambiaría la afirmación ni el razonamiento de la AI plasmado en el DPR, el cual, en su momento, pudo ser atacado por DUN con argumentos y mediante el ofrecimiento de pruebas, si es que no hubiera estado de acuerdo con las conclusiones señaladas, cuestión que no aconteció. Por tanto, no se advierte afectación alguna en los derechos de DUN al estar testada la información aquí analizada.

- **Registro 6**

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³³²	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1º de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
6	111	Precio de intercambio mensual por registro de BPD autorizado por CNBV	689	Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos.		El secretario técnico omitió pronunciarse respecto a esta información.

[...]”³³³

La información testada a la cual solicita acceso DUN en el **registro 6**, corresponde al precio por registro autorizado por la CNBV para el intercambio de BPD entre TUM y CC.

³³² La nota al pie original señala lo siguiente: “Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto.”

³³³ Folios 32566.



Ahora bien, DUN señaló en el INCIDENTE que: *"El secretario técnico omitió pronunciarse respecto a esta información"*,³³⁴ no obstante, tal como se señaló mediante en el acuerdo que recayó al INCIDENTE: *"[...] en el [acuerdo emitido el primero de diciembre de dos mil diecisiete] el ST sí dio respuesta a la solicitud identificada en el registro seis [...] señaló que dicha información se trataba de: 'Información testada en el DPR por la [AI] que fue identificada o clasificada como confidencial mediante acuerdos [...]'"*.³³⁵

Con independencia de lo anterior, no hay afectación a DUN derivado de la información testada en virtud de que DUN conoce dicha información. Mediante escrito de veinte de mayo de dos mil quince, TUM y DUN, de manera conjunta, presentaron el CONTRATO INTERCAMBIO,³³⁶ en el cual se regula la tarifa de intercambio de ****** autorizada por la CNBV. Adicionalmente, mediante el anexo 4.8 de dicho escrito, TUM y DUN manifestaron que: *"[...] los precios pagados por registro del intercambio de [BPD] entre TUM y [CC] ha sido **B** la cantidad de ****** [...]"*.³³⁷

Además, en la página 297 de la versión del DPR que le fue notificado a DUN, dicho agente económico tuvo acceso a la siguiente manifestación: *"[...] [CC] ****** [...]"*.³³⁸

*"[...] ****** [...]"*.³³⁹

En este sentido, DUN conoce y tuvo acceso al precio de intercambio mensual de BPD por registro acordado por TUM y CC y aprobado por la CNBV.

Por todo lo anterior, es claro que la información testada relativa al registro 6 no limitó ni vulneró los derechos de defensa de DUN, considerando además que no era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la subsección "C.1. Generación de la información crediticia" de la sección "C. Elaboración de los productos de información crediticia" en el apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

- Registro 7

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página a en DPR	Información clasificada como	Fojas del	Afectación a la defensa por el	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
--	-----------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------------------	--	--

³³⁴ Ídem

³³⁵ Folio 32713, nota al pie 28.

³³⁶ Folios 4527 a 4607.

³³⁷ Folio 4904.

³³⁸ La nota al pie original señala lo siguiente: "Información visible a fojas 23599 y 23600 del EXPEDIENTE."

³³⁹ Página 297 del DPR. Folio 031181.

		confidencial 340	Expedi ente	desconocimiento de la información	diciembre de 2017	
7	114	Concepto de seguridad proporcionado a por [CC]	1844	Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos.	Información que no se utiliza para sustentar la imputación en materia de la negativa de trato o discriminación de precios	Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las [PMR] es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizado para la determinación de la práctica monopólica.

[...] 341

La información testada relativa al **registro 7** corresponde a la definición que CC le da al concepto de "seguridad" dentro de su manual interno.

En las páginas 114 y 115 del DPR³⁴² se señalan aspectos sobre el procesamiento de la IC. En dicho apartado se explica que una vez que los USUARIOS han entregado la información, las SIC la verifican para asegurar la calidad de la información, adoptando medidas de seguridad y control, pues al ser la IC el principal insumo de trabajo de las SIC, uno de los aspectos claves que se debe cuidar es su seguridad.

Sin embargo, lo relevante es que el artículo 22 de la LRSIC establece la obligación para las SIC de adoptar medidas de seguridad y control, siendo que la definición que cualquiera de las SIC, le da al concepto de seguridad no es un elemento indispensable para entender el alcance de dicha obligación. Por lo tanto, la definición que CC le da en su manual interno al concepto de seguridad es un elemento accesorio en dicha sección.

Así, el que DUN no haya tenido acceso a la definición que CC le da internamente al concepto de seguridad no afecta el entendimiento de DUN de dicho apartado.

- **Registros 8 a 12.**

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁴³	Fojas del Expe- diente	Afectación a la defensa por el desconocimient o de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1ª de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]

³⁴⁰ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

³⁴¹ Folio 32566.

³⁴² Folio 030998 y 030999.

³⁴³ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

8	115	Porcentaje de consultas realizadas por usuarios			La información testada sustenta el análisis del mercado investigado y corresponde a cifras o datos cuya trascendencia o uso en el DPR se refiere en párrafos o apartados no testados, dado que las conclusiones o los señalamientos que derivan de dicha información no fue testada por la AI. [...].	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta.
9	115	Tabla 14. Demanda de productos de información crediticia	601-602	[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].		
10	116	Tabla 15. Tipo de usuario afiliado a cada SIC	6142		[Información que no se utiliza para sustentar la imputación en materia de la negativa de trato o discriminación de precios]	[Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las PMR es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizado para la determinación de la práctica monopólica].
11	116	% [CC]	15413			
12	pie de pág. 116	Excepciones principio de reciprocidad	5741, 1201, 1202			

[...].³⁴⁴

No era necesario que DUN conociera la información testada que se refiere a dichos registros para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la subsección "Demanda de productos de información crediticia" en la sección "C.3. Comercialización de la información crediticia" del apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 8 y 9 corresponde al porcentaje que representan los USUARIOS y los CLIENTES respecto del total de consultas realizadas a BC y CC en el dos mil catorce.

En el párrafo que precede a la "Tabla 14. Demanda de productos de información crediticia"³⁴⁵ hay un señalamiento de que los productos de IC en el dos mil catorce se comercializaron en mayor medida con los USUARIOS y en menor medida con los CLIENTES. Por otra parte, en la tabla referida se dejaron visibles para DUN, los porcentajes de la demanda de productos por USUARIO y por CLIENTES de BC. En este sentido, que DUN no conozca de manera específica qué porcentaje de las consultas realizadas a CC y al mercado de SIC en su conjunto, proviene de USUARIOS o CLIENTES, en nada trasciende a su imputación, máxime cuando el objetivo de dicho análisis es únicamente especificar que las SIC comercializan sus productos principalmente a los USUARIOS, conclusión que es del conocimiento de DUN. Asimismo,

³⁴⁴ Folios 32566.

³⁴⁵ Página 115 del DPR.

DUN pudo acceder y verificar las cifras que corresponden a BC, por lo que pudo haberlas combatido.

Por su parte, la información relativa a los registros 10 y 11 corresponde al porcentaje de USUARIOS de CC que representan las EMPRESAS COMERCIALES, ENTIDADES FINANCIERAS y SOFOMES.

En el párrafo previo a la "Tabla 15. Tipo de USUARIO afiliado a cada SIC",³⁴⁶ se precisa que el [REDACTED] las EMPRESAS COMERCIALES y que [REDACTED] las ENTIDADES FINANCIERAS y las SOFOMES. Por lo tanto, aun cuando DUN no haya conocido los porcentajes exactos de afiliación de cada tipo de USUARIO para CC que corresponden a los registros 10 y 11, sí conoció que [REDACTED] los USUARIOS afiliados a CC, son EMPRESAS COMERCIALES y que las ENTIDADES FINANCIERAS y SOFOMES, [REDACTED], respectivamente, para dicho agente económico.

Finalmente, el registro 12 corresponde a información sobre una excepción que hace CC a la aplicación del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Aun cuando DUN no tuvo acceso a la excepción que aplica CC al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, del contexto del párrafo en el que se encuentra dicha cita queda claro en qué consiste el principio referido, el cual además es del conocimiento de DUN. No obstante, para propósitos de defensa de DUN no era necesario que conociera cuál es la excepción concreta que aplica CC al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, pues en nada varía la imputación contenida en el DPR ni trasciende a la imputación de DUN.

Por todo lo anterior, el que DUN no tenga acceso a las cifras y porcentajes de CC o a la excepción que aplica CC al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, referidos en los registros 8 a 12, no afecta el entendimiento de lo señalado en el DPR, ni obstaculiza la defensa de DUN.

- Registro 14 a 17.

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página a en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁴⁷	Fojas del Exponente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1º de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
14	119	Tabla 16 y 17. Productos generados por las SIC por tipo de demandante	5802, 1315	[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el	Información que no se utiliza para sustentar la imputación en materia de la negativa de	Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las [PMR] es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado

³⁴⁶ Página 116 del DPR.

³⁴⁷ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

				Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos]	trato o discriminación de precios	investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizado para la determinación de la práctica monopólica.
15	119	Tabla 18. Participación en los ingresos netos por ventas (2014)	6034			
16	121	Tabla 19 tarifas y precios de los RC (precios en MN de [CC])				
17	122	Precios de [CC] por segundo RCE				

[...]”³⁴⁸

La información testada a la cual solicita acceso DUN en el **registro 14** corresponde al número de productos básicos y de valor agregado generados por CC que obran en la “*Tabla 16 y 17. Productos generados por las SIC por tipo de demandante*”. Por su parte, el **registro 15** corresponde al porcentaje de los ingresos netos de CC que representa la venta de productos básicos y de valor agregado a los USUARIOS; así como al porcentaje de los productos vendidos por CC a CLIENTES, que se advierten en la “*Tabla 18. Participación en los ingresos netos por ventas (2014)*”.

De dichas tablas DUN tiene acceso a las cifras de TUM y de DUN, pero se encuentran testadas las cifras de CC y los totales. Ahora bien, aun cuando DUN no tiene acceso a las cifras específicas de CC y a los totales, sí conoce la conclusión de dichas tablas, en específico: (i) que todas las SIC ofrecen productos básicos y de valor agregado a USUARIOS y CLIENTES; (ii) que ******* son los principales consumidores de los productos ofrecidos por las SIC, incluyendo CC; y (iii) que la proporción que representa la venta de productos básicos a los USUARIOS *******

Dichas circunstancias son ilustrativas únicamente para efectos de dar contexto al apartado correspondiente al MERCADO INVESTIGADO en el DPR. Sin embargo, que DUN desconozca los datos específicos de CC no afecta su entendimiento del apartado “*IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia*” ni trasciende a su imputación, por lo que no se genera afectación alguna a su esfera de derechos.

Asimismo, los datos testados que obran en el **registro 16** se refieren a los precios que cobra CC por RC de PF y de PM sin considerar la tarifa de intercambio. Si bien DUN no tuvo acceso a dichos precios, sí conoce: (i) los precios máximos que autorizó la CNBV tanto a CC como a DUN y a TUM, para los RC de PF y de PM; y (ii) las tarifas de intercambio. De ahí, puede deducir que los precios que aplica CC por los RC de PF o PM cuando no hay consulta entre los SIC o cuando habiéndola no hay HIT, *******.

Eliminado: veintitrés palabras

49701

Al respecto, la información en análisis solo es descriptiva y sirve para entender con mayor claridad las características del MERCADO INVESTIGADO, pero no tiene relación con la imputación de DUN.

Asimismo, los datos testados que obran en el **registro 17** corresponden al [REDACTED] de acuerdo con el medio de entrega seleccionado. DUN sí tuvo acceso a la información referida en dicho registro, pues [REDACTED], se advierten algunas líneas más adelante en el mismo folio del DPR en la "Tabla 20. Tarifas y precios de los RCE (vigentes en el periodo 2010- 2015)",³⁴⁹ la cual se encuentra disponible para DUN en la versión del DPR que se le notificó.

Es decir, en la Tabla 20 referida, se señala de manera expresa que [REDACTED] cuando se entrega por correo electrónico, a [REDACTED] cuando se entrega por mensajería especializada.

- Registro 18 y 19

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página a en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁵⁰	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
18	123	Número de RC solicitados por usuarios, porcentaje de la totalidad de RC que comercializó [CC]		[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	Información que parcialmente no se utiliza para sustentar la imputación en materia de negativa de trato o discriminación de precios. Puede obtenerse en buena medida mediante operaciones aritméticas a partir de los datos disponible en la página 123 del DPR.	Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las [PMR] es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizado para la determinación de la práctica monopólica.
19	123	Tabla 21. Número de RC comercializados (2014)				

[...] ³⁵¹

La información testada referida en el **registro 18** corresponde al: (i) número de RC de PF que fueron solicitados en dos mil catorce por los USUARIOS a las SIC y el porcentaje que ello representa respecto del total de RC generados; y (ii) el porcentaje de RC comercializado por CC respecto del total de RC comercializados. Asimismo, el **registro 19** corresponde al: (i)

³⁴⁹ Página 122 del DPR.

³⁵⁰ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

³⁵¹ Folio 32567.

número de los RC comercializados por CC para PF, PM y ambos en dos mil catorce; (ii) el total de RC comercializados en dos mil catorce por TUM, DUN y CC para PF, PM y ambos; y (iii) la participación de mercado de CC en función de los RC comercializados a PF, PM y ambos.

Ahora bien, no era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la sección correspondiente del DPR y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección, en virtud de que aproximaciones muy cercanas a las cifras referidas en los registros 18 y 19 se puede obtener a partir de la información que obra en la misma página 123 del DPR, de manera sencilla mediante operaciones aritméticas consistentes en restas o en la búsqueda de una incógnita a través de la regla de proporción (comúnmente denominada "regla de tres"):

- (i) El número de RC de PF que fueron solicitados en dos mil catorce por los USUARIOS a las SIC y el porcentaje que ello representa respecto del total de RC generados que se advierten en el primer párrafo de la página 123 del DPR, se pueden identificar al considerar lo señalado en el último renglón de dicho párrafo. En específico, en dicho enunciado se señala que, en contraste con la información sobre PF, "solo se comercializaron ** de RC de PM, lo cual equivale al ** de la totalidad de los RC".

B
B
B

- (ii) El porcentaje de RC comercializado por CC respecto del total de RC comercializados que se advierte en el segundo párrafo de la página 123 del DPR, se pueden obtener al considerar que en dicho párrafo se señaló que más del ** de los RC fueron emitidos por TUM y DUN. De esta manera,

B
B
B

- (iii) El número de los RC comercializados por CC para PF, PM y ambos en dos mil catorce; el total de RC comercializados en dos mil catorce por TUM, DUN y CC para PF, PM y ambos; y la participación de mercado de CC en función de los RC comercializados a PF, PM y ambos, incluidos en la "Tabla 21. Número de RC comercializados (2014)",

B
B
B
B

Así, considerando que además de BC, CC es la única SIC en el mercado, para conocer el porcentaje de participación de mercado de CC, B correspondiente a BC, en cada segmento. Asimismo, para B

B

Eliminado: nueve renglones y sesenta y tres palabras

B
B
B
B para cada segmento.

Por lo anterior, la información testada relativa a los registros 18 y 19, no genera ninguna incertidumbre ni deja en estado de indefensión a DUN, ya que de la información a la que tuvo acceso puede inferir las cifras y porcentajes aproximados de CC a los que DUN no tuvo acceso y, en ese sentido, el testado de los registros que se analiza, no afecta los derechos de DUN.

- Registro 20

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁵²	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
20	124	Factores considerados para descuentos de [CC]	1201 y 1211	Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar el Mercado Investigado que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos.	Información que no se utiliza para sustentar la imputación en materia de la negativa de trato o discriminación de precios.	Es necesario conocer dicha información ya que para la existencia de las [PMR] es tan importante la conducta misma como la determinación del mercado investigado en que se realiza, por lo que, aun cuando no se utilice para la imputación de las conductas si es utilizada para la determinación de la práctica monopólica.

[...].³⁵³

La información testada a la cual solicita acceso DUN, se refiere a los factores considerados por CC para el otorgamiento de descuentos (como lo señala el mismo DUN en el Anexo 3 del INCIDENTE). Dicha información es referida en el DPR para contextualizar la explicación sobre los precios y la posibilidad legal de que las SIC otorguen descuentos y es utilizada para señalar las características generales del MERCADO INVESTIGADO. Dicha información no trasciende a la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de DUN, ya que los factores considerados por CC para el otorgamiento de descuentos en nada se relacionan con la determinación de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

En este sentido, el que DUN no haya podido acceder a la información testada relativa al registro 20, no le genera ninguna afectación a su esfera de derechos.

³⁵² La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

³⁵³ Folios 32567 y 32568.

iii. Información relativa al MR DE PM: registros 22 a 25.

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

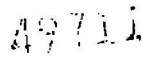
"[...]"

	Página a en DPR	Información clasificada como confidencial 354	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
22	269	Manifestaciones del número de usuarios con los que se tiene una relación de afiliación		[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar la aplicación de la fracción I del artículo 58 de la LFCE en la conducta imputada de Negativa de Trato, que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	Información relacionada con porcentajes de afiliación. Fue administrada con otros elementos de convicción para sustentar el análisis. Diversas conclusiones o los señalamientos correspondientes al análisis de sustitución por el lado de la demanda no fueron testadas por la AI en el DPR o se encuentra accesible dentro de los tomos principales del expediente.	[Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta].
23	270	Porcentaje de usuarios afiliados a ambas SIC			Las conclusiones que se desprenden de dicha información no se encuentran testadas. Dicha información fue administrada con otros elementos de convicción para sustentar el análisis de sustitución por el lado de la demanda.	
24	270	Tabla 62. Usuarios que adquieran algún producto para PM cada año	6034 Bis 5802 6142			
25	272 y 273	Manifestaciones a respuesta de Banxico relacionada con posibilidad de que existan proveedores alternos	26364 a 26366		Dicha información fue administrada con otros elementos de convicción para sustentar el análisis de sustitución por el lado de la demanda. Las conclusiones o los señalamientos que corresponden al análisis de sustitución por el lado de la oferta no se encuentran testadas.	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta. Aunado a lo anterior, al ser información proporcionada por Banxico, no hay fundamento alguno para considerar dicha información como confidencial.

[...].”355

354 La nota al pie original señala lo siguiente: “Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto.”

355 Folio 32568.



Adicionalmente, partiendo de lo señalado en el párrafo anterior y con la información que se advierte de la "Tabla 62. Usuarios que adquirieron algún producto para PM cada año" B

B, **

359 La información exacta de DUN ya la conoce porque esa no fue testada en la versión del DPR que le fue notificada.

Incluso, en la "Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información crediticia de PM de [DUN] y CC" de la página 280 del DPR, se advierte de manera exacta el promedio de participación de mercado de DUN respecto de los USUARIOS que adquirieron algún producto de PM.

Así, del total de la información referida es posible deducir: (i) de manera aproximada el porcentaje de USUARIOS afiliados en exclusiva CC, pues, como se expuso a lo largo del DPR, en el segmento correspondiente a PM solo se conocen dos competidores, DUN y CC; (ii) que el número de USUARIOS afiliados a ambas SIC es muy bajo; y (iii) la cantidad aproximada de USUARIOS que adquirieron productos de PM por año y en total únicamente de CC y de ambas SIC.

De esta manera, aunque DUN no haya tenido acceso a la información testada, tiene información suficiente para conocer de manera aproximada la información de CC, por lo que no se afecta el entendimiento de DUN de la subsección "a. Sustitución por el lado de la demanda" de la sección "A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE" del apartado "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR. En este sentido sin necesidad de conocer las cifras exactas testadas es posible que DUN entienda las premisas y la conclusión de que dicha SIC concentra la mayor cantidad de USUARIOS que adquirieron algún producto para PM cada año. DUN, por lo tanto, tuvo conocimiento de la conclusión relevante respecto del análisis referido en dichos párrafos, sin que explique de qué manera el no haber conocido las cifras específicas que fueron testadas le impidió defenderse.

Por otra parte, si bien DUN no tuvo acceso a la información testada en el registro 25, sí conoció las razones por las cuales la AI concluyó que "la información crediticia de PM, la cual es provista por los USUARIOS, y recopilada además de procesada por las SIC, carece de sustitutos [...] por el lado de la oferta".³⁶⁰

Al respecto, de la subsección "b. Sustitución por el lado de la oferta", incluido en la sección "A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE" que corresponde al apartado "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" se desprenden, entre otras, las siguientes premisas que sustentan la conclusión referida: (a) en términos de la LRSIC, solo los USUARIOS pueden ofrecer IC a las SIC, con fines comerciales; (b) además de las autoridades financieras, las SIC son las únicas habilitadas para recolectar IC y compartirla, sin que se considere una violación al secreto

³⁵⁹ DUN conoce que cuenta con aproximadamente ** de los afiliados de forma exclusiva y que una proporción mínima corresponde a USUARIOS afiliados a ambas SIC. Asimismo, DUN conoce el número de USUARIOS que adquirieron algún producto de DUN, B

³⁶⁰ Folios 031157.

financiero; (c) en términos del artículo 20 de la LRSIC, la BD de las SIC se integrará con información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que les sea proporcionada por los USUARIOS; y (d) no existe la posibilidad de que existan proveedores alternativos en el MR, como agencias gubernamentales que se encarguen de recopilar IC directamente de los USUARIOS o de los propios CLIENTES para después abastecer a las SIC.

De este modo, la omisión de la información testada en nada cambiaría el razonamiento de la AI plasmado en el DPR, por lo que DUN no necesitaba conocer la información testada para estar en posibilidades de defenderse o de conocer la mayor parte de los elementos que sustentan el análisis de sustitución por el lado de la oferta.

De los elementos señalados en la subsección "b. Sustitución por el lado de la oferta" del DPR que se encuentran visibles en la versión notificada a DUN se desprenden elementos suficientes para sustentar la conclusión de la sección "A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE" del apartado "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR, en el sentido de que la IC carece de sustitutos cercanos por el lado de la oferta.

Por lo tanto, el hecho de que DUN no haya tenido acceso a la información testada no lo dejó en estado de indefensión.

iv. Información relativa al PS en la conducta imputada de negativa de trato

- Registros 26 a 33.

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁶¹	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
26	277	Tabla 63. Participación de y mercado de DUN y [CC] respecto del número de cuentas con [HC].	5802 y 6034 bis	[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar la aplicación de la fracción I del artículo 59 de la LFCE en la determinación de PS, que	[...] cifras relativas o relacionadas con participaciones del mercado. Diversos señalamientos y conclusiones en materia del análisis de la fracción I del artículo 59 de la LFCE para el [MR] analizado en dicho apartado no se testó e incluso en las páginas 277, 279, 280 y 292 se refieren sin testar diversas participaciones de mercado de DUN.	[Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una

³⁶¹ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

27	278	Gráfica 22. Tamaño de la BD para PM	5802 y 6034 bis	impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	No se testó la información que corresponde a DUN, sólo se testó la información que corresponde a [CC]. Diversa información sobre las participaciones de mercado de DUN y [CC] no se testó, tampoco se testaron diversos señalamientos y conclusiones [...] que corresponde a la fracción I del artículo 59 de la LFCE para el [MR] analizado.	conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta].
28	278	Porcentaje o número de registros con los que [CC] entró en menor cantidad que DUN al cierre de marzo de dos mil quince.				
29	278 y 279	Tabla 64. Participación de y mercado de DUN y [CC] respecto al número de registros.	5802 y 6034 bis		Dicha información corresponde a cifras relativas o relacionadas con participaciones del mercado. Diversos señalamientos y conclusiones en materia del análisis de la fracción I del artículo 59 de la LFCE para el [MR] analizado en dicho apartado no se testó e incluso en las páginas 277, 279, 280 y 292 se refieren sin testar diversas participaciones de mercado de DUN.	
30	280	Porcentaje de la participación de mercado en la adquisición de productos de [IC] de PM de DUN.				
31	280	Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información crediticia de PM de DUN y [CC].	6034 bis, 5802 y 6142			
32	280	Pie de página 619. Aclaración respecto de la [REDACTED] referida en la oración relacionada con la nota al pie.			El análisis correspondiente a la fracción I del artículo 59 de la LFCE se encuentra sustentado en diversos elementos de convicción que no fueron testados. La información testada en la nota al pie de página no refiere elementos de convicción adicionales que sustentan el análisis respecto de la fracción I del artículo 59 de la LFCE o la conducta imputada a DUN, ya que únicamente contiene una aclaración respecto de la [REDACTED] referida en la oración relacionada con dicha nota al pie de página.	Si la información se refiere a la [REDACTED] de DUN, no tiene razón de ser confidencial. El desconocimiento de dicha información afecta las defensas ya que no es posible desvirtuar la existencia de la [REDACTED].

Adicionalmente,

B B I **
**

Aunado a lo anterior, de los párrafos que se encuentran antes y después de la Tabla 63 referida, se desprende que la participación de mercado de DUN respecto del promedio mensual por año de CLIENTES con HC en su BD es mucho mayor que la de CC.

En este sentido, la información testada del registro 26 no afecta la defensa de DUN. La información disponible para DUN en la Tabla 63 es suficiente para que DUN entienda que su participación de mercado respecto del número de CLIENTES con HC es mucho mayor que la de CC.

- La información testada en el registro 27 que se advierte en la "Gráfica 22. Tamaño de la base de datos para PM.", se trata de

**
**
**

En el DPR notificado a DUN se encuentra visible la información que corresponde a DUN y se observa testada la información completa de CC. En este sentido, se deja visible para DUN

B B

Por lo anterior, de la sección de la Gráfica 22 que se encuentra visible en la versión del DPR que se le notificó a DUN, se advierte claramente que

**
**

Esa conclusión es acorde con la manifestación del DPR en el último párrafo de la página 277 en la que se señala que "[...] no obstante, la incorporación de [CC] a la industria, DUN ha continuado acumulando de forma progresiva y constante expedientes en su [BD]. La participación de [DUN] a lo largo de este periodo ha sido en promedio de [**] en tanto que la de [CC], su único competidor, ha sido mucho menor [...]."³⁶³

Por lo tanto, dicho párrafo y la Gráfica 22 son claros en establecer que la participación de DUN en el mercado medida en función del número de expedientes en su BD es muy superior a la de CC. Así, DUN cuenta con los elementos necesarios para entender esa sección del DPR y poder defenderse.

- La información testada en el registro 28 se refiere a cuántas veces más en registros para PM tenía DUN en relación con CC al cierre de marzo de dos mil quince. Por su parte, la información testada en el registro 29 corresponde a [**] que se advierten en la "Tabla.64. Participación de mercado de [DUN] y [CC] respecto del

³⁶³ Folio 031161.

número de registros”.

En la Tabla 64 referida se muestra información para el periodo de dos mil doce a dos mil quince de: (i) el promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM (miles de registros); y (ii) la participación de mercado que corresponde a DUN y a CC.

Aunque en dicha Tabla se encuentra testada la información completa de CC y las participaciones anuales de DUN, éste último tiene acceso en dicha tabla a la información del promedio mensual por año de créditos registrados en su BD (miles de registros), así como al promedio del periodo de su propia participación de mercado.

A partir de cifras que no están testadas para DUN [REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED] y al saber que en dicho mercado solo participan él y CC, DUN puede deducir el promedio aproximado B [REDACTED] B [REDACTED]

Adicionalmente, [REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED], DUN también puede conocer el promedio del periodo de dos mil doce a dos mil quince del promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM B [REDACTED]

Por lo que hace al registro 28, de la información referida en la Tabla 64; así como de lo señalado en el párrafo en el que se ubica la información testada, se observa que si bien DUN no conoce con exactitud cuántas veces más registros tiene DUN que CC, conoce que la participación de mercado de DUN respecto al número de registros es mucho mayor que la de CC, pues “la [BD] de [DUN] es mucho más extensa que la de [CC] [...]”³⁶⁴

Asimismo, conoce que en promedio del dos mil doce al dos mil cinco, esta proporción equivale al [REDACTED] de participación de mercado para DUN.

Conocer las cifras exactas no haría diferencia ni cambiaría el sentido de la afirmación de la AI, pues queda claro que la BPD de DUN cuenta con muchos más registros que la BPD de CC.

En este sentido, la información testada en los registros 28 y 29 no afecta la defensa de DUN. La información disponible para DUN en la Tabla 64 y en el párrafo anterior a ésta, es suficiente para que DUN entienda que su participación de mercado respecto al número de registros en el periodo de dos mil doce a dos mil quince es mucho mayor que la de CC, pues DUN cuenta con el [REDACTED] del mercado.

- Respecto del registro 30, DUN señala en el Anexo 3 del INCIDENTE, que se trata del “Porcentaje de participación de mercado en la adquisición de productos de información

crediticia de PM de DUN"; sin embargo, dicho dato no se encuentra testado para DUN. La información testada en el segundo párrafo de la página 280 del DPR se trata del porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC.

El porcentaje de usuarios afiliados a ambas SIC puede inferirse de manera aproximada de la información que el DPR proporciona en otras secciones. Al respecto, se remite al análisis sobre los registros 23 y 24 del presente argumento en donde se señalan los elementos que permiten concluir que el porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC es casi nulo.

- La información testada en el **registro 31** corresponde a [REDACTED] que se advierten en la "Tabla.65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información crediticia de PM de [DUN] y [CC]". En dicha tabla se muestra información para el periodo de dos mil doce a dos mil quince de: (i) el número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM; y (ii) la participación de mercado en la adquisición de productos de IC de PM de DUN y CC.

Aunque en dicha tabla se encuentra testada la información completa de CC y la información agregada de ambas SIC, DUN tiene acceso en dicha tabla a la información del número de USUARIOS que adquirieron de dicho agente económico algún producto de PM para cada año de dos mil doce a dos mil quince y el promedio de participaciones de mercado de DUN en dicho periodo.

A partir de las cifras que no están testadas para DUN [REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] B Aun sin conocer un porcentaje exacto, puede identificar con la información disponible que la participación de mercado de CC es muy inferior a la de DUN.

Adicionalmente, si se considera lo señalado al analizar los registros 23 y 24 del presente argumento, relativo a que el porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC es casi nulo, [REDACTED] B

[REDACTED] B
En este sentido, la información testada no afecta la defensa de DUN, pues la información a la que sí tiene acceso es suficiente para que DUN entienda que su participación de mercado en la adquisición de productos de IC es mucho mayor que la de CC, pues DUN cuenta con el [REDACTED] ** del mercado.

- El **registro 32**, se refiere a información testada que se ubica en el pie de página seiscientos diecinueve del DPR, el cual contiene una manifestación o aclaración de la AI relativa a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (ello lo reconoce DUN, como se desprende de la manifestación incluida en la página 6 del Anexo 3 del INCIDENTE).

Según se desprende de la página 279 del DPR, DUN ejerce una [REDACTED] con sus USUARIOS afiliados, que se explica, según el DPR, por el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Ahora bien, aun cuando DUN no puede ver la aclaración que se hace en la nota al pie respecto de [REDACTED] en la página 280 del DPR, sí puede conocer la explicación que la AI señala en relación con ese tema: "*Esta [REDACTED] se explica porque los USUARIOS sólo podrán obtener productos de información crediticia cuando, previamente, le han proporcionado su información a la SIC que les presta sus servicios; ello, con base en el Principio de Reciprocidad [...]*".³⁶⁵

Asimismo, la información testada en la nota al pie 619 incluida en la página 280 de la versión del DPR notificado a DUN no refiere elementos de convicción adicionales que sustenten el análisis respecto de la fracción I del artículo 59 de la LFCE o la conducta imputada a DUN. De ahí que no haber tenido acceso a dicha información no afecta el derecho de defensa de DUN, pues no trascendió en la imputación.

- Finalmente, la información testada relativa al **registro 33** se refiere al porcentaje mínimo de participación de mercado que tuvo DUN en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, para cualquiera de las tres variables analizadas en el DPR.

DUN conoce su promedio de participación de mercado para cada una de las tres variables analizadas en el DPR, por lo que el desconocimiento de dicha cifra en nada modifica los señalamientos y las conclusiones visibles para DUN en relación con el análisis de sus participaciones de mercado y no afecta, por lo tanto, sus derechos de defensa.

Así, la conclusión de la sección del DPR que se analiza es que las participaciones de mercado para cada una de las variables relacionadas con la magnitud de la IC con la que cuentan las SIC, muestran que DUN ha mantenido desde dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas, siendo estas significativamente superiores a las de su competidor, CC. DUN tiene acceso a suficiente información para entender dicha conclusión y estar en posibilidades de defenderse. El que no sea posible ver la cifra exacta que se testó en dicha página no afecta la comprensión del apartado.

Ahora bien, de la lectura integral de la sección "*A. Fracción I del artículo 59 de la LFCE*" en el apartado "*XII. Determinación del Poder Sustancial de MERCADO*" se desprende que la información que se encuentra visible en el DPR que se le notificó a DUN le permite conocer tanto las conclusiones como las premisas de dicha sección.

Por lo tanto, el hecho de que DUN no haya tenido acceso a la información testada no lo dejó en estado de indefensión.

Finalmente, la omisión de la información testada en nada cambiaría el razonamiento de la AI plasmado en el DPR, por lo que DUN no necesitaba conocer la información testada para estar en posibilidades de defenderse.

³⁶⁵ Páginas 279 y 280 del DPR. Folios 31163 y 31164.

- Registro 35

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁶⁶	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1º de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
35	288	Manifestaciones de TU SRL	21752	Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para determinar la aplicación de la fracción IV del artículo 59 de la LFCE en la determinación de poder sustancial, que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos.	Corresponde a manifestaciones de TU SRL que fueron administradas con otros elementos de convicción para sustentar el análisis que corresponde a la fracción IV del artículo 59 de la LFCE para el [MR]. Diversas conclusiones o señalamientos que corresponden al análisis respecto de las posibilidades de acceso de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos no fueron testados por la AI.	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta.

"[...]"³⁶⁷

La información testada a la cual solicita acceso DUN, se trata de manifestaciones de TU SRL respecto de la posibilidad de acceso de los agentes económicos a fuentes de insumos.

Ahora bien, de la sección "Fracción IV del artículo 59 de la LFCE" en el apartado "XII. Determinación del Poder Sustancial de MERCADO" de la versión del DPR que le fue notificada a DUN se desprende que dicho agente económico tuvo acceso a la totalidad del razonamiento vertido por la AI en relación con esa sección excepto por el pasaje testado, que se trata de una manifestación de TU SRL.

El contexto en el que se ubica dicha manifestación permite inferir que TU SRL se refiere a la posibilidad de acceso de los agentes económicos a fuentes de insumos.

Asimismo, inmediatamente después de la manifestación de TU SRL que se encuentra testada, se advierte una afirmación en el DPR respecto de que: "Este último elemento, el acceso total a la información crediticia disponible de los otorgantes de crédito, puede constituirse como la barrera a la entrada más importante." Esta manifestación en el DPR permite inferir que como parte del

³⁶⁶ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

³⁶⁷ Folios 32571.



69721

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

pasaje testado se advierte una afirmación de TU SRL respecto de la importancia del acceso total a la IC disponible de los otorgantes de crédito.

Ahora bien, aunque DUN no tuvo acceso a lo manifestado por TU SRL, sí lo tuvo respecto de las manifestaciones realizadas por la AI como parte del análisis de dicho apartado. Al respecto, la AI al analizar las posibilidades de acceso de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos indicó que: (i) el acceso a la totalidad de la IC puede constituirse como la barrera a la entrada más importante; (ii) el principal insumo para elaborar los productos de IC son los registros; (iii) para mantenerse en la industria una SIC requiere contar con suficientes USUARIOS que le provean de IC, y tener acceso a la BD de la otra SIC para elaborar productos; (iv) la primera alternativa es remota en virtud de que la mayoría de los USUARIOS se encuentran afiliados a DUN, lo que disminuye los incentivos de afiliarse también a CC (al respecto, el DPR remite al análisis respecto de la fracción I del artículo 59 de la LFCE, donde se refiere, entre otras cuestiones, el número reducido de USUARIOS afiliados a ambas SIC y se explican los efectos de red); (v) la segunda alternativa consiste en consultar las BD del resto de las SIC para elaborar productos; y (vi) al facturar más productos de IC, DUN realiza más consultas a la BD de CC.

Así, no era necesario que DUN conociera el dicho de TU SRL para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la sección "A. Fracción IV del artículo 59 de la LFCE" en el apartado "XII. Determinación del Poder Sustancial de MERCADO" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

v. Información relativa a la conducta imputada de negativa de trato

- Registros 36, 37, 38, 39 y 40

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁶⁸	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1º de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
36	299	Manifestaciones de consecuencias de haber transcurrido el plazo de 30 días a que hace	23510	[Desconocimiento de la totalidad de la información]	Si bien la información guarda relación con el análisis de la conducta imputada a DUN, en el apartado 'XIII. Análisis de la conducta: Negativa	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido

³⁶⁸ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

		alusión el artículo 36 LRSIC.		considerad a por la AI para el análisis de la conducta de negativa de trato, que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	de trato' se refieren elementos de convicción adicionales que sustentan el análisis respecto de la fracción V del artículo 56 de la LFCE, en particular respecto de la negativa al intercambio de la información señalada en el apartado referido. Diversas conclusiones o señalamientos que corresponden al análisis en materia del objeto y efecto de la conducta imputada no fueron testadas por la AI en el DPR.	análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta.
3 7	300	Información proporcionada por [CC]	23619			
3 8	300 y 301	Manifestaciones de la CNBV en el oficio **	23513			
3 9	302	Escrito de solicitud de fecha * ** escrito de solicitud y oficio ** en el que CNBV proporciona respuesta.	23506			
4 0	313	Respuesta emitida por CNBV				

[...].³⁶⁹

La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 36 al 40 está relacionada con el análisis de la negativa de trato relativa a: (i) el escrito de ** que presentó CC ante la CNBV; (ii) el oficio de respuesta B emitido por la CNBV; y (iii) diversas manifestaciones de la CNBV contenidas en el oficio número B. ³⁷⁰ Dicha información se encuentra en la sección "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" del DPR.

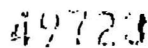
Dado que los cinco registros mencionados se encuentran relacionados, para evitar repeticiones innecesarias, la información testada correspondiente se analizará en conjunto.

Si bien DUN no tuvo acceso a la información testada que refiere en dichos registros, DUN pudo conocer el tipo de información de la que se trataba de conformidad con los razonamientos que se expresan a continuación.

Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que se encuentra visible para DUN en los tomos principales del EXPEDIENTE, la AI señaló lo siguiente en relación con la confidencialidad del anexo 1 del escrito de catorce de diciembre de dos mil quince, presentado el diecisiete de diciembre de dos mil quince por la CNBV en la OFICIALÍA. Dicha información se refiere a la identificada en los registros 36, 38, 39 y 40:

³⁶⁹ Folios 32571 y 32572.

³⁷⁰ Definido en el Glosario del DPR como "OFICIO DE DESAHOGO DE LA REITERACIÓN".



“[...]

“[...]

[...]

[...]

[...] [Énfasis añadido].³⁷²

De las transcripciones anteriores se desprende que la información relativa a los registros 36 a 40 proviene de constancias que fueron clasificadas como confidenciales por la AI, por contener información sobre: (i) el escrito de solicitud de [REDACTED] por dos SIC para llevar a cabo el intercambio de la BPD; (ii) un escrito de solicitud de [REDACTED] por una SIC a la CNBV [REDACTED]; y (iii) el oficio de respuesta de la CNBV a una SIC, referente a su escrito de solicitud.

Ahora bien, el escrito de [REDACTED] es del conocimiento de DUN toda vez que fue notificado a dicho agente por CC y el mismo DUN lo presentó en la investigación (folios 24898 y 24899).

Asimismo, si bien DUN no pudo conocer el contenido exacto del escrito de [REDACTED] y del oficio de respuesta de la CNBV, pudo advertir que el primero consistía en [REDACTED].

En este sentido, toda vez que únicamente existen dos SIC en el MR DE PM, DUN podía deducir que si no fue dicho agente económico quien presentó el escrito, entonces necesariamente fue CC. Así, DUN pudo conocer en términos generales la solicitud que se realizó mediante el escrito y quién la presentó.

Lo anterior además se hizo del conocimiento de DUN en la página 265 del DPR, en la cual se señaló lo siguiente (dicha sección no se encuentra testada en la versión del DPR que se le notificó a DUN):

"La segunda conducta descrita en este DICTAMEN consiste en la negativa de [DUN] (parte del mismo [GBC] que TUM) a intercambiar su BPD con [CC]. La BPD integra la información negativa proveniente de los USUARIOS y recopilada por las SIC. La solicitud se hizo por escrito en [REDACTED]. No obstante, [DUN] nunca accedió a realizar dicho intercambio. Una vez que venció el plazo legal para que [DUN] llevara a cabo el intercambio, [CC] le notificó a la CNBV la omisión de [DUN], [REDACTED] B [REDACTED] B. Hasta la fecha [DUN] no ha sido sancionado. [...] [Énfasis añadido]."

Por otra parte, en la página 313 del DPR en la que se observan las conclusiones de la sección correspondiente al análisis de la conducta de negativa de trato se señala lo siguiente:

"[...]"

Los argumentos aquí vertidos se pueden resumir de la siguiente forma:

a) [CC] solicitó el intercambio de la BPD de PM a [DUN], mediante escrito [REDACTED]

b) [DUN] se rehusó tácitamente y de manera unilateral, mediante la omisión a la solicitud formulada, a proporcionar [CC] la BPD de PM.

³⁷² Folio 25030.

c) [CC] hizo del conocimiento de la CNBV la negativa de [DUN] de proporcionarle su BPD de PM.

d) La CNBV emitió su respuesta [información testada relativa al registro 40]
[...] [Énfasis añadido].”

Así, DUN sabía que una vez que venció el plazo legal para que llevara a cabo el intercambio,

*** y que la CNBV respondió a dicha solicitud.

Derivado de lo anterior, el no conocer la información que se encuentra testada en el DPR no trascendió al derecho de defensa de DUN, máxime cuando tuvo oportunidad de entender el contenido de la sección “XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato” del DPR, y por lo tanto manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

A mayor abundamiento, la información que se encontraba visible para DUN en las páginas 265 a 313 del DPR, los acuerdos de confidencialidad señalados, y el contexto en el que se encuentra la información testada, le permitía a DUN conocer:

- Que la información testada que corresponde a los registros 36 y 37 se refería a la solicitud

***. Máxime cuando los folios a los que se refiere la información testada correspondían a dicho documento.
- Que la información testada en el registro 38 es la respuesta de la CNBV a la solicitud que le fue presentada (señalada en los registros 36 y 37), mediante B
B Si bien DUN no puede conocer el contenido exacto de la respuesta, conoce que, a pesar de la solicitud, “[...] Hasta la fecha [DUN] no ha sido sancionado. [...]”.³⁷³
- La descripción de los documentos presentados por la CNBV correspondientes al registro 39.

Incluso, DUN conocía que dichos documentos se presentaron para dar respuesta al segundo acuerdo de reiteración de información contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-70. Según se desprende de la página 301 del DPR, en dicho requerimiento de información,

- Que la información testada en el registro 40 se trata del sentido de la respuesta de la CNBV. Si bien DUN no puede conocer el contenido exacto de la respuesta, conoce que, a pesar de la solicitud, “[...] Hasta la fecha [DUN] no ha sido sancionado. [...]”.³⁷⁴

³⁷³ Página 265 del DPR.

³⁷⁴ Página 265 del DPR.

Como se ha señalado, el que DUN no conozca el contenido íntegro de algún documento, en este caso específico de la respuesta de la CNBV a [REDACTED], no lo deja en estado de indefensión, pues DUN sí tuvo conocimiento de [REDACTED] así como al hecho de que a la fecha DUN no ha sido sujeto de una sanción por la CNBV por no compartir su información con CC.

De esta manera, la información a la que DUN tuvo acceso le permite entender con claridad el contenido de la información testada en los registros 36 a 40, por lo que el desconocimiento de la información testada no genera incertidumbre ni deja en estado de indefensión a DUN, ya que de la información a la que tuvo acceso en la sección "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" del DPR logra entenderse que: (i) CC solicitó a DUN acceso a su BPD de PM y esta se negó a proporcionárselo; (ii) que CC notificó a la CNBV [REDACTED] (iii) que la CNBV emitió una respuesta a [REDACTED]; y (iv) que a la fecha DUN no ha sido sancionado por la CNBV.

Además, la información testada no impidió a DUN conocer la hipótesis normativa imputada y la existencia de diversos elementos que la sustentan, esto es: (i) que DUN tiene PS en el MR DE PM; (ii) que DUN se negó de forma unilateral a proporcionar bienes que se encontraban disponible y eran normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) que ello impidió el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

En este sentido, no se advierte que las manifestaciones testadas a DUN en este apartado afecten su entendimiento de la sección que analiza la conducta de negativa de trato y, por lo tanto, su defensa.

vi. Información relativa al objeto y efecto de negativa de trato

- Registros 41, 42, 43, 44 y 45

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:

"[...]"

	Página en DPR	Información clasificada como confidencial ³⁷⁵	Fojas del Expediente	Afectación a la defensa por el desconocimiento de la información	Respuesta de la [ST] en el oficio de fecha 1° de diciembre de 2017	Manifestaciones a la respuesta de la [ST]
41	317	Manifestaciones de insuficiente recopilación y procesamiento de información de PM	674 y 675	[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para el análisis de objeto y efecto consistente en el impedimento de acceso al mercado relevante y relacionado a CC derivado de la conducta de negativa de trato, que impiden	La información está relacionada con el análisis del objeto y efecto de la conducta imputada. Dicha información fue administrada con otros elementos de convicción para sustentar el análisis	Precisamente la información es necesaria puesto que no hay forma de saber si la AI realizó un debido análisis para llegar a las conclusiones. El hecho de que dicha información
42	318	Respuesta de Banco Azteca.	8039 y 8040			

³⁷⁵ La nota al pie original señala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del contexto."

43	319	Tabla 71. Participación de mercado por venta de RC en PM	6034 y 6142	desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].	correspondiente. Diversas conclusiones o los señalamientos que corresponden al análisis en materia del objeto y efecto de la conducta imputada no fueron testadas por la [AI] en las versiones del DPR notificada a DUN.	haya sido utilizada para arribar a conclusiones demuestra lo relevante que es para la defensa toda vez que es imposible saber si una conclusión es correcta si no se conocen todos los elementos tomados en cuenta.
44	322	Información no identificada por el [sic] [AI]	674 y 675	[Desconocimiento de la totalidad de la información considerada por la AI para el análisis del objeto y efecto consistente en la ausencia de innovación y altos precios en el mercado derivado de la conducta de negativa de trato, que impiden desvirtuar la presunción de certeza de los mismos].		
45	324 y 325	Tabla 74. Precio promedio de RC de PM ofrecido por cada una de las SIC.	6034 y 3142			

[...].”³⁷⁶

La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 41 a 45 se trata de: (i) información respecto de la existencia o no de productos de valor agregado comercializados por CC; (ii) la respuesta de BANCO AZTECA a la pregunta sobre si mantiene relación con una o las dos SIC existentes en el mercado; (iii) algunas [REDACTED] [REDACTED] incluidos en la “Tabla 71. Participación de mercado por venta de RC de PM”; y (iv) algunas cifras relativas al incremento de precios promedio de RC de PM y cambios porcentuales en dichos precios, incluidos en la “Tabla 74. Precio promedio de RC de PM ofrecido por cada una de las SIC”.

Ahora bien, no era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la sección “XIV. Objeto o efecto de la conducta: Negativa de trato” del DPR y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección, por las razones que se exponen a continuación:

- De conformidad con los folios que se citan respecto de los registros 41 y 44, la fuente de dicha información es el “anexo productos” del escrito de diecisiete de marzo de dos mil quince presentado por la CNBV, en el que se describen los productos de IC que ofrece cada SIC.

Asimismo, del contexto en el que se desarrolla la información de dichos registros se desprende que están relacionados con la afirmación de que ha habido un pobre desarrollo de los productos de valor agregado para PM en México, por las SIC.

De igual forma, en el párrafo en el que se ubica el registro 41 se señala que la falta de compartición de IC de DUN a CC ha impedido: (i) que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS, pues CC no tiene la información completa sobre los adeudos de los CLIENTES de los USUARIOS de DUN; y (ii) que CC ofrezca a los USUARIOS productos para predecir comportamiento o análisis de cartera o de administración de cartera.

Por su parte, de la sección del DPR donde se ubica el registro 44 se desprende que: (i) dada la falta de competencia ha habido ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos de IC de valor agregado; y (ii) la oferta de productos de valor agregado para PM es muy baja en México.

En este sentido, la información testada no afecta el entendimiento del apartado, ni afecta el derecho de defensa de DUN, máxime cuando en relación con los pasajes testados en los registros 41 y 44, en la sección "*E. Fracción V del artículo 59 de la LFCE*" del apartado "*XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado*", páginas 290 y 291 del DPR, se establece lo siguiente:

"[...]"

Desde el dos mil diez y hasta el año dos mil quince, [DUN] sacó al mercado los siguientes productos de valor agregado orientados al mercado de PM:

[...]

* *

[...] [Énfasis añadido].³⁷⁷

Así, DUN conocía que en la página 291 del DPR se indicó que

**

**

Por lo anterior, DUN contó con todos los elementos necesarios para ejercer su derecho de defensa.

- La información testada en el **registro 42** es la respuesta dada por BANCO AZTECA a un requerimiento de la AI en el que se le preguntó a BANCO AZTECA si mantenía relación comercial con alguna de las SIC existentes en el mercado, así como, en su caso, las razones por las que decidió establecer relación comercial con una o ambas SIC.

Ahora bien, en el tercer párrafo de la página 318 del DPR la AI señala que existen casos de algunos USUARIOS que manifestaron su preferencia por consultar la BD de DUN, aunque no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, lo cual según la AI puede advertirse de la respuesta dada por BANCO AZTECA.

Por otra parte, en el párrafo final de la página 318 del DPR, la AI concluye que la omisión de DUN de proporcionar a CC su BPD completa, incluyendo el SEGMENTO CO, ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos confiable.

En este sentido, no se observa que la información testada afecte el entendimiento de DUN del apartado, ni se considera que dicha información sea necesaria para que DUN pueda ejercer su derecho a una defensa adecuada, ya que, si bien DUN no conoce el texto literal de lo señalado por BANCO AZTECA, sabe que se relaciona con una

³⁷⁷ Folios 31174 y 31175.

preferencia por consultar la BD de DUN no por razones de eficiencia y con el hecho de que los productos de CC [REDACTED] B

B

- La información testada relativa al **registro 43**, se trata del número de RC de PM de CC comercializados entre dos mil diez y dos mil quince, así como de la participación de mercado de DUN y de CC en el mismo periodo, que se advierten en la "Tabla 71. Participación de mercado por venta de RC de PM" del DPR. De dicha tabla DUN tuvo acceso al número de RC de PM que comercializó él y al total general de participación de mercado de DUN por la venta de dichos RC de PM desde dos mil diez hasta dos mil quince.

Ahora bien, no era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para que tuviera oportunidad de conocer las conclusiones que se derivan de la "Tabla 71. Participación de mercado por venta de RC de PM" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera, ya que DUN conoció que ha tenido una participación promedio por venta de RC de PM de alrededor del [REDACTED].

Adicionalmente, con la información de la tabla a la que DUN tuvo acceso, B

B

B

B

Así, de la información que conoce DUN puede desprender que su participación de mercado es muy superior a la de CC.

Finalmente, de la información contenida en la nota al pie de dicha página, DUN puede advertir la [REDACTED] B

Por lo anterior, DUN no requería conocer las cifras exactas para poder defenderse y desvirtuar las afirmaciones del DPR.

- La información testada relativa al **registro 45** se trata de precios y cambios porcentuales de precios de RC de PM ofrecidos por CC entre dos mil doce y dos mil quince, que se advierten en la "Tabla 74. Precio promedio de RC de PM ofrecido por cada una de las SIC" en las páginas 324 y 325 del DPR.

No era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para que tuviera oportunidad de entender el contenido referido en la sección "B. Otras manifestaciones de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de productos de información crediticia." del apartado "XIV. Objeto y efecto de la conducta: Negativa de Trato" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.

De la lectura de las páginas 324 y 325 del DPR se desprende que una consecuencia de la falta de intercambio en la BPD de PM, de acuerdo con la AI, sería el aumento continuo de los precios de los RC de PM. En el párrafo anterior a la Tabla 74, se

Eliminado: cuatro renglones y veintiséis palabras

señala que el precio de los RC de PM ofrecidos a los USUARIOS ha tenido un incremento promedio anual al B

Esta afirmación se complementa con la información disponible para DUN de la Tabla 74, en la que se aprecia el cambio porcentual anual de los precios promedio del RC de PM para DUN desde dos mil doce a dos mil quince.

B

Adicionalmente, toda vez que B
B cuenta con los elementos suficientes para combatir la imputación del DPR.

Finalmente, como se indicó a lo largo del presente argumento, no era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada en el DPR que refiere para poder ejercer su derecho de defensa, máxime cuando además de lo ya señalado, las conclusiones del DPR se desprenden de diversos elementos, siendo que DUN tuvo acceso de manera total a la mayoría de estos, y de aquellos respecto de los cuales se testó alguna palabra, oración o sección, DUN pudo conocer las conclusiones generales y las implicaciones de estos.

C. Resulta cosa juzgada que no cometí la PMR descrita en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE.

DUN manifestó:³⁷⁸

Debe quedar firme que no cometí ninguna práctica consistente en incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otros agentes económicos, ya que la investigación inició para verificar las posibles PMR previstas en las fracciones X u XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR, así como del artículo 56 de la LFCE. Además, en la página 51 del DPR, la AI consideró que no se acreditó la práctica prevista en la fracción XI de los ordenamientos señalados.

Así, deben declararse firmes, sin que puedan ser modificadas por el PLENO, las consideraciones de la AI que confirman que no se acreditó dicha práctica prevista en la fracción XI, pues ello modificaría la *litis* en violación a mi derecho de audiencia y defensa.

El principio de congruencia que deben observar todas las resoluciones consiste en la obligación de resolver únicamente sobre los puntos que sean oportunamente planteados por las partes, en este caso, la AI, sin que pueda añadir cuestión alguna. Existirá incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos

³⁷⁸ Páginas 17 a 22 de la CONTESTACIÓN DUN.

ajenos a la *litis*. El PLENO debe ceñirse a la *litis*. La *litis* marca la pauta y medida del conflicto sometido al conocimiento de un órgano resolutor.

Es necesario resaltar que la autoridad de la cosa juzgada resulta obligatoria para cualquier autoridad y constituye la verdad legal, por tanto, contra ella no se admite recurso ni prueba alguna.

En el caso concreto, la conclusión de la AI de que no se acreditó la práctica prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR o del artículo 56 de la LFCE constituye cosa juzgada, ya que ello fue confirmado por el propio PLENO al momento en que la AI le presentó el DPR, proponiendo iniciar un procedimiento seguido en forma de juicio en mi contra con base en los elementos objetivos obtenidos durante la investigación.³⁷⁹

De considerarse lo contrario y variarse la *litis*, se estaría supliendo la queja o reclasificando la conducta por la que estoy siendo sancionada, con lo cual se violaría mi derecho de defensa y al debido proceso.³⁸⁰

Así, el PLENO ya se ha pronunciado y, por lo tanto, resulta cosa juzgada respecto del fondo del asunto el hecho que no cometí práctica alguna consistente en incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otros agentes económicos.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:³⁸¹

La emisión de un dictamen de probable responsabilidad no puede calificarse como una resolución judicial o cuasi-judicial, por lo que no es aplicable la institución de "cosa juzgada". Conforme al artículo 79 de la LFCE, el DPR tiene por objeto, principalmente, hacer del conocimiento del PLENO y los probables responsables, los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado; las pruebas recabadas durante la investigación y demás elementos de convicción que obren en el expediente y su análisis, así como los elementos que sustenten el sentido del dictamen junto a las disposiciones legales que se estimen violadas y sus consecuencias.

El DPR no tiene por objeto resolver en definitiva sobre la comisión de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, sino únicamente emplazar a los probables responsables al PSFJ, a fin de que estén en posibilidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas respecto de las conductas imputadas.

³⁷⁹ DUN refiere que incluso la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez se excusó, lo que demuestra que el Pleno tuvo conocimiento de los elementos propuestos por la AI en el DPR.

³⁸⁰ DUN refiere los criterios contenidos en las tesis de rubro "RECLASIFICACIÓN DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA" Y "RECLASIFICACIÓN DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

³⁸¹ Páginas 12 a 15 de la VISTA DUN.

En relación con las facultades del PLENO para reclasificar la imputación contenida en el DPR o suplir la deficiencia de la queja, la AI no puede emitir pronunciamiento alguno, pues su participación en el PSFJ se limita a sostener los hechos que, conforme al DPR, se estiman violatorios de la LFCE.

Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

DUN manifiesta que debe quedar firme que no cometió la PMR prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR, así como del artículo 56 de la LFCE y que la determinación de la AI de que no se acreditó dicha práctica constituye cosa juzgada. Dichos argumentos son inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Por una parte, los argumentos de DUN **no combaten** la imputación presuntiva contenida en el DPR, en el cual únicamente se emplazó a DUN por la probable comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Así, toda vez que en el DPR no se le imputó una probable responsabilidad a DUN por la comisión de la PMR prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE, el PLENO no se pronuncia en la presente resolución sobre la existencia o inexistencia de dicha PMR ni sobre la probable responsabilidad de DUN derivada de la PMR referida. En este sentido, tal como se advierte del contenido de la presente resolución, este PLENO no modificó o varió la imputación referida en el DPR, toda vez que no se atribuye responsabilidad alguna a DUN por haber actualizado el supuesto previsto en la referida fracción XI.

Con independencia de lo anterior, no ha quedado firme ni puede considerarse cosa juzgada el pronunciamiento de la AI relativo a que “[...] *respecto de la conducta prevista en la fracción XI del artículo 56 de la LFCE que presuntamente pudo haber realizado TUM, [DUN] y [CC], esta [AI] considera que dada la información que deriva de la investigación efectuada, no se tiene acreditada dicha [PMR] [...] [Énfasis añadido]*”,³⁸² ya que, en primer lugar, no se desprende que la AI haya hecho un pronunciamiento de fondo sobre la conducta prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR o del artículo 56 de la LFCE; y, en segundo lugar, la AI no es la autoridad competente para realizar un pronunciamiento con tal alcance. En este sentido, el argumento de DUN resulta infundado.

El hecho de que la AI considere que dada la información con la que cuenta no es posible acreditar la existencia de la conducta prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE, no implica un pronunciamiento respecto de que hechos específicos no constituyen una violación a la normativa de competencia y, en este sentido, no existe una determinación “firme” o una “cosa juzgada”.

Así, que la AI manifieste que no cuenta con elementos en una investigación para acreditar la existencia de una PMR, no puede considerarse una determinación firme respecto a que un agente económico determinado (DUN) no realizó una conducta que puede encuadrar en la hipótesis normativa prevista en la fracción respecto de la cual la AI no encontró suficientes

³⁸² Página 51 del DPR.

elementos para realizar una imputación. Lo anterior, ya que en la investigación todavía no se determinan las conductas ni los agentes económicos probables responsables, por lo que el pronunciamiento de la AI no implica un análisis sobre si una conducta específica de un determinado agente económico, en este caso DUN, actualiza una hipótesis normativa, máxime cuando dicho análisis le corresponde al PLENO.

Adicionalmente, el DPR no tiene por objeto resolver en definitiva sobre la comisión de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, sino únicamente emplazar a los probables responsables al PSFJ, a fin de que estén en posibilidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas respecto de las conductas imputadas, por lo que lo señalado en el DPR no puede considerarse como una determinación final.

Lo anterior, máxime cuando en términos de los artículos 12, fracción X, 18, párrafo séptimo, 83, fracción VI y 85 de la LFCE; así como 5, fracciones I y VI, del ESTATUTO, el PLENO es el único facultado para emitir resoluciones mediante las cuales se tenga o no por acreditada una PMR.

Por otro lado, existen requisitos mínimos para que la figura de “cosa juzgada” se configure y se pueda invocar como excepción procesal: (i) que exista identidad de las personas; (ii) que exista identidad en las cosas que se demandan; (iii) que exista identidad de las causas en que se fundan las demandas; y (iv) que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas.³⁸³ En el caso concreto, no existe un procedimiento previo en el que concurren los cuatro elementos antes analizados (ni siquiera alguno de ellos).

³⁸³ Sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales: (i) “**COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE.** De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurre identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia”. Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 43, Junio de 2017; Tomo IV; Pág. 2471. I.6o.T. J/40 (10a.). Registro No. 2 014 594; (ii) **COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA.** Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer”. Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Noviembre de 1996; Pág. 420. XX.95 K. Registro No. 200 898; y (iii) “**COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.** La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos

Finalmente, respecto a que la conclusión de la AI relativa a que no se acreditó la PMR prevista en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR o del artículo 56 de la LFCE fue confirmada por el PLENO al momento en que la AI le presentó el DPR y se pronunció sobre el emplazamiento, en términos del artículo 78 de la LFCE, una vez que la AI presentó al PLENO el DPR mediante el cual propuso el inicio del PSFJ, el PLENO se limitó a ordenar a la ST el inicio de éste mediante el emplazamiento, sin pronunciarse sobre el contenido del DPR presentado por la AI.

Es decir, el hecho de que el PLENO tenga conocimiento del contenido del dictamen en el momento en el que se lo presenta la AI, no implica que se hubiera pronunciado en el sentido referido por DUN, pues es hasta que emite la resolución que en su caso corresponda que el PLENO determina la acreditación o no de violaciones a la normativa de competencia, limitándose en todo caso al estudio de la imputación contenida en el DPR.

D. El pronunciamiento previo del PLENO sobre el sector financiero es violatorio del principio acusatorio y del principio de justicia imparcial.

DUN manifestó:³⁸⁴

En el caso concreto se violan el principio acusatorio y la garantía de acceso a la impartición de justicia,³⁸⁵ toda vez que el PLENO ya se ha pronunciado respecto de la materia del DPR, pues a través del ACUERDO DE RECOMENDACIONES emitió una serie de recomendaciones con base en los resultados del trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados.

El PLENO analizó, entre otros, los servicios de las SIC y concluyó que “el segmento de servicios de [IC] ofrecido por las SICs se caracteriza por un agente predominante que acumula la mayor parte de la [IC] de los bancos. Este agente está verticalmente integrado con algunos de los principales bancos del país, los cuales colectivamente controlan el consejo directivo. La estructura del segmento y el control del consejo directivo de la SIC predominante por parte de los bancos pueden propiciar que la [IC] no sea usada en términos competitivos”.

artículos constitucionales *institute a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse*; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo”. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXVI, Noviembre 2013; Tomo 2; Pág. 1305, I.3o.C.31 K (10a.). Registro No. 2 004 886.

³⁸⁴ Páginas 22 a 26 de la CONTESTACIÓN DUN.

³⁸⁵ Al respecto, DUN refiere que el principio acusatorio (previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la CPEUM) asegura a los procesados en un procedimiento sancionatorio una verdadera justicia imparcial, pues consiste en que los actos procesales de investigación, acusación, sustanciación de un juicio y su decisión, no pueden recaer sobre una misma parte o institución. Asimismo, refiere que la garantía de acceso a la impartición de justicia o de tutela jurisdiccional (prevista en el artículo 17 de la CPEUM) incluye el principio de justicia imparcial, por virtud del cual, el juzgador que conoce de un caso queda obligado a emitir su resolución sin favoritismo alguno ni arbitrariedad.

Entre las recomendaciones específicas para promover la competencia y libre concurrencia y el desarrollo eficiente de diversos servicios financieros, el PLENO emitió tres recomendaciones en materia de SIC, dentro de las que destaca: (i) su pronunciamiento respecto de los descuentos en donde promueve regular directamente las tarifas minoristas que cobran las SIC a niveles que no permitan el otorgamiento injustificado de descuentos por volumen, o la discriminación explícita de agentes económicos en igualdad de condiciones, y (ii) la necesidad de emitir lineamientos para que las SIC ofrezcan su BD anónima entre SIC y a terceros con el propósito de fomentar la competencia en los servicios de valor agregado ofrecidos por las propias SIC.

Como se desprende de lo anterior, el PLENO ya se pronunció expresamente sobre la existencia de descuentos que a su juicio resultan injustificados o discriminatorios de agentes en igualdad de condiciones.

Se viola el principio acusatorio contenido en el artículo 20 constitucional y la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, pues no sólo se ha pronunciado con anterioridad respecto de la materia, sino que incluso ha realizado recomendaciones al respecto, por lo que en el caso concreto se convierte en juez y parte.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:³⁸⁶

El argumento de DUN sobre el supuesto pronunciamiento del PLENO en relación con la existencia de descuentos injustificados o discriminatorios no combate la imputación de DUN en el DPR, ya que no se le emplazó por conductas relacionadas con dicha situación.

Asimismo, de conformidad con el artículo 24, fracción XVIII bis 2 de la LEY ANTERIOR,³⁸⁷ la COFECE tiene entre sus atribuciones realizar trabajos de investigación en materia de competencia económica sobre sectores, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa cuando se detecten riesgos de dañar al proceso de competencia y libre concurrencia.

Por otro lado, del artículo Quinto, fracción I, y transitorio único del DECRETO, se desprenden las siguientes obligaciones para la COFECE: i) realizar, dentro del plazo señalado una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados; ii) solicitar y escuchar la opinión no vinculante de la SHCP al respecto; iii) en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades financieras como resultado de dicha investigación; y iv) en su caso, ejercer las atribuciones que le confiere la LFCE.

En ese sentido, la COFECE se encontraba compelida a emitir un trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados y, en su

³⁸⁶ Páginas 15 a 19 de la VISTA DUN.

³⁸⁷ La AI refiere que era la disposición vigente a la entrada en vigor del DECRETO.

caso, recomendaciones. Por dicha razón, el PLENO acordó el inicio del trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia para diversos productos y servicios del sistema financiero. Posteriormente, la SHCP presentó ante la OFICIALÍA la opinión no vinculante solicitada, en sentido favorable y, finalmente, el PLENO presentó las recomendaciones derivadas de su trabajo de investigación. No obstante, conforme la disposición transitoria, la COFECE, en su caso, ejercería las demás atribuciones que le confiere la LFCE.

Se remite al pronunciamiento del PLENO en relación con el alcance del trabajo de investigación, por el cual señaló que éste no prejuzga sobre los mercados o segmentos a los que se refiere expresamente y mucho menos sobre los que no son materia de recomendaciones o respecto del posible ejercicio de las facultades de la COFECE en el futuro. Por lo contrario, el trabajo de investigación y sus recomendaciones únicamente representan un paso en el proceso de cumplimiento de las obligaciones de la COFECE, conforme al mandato plasmado en la reforma financiera.

Incluso, con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras investigaciones, las recomendaciones previstas no mencionaron la existencia de indicios sobre posibles conductas anticompetitivas.

El PLENO manifestó de forma expresa en la resolución del Expediente REC-001-2015: “[...] la Cofece, en uso de su autonomía, se reserva expresamente el ejercicio de sus facultades [...] toda conducta contraria a la LFCE que pudiera ser advertida por la Cofece será atendida conforme a los procesos y facultades de esta autoridad en forma específica, conforme al marco normativo en materia de competencia económica”. De ahí que el PLENO no se ha pronunciado, como lo señala DUN, respecto de la conducta investigada, ni ha determinado si los actos investigados son violatorios a la LFCE y mucho menos quiénes son responsables de los mismos.

Asimismo, en términos del artículo 26 de la LFCE, la AI es la encargada de desahogar la etapa de investigación y está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. En ese sentido, la AI inició la investigación radicada en el EXPEDIENTE y emitió el DPR a fin de emplazar, entre otros, a DUN al PSFJ. Una vez que sea desahogado dicho procedimiento, el PLENO emitirá su resolución con base en los elementos de convicción.

Por lo anterior, el argumento de DUN respecto de una presunta violación al principio acusatorio es insostenible, dado que no se acumularon las funciones de acusar, juzgar y defender en un mismo sujeto procesal. Asimismo, el trabajo de investigación no prejuzgó sobre la responsabilidad de persona alguna, ya que su emisión únicamente se hizo en cumplimiento a un mandato legal expreso y su alcance se limitó a “formular recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en este sistema”.

Así, el citado trabajo tampoco compromete el deber del PLENO de decidir la contienda de manera imparcial, en tanto que resolverá considerando los elementos que obren en el

EXPEDIENTE. Por tanto, lo expuesto por DUN debe desestimarse. Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

Los argumentos de DUN resultan **inoperantes**, por una parte, e **infundados**, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

En primer lugar, es **inoperante** porque **no combate** la imputación presuntiva contenida en el DPR, el argumento de DUN relativo a que el PLENO ya se pronunció sobre la existencia de descuentos que a su juicio son injustificados o discriminatorios. Lo anterior puesto que DUN fue emplazado únicamente por la probable comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, consistente en “[1]a acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros”. Así, en específico, el DPR imputó a DUN la probable negativa de intercambiar con CC su BPD; así como de proporcionarle el SEGMENTO CO. DUN no fue emplazado por ninguna conducta relacionada con el otorgamiento de descuentos.

Por otro lado, es **infundado** el argumento de DUN relativo a que en este caso se violan el principio acusatorio y la garantía de acceso a la impartición de justicia, toda vez que, en su opinión, el PLENO ya se ha pronunciado e incluso emitió recomendaciones respecto de la materia del DPR, ya que el ACUERDO DE RECOMENDACIONES no constituye un pronunciamiento del PLENO respecto de la materia del presente asunto.

Mediante el ACUERDO DE RECOMENDACIONES³⁸⁸ el PLENO se limitó a realizar una serie de recomendaciones a diversas autoridades para mejorar la competencia en el sistema financiero y sus mercados, sin determinar si agentes económicos específicos son responsables de la comisión de una práctica monopólica, por lo que no es posible sostener que a través del ACUERDO DE RECOMENDACIONES el PLENO ya se pronunció sobre las conductas imputadas en el DPR y analizadas en la presente resolución.

El ACUERDO DE RECOMENDACIONES se realizó en cumplimiento a lo señalado por el artículo Quinto, fracción I, de las disposiciones transitorias del DECRETO, en el cual se estableció la obligación de la COFECE de realizar en el plazo de ciento ochenta días naturales, una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados. Al respecto, se especificó en el DECRETO que en virtud de dicha investigación la COFECE podría formular recomendaciones a las autoridades financieras; así como ejercer las demás atribuciones conferidas en la LFCE:

“[...]

Disposiciones Transitorias

ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. La [COFECE] contará con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para llevar a cabo una investigación sobre las condiciones

³⁸⁸ Dicho acuerdo se encuentra disponible en el sitio de Internet: [http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-16-1/assets/documentos/Oficio_\(Cofece\).pdf](http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-16-1/assets/documentos/Oficio_(Cofece).pdf), fecha de consulta: once de enero de dos mil diecinueve.

de competencia en el sistema financiero y sus mercados, para lo cual deberá escuchar la opinión no vinculante de la [SHCP]. Como resultado de dicha investigación la [COFECE] podrá, en su caso, formular recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en este sistema y sus mercados y ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Federal de Competencia Económica a fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en este sistema, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, y el resto de las medidas facultadas por la Constitución y la ley de la materia [Énfasis añadido]".

Así, fue con fundamento en dicho DECRETO y en lo dispuesto en el artículo 24, fracción XVIII bis 2 de la LEY ANTERIOR,³⁸⁹ que la COFECE elaboró el trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados, y posteriormente emitió el ACUERDO RECOMENDACIONES.

No obstante, tal como lo reconoce el mismo DECRETO, el hecho de ejercer las atribuciones previstas en el artículo 24, fracción XVIII bis 2 de la LEY ANTERIOR, no limita o condiciona el ejercicio de sus facultades relativas a la investigación y, en su caso, sanción de las PMR que en otros procedimientos pudieran investigarse, descubrirse y, en su caso, sancionarse.

En el ACUERDO RECOMENDACIONES se señalaron las siguientes "Consideraciones Previas":

"El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal recabar información sobre las condiciones del sistema financiero y sus mercados, para que con base en ésta, la Cofece determine las atribuciones que conforme a la LFCE ejercerá y, en su caso, la conveniencia de emitir recomendaciones a las autoridades financieras correspondientes. En este sentido, el trabajo de investigación representa un paso en el proceso de cumplimiento de las obligaciones de la Cofece conforme al mandato plasmado en la reforma financiera.

[...]

[...] debido a que el 'sistema financiero y sus mercados' resulta ser un campo sumamente amplio, se privilegió a investigación y análisis de aquellos segmentos o mercados que, de acuerdo con la experiencia y el juicio de esta Cofece, pudieran resultar más problemáticos desde el punto de vista de competencia, entre otras razones por el grado de concentración en el mercado o por su complejidad o relevancia.

Por lo tanto, el trabajo de investigación no prejuzga sobre los mercados o segmentos a que se refieran expresamente las recomendaciones de esta Cofece y mucho menos, sobre los mercados o segmentos que no son materia de recomendaciones o respecto del posible ejercicio de las facultades de la Cofece en el futuro.

Así, la Cofece, en uso de su autonomía, se reserva expresamente el ejercicio de sus facultades conforme al nuevo marco normativo de competencia [...] en la totalidad del 'sistema financiero y sus mercados' sean o no objeto de recomendaciones por parte de esta Cofece en este momento.

³⁸⁹ El cual establece lo siguiente: "La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: [...] XVIII bis 2. Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de competencia y libre concurrencia o cuando identifique niveles de precios que puedan indicar un problema de competencia o acciones que resulten en un aumento significativo de precios o cuando así se lo notifiquen otras autoridades".

En congruencia con lo anterior, toda conducta contraria a la LFCE que pudiera ser advertida por la Cofece será atendida conforme a los procesos y facultades de esta autoridad en forma específica, conforme al marco normativo en materia de competencia económica.

En particular, con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras investigaciones, las presentes recomendaciones no se enfocan ni mencionan la existencia de indicios sobre posibles conductas anticompetitivas que pudieran derivar del trabajo de investigación. [Énfasis añadido].”³⁹⁰

Como se puede apreciar de la transcripción anterior, en el ACUERDO RECOMENDACIONES se enfatizó que: (i) el trabajo de investigación no prejuzga sobre los mercados o segmentos materia de las recomendaciones del mismo y mucho menos respecto de los mercados o segmentos que no fueron materia de recomendaciones; (ii) la COFECE se reservó el ejercicio de sus facultades en la totalidad del sistema financiero y sus mercados; (iii) toda conducta contraria a la LFCE se atendería conforme al marco normativo en materia de competencia económica; y (iv) con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras investigaciones, las recomendaciones no mencionan la existencia de indicios sobre posibles conductas anticompetitivas que pudieran derivar del trabajo de investigación.

De esta manera, tanto el trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados como el ACUERDO DE RECOMENDACIONES dejaron abierta la posibilidad para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la LFCE, las DR y el ESTATUTO, la COFECE pudiera iniciar las acciones que estimara necesarias conforme al marco normativo de competencia.

Lo anterior ya que, por un lado, las facultades de la COFECE para llevar a cabo una investigación que culmina en un dictamen de probable responsabilidad son completamente distintas a las facultades para realizar un trabajo de investigación y, en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades, y por otro lado, ni en el ESTUDIO FINANCIERO ni en el ACUERDO RECOMENDACIONES el PLENO se pronunció sobre si hechos concretos realizados por agentes económicos específicos y determinados que fueran o pudieran ser violatorios de la normativa de competencia.

En este sentido, mientras en el ESTUDIO FINANCIERO y en el ACUERDO RECOMENDACIONES la COFECE analizó las condiciones de competencia de diversos productos y servicios del sistema financiero y sus mercados, sin referirse a conductas específicas realizadas por agentes económicos concretos, en el presente procedimiento por lo que hace a la imputación en contra de DUN se analiza si: (i) DUN tiene PS en el MR DE PM; (ii) si la conducta de DUN actualiza lo dispuesto en el artículo 56, fracción V, de la LFCE; y (iii) si la conducta de DUN tiene o puede tener como objeto o efecto, en el MR DE PM o en el MERCADO RELACIONADO, impedir sustancialmente el acceso de uno o varios agentes económicos, situaciones respecto de las cuales el PLENO no se había pronunciado hasta la presente resolución.

Así, mediante el ACUERDO RECOMENDACIONES el PLENO no se pronunció de manera previa sobre la responsabilidad de DUN o ningún otro agente económico emplazado al PSFJ, ni

³⁹⁰ Página 8 y 9 del ACUERDO RECOMENDACIONES.



refirió o prejuzgó si se actualizaban o no las conductas que se les atribuyen en el DPR, ni respecto de su efecto u objeto en el mercado.

De igual forma, el ACUERDO RECOMENDACIONES tiene una naturaleza jurídica y un alcance distinto al de una resolución que pone fin a un PSFJ y a través de la cual el PLENO puede pronunciarse sobre la actualización o no de una PMR, ya que, por un lado, los trabajos de investigación, en su caso, se refieren a las condiciones generales del mercado que se estudia y contienen recomendaciones no vinculantes dirigidas a autoridades, y por otro lado, en las resoluciones que recaen a los PSFJ se determina la responsabilidad de agentes económicos específicos y, en su caso, la imposición de sanciones, las cuales son de cumplimiento obligatorio.

Finalmente, toda vez que el PLENO no se ha pronunciado en el ESTUDIO FINANCIERO o en el ACUERDO RECOMENDACIONES respecto de la conducta investigada, ni ha determinado si los actos investigados son violatorios a la LFCE ni quiénes son responsables de los mismos, es infundado lo señalado por DUN respecto a que se viola el principio acusatorio y la garantía de acceso a la impartición de justicia, pues al no haberse pronunciado con anterioridad respecto de la materia del presente asunto, el PLENO no ha actuado como juez y parte.

Fue la AI quien en uso de sus facultades y con autonomía técnica y de gestión: (i) decidió el inicio de la investigación radicada en el EXPEDIENTE; (ii) formuló los términos de la imputación, es decir, determinó cuales eran las conductas investigadas, los agentes económicos probables responsables y las hipótesis normativas presuntamente violadas; y (iii) presentó un dictamen proponiendo el inicio del PSFJ, por considerar que existen elementos objetivos que hacen probable la responsabilidad de los agentes económicos investigados. Ahora, es el PLENO quien, al emitir la presente resolución, determina si se actualiza o no la infracción normativa referida por la AI en el DPR. Así, no recayeron en la misma parte las funciones de investigar y acusar y las funciones de sustanciar el procedimiento y decidir, pues fue la AI quien realizó la investigación y acusación, la ST quien sustanció el procedimiento, y este PLENO el que resuelve como corresponde, de conformidad con la normatividad de competencia aplicable.

De igual forma, el ACUERDO RECOMENDACIONES tampoco compromete el deber del PLENO de resolver de manera imparcial, toda vez que: (i) la presente resolución se limita a determinar si con los elementos de convicción referidos en el DPR y presentados por los emplazados, se acredita o no su responsabilidad en las PMR imputadas, y (ii) ni en el ESTUDIO FINANCIERO ni en el ACUERDO RECOMENDACIONES el PLENO se pronunció sobre hechos concretos realizados por agentes económicos específicos y determinados que fueran o pudieran ser violatorios de la LFCE.

II. Manifestaciones contra el DPR:

A. MERCADO RELEVANTE

A.1. El MR DE PM en realidad no constituye un mercado.

DUN señaló:³⁹¹

La AI establece que el MR DE PM corresponde a la *“recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional”*. Lejos de constituir un mercado, la recopilación y procesamiento de IC constituyen actividades de la cadena productiva (que se encuentran fuera del comercio) para la elaboración de productos de IC.

Según lo expuesto por la AI, *“la cadena productiva de la industria de [IC] consta principalmente de tres etapas: la generación de [IC], su procesamiento y la comercialización de los productos o servicios relacionados con el comportamiento crediticio de los CLIENTES”*.

En particular, la etapa de generación de IC consta de subetapas: *“[e]n la fase inicial de este proceso los USUARIOS son quienes obtienen, en primera instancia, la [IC] de los CLIENTES; la cual, posteriormente será enviada a las SIC para su recopilación y consolidación”*. En esta primera etapa se puede diferenciar la obtención/provisión de la información de la recopilación y consolidación, que consisten específicamente en juntar y consolidar toda la información que obtienen las SIC de los USUARIOS.

Por su parte, la etapa de manejo o procesamiento de la información consiste en ordenar, analizar y actualizar las BD recopiladas para elaborar la BD de la SIC (información positiva y negativa), de la que deriva la BPD (únicamente información negativa). La BD es posteriormente manejada por la SIC para elaborar productos que se comercializan.

La recopilación y el procesamiento de la IC son meras actividades para la elaboración de productos de IC. Las SIC no ofrecen dentro de su gama de productos los servicios de recopilación y procesamiento, sino que realizan dichas actividades únicamente como parte de su cadena productiva.

Por otra parte, tanto la recopilación y procesamiento de IC no constituyen un mercado, que la propia AI al realizar su análisis de sustitución, realiza un análisis sobre posibles sustitutos a la IC de la cual los USUARIOS son los oferentes y las SIC los demandantes. Es decir, del DPR implícitamente se desprende que la AI no pudo realizar un análisis de sustitución en el procesamiento y recopilación.

En ese sentido, suponiendo sin conceder que la recopilación y procesamiento de IC pudieran constituir un mercado, la AI fue omisa en analizar todos los elementos del artículo 58 de la LFCE respecto tales actividades; y, por lo que respecta al *“procesamiento”*, incluso fue omisa en realizar pronunciamiento alguno sobre a qué se refiere con dicho término y qué actividades se incluyen en él. Esto denota un indebido análisis del MR DE PM y falta de motivación respecto del *“procesamiento”*.

³⁹¹ Páginas 26 a 28 de la CONTESTACIÓN DUN.

El análisis del MR DE PM se encuentra viciado de origen, tornando en frutos de acto viciado todas las consideraciones contenidas en el DPR con relación a su determinación, así como las relativas a nuestro supuesto PS en el mismo.

La AI al respecto estableció:³⁹²

Es falso que la definición del MR DE PM no constituya un mercado, pues las actividades que las SIC realicen como parte de su cadena productiva pueden incluirse en la definición del MR. De hecho, la AI incluyó estas actividades como parte de la descripción de la cadena productiva de las SIC, desde la sección IV del DPR que describe las *“Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia”*, como DUN lo reconoce en su argumento.³⁹³

Al respecto, en el inciso *“C. Elaboración de los productos de información crediticia”* de esa sección se describen las actividades de generación, procesamiento y comercialización de la IC.³⁹⁴ DUN no puede desconocer lo desarrollado en el apartado referido para invalidar el análisis de MR, ya que el DPR es un documento que debe estudiarse de manera integral, en el cual los conceptos utilizados fueron desarrollados en la sección que describe la cadena productiva.

En segundo lugar, en la sección *“XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato”*, se retoman los conceptos de recopilación y procesamiento de IC, considerando las descripciones desarrolladas previamente. Desde el inicio, el análisis de sustitución se realizó a partir de la recopilación de IC, en función de las disposiciones normativas que la regulan, por el lado de la oferta.

Por otro lado, en el análisis de la sustitución por el lado de la demanda se explica que existen dos fuentes principales para generar la BD de las SIC con información de los USUARIOS, una directa y otra indirecta. La forma directa de obtener IC se refiere a la recopilación, que involucra a los USUARIOS *“quienes obtienen, en primera instancia, la [IC] de los clientes; la cual será enviada a las SIC para su recopilación y consolidación”*. Por su parte, la forma indirecta de obtenerla se refiere al intercambio de la BD [sic] integrada por cada SIC, lo que supone el procesamiento de la IC que originalmente proporcionan los USUARIOS, como se describe en la sección *“C.2. Procesamiento de la información crediticia”*.³⁹⁵

En el DPR se abunda en esta explicación cuando se señala que *“el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de [IC]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]”*.³⁹⁶

³⁹² Páginas 20 a 26 de la VISTA DUN.

³⁹³ La AI se refiere a las páginas 97 a 125 del DPR.

³⁹⁴ La AI se refiere a las páginas 108 a 125 del DPR.

³⁹⁵ La AI remite a la página 114 del DPR.

³⁹⁶ La AI se refiere a la página 267 del DPR.

En tercer lugar, por lo que respecta al argumento de que el MR DE PM no constituye un mercado, en el DPR se explica cómo se compone este mercado, en el cual los USUARIOS afiliados a las SIC son los oferentes que proveen IC y los demandantes son las SIC.

La recopilación y el procesamiento de IC puede entenderse como una actividad intermedia para la elaboración de productos de IC, como RC o productos de valor agregado. De esta forma, el aspecto relevante para entender la existencia del mercado es si DUN realiza esta actividad con recursos, insumos y capacidad de producción propia o a través del pago a un tercero.

La identificación de un mercado requiere como elementos básicos; un producto o servicio que sea intercambiado por un agente económico y demandado por otro distinto, por lo cual se realiza un pago. Considerando lo anterior, la recopilación y procesamiento de IC de las PM es un mercado en tanto existan agentes económicos que demandan IC, las SIC, y otros que la ofrecen -los USUARIOS o una SIC diferente de la primera-, mediante un pago realizado por la SIC por el intercambio efectuado, por lo que estas actividades no podrían encontrarse fuera del comercio, como incorrectamente señala DUN.

En el DPR se señala que los USUARIOS como oferentes de IC están obligados a proporcionar su IC, mientras que las SIC como demandantes se pueden abastecer de IC, tanto de forma directa, proporcionada por sus propios USUARIOS afiliados, o de forma indirecta, mediante el intercambio de información con otra SIC. Incluso, se explica que *“ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente: los USUARIOS afiliados a cualquiera de las dos SIC”*.³⁹⁷

Aunado a lo anterior, el DPR indica que el costo que asumen los USUARIOS afiliados a las SIC por el intercambio de información está determinado en el CONTRATO DUN Y CC.³⁹⁸

Además, los elementos expuestos en el DPR que sostienen la definición del MR, son reconocidos por DUN y TUM en sus manifestaciones y pruebas al DPR y en el DICTAMEN RG. En el DICTAMEN RG se reconoce que los USUARIOS interactúan con las SIC como oferentes de IC, y como demandantes que consultan la IC obtenida por las SIC, además, en el mismo documento se reconoce que las SIC adquieren la IC de los USUARIOS mediante contrato.

Por su parte, en las manifestaciones y pruebas al DPR de DUN se explica que las SIC participan como demandantes de IC y los USUARIOS como oferentes al señalar que *“suponiendo sin conceder que la provisión de [IC] fuera un mercado, las SICs participarían como demandantes, mientras que los USUARIOS como oferentes”*.

En las manifestaciones y pruebas al DPR tanto de TUM como de DUN se reconoce que la IC que reciben las SIC de los USUARIOS [a través de la otra SIC] tiene un costo que

³⁹⁷ La AI se refiere a la página 269 del DPR.

³⁹⁸ La AI se refiere a la página 293 del DPR.

está establecido en el CONTRATO DUN Y CC, el cual es de [B] por RCI solicitado que tenga HIT. Al respecto, TUM señala: “[...] para llevar a cabo la compensación entre los costos de los insumos a ser pagados a los USUARIOS por parte de las SIC y el precio de venta a ser pagado por los USUARIOS a las SIC, en la industria de las SIC es común utilizar un esquema de descuentos, consistente en un esquema decreciente de precios. [...] este esquema de precios decreciente o descuentos crecientes no es más que una mecánica creada por las SICs y sus Usuarios para facilitar el pago del costo de los insumos e incentivar la compra de los productos (RC). Considerar lo contrario sería asumir que el costo de los insumos de los RC es ‘cero’, lo cual es a todas luces falso [...] es evidente que la [IC] tiene un costo y que ese costo debe ser pagado por las SICs”.³⁹⁹

Por su parte, en el DICTAMEN RG se reconoce la existencia de diversos precios de la IC que son pagados por las SIC a los USUARIOS mediante reciprocidad y políticas de descuentos y, a su vez, reconoce que las SIC adquieren las BD de IC de los USUARIOS a través de los mercados.⁴⁰⁰

Adicionalmente, en el DICTAMEN RG se señala que “[e]xpertos internacionales muy reconocidos en el tema de los sistemas de [IC] reconocen que los usuarios que aportan su información a las SICs deben ser compensados por esto, mediante esquemas de precios apropiados”.⁴⁰¹ Por lo tanto, en el DPR se acredita la existencia del MR, el cual es un mercado en sí mismo, en virtud de la existencia de un intercambio entre oferentes y demandantes de IC por el que se realiza un pago determinado.

En este sentido, DUN no desvirtúa el análisis de sustitución por el lado de la demanda y de la oferta que se desarrolla en las páginas 266 a 275 del DPR. En particular, no combate el hecho de que no existen sustitutos por el lado de la demanda, toda vez que “no existe información que pueda cumplir con la misma función que la [IC] proporcionada por los USUARIOS, además, los demandantes de esta información (las SIC) no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes (los USUARIOS) dado que éstos tienen la obligación de proporcionar la [IC] de sus CLIENTES al menos una SIC”. DUN tampoco presenta argumentos que desvirtúen la existencia de restricciones regulatorias que impiden la sustitución, por el lado de la oferta, de la información que recopilan otros entes en el MR de PM, como es el caso de [B] y de BANXICO, ni desvirtúa la siguiente conclusión: “[...] ninguna otra entidad gubernamental recopila [IC] en el sistema financiero mexicano, y que más allá de ellas, ninguna otra entidad, además de las SIC, está autorizada para recopilar [IC] en el país”.⁴⁰²

Asimismo, como se señaló, en la sección “C.2. Procesamiento de la información crediticia” del DPR se describen las actividades que se llevan a cabo en el procesamiento de IC. Asimismo, en la definición del MR DE PM se señala que “el intercambio puntual de un

³⁹⁹ La AI se refiere a las páginas 127 y 128 de la CONTESTACIÓN TUM.

⁴⁰⁰ La AI se refiere a las páginas 5 a 9 del DICTAMEN RG.

⁴⁰¹ La AI se refiere al pie de página 15 de la página 5 del DICTAMEN RG.

⁴⁰² Página 273 del DPR

expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma (sic) parte del procesamiento de [IC]⁴⁰³ y que “la recopilación y procesamiento de [IC] se hace principalmente a través de medios electrónicos”.⁴⁰⁴ En este sentido, la AI no omitió incorporar una definición del procesamiento de IC como argumenta el emplazado. En consecuencia, es evidente que el DPR analiza todos los elementos del artículo 58 de la LFCE.

Finalmente, la AI considera que DUN no expone las razones por las cuales le causa agravio el supuesto error en la definición del MR, sino que se limita a señalar que al estar viciado de origen todas las consideraciones relativas al MR y PS se encuentran viciadas, por lo que se sostiene la definición de MR contenida en el DPR.

En primer lugar, es **infundado** el argumento de DUN relativo a que el MR DE PM definido por la AI en realidad no constituye un mercado sino actividades de la cadena productiva que se encuentran fuera del comercio, por las razones que se expresan a continuación.

Si bien la recopilación y procesamiento de la IC son actividades que forman parte de la cadena productiva de la industria de la IC, tal como se explica en el apartado de “IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia” del DPR, ello no implica que no puedan constituir un mercado.

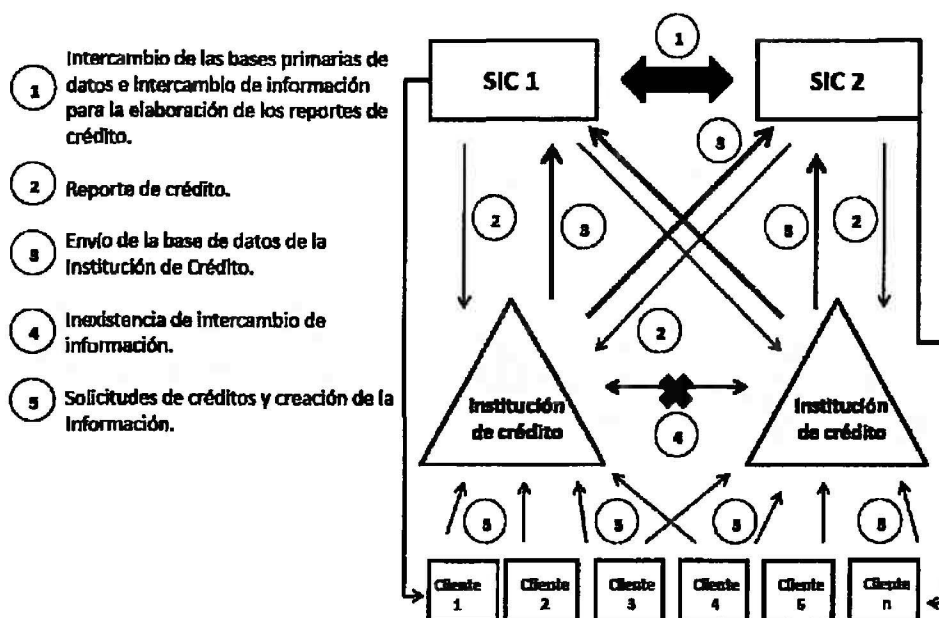
En el siguiente esquema se muestran las distintas actividades productivas que se observan en el mercado y, en particular, aquellas actividades productivas que involucran el intercambio de bienes entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación. Posteriormente se explica con más detalles por qué esta autoridad considera que las actividades productivas relacionadas con la conducta analizada sí pueden constituir un mercado, el encontrarse previsto el pago de una contraprestación por la realización de actividades que involucran el intercambio de un bien que se encuentra dentro del comercio.

Actividades productivas relacionadas con el intercambio de IC⁴⁰⁵

⁴⁰³ Página 267 del DPR.

⁴⁰⁴ Página 273 del DPR.

⁴⁰⁵ Dicho esquema fue presentado por BANXICO como anexo a su escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce. Véase en particular la pestaña “Gráfica 1” del archivo de Excel “SICs Información” que se encuentra en la sub carpeta “Información cuantitativa” de la carpeta “DOCUMENTOS” que se advierte en la carpeta “3.4 Sociedades de información crediticia” del disco compacto que obra a folio 513.



La recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado⁴⁰⁶ toda vez que involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación, en los términos que se explica a continuación.

Al respecto, en el DPR se indicó que: “[...] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información credicia [sic]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]”.⁴⁰⁷

La recopilación de la IC comprende la recepción por las SIC de la IC de manera directa, es decir, a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD con la otra SIC.

En el caso del intercambio de la BPD, la LRSIC dispone en el artículo 36, párrafo tercero, lo siguiente: “Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información a que se refiere este artículo. Los acuerdos respectivos deberán presentarse a la Comisión para su autorización, al igual que sus modificaciones [énfasis añadido]”.

⁴⁰⁶ Véase por ejemplo la definición propuesta en Parkin, Michael, “Economics”, Séptima Edición, página 44: “un mercado es cualquier arreglo que permite a los compradores y vendedores obtener información y hacer negocios entre ellos”; de la traducción al inglés: “A market is any arrangement that enables buyers and sellers to get information and to do business with each other”. Asimismo, en el DICTAMEN DUN, se señaló que: “[...] un mercado es un espacio donde concurren consumidores y oferentes de un mismo bien para realizar el intercambio de dicho bien por un precio [...]” (página 1 del DICTAMEN DUN).

⁴⁰⁷ Página 267 del DPR.

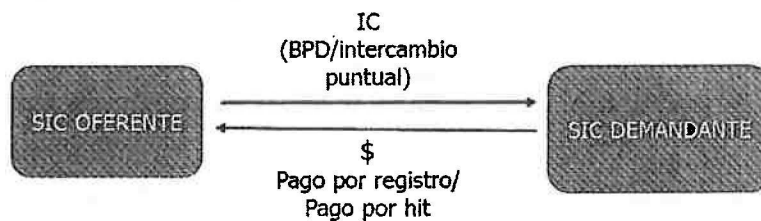
Como se advierte, el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por la SIC que recibe la información. Si bien, por lo menos hasta la conclusión de la investigación todavía no se realizaba el intercambio de la BPD relativa a PM, para el caso de PF, la CNBV autorizó a TUM y a CC un intercambio mensual de BPD a un precio de [REDACTED] B por registro, lo que demuestra que el intercambio de IC implica el pago de una contraprestación.

Asimismo, mediante escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el once de febrero de dos mil dieciséis,⁴⁰⁸ DUN reconoció que: "[...] [REDACTED]

[REDACTED] [...] [Énfasis añadido]", anexando copia simple o impresión de la solicitud respectiva. Así, CC ofreció a DUN el pago de una cantidad determinada de dinero a cambio del intercambio de IC.

Lo mismo sucede en la etapa de procesamiento de la información, de la cual forma parte el intercambio puntual de la IC. Cuando los USUARIOS solicitan un RCI, la SIC originadora (la SIC a la cual le pidió el RCI el USUARIO) pide a la SIC complementaria, la IC respecto de algún CLIENTE. En caso de que haya HIT en la información proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC complementaria. Así, para PM la tarifa establecida por las SIC para el intercambio puntual de IC es de [REDACTED] B⁴⁰⁹.

En este sentido, la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado en tanto comprenden a oferentes y demandantes de bienes que intercambian productos a cambio del pago de un precio, tal como se observa en el siguiente diagrama:



Al analizar el MR DE PM desde el punto de vista de la demanda, se advierte que: (a) cuando la SIC adquiere la BPD de la otra SIC o la IC directa de los USUARIOS, recopila esa información para su posterior inclusión a su BD; y (b) al procesar la solicitud de RC de un CLIENTE específico, la SIC originadora (demandante) solicita a la SIC complementaria (oferente) la información puntual de ese CLIENTE, para posteriormente eliminar los registros

⁴⁰⁸ Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la información proporciona por TUM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

⁴⁰⁹ Véase la cláusula Cuarta del CONTRATO DUN y CC (folio 25137).

repetidos y elaborar el RC correspondientes. Este intercambio puntual de información no forma parte de la recopilación puesto que [REDACTED]; asimismo, la SIC demandante solicita dicha IC como parte del procesamiento de una solicitud de IC.

En este sentido, es **infundado** lo señalado por DUN relativo a que la recopilación y procesamiento de IC se encuentra fuera del comercio.⁴¹⁰

Por otra parte, contrario a lo que argumenta DUN, las actividades productivas que corresponden a la recopilación y procesamiento de la IC incluyen transacciones que permiten constituir un mercado, en específico, la compra y venta de la IC.

Ahora bien, DUN señala que la AI al realizar su análisis de sustitución, lo realiza considerando posibles sustitutos de la IC de la cual los USUARIOS son los oferentes y las SIC los demandantes, lo que según DUN implica que la AI no pudo realizar un análisis de sustitución en el procesamiento y recopilación.

Al respecto, el DPR especifica que, dentro de la recopilación y procesamiento de la IC, no sólo los USUARIOS pueden fungir como oferentes de IC, sino también las SIC:

"[...]"

A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE:

[...]

[...]. Así pues, las SIC recopilan o se abastecen de información crediticia de forma directa (es decir, la proporcionan sus propios USUARIOS afiliados), o de forma indirecta mediante el intercambio de la BPD con otra SIC o a través de la entrega puntual que se regulere para elaborar los RC (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC).⁴¹¹

[...]

a. Sustitución por el lado de la demanda

[...]

⁴¹⁰ Como se indicó, la recopilación de la IC comprende la recepción por parte de las SIC de la IC de manera directa, es decir, a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD con la otra SIC. En el caso de la recopilación de manera indirecta, ya se explicó que el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por parte de la SIC que recibe la información. En el caso de la recopilación de manera directa, como lo señala el DPR, los USUARIOS no cobran por proporcionar su información a las SIC; no obstante, las políticas de descuentos de las SIC reflejan el valor de la IC que los USUARIOS proporcionan a las SIC. Por otro lado, en el caso de la etapa de procesamiento, también se realiza un pago por el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC). Al respecto, se observa que tanto la negativa a proporcionar o intercambiar la BPD, como la negativa a entregar o transferir la totalidad de la información mediante el intercambio puntual, son omisiones que corresponden precisamente a actividades que forman parte del MR DE PM y que se realizan mediante el pago de una contraprestación (esto es, el intercambio de la BPD entre SIC y el intercambio puntual de información entre SIC). Tanto el intercambio de la BPD como el intercambio de información crediticia puntual constituyen una forma de abastecimiento indirecto de las SIC de la IC que proveen originalmente los USUARIOS. En este sentido, lo relevante es que las SIC adquieren de manera indirecta las BD de IC de los USUARIOS a través del pago de diversas contraprestaciones.

⁴¹¹ El DPR señala lo siguiente: "Se asume que el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información crediticia [SIC]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de información crediticia. [...] [Énfasis añadido]".

Entonces, la [BD] de las SIC se puede abastecer de información crediticia, tanto de forma directa, proporcionada por sus propios USUARIOS afiliados, o de forma indirecta, mediante el intercambio de información con otra SIC. Ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente: los USUARIOS afiliados a cualquiera de las dos SIC. El intercambio, tanto masivo como puntual, con la otra SIC se explica porque la LRSIC no obliga a entregar la información a todas las SIC existentes en el mercado, por lo que los USUARIOS sólo proporcionan sus datos a la SIC a la cual estén afiliadas. Esto provoca dependencia de una SIC respecto de la otra, pues existe la necesidad de que ambas intercambien información para generar productos que contengan toda la información crediticia disponible.

[...]. Por tanto, la relevancia de una SIC como proveedor de información está marcada por el número de USUARIOS con los cuales mantenga una relación de afiliación.

[...] [Énfasis añadido]"⁴¹²

En este sentido, la IC es el producto que se comercializa dentro del mercado de recopilación y procesamiento de IC, ya sea a través del intercambio de la BPD o del intercambio puntual, por lo que es correcto que la AI haya realizado el análisis de sustitución respecto de la IC y, por lo tanto, es **infundado** que de ello se desprenda que la AI no pudo realizar un análisis de sustitución en el MR DE PM.

Como se advierte, la AI sí realizó el análisis de sustitución en el MR DE PM e incluso, como señala la AI, DUN no combate la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la IC por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta. En consecuencia, no se advierte una omisión respecto del estudio de los elementos referidos en el artículo 58 de la LFCE. Incluso, DUN no refiere ninguna otra omisión, distinta a la supuesta falta de análisis de sustitución, relativa al estudio de los elementos referidos en el artículo 58 de la LFCE.

A mayor abundamiento, en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR se concluyó que el MR correspondía a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional, ya que: (i) la IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta; (ii) las SIC se abastece de la información proveniente de sus USUARIOS ubicados a lo largo de todo el país, por lo que el mercado tiene una dimensión geográfica nacional; (iii) las SIC son los consumidores de la IC generada por los USUARIOS y por las otras SIC en el mercado y no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados; (iv) por normativa las SIC no pueden abastecerse de fuentes distintas de los USUARIOS y los USUARIOS no pueden contratar los servicios de un agente económico distinto a una SIC; y (v) no existe alternativa a la IC proporcionada de forma directa o indirecta por los USUARIOS.

En este sentido, es claro que la AI analizó todos los elementos que refiere el artículo 58 de la LFCE.

Por último, es **infundado** el argumento de DUN relativo a que la AI fue omisa en pronunciarse sobre a qué se refiere y qué actividades incluye el procesamiento de la IC, y que eso denotaba una falta de motivación, por las razones que se expresan a continuación.

⁴¹² Páginas 266 a 269 del DPR.



En el DPR se definió el MR como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

Para explicar los conceptos anteriores, en el apartado de "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR se describió la cadena productiva de la industria de la IC, señalándose lo siguiente:

"C. Elaboración de los productos de [IC]

La cadena productiva de la industria de [IC] consta principalmente de tres etapas: la generación de la [IC], su procesamiento y la comercialización de los productos o servicios relacionados con el comportamiento crediticio de los CLIENTES.

En la primera etapa, la SIC se encarga de recopilar la información provista por los USUARIOS y la consolida mediante [BD], las cuales están conformadas por los registros de la información relacionada con el historial crediticio de los CLIENTES. Posteriormente, estas [BD] serán ordenadas, analizadas y continuamente actualizadas para elaborar productos y proveer servicios [...]. Finalmente, las SIC ponen a disposición del público dichos productos, los cuales son elaborados bajo demanda.

C.1. Generación de la [IC]

[...]

La generación y recopilación de la [IC] consta de varias etapas. En la fase inicial de este proceso, los USUARIOS son quienes obtienen, en primera instancia, la [IC] de los CLIENTES; la cual, posteriormente, será enviada a las SIC para su recopilación y consolidación.

[...]

Los USUARIOS deberán entregar sus [BD] dentro de los [...] días naturales siguientes a la firma del contrato de afiliación, la cual deberá actualizarse [...]

[...] *Una vez que la información es validada por la SIC, se integra a su [BD].*

En cuanto al historial crediticio de los CLIENTES, este se compone de información negativa e información positiva. La negativa está contenida en lo que se conoce como BPD y comprende la información de cartera vencida y aquella relacionada con operaciones fraudulentas [...]

[...]

El artículo 36 de la LRSIC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre las SIC, una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado [...]

[...] *la LRSIC no obliga a las SIC a compartir la información positiva de forma masiva y periódica. En este caso, la compartición se hace de forma puntual, es decir, las SIC sólo pueden solicitar la información correspondiente de un determinado CLIENTE. [...]*

[...]

[...] *El USUARIO puede al solicitar un RC optar por alguna de las siguientes dos opciones:*

- a) Solicitar un RC con el fin de que se integre la información proveniente de las [BD] de todas las SIC en el mercado (incluyendo a la SIC originadora que se le solicitó el reporte), o*
- Solicitar un RC en el cual avise a la SIC originadora que únicamente consulte la información proveniente de su [BD] [...]*

Tanto para PF como PM, el mencionado intercambio de información entre SIC, con motivo de un RC, le obliga a la SIC originadora (la que hace la solicitud a otra SIC de [IC] respecto de algún CLIENTE) a pagar una contraprestación a la SIC complementaria (a la cual se le solicitó la información). El pago se realizará siempre y cuando haya HIT en la información proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora. De lo contrario, se considera que existe un NO HIT y no se generará ningún cobro entre las SIC por la consulta realizada.

[...]

C.2. Procesamiento de la [IC]

Una vez que los USUARIOS han entregado la información, las SIC la verifican para asegurar la calidad de la información, adoptando medidas de seguridad y control, conforme a lo siguiente:

- a) Validación de la correcta conformación del Formato INTF (TUM y [DUN]) o Esquema de Carga ([CC]);*
- b) Validación de la calidad de los datos reportados;*
- c) Validación de la integridad de la información.*

Para la validación de las reglas, se revisa que los campos reportados se hayan entregado de acuerdo con el formato y la longitud establecidos para cada campo, así como que se hayan reportado todos los campos indicados en el manual como requeridos. Finalmente, una vez que la información ha sido validada, se integra a las [BD].

[...]

Las SIC están obligadas a conservar los historiales crediticios proporcionados por los USUARIOS sólo por un tiempo determinado. Las SIC deberán eliminar la información negativa de cualquier crédito que haya sido reportado como vencido; o bien, la de créditos que no hayan sido actualizados por los USUARIOS.

[...]

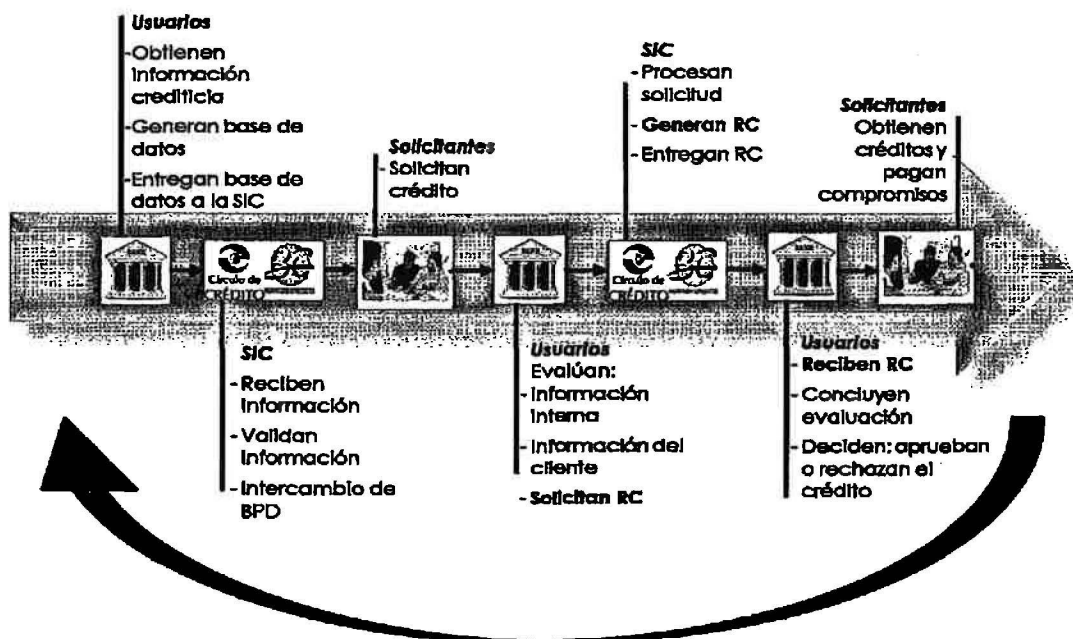
C.3. Comercialización de la información crediticia

[...]

Ilustración 7. Participación de las SIC en el otorgamiento de crédito.



PARTICIPACIÓN DE LAS SIC EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO



Fuente: Elaboración propia.

[...]”.⁴¹³

Por otra parte, en el apartado de “XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato” del DPR se señaló que: “[...] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información crediticia [sic]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]”⁴¹⁴ y que “la recopilación y procesamiento de información crediticia se hace principalmente a través de medios electrónicos”.

Como se advierte, si bien la AI no realizó pronunciamientos adicionales sobre el intercambio puntual de la IC al describir la etapa de procesamiento dentro del apartado “C.2. Procesamiento de la información crediticia” que forma parte del apartado “IV. Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia”, la AI sí refirió diversas actividades que se encuentran comprendidas dentro de dicho término e incluso incluyó una ilustración en la que se advierte que una vez que los USUARIOS solicitan un RC, la SIC procesa la solicitud para posteriormente elaborar los productos de RC. En este sentido, se observa que: (i) dicho procesamiento se da de forma posterior a la solicitud del RC, pero antes de la generación y entrega del RC; y (ii) dentro de dicho procesamiento se encuentra el intercambio puntual, pues la SIC originadora requiere de la IC de la SIC complementaria para la elaboración del RCI.

⁴¹³ Páginas 108 a 120 del DPR.

⁴¹⁴ Página 267 del DPR.

Adicionalmente, de forma clara la AI señaló en el apartado de “XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato” del DPR que: “[...] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información crediticia [sic]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]”⁴¹⁵ y que “la recopilación y procesamiento de información crediticia se hace principalmente a través de medios electrónicos”. En este sentido, la AI sí se pronunció sobre el término “procesamiento” y señaló que incluye el intercambio puntual de información en términos del artículo 36 bis de la LRSIC y dicho pronunciamiento se incluyó en el apartado que corresponde al análisis de MR DE PM.

De este modo, sí se cumplió la obligación que consiste en determinar un MR considerando lo señalado en la LFCE y en las DR para dichos efectos. Por todo lo anterior, también es infundado que el análisis del MR se encuentre viciado de origen.

A.2. El MR definido por la AI es diverso a donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN.

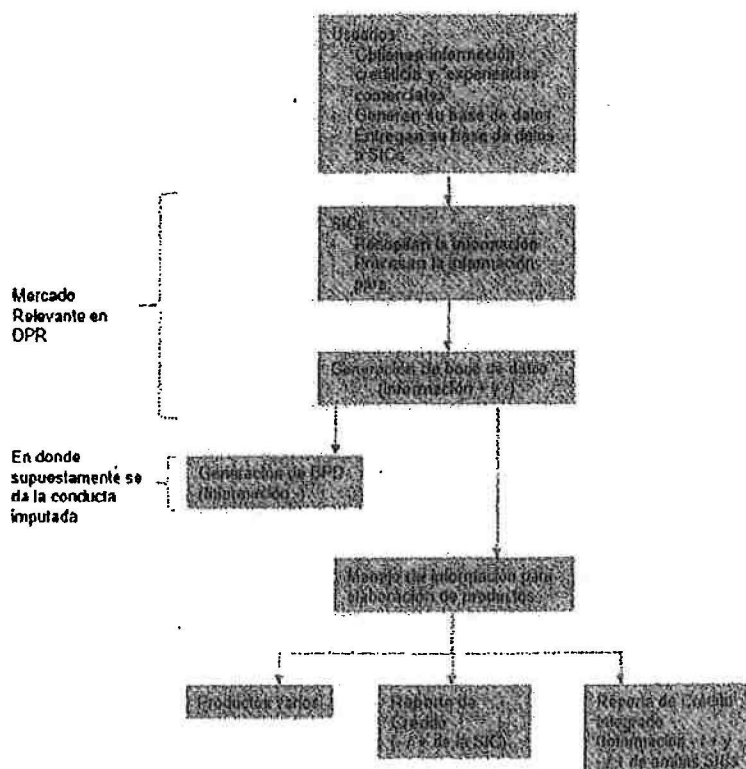
DUN manifestó:⁴¹⁶

Suponiendo sin conceder que la recopilación y el procesamiento de IC pudieran considerarse como un mercado, la supuesta negativa no se llevó a cabo dentro de éste.

La conducta imputada consiste en una supuesta negativa de intercambiar mi BPD de PM y el mal llamado SEGMENTO CO. Dicha conducta no involucra una negativa en recopilar o en procesar IC (actividades), sino la provisión de la BPD, que constituye un bien que deriva de la BD de una SIC.

⁴¹⁵ Página 267 del DPR.

⁴¹⁶ Páginas 28 a 30 de la CONTESTACIÓN DUN.



En términos del artículo 54, fracción II de la LFCE, para que se actualice una PMR, es necesario que el agente económico *"tenga poder sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica"*. En el caso concreto, la AI analiza un MR en donde no se llevó a cabo la conducta imputada.

Así, el DPR resultó ilegal y todo el análisis de la AI se encuentra viciado de origen.

Al respecto la AI señaló lo siguiente:⁴¹⁷

DUN pretende hacer una separación artificial entre las actividades de la recopilación y procesamiento de la IC de PM de la provisión de la BPD de PM y el SEGMENTO CO, que derivan de la BD de una SIC, siendo que la BPD de PM y el SEGMENTO CO está comprendida en la recopilación y procesamiento de la IC.

Así, la negativa de intercambiar la BPD de PM de DUN y el SEGMENTO CO sí se realiza en el MR DE PM, como se desprende del propio DPR: *"[...] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información credicia (sic). Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma (sic) parte del procesamiento de [IC]."*⁴¹⁸

⁴¹⁷ Páginas 26 y 27 de la VISTA DUN.

⁴¹⁸ Página 267 del DPR.

El intercambio de la BPD y el intercambio puntual de IC es la forma de abastecimiento indirecto de las SIC de IC en el MR DE PM.

Asimismo, en su diagrama DUN separa la generación de la BPD de la generación de la BD completa y con esto pretende argumentar que la primera está fuera del MR DE PM, cuando en realidad la BPD forma parte de la BD puesto que la recopilación y procesamiento de IC de las PM abarca el intercambio de IC tanto negativa como positiva, tal como se señala en el DPR.

En virtud de lo anterior, DUN no logra desvirtuar que la conducta analizada se encuentra dentro del MR DE PM.

Es **infundado**, por las razones que se expresan a continuación, el argumento de DUN relativo a que la conducta imputada no se realizó en el MR definido en el DPR y que, por lo tanto, todo el análisis de la AI se encuentra viciado de origen.

Como se señaló al analizarse el argumento "A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la recopilación y procesamiento de la IC incluyen el intercambio de la BPD y de la información puntual entre las SIC.

Una de las fuentes por medio de las cuales las SIC recopilan información para después integrarla a su BD, es el intercambio de la BPD a cambio de una contraprestación. Asimismo, en la etapa del procesamiento, la SIC originadora solicita a la SIC complementaria la información puntual de un determinado CLIENTE. Este intercambio puntual de información no forma parte de la recopilación puesto que

Sin embargo, el intercambio puntual forma parte del procesamiento de la IC puesto que se da en el contexto de una solicitud de un CLIENTE específico, siendo que

, e incluso posteriormente, la SIC originadora debe eliminar los registros repetidos para poder elaborar el RC correspondiente. En este sentido, no se considera incorrecto que el intercambio puntual de la IC, como lo señala el DPR, forma parte del procesamiento de la IC.

DUN argumenta que la conducta no involucra una negativa en recopilar o en procesar IC y que por lo tanto no se encuentra dentro del MR DE PM; no obstante, su argumento ignora que la recopilación y el procesamiento de la IC incluye varias actividades.

En este sentido, como parte de la recopilación de la IC, se incluyen tanto la entrega o provisión de la IC por los USUARIOS o de una SIC en su calidad de oferente, como la recepción de dicha IC por la SIC demandante para su posterior integración a su BD. Así, al negarse a proporcionar IC a través de la BPD, la negativa respectiva se da dentro de la recopilación de IC.

Lo mismo sucede en el caso del procesamiento de la IC, la negativa de proporcionar determinada información a través del intercambio puntual se da cuando la SIC originadora

Eliminado: dos renglones y veintiocho palabras

requiere a la SIC complementaria la información específica de un CLIENTE como parte del procesamiento de una solicitud de un USUARIO o del mismo CLIENTE para emitir un RC. Posteriormente la SIC originadora como parte del procesamiento de la IC, debe eliminar los registros repetidos, para así estar en posibilidad de elaborar un RC para su comercialización.

En este sentido, de forma incorrecta DUN pretende separar la recopilación y procesamiento de la IC de PM de la provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO, lo cual no tiene sustento, ya que la provisión de estos dos productos es parte de la recopilación y el procesamiento, respectivamente.

Por último, respecto del diagrama propuesto por DUN, por un lado, DUN no incluye en el mismo el intercambio puntual de la información, sino únicamente la generación del BPD.

Al respecto, DUN no justifica por qué considera que la generación de la BPD no se encuentra dentro del MR DE PM definido en el DPR; no obstante, ello es irrelevante puesto que la negativa que se analiza se da dentro del proceso de recopilación de IC (entrega/recepción de IC) y no dentro del proceso de elaboración de la BPD. Es decir, la negativa implica que una vez que existe la BPD ésta se niega dentro del proceso de recopilación de IC de la otra SIC.

Por todo lo anterior, esta autoridad concluye que la conducta imputada sí se encuentra dentro del MR DE PM.

A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes

DUN estableció:⁴¹⁹

Al definir el MR DE PM la AI parece referirse a la provisión de IC y no a la recopilación y procesamiento de ésta última. Suponiendo sin conceder que la provisión de IC fuera un mercado, las SIC participan como demandantes dentro del mismo.

La AI esencialmente señala que: (i) la IC es el principal insumo para generar las BD de las SIC; (ii) la IC de PF no resulta sustituto de la IC de una PM; y (iii) las SIC se pueden abastecer de forma directa o indirecta de IC.

Suponiendo sin conceder que la provisión de IC fuera un mercado, las SIC participarían como demandantes y los USUARIOS como oferentes, según reconoce la misma AI.⁴²⁰ Asimismo, las SIC también podrían participar como oferentes en

⁴¹⁹ Páginas 30 a 33 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁴²⁰ DUN refiere las siguientes manifestaciones de la AI: "Los oferentes de la [IC], es decir los USUARIOS están obligados, por la LRSIC, a proporcionar su información conforme a un estándar establecido, por lo que las SIC no requieren acudir a otros oferentes alternos"; "Respecto de la sustitución por el lado de la demanda en el MERCADO RELEVANTE, las SIC (los consumidores en este caso) recurren, principalmente, a la [IC] provista por los USUARIOS para elaborar productos de [IC]"; y "Por tanto, de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, y considerando que, los oferentes de la [IC] son los USUARIOS y los demandantes son las SIC se observa que la [IC] de PM, la cual es provista por los USUARIOS, y recopilada además de procesada por las SIC, carece de sustitutos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta".

esta etapa, aunque solo de manera indirecta a través de la información que les proporcionan los USUARIOS.⁴²¹

No obstante, las SIC no pueden sustituir a los USUARIOS en esta etapa de la cadena productiva porque los USUARIOS son la fuente primaria de información. En cambio, las SIC participan en una etapa intermedia para compartir con otras SIC la información, que a su vez recibieron de los USUARIOS. La información que pueden proporcionar las SIC no puede sustituir a los USUARIOS en tanto que: (i) la información contenida en la BPD únicamente contiene información negativa, mientras que la que proporcionan los USUARIOS contiene información positiva y negativa; y (ii) la información contenida en el RCI que se comparte se refiere a información de un solo CLIENTE.

En otro orden de ideas, la provisión de IC no puede definirse como un mercado porque (i) no forma parte de la oferta de productos y/o servicios, ni de las SIC⁴²² ni de los USUARIOS, sino que estos proporcionan la información en cumplimiento a la LRSIC; y (ii) no es un servicio por el que puedan cobrar los oferentes en el mercado, en particular los USUARIOS, que son la primera fuente para generar el insumo.⁴²³

En el caso de las SIC, existe un precio de transferencia por compartir su información con otras SIC. Sin embargo, como reconoce la misma AI, *"el costo que asumen los USUARIOS afiliados a CC por el intercambio de información está determinado mediante el CONTRATO DUN Y CC, por lo que ambas SIC no cuentan con la capacidad de alterar los precios ya acordados"*.

El mercado que la AI define se compone de dos oferentes (tomando en cuenta que los USUARIOS no son parte del mercado dado que no cobran por la provisión de su información) de dos bienes (la BPD de PM de cada oferente), mismos que simultáneamente actúan como consumidores de su competidor. Cada uno de los únicos dos participantes del supuesto mercado, se encuentran obligados por el

⁴²¹ DUN refiere las siguientes manifestaciones de la AI: *"Así pues, las SIC recopilan o se abastecen de [IC] de forma directa (es decir, la proporcionan sus propios USUARIOS afiliados), o de forma indirecta mediante el intercambio de la BPD con otra SIC o a través de la entrega puntual que se requiere para elaborar los RC (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC)"*. "[DUN], en su respuesta al requerimiento de información, señala que

"Ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente: los USUARIOS afiliados a cualquiera de las dos SIC".

⁴²² DUN indica que la siguiente manifestación de la AI abona a lo referido: *"Si bien el mercado relevante lo definimos como la recopilación y procesamiento de [IC] de las PM, éstas no son las actividades que directamente le generen ingresos a una SIC; por lo tanto, debemos de considerar que es la comercialización, principalmente de RC de PM (el cual se considera como un mercado relacionado de este mercado relevante), lo que le permite definir a una SIC si el ingreso al mercado le resulta rentable"*.

⁴²³ DUN remite al señalamiento contenido en la página 271 del DPR: *"[...] los USUARIOS no cobran por proporcionar su información, tampoco las SIC les generan ningún cobro por concepto de afiliación, ni mucho menos por recibir su información crediticia."*

artículo 36 de la LRSIC a intercambiar sus correspondientes BPD de PM con su competidor.

Asimismo, la LRSIC contempla implícitamente que dicho intercambio genera un costo para el agente que otorga su BPD de PM. Por lo tanto, la LRSIC contempla la obligación de pagar una tarifa para la realización del intercambio, misma que juega un papel de contraprestación por los costos en los que incurre el agente que otorga su información.

Adicionalmente, las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información de registros de crédito como parte de su cartera de productos. Prueba de ello es que no cuentan con capacidad de alterar los precios acordados por el intercambio de información. En cambio, el mercado en el que participan las SIC es en la comercialización de los productos que resultan de recopilar y procesar la IC. Por ende, tampoco la provisión de información pudiera ser considerado como un MR.

Por último, suponiendo que la provisión de IC fuera un mercado, el análisis de sustitución de la AI resulta incorrecto. La AI estima que los únicos que pueden proporcionar IC son los USUARIOS derivado del secreto financiero. Ello resulta incorrecto puesto que el secreto financiero únicamente aplica a las ENTIDADES FINANCIERAS. Por tanto, es falso que suponga una barrera para que agentes diversos a los USUARIOS proporcionen información.

La AI al respecto consideró lo siguiente:⁴²⁴

Se destaca que no se brindan argumentos o elementos que sostengan que, en el MR DE PM, las SIC participan como demandantes, más bien, DUN da argumentos en sentido contrario, al señalar que las SIC actúan como oferentes y consumidores de su competidor.

En el DPR se manifiesta que en el MR DE PM los USUARIOS afiliados a las SIC son los oferentes que proveen de IC y los demandantes que adquieren IC son las SIC. Esto es, los elementos que sostienen la definición de MR DE PM contemplan la provisión de IC como parte de la oferta que realizan los USUARIOS y contemplan a las SIC como demandantes de la IC.

En segundo lugar, DUN reconoce que la IC que proveen los USUARIOS carece de sustitutos. En el DPR se señala que la IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta, ya que, si bien las SIC pueden abastecerse de IC de forma directa e indirecta, ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente.

En tercer lugar, DUN no logra desvirtuar (e incluso reconoce) que el MR DE PM sea un mercado, en el cual se contempla que la provisión de IC la realizan los USUARIOS afiliados a las SIC.

⁴²⁴ Páginas 27 a 31 de la VISTA DUN.

49757

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Adicionalmente, el argumento de que el MR DE PM se compone únicamente de dos SIC tampoco desvirtúa la existencia de un mercado por el simple hecho de que ambas intercambien IC entre sí, máxime cuando existe un costo establecido en el CONTRATO DUN Y CC.

En este sentido, el MR DE PM definido en el DPR señala que los USUARIOS participan como oferentes que proveen IC y las SIC participan como demandantes, que se abastecen de forma directa e indirecta de la IC proporcionada por los USUARIOS afiliados.

Por otra parte, las SIC no proporcionan información de registros de crédito en virtud de que son las demandantes de IC que proveen los USUARIOS afiliados a las SIC y pueden abastecerse de forma directa (por los propios USUARIOS afiliados) e indirecta (mediante el intercambio de información entre SIC). De lo anterior es claro que la conducta imputada por la AI se refiere a que DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de PM, así como el SEGMENTO CO.

Finalmente, esta AI reitera que las SIC participan como demandantes de IC de PM y como oferentes indirectos de IC de PM en el MR y, es en su carácter de oferente y no de demandante, que DUN realizó la conducta de la negativa de trato, además, la tarifa de intercambio de información es acordada entre las SIC y es autorizada por la CNBV.

En relación con el secreto financiero, si bien es cierto que esta figura opera respecto de las *entidades financieras*, también lo es que no desvirtúa que la manera más eficiente para obtener IC es precisamente por medio de las *entidades financieras* y que obtenerla a través de las SIC es la única excepción para allegarse de IC de forma distinta a estas entidades (lo que en términos de la LRSIC no constituye una violación al secreto financiero). Por ello, es posible sostener que el secreto financiero resulta una restricción normativa para acceder a IC a través de oferentes distintos a las *entidades financieras* y las SIC.

En consecuencia, se concluye lo siguiente respecto del MR DE PM: (i) No se sostiene el argumento de DUN con respecto a que la recopilación y procesamiento de IC son meras actividades para la elaboración de un producto y no son un mercado, en virtud de que DUN no logra desvirtuar que en el MR DE PM existan oferentes y demandantes, que intercambian IC de PM, por el que se realiza un pago determinado; (ii) DUN no brinda elementos que hicieran necesario replantear la dimensión producto o geográfica del MR DE PM definido en el DPR, de tal forma que éste define adecuadamente el producto o servicio involucrado, los participantes en el mercado y el espacio geográfico donde se realiza la conducta anticompetitiva imputada; y (iii) DUN no desvirtúa la existencia del MR definido en el DPR debido a que el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de IC y el intercambio de información puntual es parte del procesamiento de IC, como se señala en el DPR. Además, DUN reconoce que las SIC participan como demandantes de IC en el MR DE PM y que el propio DUN participa como oferente indirecto de IC y, es en su carácter de oferente, que realizó la conducta de negativa de trato.



En el DPR se definió el MR DE PM como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional. En este sentido, los argumentos de DUN relativos a que: (i) suponiendo sin conceder que el MR fuera la provisión de IC las SIC participarían como demandantes dentro del mismo; y (ii) la provisión de IC no puede constituir un mercado, son **inoperantes** ya que **no combaten** la imputación realizada en el DPR, pues, como se indicó, el MR se definió como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones.

Si bien el MR DE PM no fue definido como la provisión de IC, en el proceso de recopilación y procesamiento de IC, existe una SIC que provee la IC y otra que la recopila o procesa. Por lo anterior, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM definido en el DPR.

Por otro lado, si bien las SIC participan como demandantes de la IC, también participan como oferentes, tal como reconoce DUN, ya que proporcionan a la otra SIC la IC que inicialmente les fue proporcionada a éstas por los USUARIOS. Al respecto DUN señala que: "[...] las SICs también podrían participar como oferentes en esta etapa, aunque solo de manera indirecta a través de la información que les proporcionan los Usuarios".

Así, el hecho de que los USUARIOS sean la fuente primaria de información no impide que las SIC actúen como oferentes de la información que en primer lugar le proporcionaron sus USUARIOS.

Asimismo, las SIC por disposición legal ofrecen IC a la otra SIC, ya sea a través del intercambio de la BPD o del intercambio puntual, a cambio del pago de una contraprestación, por lo que es incorrecto afirmar que la provisión de IC no forme parte de los productos que ofrece las SIC o que éstas no cobran por la IC que proporcionan. Incluso, como se señaló anteriormente, en el CONTRATO DUN Y CC se establece la tarifa que debe pagarse por el intercambio puntual de la IC y en la LRSIC se establece que el intercambio de la BPD debe realizarse mediante una cantidad a pagar.⁴²⁵

Por lo que hace a la manifestación relativa a que los USUARIOS no cobran por la provisión de IC se indica, por una parte, que las políticas de descuentos de las SIC reflejan el valor de la IC que los USUARIOS proporcionan a las SIC y, por otra parte, que en los casos en los que la SIC es quien provee la información, dicha actividad sí da lugar al pago de una cantidad determinada. En este sentido, no debe perderse de vista que DUN realizó la conducta imputada en su carácter de oferente y no de demandante de la IC.

De igual forma, el hecho de que DUN y CC hayan acordado una tarifa de intercambio puntual de IC, y que por ello se deba respetar, como sucede en el caso de cualquier contrato mediante el cual se fije una contraprestación a cambio de un producto o servicio, en nada desvirtúa el

⁴²⁵ Véase el artículo 36 de dicha legislación.

hecho de que ambas SIC proporcionan IC a la otra SIC, como parte de los servicios o productos que ofrecen, cobrando una contraprestación por dicho servicio o producto.

Por último, respecto del argumento de DUN relativo a que resulta incorrecto el análisis de sustitución puesto que el secreto financiero no es una barrera para que agentes diversos a los USUARIOS proporcionen IC, ya que éste únicamente aplica a ENTIDADES FINANCIERAS, se indica lo siguiente:

El artículo 5 de la LRSIC establece que:

“Artículo 5o.- La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales o las Sofomes E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley.

No se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando los Usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las Sociedades, así como cuando éstas compartan entre sí información contenida en sus bases de datos o proporcionen dicha información a la Comisión. Tampoco se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando las Sociedades proporcionen dicha información a sus Usuarios, en términos del Capítulo III de este Título Segundo, o cuando sea solicitada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones”.

En este sentido, del artículo 5 de la LRSIC se desprende que: (i) únicamente las SIC pueden prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al HC de PF y PM, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con los USUARIOS; y (ii) no se considera violación al secreto financiero cuando los USUARIOS (los cuales de conformidad con el artículo 2, fracción XV, de la LRSIC, incluyen a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y SOFOMES), entregan su información a las SIC, ni cuando las SIC comparten información entre éstas.

Así, tal como reconoce el DPR al realizar el análisis de sustitución: “[...] existen restricciones legales que le impiden a otras instituciones, además de las SIC, acceder a la información crediticia proporcionada por los USUARIOS”. Adicionalmente, los USUARIOS son quienes proveen la información a las SIC al prever la LRSIC una excepción al secreto financiero.

DUN argumenta que el análisis de sustitución es incorrecto pues el secreto financiero únicamente aplica a las ENTIDADES FINANCIERAS; no obstante, esto no es así, ya que existen diversos USUARIOS a los que también les aplica el secreto financiero y que, por ende, requiere de la excepción prevista en la LRSIC para proveer la información.

Al respecto, la LRSIC establece lo siguiente: “Se considerará que los Usuarios⁴²⁶ así como sus empleados o funcionarios involucrados, han violado las disposiciones relativas al Secreto Financiero, cuando realicen consultas o divulguen información en contravención a lo establecido en los artículos mencionados en el párrafo anterior”⁴²⁷, “La Empresa Comercial que haya realizado una consulta

⁴²⁶ Como se señaló, dicho concepto incluye a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y SOFOMES.

⁴²⁷ Penúltimo párrafo del artículo 28 de la LRSIC.

sin contar con la autorización a que se refiere el párrafo anterior incurrirá en violación al Secreto Financiero.[...]⁴²⁸ y “Tratándose de Usuarios que sean Entidades Financieras o Sofomes E.N.R., las Sociedades sólo serán responsables de violar el Secreto Financiero cuando no obtengan la manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el primer párrafo de este artículo”.⁴²⁹

Asimismo, la propia LRSIC define el secreto financiero como “[aquel] al que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión [actualmente, Ley de Fondos de Inversión] y 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como los análogos contenidos en las demás disposiciones legales aplicables”.⁴³⁰

Así, es claro que contrario a lo señalado por DUN, el secreto financiero no se limita a las ENTIDADES FINANCIERAS.

Adicionalmente, tal como indica el DPR, en términos del artículo 20 de la LRSIC “La [BD] de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios [...]”; siendo que el artículo 18 de la LRSIC establece que: “A las Sociedades les estará prohibido: I. Solicitar y otorgar información distinta a la autorizada conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables; [...]”.

En consistencia con lo anterior, el objeto social de DUN es el siguiente: “La Sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas morales y físicas con actividad empresarial, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales y SOFOMES E.N.R., como dichos términos se definen en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia”.⁴³¹

De esta manera, es posible sostener que el secreto financiero es una restricción normativa para acceder a IC a través de oferentes distintos a los USUARIOS o la otra SIC. Incluso, DUN no señala ni acredita que pueda adquirir, o que de hecho adquiriera,⁴³² IC de otros agentes distintos a los USUARIOS (considerando la información de los USUARIOS que se recaba de forma directa o de forma indirecta a través de otra SIC) y únicamente se limita a establecer que el secreto financiero no impide que las SIC obtengan IC de otros agentes que no son USUARIOS.⁴³³

Adicionalmente, DUN ni siquiera explica cómo podría una SIC obtener legalmente la IC de otra forma (y de otras fuentes) para efecto de recabar o recopilar la IC que necesita (información completa de registros y expedientes de los CLIENTES) para proveer RC.

⁴²⁸ Segundo párrafo del artículo 29 de la LRSIC.

⁴²⁹ Último párrafo del artículo 30 de la LRSIC.

⁴³⁰ Artículo 2o, fracción XI, de la LRSIC.

⁴³¹ Información publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve.

⁴³² Lo anterior, máxime cuando el artículo 25 de la LRSIC indica que “Sólo las Entidades Financieras, las Empresas Comerciales y las Sofomes E.N.R. podrán ser Usuarios de la información que proporcionen las Sociedades”, por lo que, con independencia de lo ya señalado, no se advierte que existan incentivos para que una persona que no sea ENTIDAD FINANCIERA, EMPRESA COMERCIAL, o SOFOM, entregue su IC a una SIC si no va a poder acceder a los productos de ésta.

⁴³³ Incluso, en respuesta a un requerimiento de la AI, la CNBV indicó que “La CNBV no cuenta con evidencia respecto a que las SIC’s reciban información de agentes económicos que no son clasificados como Usuarios conforme a la LRSIC” (folio 21225).

Por todo lo anterior, se concluye que tal como refiere la AI, DUN no brinda elementos suficientes que permitan replantear la dimensión producto o la dimensión geográfica del MR DE PM definido en el DPR ni logra desvirtuar su existencia, máxime cuando la AI logró acreditar que el MR corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional, tal como se desprende de los apartados "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" y "*ACREDITACIÓN DE LA PMR*" de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias.

B. PODER SUSTANCIAL

B.1. Resulta imposible determinar la existencia de PS en un mercado inexistente.

DUN manifestó:⁴³⁴

Como ya fue acreditado, la recopilación y procesamiento de IC y la provisión de IC no constituyen mercados sino actividades y, por ende, no pueden constituir un MR. El concepto de PS resulta inherente al de MR, por lo que en virtud de que el MR definido por la AI en realidad no puede ser considerado como tal, es que no se puede decir que DUN cuente con PS en éste.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁴³⁵

Se reitera lo señalado en el DPR y en la respuesta a las manifestaciones sobre MR DE PM con respecto a que los USUARIOS son los oferentes que proveen IC a las SIC en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM y en el cual, las SIC también participan como oferentes indirectos, por lo que la provisión de IC forma parte del MR definido en el DPR, lo cual no ha sido desvirtuado por DUN.

Así, DUN resulta sujeto de análisis de PS en el MR definido en el DPR, como lo requiere la LFCE para demostrar la probable comisión de una PMR.

El argumento de DUN resulta **infundado**, en virtud de que, como se señaló en el apartado "*A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado en tanto comprenden a oferentes y demandantes de bienes que intercambian productos a cambio del pago de un precio.

En este sentido, toda vez que el MR DE PM sí es un mercado, sí es posible determinar que DUN cuenta con PS en el MR definido en el DPR.

Por lo que hace a la referencia de que la provisión de IC no constituye un mercado, tal como se señaló en el apartado "*A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes*" de la presente resolución, en el proceso indirecto de recopilación y procesamiento de IC, una SIC provee la IC y otra la recopila o

⁴³⁴ Página 34 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁴³⁵ Páginas 31 a 32 de la VISTA DUN.

procesa. Por lo anterior, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM definido en el DPR.

B.2. La determinación de PS se realizó con base en un MR distinto al definido por la AI.

DUN manifestó.⁴³⁶

De la lectura del capítulo XII del DPR se desprende que la AI realiza el análisis de PS respecto de un mercado diverso (comercialización de productos de IC), lo que genera que dicho análisis sea incorrecto y por tanto ilegal.

Tal y como lo dispone el artículo 54, fracción II, de la LFCE, para tener por acreditada una PMR, el agente que realice la práctica debe tener PS en el MR en donde se realice la práctica. En ese sentido, el análisis de PS se debe realizar dentro del MR que se defina. El análisis está viciado de origen pues la AI definió un MR en donde no se llevaron a cabo las conductas imputadas. La AI se debió constreñir al análisis de PS en el mercado que ella misma definió (recopilación y procesamiento de IC).

En el DPR, la AI entre otras cosas, analizó participaciones de mercado con base en (a) número de CLIENTES con HC, (b) número de registros en la BD, y (c) número de USUARIOS que adquirieron productos; y señaló mi capacidad para restringir el abasto de IC. La AI no analizó participaciones de mercado y capacidad de fijar precios o restringir el abasto, con respecto a la recopilación y procesamiento de IC. Esto es evidente en virtud de que no es posible medir participaciones en un "mercado" inexistente.

En ese sentido, el análisis de PS fue realizado respecto a la comercialización de productos de IC (que es el mercado en el que participo) y no respecto a la recopilación y procesamiento de IC. Así, todo el análisis de PS no se refiere al MR definido por la AI y por tanto deviene ilegal, ya que el artículo 54 de la LFCE requiere que el PS exista en el MR.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁴³⁷

El análisis de PS expuesto en el DPR, conforme al artículo 59 de la LFCE, se realiza en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM.

La BD de cada una de las SIC se conforma con la información recopilada y procesada de todos sus USUARIOS, por ello, en el DPR se señala que las variables que se utilizan en el análisis de las participaciones de mercado "*se relacionan con la dimensión de la BD de las SIC. Lo anterior, con la finalidad de observar la magnitud de la IC (contenida en la BD) con la que cuenta cada una de las SIC establecidas en el mercado*". Las variables utilizadas consisten en el promedio mensual por año de CLIENTES con HC en la BD de PM o

⁴³⁶ Página 35 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁴³⁷ Páginas 32 a 34 de la VISTA DUN.

número de expedientes y el promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM o de registros.

Como se explicó en la sección de MR DE PM, las SIC fungen como demandantes de la IC que ofrecen los USUARIOS, la cual es recopilada y procesada en BD por las SIC. El hecho de que los datos que tienen los USUARIOS sobre créditos otorgados alimenten las BD de las SIC, no implica que éstas no recopilen y procesen esta información. La información primaria de las BD corresponde a la información de los créditos otorgados por los USUARIOS a sus CLIENTES, y el tamaño de la BD indica a la vez el tamaño del mercado crediticio que atienden todos los USUARIOS afiliados a una SIC y, por tanto, el tamaño del MR. DUN se equivoca al señalar que la AI analizó la participación de mercado en un mercado ajeno.

Adicionalmente, también se midió la participación en el MR DE PM mediante el número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM en virtud de que: “[...] *los USUARIOS sólo podrán obtener productos de [IC] cuando, previamente, le han proporcionado su información a la SIC que les presta sus servicios; ello, con base en el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (...). Los USUARIOS se afilian a una SIC con el objetivo último de adquirir productos de [IC], para lo cual deben proporcionar su [BD]. Por tanto, la participación de mercado respecto de los USUARIOS afiliados y que adquirieron algún producto de información crediticia puede considerarse indicativo de la dimensión de la [BD] DE PM y, por tanto, del poder de mercado en la recopilación y procesamiento de [IC] de PM.*”

Es importante destacar las participaciones de mercado de DUN para cada una de las variables relacionadas con la magnitud de la IC con la que cuentan las SIC.

En relación con la capacidad de fijar precios, en el DPR se indica que el costo que asumen los USUARIOS es la tarifa por el intercambio de información puntual, lo cual es parte del procesamiento de IC y, por tanto, del MR DE PM. Asimismo, respecto de la capacidad de restringir el abasto, el DPR señala que DUN “*cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de [IC] (en la forma de registros) a [CC]*” a través de la negativa de intercambiar la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, las cuales pertenecen al MR DE PM.

Tal como se señaló al analizar el argumento anterior, el MR DE PM definido en el DPR sí es un mercado y sí es posible medir las participaciones de mercado de éste, de conformidad con los razonamientos siguientes:

En primer lugar, es **infundado** el argumento de DUN relativo a que la AI realizó el análisis de PS en el mercado de “*comercialización de productos de IC*” y no en el MR DE PM definido en el DPR.

En la página 276 del DPR la AI estableció que: “[...] *Del análisis de la información provista por los agentes económicos, se observa que [DUN] contó, durante el periodo que comprende desde el dos mil doce hasta el dos mil quince, con una elevada participación en el mercado relevante y con la capacidad de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de información*

Handwritten signature and initials



crediticia, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. A continuación, se presenta el análisis que llevó a concluir lo anterior”.⁴³⁸

En el DPR se analizaron las participaciones de mercado de DUN en función de las siguientes tres variables: (i) promedio mensual por año de CLIENTES con HC en la BD de PM o número promedio anual de expedientes; (ii) promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM o promedio anual de registros; (iii) número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM.

Al respecto, tal como se señaló en el DPR, las primeras dos variables “[...] se relacionan con la dimensión de la [BD] de las SIC [...] con la finalidad de observar la magnitud de la [IC] (contenida en la [BD]) con la que cuenta cada una de las SIC [...]”.⁴³⁹ Asimismo, la tercera variable es “indicativ[a] de la dimensión de la [BD] DE PM y, por tanto, del poder de mercado en la recopilación y procesamiento de [IC] de PM”.

En este sentido, en el DPR se analizó la participación de mercado de DUN en función de la dimensión de su BD. Lo anterior, implica que el análisis de participaciones de mercado sí se realiza en función del MR definido en el DPR y no del mercado de “comercialización de productos de IC”.

Como se indicó en el apartado “A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado” de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la IC se comercializa a un precio determinado dentro del mercado de recopilación y procesamiento de IC, ya sea a través del intercambio de la BPD o del intercambio puntual.

En este sentido, para conocer la capacidad de las empresas en el MR DE PM definido en el DPR (ya sea para fijar precios o restringir el abasto) es necesario medir la dimensión de su BD en función de la cantidad de IC con la que cuentan, puesto que: (i) por un lado, el tamaño de la BD de DUN es indicativo de la capacidad con la que cuenta DUN como demandante, para recopilar IC; y (ii) por otro lado, permite evaluar la fuerza que tiene DUN como oferente en la recopilación y procesamiento de IC que realiza la otra SIC como demandante de la IC.

Así, el tamaño de la BD de DUN permite inferir la capacidad que tiene dicho agente económico para recopilar IC de los USUARIOS, y en función de esto, el grado de independencia o necesidad que tiene respecto de la otra SIC; así como la valía que tiene su BD en el MR de PM.

En el caso que se analiza, es justamente el tamaño de la BD de DUN lo que le permite tener poder de mercado en la recopilación y procesamiento de IC, pues al tener la BD más grande, CC tiene una mayor necesidad de hacerse de IC a través de DUN, ya sea a través del intercambio puntual o del intercambio de la BPD. Lo anterior se acentúa por la mínima cantidad de USUARIOS que opta por afiliarse a más de una SIC.

⁴³⁸ Folio 31160.

⁴³⁹ Página 276 del DPR.



49751

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Así, la dimensión de la BD permite concluir la fuerza de DUN como demandante y como oferente de IC.

A mayor abundamiento, las primeras dos variables analizadas para calcular la participación de mercado de DUN, permiten conocer tanto el número de CLIENTES respecto de los cuales tiene información DUN, como el número de créditos de dichos CLIENTES respecto de los cuales tienen registros. La cantidad tanto de registros como de expedientes⁴⁴⁰ con los que cuenta DUN, le permiten tener una BD más valiosa que la de su único competidor, CC, y por lo tanto, generar una mayor necesidad de CC respecto de su BD. Asimismo, una BD más extensa genera una mayor posibilidad de cobro para DUN por concepto de HIT.

Ahora bien, no se advierte cómo es que, como señala DUN, alguna de las dos variables referidas haya medido las participaciones de mercado respecto de la comercialización de productos de IC, pues no se analiza la fuerza relativa de DUN en función de los productos que vende a los USUARIOS o CLIENTES, sino de la IC recopilada.

Por lo que hace a la tercera variable, relativa al número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM, el DPR refiere que ello también es indicativo de la dimensión de la BD en tanto que, con base en el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, los USUARIOS sólo pueden obtener productos de IC de una SIC cuando previamente le han proporcionado su IC.

En este sentido, si bien podría parecer que la participación de mercado en función de dicha variable se realiza en un MR distinto al definido en el DPR, con ésta se busca medir el número de USUARIOS que, por el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, entregó su BD a DUN en relación con aquellos que se vieron obligados a entregar su información a CC.

El elevado porcentaje de DUN respecto del número de USUARIOS que consumieron sus productos de IC de PM (B en promedio de dos mil doce hasta marzo de dos mil quince),⁴⁴¹ se encuentra estrechamente ligado con la recopilación de IC, pues los USUARIOS que adquieren productos de IC debieron afiliarse a la SIC correspondiente y proporcionarle su IC. En este sentido, un mayor número de USUARIOS que consume productos de IC es indicativo de una mayor capacidad de recopilación de IC.

Es decir, con base en el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD y en el elevado porcentaje promedio de productos que comercializó DUN frente a CC, se puede inferir que DUN recopiló más información que CC en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, lo que se confirma al analizar las participaciones de mercado de DUN respecto del número de registros y

⁴⁴⁰ Cada expediente corresponde a un CLIENTE y puede contener uno o varios registros.

⁴⁴¹ En la tabla del DPR denominada "Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información crediticia de PM de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO" se indica que dicho promedio asciende al B durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la información incluida en los folios 6142 (Anexo 8.3) y 6034 bis (Anexo 8.3) del EXPEDIENTE, es posible concluir que la participación de mercado promedio de DUN en la adquisición de productos de IC de PM asciende a B durante el periodo señalado.

Eliminado: veintiocho palabras

expedientes (en promedio, [REDACTED] B [REDACTED]⁴⁴² y [REDACTED] B [REDACTED]⁴⁴³, respectivamente).

En este sentido, al analizar las tres variables referidas el DPR concluye que DUN cuenta con participaciones de mercado significativamente mayores que su competidor, pues en todos los casos se observó que DUN cuenta con al menos el [REDACTED] B [REDACTED] de participación promedio de dos mil doce a dos mil quince. La gran cantidad de información de los USUARIOS con la que cuenta DUN le permite construir amplias BD, las cuales son la base de los intercambios de IC.

Por todo lo anterior, el análisis de las participaciones de mercado de DUN se realizó en el MR definido por la AI, es decir en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC de PM, utilizando diversas variables relacionadas con la dimensión de la BD.

Asimismo, es **infundado** que la AI no haya analizado la capacidad de fijar precios o de restringir el abasto de DUN en el MR definido en el DPR, en virtud de lo siguiente.

En las páginas 276, 281, 287 y 293 del DPR se señaló que:

"Del análisis de la información provista por los agentes económicos, se observa que [DUN] contó, durante el periodo que comprende desde el dos mil doce hasta el dos mil quince, con una elevada participación en el mercado relevante y con la capacidad de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de información crediticia, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. A continuación, se presenta el análisis que llevó a concluir lo anterior.

[...]

Cabe mencionar que, un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado, como la presencia de economías de escala (presentes en la industria de información crediticia) o barreras a la entrada (éstas últimas analizadas en la siguiente sección).

[...]

De lo anterior, se puede inferir que el poder de mercado de los competidores de [DUN] es limitado, y que no cuentan con la capacidad suficiente para incrementar precios o restringir el abasto. Respecto a la imposibilidad de fijar precios, es importante retomar que, como se señaló en el apartado de Mercado Relevante, los USUARIOS no cobran por proporcionar su información

⁴⁴² En la tabla del DPR denominada "Tabla 64. Participación de mercado de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO respecto al número de registros" se indica que dicho promedio asciende al [REDACTED] B [REDACTED] durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la información incluida en los folios 5802 (Anexo 8.6) y 6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE, es posible concluir que la participación de mercado promedio de DUN respecto al número de créditos registrados asciende a [REDACTED] B [REDACTED] durante el periodo señalado.

⁴⁴³ En la tabla del DPR denominada "Tabla 63. Participación de mercado de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO respecto al número de CUENTES con historial crediticio" se indica que dicho promedio asciende al [REDACTED] B [REDACTED] durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la información incluida en los folios 5802 (Anexo 8.6) y 6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE, es posible concluir que la participación de mercado promedio de DUN respecto al número de expedientes o CUENTES con historial crediticio asciende a [REDACTED] B [REDACTED] durante el periodo señalado.

crediticia y tampoco lo hacen las SIC por concepto de afiliación, ni mucho menos por recibir la información crediticia de los USUARIOS.

La alta participación de mercado en la afiliación de USUARIOS, la casi nula existencia de USUARIOS afiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la [BD] D&B indican que [CC] no ha representado competencia en el segmento de PM.

[...]

[...] [DUN] cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de información crediticia (en la forma de registros) a [CC]. Como se expuso previamente, la dimensión de la [BD] de PM de ambas SIC no tiene comparación. [DUN] ha contado con el [] de los Usuarios afiliados, en promedio, desde el dos mil doce. El número de expedientes a su disposición es cercano al [], considerando la totalidad de los Clientes que cuentan con historial crediticio. Por tanto, la [AI] concluye que [DUN] ha contado con la capacidad de limitar el abasto de información crediticia en el mercado relevante.

Respecto de la capacidad de fijar precios, el costo que asumen los Usuarios afiliados a [CC] por el intercambio de información está determinado mediante el Contrato de Prestación de Servicios de [DUN] con [CC], por lo que ambas SIC no cuentan con la capacidad de alterar los precios ya acordados. [...] [énfasis añadido]”⁴⁴⁴

De lo anterior se observa que contrario a lo que manifiesta DUN, la AI analizó la capacidad que tiene DUN de restringir el abasto o fijar precios en el MR DE PM definido por la AI, concluyendo que DUN puede restringir el abasto de IC derivado de sus altas participaciones de mercado, la presencia de economías de escala, las barreras a la entrada y el limitado poder de mercado de su competidor.

Así, las variables utilizadas para afirmar lo señalado por la AI miden la dimensión de la BD de DUN y la posibilidad de dicho agente económico de restringir el abasto de IC (en su calidad de oferente de IC), información que se encuentra estrechamente relacionada con la recopilación y procesamiento de IC de PM, y no con la comercialización de productos de IC como afirma DUN.

B.3. Suponiendo sin conceder que la definición de MR elaborada por la AI fuese la provisión de IC, dicha definición implica inequívocamente la inexistencia de PS de DUN.

DUN manifestó:⁴⁴⁵

Suponiendo sin conceder que (i) la provisión de IC a las SIC pudiera constituir un mercado, y (ii) la AI hubiese definido éste como el MR, dicha definición implica inequívocamente la inexistencia del PS de DUN.

Bajo la definición del MR señalada en el párrafo anterior, la AI pierde de vista que, en el contexto de una investigación por PMR, la definición del MR es parte del análisis integral de PS, cuyas conclusiones versan en torno a si el o los agentes

⁴⁴⁴ Folio 31177.

⁴⁴⁵ Página 36 a 37 de la CONTESTACIÓN DUN.

investigados tienen la capacidad de fijar precios y restringir la oferta unilateralmente de los bienes en cuestión. Incluso, la definición de MR es un medio para determinar la presencia o ausencia de PS.⁴⁴⁶

De aquí que la definición del MR elaborada por la AI es condición suficiente para determinar que ningún agente económico en dicho mercado tiene PS, en virtud de que sería una contradicción lógica afirmar lo contrario, en un mercado en el que ningún agente tiene la capacidad de determinar su propio precio y se encuentra legalmente obligado a proveer los bienes que produce a solicitud de su único demandante. No existe, por tanto, agente que tenga la capacidad de fijar precios y restringir la oferta.

Por lo tanto, la propia definición de MR implica que DUN no es un agente con PS.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁴⁴⁷

Esta AI acredita en el DPR que a pesar de que las SIC estén "*legalmente obligado[s] a proveer los bienes que produce a solicitud de su único demandante*", DUN restringió el abasto de IC a CC. Por otra parte, en el DPR se señala que respecto de la capacidad de fijar precios "*ambas SIC no cuentan con la capacidad de alterar los precios ya acordados*" en el MR DE PM.

Como lo reconoce el propio DUN, al tener un solo demandante en un mercado donde existen únicamente dos SIC y una de éstas (DUN) cuenta con una participación promedio de B entre otros elementos que sustentan su poder de mercado, se puede concluir que DUN tiene la capacidad de restringir la oferta, lo que ha impedido sustancialmente el acceso de CC a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, así como al MERCADO RELACIONADO.⁴⁴⁸ En este sentido DUN no logra desacreditar que tiene PS en el MR definido en el DPR, por el contrario, lo reafirma.

El argumento de DUN resulta infundado, en virtud de las siguientes consideraciones:

La provisión de IC por una SIC a otra SIC constituye una actividad que forma parte de la recopilación y procesamiento de IC de las PM, pero ello no significa que el MR DE PM haya sido definido en el DPR como lo señala DUN. En el DPR se definió el MR DE PM como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional. Asimismo, como se explica a continuación, no es cierto que la definición del MR incluida en el DPR (o considerar la provisión de IC como parte de dicho mercado) necesariamente implique la inexistencia de PS de DUN.

Como ya se explicó, en el DPR se analizó la participación de mercado de DUN principalmente en función de la dimensión de su BD. Lo anterior debido a que: (i) por un lado, el tamaño de

⁴⁴⁶ DUN cita la siguiente tesis: "*MERCADO RELEVANTE. SU CONCEPTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA*." Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, octubre de 2008; Pág. 2225. I.4o.A. J/75; Registro No. 168 609

⁴⁴⁷ Página 34 de la VISTA DUN.

⁴⁴⁸ DUN señaló las páginas 315 a 320 del DPR.

la BD de DUN es indicativo de la capacidad con la que cuenta DUN como demandante, para recopilar IC; y (ii) por otro lado, permite evaluar la fuerza que tiene DUN como oferente en la recopilación y procesamiento de IC que realiza la otra SIC como demandante de la IC.

Así, el tamaño de la BD de DUN permite inferir la capacidad que tiene dicho agente económico para recopilar IC de los USUARIOS, y en función de esto, el grado de independencia o necesidad que tiene respecto de la otra SIC; así como la valía que tiene su BD en el MR de PM.

De este modo, es justamente el tamaño de la BD de DUN lo que le permite tener poder de mercado en la recopilación y procesamiento de IC, pues al tener la BD más grande, CC tiene una mayor necesidad de hacerse de IC de forma indirecta a través de DUN, ya sea a través del intercambio puntual o del intercambio de la BPD. Lo anterior se acentúa por la mínima cantidad de USUARIOS que opta por afiliarse a más de una SIC.

Conforme a lo señalado, no resulta incorrecto considerar como parte de la recopilación de la IC tanto la entrega o provisión de la IC por los USUARIOS o de una SIC en su calidad de oferente, como la recepción de dicha IC por la SIC demandante para su posterior integración a su BD. En este sentido, al negarse a proporcionar IC a través de la BPD, la negativa respectiva se da dentro de la recopilación de IC (es decir, la conducta imputada se da dentro del MR DE PM por un agente económico que tiene PS en ese MR DE PM). En el mismo sentido, al negarse a entregar o transferir la totalidad de la información mediante el intercambio puntual, la negativa de DUN se observa dentro de una actividad que forma parte de la definición del MR DE PM, el procesamiento de IC, esto es, la otra actividad que permite el abastecimiento indirecto de la IC de los USUARIOS a través de otra SIC.

De este modo, en el DPR no se definió el MR DE PM como el mercado de la provisión de IC a las SIC, lo cual tampoco implica que DUN no pueda tener PS en el MR DE PM, como ya se explicó.

Como se estableció en el apartado "*A. Mercado Relevante*" la AI definió correctamente el MR y en éste determinó el PS con que cuenta DUN, concluyendo que dicho agente económico cuenta con capacidad para restringir el abasto.

Aunque DUN argumenta que sería contradictorio afirmar que un agente económico tiene PS en un mercado en el que ningún agente tiene la capacidad de fijar precios o restringir el abasto, tal como se analizará con más detalle en el apartado "*Consideraciones en torno a la supuesta capacidad de DUN para restringir el abasto*", a pesar de que legalmente DUN está obligado a no restringir el abasto en el MR DE PM, sus participaciones de mercado elevadas, las barreras a la entrada y las economías de escala presentes en el mercado permiten que, de *facto*, DUN tenga la capacidad de restringir el abasto.

De hecho, como se señala a lo largo de la resolución, DUN restringió el abasto de CC a la IC, al negarse a compartir la BPD de PM y lo correspondiente al SEGMENTO CO en los RC de PM.

B.4. DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume.

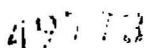
DUN manifestó:⁴⁴⁹

En la página 279 del DPR, la AI señala que “[...] *la integración vertical existente en la industria entre los bancos y DUN han favorecido para que esta última cuente con el mayor número de USUARIOS que le suministran de registros y, a su vez, que consumen los productos finales [...]*”. Escapa del análisis de la AI que mis usuarios accionistas no tienen el control de la sociedad. Es necesario que se actualice el supuesto de control en las diferentes etapas productivas de un producto (en este caso RC para PM) para poder concluir que existe una integración vertical y ninguno de los usuarios accionistas tiene control sobre mí.⁴⁵⁰

Ninguno de los usuarios accionistas tiene el control *de iure* ni *de facto*, ya que ninguno de ellos: (i) es directa o indirectamente tenedor o titular de la mayoría de las acciones de DUN o de un porcentaje de participación directa o indirecta que le permita imponer unilateralmente decisiones en asambleas; (ii) tiene la capacidad de dirigir o administrar a otro en virtud de un contrato, convenio, convenios de abastecimiento de largo plazo, el otorgamiento de créditos o cuando mis actividades mercantiles se realicen preponderantemente con otra o dependan preponderantemente de otra, de manera que un usuario accionista ejerza un poder real y una influencia decisiva o significativa sobre mí; (iii) tiene la capacidad o derecho de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otro; (iv) tiene la capacidad o el derecho de designar a directivos de alto nivel como directores, gerentes, directivos relevantes o factores principales de otro; (v) tiene vínculos de parentesco consanguíneo o por afinidad entre los agentes económicos que a su vez ejerzan control sobre una o diversas PM; ni (vi) tiene un derecho especial o distinto, respecto de los otros accionistas.

⁴⁴⁹ Páginas 37 a 57 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁴⁵⁰ Si bien en la CONTESTACIÓN DUN se indica que ninguno de los usuarios accionistas tiene el control de TUM se presume que el agente económico buscaba referirse a DUN.



B que permita a alguno de los accionistas dirigir, directa o indirectamente, mi administración, estrategia o principales políticas.

Tampoco se cumple con lo dispuesto en la Guía para Notificación de Concentraciones,⁴⁵⁷ por lo que en términos de ésta se acredita que ninguno de mis accionistas tiene control sobre mí:

- a) De conformidad con la estructura accionaria de DUN, ninguno de mis accionistas es titular de la mayoría de las acciones o de un porcentaje que le permita imponer unilateralmente decisiones en las asambleas.
- b) Ninguno de mis accionistas tiene celebrado un contrato, convenio, convenios de abastecimiento de largo plazo, o me ha otorgado un crédito⁴⁵⁸ que le permita ejercer un poder real y una influencia decisiva o significativa sobre mí. Asimismo, mis actividades no dependen de manera preponderante de las actividades de mis accionistas, de tal manera que se ejerza un poder real y una influencia decisiva o significativa sobre mí.
- c) Considerando (i) que la participación accionaria **B** da derecho a **B**; y (ii) que el accionista con más participación accionaria detenta el **B**, es evidente que **B**.
- d) De conformidad con mis Estatutos Sociales la designación del Director General

⁴⁵⁷ DUN señaló que la Guía referida establece lo siguiente:

"La LFCE no contiene una definición explícita de control. Sin embargo, la SCJN ha señalado que un Agente Económico puede ejercer una influencia decisiva o control sobre otros para actuar en los mercados, ya sea como consecuencia de actos jurídicos (de iure) o en los hechos (de facto).

El control de iure puede darse de diversas formas, entre otras, cuando:

- a) Un agente directa o indirectamente es tenedor o titular de la mayoría de las acciones o partes sociales de una empresa o un porcentaje de participación directa o indirecta que le permita imponer unilateralmente decisiones en asambleas;*
- b) Existe la capacidad de dirigir o administrar a otro en virtud de un contrato, convenio, convenios de abastecimiento de largo plazo, el otorgamiento de créditos o cuando las actividades mercantiles de una o varias sociedades se realicen preponderantemente con otra o dependan preponderantemente de otra, de manera que ésta ejerza un poder real y una influencia decisiva o significativa sobre la primera;*
- c) Se tiene la capacidad o derecho de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otro;*
- d) Existe la capacidad o el derecho de designar a directivos de alto nivel como directores, gerentes, directivos relevantes o factores principales de otro; o*
- e) Existan vínculos de parentesco consanguíneo o por afinidad entre los Agentes Económicos que a su vez ejerzan control sobre una o diversas personas morales.*

Por otro lado, el análisis del control de facto debe atender no sólo al nivel de participación accionaria cuando ningún socio tiene mayoría absoluta, sino también a la posibilidad de que un socio minoritario pueda obtener la mayoría en las asambleas dado el nivel de asistencia; la posición de los otros accionistas (dispersión, vínculos de tipo estructural, económico o familiar con el accionista principal); y el interés financiero.

Al respecto, en materia de competencia económica, el Poder Judicial también ha resuelto que el control ejercido por una persona moral puede ser real o latente".

⁴⁵⁸ Si bien en la CONTESTACIÓN DUN se refiere a convenios, contratos o créditos otorgados a TUM, se presume que el agente económico buscaba referirse a DUN.

B [REDACTED]. Ninguno de mis accionistas tiene la capacidad de B [REDACTED] por lo que tampoco tiene la capacidad o el derecho de designar al Director General.

- e) Mis accionistas no tienen control sobre mí. No existen vínculos de parentesco o consanguinidad entre mis accionistas y DUN.

Tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la ley de Propiedad Industrial,⁴⁵⁹ por lo que en términos de tal disposición se acredita que ninguno de los bancos accionistas tiene control sobre mí:

- a) Ninguno de mis accionistas es tenedor o titular de acciones, con derecho pleno a voto que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de mi capital social.
- b) No obstante que existe un accionista B [REDACTED] titular de acciones con derecho a voto B [REDACTED] y que B [REDACTED] accionista es a su vez titular de una porción igual o mayor, dicho porcentaje de participación no otorga al accionista en cuestión B [REDACTED] B [REDACTED]. Ninguno de mis accionistas tiene la facultad de imponer decisiones, o una influencia significativa.
- c) No existe contrato alguno con alguno de mis accionistas que le permita dirigir o administrarme.
- d) Considerando: (i) que la participación accionaria del B [REDACTED] da derecho a B [REDACTED]; y (ii) que el accionista con más participación accionaria detenta el B [REDACTED], es claro que B [REDACTED] B [REDACTED].

⁴⁵⁹ DUN señaló el texto del referido artículo:

"Artículo 55.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trate. Queda incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50% del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra".

- e) De conformidad con mis Estatutos Sociales la designación del Director General [REDACTED] B [REDACTED]. Ninguno de mis accionistas tiene la capacidad de [REDACTED] B [REDACTED], por lo que tampoco tiene la capacidad o el derecho de designar al Director General.

Ahora bien, la falta de control de cada uno de mis accionistas en lo individual sobre mí necesariamente supone la falta de integración vertical. El concepto de integración vertical implica necesariamente la existencia de control. Se entiende que un agente se encuentra integrado verticalmente cuando éste participa en distintas etapas de la cadena productiva de un bien o servicio, teniendo control sobre el agente de aguas abajo o de aguas arriba. Lo anterior hace sentido si se toma en consideración que, en caso de que no exista un control, los incentivos del agente en el mercado aguas arriba y el agente aguas abajo estarán desalineados y no llevarán a la consecución de un objetivo común.

La falta de control y la existencia de incentivos desalineados entre dos agentes de la cadena productiva genera que éstos no puedan ser considerados como verticalmente integrados.

Al resultar incorrecta la premisa en la que descansa la consideración de la AI, es que ésta última también resulta incorrecta. En ese sentido, la AI no logra probar que el hecho que mis accionistas sean a su vez USUARIOS haya favorecido a que cuente con el mayor número de USUARIOS y en consecuencia de registros.

Aunado a lo anterior, es de señalarse que dos de mis accionistas, se han afiliado a CC, lo que claramente demuestra lo infundado de la consideración de la AI.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente: ⁴⁶⁰

La AI reitera lo señalado en el DPR en cuanto a las características del mercado de IC y el alcance de la integración vertical entre el mercado de la IC y el otorgamiento de crédito. ⁴⁶¹

Ahora bien, la AI reitera que sí existe una integración vertical entre DUN y sus usuarios accionistas, por las consideraciones siguientes:

La argumentación de DUN resulta equivocada desde su inicio, ya que confunde el concepto de "integración vertical" con el de GIE al afirmar que es necesario que se actualice el control de cada uno de los usuarios accionistas sobre DUN, para poder concluir que existe una integración vertical. Ni el criterio jurisprudencial citado por DUN ni el análisis de control planteado por DUN resultan aplicables para determinar la existencia de integración vertical, pues la supuesta falta de control serviría, en todo caso,

⁴⁶⁰ Páginas 34 a 44 de la VISTA DUN.

⁴⁶¹ La AI se refiere a la información incluida en las páginas 99 y 100 del DPR.

para considerar que existe o no un GIE, no para combatir la integración vertical de operación del agente económico.

Asimismo, el DPR asevera que las ENTIDADES FINANCIERAS son usuarios accionistas de las tres empresas que operan en el MERCADO INVESTIGADO y por su nivel de participación accionaria en el capital social de las mismas, mantienen un control conjunto sobre las SIC. En ningún apartado del DPR se plantea que alguno de los usuarios accionistas de DUN tenga control sobre la empresa, sino que los usuarios accionistas de TUM y DUN controlan [REDACTED] B del capital social de cada una de ellas, por lo que, es posible afirmar que los usuarios accionistas de DUN, en conjunto, tienen control sobre DUN.

Por otro lado, tal como lo reconoce DUN, se entiende que un agente se encuentra integrado verticalmente cuando este participa en distintas etapas de la cadena productiva, de manera que sus incentivos en el mercado aguas arriba y/o aguas abajo están alineados y llevan a la consecución de un objetivo común. Así, dada la estructura del mercado de IC en México, en la cual algunas ENTIDADES FINANCIERAS concentran la propiedad de las SIC, los incentivos de éstas se encuentran alineados para realizar todas las consultas crediticias a través de la SIC en la que participan como accionistas, ya que esto les representa un ingreso.

En el caso específico, la alineación de incentivos entre DUN y los Usuarios-Accionistas se genera debido a que las ENTIDADES FINANCIERAS obtienen un ingreso por las ganancias que derivan del número de ventas de la SIC, al ser accionistas de esta última. Por ello, aun cuando los accionistas de DUN no estén sujetos a una exclusividad, es posible presumir que los accionistas de DUN preferirán adquirir sus reportes de aquella SIC que les genere un ingreso, es decir, de DUN. Refuerza lo anterior, que los dos accionistas de DUN que se han afiliado a CC, no hayan adquirido, hasta el momento de la emisión del DPR, ningún producto de IC de PM de CC.

Aunado a lo anterior, la integración vertical también le ha permitido a DUN asegurar el abasto de registros relativos al comportamiento crediticio de las PM de los Usuarios Accionistas, insumo que utiliza DUN para elaborar productos de IC que, a su vez, consumen estos Usuarios Accionistas. De igual forma, la presencia de efectos de red en este mercado genera incentivos para que el resto de los USUARIOS se afilien a la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión, por lo que la integración vertical también favorece que DUN cuente con el mayor número de registros y, en consecuencia, un mayor número de USUARIOS que consumen sus productos finales.

Cuando el control mayoritario de una SIC está concentrado en unos pocos USUARIOS, como es el caso de DUN, y además estos accionistas resultan otorgar gran cantidad de créditos, se genera reticencia a compartir la información con la que cuentan con terceras personas, esto es, con una SIC independiente o ajena.

En este sentido, la participación de los usuarios accionistas en DUN como proveedores de IC y como demandantes de RC y productos de valor agregado, les da el carácter de

Eliminado: ocho palabras

1
A

participantes en dos eslabones diferentes de la cadena productiva, por lo que convierte a los accionistas en participantes verticalmente integrados, con independencia de que el control mayoritario de DUN, en su conjunto, se encuentre en los usuarios accionistas.

Aunado a lo anterior, DUN no expuso razones por las cuales demuestre que los incentivos del agente en el mercado aguas arriba y/o aguas abajo estén desalineados y no conlleven la participación de los usuarios accionistas en distintas partes de la cadena productiva, lo que favorece sus intereses. Por el contrario, DUN se limitó a combatir la integración vertical desde el análisis del control individual de los accionistas hacia la SIC, con base en instrumentos que no son aplicables para este análisis, como son: i) LMV; ii) Guía para Notificación de Concentraciones, y iii) el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Por tanto, al resultar incorrecta la premisa en la cual sustenta su argumento, la conclusión a la cual llega DUN es también incorrecta. En consecuencia, DUN no logra desvirtuar el hecho de que los accionistas de DUN sean a la vez sus USUARIOS no haya favorecido a la SIC en cuanto al número de USUARIOS que le proporcionan registros y consumen sus productos finales. Esta aseveración del DPR se basa en la idea de integración vertical entre dos etapas del proceso productivo, a saber, la recopilación y procesamiento de IC de PM y la comercialización de los productos de IC de PM.

En este orden de ideas, y dado que DUN cuenta con PS en el MR definido, así como las propias características del MERCADO INVESTIGADO, es posible presumir que la integración vertical que mantiene con las ENTIDADES FINANCIERAS permite la comisión de prácticas que, como se ha expuesto en el DPR, son anticompetitivas.

Finalmente, la AI manifiesta que lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR. Lo anterior, dado que la simple aseveración del emplazado de que la AI no realizó el análisis adecuado para comprobar el control que tiene cada uno de los accionistas de DUN en lo individual sobre esta última es intrascendente para combatir la imputación hecha a la SIC.

El argumento referido por DUN relativo a que no existe integración vertical al no existir control, es **inoperante** por partir de **premisas falsas** en virtud de las consideraciones que se expresan a continuación.

DUN parte de la premisa de que la falta de control de cada uno de sus accionistas sobre él necesariamente supone la falta de integración vertical; sin embargo, el "control" no es un elemento necesario para la existencia de integración vertical. De esta manera, aun cuando fuera cierta la inexistencia de control que refiere DUN, ello no implicaría la inexistencia de una integración vertical, como se explica en el presente apartado.

Una de las definiciones más utilizadas para entender el concepto de integración vertical radica en la idea de que una empresa está integrada verticalmente cuando se provee a sí misma de

insumos para su producción.⁴⁶² Asimismo, las diferentes posturas sobre la integración vertical coinciden en que ésta es una cuestión de grado. Incluso se han construido índices para medir el grado de integración vertical de una empresa, los cuales han tomado en cuenta, principalmente, tres variables: i) el valor agregado que da una empresa respecto a otro eslabón de la cadena productiva, ii) la proporción de los ingresos de una empresa que devienen de los diferentes eslabones integrados, y iii) el grado de control gerencial de una empresa sobre otra.⁴⁶³

Otro concepto que refleja que la existencia (e importancia) de identificar distintos grados de integración vertical, es el concepto de “cuasi integración vertical”, el cual surge cuando una empresa establece una relación con un cliente al que vende una parte significativa de su producción, lo que permite que el cliente tenga influencia sobre la empresa productora. Este tipo de influencia es similar a la que surge cuando una empresa lleva a cabo una fusión vertical y puede estar basada en el hecho de que la empresa desea tener influencia sobre un activo necesario para su proceso productivo.⁴⁶⁴ Para que exista cuasi integración vertical, las relaciones entre empresas no necesitan involucrar control adicional de las decisiones de producción o distribución.⁴⁶⁵

Existe también un término similar: “integración vertical parcial”, el cual ocurre cuando la mayor parte de la producción de un proceso productivo “aguas arriba”, es empleada como insumo para producir la mayor parte de la producción “aguas abajo”.⁴⁶⁶

En el caso, los usuarios accionistas son: 1) proveedores de la IC, que se constituye como insumo para la elaboración de RC; 2) propietarias de acciones de DUN; y 3) consumidores o demandantes de los RC y/o productos de valor agregado elaborados por las SIC, por lo que, efectivamente participan en diferentes eslabones de la cadena productiva.

⁴⁶² Perry, M.K. (1989), *Vertical integration: Determinants and effects*, En: Schmalensee, R. and Willig, R.D., Eds., *Handbook of Industrial Organization I*, Elsevier Science, B.V., Amsterdam. El concepto de integración vertical aún es debatido por la doctrina económica: “La noción de integración vertical es precisamente uno de los puntos centrales de discusión en la moderna Teoría de la Empresa” (Cabral, Luis (1997), *Economía Industrial*, McGraw-Hill, p.111.) Algunos autores consideran que la variable principal que debe considerarse para señalar que una empresa está verticalmente integrada, es que tenga la propiedad sobre los activos de otra empresa. Otros autores consideran que la variable relevante es la relación laboral que la empresa tiene con sus empleados, puesto que la integración vertical dependerá de qué tanto puede la empresa comprar insumos de producción o contratar trabajadores para producirlos por sí misma (Véase Perry, M.K. (1989), *Vertical integration: Determinants and effects*, En: Schmalensee, R. and Willig, R.D., Eds., *Handbook of Industrial Organization I*, Elsevier Science, B.V., Amsterdam.)

⁴⁶³ Maddigan, R., (1981), *The Measurement of Vertical Integration*, disponible en <https://www.jstor.org/stable/pdf/1924349.pdf?refreqid=excelsior%3Ae17658539113bcbaf2f4abed63b20d>, y Huerta, Martínez, Navas, (2004), *Cómo medir la diversificación corporativa: una aplicación a las empresas industriales españolas*, disponible en <http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v13/5.pdf>, consultados el 16 de enero de 2019. Asimismo, si bien algunos autores han utilizado el concepto de control para identificar la integración vertical (por ejemplo, en 1937 Ronald Coase, en su trabajo seminal “The nature of the firm”, utiliza la idea de control de una empresa sobre otra para explicar la integración vertical), actualmente no es el único elemento que se utiliza para identificar la integración vertical y no necesariamente es el concepto determinante, como se explica en el presente apartado.

⁴⁶⁴ Blois, K. (1972), *Vertical quasi-integration*, *The Journal of Industrial Economics*, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1972), pp. 253-272.

⁴⁶⁵ Perry, M.K. (1989).

⁴⁶⁶ Perry, M.K. (1989).

Los usuarios accionistas de DUN tienen una relación de influencia individual sobre uno de los insumos necesarios y específicos para dar créditos: los RC. Dicha relación se formaliza a través de la propiedad de un cierto número de acciones de DUN. Adicionalmente, en el caso de DUN y los usuarios accionistas, DUN provee de un insumo que para los usuarios accionistas resulta insustituible y, a su vez, los insumos que los usuarios accionistas dan a DUN (IC) también son importantes para DUN, puesto que representan una buena parte de su BD. De tal modo que no puede presumirse que el comportamiento de DUN sea independiente de los usuarios accionistas, puesto que estos últimos tienen una influencia significativa sobre DUN.

Así, puede existir un cierto grado de integración vertical aún sin que una empresa controle a otra. Lo anterior puesto que la influencia significativa que puede tener el proveedor o comprador de un insumo sobre otra empresa que participa en otro eslabón de la cadena productiva, puede implicar que sus incentivos estén lo suficientemente alineados.

De conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, los usuarios accionistas con participación en el consejo de administración de DUN representan una buena parte de las compras totales de RC de PM de DUN, tal como se muestra en la tabla siguiente:

B

Eliminado: una tabla

¹ Datos disponibles de enero a marzo de 2015.

Fuente: Elaboración propia con información visible en la foja 23129 del EXPEDIENTE.

Por tanto, al ser los USUARIOS clientes con compras significativas del insumo que genera DUN, se concluye que sus incentivos están alineados y que existe un cierto grado de integración vertical entre los usuarios accionistas y DUN.

De igual forma, para los usuarios accionistas es también importante alinear sus incentivos con DUN, dado que ésta les provee de un insumo insustituible como es el RC de PM. Dicho insumo les permite realizar una actividad que les representa una buena parte de sus ingresos.⁴⁶⁷ Por tanto, DUN genera un insumo específico y relevante para los usuarios accionistas los cuales encuentran así incentivos para alinear sus intereses con DUN.

⁴⁶⁷ De acuerdo con cifras públicas de la CNBV, en 2016, en promedio 71% (setenta y un por ciento) de los ingresos de los usuarios accionistas se obtuvo a través del otorgamiento de créditos. Fuente: Series 040-8B-R1 (ingresos por intereses) y 040-8B-R4 (ingresos por comisiones y tarifas cobradas) del Portafolio de Información de la CNBV. Disponible en <https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx>.



497131

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Los usuarios accionistas son además participantes mayoritarios en el consejo de administración de DUN, lo cual implica que las decisiones de DUN están fuertemente influenciadas por ellos. Por tanto, las decisiones tomadas por DUN no irán en contra de los intereses de los usuarios accionistas.

Asimismo, dado que los incentivos de los usuarios accionistas y DUN, están hasta cierto punto alineados, los usuarios accionistas preferirán comprarle RC de PM a DUN que a cualquier otra empresa competidora como CC.

De esta manera, al no tener los incentivos de comprar los RC DE PM a CC, los usuarios accionistas tampoco tienen incentivos para compartir su BD con dicho agente económico, dado que el único beneficio que podrían obtener de compartir su BD es obtener de CC los RC DE PM.

Adicionalmente, en este caso debe considerarse que los usuarios accionistas detentan un porcentaje elevado de propiedad de las SIC (si bien en lo individual tienen participaciones accionarias que no rebasan el **B** por ciento, de forma agregada concentran más del **B** por ciento de las acciones de DUN), de manera que sus incentivos al participar en los eslabones de la cadena productiva se encuentran alineados a proveer de IC y consumir RC a la SIC de la que detentan participación accionaria, pues las ganancias derivadas de las ventas de DUN les representa la obtención de utilidades.

Asimismo, al existir efectos de red, y al tener DUN la mayor BD, la relación con sus accionistas favorece a DUN para que cuente cada vez con una mayor cantidad de usuarios y registros, puesto que al ser los usuarios accionistas con participación en el consejo de administración de DUN los mayores otorgantes de crédito, esto permite que sus registros alimenten la BD de DUN y no la de sus competidores, haciendo cada vez más valiosa para los usuarios dicha BD.

Para poder adquirir RC o productos de valor agregado de una SIC, las ENTIDADES FINANCIERAS deben proporcionarle necesariamente IC de sus CLIENTES, lo que implica que tales entidades se vuelvan USUARIOS de la SIC a la que consulten. Por lo tanto, tales efectos de red incentivan a que las ENTIDADES FINANCIERAS se afilien a la SIC que tenga la BD de mayor dimensión.

En virtud de las consideraciones expuestas es posible concluir no sólo que existe una alineación clara entre los intereses de DUN y los de aquellos usuarios accionistas que participan en su consejo de administración y son los mayores otorgantes de crédito en el país, sino también que existe un cierto grado de integración vertical entre DUN y dichos accionistas, aún sin que exista control individual por los accionistas hacia la SIC.

En consecuencia, esta autoridad considera que es correcta la afirmación contenida en el DPR en el sentido de que *"la integración vertical existente en la industria entre los bancos y DUN & BRADSTREET han [sic] favorecido que esta última cuente con el mayor número de USUARIOS que le suministran de registros y, a su vez, que consumen los productos finales."*⁴⁶⁸ Sin perjuicio de lo

⁴⁶⁸ Véase la página 279 del DPR.

señalado en los párrafos precedentes, no resultan aplicables al caso concreto los criterios y las disposiciones referidas por DUN para acreditar la inexistencia de control, en específico la LMV, la Guía para Notificación de Concentraciones y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior debido a que, como se ha explicado, la existencia integración vertical no depende de que se actualicen los elementos de control (*de iure* o *de facto*) que refiere DUN.

En particular, se observa que DUN hace referencia a los elementos establecidos en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial para presumir la existencia de control; no obstante, de la lectura del primer párrafo del artículo citado por DUN se advierte que el análisis del elemento control se realiza para considerar si existe o no un GIE y no para analizar la existencia de integración vertical: "Artículo 55.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones [...]".

Por su parte, la Guía para la notificación de concentraciones de la COFECE hace referencia a qué debe entenderse como control en el análisis de la existencia o no de una concentración: "El artículo 61 de la LFCE define la concentración como: [...] la fusión, adquisición del control o cualquier acto [...] A continuación la guía explica cada una de las posibilidades señaladas por esta disposición [...] 2.2 Adquisición de control [...]".⁴⁶⁹ Asimismo, la LMV tampoco realiza un análisis del elemento control para determinar de la existencia o no de integración vertical.

Por otro lado, si bien es cierto que, en virtud de su participación accionaria, cada uno de los usuarios accionistas de DUN en lo individual no tienen control sobre DUN, ello no es suficiente para acreditar que no existe integración vertical, pues en todo caso únicamente supondría la ausencia de un GIE integrado por los usuarios accionistas y DUN. Al respecto, no debe pasar desapercibido que ni en el DPR ni en la presente resolución se afirma que los usuarios accionistas y DUN formen parte del mismo GIE.

Como se indicó, la integración vertical supone participación de un agente económico en diferentes etapas de la cadena productiva de un bien o servicio; sin embargo, contrario a lo señalado por DUN, no es necesario que se actualice algún tipo de control en las diferentes etapas de la cadena productiva, sino basta con que se encuentren alineados los incentivos en el mercado aguas arriba y en el mercado aguas abajo, como ya se explicó.

DUN afirma que la existencia de incentivos desalineados entre dos agentes de la cadena productiva genera que éstos no puedan ser considerados como verticalmente integrados. Asimismo, DUN refiere la existencia de dos accionistas que se habrían afiliado a CC. Al respecto, se indica, por una parte, que el argumento de DUN se limita a sostener que no existe dicha alineación de intereses debido a que no existe control (es decir, no realiza argumentos lógico-jurídicos, adicionales a los ya analizados, tendientes a demostrar que, en el caso concreto, los incentivos de los usuarios accionistas se encuentran desalineados con los de

⁴⁶⁹ Véase la página 9 de la Guía para la notificación de concentraciones, visible en la página de Internet: https://cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/guia-0042015_not_concentraciones.pdf.

DUN) y, por otra parte, debe tenerse en cuenta que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN los usuarios accionistas que DUN refiere (esto es, los usuarios que se habrían afiliado a CC) no habían adquirido algún producto de IC de PM de CC, por lo que dicho argumento no logra desvirtuar la alineación de incentivos para proveer IC y consumir RC de la SIC en la que tienen participación accionaria. En consecuencia, los argumentos señalados resultan infundados.

Por último, de conformidad con el análisis incluido en los apartados de la presente resolución denominados "*El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto*" y "*Valoración y alcance de las pruebas*", aún en el caso de que los usuarios accionistas no estuvieran total o plenamente integrados verticalmente con DUN (al no existir control *de iure* o *de facto* de uno o varios de los accionistas sobre la SIC), sí se sostendrían las conclusiones a las que arriba el DPR respecto del análisis que corresponde a la fracción I del artículo 59 de la LFCE (particularmente el análisis en materia de las participaciones de DUN en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC a nivel nacional, así como respecto de la capacidad que tiene dicho agente económico para restringir el abasto), toda vez que: (i) DUN tiene la BD de PM más extensa en cuanto a número de registros y expedientes;⁴⁷⁰ (ii) DUN cuenta con un número significativamente mayor de USUARIOS que adquirieron sus productos de PM que CC (y por lo tanto cuenta con mayor número de USUARIOS que le proporcionaron su IC);⁴⁷¹ (iii) el mercado de IC presenta economías de escala y economías de red;⁴⁷² (iv) existen barreras a la entrada al mercado de la recopilación y procesamiento de IC de las PM;⁴⁷³ y (v) los intereses de DUN se encuentran alineados con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito.

B.5. Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características.

DUN manifestó:⁴⁷⁴

El mercado de IC tiene elementos que hacen más probable que presente altas concentraciones y pocos oferentes; específicamente, economías de escala y economías de red, tal como lo reconoce la misma AI.

⁴⁷⁰ En relación con el análisis relativo a las participaciones de mercado de CC y DUN, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "*El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto*" y "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución.

⁴⁷¹ En relación con el análisis relativo a las participaciones de mercado de CC y DUN, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "*El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto*" y "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución.

⁴⁷² En relación con el análisis relativo a la existencia de economías de escala y economías de red, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "*Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características*" y "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución.

⁴⁷³ En relación con el análisis relativo a la existencia de barreras a la entrada, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "*Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada*" y "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución.

⁴⁷⁴ Páginas 57 a 59 de la CONTESTACIÓN DUN.

Asimismo, a nivel global estos mercados también presentan economías de escala, las cuales usualmente tienen pocos competidores debido a los altos costos necesarios y a que no es posible la división de estos costos entre muchos competidores. Ello es reconocido por la International Finance Corporation en la guía *Credit Reporting Knowledge Guide*.

Ello también fue reconocido por TU SRL tal y como lo destaca la AI en el DPR, quien señaló que *“al consultar a TU SRL sobre el número óptimo de SIC, dicha empresa señaló que dos es el número óptimo de agentes en el mercado mexicano.”*

Adicionalmente, como se señaló por TUM en el escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil quince que obra en el EXPEDIENTE, en sectores con una alta proporción de costos fijos se justifica que en el margen se atraiga una mayor cantidad demandada del producto. Ello permite aprovechar economías de escala las cuales se trasladan a los USUARIOS a través de menores precios por adquirir el oferente un volumen mayor. Como se acreditó en dicho escrito, las SIC en todo el mundo pertenecen a este tipo de industrias, lo cual puede ser apreciando el elevado componente de servidores y nómina dedicada en su estructura de costos y que es fijo, existiendo por tanto economías de escala.

La competencia en el mercado de IC es más común en países cuyo sistema financiero descansa en mercados de mayor tamaño, o que les permite tener a más de una SIC sin que la pérdida de las economías de escala sea significativa.

En EUA, por ejemplo, existen tres SIC operando simultáneamente y compitiendo con base en la diferenciación de sus productos o servicios. Sin embargo, este entorno se ha dado después de veinte a treinta años de consolidación en la industria de servicios financieros.⁴⁷⁵

Lo anterior es muestra de que los mercados de IC generalmente tienen pocos competidores, sin que esto por sí mismo sea indicio de ausencia de debilidad en las condiciones de competencia, sino que resulta más bien una característica intrínseca de este mercado.

El DPR señala que: *“los efectos de red que caracterizan a este mercado también favorece [sic] que el resto de los [USUARIOS] se afilian a la SIC que cuente con la [BD] de [PM] de mayor dimensión [...]”*.⁴⁷⁶

Resulta incorrecto lo señalado por la AI, dado que la afiliación de un USUARIO a una SIC no genera costos para USUARIO alguno, por lo que es falso que existan dichos incentivos. Más aún, para el RC, la LRSIC obliga a las SIC a incorporar la información de todas las SIC existentes, con una tarifa máxima y preestablecida (o

⁴⁷⁵ DUN refiere también los casos de Sudáfrica (con tres SIC operando), Reino Unido (con tres SIC operando), Italia, India y Chile (estos últimos con cuatro SIC operando) como ejemplos de países competitivos en el mercado de información crediticia. Asimismo, DUN señala que la mayoría de los países europeos tienen sólo una SIC operando (remite al documento denominado *“Credit Report Knowledge Guide”*).

⁴⁷⁶ DUN señaló la página 155 del DPR.

a los USUARIOS a consultarlas en forma separada), por lo que los efectos de red se conservan, pues funciona como una única red.

Estos dos elementos (economías de escala y efectos de red) son inherentes al mercado de IC y deben ser considerados al realizar el análisis de PS. Al respecto, el DPR señala que: “[...] un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado, como la presencia de economías de escala [...] o barreras a la entrada [...]”.⁴⁷⁷

Por lo tanto, los argumentos posteriores con relación a nuestra alta participación de mercado y las consecuencias de los efectos de red carecen de justificación económica, pues por un lado un mercado de esta naturaleza tenderá a contar con altos niveles de concentración, pues de otra manera no es posible aprovechar las economías de escala inherentes, lo cual deriva en la transmisión de ineficiencias al consumidor; y, por otro lado, las circunstancias regulatorias inhiben la tendencia hacia la concentración, respecto del número de afiliados.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁴⁷⁸

La AI observa que DUN reconoce la existencia de barreras inherentes al mercado de IC como son las economías de escala y las economías de red. En el DPR se señala que “[...] las economías de escala favorecen la expansión constante de la producción para una SIC y, en consecuencia, la existencia de pocos oferentes; mientras que las economías de red favorecen la afiliación de USUARIOS, preferentemente, a la SIC que cuente con la [BD] de mayor magnitud”.⁴⁷⁹

En este sentido, es importante señalar que la probabilidad de observar los efectos anticompetitivos depende de las características estructurales del mercado, entre las que se encuentra la integración vertical, ello como se reconoce en el DICTAMEN RG:

“[...] los efectos pueden ser anticompetitivos, si, como resultado de la integración de la producción del insumo y el bien o servicio que lo utiliza, la empresa integrada verticalmente adquiere poder para modificar el precio o el abasto en el mercado del bien o servicio 'aguas abajo', o en el mercado del insumo 'aguas arriba'. La probabilidad de que se observen tales efectos anticompetitivos depende de las características estructurales (por ejemplo, número de oferentes y demandantes, grado de concentración de la oferta o la demanda, posibilidad de entrada para nuevos productores) y del comportamiento de los demás agentes económicos en dichos mercados [Énfasis añadido]”.⁴⁸⁰

En virtud de lo anterior, como lo reconoce DUN, las economías de escala y de red, las pocas SIC oferentes y el elevado grado de concentración son características estructurales

⁴⁷⁷ DUN señaló la página 281 del DPR.

⁴⁷⁸ Páginas 44 a 47 de la VISTA DUN.

⁴⁷⁹ DUN señaló la página 105 del DPR.

⁴⁸⁰ DUN señaló la página 20 del DICTAMEN RG.

que resultan barreras de entrada inherentes al mercado de IC y, por lo tanto, la probabilidad de observar los efectos anticompetitivos de la conducta de DUN, consistente a rehusarse a proporcionar a CC la información correspondiente a la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, es mayor.

En el DPR se señala que la existencia de los efectos de red y la integración vertical en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM genera que los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión.⁴⁸¹

En el DICTAMEN RG, así como en las manifestaciones y pruebas al DPR de TUM, MAGR y SEPZ se reconoce la existencia de efectos de red que incentiva a los USUARIOS a consultar la SIC con la BD de mayor dimensión. Al respecto, el DICTAMEN RG señala que:

*“Los efectos de red significan que los usuarios, en su propósito de allegarse la mejor y más completa información crediticia sobre los clientes, consideran conveniente allegarse la información de la SIC que tenga mayor información en su [BD] (mayor número de expedientes sobre acreditados individuales, por ejemplo); como consecuencia, conforme cada usuario aporta entonces su respectiva [BD] a la SIC que le presenta tal conveniencia, aumenta a su vez el atractivo para otros usuarios de hacer lo mismo [Énfasis añadido]”.*⁴⁸²

*“También es ampliamente reconocido que la prestación de servicios de información crediticia exhibe efectos de red, consistentes en que los [USUARIOS] perciben más conveniente consultar bases de datos más grandes [Énfasis añadido]”.*⁴⁸³

Por su parte, TUM, MAGR y SEPZ reconocen la existencia de efectos red, sin embargo, señalan que ello no incentiva a que los USUARIOS se afilien a la SIC con la BD de mayor dimensión, al respecto TUM señala que, *“la regulación aplicable en el mercado de IC ha fortalecido los efectos de red, lo cual incentiva a que los [USUARIOS] se afilien sólo a una SIC, más no necesariamente que se afilien a la más grande dado que las SIC deben estar en constante comunicación entre ellas y tienen precios y tarifas reguladas. [...] la regulación permite que el mercado opere como una sola red, optimizando sus economías [Énfasis añadido]”.*⁴⁸⁴

No obstante, el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD señala que para adquirir productos de IC los USUARIOS deberán proporcionar sus BD, lo cual implica la afiliación de los USUARIOS a la SIC que consulten.⁴⁸⁵ En consecuencia, es necesario que los USUARIOS se afilien a la SIC que consulten y, por lo tanto, los efectos de red incentivan a que los USUARIOS se afilien a aquella con la BD de mayor tamaño.

⁴⁸¹ DUN señaló la página 279 del DPR.

⁴⁸² DUN señaló la página 8 del DICTAMEN RG.

⁴⁸³ DUN señaló la página 28 del DICTAMEN RG.

⁴⁸⁴ DUN señaló las páginas 101 y 102 de las CONTESTACIÓN DUN.

⁴⁸⁵ DUN señaló la página 12 del DPR.

Además, si bien no existe un cobro por la afiliación a las SIC sí existen costos que asumen los USUARIOS afiliados al presentar consultas que requieren intercambio de información entre SIC con motivo de un RC. El costo que asumen los USUARIOS afiliados son las tarifas por el intercambio de información puntual de un expediente que hubiera dado un HIT,⁴⁸⁶ el cual se transfiere al precio final del RC de PM; dicho costo por el intercambio de información puntual es de [REDACTED] B [REDACTED] y representa "el [REDACTED] B [REDACTED] del precio base del RC en el que no haya habido consultas entre SIC o habiéndola no hubo HIT".⁴⁸⁷

Por lo tanto, asumir esos costos sí genera incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC con mayores registros en sus BD porque les permite minimizar la posibilidad de incurrir en el costo de un HIT. Además, como lo señala DUN, la alternativa para el USUARIO que quiere evitar el costo del HIT es consultar a las dos SIC para obtener el RC, lo que supone que se afilie a ambas, proporcione su información a ambas y pague dos RC. El pago que tiene que realizar el USUARIO por cada RC no es compatible con lo que DUN señala respecto de que se conservan los efectos de red. En todo caso, el argumento de DUN es confuso porque no explica a qué se refiere con que se preservan los efectos de red porque las SIC funcionan como una sola red.

Si bien la LRSIC obliga a las SIC a incorporar en el RC integrado la información de todas las SIC existentes en el mercado, con una tarifa máxima y preestablecida, ésta podría mitigar los efectos de red si la tarifa de intercambio de información no implicara un costo para el USUARIO.

Adicionalmente, DUN no prueba que "*las circunstancias regulatorias inhiben la tendencia hacia concentración, respecto del número de afiliados*", pues simplemente se limita a mencionarlo sin especificar a qué circunstancias regulatorias se refiere.⁴⁸⁸ En todo caso, el nivel de concentración que se analiza en el DPR no se refiere a la participación de los afiliados en una SIC sino a la participación de cada SIC en el MR DE PM. En este sentido no existe regulación que inhiba la alta concentración en este mercado o en el mercado final de comercialización de productos de IC.

En conclusión, DUN reconoce la existencia de economías de escala y economías de red, así como la presencia de altas concentraciones en el mercado de IC. Por otra parte, DUN no desvirtúa la existencia de los efectos de red que genera que los USUARIOS tengan incentivos a afiliarse a la SIC con mayores registros en sus BD.

Los argumentos de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Son inoperantes, porque no combaten el DPR, los argumentos a través de los cuales DUN señala que: (i) el mercado de IC presenta economías de escala y economías de red, así como

⁴⁸⁶ DUN señaló la página 293 del DPR.

⁴⁸⁷ DUN señaló la página 316 del DPR.

⁴⁸⁸ La AI señaló la página 59 de la CONTESTACIÓN DUN

alta concentración y pocos oferentes; (ii) existe evidencia dentro del expediente tendiente a demostrar que los mercados de IC presentan economías de escala y pocos competidores; y (iii) es importante atraer una mayor cantidad demandada del producto dada la existencia de altos costos fijos e importantes economías de escala.

Los señalamientos anteriores confirman lo señalado en el DPR en cuanto a la existencia de economías de escala, la existencia de economías de red y la elevada concentración en el MR DE PM, así como lo señalado en el sentido de que la escala de producción requiere superar un nivel significativo de producción para que los costos de producción se encuentren por debajo del ingreso promedio generado por cada reporte.

Asimismo, los señalamientos respecto de las características de los mercados de IC en otras partes del mundo constituyen manifestaciones que no combaten el DPR y fundamentalmente tienden a corroborar lo señalado por la AI respecto de las características estructurales del mercado de IC en cualquier parte del mundo, particularmente en cuanto a la existencia de economías de escala, alta concentración y la participación de pocos oferentes.

Adicionalmente, en el DPR no se afirma que la existencia de pocos competidores "*por sí mismo sea indicio de ausencia de debilidad [sic] en las condiciones de competencia*", por lo que el señalamiento que realiza DUN en ese sentido tampoco combate el DPR. Al respecto, el problema de competencia identificado en el DPR, por lo que hace a la imputación en contra de DUN por negativa de trato, es la presunta realización de una PMR y no la falta de condiciones de competencia efectiva con motivo de características estructurales del mercado de IC.

Por otra parte, DUN señala que es incorrecto lo señalado por la AI en el sentido de que los efectos de red favorecen que los usuarios se afilien a la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión. DUN también manifiesta que debido a que la afiliación de un USUARIO a una SIC no genera costos para USUARIO alguno, es falso que existan dichos incentivos y señala que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar información de todas las SIC existentes, por lo que los efectos de red se conservan y el mercado funciona como una única red.

Al respecto, el hecho de que la afiliación de los USUARIOS a una SIC no genere un costo para los USUARIOS, así como el hecho de que la LRSIC obligue a las SIC a incorporar información de todas las SIC existentes, no desvirtúan lo señalado en el DPR respecto al incentivo que tienen los USUARIOS a afiliarse a la SIC que cuente con la BD de PM más grande, de conformidad con los siguientes razonamientos:

- (i) DUN señala que tanto las economías de escala como los efectos de red son inherentes al mercado de IC. Como lo señala el DPR, se presentan economías de red si para cada USUARIO del bien o servicio, el valor de utilizarlo crece a medida en que aumenta el número de otros USUARIOS que utilizan también dicho bien o servicio. En este sentido, el reconocimiento por DUN de la existencia de economías de red en el mercado de IC también implica reconocer que la red más grande tiene mayor valor para los USUARIOS.

- (ii) A cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores. Ello implica que, en promedio, un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de la otra SIC.⁴⁸⁹
- (iii) El hecho de que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar información de todas las SIC existentes no implica necesariamente que sea menos costoso para los USUARIOS acudir a dos o más proveedores de RC. La tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. En promedio, existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan más en promedio por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.

Incluso DUN señaló que CC *“resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI”*.⁴⁹⁰ En este sentido, el mismo DUN reconoce que el tamaño de la BD de PM tiene un impacto en la probabilidad de obtener un HIT al realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI. En consecuencia, las mismas manifestaciones de DUN tienden a demostrar que los los USUARIOS de CC resienten más el costo que representa pagar la tarifa de intercambio y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.

En consecuencia, es incorrecto lo señalado por DUN en el sentido de que las circunstancias regulatorias inhiben la tendencia hacia la concentración respecto del número de afiliados.

- (iv) El que no exista un costo de afiliación a las SIC no quiere decir que los USUARIOS que optaran por contar con dos proveedores no tengan que asumir costos adicionales. Entre dichos costos se encuentran los relacionados con la misma

⁴⁸⁹ Como se indica en el apartado *“Valoración y alcance de las pruebas”* de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, de acuerdo con los datos presentados por DUN, en el periodo comprendido de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince se realizaron [REDACTED] consultas respecto de IC de PM (incluyendo PFAE) entre DUN y CC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, de las cuales: (i) [REDACTED] consultas fueron realizadas por parte de DUN a CC, resultando [REDACTED] veces en HIT, es decir, el [REDACTED] de las ocasiones, las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un HIT; y (ii) [REDACTED] consultas fueron realizadas por parte de CC a DUN, resultando [REDACTED] veces en HIT, es decir, un [REDACTED] de las ocasiones, las consultas realizadas por CC a DUN resultaron en un HIT.

⁴⁹⁰ Página 122 de la CONTESTACIÓN DUN.

afiliación⁴⁹¹ o, incluso, con la proveeduría o el abastecimiento de la IC vía electrónica a través de formatos y protocolos distintos, los cuales deben llenar los USUARIOS.⁴⁹²

Asimismo, como se indica en el DPR, si bien la LRSIC no impide que los USUARIOS firmen un acuerdo de afiliación con más de una SIC, esto no es lo habitual. El porcentaje de USUARIOS que adquirieron productos de ambas SIC (DUN y CC) es muy bajo, B **

- (v) El que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con información completa,⁴⁹³ lo vuelve menos atractivo para los USUARIOS, pues los USUARIOS valoran de manera particular el contar con toda la información disponible para realizar el análisis respecto del comportamiento crediticio de los CLIENTES.

En este sentido, el que el artículo 36 Bis de la LRSIC obligue a las SIC a incorporar información de todas las SIC existentes el emitir RC no implica que debido a la mera existencia de dicha disposición los USUARIOS dejen de tener incentivos para afiliarse a la SIC que cuenta con la BD de PM de mayor dimensión y que, al menos durante el periodo en que se llevó a cabo la negativa de proporcionar el SEGMENTO CO, únicamente DUN ofreció RCI con información completa.

Adicionalmente, DUN señala que tanto las economías de escala como los efectos de red son inherentes al mercado de IC y que la AI debió tener en cuenta lo anterior al realizar el análisis de PS.

Al respecto, por una parte, efectivamente las economías de escala y los efectos de red caracterizan al mercado de IC: como ya se explicó, dichos señalamientos no combaten el DPR. Por otro lado, la AI sí tomó en cuenta tanto las economías de escala como los efectos de red al realizar el análisis de PS contenido en el DPR, como se desprende de los señalamientos incluidos dentro del apartado "XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado" del DPR y, en particular, del análisis incluido en los sub apartados "A. Fracción I del artículo 59 de la LFCE" y "B.6 Economías de red características del mercado relevante". Debe tenerse en cuenta que en el

⁴⁹¹ En el DPR se indica que, para afiliarse, los USUARIOS deberán cumplir con una serie de requisitos. En particular, se indica

Información visible a fojas 1200, 1201 y 5737 del EXPEDIENTE.

⁴⁹² Como se indica en el DPR, las condiciones, protocolos y formatos a los que deben apegarse los USUARIOS para la entrega de la información se establecen en los manuales que las SIC publican en sus sitios de Internet, de acuerdo con lo establecido en la disposición Decimoprimer de la Circular 27/2008 de BANXICO, la cual contiene las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las SIC y sus USUARIOS. Asimismo, como lo señala también el DPR, los mecanismos para la entrega de información se encuentran definidos en el Contrato Marco de cada una de las SIC. Por los que respecta a DUN y CC la entrega de información se realiza

⁴⁹³ Véase al respecto el análisis incluido en los apartados "Conducta", "Objeto y Efecto" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.



40771

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

apartado "IV. Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR también se incluyen diversos señalamientos respecto de las características del mercado que guardan relación con el análisis de las economías de escala y los efectos de red que la AI tomó en cuenta al realizar el análisis de PS.

En el DPR se indicó lo siguiente:

"[...] La forma directa en que las SIC se abastecen de información es a través de la recopilación de los registros crediticios provenientes de los USUARIOS afiliados. Es muy probable que, entre mayor sea la cantidad de USUARIOS afiliados, será mayor la dimensión o tamaño de la [BD] DE PM de una SIC.

La integración vertical existente en la industria entre los bancos y [DUN] han favorecido que esta última cuente con el mayor número de USUARIOS que le suministran de registros y, a su vez, que consumen los productos finales. Aunado a ello, los efectos de red que caracterizan a este mercado⁴⁹⁴ también favorece que el resto de los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la [BD] DE PM de mayor dimensión.

Por lo anterior, la mayor parte de la información crediticia de PM se encuentra en la [BD] de [DUN] [...].

[...]

Los USUARIOS se afilian a una SIC con el objetivo último de adquirir productos de información crediticia, para lo cual deben proporcionar su [BD]. Por tanto, la participación de mercado respecto de los USUARIOS afiliados y que adquirieron algún producto de información crediticia puede considerarse indicativo de la dimensión de la [BD] DE PM y, por tanto, del poder de mercado en la recopilación y procesamiento de información crediticia de PM.

[...]

En resumen, las participaciones de mercado, para cada una de las variables relacionadas con la magnitud de la información crediticia con la que cuentan las SIC, muestran que [DUN] ha mantenido desde el dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas. Siendo éstas significativamente superiores a las de su competidor, [CC], superando siempre el [REDACTED] durante estos años.

Cabe mencionar que, un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado, como la presencia de economías de escala (presentes en la industria de información crediticia) o barreras a la entrada (éstas últimas analizadas en la siguiente sección).

[...]

De acuerdo con lo formulado anteriormente, con base en el artículo 7 de las DISPOSICIONES, los elementos considerados como barreras a la entrada para el mercado relevante de la recopilación y procesamiento de información crediticia fueron las restricciones normativas para ingresar al mercado: se requiere de los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para poder operar (lo cual está indicado en el artículo 6 de la LRSIC). Cumplir con todo lo que establece la ley para recibir la autorización de la CNBV requiere de por lo menos [REDACTED] de acuerdo con lo

⁴⁹⁴ Previamente descritas en el MERCADO INVESTIGADO y en la Determinación de PS de la conducta Discriminación de Precios.

manifestado por [DUN] y por [CC].⁴⁹⁵ Además de las barreras relacionadas con los vínculos accionarios de las SIC; así como la presencia de economías de red en el mercado relevante que dificultan alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentable. **

496

Debe tenerse en cuenta que la presencia de economías de escala y efectos de red, además de la existencia de diversas barreras a la entrada, se consideraron en el DPR para explicar cómo es que dichas características estructurales del mercado de IC, si se consideran en conjunto con otros elementos propios de la participación de DUN en el mercado, incrementan las posibilidades de que un agente económico cuente con la capacidad para fijar precios o restringir el abasto.

Asimismo, como se explicó previamente, DUN no demuestra que las circunstancias regulatorias inhiban la tendencia a la concentración respecto del número de afiliados, ya que los efectos de red favorecen que los usuarios se afilien a la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión.

En virtud de los razonamientos expuestos, resulta **infundado** el argumento planteado por DUN según el cual los argumentos relativos a la participación de mercado y las consecuencias de los efectos de red referidos en el DPR carecen de justificación económica debido a que la AI supuestamente omitió tener en cuenta, al realizar el análisis de PS, que tanto las economías de escala como los efectos de red son inherentes al mercado de IC y que las circunstancias regulatorias inhiben la concentración.

B.6. Consideraciones en torno a la supuesta capacidad de DUN para restringir el abasto.

B.6.1. La AI es omisa en motivar su conclusión respecto que DUN cuenta con capacidad de restringir el abasto.

DUN manifestó:⁴⁹⁷

De la lectura del capítulo XII del DPR no se desprende que la AI hubiese motivado por qué cuente con la capacidad de restringir el abasto. La AI señala que una alta participación de mercado no es concluyente para determinar que un agente puede restringir el abasto; no obstante, sí constituye un elemento que lo hace más probable y más cuando se dan otros factores como son economías de redes y barreras a la entrada.

Ahora bien, sin realizar un análisis o incluir nexo causal alguno, la AI señala que la participación de DUN en el mercado no tiene comparación y por tanto que cuenta con la capacidad para restringir el abasto. De ello se desprende la falta de análisis que soporte la conclusión a la que arriba. Si como la propia AI reconoce,

⁴⁹⁵ Información que obra en fojas 5801 y 1218 del EXPEDIENTE.

⁴⁹⁶ Páginas 279 a 281 y 286 a 287 del DPR.

⁴⁹⁷ Páginas 59 a 61 de la CONTESTACIÓN DUN.

10/195

una alta participación de mercado no necesariamente implica que un agente cuente con la capacidad para restringir el abasto, entonces para concluir que un agente cuenta con dicha capacidad, se deben de explicar cuáles son las circunstancias que permiten arribar a dicha conclusión.

No es óbice el hecho que dentro del capítulo XII refiera brevemente a las economías de redes presentes en la industria o ciertas barreras de entrada. Lo cierto es que en momento alguno la AI señala cómo dichos factores o algún otro (aunados a una alta participación de mercado) le permitieron concluir que DUN contaba con la capacidad para restringir el abasto. Por tanto, el análisis de PS carece de exhaustividad y deviene ilegal.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁴⁹⁸

En el DPR se motivó por qué DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto en los siguientes términos: “[...] *un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado, como la presencia de economías de escala (presentes en la industria de [IC]) o barreras a la entrada [...]*”.⁴⁹⁹

De este enunciado se observa que la determinación de la capacidad de fijar precios o restringir el abasto en el DPR no se basó exclusivamente en la elevada participación de mercado de DUN sino que consideró la presencia de economías de escala y barreras a la entrada que se desarrollaron en la sección “XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado”. DUN ignora el contenido de estas secciones al señalar que hubo una completa falta de análisis que soporte la conclusión de que DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto.

Así, a lo largo de las páginas 281 a 293 del DPR la AI desarrolla el análisis de PS de mercado, del cual es posible concluir que DUN cuenta con la capacidad de fijar precios o restringir el abasto. En particular, en las páginas 281 a 287 se analizan las barreras a la entrada, respecto de las cuales se concluye: “[...] *los elementos considerados como barreras a la entrada para el [MR] de la recopilación y procesamiento de [IC] fueron las restricciones normativas para ingresar al mercado: se requiere de los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para poder operar (lo cual está indicado en el artículo 6 de la LRSIC). Cumplir con todo lo que establece la ley para recibir la autorización de la CNBV requiere de por lo menos B de acuerdo con lo manifestado por [DUN] y por [CC]. Además de las barreras relacionadas con los vínculos accionarios de las SIC; así como la presencia de economías de red en el [MR DE PM] que dificultan alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentable. Al respecto, conforme al análisis llevado a cabo por la [AI],*

⁴⁹⁸ Páginas 47 a 50 de la VISTA DUN.

⁴⁹⁹ La AI señaló la página 281 del DPR.

500

B

Eliminado: un renglón

Asimismo, el DPR estableció, conforme a lo dispuesto en las fracciones III a VI del artículo 59 de la LFCE otros elementos conforme a los cuales concluye sobre el PS de DUN. Respecto de la existencia y poder de sus competidores, el DPR señala: *"La alta participación de mercado en la afiliación de [USUARIOS], la casi nula existencia de [USUARIOS] afiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la [BD de DUN] indican que [CC] no ha representado competencia en el segmento de PM".*⁵⁰¹

En cuanto a las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos. En el DPR se señala que:

"[...] el acceso total a la [IC] disponible de los otorgantes de crédito, puede constituirse como la barrera a la entrada más importante [...] para mantenerse en la industria, una SIC requiere contar con suficientes USUARIOS que le provean de [IC], además de tener acceso a la [BD] de la otra SIC. Esto es, en términos económicos, un participante requiere de una masa crítica de USUARIOS afiliados que le proporcionen datos y que adquieran regularmente sus reportes y otros servicios de valor agregado, pues de lo contrario, la empresa entrante no podrá contar con los ingresos suficientes.

[...]

"[...] la primera alternativa es remota, considerando que la mayor parte de los USUARIOS ya se encuentran afiliados a [DUN], por lo cual podría pensarse que no existen incentivos para afiliarse también a [CC] [...].

*Respecto de la segunda alternativa, y como se explicó, previamente, en la descripción del MERCADO INVESTIGADO, en caso de que las SIC requieran información diferente a la provista por sus USUARIOS, éstas deberán consultar las [BD] del resto de las SIC para elaborar productos como el RC, ya sea de PF o PM. Considerando que [DUN] factura considerablemente más productos de [IC], sus requerimientos de realizar consultas a la [BD] de [CC] son mayores".*⁵⁰²

Por lo que concierne al comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, la AI concluyó que *"la alta participación de mercado que mantiene [DUN] no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que esta SIC provee. Como se puede observar, el número de productos de valor agregado generados por ambas SIC refleja un bajo desarrollo en este mercado".*⁵⁰³

Finalmente, respecto de lo previsto en el artículo 8 de las DR, señaló que DUN es la SIC mejor posicionada en el mercado de IC de PM y que los costos de recurrir a una

⁵⁰⁰ La AI señaló las páginas 286 y 287 del DPR.

⁵⁰¹ La AI señaló la página 287 del DPR.

⁵⁰² La AI señaló las páginas 288 y 289 del DPR.

⁵⁰³ La AI señaló la página 291 del DPR.

alternativa, como proveedor de IC, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.

Por lo tanto, es incorrecto el señalamiento de DUN con respecto a que el análisis de PS carece de exhaustividad y deviene ilegal.

No se omite mencionar que DUN restringió el abasto de IC a CC, por lo tanto, es claro que la manifestación de DUN respecto de que en el DPR hubo una falta de análisis que soporte que DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto es falsa.

Son **infundados**, por las siguientes consideraciones, los argumentos de DUN relativos a: (i) la falta de motivación respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto; y (ii) que el análisis de PS carece de exhaustividad y deviene ilegal.

Del apartado "XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado" del DPR se advierte que la AI sí señaló los elementos y razonamientos que tomó en consideración para llegar a la conclusión de que DUN cuenta con la capacidad para restringir el abasto; así como que tiene PS en el MR DE PM.

Si bien es cierto que la AI reconoce que una participación de mercado elevada no basta para considerar que un agente económico puede fijar los precios o el nivel de abasto, no es el único elemento que consideró en el DPR para concluir que DUN puede restringir el abasto.

Al respecto, en las páginas 276, 280, 281, 286, 287, 292 y 293 del DPR se señaló que:

"Del análisis de la información provista por los agentes económicos, se observa que [DUN] contó, durante el periodo que comprende desde el dos mil doce hasta el dos mil quince, con una elevada participación en el mercado relevante y con la capacidad de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de información crediticia, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. A continuación, se presenta el análisis que llevó a concluir lo anterior.

[...]

En resumen, las participaciones de mercado, para cada una de las variables relacionadas con la magnitud de la información crediticia con la que cuentan las SIC, muestran que [DUN] ha mantenido desde el dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas. Siendo éstas significativamente superiores a las de su competidor, [CC] [...].

Cabe mencionar que, un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado, como la presencia de economías de escala (presentes en la industria de información crediticia) o barreras a la entrada (éstas últimas analizadas en la siguiente sección).

[...]

Finalmente, [...] los elementos considerados como barreras a la entrada para el mercado relevante de la recopilación y procesamiento de información crediticia fueron las restricciones normativas para ingresar al mercado: se requiere de los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para poder operar (lo cual está indicado en el artículo 6 de la LRSIC). Cumplir con todo lo que establece la ley para recibir la autorización de la CNBV requiere de por lo menos [REDACTED] de acuerdo con lo manifestado por DUN & BRADSTREET y por [CC].

Además de las barreras relacionadas con los vínculos accionarios de las SIC; así como la presencia de economías de red en el mercado relevante que dificultan alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentable. [REDACTED] [REDACTED]

[...]

[...] Asimismo, otra barrera relevante es la posibilidad de alcanzar una cuota mínima en la comercialización de los RC de PM, la cual le permita al entrante cubrir sus costos generados por la producción de estos reportes. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] El acceso a la totalidad de la información crediticia disponible, también puede considerarse como una barrera significativa a la entrada, ello exacerbado por los vínculos accionarios de las SIC; así como la presencia de economías de red en el mercado relevante que dificultan alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentable.

[...] [DUN] cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de información crediticia (en la forma de registros) a [CC]. Como se expuso previamente, la dimensión de la [BD] de PM de ambas SIC no tiene comparación. [DUN] ha contado con el [REDACTED] de los Usuarios afiliados, en promedio, desde el dos mil doce. El número de expedientes a su disposición es cercano al [REDACTED], considerando la totalidad de los Clientes que cuentan con historial crediticio. Por tanto, la [AI] concluye que [DUN] ha contado con la capacidad de limitar el abasto de información crediticia en el mercado relevante. [...] [énfasis añadido].⁵⁰⁴

Así, la AI sí motivó por qué DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto de IC derivado de: (i) sus altas participaciones de mercado;⁵⁰⁵ (ii) la presencia de economías de escala y economías de red;⁵⁰⁶ y (iii) la existencia de barreras a la entrada al mercado de la recopilación y procesamiento de IC de las PM.⁵⁰⁷

Por lo que hace a las participaciones de mercado de DUN, el DPR señala que DUN mostró una participación de mercado notablemente mayor en comparación con CC. DUN tuvo en promedio el [REDACTED] B⁵⁰⁸ de la participación de mercado en términos del número de CLIENTES con HC en su BD de dos mil doce a marzo dos mil quince, y el [REDACTED] B de participación en términos del promedio de registros en el mismo

⁵⁰⁴ Folio 31177.

⁵⁰⁵ En relación con el análisis relativo a las participaciones de mercado de DUN, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵⁰⁶ En relación con el análisis relativo a la existencia de economías de escala y economías de red, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵⁰⁷ En relación con el análisis relativo a la existencia de barreras a la entrada, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵⁰⁸ Como se indicó anteriormente, en la tabla del DPR denominada "Tabla 63. Participación de mercado de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO respecto del número de CLIENTES con historial crediticio" se indica que dicho promedio asciende al [REDACTED] durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la información incluida en los folios 5802 (Anexo 8.6) y 6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE, es posible concluir que la participación de mercado promedio de DUN respecto al número de expedientes o CLIENTES con historial crediticio asciende a [REDACTED] B [REDACTED] durante el periodo señalado.

periodo.⁵⁰⁹ Asimismo, en el DPR se exponen los datos que permiten concluir que DUN cuenta con un número significativamente mayor de USUARIOS que adquirieron sus productos de PM, respecto de los USUARIOS que adquirieron productos de PM de CC (de modo que DUN cuenta con mayor número de USUARIOS que le proporcionaron su IC que CC).

Respecto de la presencia de economías de escala, la AI consideró en el DPR que *“La tercera característica del mercado de [IC] es la existencia de importantes economías de escala en la producción [...] La elaboración de productos de [IC] como los RC o productos de valor agregado genera altos costos fijos; así como, costos marginales cercanos a cero. [...] Las economías de escala favorecen la expansión constante de la producción para una SIC [...]”*.⁵¹⁰

Por último, por lo que hace a la identificación de barreras a la entrada en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 59 de la LFCE, en el DPR se determinaron las siguientes:

- a) El monto de la inversión requerida para establecer una SIC;
- b) La posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos generados, ya que incluso CC [REDACTED] respecto de su participación en la comercialización de los RC de PM;
- c) Las restricciones normativas (permisos y autorizaciones gubernamentales para operar como una SIC), ya que se requiere por lo menos [REDACTED] para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC;
- d) La presencia de economías de red, las cuales según el DPR: *“[...] favorece a la SIC que cuenta con la mayor [BD]. Las economías de red generan mayores beneficios a los USUARIOS afiliados a la SIC que cuente con mayor información crediticia, lo que se traduce en el comportamiento observado de los USUARIOS de optar por la SIC con más USUARIOS. Esto condiciona el acceso y constituye, en la práctica, una barrera a la entrada, pues cualquier empresa interesada en incorporarse a la industria deberá de acumular, aceleradamente información (para resultar rentable y acceder a la escala mínima eficiente antes descrita); lo cual implica afiliar suficientes USUARIOS, compartir y acceder a la información disponible en las bases de datos de las otras SIC”*.⁵¹¹
- e) Los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales usuarios, los cuales

⁵⁰⁹ Como se indicó previamente, en la tabla del DPR denominada *“Tabla 64. Participación de mercado de DUN & BRADSTREET y CIRCULO DE CRÉDITO respecto al número de registros”* se indica que dicho promedio asciende al [REDACTED] B durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la información incluida en los [REDACTED] y 6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE, es posible concluir que la participación de mercado promedio de DUN respecto al número de créditos registrados asciende a [REDACTED] durante el periodo señalado.

⁵¹⁰ Páginas 104 y 105 del DPR. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la misma DUN reconoce la existencia de economías de escala y que la explicación respecto del significado y el alcance de éstas se incluye no sólo dentro del apartado *“XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado”* del DPR, sino también dentro del apartado *“IV. Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia”* y, particularmente en el sub apartado del DPR denominado *“B.3. Características del mercado de información crediticia”*.

⁵¹¹ Página 286 del DPR.

desincentivan a estos últimos a utilizar los servicios de CC.⁵¹²

Cabe señalar que el análisis realizado por la AI en el DPR debe entenderse como un todo y sus afirmaciones no deben analizarse de forma aislada, puesto que es un acto administrativo que se integra por razonamientos y consideraciones que en su conjunto buscan acreditar presuntivamente la probable responsabilidad de los emplazados. De esta manera, no puede comprenderse en forma aislada, como lo pretende la emplazada al referirse a lo señalado en tan sólo uno de los párrafos del DPR, el estudio de los elementos que impone la LFCE para determinar la existencia de PS, ya que las consideraciones realizadas en el DPR se encuentran concatenadas entre sí. Al ser un todo el DPR, deben considerarse cada uno de los elementos que lo integran y en los que sustenta la AI sus conclusiones y los motivos en los que apoya su decisión.⁵¹³

De esta manera, en el DPR se concluyó que DUN puede restringir el abasto, toda vez que cuenta con participaciones de mercado muy elevadas respecto del tamaño de su BD, en un mercado con economías de escala, economías de red y barreras a la entrada (en particular: (i) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (ii) la dificultad para alcanzar una cuota mínima que permita a los competidores actuales o potenciales de DUN ser rentable; (iii) las restricciones normativas, (iv) la presencia de economías de red; y (v) los vínculos accionarios de las SIC con los USUARIOS que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito), por lo que es infundado que la AI no haya motivado la conclusión de que DUN

⁵¹² En el DPR se refieren diversos elementos tendientes a acreditar cómo es que los intereses de DUN se encuentran alineados con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito, sino también se explica que la presencia de economías de red y los vínculos accionarios de las SIC con los USUARIOS que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito constituyen una barrera a la entrada debido a que dificultan a otros competidores, actuales o potenciales alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentables. Respecto del análisis de los efectos de red y los vínculos accionarios entre DUN y sus accionistas se remite a los apartados "DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume", "Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características", "Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados.

⁵¹³ Al respecto, sirven por analogía las siguientes tesis: i) "**SENTENCIAS, RELACION INTIMA DE SUS ELEMENTOS.** Una sentencia no es sino una relación lógica de antecedentes dados, para llegar a una conclusión que resuelve la controversia sometida al juzgador; por lo mismo, la sentencia la constituyen tanto la conclusión lógica de sus antecedentes, como las proposiciones que fijan el sentido de tal relación, y no puede sostenerse que cuando se aclara la congruencia de los elementos del razonamiento que el Juez hace, para llegar a una conclusión, se viole la sustancia del fallo, sólo porque en razón de dicha congruencia, sea necesario aclarar el sentido de la proposición, pues no puede tenerse por sentencia una parte de la misma, como es la resolutive, sin la relación de los hechos que aparezcan en el proceso y los fundamentos legales de la resolución [énfasis añadido]". No. Registro: 353,345, Tesis aislada, Materia(s): Común Quinta Época, Tercera Sala, SJF, LXX Tesis: Página: 3764, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, última tesis relacionada con la jurisprudencia 269, página 466; y ii) "**SENTENCIAS, RELACION INTIMA DE SUS ELEMENTOS.** Los puntos resolutive de una sentencia son el resultado de las consideraciones jurídicas que los determinan y sirven para interpretarlos, de acuerdo con el principio de congruencia interna de las sentencias, de modo que no puede tenerse por sentencia una parte de la misma, como lo es la resolutive, sin la relación de hechos que aparezcan en el proceso y los fundamentos legales de la determinación [énfasis añadido]". No. Registro: 240,090, Tesis aislada, Materia(s): Común, Séptima Época, Tercera Sala, SJF, 199-204 Cuarta Parte, Tesis: Página: 44, Genealogía: Informe 1985, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 64, página 47

tiene la capacidad de restringir el abasto, y en consecuencia, que el análisis del PS no haya sido exhaustivo.

Lo anterior, con independencia de que, en el presente caso, la AI no sólo demostró la capacidad con la que cuenta DUN para restringir el abasto de IC, sino que incluso acreditó que DUN restringió el abasto mediante la negativa de trato imputada, como se señala en los apartados "C. Conducta", "D. Objeto y Efecto", "VI. Valoración y alcance de las pruebas" y "VI. Acreditación de las conductas" de la presente resolución.

B.6.2. De aplicar, *mutatis mutandi*, el criterio de la AI para concluir que TUM no cuenta con capacidad para restringir el abasto en el mercado de comercialización de RC de PF, se debió concluir que DUN tampoco cuenta con capacidad para restringir el abasto en el MR.

DUN manifestó:⁵¹⁴

Al analizar el PS de TUM en el mercado de comercialización de RC de PF, la AI determina que no cuenta con la capacidad de restringir el abasto en virtud de que, de conformidad con los artículos 26, 28 y 35 de la LRSIC, se encuentra obligado a proporcionar los productos de IC a cualquier USUARIO que cumpla con el ordenamiento.⁵¹⁵

Siguiendo el mismo criterio, *mutatis mutandi*, se debió arribar a la misma conclusión para DUN respecto a la provisión de IC a las SIC. Como se desprende del artículo 36 de la LRSIC, las SIC tienen la obligación de intercambiar sus BPD. En ese sentido, DUN se encuentra impedido legalmente a restringir el abasto respecto su BPD.

Por tanto, suponiendo sin conceder que el MR fuera la provisión de IC a las SIC, no cuento con la capacidad de restringir el abasto de su BPD y por tanto con PS.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵¹⁶

DUN no explica cómo la conclusión respecto de un MR puede aplicar, *mutatis mutandi*, a uno distinto. En el DPR se distingue el MR de recopilación y procesamiento de IC en el cual DUN cuenta con PS, del MR de comercialización de RC de PF en el cual TUM tiene PS. En ese sentido, al ser MR distintos, no resultan comparables.

⁵¹⁴ Página 61 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵¹⁵ DUN remite a lo señalado en la página 165 del DPR, donde la AI establece lo siguiente: "Adicionalmente, respecto de la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, TUM está obligada, en términos de la LRSIC, así como cualquier otra SIC que opere en el mercado, a proporcionar los productos de IC a cualquier USUARIO que cumpla con lo establecido por este ordenamiento. Así el artículo 26 de la LRSIC prevé que el único motivo por el cual se puede negar el servicio es: [DUN transcribe porción del artículo]. Asimismo, el artículo 28 del mencionado ordenamiento jurídico, expresa que la SIC se lo podrá proporcionar información cuando: [DUN transcribe porción del artículo]. En este sentido, el mismo ordenamiento tampoco limita el número de consultas realizadas por el USUARIO. El artículo 35 de la LRSIC señala que: [DUN transcribe porción del artículo]. Por tanto, es posible señalar que TUM no puede restringir el abasto de productos de IC, y en particular de RC de PF, en tanto el USUARIO cumpla con las formalidades establecidas en la LRSIC."

⁵¹⁶ Páginas 50 y 51 de la VISTA DUN.

En la sección "*XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato*" del DPR, la AI demuestra que, a pesar de que las SIC "tienen la obligación de intercambiar sus BPD", DUN restringió el abasto de IC a CC al realizar la "*negativa de intercambiar y, por tanto, de proporcionar su BPD de PM, así como el SEGMENTO CO en los RC de PM en favor de [CC], quien en su momento los solicitó*". En cambio, en el caso de TUM, en el DPR se señaló que este comparte su BPD de PF con CC.

Asimismo, que conforme a la LRSIC las SIC tengan la obligación de compartir la BPD no implica que *de facto* lo hagan, tal como se demuestra en el DPR en el caso de DUN.

Por lo anterior, es falaz la aseveración de DUN con respecto a que aplica el principio *mutatis mutandi* y que, por lo tanto, DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto de su BPD ni con PS.

En primer lugar, el argumento de DUN relativo a que suponiendo sin conceder que el MR fuera la provisión de IC no cuenta con la capacidad de restringir el abasto y, en consecuencia, con PS es inoperante ya que **no combate** la imputación presuntiva contenida en el DPR. Lo anterior, debido a que como se señaló anteriormente, en el DPR no se definió el MR DE PM como el de la provisión de IC y tampoco se indicó que DUN tuviera la capacidad de restringir el abasto en dicho supuesto mercado.

Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones:

DUN argumenta que de aplicarse *mutatis mutandi* el criterio utilizado por la AI para concluir que TUM no cuenta con capacidad de restringir el abasto, se debió arribar a la misma conclusión respecto de DUN.

En primer lugar, las manifestaciones que haya realizado la AI respecto de TUM no trascienden ni tienen efecto alguno en la imputación realizada a DUN, pues los análisis que realizó la AI en el DPR respecto de la probable acreditación de la responsabilidad de ambos agentes económicos son autónomos entre sí. Ello considerando que los mercados relevantes definidos y las conductas analizadas son distintas y conllevan imputaciones independientes.

En este sentido, como se analizó en el DPR, mientras para TUM el emplazamiento deriva de una probable discriminación de precios en el MR DE PF (MR de la comercialización de RC de PF, cuya dimensión geográfica es nacional), para DUN la imputación contenida en el DPR deriva de una probable negativa de trato en el MR DE PM (MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional).

Con independencia de lo anterior, se indica que es errónea la manifestación de la AI relativa a que TUM no puede restringir el abasto de productos de IC en virtud de lo señalado en la LRSIC.

Lo anterior, ya que el hecho de que existan disposiciones legales que obliguen a que se proporcionen determinados bienes o servicios, no implica que un agente económico no tenga la capacidad de restringir el abasto.

La posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de restringir el abasto no deriva de las disposiciones normativas que pueden regular el mercado en el que actúa, sino que es una consecuencia fáctica del poder con que cuenta dicho agente en el mercado en el que participa y la imposibilidad de sus competidores de contrarrestar su poder.

En el caso de DUN, a pesar de existir los supuestos normativos que lo obligan a compartir la información completa, incluyendo la BPD y el SEGMENTO CO, DUN decidió de manera unilateral no realizar dichos intercambios y restringir el abasto de IC. Asimismo, como se indicó en el apartado anterior, el DPR analizó diversos elementos para poder concluir que DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto, en particular: (i) sus altas participaciones de mercado;⁵¹⁷ (ii) la presencia de economías de escala y economías de red;⁵¹⁸ y (iii) la existencia de barreras a la entrada al mercado de la recopilación y procesamiento de IC de las PM.⁵¹⁹ DUN no desvirtúa el análisis que corresponde a cada uno de los elementos analizados en relación con su capacidad para restringir el abasto.

En este sentido, resulta **infundado** el argumento de DUN según el cual no cuenta con la capacidad de restringir el abasto en virtud de que, de conformidad con la LRSIC, se encuentra obligado a intercambiar sus BPD.

Finalmente, se advierte que el razonamiento de DUN es improcedente al señalar que al estar determinado que TUM no cuenta con la capacidad de restringir el abasto esta afirmación debiera ser extensiva para DUN, máxime cuando en el caso concreto, DUN no sólo cuenta con la capacidad de restringir el abasto, sino que de facto restringe el abasto. Los elementos que permiten concluir que DUN restringió el abasto al negarse a proporcionar o intercambiar su BPD con CC y al negarse a entregar o transferir, mediante el intercambio puntual, la totalidad de la información utilizada para elaborar productos de IC, se analizan a detalle dentro de los apartados "C. CONDUCTA" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, por lo que se remite al análisis contenido en dichos apartados para evitar repeticiones innecesarias.

B.6.3. La imposibilidad para fijar precios implica forzosamente la incapacidad de restringir el abasto.

DUN manifestó:⁵²⁰

⁵¹⁷ En relación con el análisis relativo a las participaciones de mercado de DUN, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵¹⁸ En relación con el análisis relativo a la existencia de economías de escala y economías de red, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵¹⁹ En relación con el análisis relativo a la existencia de barreras a la entrada, para evitar repeticiones innecesarias se remite a los apartados "Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

⁵²⁰ Páginas 61 y 62 de la CONTESTACIÓN DUN.

En las conclusiones del análisis de PS la AI señala que: “[...] Respecto la capacidad de fijar precios, el costo que asumen los USUARIOS afiliados a [CC] por el intercambio de información está determinado mediante el [CONTRATO DUN Y CC], por lo que ambas SIC no cuentan con la capacidad de alterar los precios ya acordados”.⁵²¹

La capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad de restringir el abasto de un bien. Un agente puede restringir el abasto si y sólo si tiene la capacidad de fijar precios. En términos simples, lo anterior implica que cualquier agente que tenga la capacidad de fijar precios tiene la capacidad de restringir el abasto; y, al contrario, que cualquier agente que tenga la capacidad de restringir el abasto, tiene la capacidad de fijar precios.

Conforme a lo anterior, si un agente no tiene la capacidad de restringir el abasto, no tiene la capacidad de fijar precios; y conversamente, un agente que no tiene la capacidad de fijar precios no tiene la capacidad de restringir el abasto y, por ende, no tiene PS.

De lo anterior, se puede afirmar que la propia AI reconoce que no tengo capacidad de fijar precios ni restringir el abasto y, por lo tanto, no encuadra en los supuestos establecidos en la LFCE, para considerar que un agente económico tiene PS.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵²²

Conforme a la fracción I del artículo 59 de la LFCE, para determinar si uno o varios agentes económicos tienen PS en el MR se deberá considerar si pueden fijar precios o restringir el abasto en el MR. Ello significa que cada elemento puede presentarse por separado sin que la verificación de uno implique la verificación del otro.

En este sentido, DUN supone erróneamente que una empresa tiene la capacidad de fijar precios si y sólo si tiene la capacidad de restringir la oferta, lo cual está en contra de modelos económicos ampliamente conocidos y aceptados. Existen dos modelos de competencia oligopólica, los modelos de Cournot y de Bertrand, en los que se predice, bajo ciertas hipótesis, el resultado que se esperaría observar en mercados con las condiciones que plantean dichos modelos. Cada uno de estos modelos asume como variable de decisión los precios o las cantidades con las que cada empresa decidirá competir en el mercado, obteniendo como resultado la cantidad y los precios de equilibrio, respectivamente.

En otras palabras, existen mercados en los que las empresas compiten a través de los precios que ofrecen y esto determina la cantidad de productos o servicios vendidos, mientras que existen otros mercados en los que las empresas compiten por medio de la cantidad que ofrecen y esto determina el precio del mercado. Cabe precisar que, cuando

⁵²¹ DUN señaló la página 293 del DPR.

⁵²² Páginas 51 a 53 de la VISTA DUN.

un precio esté regulado, esto no implica que no pueda existir alguna empresa que ejerza poder de mercado.

La independencia entre la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, como elementos distintos para acreditar la existencia de PS, ha sido analizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el documento *"Problemas probatorios al acreditar dominancia (poder sustancial)"* se plasma que *"algunos han propuesto que mientras el poder de mercado puede ser ejercido ya sea reduciendo la producción de la propia empresa o excluyendo a sus competidores (i.e., reduciendo la producción de sus competidores), el tipo de poder de mercado que es la preocupación de las disposiciones de las conductas unilaterales debe hallarse sólo si un empresa puede incrementar el precio por arriba del nivel competitivo y excluir a sus competidores"*.⁵²³

Como se puede analizar del documento referido, el análisis de poder de mercado en materia de competencia está relacionado con conductas que excluyen a competidores, ya sea reduciendo la producción o incrementando el precio, contrario a lo señalado por DUN.

Por otra parte, DUN no contextualiza ni sostiene en elementos de la teoría económica y/o sobre modelos económicos la relación entre la determinación de precios y de cantidades que expone en su escrito, es decir, no señala en qué modelo económico se presenta la supuesta equivalencia entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de restringir el abasto.

Sin embargo, se señala de conformidad con múltiples artículos académicos, por ejemplo, *"Dynamic Duopoly: Prices and Quantities"*,⁵²⁴ *"el debate sobre la cuestión de la variable estratégica se ha centrado en si las empresas eligen cantidades o precios"*.⁵²⁵ En el mismo artículo referido se argumenta que *"cualquier teoría que confíe en cualquiera de las dos variables exclusivamente es imperfecta. Un modelo en un escenario de selección pura de cantidades es insatisfactorio porque el proceso de determinación de precios debe entonces ser designado a un subastador artificial. Los modelos en escenarios de selección pura de precios también son imperfectos en tanto que las capacidades de producción de las empresas están dadas exógenamente. Una visión razonable es modelar a las empresas como si eligieran tanto precios como cantidades."*⁵²⁶

Es posible sostener que un agente económico con PS de mercado tiene la capacidad de fijar precios o restringir cantidades. En contraste, en un mercado en competencia perfecta los agentes económicos son precio-aceptantes y determinan sus cantidades a partir de ese precio de mercado, por lo que no tienen la capacidad de restringir el abasto. En este sentido, únicamente en el modelo de competencia perfecta sería aplicable el razonamiento de DUN con respecto a que un competidor sin capacidad de establecer el

⁵²³ La AI señaló: "Traducción propia, *Evidentiary Issues in Proving Dominance* (2006) [pp. 19-20]".

⁵²⁴ La AI señaló: "Benoit, Jean-Pierre, and Vijay Krishna. 'Dynamic Duopoly: Prices and Quantities.' *The Review of Economic Studies* 54, no. 1 (1987): 23-35. <http://www.jstor.org/stable/2297443>".

⁵²⁵ La AI señaló: "Traducción propia".

⁵²⁶ La AI señaló: "Ídem".



precio porque está dado, no puede restringir el abasto. Sin embargo, un agente económico con PS de mercado puede tener la capacidad de establecer el precio o restringir la cantidad, dependiendo de los supuestos del modelo.

De esta manera, la imposibilidad para fijar precios no implica que exista incapacidad para restringir el abasto, como sugiere DUN sin sustento alguno.

Al respecto se señala a DUN que su argumento resulta inoperante por partir de premisas falsas.

DUN afirma que no cuenta con la capacidad de restringir el abasto, toda vez que la AI reconoció que no tiene la capacidad de fijar precios. No obstante, lo señalado por la AI se refiere a la posibilidad que tiene DUN de "alterar los precios" que ya se encuentran determinados en el CONTRATO DUN Y CC.

En este sentido, que DUN no cuente con la capacidad de "alterar los precios" por la existencia de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC, en el que los contratantes se obligaron a respetar los precios acordados, no excluye que DUN tenga la capacidad de fijar un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones de ese contrato por su poder de mercado.

Así, es erróneo que en el DPR se haya señalado que DUN no tiene la capacidad de fijar precios.

Con independencia de lo anterior, DUN también parte de la premisa falsa relativa a que la capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad de restringir el abasto de un bien y que por lo tanto DUN no encuadra en los supuestos de la LFCE para considerar que tiene PS.

En primer lugar, el artículo 59 fracción I, de la LFCE, señala como dos variables independientes la capacidad de restringir el abasto y de fijar precios, refiriendo que para determinar si un agente económico tiene PS debe considerarse entre otros: "*1. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. [...] (énfasis añadido)*"

En este sentido, para que un agente económico pueda restringir el abasto no es necesario que tenga, además, la capacidad de fijar precios, ya que la conjunción "o" refiere una alternativa entre fijar precios o restringir el abasto, sin que sea necesario la existencia de ambos supuestos para determinar la existencia de PS.

El contenido de la fracción I del artículo 59 de la LFCE no es un error ni una casualidad, como lo pretende DUN cuando afirma que "*la capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad de restringir el abasto de un bien*" y cuando señala que "*un agente tiene [capacidad] de restringir el abasto si y sólo si tiene la capacidad de fijar precios*". De ser cierto lo afirmado por DUN, la LFCE no debería decir que, para determinar si uno o varios agentes económicos tienen PS en un MR, la autoridad debe analizar, entre otras cuestiones, "*si pueden fijar precios o restringir el abasto*", sino que tendría que decir que la autoridad debe analizar "*si pueden fijar precios y restringir el abasto*".



A 2005

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

Por otra parte, DUN supone que necesariamente existe una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios, es decir, parte de un supuesto en el cual las cantidades y el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva, es decir, que ante una modificación en la cantidad o en el precio ofertado, los participantes en el mercado pueden llegar a un nuevo equilibrio entre precios y cantidades. Al respecto, DUN señala que un agente económico que no tiene la capacidad de restringir el abasto, necesariamente tampoco tiene la capacidad de fijar precios y, en el mismo sentido, que un agente económico que no tiene la capacidad de fijar precios no puede tener en ningún caso la capacidad de restringir el abasto.

Dicho razonamiento se basa en modelos genéricos de competencia económica, sin que exista una explicación por DUN respecto a cómo es que dichos modelos son aplicables al caso concreto, máxime cuando existen mercados en los cuales la interacción entre los participantes en el mercado no se da a través de una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios.

En cuanto a la capacidad para restringir el abasto en el mercado, en la regulación aplicable a los bienes relevantes (BPD e IC puntual), los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC establecen la obligatoriedad de proporcionar los mismos.

- En cuanto a la obligación de intercambiar la IC que corresponde a la BPD, el artículo 36 de la LRSIC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre las SIC, una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado.
- En cuanto a la obligación de intercambiar la IC de manera puntual, el artículo 36 Bis de la LRSIC señala que las SIC se encuentran obligadas a compartir información entre ellas y que los RC deben incluir toda la información disponible sobre un CLIENTE en el mercado.⁵²⁷
- La fracción V del artículo 62 de la LRSIC prevé la facultad de la CNBV de sancionar con multa de dos mil a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su información a otras SIC en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de dicha ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada.

Las normas referidas obligan al intercambio de IC entre las SIC e intentan prevenir contra las negativas o restricciones al abasto de la IC entre las SIC. Dichas reglas son resultado de reconocer que la propia estructura económica de la industria puede otorgar capacidad a los concesionarios para negar o restringir la oferta de IC a otras SIC. No obstante, dichas normas

⁵²⁷ El referido artículo 36 bis de la LRSIC establece como posibilidad que los USUARIOS soliciten RC, de forma separada, a cada una de las SIC. Sin embargo, en esta modalidad, los USUARIOS están obligados a solicitar a las demás SIC su reporte individual correspondiente, con el respectivo costo adicional de solicitar más de uno. En este sentido, si el USUARIO decide no solicitar la IC a más de una SIC, la SIC originadora se encuentra obligada a solicitar la información a la SIC complementaria y ésta se encuentra obligada a entregar la información puntual a la SIC originadora.

no necesariamente son suficientes para impedir que en el mundo fáctico un agente económico llegue a restringir el abasto de IC.⁵²⁸

En cuanto a la capacidad para fijar precios, el artículo 36 de la LRSIC establece que las SIC deben acordar, además de los estándares, condiciones y procedimientos relativos al intercambio de información, las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD y que el acuerdo respectivo debe presentarse ante la CNBV para su autorización, al igual que sus modificaciones.

En el caso del intercambio puntual de IC, una vez que las SIC determinaron sus propias tarifas al amparo del artículo 36 Bis de la LRSIC, la CNBV autorizó a cada una de las SIC la tarifa máxima que corresponde a los RC de PM. Al respecto, para los RCI de PM, la CNBV autorizó un precio máximo de [REDACTED] tanto a CC como a DUN.⁵²⁹ Dicha tarifa incluye el costo generado por el intercambio de IC, tanto positiva como negativa, entre SIC.⁵³⁰

El hecho de que la CNBV haya aprobado la tarifa máxima que las SIC pueden cobrar a los USUARIOS por los RCI de PM a que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC, no significa que la CNBV se pronunció o autorizó todas las cláusulas del contrato referido, incluyendo la tarifa de intercambio de IC.

De conformidad con los elementos analizados, no es posible considerar que el supuesto del que parte DUN en relación con la forma en que se determinan los precios y las cantidades producidas resulte aplicable al mercado de recopilación y procesamiento de IC, entre otras razones por la forma en que interviene el regulador en relación con la autorización de diversas tarifas.

Al respecto, es relevante tener en cuenta que en el presente caso la AI no señaló que DUN no pudiera fijar precios, sino que indicó que DUN no contaba con la capacidad de "alterar los precios" por la existencia de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC, en el que los contratantes se obligaron a respetar los precios acordados.

Así, el análisis realizado por la AI no excluye la posibilidad de que DUN tenga la capacidad de fijar un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones con CC.

El hecho de que en el contexto regulatorio descrito y en virtud del CONTRATO DUN y CC la capacidad de DUN de restringir el abasto no se refleje en una posibilidad para alterar los precios ya acordados, no implica la inexistencia de poder sustancial por DUN, pues como se

⁵²⁸ Como se indicó anteriormente, la posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de restringir el abasto no deriva de las disposiciones normativas que pueden regular el mercado en el que actúa, sino que es una consecuencia fáctica del poder con que cuenta dicho agente en el mercado en el que participa y la imposibilidad de sus competidores de contrarrestar dicho poder.

⁵²⁹ Conforme a la cláusula Tercera del CONTRATO DUN Y CC, la tarifa máxima que se cobra al USUARIO es de [REDACTED]

⁵³⁰ De conformidad con la cláusula Cuarta del CONTRATO DUN Y CC, [REDACTED]

indicó, DUN parte de un supuesto no acreditado para el presente caso en el cual las cantidades y el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la forma en que se determinan los precios de las tarifas de intercambio en el MR DE PM, DUN incluso podría tener la capacidad de fijar precios respecto del intercambio de IC de manera puntual dado que el artículo 36 Bis de la LRSIC únicamente refiere la posibilidad de autorizar el precio máximo que las SIC cobran por los RC de PM.⁵³¹

Adicionalmente, la manifestación de la AI no implica que DUN no pueda fijar el precio respecto del intercambio de la BPD, el cual no se encuentra establecido en el CONTRATO DUN y CC. Respecto de dicho bien nunca se estableció un precio derivado de la conducta de DUN relativa a negarse, mediante su omisión, a proporcionar la BPD y fijar las condiciones para este intercambio.

Por último, al analizar el PS de DUN, el DPR toma en cuenta diversos factores, como su alta participación de mercado, misma que se mantuvo siempre muy por encima de la de CC, su único competidor en el MR DE PM; la presencia de economías de escala y de red, así como la existencia de barreras a la entrada que se observan en el mercado, entre otros elementos.

En este sentido, aunado a la capacidad de restringir el abasto de DUN, existen otros factores que se consideraron para sostener que DUN cuenta con PS en el MR DE PM. Así, aunque DUN no tuviera capacidad para fijar precios, ello no sería suficiente para demostrar que no cuenta con PS.

B.6.4. El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto.

DUN manifestó.⁵³²

El crecimiento tanto de los créditos como de los expedientes registrados en la BD de PM pone de manifiesto una importante expansión por CC. Dicho análisis, demuestra que no hemos tenido la capacidad de restringir el abasto de información en el MR definido (o en la provisión de IC) y, mucho menos, inhibir el crecimiento de CC.

Como se mencionó anteriormente, el primer elemento que se debe considerar para analizar si tenemos PS es el MR sobre el cual podría estarlo ejerciendo. Dado que la provisión de IC a las SIC no constituye un mercado porque no forma parte de la oferta de productos y/o servicios ni de las SIC ni de los USUARIOS, es absurdo afirmar que DUN tenga PS en algo que no comercializa y sobre lo que no puede

⁵³¹ Al no haber sido imputada dicha capacidad para fijar precios en el DPR, no es posible concluir que DUN tenga dicha capacidad; no obstante, como ya se explicó, sí es posible concluir que DUN tiene y puede tener capacidad para restringir el abasto con independencia del análisis respecto de la capacidad para fijar precios debido a que en el MR los precios que corresponden a las tarifas de intercambio y las cantidades ofrecidas no se determinan de forma sucesiva o simultánea.

⁵³² Páginas 62 a 70 de la CONTESTACIÓN DUN.

fixar precios o, simultáneamente, restringir su oferta (por encontrarse obligado legalmente al intercambio, como se indicó).

Sin embargo, es cierto que el tamaño de la BD efectivamente es un indicador de la capacidad que tienen las SIC para producir los RC de PM y posteriormente venderlo. Es decir, el tamaño de la BD se presenta como el insumo primario para posteriormente producir y comercializar los RC. En este sentido, la AI analiza las participaciones en el mercado medidas con base en los siguientes indicadores (de capacidad de producción):

"Promedio mensual por año de CLIENTES con [HC] en la [BD] de PM o número promedio anual de expedientes; y, promedio mensual por año de créditos registrados en la [BD] de PM o promedio anual de registros".⁵³³

En primer lugar, simplemente la utilización de dichos indicadores hace evidente ciertos errores conceptuales que la AI comete en su intento de analizar las participaciones de mercado:

La utilización del número promedio mensual de CLIENTES con HC en BD de cada uno de los competidores es incorrecta, ya que dichas BD no son excluyentes. Esto ya que un CLIENTE puede estar registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de dos USUARIOS distintos, cada uno afiliado a una SIC distinta, o si un CLIENTE obtiene un crédito de un USUARIO afiliado a ambas SIC.

Por lo tanto, cuando la AI asegura que contamos con **B** **B** de participación de mercado, con certeza podemos asegurar que parte de los CLIENTES contabilizados en dicho porcentaje también está contabilizada en la participación de mercado de CC.

Esto implica que la cifra tomada como el total del mercado es superior al número de expedientes que en realidad existen; o, de manera equivalente, si se tomara en cuenta la cifra total de expedientes que cuentan con algún registro en alguna BD, para el cálculo correcto de las participaciones de mercado, el resultado que la AI obtendría de sumar ambas participaciones de mercado sería superior a 100% (cien por ciento).

La utilización de datos de capacidad productiva para calcular participaciones de mercado se justifica cuando el objetivo es tener una aproximación del potencial de producción de las empresas. Sin embargo, es una condición necesaria que exista una relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción.

El ejemplo más simple de esto es cuando la capacidad productiva y la producción se mide en las mismas unidades. En general, dicha relación biunívoca consiste en que exista un factor de conversión entre la capacidad definida por los factores de

⁵³³ DUN señaló la página 276 del DPR. Folio 31160.

producción y la producción misma (por ejemplo, el número de toneladas de maíz que se pueden producir utilizando una capacidad productiva de mil hectáreas y una fuerza laboral de mil trabajadores).

Sin embargo, esta relación es imposible de generar entre la producción de una SIC y el promedio mensual de créditos registrados en la BD de la misma, ya que cada CLIENTE tiene un número potencialmente distinto de créditos otorgados, por lo que un producto elaborado sobre un CLIENTE puede contener información correspondiente a "x" número de registros y exactamente el mismo producto elaborado sobre otro CLIENTE puede contener información correspondiente a "y" número de registros.

Por lo tanto, incluso cuando el ingreso obtenido por la venta de ambos productos es exactamente igual (dado que el producto es el mismo), el número de registros utilizado es distinto.

Para ejemplificar el absurdo de utilizar el número de créditos registrados como medida de participación de mercado se expone el siguiente ejemplo:

- Supóngase que nuestra BD cuenta en promedio con **B** registros **B** de los registros en ambas bases, suponiendo el extremo de que no existe duplicidad entre las bases), corresponde a **B** CLIENTES. Esto implica que, en un momento dado, el número potencial de RC distintos que podemos producir es **B**, utilizando un promedio de **B** registros.
- Por otro lado, supóngase que la base de CC cuenta con **B** registros **B** del total de registros existentes en ambas bases, suponiendo el extremo de que no existe duplicidad entre las bases) y que cada uno de los registros corresponde a un CLIENTE distinto. Esto implica que, en un momento dado, el número potencial de RC distintos que CC puede producir es **B** utilizando un promedio de **B** registro por RC.
- Entonces, si se tomara la participación de mercado medida por el potencial número de reportes distintos que podemos producir sería igual a **B** puntos porcentuales menor.

El anterior ejemplo se exhibe con el objetivo de hacer evidente que no existe la relación biunívoca necesaria para medir participaciones de mercado por capacidad productiva, con la información utilizada por la AI. Esto ya que incluso tomando en cuenta la relación de número de registros promedio por CLIENTE, las ventas de RC y en general de cualquier producto ofrecido por ambas SIC, no dependen del número de registros, pues una SIC puede vender cualquier cantidad de un producto sobre el mismo CLIENTE, a solicitud de un USUARIO.

Asimismo, se debe de considerar que medir participaciones en número de expedientes o en número de créditos registrados en las BD de PM es incorrecto, ya que el hecho de que la participación de una u otra SIC disminuya no es

necesariamente un reflejo de que su competidor haya realizado una acción para ganar la cuota de mercado que el primer agente perdió.

Como ejemplo de lo anterior, tomemos el siguiente caso: en 2015 contábamos con [B] en nuestra BD de PM, y CC con [B] [B] Esto equivale a participaciones del [B] y del [B] respectivamente. Supóngase que, por motivo de la expansión crediticia en el país, se registran 200,000 créditos nuevos ([B] en CC). El otorgamiento de dichos créditos es completamente independiente de cualquiera de las dos SIC, pues los otorgantes y prestatarios son los únicos involucrados en la consecución de un crédito. No obstante, las participaciones de mercado resultan ahora en [B] para nosotros y en [B] para CC, sin que ninguna de las dos SIC haya realizado acción alguna, la dinámica del mercado relacionado de otorgamiento de crédito generó un aumento en su "cuota de mercado", [B] números absolutos para ambas SIC, mismo que derivó en una disminución de nuestra participación y un aumento de la participación de CC.

Asimismo, en el extremo de que el aumento de 200,000 créditos hubiera significado un aumento de 200,000 registros en la BD [B] SIC, derivado de que los USUARIOS que otorgaron dichos créditos estén registrados en ambas SIC, nuestra participación habría disminuido aún más, a [B], mientras que CC hubiera tenido una participación de [B].

En términos generales, la medida de número de créditos o expedientes para calcular participaciones es incorrecta, pues no parte de conjuntos excluyentes entre ambas SIC. La medida correcta sería el número de RC de PM vendidos en conjunto con el número de RC Integrados facturados a una u otra SIC. Al hacer dicho análisis, se obtiene que la participación de CC ha crecido de forma significativa y consistente durante el periodo analizado, denotando nuestra incapacidad de desplazarlo.

En segundo lugar, como se expone a continuación, adicionalmente al evidente error metodológico básico para medir participaciones de mercado, el análisis que de éstas se hace no ofrecería ninguna justificación económica para asegurar que somos un agente con PS.

De entrada, se debe mencionar que CC ha presentado un crecimiento muy considerable y mayor al nuestro en ambos indicadores antes mencionados. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el crecimiento de CC durante el año en que ingresó al mercado de PM (de dos mil doce a dos mil trece), fue de 300% (trescientos por ciento) en créditos registrados en la BD de PM, y de 100% (cien por ciento) en número de expedientes de PM en la BD y ha mostrado crecimientos sostenibles en años posteriores. Asimismo, se puede observar que el número de expedientes de PM no ha crecido en el caso de DUN.

Todo lo anterior señala a que no hemos sido capaces de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de la IC.

Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos de PM y número expedientes en las bases de datos de PM⁷⁹

Año	Créditos registrados en la base de datos de PM				Expedientes en la base de datos de PM			
	Círculo		DUN		Círculo		DUN	
	millones de registros	crecimiento % anual	millones de registros	crecimiento % anual	millones de expedientes	crecimiento % anual	millones de expedientes	crecimiento % anual
2011	n.a.	n.a.	13.0	n.a.	n.a.	n.a.	3	n.a.
2012	0.2	n.a.	15.0	15.4%	0.1	n.a.	3	0.0%
2013	0.8	300.0%	17.0	13.3%	0.2	100.0%	3	0.0%
2014	0.9	12.5%	18.0	5.9%	0.3	50.0%	3	0.0%
2015	1.0	11.1%	21.0	16.7%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

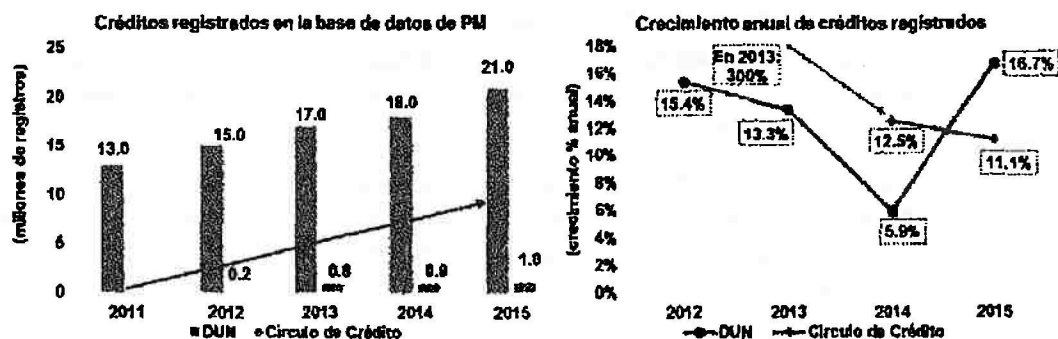
n.d.: no disponible

n.a.: no aplica

Círculo: Círculo de Crédito.

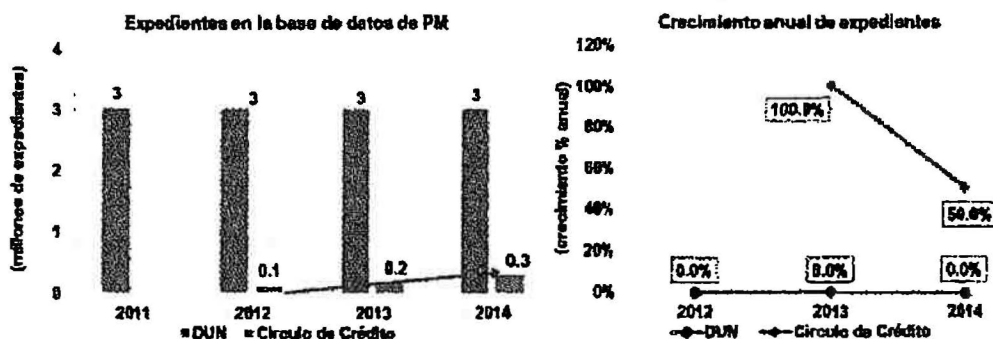
La información anterior se puede ver más claramente de manera gráfica. Los créditos registrados han crecido de manera sostenida para ambas SIC, lo cual denota un mercado en crecimiento y demuestra nuestra incapacidad de restringir el abasto de información o de inhibir el crecimiento de CC.

Gráfica 1. Evolución y crecimiento de créditos registrados en la base de datos de PM⁷⁹



Asimismo, el número de expedientes en nuestra BD de PM se ha mantenido constante, sin embargo, ha crecido de manera considerable para CC en el periodo dos mil doce a dos mil catorce. De nuevo, esto denota un mercado en crecimiento y demuestra que no hemos sido capaces de desplazar a CC. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Evolución y crecimiento del número de expedientes en la base de datos de PM⁶⁰



Por otro lado, como ya se mencionó, para ambos indicadores sobre los que se miden las participaciones, la AI argumenta que nuestra participación promedio del periodo dos mil doce a dos mil quince es significativamente alta y que la diferencia en participaciones con CC es muy significativa.

No obstante, la diferencia en participaciones es natural debido a que CC inició operaciones en dos mil doce, mientras que DUN comenzó en mil novecientos noventa y siete a especializarse en PM. A pesar de esto, en el análisis de la AI no se menciona la evolución de las participaciones en el periodo para analizar si CC está mejorando su posición en el mercado y si efectivamente tenemos la capacidad de fijar precios.

El análisis de participaciones de mercado con base en el promedio de número de expedientes (número de PM) nos señala una participación promedio en el periodo de **B**. Dicha afirmación es inválida, ya que:

1. No es correcto calcular una participación de mercado con base en promedios, siendo que la participación se debe de calcular con base en el número de expedientes (suponiendo que el número de expedientes se pudiera emplear para calcular participaciones), y ésta debe de analizarse año con año; y
2. No es correcto calcular participaciones de mercado con base en el número de expedientes, ya que los conjuntos de expedientes de cada SIC no son disjuntos.

Incluso ignorando dichos flagrantes errores, es natural que presentemos una concentración tan alta debido las características del mercado ya que CC inició operaciones varios años después. No obstante, aún sin analizar la evolución de las participaciones, nuestra participación implica necesariamente que, en promedio,

la participación de CC es igual a [REDACTED] B lo cual a su vez implica que en los tres años que involucra el periodo investigado, ha logrado tener en al menos un año una participación mayor o igual a [REDACTED] B, lo cual en un mercado que usualmente presenta altas concentraciones, refleja una entrada exitosa al mercado.

El argumento anterior aplica de la misma manera para el análisis de participaciones de la AI sobre operaciones de crédito registrada en la BD de PM y sobre los USUARIOS que adquirieron algún producto de PM, presentados en las tablas 64 y 65 del DPR.

Como ya fue señalado, el nivel de participación en sí mismo no es suficiente para determinar que hay PS en el mercado. Dado que el mercado de IC presenta economías de escala y de red, y dado que CC comenzó a operar quince años después que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta. No obstante, el análisis de la evolución de las participaciones durante el periodo, omitido en el DPR, es el indicador correcto para poder observar si efectivamente DUN ha tenido el poder de fijar precios o restringir el abasto.

Esto incluso lo reconoce la AI al señalar que *“un agente económico con una participación de mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra [...]”*.⁵³⁴ En síntesis, los argumentos presentados por la AI, para determinar que tenemos PS en el mercado, respecto a nuestro *“alto”* nivel de participación de mercado, no considera el contexto inherente del MERCADO INVESTIGADO.

Asimismo, el análisis no incorpora una conclusión sobre la evolución en el PERIODO DE INVESTIGACIÓN ni sobre el crecimiento de los indicadores analizados, sino únicamente considera mi participación promedio en el periodo.

Todo lo anterior, adicional a que dicho análisis se realiza con base en indicadores flagrantemente erróneos, evidenciando un nivel de calidad técnica en su análisis muy bajo.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵³⁵

La AI observa que DUN reconoce que el mercado de IC presenta economías de escala y de red, e inclusive señala que debido a que CC comenzó a operar quince años después que DUN entrara al mercado, es natural que DUN presente una concentración tan alta y que la diferencia en participaciones entre DUN y CC sea alta.

En primer lugar, el análisis y el cálculo de las participaciones de mercado realizados en el DPR son correctas por los siguientes elementos:

⁵³⁴ DUN señaló la página 281 del DPR.

⁵³⁵ Páginas 53 a 57 de la VISTA DUN.



- La utilización de las participaciones de mercado con base en el número promedio mensual de CLIENTES con HC es correcta dado que, si bien las BD de PM podrían tener registros en ambas SIC, ello es improbable puesto que, únicamente el [REDACTED] B [REDACTED] de los USUARIOS están afiliados a DUN y CC.

Adicionalmente, DUN no sustenta que *“la cifra tomada como el total del mercado es superior al número de expedientes que en realidad existe”* ni que *“el resultado que la AI obtendría de sumar ambas participaciones de mercado sería superior a 100%”*.

- La utilización de datos de capacidad productiva o de datos del tamaño de la BD para calcular participaciones de mercado tiene como objetivo determinar la existencia de PS en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM y no *“tener una aproximación del potencial de producción de las empresas”*.

Por ende, la existencia de *“una relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción”* es irrelevante para el análisis de participaciones de mercado, ya que la AI puede determinar la participación de mercado considerando indicadores de ventas, número de CLIENTES, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que se considere pertinente para evaluar la forma en que los agentes económicos participan en el mercado, en términos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 59 de la LFCE.

De tal forma que al considerar a los USUARIOS que adquieren algún producto de PM como el número de CLIENTES que acude a una SIC, la AI actuó conforme a lo establecido en la LFCE y la utilización de variables diferentes no cambiaría la conclusión a la que llega el DPR, a saber, sus participaciones de mercado son altas.

- La utilización del número de créditos y expedientes para calcular las participaciones de mercado es correcta puesto que únicamente el [REDACTED] B [REDACTED] de los USUARIOS están afiliados tanto a DUN como a CC. Asimismo, el número de RC de PM vendidos y de RCI facturados constituyen cifras propias del MERCADO RELACIONADO, por lo que no resulta una variable pertinente para analizar el PS en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM. En ese sentido, el argumento de DUN no debate ni modifica la conclusión de que detenta altas participaciones en el MR, que también reconoce.

En segundo lugar, el supuesto crecimiento de CC medido por el número de créditos registrados en la BD de PM y el número de expedientes de PM no se sostiene, en virtud de los siguientes elementos:

- Entre dos mil doce y dos mil trece, el crecimiento de 300% (trescientos por ciento) en el número de créditos registrados de CC no muestra el cambio real de la BD, puesto que el aumento de registros de CC fue de apenas 0.6 (cero punto seis) millones de registros y el incremento de registros de DUN fue de 2.0 (dos punto cero) millones de registros. Es decir, el aumento en los registros de DUN fue 3.34 (tres punto treinta y cuatro) veces

Eliminado: doce palabras

más que el de CC, incluso, en el año dos mil quince el número de créditos registrados de DUN es diez veces más grande que la base BD de CC.

Asimismo, el crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC no muestra el cambio real de la BD, en virtud de que el incremento de expedientes de CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno) millones de expedientes, incluso, en el año dos mil catorce el número de expedientes en la BD de DUN es veintiún veces más grande que la BD de CC, conforme a la información presentada por DUN.

• El promedio mensual por año del número de expedientes de DUN ha presentado incrementos entre dos mil doce y marzo de dos mil quince, en dos mil trece de B en dos mil catorce de B y para marzo dos mil quince de B lo cual es contrario a lo señalado por DUN.

Asimismo, DUN señala que no ha sido capaz de desplazar a CC, sin embargo, en el DPR se sostiene que el objeto y efecto de la negativa imputada a DUN es impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM y en el MERCADO RELACIONADO.

En tercer lugar, en el DPR se analiza la evolución de las participaciones de mercado del número de CLIENTES con HC, el número de créditos registrados y número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil quince; y en todos los casos las participaciones de mercado son mayores a B

B Asimismo, de la información contenida en el DPR se desprende que en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil quince, las participaciones de mercado de DUN por número de CLIENTES con HC han oscilado entre B

B y B con un promedio de B B, el número de créditos registrados ha variado entre B

B y B con un promedio de B y el número de USUARIOS que adquirieron algún

producto de PM ha fluctuado entre B

y B, con un promedio de B

B Se destaca que la variable del número

de registros es la que registra las participaciones más elevadas, lo cual se explica por la negativa a intercambiar la BPD de PM por DUN, dado que éste "cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de [IC] (en la forma de registros) a [CC] Énfasis añadido)".⁵³⁶

Adicionalmente, como se señaló, DUN presenta participaciones de mercado que en todos los casos están por encima del B las cuales son estables y no han variado significativamente a través de los años; lo que implica que CC no ha logrado disciplinar el comportamiento de DUN, ya que en el periodo de dos mil doce a

Eliminado: ochenta y nueve palabras

⁵³⁶ La AI señaló la página 293 del DPR. Folio 31177.

marzo dos mil quince apenas ha alcanzado una “una participación mayor o igual a **B** en el MR DE PM.

Asimismo, es importante destacar que DUN reconoce que durante quince años no tuvo competencia en el mercado de IC, lo cual supone la existencia de barreras significativas a la entrada y que es remota la posibilidad de que ingrese un nuevo participante que discipline el comportamiento de DUN, al respecto señala:

“[...] la diferencia en participaciones es natural debido a que [CC] inició operaciones en 2012, mientras que DUN comenzó en 1997 a especializarse en PM [Énfasis añadido]”.

Por todo lo anterior, DUN no desvirtúa que cuenta con PS en el MR DE PM e incluso reconoce que existe una alta concentración y que tiene una alta participación de mercado, con respecto a CC.

Las manifestaciones de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundadas, por otra parte, en virtud de las siguientes consideraciones:

Como se señaló en los apartados “A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado”, “A.2 El MR definido por la AI es diverso a donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN” y “A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes” de la presente resolución, en el DPR se definió el MR como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

De conformidad con el análisis incluido en los apartados de esta resolución referidos en el párrafo anterior, en el proceso indirecto de recopilación y procesamiento de IC, una SIC provee la IC y otra la recopila o procesa. Por lo anterior, tanto las actividades de recopilación y procesamiento de IC, como la actividad correspondiente a la provisión de IC se encuentran comprendidas dentro del MR definido en el DPR. Asimismo, el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por la SIC que recibe la información y también existe una contraprestación en el caso del intercambio de la información puntual (cuando existe un HIT en la información proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC complementaria).

En este sentido, el argumento de DUN de que la provisión de IC no constituye un mercado y por lo tanto es absurdo afirmar que DUN tiene PS es inoperante ya que no combate la imputación realizada en el DPR, pues en el DPR no se indica que DUN tenga PS en la “provisión de información crediticia”, sino en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

Asimismo, como se indicó en el apartado “De aplicar, mutatis mutandi, el criterio de la propia AI para concluir que TUM no cuenta con capacidad para restringir el abasto en el mercado de comercialización de RC de PF, se debió concluir que DUN tampoco cuenta con capacidad para restringir el abasto en el MR” de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones

Eliminado: una palabra

innecesarias, la posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de restringir el abasto no deriva de las disposiciones normativas que pueden regular el mercado en el que actúa, sino que es una consecuencia fáctica del poder con que cuenta dicho agente en el mercado en el que participa y la imposibilidad de sus competidores de contrarrestar dicho poder.

En el caso de DUN, a pesar de existir los supuestos normativos que lo obligan a compartir la información completa, incluyendo la BPD y el SEGMENTO CO, DUN decidió de manera unilateral no realizar dichos intercambios y restringir el abasto de IC, por lo que dicho agente económico no sólo contó con la capacidad de restringir el abasto, sino que de facto restringió el abasto. Los elementos que permiten concluir que DUN restringió el abasto al negarse a proporcionar o intercambiar su BPD con CC y al negarse a entregar o transferir, mediante el intercambio puntual, la totalidad de la información utilizada para elaborar productos de IC, se analizan a detalle dentro de los apartados "C. Conducta" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, por lo que se remite al análisis contenido en dichos apartados para evitar repeticiones innecesarias.

Por otra parte, es **infundado** que el crecimiento de los créditos registrados y del número de expedientes en la BD de PM de CC demuestre que DUN no ha tenido la capacidad de restringir el abasto de información en el MR (o en la provisión de IC) ni inhibir el crecimiento de CC, por las razones que se expresan a continuación.

Por una parte, el análisis respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto de información en el MR DE PM se encuentra sustentado no solamente en la evaluación de las participaciones de DUN en ese mercado (medidas en términos de registros, expedientes y de USUARIOS que adquirieron productos de PM), sino también en el análisis relativo a la existencia de barreras a la entrada al MR DE PM, la existencia de economías de escala y de red y la alineación de los intereses de DUN con aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito.

Por lo que hace al análisis de las participaciones de mercado incluido en el DPR, incluso en la información presentada mediante la CONTESTACIÓN DUN se refieren participaciones de mercado de DUN muy elevadas, en términos de créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM.

**Participaciones de mercado referidas por DUN,
en términos de créditos registrados en BD de PM⁵³⁷**

	CC	DUN
2011	0%	100%
2012	1.32%	98.68%
2013	4.50%	95.50%
2014	4.77%	95.23%

⁵³⁷ Véase la información incluida en el cuadro denominado "Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos de PM y número de expedientes en las bases de datos de PM", mismo que se incluye en la página 67 de la CONTESTACIÓN DUN.

2015	4.55%	95.45%
------	-------	--------

**Participaciones de mercado referidas por DUN,
en términos de número de expedientes en BD de PM⁵³⁸**

	CC	DUN
2011	0%	100%
2012	3.23%	96.77%
2013	6.50%	93.75%
2014	9.10%	90.90%
2015	No disponible	No disponible

Con independencia de las deficiencias metodológicas que refiere DUN respecto a la forma en que la AI evaluó los indicadores utilizados en el DPR para evaluar las participaciones de mercado (dichas “deficiencias” serán abordadas y analizadas en los siguientes párrafos), de las participaciones de mercado presentadas por DUN en el “Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos de PM y número de expedientes en las bases de datos de PM” contenido en la CONTESTACIÓN DUN se desprende lo siguiente:

- Las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM siempre fueron superiores al 90% (noventa por ciento) durante el periodo comprendido entre los años dos mil doce y dos mil quince.⁵³⁹ En este sentido, con independencia de los crecimientos porcentuales que hubiera presentado CC a lo largo del tiempo, sus participaciones de mercado nunca han alcanzado el 10% (diez por ciento) del mercado.
- El crecimiento de 300% (trescientos por ciento) en el número de créditos registrados de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio significativo en el tamaño de las BD de PM para efectos del cálculo en las participaciones de mercado de DUN y CC. Ello debido a que en ese periodo el aumento de registros en la BD de PM de CC fue de apenas 0.6 (cero punto seis) millones de registros y el incremento de registros en la BD de PM de DUN fue de 2.0 (dos punto cero) millones de registros. En este sentido, el aumento en los registros de DUN fue 3.33 (tres punto treinta y tres) veces más que el de CC en ese periodo.

Asimismo, conforme a los datos que presenta DUN en la CONTESTACIÓN DUN, el crecimiento de 300% (trescientos por ciento) en el número de créditos registrados en la BD de PM de CC entre dos mil doce y dos mil trece reflejó un cambio insignificante en la participación de mercado de DUN medida en términos del número de créditos registrados, ya que éste pasó de tener el 98.68% (noventa y ocho punto sesenta y ocho

⁵³⁸ Véase la información incluida en el cuadro denominado “Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos de PM y número de expedientes en las bases de datos de PM”, mismo que se incluye en la página 67 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵³⁹ En las páginas 67 y 68 de la CONTESTACIÓN DUN, DUN presenta cifras correspondientes al número de créditos registrados en las BD de PM entre el año dos mil once y el año dos mil quince; asimismo, las cifras que presenta respecto del número de expedientes en las BD de PM corresponden al periodo de dos mil once a dos mil catorce.

por ciento) del mercado en términos del número de créditos registrados en su BD de PM en el año dos mil doce a tener el 95.50% (noventa y cinco punto cincuenta por ciento) del mercado en términos de dicho indicador en el año dos mil trece.

Adicionalmente, es importante observar el comportamiento del crecimiento de la BD en los años subsecuentes para los que se cuenta con información. Particularmente, la BD de CC se ha mantenido estable entre dos mil trece y dos mil quince, mostrando un crecimiento acumulado en dicho periodo de 1.11%. Esto muestra que la tasa de 300% observada entre dos mil doce y dos mil trece no es indicativa de la dinámica de CC en el MR de PM, si no un crecimiento extraordinario asociado a su reciente entrada al mercado.

Por otra parte, en el año dos mil quince el número de créditos registrados en la BD de PM de DUN habría sido veintiún veces más grande que el correspondiente a la base BD de PM de CC, de conformidad con los datos que presenta DUN.

- c) El crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio significativo en el tamaño de las BD de PM para efectos del cálculo en las participaciones de mercado de DUN y CC. Ello debido a que en ese periodo el aumento en el número de expedientes en la BD de PM de CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno) millones de expedientes, mientras que DUN tenía 3 millones de expedientes.

En este sentido, conforme a los datos que presenta DUN, el crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC entre dos mil doce y dos mil trece reflejó un cambio insignificante en la participación de mercado de DUN medida en términos de expedientes, ya que éste pasó de tener el 96.77% (noventa y seis punto setenta y siete por ciento) del mercado en términos del número de expedientes en su BD de PM en el año dos mil doce a tener el 93.75% (noventa y tres punto setenta y cinco por ciento) del mercado en términos de dicho indicador en el año dos mil trece.

Asimismo, en el año dos mil catorce (último año respecto del cual DUN presenta cifras relativas al número de expedientes en las BD de PM), el número de expedientes en la BD de PM de DUN habría sido diez veces más grande que el correspondiente a la base BD de PM de CC.

- d) Las participaciones de mercado de DUN (medidas en términos de créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM) que se incluyen en la CONTESTACIÓN DUN son fundamentalmente consistentes con la información referida en el DPR respecto de la evolución de las participaciones de mercado de CC y DUN en términos del número de CLIENTES con HC, el número de créditos registrados y número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM.

Como se indica en el DPR, en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil quince, las cifras correspondientes a las tres variables o indicadores referidos (expedientes,

registros y número de usuarios que adquieren algún producto de PM) siempre indican que las participaciones de mercado de DUN son mayores al B

En este sentido, tanto las cifras de participaciones de mercado que presenta DUN, como el señalamiento que realiza respecto de la existencia de un mercado concentrado en el que existe una diferencia significativa entre las participaciones de mercado de DUN y CC,⁵⁴⁰ coinciden con el análisis del DPR respecto del análisis de las elevadas participaciones de mercado de DUN a lo largo del tiempo.⁵⁴¹

- e) En el caso del indicador correspondiente al número de expedientes, DUN señala que el número de expedientes en su BD de PM se ha mantenido constante entre el año dos mil once y el año dos mil catorce. Al respecto, refiere la existencia de 3 millones de expedientes en su BD de PM durante el periodo comprendido entre dos mil once y dos mil catorce; esto significa que, de acuerdo con DUN, durante dicho periodo no habría incrementado ni disminuido el número de expedientes en su BD de PM.⁵⁴²

Al respecto, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, el promedio mensual por año del número de CLIENTES con HC en la BD de PM de DUN presentó incrementos entre dos mil doce y el mes de marzo de dos mil quince a lo largo de todo el periodo. En dos mil trece se observó un incremento de B respecto del dos mil doce; en dos mil catorce el incremento fue de B respecto del año anterior, y, para marzo dos mil quince, se produjo un incremento de B respecto del año anterior.⁵⁴³

Por otra parte, son infundados los argumentos de DUN relativos a que es incorrecta la utilización de los indicadores de promedio mensual por año de CLIENTES con HC en la BD de PM (o número promedio anual de expedientes); y, promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM (o promedio anual de registros) para medir participaciones de mercado.

⁵⁴⁰ En la página 69 de la CONTESTACIÓN DUN, DUN señala lo siguiente: "Dado que el mercado de información crediticia presenta economías de escala y de red, y dado que [CC] comenzó a operar quince años después que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta."

⁵⁴¹ Al revisar la información referida en las tablas 63, 64 y 65 del DPR, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, se puede concluir que, en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil quince, las participaciones de mercado de DUN por número de CLIENTES con HC oscilaron entre B y B

B ; asimismo, el número de créditos registrados varió en ese periodo entre B y B con un promedio de B y las participaciones de mercado de DUN respecto del número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM fluctuó entre B y B con un promedio de B en el periodo señalado.

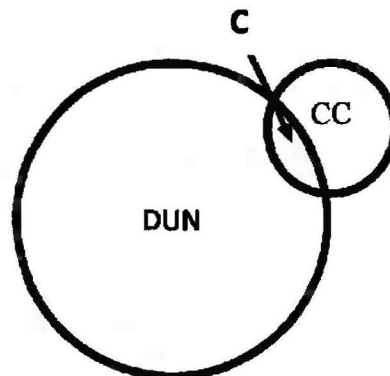
⁵⁴² DUN afirma que la fuente de las cifras que presenta corresponde a información de la CNBV; no obstante, DUN no presenta elementos de convicción que sustenten su afirmación y ni siquiera explica cuál es el archivo o la fuente de acceso público que permitiría a esta autoridad verificar que efectivamente la CNBV refiere dichas cifras.

⁵⁴³ Véase la tabla del DPR denominada "Tabla 63. Participación de mercado de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO respecto del número de CLIENTES con historial crediticio", así como la información incluida en los folios 5802 (Anexo 8.6) y 6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE.

DUN argumenta que la medida de número de créditos o expedientes para calcular participaciones es incorrecta, pues no parte de conjuntos excluyentes entre ambas SIC. Según DUN, un CLIENTE puede estar registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de dos USUARIOS distintos, cada uno afiliado a una SIC distinta, o si un CLIENTE obtiene un crédito de un USUARIO afiliado a ambas SIC. Adicionalmente DUN señala que dicho error implica también que la cifra tomada como el total del mercado es superior al número de expedientes que en realidad existen.

En este sentido, si bien es necesario conocer la intersección entre las BD de PM para calcular de forma exacta las participaciones de mercado en términos de registros o expedientes, en realidad la intersección entre ambas bases tiene como límite superior el tamaño de la BD de CC (área C en el diagrama que se presenta a continuación):

Diagrama
Intersección de las BD



De este modo, incluso considerando, como lo señala DUN, que un CLIENTE puede estar registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de dos USUARIOS distintos (cada uno afiliado a una SIC distinta), o que un CLIENTE puede obtener un crédito de un USUARIO afiliado a ambas SIC, las participaciones de mercado en términos de CLIENTES con HC en la BD de PM (expedientes) referidas en el DPR no podrían variar de forma significativa, toda vez que, DUN contó en promedio con más del B de expedientes en su BD, por lo que una intersección que incluyera un mayor número de expedientes implicaría que DUN tiene un mayor porcentaje de IC que vuelve a DUN menos dependiente de la BD de PM de CC. Es decir, si fuera el caso de que la intersección alcanzara el límite superior, DUN tendría muchos expedientes que no tendría CC, pero CC no tendría ningún expediente que no se encuentre ya en la base de DUN. Esto hace que la cantidad de IC que tiene DUN tienda al cien por ciento.

Lo mismo sucede al analizar las participaciones de mercado de CC respecto del número de registros que obra en su BD, toda vez que, DUN contó con más del B de registros en su BD, una intersección que incluyera un mayor número de registros

implicaría que DUN tiene un mayor porcentaje de IC que vuelve a DUN menos dependiente de la BD de PM de CC.

Adicionalmente, es poco probable que los registros se encuentren repetidos en ambas SIC. Como se indica en el DPR, los USUARIOS se pueden afiliar a las dos SIC, dado que no existe restricción legal para adquirir productos de IC de PM de ambas SIC. No obstante, de conformidad con la información que obra dentro del EXPEDIENTE y que fue referida en la tabla del DPR denominada "*Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información crediticia de PM de DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO*", el porcentaje de USUARIOS que consumieron productos de ambas SIC es muy bajo, B **

**
**
**
Al respecto, es relevante tener en cuenta que no es posible que los USUARIOS realicen consultas a una SIC si no se encuentran afiliados a dicha SIC y proporcionan su BD.⁵⁴⁴ Asimismo, en el segmento correspondiente a las PM, DUN contó con más del B B de los USUARIOS afiliados, que adquirieron, de forma exclusiva, alguno de los productos de IC de PM, durante el periodo comprendido entre el año dos mil doce y el mes de marzo del año dos mil quince.

Asimismo, de acuerdo con las cifras presentadas por DUN a través de la CONTESTACIÓN DUN, su participación de mercado medida en términos del número de expedientes registrados en la BD de PM siempre habría sido superiores al B durante al menos, el periodo comprendido entre los años dos mil doce y dos mil catorce.

DUN argumenta de forma reiterada que la AI debió tener en cuenta el contexto inherente del MERCADO INVESTIGADO y, en particular la evolución y el crecimiento de los indicadores analizados, al respecto, y en adición a las consideraciones previamente realizadas, debe tenerse en cuenta que las variaciones porcentuales de CC son elevadas debido a que su entrada al mercado es más reciente que la de DUN, por lo que cualquier incremento en términos absolutos genera un crecimiento grande en términos porcentuales.

Adicionalmente, si se analiza el porcentaje de USUARIOS que han adquirido productos de PM de cada SIC a lo largo del tiempo es posible observar lo siguiente.⁵⁴⁵

Al analizar el crecimiento de CC se observa que el número de USUARIOS de CC que adquieren algún producto de PM ha ido aumentando; no obstante, DUN siempre tiene más USUARIOS que CC que adquirieron algún producto de PM e, incluso a lo largo del tiempo, DUN continúa atrayendo a la mayor cantidad de los USUARIOS que adquieren algún producto de PM. Es decir,

⁵⁴⁴ El artículo 26 de la LRSIC establece que el USUARIO debe proporcionar su información crediticia a la SIC para poder acceder a los servicios que ésta ofrece. También, el mencionado artículo señala que las SIC podrán negar la prestación del servicio a quienes, de forma habitual, realicen operaciones de crédito y no proporcionen información sobre las mismas. Esto es lo que se conoce como el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, el cual significa que para acceder a los productos crediticios ofrecidos por una SIC, el USUARIO le debe proporcionar su BD.

⁵⁴⁵ Véanse las pruebas 13 y 15 del apartado "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución, de las cuales se desprende el número de USUARIOS que consumen productos de DUN, CC y ambos.



49823

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

no sólo DUN tiene muchos más USUARIOS que consumen sus productos cada año, sino que también el incremento en el número de USUARIOS es mayor para DUN que para CC en todos los años de dos mil doce a dos mil catorce.⁵⁴⁶ Lo anterior se refleja en la participación promedio de DUN respecto del número de USUARIOS que adquirieron algún producto para PM cada año en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, la cual se encuentra por encima del B.

El hecho de que DUN mantenga más USUARIOS y continúe atrayendo a la mayor cantidad de los nuevos usuarios que adquieren algún producto de PM se explica en buena medida debido a las características de red que tienen los mercados en los que operan las SIC y refleja la ventaja de ser el primero en entrar al mercado.

Asimismo, como se indicó en el apartado *"Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características"* de la presente resolución, se trata de un mercado en donde los usuarios valoran más asociarse a la SIC con más usuarios. A cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores. Ello implica que, en promedio, un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de la otra SIC.

De este modo, los usuarios afiliados a la SIC cuya BD sea más grande van a obtener sus RC a menores precios (pues se reduce la probabilidad de hacer HIT en la base de la otra SIC) y se genera un círculo virtuoso entre número de usuarios y precio bajo de los RC, el cual es aprovechado por la primera empresa que logró consolidarse en el mercado. Esto significa que es un mercado con externalidades de red positivas con ventaja para el primer jugador.

Incluso DUN señaló que CC *"resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCP"*.⁵⁴⁷

La utilización de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre el tamaño de la BD de PM de DUN y el tamaño de la BD de PM de CC constituye un indicador que sí permite, junto con los demás elementos (barreras a la entrada, economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito) determinar la existencia de PS en el MR DE PM.

Lo anterior no sólo debido a que esa información indica la capacidad que tiene la SIC con la BD de PM más grande para recopilar y atraer la información que posteriormente le permitirá generar RC u otros productos de IC, sino también porque indica o refiere su capacidad para restringir el abasto en el MR DE PM, esto es, su capacidad para afectar la capacidad de otro agente económico de recopilar y procesar IC de PM: quien tiene la BD de PM más pequeña

⁵⁴⁶ Respecto de dos mil quince, se indica que no se cuenta con los datos completos del año, como se desprende del contenido del DPR.

⁵⁴⁷ Página 122 de la CONTESTACIÓN DUN.

depende más de la provisión de la información por la SIC que tiene la BD de PM más grande y, por eso, puede ser mayormente afectado por la falta de intercambio de la BPD y de la información puntual.

Adicionalmente, el que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con información completa,⁵⁴⁸ lo vuelve menos atractivo para los USUARIOS, pues los USUARIOS valoran de manera particular el contar con toda la información disponible para realizar el análisis respecto del comportamiento crediticio de los CLIENTES.

En este sentido, como lo señala el DPR, un agente económico con participaciones de mercado elevadas no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más probable que esto ocurra, más aún si se da en combinación con otras características del mercado (presentes en este caso) como lo son la existencia de economías de red, economías de escala y barreras a la entrada.

Por otra parte, es infundado el argumento de DUN según el cual la utilización de datos de capacidad productiva para calcular participaciones de mercado que se realiza en el DPR es incorrecta debido a que, en su opinión, no existe una relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción en el caso del mercado que se analiza (DUN afirma que es imposible generar dicha relación biunívoca entre la producción de una SIC y el promedio mensual de créditos registrados en la BD de la misma).

Lo anterior, debido a que DUN omite considerar que (i) las variables utilizadas en el DPR para medir las participaciones de mercado de las SIC, no buscan determinar la capacidad productiva de éstas, lo cual es consistente con lo señalado en la fracción I del artículo 59 de la LFCE, la cual expresamente prevé la posibilidad de determinar la participación de mercado en términos de otros indicadores (“[...] indicadores de ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere pertinente” [Énfasis añadido]); (ii) la utilización de datos que permiten evaluar el tamaño de la BD para calcular participaciones de mercado tiene por objeto determinar la existencia de PS en el MR DE PM, más no busca determinar si DUN cuenta con PS en el MERCADO RELACIONADO; (iii) medir la capacidad productiva de las SIC a través de los insumos permitiría evaluar más bien el poder de mercado de DUN en el MERCADO RELACIONADO y no en el MR DE PM;⁵⁴⁹ (iv) el número de registros da cuenta de la capacidad de recopilación de IC de cada una de las SIC, de la dependencia que tiene una SIC respecto de la IC que obra en la BD de la otra SIC y de que tan atractiva es la BD de cada SIC para los USUARIOS.

DUN señala, entre otras cuestiones, que incluso tomando en cuenta la relación de número de registros promedio por CLIENTE, las ventas de RC y en general de cualquier producto ofrecido por ambas SIC, no dependen del número de registros, pues una SIC puede vender cualquier

⁵⁴⁸ Véase al respecto el análisis incluido en los apartados “CONDUCTA”, “OBJETO Y EFECTO” y “VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS” de la presente resolución.

⁵⁴⁹ El producto final de la cadena productiva es el RC, el cual se realiza por cada persona que cuenta con un expediente de IC. Dichos expedientes pueden estar formados de pocos o muchos registros de IC. Por ello, muchos registros no necesariamente implican que se puedan generar muchos RC.



49025

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

cantidad de un producto sobre el mismo CLIENTE, a solicitud de un USUARIO. No obstante, DUN omite considerar que el análisis incluido en el DPR tiene por objeto determinar si DUN cuenta con PS en un mercado distinto al de las ventas de RC o de cualquier otro producto ofrecido por DUN y/o CC. En este sentido, DUN no acredita que hubiera sido más apropiado medir las participaciones de mercado en términos del número de RC de PM vendidos y de RCI facturados.

La utilización de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre el tamaño de la BD de PM de DUN y el tamaño de la BD de PM de CC permite, junto con los demás elementos analizados (barreras a la entrada, economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito), evaluar la capacidad que tiene la SIC con la BD de PM más grande para recopilar y procesar IC de PM, así como para restringir el abasto. Al respecto, CC (quien tiene la BD de PM más pequeña) depende más de la provisión de la información por la SIC que tiene la BD de PM más grande y, por eso, puede ser afectado por la falta de intercambio de la BPD y de la información puntual.

En este sentido, el análisis busca determinar la existencia de PS en el MR DE PM de forma consistente con el análisis de la conducta imputada que se observa en el MR DE PM (negativa a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual).

De conformidad con los razonamientos expuestos, la existencia o inexistencia de la relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción en este caso resulta irrelevante.

Por otro lado, si bien el hecho de que la participación de mercado de una u otra SIC disminuya no es necesariamente un reflejo de que su competidor haya realizado una acción para ganar la cuota de mercado que el primer agente perdió, ello no implica que el análisis de las participaciones de mercado en términos de expedientes o número de créditos registrados sea incorrecto.

Al respecto, es cierto que la demanda de RC de PM y otros productos de IC de PM dependen, entre otras cuestiones, de factores exógenos o ajenos al control de las SIC (por ejemplo, es posible que los USUARIOS de DUN hayan generado un mayor volumen de créditos que los USUARIOS de CC en los últimos años y, en este sentido, es posible que la evolución de las participaciones de mercado en términos de expedientes y registros refleje en buena medida lo que ocurre en el mercado o los mercados de otorgamiento de crédito); asimismo, es cierto que las economías de red y la diferencia en el momento en el tiempo en que DUN y CC entraron al mercado constituyen factores externos que guardan relación con la evolución de sus participaciones en el mercado a lo largo del tiempo;⁵⁵⁰ no obstante, DUN omite considerar que la conducta ilegal que se le imputa es la comisión de una PMR, no el hecho de contar con elevadas participaciones de mercado (mismas que el mismo DUN reconoce) y que, en

⁵⁵⁰ En la página 69 de la CONTESTACIÓN DUN, DUN señala lo siguiente: "Dado que el mercado de información crediticia presenta economías de escala y de red, y dado que [CC] comenzó a operar quince años después que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta."

conjunto con los demás elementos señalados, permite explicar por qué dicho agente económico cuenta con la capacidad para restringir sensiblemente el abasto de IC (en la forma de registros) a CC.

B.7. Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada.⁵⁵¹

B.7.1. La inversión inicial requerida no es prohibitiva para ser considerada como una barrera de entrada.

DUN manifestó:⁵⁵²

De acuerdo con la AI en el DPR, la inversión requerida para establecer una SIC es de aproximadamente [REDACTED]. El análisis realizado en el DPR realiza un supuesto equivocado, al tomar como inversión adicional el capital social requerido para establecer una SIC, en lugar de considerarlo como parte del flujo de efectivo utilizado para pagar la inversión total requerida, es decir, el monto del capital social requerido no se suma a la inversión requerida para establecer una SIC sino que se utiliza para pagar dicha inversión.

De acuerdo con el DPR, la inversión requerida corresponde a los costos para la adquisición de [REDACTED]

[REDACTED] que presentó una SIC al solicitar su autorización ante la SHCP, misma que asciende a [REDACTED]

[REDACTED]⁵⁵³ Asimismo, además de la inversión requerida, se presentan requerimientos financieros establecidos en la regulación de la CNBV: las SIC deben pagar la cantidad de \$1,271,881.20 (un millón doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.).

Asimismo, la AI señala que el capital social requerido por la CNBV a CC, cuando esta SIC fue autorizada en dos mil cinco, ascendió a dieciséis millones de pesos, lo cual equivale aproximadamente [REDACTED] de dos mil quince. Como ya se mencionó, el capital social de una empresa corresponde a la inversión inicial de los socios de ésta para constituir el patrimonio mínimo para el inicio de sus operaciones.⁵⁵⁴ Por tal razón, es evidente que el capital social citado por la AI corresponde a la cantidad necesaria para cubrir la inversión inicial para operar una SIC.

⁵⁵¹ En las páginas 70 a 71 de la CONTESTACIÓN DUN, dicho agente económico realiza diversas manifestaciones generales a través de las cuales indica que no existen barreras de entrada significativas al mercado, por lo que la AI (en su opinión) no cuenta con sustento suficiente para argumentar que DUN tome ventaja de ellas y, por ende, presente PS en el mercado. En la presente sección se da respuesta a cada uno de los argumentos específicos que presenta DUN en contra del análisis de barreras a la entrada incluido en el DPR. Adicionalmente, se indica que en el apartado denominado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución se incluye el análisis de los elementos de convicción que sustentan el análisis en materia de barreras a la entrada.

⁵⁵² Páginas 71 a 73 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵⁵³ DUN señaló la página 153 del DPR.

⁵⁵⁴ DUN refiere la siguiente fuente bibliográfica: Agar, Christopher, *Capital Investment & Financing: A Practical Guide to Financial Evaluation*, Elsevier Finance, 2005, pp. 2-36.

No obstante, la AI en conocimiento de la función del capital social en el inicio de operaciones de una sociedad, decidió arbitrariamente suponer que para que una SIC inicie operaciones, esta debe reunir la cifra aproximada de [REDACTED] y en lugar de utilizarla para sus inversiones iniciales, buscar B [REDACTED] adicionales.

Lo anterior, además de hacer evidente el error básico de la AI al sumar dos cifras en unidades no comparables, esto es, la inversión inicial expuesta y explícitamente expresada en pesos de dos mil quince, y el capital social requerido a CC, expresado en pesos de dos mil cinco, también exhibe la arbitrariedad y sesgo de la AI para determinar la existencia de barreras a la entrada, sin sustento en evidencia clara, y por ende determinar PS por DUN.

Es un error flagrante no considerar que el capital social se utilice para sufragar los costos iniciales como la única posibilidad. De nuevo, el capital social se define como el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan, y desarrolla una función de garantía por la empresa hacia terceros. Estos bienes o dinero precisamente suelen utilizarse para hacer frente a los gastos iniciales para la constitución de una empresa, incluyendo compras de activos físicos y el faltante típicamente se financia con deuda respaldada precisamente por el capital social otorgado. Por consiguiente, el capital social de [REDACTED] (dieciséis millones en pesos de dos mil cinco) requerido para operar como SIC debería formar parte de la inversión inicial y de los requerimientos financieros establecidos, teniendo que completar con deuda únicamente el remanente.

Asimismo, el capital social que requieren las SIC en el resto del mundo.⁵⁵⁵ Por ende, la inversión requerida en México para operar una SIC no es altamente restrictiva si se toman comparativos internacionales, sino todo lo contrario.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵⁵⁶

En el DPR se señala que “una SIC que desee incorporarse a la industria de [IC] debe cubrir el monto de la inversión necesaria para ello”.⁵⁵⁷ Para ello, plantea que:

“[...] la inversión necesaria para poner en marcha una SIC pública rondaba los [REDACTED]”

Con relación a los requerimientos financieros, y de acuerdo con la CNBV, el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos, indica que “Cada entidad que pertenezca al sector de

⁵⁵⁵ DUN señala que, si se considera únicamente EUA, el capital social promedio requerido para instituir una SIC en dos mil quince es de \$mil trescientos setenta y cuatro millones de pesos, sustantivamente mayor a los \$dieciséis millones de pesos requeridos en México. Asimismo, DUN indica que, si se consideran las SIC en todo el mundo, el capital social promedio requerido es de \$642.1 (seiscientos cuarenta y dos punto uno) millones de pesos, sustancialmente mayor al requerido en México.

⁵⁵⁶ Páginas 58 a 59 de la VISTA DUN.

⁵⁵⁷ La AI señaló la página 72 de la CONTESTACIÓN DUN.

[SIC], entendiéndose por ello a las sociedades autorizadas conforme a la [LRSIC], pagará la cantidad de: \$1,271,881.20.' [...]
[...]

Asimismo, de acuerdo con BANXICO, cuando [CC] fue autorizada para operar, se estableció un capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente a dieciséis millones de pesos.

[REDACTED] Esta cifra no considera la posibilidad de que el capital social requerido por la CNBV pudiera utilizarse para sufragar los costos operativos iniciales que se generarán durante ese periodo".⁵⁵⁸

Al respecto, DUN no controvierte que "la inversión necesaria para poner en marcha una SIC pública rondaba los [REDACTED]" y que "[c]ada entidad que pertenezca al sector de [SIC] [...] pagará la cantidad de: \$1,271,881.20".

Asimismo, como lo señala el DPR, DUN reconoce que el capital social es parte de la inversión inicial y, además, considera que el capital social contemplado en el DPR de dieciséis millones (en pesos de dos mil cinco) es de [REDACTED]:

Es decir, conforme lo señalado por DUN, la inversión inicial para poner en marcha una SIC en el año de dos mil quince era un total de [REDACTED]⁵⁵⁹ la cual es una cifra mayor que la señalada en el DPR de [REDACTED].

El argumento de DUN resulta fundado, pero insuficiente, en virtud de las siguientes consideraciones.

El DPR se indicó que "una SIC requiere para entrar al mercado, al menos, de [REDACTED] Esta cifra no considera la posibilidad de que el capital social requerido por la CNBV pudiera utilizarse para sufragar los costos operativos iniciales que se generarán durante ese periodo".⁵⁶⁰

El monto de la inversión requerida para entrar al mercado que se incluye en DPR se compone de tres cifras: i) la cantidad de aproximadamente [REDACTED]⁵⁶¹ en el año dos mil quince, la cual representa, de acuerdo con BANXICO, los costos "[REDACTED]";⁵⁶² ii) la cantidad de un millón doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta y un pesos 20/100 M.N (\$1,271,881.20) en el año dos mil quince, correspondiente a los requerimientos financieros establecidos en la regulación por los servicios que presta la

⁵⁵⁸ La AI señaló las páginas 282 y 283 del DPR.

⁵⁵⁹ La AI señaló la página 292 del DPR.

⁵⁶⁰ Página 283 del DPR.

⁵⁶¹ En específico, [REDACTED].

⁵⁶² Véase la información en el folio 24928 del EXPEDIENTE. Véase también la información incluida en las páginas 152 y 182 del DPR. La información proporcionada por BANXICO corresponde a precios del año dos mil quince.



49829

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

CNBV;⁵⁶³ y iii) la cantidad de dieciséis millones de pesos (\$16,000,000.00) establecida como el capital social mínimo, íntegramente suscrito y pagado, que se incluyó en la resolución del año dos mil cinco por la cual la SHCP autorizó la constitución y operación de CC.⁵⁶⁴

De conformidad con los argumentos incluidos en la CONTESTACIÓN DUN, DUN reconoce que en México el monto de la inversión requerida para entrar al mercado incluye las dos primeras cantidades referidas [REDACTED]

[REDACTED]; no obstante, DUN considera que en el DPR se incluyó un supuesto arbitrario y totalmente equivocado al considerar como “*inversión adicional*”, según DUN, el capital social requerido para establecer una SIC, en lugar de considerarlo como parte del flujo de efectivo utilizado para pagar la inversión total requerida. En opinión de DUN, el monto del capital social requerido no debió sumarse a la inversión requerida para establecer una SIC debido a que dicho monto se utiliza para pagar dicha inversión.

El argumento de DUN es **fundado** toda vez que el monto referido en el DPR que corresponde al capital social mínimo, íntegramente suscrito y pagado, constituye un gasto que, entre otras cuestiones, se utiliza para pagar la inversión total requerida; es decir, el monto del capital social requerido no se debe sumar a la inversión requerida para establecer una SIC sino que se utiliza para pagar dicha inversión.

No obstante, como se indicó, DUN reconoce que en México el monto de la inversión requerida para entrar al mercado incluye las dos primeras cantidades referidas en el DPR [REDACTED]

[REDACTED] Al respecto, DUN no combate ni desvirtúa el análisis contenido en el DPR respecto de dichas cifras ni explica por qué, sin considerar el gasto que corresponde al capital social, el monto de la inversión requerida para establecer una SIC referido en el DPR no puede ser considerado una barrera a la entrada. En este sentido, las manifestaciones de DUN resultan **insuficientes** para desvirtuar el análisis contenido en el DPR respecto del monto de la inversión inicial requerido constituye una barrera a la entrada. Asimismo, como se desprende del análisis contenido en los apartados “B.7. Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada” y “Valoración y alcance de las pruebas” de la presente resolución, existen otras barreras a la entrada en el MR de PM.⁵⁶⁶

⁵⁶³ Véase la información en el folio 718 del EXPEDIENTE. Véase también la información incluida en las páginas 282 y 283 del DPR, así como el artículo 29-E, fracción XX de la Ley Federal de Derechos vigente para el año dos mil quince.

⁵⁶⁴ Véase la información incluida en la página 283 del DPR, así como la información pública disponible en la resolución de la SHCP que se publicó en el DOF el trece de junio de dos mil cinco: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2044473&fecha=13/06/2005&print=true

⁵⁶⁵ En específico, [REDACTED]

⁵⁶⁶ De conformidad con el análisis referido en el DPR y en los apartados de la resolución señalados, en el MR DE PM existen las siguientes barreras a la entrada: (a) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (b) la dificultad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos; (c) las restricciones normativas, ya que se requiere por lo menos un año para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC; (d) la presencia de economías de red; y (e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales USUARIOS.

Adicionalmente, DUN no tiene en cuenta que el mismo DPR consideró información adicional proporcionada por dicho agente económico durante la investigación de la que se desprende la existencia de diversos costos indispensables para empezar a operar una SIC. Como se desprende del DPR, la misma DUN reconoció que los costos que generan las actividades de planeación estratégica, desarrollo institucional y gestión de administración y finanzas, actividades indispensables para empezar a operar una SIC ascienden a [REDACTED] B

[REDACTED] B⁵⁶⁷

B.7.2. La cuota de mercado que se debe cumplir para que una SIC cubra sus costos operativos no es una barrera a la entrada.

DUN señaló.⁵⁶⁸

El análisis realizado en el DPR argumenta que una posible barrera a la entrada es la dificultad de obtener la participación de mercado suficiente para alcanzar la rentabilidad mínima en el mercado de IC.

Para este efecto, la AI calculó que el número de RC de PM que una nueva SIC debe comercializar para alcanzar rentabilidad en el mercado asciende a [REDACTED] B unidades.

De entrada, el análisis realizado por la AI es incompleto debido a que no se reporta en el DPR cuál es el costo medio de la producción de un RC de PM. Dicha información es indispensable ya que determina la velocidad en que la recta de los costos generados por RC llega al punto de equilibrio es decir, corresponde a la pendiente de la recta,⁵⁶⁹ y el no presentarlo refleja una arbitrariedad preliminar en el análisis.

Asimismo, no es claro qué costos fijos o indirectos considera la AI para elaborar el análisis de punto de equilibrio. La ordenada al origen de la recta de costos generados por RC, presentada en la Gráfica 23 del DPR, pareciera encontrarse entre [REDACTED]

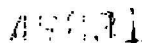
[REDACTED] Sin embargo, dicha información no se expone de manera clara en el análisis realizado por la AI, reflejando una completa arbitrariedad en el análisis.

Finalmente, la AI argumenta que CC no alcanzó dicha cifra, sin especificar en qué momento no la alcanzó y más importante, si en el último año del periodo investigado aún no la ha superado. De cualquier manera, esto no es un indicio

⁵⁶⁷ Como se indica en el DPR, dichos costos indirectos no dependen del volumen de producción o del número de USUARIOS afiliados a las SIC, por lo que dicha cantidad referida por DUN también puede ser considerada junto con el monto de la inversión requerida para que una SIC se incorpore al mercado.

⁵⁶⁸ Páginas 73 a 74 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵⁶⁹ DUN señaló: "En la ecuación $y = mx + b$, m es la pendiente (en este caso los Costos Unitarios, obtenidos como los Costos Variables o Directos entre el número de reportes producidos), x es el número de RC de PM vendidos y b es la ordenada al origen (en este caso los Costos Fijos o Indirectos). Fuente: Smith, Stanley K (2000), *Algebra*. Pearson Education. p. 334".



Eliminado: seis renglones y veintidos palabras



obstáculos para vender rentablemente los RC de PM que enfrenta CC o un competidor potencial en el mercado de IC son:

- i) La presencia de efectos de red que genera incentivos para que los USUARIOS actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, es decir, DUN;
- ii) La conducta observada en los USUARIOS de no afiliarse a más de una SIC, lo que significa que un potencial entrante deberá contar con una base de USUARIOS distinta a la que ya es atendida por las SIC establecidas; y
- iii) Las dos SIC son propiedad de sus principales USUARIOS (DUN es propiedad de los principales bancos del país, mientras que los dueños de CC son EMPRESAS COMERCIALES y un banco), lo que inhibe o reduce los incentivos para que los USUARIOS que son propietarios utilicen los servicios de cualquier otro buró.⁵⁷³

Adicionalmente,

[REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] 574

Por otra parte, la cuota mínima de mercado que debe alcanzar una SIC se cifi e al MERCADO RELACIONADO, por ello, la estimación se realizó considerando las ventas de RC de PM y no las ventas de RC de PF.

En este sentido, las dificultades que enfrentó CC o las dificultades que enfrentaría un competidor potencial para alcanzar la participación mínima de mercado podrían inhibir la entrada al mercado de IC, lo cual es reforzado por la nula entrada que durante quince años prevaleció en el mercado de IC de PM.⁵⁷⁵

En consecuencia, DUN no desvirtúa que la cuota mínima de entrada se constituya como una barrera a la entrada para posibles nuevos entrantes al mercado de IC de PM, por el contrario, reconoce que existe tal cuota mínima conforme a lo señalado en el DPR.

Los argumentos de DUN resultan infundados, de conformidad con lo siguiente:

En la siguiente tabla se presenta la información utilizada para calcular el punto de equilibrio de DUN, con base en la información presentada por dicho agente económico dentro del EXPEDIENTE.⁵⁷⁶

DUN - Estructura de Costos	
Variable	Valor
* *	

⁵⁷³ La AI señaló la página 286 del DPR.

⁵⁷⁴ La AI señaló la página 286 del DPR.

⁵⁷⁵ La AI señaló la página 78 de las CONTESTACIÓN DUN.

⁵⁷⁶ Véase la información contenida en los folios 16767 y 5802.



49033

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

* *

De la información presentada por DUN dentro del EXPEDIENTE se desprende que el análisis del DPR relacionado con la determinación del punto de equilibrio que corresponde a DUN es fundamentalmente correcto.⁵⁷⁷ Dicha información permite identificar el número de RC de PM que requiere vender DUN para igualar los costos a cero.⁵⁷⁸ A partir de la venta de ******* ******* RC de PM, los ingresos totales de DUN generados en el año dos mil catorce por la comercialización de los RC de PM superan sus costos de producción.

* *

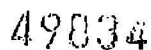
Eliminado: una gráfica, cuatro renglones y veinte palabras

Fuente: Información proporcionada por DUN que obra en los folios 16767 y 5802.

La información que permite identificar el punto de equilibrio de DUN fue proporcionada por él mismo, razón por la cual dicho agente económico no puede desconocerla. De hecho, en la

⁵⁷⁷ En la página 284 del DPR se indica que se requieren ******* RC de PM vendidos anualmente para que el ingreso unitario, estimado en ******* iguale el costo medio de producción y así alcanzar el punto de equilibrio de la rentabilidad.

⁵⁷⁸ En el DPR se indica que la comercialización de RC de PM es lo que le permite definir a una SIC si el ingreso al mercado le resulta rentable (dado que esa es la actividad que directamente le genera ingresos a una SIC). Por ese motivo, en el DPR el análisis respecto de la rentabilidad a la entrada identifica el punto de equilibrio relacionado con la ventas de RC de PM, aun cuando el MR definido en el DPR es el de la recopilación y procesamiento de IC de PM.



misma página 284 del DPR se indica que la información utilizada para calcular dicho punto de equilibrio proviene de la información proporcionada por DUN dentro del EXPEDIENTE. En relación con lo anterior, en el DPR se indica lo siguiente:

“De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AUTORIDAD INVESTIGADORA estima que se requieren de [REDACTED] RC de PM vendidos anualmente (estos reportes incluyen aquellos generados sólo con la información de una SIC, como aquellos producidos con la información de todas las SIC), para que el ingreso unitario, estimado en [REDACTED] [REDACTED] ⁵⁷⁹ iguale el costo medio de producción, y así alcanzar punto de equilibrio de la rentabilidad. A partir de dicho punto, los ingresos totales generados por la comercialización de los RC de PM ya superan sus costos de producción; por tanto, la sociedad ya sería rentable. Lo anterior fue estimado con base en información proporcionada por DUN & BRADSTREET para el año dos mil catorce.”

\$580

De este modo, carecen de fundamento los argumentos de DUN a través de los cuales señala que resulta poco clara o incompleta la forma en que se presenta en el DPR el análisis correspondiente a la identificación del punto de equilibrio de DUN.

Adicionalmente, DUN no presenta información adicional a través de su contestación al DPR que permita desvirtuar el análisis contenido en el DPR respecto del punto de equilibrio de DUN.

No obstante, sí es posible considerar que en caso de que CC tuviera la misma estructura de costos que DUN, requeriría de una cuota de [REDACTED] ** de mercado para cubrir sus costos. Lo anterior, considerando que en el año dos mil catorce se comercializaron [REDACTED] ** [REDACTED] 581 y que la cifra de [REDACTED] ** [REDACTED] RC de PM corresponde al [REDACTED] ** del total de dichas ventas.

Por lo que hace al argumento según el cual el análisis de evolución de participaciones de mercado medidas con base en el número de RC de PM vendidos, en conjunto con los RCI facturados por una u otra SIC, indica que CC ha incrementado significativa y sostenidamente

⁵⁷⁹ En la nota al pie de página correspondiente se indica lo siguiente: “

del EXPEDIENTE."

⁵⁸⁰ Véase la nota al pie incluida en la página 285 del DPR.

581 En específico, se comercializaron [REDACTED] RC de PM. Véase la información de DUN y CC respecto de las ventas de RC de PM referidas en los folios 5802 y 6034 bis.

su participación de mercado, denotando que la rentabilidad a la entrada no representó para CC una barrera a la entrada,⁵⁸² se indica lo siguiente:

- i. El análisis de participaciones de mercado que propone DUN implica sumar a las participaciones de mercado de CC (medidas en términos de unidades de RC de PM vendidas por CC) los RC que demandan los USUARIOS de DUN y que vende DUN a sus USUARIOS en los casos que incluyen IC proveniente de los USUARIOS de CC (esto es, cuando para la elaboración de RCI CC proporciona información correspondiente a HITS como SIC complementaria). No obstante, constituye un error considerar que las participaciones de mercado de cada SIC deben medirse a partir de la suma de los RC de PM que cada una vende más las unidades que representan los RCI que registraron HIT y que corresponden a la facturación realizada por la otra SIC. Lo anterior toda vez que dicha información no refleja la participación de la SIC que comercializa RC de PM a los USUARIOS;
- ii. En la página 319 del DPR se incluye la tabla denominada "*Tabla 71. Participación de mercado por venta de RC de PM*". En dicha tabla, se advierte que para cada año de dos mil doce a dos mil quince, CC no comercializó suficientes RC de PM para ser rentable. Por lo que hace al año dos mil quince, la misma tabla refiere que la información obtenida abarca hasta el mes de marzo de dos mil quince y refiere la venta de un número de RC de PM que equivaldría al [REDACTED] de la participación de mercado durante los tres primeros meses del año. De conformidad con dicha información, CC no habría alcanzado el punto de equilibrio en dicho periodo de tiempo pues habría vendido un número mucho menor a los [REDACTED] RC de PM necesarios para alcanzar dicho punto de equilibrio.⁵⁸³
- iii. DUN no acredita que CC hubiera alcanzado el punto de equilibrio en el año dos mil quince, toda vez que no presenta información que lo acredite a través de su contestación al DPR⁵⁸⁴ y debido a que el porcentaje que corresponde al [REDACTED] de participación de mercado por venta de RC de PM de CC que se refiere

⁵⁸² DUN señala también que CC alcanzó en dos mil quince una participación del [REDACTED] superior al [REDACTED] indicada por la AI como la cuota para comenzar a tener rentabilidad operativa. DUN refiere que ello ocurre sólo un año después del periodo considerado por la AI para el análisis de punto de equilibrio. Asimismo, DUN señala que debe tenerse en cuenta que CC se dedicó inicialmente a RC de PF y posteriormente amplió su licencia a PM.

⁵⁸³ En específico, en los primeros tres meses de dos mil quince, CC comercializó [REDACTED]

⁵⁸⁴ Véase el análisis correspondiente en el apartado "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución. Asimismo, se observa que en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN se incluyen dos cuadros relacionados con la venta de RC (véase el folio 34958). El cuadro inferior corresponde [REDACTED]

Como se indicó previamente, para efectos de la medición de las participaciones de mercado de CC no es correcto sumar los RCI emitidos por DUN al número de unidades de RC de PM vendidas por CC. En consecuencia, si se consideran únicamente las cifras correspondientes al número de unidades de RC de PM vendidas por CC que presenta DUN, se observa que, de acuerdo con la información presentada por DUN en la cuarta columna del segundo cuadro incluido en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN, [REDACTED]

en el DPR no refleja las ventas requeridas para alcanzar dicho punto de equilibrio; ello debido a que las cifras referidas en el DPR por lo que hace a las ventas de RC de PM de CC en el año dos mil quince corresponde únicamente a los tres primeros meses del año.

- iv. Incluso si CC llegara a alcanzar el punto de equilibrio en ese año, ello no significa que el análisis del DPR respecto de la rentabilidad esperada por un nuevo entrante no refleje la existencia de barreras a la entrada. No debe perderse de vista que CC entró al mercado de la comercialización de RC de PM en el año dos mil doce y, en ese momento, ya tenía más de seis años de participar en el mercado de la comercialización de RC de PF.

Lo anterior es relevante no sólo porque, en todo caso, le habría tomado a CC más de tres años (y no sólo uno como lo señala DUN) alcanzar el punto de equilibrio en el caso de la comercialización de RC de PM, sino también debido a que diversos costos fijos involucrados en la producción de RC de PM y RC de PF

B

En este sentido, si bien es cierto que considerando ambos productos le habría sido posible a CC alcanzar una cuota de mercado en la venta de RC de PM con mayor facilidad de manera rentable, es importante tener en cuenta que el análisis que corresponde a la rentabilidad a la entrada como una barrera a la entrada que se realiza en el DPR resulta aplicable para cualquier agente económico que quisiera entrar al mercado y no sólo para CC. De este modo, un nuevo entrante distinto a CC enfrentaría un escenario aún más complicado que el de CC para ser rentable en el mercado correspondiente a la comercialización de RC de PM, toda vez que tendría que entrar adicionalmente al mercado de personas físicas para esperar alcanzar la rentabilidad que obtuvo CC en el MR de la comercialización de RC de PM en el mismo periodo de tiempo, o tendría que alcanzar la misma escala durante un periodo más largo de tiempo.

En virtud de las consideraciones expuestas, el análisis contenido en el DPR respecto de la rentabilidad esperada por un entrante en caso de ingresar al mercado sí refleja el impacto de las barreras a la entrada señaladas en el DPR y en la presente resolución:⁵⁸⁵ las distintas barreras a la entrada identificadas en el DPR sí dificultan que un nuevo entrante pueda alcanzar la escala que le permita ser rentable y, por lo tanto, el conjunto de los elementos referidos en el DPR sí pueden considerarse barreras a la entrada.

⁵⁸⁵ Por lo que hace a la identificación de barreras a la entrada en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 59 de la LFCE, en el DPR se determinaron las siguientes: a) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; b) la posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos generados; c) las restricciones normativas (permisos y autorizaciones gubernamentales para operar como una SIC), ya que se requiere por lo menos un año para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC; d) la presencia de economías de red y e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales USUARIOS, los cuales desincentivan a estos últimos a utilizar los servicios de CC.

B.7.3. Los efectos de red no generan un incentivo a afiliarse con la SIC con una BD con más registros.

DUN manifestó:⁵⁸⁶

Como se mencionó, dado que no existen costos ni cuotas de afiliación para los USUARIOS a las SIC, la afirmación de la AI respecto de que los USUARIOS tienen incentivos a afiliarse con la SIC más grande es falsa.

Por lo tanto, las causas de la diferencia en los porcentajes de USUARIOS afiliados podrían atribuirse a otras circunstancias, como, por ejemplo, las prácticas en relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras, que no responden a una práctica anticompetitiva por nuestra parte.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵⁸⁷

El DPR señala que “[s]e presentan economías de red si para cada USUARIO del bien o servicio, el valor de utilizarlo crece a medida en que aumenta el número de otros USUARIOS que utilizan también dicho bien o servicio.”⁵⁸⁸ Por ello, en el mercado de IC “las economías de red favorecen la afiliación de USUARIOS, preferentemente, a la SIC que cuente con la [BD] de mayor magnitud”.⁵⁸⁹

El DPR indica que la existencia de los efectos de red y la integración vertical en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM genera que los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la BD DE PM de mayor dimensión. En este sentido, si bien no existe un cobro por la afiliación a las SIC sí existen costos que asumen los USUARIOS afiliados a éstas al presentar consultas entre SIC con motivo de un RC, en el DPR se señala lo siguiente:

“[...] al no intercambiarse la BPD DE PM entre [CC] y [DUN], se genera que [CC] tenga más casos de HIT en comparación con [DUN] y, por tanto, el USUARIO que solicite un RC a [CC] asume con mayor recurrencia un costo adicional por la información proporcionada por [DUN]. Lo cual hace menos competitivo a [CC], en la medida en que la magnitud de la [BD de PM] sea menor en comparación con la de [DUN].”⁵⁹⁰

Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características.

Por otra parte, DUN no sustenta que “las causas de la diferencia en los porcentajes de [USUARIOS] afiliados podrían atribuirse a otras circunstancias, como, por ejemplo, las

⁵⁸⁶ Página 75 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵⁸⁷ Páginas 62 a 63 de la VISTA DUN.

⁵⁸⁸ La AI señaló la página 104 del DPR.

⁵⁸⁹ La AI señaló las páginas 105 y 279 del DPR.

⁵⁹⁰ La AI señaló las páginas 316 y 317 del DPR.

prácticas en relación con &[sic] resguardo y confidencialidad de la información u otras”, ya que solo realiza un argumento general al respecto.

Por lo anterior, DUN no desvirtúa la existencia de los efectos de red que generan que los USUARIOS tengan incentivos a afiliarse a la SIC con mayores registros en sus BD.

El argumento de DUN es **infundado**, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Como lo señala el DPR, se presentan economías de red si para cada USUARIO del bien o servicio, el valor de utilizarlo crece a medida en que aumenta el número de otros USUARIOS que utilizan también dicho bien o servicio. En este sentido, el reconocimiento de DUN de la existencia de economías de red en el mercado de IC también implica reconocer que la red más grande tiene mayor valor para los USUARIOS.

Por otra parte, a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores. Ello implica que, en promedio, un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de la otra SIC.

La tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. En promedio, **B** **B**; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, es más probable obtener un HIT cuando los USUARIOS solicitan información a CC y éste debe solicitarla a CC, por lo que los USUARIOS de CC pagan más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.

Incluso DUN señala en la CONTESTACIÓN DUN que CC “*resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI*”.⁵⁹¹ En este sentido, el mismo DUN reconoce que el tamaño de la BD de PM tiene un impacto en la probabilidad de obtener un HIT al realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI. En este sentido, las mismas manifestaciones de DUN tienden a demostrar que los USUARIOS de CC resienten más el costo que representa pagar la tarifa de intercambio y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN, es decir, con la SIC que tiene la BD con mayor número de registros.

Como se indicó en el apartado, “*Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características*” de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, el que no exista un costo de afiliación a las SIC no quiere decir que los USUARIOS que optaran por contar con dos proveedores no tengan que asumir costos adicionales. Entre dichos costos se encuentran los relacionados con la misma afiliación o, incluso, con la proveeduría o el abastecimiento de la IC vía electrónica a través de formatos y protocolos distintos, los cuales deben llenar los USUARIOS.

⁵⁹¹ Página 122 de la CONTESTACIÓN DUN.

Finalmente, en el DPR se indica que las economías de red, en conjunto con las barreras que derivan de los vínculos accionarios de las SIC -como se explicó en el apartado “DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume” de la presente resolución, los intereses de DUN se encuentran alineados con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito- dificultan la posibilidad de alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentable.

En este sentido, el DPR refiere diversos elementos tendientes a explicar la forma en que la presencia de economías de red favorece a la SIC que cuenta con la mayor BD y condiciona el acceso al mercado para cualquier empresa interesada en incorporarse a la industria. En lugar de desvirtuar las razones y los elementos analizados en el DPR para sustentar la existencia de las barreras a la entrada señaladas, DUN afirma que podrían existir otras causas que podrían explicar la diferencia en los porcentajes de usuarios afiliados a CC y DUN, “como las prácticas en relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras”. No obstante, DUN no presenta elemento de convicción alguno que sustente dicha afirmación, ni especifica cómo es que “las prácticas en relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras [causas no identificadas]” podrían explicar la diferencia en los porcentajes de usuarios afiliados de ambas SIC.

B.8. Manifestaciones respecto del análisis de la fracción V del artículo 59 de la LFCE

B.8.1. El análisis elaborado por la AI respecto a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM es infundado.

DUN manifestó:⁵⁹²

Con relación a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM, la AI señala que “[...] la alta participación de mercado que mantiene DUN no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que esta SIC provee”.⁵⁹³ No obstante, los únicos argumentos de la AI para afirmar lo anterior son que:

- i) en el PERIODO DE INVESTIGACIÓN DUN ha sacado al mercado B productos de valor agregado nuevos, mientras que CC B, y
- ii) que el BANXICO opina que “[o]tra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado para empresas. [...]”.⁵⁹⁴

Sin embargo, la AI no presenta información que permita concluir que los B productos desarrollados por DUN representen poca innovación en el mercado, ni que justifiquen la opinión de BANXICO.

Adicionalmente, esto es contradictorio con la evidencia internacional, respecto a la profundidad (entendida como calidad) de la IC en México. Como lo refiere la

⁵⁹² Página 76 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁵⁹³ DUN señaló la página 291 del DPR.

⁵⁹⁴ DUN señaló la página 291 del DPR.

propia COFECE en su "*Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados*",⁵⁹⁵ México obtiene la calificación más alta posible de un indicador internacional calculado por el Banco Mundial, que mide la profundidad de la IC disponible en distintas economías del mundo.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁵⁹⁶

DUN se limita a señalar que la calificación de la profundidad de la IC en México es alta, ello sin hacer referencia: i) al documento o indicador en el cual, a su dicho, es posible encontrar esa calificación, ii) al significado del concepto de "profundidad de la IC", iii) a la metodología utilizada en su cálculo; iv) a cómo se vincula con el mercado de IC de PM. Además, DUN no se pronuncia respecto de la falta de desarrollo de productos de IC de PM.

Por lo tanto, DUN no desvirtúa que en el mercado de IC de PM "*la alta participación de mercado que mantiene DUN no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que esta SIC provee*" en virtud del bajo desarrollo de productos de valor agregado, lo que es una situación corroborada por BANXICO.⁵⁹⁷

El argumento de DUN resulta **infundado**, por una parte, y **parcialmente fundado**, pero **insuficiente**, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Es cierto que en el "*Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados*" publicado por la COFECE se reconoce que de acuerdo con *Doing Business*, México se compara favorablemente con otros países en la profundidad de su sistema de IC, calificando positivamente en los seis aspectos que se evalúan;⁵⁹⁸ no obstante, ni la profundidad del sistema de IC ni la calidad de la IC constituyen indicadores que permitan evaluar o calificar como suficiente o insuficiente la innovación y el desarrollo de productos de valor agregado por las SIC.

El índice de profundidad hace referencia al alcance y calidad de la IC, así como su accesibilidad en registros públicos o privados. En este sentido, el índice no muestra el grado de desarrollo del mercado de IC ni indica un nivel elevado o significativo de productos de valor agregado.

En consecuencia, el argumento de DUN respecto de la profundidad de la IC es **infundado** y no desvirtúa el análisis incluido en el DPR respecto de la ausencia de innovación y desarrollo

⁵⁹⁵ DUN indicó: "*Comisión Federal de Competencia Económica (2014). Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados. México. Pp. 345 - 349*"

⁵⁹⁶ Página 64 de la VISTA DUN.

⁵⁹⁷ La AI señaló la página 291 del DPR.

⁵⁹⁸ Los aspectos evaluados son los siguientes: (i) se distribuyen datos sobre las empresas y los individuos; (ii) se distribuye información tanto positiva como negativa; (iii) se distribuye información tanto de comercios y compañías de servicios públicos como de entidades financieras; (iv) se distribuye información histórica de más de dos años; (v) se distribuye información de créditos cuyo saldo es menor a 1% (uno por ciento) del ingreso per cápita; y (vi) tienen derecho los deudores a acceder a su información.



49341

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

de nuevos productos de valor agregado en el mercado que corresponde a la comercialización de productos de IC de PM.

Por otra parte, resulta **parcialmente fundado, pero insuficiente** el señalamiento de DUN según el cual la AI no presenta información que permita concluir que los **B** productos desarrollados por DUN representen poca innovación en el mercado.

Por lo que hace al análisis correspondiente a la fracción V del artículo 59 de la LFCE, el DPR refiere el señalamiento de BANXICO según el cual en los últimos años: *"Otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado para empresas. Los principales productos ofrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas físicas."*⁵⁹⁹ No obstante, el DPR no refiere elementos que permitan estimar el número de los productos de valor agregado que podrían o deberían existir en México dadas las características particulares de los mercados en los que se comercializa la IC en nuestro país. En particular, en el DPR no se analizan elementos relacionados con el número y grado de sofisticación de los usuarios y los servicios financieros para efectos de determinar si el número de los productos de valor agregado para PM ofrecidos por DUN es suficiente o no.

No obstante, dicho argumento es **insuficiente** ya que DUN no toma en cuenta ni combate que en el DPR se refiere no sólo el desarrollo de productos de valor agregado de PM generados por DUN, sino que también indica que CC **B** productos de valor agregado para el segmento de PM y resalta que *"el número de productos de valor agregado generados por ambas SIC refleja un bajo desarrollo en este mercado"*.⁶⁰⁰

Si bien de la información contenida en los folios 598 y 599 del EXPEDIENTE se desprende que CC **B** de valor agregado, no es posible identificar **B**
B

Por otra parte, en adición a lo señalado en el DPR en relación con (i) lo manifestado por BANXICO respecto del pobre desarrollo de productos de valor agregado en México y (ii) respecto de la generación de productos de valor agregado por CC en el segmento de PM, debe tenerse en cuenta que sí obran dentro del EXPEDIENTE elementos de convicción suficientes para acreditar que: (a) la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes; (b) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa; (c) la información proporcionada a través del intercambio puntual **B**

B y (d) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los

⁵⁹⁹ Folio 873.

⁶⁰⁰ Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado dentro del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución en el sentido que, en el presente caso, no se logró demostrar que el número de productos de valor agregado refleja un bajo desarrollo en el mercado.

RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

B.9. Manifestaciones respecto del análisis de la fracción VI del artículo 59 de la LFCE

B.9.1. Posicionamiento de un producto no es sinónimo de alta participación en el mercado.

DUN manifestó:⁶⁰¹

En el análisis de PS se incluye como criterio a considerar el grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el MR. Específicamente, la AI argumenta que los productos que comercializamos son los mejores posicionados considerando la participación del mercado que tenemos. Sin embargo, el posicionamiento de un producto en el mercado no puede ser comparado directamente con el nivel de participación en el mercado. Esto se fundamenta en las siguientes razones:

i) Dos empresas con la misma participación de mercado pueden tener uno u otro producto mejor posicionado en el mercado. Dicho posicionamiento depende de factores tales como el precio del producto, la publicidad y factores diferenciadores del producto.⁶⁰²

ii) Dadas las características del MERCADO INVESTIGADO y dado que CC comenzó a operar quince años después que DUN en el segmento de PM, es natural observar una mayor participación de mercado por DUN.

Por lo tanto, la participación en el mercado no es condición suficiente para determinar que tengo mejor posicionamiento de mis productos en el mercado y, por ende, que constituye una barrera de entrada a competidores actuales y potenciales.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶⁰³

El DPR se señaló que la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada en el MR DE PM debido a que no hay sustitutos factibles y sólo pueden abastecerse de la misma por los USUARIOS o las SIC. Asimismo, se señaló que los RC y los demás productos de IC de PM están bien posicionados por la relevancia que tienen en el proceso de otorgamiento de crédito.⁶⁰⁴

En este sentido, DUN no combate estos elementos del DPR y, por tanto, no logra desvirtuar que es la mejor posicionada en el MR de PM. Además, reconoce que su alta participación de mercado es resultado de las características del MERCADO INVESTIGADO

⁶⁰¹ Página 75 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶⁰² DUN refiere la siguiente fuente bibliográfica: Munuera Alemán, José L. y Ana I. Rodríguez Escudero, Estrategias de Marketing: Un enfoque basado en el proceso de dirección, ESIC Editorial, 2ª edición, 2012.

⁶⁰³ Páginas 63 a 64 de la VISTA DUN.

⁶⁰⁴ La AI señaló las páginas 291 y 292 del DPR.

y de que CC comenzó a operar quince años después, lo cual supone la existencia de barreras a la entrada a competidores actuales y potenciales.

El argumento de DUN resulta **infundado**, por una parte, e **inoperante**, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos.

El DPR no indica que la participación de mercado sea suficiente para determinar que los productos de DUN se encuentren mejor posicionados en el mercado y tampoco afirma que las participaciones de mercado o el posicionamiento de los productos de DUN en el mercado constituyan una barrera de entrada. En lugar de ello, el DPR señala que la IC que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el MR DE PM debido a la ausencia de sustitutos factibles. Lo anterior de conformidad con el análisis incluido en el DPR que corresponde a la fracción VI del artículo 59 de la LFCE⁶⁰⁵ y a las fracciones I, II y III del artículo 8 de las DR.⁶⁰⁶

“La información crediticia que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el mercado relevante debido a la ausencia de sustitutos factibles. Las SIC como DUN & BRADSTREET o CÍRCULO DE CRÉDITO sólo pueden abastecerse de la información crediticia aportada por los USUARIOS o por la otra SIC con quien comparten el mercado. Asimismo, los RC y el resto de los productos de información crediticia de PM están bien posicionados debido a la relevancia que tienen como elemento indispensable en el proceso de otorgamiento de crédito.

En este sentido, DUN & BRADSTREET es la SIC mejor posicionada en el mercado de información crediticia de PM. Asimismo, CÍRCULO DE CRÉDITO no tiene una participación significativa en este mercado, como lo muestran las participaciones de mercado previamente mencionadas.

Por otro lado, con relación a las importaciones, considerando la naturaleza de esta industria y del mercado (sin perder de vista que la dimensión del mercado relevante es nacional), no es posible importar o comercializar la información desde otras regiones o países.

Finalmente, con respecto a los costos existentes de acudir a otros proveedores, para CÍRCULO DE CRÉDITO no existe alternativa de a quién recurrir para acceder a la información crediticia de los USUARIOS afiliados a DUN & BRADSTREET. Por tanto, los costos de recurrir a una alternativa, como proveedor de información crediticia, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.”⁶⁰⁷

Es cierto que el análisis de las participaciones en el mercado no resulta una condición suficiente para determinar que DUN tiene mejor posicionamiento de sus productos en el mercado. No obstante, dicho señalamiento no corresponde a la imputación contenida en el DPR. Como se desprende del texto transcrito, en el DPR se señaló que la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada en el MR DE PM debido a que no hay sustitutos

⁶⁰⁵ La fracción VI del artículo 59 de la LFCE establece lo siguiente: “Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [...] deberán considerarse los siguientes elementos: [...] VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.”

⁶⁰⁶ El artículo 8 de las DR establece lo siguiente: “ARTÍCULO 8. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, se deben considerar los criterios siguientes: I. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante; II. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación, y III. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a otros proveedores.”

⁶⁰⁷ Véanse las páginas 291 y 292 del DPR.

factibles y que las SIC sólo pueden abastecerse de la IC por los USUARIOS o a través de la otra SIC. Asimismo, se indicó en el DPR que los RC y los demás productos de IC de PM están bien posicionados por la relevancia que tienen en el proceso de otorgamiento de crédito.

El señalamiento relativo a las bajas participaciones de mercado de CC constituye un elemento adicional tendiente a complementar el análisis respecto del posicionamiento de los bienes o servicios en el MR debido a la ausencia de sustitutos factibles. En este sentido, es infundado el argumento de DUN según el cual la AI indebidamente concluyó que las participaciones de mercado son suficientes para determinar que DUN tiene mejor posicionamiento de sus productos en el mercado. Asimismo, ni en el DPR ni en la presente resolución se afirma que las participaciones de mercado o el posicionamiento de los productos de DUN en el mercado constituyan una barrera de entrada.

Por otra parte, es cierto que al realizar el análisis que corresponde a la fracción VI del artículo 59 de la LFCE y al artículo 8 de las DR, el DPR no evalúa los elementos diferenciadores que señala DUN respecto del posicionamiento de sus productos en el mercado (ya sea a través de un análisis del precio de los productos o de elementos distintos al precio, como la calidad de dichos productos o la publicidad). No obstante, el DPR refiere otros elementos respecto de las razones por las cuales la AI consideró que la información crediticia que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el mercado. DUN no combate dichos elementos. En particular, DUN no combate lo señalado en el DPR respecto a que la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada en el MR DE PM debido a que no hay sustitutos factibles y que las SIC sólo pueden abastecerse de la IC por los USUARIOS o las otras SIC.

Por otra parte, DUN no combatió los demás elementos referidos en el DPR en relación con los supuestos normativos previstos en las fracciones II y III del artículo 8 de las DR. Al respecto, en la página 292 del DPR se indicó lo siguiente:

“Por otro lado, con relación a las importaciones, considerando la naturaleza de esta industria y del mercado (sin perder de vista que la dimensión del mercado relevante es nacional), no es posible importar o comercializar la información desde otras regiones o países.

Finalmente, con respecto a los costos existentes de acudir a otros proveedores, para CÍRCULO DE CRÉDITO no existe alternativa de a quién recurrir para acceder a la información crediticia de los USUARIOS afiliados a DUN & BRADSTREET. Por tanto, los costos de recurrir a una alternativa, como proveedor de información crediticia, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.”

C. CONDUCTA

C.1. Correcta definición del SEGMENTO CO.

DUN manifestó:⁶⁰⁸

⁶⁰⁸ Páginas 78 a 81 de la CONTESTACIÓN DUN.



179065

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

El concepto de SEGMENTO CO es incorrecto, lo que incide en el análisis de la conducta imputada (con base en éste la AI determina que la negativa de proporcionar la BPD de PM continuó después de la firma del CONTRATO DUN Y CC). El SEGMENTO CO no forma parte de la BPD, al no formar parte del HC.

Como señala la AI, en el CONTRATO DUN Y CC [REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Asimismo, el término de "*experiencias comerciales*" se refiere a información de los USUARIOS e incluye a cualquier ENTIDAD FINANCIERA, EMPRESA COMERCIAL o SOFOM. Es decir, el término no se limita a información de las EMPRESAS COMERCIALES. Además, las "*experiencias comerciales*" pueden contener información tanto positiva como negativa (mientras que la BPD sólo tiene información negativa). Por lo anterior se concluye que el "*Verdadero Segmento CO*" no ha formado parte del HC y en consecuencia tampoco de la BPD de PM de DUN.

La AI omite probar por qué define el SEGMENTO CO como el HC de las PM que es reportado por las EMPRESAS COMERCIALES. Tomar como válido el concepto, es decir, estimar que las "*experiencias comerciales*" forman parte de la BPD, implicaría que: (i) la BPD incluyera información positiva y (ii) en caso de que DUN se negará a proporcionar dicha información, se estaría negando a entregar toda la BPD, puesto que al referirse a las "*experiencias comerciales*" el CONTRATO DUN Y CC se refiere a información de todos los USUARIOS y no únicamente de las EMPRESAS COMERCIALES.

En esos términos, el "*Verdadero Segmento CO*" únicamente se refiere a las "*experiencias comerciales*" y no constituye parte del HC. Por el contrario, se refiere a los montos pendientes de pago incluidos en facturas agrupadas de CLIENTES emitidas por un mismo proveedor, que se actualizan mensualmente. Por ejemplo, un determinado monto pendiente de pago se verá reflejado en el expediente de un CLIENTE en un mes determinado y, en el mes siguiente, este dato será actualizado por el USUARIO respectivo, según si la o las facturas respectivas fueron o no pagadas.

Asimismo, las "*experiencias comerciales*" no constituyen operaciones crediticias, en tanto que no constituyen ni créditos ni operaciones análogas. De conformidad con la CIRCULAR 17/2014, las ENTIDADES FINANCIERAS se encuentran obligadas a

609 DUN indica lo siguiente:

[REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED]

proporcionar al menos a una SIC la IC de sus CLIENTES de manera completa y veraz, siendo que de conformidad con dicha circular la IC se refiere a las operaciones crediticias que realicen las ENTIDADES FINANCIERAS con sus CLIENTES. En ese sentido, no existe siquiera una obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar las “*experiencias comerciales*”, por lo que sería ilógico que éstas sí se computaran como parte de la BPD.

La CNBV aprobó los términos del CONTRATO DUN Y CC,⁶¹⁰ lo que toma relevancia si se considera que el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la información que se comparta para el RCI sea completa (incluyendo el HC del CLIENTE). A sabiendas de que el CONTRATO DUN Y CC no incluía la compartición de las “*experiencias comerciales*” (“*Verdadero Segmento CO*”), la CNBV aprobó su contenido. Es decir, la CNBV estimó que la información compartida para la elaboración del RCI se encontraba completa no obstante que el “*Verdadero Segmento CO*” no se compartía.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶¹¹

La AI reitera las definiciones de SEGMENTO CO y EMPRESA COMERCIAL expuestas en el glosario del DPR. El hecho que se mencione que [REDACTED] B [REDACTED] conforme al CONTRATO DUN Y CC no modifica la naturaleza del concepto. El SEGMENTO CO de los RC de PM, no sólo forma parte del RC en términos del CONTRATO DUN Y CC, sino que también [sic], de conformidad con el artículo 36 Bis de la LRSIC, dado que las SIC están obligadas a proporcionar la información de manera oportuna, completa y sin distorsiones en relación con la que recibieron de los USUARIOS. Es decir, DUN está obligada por la LRSIC a entregar la información completa en relación con aquella que recibe, como parte de los RC que intercambie con otras SIC. Así, puesto que DUN no ha desvirtuado que reciba de las EMPRESAS COMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas, se concluye que DUN se encuentra en posibilidades de entregarla.

Por lo que hace al concepto de “*experiencia comercial*”, DUN no justifica por qué debe ser definida de manera genérica como “*información de los usuarios*”, por lo que su manifestación debe ser desestimada.

Además, DUN se equivoca al manifestar que la AI señaló que el SEGMENTO CO forma parte de la BPD, toda vez que en el DPR se distingue claramente el SEGMENTO CO (el cual pertenece al intercambio puntual, a través del RC) de la BPD de PM y no se señala que uno forma parte del otro.

La CIRCULAR 17/2014 regula principalmente, en materia de comisiones y sólo respecto de las ENTIDADES FINANCIERAS. Por tal razón, resulta irrelevante que dicho instrumento prevea la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar las “*experiencias*

⁶¹⁰ DUN intenta acreditar lo anterior mediante: “el oficio [REDACTED] B [REDACTED] de fecha [REDACTED] B [REDACTED] emitido por la SHCP que se exhibe como Anexo 10”.

⁶¹¹ Páginas 65 a 68 de la VISTA DUN.

comerciales” a las SIC, debido a que tal como se definió en el DPR, el SEGMENTO CO es el reportado por las EMPRESAS COMERCIALES.

Es la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en su artículo 23 bis 1, la que establece la obligación de las EMPRESAS COMERCIALES de proporcionar la información relativa a sus operaciones crediticias o análogas. En términos del artículo 36 bis de la LRSIC, si la SIC se negara a proporcionar dicha información, estaría incumpliendo la normativa que le obliga a proporcionar la información de sus CLIENTES de manera completa, veraz y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los USUARIOS.

Adicionalmente, DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

Es **infundado** el argumento de DUN relativo a que es incorrecta la definición del SEGMENTO CO.

DUN realiza diversas manifestaciones para acreditar que el SEGMENTO CO no forma parte de la BPD. Al respecto, el DPR define al SEGMENTO CO como el “*Segmento de la [BD] de [DUN] o de [CC] que comprende el historial crediticio proveniente de las PM que es reportado por las EMPRESAS COMERCIALES*”.⁶¹² En este sentido, el DPR no define el SEGMENTO CO como parte de la BPD sino de la BD de DUN y CC, lo cual es correcto al ser información proveniente de USUARIOS que las SIC incorporan en su BD.

Por lo anterior, tomar como válido el concepto del SEGMENTO CO no implica que: (i) la BPD incluya información positiva, sino que implica que la BD de las SIC incluye información positiva y negativa, lo cual es acorde con la normativa que regula a las SIC; ni que (ii) DUN se estaría negando a entregar toda la BPD (la cual además sí se niega a proporcionar), pues la imputación relativa al SEGMENTO CO se refiere a que cuando se realiza el intercambio puntual (no el masivo a través de la BPD), DUN omite entregar la información relativa al SEGMENTO CO.

Por otro lado, también es **infundado** que con base en la definición del SEGMENTO CO la AI determinó que la negativa de proporcionar la BPD de PM continuó después de la firma del CONTRATO DUN Y CC.

En el DPR la AI indica que la PMR imputada consta de dos conductas:⁶¹³

- i) La negativa de compartir con CC la BPD de PM en términos del artículo 36 de la LRSIC, desde agosto de dos mil doce, sin que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN se tuviera evidencia de haber cesado tal negativa; y
- ii) La negativa de compartir con CC la información completa para los RC de PM en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC (particularmente la correspondiente al SEGMENTO CO), desde agosto de dos mil trece, sin que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN se tuviera evidencia de haber cesado tal negativa.

⁶¹² Página 13 del DPR.

⁶¹³ Páginas 55 a 57 y 294 a 313 del DPR.

En este sentido, el concepto de SEGMENTO CO no trasciende a la consideración de la AI relativa a que la negativa de proporcionar la BPD de PM continuó después de la firma del CONTRATO DUN Y CC, pues la razón señalada al respecto en el DPR es que hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN no se tiene evidencia de que haya cesado tal negativa.⁶¹⁴

Incluso, durante el PSFJ DUN no negó la omisión de intercambiar la BPD ni argumentó que ya la estuviera intercambiando, sino que manifestó que existen causas justificadas para no realizar el intercambio referido.

De esta manera, es claro que la omisión de intercambiar la BPD continuó después de la firma del CONTRATO DUN Y CC, con independencia de la omisión de intercambiar el SEGMENTO CO.

Ahora bien, también es infundado que la CNBV haya aprobado el CONTRATO DUN Y CC sabiendo que no incluía la compartición de las “*experiencias comerciales*”.

El hecho de que la CNBV haya aprobado la tarifa que DUN cobraría a los USUARIOS por los RCI de PM a que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC, no significa que la CNBV se pronunció o autorizó todas las cláusulas del contrato referido. Al respecto, el artículo 36 bis de la LRSIC señala que “[...] Las tarifas que las Sociedades deberán ofrecer a sus Usuarios por los Reportes de Crédito a que se refiere este artículo, serán autorizadas por la Comisión [...]” sin hacer referencia a que el resto del contenido contractual requiera autorización de la CNBV.

Incluso, de la copia simple del oficio número [REDACTED] B emitido el [REDACTED] B [REDACTED] por funcionarios públicos de la CNBV, el cual fue presentado por DUN como anexo de la CONTESTACIÓN DUN,⁶¹⁵ y es valorado en el apartado “IV. VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS”, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se desprende que la CNBV únicamente se pronunció sobre la tarifa que DUN cobraría a los USUARIOS por los RCI de PM y no sobre el contenido de las demás cláusulas del CONTRATO DUN Y CC, en específico, no estimó que la información compartida para la elaboración del RCI se encontraba completa no obstante que el “*Verdadero Segmento CO*” no se compartía.

A mayor abundamiento, al cuestionársele a la CNBV durante la investigación del EXPEDIENTE sobre si dentro de los segmentos que debe enviar la SIC complementaria a la SIC generadora

⁶¹⁴ En la página 55 del DPR se indica lo siguiente: “[...] se cuenta con elementos suficientes para presumir que la conducta investigada, consistente en diversos actos de DUN & BRADSTREET, que tuvieron como propósito negarse a proporcionar a CÍRCULO DE CRÉDITO la información correspondiente a la BPD de PM, así como del SEGMENTO CO en los RC de PM, se ha actualizado desde el mes de agosto de dos mil doce, fecha en que se debió de haber dado el intercambio de la BPD, y desde agosto de dos mil trece DUN & BRADSTREET no ha compartido de manera completa la información crediticia para los RC de PM. Si bien es cierto que dichos actos se dieron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, también lo es que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN, y considerando la información derivada de la investigación, no se cuenta con evidencia de que se haya dado el intercambio de la BPD entre DUN & BRADSTREET y CÍRCULO DE CRÉDITO, ni que DUN & BRADSTREET haya compartido a CÍRCULO DE CRÉDITO el SEGMENTO CO en los RC de PM, por lo que se trata de acciones reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha información a CÍRCULO DE CRÉDITO.”

⁶¹⁵ Folio 34954 a 34956.



47089

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

se encuentra la información relacionada con los créditos comerciales, la CNBV respondió lo siguiente:

**

**

Así, la CNBV manifestó que

De esta manera, la manifestación de la CNBV implica que, a su parecer,

Asimismo, lo

manifestado por la CNBV es claro respecto a que, en su opinión,

Eliminado: cuatro párrafos, nueve renglones y treinta y un palabras

⁶¹⁶ Folios 26377 y 26378.

Incluso, el mismo DUN reconoce que “[...] el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la información que se comparta para el [RCI] sea completa [...]”; no obstante, indica que a pesar de ello la CNBV aprobó el contenido del CONTRATO DUN Y CC sin requerir a DUN que entregara la información que la AI incluyó en el DPR dentro de la definición del SEGMENTO CO, lo cual como se señaló no fue así.

Ahora bien, que en el CONTRATO DUN Y CC se indique que **B** **B**, no implica que DUN no tenga la obligación de compartir de manera completa la información que obra en su BD.

Al respecto, y en adición a lo señalado previamente, tal como lo señaló la SCJN los RCI deben incluir la IC contenida en la BD de las demás SIC, sin que el artículo 36 bis sujete dicha obligación a la celebración de contrato alguno.⁶¹⁷

A mayor abundamiento, el artículo 36 Bis de la LRSIC, señala que:

“Artículo 36 Bis. Las Sociedades al emitir Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir, la contenida en las bases de datos de las demás Sociedades. [...]”

[...]

Corresponderá al director general de la Sociedad asegurarse de la implementación de procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envío de información a otras Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios. [Énfasis añadido].”

Así, la obligación de incluir en los RC la información contenida en las BD de las demás SIC, implica la obligación de compartir entre sí, la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente recibieron de los USUARIOS. De esta manera, las SIC deben proporcionar a través del intercambio puntual la totalidad de la IC que obra en sus BD sin distorsionar o proporcionar de manera incompleta aquella que recibieron de los USUARIOS.

Lo anterior, a fin de integrar RC simétricos y confiables, lo cual configura una obligación específica para el ejercicio de la actividad de las SIC, toda vez que la misma está sujeta a las exigencias, modalidades, obligaciones y restricciones impuestas por el Estado a través de la ley, tal como lo señala la Primera Sala de la SCJN:

“[...]”

⁶¹⁷ En el amparo en Revisión 52/2012, la Primera Sala de la SCJN (página 57) indicó que: *“En efecto, el artículo 36 Bis, en la parte que interesa, señala que las sociedades, al emitir reportes de crédito, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir la contenida en las bases de las demás sociedades de información crediticia. Esto es, configura una obligación específica para el ejercicio de su actividad, sin que la sujeta a la celebración de contrato alguno [énfasis añadido].”*

172. En efecto, el artículo 36 Bis, en la parte que interesa, señala que las sociedades, al emitir reportes de crédito, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir la contenida en las bases de las demás sociedades de información crediticia. Esto es, configura una obligación específica para el ejercicio de su actividad, sin que la sujete a la celebración de contrato alguno.

173. Cabe destacar que la obligación referida responde, específicamente, a la materia en la cual se encuentra inserta la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a saber, la financiera, en la cual el Estado funge como rector y, por ende, puede sujetar a determinadas modalidades el ejercicio de las actividades para las cuales son autorizadas todas las instituciones del sector financiero, entre ellas, las sociedades de información crediticia, a fin de que se cumpla con su finalidad, esto es la de contribuir al desarrollo económico del país ofreciendo servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer la experiencia de pago de empresas y personas físicas, lo que a su vez, contribuye a formar la cultura del crédito entre la población, al tiempo de promover un sano consumo interno.

174. En otras palabras, tal como se ha precisado en los puntos 122 y 123 de esta resolución, la actividad que ejercen las Sociedades de Información Crediticia se encuentra sujeta a una autorización previa por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual implica que el ejercicio de dicha actividad no queda al libre y absoluto arbitrio de las sociedades de información, sino que está sujeta a las exigencias, modalidades, obligaciones y restricciones impuestas por el Estado a través de la ley.

[...]

197. En relación con la obligación que impone el artículo reclamado [artículo 36 Bis de la LRSIC] a las sociedades de información crediticia, de compartir entre sí la información de sus bases de datos, esta Sala considera que no transgrede los principios de libre concurrencia y competencia previstos en el artículo 28 constitucional, ni incentiva prácticas monopólicas, como pretende la quejosa recurrente, pues con dicha obligación no se otorga a favor de determinadas personas el aprovechamiento exclusivo de la información referida, ni tiene el alcance de perjudicar al público en general o a cierta clase social. Se llega a la anterior consideración, en virtud de que el supuesto normativo que se comenta es general, abstracto e impersonal, de modo tal que todas las sociedades reguladas en el precepto reclamado están obligadas a compartir entre sí la información de su base de datos, a efecto de integrar reportes de crédito simétricos y confiables que, en última instancia, lejos de perjudicar a persona alguna o en general a la sociedad, satisface la finalidad de la creación de dichas sociedades, es decir, contribuir al desarrollo económico del país ofreciendo servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer la experiencia de pago de empresas y personas físicas, lo que a su vez, contribuye a formar la cultura del crédito entre la población, al tiempo de promover un sano consumo interno. [Énfasis añadido].⁶¹⁸

⁶¹⁸ Véase la versión pública del amparo en Revisión 54/2012, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en la sesión correspondiente al día nueve de mayo de dos mil doce, disponible en la página de Internet: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=135453>. Páginas 57 a 58 y 72.

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "**SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY QUE LAS REGULA NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.** El referido artículo 36 bis, al establecer las siguientes obligaciones a cargo de las sociedades de información crediticia: A) emitir los reportes de crédito a que se refiere no sólo con la información contenida en su base de datos, sino también la de las demás sociedades; B) respecto de cada operación, los reportes deben reunir cuando menos la siguiente información: historial crediticio, fecha de apertura, fecha de último pago y cierre límite de crédito, saldo total de la operación contratada, monto a pagar y claves

En virtud de lo anterior, en el intercambio puntual de información para la integración de RC de PM, DUN tiene la obligación de proporcionar a CC la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin distorsiones; por tanto, en términos de la LRSIC se encuentra ofrecida toda la información que se encuentre en las mismas, sin que resulte aplicable la limitación que refiere DUN respecto de lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC y sin que resulte relevante para efectos de omitir la entrega de la IC: i) el tipo de información que tenga en sus BD; ii) el tipo de sociedad que reporte la información a la SIC; y iii) si la información es negativa o positiva, ya que esta obligación derivada del artículo 36 Bis de la LRSIC, es distinta a la obligación de compartir la BPD (misma que solo contiene información negativa).

Por otro lado, DUN indica que, la AI es omisa en probar por qué define el SEGMENTO CO como el HC de las PM que es reportado por las EMPRESAS COMERCIALES y que el término de "experiencias comerciales" se refiere a información de los USUARIOS que puede contener información tanto positiva como negativa.

Al respecto, la AI demostró la existencia de la negativa de DUN consistente en omitir proporcionar a CC la IC que obra en su BD reportada por las EMPRESAS COMERCIALES, es decir, la IC relativa a créditos comerciales.

Asimismo, tal como se advierte del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, durante la investigación:

Asimismo, la CNBV refirió en la investigación que

De esta manera, la imputación radica en la acción unilateral de DUN consistente en omitir proporcionar a CC la IC proveniente de las EMPRESAS COMERCIALES, la cual se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros.

de observación y prevención aplicables; C) compartir información entre ellas; D) en el plazo de un día, deberán entregar la información respectiva a las sociedades que lo soliciten; E) la tarifa fijada por cada sociedad deberá ser autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que de no hacerlo, previo requerimiento formulado por dicha comisión, será ésta quien la fije; F) de manera conjunta, podrán aplicar descuentos a la tarifa autorizada, atendiendo a la cantidad de consultas realizadas por el usuario de que se trate o cualquier otro factor que incida en la determinación del precio; y, G) deberán distribuirse los ingresos obtenidos con motivo de la venta de los reportes de crédito, en la forma que lo piden; no transgrede los principios de libre competencia y concurrencia que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dichas obligaciones son constitucionalmente válidas porque se fundamentan en el propio texto de la Ley Suprema, específicamente en sus artículos 25, 28 y 73, fracción X. Además de que con el precepto legal referido no se incentiva práctica monopólica alguna ni se otorga a favor de determinadas personas el aprovechamiento exclusivo de la información referida, en perjuicio del público en general o de cierta clase social, sino que, por el contrario, tiene como finalidad resolver un problema de competencia y de asimetría en la información entre los reportes de crédito que emiten las sociedades de información crediticia, según se advierte de la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2010". Tesis Aislada 1a. CLXIV/2012 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012; Tomo 1; Pág. 506; Registro No. 2 001 506.



49853

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

De esta manera, existen elementos de convicción en el EXPEDIENTE de los que se desprende que los créditos comerciales se refieren a los créditos de las EMPRESAS COMERCIALES y no a los otorgados por el resto de los USUARIOS.

Por otro lado, el DPR no señala que la omisión de intercambiar el SEGMENTO CO sea únicamente respecto de información negativa, sino que tal como lo señala DUN, incluye información tanto negativa como positiva de los CLIENTES.

DUN argumenta que el "*Verdadero Segmento CO*" se refiere a las "*experiencias comerciales*" las cuales se refieren a información de todos los USUARIOS. No obstante, DUN no acredita que lo correcto sea considerar su definición como el concepto de SEGMENTO CO, cuando durante la investigación [REDACTED] y lo que se probó a través de los RC que no se entregaba, es la información relativa a los créditos comerciales.

En este sentido, si bien en el DPR se interpreta, [REDACTED] 619

[REDACTED] esto en nada variaría la imputación presuntiva contenida en el DPR, relativa a que DUN omitió proporcionar a CC la información relativa a créditos comerciales.

No obstante, aun considerando lo señalado por DUN relativo a que el "*Verdadero Segmento CO*" es el relativo a las "*experiencias comerciales*", el cual se refiere a información de todos los USUARIOS, ello tampoco cambiaría la imputación presuntiva relativa a que DUN omite compartir la información de su BD relativa a EMPRESAS COMERCIALES, pues éstas últimas son USUARIOS. De esta manera, lo que señala DUN en todo caso implicaría que además de omitir proporcionar información proporcionada por las EMPRESAS COMERCIALES, DUN omite proporcionar información proporcionada por otros USUARIOS.

Por último, respecto del argumento de que las "*experiencias comerciales*" no constituyen ni créditos ni operaciones análogas, por lo que no existe obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar dicha información, se indica que la imputación presuntiva contenida en el DPR se refiere a la falta compartición de la información relativa a las EMPRESAS COMERCIALES, por lo que el argumento de DUN es inoperante ya que no combate el DPR.

No obstante, del objeto social de DUN⁶²⁰ y de lo establecido en el artículo 5 de la LRSIC⁶²¹ se desprende que, DUN solo recopila, maneja y entrega o envía información relativa: i) al HC

⁶¹⁹ Folio 25115 y 25116.

⁶²⁰ Página 99 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶²¹ Dicho artículo señala que: "*La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES o las SOFOMES E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley.*"

Eliminado: dos renglones y veinticinco palabras

de PM; así como ii) a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga de PM, por lo tanto, si determinada información consta en su BD se entiende que se refiere a operaciones crediticias, operaciones de naturaleza análogas, o información relativa al HC de PM, pues de lo contrario no podría recopilarla.

Así, en términos de lo señalado en el párrafo anterior y en la LRSIC, si DUN tiene dentro de su BD cierta información relativa a "*experiencias comerciales*" se encuentra obligada a compartirla mediante el intercambio puntual.

En adición a lo anterior, del objeto social de DUN y del artículo 5 de la LRSIC se desprende también que, la información que consta en la BD de DUN es reportada por: a) ENTIDADES FINANCIERAS; b) EMPRESAS COMERCIALES;⁶²² y c) SOFOMES, por tanto, en el intercambio puntual para la integración de RC de PM, no debe quedar excluida la información que reporten las EMPRESAS COMERCIALES ni la que reporte ninguna otra de tales entidades, ya que DUN debe compartir la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin distorsiones.

C.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN actualizaran el supuesto de negativa de trato, debe de distinguirse entre dos negativas distintas, y les resultaría aplicable la LEY ANTERIOR.

DUN manifestó:⁶²³

De la forma en la que el DPR aborda la negativa de trato y de la materia sobre la que versa dicha negativa de trato, se desprende que se trata de dos conductas separadas; suponiendo que se hubiesen llevado a cabo. Asimismo, de tomar en consideración la temporalidad en que ocurrieron, la ley que resultaba aplicable era la LEY ANTERIOR.

Resulta ilustrativo lo contenido en las páginas 55, 304 y 305 del DPR, de las que se desprende que la AI realiza una separación entre la negativa de proporcionar la BPD de PM, que a decir de la AI corre desde agosto de dos mil doce; y la negativa de proporcionar la información completa, al no haberse proporcionado el SEGMENTO CO, que se dio desde la firma del CONTRATO DUN Y CC hasta la conclusión de la Investigación.

No se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando los Usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las Sociedades, así como cuando éstas compartan entre sí información contenida en sus bases de datos o proporcionen dicha información a la Comisión. Tampoco se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando las Sociedades proporcionen dicha información a sus Usuarios, en términos del Capítulo III de este Título Segundo, o cuando sea solicitada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones."

⁶²² Al respecto, el Artículo 23 bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros señala lo siguiente: "*Las Entidades deberán ser Usuarios de al menos una sociedad de información crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la información sobre todos los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen, en los términos previstos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.*"

Asimismo, el Artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros señala lo siguiente: "*Para los efectos de la presente Ley, en singular o plural se entenderá por: (...) VIII. Entidades: a las Entidades Financieras y a las Entidades Comerciales; X. Entidad Comercial: a las sociedades que de manera habitual otorguen créditos, préstamos o financiamientos al público; (...).*"

⁶²³ Páginas 81 a 86 de la CONTESTACIÓN DUN.

Asimismo, la BPD y el “*Verdadero Segmento CO*” constituyen bienes distintos y, por lo tanto, la supuesta negativa de trato en realidad se trata de dos conductas distintas.

Dicha precisión es relevante principalmente por dos motivos. En primer lugar, la supuesta negativa de proporcionar la BPD de PM fue llevada a cabo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, en tanto que comenzó y concluyó en dos mil doce, al ser de culminación instantánea; o suponiendo que fuese de tracto sucesivo, culminó en dos mil trece con la firma del CONTRATO DUN Y CC. En ambos casos, dicha conducta tuvo verificativo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR.

Por lo que hace a la supuesta negativa de proporcionar el “*Verdadero Segmento CO*” ésta, en caso de haberse llevado a cabo, también fue de culminación instantánea y tuvo verificativo en dos mil trece, por lo que se hubiera dado en un momento previo a la entrada en vigor de la LFCE.

Resulta contrario a derecho que la AI impute una responsabilidad con base en una disposición jurídica (fracción V del artículo 56 de la LFCE) que no se encontraba vigente al momento en que fue(ron) realizada(s) la(s) conducta(s).

Independientemente de que el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR y el artículo 56, fracción V de la LFCE materialmente contemplen la misma disposición,⁶²⁴ formalmente se trata de dos normas jurídicas distintas, por lo que resulta contrario a derecho, por transgredir los principios de legalidad, irretroactividad y tipicidad, aplicar una disposición a una conducta realizada previa a la entrada en vigor de esta.

De conformidad con el artículo 14 de la CPEUM las normas únicamente son obligatorias a partir de su entrada en vigor y únicamente se dará efecto retroactivo a una norma cuando dicha aplicación se haga en su beneficio. La aplicación de una norma de forma retroactiva se hace evidente en perjuicio de una persona cuando por una conducta realizada con anterioridad a la vigencia de dicha norma se le imputa una infracción a la norma posterior, como ocurrió en el caso concreto.

Aplicar retroactivamente la LFCE tuvo como consecuencia que la AI analizara el objeto y/o efecto de las conductas en un mercado relacionado, cuando la LEY ANTERIOR en su artículo 10 únicamente se refiere al objeto y/o efecto dentro del mercado.

En segundo lugar, el distinguir entre dos conductas resulta fundamental al exponer las razones que acreditan cómo, en la especie, no se actualiza negativa de trato alguna.

⁶²⁴ DUN refiere: “Si tomamos únicamente en cuenta la conducta. No obstante lo anterior, la aplicación de los artículos 54 y 56 de la LFCE tiene una implicación en cuanto al mercado en el que se puede analizar el objeto y/o efecto de la conducta, como se menciona más adelante [...]”.

La AI estima que la negativa de proporcionar a CC la BPD de PM y el SEGMENTO CO se trata de acciones reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha información a CC. Con base en dicho criterio y tomando en cuenta que a su decir la conducta se prolongó en el tiempo hasta después de la entrada en vigor de la LFCE (hasta la conclusión del periodo de investigación en dos mil diecisiete), es que ésta última es la que le resulta aplicable a la conducta en cuestión.

Es decir, la AI considera que la conducta investigada ha tenido efectos durante el PERIODO DE INVESTIGACIÓN, sin que haya elementos para considerar que la misma se ha corregido y suprimido.

Las conductas investigadas, en su caso, hubiesen constituido dos actos instantáneos que hubieran surtido todos sus efectos en el momento en que se negó la información referida. El Código Penal Federal establece en su artículo 7 que el delito puede ser: instantáneo, permanente o continuo, o continuado.

Ahora bien, en la página 55 del DPR la AI pretende fundar la existencia de una conducta continuada con base en que no encontró evidencia de que se haya dado intercambio de la BPD entre DUN y CC ni que le haya compartido el SEGMENTO CO en los RC de PM, por lo que a su juicio se trata de acciones reiteradas y continuas. La AI omitió acreditar fehacientemente que la supuesta conducta continuada cumpliera con los requisitos de una conducta continuada. Incluso en realidad se trata - en todo caso - de dos conductas distintas.

En el caso concreto, no estamos en presencia de una conducta continuada, ya que no se cumple con los requisitos.

Por otro lado, al no existir una negativa expresa, a pesar de que se afirma que no puede aplicarse por analogía el silencio como una negativa equiparada, para determinar su duración se debería atender a las reglas específicas de cada una de las conductas.

Por lo que hace a la supuesta negativa de proporcionar la BPD de PM, ésta sólo puede haber durado desde la solicitud de CC hasta los treinta (30) días siguientes a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la LRSIC; y lo anterior, suponiendo que hubiese mediado el requerimiento de la CNBV.

Respecto de la segunda supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO, su plazo no puede computarse, ya que, al no haber existido ni obligación de proporcionarla ni una solicitud, no pudo haber existido negativa alguna. Ahora bien, suponiendo sin conceder que se considere que la negativa se realizó desde la firma del CONTRATO DUN Y CC, atendiendo a las reglas generales del consentimiento, reguladas en el Código Civil, las cuales establecen que cuando una oferta se haga sin fijación de plazo, como fue la solicitud de CC, a una persona no presente, el autor de la oferta queda ligado durante tres días. Transcurridos tres

días a partir de la presentación de la solicitud, sin que haya existido una aceptación por mi parte, quedaría verificada la supuesta negativa a CC.

Así, las supuestas negativas a CC son actos instantáneos que se agotan en el momento en que se verifican, pues no requieren de actuaciones reiteradas de DUN para que se sigan materializando, sino que desde el primer momento en que supuestamente se negó, ya quedan consumados y surten efectos jurídicos, sin que pueda estimarse que se sigue consumando a lo largo del tiempo, pues el acto queda perfeccionado en ese instante, aunque sus efectos perduren en el tiempo.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶²⁵

En la página 55 del DPR, se expuso lo siguiente: "[...] la conducta investigada, [...] se ha actualizado desde el mes de agosto de dos mil doce, fecha en que se debió de haber dado el intercambio de la BPD, y desde agosto de dos mil trece [DUN] no ha compartido de manera completa la información crediticia para los RC de PM. Si bien es cierto que dichos actos se dieron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, también lo es que [...] no se cuenta con evidencia de que se haya dado el intercambio de la BPD entre [DUN] y [CC], ni que [DUN] haya compartido a [CC] el SEGMENTO CO en los RC de PM, por lo que se trata de acciones reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha información a [CC]. Por tanto, la conducta [...] continuó después de la entrada en vigor de la LFCE y [...] resulta aplicable [...]"

Las infracciones administrativas pueden ser instantáneas, continuas o continuadas.

Las conductas continuas son aquellas en las que la consumación se prolonga en el tiempo, en virtud de la existencia de dos actos u omisiones, en la cual el agente económico da inicio a la conducta y un segundo acto u omisión, ulterior al primero, con el cual se prolonga la conducta, sus efectos o la afectación al bien jurídico.

En una conducta continua violatoria de la LFCE, la acción u omisión se da por un lapso determinado, que se prolonga a lo largo del tiempo hasta que el sujeto activo decide cesarla. Así, la afectación al bien jurídico subsiste hasta que el sujeto activo decide concluir dicha afectación.

Aunado a lo anterior, en el amparo en revisión 453/2012,⁶²⁶ la SCJN estableció que el momento que debe considerarse para la determinación de la norma aplicable, no es el de la producción de los hechos, sino el de la consumación de la infracción.

En el caso, la conducta que se imputa a DUN comienza respecto de la negativa del intercambio de la BPD de PM, a partir del mes de agosto de dos mil doce y, en cuanto a la negativa de intercambio del SEGMENTO CO en los RC de PM, a partir de agosto de dos mil trece. Ambas conductas subsisten en tanto que no existen medios de convicción

⁶²⁵ Páginas 69 a 73 de la VISTA DUN.

⁶²⁶ La AI refiere la resolución del amparo en revisión radicado bajo el número de expediente 453/2012 del ocho de abril de dos mil quince, páginas 329 y 330. Disponible en:
<http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=141207>.

que acrediten que hayan cesado y DUN tampoco ofrece elementos de convicción para acreditarlo.⁶²⁷

Por lo anterior, la LFCE resulta aplicable a la conducta imputada a DUN, toda vez que los elementos de convicción que existen en el EXPEDIENTE permiten sustentar que la misma no se consumó durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, ni siquiera que la misma ya se haya consumado.

La temporalidad de la conducta imputada a DUN obedece a las reglas anteriormente descritas, y no, como pretende sostener DUN, que *"esta solo pudo haber durado desde la solicitud de [CC] hasta los 30 días siguientes a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la LRSIC"* o *"a las reglas del consentimiento, reguladas en el Código Civil"*, toda vez que dichos ordenamientos no resultan aplicables al caso concreto.

Asimismo, la transgresión a la LFCE se configura en una sola infracción, en virtud de la unidad de propósito, identidad de la lesión jurídica e identidad del sujeto pasivo de la conducta imputada a DUN, como se señaló en el DPR.

Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

Es **inoperante**, ya que **no combate** el DPR, el argumento de DUN relativo a que la negativa de trato en realidad se trata de dos conductas distintas.

Al respecto, el mismo DPR distingue que la PMR imputada a DUN se actualizó mediante dos omisiones distintas, es decir, la de proporcionar la BPD de PM y la de proporcionar la información completa (particularmente el SEGMENTO CO) en la integración de RC de PM, las cuales actualizan una sola PMR. Asimismo, el DPR refiere que la PMR imputada a DUN *"[...] se trata de acciones reiteradas [...]"*.

Incluso el mismo DUN señala que de diversas páginas del DPR se desprende que la AI realiza una separación entre ambas omisiones.

Por lo anterior, lo argumentado por DUN en nada desvirtúa las consideraciones contenidas en el DPR, máxime cuando, contrario a lo señalado por DUN, considerar que se trata de dos conductas distintas no permite concluir que la LEY ANTERIOR es la ley que les es aplicable debido a que, como se señala más adelante, ambas omisiones son continuas y siguieron consumándose durante la vigencia de la LFCE.

Asimismo, distinguir entre dos conductas tampoco permite acreditar que no se actualiza negativa de trato alguna, pues como se analiza en la presente resolución, en el DPR se acredita que tanto la omisión de compartir la BPD como la de proporcionar el SEGMENTO CO, analizadas de manera independiente, acreditan la PMR conocida como negativa de trato.

⁶²⁷ La AI refiere el siguiente criterio judicial: **"ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DICHO DELITO, COMIENZA A PARTIR DE QUE EL SUJETO ACTIVO CESÓ LA OMISIÓN DE PROVEER ALIMENTOS AL ACREEDOR ALIMENTARIO Y LE PROPORCIONÓ LOS SATISFACTORES NECESARIOS PARA SU SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)."** Tesis XIX.2o.P.T.4 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el seis de noviembre de 2015.

Ahora bien, es **infundado** el argumento de DUN relativo a que las conductas imputadas son de ejecución instantánea. DUN argumenta que la negativa de trato se trata de dos conductas separadas de ejecución instantánea, pues a su parecer, de haberse dado, surtieron todos sus efectos en el momento en que se negó la información requerida.

Al respecto, las omisiones en las que incurrió DUN no se agotaron en el mismo momento en que se realizaron, sino que, al tener el carácter de abstenciones, son de resultado permanente ya que inician en el momento en que DUN se abstiene de proporcionar la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM y subsisten durante todo el tiempo en que continúan dichas abstenciones.

De esta manera, la violación a la normativa de competencia se actualiza de momento a momento; es decir, desde que iniciaron las omisiones y durante todo el tiempo en que éstas continuaron vigentes DUN actualizó la hipótesis normativa consistente en “*la acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros*”.

En este sentido, en el presente caso y tal como se señaló en el DPR, las omisiones realizadas por DUN actualizan conductas continuas que no se agotan una vez producidas, sino hasta en tanto cesen las omisiones de que se trata.⁶²⁸

⁶²⁸ Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis aisladas: (i) “**RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR T RATARSE DE UNA OMISIÓN DE TRACTO SUCESIVO.** El artículo 98 de la Ley de Amparo no establece expresamente el plazo para la interposición del recurso de queja en amparo directo cuando se reclama que la autoridad responsable se abstuvo de proveer sobre la suspensión del acto reclamado dentro del plazo legal, pues únicamente prevé en su fracción I, que el término para la interposición del medio de impugnación referido es de dos días hábiles, cuando se trate de la suspensión de plano o provisional. Luego, dicha porción normativa resulta aplicable únicamente para aquellos casos en que la responsable se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada, esto es, cuando se conceda o niegue la suspensión; entonces, es en dicho supuesto en el que las partes, en caso de estar inconformes con la determinación, tendrán dos días hábiles para impugnarlo. En tales condiciones, se colige que el plazo de dos días que establece el artículo en examen, es inaplicable cuando se reclame la omisión de proveer sobre la suspensión dentro del plazo legal, pues se trata de una abstención de la autoridad responsable, y esa omisión es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. De ahí que, cuando se esté frente a esta hipótesis, el plazo para interponer el recurso de queja debe ubicarse, por similitud legal, en la fracción II del dispositivo citado, para ser interpuesto en cualquier tiempo; máxime que, de tomar como parámetro un plazo en específico, no habría punto de partida para iniciar su cómputo” [énfasis añadido]. Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; XVII.2o.3 K (10a.); Publicación: Viernes 11 de Mayo de 2018 10:16 h; Registro No. 2 016 880; (ii) “**RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO).** El precepto en cita dispone que el plazo para la interposición del recurso de queja es de 5 días, y su fracción II dispone que excepcionalmente en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. Esta porción normativa también debe aplicarse cuando se impugna en el amparo directo la omisión de emplazar al juicio al tercero interesado, pues aunque no se prevé así expresamente, sino sólo la omisión de tramitar la demanda de amparo, aquel supuesto no podría estar inmerso en el primer párrafo del referido artículo 98, que es la regla general de 5 días, ya que supone la existencia de un acto procesal material, positivo o negativo; además, porque no habría punto de partida para iniciar su cómputo, lo que permite concluir, por exclusión, que el recurso de mérito [cuyo soporte de procedencia debe ubicarse por similitud legal en el diverso precepto 97, fracción II, inciso a), de la misma legislación].

Lo argumentado por DUN relativo a que, al no requerir actuaciones reiteradas para seguirse materializando, las omisiones imputadas son instantáneas y desde el primer momento se consuman y surten sus efectos jurídicos, es inexacto, toda vez que las conductas continuas no requieren de actuaciones reiteradas para seguirse materializando, máxime cuando se trata de actos negativos u omisiones en los que la violación a la norma se actualiza de momento a momento y no se agota hasta que cese la omisión. Es decir, en este tipo de conductas continuas es el agente infractor el que con su conducta puede cesar la violación a la norma.

A mayor abundamiento, la omisión de DUN de proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO en todo momento continuó actualizando la hipótesis normativa relativa a la negativa de trato, pues desde que se dieron las solicitudes de productos disponibles y normalmente ofrecidos a terceros, DUN tenía la obligación de proporcionarlos y durante todo el tiempo que omitió hacerlo, se actualizó la infracción administrativa.

Adicionalmente, es **infundado** que sean aplicables los criterios referidos por DUN para determinar la duración de las conductas imputadas, ya que:

- a. Respecto de la omisión de proporcionar la BPD, DUN argumenta que en términos de la LRSIC ésta sólo pudo durar treinta días; no obstante, dicho plazo se refiere al tiempo que tendrían las SIC para acordar los estándares, condiciones, procedimientos y precio del

puede interponerse en cualquier momento; máxime cuando no existan constancias que evidencien que la inconforme haya tenido conocimiento pleno o se hubiera hecho sabedora de la tramitación del juicio de amparo directo. De ahí que en estos casos, el recurso de queja pueda promoverse en 'cualquier tiempo', pues la omisión de emplazar al juicio de amparo directo al tercero interesado tiene el carácter de abstención y, como tal, es de trato sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata [énfasis añadido]. Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 44, Julio de 2017; Tomo II; Pág. 1060. VII.2o.T.28 K (10a.); Registro No. 2 014 733; (iii) "ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DICHO DELITO, COMIENZA A PARTIR DE QUE EL SUJETO ACTIVO CESÓ LA OMISIÓN DE PROVEER ALIMENTOS AL ACREEDOR ALIMENTARIO Y LE PROPORCIONÓ LOS SATISFACTORES NECESARIOS PARA SU SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De los artículos 16 y 295 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas se infiere que el tipo penal de abandono de obligaciones alimenticias es de resultado material y permanente, ya que inicia en el momento en que el activo deja de proporcionar los medios económicos para atender las necesidades de sus acreedores, y su consumación subsiste todo el tiempo que dure dicho descuido. Por su parte, el artículo 127 de dicho código (vigente hasta el 26 de mayo de 2015) establece que los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde que cesó, si fuere permanente; desde que se realizó la última conducta, si fuera continuado, y desde que se verificó el último hecho ejecutivo, en caso de tentativa. De lo anterior se concluye que el plazo para que opere la prescripción de la acción penal en el delito de que se trata no puede computarse a partir de la fecha en que el inculpado comenzó con la desatención respectiva, ni tampoco día con día por ser de trato sucesivo, sino a partir del día en que dejó de incurrir en la omisión de proveer los alimentos a su acreedor y le proporcionó los satisfactores necesarios para su subsistencia, por ser ese momento en el que cesa la conducta delictiva" [énfasis añadido]. Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 24, Noviembre de 2015; Tomo IV; Pág. 3367. XIX.2o.P.T.4 P (10a.); Registro No. 2 010 377; (iv) "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Conforme a la naturaleza jurídica del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, la conducta delictuosa se actualiza día a día, en tanto subsista el abandono de las obligaciones de asistencia familiar, dado a que dicho ilícito es permanente, de trato sucesivo, luego, el ejercicio de la acción penal, en cuanto a este tipo delictivo se refiere, es imprescriptible, mientras exista la obligación y la omisión" [énfasis añadido]. Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Octubre de 1995; Pág. 562. V.2o.11 P.; Registro No. 204 036.

intercambio de la BPD, sin que ello se relacione con la duración de una infracción a la normativa de competencia. El tiempo durante el cual DUN se rehúsa, a través de una omisión, a proporcionar la BPD nada tiene que ver con el plazo referido en la LRSIC que refiere DUN.⁶²⁹

- b. Respecto de la omisión de proporcionar el SEGMENTO CO, DUN argumenta que en términos del Código Civil el autor de una oferta queda ligado durante tres días; no obstante, DUN no acredita cómo es que dicha disposición es aplicable al caso concreto; máxime cuando no se está en presencia de una oferta de CC, sino de una negativa por omisión de DUN de proporcionar a CC un producto disponible y normalmente ofrecido a terceros. Como se ha expuesto en esta resolución, la información completa para la integración de RC se encuentra ofrecida en términos de la LRSIC y no está meramente sujeta a una relación contractual, por lo que no es posible aplicar las reglas generales del consentimiento para determinar la duración de la negativa de proporcionar el SEGMENTO CO.

Adicionalmente, si bien es cierto que ambas conductas no constituyen negativas expresas, al ser omisiones que actualizan de manera permanente una infracción a la normativa, son de tracto sucesivo, por lo que su duración se actualiza hasta que cesen las omisiones en cuestión.⁶³⁰

En el presente caso, la abstención por parte de DUN de proporcionar la BPD y la información puntual que corresponde al SEGMENTO CO constituye una omisión de tracto sucesivo debido a que el incumplimiento a la LFCE se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa por omisión analizada.

Por todo lo anterior, también resulta **infundado** lo señalado por DUN relativo a que: (i) era aplicable la LEY ANTERIOR para el análisis de las conductas imputadas en el DPR; y (ii) se haya aplicado la LFCE de forma retroactiva.

De conformidad con la teoría de la vigencia de las normas y el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la CPEUM, las conductas y sus consecuencias se rigen por las normas sustantivas vigentes al momento del hecho, en atención al principio *tempus regit actum*.

⁶²⁹ DUN refiere que la conducta únicamente podría haber durado treinta días suponiendo que hubiera mediado un requerimiento de la CNBV. Respecto del argumento relativo al requerimiento previsto en el artículo 36 de la LRSIC, se remite al apartado "La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD" de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

⁶³⁰ Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada: "**ACTO DE CARÁCTER NEGATIVO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, POR LO QUE NO ESTÁ SUJETO AL PLAZO QUE PARA INTERPONER LA DEMANDA DE GARANTÍAS PREVÉ EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El acto reclamado que se hace consistir en la omisión de resolver lo conducente respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, tiene el carácter de acto negativo y, como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento**" [énfasis añadido]. Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Enero de 2001; Pág. 1674. V.2o.36 K; Registro No. 190 558.

No obstante, el momento en que se consuman los hechos varía según la modalidad de la infracción administrativa de que se trate.

Al respecto, para el caso de las conductas continuas, el Pleno de la SCJN señaló que aun cuando al comienzo de la conducta reproachable se encuentre vigente una legislación, si en el transcurso de la realización de la conducta entra en vigor una nueva Ley, debe ser esta última la norma aplicable:

***“DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. En la mencionada declaración interpretativa, que señala que las disposiciones de ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito de desaparición forzada de personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales disposiciones no podrán aplicarse a aquellas conductas constitutivas de ese ilícito cuya consumación hubiera cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma, pero no debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las conductas típicas de tal delito que habiéndose iniciado antes de su vigencia, se continúen consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de personas el carácter de permanente o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se sigan produciendo durante la vigencia de la Convención. Tal interpretación es acorde con el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional, conforme al cual las disposiciones contenidas en las leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos realizados o consumados antes de que aquéllas entren en vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de delitos de consumación instantánea la nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación anterior, pues resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, si debe aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de hechos constitutivos de delito continuo o permanente cuando, habiendo empezado a realizarse antes de que aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo, en cuyo caso resultará aplicable, como sucede con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la Convención mencionada, cuya naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento a momento durante todo el tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido [énfasis añadido]”*⁶³¹**

Así, cuando se trata de conductas continuas, como en el presente caso, lo procedente es aplicar la normativa vigente al momento de la cesación de la conducta, siendo que ambas omisiones realizadas por DUN continuaron por lo menos hasta la conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN, cuando ya estaba vigente la LFCE.

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que las omisiones constitutivas de la infracción iniciaron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, al ser conductas continuas estas se prolongaron en el tiempo sin interrupción, por eso, para efectos de establecer la ley aplicable se considera que la negativa subsistió al menos hasta la fecha del acuerdo de conclusión del

⁶³¹ Jurisprudencia P./J. 49/2004; 9ª Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág. 967; Registro: 181148.

PERIODO DE INVESTIGACIÓN, por lo que las mismas continuaron después de la entrada en vigor de la LFCE, y por tanto dicha ley es la que resulta aplicable.⁶³²

De esta manera, la LFCE no se aplicó retroactivamente, puesto que se utilizó respecto de conductas que continuaron consumándose durante su vigencia. Así, el DPR fue emitido conforme a Derecho y con éste, no se afectaron los principios de legalidad, irretroactividad y tipicidad señalados por DUN, al no haberse aplicado la LFCE respecto de una conducta realizada y consumada de manera previa a su entrada en vigor, sino respecto de omisiones que continuaron al menos durante su vigencia.

Con independencia de lo anterior, el mismo DUN reconoce que el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR y el artículo 56, fracción V de la LFCE materialmente contemplen la misma disposición, por lo que aun aplicándose una ley distinta no se advierte de qué manera ello habría trascendido en sus derechos. Máxime cuando, como se señala en el apartado "*Manifestaciones en relación con el objeto o efecto de la conducta consistente en impedir el acceso de CC al MR y al MERCADO RELACIONADO*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la LEY ANTERIOR sí permitía analizar el objeto y efecto en el mercado relacionado.

De igual forma, es **infundado** que, aun suponiendo que la negativa de proporcionar la BPD de PM a CC fuera una conducta de trato sucesivo, ésta culminó en dos mil trece con la firma del CONTRATO DUN Y CC, en virtud de las siguientes consideraciones.

La LRSIC prevé dos vías distintas a través de las cuales una SIC puede recibir IC de la otra SIC: i) el intercambio de la BPD de PM en términos del artículo 36; y a ii) la compartición de información completa (incluyendo al SEGMENTO CO) en la integración de los RC de PM en términos del artículo 36 Bis. Dichas vías derivan de dos preceptos legales diferentes y tienen características y finalidades distintas.

Así, mientras el intercambio de la BPD permite la recopilación masiva de los registros negativos que obran en la BD de la otra SIC y **

**, el intercambio puntual de la IC se realiza únicamente respecto de la información de un CLIENTE específico, a un costo mucho mayor y con la finalidad de elaborar un RCI

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN señaló en el amparo en revisión 413/2012 lo siguiente:

"[...] es necesario hacer un análisis comparativo entre los numerales precisados por la quejosa, esto es, los artículos 36 y 36 bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de determinar si prevén o no situaciones similares o análogas.

[...]

⁶³² Al respecto también se tiene en cuenta que el tipo normativo de la negativa de trato previsto en la fracción V del artículo 56 de la LFCE es el mismo tipo legal que el establecido en la fracción V del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y que la sanción prevista en ambas leyes no cambió para este tipo de conductas.

[...] es claro que los supuestos previstos en los preceptos analizados, esto es, los artículos 36 y 36 bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia no regulen situaciones jurídicas análogas o similares, ya que en el primero, se regula la información que se transmiten entre sociedades, en la que se debe incluir la base de datos primaria —información negativa—; mientras que en el segundo, se prevé la obligación de las sociedades de reportar la totalidad de la información que obre en sus bases de datos, es decir, de la propia y de las demás sociedades —información negativa e información positiva—; por lo que se concluye que no son situaciones equiparables".⁶³³

En este orden de ideas, el CONTRATO DUN Y CC se celebró con el objeto de pactar los términos y condiciones en virtud de los cuales DUN y CC cumplirán con las disposiciones contenidas en el artículo 36 Bis de la LRSIC, es decir, las relativas al intercambio puntual, por lo que, el cumplir parcialmente o aún de forma completa con dicho precepto legal, no implica que se haya proporcionado la BPD, siendo que en términos del artículo 36 de la LRSIC dicha información se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros, por lo que ante la solicitud de CC debía proporcionarla. Es decir, el proporcionar un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros no excluye la responsabilidad del agente económico de proporcionar uno distinto, por lo que el hecho de que DUN compartiera de forma parcial la información para la integración de RC de PM, no implica que haya compartido la BPD de PM, ni excluye la obligación de compartirla.

Por otro lado, es inoperante porque no combate el DPR el argumento relativo a que no se está frente a una conducta continuada, ya que el DPR hizo referencia a que las omisiones son reiteradas y continuas.

DUN confunde las conductas continuadas y las continuas, siendo que la AI no debía acreditar fehacientemente que se daban los requisitos de las conductas continuadas ya que la imputación hace referencia a omisiones continuas.

Por lo que hace al argumento según el cual no puede aplicarse por analogía el silencio como una negativa equiparada, se remite al apartado de la presente resolución denominado "Ni el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artículo 56, fracción V de la LFCE resultan aplicable para negativas por omisión", para evitar repeticiones innecesarias y toda vez que en dicho apartado se explica por qué el tipo normativo previsto en la fracción V del artículo 56 de la LFCE puede actualizarse tanto con una acción en sentido estricto como con una omisión.

Por último, son infundados los argumentos de DUN relativos a que la omisión de proporcionar el SEGMENTO CO en los RC de PM, no constituye una negativa de trato, debido a que como se analiza en el apartado "Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la información completa para la integración de RC constituye un bien normalmente ofrecido a terceros en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, mismo que DUN se negó a proporcionar a CC, siendo que CC sí la solicitó.

C.3. Ni el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artículo 56, fracción V de la LFCE resultan aplicable para negativas por omisión.

DUN manifestó:⁶³⁴

Suponiendo sin conceder que estuviéramos frente a una negativa de trato por omisión, la conducta imputada no actualizaría el supuesto normativo previsto en el artículo 10 de la LEY ANTERIOR y en el artículo 56, fracción V de la LFCE.

La conducta que se me imputa no constituye una PMR en términos de la LFCE, pues en virtud del principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador, la disposición no resulta aplicable a las omisiones realizadas por algún agente económico.

De conformidad con el artículo 14 de la CPEUM en el derecho administrativo sancionador queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, sanción administrativa alguna que no esté decretada por una disposición legal exactamente aplicable a la conducta sancionada.

De acuerdo con la SCJN, los principios penales sustantivos efectivamente resultan aplicables al derecho administrativo sancionador, incluyendo entre otros el principio de tipicidad, que consiste en la adecuación del hecho que se considera ilícito a la figura o tipo descrito por la ley.⁶³⁵

El DPR sostiene la supuesta comisión de la infracción prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, siendo que de la literalidad de la disposición se desprende claramente que la conducta que el legislador determinó como ilícita fue *“rehusarse a vender, comercializar o proporcionar bienes o servicios”*. El verbo *“rehusarse”* implica necesariamente una acción de rechazo (y no meramente una omisión) por el agente económico al que se le solicitó el bien o servicio en cuestión.

Interpretando la literalidad de la fracción V del artículo 56 de la LFCE bajo el principio de tipicidad aplicable, tenemos que, para que una conducta pueda actualizar dicho supuesto normativo, la conducta debe ser una acción de rechazo y no basta con que exista una mera omisión, pues implicaría ampliar el supuesto normativo definido por el legislador a través de una analogía, lo cual conculcaría el principio de tipicidad.

La AI realizó una interpretación extensiva de la fracción V del artículo 56 de la LFCE, aplicándola analógicamente al caso concreto. Más aun, la propia AI es

⁶³⁴ Páginas 86 a 90 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶³⁵ DUN remite el criterio contenido en la acción de inconstitucionalidad 4/2006 por lo que hace a la similitud de la pena administrativa con la sanción penal y refiere los criterios contenido en las tesis de rubro *“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”* y *“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO EN MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS”*.

consciente de su interpretación extensiva, toda vez que consideró necesario aclarar que la conducta de DUN consistió en una *“negativa por omisión”*, lo cual no sería necesario si las negativas por omisión estuvieran expresamente incluidas y sancionadas en la LFCE.

La interpretación analógica de la AI vulnera el principio de tipicidad que debe regir el ejercicio de sus facultades. Si esa COFECE sancionara a DUN con base en estos razonamientos, estaría incumpliendo su obligación de respetar el principio de tipicidad al ejercer la facultad punitiva del Estado que le fue conferida. Por todo lo anterior, el análisis de la AI está viciado de origen.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶³⁶

En primer lugar, como lo señala la propia jurisprudencia que cita DUN, los principios generales penales sustantivos no deben trasladarse de forma automática al derecho administrativo sancionador, lo que ha sido confirmado en diversos criterios.

Ahora bien, DUN manifiesta que la AI incumple con el principio de tipicidad debido a que la conducta de negativa por omisión no constituye una PMR en términos de la LFCE toda vez que la conducta debe ser una acción de rechazo y no basta una omisión.

Resulta relevante referir que la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006, que dio origen a las dos tesis citadas por DUN, también asentó que para cumplir el principio de tipicidad basta que el constructo lógico establecido en la norma sea inteligible, por tanto, claro e unívoco, para que así el gobernado no tenga que realizar la tarea de interpretación (propia de la autoridad), y en consecuencia, pueda conocer lo que le es permitido y lo que le está prohibido por ley.⁶³⁷

Lo anterior, se manifestó de forma clara y precisa en las páginas 294 y 295 del DPR.

Asimismo, al exponer los razonamientos que permitieron concluir que se actualizó presuntivamente la hipótesis normativa establecida en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, se analizaron de manera pormenorizada y clara los siguientes dos elementos: *“Primer elemento: [DUN] realizó la conducta de forma unilateral, la cual consistió en la negativa de intercambiar y, por tanto, de proporcionar su [BPD DE PM], así como el segmento CO en los RC de PM en favor de [CC], quien en su momento los solicitó. [...] Segundo elemento: La BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM en cuestión, se encontraban disponibles y debían ser ofrecidos a terceros, en términos de los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC”*.

⁶³⁶ Páginas 73 a 79 de la VISTA DUN.

⁶³⁷ La AI refiere que también sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: *“DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS. CONDICIONES PARA LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE SU APLICACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD.”* Tesis: I.1o.A.E.221 A (10a.), Registro: 2016087. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, enero de 2018.

Estos elementos permitieron concluir presuntivamente que DUN actualizó todos y cada uno de los elementos del tipo administrativo sancionador referido, de forma clara y unívoca.

En efecto, la conducta imputada, fue unilateral, esto es, DUN tuvo en todo momento el dominio del hecho, ya era de su conocimiento que debía proporcionar la información de la BD DE PM, así como el SEGMENTO CO, en los RC de PM, la cual tenía en su poder; además incumplió lo estipulado en el artículo 36 y 36 bis de la LRSIC, ya que por ministerio de ley debía de proporcionarla, pese a ello, materializó su voluntad de cometer la conducta imputada, al negarle a CC el intercambio de la información. De esta forma, la AI cumplió con el principio de tipicidad al emitir el DPR.

Asimismo, los tipos normativos, al describir conductas, pueden referirse a “acción” en *lato sensu* (sentido amplio) o en *strictu sensu* (sentido estricto). Será en sentido lato cuando la “acción” haga referencia a la conducta del tipo, concepto que incluye, como especies, la omisión y la “acción” *strictu sensu*. Asimismo, considerando que la LFCE, en sus tipos normativos no dispone diferencia alguna con respecto a cometer una conducta por acción u omisión, se considera que el tipo normativo de la fracción V del artículo 56 de la LFCE, al describir la conducta como “acción unilateral”, lo hace en sentido *lato sensu* y no en *strictu sensu* como erróneamente señala DUN.

Aceptar el argumento de DUN sería sostener que el legislador consideró que las prácticas monopólicas por omisiones serían justificables, lo que transgrediría el artículo 28, párrafo segundo, de la CPEUM.

En relación con el principio de legalidad, en la materia que nos ocupa, éste se cumple cuando, al menos, existe previsibilidad sobre las consecuencias de los actos de los gobernados y no hay arbitrariedad de la autoridad. En este sentido, esta AI dio cabal cumplimiento a estos supuestos, al establecer claramente en el DPR los elementos que acreditaban la conducta imputada a DUN, la cual se encuentra prevista en la LFCE, tal como se desprende de los apartados “XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato” y “XIV. Objeto de la conducta: Negativa de trato”.⁶³⁸

Por lo anterior, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.

Es **infundado** el argumento de DUN relativo a que en términos del principio de tipicidad el artículo 56, fracción V, de la LFCE no resulta aplicable en el caso de omisiones, por las razones que se expresan a continuación.

⁶³⁸ La AI refiere los siguientes criterios judiciales: (i) “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN.” Tesis 1a. CCCXVI/2014 (10a.), Registro: 2007406. Gaceta del Semanario de la Federación, septiembre de 2014; (ii) “PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODELO DEL ESTADO REGULADOR” Tesis 1a. CCCXVIII/2014 (10a.), Registro: 2007410. Gaceta del Semanario de la Federación, septiembre de 2014.

Tal como lo señala DUN, en los principios del derecho administrativo sancionador puede acudir a los principios penales sustantivos cuando resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento, por lo que es válido tomar conceptos y teorías del derecho penal en la medida en que resulten aplicables.⁶³⁹

En virtud de lo anterior, el derecho penal interpreta que la conducta ilegal puede expresarse: a) como un hacer, es decir, una acción en sentido estricto; o b) como un no hacer, es decir, una omisión.⁶⁴⁰

En este orden de ideas, el tipo normativo previsto en la fracción V, del artículo 56 de la LFCE, contempla como elemento para constituir la PMR correspondiente, una "[...] acción unilateral consistente en rehusarse [...]". Este primer elemento describe la conducta antijurídica que debe ser realizada por el agente económico para que se actualice la hipótesis normativa, expresando una acción en sentido amplio (*lato sensu*) que puede ejecutarse a través de una acción en sentido estricto o una omisión.

Al respecto, la LFCE no distingue en sus tipos normativos aquellas conductas que puedan realizarse a través de un hacer o de una omisión, por lo que, atendiendo a los Principios Generales del Derecho, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Por lo tanto, el tipo normativo antes señalado puede actualizarse tanto con una acción en sentido estricto (*stricto sensu*) como con una omisión.

Lo anterior es acorde con la finalidad de la LFCE, la cual tiene por objeto "[...] promover, proteger y garantizar la libre competencia y la competencia económica; así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las

⁶³⁹ Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: "**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.** De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudir a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal" [énfasis añadido]. Tesis; 9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, agosto de 2006; Pág. 1565. P./J. 99/2006; Registro No. 174488.

⁶⁴⁰ Véase por ejemplo el artículo 7 del Código Penal Federal que define al delito como "[...] el acto u omisión que sancionan las leyes penales".



prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados".⁶⁴¹

De esta manera, la LFCE no busca regular los mecanismos por medio de los cuales un agente económico comete prácticas anticompetitivas, sino determinar las conductas que pueden considerarse como tales a fin de estar en posibilidad de prevenirlas, combatirlas y perseguirlas.

Así, a través de la fracción V, del artículo 56 de la LFCE, en relación con el artículo 54 de dicha normativa, la LFCE prohíbe que agentes económicos con PS en un MR de manera unilateral se rehúsen a vender, proporcionar o comercializar a personas determinadas, bienes o servicios disponibles o normalmente ofrecidos a terceros con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos, sin importar los mecanismos a través de los cuales se rehusó dicho agente económico.

Es decir, la LFCE no limita las formas a través de las cuales un agente económico puede rehusarse a vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios, pues sin importar la forma a través de la cual se rehúse el agente económico, el hecho de que se rehúse con los objetos o efectos mencionados, tiene o puede tener un impacto negativo en el funcionamiento de los mercados. De tal manera que, si el agente económico se rehúsa de manera verbal o de facto, a través de una acción u omisión, y se acreditan los demás elementos referidos en la LFCE, es claro que debe sancionarse al agente económico.

Las infracciones por omisión se actualizan debido a que el sujeto no actuó como se esperaba y su omisión es reprochable en cuanto a que pudo sin impedimento realizar el acto esperado. De esta manera, las infracciones por omisión son el resultado de un doloso omitir del agente que con su abstención actualiza un evento dañoso que le es imputable porque no hizo aquello que debió hacer, siendo que nada le impedía de una manera perentoria haber actuado de conformidad con el derecho.⁶⁴²

En el presente caso, DUN al ser un agente económico con PS en el MR DE PM, tenía la obligación en términos de la LFCE de, ante la solicitud de CC, proporcionarle a éste su BPD, al ser un producto disponible y normalmente ofrecido a terceros, siendo que nada le impedía proporcionarla. Así, con su abstención DUN actualizó un evento dañino que le es imputable,

⁶⁴¹ Artículo 2 de la LFCE.

⁶⁴² Sirve de apoyo el siguiente criterio: "**OMISION, DELITOS POR (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).** De acuerdo con el artículo 5o. del Código Penal del Estado de Veracruz, el acto y la omisión son las únicas formas de manifestación de la conducta que pueden ser constitutivas del delito. Si la conducta del inculpaado fue omisiva, es necesario prescindir del delito realizado mediante una acción, para analizar su aspecto negativo: la omisión. La legislación penal del Estado, al establecer el concepto del delito en el precepto legal invocado, ha aceptado respecto de la omisión la teoría de "la acción esperada", que se funda en que el sujeto no actuó como se esperaba y su omitir es reprochable en cuanto a que pudo, sin impedimento, realizar el acto esperado. Los delitos así cometidos no son más que el resultado de un doloso omitir del agente que con abstención de un hecho esperado actualiza un evento dañoso que le es imputable porque no hizo aquello que debió hacer, siendo que nada le impedía de una manera perentoria haber actuado de conformidad con el derecho. En síntesis, la omisión resulta punible cuando el sujeto deja de hacer lo que debe hacer, cuando se abstiene de hacer lo que tiene la obligación legal de ejecutar [Énfasis añadido]". Tesis Aislada; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 5, Sexta Parte; Pág. 75; Registro No. 257 389.

consistente en impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

DUN argumenta que el verbo rehusarse implica necesariamente una acción de rechazo (y no meramente una omisión) del agente económico. Al respecto, de conformidad con la Real Academia Española, la palabra "*rehusar*" significa "*no querer o no aceptar algo*".⁶⁴³

Dicha definición no conlleva, contrario a lo que señala DUN, la necesidad de una acción en estricto sentido, sino que la falta de voluntad o aceptación del agente económico para vender, proporcionar o comercializar un bien o servicio puede desprenderse de una omisión.

En el caso, el hecho de que DUN haya omitido proporcionar el SEGMENTO CO y la BPD a CC, a pesar de la solicitud de CC y de que dichos bienes se encontraban disponibles y normalmente ofrecidos a terceros, implica que no quiso o no aceptó hacerlo, es decir, que se rehusó a hacerlo. Así, la falta de voluntad o aceptación de DUN para realizar el intercambio de la BPD y para proporcionar el SEGMENTO CO está implícita en su omisión de hacerlo.

De esta manera, la AI no realizó una interpretación analógica ni extendió la interpretación del artículo 56, fracción V, de la LFCE, sino que atendió a la literalidad de su contenido.

En este sentido, la imputación realizada en el DPR es acorde al principio de tipicidad pues: (i) la LFCE permite predecir con un suficiente grado de seguridad la conducta infractora conocida como negativa de trato y las consecuencias de su realización, debido a que la hipótesis normativa goza de claridad y de univocidad; y (ii) la conducta presuntamente realizada por DUN encuadra exactamente en la hipótesis normativa.

Al respecto, la conducta imputada a DUN cumple con los elementos del tipo normativo pues, de conformidad con ésta: (i) DUN es un agente económico que tiene PS en el MR en que se realizó la conducta; (ii) DUN omitió unilateralmente (es decir, teniendo DUN en todo momento el dominio del hecho) proporcionar, vender o comercializar a CC tanto la BPD de PM como la información completa en la integración de RC de PM, los cuales constituyen bienes disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) la conducta de DUN tuvo por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO.

De esta manera, la conducta que se imputa sí constituye una PMR en términos de la LFCE.

Por las razones antes expuestas, resulta **infundado** que la negativa de trato imputada a DUN no actualice el supuesto normativo previsto en el artículo 56, fracción V de la LFCE y por ende que se haya vulnerado el principio de tipicidad.

⁶⁴³ Definición consultada en la página de Internet: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=rehusar>, consultada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

C.4. Manifestaciones en torno al primer elemento de la negativa de trato

C.4.1 Indebida valoración de los elementos probatorios y omisión de la AI para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar responsabilidades.

DUN manifestó:⁶⁴⁴

La AI analiza distintos elementos probatorios de los que desprende que, habiendo mediado solicitud de CC, me negué a proporcionar la BPD de PM a CC.⁶⁴⁵ La AI esencialmente hace referencia los siguientes hechos: (i) CC realizó una solicitud dirigida a DUN para intercambiar sus respectivas BPD de PM; y (ii) tanto CC como DUN manifestaron que, a la fecha de desahogar sendos requerimientos de información, no se había llevado a cabo el intercambio de la BPD de PM.

Señala la AI que, para ampliar mi respuesta, me requirió que me pronunciara respecto si CC había realizado alguna solicitud de intercambio de la BPD, y en su caso explicar las razones por las que había omitido dar respuesta a CC. En mi respuesta, hice alusión a la solicitud de intercambio realizada por CC el ^{**} ^{**} y expliqué las razones por las que he omitido dar respuesta a CC:⁶⁴⁶

* *

* *

* *

* *

⁶⁴⁴ Páginas 91 a 98 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶⁴⁵ DUN refiere que no tuvo acceso a diversos elementos probatorios en los que la AI pretende sustentar la negativa de trato, por lo que en el presente apartado únicamente se refiere a la indebida valoración de los elementos aportados por DUN al desahogar un requerimiento de información, así como la omisión de la AI de allegarse de mayores pruebas para esclarecer la verdad.

⁶⁴⁶

nd

La AI señaló que la versión de DUN de que dicho intercambio perdía relevancia después de la inclusión del artículo 36 Bis de la LRSIC, nunca fue respaldada por documento alguno. Resulta ilegal que la AI no le dé valor probatorio a lo señalado por mí por el hecho de que ello no fue respaldado, ya que:

- (i) Le impone a DUN una carga diabólica de la prueba de aportar documentos que resultan inexistentes;
- (ii) La AI en uso de sus facultades de investigación debió de allegarse de mayores pruebas para esclarecer la verdad, como corroborar con las partes sobre si las reuniones se llevaron a cabo en los términos indicados, máxime si el hecho que tiene que esclarecer es toral para acreditar si en efecto existió o no la negativa de trato.

La función de la AI no es encontrar culpables, sino esclarecer la verdad, y en caso de encontrar elementos que sustenten una probable responsabilidad imputarla para que el PLENO resuelva. En caso de que su línea de investigación lo conduzca a cierta información de la que se pudiera desprender algún hecho exculpatorio del agente investigado, tiene la obligación de agotar la línea de investigación para esclarecer la verdad.

Conviene referirnos a los principios del derecho penal que resultan aplicables al derecho administrativo sancionador. El derecho penal establece como uno de sus principios generales que “[e]l proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune [...]”, según el artículo 20, apartado A, fracción I de la CPEUM. El principio referido resulta compatible con toda actividad fiscalizadora del estado, puesto que en un estado de derecho la autoridad no debe verse como un órgano que busca encontrar culpables, sino como una autoridad indagadora que busque esclarecer la verdad para así aplicar la ley.

La LFCE tiene como finalidad el garantizar la libre concurrencia y competencia económica en los mercados para lograr su mayor eficiencia, entonces, la AI tiene como objetivo el investigar y en su caso imputar una probable responsabilidad solo de aquellas conductas que tengan un efecto (u objeto) anticompetitivo, y no de aquellas que no lo son. Lo anterior, en tanto que perseguir y sancionar conductas que en realidad no son anticompetitivas puede generar efectos contrarios al propio fin que persigue la LFCE.

Por otra parte, el artículo 33 de la LFCE contempla la obligación de la AI de esclarecer los hechos en lugar de únicamente buscar imputar una responsabilidad. Al respecto, la imparcialidad con la que se debe conducir la AI implica que no deba de adoptar una postura y tratar únicamente de sustentar la misma. Misma situación se desprende de los principios de objetividad, certeza, honestidad y exhaustividad.

Finalmente, nuestros tribunales colegiados han sostenido que las facultades de un juzgador para recabar pruebas se traducen en un deber para éste para la debida conducción de un procedimiento y el esclarecimiento de los hechos.⁶⁴⁷

En ese sentido, el que la AI se limitara a únicamente señalar que la justificación de mi mandante para no haber llevado a cabo el intercambio de la BPD de PM carecía de soporte documental en lugar de indagar y allegarse de mayores pruebas para esclarecer la verdad, resulta contrario a la finalidad de un procedimiento en el que se busca esclarecer la verdad y contrario a los principios que deben de regir el actuar de la AI de conformidad con el artículo 33 de la LFCE. Dicho aserto cobra aún mayor fuerza si se toma en cuenta que mi mandante no tenía la posibilidad de aportar soporte documental para sustentar su dicho; ni se encontraba obligada a hacerlo por no haberle sido requerido ni encontrarse en una fase en la que tuviera la carga de ofrecer pruebas de descargo.

La AI parece únicamente interesada en allegarse de elementos probatorios para sustentar una probable responsabilidad, pero no para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad. Resulta ilustrativo que cuando se trata de indagar la razón por la cual señalé por qué no había intercambiado la BPD de PM, la AI se limitó a solicitar una explicación y al recibirla no hizo gestión alguna para indagar más al respecto. Caso contrario ocurre cuando pretende allegarse de documentación para documentar la ausencia de transmisión del SEGMENTO CO.⁶⁴⁸

Finalmente, respecto de lo señalado en el sentido de que pasó un año desde la solicitud de intercambio de la BPD y la implementación de la alternativa al intercambio de la BPD, debe precisarse que dicho plazo atendió a la imposibilidad para realizar el intercambio y al hecho de que hubo diversas reuniones con CC y la CNBV para discutir alternativas. Este último hecho, hubiera podido ser constatado por la AI de allegarse de los elementos necesarios para esclarecer la verdad.

- (iii) En la fase de investigación el particular no tenía la carga de la prueba de mi dicho, sino únicamente de cumplir con lo requerido. La AI pretende que dentro de la investigación el agente requerido tenga que aportar pruebas de descargo para desvirtuar una imputación que aún no se ha realizado.
- (iv) Incluso sin allegarse de mayores pruebas la AI debió adminicular mi dicho respecto a la razón por la que se ha omitido dar respuesta con la no sanción de

⁶⁴⁷ DUN se refiere a la tesis: "FACULTADES DEL JUEZ PARA ESCLARECER LA VERDAD DE LOS HECHOS LITIGIOSOS, DEBEN EJERCERSE CUANDO LO EXIJA LA NECESIDAD OBJETIVA Y RACIONAL DEL CASO" Tesis Aislada I.4o.C.30 K; Novena Época; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Tomo XXVIII; Septiembre de 2008; Página: 1269; Registro: 168919.

⁶⁴⁸ DUN refiere las páginas 304 y 305 del DPR.

la CNBV para tener por cierto mi dicho, pues la AI contaba con: (a) un hecho positivo no probado consistente en mi manifestación en relación a las reuniones con la CNBV; y (b) un hecho negativo probado consistente en que la CNBV no me había sancionado por el no intercambio de la BPD de PM con CC, no obstante que era sabedora de dicha circunstancia y que era su obligación sancionarme por dicha omisión, en términos del artículo 62, fracción V de la LRSIC. Es como si la AI, antes de dar valor probatorio al dicho de un agente prefiriera suponer que la CNBV optó por no sancionarme sin que mediara razón justificada para ello, siendo contrario al principio de buena fe de la administración pública.

- (v) La AI además debió tomar en cuenta para tener por válido mi dicho el Dictamen de la Reforma a la LRSIC, en el cual la Comisión Dictaminadora estimó que la alternativa de obligar a las SIC a emitir reportes que consoliden la información de otras sociedades de ese mismo tipo elimina las barreras a la competencia.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente: ⁶⁴⁹

DUN parece confundir las facultades de la AI, pues cita la tesis I.4o.C.30 K, la cual versa sobre la necesidad de los jueces de actuar de oficio para esclarecer la verdad de los hechos litigiosos. La AI no cuenta entre sus funciones con el deber de “*administrar justicia efectiva a los ciudadanos*” ni tiene facultad para ejercer funciones jurisdiccionales o “*esclarecer hechos litigiosos*”.

Asimismo, conforme al ACUERDO DE INICIO, la investigación no prejuzga sobre responsabilidad de agente económico alguno y únicamente versa sobre el ejercicio de las facultades de investigación que tiene esta AI con el único fin de allegarse de información y medios de convicción que identifiquen, en su caso, la probable existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.

DUN señala que la AI tiene funciones jurisdiccionales puesto que “*le impone una carga diabólica de la prueba de aportar documentos que resultan inexistentes*”. El error en el que recae DUN es una confusión respecto del concepto de *carga probatoria*, que obedece a la obligación de las partes en el PSFJ a brindar los medios de convicción que acrediten su dicho, situación que no puede ocurrir sino hasta el momento en que el juzgador valore todos los medios de convicción aportados en el procedimiento, por lo que no es dable referir a la existencia de cargas probatorias en etapas anteriores.⁶⁵⁰

DUN tuvo el derecho de aportar los medios de convicción que consideró relevantes y el momento en que se determinen las cargas probatorias será en la resolución que ponga

⁶⁴⁹ Páginas 80 a 83 de la VISTA DUN.

⁶⁵⁰ La AI refiere el criterio: “*CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS*.” XI.Io.A.T. J/12 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV.

fin al PSFJ. En conclusión, sostener que la AI “le impone a DUN una carga diabólica de la prueba” resulta una interpretación errónea de las facultades de la AI.

Adicionalmente, lo alegado por DUN, no ataca la imputación contenida en el DPR.

Es **infundado** el argumento de DUN relativo a que es ilegal que la AI no le dé valor probatorio a su manifestación respecto de que el intercambio de la BPD perdía relevancia después de la inclusión del artículo 36 bis de la LRSIC, ya que en términos de los artículos 83, fracción VI, 84 y 85 de la LFCE, la obligación legal de valorar las pruebas dentro de un PSFJ corresponde al PLENO.

De conformidad con el artículo 26 de la LFCE, la AI es el órgano de esta COFECE encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el PSFJ. Asimismo, en términos del artículo 28, fracción II y IX, de la LFCE, la AI tiene la atribución de conducir las investigaciones y recabar los medios de convicción necesarios para desahogar la etapa de investigación. No obstante, la AI no cuenta con facultades para valorar pruebas ni para determinar cargas probatorias.

En este sentido, la facultad y obligación de la AI se limita en términos del artículo 79, fracción III, de la LFCE, a indicar dentro del DPR “*Las pruebas y demás elementos de convicción que obren en el expediente de investigación y su análisis*”, pero no su valoración ni ponderación frente a otros elementos probatorios.

Así, no es sino hasta la resolución emitida por el PLENO que se establece el valor y alcance de las pruebas y que se determina si se acredita o no la probable responsabilidad imputada mediante el DPR, considerando las cargas probatorias.

Lo anterior, ya que es hasta la emisión del DPR que se señala quienes son los probables responsables, y es hasta el PSFJ cuando estos están en posibilidades de ofrecer pruebas y manifestarse contra la imputación realizada por la AI. De tal manera, la determinación de las cargas probatorias⁶⁵¹ y la valoración de las pruebas no pueden realizarse durante la

⁶⁵¹ Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia constitucional: “**CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS.** No debe confundirse la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera constituye un derecho -a probar- y la segunda es un deber procesal; asimismo, el derecho a probar es de naturaleza constitucional, en tanto el débito procesal es de naturaleza procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de mérito, o sea, el derecho a probar es anterior y de entidad superior a la obligación procesal, siendo que derecho y obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el procedimiento, tanto postulatorio como probatorio, mientras que la otra es objeto de examen por el juzgador hasta la sentencia o laudo; sin que deba validarse una decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando suponga la imposición de un formalismo obstaculizador, o contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otro tipo de intereses, como los de economía procesal, expeditéz de los juicios, o el prejuzgamiento de la carga probatoria, cuando su decisión no es propia de la resolución que acepta pruebas sino de la sentencia o laudo, lo que significa que es ilegal anticipar la carga de la prueba a una de las partes al momento de decidir sobre su admisión o no, ni invocar algún otro formalismo que impida conocer el resultado de una prueba en detrimento del derecho a probar, que es uno de los que conforman el derecho humano al debido proceso: luego, si el derecho a probar es un derecho constitucional que atribuye a la persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su debida protección, entonces su constitucionalización obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad probatoria, en la medida en que determina a las partes cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su observancia. Lo anterior, porque en la

investigación, pues en esa etapa no existen probables responsables, ni se han presentado las manifestaciones y pruebas de descargo, siendo que el ejercicio de la valoración probatoria implica la apreciación en su conjunto de todos los elementos probatorios directos, indirectos e indiciarios que aparezcan en el proceso, incluidos los presentados durante el PSFJ.

Por lo anterior, también es **infundado** que la AI haya impuesto a DUN una carga diabólica, pues la labor de la AI se limita a analizar si los elementos que obran en el EXPEDIENTE son suficientes para presumir una probable responsabilidad, sin determinar cargas probatorias ni limitar la posibilidad de DUN de manifestar y probar en contra de la imputación dentro del PSFJ.

DUN confunde la naturaleza de la AI, al equipararla con un órgano juzgador que tiene el deber de esclarecer la verdad de hechos litigiosos; no obstante, es hasta el DPR que se determinan los probables responsables y las conductas posiblemente violatorias de la LFCE, por lo que es hasta el PSFJ que existen hechos litigiosos.

En este sentido, la AI al allegarse de medios de convicción para desahogar la investigación, está dotada de autonomía técnica y de gestión, y no se encuentra obligada; i) a corroborar el dicho de los agentes económicos que ni siquiera son probables responsables en ese momento; ni ii) a seguir la línea de investigación que dichos agentes económicos marquen, pues en la etapa de investigación no existen probables responsables respecto de los cuales se deban probar hipótesis que los exoneren.

La AI no tiene facultades para ejercer funciones jurisdiccionales y, en este sentido, no le aplican los principios que rigen dicha función.

Los procedimientos de investigación y sanción de PMR seguidos ante esta COFECE, constan de diversas etapas:⁶⁵² (i) la primera, de carácter inquisitorio, que tiende a recabar los medios

interpretación de las normas probatorias también es procedente la que permita la máxima actividad probatoria de las partes, prefiriendo, inclusive, el exceso en la admisión de pruebas, a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en aquella subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de declararse en la sentencia, partiendo de la base de que la verdad es un derecho humano cuya restricción necesariamente debe justificarse y, por ende, la norma probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al derecho humano al debido proceso [énfasis añadido]". Jurisprudencia Constitucional; 10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV; Pág. 2368. XI.1o.A.T. J/12 (10a.); Registro No. 2014020.

⁶⁵² Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "**COMPETENCIA ECONÓMICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).** De la lectura de los artículos 23, 24, fracción I, 30, 31, primer párrafo, 33 y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, vigentes hasta el 28 de junio de 2006, así como de los diversos 23, fracción I, 25, fracción I, 27, párrafo primero, 30, 31 y 52 de su reglamento, se concluye que el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas seguido por la Comisión Federal de Competencia se compone de tres etapas: la primera, de carácter inquisitorio, que tiende a recabar los medios de prueba que permiten presumir la existencia de actos o prácticas prohibidas por la ley y concluye con el oficio de presunta responsabilidad; la segunda en la que se especifican las conductas monopólicas o prohibidas observadas en la etapa anterior, concretando y precisando los hechos, las circunstancias de realización y las normas violentadas; se señala al presunto infractor y las razones que se tuvieron para considerarlo con ese carácter; se ordena su emplazamiento para que en un plazo de treinta días naturales, comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhiba las pruebas que estime pertinentes; se fija un plazo no mayor de treinta

de prueba que permiten presumir la existencia de actos o prácticas prohibidas por la ley y concluye con el DPR; y (ii) la segunda, en la que se especifican las conductas monopólicas o prohibidas observadas en la etapa anterior, concretando y precisando los hechos, las circunstancias de realización y las normas violentadas; se señala al presunto infractor y las razones que se tuvieron para considerarlo con ese carácter; se ordena su emplazamiento para que comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhiba las pruebas que estime pertinentes; y se emite una resolución. Esta segunda etapa se desarrolla como un PSFJ donde se respetan las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de defensa, brindando al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar en su favor.

No obstante, en la primera etapa, es decir, durante la fase de investigación, no rige el debido proceso legal en términos de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la CPEUM porque durante dicha fase no se efectúan actos tendentes a disminuir o privar de manera definitiva los derechos de los agentes económicos involucrados.⁶⁵³

días naturales para formular alegatos y culmina con una resolución que debe dictarse dentro de los sesenta días naturales siguientes; además se desarrolla como un procedimiento seguido en forma de juicio donde se despliegan los actos necesarios para dictar una resolución definitiva, respetando las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de defensa, brindando al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar en su favor; y la tercera tiene como objeto impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento anterior, o bien, la que tenga por no presentada la denuncia o por no notificada una concentración, con la posibilidad alternativa de revocarla, modificarla o confirmarla [énfasis añadido]". Jurisprudencia I.4o.A. J/50; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 1690; Registro No. 172 585.

⁶⁵³ Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: "**COMPETENCIA ECONÓMICA. DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, IGUAL QUE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO RIGE EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** La finalidad que se persigue tanto con la integración de una averiguación previa por el Ministerio Público, como con la fase de investigación que lleva a cabo la Comisión Federal de Competencia Económica es, sustancialmente, prevenir y proteger el interés general, en el primer caso, mediante la conservación del orden público y la seguridad de los gobernados a través de la prevención y el castigo de los delitos y, en el segundo, proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios, con el fin de permitir el libre acceso de consumidores y productores en condiciones de igualdad en beneficio de la colectividad, sancionando severamente prácticas monopólicas. Correlativamente, una vez acreditadas e imputadas las conductas configuradoras del ilícito, se abre una segunda etapa, esta vez ante un órgano distinto, de carácter sancionador que, eventualmente, puede emitir un acto de privación, el cual requiere como antecedente de legitimidad, seguir un procedimiento en forma de juicio donde se respete el debido proceso legal con el fin de asegurar un auténtico, real y funcional derecho de defensa para rebatir las imputaciones. Así, el Estado, para conseguir los objetivos del procedimiento de investigación, lleva a cabo un sinnúmero de actos que pueden implicar molestias o, excepcionalmente, intervenciones que constituyen límites y restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a la necesidad de ejercer las pesquisas con la mayor eficiencia, siempre que se consideren inevitables y justificadas en razón de existir intereses sociales así como otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación de derechos, en cuanto condición para promover el bienestar general. En este orden de ideas, la afectación que pudieran ocasionar los actos llevados a cabo durante la investigación administrativa o la averiguación previa, será hasta que concluya la fase de investigación y, a partir del momento en que se emita el oficio de probable responsabilidad o se consignen los hechos ante la autoridad judicial, será posible verificar un acto de privación, pues en esa fase es donde se determina la conducta o los hechos que configuran presuntivamente un delito, una práctica monopólica o concentración prohibidas, así como la identificación del probable responsable. Lo anterior lleva a concluir que durante la fase de investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica, igual que en la averiguación previa a cargo del Ministerio Público, no rige el debido proceso legal en términos de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque durante esos periodos no se efectúan actos tendentes a disminuir o privar

En este sentido, el artículo 20, apartado A, fracción I de la CPEUM no rige la etapa de investigación en los términos pretendidos por DUN.

DUN refiere que, en términos de la LFCE, la AI tiene como objeto investigar e imputar sólo las conductas que tengan un objeto o efecto anticompetitivo, lo cual no se contraviene en el presente caso, ya que la AI imputó una probable responsabilidad a DUN por considerar que existen elementos de convicción suficientes para acreditar, entre otras cosas, el objeto y efecto anticompetitivo.

Por las razones expuestas, no es posible admitir que la AI actuó en contravención al artículo 33 de la LFCE. El hecho de que la AI hubiera recabado los elementos de convicción referidos en el DPR y no otros que en opinión de DUN pudo haber recabado (sin demostrarlo, ya que ella misma refiere que no existen) no se traduce de manera alguna en una violación a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, honestidad y exhaustividad.

Si bien es cierto que DUN no estaba obligada a aportar elementos para sustentar su dicho en la etapa de investigación, una vez que DUN fue emplazada al PSFJ, estuvo en la posibilidad y debió de ofrecer las pruebas que estimara convenientes para acreditar sus manifestaciones de conformidad con el principio general del derecho consistente en que *"quien afirma está obligado a probar"*.⁶⁵⁴ Así, es DUN la que, en la etapa del PSFJ, debe probar sus dichos y el hecho de que no cuente con soporte documental no limita su posibilidad de ofrecer pruebas diversas para acreditar sus manifestaciones (como por ejemplo la testimonial).

DUN refiere que la AI debió adminicular su manifestación al hecho de que la CNBV no lo sancionó por la falta de intercambio de la BPD; no obstante, la no intervención de la CNBV no implica consentimiento alguno por dicha autoridad ni tampoco un pronunciamiento respecto del cumplimiento o no de la LFCE.

Si bien es cierto que no existen elementos para presumir que la CNBV sancionó a DUN por su omisión, de dicho hecho no puede desprenderse un consentimiento de la CNBV relacionado con la falta de intercambio de la BPD. Es decir, a pesar de que una autoridad no sancione un hecho no puede entenderse como un consentimiento de la autoridad respecto de ese hecho, salvo que exista una determinación expresa de la autoridad respectiva en ese sentido o se encuentre prevista la afirmativa ficta, o una figura análoga, en la normatividad correspondiente (situación que no fue alegada ni acreditada por DUN). De este modo, la no intervención de la CNBV no implica que hubiera consentido o aprobado la falta de intercambio de la BPD, toda vez que sobre dicho hecho no se ha pronunciado en el sentido referido por DUN.

de manera definitiva de sus derechos a los agentes económicos involucrados o al indiciado". Tesis Aislada I.4o.A.58 A (10a.); 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Tomo 2; Pág. 1357; Registro No. 2 003 937.

⁶⁵⁴ Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: **"EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. PRUEBA DE LAS. Es principio general de derecho de que quien afirma está obligado a probar; luego, la comprobación de las excluyentes corresponde a quien las invoca y no al Ministerio Público"**. Jurisprudencia V.2o. J/42; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VII, mayo de 1998; Pág. 914; Registro No. 196 348.

Asimismo, aun cuando la Comisión Dictaminadora estimara que la alternativa de obligar a las SIC a emitir RCI permitiría eliminar las barreras a la competencia, no implica que sea irrelevante el intercambio de la BPD entre SIC, pues incluso en la LRSIC no se sustituyó la obligación de intercambiar la BPD (36 bis de la LRSIC) por la de proporcionar la información puntual para la elaboración de los RC (36 bis de la LRSIC); en la LRSIC se encuentran previstas ambas obligaciones, de lo que se desprende que la intención del legislador fue que prevalecieran ambos intercambios, máxime cuando, como el propio DUN ha señalado, la BPD y la información completa para la integración de RC son bienes distintos.

Tampoco implicaría que dicha Comisión Dictaminadora considerara que, *de facto*, y por el mero hecho de entrar en vigor el artículo 36 bis de la LRSIC, se eliminarían las barreras a la competencia. El mismo legislador estableció dentro de la fracción V del artículo 62 de la LRSIC la facultad de la CNBV de sancionar con multa de dos mil a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su información a otras SIC en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de dicha ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada. Así, el hecho de que DUN compartiera de forma parcial la información para la integración de RC, no implica que haya compartido la BPD, ni elimina los efectos en el proceso de la competencia económica que por tal negativa se hayan o estén actualizando.

De esta manera, es infundado que haya sido ilegal el actuar de la AI y que la AI debía de allegarse de medios de convicción para acreditar la manifestación de DUN.

Con independencia de lo anterior, de las constancias que obran en el EXPEDIENTE se advierte que la AI sí se allegó de diversos medios de convicción que constituyeron elementos objetivos que hicieron probable la responsabilidad de DUN, lo que dio lugar al inicio del PSFJ.

De dichos elementos de convicción, se desprende que CC solicitó a DUN la BPD y que DUN se rehusó de manera unilateral a proporcionársela, mediante la omisión de atender su solicitud, siendo que [REDACTED] tal negativa, ya que para dicho agente económico e

DUN manifestó en la investigación que derivado de la problemática que existía para realizar el intercambio de la BPD [REDACTED] y que considerando [REDACTED], se concluyó [REDACTED]

Al respecto, DUN no logra acreditar la existencia de [REDACTED]

No obstante, suponiendo sin conceder que [REDACTED] a cabo en el sentido referido por DUN, ello en nada desv [REDACTED] ntercambiar la BPD pues: (a) en el EXPEDIENTE se acreditó que una vez transcurrido el plazo para realizar el intercambio CC [REDACTED]

intercambiar la BPD; y (b) como se señaló en el DPR, fue hasta un año después de la solicitud que según DUN [REDACTED]

Asimismo, el intercambio de la BPD y el intercambio puntual tienen características de precio y uso distintas.⁶⁵⁵ Lo anterior es relevante debido a que, como se explica de forma detallada dentro del apartado "La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, dentro del EXPEDIENTE obran elementos de convicción de los que se desprende que la negativa de DUN tuvo por objeto y efecto impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO aun cuando DUN entregó de forma parcial la información puntual. Como se explica en el apartado de esta resolución referido en este párrafo, la negativa a intercambiar la BPD, por una parte, incrementa las posibilidades de que los USUARIOS de CC asuman costos derivados del HIT, lo que produce que CC se vuelve menos atractivo para los USUARIOS como resultado de la negativa de trato y, por otra parte, impide a CC generar productos de valor agregado con base en la IC proveniente de DUN, toda vez que la información puntual [REDACTED]

Adicionalmente, DUN nunca entregó la información puntual completa debido a la omisión del SEGMENTO CO.⁶⁵⁶

De este modo, las diferencias existentes entre la información que se recibe mediante el intercambio de la BPD y el intercambio puntual son relevantes no sólo debido a las distintas características de precio y uso que se han señalado, sino también porque DUN no entregó de forma completa la IC que ella misma refiere como la razón que haría irrelevante e innecesario el intercambio de la BPD.

Por otra parte, respecto de las manifestaciones a través de las cuales DUN manifiesta que no tuvo acceso a diversos elementos probatorios en los que la AI pretende sustentar la negativa de trato, se remite al análisis contenido dentro del apartado "Violación a diversos derechos

⁶⁵⁵ El intercambio de IC que se produce a través del intercambio de la BPD es masivo, tiene un menor costo que el intercambio puntual y permite que dicha información [REDACTED]

[REDACTED]; mientras que el intercambio de [REDACTED] y tiene un mayor costo.

[REDACTED] 1 dieciséis, CC señaló lo siguiente: "[...]" [REDACTED]

[REDACTED] no representó una solución óptima para el proceso de competencia y libre concurrencia, sobre todo considerando que: (i) el intercambio de la BPD y el intercambio puntual tienen características de precio y uso distintas; y (ii) DUN nunca entregó la información puntual completa debido a la omisión del SEGMENTO CO. Asimismo, como se indicó previamente, en la LRSIC no se sustituyó la obligación de intercambiar la BPD (36 bis de la LRSIC) por la de proporcionar la información puntual para la elaboración de los RC (36 bis de la LRSIC) y el intercambio puntual al que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC se habría llevado a cabo aproximadamente un año después de que CC solicitó a DUN el intercambio de la BPD.

humanos por no dar acceso a la totalidad de la información que resultaba indispensable para poderse manifestar sobre su contenido” de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

C.4.2. Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC.

DUN manifestó:⁶⁵⁷

La negativa a que se refiere el DPR y la solicitud de CC que sirve de base para ésta la constituye la supuesta negativa de intercambiar sus respectivas BPD de PM. En ese sentido, la imposibilidad para recibir la BPD de PM genera la imposibilidad para proporcionar la BPD a CC.

Como fue señalado en la investigación, DUN se encontraba impedido legalmente para recibir la información de CC -y por tanto realizar el intercambio- en virtud de que CC tenía autorización para prestar servicios con relación a PF y PM, mientras que yo únicamente contaba con autorización para prestar servicios con relación a PM y PFAE.

TUM sí pudo llevar a cabo el intercambio en virtud de que CC le proporcionaba su BPD de PF y PFAE indistintamente, mientras que TUM proporcionaba su BPD de PF a CC a cambio. Lo anterior se encuentra permitido dentro de los términos de las autorizaciones de CC y TUM, pues ambos agentes tienen autorizado prestar servicios relativos al HC de PF (sin distinguir entre PF y PFAE).

De este modo TUM sí tenía posibilidad de recibir la información que CC le proporcionara respecto su BPD de PF con o sin actividad empresarial. El hecho que TUM no preste servicios de PFAE no significa que se encuentre impedido por su autorización para recibir la información respectiva, o incluso para prestar tales servicios. Caso contrario ocurre conmigo, que únicamente cuento con autorización para prestar servicios con relación a PM y PFAE.

La manera en que CC recibe información de sus USUARIOS es relevante debido a que no contiene algún campo que le permita distinguir entre PF y PFAE, por lo que, al intercambiar su BPD con DUN, necesariamente estaría transmitiendo información de PF y PFAE indistintamente.

De este modo, tengo un impedimento para recibir la BPD, puesto que tendría que recibir la información relativa a PM y PF con y sin actividad empresarial, lo que quedaría fuera de la autorización que tengo. Asimismo, en términos del artículo 36 de la LRSIC el intercambio debe de versar sobre la totalidad de la BPD, es decir, debe incluir todos los registros de las personas respecto las cuales las dos SIC cuentan con autorización para prestar servicios (PM y PFAE).

Con lo anterior queda desvirtuado el argumento de la AI contenido a foja 304 del DPR: “[...] [DUN] argumentó que la problemática que presentaba la solicitud de [CC] fue que ésta sí está autorizada para operar en los dos segmentos: PF y PM; mientras que [DUN]

⁶⁵⁷ Páginas 98 a 101 de la CONTESTACIÓN DUN.

no. Este argumento pierde sentido cuando se observa que [REDACTED]

[REDACTED] Precisamente ese hecho, lejos de restarle sentido a mi explicación, evidencia la buena fe y la intención de BC para dar cumplimiento a la LRSIC.

La interpretación del alcance de las respectivas autorizaciones y del artículo 36 de la LRSIC, puede corroborarse con el hecho de que la CNBV no me ha sancionado a sabiendas del no intercambio de la BPD de PM.

Por otra parte, modificar mi autorización para abarcar PF sin actividad empresarial no es cosa sencilla e implicaría que acreditara diversas cuestiones ante la SHCP, muchas de ellas con una importante inversión aparejada. Incluso, el veintiuno de abril de dos mil diecisiete solicité a la SHCP la aprobación de la modificación de mis estatutos para incluir la prestación de servicios relativos al HC de PF. A dicha solicitud recayó un oficio de la SHCP en el que se indicó que el autorizar la modificación estatutaria implicaba modificar la autorización correspondiente, para lo cual debía proporcionar una gran cantidad de información, así como acreditar diversas cuestiones. En atención a la gran complejidad que involucraba opté por dejar desierta la solicitud.⁶⁵⁸

Aunado a encontrarme legalmente impedida para recibir la información relativa a PF, el recibirla no solo implica un incumplimiento a mi autorización, sino también un gasto por información que no podría utilizar. Es decir, el pago de la contraprestación por el intercambio se realiza por la totalidad de registros recibidos. En ese sentido, si DUN recibiera la información de PF en su totalidad, tendría que pagar por la totalidad de la información y no solo por aquella que puede utilizar (PFAE).

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶⁵⁹

DUN no se encuentra imposibilitado para recibir la BPD por lo siguiente:

Respecto del intercambio de BPD entre CC y TUM no existe duda, lo cual, nos lleva a dos escenarios posibles: (i) teniendo como hecho conocido que CC intercambia la BPD con TUM en forma total, es ilógico que TUM pueda recibir la totalidad de la BPD de CC cuando DUN se encuentre impedido, por lo que se cae el argumento de DUN respecto a un impedimento legal para recibir la BPD; y (ii) en el supuesto que TUM también esté impedido para recibir PM por estar fuera de su objeto social, la única forma lógica de hacerlo es que CC otorgue su BPD de forma parcial, lo que destruye el

⁶⁵⁸ Al respecto DUN indica que exhibe como Anexo 9 la copia certificada del Oficio número UBVA/DGABV/318/2017, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete emitido por la C. Directora General Adjunta de Banca y Valores perteneciente a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

⁶⁵⁹ Páginas 83 a 86 de la VISTA DUN.

argumento de que CC no puede entregar una BPD en forma parcial y, a su vez, que DUN lo haga en reciprocidad.

Se hace hincapié en la manifestación de TUM:⁶⁶⁰ “[...] los reportes de PM también incluyen a PF con actividad empresarial, mismas que consideran un vasto grupo de PF. Asimismo, dichas PF pueden cambiar su actividad en el transcurso del tiempo lo cual hace difícil una distinción precisa respecto a que [sic] mercado relevante deberían pertenecer.”

Así, el argumento esgrimido por DUN resulta contradictorio con las manifestaciones de TUM, en virtud de que, si las PF cambian su régimen a PFAE, esto provocaría que DUN, se encuentre permanentemente imposibilitado para trabajar con PFAE, puesto que siempre correría el riesgo de tener PF que hayan dejado de tener actividad empresarial y así estaría violando su autorización en cada momento.

La justificación argumentada por DUN es contradictoria con el hecho de que TUM y CC, sí intercambien la BPD, por lo que carece de sustento lógico.

Además, suponiendo sin conceder que DUN se encuentre imposibilitado para recibir la BPD de CC porque recibiría información de PF sin actividad empresarial, incumpliendo supuestamente su objeto social y autorización, nada impediría que entre DUN y CC sí intercambien la BPD únicamente respecto de PM.

CC solicitó el inicio para negociaciones respecto del intercambio de BPD de PM y PFAE, y DUN, conforme a sus manifestaciones contenidas en el DPR, no dio respuesta a la solicitud porque supuestamente [REDACTED]

[REDACTED]

DUN pretende modificar su justificación, señalando que la imposibilidad recae en que únicamente cuenta con autorización para prestar servicios con relación a PM y PFAE.

Lo expresado por TUM no puede ser desconocido por DUN y viceversa, ya que ambos argumentos son expuestos por SEPZ en su carácter de representante legal de ambas SIC.

Con base en lo anterior, esta AI solicita que, de ambas manifestaciones, se tome en cuenta aquella que, conforme a los artículos 96 y 200 del CFPC, desvirtúe la presunta imposibilidad de recibir la BPD, alegada por DUN. Asimismo, no existe medio de convicción alguno que soporte esta imposibilidad, más allá de simples manifestaciones de DUN.

Resulta **infundado** lo señalado por DUN relativo a que tiene una imposibilidad de recibir la BPD de CC, por las consideraciones que se expresan a continuación.

DUN sustenta su argumento en el hecho de que, a su parecer, por la manera en que CC recibe información de sus USUARIOS, no puede distinguir entre PF y PFAE por lo que al intercambiar su BPD estaría transmitiendo información de PF y PFAE indistintamente.

⁶⁶⁰ La AI se refiere a las páginas 64 y 65 de la CONTESTACIÓN TUM.

Como se explica de forma detallada en el apartado “*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*” de la presente resolución, DUN no logra acreditar su dicho respecto de los impedimentos que, según él, enfrenta CC. Incluso, en sentido contrario a sus manifestaciones, de los elementos que obran en el EXPEDIENTE se advierten diversos indicios de los que se desprende que, contrario a lo señalado por DUN, CC sí puede distinguir entre la información de PF y PFAE.

En primer lugar, de la CIRCULAR 17/2014 se desprenden elementos que desvirtúan lo señalado por DUN.

De conformidad con el artículo primero, dicha CIRCULAR 17/2014 tiene como objeto “*establecer los términos y condiciones a los cuales deberán sujetarse las Entidades Financieras al proporcionar la información relativa a sus Operaciones Crediticias al menos a una Sociedad*”. Esto quiere decir que establece los parámetros que deben seguir las ENTIDADES FINANCIERAS para proporcionar información y, por consiguiente, la forma en que las SIC deben recibirla.

De esta CIRCULAR 17/2014 se advierte que la información mínima solicitada que deben presentar las ENTIDADES FINANCIERAS a las SIC es diferente si se trata de PF, PM o PFAE. A continuación, se enlistan los requisitos solicitados por el tipo de persona:⁶⁶¹

PF	PFAE	PM
Cliente o Acreditado (Cliente)	Cliente o Acreditado (Cliente)	Cliente o Acreditado (Cliente)
Domicilio	Domicilio	Domicilio
Empleo o Actividad Económica		
		Accionistas
Crédito	Crédito	Crédito
	Avales del crédito	Avales del crédito

Adicionalmente, de la CIRCULAR 17/2014 se desprende que los campos requeridos para los rubros “*Cliente o Acreditado (Cliente)*” y “*Crédito*” también difieren cuando se trata de PF y PFAE. Para mayor claridad se muestra el siguiente ejemplo:⁶⁶²

“ <i>Cliente</i> ” PF	“ <i>Cliente</i> ” PFAE
RFC del Cliente	RFC del Cliente
	Actividad económica
Primer nombre	Primer nombre
Segundo y otros nombres	Segundo y otros Nombres
Apellido paterno	Apellido paterno
Segundo apellido	Segundo apellido

⁶⁶¹ Elaboración propia con información obtenida de la CIRCULAR 17/2014. La CIRCULAR 17/2014 se encuentra visible en los folios 612 a 623 y disponible en la página de internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5362644&fecha=03/10/2014.

⁶⁶² Elaboración propia con información obtenida de la CIRCULAR 17/2014. La CIRCULAR 17/2014 se encuentra visible en los folios 612 a 623 y disponible en la página de internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5362644&fecha=03/10/2014.



47885

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Fecha nacimiento	
------------------	--

Como se advierte, BANXICO obliga a proporcionar diferente información por el tipo de acreditado de que se trate. En este sentido, derivado del tipo de información que se reporta es fácil discernir si la información corresponde a PF, PM e incluso PFAE.

Lo anterior, es consistente con los esquemas de carga de CC como se indica a continuación.⁶⁶³

En la CONTESTACIÓN DUN, DUN ofreció dos copias simples o impresiones consistentes en "la versión 1.0 del documento intitulado 'Esquema de Carga-Guía para la Transformación y Entrega de Base de Datos a [CC]' publicado por [CC] el 17 de octubre de 2005"⁶⁶⁴ y "la versión 4.0 del documento intitulado 'CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física' emitido el 9 de mayo de 2013 (previamente referido bajo el título de la versión 1.0 contenido en la documental que antecede)"⁶⁶⁵ para acreditar que CC no podía distinguir entre PF y PFAE.

No obstante, como se señala en el apartado de "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, dichos documentos no prueban lo señalado por DUN, pues: (i) el primer documento es de dos mil cinco, siendo que en dicha fecha CC únicamente tenía autorización para participar en el mercado de PF; y (ii) el segundo documento es el esquema de carga de PF, razón por la cual no incluye información respecto de PFAE, ya que estas últimas forman parte del segmento de PM.

En este sentido, en el documento "CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física" presentado por DUN se señala lo siguiente:⁶⁶⁶

"[...]"

1.OBJETIVO

Describir como reportar la información contenida en la Base de Datos del Otorgante de personas Físicas, para ser entregada a Círculo de Crédito.

2.ALCANCE

El presente documento sirve como consulta tanto para el usuario como al área de Calidad. El esquema de carga esta desarrollado en XML el cual está diseñado para Personas Físicas.

[...]"

Elemento Nombre					
Etiquetas/Inicio/Fin	Nombre del Elemento	Tipo	Longitud	Opcional o Requerido	Comentarios/Reglas de Validación
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<TipoPersona> </TipoPersona>	Tipo de Persona	C	2	Opcional	Valores posibles para elemento: PF= <u>Persona Física</u>

⁶⁶³ De conformidad con el CONTRATO MARCO CC, los

⁶⁶⁴ Folios 34866 a 34899.

⁶⁶⁵ Folios 34901 a 34947.

⁶⁶⁶ Folios 34901 a 34947.

[...] [Énfasis añadido]"

Ahora bien, del EXPEDIENTE se desprende que CC además de contar con un documento que describe cómo reportar la IC de PF, cuenta con un documento diferente que describe como reportar la IC de PM y PFAE.

Al respecto, en la página 4 de la "Versión: 5"⁶⁶⁷ del documento titulado "Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial" se advierte que el objeto de éste es "[...] describir a las Entidades Financieras y Empresas Comerciales Otorgantes de Crédito el formato de envío de información hacia Circulo de Crédito".

En este sentido, de las páginas 13 y 17 de este documento se observa que en la IC que envían las ENTIDADES FINANCIERAS y las EMPRESAS COMERCIALES a CC se distingue claramente a las PFAE:

"[...]"

Sección de Compañía (EM)

Características del Segmento:

- Requerido.
- Reporta datos generales y domicilio del Acreditado.
- Longitud fija de 800 bytes.
- Un registro por compañía reportada.
- Para reportar correctamente Acreditados con domicilio en el extranjero se debe considerar lo estipulado para las etiquetas: 00, 15, 16, 17, 19, 24 y 25.

Posición Etiqueta	Etiqueta	Posición Campo	Campo	Institución Financiera	Empresa Comercial	Tipo	Longitud	Descripción
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
5	0	07	RFC	Requerido	Requerido	Texto	13	Registro Federal de Contribuyentes en el formato: <u>PM(XXXXAAMMDD)</u> <u>PFAE(XXXXAAMMDD)</u> [...] Aplica para los cuatro tipos de clientes: <u>Personas Morales</u> , <u>Personas Físicas con Actividad</u>

⁶⁶⁷ La "Versión 5" del "Esquema de Carga" que obra en el EXPEDIENTE (folios 1964 a 2068) estuvo vigente a partir del dos mil quince. La última versión de dicho documento ("Versión 11") se encuentra disponible en la página de Internet <https://www.circulodecredito.com.mx/PDF/CI-03-0006.pdf>, por lo que es un hecho notorio para esta autoridad. Dicha "Versión 11" contiene un apartado en el que se resumen todos los cambios realizados a partir de la creación del "Esquema de Carga" de "Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial" en el año dos mil once. Del análisis de la información contenida en dicho apartado, denominado "RESUMEN DE MODIFICACIONES" (páginas 127 a 129), se desprende que a partir de la versión 1.0 del Esquema de Carga de PM y PFAE, CC ha podido diferenciar entre la información de PF y PFAE, ya que no se observa ninguna modificación al "Esquema de Carga" que sustente lo afirmado por DUN.

								<i>Empresarial; Fondos y Fideicomisos; Gobierno</i>
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
668	23	670	Tipo de Cliente	Requerido	Requerido	Número	1	Indicar el tipo de Acreditado que se está reportando, de acuerdo con los siguientes datos 1=Persona Moral 2= <u>Persona Física con Actividad Empresarial</u> 3=Fondo o Fideicomiso 4=Gobierno Cuando se reporte un Fondo o Fideicomiso validar Tema 5

[...] [Énfasis añadido]⁶⁶⁸

Así, el documento "CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física" exhibido por DUN lejos de acreditar su dicho sirve para sustentar la inexistencia de la imposibilidad que refiere DUN, pues CC cuenta con dos manuales de carga distintos, uno para PF y otro para PM y PFAE, y en estos documentos se solicita que el USUARIO señale el tipo de acreditado de que se trata al enviar información a CC.

En este sentido, con dichos elementos se desvirtúa lo argumentado por DUN al señalar que CC "[...] no contiene algún campo que le permita distinguir entre PF y [PFAE], al momento de intercambiar su BPD con DUN, necesariamente estaría transmitiendo información de PF y [PFAE] indistintamente [...]", pues contrario a lo que señala DUN, sí existen elementos que permiten advertir que CC puede diferenciar entre la información de PF y PFAE.

Incluso, MAGR, en su carácter de [REDACTED] A [REDACTED], al cuestionársele en su comparecencia sobre "¿Cuál fue la razón por la que se decidió, a diferencia de TUM, sustituir la entrega de la [BPD] para [PM] con el [RCI]?", reconoció que [REDACTED]

[REDACTED] ⁶⁶⁹ Es decir, el mismo MAGR reconoció que la razón para no entregar la BPD de PM era [REDACTED]

Lo anterior además es consistente con lo señalado por CC al solicitarle a DUN el intercambio de la BPD, pues mediante la solicitud referida CC especificó que: [REDACTED]

[REDACTED] ⁶⁷⁰ Así, el mismo CC especificó en su solicitud que [REDACTED]

⁶⁶⁸ Folios 1976 y 1980.

⁶⁶⁹ Folio 27352.

⁶⁷⁰ Folios 23599 y 23600.

En virtud de lo anterior, esta autoridad observa que existen elementos suficientes para evidenciar que CC sí cuenta con la posibilidad de diferenciar la información correspondiente a PF de la información de PFAE, siendo que además DUN no logra acreditar la imposibilidad para recibir la BPD de CC, cuando en términos del Principio General de Derecho “quien afirma está obligado a probar”.

En este sentido, DUN podía realizar el intercambio respecto de “*todos los registros de las personas respecto las cuales las dos SICs cuentan con autorización para prestar servicios (PM y PF con actividad empresarial)*”.⁶⁷¹

El hecho de que la CNBV no la haya sancionado, no implica que tenía una imposibilidad de intercambiar la BPD, pues, en términos generales, la no intervención de una autoridad no implica una determinación de ésta respecto del hecho sobre el cual no ha intervenido.

En esta línea de ideas, lo argumentado respecto de que TUM sí podía, a diferencia de DUN, recibir la BPD pierde sentido, pues como se señaló, CC sí puede distinguir entre la IC de PF y de PFAE y DUN no logra acreditar el impedimento que alega.

Por otro lado, el argumento de DUN relativo a que modificar su autorización era complejo y requería una inversión, es **inoperante** ya que **no combate** el DPR, pues no se emplazó a DUN por no modificar su autorización, máxime cuando no era necesario que la modificara para estar en posibilidad de recibir la BPD de CC y proporcionar la suya, por lo que su argumento en nada trasciende a la imputación presuntiva contenida en el DPR.

Asimismo, el argumento relativo a que de recibir información relativa a PF además de implicar un incumplimiento a su autorización, implica un gasto por información que no podría utilizar, también es **inoperante** ya que **no combate** el DPR, pues no se imputó a DUN el que no haya intercambiado la BPD de PF. Adicionalmente como se señaló, CC sí puede distinguir entre PF y PFAE.

Con independencia de lo anterior, si DUN no tenía intención de negar el intercambio, pudo haber contestado la solicitud de CC externando su preocupación respecto de la supuesta imposibilidad de recibir la BPD en los términos en que CC la tiene, con la intención de que dicho agente económico estuviera en posibilidad de actuar en consecuencia.

C.4.3. La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD.

DUN manifestó:⁶⁷²

⁶⁷¹ Página 99 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶⁷² Páginas 101 a 103 de la CONTESTACIÓN DUN.

De acuerdo con la interpretación de la AI, el primero de los elementos del supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 56 de la LFCE consiste en *“la acción de rehusarse a proporcionar determinado bien o servicio”*.

Resulta evidente que para que un agente económico pueda rehusarse a proporcionar un bien o servicio, debe estar en posibilidades, tanto fácticas como jurídicas, para hacerlo. Uno de los elementos necesarios para que una sociedad pueda proporcionarle un bien o servicio a otra es un documento que fije las condiciones y términos de la relación jurídica entre dichas partes. Sin este acuerdo, las sociedades involucradas no tienen claridad ni certeza acerca de sus obligaciones y derechos recíprocos y, por consiguiente, no están en posibilidades de proporcionarse bienes o servicios.

En el caso concreto, lo anterior fue reconocido por el legislador al diseñar la LRSIC, por lo que éste añadió el tercer párrafo del artículo 36 de dicha ley, en el que se establece que *“las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la Comisión los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información”*. De la literalidad de dicho párrafo se desprende claramente que el plazo que tienen las SIC para acordar los términos y condiciones para intercambiar su información comienza cuando la CNBV formula un requerimiento solicitándoles que lo hagan.

Al respecto: (i) CC en momento alguno procedió conforme lo previsto en el artículo 36 de la LRSIC, informando a la CNBV que no había llegado a un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM; y (ii) la CNBV jamás emitió el requerimiento al que refiere el tercer párrafo del artículo 36 de la LRSIC.

Tales omisiones son prueba contundente de que tanto CC como la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado por CC y estuvieron satisfechos con la solución aceptada en las reuniones con la CNBV.

Luego, el plazo para que acordáramos los términos y condiciones para intercambiar información no ha iniciado. Y, como se mencionó, sin haber fijado dichos términos, no estaba en posibilidades jurídicas para intercambiar información con CC. Por lo tanto, no pude rehusarme a prestar determinado bien o servicio a CC, toda vez que me encontraba imposibilitado para hacerlo.⁶⁷³

Lo expuesto inevitablemente acredita que el primer elemento identificado por la AI (rehusarse a proporcionar un bien o servicio determinado) no se actualiza en el caso concreto y, consecuentemente, que el DPR es ilegal al estar indebidamente fundado y motivado.

La AI señaló:⁶⁷⁴

⁶⁷³ DUN presenta un diagrama para ilustrar la forma en la que se desencadena el procedimiento para que una SIC intercambie su BPD con la otra.

⁶⁷⁴ Páginas 86 a 91 de la VISTA DUN.

DUN argumenta la imposibilidad jurídica de intercambiar su BPD con CC, con base en dos afirmaciones: (i) para que una sociedad pueda proporcionarle a otra un bien o servicio siempre es necesario que medie entre ellas un documento que fije las condiciones y términos de la relación jurídica entre dichas partes; y (ii) en el caso concreto, para llevar a cabo un intercambio de la BPD entre las SIC, el proceso que deben seguir es el previsto en el artículo 36 de la LRSIC, procedimiento que no cumplió CC. Ambas afirmaciones son equivocadas como a continuación se demuestra:

En términos del CCF, el contrato no es el documento, sino el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Así, el hecho de que el contrato no revista la forma que la ley establece puede ser motivo de su invalidez, pero no de su inexistencia, pues la regla general es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Por lo anterior, la inexistencia de un documento que fije las condiciones y términos de la relación jurídica entre dos sociedades no es impedimento para que una sociedad pueda proporcionarle un bien o servicio a la otra.

En segundo lugar, DUN manifiesta que para que pueda darse el intercambio de la BPD entre SIC debe mediar un acuerdo (se entiende que por escrito) en el cual se establezcan los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información y que la inexistencia del mismo es una imposibilidad jurídica para realizar el intercambio de la BPD. Asimismo, manifiesta que el plazo con el que cuentan las sociedades para acordar en dichos términos no puede ser mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la CNBV.

En este orden de ideas, DUN señala que CC no informó a la CNBV que no había llegado a un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM y en consecuencia la CNBV jamás emitió el requerimiento al que refiere el tercer párrafo del artículo 36 de la LRSIC.

Por tanto, DUN argumenta que el plazo para que ambas SIC acordaran los términos y condiciones para intercambiar su información no ha iniciado; de ahí que no se pueda configurar la negativa de trato, toda vez que DUN estaba imposibilitado jurídicamente para realizar el intercambio.

Al respecto, esta AI se remite a lo señalado en el DPR e indica que de lo ahí señalado es posible concluir que: (i) CC sí solicitó, por escrito, a DUN el intercambio de su BPD; (ii) DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de PM; y (iii) CC informó a la CNBV que **B** un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM. Por tanto, contrario a lo que señala DUN, CC en todo momento procedió conforme lo previsto en el artículo 36 de la LRSIC.

Asimismo, tal como consta en el Anexo 1.1 del escrito de CC de seis de enero de dos mil dieciséis, por el cual realizó la solicitud por escrito a DUN, manifestó lo siguiente:

Eliminado: tres renglones y cuatro palabras

Como se observa, el argumento de DUN respecto de la falta de un acuerdo entre las SIC que estableciera los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD, carece de lógica, toda vez que CC sí manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo con DUN para llevar a cabo el intercambio de la BPD. Sin embargo, no hubo respuesta alguna a la petición formulada por CC, por lo que resultó imposible acordar el intercambio con DUN dada su negativa.

Esta AI concluye que CC sí manifestó su voluntad de acordar con DUN respecto de los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD. Además, [REDACTED] B

[REDACTED] B
[REDACTED] B

En ese sentido, la falta de un acuerdo por escrito entre DUN y CC, que estableciera los términos y condiciones para intercambiar la BPD, sólo puede ser reprochable, en primer lugar, a DUN por ser omisa respecto de la petición de CC y, en segundo lugar, [REDACTED] B

[REDACTED] B
[REDACTED] B

De ahí que la falta de este acuerdo, de ningún modo pueda probar que tanto CC como la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado, toda vez que la primera realizó toda una serie de acciones encaminadas a celebrar el acuerdo, mientras que la respuesta de la segunda únicamente podría probar su [REDACTED] B

[REDACTED] B

Asimismo, esta AI manifiesta que, con base en el principio general del derecho "*nadie puede alegar su propia torpeza*", es inválido el argumento expuesto por DUN, puesto que mediante este pretende beneficiarse de su propia omisión. Es decir, la falta de respuesta de DUN es lo que provoca que no se dé un acuerdo entre las SIC sobre las condiciones, estándares, procedimientos y cantidades a pagar por el intercambio. Situación de la cual DUN pretende sacar una ventaja.

En suma, debe desestimarse el argumento expuesto por DUN dado que parte de premisas incorrectas. Además, de los elementos de convicción no se desprende que CC y la CNBV hayan estado satisfechos con la solución aceptada en las reuniones con la CNBV.

Esta AI reitera que aun cuando, posteriormente a la solicitud de intercambio de la BPD de PM, hubiera habido un consentimiento entre CC y DUN para no intercambiar su BPD de PM, este hecho resulta intrascendente, en primer lugar, porque el SEGMENTO CO y la BPD no resultan bienes sustitutos y, en segundo lugar, dado que en términos del

Eliminado: un párrafo, cinco renglones y trece palabras

artículo 36 de la LRSIC se debe transmitir en su totalidad la BPD que proporcionen las SIC, lo cual, tal como se expuso en el DPR, no se ha dado.

Finalmente, la propia LRSIC y sus reformas han tenido como finalidad el intercambio de IC para generar competencia económica entre las SIC, como se expuso en el DPR.

Con independencia del proceso seguido ante la CNBV, la consecuencia del incumplimiento de la obligación que tienen las SIC de compartir su BPD implica que la SIC solicitante no cuente con la información suficiente que le permita competir en el MR DE PM, lo que llevó a la AI a concluir que se actualizó la primera premisa de la conducta denominada negativa de trato.

Es infundado el argumento de DUN relativo a que en el presente caso no se actualiza el primer elemento identificado por la AI relativo a rehusarse a proporcionar un bien o servicio determinado, por las razones que se expresan a continuación.

DUN argumenta que no se rehusó a prestar determinado bien o servicio a CC, toda vez que se encontraba imposibilitado para hacerlo en virtud de que no se habían fijado los términos para el intercambio respectivo, siendo que uno de los elementos necesarios para que una sociedad pueda proporcionar un bien o servicio a otra es un documento que fije las condiciones y términos de la relación jurídica entre dichas partes.

Al respecto, en términos de la LFCE la acción de rehusarse a proporcionar un bien puede darse en diversos momentos, entre ellos: (a) de manera previa a que los agentes económicos lleguen a un acuerdo sobre los términos de la transacción; o (b) después de haberse fijado dichas condiciones.

Lo anterior, ya que de conformidad con la normativa de competencia no es necesario que exista un acuerdo respecto de las condiciones en las cuales será proporcionado un bien para que pueda actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 56, fracción V, de la LFCE.

Considerar lo contrario volvería ineficaz la disposición señalada, ya que bastaría con que cualquier agente económico se negara a establecer o acordar las condiciones de la transacción para que pudiera alegar que tenía una imposibilidad jurídica de cumplir con su obligación de proporcionar, vender o comercializar un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros.

Así, fue justamente la omisión de DUN lo que impidió que se llevaran a cabo las negociaciones necesarias para acordar los términos y condiciones del intercambio de la BPD. Fue su propia omisión la que impidió que se determinaran con claridad y certeza sus derechos y obligaciones de forma que se pudiera llevar a cabo la transacción relativa al intercambio de la BPD.

En este sentido, DUN pretende justificar su omisión con las consecuencias que dicha omisión generó, es decir, señala que en realidad no se rehusó a intercambiar la BPD porque no existían los términos y condiciones para el intercambio, siendo que dichos términos no se acordaron

derivado de la omisión de DUN. Lo anterior, es contrario al principio general de derecho conforme al cual nadie puede alegar en su beneficio su propia omisión o culpa.

De los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se advierte la voluntad de CC de realizar el intercambio de la BPD de PM y para ello de acordar los términos en que se llevaría a cabo, así como la existencia de una negativa unilateral de DUN.

Al respecto, el [REDACTED], CC notificó a DUN el escrito mediante el cual solicitaba el intercambio de la BPD, señalando que: [REDACTED]

Así, CC no sólo solicitó el intercambio de la BPD a DUN, sino que le manifestó su intención de acordar con él los términos en que se daría el intercambio e incluso le realizó una oferta con los precios a pagar por registro, por lo que el hecho de que no se hubieran pactado los términos del intercambio es imputable a DUN, al ser dicho agente económico el que omitió dar respuesta a CC e iniciar las negociaciones respectivas.⁶⁷⁵

Ahora bien, el análisis que se realiza en la presente resolución implica verificar si la conducta de DUN constituye o no una PMR y no constituye un pronunciamiento respecto del cumplimiento o incumplimiento de la LRSIC.

En este sentido, a la luz de la LFCE es claro que, a través de su omisión, DUN se rehusó a proporcionarle a CC su BPD, con independencia de la intervención o no de la CNBV.

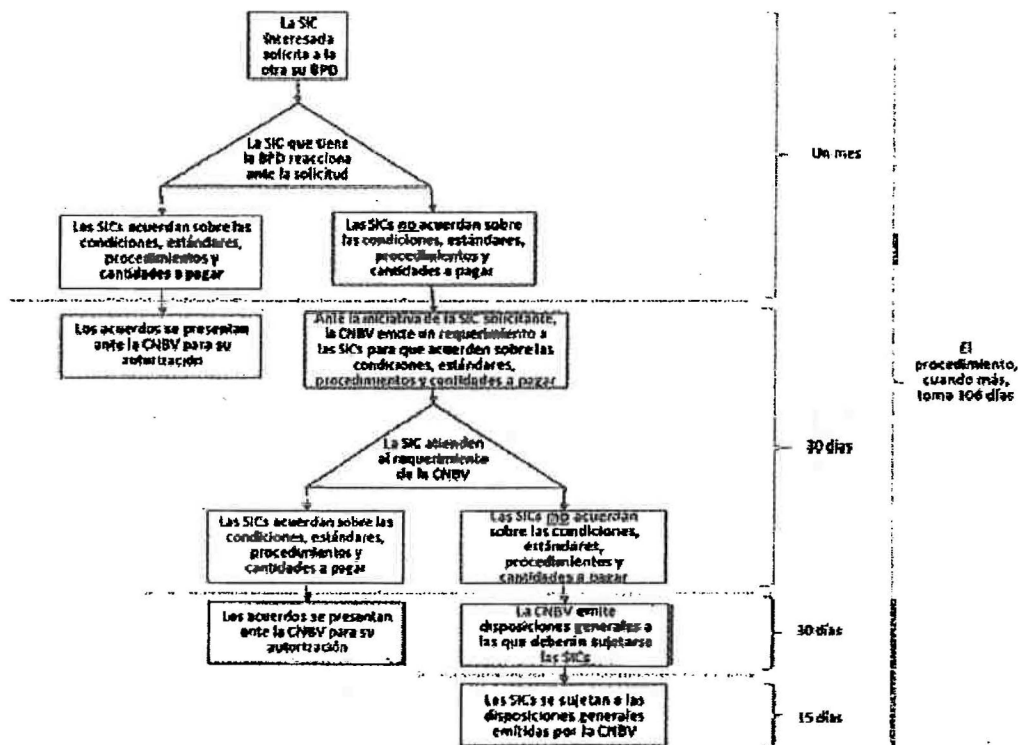
No obstante, incluso de la interpretación que hace DUN del procedimiento previsto en el artículo 36 de la LRSIC para el intercambio de la BPD, se advierte que no existía una imposibilidad para que DUN accediera a proporcionar su BPD a CC.

En este sentido, DUN presenta en la CONTESTACIÓN DUN el siguiente diagrama:

[SIN TEXTO]

⁶⁷⁵ El mismo DUN reconoce que [REDACTED] Folios 24896 y 24897.

REPRESENTACION GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE UNA SIC PROPORCIONE
SU BASE PRIMARIA DE DATOS A OTRA QUE LO SOLICITE



Del diagrama anterior se observa que según el dicho del propio DUN, una vez que una SIC solicita a la otra el intercambio de la BPD, es necesaria la reacción de la SIC que tiene la BPD para que pueda continuar el procedimiento. Asimismo, según dicho diagrama, dentro del primer mes y una vez que reaccionó la SIC a la que le solicitaron la BPD, las SIC buscan acordar las condiciones, estándares, procedimientos y cantidades a pagar, siendo que únicamente en caso de que no lleguen a un acuerdo intervendría la CNBV a través del requerimiento.

Al respecto, en el presente caso no existió una reacción de DUN a la solicitud de CC, ni tampoco DUN intentó acordar con CC las condiciones en que se llevaría a cabo el intercambio.

En este sentido, de conformidad con el diagrama presentado por el mismo DUN, es necesario que exista voluntad de las partes de realizar el intercambio para que se puedan dar las negociaciones y continuar con el procedimiento que establece la LRSIC, el cual se vio interrumpido por la falta de respuesta de DUN, situación que se traduce en su negativa unilateral de no compartir la BPD de PM.

DUN refiere en su argumento que el plazo que tienen las SIC para acordar los términos y condiciones para intercambiar su información comienza cuando la CNBV formula un requerimiento solicitándoles que lo hagan; no obstante, según el diagrama que presenta el



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

mismo DUN, las SIC intentan acordar los términos y condiciones dentro del mes que sigue a la solicitud y únicamente en caso de que no lleguen a un acuerdo, se emitiría el requerimiento de la CNBV.

Considerando lo anterior, es claro que no se necesitaba el requerimiento de la CNBV para que las SIC pudieran negociar los términos del intercambio. No obstante, como se ha señalado, toda vez que DUN se rehusó desde el comienzo a compartir la BPD, ni siquiera fue posible llegar a esta etapa del procedimiento para efectos de la realización del intercambio.

Asimismo, DUN señala que CC no informó a la CNBV que no había llegado a un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM lo cual resulta **infundado**.

Esta COFECE advierte que CC agotó todas las gestiones para poder acceder a la BPD de PM de DUN, siendo que es imputable a DUN el que no se haya realizado el intercambio de la BPD; en específico: (i) CC solicitó el intercambio de la BPD DE PM a DUN, mediante escrito

***; (ii) DUN se rehusó mediante su omisión a proporcionar a CC la BPD DE PM; (iii) CC hizo del conocimiento de la CNBV la negativa de DUN de proporcionarle su BPD DE PM;⁶⁷⁶ y (iv) la CNBV emitió su respuesta.

De esta manera, de la información disponible dentro del EXPEDIENTE resulta claro que CC realizó todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el intercambio y DUN omitió intercambiar su BPD con CC desde finales de agosto de dos mil doce, sin que hasta la fecha en que concluyó el periodo investigado hubiera cesado dicha conducta.

Asimismo, si bien no existen elementos en el EXPEDIENTE que permitan presumir que la CNBV emitió el requerimiento correspondiente, ello no justifica el hecho de que DUN se haya negado a proporcionar la BPD, ni tampoco prueba que la CNBV hubiera reconocido que no era factible llevar a cabo el intercambio o que la autoridad estuviera satisfecha con la solución propuesta que refiere DUN.

En virtud de lo anterior, CC agotó todas las posibles opciones que tenía para acceder a la BPD de PM de DUN conforme a la legislación aplicable, y DUN de manera unilateral se rehusó a compartir un bien normalmente ofrecido a terceros generando una afectación al proceso de competencia.

C.4.4. Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO.

DUN manifestó:⁶⁷⁷

A. No obra constancia que acredite que CC haya solicitado a DUN la compartición del Verdadero SEGMENTO CO, como lo manifesté al desahogar diversos

⁶⁷⁶ Como se indicó en el apartado "Violación a diversos derechos humanos por no dar acceso a la totalidad de la información que resultaba indispensable para poderse manifestar sobre su contenido" de la presente resolución, DUN tuvo conocimiento de que CC había acudido ante la CNBV con motivo de su negativa a intercambiar la BPD, pues dicha información no fue testada en la página 265 de la versión del DPR que se le notificó a DUN.

⁶⁷⁷ Páginas 103 a 105 y 116 a 117 de la CONTESTACIÓN DUN.



B. Con base en la definición del Verdadero SEGMENTO CO no nos encontramos legal o contractualmente obligados a compartirlo con CC o con algún tercero. El Verdadero Segmento CO no se refiere al historial crediticio de los clientes, sino únicamente a las “experiencias comerciales”. Ni el artículo 36 Bis de la LRSIC, ni el CONTRATO DUN Y CC obligan a DUN a la compartición del Verdadero SEGMENTO CO, ya que:

(ii) el CONTRATO DUN Y CC al referirse a las “*experiencias comerciales*” (Verdadero SEGMENTO CO) señala que [REDACTED] **

D. El Verdadero SEGMENTO CO no se encuentra normalmente ofrecido a terceros ni existe obligación legal o contractual alguna para su compartición, ya que: (i) el artículo 36 de la LRSIC refiere a la obligación de intercambiar la BPD, la cual no incluye el Verdadero SEGMENTO CO; (ii) el artículo 36 Bis de la LRSIC tampoco refiere a la obligación de intercambiar el Verdadero SEGMENTO CO; y (iii) el CONTRATO DUN Y CC al referirse al Verdadero SEGMENTO CO categóricamente señala que *****

La AI manifestó lo siguiente:⁶⁷⁸

⁶⁷⁸ Páginas 92 a 99 y 109 a 110 de la VISTA DUN.

Eliminado: seis renglones y diecinueve palabras

La AI reitera lo manifestado en las páginas 306, 307 y 308 del DPR. Esta AI confirma la conclusión expuesta en el DPR, esto es, que de conformidad con el CONTRATO DUN Y CC [REDACTED]

**

En particular, CC [REDACTED]

[REDACTED] En estos se observa la ausencia de la información correspondiente al SEGMENTO CO, para el caso del reporte emitido por CC.

Por lo anterior, debe desestimarse lo argumentado por DUN, con respecto a que no obra constancia que acredite que CC haya solicitado a DUN la compartición del SEGMENTO CO.

En relación con la obligación de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, la AI reitera que el artículo 36 Bis de la LRSIC señala que, para efectos de cumplir con los RC, las SIC estarán obligadas a compartir la información entre ellas. Asimismo, el último párrafo de la mencionada disposición señala que "[...] *el envío de información a otras Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios*".

En ese sentido, toda vez que DUN no ha argumentado que no recibe de las EMPRESAS COMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas, esta AI concluye que DUN se encuentra en posibilidades de entregarla y aún más importante, está obligada por la LRSIC a entregarla como parte de los RC que intercambie con otras SIC. De lo contrario, DUN incumple con la obligación prevista en el último párrafo del artículo 36 Bis de la LRSIC, dado que entregar los reportes sin incluir el SEGMENTO CO conlleva necesariamente a entregar la información incompleta en relación con aquella que recibe y, en consecuencia, implica también una distorsión de la información.

Respecto de lo señalado en [REDACTED] del CONTRATO DUN Y CC, este tiene naturaleza privada y no puede eximirse de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Por tanto, suponiendo sin conceder, que las partes contratantes [REDACTED] la autonomía de la voluntad de las partes tiene su límite en la ley y debido a que la LRSIC sí obliga a las SIC al intercambio del SEGMENTO CO, con independencia de lo que disponga el CONTRATO DUN Y CC, DUN continúa estando obligado a entregarla.⁶⁷⁹

⁶⁷⁹ La AI cita la siguiente tesis: "CONTRATOS, LA VOLUNTAD DE LAS PARTES ES LA LEY SUPREMA, PERO NO PUEDE REBASAR NI MODIFICAR LO ESTABLECIDO POR LA LEY, TRATÁNDOSE DE."

Asimismo, es incorrecta la interpretación que DUN pretende darle a [REDACTED] CONTRATO, pues ésta es contraria a lo dispuesto en las reglas de interpretación de los contratos, previstas en los artículos 1851 a 1857 del CCF, en específico, a la establecida en el artículo 1853, la cual a la letra dispone: “[s]i alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.”⁶⁸⁰

Por tanto, en una interpretación conjunta de las cláusulas⁶⁸¹ y tomando en cuenta que el objeto del contrato fue “pactar los términos y condiciones en virtud de los cuales las Partes cumplirán con las disposiciones contenidas en el artículo 36 bis de la LRSIC”,⁶⁸² la única manera que tienen las SIC de cumplir con su objeto es interpretando [REDACTED] del CONTRATO DUN Y CC, en un sentido positivo, es decir, siempre a favor de la compartición del SEGMENTO CO, [REDACTED] B [REDACTED] De lo contrario, incumplirían con el artículo 36 Bis de la LRSIC el cual, tal como lo admite DUN, obliga a que la información que se comparta para el RCI sea completa (incluyendo el HC del CLIENTE).

Por lo que se refiere a la presunta aprobación del CONTRATO DUN Y CC por la CNBV, esta AI se remite al contenido del artículo 36 bis de la LRSIC y al Oficio No [REDACTED], emitido el [REDACTED] por la CNBV, mediante el cual se aprueba la tarifa establecida en el CONTRATO DUN Y CC. La autorización de la CNBV es únicamente con respecto a las tarifas acordadas entre las SIC. Por tanto, dicha autorización no puede extenderse a todos los términos del CONTRATO DUN Y CC, y muchos menos implicar una aprobación de la CNBV para no compartir el SEGMENTO CO con otras SIC.

Por último, respecto al argumento de que el Verdadero SEGMENTO CO no resulta necesario para prestar el servicio en el MERCADO RELACIONADO, DUN se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que no expone razonadamente por qué considera que el SEGMENTO CO es información innecesaria para la elaboración de los RC.

Aunado a lo anterior, resulta erróneo que la operación de CC en el mercado pruebe que el SEGMENTO CO no resulta indispensable para la prestación del servicio, pues dicha

⁶⁸⁰La AI cita la siguiente tesis: “CONTRATOS. PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES ES NECESARIO ANALIZAR CONJUNTAMENTE EL SENTIDO DE SUS CLÁUSULAS, LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONSENSO DE VOLUNTADES AL CELEBRAR EL ACTO JURÍDICO. Con base en las reglas de interpretación de los contratos, previstas en los artículos 1851 a 1857 del Código Civil Federal y especialmente en lo establecido en los dispositivos 1851, segundo párrafo, 1852, 1853 y 1855, de los que se desprende que la intención de los contratantes es la que debe prevalecer en un pacto por sobre cualquier cosa; se concluye que cuando existen cláusulas que aparentemente establecen una situación determinada, pero en realidad se refieren a otra muy distinta, resulta necesario, para desentrañar la verdadera intención de los contratantes, considerar, además del sentido que resulte del análisis conjunto de las cláusulas, la naturaleza y el objeto del consenso de voluntades al celebrar el acto jurídico, pues ello proporcionará mayor claridad sobre la finalidad del acuerdo y por consecuencia, de la forma en que los interesados se propusieron contratar.”

⁶⁸¹La nota al pie correspondiente señala: “Cláusula Primera, numeral 23, del [CONTRATO DUN Y CC].”

⁶⁸²La nota al pie correspondiente señala: “Página 8 del [CONTRATO DUN Y CC].”

omisión sí ha tenido efectos en el mercado, en específico, se reitera lo dispuesto en la página 318 del DPR: “[...] la omisión en el intercambio completo de la información [...] ha generado daños a la competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de [CC] de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información. [...]”.

Además, suponiendo sin conceder que, DUN no ocupara el SEGMENTO CO que recibe de CC, esto no lo excusa de compartir el propio. Lo anterior debido a que: i) este supuesto no está previsto en la LRSIC como una excepción a la obligación de compartir dicha información y ii) la obligación de la SIC es por ministerio de ley, de ahí que no pueda ser modificada mediante un convenio entre las partes.

Finalmente, CC manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir la totalidad de la información disponible, [REDACTED]

[REDACTED] Este detalle no es menor, pues TUM y DUN conforman un mismo GIE y operan bajo el mismo nombre comercial de BC.

Esta AI solicita que se tenga por reproducido lo expuesto en las páginas 312 y 313 del DPR. Pierden sentido los argumentos de DUN cuando se observa que con TUM no ha habido ningún tipo de omisión, incumplimiento o inconsistencia en la información compartida con CC para la elaboración de los RC de PF.

Esta AI solicita se tenga por reproducido lo señalado en el apartado 3.1.1. de la VISTA DUN, en el cual se refiere a diversas manifestaciones de DUN sobre la definición correcta DEL SEGMENTO CO.

DUN argumenta que el “Verdadero Segmento CO” no se solicitó, no se encontraba obligado a compartirlo, no resulta necesario para prestar el servicio en el MERCADO RELACIONADO y no se encuentra normalmente ofrecido a terceros. Dichos argumentos son inoperantes ya que no combaten el DPR, pues en éste se imputó la negativa de proporcionar el SEGMENTO CO y no el “Verdadero Segmento CO” al cual DUN pretende dar un significado distinto. Al respecto, se remite a lo señalado en el apartado “Correcta definición del SEGMENTO CO” de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

Con independencia de lo anterior, en aras de analizar de manera exhaustiva lo señalado por DUN, a continuación, se analizan sus argumentos a la luz de lo señalado previamente en esta resolución respecto del concepto del SEGMENTO CO.

En primer lugar, sí obran constancias de que CC solicitó la compartición del SEGMENTO CO.

Asimismo, en términos del DPR, DUN sí se encontraba obligada a proporcionar el SEGMENTO CO en términos de lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC.

⁶⁸³ La nota al pie correspondiente señala: “Página 305 del DPR”



Asimismo, como se explica a continuación, en virtud de lo establecido en el CONTRATO DUN Y CC cada vez que CC solicitaba a DUN que le proporcionara la IC respecto de un CLIENTE específico, dicha solicitud incluía la del SEGMENTO CO. Es decir, CC no tenía que detallar y especificar en cada consulta que realizó a DUN que requería el SEGMENTO CO ya que en términos del CONTRATO DUN Y CC dicha información debía enviarse.

En relación con dichas consultas (solicitudes) formuladas por CC para requerir la información puntual a DUN se remite a lo señalado en el apartado "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias, toda vez que en dicho apartado no sólo se realiza al análisis respecto del valor probatorio del CONTRATO DUN Y CC, sino también se valora la información que DUN presentó mediante el ESCRITO DUN respecto del número de consultas que CC realizó a su BD en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.

Así, tal como se señaló en el DPR, no era necesario que CC solicitara formalmente y en específico el intercambio del SEGMENTO CO pues, en términos del CONTRATO DUN Y CC y el artículo 36 bis de la LRSIC, dicha solicitud se incluía dentro de aquellas que realizó CC a DUN para que esta última le proporcionara la IC de un CLIENTE determinado en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.

A mayor abundamiento, en la cláusula [REDACTED] del CONTRATO DUN Y CC se definen diversos conceptos que son utilizados a lo largo de dicho contrato:

* *

* *

* *

* *

Eliminado: cuatro párrafos y una palabra



4/901

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

**

Asimismo, la cláusula ** del CONTRATO DUN Y CC refiere el objeto de éste:

Eliminado: siete párrafos y una palabra

De esta manera el objeto del CONTRATO DUN Y CC es pactar los términos en virtud de los cuales DUN y CC cumplirán las disposiciones del artículo 36 bis de la LRSIC, **

**
**
**

Asimismo, de las definiciones señaladas en el CONTRATO DUN Y CC se desprende que para efectos de éste: **

**
**
**
**
**
**
686

De esta manera, de conformidad con el CONTRATO DUN Y CC **

**
**
**
**

Así, toda vez que, como se señaló en el apartado "*Correcta definición del SEGMENTO CO*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, el SEGMENTO CO se refiere a los créditos comerciales y éstos últimos son los reportados por las EMPRESAS COMERCIALES, DUN sí estaba obligada a proporcionar el SEGMENTO CO en términos de lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC.

Lo anterior es consistente con el objeto del CONTRATO DUN Y CC, por virtud del cual las partes deben cumplir con las disposiciones contenidas en el artículo 36 Bis de la LRSIC, siendo que dicho artículo refiere que la IC se debe compartir de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida por los USUARIOS.

⁶⁸⁵ Folio 25136.

⁶⁸⁶ En adición a lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC, debe tenerse en cuenta que en términos del artículo 2, fracción XV de la LRSIC, los USUARIOS son las ENTIDADES FINANCIERAS, las EMPRESAS COMERCIALES y las SOFOMES que proporcionen información o realicen consultas a las SIC. Asimismo, de conformidad con el análisis incluido dentro del apartado "*Correcta definición del SEGMENTO CO*", de la presente resolución, la misma CNBV **

**
**
**

Eliminado: un párrafo, dieciséis renglones y veintisiete palabras



19703

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

De esta manera, cuando CC solicitaba a DUN que le proporcionara la IC respecto de un CLIENTE específico, dicha solicitud incluía la del SEGMENTO CO. Es decir, CC no tenía que detallar y especificar que requería el SEGMENTO CO ya que en términos del CONTRATO DUN Y CC debía enviarse.

Con independencia de lo anterior, tampoco era necesario que CC solicitara de manera específica el SEGMENTO CO y bastaba con que solicitara a DUN de manera general que le proporcionara la IC de un CLIENTE en particular, ya que en términos de la LRSIC la SIC complementaria debe entregar completa y sin distorsiones la IC.

Al respecto, el artículo 36 bis de la LRSIC señala que: *"Las Sociedades al emitir Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir, la contenida en las bases de datos de las demás Sociedades. [...] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las Sociedades estarán obligadas a compartir información entre ellas. [...] Corresponderá al director general de la Sociedad asegurarse de la implementación de procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envío de información a otras Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios".*

Para mayor claridad, se observa que la LRSIC define el RC de la siguiente manera: *"la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad para ser proporcionada al [USUARIO] que lo haya solicitado en términos de esta ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 Bis de esta ley, sin hacer mención de la denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras [...] [énfasis añadido]"* y los RCE de la siguiente manera: *"la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad que contenga el historial crediticio de un Cliente que lo solicita en términos de esta ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 Bis de esta ley, y que incluye la denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras [...] [énfasis añadido]"*

De las transcripciones anteriores se desprende que una de las obligaciones que señala el artículo 36 BIS de la LRSIC es que al emitir RCI o RCE las SIC deben incluir la información contenida en sus BD y las de las otras SIC, al solo existir dos competidores en el mercado de PM, los RCI o RCE deben contener la información que contiene la BD de CC y DUN.

Ahora bien, respecto de la información que debe utilizarse para elaborar estos RCI y RCE la LRSIC señala que en ambos casos se trata de información de las ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES o SOFOMES. Así, la información proporcionada por las EMPRESAS COMERCIALES, denominada en el DPR como SEGMENTO CO sí forma parte de la información que deben contener los RC o RCE.

Compartir el denominado SEGMENTO CO es una obligación establecida en la LRSIC no porque en ella se diga de manera particular que debe transmitirse, sino porque señala como obligación compartir la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin

distorsiones respecto de aquella que fue proporcionada por los USUARIOS,⁶⁸⁷ esto incluye la información reportada por: a) ENTIDADES FINANCIERAS; b) EMPRESAS COMERCIALES; y c) SOFOMES no sólo porque así lo disponen los artículos 2, fracción XV y 36 Bis de la LRSIC, sino porque DUN no ha argumentado o acreditado que no recibe de las EMPRESAS COMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas.

Por otro lado, DUN argumenta que la única constancia que obra en el EXPEDIENTE es que CC manifestó que la solicitud fue comunicada de manera verbal sin que exista soporte alguno. No obstante, lo que CC manifestó verbalmente a DUN fue la [REDACTED] en la compartición de información, y no las diversas solicitudes para que DUN compartiera información en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.

En segundo lugar, como se advierte de las consideraciones señaladas, DUN sí se encontraba obligado a proporcionar el SEGMENTO CO tanto por el CONTRATO DUN Y CC como por la LRSIC.

Incluso, como se señaló previamente, la CNBV manifestó que [REDACTED]

Ahora bien, DUN argumenta que el "Verdadero Segmento Co" no forma parte del HC, porque no forma parte de la BPD, ni se trata de información cubierta por el RCI al que se refiere el artículo 36 Bis de la LRSIC.

El hecho de que el "Verdadero Segmento Co" o el SEGMENTO CO forme o no parte de la BPD, nada tiene que ver con la obligación de transmitir dicha información en el intercambio referido en el artículo 36 bis de la LRSIC, puesto que como se señaló, se trata de una vía distinta para intercambiar información. Adicionalmente, en el DPR no se indicó que el SEGMENTO CO formara parte de la BPD, por lo que dicha manifestación no combate el DPR.

No obstante, el SEGMENTO CO y el "Verdadero Segmento Co" es información que debe intercambiarse para la elaboración del RCI, pues en términos del CONTRATO DUN Y CC y de la LRSIC, [REDACTED]

Asimismo, como se señaló en el apartado "Correcta definición del SEGMENTO CO" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la CNBV no aprobó el contenido del CONTRATO DUN Y CC.

DUN señala que el CONTRATO DUN Y CC deja a la voluntad de las partes que el "Verdadero Segmento CO" forme parte del HC, lo cual es falso, pues [REDACTED]

⁶⁸⁷ Como se ha señalado, el artículo 36 bis de la LRSIC no sólo indica que las SIC están obligadas a compartir la información entre ellas. En el último párrafo de la mencionada disposición se señala que "Corresponderá al director general de la Sociedad asegurarse de la implementación de procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envío de información a otras Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios." [Énfasis añadido]



No obstante, aun si en el CONTRATO DUN Y CC no se hubiera pactado su compartición, la información completa (incluido el SEGMENTO CO o el "Verdadero Segmento CO") es ofrecida a terceros por la LRSIC y se encontraba disponible, por lo que al no proporcionarla DUN viola la normativa de competencia.

Por otra parte, DUN argumenta que no existe necesidad de emplear el SEGMENTO CO para poder emitir un RC.

Como se señaló, uno de los objetivos del artículo 36 bis de la LRSIC es que se integren RC simétricos y confiables para contribuir al desarrollo económico del país, en esta tesitura realizar un RC omitiendo el segmento correspondiente a la información reportada por EMPRESAS COMERCIALES, va en contra del ánimo de la compartición de información pues ello implica la generación de RC asimétricos.

Así, cuando DUN realiza la compartición de IC omitiendo información que obra en su BD, genera que el RCI ofrecido por CC no encuentre simetría con el que pudiera ofrecer DUN. Lo anterior, además de vulnerar lo señalado en la LRSIC, genera que los USUARIOS cuenten con menos incentivos para afiliarse y consumir los RCI elaborados por CC, ya que estos cuentan con información menos confiable.⁶⁸⁸

Ahora bien, en caso de que sea cierto que DUN no utiliza la información que CC le ha reportado respecto del SEGMENTO CO, esto no implica que dicha información no sea necesaria para CC en la elaboración de los RCI en términos de la LRSIC; así como para efectos de ofrecer un producto más competitivo a los USUARIOS. Asimismo, las decisiones que toma DUN respecto de la forma en que utiliza la información de CC no lo exime de compartir la IC de manera completa, en particular el SEGMENTO CO, siendo que ésta fue solicitada por CC y se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros en virtud de lo que establece la LRSIC.

Por otra parte, ni en la LRSIC ni en el CONTRATO DUN Y CC se prevé que la decisión de no ocupar el SEGMENTO CO que una SIC recibe de la otra exime a la primera de la obligación de compartir el propio SEGMENTO CO. Tal excepción a la obligación de compartir dicha información no se encuentra prevista ni en la LRSIC ni en el CONTRATO DUN Y CC.

⁶⁸⁸ Al respecto, tal como se desprende del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, los RC emitidos por DUN y CC no son simétricos ya que en la sección de créditos comerciales de los RC emitidos por CC no se advierten los registros de créditos comerciales que reporta DUN. A mayor abundamiento, véase la prueba 46 (a) analizada en la sección "Elementos de convicción de la investigación" y la prueba referida en el numeral 5 de la sección "Elementos de convicción aportados por los emplazados", ambos del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

En cuanto al argumento según el cual el Verdadero SEGMENTO CO no resulta necesario para prestar el servicio en el MERCADO RELACIONADO, puesto que se trata de información adicional a la necesaria para la elaboración de RC, así como respecto del señalamiento de DUN según el cual prueba de ello es que CC ha venido operando sin recibir el Verdadero SEGMENTO CO, se remite al análisis incluido dentro de los apartados “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios” y “VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS” de la presente resolución, toda vez que en dichos apartados se explica por qué la negativa a proporcionar el SEGMENTO CO sí tiene un impacto en el proceso de competencia y libre concurrencia y, en particular, impide sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Finalmente, DUN argumenta que el Verdadero Segmento CO no se encuentra normalmente ofrecido a terceros ni existe obligación legal o contractual alguna para su compartición, ya que: (i) el artículo 36 de la LRSIC refiere a la obligación de intercambiar la BPD, la cual no incluye el Verdadero Segmento CO; (ii) el artículo 36 Bis de la LRSIC tampoco refiere a la obligación de intercambiar el Verdadero Segmento CO; y (iii) el CONTRATO DUN Y CC al referirse al Verdadero Segmento CO categóricamente señala ******, más no señalan que lo sea.

Al respecto, como se señaló, tanto el artículo 36 bis de la LRSIC como el CONTRATO DUN Y CC incluyen la obligación de intercambiar el SEGMENTO CO.

En este sentido, la obligación legal de compartir la totalidad de la IC que obra en la BD de la SIC complementaria, incluyendo la reportada por las EMPRESAS COMERCIALES, implica que dicha IC se encuentra normalmente ofrecida por ley a terceros.

Es decir, al tratarse de un mercado regulado por la importancia del sector para el desarrollo de la economía nacional, la LRSIC suple la voluntad del particular y realiza un ofrecimiento a las otras SIC de la BPD y de la información puntual que obra en la BD de su competidor, de tal manera que no se requiere que la SIC titular de la BD ofrezca a las otras SIC que puedan formar parte del mercado dichos productos, pues los mismos ya fueron ofrecidos por ley.

En este sentido, DUN viola la LFCE al no dar acceso a su único competidor a un bien que es solicitado por este último, cuando por norma se encuentra ofrecido a terceros, generando con esto, una negativa de trato.

C.4.5. No resultó intrascendente el que mediara consentimiento entre DUN y CC para no intercambiar la BPD de PM, señalado en la comparecencia de MAGR.

DUN manifestó:⁶⁸⁹

La AI califica como intrascendente lo dicho por MAGR en su comparecencia, consistente en que existió consentimiento entre CC y DUN para no intercambiar sus BPD, por las siguientes razones: (i) la LRSIC y sus reformas han tenido como

⁶⁸⁹ Páginas 105 a 109 de la CONTESTACIÓN DUN.

finalidad el intercambio de IC para generar competencia; (ii) el incumplimiento a la obligación a la que se refieren los artículos 36 y 36 bis implica que el solicitante no cuente con la información suficiente que le permita competir; (iii) en términos del artículo 36 de la LRSIC la BPD se debe transmitir en su totalidad lo cual no se ha dado; y (iv) la COFECE tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica en los mercados.

Contrario a lo señalado por la AI, el dicho de MAGR resulta trascendente para efectos del análisis de la supuesta negativa. La AI no le resta valor probatorio al dicho de MAGR sino únicamente lo califica de intrascendente, lo que se procede a desvirtuar.

Por lo que hace al primero de los componentes de la negativa de trato (rehusarse a proporcionar un bien determinado), la AI lo tiene por colmado con base en que (i) CC me solicitó el intercambio de su BPD de PM en dos mil doce, y (ii) que a la fecha no se ha llevado a cabo el intercambio de la BPD.

Del dicho del MAGR se desprende una justificación por la cual no se llevó a cabo el intercambio de la BPD, el consentimiento por CC, el regulador financiero y nosotros para no llevar a cabo el intercambio entre SIC por no estimarse necesario. Así, se acredita que DUN no se rehusó a llevar a cabo el intercambio de la BPD, sino que existió consentimiento para no llevarlo a cabo, por lo que no existió una negativa de trato.

Ante evidencia exculpatoria, la AI debió de indagar sobre esa línea de investigación para el esclarecimiento de la verdad y contar con elementos suficientes que le permitieran convalidar lo dicho por MAGR, máxime porque dicha persona no sólo proporcionó una explicación sobre el por qué no se llevó a cabo el intercambio de la BPD, sino que hizo referencia a las personas que participaron en la reunión. El esclarecimiento del hecho incide en el resultado de la investigación.

Lejos de ser un hecho intrascendente, lo manifestado por MAGR resulta un hecho fundamental para el esclarecimiento de la verdad que, de acreditarse, es razón suficiente para tener por no acreditada la conducta prevista en el artículo 56, fracción V de la LFCE, por lo que es ilegal que la AI lo tache de intrascendente.

Ahora bien, por lo que respecta a las consideraciones de la AI para tachar de intrascendente lo manifestado se señala lo siguiente:

- I. No se niega que la finalidad del intercambio de información entre las SIC sea fomentar la competencia económica; sin embargo, como se precisa en el dictamen de la Reforma a la LRSIC, el intercambio de información para la elaboración del RCI es suficiente para eliminar las barreras a la competencia y asimetría en la información entre los reportes que emite cada SIC. Asimismo, el que la finalidad de una norma regulatoria sea el fomentar la competencia no es una razón que acredite que se llevó a cabo una negativa de trato en términos

de la LFCE.

II. Que el incumplimiento a la obligación de intercambiar la información a la que refieren los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC implica que el solicitante no cuenta con la información suficiente que le permita competir, es irrelevante para analizar un incumplimiento a la LFCE porque: (a) mediante el CONTRATO DUN Y CC, DUN y CC realizan el intercambio de la IC para la elaboración del RCI, por lo que CC ha contado con la información necesaria para competir (se insiste que de la reforma al artículo 36 Bis de la LRSIC se desprende que la alternativa de obligar a las SIC a emitir RCI *"elimina las barreras a la competencia y la asimetría en la información entre los reportes que emite cada una"*); (b) en la especie no ha mediado el requerimiento de la CNBV que resulta necesario para llevar a cabo el intercambio previsto en el artículo 36 de la LRSIC; y (c) el no contar con dicha información no implica que otra sociedad se haya rehusado a proporcionarla en términos de la LFCE, si una SIC no cuenta con la información a la que se refieren los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC, en todo caso, le atañe al regulador financiero quien habrá de verificar si se está dando cumplimiento a la LRSIC.

III. Con relación a que en términos del artículo 36 de la LRSIC se debe transmitir la totalidad de la BPD, y la falta de ello hace presumir una negativa de trato, se precisa que es correcto que se establece la obligación de intercambio de la BPD y en caso de que no se dé dicho intercambio, la CNBV habrá de analizar el caso y determinar si existe un incumplimiento o si medió causa justificada.

El que no se haya dado el intercambio no obstante exista la obligación legal no es razón para presumir una negativa de trato. En el caso existió consentimiento de las partes para ya no llevar a cabo el intercambio, lo que acredita justamente que DUN no se rehusó a proporcionar la BPD. En todo caso, le corresponde a la CNBV determinar si el no intercambio de la BPD genera un incumplimiento al artículo 36 de la LRSIC, más no acredita una negativa de trato. Además, la CNBV no me ha sancionado, lo que corrobora que medió causa justificada para no llevar a cabo el intercambio.

IV. Por lo que hace a que el objeto de la COFECE sea garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, concuerdo con ello. Sin embargo, se precisa que la función de la COFECE es garantizar la competencia mediante la aplicación de la LFCE y no la de otros ordenamientos como la LRSIC. Suponiendo sin conceder que existiera un incumplimiento al artículo 36 de la LRSIC y que dicho artículo tenga como finalidad garantizar la competencia económica, ello no faculta a la COFECE para determinar que existió un incumplimiento a la LRSIC.



67909

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Así, ha quedado acreditado que el dicho de MAGR lejos de resultar intrascendente, resultó fundamental y por ello debió haber sido considerado por la AI, quien debió indagar más sobre lo señalado a efecto de esclarecer la verdad.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁶⁹⁰

Se reitera lo expuesto en las páginas 308 y 309 del DPR.

Con independencia de la justificación expuesta por MAGR, la consecuencia del incumplimiento de la obligación que tienen las SIC de compartir su BPD, así como el SEGMENTO CO, implica que CC no cuente con la información suficiente que le permita competir en el MR DE PM. Lo anterior, implica una negativa de trato.

Asimismo, la AI continúa señalando que suponiendo sin conceder que el consentimiento entre las SIC bastara para justificar una negativa de trato, no existen elementos de convicción que lo acrediten. Por el contrario, sí existen elementos de convicción que confirman que CC realizó toda una serie de acciones encaminadas a obtener la BPD DE PM de DUN, sin que hasta la fecha de conclusión de la investigación se haya dado el intercambio. Además, de los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE, tampoco se acredita que CC y la CNBV hayan reconocido que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado por CC y hayan estado satisfechos con la solución propuesta en las reuniones con la CNBV.

Respecto del argumento de DUN según el cual el intercambio de IC para la elaboración del RCI previsto en el artículo 36 Bis de la LRSIC es suficiente para eliminar las barreras a la competencia, suponiendo sin conceder que el RCI baste para que las SIC estén en condiciones de competir, uno de los elementos requeridos en el intercambio, el SEGMENTO CO, no ha sido provisto.

Asimismo, respecto del argumento de DUN según el cual ha cumplido con lo que establece el artículo 36 de la LRSIC, no ha mediado requerimiento de la CNBV y, en todo caso, le atañe al regulador financiero verificar el cumplimiento de la LRSIC, la AI reitera que: "[...] la compartición de información para elaborar los RC se formalizó hasta un año después de que [CC] solicitara el intercambio de la BPD. [...] En segundo lugar [...] una vez que se formalizó el intercambio de información [...] (mediante la firma del mencionado [CONTRATO DUN Y CC], [CC] manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir la totalidad de la información disponible, [REDACTED]".

[REDACTED]". DUN ha sido omisa en el intercambio completo de la información, incluyendo tanto la compartición de la BPD DE PM, como la omisión del SEGMENTO CO en el intercambio de los RC de PM, generando daños a la competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y

Eliminado: doce palabras

⁶⁹⁰ Folios 99 a 103 de la VISTA DUN.

nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información.⁶⁹¹

Respecto del argumento de DUN identificado en los incisos III⁶⁹² y IV⁶⁹³ que se refieren en la transcripción de los argumentos DUN, la AI solicitó tener por reproducido lo expuesto anteriormente.

Además, es errónea la inferencia de DUN en cuanto a que se le está determinando un incumplimiento conforme a la LRSIC, pues en todo momento, y conforme a las consideraciones de derecho expuestas en el DPR, la conducta imputada ha sido subsumida dentro de los supuestos legales previstos en la LFCE y es en relación con éstos que se acredita la negativa de trato que se le imputa a DUN en el DPR.

Debe desestimarse lo argumentado por DUN en esta sección.

Los argumentos de DUN relativos a que: (i) el dicho de MAGR resultó fundamental pues de probarse se tendría por no acreditada la conducta imputada, por lo que es ilegal que la AI lo tachara de intrascendente; y (ii) la AI debió indagar sobre lo señalado por MAGR para esclarecer la verdad, son infundados por las siguientes consideraciones.

DUN señala que la AI debió tomar en consideración la comparecencia de MAGR, en específico respecto al señalamiento que establece que: **

694

La manifestación realizada por MAGR en su comparecencia respecto de la presunta reunión, únicamente se adminicula con lo señalado por el propio DUN, siendo que en términos de los artículos 96 y 210 del CFPC, dichas manifestaciones son susceptibles de probar plenamente en contra de MAGR y de DUN respectivamente, pero deben adminicularse con más elementos de convicción para tenerse por acreditadas.

En este sentido, tal como se señaló en el apartado *"Indebida valoración de los elementos probatorios y omisión de la AI para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar responsabilidades"* de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias: (i) la AI al allegarse de medios de convicción para desahogar la investigación no se encuentra obligada a corroborar el dicho de los agentes económicos (o sus empleados) ni a seguir la línea de investigación que marquen; y (ii) durante el PSFJ DUN estuvo en la posibilidad y debió de ofrecer las pruebas que estimara convenientes para

⁶⁹¹ Asimismo, la AI remite a su respuesta que se advierte en el apartado "C.4.3. La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD" de esta resolución.

⁶⁹² Para dicho argumento la AI remite a sus respuestas que se advierten en el apartado "C.4.1 Indebida valoración de los elementos probatorios y omisión de la AI para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar responsabilidades" y "C.4.2. Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC" de esta resolución.

⁶⁹³ Para dicho argumento la AI remite a su respuesta que se advierte en el apartado "C.3. Ni el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artículo 56, fracción V de la LFCE resultan aplicable para negativas por omisión" de esta resolución.

⁶⁹⁴ Folio 27351.

acreditar sus manifestaciones de conformidad con el principio general del derecho consistente en que "quien afirma está obligado a probar".

DUN señala que la AI debió indagar sobre la supuesta reunión en la que estuvieron presentes CC, CNBV y el propio DUN, siendo que DUN contó con la oportunidad de ofrecer los medios de convicción necesarios para que esta COFECE pudiera tener por acreditada la manifestación de MAGR, sin que se observe que DUN haya ofrecido pruebas que fortalezcan lo señalado en la comparecencia respectiva.

Lo anterior máxime cuando la aseveración de MAGR resulta ser un hecho positivo susceptible de probarse, por lo que DUN tuvo la oportunidad de presentar elementos que probaran la afirmación que realiza MAGR, cuestión que no aconteció.⁶⁹⁵

Por el contrario, existen elementos señalados en el DPR que acreditan que: (i) existió una solicitud de CC a la cual no recayó respuesta por DUN; y (ii) que ante la negativa CC **B**

B

Ahora bien, incluso de tenerse por acreditada la manifestación de MAGR, contrario a lo que señala DUN, ello no desvirtuaría la conducta imputada, pues la supuesta alternativa para el intercambio de la BPD se habría llevado a cabo aproximadamente un año después de que CC solicitó a DUN el intercambio de la BPD.

⁶⁹⁵ Sirve de apoyo la siguiente tesis: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza". Tesis aislada 1a. CCCXCVI/2014 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, noviembre de 2014; Tomo I; Pág. 706; Registro 2 007 973.

Al respecto, el CONTRATO DUN Y CC se firmó [REDACTED]; de este modo, la IC que se intercambia de forma puntual en todo caso fue accesible para CC casi un año después de que DUN negó a CC el intercambio de la BPD, por lo que, en cualquier caso, únicamente podría tener un impacto en el análisis de la duración de la negativa relativa al intercambio de la BPD y no respecto de su existencia. Así, si la manifestación de MAGR pudiera probar que a partir de lo acordado en dicha reunión cesó la omisión respectiva lo único que afectaría sería el análisis de la duración de la conducta mas no su existencia, por lo que la manifestación de MAGR es intrascendente para efectos de la acreditación de esta.

Asimismo, de la literalidad de la afirmación de MAGR no se desprende que CC ya no deseara el intercambio de la BPD, sino que supuestamente [REDACTED]

Al respecto, debe considerarse que el hecho de que CC tuviera otra alternativa para allegarse de IC no implica que el intercambio de la BPD no fuera útil, deseado o solicitado por CC, máxime cuando, como se ha señalado a lo largo de la presente resolución, existen diferencias considerables entre el intercambio de la BPD y el intercambio puntual.

La LRSIC prevé los dos tipos de intercambio con características distintas respecto del uso que puede darse a la información intercambiada por ambas vías, de manera que el argumento respecto de la irrelevancia del intercambio de la BPD con motivo de la posibilidad de intercambiar la IC a través del intercambio puntual no se sostiene entre otras razones porque legalmente las SIC enfrentan restricciones legales sobre el uso que pueden darle a la IC. En este sentido, si bien a partir del CONTRATO DUN Y CC, CC contó con mayores elementos para competir en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO y era menos dependiente de la BPD de DUN, ello no implica que el intercambio de la BPD no fuera deseable para CC, pues a través de dicha vía CC podía incrementar el tamaño de su BD para poder ser más competitivo en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, situación que no acontece con el intercambio puntual.

DUN manifiesta que del dicho de MAGR se desprende una justificación por la cual no se llevó a cabo el intercambio de la BPD, lo que a su parecer implica que DUN no se rehusó a llevar el intercambio, sino que existió consentimiento y por lo tanto no existió negativa de trato. No obstante, como se indicó, aun suponiendo que el dicho de MAGR tuviera el alcance de probar que existió el consentimiento referido, el supuesto normativo relativo a "*rehusarse a vender, comercializar o proporcionar*" se actualizó desde que existió la omisión de intercambiar la BPD, un año antes de que CC y DUN empezaran a realizar el intercambio puntual, por lo que lo manifestado por MAGR no puede justificar la omisión de DUN.

Ahora bien, por lo que respecta a los argumentos de DUN en contra de las consideraciones del DPR, se indica lo siguiente.

En primer lugar, el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,

Eliminado: dos renglones y catorce palabras



A9913

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

de la LIC, de la LRSIC, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, no puede entenderse como un pronunciamiento en el sentido de que el intercambio de la IC para la elaboración de los RCI es suficiente para eliminar las barreras a la competencia.

Al respecto, y en adición a los argumentos incluidos dentro del apartado *"Indebida valoración de los elementos probatorios y omisión de la AI para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar responsabilidades"* de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, al emitirse el decreto respectivo, ya existía en la LRSIC la obligación de intercambiar la BPD prevista en el artículo 36 de la LRSIC. De esta manera, el legislador consideró que adicionar a la obligación de intercambiar la BPD, la obligación de proporcionar la IC para la elaboración de los RCI permitiría eliminar las barreras a la competencia y la asimetría en la IC de los RC que emite cada SIC, considerando para ello la existencia de ambos tipos de intercambio.

En este sentido, el legislador no sustituyó la obligación de intercambiar la BPD (36 de la LRSIC) por la de proporcionar la información puntual para la elaboración de los RCI (36 bis de la LRSIC), sino que decidió que debían subsistir ambas obligaciones, toda vez que dichos intercambios tienen un alcance distinto.

Ahora bien, la finalidad de la LRSIC y sus reformas permite entender la importancia de la compartición de IC y las razones por las cuales se obliga a las SIC a realizar dicho intercambio, así como comprender que la obligación de intercambiar la BPD y la información puntual son distintas. No obstante, en el presente EXPEDIENTE no se emplazó a DUN con motivo del probable incumplimiento a una norma contenida en la LRSIC, sino porque con su omisión de intercambiar la BPD y proporcionar la información completa para la elaboración de los RCI, actualizó presuntivamente la hipótesis normativa contenida en el artículo 56, fracción V, de la LFCE. Es decir, mediante el presente procedimiento no se sanciona un incumplimiento a la LRSIC sino a la LFCE.

Por otra parte, CC no ha contado con la información completa que supuestamente debe intercambiarse en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC y el CONTRATO DUN Y CC, lo que afecta los incentivos de los USUARIOS para afiliarse y comercializar sus productos; asimismo la IC que recibe CC en función de dicho contrato, [REDACTED]

[REDACTED] Por ese motivo no se sostiene que CC hubiera contado con la IC necesaria para competir y que la información que se intercambia mediante la BPD resulte irrelevante desde el punto de vista del proceso de competencia y libre concurrencia.

Asimismo, para evitar repeticiones innecesarias, se remite al apartado *"La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD"* de la presente resolución, en el cual se indica que no era necesario el requerimiento de la CNBV para que DUN realizara los actos necesarios para el intercambio de la BPD.

Eliminado: diecisiete palabras



49914

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

DUN manifiesta que el no contar con la información a la que refieren los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC no implica que otra sociedad se haya rehusado a proporcionarla y que, en todo caso, le atañe al regulador financiero verificar si se actualiza o no un incumplimiento a la LRSIC. Al respecto, DUN manifiesta que: (i) corresponde a la CNBV determinar si el no intercambio de la BPD genera un incumplimiento al artículo 36 de la LRSIC; (ii) la función de la COFECE es garantizar la competencia mediante la aplicación de la LFCE y no la de otros ordenamientos como la LRSIC; y (iii) que el artículo 36 bis de la LRSIC tenga como finalidad garantizar la competencia económica, no faculta a la COFECE para determinar que existió un incumplimiento a la LRSIC.

Al respecto, se reitera que en el presente caso no se analiza el incumplimiento a la LRSIC sino la actualización de una hipótesis normativa establecida en la LFCE. El hecho de que la verificación del cumplimiento a los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC sea facultad del regulador financiero, no implica que la COFECE se encuentre impedida para ejercer las facultades con que cuenta para investigar y sancionar las posibles PMR realizadas por los agentes económicos.

Adicionalmente, como lo señala DUN, esta COFECE no puede atribuirse las facultades de la CNBV, así como la CNBV tampoco podría sustituir a la COFECE en sus facultades. No obstante, la COFECE actúa en el ámbito de su competencia al perseguir y sancionar posibles prácticas monopólicas, pues lo que hace es analizar y, en su caso, sancionar infracciones a la LFCE, sin perjuicio de las facultades que tengan otras autoridades en sus respectivos marcos normativos.

Por otra parte, si bien es cierto que el no contar con la IC referida en la LRSIC no implica que otra SIC se haya rehusado a proporcionarla, en el EXPEDIENTE obran elementos de convicción suficientes para acreditar que DUN se rehusó a proporcionar la IC previamente solicitada por CC. Es decir, existen elementos suficientes que permiten concluir que existe un nexo causal no sólo entre la negativa de DUN y el hecho de que CC no cuenta con la BPD de DUN y la información puntual que corresponde a las experiencias comerciales registrada en la BD de DUN, también existen elementos que permiten concluir que la negativa de DUN ha tenido por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM y al MERCADO RELACIONADO, como se explica de forma detallada en el apartado "*Objeto y efecto*" de la presente resolución.

En este sentido, se aclara que la COFECE no ejerce facultades para pronunciarse respecto de presuntas violaciones de la LRSIC.

Lo analizado por la COFECE se enfoca en las conductas previstas en la LFCE y en el caso en concreto la negativa de trato prevista en la fracción V del artículo 56 de dicho ordenamiento, el cual señala, entre otros requisitos para que se actualice la hipótesis normativa de una PMR, que debe acreditarse la existencia de una acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

A juicio de esta COFECE tanto la BPD como el SEGMENTO CO se encuentran disponibles y normalmente ofrecidos a terceros de conformidad a la LRSIC, pues ésta señala que es obligación de las SIC compartir su BPD y la información completa y sin distorsiones para la elaboración de los RCI, cuando su competidor lo solicite, cuestión que aconteció con las solicitudes de CC⁶⁹⁶ sin que ese señalamiento implique que la COFECE se sustituye en las facultades del regulador financiero, la cuales quedan intactas y no se ven alteradas por esta resolución.

Por lo que se refiere a la normatividad aplicable a las SIC, esta COFECE hace referencia a los dispositivos legales de la LRSIC para evidenciar la obligación de compartir la BPD y el SEGMENTO CO por las SIC, lo que evidencia que dichos productos se encuentran ofrecidos a terceros por ley, pero no para sancionar su presunto incumplimiento.

Como lo señala DUN, ambas autoridades deben actuar en el ámbito de sus facultades. En este sentido, el ámbito de aplicación de la LRSIC y la LFCE se encuentra bien delimitado, y la prevención y persecución de prácticas monopólicas corresponde a la COFECE.

Para mayor claridad, las facultades de la CNBV se enfocan principalmente en proteger la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad. Para esto, deben supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, en las que figuran las SIC, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

La COFECE en cambio, es el órgano encargado de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Por lo anterior, esta COFECE únicamente ha invocado artículos de la LRSIC para hacer patentes algunos de los elementos necesarios para actualizar la hipótesis normativa imputada y la importancia de la compartición de la información. Lo cual no constituye la aplicación de la normativa referida, sino el análisis de los elementos indispensables para la persecución de probables prácticas monopólicas, facultad que está debidamente contemplada en el artículo 28 de la CPEUM.

Por último, en el DPR no se afirma que la negativa de trato se hubiera actualizado únicamente porque no se dio el intercambio cuando existe una obligación legal para llevarlo a cabo, sino que se considera que se actualiza presuntivamente dicha conducta derivado del análisis en su conjunto de diversos elementos probatorios, de los que se desprende que presuntivamente: (i) DUN tiene PS en el MR DE PM; (ii) la conducta de DUN actualiza lo dispuesto en el artículo

⁶⁹⁶ En relación con el resto de las consideraciones por las cuales esta autoridad considera que tanto la BPD como el SEGMENTO CO se encuentran disponibles y son normalmente ofrecido a terceros se remite al análisis incluido en los apartados "La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.

56, fracción V, de la LFCE, toda vez que se rehusó de forma unilateral a vender, comercializar o proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, siendo que se encontraban disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) la conducta de DUN tuvo como objeto o efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Asimismo, tal como se señaló, no se acreditó que existiera consentimiento para no llevar a cabo el intercambio, y aun si se hubiera acreditado, dicho consentimiento se hubiera dado un año después de la solicitud, lo que no desvirtúa la existencia de la negativa, sino en todo caso su duración.

El que la CNBV haya sancionado o no a DUN no acredita que existiera una causa justificada para no llevar a cabo el intercambio toda vez que, como se indicó, la CNBV y la COFECE tienen atribuciones distintas y analizan los hechos bajo la perspectiva de funciones y normas distintas.

C.5. Manifestaciones en torno al segundo elemento de la negativa de trato.

C.5.1. La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros.

DUN manifestó:⁶⁹⁷

La AI transgrede el principio de tipicidad en virtud de que estima que el segundo componente de la negativa de trato se actualiza con el hecho de que los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC contemplen la obligación de intercambiar su BPD de manera completa; variando con ello el supuesto normativo en cuestión.

Para colmarse el segundo componente de la norma se debía de tratar de un bien que normalmente se encontrara ofrecido a terceros; es decir, que materialmente se haya ofrecido a un tercero. En el caso concreto dicho supuesto no se colmó ya que DUN en momento alguno ha realizado una policitación a terceros sobre su BPD de PM. Lo anterior evidencia a clara variación del tipo normativo por la AI y la consecuente transgresión a los principios de legalidad y tipicidad.

El que un ordenamiento jurídico obligue a un agente a proporcionar un determinado bien no significa que dicho agente ofrezca el bien normalmente a terceros, como se desprende de (i) la naturaleza y finalidad de la figura de negativa de trato, y (ii) la manera en que se ha desarrollado la doctrina de la negativa de trato ("refusal to deal") en jurisdicción precursora en competencia económica, la cual contribuye a la debida interpretación de la norma mexicana.⁶⁹⁸

⁶⁹⁷ Páginas 109 a 115 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁶⁹⁸ El pie de página original señala: "Tal y como lo reconoce el entonces Comisionado Morales Elcoro en su voto concurrente emitido en el expediente DE-011-2010, en donde acude al derecho casuístico estadounidense para desentrañar la naturaleza de la figura de negativa de trato. Al respecto, en la página 8 del citado voto, señala lo siguiente: 'El artículo 10 de la [entonces Ley Federal de Competencia Económica vigente] se inserta enteramente en el marco moderno de investigación y sanción de conductas unilaterales con efectos anticompetitivos. Al emitir la Ley, el legislador tomó la amplia experiencia de

La figura de negativa de trato debe de ser interpretada como una excepción a la libertad de los agentes para contratar y por tanto debe de ser utilizada con extrema precaución. Una indebida interpretación y aplicación puede conllevar a condenar conductas que no resultan anticompetitivas y a desincentivar aquello que la competencia busca proteger.⁶⁹⁹

Obligar a un agente -aún aquél con poder sustancial- a compartir sus bienes con sus competidores, se encuentra en conflicto con el propósito subyacente de la competencia económica, puesto que desincentiva al agente incumbente, a su competidor, o a ambos para invertir en el desarrollo de innovación de dichos bienes,⁷⁰⁰ pudiendo generar un efecto de "free-rider".⁷⁰¹

El *free-riding* es un problema para el proceso de competencia ya que desincentiva la competencia entre los agentes mediante su esfuerzo e inversión para competir con base en méritos, quienes en lugar de ello prefieren: (i) aprovechar la inversión o esfuerzo de su competidor en lugar de invertir; y/o (ii) no realizarlo a sabiendas de que se beneficiará el que se beneficie de su inversión o esfuerzo. En esta tesitura, la aplicación de la negativa de trato debe realizarse con extrema precaución.

Tomando en consideración el posible efecto anticompetitivo, el artículo 56, fracción V de la LFCE prevé que la negativa de trato únicamente se configura cuando el bien o servicio se niegue a una persona determinada, cuando dicho bien o servicio se encuentre normalmente ofrecido a terceros.

Con lo anterior, se busca únicamente sancionar aquellas negativas en las que un agente normalmente ofrezca el bien o servicio en cuestión, y con un propósito anticompetitivo se rehúse de ofrecer el bien o servicio a persona determinada, pues la única razón lógica para dejar de proporcionar el bien o servicio pudiera ser el desplazar al agente afectado por la negativa; de otra manera, el comportamiento lógico del agente sería proporcionar el bien o servicio al mayor número de consumidores.

Así, la figura de negativa de trato no se refiere a una simple negativa de negar un servicio a un agente que pudiera estar favoreciendo de un 'free riding' sino que busca sancionar un verdadero trato diferenciado a un agente con respecto los

la practica internacional en la supresión de abusos de monopolización. El tratamiento de la negativa de trato no es la excepción y es por ello que la doctrina internacional contribuye a la debida interpretación de la norma mexicana".

⁶⁹⁹ DUN remite al caso considerado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica identificado como "VERIZON COMMUNICATIONS INC., PETITIONER v. LAW OFFICES OF CURTIS V. TRINKO, LLP", en el cual se habría señalado, de acuerdo con las manifestaciones de DUN, que "inferencias incorrectas y las resultantes falsas condenas son especialmente costosas, puesto que desincentivan aquella conducta que las leyes de competencia están diseñadas para proteger".

⁷⁰⁰ DUN refiere que así lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de los EUA en el caso de *Trinko*.

⁷⁰¹ El pie de página original señala: "En términos generales, se llama *free-rider* al agente que se beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o riesgos. Definición contenida en el glosario de términos estadísticos de la OCDE, disponible en la siguiente liga: <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3222>".

demás consumidores de un determinado bien o servicio. Es decir, la figura de negativa de trato no busca obligar a un agente a proporcionar un bien o servicio cuando éste no lo ofrece normalmente a terceros, caso muy diferente es que la regulación obligue a un agente a proporcionar dicho bien. Así, en el marco de la LFCE, resulta inválido obligar a un agente económico a proporcionar a sus competidores un determinado bien o servicio, cuando éste no lo ofrece normalmente a terceros.

No porque la regulación sectorial obligue a un agente económico a compartir un determinado bien o servicio, se debe de considerar que el bien se encuentra normalmente ofrecido a terceros. Es decir, resulta irrelevante para colmar el supuesto normativo el que la regulación sectorial obligue a DUN al intercambio de la BPD. El que los bienes o servicios se encuentren normalmente ofrecidos a terceros, es una cuestión que se refiere a que sean ofrecidos en el plano de las relaciones comerciales en un mercado. Una obligación regulatoria no puede equipararse a un ofrecimiento a terceros.

El confundir la provisión de IC con un mercado genera que la AI estime que un bien se encuentra normalmente ofrecido a terceros, cuando en realidad se trata de una obligación regulatoria que se da en una cadena productiva, y la cual se encuentra excluida del mercado.

La doctrina y el derecho internacional sirve para interpretar las normas nacionales, especialmente considerando que los orígenes de la competencia económica provienen de EUA. Es de traer a colación lo decidido por la Suprema Corte de los EUA dentro del caso *Trinko*, en donde se resolvió que una obligación regulatoria de proveer un determinado servicio no puede ser equiparado con el deber de comercializar para efectos de la figura de negativa de trato.

Dentro del citado caso de *Trinko* la Corte de EUA reconoció el riesgo que implica imponer un deber de contratar para la competencia económica, en tanto que por el problema del *free rider* se corre el riesgo de desincentivar la competencia.

Finalmente, el entonces Comisionado Morales Elcoro realiza en el voto concurrente una distinción entre la figura de negativa de trato y la doctrina de insumo esencial, de la que se desprende la negativa de trato implica una negativa discriminatoria, mientras que en el segundo de los casos existe generalmente una obligación legal de ofrecer el servicio.⁷⁰²

⁷⁰² DUN transcribe el siguiente texto: "Los casos de negativa de trato implican un espectro de situaciones, desde casos de empresas integradas verticalmente con una ventaja adquirida en el mismo mercado sobre empresas no integradas hasta casos estructurales que implican un 'insumo esencial', generalmente adquirido por concesión gubernamental. Los casos son conceptualmente similares -implican necesariamente que el servicio está siendo negado a un rival, directamente o mediante conductas equiparables, resulte indispensable para la producción de un bien o servicio relacionado, sea imposible reproducirlo mediante un esfuerzo razonable de inversión y no exista ninguna justificante objetiva para negar el servicio. La diferencia radica en que, en el primer tipo de casos, el servicio ha sido o es ofrecido normalmente en el mercado y se

Con independencia de que en el caso concreto no se colman los requisitos para estar frente a un insumo esencial, en el presente caso se analiza una negativa de trato en términos del artículo 56, fracción V de la LFCE y no en términos de la fracción XII, por lo que el PLENO se encuentra impedido para variar la *litis* en el presente caso y analizar una negativa de trato sobre un insumo esencial. No obstante, la distinción entre ambas figuras abona para demostrar como una obligación legal de proporcionar un determinado bien o servicio (en este caso el artículo 36 de la LRSIC) no equivale a que el bien se encuentre normalmente ofrecido a terceros.

Así, la AI nuevamente contraviene el citado principio de tipicidad, al establecer que el hecho que la LRSIC obligue a las SIC a proporcionar sus BPD es razón suficiente para que las BPD de PM de DUN sea un bien “normalmente ofrecido a terceros”.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷⁰³

Esta AI considera que las referencias a antecedentes judiciales internacionales no obligan a las autoridades nacionales a resolver conforme a las mismas.⁷⁰⁴

Con independencia de lo anterior, debe resaltarse que la resolución de *Trinko* citada por DUN, únicamente establece que, para el análisis de negativa de trato, debe existir la ausencia de regulación respecto del bien que se alega la negativa, pues las normas *antitrust* no pueden imponer obligaciones adicionales respecto de aquellas que establece ya la regulación en específico.⁷⁰⁵ Esta característica o requisito de procedibilidad de la legislación de competencia es única y muy particular en la legislación norteamericana, pues la experiencia internacional en otras jurisdicciones no adopta el criterio expuesto, e, incluso, ha ido en sentido opuesto, como se puede constatar en *C-280/08 P - Deutsche Telekom v Commission* o *T-201/04 - Microsoft/Commission*. En conclusión, lo argumentado por DUN con respecto a prácticas internacionales, resulta erróneo debido que no realizó una correcta interpretación respecto del caso que cita.⁷⁰⁶

sanciona su interrupción justificada o su negativa discriminatoria, mientras que, en el segundo tipo de casos, existe generalmente la obligación legal de ofrecer el servicio.”

⁷⁰³ Páginas 103 a 108 de la VISTA DUN.

⁷⁰⁴ La AI cita la tesis que se encuentra bajo el rubro: “DERECHO COMPARADO. LAS AUTORIDADES NO ESTAN OBLIGADAS A RESOLVER CON APOYO EN EL”.

⁷⁰⁵ El pie de página original señala: “Véase: <https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/single-firm-conduct/refusal-deal>”

⁷⁰⁶ El pie de página original señala: “Asimismo, cabe destacar el pronunciamiento de la Comisión Europea, en el cual se estableció que: ‘En algunos casos concretos, puede ser evidente que la imposición de una obligación de suministro no puede obviamente tener efectos negativos para los incentivos del propietario del insumo y/o de otros operadores para invertir e innovar en el mercado ascendente, ya sea previa o posteriormente. La Comisión considera que esto es especialmente probable cuando una regulación compatible con el Derecho comunitario impone ya a la empresa dominante una obligación de suministro y cuando de las consideraciones que son la base de esa regulación se desprende claramente que, al imponer dicha obligación de suministro, la autoridad pública ya ha sopesado adecuadamente los incentivos. Esto puede ocurrir también cuando la posición de la empresa dominante en el mercado ascendente se ha desarrollado al amparo de derechos especiales o exclusivos o ha sido financiada mediante recursos estatales. En estos casos concretos no hay ninguna razón

D. V. f. AG

Por otra parte, respecto del elemento normativo “normalmente ofrecido a terceros”, uno de los puntos relevantes establecidos en el DPR es el hecho de que el mismo GBC, por un lado, sí otorga la BPD de PF, a través de TUM, y por otro, niega la BPD de PM y el SEGMENTO CO, a través de DUN, ambas a CC. Lo anterior es relevante porque demuestra que la BPD, como insumo, sí es otorgado por GBC, cuando se trata de PF, por lo que no existe justificación técnica o económica para negar el intercambio respecto de una modalidad del insumo, lo cual debe administrarse con los elementos expuestos en el DPR, para concluir que la conducta desplegada por DUN se adecúa al tipo establecido en el artículo 56, fracción V, de la LFCE.

Por otra parte, DUN señala que la obligación de compartir la BPD con CC “puede generar un efecto de free-rider (...) ya que desincentiva la competencia entre los agentes mediante su esfuerzo de inversión”, no obstante, dicho argumento no se sostiene en virtud de los siguientes elementos:

En primer lugar, la presencia de free-rider implica la existencia de un agente económico que “se beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o riesgos”⁷⁰⁷ y “trata de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él”.⁷⁰⁸ No obstante, se observa que en el artículo 36 de la LRSIC se establece la obligación de compartir la BPD y establecer tarifas por el intercambio de información.

Incluso, CC al realizar la solicitud a DUN para intercambiar la BPD de PM ofreció pagar un precio [REDACTED] B [REDACTED]. En ese sentido, el intercambio de información solicitado por CC implicaría un pago a DUN de [REDACTED] por registro, pago que también se contempla en la LRSIC, por lo que no se sostiene el argumento de DUN en el sentido de que se puede generar un efecto free-riding.

Adicionalmente, como se mencionó, existe el antecedente del intercambio de BPD de PF, en términos del artículo 36 de la LRSIC. En el segmento de PF, la CNBV autorizó [REDACTED] por registro” a CC y TUM, éste último es una empresa perteneciente al GBC. Por lo tanto, se reafirma el hecho de que es falso que el intercambio de la BPD de PM implique no “compartir los costos o riesgos”, en virtud de la existencia de la obligación legal de intercambiar la BPD, del establecimiento de una tarifa por el intercambio de información y el antecedente del intercambio de BPD de PF a un precio de [REDACTED] por registro.

Cabe destacar que TUM, perteneciente al GBC, señala en su escrito de contestación al DPR que debido a que las tarifas de intercambio de información están reguladas, fomentan certidumbre y mayor intercambio entre los participantes mercado.

para que la Comisión se desvíe de su norma general de control y muestre el probable cierre anticompetitivo del mercado sin examinar si concurren las tres circunstancias acumulativas contempladas en el apartado 81. ‘Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes. Visible en el hipervínculo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN)’.

⁷⁰⁷ La AI refiere la página 111 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁷⁰⁸ La AI refiere la página 13 del DOCUMENTO DE ECONOMÍA.

En segundo lugar, entendido el problema de *free-riding* como aquel en el que CC pudiera estarse aprovechando de las inversiones o los recursos y por los que no estuviera pagando, se tiene que DUN no señala la forma en que esto podría estar ocurriendo porque no precisa las inversiones o los recursos propios de los que se estaría obteniendo una ventaja.

Por otra parte, la existencia de un costo por el intercambio de IC⁷⁰⁹ implica que ésta no es un bien público que produzca efectos positivos o externalidades sobre las SIC que no han realizado un pago por el intercambio de información. Es decir, no existe “un efecto de *free-rider*” que pueda “disminuir el incentivo de un monopolista, su rival, o de ambos de invertir en aquellas instalaciones que resultan económicamente benéficas.”⁷¹⁰

Finalmente, si bien no se ha llevado a cabo el intercambio de la BPD de PM, este intercambio entre SIC implicaría que no existe *free-riding* ya que, además del precio que se pagaría por el intercambio, cada una de las SIC proporciona a la otra la información que recopiló y procesó en forma de BPD. Es decir, no solo CC se beneficia de obtener la BPD de DUN, sino que también DUN obtendría la BPD de CC, como ocurre en el caso de la BPD de PF. Asimismo, DUN no sostiene con ningún elemento que el intercambio de la BPD de PM y el intercambio del SEGMENTO DE CO “*desincentiva al agente incumbente, a su competidor, o a ambos para invertir en el desarrollo de innovación [...] el obligar a la compartición de un bien o [...] puede generar un efecto de free-rider*”.

DUN señala que la AI varió el tipo normativo y realizó una interpretación de la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE que transgrede los principios de legalidad y tipicidad al considerar que la BPD y el SEGMENTO CO estaban disponibles y eran normalmente ofrecidos a terceros en virtud de los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC, toda vez que debía tratarse de un bien normalmente ofrecido a terceros y DUN nunca ha realizado peticitación a terceros sobre su BPD de PM. Dicho argumento es **infundado** debido a las siguientes consideraciones.

Por regla general, en virtud de la libertad de comercio y los principios de autonomía de la voluntad y libertad contractual, los agentes económicos tienen la facultad de determinar si desean o no establecer relaciones de carácter jurídico-económicas con otras personas y, en su caso, las condiciones y términos de dichas relaciones; no obstante, la libertad contractual no es absoluta y encuentra sus límites en la regulación, la cual puede restringirla en virtud de una razón legítima que sustenta el interés de la sociedad.⁷¹¹

⁷⁰⁹ El pie de página original señala: “Página 111 del DPR.”

⁷¹⁰ El pie de página original señala: “Motta (2013), *Competition policy. Theory and practice*, pp 314-315.”

⁷¹¹ Sirve de apoyo el siguiente criterio: “**TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 138, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA LIBERTAD DE COMERCIO NI LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en torno a la libertad de comercio, en el sentido de que constituye un derecho constitucionalmente protegido en términos del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no es absoluto, sino que puede limitarse o modularse, entre otros casos, cuando el ordenamiento que la restringe contenga un principio de razón legítima que sustente el interés de la sociedad y que tienda a proteger sus derechos. De igual forma ha señalado que la autonomía de la

Así, si bien en la mayoría de los casos es el agente económico el que, de así determinarlo, ofrece los bienes que produce para que sean comercializados en el mercado, existen casos en donde al tratarse de actividades cuya rectoría corresponde al Estado (como el caso del sistema financiero), éste puede determinar los bienes que son ofrecidos en el mercado por determinados agentes económicos.

Lo anterior es así en el caso de las SIC, cuya actividad no queda a su libre y absoluto arbitrio, sino que está sujeto a las exigencias, modalidades, obligaciones y restricciones impuestas por el Estado a través de la ley.⁷¹²

De esta manera, el Estado ejerciendo su rectoría y supliendo la voluntad de las SIC, ofrece a terceros a través de los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC, la compartición de la BPD y el SEGMENTO CO, respectivamente. Ello ya que el legislador al emitir la LRSIC y sus reformas, considerando la importancia y finalidad de las SIC en el desarrollo económico del país, determinó imponer obligaciones específicas para el ejercicio de su actividad, lo cual según lo señalado por la SCJN es conforme a derecho considerando que la LRSIC corresponde a la materia financiera en la cual el Estado funge como rector y cuenta con facultades para determinar las modalidades que deben regir la actividad económica de las SIC.

Ahora bien, un agente económico con PS en un MR no puede rehusarse a proporcionar un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros, con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.

voluntad es un principio rector de las relaciones entre particulares, por lo que el legislador no sólo está facultado, sino obligado, a implementar todos aquellos instrumentos que garanticen su eficacia, de conformidad con el precepto constitucional citado, que regula la libertad contractual y señala de forma especial los casos en los que no puede considerarse válida. Ahora bien, el artículo 138, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al establecer que el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial, estará sujeto a diversas obligaciones específicas, entre otras, la de celebrar acuerdos para compartición de sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura, así como permitir la compartición de los derechos de vía, no viola la libertad de comercio ni la autonomía de la voluntad, pues con dichas obligaciones, no se le impide ejercer las actividades correspondientes que le fueron otorgadas por el Estado, sino que sólo se trata de garantizar el equilibrio económico, el desarrollo de la competencia en el sector y, además, la función social que se desarrolla a través de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, en términos del artículo 6o., apartado B, fracción II, de la Constitución Federal. En ese sentido, si bien es cierto que las fracciones citadas obligan al agente aludido a celebrar acuerdos para compartición de sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura y permitir la compartición de los derechos de vía, también lo es que se respeta la autonomía de la voluntad, pues será el propio agente quien celebre los acuerdos con otros concesionarios, es decir, que las partes en la relación jurídica podrán fijar los términos y las condiciones bajo las cuales se logra la coubicación, se comparte la infraestructura y los derechos de vía. Además, no se restringe el derecho de los concesionarios de convenir en cuanto a la forma, el contenido, los términos y las condiciones en que se celebran los acuerdos para compartición de sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura, aunado a que se permite la compartición de los derechos de vía; de ahí que únicamente se establecen pautas para equilibrar la participación de las concesionarias en el sector". Tesis Aislada 1a. CLXIX/2018 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h; Registro No. 2 018 847.

⁷¹² Véase la versión pública del amparo en Revisión 54/2012, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en la sesión correspondiente al día nueve de mayo de dos mil doce, disponible en la página de Internet: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=135453>. Páginas 39, 40, 56 a 58 y 72.

En este sentido, la condición que marca el tipo normativo para que el agente económico con PS en el MR no pueda rehusarse a proporcionar el bien solicitado, es que dicho bien del cual es propietario o controla el agente económico que realiza la conducta, se encuentre disponible y normalmente ofrecido a terceros; no obstante, no existe una obligación de que la oferta respectiva sea realizada por el propio agente, pues existen supuestos en los cuales la ley en aras de proteger el interés de la sociedad, suple la voluntad del agente económico y ofrece en su nombre el bien respectivo.

Por lo anterior, no se considera que sustentar que la BPD y el SEGMENTO CO se encuentra disponible y normalmente ofrecido a terceros en la LRSIC viole los principios de legalidad y tipicidad, ni constituya una variación al tipo normativo, pues de la literalidad de la hipótesis normativa no se desprende una descripción del sujeto que debe realizar la oferta.

DUN refiere que el confundir la provisión de IC con un mercado genera que la AI estime que un bien se encuentra normalmente ofrecido a terceros, cuando en realidad se trata de una obligación regulatoria que se da en una cadena productiva y la cual se encuentra, en su opinión, excluida del mercado. Al respecto, se remite a lo señalado en el capítulo de "Mercado Relevante" de la presente resolución, en el cual se explican las razones por las cuales este PLENO considera que la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado toda vez que involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación.⁷¹³

Asimismo, si bien se trata de un mercado regulado tanto el intercambio de la BPD como el intercambio puntual que debe llevarse a cabo en términos de los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC respectivamente prevén la posibilidad de que los agentes económicos lleguen a un acuerdo sobre los términos del intercambio.

Por lo que hace al intercambio de la BPD, CC ofreció a DUN el pago de una cantidad determinada de dinero a cambio del intercambio de IC, sin que DUN presente argumentos o evidencia alguna tendiente a acreditar que dicha oferta corresponde a una actividad "excluida del mercado" o, incluso, para explicar cómo es que en caso de haber aceptado dicha oferta y la CNBV hubiera autorizado el precio y las demás condiciones del intercambio se habría generado un efecto de *free riding* en virtud de que las cantidades ofertadas le habría impedido recuperar sus costos u obtener un retorno razonable por su inversión.

⁷¹³ En el caso del intercambio de la BPD, la LRSIC dispone en el artículo 36, párrafo tercero, lo siguiente: "Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información a que se refiere este artículo. Los acuerdos respectivos deberán presentarse a la Comisión para su autorización, al igual que sus modificaciones [énfasis añadido]". De este modo, el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por parte de la SIC que recibe la información. Si bien, por lo menos hasta la conclusión de la investigación todavía no se realizaba el intercambio de la BPD relativa a PM, para el caso de PF, la CNBV autorizó a TUM y a CC un intercambio mensual de BPD a un precio de [REDACTED] por registro, lo que demuestra que el intercambio de IC implica el pago de una contraprestación. Por lo que hace a la etapa de procesamiento de la información, de la cual forma parte el intercambio puntual de la IC, en caso de que haya HIR en la información proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC complementaria. Así, para PM la tarifa establecida por las SIC para el intercambio puntual de IC es de [REDACTED]

En cuanto al intercambio puntual, el artículo 36 Bis de la LRSIC prevé la posibilidad de que los ingresos que obtengan las SIC de la venta de los RC a los que se refiere dicho precepto se distribuyan en la forma en que lo decidan pactar las SIC. Al respecto, DUN no explica cómo es que la tarifa que se cobra por el intercambio de la información puntual de un CLIENTE, misma que fue establecida por CC y DUN en el CONTRATO DUN Y CC le impide a DUN recuperar sus costos u obtener un retorno razonable por su inversión.

Por otro lado, DUN argumenta que obligar a un agente a compartir sus bienes con sus competidores, se encuentra en conflicto con el propósito subyacente de la competencia económica; no obstante, a través de la presente resolución no se está imponiendo una obligación nueva ni distinta a la que el legislador ya previó para las SIC. Es decir, la obligación que tiene DUN para compartir la BPD y el SEGMENTO CO, existe con independencia de lo que señale esta COFECE.

En este sentido, sin perjuicio de que en la presente resolución esta COFECE no se pronuncia sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LRSIC, sino sobre la existencia de la PMR imputada y la responsabilidad de DUN en ésta, es importante considerar que la ponderación de los efectos que puede generar la obligación de compartir IC en los incentivos de la SIC y el mercado, fue realizada en su momento por el legislador, mismo que, entre otras cuestiones, también previó la posibilidad de que las SIC lleguen a un acuerdo sobre los términos del intercambio en cada caso.

DUN señala que la figura de la negativa de trato no se refiere a una simple negativa, sino que busca sancionar un verdadero trato diferenciado a un agente con respecto los demás consumidores de un determinado bien o servicio; sin embargo, en términos de la LFCE no se requiere que el producto ya haya sido comercializado y que exista un demandante que efectivamente este recibiendo el bien y respecto del cual se dé el trato diferenciado para que se constituya la negativa de trato, sino que basta con que el bien o servicio se encuentre disponible y normalmente ofrecido a terceros y que exista un demandante que lo haya solicitado.

Aunado a lo anterior, en virtud que el mercado en el que participa DUN se encuentra integrado únicamente de dos agentes económicos, no es posible encontrar un trato diferenciado respecto de otros agentes, sin que ello implique que no se está violando la LFCE. El argumento de DUN implica que no se podría sancionar una negativa de trato realizada a un competidor en mercados con únicamente dos agentes económicos a menos que se trate de un caso en el que se niegue el acceso a un insumo esencial, lo que es contrario tanto a la literalidad como a la finalidad de la LFCE. En el escenario que plantea DUN tampoco sería posible sancionar negativas de trato a agentes económicos que buscan entrar a un mercado, lo que también es contrario al objeto que persigue la LFCE.

Es por esta razón que en el DPR se utiliza como antecedente (sin que sea necesario) lo observado el segmento de PF, donde TUM, quien junto con DUN forma el GBC, sí realizó el intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, lo cual sirve como indicio de que no existen elementos técnicos, económicos y jurídicos que impidan el intercambio de una BPD.

DUN pretende justificar su argumento, entre otras cuestiones, a través de lo señalado por la Suprema Corte de los EUA en el caso *Trinko*; no obstante, las resoluciones emitidas por las autoridades extranjeras no resultan vinculantes para esta autoridad⁷¹⁴ y las autoridades mexicanas no tienen obligación de aplicar una norma extranjera ni a resolver con apoyo en casos resueltos por una autoridad extranjera.

Por otra parte, DUN no justifica de qué manera el criterio establecido por la Suprema Corte de los EUA es aplicable al caso concreto, cuando la legislación, el mercado y la conducta que se analizan son distintos.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se advierte que el criterio tomado en *Trinko*, no es consistente con lo que se ha señalado en otras jurisdicciones. Es decir, no existe un criterio generalizado en materia de competencia económica respecto de cuál debe ser el estándar que debe seguir la autoridad de competencia cuando se trata de negativas de trato que ocurren en mercados regulados.

Así, esta COFECE debe resolver considerando lo señalado en el marco jurídico mexicano y no se encuentra vinculada por ningún criterio señalado por una autoridad extranjera.

Por las consideraciones expuestas, el criterio emitido por la Suprema Corte de los EUA en el caso *Trinko*, no puede ser tomado en consideración como vinculante para la emisión de la presente resolución por tratarse de criterio emitido por una autoridad extranjera y toda vez que DUN no demuestra que las consideraciones que motivaron la resolución de dicho asunto resulten aplicables al caso analizado dentro del EXPEDIENTE.

Por otra parte, el voto concurrente del entonces Comisionado Rodrigo Morales Elcoro tampoco es vinculante para esta COFECE y los criterios emitidos por él en su momento únicamente resultan como una orientación para las decisiones de la COFECE, siempre y cuando apliquen al caso concreto.

Ahora bien, de conformidad con DUN, el entonces Comisionado realizó una distinción entre la figura de la negativa de trato y la doctrina de insumo esencial, indicando que la negativa de trato implica una negativa discriminatoria, mientras que en el segundo de los casos existe generalmente una obligación legal de ofrecer el servicio.

Al respecto, lo señalado en el voto concurrente es lo siguiente:

“Negativa de Trato en sectores regulados

⁷¹⁴ Sirve de apoyo el siguiente criterio: **“DERECHO COMPARADO. LAS AUTORIDADES NO ESTAN OBLIGADAS A RESOLVER CON APOYO EN EL.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, las autoridades encargadas de la administración de justicia están obligadas a resolver conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la legislación sustantiva vigente y, a falta de ésta, en los principios generales del derecho, los que en ninguna forma comprenden el derecho comparado, cuya disciplina está considerada como fuente del derecho mexicano, que estudia a los diversos sistemas jurídicos existentes, a efecto de determinar las semejanzas y diferencias entre éstos y que, en su caso, permitiría una mayor comprensión del derecho nacional, pero de ninguna manera resulta jurídico exigir a los juzgadores que resuelvan con apoyo en esa ciencia, porque no existe sustento legal que los faculte a ello[énfasis añadido]”. Tesis aisladas; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo V, enero de 1997; Pág. 456. XXII.16 K; número de registro 199622.

A diferencia del caso general, en el caso bajo estudio existe una obligación de ofrecer el servicio derivada de la regulación sectorial. De ello se deriva una situación de posible aplicación concurrente de la legislación aeroportuaria y de la de competencia económica. Esta situación no debe verse en sí como anómala ya que la regulación sectorial no concede una exención del derecho de la competencia. De forma similar se ha aplicado de manera concurrente la Ley en otros sectores regulados como telecomunicaciones y energía. De todas formas, para la aplicación de la fracción V del artículo 10 de la Ley se requiere de una negativa de trato a un rival.

[...]

Los casos de negativa de trato implican un espectro de situaciones, desde casos de empresas integradas verticalmente con una ventaja adquirida en el mismo mercado sobre empresas no integradas hasta casos estructurales que implican un 'insumo esencial', generalmente adquirido por concesión gubernamental. Los casos son conceptualmente similares -implican necesariamente que el servicio que está siendo negado a un rival, directamente o mediante conductas equiparables, resulte indispensable para la producción de un bien o servicio relacionado, sea imposible reproducirlo mediante un esfuerzo razonable de inversión y no exista ninguna justificante objetiva para negar el servicio. La diferencia radica en que, en el primer tipo de casos, el servicio ha sido o es ofrecido normalmente en el mercado y se sanciona su interrupción no justificada o su negativa discriminatoria mientras que, en el segundo tipo de casos, existe generalmente la obligación legal de ofrecer el servicio.

Por lo tanto, el caso bajo estudio implica una interfase entre el derecho regulatorio y el derecho de la competencia. Debe quedar claro que la existencia de regulación no crea una exención del derecho de la competencia cuando, a pesar de existir la obligación de ofrecer, se niega el trato para desplazar a un competidor.

[...]

*Se insiste en que la discusión anterior de ninguna forma debe entenderse que implica que un operador aeroportuario disfruta de una exención ad hoc de las obligaciones que derivan de la LFCE. Una negativa de trato injustificada respecto de competidores en servicios accesorios de rampa o en servicios comerciales podría ciertamente configurar una violación sujeta al escrutinio y posible sanción de la fracción V del artículo 10 de la Ley.*⁷¹⁵

Así, de lo señalado por el entonces Comisionado, no se desprende una afirmación relativa a que no puede actualizarse una negativa de trato en términos de los supuestos previstos en la fracción V del artículo 56 de la LFCE⁷¹⁶ en mercados regulados o en mercados en los que existe una obligación legal de ofrecer un bien o un servicio, sino por el contrario, de conformidad con lo señalado en el voto concurrente que cita DUN, "la existencia de regulación no crea una exención del derecho de la competencia cuando, a pesar de existir la obligación de ofrecer, se niega el trato para desplazar a un competidor".

En este sentido, ni la AI ni el PLENO han variado el tipo normativo o el estándar legal bajo el cual puede evaluarse una negativa de trato en términos de la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

⁷¹⁵ Disponible en la página de Internet:
<https://www.cofece.mx/cfresoluciones/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V60/0/1700723.pdf>

⁷¹⁶ Como se indica en el DPR, los elementos del tipo legal establecido en la fracción V del artículo 10 de la Ley Anterior no tuvieron modificación alguna respecto de los elementos del tipo legal establecido en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Por último, respecto de la manifestación de DUN relativa a que la aplicación de la negativa de trato debe hacerse con extrema precaución porque podría estarse favoreciendo un *free riding*, en la presente sección DUN se limita a realizar afirmaciones abstractas y generales sin argumentar de qué manera en el presente caso se actualiza un *free-riding*.

No obstante, más adelante en los apartados "*La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios*" y "*Ganancias en eficiencia*" de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, DUN no acredita que exista el *free-riding* en el presente caso.

Lo anterior, máxime cuando derivado de la LRSIC, DUN ya contaba con la obligación de proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO a CC, por lo que la presente resolución no impone a DUN una obligación nueva de proporcionar un bien o servicio distinto.

C.5.2. Irrelevancia del hecho relativo a la compartición de la BPD de PF por TUM para acreditar que la BPD de PM constituye un producto normalmente ofrecido a terceros.

DUN manifestó:⁷¹⁷

En la página 312 y 313 del DPR, para acreditar que el producto se encuentra normalmente ofrecido a terceros, la AI construyó un argumento de los siguientes componentes: (i) TUM sí intercambia la BPD de PF con CC, lo que constituye un antecedente sobre el intercambio de la BPD de PM; (ii) TUM y DUN forman parte del mismo GIE; y (iii) el supuesto normativo es el mismo (la obligación de intercambiar la BPD).

Derivado de tales premisas, la AI concluyó que la BPD se encontraba disponible y era normalmente ofrecida a terceros, al momento de la solicitud de CC.

La conclusión a la que arriba la AI resulta contraria a los principios de legalidad y congruencia, pues se trata de dos bases de información distintas. Inclusive, la propia AI al definir el MR DE PM señala que la IC del HC de PF no podría ser sustituto de la IC de PM. Resulta incongruente que por una parte distinga ambos productos para definir un MR y por el otro los integre para efectos de acreditar que un GIE ofrecía normalmente a terceros su BPD (sin distinguir entre PF y PM).

El que la BPD de PF de TUM haya sido intercambiada con CC tampoco acredita que dicha base se encuentre disponible y sea normalmente ofrecida a terceros.

El hecho traído a colación por la AI es irrelevante para acreditar que la BPD DE PM de DUN es un bien que se encuentra normalmente ofrecido a terceros.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷¹⁸

La AI reitera lo señalado en la página 312 del DPR.

⁷¹⁷ Páginas 115 a 116 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁷¹⁸ Páginas 108 y 109 de la VISTA DUN.

Lo expuesto en el DPR es relevante dado que no existe ni DUN acredita que exista justificación legal o económica alguna, que permita suponer que el cambio de comportamiento de GBC, a través de DUN, frente a CC obedece a alguna racionalidad económica que no sea anticompetitiva, al contrario, tal como se demuestra en el DPR, la conducta atribuida a DUN denota tener por objeto y efecto "impedir sustancialmente el acceso a [CC] al [MR DE PM] y, también, al [MERCADO RELACIONADO]".

DUN argumenta que la AI concluyó que la BPD se encontraba disponible y normalmente ofrecida a terceros derivado de que TUM sí intercambia la BPD de PF con CC, siendo que TUM y DUN forman parte del mismo GIE y el supuesto normativo es el mismo.

No obstante, el DPR no señala como único elemento para determinar que la BPD de PM es un producto disponible y normalmente ofrecido a terceros el que TUM y CC hayan intercambiado la BPD de PF.

De hecho, el elemento trascendental que permitió a la AI arribar a dicha conclusión fue el contenido de la LRSIC, siendo que incluso, de conformidad con lo señalado en el DPR, el intercambio de la BPD de PF solo sirve como antecedente.

Al respecto, la AI señaló en el DPR lo siguiente:

"En el mercado relevante que hemos definido, la recopilación y procesamiento de información crediticia de las PM han existido dos participantes u oferentes desde que [CC] se incorporó a dicho mercado el veintiocho de marzo de dos mil doce. Es decir, antes de esa fecha, [DUN] era la única empresa que recopilaba y procesaba la información crediticia de las PM y que comercializaba los productos asociados.

Por tanto, no es factible encontrar un antecedente ni algún otro agente económico al cual [DUN] le hubiera podido negar el intercambio de la BPD de PM. No obstante, se puede considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LRSIC dicho producto se encontraba y se encuentra disponible a terceros, al ser una obligación de las SIC proporcionar su BPD a otras SIC, toda vez que el mismo señala lo que a continuación se indica:

[...]

Si bien es cierto que

tomando en cuenta que [DUN] y TUM integran el [GBC]. Además, el supuesto normativo es el mismo (es decir, la obligación establecida en la LRSIC de intercambiar la BPD cuando alguien lo solicite), y tomando en cuenta que, como ya ha sido expuesto previamente, [CC]

[...]

En este sentido, del análisis llevado a cabo a los documentos contenidos en el Expediente, no se observa que exista una limitante o restricción a la compartición de la BPD de PM que por primera vez se solicite, máxime cuanto el propio artículo 36 de la LRSIC establece esta obligación, sin más limitaciones que las propiamente establecidas como condicionantes en dicho artículo.

[Énfasis añadido].⁷¹⁹

El DPR señala que TUM intercambia su BPD de PF con CC como antecedente del intercambio que debiera realizarse con la BPD de PM que se encuentra en posesión de DUN. Esto acontece principalmente porque, al no haber más agentes económicos en el MR de PM, no es posible analizar el comportamiento de DUN frente a otros agentes económicos. Por esta razón, considerando que, al ser parte del mismo GIE, a DUN no le son ajenas las actuaciones y decisiones de TUM,⁷²⁰ la AI decidió señalar que existía un antecedente en el cual se intercambiaba una BPD de un segmento diferente, pero derivado del artículo 36 de la LRSIC, en virtud del cual, también se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros la BPD de PM.

No obstante, este no es el principal elemento para demostrar que la BPD de PM es un producto normalmente ofrecido a terceros, pero sí permite advertir que en el mismo GIE ya existe intercambio de información respecto de la BPD de PF, lo cual permite presumir que no existen limitantes generales para llevar a cabo el intercambio de la información a la que se refiere el artículo 36 de la LRSIC.

Por lo anterior, es **infundado** que sea irrelevante que un agente económico perteneciente al mismo GIE de DUN comparta su BPD en el segmento de PF, pues este sirve como antecedente para presumir que no existe impedimento para que esta misma compartición se de en el segmento de PM.

Ahora bien, aun cuando no fuera relevante el antecedente referido por la AI, ello en nada cambiaría la imputación presuntiva contenida en el DPR, ya que lo señalado por la LRSIC es suficiente para acreditar que la BPD se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros, máxime cuando, como se señala en el DPR, no se advierten restricciones para que se realice dicha compartición.

⁷¹⁹ Páginas 309, 312 y 313 del DPR.

⁷²⁰ Sirve de apoyo la siguiente tesis: "**GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.** En materia de competencia económica se está ante un grupo de interés económico cuando un conjunto de personas físicas o morales tienen intereses comerciales y financieros afines, y coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común. Así, aunado a los elementos de interés -comercial y financiero- y de coordinación de actividades, concurren otros como son el control, la autonomía y la unidad de comportamiento en el mercado. En esa tesitura, el control puede ser real si se refiere a la conducción efectiva de una empresa controladora hacia sus subsidiarias, o bien, latente cuando sea potencial la posibilidad de efectuarlo por medio de medidas persuasivas que pueden darse entre las empresas aun cuando no exista vínculo jurídico centralizado y jerarquizado, pero sí un poder real. Bajo esta modalidad -poder latente- es que la autonomía jurídica de las sociedades carece de contenido material, imponiéndose los intereses del grupo o de la entidad económica, entendida como organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado acorde a los intereses de las sociedades integrantes, es decir, a pesar de la personalidad jurídica propia de cada una de las empresas, éstas se comportan funcionalmente como una sola en el mercado, lo que implica la pérdida de la libertad individual de actuación. Por lo tanto, para considerar que existe un grupo económico y que puede tener el carácter de agente económico, para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se debe analizar si una persona, directa o indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y, además, puede ejercer una influencia decisiva o control sobre la otra, en los términos anotados, sin que sea necesario que se den de manera concomitante. Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, noviembre de 2008; Pág. 1244. I.4o.A. J/66. Registro número 168 470.

Por otro lado, es **infundado** que la conclusión de la AI sea contraria a los principios de legalidad y congruencia, ya que incluso la misma AI reconoce en el DPR que la BPD que se intercambia entre TUM y CC corresponde a otro segmento.

No obstante, el hecho de que se trate de dos productos distintos no implica que el intercambio de la BPD de PF no pueda servir como antecedente para el intercambio de la BPD de PM, pues el primero muestra que, en términos generales, es posible realizar un intercambio de BPD cuando existe voluntad de las partes.

D. OBJETO Y EFECTO

D.1. Manifestaciones en relación con el objeto o efecto de la conducta consistente en impedir el acceso de CC al MR y al MERCADO RELACIONADO.

D.1.1. La conducta imputada no tuvo como objeto y/o efecto impedir el acceso de CC al MR DE PM

DUN manifestó:⁷²¹

La conducta imputada no pudo tener como objeto y/o efecto el señalado por la AI en el DPR.

La AI señala que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto y efecto “*impedir sustancialmente el acceso de [CC] al [MR] de la recopilación y procesamiento [IC] de las PM y en el mercado relacionado de comercialización de los productos de [IC]*” en el segmento de PM.

Por lo que hace al supuesto objeto y efecto en el MR, la AI no realiza pronunciamiento alguno. La AI construye su teoría del objeto y efecto únicamente con relación al MERCADO RELACIONADO. Ello hace sentido, ya que no puede existir un desplazamiento en un supuesto mercado que solo lo constituyen ciertas actividades de la cadena productiva dentro de las cuales los agentes económicos no ofrecen algún bien o servicio. En ese sentido, no fue analizado ni probado algún objeto o efecto de la conducta investigada dentro del MR.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷²²

DUN señala que la AI construye la teoría de objeto y efecto únicamente con relación al MERCADO RELACIONADO. Dicho argumento carece de lógica, pues la conducta imputada a DUN tuvo como consecuencia impedir el acceso de CC a los datos que le permitieran crear y comercializar RC, lo que tiene como consecuencia que el emplazado limite la capacidad de CC para ingresar al MERCADO RELACIONADO. Sería ilógico que la AI no hiciera señalamiento alguno respecto de los efectos que tuvo la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO, máxime que es a través de los efectos en dicho

⁷²¹ Páginas 117 a 118 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁷²² Páginas 110 a 112 y 115 a 116 de la VISTA DUN.

MERCADO RELACIONADO donde puede observarse el daño al proceso de competencia y libre concurrencia.

En el DPR se detalla la manera en que la conducta imputada afectó el proceso de competencia y libre concurrencia, al impedir sustancialmente el acceso de CC para la recopilación y procesamiento de IC de las PM, y en la comercialización de los productos de IC.⁷²³

DUN confunde la conducta imputada en el DPR con una de las hipótesis normativas del artículo 54, fracción III, de la LFCE, consistente en “desplazar indebidamente a otros agentes del mercado”, sin embargo, del análisis realizado por esta AI se concluyó que la conducta realizada fue “impedir sustancialmente el acceso al mercado relevante”, como se indica en la página 315 del DPR.

Por otra parte, en el DPR se acredita la existencia del MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM, pues constituye un mercado al existir oferentes y demandantes de IC y un precio por los bienes o servicios que intercambian.

De igual forma, en el DPR se señala que la conducta realizada por DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC y no su desplazamiento. En este sentido, el DPR sí se pronuncia respecto del objeto y efecto en el MR al señalar, entre otros elementos, que la negación del intercambio de la BPD de PM por DUN “hace menos competitivo a [CC], en la medida en que la magnitud de la [BD] de PM sea menor en comparación con la de [DUN]”.⁷²⁴

Adicionalmente, en el DPR se señala que la conducta imputada: “[...] ha limitado la capacidad de [CC] de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información. Inclusive, en algunas ocasiones, [REDACTED]”

” y que “[...] la negación al intercambio de la BPD DE PM hizo depender a [CC] del intercambio puntual requerido para elaborar el RC. Sin embargo, tampoco la entrega puntual [...] se ha llevado a cabo en términos satisfactorios, ya que, presuntamente, [DUN] ha omitido la entrega de información del SEGMENTO CO”.

En consecuencia, en el DPR sí se realizó pronunciamiento en relación con el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM.

Resultan **infundados** los argumentos de DUN relativos a que: (i) la AI no realiza pronunciamiento alguno del objeto y efecto de la conducta imputada en el MR DE PM; (ii) la AI construye su teoría de objeto y efecto únicamente con relación al MERCADO RELACIONADO; y (iii) no fue analizado ni probado algún objeto o efecto de la conducta investigada dentro del MR DE PM, por las razones que se expresan a continuación.

En el DPR la AI señaló entre otras cuestiones que: “[...] la conducta realizada por [DUN] tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de [CC] al [MR] de la recopilación y

⁷²³ La AI cita diversos párrafos incluidos en las páginas 314 a 318 del DPR.

⁷²⁴ Página 316 y 317 del DPR.

procesamiento de [IC] de las PM y, también, al mercado relacionado de la comercialización de los productos de [IC] de PM. [Énfasis añadido]", pues la conducta imputada "[...] hace menos competitivo a [CC], en la medida en que la magnitud de la [BD] de PM sea menor en comparación con la de [DUN]".⁷²⁵

Así, tras su análisis, la AI llegó a la conclusión de que la "[...] omisión en el intercambio completo de la información, incluyendo notablemente la omisión del SEGMENTO CO por parte de [DUN], como se describió en el análisis de la conducta, ha generado daños a la competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de [CC] de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información" [Énfasis añadido].⁷²⁶

Adicionalmente, en cuanto al objeto, la AI señaló que tanto la negativa de DUN de intercambiar la BPD como la de proporcionar de forma completa la información para la integración de RCI:

"[...] no ha tenido como propósito incrementar su productividad, volverse más eficiente o mejorar la calidad de los productos o servicios proporcionados a sus [USUARIOS].

Por el contrario, la única motivación aparente para llevar a cabo este comportamiento ha sido dañar a la competencia, al propiciar condiciones desfavorables para que [CC] recopile y procese información proporcionada por [DUN] [...]

[...]

De esta manera, podemos concluir que [DUN] ha llevado a cabo la práctica con la intención principal de impedir sustancialmente el acceso de [CC] a la recopilación y procesamiento de información crediticia y, en el mercado relacionado de la comercialización de productos de información crediticia de las PM. Lo anterior, puesto que carece de sentido económico llevar a cabo la práctica, más allá de obstruir el proceso de competencia. Entre otras razones, porque compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos adicionales a [DUN], pero si le pudiera acarrear una sanción al no atender lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC [...]

[Énfasis añadido].⁷²⁷

Por lo tanto, la AI sí realizó pronunciamientos en relación con el objeto y efecto que tuvo la conducta imputada en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM e incluso analizó diversos elementos de convicción tendientes a acreditar⁷²⁸ que la conducta imputada

⁷²⁵ Página 316 y 317 del DPR.

⁷²⁶ Como se indica en el DPR, al menos un USUARIO manifestó la preferencia por consultar la BD de PM de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, sino por [REDACTED]

Véase la página 318 del DPR. Véase asimismo el análisis correspondiente en el apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución. El no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración de RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa; de este modo, CC tiene limitada su capacidad de afiliar más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable, al no realizarse el intercambio de la información señalada.

⁷²⁷ Página 317 y 320 del DPR.

⁷²⁸ Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE y que fueron analizados por la AI, se acredita que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto y efecto, entre otros, impedir el acceso de CC al MR de PM. Véase lo señalado al respecto

tuvo por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM. En específico, la AI concluyó que la omisión de DUN de proporcionar IC a CC de forma indirecta, es decir, a través del intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, limitó la capacidad de CC de afiliarse a USUARIOS y, por lo tanto, de recopilar IC de manera directa.

Derivado del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, los USUARIOS que consumen los productos de una SIC se encuentran obligados a proporcionarle a dicha SIC su IC. De esta manera, considerando además el bajo porcentaje de USUARIOS que se encuentran afiliados a ambas SIC, comercializar un producto de IC a un USUARIO en específico, se traduce en la posibilidad de recopilar de dicho USUARIO su IC.

Por lo anterior, si derivado de la conducta imputada los USUARIOS de CC asumen con mayor recurrencia el costo adicional por concepto de HIT y además los RCI comercializados por CC no cuentan con la información completa, los USUARIOS tienen menos incentivos para consumir productos de IC de dicho agente económico.

En este sentido, la conducta de DUN hace que CC sea menos competitivo en el MERCADO RELACIONADO lo que genera que menos USUARIOS consuman productos de CC y, por lo tanto, que menos USUARIOS se encuentren obligados a proporcionar su IC a CC, lo que tiene como objeto y efecto el impedimento de acceso a CC en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM.

Lo anterior, considerando además que contrario a lo que manifiesta DUN, sí puede existir un efecto⁷²⁹ en el MR DE PM pues, tal como se señaló en los apartados "A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado", "A.2 El MR definido por la AI es diverso a donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN" y "A.3 Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, no es cierto que el MR DE PM únicamente se encuentre constituido por "ciertas actividades de la cadena productiva dentro de las cuales los agentes económicos no ofrecen algún bien o servicio", como erróneamente lo señala DUN, sino que se trata de un mercado en el que se intercambian bienes a cambio de un precio.

D.1.2. La conducta imputada no tuvo como objeto y/o efecto impedir el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO.

DUN manifestó:⁷³⁰

(i) De conformidad con la LEY ANTERIOR, la COFECE se encuentra impedida para analizar el objeto y efecto en un mercado relacionado.

Con relación al supuesto objeto y efecto en el MERCADO RELACIONADO, en primer término debe de precisarse que de conformidad con la LEY ANTERIOR (que es la

en los apartados "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" y "ACREDITACIÓN DE LA PMR" de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias.

⁷²⁹ No pasa desapercibido que DUN refiere que no puede existir desplazamiento en el MR, no obstante, la imputación presuntiva contenida en el DPR no señala la existencia de un desplazamiento sino de un impedimento de acceso.

⁷³⁰ Páginas 118 a 129 de la CONTESTACIÓN DUN.

que resultaba aplicable al caso concreto) la AI únicamente podía analizar el objeto y/o efecto de la práctica investigada en el MR. Caso distinto ocurre con la LFCE en la que el legislador tuvo la intención de que el objeto y/o efecto de una conducta que encuadre en las previstas en el artículo 56, pueda analizarse en el MR o en un mercado relacionado. Así, aplicando la ley sustantiva aplicable al caso es que esa COFECE se encuentra impedida para analizar el efecto de una PMR en un mercado relacionado.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷³¹

En el DPR se llevó a cabo un examen meticulado del tipo contemplado tanto en la LEY ANTERIOR como en la LFCE,⁷³² del cual se concluyó que la hipótesis normativa no sufrió modificaciones sustanciales que impidieran su traslación y por ende la aplicación de la LFCE, en el presente procedimiento.⁷³³

El artículo 10 de la LEY ANTERIOR no imponía una limitante para que el objeto o efecto de las PMR se diera “exclusivamente” en el MR, por el contrario, dicho artículo hacía una referencia general al “mercado” de tal suerte que el tipo cumple con la inteligibilidad que exige el derecho administrativo sancionador para que el gobernado pueda prever la conducta infractora.

Lo anterior en el entendido que existen PMR en las cuales un agente económico que detente PS en un MR puede buscar generar efectos anticompetitivos tanto en el MR, como en cualquier otro mercado que resulte relacionado por pertenecer a la misma cadena productiva o que se sirve de insumos que son producidos en el MR.⁷³⁴

⁷³¹ Páginas 112 a 116 de la VISTA DUN.

⁷³² La AI señaló la página 46 del DPR.

⁷³³ La AI remitió al análisis incluido en las páginas 60 y 61 del DPR.

⁷³⁴ La AI señaló al respecto que el PJF, en el Juicio de Amparo 15/2013, tramitado ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, determinó que: “(...) es inconcuso señalar que para analizar la actuación de dicha práctica monopólica relativa, deben invariablemente considerarse dos mercados, (...) el relevante (...) y el relacionado (...). Sin que obste a la consideración anterior que la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica [Abrogada] no señale de manera expresa el concepto de ‘mercado relacionado’; toda vez que alude a calificativos de ‘otro bien’ o ‘servicio adicional’, para referirse al mercado en mención. (...) Asimismo, en el tipo de práctica monopólica relativa (...), generalmente el efecto u objeto se da en el mercado relacionado, en virtud que es en éste donde se afecta o restringe el proceso de competencia efectiva y libre concurrencia. Lo anterior es así, en virtud que el ordenamiento legal en comento busca fundamentalmente que una actividad sea calificada como práctica monopólica relativa sólo cuando su objeto (intención) u efecto (resultado) sea desplazar o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso al mercado relevante o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, esto es, que dicho acto sea anticompetitivo en general. En ese contexto, la condición de que las prácticas se realicen en el mercado relevante donde el presunto responsable tiene poder sustancial, se impone porque en general la utilización de dicho poder no tiene repercusión en otro mercado diferente, aunque ello tendría que calificarse si se habla de insumos que afectan a otros mercados de la cadena productiva, ya que, en este caso, la intención del agente económico podría ser la de trasladar dicho poder a un mercado relacionado, en el cual no lo detenta. (...) De lo que se tiene que el mercado relacionado (...) es aquel donde los bienes o servicios se encuentran identificados con otro, esto es, que existe entre ambos una correspondencia esencial que permite determinar que la compra o venta de uno tiene influencia para el otro”.

Asimismo, si la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir; de ahí que la modificación de dicha norma jurídica, prevista actualmente en la fracción III del artículo 54 de la LFCE, únicamente tuvo el efecto de precisar el enunciado normativo, sin modificar la norma jurídica como pretende señalar DUN. Muestra de lo anterior es que en la LEY ANTERIOR, particularmente en el artículo 13, primer párrafo sí establecía expresamente “MR” cuando quería realizar una acotación a dicho mercado, lo que no se encontraba previsto para el objeto y efecto que DUN intenta desvirtuar.

En este orden de ideas, sirve de referencia la resolución emitida por el PLENO el doce de marzo de dos mil quince en el expediente DE-030-2011,⁷³⁵ mediante la cual se aceptaron compromisos, y se observa que con la LEY ANTERIOR se analizó el objeto o efecto en un mercado relacionado. Asimismo, DUN pasa por alto el contenido del artículo 2 de la LFCE y del artículo 2 de la LEY ANTERIOR, así como que el objetivo de la LEY ANTERIOR y de la LFCE (siendo el mismo) no se constriñe al MR. Por lo tanto, esta AI reitera que no hubo ninguna “modificación sustancial” entre la norma jurídica prevista en el primer párrafo del artículo 10 de la LEY ANTERIOR y la fracción III, artículo 54 de la LFCE, relativo al objeto y efecto.

Por tanto, esta AI concluye, en primer lugar, que el término “mercado” previsto en el artículo 10 de la LEY ANTERIOR hace referencia tanto al MR como a cualquier otro mercado relacionado. En segundo lugar, DUN no acredita cómo cambiaría el análisis para acreditar el objeto o efecto de una conducta por la COFECE con la LEY ANTERIOR en relación con la LFCE.

En consecuencia, en el DPR sí se motivó adecuadamente la aplicación de la LEY ANTERIOR por lo que se sostiene el análisis del objeto y el efecto en el MERCADO RELACIONADO.

Resulta **infundado** el argumento según el cual la AI únicamente podía analizar el objeto y/o efecto de la conducta imputada en el MR de conformidad con la LEY ANTERIOR, pues: (i) la ley sustantiva aplicable al caso que nos ocupa es la LFCE y no así la LEY ANTERIOR; y (ii) incluso considerando la LEY ANTERIOR, ésta no limita el análisis de objeto y efecto de la conducta al MR.

Tal como se señaló en el argumento “C.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN actualizaran el supuesto de negativa de trato, debe de distinguirse entre dos negativas distintas, y les resultaría aplicable la LEY ANTERIOR”, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, toda vez que la conducta imputada a DUN continuó durante la vigencia de la LFCE, dicha normativa es la aplicable al caso concreto.

En este sentido, según el artículo 54, fracción III, de la LFCE: “Se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que: [...] III. Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles

⁷³⁵ La AI remite a la información disponible en la página de Internet de la COFECE: <http://cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V90/1/2008793.pdf>

sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos [énfasis añadido]”.

Así, la ley aplicable al caso concreto refiere de manera expresa que el análisis de objeto y efecto de la conducta imputada puede realizarse respecto del MR o algún mercado relacionado.

Ahora bien, aún si fuese aplicable la LEY ANTERIOR, dicha ley no limita a la COFECE a analizar el objeto y efecto de una PMR únicamente en el MR, toda vez que el artículo 10 de dicha LEY ANTERIOR establece lo siguiente:

“Artículo 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta Ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos: [...] [Énfasis añadido]”.

De lo anterior se observa que el artículo 10 de la LEY ANTERIOR no limita el análisis del objeto y/o efecto de las conductas al MR, sino que únicamente hace una referencia general al “mercado” sin limitar o distinguir entre el MR o un mercado relacionado, siendo que en otras disposiciones del mismo cuerpo normativo (tal es el caso del artículo 13 de la LEY ANTERIOR) el legislador realizó las acotaciones correspondientes cuando pretende referirse exclusivamente al MR.

Así, atendiendo a los principios generales del Derecho, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, por lo que es claro que al no realizar alguna precisión o limitación al referirse al “mercado”, el legislador no limitó el análisis de objeto y efecto de las PMR al MR.

Lo anterior es consistente con el objeto de la LEY ANTERIOR, la cual busca “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios”, siendo que dicho objeto no se constriñe únicamente al MR.

De esta manera, interpretar la LEY ANTERIOR como pretende DUN, es decir, considerando que únicamente puede analizarse el objeto y/o efecto de las conductas que pudieran constituir una PMR en el MR, afectaría el ejercicio de las atribuciones conferidas a la COFECE para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, pues implicaría que no se sancionaran aquellas conductas realizadas para desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en un mercado distinto a aquel en que se realizó la conducta.

Lo anterior cobra especial relevancia pues diversas conductas descritas en el artículo 10 de la LEY ANTERIOR se realizan normalmente con el objeto o efecto de afectar la competencia en un mercado distinto a aquel en el cual se cometen, por lo que interpretar la norma conforme a lo señalado por DUN iría en contraposición a la finalidad misma de la LEY ANTERIOR.

A manera de ejemplo, se cita lo señalado por el Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión al resolver el juicio de amparo 15/2013,⁷³⁶ respecto de la PMR prevista en la fracción III del artículo 10 de la LEY ANTERIOR:

“[...] la figura jurídica de la venta condicionada o venta atada exige el análisis de manera conjunta de ambos mercados (relevante y relacionado) [...]

[...]

[...] en el estudio de esta [PMR], no podría analizarse alguno de los referidos mercados de manera autónoma, porque precisamente la cláusula atante los une de manera insoluble, pues las prácticas comerciales se concretan en el [MR], pero su objeto o efecto se presenta en el mercado relacionado.

[...]

[...] tratándose de la venta condicionada o venta atada, la condición de que la [PMR] se realice en el [MR] donde el presunto responsable tiene poder sustancial se impone porque, en general, dicho poder puede ser utilizado para trasladarlo a un mercado relacionado, en el cual no lo detenta.

[...] Asimismo, en el tipo de práctica monopólica relativa como la que en el presente asunto atañe, generalmente el efecto u objeto se da en el mercado relacionado, en virtud que es en éste donde se afecta o restringe el proceso de competencia efectiva y libre concurrencia.

[...] [Énfasis Añadido]”⁷³⁷

Como se observa, incluso aplicando la LEY ANTERIOR el objeto y/o efecto de las conductas imputadas puede analizarse en el MR o en algún otro mercado relacionado.

(ii) La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios.

DUN manifestó lo siguiente:⁷³⁸

a. Sobre el incremento en costos de CC por la disminución de posibilidad de NO HIT.

La teoría de la AI sobre la disminución de posibilidad de NO HIT en la generación de RCI y el consecuente incremento en costos de CC toma como base las siguientes premisas:

i) El intercambio de registros negativos a través de la BPD reduce la necesidad del intercambio de forma puntual solo a la información positiva, a intercambiarse mediante el RCI al que se refiere el artículo 36 Bis de la LRSIC.

⁷³⁶ La versión pública de la ejecutoria correspondiente se encuentra visible para su consulta en la página de internet: [http://sise.cif.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1301/13010000141625060061059001.doc_1&sec=Juan Gabriel Cabrera Cuervo&svp=1](http://sise.cif.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1301/13010000141625060061059001.doc_1&sec=Juan%20Gabriel%20Cabrera%20Cuervo&svp=1)

⁷³⁷ Página 224 de la versión pública de la ejecutoria correspondiente.

⁷³⁸ Páginas 118 a 123 y 124 de la CONTESTACIÓN DUN.

ii) Cuando se comparte la BPD, dicha información se considera como NO HIT, por lo que siempre que una solicitud puntual de información arroje únicamente registros negativos (información contenida en la BPD) ello no generará un derecho de cobro para la SIC que proporcione la información.

iii) Al no haber intercambio de la BPD de PM, cuando se da el intercambio de la información puntual (RCI) se elimina la posibilidad de que cuando CC consulte a DUN y exista sólo información negativa la solicitud se considere como un NO HIT. Al eliminarse esta posibilidad de NO HIT, tales consultas generarán una obligación de pago a CC en favor de DUN, que se traslada al USUARIO.

iv) En virtud de lo anterior, *"al no intercambiarse la BPD de PM entre CC y DUN, se genera que CC tenga más casos de HIT en comparación con DUN y, por tanto, el USUARIO que solicite un RC a CC asume con mayor recurrencia un costo adicional por la información proporcionada por DUN. Lo cual hace menos competitivo a CC, en la medida en que la magnitud de la BD de PM sea menor en comparación con la de DUN"*.⁷³⁹

Ciertamente el no intercambio de la BPD genera que se elimine una de las posibilidades para dar NO HIT y, consecuentemente, se incremente la posibilidad de dar HIT (y se genere una obligación de pago a cargo de la SIC originadora en favor de la SIC complementaria). No obstante, dicho efecto debe ser puesto en su justa dimensión, cuestión en la que la AI no indagó o que denota una parcialidad para buscar imputar una responsabilidad.

El no intercambio de la BPD únicamente genera que se pierda la posibilidad de caer en un NO HIT, cuando el expediente del CLIENTE solo tenga registros negativos (y por tanto sea información contenida en la BPD). En este sentido, cuando el expediente de la SIC complementaria contiene un solo registro positivo, aun cuando el resto de los registros sean negativos, la consulta dará HIT independientemente de si la BPD fue intercambiada o no. Es decir, el universo de CLIENTES respecto de los cuales se disminuye la posibilidad de que la solicitud de la SIC originadora dé NO HIT se limita únicamente a aquellos CLIENTES respecto de los cuales la SIC complementaria únicamente contenga información negativa. Por ello, la teoría del efecto de la conducta se circunscribe a dicho universo de CLIENTES.

La siguiente tabla muestra el total de expedientes de DUN a noviembre de dos mil diecisiete y el número de éstos conformado únicamente de información negativa, únicamente de información positiva, o conformado con ambas:⁷⁴⁰

Escenario con créditos financieros y comerciales a noviembre de dos mil diecisiete	
Número de expedientes que sólo tienen créditos vencidos (negativos)	B
Número de expedientes que sólo tienen créditos vigentes (positivos)	

⁷³⁹ DUN señaló las páginas 316 a 317 del DPR.

⁷⁴⁰ DUN indica como fuente: elaboración con datos de DUN.

Número de expedientes que tienen créditos tanto vigentes como vencidos (positivos y negativos)	B
Total	

Así, únicamente el **B** de los expedientes de DUN encuadra dentro del universo de CLIENTES respecto los cuales el no intercambio de la BPD genera un decremento en la posibilidad de dar NO HIT. En contraposición, en el **B** de los expedientes de DUN, la consulta de CC dará como resultado un HIT con independencia de si la BPD de DUN fue intercambiada con CC, puesto que en dichos expedientes el que exista tan sólo un registro positivo detona el HIT.

En virtud de lo anterior, es insostenible señalar que el no intercambio de la BPD pudo tener como consecuencia impedir sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO cuando dicho efecto únicamente se puede llegar a dar si el CLIENTE sobre el cual se realiza la consulta se encuentra dentro del porcentaje de expedientes que solo tienen registros negativos. Es decir, cada vez que CC solicita la información puntual para elaborar un RCI, únicamente tiene un **B** de probabilidades de caer en el supuesto que detonaría el NO HIT en caso de que la BPD hubiera sido intercambiada.

Ahora bien, por lo que hace al objeto, la AI fue omisa en probar que la intención del actuar de DUN hubiese sido impedir sustancialmente el acceso de CC. Como cuando nos referimos al efecto de la conducta, resulta igualmente difícil sostener que DUN tuvo la intención de impedir el acceso a CC incrementando los costos de consultas que versen sobre uno de los CLIENTES contenidos en el **B** del total de expedientes de DUN. Es decir, el objeto de la conducta únicamente se vería materializando cuando los CLIENTES sobre los cuales CC pretenda generar un RCI, pertenezcan al citado universo. Resulta impensable que un agente que quiera impedir el acceso a un competidor emplee una estrategia con un **B** de posibilidades de encarecer los costos por cuanto hace a una consulta, por cada vez que se realice una consulta.

Por otra parte, el efecto identificado por la AI consistente en el incremento de la probabilidad de dar HIT y la consecuente obligación de pagar a la SIC complementaria por la información, es un efecto que se da en DUN y CC, y no únicamente en ésta última.

Con independencia de lo anterior, si la BD de CC no ha crecido,⁷⁴¹ ello se debe a circunstancias ajenas y no imputables a DUN: (i) los USUARIOS afiliados a DUN no están sujetos por exclusividad alguna que los limite a afiliarse también a CC (incluso el artículo 35 de la LRSIC prohíbe a las SIC la inclusión de exclusividades con los Usuarios); (ii) DUN no se encuentra integrado verticalmente con sus principales afiliados y además, dos accionistas de DUN se afiliaron a CC, tal y como

⁷⁴¹ DUN señaló que: "y por tanto resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI".

lo reconoce la AI; y (iii) dentro del EXPEDIENTE no obra constancia de la que se desprenda que CC intentó hacer crecer su BD incrementando su base de afiliados y se encontró impedido para hacerlo.

Lo que la AI pretende es solapar el denominado *free-riding* de CC. Como se explicó, el *free-riding* genera efectos anticompetitivos, entre otras cosas, en virtud de que desincentiva la inversión, ya que a un agente económico le será más atractivo no invertir y beneficiarse del esfuerzo de otro agente. Dicha estrategia resulta económicamente racional para el que la realiza. En el caso concreto, la AI parece preferir que CC emplee la BD de DUN en lugar de invertir recursos para hacer crecer su BD. Es decir, el criterio de la AI parece preferir que CC se beneficie de la inversión realizada por DUN para tener una BD completa, en lugar de invertir en el desarrollo de la propia.

b. La falta de información de CC para cumplir con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios.

La AI señala que el que CC no cuente con la BPD de DUN y tampoco con la totalidad de la información consultada a DUN con motivo de un RCI, impide que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS en razón a que CC no tiene información completa de qué tan morosos son los CLIENTES de los USUARIOS de DUN.⁷⁴² Además, de acuerdo con la AI, la no compartición de la BPD de PM impide que CC ofrezca productos para predecir comportamiento o servicios de administración de cartera.

Como ya fue señalado, nada impide que crezca la base de afiliados de CC para incrementar su BD. En ese sentido, lo que la AI está incentivando es el *free-riding* por CC a la inversión y esfuerzo de DUN, lo cual es un claro efecto anticompetitivo.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷⁴³

a. Sobre el incremento en costos de CC por la disminución de posibilidad de NO HIT.

DUN reconoce que el no intercambio de la BPD genera un decremento en la posibilidad de dar NO HIT y, por lo tanto, que se genere una obligación de pago a cargo de la SIC originadora en favor de la SIC complementaria. Ello, de acuerdo con el DPR, genera un daño a la competencia y libre concurrencia.

En segundo lugar, resulta falso que el DPR denote parcialidad por la AI para buscar imputar responsabilidad a DUN. Al respecto, en el DPR se señaló que al no intercambiarse la BPD de PM entre CC y DUN, se genera que CC tenga más casos de HIT en comparación con DUN.⁷⁴⁴

⁷⁴² DUN señaló la página 317 del DPR.

⁷⁴³ Páginas 116 a 118 y 120 a 121 de la VISTA DUN.

⁷⁴⁴ La AI refiere el análisis incluido en la página 316 del DPR.

La justa dimensión del efecto de no intercambiar la BPD de PM se traduce en que el [B] del total de los expedientes de DUN representa, aproximadamente, el [B] que el total de BD de PM de CC [B] en promedio de la participación de mercado de CC);⁷⁴⁵ en consecuencia, la negativa de trato tiene el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM.

Por consiguiente, si se considera que la no compartición de la BPD de PM de DUN se traduce en un costo por el intercambio de información puntual que es el [B] [B] del precio base del RC en el que no haya habido consultas entre SIC o habiéndola no hubo HIT,⁷⁴⁶ es posible concluir que el USUARIO que solicite un RC a CC asume con mayor recurrencia un costo adicional por la información proporcionada por DUN.⁷⁴⁷

Adicionalmente, en el DPR se plantea que la negativa de intercambiar la BPD de PM de DUN y el SEGMENTO CO hizo depender a CC del intercambio puntual requerido para elaborar el RC, así como que omitir el SEGMENTO CO ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS;⁷⁴⁸ lo cual, no solamente tiene el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso al MERCADO RELACIONADO sino también el objeto y efecto de impedir el sustancialmente el acceso al MR DE PM. Al respecto, se indican algunas métricas:

- En relación con el objeto y efecto en el MR DE PM las participaciones promedio de mercado de DUN son de [B] en número de CLIENTES con HC, [B] en número de créditos registrados y [B] en número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM.

- En relación con el objeto y efecto en el MERCADO RELACIONADO la participación de mercado por venta de RC de PM de DUN, que contempla la venta de RCI, tuvo un promedio de [B] mientras que la participación de mercado de CC apenas tuvo un promedio de [B]

Por otra parte, DUN no prueba ni justifica el argumento en torno a que el efecto identificado por la AI en el incremento de la probabilidad de dar HIT es un efecto que se da en DUN y CC, y no únicamente en ésta última.

Asimismo, la imputación no radica en que CC haya intentado hacer crecer su BD y no haya podido, sino en que la negativa de compartir la BPD y el SEGMENTO CO de DUN tiene por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

⁷⁴⁵ La AI refiere el análisis incluido en la página 277 del DPR.

⁷⁴⁶ La AI refiere el análisis incluido en la página 316 del DPR.

⁷⁴⁷ La AI refiere el análisis incluido en la página 316 del DPR.

⁷⁴⁸ La AI refiere el análisis incluido en la página 318 del DPR.

La obligación de intercambiar la BPD recíprocamente y de establecer tarifas por el intercambio de IC implica que ésta no es un bien público que produzca efectos positivos o externalidades sobre las SIC. Es decir, no existen *free riders*, en este caso, CC, que se beneficien de la inversión realizada por las SIC en la ampliación y mantenimiento de la BD, así como el desarrollo e innovación de productos de IC. Por lo tanto, es falso que exista un “un efecto de *free-rider*” que pueda disminuir el incentivo de un monopolista, su rival, o de ambos de invertir en aquellas instalaciones que resultan económicamente benéficas.⁷⁴⁹

b. *La falta de información de CC para cumplir con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios.*

DUN se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento, siendo que es a quién corresponde exponer razonadamente por qué la conducta imputada a DUN no impide el crecimiento de CC. Asimismo, se solicita tenga por reproducidas las manifestaciones expuestas en respuesta a la cuestión del alegado *free-riding*.

Es **infundado** el argumento de DUN relativo a que es insostenible señalar que el no intercambio de la BPD pudo tener como consecuencia impedir sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO, cuando dicho efecto únicamente se puede llegar a dar si el CLIENTE se encuentra dentro del porcentaje de expedientes que sólo tienen registros negativos, por las razones que se expresan a continuación.

En primer lugar, DUN reconoce que “el no intercambio de la BPD genera que se elimine una de las posibilidades para dar No HIT, y consecuentemente, se incremente la posibilidad de dar HIT (y se genere una obligación de pago a cargo de la SIC Originadora en favor de la SIC Complementaria)”⁷⁵⁰ y que CC “resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCP”.⁷⁵¹ En este sentido, DUN acepta que la falta de intercambio de la BPD con CC aumenta la posibilidad de que se genere una obligación de pago a cargo de la SIC originadora, lo cual resiente en mayor medida CC.

Para ilustrar lo anterior, es posible analizar el número de consultas entre SIC, el número de HITS alcanzados por las SIC y la proporción que estos representan con respecto al total de consultas realizadas. La proporción de HITS generados por CC es mayor que la que corresponde a DUN, los cuales pasaron de B en dos mil trece, a B en dos mil quince.

Al respecto, DUN señala que sólo se genera un decremento en la posibilidad de dar No HIT en el universo de CLIENTES cuyos expedientes únicamente contengan registros negativos, lo cual según lo señalado por DUN representa el B del total de todos sus expedientes.

⁷⁴⁹ La AI indicó: Motta (2013), *Competition policy. Theory and practice*, pp 314-315.

⁷⁵⁰ Página 120 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁷⁵¹ Página 122 de la CONTESTACIÓN DUN.

Para arribar al porcentaje anterior, DUN presenta una tabla con datos y porcentajes a noviembre de dos mil diecisiete, correspondientes al número de expedientes que tiene con información negativa, positiva o ambas; sin embargo, DUN no acredita la veracidad de tales datos, como se explica a continuación.

En primer lugar, los datos que DUN presenta corresponden, según dicho emplazado, a noviembre de dos mil diecisiete. No obstante, el acuerdo de conclusión de la investigación se emitió el once de agosto de dos mil diecisiete, por lo que la información presentada por DUN no coincide con el periodo investigado,⁷⁵² ni con el PERIODO DE INVESTIGACIÓN.⁷⁵³ En este sentido, ni durante la investigación ni durante el PSFJ DUN presentó información tendiente a acreditar que durante el periodo que corresponde a la duración de la conducta imputada⁷⁵⁴ el número de expedientes que sólo tienen créditos vencidos (es decir, información negativa) hubiera ascendido a [REDACTED] B [REDACTED], cifra que representa el [REDACTED] B [REDACTED] del total de expedientes de DUN.

Adicionalmente, DUN no identifica de forma precisa la fuente de la información que presenta (únicamente señala en la página 121 de la CONTESTACIÓN DUN que se trata de “datos propios de DUN”) y tampoco refiere de qué forma la autoridad podría corroborar o verificar los datos correspondientes a los expedientes de DUN que únicamente cuentan con información negativa.

En este sentido, los datos presentados por DUN no son útiles para que sea “puesto en su justa dimensión” el incremento en las posibilidades de dar HIT derivado de la negativa de DUN de intercambiar la BPD que fue imputada, puesto que no reflejan el universo de CLIENTES cuyos expedientes únicamente tenían registros negativos en el periodo que corresponde a la conducta imputada.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente los porcentajes presentados por DUN fueran correctos y que reflejaran el universo de CLIENTES cuyos expedientes únicamente tuvieran información negativa ([REDACTED] B [REDACTED]) en el periodo investigado, lo manifestado por DUN implicaría que los USUARIOS de CC tienen un [REDACTED] B [REDACTED] más de probabilidades de caer en supuestos que detonarían el HIT derivado de la negativa de DUN de proporcionar la BPD.

Dicho porcentaje es significativo si se considera que el costo que se genera por dicho HIT es trasladado a los USUARIOS en el precio final del RCI y que, en el caso de PM, el precio del HIT corresponde al [REDACTED] B [REDACTED] del precio base del RC, siendo que además a la tarifa de intercambio no le son aplicables los descuentos que ofrecen las SIC.

⁷⁵² De conformidad con lo señalado en el DPR el periodo investigado comprendió del año dos mil diez al año dos mil quince. Véanse las páginas 166 y 254 del DPR.

⁷⁵³ De conformidad con lo señalado en el DPR el PERIODO DE INVESTIGACIÓN abarca del cinco de enero de dos mil quince al once de agosto de dos mil diecisiete. Véase la página 11 del DPR.

⁷⁵⁴ En el DPR se señala que: “[...] a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN, y considerando la información derivada de la investigación, no se cuenta con evidencia de que se haya dado el intercambio de la BPD entre [DUN] y [CC], ni que [DUN] haya compartido a [CC] el SEGMENTO CO en los RC de PM [...]”



Así, la tarifa de intercambio puntual constituye una parte importante del precio del RC de PM cuando se genera HIT, por lo que el aumento en un [REDACTED] B de las posibilidades de que ello suceda puede influir en las consideraciones que toman los USUARIOS para decidir consumir o no los productos de CC.

Las probabilidades de requerir interconexión con la BD de DUN se incrementan en la medida en que la BD de CC sea más pequeña, por lo que los costos que cubren los USUARIOS de CC se incrementan en la medida en que éste requiere en mayor medida la interconexión con la BD de DUN. Como se indicó previamente, a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores.

Por lo tanto, considerando el tamaño de la BD de PM de CC y que la conducta de DUN incrementa las posibilidades en las que los USUARIOS de CC asuman costos derivados del HIT, este último agente económico se vuelve mucho menos atractivo para los USUARIOS como resultado de la negativa de DUN.

Asimismo, es posible señalar que DUN impidió sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO no sólo por el incremento de costos referido (debido a que la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de caer en los supuestos que detonarían HITS y los pagos correspondientes) sino también porque el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa.

Resulta relevante tener en cuenta que: (i) si se consideran las montos de las tarifas de intercambio, el intercambio masivo de información negativa a través del intercambio de la BPD puede ser una alternativa menos costosa que el intercambio puntual de información.⁷⁵⁵ y (ii) la información proporcionada a través del intercambio puntual [REDACTED] B

B

Por otra parte, al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS. De este modo, CC tiene limitada su capacidad de afiliar más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable, al no realizarse el intercambio de la información señalada.

Asimismo, es infundado que la AI fuera omisa en probar que la intención del actuar de DUN hubiese sido impedir sustancialmente el acceso de CC y que resulta difícil sostener que DUN

⁷⁵⁵ Como se indica en el DPR, [REDACTED]

**

tuvo la intención de impedir el acceso a CC incrementando los costos de consultas sobre el **B** del total de expedientes.

La AI señaló en el DPR que la negativa de DUN de intercambiar IC con CC, a través del intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, únicamente pudo tener como intención el impedimento de acceso a CC en los siguientes términos:

"[...] la negación al intercambio de la BPD DE PM hizo depender a [CC] del intercambio puntual requerido para elaborar el RC. Sin embargo, tampoco la entrega puntual establecida en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC se ha llevado a cabo en términos satisfactorios, ya que, presuntamente, [DUN] ha omitido la entrega de información del SEGMENTO CO.

La anterior conducta, llevada a cabo por [DUN], carece de sentido económico, con excepción de que la única racionalidad ha sido impedir sustancialmente el acceso de [CC] al mercado relacionado de la comercialización de productos de [IC] para PM.

[...] la evidencia integrada en el expediente indica que la conducta llevada a cabo por [DUN] no ha tenido como propósito incrementar su productividad, volverse más eficiente o mejorar la calidad de los productos o servicios proporcionados a sus USUARIOS.

Por el contrario, la única motivación aparente para llevar a cabo este comportamiento ha sido dañar a la competencia, al propiciar condiciones desfavorables para que [CC] recopile y procese información proporcionada por [DUN], así como en la comercialización de los productos de [IC]. Es decir, la negativa de [DUN] en la compartición de información ha tenido el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de [CC] al mercado de la recopilación y procesamiento de [IC] de PM y en el mercado relacionado de la comercialización de los productos de [IC] de PM.

En otras palabras, negar el acceso a la BPD DE PM a [CC] no ha respondido a necesidades reales de los consumidores de los productos, ni se ha traducido en una mejora para los USUARIOS de [DUN], sino que puede considerarse como una estrategia anticompetitiva.

Existen casos en que algunos USUARIOS manifestaron la preferencia por consultar la base de [DUN] no por razones de eficiencia en la provisión de servicios. [...]

[...]

*De esta manera, podemos concluir que [DUN] ha llevado a cabo la práctica con la intención principal de impedir sustancialmente el acceso de [CC] a la recopilación y procesamiento de [IC] y, en el mercado relacionado de la comercialización de productos de [IC] de las PM. Lo anterior, puesto que carece de sentido económico llevar a cabo la práctica, más allá de obstruir el proceso de competencia. Entre otras razones, porque compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos adicionales a [DUN], pero si le pudiera acarrear una sanción al no atender lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC [...] [Énfasis añadido]"*⁷⁵⁶

De la transcripción anterior se desprende que el incremento de los costos a CC con motivo de la negativa a proporcionar la BPD (al incrementar las probabilidades de CC de caer en los supuestos que detonarían HITS y los pagos correspondientes) no fue el único elemento

⁷⁵⁶ Página 317 y 320 del DPR.

considerado en el DPR para concluir que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto impedir sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO.

En el DPR se explica por qué la PMR llevada a cabo por DUN no tiene un sentido económico (se indica que compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos adicionales significativos a DUN, pero negar dicho intercambio sí le pudiera acarrear una sanción).

Es decir, para DUN compartir su IC con CC no implica un costo adicional que no vaya a ser compensado por el pago de la contraprestación correspondiente. Incluso, para DUN podría ser redituable cobrar la contraprestación correspondiente por registro intercambiado en la BPD, máxime cuando la BD de DUN es mucho mayor que la de CC, por lo que el pago que DUN recibiría sería mucho mayor que el que tendría que realizar a CC por la IC que dicho agente le proporcionara.

Adicionalmente, en términos de la LRSIC, el no intercambiar la BPD o no realizar de manera completa el intercambio de la información puntual podría conllevar una sanción monetaria para DUN o incluso el riesgo de perder su registro.⁷⁵⁷

No obstante, DUN decidió no intercambiar la BPD ni proporcionar a CC la información completa para la elaboración del RCI.

Al analizarse las razones que podría tener DUN para no intercambiar la BPD, se advierte que la única motivación aparente es impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, ya que con su conducta DUN vuelve menos competitivo a CC en términos de costos, pero sobre todo al impedir que el producto ofrecido por CC posea la información completa, característica que tiene principal relevancia en el mercado, pues los otorgantes de crédito requieren contar con toda la información disponible a efecto de realizar un análisis adecuado del riesgo asociado a las operaciones crediticias.

Por otro lado, DUN no logra acreditar que exista alguna explicación razonable para no intercambiar la BPD o el SEGMENTO CO distinta a impedir a CC el acceso al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO. Como se indica en los apartados *"Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC"*, *"La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD"*, *"La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros"*, *"GANANCIAS EN EFICIENCIA"* y *"VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS"* de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, la conducta de DUN

⁷⁵⁷ Véase el artículo 19, fracción VII, de la LRSIC que señala que: *"Artículo 19.- La Secretaría, escuchando a la Sociedad afectada y oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión, podrá revocar la autorización otorgada en los casos en que la Sociedad: [...] VII. Omitan de manera reiterada transmitir o actualizar a otras Sociedades la información prevista en esta ley, y [...]".* Asimismo, véase el artículo 62, fracción V y último párrafo, de la LRSIC referida: *"Artículo 62.- La Comisión sancionará con multa de 2,000 a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando: [...] Omitan compartir su información a otras Sociedades en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de esta ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada; [...] En caso de que alguna de las infracciones contenidas en los artículos 60, 61 y 62 de esta Ley generen un daño patrimonial o un beneficio, se podrá imponer la sanción que corresponda adicionando a la misma hasta una y media veces el equivalente a dicho daño o al beneficio obtenido por el infractor, lo que resulte mayor. Se entenderá por beneficio la ganancia obtenida o la pérdida evitada para sí o para un tercero".*

no se explica por razones jurídicas o económicas que justifiquen su actuar al permitirle ser más competitivo en el mercado, mediante decisiones de precio, productividad, calidad o eficiencia, sino que con su conducta busca afectar la competitividad de su único competidor contraviniendo la prohibición dispuesta en la LFCE de realizar PMR.

DUN refiere, por otro lado, que resulta impensable que un agente que quiera impedir el acceso a un competidor emplee una estrategia con un **B** de posibilidades de encarecer los costos; no obstante, encarecer de manera significativa el costo de los RC en el **B** de los casos, puede generar los incentivos suficientes para que los USUARIOS opten por adquirir productos de DUN.

Adicionalmente, como ya se indicó, el incremento de los costos a CC con motivo de la negativa a proporcionar la BPD (al incrementar las probabilidades de CC de caer en los supuestos que detonarían HITS y los pagos correspondientes) no fue el único elemento considerado en el DPR para concluir que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto impedir sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO.

En particular, la estrategia de DUN implicó varias cuestiones adicionales al aumento de las posibilidades de dar HIT; en específico: (i) generó que CC no contara dentro de su BD con la información negativa de los CLIENTES que forma parte de la BPD de DUN, lo que le impidió utilizar dicha información para la elaboración de productos de valor agregado; y (ii) impidió que los RCI emitidos por CC contarán con la información completa del CLIENTE.

El objetivo fundamental de las SIC es dotar de información a los USUARIOS para que puedan tomar decisiones considerando el riesgo asociado al otorgamiento de crédito. Como se señaló en el apartado de "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR:

"La brecha informativa que existe entre oferentes y demandantes del crédito puede reducirse si los primeros comparten entre sí la información o el historial crediticio de los potenciales prestatarios. Este intercambio de información crediticia concede mayor certeza a los prestamistas, lo que contribuye a reducir el costo del crédito otorgado. Al atenuar las brechas de información existentes entre prestamistas y prestatarios, se facilita la intermediación financiera, y se incrementa la oferta crediticia."⁷⁵⁸

El intercambio de información sobre el comportamiento crediticio de las PF y las PM sujetas de crédito es un elemento sustancial en la operación del sistema financiero, pues permite valorar de mejor forma (que cuando no ocurre el intercambio de información), la capacidad del solicitante de solventar el préstamo y, además, evitar que un prestatario se endeude más allá de su capacidad económica, al contratar simultáneamente varios créditos con más de una institución financiera.

En el intercambio de información crediticia entre instituciones que otorgan créditos y préstamos, las SIC cumplen una función nodal, pues son organizaciones enfocadas en recopilar información crediticia relevante, así como en facilitar y ordenar el intercambio de la información crediticia de los CLIENTES. Los productos ofrecidos por las SIC tienen como objetivo general disminuir la asimetría de información existente en el mercado de crédito. Estas sociedades se encargan de

⁷⁵⁸ El DPR señala lo siguiente en la nota al pie correspondiente: "Evidencia empírica de otros países confirma que la magnitud en el otorgamiento de crédito al sector privado, con respecto al Producto Nacional Bruto, es mayor al contar con un sistema de información crediticia desarrollado. Información visible a foja 513 del EXPEDIENTE".

recopilar datos relacionados con el historial crediticio para organizarlos, procesarlos y analizarlos. La creación de estas entidades tiende a tener un impacto positivo considerable en la economía, ya que los productos y servicios que ofrecen las SIC han permitido agilizar el otorgamiento de crédito, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta a una solicitud de préstamo o crédito.

Las SIC han creado una oferta limitada de productos que se enfocan en solucionar los problemas de información asimétrica: la selección adversa y el riesgo moral.⁷⁵⁹ Así, el contar con la información relativa al historial crediticio de los potenciales acreditados ayuda a las instituciones de crédito a solucionar el problema de selección adversa; en tanto que el monitoreo continuo del desempeño de los prestamistas contribuye a mitigar el riesgo moral.

De esta manera, las SIC contribuyen a ampliar el crédito al facilitar el proceso de su otorgamiento y al reducir el costo financiero de este proceso; así como a mejorar la asignación, manejo y control del riesgo crediticio. De igual forma, los servicios provistos por las SIC fomentan la disciplina en el mercado de crédito, dado que los solicitantes de crédito saben que su comportamiento crediticio pasado y presente tendrá una repercusión en la solicitud exitosa de préstamos y créditos posteriores, dándoles así incentivos para cumplir con sus créditos y/o préstamos, reduciendo sus incentivos para sobre-endeudarse e incumplir con sus obligaciones crediticias [énfasis añadido].⁷⁶⁰

Así, el que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con información completa, lo vuelve menos atractivo para los USUARIOS, pues los USUARIOS valoran de manera particular contar con toda la información disponible para realizar los análisis correspondientes respecto del comportamiento crediticio de los CLIENTES.

En este sentido, como lo señala el DPR, la conducta de DUN "impide que [CC] cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS en razón a que [CC] no tiene información completa de qué tan morosos son los CLIENTES de los USUARIOS de [DUN]".⁷⁶¹

Así, las implicaciones de la falta de intercambio de IC a través de la BPD y el SEGMENTO CO, deben analizarse de manera conjunta, pues son todas ellas las que generan el impedimento de acceso a CC. De esta forma, no es impensable que DUN busque a través de la negativa de trato a CC, y sus consecuencias impedir el acceso de CC al MR y al MERCADO RELACIONADO.

Por otro lado, DUN refiere que el incremento de la probabilidad de dar HIT y la consecuente obligación de pagar a la SIC complementaria por la información es un efecto que se da en DUN y CC, y no únicamente en ésta última. No obstante, el mismo DUN reconoce que la falta de intercambio de la BPD lo resiente en mayor proporción CC.

⁷⁵⁹ El DPR señala lo siguiente en la nota al pie correspondiente: "La asimetría de información, presente en el mercado de crédito, conduce típicamente a dos problemas: la selección adversa y el riesgo moral. El primero ocurre antes de que la operación financiera se lleve a cabo, y propicia un incremento en el costo general del crédito. Los altos costos resultantes saturan el mercado de "malos prestatarios" cuyos proyectos de inversión son más riesgosos, desplazando a aquellos demandantes con proyectos más sólidos y de menor riesgo. El riesgo moral, por su parte, ocurre posterior al otorgamiento de crédito y propicia montos de crédito otorgados inferiores a sus niveles óptimos. Esta distorsión se genera cuando el prestamista no conoce con precisión los incentivos del prestatario y no puede monitorear su conducta de forma adecuada. Para tratar de mitigar este problema, los prestamistas pueden imponer restricciones para que los prestatarios no se involucren en un comportamiento que se traduzca en una menor probabilidad de pago del préstamo. Información visible a foja 513 del EXPEDIENTE".

⁷⁶⁰ Páginas 97 y 98 del DPR.

⁷⁶¹ Página 317 del DPR.



49947

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Asimismo, dicho efecto se presenta en virtud de una conducta atribuible a DUN y no así a CC, por lo que DUN no puede quejarse de los efectos que su propia conducta le cause, máxime cuando ha tenido la posibilidad de corregirla.

Incluso, el que a DUN le causa una afectación o perjuicio su negativa de intercambiar la BPD, lo único que reitera es que la única explicación razonable de la misma fue impedir a CC el acceso sustancial al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Ahora, si bien es cierto que no existen exclusividades que limiten a los USUARIOS de DUN a afiliarse a CC, es **infundado** el argumento de DUN según el cual la BD de CC no ha crecido por a circunstancias ajenas y no imputables a DUN, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Como se ha expuesto, la conducta imputada a DUN consistente en la negativa de intercambiar la BPD y de proporcionar la información completa para la integración de RCI a CC, ha impedido que se afilien más y nuevos USUARIOS a CC, en virtud que: 1) al no intercambiarse la BPD los USUARIOS de CC asumen con mayor ocurrencia costos adicionales derivados del HIT, lo que hace menos atractivo a CC para dichos USUARIOS; y 2) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.⁷⁶²

Adicionalmente, al no proporcionar la BPD (conducta atribuible a DUN) DUN impide el crecimiento de la BD de CC, ya que el intercambio de la BPD implica en sí mismo, una BD más grande para CC.

Por otra parte, de conformidad con la explicación incluida en el apartado, "*Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, el hecho de que la afiliación de los USUARIOS a una SIC no genere un costo para los USUARIOS, no desvirtúa lo señalado en el DPR respecto al incentivo que tienen los USUARIOS a afiliarse a la SIC que cuente con la BD de PM más grande. En este sentido, si bien es cierto que no existen exclusividades que limiten a los USUARIOS de DUN a afiliarse a CC, la tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. Como se explica en el apartado señalado, en promedio (esto es, considerando el número de consultas) existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN. En este sentido, la no existencia de exclusividades para los afiliados a DUN no desvirtúa el análisis respecto al objeto o efecto de la PMR imputada.

⁷⁶² No debe perderse de vista que los [REDACTED] B [REDACTED] no han adquirido ningún producto de IC de PM de CC; sin embargo, [REDACTED] Asimismo, como se indica en el DPR, al menos un USUARIO manifestó la preferencia por consultar la BD de PM de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, [REDACTED]

Eliminado: treinta palabras.

Por lo que respecta al argumento relativo a que DUN no se encuentra integrado verticalmente, se remite, para evitar repeticiones innecesarias, a lo señalado en el apartado "B.4. DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume", toda vez que en dicho apartado se explica por qué dicho argumento es infundado. No obstante, el hecho de que los accionistas de DUN sean a su vez grandes USUARIOS que al participar de las utilidades de DUN tienen incentivos en comprarle a dicho agente los productos de IC que requieren, es una circunstancia que, entre otras, permite a DUN tener una BD grande. Así, el que DUN tenga una BD más grande hace que CC sea más dependiente de la IC de DUN y permitió a DUN restringir el abasto de CC a IC que podría haber recopilado de manera indirecta.

Adicionalmente, las constancias que obran en el EXPEDIENTE, relativas a la solicitud de CC de intercambiar la BPD (la cual incluso es reconocida por DUN) prueban que CC sí intentó hacer crecer su BD mediante la adición de los registros que forman parte de la BPD de DUN, encontrando un impedimento para ello en la negativa de DUN. Por lo que no es cierto que en el EXPEDIENTE no obren constancias de las que se desprendan que CC intentó hacer crecer su BD y se encontró impedido para hacerlo.

En este sentido, es claro que la conducta de DUN impide el crecimiento de la BD de CC.

Finalmente, es infundado el argumento relativo a que la AI pretende solapar o incentivar el denominado *free-riding*, por las siguientes razones:

- a) Las obligaciones de compartir la BPD y la información completa para la integración de RCI derivan de disposiciones legales según las cuales las SIC deben establecer tarifas para el intercambio de IC, lo que implica que debe existir una contraprestación por el intercambio que debe realizarse (ya sea a través de la BPD o mediante el intercambio puntual).

Por lo que hace a la tarifa que corresponde al intercambio puntual -esto es, la tarifa asociada por la consulta de información de una SIC a otra con motivo de un RC, en la que se proporcionó información considerada como HIT-, DUN no alega ni acredita que dicha tarifa no le permita recuperar los costos relacionados con dicho intercambio (por ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración, generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de su BD que se intercambian con CC) y que dicha tarifa le impida obtener una tasa razonable de retorno.

De hecho, como se explicó previamente, el costo que se genera por dicho HIT es trasladado a los USUARIOS en el precio final del RCI y el precio del HIT, en el caso de PM, corresponde al ***** del precio base del RC.

Si se considera que, de acuerdo con información proporcionada por DUN, el costo total medio por RC de PM de DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad de *****

Eliminado: nueve palabras.

763 y que el ingreso promedio ponderado por RC de PM de DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad de 763
764 se observa que la tarifa que corresponde al intercambio puntual se encuentra B del por RC de PM de DUN y representa un porcentaje significativo de los ingresos por RC en aquellos casos en que DUN factura a CC RCI.

En cuanto a la relevancia de la tarifa del intercambio puntual incluso el artículo 36 bis de la LRSIC dispone que *"Los ingresos que las Sociedades obtengan de la venta de estos reportes de crédito, serán distribuidos entre ellas en la forma en que éstas lo pacten, previa autorización de esta tarifa por parte de la Comisión"*.

En cuanto a la tarifa que corresponde al intercambio masivo de información negativa a través del intercambio de la BPD las SIC no han determinado la tarifa aplicable y la CNBV no ha fijado dicha tarifa. No obstante, mediante escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el once de febrero de dos mil dieciséis, 765 DUN reconoció que: "[...]

* *

* *

[...] [Énfasis

añadido]".

Al respecto, DUN no explica cómo es que en caso de haber aceptado la oferta de CC respecto de la tarifa de intercambio correspondiente a la BPD de PM ello le hubiera impedido recuperar los costos relacionados con dicho intercambio (por ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración, generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de la BPD de PM) y que dicha tarifa le habría impedido obtener una tasa razonable de retorno o que desincentivaría a CC para que invierta recursos en el desarrollo de su BD.

Asimismo, no consta en el EXPEDIENTE evidencia de un proceso de negociación para determinar la tarifa de intercambio que permita demostrar la existencia de condiciones para que se realice el *free riding* que alega DUN.

- b) Obligan a que el intercambio de IC lo realicen todas las SIC, es decir, CC también tiene la obligación de compartir con DUN la IC que recopila de sus USUARIOS.
- c) La constitucionalidad del artículo 36 bis de la LRSIC ya fue analizada por la SCJN en

763 Dicha cantidad se obtiene a partir de la suma del Costo Variable Medio más el Costo Fijo Medio. Lo anterior, de conformidad con la información presentada por DUN que obra en los folios 6142 y 16767.

764 Lo anterior, de conformidad con la información presentada por DUN que obra en los folios 5802 y 16767.

765 Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la información proporciona por TUM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

el amparo en revisión 413/2012. Entre otras cuestiones, la SCJN sostuvo que dicho precepto es consistente y conforme con lo establecido en el artículo 28 de la CPEUM y, por lo tanto, el artículo 36 bis de la LRSIC que establece la posibilidad de determinar tarifas para el intercambio de IC no es, en sí mismo, contrario ni inhibe el proceso de competencia y libre concurrencia.⁷⁶⁶

- d) La obligación de intercambiar de forma masiva IC únicamente incluye la información negativa, por lo que las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su propia BD, ya que el intercambio previsto en la LRSIC no les permite recopilar para su posterior inclusión a su BD información positiva de manera indirecta. En este sentido, para incluir información positiva a su BD, las SIC deben recopilar IC de manera directa de los USUARIOS.⁷⁶⁷

Adicionalmente, las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en desarrollar su propia BD, pues ello les permite: (i) ofrecer más productos de valor agregado; (ii) obtener más ingresos por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de información; y (iii) que sus USUARIOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado de un HIT, lo que las vuelve más atractivas para sus CLIENTES.

Por lo tanto, DUN no acredita que la AI solape o prefiera que CC se beneficie indebidamente (a través de *free-riding*) de la inversión realizada por DUN, pues CC debe pagar una contraprestación para beneficiarse de la BD de DUN.

(iii) La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: argumentos adicionales formulados por DUN.

a. El intercambio de la información puntual no constituye un sustituto a la BPD

DUN manifestó lo siguiente:⁷⁶⁸

La AI señala que la alternativa a la BPD de compartir la información de forma puntual para la elaboración del RCI no es un sustituto del intercambio de la BPD porque: (i) es más cara debido a los costos que se generan con la consulta de la información considerada como HIT; (ii) la compartición es puntual y no de manera total o masiva; y (iii) la información proporcionada solo puede ser empleada por la SIC solicitante para la emisión del RCI.

La AI ignora que los registros son el insumo fundamental para generar la BPD, por lo que un análisis de sustitución entre los registros y la BPD no es adecuado. El problema no está en que CC no tenga acceso a la BPD de DUN, sino en que los

⁷⁶⁶ Véase la versión pública de dicha sentencia en la siguiente página de Internet: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=140345>.

⁷⁶⁷ Véase Negrín, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05 "MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA", Dirección General de Investigación Económica, Banxico. En dicho documento se exponen las razones por las cuales el autor considera que la normativa mexicana, previendo el problema de *free-riding*, limitó el intercambio de IC entre las SIC a la información negativa. Véase la página 41.

⁷⁶⁸ Páginas 123 a 126 de la CONTESTACIÓN DUN.

USUARIOS no le proporcionen los registros a CC y esto es algo que está por completo fuera del control de DUN.

De hecho, los USUARIOS podrían afiliarse a ambas SIC sin incurrir en costos y así proporcionar sus registros tanto a DUN como a CC. Por lo mismo, en lugar de asumir que los USUARIOS no se afilian a CC porque DUN llevó a cabo una práctica anticompetitiva, la AI debió al menos investigar cuáles son los factores que toman en cuenta los USUARIOS para afiliarse a una SIC.

Asimismo, el intercambio puntual de los registros para la elaboración del RCI tiene un costo más elevado que el recibir la BPD. Ello en virtud de que el intercambio de información para el RCI contiene información positiva y negativa, mientras que la BPD únicamente información negativa. Por tanto, no resultan comparables en cuanto a precio. Para la elaboración de un RC es necesario incluir tanto información negativa como positiva, por lo que la información de DUN que en realidad requiere CC para la elaboración de un RC lo constituye la que se intercambia en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC (información positiva y negativa) y no así la BPD.

b. La entrega de información para elaborar los reportes de crédito integrados tampoco se ha llevado en términos satisfactorios en virtud de la omisión de entregar el SEGMENTO CO

El argumento contenido en el DPR se refiere a la conducta y no al objeto o efecto de esta. En virtud de lo anterior, se solicita que aquí se tengan por reproducidos los argumentos por virtud de los cuales se acredita que la definición del SEGMENTO CO del DPR resulta incorrecta y que con base en la definición del verdadero SEGMENTO CO, no existió obligación ni solicitud alguna para llevar a cabo el intercambio del verdadero SEGMENTO CO.

c. La única motivación de DUN para llevar a cabo la conducta imputada fue propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información proporcionada por DUN, así como en la comercialización de productos de IC.

Un problema con la teoría del daño es que no tiene sentido que la AI mencione que el medio para dañar las condiciones de competencia ha sido propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información procesada por DUN, pues el objeto de CC no es recopilar y procesar información de DUN sino de los registros de crédito de los CLIENTES que son proporcionados por los USUARIOS.⁷⁶⁹

La BPD de DUN no es un insumo insustituible para que CC genere los productos de IC, el insumo son los registros que forman parte de dicha BD. Inclusive suponiendo que CC tuviera acceso a la BPD de DUN, entonces tendría que llevar

⁷⁶⁹ DUN señala la página 93 del DPR.

a cabo procedimientos adicionales para extraer los registros de la BPD de DUN y agregarlos a la base que utilizan sus programas y herramientas de procesamiento.

Otro problema es que la AI decidió desestimar la justificación proporcionada por DUN, que es una motivación completamente válida para no intercambiar la BPD. Esto claramente demuestra un sesgo de la AI para incorrectamente imputar una conducta anticompetitiva a DUN, ya que ni siquiera tomó en cuenta argumentos relacionados con la implementación del intercambio. Es incorrecto señalar que el único motivo del actuar de DUN fue desplazar a CC, cuando existieron razones válidas detrás del actuar de DUN.

d. La falta de intercambio de la BPD ha limitado la capacidad de CC de afiliarse nuevos Usuarios debido a que sus productos cuentan con información menos confiable.

Resulta falso que la falta de intercambio de la BPD haya limitado la capacidad de afiliarse nuevos USUARIOS, pues los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC en tanto que están prohibidas las exclusividades y no representa costos adicionales. Dos accionistas de DUN constituyen claros ejemplos de USUARIOS que se afiliaron a CC no obstante ser afiliados de DUN también.

Caso distinto es el que los USUARIOS decidan afiliarse únicamente con DUN, en virtud de una mejor calidad en el servicio. En ese sentido DUN no puede ser sancionado por ser un competidor más eficiente en el mercado (*competition on the merits*). La competencia no busca proteger a un competidor, sino al proceso en sí. Así, el que los USUARIOS prefieran afiliarse a DUN por ser el mejor oferente y no a CC es un claro ejemplo de competencia con base a méritos.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁷⁷⁰

a. El intercambio de la información puntual no constituye un sustituto a la BPD

En el DPR se señala que la BPD es un insumo insustituible en virtud de que el intercambio puntual de IC es la única alternativa de allegarse “*estos registros negativos, además de los positivos, cuando se elabora un RC*”, este intercambio puntual de IC “*es más caro, debido, principalmente, a los costos de la consulta de información entre SIC considerada como HIT; esta compartición se da de manera puntual y no de manera total o masiva;*”⁷⁷¹

**

771

En segundo lugar, si bien los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC también es cierto que existen incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC más grande, es decir, DUN.⁷⁷² Asimismo, los USUARIOS afiliados a las SIC asumen como costo las

⁷⁷⁰ Páginas 119 a 123 de la VISTA DUN.

⁷⁷¹ La AI señaló la página 316 del DPR.

⁷⁷² La AI señaló las páginas 279 y 280 del DPR.

tarifas por el intercambio de información puntual de un expediente que hubiera dado un HIT que se transfiere al precio final del RC de PM.

Conforme a lo anterior, la falta de información en la BD de CC como consecuencia de la negativa de DUN de proporcionar su BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM incrementa los HITS y limita la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información, lo cual es posible que se sostenga en el hecho de que los [REDACTED] B [REDACTED]

[REDACTED] B En consecuencia, a pesar de que CC afilie nuevos USUARIOS, éstos distan de adquirir sus productos de IC de PM. Lo anterior se concatena con lo expresado en el DPR respecto a que [REDACTED] **

Asimismo, únicamente el [REDACTED] B de los USUARIOS están afiliados a DUN y CC y entre dos mil doce y marzo de dos mil quince, DUN tuvo en promedio el [REDACTED] B de la participación de mercado de los USUARIOS afiliados, por lo que es posible señalar que la falta de información en la BD de CC limita la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS.

b. *La entrega de información para elaborar los reportes de crédito integrados tampoco se ha llevado en términos satisfactorios en virtud de la omisión de entregar el SEGMENTO CO.*

La AI manifiesta que se tengan por reproducidos los argumentos previamente expuestos en la VISTA DUN, en virtud de los cuales se desacreditan los argumentos de DUN tendientes a demostrar que no existía obligación de compartir el SEGMENTO CO.

c. *La única motivación de DUN para llevar a cabo la conducta imputada fue propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información proporcionada por DUN, así como en la comercialización de productos de IC.*

En el DPR no se señala que el objeto de CC sea recopilar y procesar información de DUN, sin embargo, el intercambio de la BPD de PM entre DUN y CC es una de las maneras en que estas SIC se allegan de IC.⁷⁷³ Además, en el DPR se plantea que la BPD de PM es un insumo insustituible en virtud de que el intercambio puntual de IC es más caro, se da de manera puntual y no total o masiva y [REDACTED] B

[REDACTED] B Por lo anterior, el argumento de DUN debe desestimarse.

d. *La falta de intercambio de la BPD ha limitado la capacidad de CC de afiliar nuevos Usuarios debido a que sus productos cuentan con información menos confiable.*

⁷⁷³ La AI señaló la página 267 del DPR.

Como se señaló anteriormente, si bien los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC, existen incentivos para que se afilien a la más grande, es decir, DUN; asimismo, los USUARIOS afiliados a las SIC asumen como costo las tarifas de intercambio al presentarse consultas entre SIC con motivo de un RC.

Conforme a lo anterior, la falta de información en la BD de CC como consecuencia de la negativa de DUN incrementa los HITS y limita la capacidad de CC de afiliar nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos confiable. Únicamente el [REDACTED] B [REDACTED] de los USUARIOS están afiliados a DUN y CC.

Ahora bien, si bien [REDACTED] B [REDACTED] lo cual, tampoco es probado por DUN, por lo que es posible sostener que a pesar de que CC afilie nuevos USUARIOS, éstos distan de adquirir sus productos de IC de PM.

Además de lo mencionado anteriormente, DUN no incorpora elementos que supongan que es el competidor más eficiente en el mercado y que los USUARIOS prefieran afiliarse a DUN por ser el mejor oferente. En consecuencia, DUN no desvirtúa que no intercambiar la BPD haya restringido la capacidad de CC de afiliar nuevos USUARIOS.

Los argumentos de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Es inoperante ya que no combate la imputación presuntiva contenida en el DPR, el argumento de DUN relativo a que no es adecuado un análisis de sustitución entre los registros y la BPD.

Lo que se señaló en la página 316 del DPR es que: *“La ruta principal por la cual se intercambia, de forma masiva y mensual, registros negativos (de incumplimiento o de operaciones fraudulentas) es a través del intercambio de la BPD. La alternativa es compartir, de forma puntual, estos registros negativos, además de los positivos, cuando se elabora un RC, en cumplimiento con lo establecido el artículo 36 Bis de la LRSIC. Sin embargo, esta alternativa no es un sustituto del intercambio de la BPD porque: es más cara, debido, principalmente, a los costos de la consulta de información entre SIC considerada como HIT; esta compartición se da de manera puntual y no de manera total o masiva;”*

** [énfasis añadido]**

En este sentido, no se realizó un análisis de sustitución entre la BPD y los registros en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 58 de la LFCE, sino que se indicó que existen dos vías por las cuales se intercambia información entre las SIC, la forma masiva a través del intercambio de la BPD y la forma puntual, siendo que esta última no puede sustituir a la primera ya que es más cara, se da de manera puntual y la información que se recibe por esta vía

**

19951

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Incluso, DUN reconoce que ambas vías son distintas pues la BPD contiene únicamente información negativa y el intercambio puntual se hace respecto a información positiva y negativa y señala que no resultan comparables en cuanto a precio.

Es decir, tanto la AI en el DPR como DUN, reconocen las diferencias que existen entre las dos alternativas mediante las cuales intercambian información las SIC, siendo que el intercambio puntual no sustituye el intercambio de la BPD.

Así, no se realiza un análisis de sustitución entre los registros y la BPD, sino únicamente entre las distintas alternativas a través de las cuales se intercambian IC las SIC.

DUN señala que, la información de DUN que en realidad requiere CC para la elaboración de un RC lo constituye la que se intercambia en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC (información positiva y negativa) y no así a BPD.

Al respecto, aunque no pasa desapercibido que para la elaboración de un RCI CC tiene que recurrir al intercambio puntual de IC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, lo que DUN no considera es que, por un lado, el intercambio de la BPD implica un decremento en los costos del intercambio puntual,⁷⁷⁴ y, por otro lado, el intercambio puntual que requiere CC no se ha dado en términos satisfactorios, pues DUN no proporciona a CC la información completa para su elaboración.

Asimismo, DUN también omite que

[REDACTED] B y [REDACTED] B B B

De esta manera, el intercambio de la BPD podría permitir a CC la elaboración de otros productos distintos a los RC y RCI.

De esta manera, si bien es cierto lo señalado por DUN relativo a que el insumo de la BPD son los registros (al igual que en el caso del intercambio puntual o la recopilación de manera directa de los USUARIOS), el intercambio de la BPD como medio de recopilación indirecta de registros sí es insustituible. La AI no ignoró que los registros son el insumo fundamental para generar la BPD, pues claramente consideró que las SIC se pueden proveer de dicho insumo de forma directa o indirecta,⁷⁷⁵ la AI simplemente explicó las diferencias entre las dos formas de provisión (algunas de las cuales son reconocidas por DUN) y explicó por qué no es posible considerar que el intercambio de información puntual puede sustituir o reemplazar a la BPD.

⁷⁷⁴ Téngase en esta parte por reproducido el análisis respecto del incremento de costos por la negativa de DUN a intercambiar la BPD que se incluye en el apartado "La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" de la presente resolución.

⁷⁷⁵ Véase al análisis correspondiente en las páginas 267 a 268 del DPR dentro del apartado correspondiente al análisis del MR. Entre otras cuestiones, en el DPR se indica lo siguiente: "[...] las SIC recopilan o se abastecen de información crediticia de forma directa (es decir, la proporcionan sus propios USUARIOS afiliados), o de forma indirecta mediante el intercambio de la BPD con otra SIC o a través de la entrega puntual que se requiere para elaborar los RC (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC)."

Eliminado: dos renglones, veintisiete palabras.

2
7 M

Incluso, la LRSIC dispuso que las dos vías para el intercambio de IC entre las SIC fueran obligaciones legales distintas e insustituibles, que emanan de preceptos legales diferentes.⁷⁷⁶ En este sentido, el artículo 62, fracción V, de la LRSIC refiere la imposición de una sanción a las SIC que “omitan compartir su información a otras Sociedades en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de esta ley [...] [énfasis añadido]”, sin que se advierta que el intercambio de IC por una vía sustituye a la otra.

Por otro lado, es **infundado** lo señalado por DUN relativo a que: (i) el problema no está en que CC no tenga acceso a la BPD de DUN, sino en que los USUARIOS no le proporcionen sus registros, lo que según DUN, está por completo fuera de su control; y (ii) que sea falso que la falta de intercambio de la BPD haya limitado la capacidad de afiliar nuevos USUARIOS, toda vez que los USUARIOS pueden afiliarse a ambas SIC sin incurrir en costos.

Al respecto, DUN asume que la recopilación directa de IC (o registros) es suficiente para que CC pueda cumplir con su objeto, desestimando la importancia del intercambio de la BPD; no obstante, la omisión de intercambiar la BPD sí representa un problema para CC, toda vez que, como se explicó en el apartado “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios” de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la negativa de DUN de proporcionar la BPD no sólo incrementó las probabilidades de caer en los supuestos que detonarían HITS y de que los USUARIOS afiliados a CC tengan que pagar la tarifa de intercambio, sino también porque el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa.

Tanto la negativa de intercambiar la BPD como la de proporcionar la información completa para la integración de RCI a CC, imputables a DUN, han impedido que se afilien más y nuevos USUARIOS a CC y por ende que le proporcionen IC, ya que al no intercambiarse la BPD: 1) los USUARIOS de CC asumen con mayor ocurrencia costos adicionales derivados del HIT; 2) la BD de CC tiene una dimensión menor pues no cuenta con la información de la BPD de DUN que podría integrar a su BD; y 3) DUN ha hecho más dependiente a CC del intercambio puntual necesario para la integración de RCI, el cual además, no se ha llevado a cabo en términos satisfactorios debido a la negativa a proporcionar el SEGMENTO CO. Todo ello hace menos atractivo a CC para los USUARIOS y limita la capacidad de CC de afiliar nuevos USUARIOS.

Adicionalmente, como se explicó en el apartado denominado “Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características” de la presente resolución, el hecho de que no exista un costo de afiliación a las SIC no quiere decir que los USUARIOS que optaran por acudir a CC o a dos proveedores no tengan que asumir costos adicionales. Como se explicó

⁷⁷⁶ Mientras el intercambio de la BPD es una obligación que deriva del artículo 36 de la LRSIC, el intercambio puntual de información completa para la integración de RCI deriva del artículo 36 bis de la LRSIC.

en el apartado referido, la tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. En promedio, existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.⁷⁷⁷

El efecto anterior se acentúa con la omisión de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, pues dicha omisión genera que el RCI ofrecido por CC no cuente con información completa, lo que desincentiva a los USUARIOS a consumir productos de CC y, en consecuencia, afecta las posibilidades de CC de recopilar IC de forma directa en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.

En este sentido, con su conducta, DUN genera que el RCI que ofrece CC sea: (i) más caro, al tener una mayor posibilidad de generar HIT; y (ii) menos completo.

Por las razones expuestas, aun cuando el intercambio puntual contiene información positiva y negativa, mientras que el intercambio de la BPD implica únicamente el intercambio de la información negativa, las diferencias en el precio y el uso de la información que puede intercambiarse entre las SIC a través de las dos vías descritas sí es relevante.

Así, la conducta de DUN impide que CC pueda hacerse de una BD más extensa y valiosa, disminuye su capacidad competitiva y, en consecuencia, impide sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

En relación con las manifestaciones a través de las cuales DUN indica que la definición del SEGMENTO CO resulta incorrecta y que de acuerdo con la definición del verdadero SEGMENTO CO, no existió obligación ni solicitud alguna para llevar a cabo el intercambio del verdadero SEGMENTO CO, se indica que las mismas que han sido analizadas en los apartados "*Correcta definición del SEGMENTO CO*" y "*Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO*" de la presente resolución, por lo que lo señalado en dichos apartados deberá tenerse por reproducido en esta sección para evitar repeticiones innecesarias.

Es **infundado** lo señalado por DUN respecto a que no tiene sentido que la AI mencione que el medio para dañar las condiciones de competencia ha sido propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información procesada por DUN, pues el objeto

⁷⁷⁷ El mismo DPR analiza diversos factores relevantes relacionados con la afiliación de los USUARIOS a una o más SIC, por lo que es incorrecto el señalamiento de DUN según el cual la AI únicamente asumió que los USUARIOS no se afilian a CC porque DUN llevó a cabo una práctica anticompetitiva en lugar de investigar los factores que toman en cuenta los USUARIOS para afiliarse a una SIC. En adición al análisis relacionado con los efectos de red y el tamaño de la BD de PM de DUN, el DPR refiere: (i) la importancia de la integración vertical, (ii) las cifras que acreditan los bajos porcentajes de afiliación y adquisición de productos en dos SIC, (iii) la forma en que la conducta encarece o incrementa el costo que pagan los USUARIOS afiliados a CC con motivo del no intercambio de la BPD y el incremento de casos de HIT, (iv) que al menos un USUARIO manifestó la preferencia por consultar la BD de PM de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, y (v) explica cómo es que no tener la información puntual completa en virtud de la negativa a entregar la información que corresponde al SEGMENTO CO implica que los productos de CC cuentan con información menos confiable, lo que limita la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS.

de CC no es recopilar y procesar información de DUN sino de los registros de crédito de los CLIENTES que son proporcionados por los USUARIOS.

El objeto social de CC es: “[...] la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como la relativa a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes E.N.R., en los términos definidos por el artículo quinto de la [LRSIC] [énfasis añadido]”.⁷⁷⁸

De esta manera, el objeto de CC es recopilar IC, ya sea de forma directa o indirecta, para su posterior manejo y entrega. Así, el objeto social de CC no se encuentra limitado a recopilar IC de manera directa de los USUARIOS, lo cual incluso sería un contrasentido si se advierte que la LRSIC estipula la obligación de las SIC de compartir IC.

Por lo anterior, es incorrecto el señalamiento de DUN relativo a que no tiene sentido considerar que ha propiciado condiciones desfavorables para CC en virtud de que, en su opinión, el objeto de CC no es recopilar y procesar información de DUN; lo anterior debido a que la recopilación directa e indirecta de IC son actividades claramente relacionadas con su objeto social y se encuentran previstas en la LRSIC. Como ya se ha explicado, la PMR imputada a DUN impide sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Asimismo, es inoperante el argumento de DUN relativo a que es incorrecto señalar que el único motivo del actuar de DUN fue desplazar a CC, cuando existieron razones válidas detrás del actuar de DUN, pues:

- a. Por un lado, el argumento es gratuito ya que DUN no acredita que existieron dichas supuestas razones válidas e incluso, ni siquiera específica a qué razones se refiere. La justificación dada por DUN en la CONTESTACIÓN DUN para no intercambiar la BPD relativa a que no se encontraba en posibilidad de recibir la BPD de CC ya ha sido analizada en el apartado “Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC” de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

En el mismo sentido, por lo que hace a los señalamientos incluidos en el sub apartado 3.2 de la CONTESTACIÓN DUN,⁷⁷⁹ se indica que los mismos han sido analizados en dentro del apartado “C.4 Manifestaciones en torno al primer elemento de la negativa de trato” de la presente resolución. Dicho análisis debe tenerse por reproducido en esta sección para evitar repeticiones innecesarias.

- b. Por otro lado, el argumento no combate la imputación presuntiva contenida en el DPR, pues en el DPR no se señaló que el único motivo del actuar de DUN era desplazar a CC, sino que se indicó que el objeto de la conducta de DUN era impedir

⁷⁷⁸ Información obtenida de la “Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información crediticia” de veintiocho de marzo de dos mil doce, publicada en el DOF el veinte de abril de dos mil doce, disponible en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244582&fecha=20/04/2012.

⁷⁷⁹ DUN remite a dichos señalamientos a través de la nota al pie de página número 170 que se incluye en la página 126 de la CONTESTACIÓN DUN.

el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Con independencia de lo anterior, tal como se señaló en los apartados *"La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios"* y *"VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS"* de la presente resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, la AI sí acreditó que el único motivo del actuar de DUN fue impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, ya que: (i) para DUN compartir su IC con CC no implica un costo adicional que no vaya a ser compensado por el pago de la contraprestación correspondiente e incluso, para DUN podría ser redituable cobrar la contraprestación; (ii) en términos de la LRSIC, el no intercambiar la BPD o no realizar de manera completa el intercambio de la información puntual podría conllevar para DUN una sanción monetaria o incluso el riesgo de perder su registro, no obstante, no intercambió la BPD ni proporcionó a CC la información completa para la elaboración del RCI; y (iii) la conducta de DUN no se explica por razones económicas que justifiquen su actuar al permitirle ser más competitivo en el mercado, mediante decisiones de precio, productividad, calidad o eficiencia, sino que con su conducta DUN busca que su único competidor sea menos competitivo.

Ahora bien, es **infundado** que el que la AI haya decidido desestimar la justificación de DUN demuestre un sesgo para imputarle una conducta anticompetitiva.

DUN señala que la AI ni siquiera tomó en cuenta argumentos relacionados con la implementación del intercambio; no obstante, tal como se desprende de las páginas 303 a 305 del DPR, la AI analizó lo señalado por DUN respecto de la problemática que a su parecer impedía el intercambio de la BPD, desestimando la justificación de DUN por considerar que la misma no tenía sentido a la luz de lo que sucedía con TUM.

Así, la AI desestimó la justificación de DUN en un contexto en el cual DUN no presentó información y documentación con la cual pudiera sustentar su dicho y siendo que la autoridad advertía indicios contrarios a lo señalado por DUN.

De esta manera, que la AI desestimara el dicho de DUN no demuestra un sesgo de la AI, máxime cuando la AI realizó la imputación considerando la información de la que se allegó durante la investigación, sin que DUN presentara elementos para justificar su dicho.

De hecho, incluso durante el presente PSFJ, DUN no logra acreditar que existía una imposibilidad por CC para recibir la BPD.

Por otro lado, si bien es correcto lo señalado por DUN respecto a que el insumo son los registros, se reitera que el intercambio de la BPD como vía para recopilar registros sí es insustituible, ya que es la única alternativa que le permite a una SIC hacerse de información negativa de USUARIOS que se encuentran en la BD de la otra SIC de manera masiva. Adicionalmente, dicha información sí pasa a formar parte de la BD de la SIC recopiladora, por lo que puede utilizarse para la elaboración de distintos productos.

Adicionalmente, lo señalado por DUN respecto a que CC tiene que llevar a cabo procedimientos adicionales para extraer los registros de la BPD de DUN y agregarlos a la base que utilizan sus programas y herramientas de procesamiento, en nada desvirtúa la imputación presuntiva contenida en el DPR, por lo que es inoperante ya que no lo combate.

Por otra parte, DUN argumenta que los USUARIOS podrían afiliarse a ambas SIC sin incurrir en costos adicionales y proporcionar sus registros tanto a DUN como a CC, al estar prohibidas las exclusividades; no obstante, ello es infundado ya que, por un lado, el que los USUARIOS no tengan que realizar un pago a la SIC por concepto de afiliación, no quiere decir que no asuman costos adicionales si optan por afiliarse a dos SIC, como se explicó previamente en esta resolución,⁷⁸⁰ y, por otro lado, el que no existan exclusividades previstas en disposiciones legales o contractuales vigentes no implica que *de facto* los USUARIOS puedan tener pocos incentivos de afiliarse a dos SIC.

Como se señaló anteriormente, entre los costos relacionados con la afiliación de los USUARIOS a una SIC se encuentran los relacionados con el cumplimiento de requisitos para poderse afiliar,⁷⁸¹ así como aquellos relacionados con el abastecimiento de la IC a las SIC, pues la provisión de ésta debe llevarse a cabo a través de formatos y protocolos distintos que impone cada SIC, lo que implica que los USUARIOS tengan que destinar recursos para realizar la provisión de información y que esos recursos sean mayores cuando optan por tener dos proveedores.⁷⁸²

Por otro lado, como se indicó previamente, la tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. En promedio, existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.

El efecto anterior se acentúa con la omisión de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, pues dicha omisión genera que el RCI ofrecido por CC no cuente con información completa, lo que

⁷⁸⁰ Para evitar repeticiones innecesarias, se remite al análisis incluido dentro del apartado "*Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características*" de la presente resolución.

⁷⁸¹ En el DPR se indica que, para afiliarse, los USUARIOS deberán cumplir con una serie de requisitos. En particular, se indica que los USUARIOS deberán presentar documentos

Información visible a fojas 1200, 1201 y 5737 del EXPEDIENTE.

⁷⁸² Como se indica en el DPR, las condiciones, protocolos y formatos a los que deben apegarse los USUARIOS para la entrega de la información se establecen en los manuales que las SIC publican en sus sitios de Internet, de acuerdo con lo establecido en la disposición Decimoprimera de la Circular 27/2008 de BANXICO, la cual contiene las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las SIC y sus USUARIOS. Asimismo, como lo señala también el DPR, los mecanismos para la entrega de información se encuentran definidos en el Contrato Marco de cada una de las SIC. Asimismo, por lo que respecta a DUN y CC



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

desincentiva a los USUARIOS a consumir productos de CC⁷⁸³ y, en consecuencia, afecta las posibilidades de CC de recopilar IC de forma directa en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.

En este sentido, los USUARIOS de DUN tienen pocos incentivos para tener dos proveedores de IC, máxime cuando pueden obtener la IC de la BD de CC a través de DUN.

Lo anterior además es consistente con la evidencia empírica, la cual demuestra que en México un muy bajo porcentaje de USUARIOS opta por afiliarse y adquirir productos de dos SIC. Específicamente, en el caso de IC de PM, el promedio de USUARIOS que consumieron productos de las dos SIC de dos mil doce a marzo de dos mil quince es cercano a **B**⁷⁸⁴

Por otro lado, es inoperante por gratuito, el argumento de DUN relativo a que los USUARIOS deciden afiliarse únicamente con DUN, en virtud de una mejor calidad en el servicio, ya que DUN no aporta elementos que logren acreditar su dicho y, por el contrario, como se indicó previamente, la AI sí acreditó que al menos un USUARIO manifestó la preferencia por consultar la base de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, ******

******⁷⁸⁵ siendo que los productos de CC cuentan con IC menos confiable al no realizarse el intercambio de información con DUN.

Asimismo, DUN se limita a afirmar que presta servicios de mejor calidad que CC; sin embargo, omite tener en cuenta que los RCI de CC no tienen información completa con motivo de la omisión del SEGMENTO CO por DUN; es decir, DUN no combate los elementos específicos referidos en el DPR para explicar cómo es que su conducta ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que los productos de CC cuentan con información menos confiable al no realizarse el intercambio de información atribuible a DUN.

En ese sentido, no se imputa responsabilidad alguna a DUN por ser un competidor más o menos eficiente, sino porque su conducta, consistente en negarse a intercambiar la BPD y a proporcionar a CC la IC completa para la elaboración de los RCI, tuvo el objeto y efecto de impedir el acceso de su único competidor al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

(iv) Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años.

DUN manifestó:⁷⁸⁶

Si bien mis participaciones de mercado se han mantenido altas a lo largo del período investigado, lo cierto es que, a pesar de que CC ingresó al mercado de

783

Asimismo, como se indica en el DPR, al menos un USUARIO manifestó la preferencia por consultar la BD de PM de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, sino por ****** siendo que los productos de CC cuentan con IC menos confiable al no realizarse el intercambio de información con DUN.

⁷⁸⁴ Dicho porcentaje es de ******

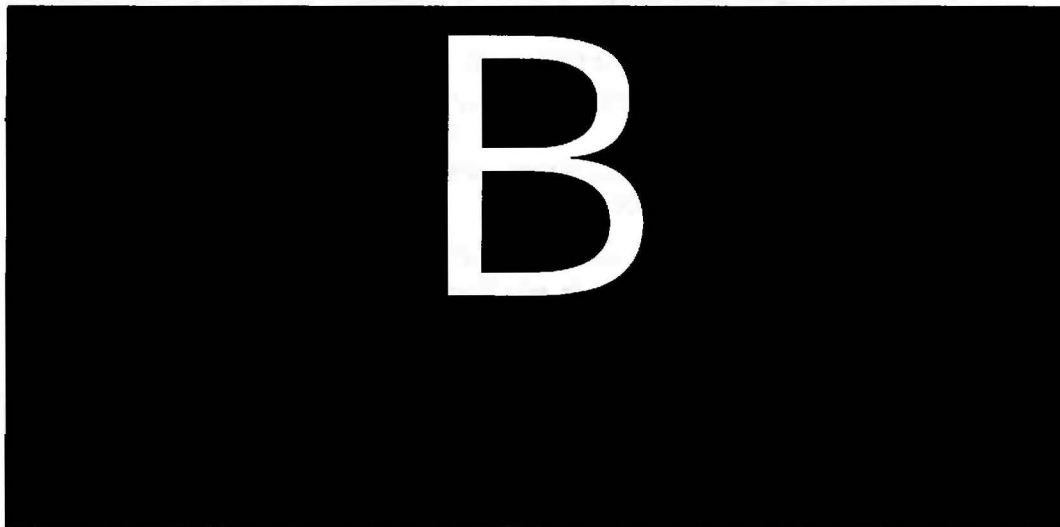
⁷⁸⁵ Página 318 del DPR.

⁷⁸⁶ Páginas 126 a 129 de la CONTESTACIÓN DUN.

productos de IC de PM apenas en dos mil doce, dicho agente ha crecido de manera muy importante e inclusive a un mayor ritmo que nosotros, lo cual es evidencia contundente de que no ha sufrido de desplazamiento u obstrucción evidente por esta última empresa.

La participación de mercado medida con base en unidades de RC de PM vendidas idealmente debe considerar también la IC que una SIC le vende a otra cuando ocurre HIT, como parte del proceso de intercambio de IC, en el cual la SIC complementaria responde a la SIC originadora con un HC de un CLIENTE para la emisión de un RC (o bien, con la falta de dicho historial, causando un NO HIT). Es decir, se deben considerar los RC de PM vendidos, pero también deben adicionarse los RCI facturados entre las SIC, para contar así con el mercado completo.

La siguiente gráfica muestra la evolución y el crecimiento de la participación de mercado con base en unidades de RC de PM vendidas, pero tomando en cuenta los RCI que registraron HIT, es decir las que sí generaron una contraprestación pagada a la SIC complementaria. Como se puede ver, las participaciones de CC, considerando esta dimensión del mercado, han presentado un crecimiento consistente y muy significativo, mientras que nosotros hemos mostrado una disminución consistente en participaciones, evidenciando que no ha ocurrido un desplazamiento por nuestra parte sino todo lo contrario.



Lo anterior es una consecuencia natural de la regulación que impone la LRSIC, que obliga a los USUARIOS a realizar la consulta de información de ambas SIC en el mercado para el otorgamiento de un crédito. Por lo tanto, tal y como lo refleja la evolución de nuestras participaciones de mercado y las de CC, la obligación mencionada impide por completo la existencia de PS en cualquier agente, pues por cada unidad que alguno comercializa implica necesariamente la venta de un

reporte por su competidor. Es decir, cualquier incremento en el volumen de ventas de alguno de los dos agentes implica necesariamente un aumento de las ventas de su competidor.

Derivado de esto, es relevante considerar la facturación que una SIC le hace a la otra por motivo de los RCI regulados por la LRSIC. Al realizar dicho análisis se observa que los montos que CC nos factura son significativamente mayores que aquéllos facturados por nosotros a CC y además, dicha facturación ha crecido de dos mil trece a dos mil diecisiete.

B

Lo anterior implica que nosotros requerimos de la información de la BPD de CC un mayor número de veces para elaborar sus RC de PM, y al dar Hrr, las contraprestaciones pagadas a CC son mayores. Esto a su vez implica que lejos de que desplacemos a CC, necesitamos de su BPD para elaborar un número bastante significativo de nuestros RC de PM.

Esto es claramente indicativo de que CC no carece sustancialmente de información en su BPD, es decir, que cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM y demás productos de IC, lo cual contradice por completo la afirmación de la AI respecto a un problema de acceso al insumo.

Es de suma relevancia recordar que el insumo para CC son créditos registrados y los expedientes que los USUARIOS proveen, no específicamente nuestra BPD, por lo que la evidente utilidad de su BPD es contraria al supuesto problema de acceso al insumo y más bien refleja un problema en la capacidad de generar productos de valor agregado y demás condiciones que atraigan a los USUARIOS para afiliarse a esta SIC.

Es relevante recordar que tanto el número de registros en la BD de CC, como el número de expedientes de CC han observado importantes tasas de crecimiento a partir de su entrada.

Eliminado: once palabras y una gráfica.

No quedó probado por la AI, el supuesto objeto y efecto, consistente en que la supuesta negativa de trato tuvo por objeto y efecto el impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM y en el MERCADO RELACIONADO.

Al respecto la AI manifestó:⁷⁸⁷

En primer lugar, las participaciones de mercado de CC no *“han presentado un crecimiento consistente y muy significativo, mientras que DUN ha mostrado una disminución consistente en sus participaciones”*.

En el DPR se señala que la participación de mercado por venta de RC de PM de DUN, que contempla la venta de RCI, ha oscilado entre B y B con un promedio de B lo cual es evidencia de que la negativa de trato de DUN ha tenido el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC en el MERCADO RELACIONADO, en virtud de que la participación de mercado de CC apenas ha alcanzado un B del mercado en el año dos mil quince.⁷⁸⁸

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que la información de la Gráfica 3 del escrito de DUN⁷⁸⁹ sea verídica y correcta, esta AI señala que:

En relación con la participación de mercado considerando RCI: En seis años, desde dos mil doce hasta junio de dos mil diecisiete, la evolución de la participación de mercado de CC apenas ha alcanzado la cifra de B mientras que para DUN la cifra es de B de participación.

En relación con el crecimiento anual de la participación de mercado considerando RCI: Es totalmente incorrecto realizar el cálculo del crecimiento de la participación de mercado, pues se pierde la dimensión real de las cifras; por ejemplo, conforme con la información de DUN, mientras que el crecimiento de la participación de mercado de CC entre dos mil trece y dos mil catorce fue de B la participación de mercado pasó de B es decir, la participación únicamente aumentó B.

Por lo tanto, de acuerdo con la información ofrecida por DUN, las participaciones de mercado de CC apenas alcanzan el B para junio de dos mil diecisiete, asimismo, no se observa que CC haya *“presentado un crecimiento consistente y muy significativo, mientras que DUN ha mostrado una disminución consistente en sus participaciones”*.

⁷⁸⁷ Páginas 123 a 126 de la VISTA DUN.

⁷⁸⁸ La AI señaló la página 319 del DPR.

⁷⁸⁹ La AI señaló la página 127 de las CONTESTACIÓN DUN e indicó que las cifras de la gráfica 3 no coinciden con el soporte documental consistente en el ANEXO 10.



49961

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

En segundo lugar, suponiendo sin conceder, que la información de la Gráfica 4 del escrito de DUN sea verídica y correcta,⁷⁹⁰ DUN reconoce y coincide con el DPR que *"sus requerimientos de realizar consultas a la [BD] de [CC] son mayores"*,⁷⁹¹ lo cual está relacionado *"con la cantidad de RC de PM que cada SIC ha comercializado desde el año dos mil trece, como se mostró anteriormente, el [B] de los RC de PM fueron emitidos por [DUN]"*.⁷⁹²

No obstante, las mayores contraprestaciones pagadas por DUN a CC son resultado de que DUN posee mayor número de USUARIOS afiliados y, por lo tanto, mayor demanda de productos de IC que requieren realizar consultas a la BD de CC, es decir, dichas contraprestaciones son resultado de la existencia del PS en el MR DE PM y no un probable resultado de que CC *"cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM y demás productos de información crediticia"*.

En tercer lugar, la barrera a la entrada que supone el acceso a la IC es una barrera significativa para los potenciales entrantes y para CC, como se indica en las páginas 289 y 290 del DPR.

Por lo tanto, es claro que DUN no presenta problemas de acceso a la IC de PM en virtud de contar con PS en el MR DE PM, lo cual explica la mayor demanda por productos de IC por sus USUARIOS afiliados y, por ende, mayores contraprestaciones pagadas a CC.

En cuarto lugar, si bien es cierto que *"el insumo para [CC] son créditos registrados y los expedientes que los USUARIOS proveen"* también es cierto que la BPD es una forma de abastecimiento indirecto necesario para elaborar productos de IC como lo reconoce DUN:

"DUN requiere de la información de la BPD de [CC] un mayor número de veces para elaborar sus RC de PM [...] necesita de su BPD para elaborar un número bastante significativo de sus RC de PM".⁷⁹³

En paralelo, se resalta que conforme al DPR:⁷⁹⁴

"[...] en la determinación de poder sustancial de mercado de esta conducta, la participación de mercado de [CC] en la venta de RC de PM no ha crecido lo suficiente como para hacer esta actividad rentable. Con base en estas estimaciones, la participación de mercado necesaria para hacer la comercialización de RC de PM rentable equivalió al [B]. En el dos mil catorce, [CC] alcanzó el [B] de participación de mercado; [B]".

⁷⁹⁰ La AI señaló la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁷⁹¹ La AI señaló la página 289 del DPR.

⁷⁹² La AI señaló las páginas 289 y 290 del DPR.

⁷⁹³ La AI señaló la página 128 de las CONTESTACIÓN DUN.

⁷⁹⁴ La AI señaló la página 319 del DPR.

Eliminado: seis palabras.

En conclusión, DUN no acredita que CC ha presentado crecimientos significativos en el mercado de comercialización de productos de IC de PM y, por el contrario, los montos facturados por CC a DUN implica que DUN cuenta con PS de mercado.

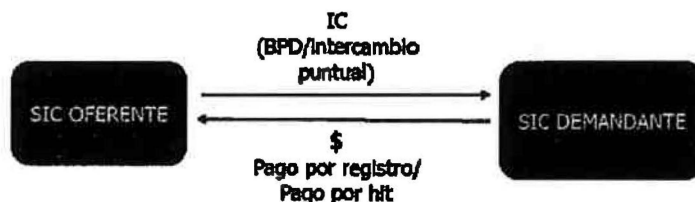
Los argumentos de DUN son **infundados**, de conformidad con los siguientes razonamientos:

En relación con las manifestaciones sobre los bienes o productos que deben considerarse para el cálculo de las participaciones de mercado, DUN manifiesta que la autoridad debería tener en cuenta, al calcular la participación de mercado medida con base en unidades de RC de PM vendidas, la IC que una SIC le vende a otra cuando ocurre un HIT; es decir, en opinión de DUN se deben considerar los RC de PM vendidos, pero también los HITS facturados entre las SIC, para contar así con el mercado completo.

Al respecto, el razonamiento de DUN es erróneo, toda vez que:

- i. El mercado correspondiente a la comercialización de RC de PM es un mercado distinto al mercado que corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM. Si bien dichos mercados se encuentran relacionados, se trata de mercados distintos y no es correcto calcular las participaciones de mercado para ambos mercados de manera conjunta.

Tanto el intercambio de la BPD como el intercambio de IC puntual constituyen una forma de abastecimiento indirecto de las SIC de la IC que proveen originalmente los USUARIOS. La recopilación y procesamiento indirecto de la IC constituyen un mercado en el que las SIC se constituyen como oferentes y demandantes de bienes que intercambian productos a cambio del pago de un precio (tarifa entre SIC),⁷⁹⁵ tal como se observa en el siguiente diagrama:



Por otra parte, el mercado correspondiente a la comercialización de RC de PM es un mercado "*aguas abajo*" en el que las SIC participan como oferentes de RC de PM y los USUARIOS demandan y pagan por dichos productos un precio (tarifas a los USUARIOS).

Así, DUN pretende que al medir las participaciones de las SIC en el MERCADO RELACIONADO, se consideren las tarifas que las SIC cobran en el MR DE PM.

⁷⁹⁵ Como se explica en el apartado denominado "*El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado*" de la presente resolución, si bien hasta la conclusión de la investigación del procedimiento tramitado dentro del EXPEDIENTE, todavía no se realizaba el intercambio de la BPD relativa a PM, para el caso de PF, la CNBV autorizó a TUM y a CC un intercambio mensual de BPD a un precio de [REDACTED] por registro, lo que demuestra que el intercambio de IC implica el pago de una contraprestación.



- ii. Lo que DUN señala implicaría contabilizar dos veces los RC vendidos en aquellos casos en los que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC complementaria cuando ocurren HITS. De este modo, el análisis de las participaciones de mercado que presenta DUN incrementa artificialmente y sin sustento alguno las participaciones de mercado de CC, pues DUN considera dentro de las participaciones de mercado de CC todos aquellos RCI comercializados por DUN respecto de los cuales DUN pagó a CC una contraprestación por concepto de HIT. Lo anterior, se desprende de la propia información presentada por DUN; en particular, de la información incluida en las páginas 127 y 128 de la CONTESTACIÓN DUN,⁷⁹⁶ así como de la información contenida en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN.⁷⁹⁷

Al analizar la información contenida en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN, misma que fue utilizada por DUN para sustentar el argumento según el cual la AI debió considerar los RCI facturados entre las SIC, y no sólo los RC de PM vendidos, se observa que DUN contabiliza dos veces los RC que incluyen IC de la SIC complementaria cuando ocurren HITS.

En el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN se incluyen dos cuadros. El cuadro inferior corresponde al análisis de las participaciones de mercado de DUN y CC, medida con

⁷⁹⁶ Las páginas 127 y 128 de la CONTESTACIÓN DUN se encuentran visibles en los folios 34536 y 34537 del EXPEDIENTE.

⁷⁹⁷ El anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN se encuentra visible en el folio 34958 del EXPEDIENTE. En la página 144 de la CONTESTACIÓN DUN, se indica que el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN corresponde a un documento interno generado por TUM y DUN en el que se muestra el número de reportes de crédito emitidos para los años dos mil siete a junio de dos mil diecisiete, según información del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Al respecto, DUN señala que dicho documento fue utilizado para la elaboración de la Gráfica 3, contenida en la página 126 de la CONTESTACIÓN DUN; no obstante, se observa que la gráfica denominada "Gráfica 3. Evolución y crecimiento de la participación de mercado de DUN y de Círculo de Crédito, medida en base a unidades de RC de PM vendidas y considerando los reportes integrados" se incluye en la página 127 de la CONTESTACIÓN DUN. En la página 126 de la CONTESTACIÓN DUN no se incluye ninguna gráfica, tabla o cuadro.

base en unidades de RC de PM vendidas y considerando los RCI, de acuerdo con las manifestaciones del propio DUN.

En la primera columna se incluye información correspondiente al periodo o año en el que se observan las ventas referidas en el cuadro. En la segunda columna se observan las cifras totales de RC de PM vendidos entre dos mil siete y junio de dos mil diecisiete, de acuerdo con la información que, según DUN, se obtuvo a través del INAI.⁷⁹⁸ En la tercera columna se observan las cifras correspondientes a los RC de PM vendidos por DUN y en la cuarta columna las cifras correspondientes a los RC de PM vendidos por CC.

De conformidad con la información incluida en las columnas octava y novena, las cifras totales de RC de PM de DUN y CC se pueden obtener al sumar las cifras que corresponden a los RC de PM vendidos por cada SIC y las cifras que corresponden a los RCI facturados por la otra SIC. No obstante, al sumar ambas cantidades (esto es, las cifras totales de RC de PM y los RCI correspondientes) se observa que el total no coincide con las cifras que, según DUN, se obtuvieron a través del INAI. De hecho, la cantidad excedente corresponde exactamente a la suma de las cantidades presentadas por DUN en el Anexo 11 que corresponden, supuestamente, a los RCI facturados por ambas SIC. Es decir, el total de los RC de PM que presenta DUN en las columnas octava y novena del segundo cuadro que se incluye en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN contabiliza dos veces los RC vendidos en aquellos casos en los que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC complementaria cuando ocurren HITS.

A continuación, se presenta un ejemplo para el efecto de clarificar lo señalado en el párrafo anterior.

Para el año dos mil trece, la suma de las cifras incluidas en las columnas octava y novena del segundo cuadro que se incluye en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN asciende a la cantidad de **B** reportes. Dicha cifra, de acuerdo con la información presentada por DUN correspondería al resultado de sumar las cifras que corresponden a los RC de PM vendidos por cada SIC y las cifras que corresponden a los RCI facturados por la otra SIC. No obstante, la cifra que supuestamente se obtuvo a través del INAI para dicho

⁷⁹⁸ DUN no presenta ningún elemento de convicción tendiente a acreditar que las cifras de las ventas totales de RC de PM incluidas en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN hayan sido obtenidos a través del INAI o que hubieran sido proporcionadas por el INAI. No obstante, esta autoridad observa que las cifras totales de RC de PM vendidos entre dos mil siete y junio de dos mil diecisiete que presenta DUN en la segunda columna del segundo cuadro incluido en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN coinciden con las cifras incluidas en uno de los documentos integrados al Anexo 14 de la Contestación al DPR presentada por TUM. Dicho documento corresponde a una impresión de la respuesta elaborada por la CNBV en atención a una solicitud de acceso a información pública. Al respecto, se observa que las cifras referidas por DUN coinciden con las cifras incluidas en la impresión del documento elaborado por la CNBV. Asimismo, las cifras que incluye DUN en la segunda columna del segundo cuadro incluido en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN corresponden al total de los RC de PM vendidos a los USUARIOS en términos del artículo 36 bis; es decir, incluyen cifras de todos los RC de PM vendidos (incluyendo los RCI que surgen cuando hubo un intercambio de información entre SIC como resultado de un Hit).



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

año asciende a la cantidad de [REDACTED] B

[REDACTED] B La diferencia entre ambas cifras (total de RC de PM vendidos según DUN vis a vis el total de RC de PM vendidos de acuerdo con el INAI) ascendería a la cantidad de [REDACTED] B reportes. Dicho monto corresponde exactamente al número de RCI facturados por ambas SIC que reporta DUN para el año dos mil trece en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN.

- iii. Las cifras que corresponden a la facturación de una SIC a otra por concepto del intercambio de información puntual refleja una parte de las ventas de RC de PM a los USUARIOS por la SIC originadora, pero no las ventas a los USUARIOS de RC de PM que corresponden a la SIC que factura por el intercambio de la información puntual (la SIC complementaria).

La propuesta de DUN implicaría no sólo contabilizar dos veces la venta de un RC de PM en los términos señalados en el numeral anterior (eso es, en los casos en que dicho RC de PM incluye IC de la SIC complementaria cuando ocurren HITS), también implicaría contabilizar como parte de las participaciones de mercado de una SIC los RC que únicamente comercializa su competidor a los USUARIOS.

DUN pierde de vista que la demanda de información puntual de la SIC originadora a la SIC complementaria es una demanda derivada de la demanda de RC de los USUARIOS de la SIC originadora.

Como se desprende de la información contenida en el segundo cuadro que se incluye en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN, el análisis de participaciones de mercado que propone DUN implica sumar a las participaciones de mercado de CC (medidas en términos de unidades de RC de PM vendidas por CC) los RC que demandan los USUARIOS de DUN y que vende DUN a sus USUARIOS en los casos que incluyen IC proveniente de los USUARIOS de CC (esto es, cuando para la elaboración de RCI CC proporciona información correspondiente a HITS como SIC complementaria). No obstante, constituye un error considerar que las participaciones de mercado de cada SIC deben medirse a partir de la suma de los RC de PM que cada una vende más las unidades que representan los RCI que registraron HIT y que corresponden a la facturación realizada por la otra SIC. Lo anterior toda vez que dicha información no refleja la participación de la SIC que comercializa RC de PM a los USUARIOS.

Por los motivos señalados, la metodología propuesta por DUN para medir las participaciones de mercado considerando los RCI es incorrecta y DUN no acredita que CC hubiera crecido de manera importante o a un mayor ritmo que DUN. Al respecto, como se indica en los apartados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" y "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM fueron muy superiores a las de CC durante el periodo comprendido entre dos mil doce y el mes de marzo de dos mil quince -en promedio, dichas participaciones de

Eliminado: dieciséis palabras.

mercado se encuentra por encima del [REDACTED] B a lo largo de todo el periodo investigado y, de acuerdo con la propia información presentada por DUN, dichas participaciones no habrían sido inferiores al [REDACTED] B. En el mismo sentido, de acuerdo con información que obra en el EXPEDIENTE, las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de los USUARIOS que adquirieron algún producto para PM entre dos mil doce y el mes de marzo de dos mil quince se mantuvieron en promedio por encima del [REDACTED] B.

Por otra parte, de conformidad con los razonamientos que se desarrollan en los siguientes párrafos, es infundado el argumento de DUN según el cual el hecho de que la LRSIC obligue a los USUARIOS a realizar la consulta de información a ambas SIC impide por completo la existencia de PS de cualquier agente, al considerar, según DUN, que cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la venta de un reporte por su competidor.

Al respecto, es cierto que el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a los USUARIOS a obtener la información que se integra a los RC (de forma directa o indirecta) de las distintas SIC.⁷⁹⁹ No obstante, es incorrecto afirmar que cualquier incremento en el volumen de venta de alguna de las SIC implica necesariamente un aumento de las ventas de su competidor. Como se desprende del artículo 36 Bis de la LRSIC, los USUARIOS pueden “*optar por consultar los reportes de las diferentes Sociedades de forma separada*”; no obstante, en caso de que no lo hagan la SIC originadora emitiría un RCI, el cual implicaría un ingreso para la SIC complementaria únicamente en aquellos casos en que hubiera HIT. De este modo, es incorrecta la afirmación de DUN según la cual cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la venta de un reporte por su competidor en términos de la obligación referida contenida en la LRSIC.

A mayor abundamiento, la afirmación de que cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la venta de un reporte por su competidor únicamente es válida en el caso de que el USUARIO opte por consultar a ambas SIC de manera separada, lo cual no se da de manera recurrente, ya que como se señaló anteriormente, durante el periodo investigado, menos del [REDACTED] B de los USUARIOS consumieron productos de ambas SIC.

Adicionalmente, como se indicó previamente, las cifras que corresponden a la facturación de una SIC a otra por concepto del intercambio de información puntual refleja una parte de las ventas de RC de PM a los USUARIOS por la SIC originadora, pero no las ventas a los USUARIOS de RC de PM que corresponden a la SIC que factura por el intercambio de la información puntual (la SIC complementaria), razón por la cual no es correcto utilizar la metodología propuesta por DUN para medir las participaciones de mercado.

Por otra parte, resultan infundadas las manifestaciones de DUN a través de las cuales manifiesta que al analizar los montos que CC le factura a DUN por motivo de los RCI y los

⁷⁹⁹ El artículo 36 bis de la LRSIC señala, entre otras cuestiones, lo siguiente: “*Los Usuarios podrán optar por consultar los reportes de las diferentes Sociedades de forma separada. En caso de optar por esta forma de consulta los Usuarios deben avisarle a la Sociedad, quien le deberá proporcionar un Reporte de Crédito que contenga únicamente la información de ésta. En caso de que se solicite esta modalidad, los Usuarios estarán obligados a solicitar a las demás Sociedades su reporte individual correspondiente.*”



A3773

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

montos que DUN le factura a CC por motivo de los RCI es posible observar que: (i) lejos de desplazar a CC, DUN necesita de su BPD para elaborar un número bastante significativo de sus RC de PM (toda vez que DUN requiere de la información de la BPD de CC un mayor número de veces para elaborar sus RC de PM y, al dar HIT, las contraprestaciones pagadas a CC son mayores); y (ii) CC no carece sustancialmente de información en su BPD, es decir, que cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM y demás productos de IC, lo cual contradice por completo, según DUN, la afirmación de la AI sobre la existencia de un problema de acceso al insumo.

Al respecto, en términos absolutos, DUN sí requiere en más ocasiones información puntual contenida en la BD de CC y, por lo tanto, el número de ocasiones en que CC requiere información puntual contenida en la BD de DUN es menor. Por ello, el monto que CC factura a DUN con motivo del intercambio de información puntual entre SIC es mayor al monto que DUN factura a CC con motivo del intercambio de información puntual. Lo anterior, significa que efectivamente DUN paga montos superiores que los pagados por CC cuando se considera el total de los RCI emitidos por ambas SIC, toda vez que dichos reportes surgen cuando hubo un intercambio de información entre las SIC como resultado de un HIT y, en términos absolutos, durante el periodo investigado DUN consultó en más ocasiones a CC⁸⁰⁰ y generó más HITS al consultar la BD de PM de CC que los HITS generados por CC al consultar la BD de PM de DUN.⁸⁰¹

No obstante, como se indicó anteriormente, DUN pierde de vista que la demanda de información puntual de la SIC originadora a la SIC complementaria es una demanda derivada de la demanda de RC de los USUARIOS de la SIC originadora. Por ese motivo, las mayores contraprestaciones pagadas por DUN a CC son resultado de que DUN posee mayor número de USUARIOS afiliados y, por lo tanto, mayor demanda de productos de IC que requieren realizar consultas a la BD de PM de CC, es decir, dichas contraprestaciones son consistentes con la diferencia que existe entre las BD de PM de ambas SIC y reflejan la mayor demanda por productos de IC de PM de DUN por sus USUARIOS afiliados.

Por otra parte, la tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. No obstante, como se explica en los apartados de la presente resolución denominados "*Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características*" y "*La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios*", en promedio (esto es, considerando el número de consultas) existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; en este sentido, los USUARIOS de CC

⁸⁰⁰ Véase la tabla 69 del DPR y el análisis correspondiente en el apartado "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución.

⁸⁰¹ Véase el análisis incluido en el apartado "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución, así como la información referida en el anexo 12 de la CONTESTACIÓN DUN y en la denominada "*Gráfica 4. Facturación de una SIC a otra por RC Integrados*" que se incluye en la página 128 de la CONTESTACIÓN DE DUN).

pagan en más ocasiones por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.

Dicho efecto se acentúa con motivo de la PMR imputada a DUN debido a que: (i) la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes; (ii) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa; (iii) la información proporcionada a través del intercambio puntual [REDACTED] B

[REDACTED] B es decir, [REDACTED] B y (iv) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

Por lo que hace a la manifestación según la cual es de suma relevancia recordar que el insumo para CC son los créditos registrados y los expedientes que los USUARIOS proveen, y no específicamente la BPD de DUN, dicho argumento ya ha sido previamente analizado dentro del apartado *"La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios"*, por lo que se remite a dicho apartado de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

Finalmente, DUN señala que CC no ha sufrido desplazamiento de parte de DUN y para ello considera relevante recordar que tanto el número de registros en su BD, como el número de expedientes, han observado importantes tasas de crecimiento a partir de su entrada. Al respecto, en los apartados *"El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto"* y *"VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS"* de la presente resolución se exponen los razonamientos y los elementos de convicción que permiten a esta autoridad concluir que, contrario a lo manifestado por DUN, el crecimiento de CC en términos de número de registros y número de expedientes no fue significativo durante el periodo investigado. Para evitar repeticiones innecesarias, se remite al análisis relacionado con la evolución de las participaciones de mercado de CC y DUN medidas en términos de número de registros y número de expedientes que se incluye dentro de los apartados de la presente resolución referidos en el presente párrafo.

Adicionalmente, de acuerdo con las propias cifras presentadas por DUN, dicho agente económico en todo momento durante el periodo investigado mantuvo participaciones de mercado medidas en términos de número de registros de su BD y número de expedientes superiores al [REDACTED] **. DUN no presenta ningún elemento de convicción y ningún razonamiento adicional a los analizados por esta autoridad que permita evaluar de qué manera es posible considerar que los indicadores relacionados con la participación de CC en el MR DE PM han observado importantes tasas de crecimiento a partir de su entrada al mercado.

Eliminado: treinta y dos palabras.

D.2. Manifestaciones en relación al objeto o efecto de la conducta consistente en ausencia de innovación y altos precios en el mercado.

D.2.1. La falta de innovación no es evidencia de la falta de competencia. Además, obligar el intercambio de la BPD, que no es el insumo primario para generar productos de IC, puede llevar a que las SIC inviertan e innoven menos en aspectos relacionados a la BPD.

DUN manifestó:⁸⁰²

La AI señala que la falta de competencia efectiva se puede demostrar por *“la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado”*. Sin embargo, como lo expresa la COFECE en el *“Trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados”* México es un país que se compara favorablemente con otros países en lo que respecta a la profundidad de la información disponible. Lo anterior también se puede observar en el hecho de que, de todos los factores que influyen en la facilidad de obtener un crédito según el estudio *“Doing Business”*, únicamente el indicador de profundidad de la información de crédito es donde México tiene el mayor puntaje, es decir, el ámbito que concierne a las SIC.⁸⁰³

En cambio, la obligación de intercambiar las BPD impone mayores restricciones a la innovación y a la inversión. Esto porque situar el problema de acceso en la BPD, que es tan solo una etapa intermedia en el proceso de generación de productos de IC, limita los incentivos de ambas SIC a invertir e innovar en más y mejores herramientas para generar BPD de manera más eficiente y que se puedan adecuar a sus herramientas y programas de procesamiento para generar los productos. Además, también limita los incentivos de las SIC de ofrecer más y mejores productos, brindar un mejor servicio y tener mejores controles de seguridad en relación con los registros, de manera que puedan atraer más USUARIOS.

El acceso que una SIC tiene a la información de las demás está garantizado mediante las consultas que realizan por cada reporte comercializado, por lo que el intercambio de la BPD se limita a compartir un insumo. Esto deriva en que, por un lado, CC pierda los incentivos para desarrollar su propia BPD, así como para generar condiciones atractivas para la afiliación de más USUARIOS, tanto en cuestiones relativas a la provisión misma de la información como en la generación de productos de valor agregado, y, por otro lado, que DUN no invierta en la mejoría de su BPD, pues dichas inversiones no se verán compensadas proporcionalmente, pues el costo de dichas mejorías no sólo no será pagado por CC, sino que adicionalmente el retorno de éstas será compartido por el beneficio que CC obtendrá de la BPD de DUN.

⁸⁰² Páginas 129 a 130 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁰³ DUN refiere el documento del Banco Mundial, *Doing Business, 2017: Equal Opportunity for All*, 2017, p.224.

Con independencia de lo anterior, la innovación de productos no es prueba de falta de condiciones de competencia. De hecho, la misma COFECE reconoce que México se compara favorablemente con otros países a nivel internacional en la calidad de la IC. Más bien, obligar el acceso a la BPD podría limitar los incentivos de las SIC a ofrecer más y mejores productos, brindar un mejor servicio, y tener mejores controles de seguridad en relación con los registros, de manera que puedan atraer más usuarios.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁸⁰⁴

En relación con la calificación de la profundidad de la IC en México se solicita se tengan por reproducidos los argumentos previamente esgrimidos por esta AI.⁸⁰⁵

Además, esta AI considera confuso el señalamiento por DUN, ya que considera que la profundidad⁸⁰⁶ de la información es un término equiparable con la calidad de esta.⁸⁰⁷ DUN no es claro al señalar la relación entre ambos conceptos, así como con el señalamiento realizado en el DPR referente a la falta de innovación en el segmento de PM.

En relación con el problema de *free-riding* que señala, se solicita que se tengan por reproducidos los argumentos esgrimidos previamente por la AI.⁸⁰⁸

Los argumentos de DUN resultan infundados, por una parte, y parcialmente fundados, pero insuficientes, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Como se indica en el apartado “*El análisis elaborado por la AI respecto a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM es infundado*” de la presente resolución, es cierto que en el “*Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados*” publicado por la COFECE se reconoce que de acuerdo con Doing Business, México se compara favorablemente con otros países en la profundidad de su sistema de IC, calificando positivamente en los seis aspectos que se evalúan; no obstante, ni la profundidad del sistema de IC ni la calidad de la IC constituyen indicadores que permitan evaluar o calificar como suficiente o insuficiente la innovación y el desarrollo de productos de valor agregado por las SIC.⁸⁰⁹

⁸⁰⁴ Páginas 12 a 15 de la VISTA DUN.

⁸⁰⁵ Dichos argumentos se incluyen dentro del apartado de la presente resolución denominado “*El análisis elaborado por la AI respecto a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM es infundado*”

⁸⁰⁶ La AI señaló lo siguiente: “*Doing Business Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies 2017*” define penetración como “*La profundidad del índice de información crediticia mide las reglas y prácticas que afectan la cobertura, el alcance y la accesibilidad de información de crédito disponible a través de ya sea una agencia de crédito o un registro de crédito.*”

⁸⁰⁷ La AI remite a la página 76 de la CONTESTACIÓN DUN donde se indica lo siguiente: “[...] esto es contradictorio con la evidencia internacional, respecto a la profundidad (entendida como calidad) de la información crediticia en México.”

⁸⁰⁸ Dichos argumentos se incluyen dentro del apartado de la presente resolución denominado “*La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros*”.

⁸⁰⁹ Los aspectos evaluados son los siguientes: (i) se distribuyen datos sobre las empresas y los individuos; (ii) se distribuye información tanto positiva como negativa; (iii) se distribuye información tanto de comercios y compañías de servicios

En consecuencia, el argumento de DUN respecto de la profundidad de la IC es infundado y no desvirtúa el análisis incluido en el DPR respecto de la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado en el mercado que corresponde a la comercialización de productos de IC de PM.

Respecto de los argumentos a través de los cuales DUN señala que la obligación de intercambiar las BPD impone mayores restricciones a la innovación, ya que limita los incentivos de ambas SIC a invertir,⁸¹⁰ a ofrecer más y mejores productos, a brindar mejores servicios y tener mejores controles de seguridad, así como a innovar en mejores herramientas para generar BPD de manera más eficiente, se indica lo siguiente:

Las obligaciones de compartir la BPD y la información completa para la integración de RCI derivan de disposiciones legales según las cuales las SIC deben establecer tarifas para el intercambio de IC, lo que implica que debe existir una contraprestación por el intercambio que debe realizarse (ya sea a través de la BPD o mediante el intercambio puntual).

Por lo que hace a la tarifa que corresponde al intercambio masivo de información negativa a través del intercambio de la BPD las SIC no han determinado la tarifa aplicable y la CNBV no ha fijado dicha tarifa. No obstante, mediante escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el once de febrero de dos mil dieciséis,⁸¹¹ DUN reconoció que: "[...] **

**

[...] [Énfasis añadido]".

Al respecto, DUN no explica cómo es que en caso de haber aceptado la oferta de CC respecto de la tarifa de intercambio correspondiente a la BPD de PM ello le hubiera impedido recuperar los costos relacionados con dicho intercambio (por ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración, generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de la BPD de PM) y que dicha tarifa le habría impedido obtener una tasa razonable de retorno o que desincentivaría a CC y a DUN para que invirtieran recursos en el desarrollo de sus BD.

En particular, DUN no explica ni acredita cómo es que la tarifa de intercambio ofertada por CC, en caso de haber sido aceptada, le habría impedido ofrecer más y mejores productos o brindar mejores servicios y tener mejores controles de seguridad. Ni la LRSIC ni el DPR

públicos como de entidades financieras; (iv) se distribuye información histórica de más de dos años; (v) se distribuye información de créditos cuyo saldo es menor a 1% del ingreso per cápita; y (vi) tienen derecho los deudores a acceder a su información.

⁸¹⁰ DUN señala que la obligación de intercambiar las BPD deriva en que, por un lado, CC pierda incentivos para desarrollar su propia BPD y, por otro lado, que DUN no invierta en la mejoría de su BPD, ya que dichas inversiones no se verían compensadas proporcionalmente, pues el costo de dichas mejorías no sólo no será pagado por CC, sino que el retorno de esas sería compartido por el beneficio que CC obtendría de la BPD de DUN.

⁸¹¹ Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la información proporciona por TUM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

refieren elementos de los que se desprenda que el intercambio de la BPD deba realizarse de forma gratuita o de forma que se impida a un agente recuperar sus costos u obtener una tasa razonable de retorno.

Como se explica con más detalle en el apartado "*La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios*" de la presente resolución, no consta en el EXPEDIENTE evidencia de un proceso de negociación para determinar la tarifa de intercambio correspondiente a la BPD de PM que permita demostrar la existencia de condiciones para que se realice el *free-riding* o se actualicen las restricciones a la innovación que alega DUN.

Por otra parte, la obligación de intercambiar de forma masiva IC únicamente incluye la información negativa, por lo que las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su propia BD, ya que el intercambio previsto en la LRSIC no les permite recopilar para su posterior inclusión a su BD información positiva de manera indirecta. En este sentido, para incluir información positiva a su BD, las SIC deben recopilar IC de manera directa de los USUARIOS.⁸¹²

Adicionalmente, las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en desarrollar su propia BD, pues ello les permite: (i) ofrecer más productos de valor agregado; (ii) obtener más ingresos por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de información; y (iii) que sus USUARIOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado de un Hrr, lo que las vuelve más atractivas para sus clientes. En consecuencia, los argumentos analizados resultan infundados.

Por lo que hace al señalamiento según el cual la innovación de productos no es prueba de falta de condiciones de competencia, se indica a DUN que el DPR no contiene ningún señalamiento en ese sentido. Lo que indica el DPR entre las páginas 320 y 325 es que entre las manifestaciones de la conducta que tuvieron un impacto en el proceso de competencia y libre concurrencia al impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y, también, al MERCADO RELACIONADO, se encuentra no sólo el haber limitado el crecimiento de CC en ambos mercados, sino también que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer más servicios de valor agregado, lo que a su vez habría repercutido en los precios de los productos de IC de PM.

Al respecto, el DPR no contiene elementos que constituyan un nexo causal entre la negativa a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual con CC y el aumento de precios de los productos de IC de PM y la insuficiente oferta de servicios de valor agregado por DUN. Este sentido, el argumento analizado resulta parcialmente fundado, pero resulta insuficiente de conformidad con los siguientes razonamientos.

⁸¹² Véase Negrín, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05 "*MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA*", Dirección General de Investigación Económica, Banxico. En dicho documento se exponen las razones por las cuales el autor considera que la normativa mexicana, previendo el problema de *free-riding*, limitó el intercambio de IC entre las SIC a la información negativa. Véase la página 41.

De conformidad con los elementos y razonamientos referidos en los apartados “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios”, “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: argumentos adicionales formulados por DUN”, “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años” y “VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS” de la presente resolución, los cuales deberán tenerse por reproducidos en esta sección para evitar repeticiones innecesarias, si obran dentro del EXPEDIENTE elementos de convicción suficientes para acreditar que: (i) la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes; (ii) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa; (iii) la información proporcionada a través del intercambio puntual [REDACTED] B

[REDACTED] B es decir, [REDACTED] B y (iv) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

D.2.2. La falta de innovación no se encuentra prevista dentro de los objetos o efectos que debe de tener una práctica para ser considerada como monopólica relativa, aunado a que las manifestaciones de la AI sobre el particular resultan gratuitas.

DUN manifestó:⁸¹³

Una vez que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 54 de la LFCE, dicho precepto establece en su fracción III los objetos o efectos que debe de tener una conducta para ser considerada como una PMR.

La falta de innovación en un mercado no es uno de los efectos que se deban de tomar en consideración para tener por actualizada una PMR. Por ende, la falta de innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado no puede ser considerada como un objeto o efecto de la(s) conducta(s) imputada(s) para tener por colmado el supuesto de la fracción III del artículo 54 de la LFCE.

Con independencia de lo anterior, resultan del todo gratuitas las manifestaciones de la AI consistentes en que:

⁸¹³ Páginas 131 a 132 de la CONTESTACIÓN DUN.

(i) El intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría una efectiva competencia entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor gama de productos de valor agregado;⁸¹⁴

(ii) Otra consecuencia de la ausencia de competencia en la comercialización de productos de PM ha sido el incremento continuo de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS;⁸¹⁵ y

(iii) Que el efecto de impedir el acceso a CC a los mercados de recopilación y procesamiento de IC de PM y la comercialización de productos de IC de este segmento ha generado que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC.⁸¹⁶

La AI asume, pero no justifica, que el intercambio de las BPD de PM daría pie a que CC y DUN ofrecieran nuevos productos de valor agregado. Asimismo, la AI olvida que para la creación de nuevos productos las SIC requieren de BD que cuenten con información positiva y negativa de los CLIENTES. En ese sentido, la BPD ni siquiera resulta idónea para la creación de dichos productos.

En otro orden de ideas, la AI no puede asumir que (incluso en un escenario de competencia perfecta)⁸¹⁷ la competencia en el mercado se daría mediante la creación de nuevos productos de valor agregado. La competencia se podría dar de múltiples formas como lo pudiera ser en precio y calidad en los servicios. En ese sentido, resulta por demás gratuito afirmar que la negativa de trato imputada a DUN ha tenido como efecto la falta de innovación en productos de IC en el sector de PM.

Por lo que respecta al incremento sostenido de los precios, éste no puede ser visto como un efecto de la conducta investigada. Es decir, el no intercambio de la BPD no genera que exista un incremento de precios en el mercado por los dos participantes. En todo caso, esto puede ser el efecto de diversos factores del mercado que la AI es omisa en considerar. Por ejemplo, ello puede obedecer a un incremento en los costos, entre otros factores. O bien, ello podría ser el resultado de un paralelismo consiente⁸¹⁸ entre los agentes económicos, lo cual además de no

⁸¹⁴ DUN señaló la página 321 del DPR.

⁸¹⁵ DUN señaló la página 321 del DPR.

⁸¹⁶ DUN señaló la página 321 del DPR.

⁸¹⁷ DUN indicó: "Hipotético utilizado como referencia en la teoría económica."

⁸¹⁸ DUN indicó en la nota al pie correspondiente lo siguiente: "Esta justificación para el alza de precios se menciona únicamente de manera ejemplificativa de las múltiples razones -distintas a la supuesta negativa de trato de DUN- que pueden existir para que se hubiere dado un alza generalizado en los precios. En consecuencia, la manifestación en cuestión no puede ser tomada como un reconocimiento de DUN respecto que esto es el caso. Asimismo, para acreditar la existencia de un paralelismo consiente es necesario acreditar a convergencia de un considerable número de factores."

ser una conducta que encuadre dentro del ámbito de aplicación de la LFCE, es una circunstancia ajena a la conducta que nos ocupa (negativa de trato).

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁸¹⁹

En el DPR se plantea que la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado es *"otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la comercialización de productos de IC de PM"*⁸²⁰ puesto que una negativa de trato por un agente dominante en el mercado puede dar lugar a la limitación del surgimiento de un nuevo producto o puede imposibilitar la innovación.⁸²¹

Asimismo, en el DPR se señala que CC solicitó la compartición de la BPD a DUN, sin embargo, durante doce meses, periodo en que DUN no compartió la IC para la elaboración de los RC *"CC estuvo impedido para ofrecer producto alguno que incluyeran información de todo el mercado en el segmento de PM"*,⁸²² lo cual, indica la necesidad de contar con la BPD. Incluso, el propio DUN reconoce la necesidad de la BPD de CC para elaborar RC de PM *"DUN requiere de la información de la BPD de CC un mayor número de veces para elaborar sus RC de PM (...) DUN, lejos de desplazar a CC, necesita de su BPD para elaborar un número bastante significativo de sus RC de PM"*.⁸²³

Adicionalmente, en el DPR se señala que, entre otros beneficios derivados del debido intercambio de IC, se fomentaría una efectiva competencia entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor gama de productos de valor agregado,⁸²⁴ por lo que lo manifestado por DUN relativo a que la competencia se podría dar de múltiples formas como lo pudiera ser en precio y calidad en los servicios, reafirma lo señalado en el DPR.

Finalmente, en el DPR se señala que DUN no cuenta con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC de PM.

Por lo anterior, sumado a lo expuesto con anterioridad en el apartado B.5., es posible sostener que la conducta imputada se tradujo en un costo más elevado para los consumidores, como se señaló en el DPR negar el acceso a la BPD de PM a CC no ha respondido a necesidades reales de los consumidores de los productos, ni se ha traducido en una mejora para los USUARIOS de DUN, sino que puede considerarse como una estrategia anticompetitiva.⁸²⁵

⁸¹⁹ Páginas 127 a 129 de la VISTA DUN.

⁸²⁰ La AI señaló la página 120 del DPR.

⁸²¹ La AI remitió al siguiente documento publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: OECD (2007), *"Refusals to deal", Policy Roundtables*, pp. 190 Disponible en: <https://www.oecd.org/daf/43644518.pdf>

⁸²² La AI señaló la página 304 del DPR.

⁸²³ La AI señaló la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸²⁴ La AI señaló la página 321 del DPR.

⁸²⁵ La AI señaló la página 318 del DPR.

El argumento de DUN resultan infundados, por una parte, y fundados, pero insuficientes, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Al concluir el análisis que se incluye dentro del apartado "B. Otras manifestaciones de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de productos de información crediticia" del DPR, se indica lo siguiente:

*"Por lo anterior, se observa que impedir sustancialmente el acceso de CÍRCULO DE CRÉDITO al mercado de la recopilación y procesamiento de información crediticia de las PM y, también, de la comercialización de los productos de información crediticia de este segmento ha tenido como efecto, no sólo que se limite el crecimiento de CÍRCULO DE CRÉDITO en ambos mercados, sino también que DUN & BRADSTREET no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de información crediticia de PM."*⁸²⁶

De este modo, en el DPR se explica que el objeto o efecto de la conducta imputada ha sido impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y, también, al MERCADO RELACIONADO. Lo anterior, habría producido a su vez, de acuerdo con lo señalado en el DPR otros efectos, en particular, que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC de PM.

En consecuencia, el argumento de DUN según el cual "la falta de innovación no se encuentra prevista dentro de los objetos o efectos que debe de tener una práctica para ser considerada como monopólica relativa", es infundado, toda vez que el objeto o efecto imputado, esto es, impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM, así como al MERCADO RELACIONADO, sí constituye un supuesto de hecho que es posible encuadrar dentro de la LFCE.

Al respecto, en términos del artículo 54 de la LFCE se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 56 de dicho ordenamiento legal, sea llevado a cabo por uno o más agentes económicos que en lo individual o conjuntamente tengan PS en el mismo MR en que se realiza la práctica, y cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.

Sin perjuicio de lo anterior, el DPR no contiene elementos que constituyan un nexo causal entre la negativa a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual con CC y el aumento de precios de los productos de IC de PM y la insuficiente oferta de servicios de valor agregado por DUN. En consecuencia, resultan fundados los argumentos tendientes a señalar que: (i) resultan gratuitos los señalamientos contenidos en el DPR relativos a la existencia de un incremento continuo de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS como resultado de la ausencia de competencia en la comercialización de productos de PM; (ii) resultan gratuitos los señalamientos contenidos en el DPR respecto a que el efecto de impedir

⁸²⁶ Página 325 del DPR.



47723

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

el acceso a CC a los mercados de recopilación y procesamiento de IC de PM y la comercialización de productos de IC de este segmento ha generado que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC; y (iii) que el incremento sostenido de los precios puede ser el efecto de diversos factores del mercado que la AI fue omisa en considerar.

No obstante, dichos argumentos resultan insuficientes para desvirtuar el análisis contenido en el DPR respecto de la PMR imputada. En particular, por las razones expuestas en los siguientes párrafos, resultan infundados los argumentos de DUN tendientes a señalar que: (i) la AI asume, pero no justifica, que el intercambio de las BPD de PM daría pie a que CC ofreciera nuevos productos de valor agregado; (ii) la AI olvida que para la creación de nuevos productos las SIC requieren de BD que cuenten con información positiva y negativa de los clientes y, en ese sentido, la BPD ni siquiera resulta idónea (según DUN) para la creación de dichos productos; y (iii) resulta gratuita la manifestación contenida en el DPR tendiente a señalar que el intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría una efectiva competencia entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor gama de productos de valor agregado.

Desarrollar su propia BPD le permite a cada SIC: (i) ofrecer más productos de valor agregado; (ii) obtener más ingresos por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de información; y (iii) que sus USUARIOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado de un HIT, lo que las vuelve más atractivas para sus clientes.

No obstante, la negativa de trato imputada a DUN obstaculiza el crecimiento de la BD de PM de CC, conforme a lo siguiente: (i) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI; (ii) además de que el intercambio puntual es más costoso y en este caso no se lleva a cabo íntegramente (ya que DUN no le proporciona a CC la información completa), la información proporcionada a través del intercambio puntual [REDACTED] B

[REDACTED] B y (iii) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

Que CC sea menos atractivo para los USUARIOS con motivo de la negativa de trato imputada a DUN es importante, entre otras razones, porque para incluir información positiva a su BD, las SIC deben recopilar IC de manera directa de los USUARIOS. De este modo, la conducta imputada: (i) obstaculiza la integración de la BD de PM de CC tanto por lo que hace a la información negativa como a la información positiva; (ii) incrementa el grado de dependencia o necesidad que tiene CC respecto de DUN (y en particular, del intercambio puntual requerido para elaborar el RC); e (iii) impide a CC contar con mecanismos o alternativas para poder ofrecer productos de valor agregado que resulten atractivos para los USUARIOS, toda vez que [REDACTED] B

[REDACTED] B que contengan toda la información disponible en la industria.

Eliminado: dos renglones, veintitún palabras



Adicionalmente, como se explica en los apartados “La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios”, “Ganancias en eficiencia” y “VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS” de la presente resolución, los cuales deberán tenerse por reproducidos en esta sección para evitar repeticiones innecesarias, DUN no logra acreditar que la obligación de intercambiar IC entre DUN y CC genere condiciones para que se realice el *free-riding* o se generen restricciones a la inversión y la generación de más y mejores productos. Por el contrario, como se indica en el DPR, la interconexión permite elaborar RC y productos de valor agregado que contengan toda la información disponible en la industria, situación que contribuye a ampliar el otorgamiento de créditos al facilitar el proceso de su otorgamiento y al reducir el costo financiero de este proceso; así como a mejorar la asignación, manejo y control del riesgo crediticio.

E. GANANCIAS EN EFICIENCIA

DUN manifestó:⁸²⁷

En relación a lo señalado previamente respecto de la figura de negativa de trato y las consideraciones sobre el objeto y efecto de la conducta, se señala que el no intercambio de nuestra BPD de PM y del verdadero SEGMENTO CO genera ganancias en eficiencias que inciden favorablemente en el proceso de competencia superando los posibles efectos anticompetitivos, porque tiene como consecuencia inhibir el *free-riding* por CC a la inversión que he hecho para contar con una BD más completa y fiable que la de CC.

Se insiste que CC se encuentra en plena capacidad de acrecentar su BD y mejorar la calidad de la misma. No obstante, en lugar de invertir (asumiendo el correspondiente riesgo) prefiere aprovecharse de la inversión que he hecho. Dicha cuestión tiene efectos perniciosos para la competencia económica, puesto que, en lugar de favorecerla, la afecta al desincentivar la inversión para la mejora de los productos ofrecidos. Ello ya que:

- Un agente preferiría no invertir y en cambio preferiría aprovecharse de la inversión de su competidor (i.e. hacer *free-riding*).
- El competidor, a su vez, también optará por no invertir, ya que la inversión será aprovechada por su competidor.

En virtud de lo anterior, es que se dice que la supuesta negativa de trato da como lugar una ganancia en eficiencia consistente en evitar el problema de *free riding*, y dicha ganancia supera cualesquier efectos anticompetitivos que se pudieran generar con la negativa de trato.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente:⁸²⁸

⁸²⁷ Páginas 132 a 134 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸²⁸ Página 129 de la VISTA DUN.

DUN se limita a afirmar y no aporta evidencia que respalde su dicho, solo plantea posibilidades teóricas y no logra acreditar que la ganancia en eficiencia que plantea “supera cualesquier efectos anticompetitivos que se pudieran generar con la negativa de trato”.

Aunado a lo anterior, la AI solicita se tengan reproducidas como si a letra se insertasen, los argumentos expuestos previamente.⁸²⁹

Los argumentos de DUN resultan **infundados**, por una parte, e **inoperantes**, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:

El artículo 55 de la LFCE establece que las PMR no se sancionaran, por excepción, cuando el agente económico demuestre que generan ganancias e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia, superando sus posibles efectos anticompetitivos. Asimismo, dichas ganancias en eficiencia deben traducirse en un bienestar al consumidor.

Si bien dicho precepto no establece la manera en que dichas ganancias habrán de demostrarse, no pasa desapercibido que el artículo 14 de las DR, referente a la acreditación de ganancias en eficiencias en casos de concentraciones señala lo siguiente:

“[...] se considera que una concentración logrará una mayor eficiencia e incidirá favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia, cuando el Agente Económico demuestre que las ganancias en eficiencia del mercado que se derivarán específicamente de la concentración, superarán de forma continuada sus posibles efectos anticompetitivos en dicho mercado y resultarán en una mejora al bienestar del consumidor.

[...]

Para que estas ganancias en eficiencia sean tomadas en cuenta por la Comisión, los notificantes deben presentar análisis, estudios económicos, peritajes u otros documentos que demuestren que dichas ganancias incrementarán el bienestar del consumidor.” [Énfasis añadido].

Del artículo transcrito se desprende que:

1. Las ganancias en eficiencia deben ser específicas de la concentración (o del acto generador).
2. El agente económico debe presentar análisis, peritajes, estudios económicos u otros documentos que permitan demostrar que dichas ganancias en eficiencia incrementarán el bienestar del consumidor.
3. Las ganancias en eficiencia deben superar los efectos anticompetitivos.

Pese a la diferencia en la naturaleza del procedimiento de concentraciones y del procedimiento a través del cual se sancionan PMR (siendo el primero de carácter preventivo y el segundo de

⁸²⁹ Dichos argumentos se incluyen dentro del apartado de la presente resolución denominado “La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros”.

carácter punitivo), se observa que los principios que rigen el análisis de ganancias en eficiencia son similares en ambos casos.⁸³⁰

A continuación, se analizan las manifestaciones de DUN a la luz de lo señalado previamente:

DUN afirma que el no intercambio de los bienes de DUN tiene como consecuencia inhibir el *free-riding* por CC a la inversión de DUN para contar con una BD más completa y fiable que la de CC. No obstante, como se explica en los apartados "*La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios*", "*La falta de innovación no es evidencia de la falta de competencia. Además, obligar el intercambio de la BPD, que no es el insumo primario para generar productos de IC, puede llevar a que las SIC inviertan e innoven menos en aspectos relacionados a la BPD*" y "*VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS*" de la presente resolución, DUN no acredita que la obligación de intercambiar IC entre DUN y CC genere condiciones para que se realice el *free-riding* o se generen restricciones a la inversión de DUN. Lo señalado en dichos apartados deberá tenerse por reproducido en esta sección para evitar repeticiones innecesarias.

Por otra parte, como se indicó previamente, las ganancias en eficiencia deben ser específicas de la conducta, por lo que procede evaluar en qué medida la conducta es necesaria para obtenerlas y cómo es que dichas ganancias en eficiencia no podrían generarse u obtenerse por medios menos lesivos a la competencia.

En este sentido, es importante tener en cuenta que además de no acreditar que el intercambio entre DUN y CC genere condiciones para que ocurre el fenómeno de *free-riding* o se generen restricciones a la inversión, DUN tampoco acredita que la negativa a intercambiar la BPD de PM y el SEGMENTO CO sea la vía o el mecanismo para proteger su inversión que resulte menos lesivo para el proceso de competencia económica.

Por otra parte, DUN tampoco explica de qué modo las ganancias en eficiencia que genera la negativa de trato imputada pueden ser verificadas a través de algún medio de prueba que permita cuantificar e identificar que dichas ganancias incrementarían el bienestar del consumidor.

El señalamiento de DUN consta de una simple manifestación gratuita, la cual no se encuentra acompañada de sustento alguno, lo que impide que esta autoridad cuente con evidencia concreta de que la conducta en específico sea un mecanismo efectivo e idóneo para evitar el

⁸³⁰ Tanto el artículo 55 de la LFCE como el artículo 14 de las DR refieren que corresponde al agente económico acreditar que las ganancias en eficiencia superan los efectos anticompetitivos de la conducta analizada (PMR o concentración). Asimismo, en ambos casos se indica que dichas ganancias en eficiencia deberán incrementar el bienestar del consumidor. Lo anterior también es consistente con lo que acontece en la legislación de la Comunidad Europea, en donde, pese a que las ganancias en eficiencia para concentraciones y para abuso de PS están tratadas en documentos diferentes, convergen en los elementos solicitados para acreditarlas. Véanse los documentos de la Comisión Europea: "*Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes*" y "*Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas*".

supuesto *free-riding* por CC y que esto a su vez permita a DUN contar con una BD más fiable y completa.

Al no acompañar sus manifestaciones de estudios económicos u otros documentos que demuestren que dichas ganancias incrementarán el bienestar del consumidor, los señalamientos de DUN carecen de sustento.

Por lo que hace a los argumentos relacionados con la forma en que las supuestas ganancias en eficiencia superan los efectos anticompetitivos, se indica lo siguiente:

La verificación de este elemento se realiza comúnmente a través de un análisis cuantitativo;⁸³¹ para ello habría que demostrar cuantitativamente que los beneficios para el consumidor derivados de la conducta superarán sus efectos anticompetitivos, de manera que el resultado neto sea una mejora en la eficiencia del mercado.

La evaluación de este punto implica, por ejemplo, la realización de un ejercicio contrafactual en el que se coteje un escenario en el que no existe la conducta (o existe a través de formas menos dañinas a la competencia) con el escenario real en el cual se ha llevado a cabo dicha conducta, de manera que pueda evaluarse de algún modo la presencia de las ganancias en eficiencia invocadas.

Como se indicó previamente, DUN no acredita que la obligación de intercambiar IC entre DUN y CC genere condiciones para que se realice el *free-riding* o se generen restricciones a la inversión de DUN. Asimismo, en lugar de presentar elementos de convicción o argumentos que permitan evaluar de qué forma las ganancias en eficiencia invocadas superan los efectos anticompetitivos, DUN se limita a afirmar que su conducta inhibe el *free-riding* por CC a la inversión que ha realizado para contar con una BD más confiable y completa, sin sustentar dicha afirmación con elementos cuantitativos (o cualitativos) que permitan evaluar la teoría del daño en presencia de ganancias en eficiencia.

IV. VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Toda vez que como se señaló en el apartado de “III. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE” de la presente resolución, algunos de los argumentos señalados por TUM, SEPZ y MAGR resultaron fundados y, en su conjunto, suficientes para desvirtuar las conclusiones a las cuales arribó la AI en el DPR respecto de la comisión de la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, no se considera necesaria la valoración de los elementos de convicción recabados durante la investigación en los que se sustentó la imputación relativa a la comisión de dicha PMR o la participación de determinados agentes económicos y PF en ésta al propiciarla o participar de manera directa en su comisión.

De igual forma, no se considera necesario valorar las pruebas ofrecidas por TUM, SEPZ, MAGR, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER, BANORTE, HSBC y SCOTIABANK para

⁸³¹ Cuantitativa en el sentido de demostrar mediante técnicas económicas tales como el cálculo de la variación del bienestar del consumidor, el GUPPI o una simulación del mercado que la conducta supera o compensa los daños a la competencia.

desvirtuar dichas imputaciones, pues esto resultaría ocioso ya que la valoración de estas no cambiaría las conclusiones antes apuntadas.

No pasa desapercibido que en el Dictamen pericial presentado por BANAMEX realizó diversas manifestaciones respecto de la imputación relativa a la probable PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, señalando que: “[...] la COFECE tiene la obligación constitucional y legal de recibir y analizar toda la información que le sea provista por los agentes económicos respecto de un asunto en particular, a efecto de encontrar la verdad jurídica de los mercados a efecto de mejor proveer para garantizar la libre concurrencia y competencia económica [...]”⁸³²

Al respecto la AI solicitó en sus ALEGATOS que: “[...] las respuestas del perito al análisis de cuestiones que no se relacionen con BANAMEX no sean tomadas en cuenta en la resolución que, en su momento, emita el Pleno”.⁸³³

En este sentido, como se indicó previamente en la sección “VI. Conclusiones” del apartado “III. I Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE”, las manifestaciones o pruebas de BANAMEX relacionadas con la imputación relativa a la probable PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, no se analizan en la presente resolución, toda vez que como reconoció el propio BANAMEX “no se trata de una conducta imputada [a BANAMEX]”.

Al respecto, en términos de los artículos 81 y 83, fracción I, de la LFCE, únicamente el emplazado, esto es, a quien se considera probable responsable por la realización de una práctica monopólica o una concentración prohibida, puede manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio que se tramita en términos de los artículos 80, 81, 82 y 83 de la LFCE, siendo que BANAMEX no fue emplazado y no es probable responsable de cometer o participar de forma alguna en la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, por lo que no es parte ni cuenta con interés jurídico para ofrecer pruebas al respecto.

Lo anterior máxime cuando las conclusiones a las que llegué este PLENO respecto de la acreditación o no de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, en nada trascienden en la imputación realizada en contra de BANAMEX, por lo que el dictamen pericial presentado por BANAMEX no se analizará en esta sección.

A mayor abundamiento, la obligación de la COFECE de analizar la información que le sea provista por los agentes económicos a efecto de encontrar la verdad jurídica debe entenderse dentro de los límites y reglas procesales que prevén la LFCE y las DR. Al respecto, este PLENO únicamente debe analizar las pruebas aportadas por aquellas personas que cuentan con interés jurídico para ofrecerlas y que son admitidas y desahogadas de conformidad con la normativa de competencia.

Por lo anterior, en la presente sección se analizarán las pruebas existentes en el EXPEDIENTE relacionadas con la imputación de la conducta prevista en la fracción V del artículo 56 de la

⁸³² Página 13 del Dictamen pericial presentado por BANAMEX.

⁸³³ Folio 48844.

LFCE, cuyo análisis se dividirá de la siguiente forma: i) los elementos de convicción que sirvieron como base para formular la imputación presuntiva contenida en el DPR en contra de DUN; y ii) las pruebas ofrecidas por dicho emplazado, admitidas y desahogadas por la DGAJ. Asimismo, se refieren los argumentos formulados por la AI en contra de las pruebas ofrecidas por DUN que fueron admitidas.

Respecto de los argumentos vertidos por DUN que combaten las afirmaciones realizadas en el DPR y los medios de convicción en los cuales se sustenta, se remite a la respuesta a los argumentos correspondientes para evitar repeticiones innecesarias.

Reglas para la valoración de las pruebas

El artículo 121 de la LFCE señala: “En lo no previsto por esta Ley o en las Disposiciones Regulatorias, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles”. Así, cuando no exista disposición alguna dentro de la LFCE o DR referente a valoración de pruebas, se realizará la valoración de estas de conformidad con lo dispuesto en el CFPC.

En este sentido, en términos del artículo 84 de la LFCE, este PLENO goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas, determinar el valor y alcance de éstas y fijar el resultado final de dicha valoración.

Ahora bien, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de convicción enunciados en el presente capítulo, deberá entenderse, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, que éstos son valorados teniéndose por señalados en cada uno de ellos los artículos y los criterios judiciales referidos en este apartado, dependiendo de la clasificación que se haya dado a los mismos, precisando que aquellos obtenidos durante la etapa de investigación, adicionalmente serán valorados en términos del artículo 60 de las DR.

Finalmente, los medios de convicción referidos como documentales públicas, documentales privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la ciencia, que hayan sido presentados por DUN, probarán plenamente en su contra, de conformidad con el artículo 210 del CFPC.⁸³⁴

⁸³⁴ Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJP siguientes: (i) “**COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE.** No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: ‘La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia...’ El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, ‘... de cualquier cosa...’ Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que

Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:

i. Documentos públicos

A las pruebas valoradas en el presente capítulo que constituyen documentales públicas en términos de los artículos 93, fracción II, y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio que otorgan los artículos 130, 202 y 205 *in fine* de ese ordenamiento. En este aspecto, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Ahora bien, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una **documental pública** se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

ii. Documentos privados

En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo que en términos de los artículos 93, fracción III, 133 y 136 del CFPC constituyen documentales privadas, se les da el valor probatorio que le otorgan los artículos 203, 204, 205, 208, 209 y 210 del CFPC.

el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionarían otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad [Énfasis añadido]". Jurisprudencia I.4º C. J/5; 9º. Época; TCC; SJF; III, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 203516; (ii) "**COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquígráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el juicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz [Énfasis añadido]". Tesis Aislada VII.2º A.T.9 K; 9º. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192 931; y (iii) "**DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE.** Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio [Énfasis añadido]". Tesis Aislada VII.2º A.T.9 K; 9º. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192 931.

En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una documental privada se entenderá que le corresponde el valor establecido en los artículos referidos.

iii. Copias simples o impresiones

A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen copias simples o impresiones, en términos de lo establecido por los artículos 91 de las DR y 93, fracciones VII y 188 CFPC, les corresponde el valor probatorio que otorgan los artículos 207 y 217 del CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de copias simples o impresiones se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

iv. Elementos aportados por la ciencia que constan o que obran en medios electrónicos

A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen elementos aportados por la ciencia correspondientes a información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, en términos de lo establecido por los artículos 91 de las DR y 93, fracciones VII y 188 CFPC, les corresponde el valor probatorio que otorgan los artículos 210-A y 217 del CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de un elemento aportado por la ciencia se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

En este sentido, en términos del artículo 210-A del CFPC, para valorar la fuerza probatoria de la información contenida en medios electrónicos deberá considerarse: i) primordialmente la fiabilidad del método por el que fue generada, comunicada, recibida o archivada; ii) si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; y iii) la posibilidad de que la información sea accesible para su ulterior consulta.

Por otra parte, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 217 del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculados con otros elementos del EXPEDIENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida, razón por la cual constituye un mero indicio, salvo que resulte contrario a los intereses de las emplazadas que lo hayan presentado.

v. Confesiones

Varios documentos que se analizan en el presente caso implican una confesión respecto de quienes los presentaron, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción I, y 95 del CFPC, se les confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 199, 200 y 210 del CFPC, respecto de los hechos que resulten contrarios a los intereses de los mismos. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

vi. Declaraciones

Esta autoridad advierte que parte del caudal probatorio que obra en el EXPEDIENTE se refiere a la comparecencia de MAGR realizada durante la investigación en términos de lo señalado en los artículos 67, 68 y 69 de las DR.

Mediante dicha comparecencia se obtuvieron declaraciones que implican hechos de terceros o de las personas morales con las cuales tiene una relación de trabajo. De tal forma, con fundamento en el artículo 101 de las DR, las declaraciones se valoran aplicando las reglas previstas para la prueba testimonial, por lo que tienen el valor que establecen los artículos 215 y 216 del CFPC.

En específico, el artículo 215 del CFPC prescribe que la prueba testimonial quedará para su valoración al prudente arbitrio de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo establecido en las siguientes fracciones; específicamente, señala que los testigos:

- I. Convengan en lo esencial del acto que refieran, aunque difieran en los accidentes;
- II. Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que depongan;
- III. Por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto;
- IV. Por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad;
- V. Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias de otras personas;
- VI. Su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales.
- VII. No hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y
- VIII. Den fundada razón de su dicho.

En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una declaración(es) se entenderá que le corresponde el valor establecido en este apartado.

vii. Pericial

DUN ofreció la prueba pericial en economía, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción IV y 143, del CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito en los artículos 144 y 211 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una pericial se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

viii. Instrumental de actuaciones, presuncionales e indiciaria

Asimismo, DUN ofreció la prueba instrumental de actuaciones en la CONTESTACIÓN DUN, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracciones II, III y VII, 129, 130, 133 y 188 del CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito en los artículos 200 a 205, 209, 210, 211 y 217 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta

resolución se indique que se trata de una instrumental de actuaciones se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

De igual forma, ofreció la prueba presuncional o la prueba indiciaria en la CONTESTACIÓN DUN, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción VIII, y 190 del CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito en el artículo 218 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una prueba presuncional o indiciaria se entenderá que le corresponde el valor establecido en dicho artículo.

Al respecto, se le indica a DUN que toda vez que las pruebas referidas en los dos párrafos anteriores no tienen entidad propia, dependen de las demás pruebas del EXPEDIENTE,⁸³⁵ por lo

⁸³⁵ Al respecto, resultan aplicables las tesis emitidas por el PJJ: (i) "**PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.** La prueba instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la actividad jurisdiccional". Tesis Aislada I.4º.C.70 C.; 9º. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, diciembre de 2004; Pág. 1406; Registro: 179818; (ii) "**PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR.** La prueba 'instrumental de actuaciones' propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados". Tesis Aislada I.6º.T.21 L (10º.); 10º. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1948; Registro 244101; (iii) "**PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.** Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos". Tesis Aislada XX. 305 K.; 8º. Época; T.C.C.; SJF; XV, enero de 1995; Pág. 291; Registro: 209572; y (iv) "**PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD.** Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como 'prueba presuncional', derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero si los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero si resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia

que únicamente tienen el alcance de probar de manera adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las pruebas en la presente resolución.

ix. Hechos notorios

Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un hecho notorio para esta autoridad deberá estarse a lo señalado en el artículo 100 de las DR. Asimismo, deberá entenderse que los documentos emitidos por esta autoridad; así como la información contenida en páginas de Internet, son hechos notorios cuya demostración no requiere mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena únicamente respecto de que la información contenida en dichos documentos o en las páginas de Internet está publicada en determinados términos.⁸³⁶

Asimismo, las publicaciones y el contenido del DOF son hechos notorios.⁸³⁷

entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad". Jurisprudencia I.Io.P. J/19; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pág. 2982; Registro: 166 315.

⁸³⁶ Al respecto, resultan aplicables, por analogía, las siguientes tesis: "**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.** Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de disseminación y obtención de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Jurisprudencia XX.2º. J/24.; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009; Pág. 2470, Registro No. 168 124 y "**PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.** Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Tesis aislada L3o.C.35 K (10ª.); 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, noviembre de 2013; Pág. 1373; Registro No. 2 004 949.

⁸³⁷ Al respecto, es aplicable el siguiente criterio: "**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU**

Señalado lo anterior, se procede a realizar el análisis de la evidencia que existe en el EXPEDIENTE.

IV.1. Elementos de convicción de la investigación

En la presente sección se analizarán los elementos de convicción que fueron recabados durante la investigación del EXPEDIENTE, y en virtud de los cuales se sustentó la probable responsabilidad de DUN por la comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Previo al análisis de los elementos de convicción referidos, se indica que DUN no objetó en cuanto a su valor probatorio los elementos de convicción referidos en el DPR.

En este sentido, en términos del artículo 203 del CFPC,⁸³⁸ aquellos documentos privados provenientes de agentes económicos diversos prueban plenamente en contra DUN al no haber sido objetados.

Adicionalmente, DUN no combate: (i) ser un agente económico; (ii) haber omitido intercambiar con CC su BPD; y (iii) haber omitido proporcionar cierta información que obra en su BD a CC para la elaboración del RCI.

EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado". Tesis Aislada I.3º.C.26 K (10ª.); 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, marzo de 2013; Tomo 3; Pág. 1996; Registro: 2 003 033.

⁸³⁸ Dicho artículo refiere lo siguiente: "[...] El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta [...]".

Al respecto, el artículo 83, fracción I, párrafo segundo de la LFCE señala que: “El empleado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. [...]”, por lo que, con independencia del análisis que se realiza en el presente capítulo, se tienen por ciertos los hechos referidos.

Por su parte, DUN reconoció lo siguiente en su CONTESTACIÓN DUN, por lo que dichos elementos que forman parte de la imputación en su contra contenida en el DPR, no se encuentran combatidos y, por lo tanto, se tienen por ciertos:

“[...] suponiendo sin conceder que la provisión de información crediticia fuera un mercado, las SICs participarían como demandantes, mientras que los Usuarios como oferentes [...] las SICs también podrían participar como oferentes en esta etapa, aunque solo de manera indirecta a través de la información que les proporcionan los Usuarios [énfasis añadido]”.⁸³⁹

“La información contenida en el reporte integrado que se comparte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis de la LRSIC, se refiere a información puntual, es decir, de un solo cliente sobre el cual se emite el reporte en cuestión [énfasis añadido]”.⁸⁴⁰

“En el caso de las SIC, existe un precio de transferencia por compartir su información con otras SIC [énfasis añadido]”.⁸⁴¹

“Cada uno de los únicos dos participantes del supuesto mercado, se encuentran obligados por el artículo 36 de la LRSIC a intercambiar sus correspondientes BPD de PM con su competidor. - Asimismo, la LRSIC contempla implícitamente que dicho intercambio genera un costo para el agente que otorga su BPD de PM. Por lo tanto, la LRSIC contempla la obligación de pagar una tarifa para la realización del intercambio, [...] misma que juega un papel de contraprestación por los costos en los que incurre el agente que otorga su propia información [énfasis añadido]”.⁸⁴²

“[...] el mercado de información crediticia tiene elementos que hacen más probable que presente altas concentraciones y pocos oferentes; específicamente, economías de escala y economías de red [...] [Énfasis añadido]”.⁸⁴³

“[...] efectivamente existen economías de escala en el mercado de información crediticia en México. Asimismo, a nivel global estos mercados también presentan economías de escala, las cuales usualmente tienen pocos competidores debido a los altos costos necesarios y a que no es posible la división de estos costos entre muchos competidores [énfasis añadido]”.⁸⁴⁴

⁸³⁹ Páginas 30 y 31 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁰ Página 32 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴¹ Página 32 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴² Página 33 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴³ Página 57 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁴ Página 57 de la CONTESTACIÓN DUN.

"[...] los mercados de información crediticia generalmente tienen pocos competidores, sin que esto por sí mismo sea indicio de ausencia de debilidad en las condiciones de competencia, sino que resulta más bien una característica intrínseca de este mercado [énfasis añadido]" ⁸⁴⁵

"Estos dos elementos (economías de escala y efectos de red) son inherentes al mercado de información crediticia y deben ser considerados al momento de realizar el análisis de poder sustancial [énfasis añadido]" ⁸⁴⁶

"[...] un mercado de esta naturaleza tenderá a contar con altos niveles de concentración, pues de otra manera no es posible aprovechar las economías de escala inherentes [énfasis añadido]" ⁸⁴⁷

"Dado que el mercado de información crediticia presenta economías de escala y de red, y dado que [CC] comenzó a operar quince años después que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta [énfasis añadido]" ⁸⁴⁸

"De conformidad con la Circular 17/2014, las Entidades Financieras se encuentran obligadas a proporcionar al menos a una SIC la Información Crediticia de sus clientes de manera completa y veraz [énfasis añadido]" ⁸⁴⁹

"[...] el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la información que se comparta para el reporte integrado sea completa [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁵⁰

"[...] la BPD y el Verdadero Segmento CO constituyen planes distintos, y por tanto, la supuesta negativa de proporcionar éste último constituye una conducta distinta a la supuesta negativa de proporcionar la BPD de PM [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁵¹

"Independientemente de que el artículo 10, fracción V de la LFCE Anterior y el artículo 56, fracción V materialmente contemplen la misma disposición [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁵²

"[...] respecto diversa observación de la AI [...] consistente en que pasó un año desde la solicitud de intercambio de la BPD y la implementación de la alternativa al intercambio de la BPD, debe precisarse que dicho plazo atendió a la imposibilidad de DUN para realizar el intercambio [énfasis añadido]" ⁸⁵³

"[...] [CC] ha venido operando sin recibir el Verdadero Segmento CO [énfasis añadido]" ⁸⁵⁴

⁸⁴⁵ Página 58 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁶ Página 59 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁷ Página 59 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁸ Página 69 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁴⁹ Página 80 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁰ Página 80 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵¹ Página 81 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵² Página 82 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵³ Página 96 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁴ Página 105 de la CONTESTACIÓN DUN.

"[...] el hecho que TUM sí realice un intercambio de la BPD de PF [...] [énfasis añadido]" ⁸⁵⁵

"Es correcto que el artículo 36 de la LRSIC establece la obligación de intercambio de la BPD [...] El que no se haya dado el intercambio no obstante exista la obligación legal [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁵⁶

"El intercambio de registros negativos a través de la BPD reduce la necesidad del intercambio de forma puntual solo a la información positiva, a intercambiarse mediante el reporte integrado al que se refiere el artículo 36 Bis de la LRSIC [énfasis añadido]" ⁸⁵⁷

"Ciertamente el no intercambio de la BPD genera que se elimine una de las posibilidades para dar No Hit, y consecuentemente, se incremente la posibilidad de dar Hit (y se genere una obligación de pago a cargo de la SIC Originadora en favor de la SIC Complementaria) [énfasis añadido]" ⁸⁵⁸

CC "[...] resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un Hit al momento de realizar una solicitud de información para la elaboración de un [RCI] [énfasis añadido]" ⁸⁵⁹

"[...] el intercambio puntual de los registros para la elaboración del reporte de crédito integrado tiene un costo más elevado que el recibir la BPD. Ello en virtud de que el intercambio de información para el reporte integrado contiene información positiva y negativa, mientras que la BPD únicamente información negativa [énfasis añadido]" ⁸⁶⁰

"[...] las participaciones de mercado de DUN se han mantenido altas a lo largo del período investigado [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁶¹

"[...] los montos que Círculo de Crédito le factura a DUN son significativamente mayores que aquellos facturados por DUN a Círculo de Crédito y, además, dicha facturación ha crecido de 2013 a 2017 [...] [Énfasis añadido]" ⁸⁶²

Por último, toda vez que en el apartado de "Manifestaciones en relación al objeto o efecto de la conducta consistente en ausencia de innovación y altos precios en el mercado" de la presente resolución, algunos de los argumentos señalados por DUN resultaron fundados, no se considera necesaria la valoración de los elementos de convicción recabados durante la investigación en los que se sustentó el apartado del DPR denominado "B. Otras manifestaciones de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de productos de información crediticia".

⁸⁵⁵ Página 100 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁶ Página 108 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁷ Página 119 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁸ Página 120 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁵⁹ Página 122 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁶⁰ Página 124 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁶¹ Página 126 de la CONTESTACIÓN DUN.

⁸⁶² Página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.



49999

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

Lo anterior ya que se calificó como fundado el argumento de DUN respecto a que resultan gratuitos los señalamientos contenidos en el DPR relativos a: (i) la existencia de un incremento continuo de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS como resultado de la ausencia de competencia en la comercialización de productos de PM; y (ii) que el impedir el acceso a CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO ha generado que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los productos de IC.

A. Pruebas relativas al MR DE PM: Recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

A continuación, se analizan los elementos de convicción utilizados en el DPR para determinar que el MR DE PM es el correspondiente a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.

A.1 Fracción I del artículo 58 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras cuestiones: *"Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; [...]"*.

Al respecto:

- a. La LRSIC obliga a las ENTIDADES FINANCIERAS a proporcionar su IC conforme a un estándar establecido al menos a una SIC.
- b. El artículo 142 de la LIC establece restricciones legales que impiden a otras instituciones, además de las SIC, acceder a la IC proporcionada por los USUARIOS.
- c. Conforme al artículo 5 de la LRSIC no pueden existir oferentes de IC diversos a los USUARIOS porque violarían el secreto financiero, además de que son estos quienes principalmente otorgan créditos.
- d. En términos del artículo 36 bis de la LRSIC las SIC recopilan o se abastecen de IC, entre otras, de forma indirecta mediante la entrega puntual que se requiere para elaborar los RC.
- e. El artículo 2 de la LIC establece que, el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por las instituciones de banca múltiple y por las instituciones de banca de desarrollo; no obstante, el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito señala que el otorgamiento de crédito y otras operaciones podrán realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal para ello.
- f. Conforme a lo señalado en el numeral 1 de la CIRCULAR 17/2014 emitida por BANXICO,⁸⁶³ las IC es *"la relativa a Operaciones Crediticias que realicen las Entidades*

⁸⁶³ La CIRCULAR 17/2014 se encuentra visible en los folios 612 a 623.

Financieras con sus respectivos Clientes, la cual debe ser proporcionada en la forma y términos señalados en los formularios y demás requerimientos que establezcan las Sociedades". Por su parte, las operaciones crediticias comprenden "a los Créditos y Operaciones Análogas a los Créditos" y las operaciones análogas a las crediticias "al arrendamiento financiero, al factoraje financiero o cualquier otra operación que llegue a ser determinada con tal carácter de conformidad con las disposiciones aplicables".

Dichas disposiciones no necesitan ser probadas por ser de orden público.⁸⁶⁴

Adicionalmente, se analizan los siguientes elementos de convicción que llevaron a la AI a determinar que la IC que recopilan las SIC, correspondiente a PM, carece de sustitutos cercanos.

A.1.1 Sustitución por el lado de la demanda.

La AI sustenta la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos a una SIC en el artículo 20 de la LRSIC⁸⁶⁵ y en el artículo 2⁸⁶⁶ de la CIRCULAR 17/2014.⁸⁶⁷ De igual forma, sustenta que los USUARIOS sólo podrán obtener productos de IC cuando proporcionan su información a la SIC que les presta sus servicios (PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD) en el artículo 26 de la LRSIC.⁸⁶⁸

Asimismo, el DPR indicó que la información que entregan las autoridades fiscales a las SIC en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y la "Lista de Personas Políticamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero", no puede ser considerada como un sustituto de la IC.

Por último, el DPR sustenta que la información proporcionada por los USUARIOS a las SIC está dividida en distintas secciones, dependiendo del tipo de persona del que se trate, es decir, PF, PFAE o PM, en la CIRCULAR 17/2014.

⁸⁶⁴ Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios emitidos por el PJP: (i) "**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.** Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.** A las partes sólo les incumbe probar los hechos en que hacen consistir sus acciones o excepciones. La aplicación del derecho es función del Juzgador, esto es, decidir si el caso está o no comprendido dentro del precepto legal invocado para ejercitar la acción u oponer la excepción, máxime si precisamente la excepción se hace consistir en que el precepto no es aplicable a los hechos que el actor invoca". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁸⁶⁵ El tercer párrafo de dicho artículo señala: "Las Entidades Financieras deberán proporcionar, de conformidad con las disposiciones de carácter general que, al efecto, emita el Banco de México, la información relativa a sus operaciones crediticias, al menos, a una de las Sociedades organizadas conforme a esta Ley".

⁸⁶⁶ Dicho artículo señala: "Las Entidades Financieras que celebren Operaciones Crediticias de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable deberán proporcionar, al menos a una Sociedad, la respectiva Información Crediticia en los términos de las presentes disposiciones".

⁸⁶⁷ La CIRCULAR 17/2014 se encuentra visible en los folios 612 a 623.

⁸⁶⁸ El segundo párrafo de dicho artículo señala lo siguiente: "Las Sociedades podrán negar la prestación de sus servicios a aquellas personas que no les proporcionen información para la realización de su objeto. Para esos efectos, se considerará que una persona no proporciona información, cuando realice en forma habitual y profesional operaciones de crédito u otras de naturaleza análoga y no proporcione información sobre las mismas".

Dichas disposiciones son normas cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁸⁶⁹

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar que no existe información que pueda cumplir con la misma función que la IC proporcionada por los USUARIOS, aunado al hecho de que los demandantes (es decir, las SIC) no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes (es decir, a los USUARIOS o, en el caso del intercambio indirecto, la otra SIC), pues las ENTIDADES FINANCIERAS tienen la obligación de proporcionar la IC de sus CLIENTES al menos a una SIC.

1. **Documental Pública** consistente en el oficio [REDACTED] presentado por la CNBV en la OFICIALÍA el veintiocho de septiembre de dos mil quince.⁸⁷⁰

1 (a). Como anexo a dicho oficio la CNBV presentó la **copia simple o impresión del CONTRATO DUN Y CC,**⁸⁷¹ del cual se desprende, entre otras cosas, que: [REDACTED]

Al respecto, dicha copia simple o impresión señala lo siguiente:

“[...]

[...]

⁸⁶⁹ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) “**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.**”. Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-I, febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) “**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.**”. Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁸⁷⁰ Oficio con anexos (folios 20940 a 20973 y sus anexos 20974 a 21288) firmado por un Director General de la CNBV, en desahogo a la solicitud de información y documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-070 (folios 9014 a 9035), emitido por la DGIM el veintinueve de junio de dos mil quince en el EXPEDIENTE. En el cuerpo del oficio la CNBV señaló lo siguiente: “[...] se adjuntan al presente 63 anexos, que contienen las respuestas solicitadas en cada uno de los 63 numerales contenidos en el Anexo Único del Oficio COFECE-AI-DGIM-2015-070 que se contesta, adjuntado [sic] un Anexo 64 que incluye un Glosario de Términos” (folio 20941), reconociendo la autoría de dichas respuestas.

⁸⁷¹ Folios 21074 a 21105. El mismo contrato fue presentado durante la investigación por DUN y CC.

* *

Eliminado: cuatro párrafos, cinco renglones y siete palabras.

[...]⁸⁷²

1 (b). Como anexo a dicho oficio la CNBV presentó la copia simple o impresión del CONTRATO TUM Y CC,⁸⁷³ del cual se desprende, entre otras cosas, que: **

* *

**

. Al respecto, la cláusula cuarta de dicho contrato señala lo siguiente:

⁸⁷² Folios 21079, 21083 a 21088 y 21096.

⁸⁷³ El documento presentado por la CNBV obra a folios 21106 a 21138, por su parte CC presentó el mismo documento como anexo a su escrito presentado en la OFICIALIA el seis de junio de dos mil dieciséis, el cual da respuesta al requerimiento COFECE-AI-DGIM-2016-128 formulado por la AI, dicho anexo obra a folios 25162 a 25194.



[...] ⁷⁷⁴

2. Documental privada consistente en el ESCRITO DUN, ⁸⁷⁵ del cual se desprende que: **

**

Al respecto, TUM y

DUN manifestaron lo siguiente:

"[...]"

Transcripción de numeral 3.10- Señale cuáles son los insumos para producir los productos o servicios que distribuyen y comercializan TUM y DUN. Asimismo, señale si dichos insumos son de origen nacional o de origen extranjero.



⁸⁷⁴ Folios 21118 y 21119.

⁸⁷⁵ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "ANEXO 3.10" (folios 4217 y 4218) y el "ANEXO 6.3" (folios 5738 y 5739). En el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: "[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] ANEXO 3.10 Se señala cuáles son los insumos para producir los productos o servicios que distribuyen y comercializan las SIC. [...] ANEXO 6.3 Se proporciona información respecto a la existencia de cuotas de afiliación a las SIC. [...]", reconociendo la autoría de dichas respuestas.

* *

[...]

Transcripción de numeral 6.3- Indique si los USUARIOS de la SIC pagan una cuota por concepto de afiliación a TUM y DUN. De ser así, indique el monto de dicha cuota durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del presente oficio, la periodicidad con que se actualiza y la metodología utilizada para actualizarla.

* *

[...] ⁸⁷⁶

2 (a). Asimismo, como anexo al ESCRITO DUN, TUM y DUN exhibieron la documental pública ⁸⁷⁷ consistente en el quinto testimonio, quinto en su orden, del instrumento notarial número ciento treinta y dos mil quinientos cuarenta, otorgado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número ciento tres del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el seis de enero de dos mil diez, del cual se desprende que el objeto social de DUN es el siguiente: “La sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al [HC] de personas morales y personas físicas con actividad empresarial, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes E.N.R., como dichos términos se definen en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, incluyendo la prestación del servicio de calificación de créditos o de riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como otros servicios análogos y conexos que autorice la [SHCP], oyendo la opinión del [BANXICO] y de la [CNBV]” ⁸⁷⁸

2 (b). De igual manera, como anexo al ESCRITO DUN, TUM y DUN presentaron la copia simple o impresión del CONTRATO MARCO DUN, del cual se desprende entre otras cosas: (i)

* *

**

Al respecto, el CONTRATO MARCO DUN refiere lo siguiente:

“[...]

**

⁸⁷⁶ Folios 4217, 4218, 5738 y 5739.

⁸⁷⁷ Folios 2677 a 2766. Dicho instrumento notarial fue proporcionado por TUM y DUN como parte de la respuesta 1.7 del ESCRITO DUN relativa a que: “Proporcione copia certificada de las actas constitutivas de TUM y DUN y de las escrituras públicas que contengan reformas a los estatutos sociales o, en su caso, de la escritura que contenga sus estatutos sociales vigentes a la fecha de emisión del presente oficio”.

⁸⁷⁸ Folios 2681 y 2682 y 2715 y 2716.



Eliminado: cuatro párrafos y seis palabras.

[...]”⁸⁷⁹

2 (c). Asimismo, como parte del escrito de veinte de mayo de dos mil quince,⁸⁸⁰ TUM y DUN anexaron el elemento aportado por la ciencia consistente en un disco compacto⁸⁸¹ que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato “xls” denominado “8.6 Consolidado”, del cual se desprende el número de USUARIOS afiliados a DUN en cada mes desde enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince.

3. Copia simple o impresión de una sección del documento denominado “TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN

⁸⁷⁹ Folios 5567 y 5571. Las definiciones transcritas respecto de la “Base de Datos” y la “Base de Datos D&B” coinciden con las que se observan en el folio 5698 que forma parte del “Contrato de Prestación de Servicios de fecha [REDACTED] celebrado entre [DUN] y [...] [REDACTED]”.

⁸⁸⁰ Al respecto, en el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: “[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] ANEXO 8.6 Se proporcionan estadísticas mensuales durante el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento respecto al número de créditos registrados, número de reportes emitidos, número de CLIENTES con historial y número de reportes facturados, entre otros. [...]”, reconociendo el contenido de dicho anexo.

⁸⁸¹ Folio 5802.

EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS⁸⁸², de la cual se desprende un pronunciamiento respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (ii) una SIC necesita tener una base mínima de usuarios que provean los datos y compren los RC:

“[...]

3.4.8 Estructura y concentración del segmento de [IC]

3.4.8.1 Niveles de concentración a nivel internacional

El sector de [IC] exhibe efectos de red, pues al agregar más usuarios-proveedores de datos se incrementa el valor de la [IC] para todos los participantes. Una SIC necesita tener una base mínima de usuarios que provean los datos y compren los reportes. Asimismo, existen economías de escala crecientes, al menos en un rango de tamaños, dictadas por costos fijos y hundidos necesarios para comenzar la producción de reportes crediticios y servicios de valor agregado, y por la experiencia mínima para comenzar a operar y garantizar la continuidad del servicio. Lo anterior, sin embargo, no permite concluir que el sector es un monopolio natural, sino, a lo más, que tiene tendencias al oligopolio de un escaso número de participantes.⁸⁸³

[...] [Énfasis añadido]”.⁸⁸⁴

Dicho estudio además es un hecho notorio para esta autoridad por tratarse de información que se encuentra en los registros y en la página de Internet de la COFECE.⁸⁸⁵

4. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁸⁸⁶ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce por BANXICO,⁸⁸⁷ que contiene, entre otras, una carpeta denominada “3.4 Sociedades de información crediticia” dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada “DOCUMENTOS” en la que se advierte la carpeta “Artículos de investigación” en las que obra el documento electrónico en formato “pdf” con nombre de archivo “Mecanismos para compartir información”. Dicho archivo contiene el documento titulado “MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA”,⁸⁸⁸ del cual se desprende un pronunciamiento de que existen economías de red en el mercado de IC, las cuales provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número de suscriptores a la misma.⁸⁸⁹

⁸⁸² Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE (folios 27246 y 27247), y la certificación respectiva fue emitida por el titular de la AI el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).

⁸⁸³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: “Negrin (2001)”.

⁸⁸⁴ Folio 27276.

⁸⁸⁵ A saber: <https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/ResumenEjecutivo26-09-14.pdf#pdf>. Al respecto, dicho documento fue consultado el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.

⁸⁸⁶ Folio 513.

⁸⁸⁷ Folios 482 y 483.

⁸⁸⁸ Negrin, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05, Dirección General de Investigación Económica, Banxico.

⁸⁸⁹ “[...] aún si hubiera posibilidad de acuerdos para intercambiar información directamente entre las distintas instituciones crediticias, resulta más eficiente que las instituciones asociadas proporcionen sus respectivas bases de datos a un buró de crédito para aprovechar las economías de red de la industria [en el documento se advierte una nota al pie que señala “Las economías de red provienen de la existencia de externalidades positivas. El principio de la externalidad es que el valor de

5. **Elemento aportado por la ciencia** consistente en el disco compacto⁸⁹⁰ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,⁸⁹¹ que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "Anexo 8.3", del cual se desprende el número de USUARIOS de CC que adquirieron algún producto para PM de septiembre de dos mil doce a marzo de dos mil quince.

6. **Elemento aportado por la ciencia** consistente en el disco compacto⁸⁹² que obra como anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por TUM y DUN,⁸⁹³ que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario", del cual se desprende la cantidad de USUARIOS que por lo menos adquirieron un producto para PM de DUN de enero de dos mil doce a marzo de dos mil quince.

7. **Documental privada** consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,⁸⁹⁴ del cual se desprende que:

B

B

Al respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

"[...]"

la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número de suscriptores a la misma. Puesto que la información que los diversos otorgantes de crédito poseen es complementaria, este tipo de externalidades se presenta en la formación de bases de datos". [...] un usuario potencial que busca suscribirse a un buró, cuando existen varias alternativas. Suponiendo que las cuotas que los burós cobran son similares, que tienen el mismo tipo de especialización, y que los reportes de los burós son homogéneos, el usuario optará por aquel buró que tenga una base de datos más amplia pues los beneficios potenciales son proporcionales al tamaño de la base de datos". Páginas 13 y 15 de dicho documento.

⁸⁹⁰ Folio 6034 bis.

⁸⁹¹ Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM-2015-028 (el 'Oficio') y [...] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...] 8.3 [...]".

⁸⁹² Folio 6142.

⁸⁹³ Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios 6142 a 6191. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Acuerdo de Prórroga, se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: [...] ANEXO 8.3 Se proporciona información respecto a los reportes vendidos, montos facturados, precios y descuentos." (folios 6138 y 6139), reconociendo el contenido de dicho anexo.

⁸⁹⁴ Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826), emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE; y el escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 [...], en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 1149).

3.10 Señale cuáles son los INSUMOS para producir los productos o servicios que distribuye y comercializa su representada. Asimismo, señale si dichos INSUMOS son de origen nacional o de origen extranjero:

RESPUESTA:

Mi representada [sic] considera que los Insumos que utiliza para producir los productos o servicios que comercializa son los siguientes:

B

[...]

6.3 Indique si los USUARIOS de la SIC pagan una cuota por concepto de afiliación a su representada. De ser así, indique el monto de dicha cuota durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del presente oficio, la periodicidad con que se actualiza y la metodología utilizada para actualizarla.

RESPUESTA:

B

[...]”⁸⁹⁵

7 (a). Por otra parte, de la copia simple o impresión del CONTRATO MARCO CC que obra como anexo del escrito antes citado⁸⁹⁶ se desprende información respecto de la forma en que los USUARIOS entregan IC a CC y, en particular, que:

**

* *

A.1.2 Sustitución por el lado de la oferta.

En este apartado, se analizan las pruebas utilizadas en el DPR para acreditar que la IC de PM carece de sustitutos por el lado de la oferta.

⁸⁹⁵ Folios 1178, 1179 y 1201.

⁸⁹⁶ Folios 2071 a 2092. Respecto a dicho anexo CC refirió en su escrito presentado en la OFICIA 1A el veinte de mayo de dos mil quince lo siguiente: “Se adjunta al presente escrito como ANEXO 6.1 el contrato tipo,

B

B

(folio 1200).

De conformidad con la LRSIC: (a) las ENTIDADES FINANCIERAS tienen la obligación de proporcionar su IC al menos a una SIC; (b) las SIC son las únicas instituciones de todo el sistema financiero que pueden recopilar IC como agentes económicos; (c) derivado del secreto financiero, sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las SIC y a la CNBV; (d) la BD de las SIC se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS.⁸⁹⁷ La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probada por ser de orden público.⁸⁹⁸

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar la imputación:

8. Documental pública consistente en el TERCER DESAHOGO BANXICO,⁸⁹⁹ mediante el cual BANXICO realizó diversas manifestaciones, entre otras cuestiones, sobre el objetivo del Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera, indicando que ni éste ni sus productos son distribuidos a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y/o las SIC. Al respecto, dicha documental pública señala lo siguiente:

"[...]"

Anexo I

Explique qué es el Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera (RRRC) y cuál es su objetivo.

El RRRC es una [BD] de créditos que tiene como objetivo el proveer información detallada para entender y dar seguimiento al comportamiento de las carteras de crédito comercial, consumo y vivienda, para apoyar la elaboración de cuadros estadísticos, informes, boletines y presentaciones que se ponen a disposición del público, así como complementar el análisis del mercado de crédito que se realiza dentro de BANXICO.

⁸⁹⁷ En específico, véanse los artículos 5 y 20 de la LRSIC que señalan lo siguiente: "Artículo 5o.- La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales o las Sofomes E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley. - - - - No se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando los Usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las Sociedades, así como cuando éstas compartan entre sí información contenida en sus bases de datos o proporcionen dicha información a la Comisión. [...] [énfasis añadido]" y "Artículo 20.- La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. [...] - - - - En caso de que la información proporcionada por el Usuario sea relativa a una persona moral, el Usuario deberá incluir a los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que sean propietarios del 10% o más del capital social. - - - - Las Entidades Financieras deberán proporcionar, de conformidad con las disposiciones de carácter general que, al efecto, emita el Banco de México, la información relativa a sus operaciones crediticias, al menos, a una de las Sociedades organizadas conforme a esta Ley. [...] [énfasis añadido]"

⁸⁹⁸ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PIF, antes citados: (i) "**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.**" Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.**" Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁸⁹⁹ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por BANXICO en el "ANEXO I" (folios 24911 y 24912) y en el "ANEXO 5" (folios 24921 y 24922), cuya autoría fue reconocida por BANXICO de conformidad con lo siguiente: "[a]djunto al presente sírvase encontrar los siguientes Anexos en los cuales se da contestación a cada una de las preguntas del Cuestionario contenido en el Anexo Único al Oficio No. COFECE-AI-DGIM-2016-009" (folio 24910).

El RRRC está integrado por los siguientes tipos de créditos tanto vigentes como vencidos:

1. Información individual sobre créditos comerciales y créditos para la adquisición o construcción de vivienda media y residencial mayores a doscientos mil pesos (\$200,000.00 M.N.);
 2. Información agregada de la cartera de créditos comerciales y créditos para la adquisición o construcción de vivienda media y residencial menores a doscientos mil pesos (\$200,000.00 M.N.), y
 3. Información agregada sobre la cartera de consumo y adquisición de vivienda de interés social.
- [...]

Anexo 5

Indique si los servicios y/o productos generados a partir de la información del RRRC son distribuidos a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y/o SICs.

El RRRC y sus productos no son distribuidos a entidades financieras, empresas comerciales y/o SICs. [...]"⁹⁰⁰

9. **Documental pública** consistente en el oficio con anexos número [REDACTED] **
presentado en la OFICIALÍA el doce de agosto de dos mil dieciséis por la CNBV.⁹⁰¹ En el anexo 1 de dicho escrito, la CNBV manifestó, entre otras cosas, los segmentos que deben ser transmitidos por la SIC complementaria a la SIC originadora para la integración de los RCI de PM.

A.2 Fracción II del artículo 58 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras cuestiones: "Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; [...]"

Ahora bien, a continuación se valoran los elementos de convicción utilizados en el DPR para sustentar que: (a) los costos de distribución de la IC no dependen de la ubicación del USUARIO que está suministrando la información; y (b) no ha existido la posibilidad de que proveedores ubicados en otros países cuenten con la IC de los CLIENTES que han realizado operaciones en territorio nacional, por lo que, no existen complementos ni sustitutos provenientes de otras regiones o del extranjero.

De conformidad con el artículo 5 de la LRSIC, derivado del secreto financiero, los USUARIOS sólo pueden proporcionar IC a las SIC, siendo que de conformidad con el artículo 20 de dicha normativa, la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los

⁹⁰⁰ Folios 24912 y 24922.

⁹⁰¹ Oficio con anexos (folios 26357 a 26384) firmado por la Directora General Contenciosa de la CNBV.

CLIENTES. La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹⁰²

10. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO DUN,⁹⁰³ presentado como anexo del ESCRITO DUN, del cual se desprenden

Al respecto, dicha copia simple o impresión señala lo siguiente:

“[...]”

[...]”⁹⁰⁴

11. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO CC que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,⁹⁰⁵ del cual se desprende que

A.3 Fracción III del artículo 58 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras cuestiones: “*Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; [...]*”. Al respecto, la AI concluye que las SIC no pueden acudir a oferentes de IC alternos ubicados en otros mercados, debido a que en términos de la LRSIC las ENTIDADES FINANCIERAS están obligadas a proporcionar su información y las SIC están obligadas a intercambiar su IC. Adicionalmente, no pasa desapercibido que, en términos del artículo 20

⁹⁰² Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) “**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.**” Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) “**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.**” Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹⁰³ Folios 5561 A 5604. Respecto al CONTRATO MARCO DUN, en la respuesta del “ANEXO 6.1” del ESCRITO DUN, TUM y DUN señalaron lo siguiente: “

Folio 5507.

⁹⁰⁴ Folios 5571 y 5572.

⁹⁰⁵ Folios 2071 a 2092. Respecto a dicho anexo CC refirió en su escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince lo siguiente: “*Se adjunta al presente escrito como ANEXO 6.1 el contrato tipo.*”

B

(folio 1200).

de la LRSIC, la BD de las SIC se integra con información provista por los USUARIOS. La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹⁰⁶

A.4 Fracción IV del artículo 58 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras cuestiones: *"Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos [...]"*. De conformidad con la LRSIC: (a) los USUARIOS no pueden contratar el servicio de IC con un agente distinto a las SIC, pues éstas son las únicas instituciones de todo el sistema financiero que pueden recopilar, manejar y entregar o enviar IC; y (b) derivado del secreto financiero, sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las SIC.⁹⁰⁷ La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹⁰⁸

A.5 Fracción V del artículo 58 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras cuestiones, *"[l]os demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]"*.

Al respecto, el artículo 5 de las DR establece que: *"Para la determinación del mercado relevante en términos de la fracción V del artículo 58 de la Ley, se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente. Asimismo, se debe delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incurrir en costos significativos"*.

Asimismo, tal como sostiene el DPR, a la fecha no se han emitido criterios técnicos para la determinación del MR.

Ahora bien, de conformidad con la el artículo 20 de la LRSIC, la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la IC proporcionada de forma directa o indirecta por los éstos. La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹⁰⁹

⁹⁰⁶ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) *"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA"*. Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) *"DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA"*. Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹⁰⁷ En específico, véanse los artículos 5 y 20 de la LRSIC.

⁹⁰⁸ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) *"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA"*. Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) *"DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA"*. Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹⁰⁹ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) *"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA"*. Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) *"DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA"*. Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.



SECRETARÍA

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Adicionalmente, como se desprende del TERCER DESAHOGO BANXICO (prueba 8), a la cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, el Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera elaborado por BANXICO cumple objetivos distintos que los productos de IC elaborados por las SIC y ni dicho reporte ni sus productos son distribuidos a las SIC.

Conclusiones respecto al MR DE PM

Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que los **elementos aportados por la ciencia** que fueron presentados por DUN y TUM y CC: (i) contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de información formulados por la DGIM durante la investigación del EXPEDIENTE; (ii) es posible atribuir el contenido de dicha información a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y (iii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Asimismo, el **elemento aportado por la ciencia** que fue aportado por BANXICO: (i) se trata de información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO para presentarla ante esta COFECE; y (ii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Ahora bien, del análisis de los elementos de convicción que sustentan la determinación del MR DE PM, se advierte que éste corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional, de conformidad con lo siguiente:

A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se desprende que la IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta.

De las normas del sistema jurídico mexicano se desprende: (a) la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos a una SIC conforme a un estándar establecido; (b) la posibilidad de las SIC de negar sus servicios a quienes no les proporcionen información (PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD); (c) que la IC que proporcionan los USUARIOS es diferente que aquella que refiere el Código Fiscal de la Federación y la "Lista de Personas Políticamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero"; (d) que la información proporcionada por los USUARIOS a las SIC está dividida en distintas secciones, dependiendo de si se trata de PF, PFAE o PM; (e) que existen restricciones legales para que otros agentes económicos distintos a las SIC accedan a la IC de los USUARIOS y para que agentes distintos a los USUARIOS proporcionen IC a las SIC; (f) la obligación de las SIC de compartir la IC; y (g) que la BD de las SIC se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS.

Por otro lado, el CONTRATO DUN Y CC (prueba 1 (a)), prueba que

Eliminado: un renglón y cuatro palabras.

Asimismo, el CONTRATO TUM y CC (prueba 1 (b)) prueba que

910

Por su parte, la información presentada por DUN en la prueba 2, prueba plenamente en su contra respecto de que la

Asimismo, del CONTRATO MARCO DUN (prueba 2 (b)) se desprende que

Asimismo, de la prueba 7, se desprende que CC

B

B

B

Adicionalmente, de la prueba 7 (a) se desprende que

De esta manera, las pruebas 2, 2 (b), 7 y 7 (a) permiten concluir que

**

De igual forma, de la prueba 3 y la prueba 4, se desprenden pronunciamientos realizados en un trabajo de investigación de la COFECE y otro de BANXICO, respectivamente, respecto de que el sector de la IC exhibe efectos de red. Dichas pruebas se administran entre sí y además son consistentes con lo señalado por el propio DUN en el PSFJ, quien afirmó la existencia de economías de red en el mercado de IC.

Asimismo, al analizar en su conjunto los elementos aportados por la ciencia proporcionados por DUN y CC (pruebas 5 y 6) se puede concluir que, para todos los años de dos mil doce a marzo de dos mil quince, la mayoría de los USUARIOS adquirieron productos de DUN para PM en contraposición con el número de USUARIOS que adquirieron productos de PM de CC. Asimismo, se advierte que USUARIOS adquirieron productos de ambas SIC.

Por último, con la manifestación de BANXICO (prueba 8), se prueba que el Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera ni sus productos son distribuidos a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y/o las SIC, por lo que BANXICO no es un proveedor alternativo en el mercado de IC.

B. Fracción II del artículo 58 de la LFCE: del CONTRATO MARCO DUN y del CONTRATO MARCO CC (pruebas 10 y 11) se desprende que

Así, las SIC pueden abastecerse de los USUARIOS ubicados a lo largo de todo el país, sin que el costo de distribución de la IC dependa

⁹¹⁰ Si bien dichos contratos fueron presentados por la CNBV en copia simple, al ser la autoridad reguladora quien los proporciona y toda vez que CC y DUN presentaron de igual forma el CONTRATO DUN y CC y que DUN no objetó los contratos presentados por la CNBV, los mismos prueban en su contra.

de su ubicación por poderse hacer por [REDACTED] **. Asimismo, de la LRSIC se desprende que la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los CLIENTES a las SIC.

C. Fracción III del artículo 58 de la LFCE: se observó que las SIC no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados pues por ley los USUARIOS son los que proporcionan su información a las SIC y además las SIC intercambian la IC de sus USUARIOS.

D. Fracción IV del artículo 58 de la LFCE: se advirtió que, por normatividad, las SIC se abastecen únicamente de los USUARIOS y los USUARIOS no pueden contratar los servicios de IC de un agente económico distinto a una SIC.

E. Fracción V del artículo 58 de la LFCE: de la LRSIC se desprende que la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la IC proporcionada de forma directa o indirecta por éstos. Asimismo, con la manifestación de BANXICO (prueba 8), se prueba que BANXICO no es un proveedor alternativo en el mercado de IC.

B. Pruebas relativas al PS de DUN en el MR DE PM.

B.1 Fracción I del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: *"Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder; [...]"*.

A continuación, se analizan los elementos de convicción que llevaron a la AI a determinar que de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince, DUN contó con una elevada participación en el MR DE PM y con la capacidad de restringir el abasto en la recopilación y procesamiento de IC, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder.

De conformidad con la LRSIC:

- La BD de las SIC se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS (artículo 20).
- La prestación de servicios de recopilación, manejo, envío o entrega de información relativa al HC de PF y de PM, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con los USUARIOS, sólo podrá llevarse a cabo por las SIC, quienes, sin que se considere una violación al secreto financiero, pueden proporcionar dicha información a sus USUARIOS cuando se cumplen los requisitos de la LRSIC (artículo 5).
- Las SIC no pueden impedir a sus USUARIOS que proporcionen o soliciten información a otras SIC (Artículo 35).

Eliminado: dos palabras.

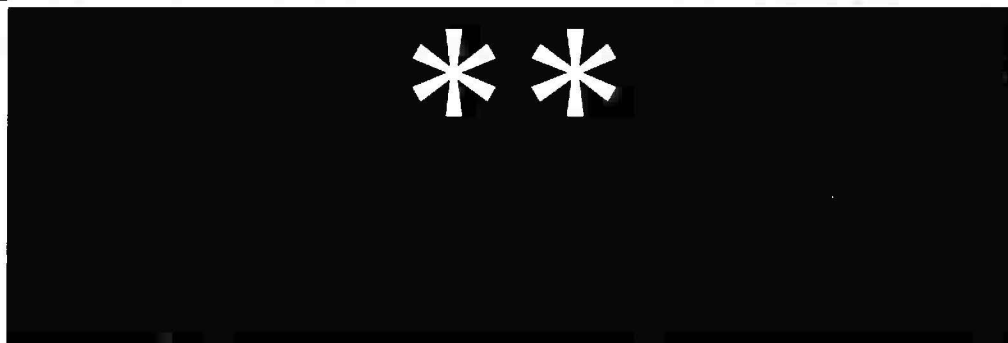
- Las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les proporcionen su IC (PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, artículo 26).

La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹¹¹

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar la imputación:

12. Documental pública⁹¹² consistente en el cotejo notarial del noveno testimonio, noveno en su orden, del instrumento notarial número ciento veintidós mil ciento setenta y tres, otorgado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número ciento tres del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y del Patrimonio Inmobiliario Federal el catorce de septiembre de dos mil siete,⁹¹³ del cual se desprende que DUN se constituyó mediante escritura de *******

******* Al respecto, dicha documental pública señala lo siguiente:



13. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹¹⁵ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,⁹¹⁶ el cual contiene, entre otros, los documentos electrónicos en formato ".xls" denominados "Anexo 8.3" y "Anexo 8.6", de los cuales se desprende: (i) el número de CLIENTES con HC en la BD de CC de PM y PFAE, por mes, de septiembre de dos mil once a mayo de dos mil quince; (ii) el número de registros en la BD de CC de PM y PFAE, por mes, de septiembre de dos mil once

⁹¹¹ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJJ, antes citados: (i) "**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA**". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA**". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹¹² Folios 2167 a 2197. Dicho instrumento notarial obra como anexo 1.1 del ESCRITO DUN.

⁹¹³ Dicho cotejo notarial fue elaborado por el Titular de la Notaría número doscientos veintinueve del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el ocho de abril de dos mil catorce (folio 2197).

⁹¹⁴ Folio 2168.

⁹¹⁵ Folio 6034 bis.

⁹¹⁶ Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "*En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM-2015-028 (el 'Oficio') y [...] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...] 8.3 [...] 8.6 [...]*".

a mayo de dos mil quince; y (iii) el número de USUARIOS de CC que adquirieron algún producto para PM de septiembre de dos mil doce a marzo de dos mil quince.

14. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹¹⁷ que obra como anexo del ESCRITO DUN,⁹¹⁸ el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.6 Consolidado", del cual se desprende: (i) el número de USUARIOS afiliados a DUN en cada mes desde enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince; (ii) el número de CLIENTES con HC en la BD de DUN, por mes, de enero de dos mil diez a abril de dos mil quince; y (iii) el número de registros en la BD de DUN, por mes, de enero de dos mil diez a abril de dos mil quince.

15. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹¹⁹ que obra como anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por TUM y DUN,⁹²⁰ el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario", del cual se desprende la cantidad de USUARIOS que por lo menos adquirieron un producto para PM de DUN de enero de dos mil doce a marzo de dos mil quince.

16. Copia simple o impresión de una sección del documento denominado "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS",⁹²¹ de la cual se desprende un pronunciamiento respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (ii) una SIC necesita tener una base mínima de usuarios que provean los datos y compren los RC.

Dicho estudio además es un hecho notorio para esta autoridad por tratarse de información que se encuentra en los registros y en la página de Internet de la COFECE.⁹²²

⁹¹⁷ Folio 5802.

⁹¹⁸ En el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: "[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] ANEXO 8.6 Se proporcionan estadísticas mensuales durante el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento respecto al número de créditos registrados, número de reportes emitidos, número de CLIENTES con historial y número de reportes facturados, entre otros. [...]", reconociendo el contenido de dicho anexo.

⁹¹⁹ Folio 6142.

⁹²⁰ Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios 6142 a 6191. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Acuerdo de Prórroga, se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: [...] ANEXO 8.3 Se proporciona información respecto a los reportes vendidos, montos facturados, precios y descuentos." (folios 6138 y 6139), reconociendo el contenido de dicho anexo.

⁹²¹ Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE (folios 27246 y 27247), y la certificación respectiva fue emitida por el titular de la AI el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).

⁹²² A saber: <https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/ResumenEjecutivo26-09-14.pdf#pdf>. Al respecto, dicho documento fue consultado por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.

17. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹²³ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce por BANXICO,⁹²⁴ que contiene, entre otras, una carpeta denominada “3.4 Sociedades de información crediticia” dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada “DOCUMENTOS” en la que se advierten las carpetas “Artículos” y “Artículos de investigación” en las que obran los documentos electrónicos en formato “pdf” con nombre de archivo “000 Estudio SICs 2014 05 16_AE” y “Mecanismos para compartir información”, respectivamente.

El archivo denominado “Mecanismos para compartir información” contiene el documento titulado “MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA”,⁹²⁵ del cual se desprende un pronunciamiento de que en el mercado de IC: (a) existen economías de red las cuales provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número de suscriptores a la misma; y (b) existen economías de escala.⁹²⁶

Por su parte, el archivo denominado “000 Estudio SICs 2014 05 16_AE” contiene el documento titulado “Estudio Comparativo sobre Sociedades de Información Crediticia”,⁹²⁷ del cual se desprende un pronunciamiento de que existen economías de escala en el mercado de IC.⁹²⁸

18. Copias simples o impresiones presentadas por DUN y TUM como “Anexo 2.1” del ESCRITO DUN,⁹²⁹ que contienen información relativa a la tenencia accionaria de DUN de dos mil diez a dos mil quince. Al respecto, el siguiente cuadro expresa la participación accionaria de los principales accionistas de DUN:⁹³⁰

⁹²³ Folio 513.

⁹²⁴ Folios 482 y 483.

⁹²⁵ Negrín, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05, Dirección General de Investigación Económica, BANXICO.

⁹²⁶ “[...] la externalidad positiva agregada que causa un nuevo suscriptor es mayor mientras mayor sea el número de suscriptores del buró en cuestión. Adicionalmente, el cambio tecnológico acentúa las economías de escala pues permite el manejo de grandes bases de datos en equipos de cómputo pequeños. Estos factores, aparentemente hacen óptima la concentración de las bases de datos”. Página 15 de dicho documento.

⁹²⁷ Elbittar, Alexander; Mariscal, Elisa y Pirchio, Alexis.

⁹²⁸ “Pagano y Jappelli (1993) analizan los factores que facilitan e incentivan la compartición de información entre las entidades crediticias de manera endógena. En particular, encuentran que [...] iii) la mayor extensión de los mercados de crédito, que permita el aprovechamiento de economías de escala [...] Desde el punto de vista regulatorio, el Estado puede considerar que una estructura de mercado concentrada incrementa las posibilidades de que se extraigan rentas monopólicas. Estas consideraciones implican que los reguladores financieros busquen intervenir de manera ex ante para contrarrestar la concentración de las participaciones de agentes económicos en el mercado. Sin embargo, dado que existen economías de escala en la concentración de información como se discutió al principio de esta sección, es importante evitar una fragmentación excesiva del mercado”. Páginas 8 y 17 de dicho documento.

⁹²⁹ Las respuestas que se analizan en este numeral fueron proporcionadas por TUM y DUN en el “ANEXO 2.1” (folios 3510 a 3554) del ESCRITO DUN, en el cual se observa que TUM y DUN reconocieron la autoría de la información relativa a la estructura accionaria de dichos agentes económicos de conformidad con lo siguiente: “RESPUESTA ANEXO 2.1 - - - - se adjuntan al presente copias de los asientos del Libro de Registro de Acciones de mis representadas, en la cual se desprenden todos los movimientos realizados en la estructura accionaria de mis representadas durante el periodo requerido y donde consta la estructura accionaria actual de las mismas. Asimismo, se adjuntan unas tablas que muestran la estructura de las SIC al cierre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de 2015” (folio 3511).

⁹³⁰ Folios 3549 a 3554.



19. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO DUN,⁹³² el cual obra como anexo del ESCRITO DUN, del cual se desprende, entre otras cosas, que dicho contrato **B** para los USUARIOS de DUN.

20. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO CC, el cual obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,⁹³³ del cual se desprende, entre otras cosas, que dicho contrato **B** para los USUARIOS de CC.

B.2 Fracción II del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: "La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores; [...]"⁹³⁴

⁹³¹ Dichos accionistas incluyen a

**

, según el año.

⁹³² Folios 5561 a 5604. Respecto al CONTRATO MARCO DUN, en la respuesta del "ANEXO 6.1" del ESCRITO DUN, TUM y DUN señalaron lo siguiente: "

**

Folio 5507.

⁹³³ Folios 2071 a 2092. Respecto a dicho anexo CC refirió en su escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince lo siguiente: "Se adjunta al presente escrito como ANEXO 6.1 el contrato tipo. **B**

B

(folio 1200).

⁹³⁴ Al respecto, el artículo 7 de las DR establece la lista de los elementos que podrán considerarse como barreras a la entrada para efectos de la fracción II del artículo 59 de la LFCE:

"Artículo 7. Para efectos de la fracción II del artículo 59 de la Ley, pueden considerarse como barreras a la entrada, entre otras, las siguientes:

I. Los costos financieros, los costos de desarrollo de canales alternativos y el acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes;

Eliminado: seis renglones y doscientas sesenta y siete palabras.

De conformidad con la LRSIC: (i) las actividades de recopilación, procesamiento y comercialización de IC están integradas en las SIC (artículos 5 y 20); y (ii) la SIC deben contar con autorización para operar (artículo 6), para lo cual deben realizar una solicitud que cumpla con lo señalado en el artículo 7 de dicha normativa. La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹³⁵

Asimismo, son un **hecho notorio** para esta autoridad: (i) la "Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad de información crediticia que se denominará Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia";⁹³⁶ (ii) la "Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información crediticia";⁹³⁷ (iii) la "RESOLUCION por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad de información crediticia, que se denominará Trans Union de México, S.A.";⁹³⁸ (iv) la "RESOLUCION por la que se autoriza la organización y operación de una sociedad de información crediticia que se denominará Dun & Bradstreet, S.A.";⁹³⁹ (v) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo";⁹⁴⁰ y (vi) la

II. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo;

III. La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización gubernamental, así como con derechos de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial;

IV. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia de mercado que le permita competir con marcas o nombres establecidos;

V. Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales;

VI. Las restricciones constituidas por prácticas realizadas por los Agentes Económicos ya establecidos en el mercado relevante; y

VII. Los actos o disposiciones jurídicas emitidos por cualquier Autoridad Pública que discriminen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios".

⁹³⁵ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "**LEVES, NO SON OBJETO DE PRUEBA**". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA**". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹³⁶ Publicada en el DOF el trece de junio de dos mil cinco, disponible en la página de Internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2044473&fecha=13/06/2005, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

⁹³⁷ Publicada en el DOF el veinte de abril de dos mil doce, disponible en la página de Internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244582&fecha=20/04/2012, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

⁹³⁸ Publicada en el DOF el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, disponible en la página de Internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4880498&fecha=01/09/1995, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

⁹³⁹ Publicada en el DOF el siete de julio de mil novecientos noventa y siete, disponible en la página de Internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4886596&fecha=07/07/1997, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

⁹⁴⁰ Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094022&fecha=10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

"Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo".⁹⁴¹

De dichas resoluciones se desprende que: (a) en junio de dos mil cinco se autorizó la constitución y operación de CC para recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF; (b) en abril de dos mil doce se modifica la autorización otorgada a CC para que dentro de su objeto se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM; (c) en septiembre de mil novecientos noventa y cinco se autorizó a TUM como SIC (sin limitar su objeto social a IC de PF); (d) en julio de mil novecientos noventa y siete se autorizó a DUN como SIC, para prestar de manera preponderante el servicio respecto de PM y PFAE; (e) en junio de dos mil nueve se modifica la autorización otorgada a TUM para que dentro de su objeto únicamente se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF; y (f) en junio de dos mil nueve se modifica la autorización otorgada a DUN para que dentro de su objeto únicamente se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM y PFAE.

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar la imputación:

21. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre otras cuestiones, la CNBV manifestó: (i) que a la fecha del PRIMER DESAHOGO CNBV se encontraban autorizadas y en operación únicamente TUM, DUN y CC; y (ii) los costos que deben cubrir las SIC por concepto de inspección y vigilancia de la CNBV, al tenor de lo siguiente:⁹⁴²

"[...]"

Anexo 18

18. En términos del Art. 6 de la LRSIC señale si a la fecha la CNBV ha emitido opinión alguna con respecto a autorizaciones para la constitución de una nueva SIC [...]

han sido debidamente autorizadas y se encuentran en operación: Trans Union de México, S.A., Dun & Bradstreet, S.A. y Circulo de Crédito, S.A. de C.V. [...]

[...]

Anexo 21

21. ¿Existen mecanismos de inspección y vigilancia del funcionamiento de las SIC's por parte de la CNBV? En caso afirmativo, descríbalos con el mayor detalle posible e indique cuáles son las cuotas que las SIC's han cubierto por dichos mecanismos.

[...]

⁹⁴¹ Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094021&fecha=10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

⁹⁴² Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por la CNBV en el "ANEXO 18" (folios 708 a 712) y en el "ANEXO 21" (folios 717 y 718); no obstante, en el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: "se adjuntan al presente Oficio de respuesta, 31 anexos que contienen las respuestas solicitadas en cada uno de los 29 numerales del Anexo Único del Oficio de referencia [...]" (folio 649), reconociendo la autoría de dicha respuesta.

De acuerdo con el artículo 17 de la LRSIC, las SICs están sujetas a la inspección y vigilancia de la CNBV, a la que deben cubrir las cuotas en los términos que establezca la SHCP.

De conformidad con el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos, en su redacción vigente, se indica que:

'[...]

Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades de Información Crediticia, entendiéndose por ello a las sociedades autorizadas conforme a la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, pagará la cantidad de: \$1,271,881.20.

[...]

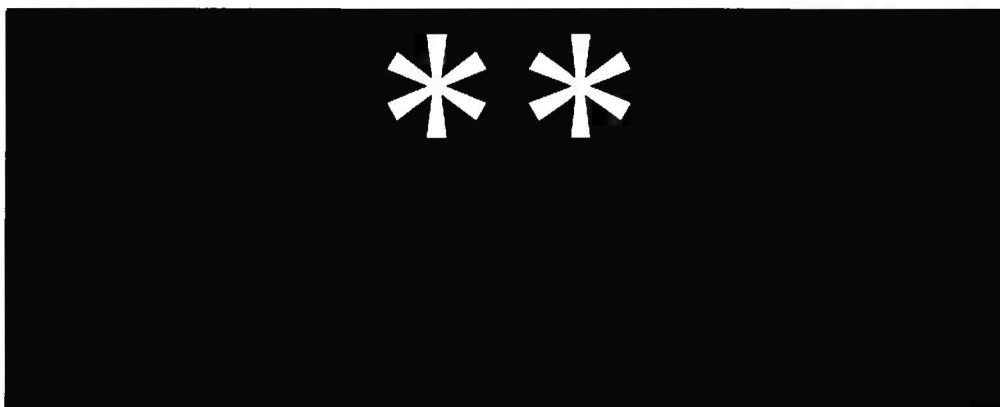
Dicha cantidad debe ser cubierta por cada una de las tres SICs en operación y ha evolucionado en la siguiente forma desde el año 2010:

Ejercicio	Cuota
2010	\$1,009,185.00
2011	\$1,009,185.00
2012	\$1,131,397.00
2013	\$1,131,397.00
2014	\$1,172,240.00
2015	\$1,271,881.20

[...]

22. **Documental pública** consistente en el TERCER DESAHOGO BANXICO,⁹⁴³ mediante el cual BANXICO manifestó, entre otras cuestiones, que

Al respecto, dicha documental pública señala lo siguiente:



[...]

⁹⁴³ La respuesta que se transcribe fue proporcionada por BANXICO en el "ANEXO 8" (folios 24927 y 24928); no obstante, en el cuerpo del oficio BANXICO señaló que: "[a]djunto al presente sírvase encontrar los siguientes Anexos en los cuales se da contestación a cada una de las preguntas del Cuestionario contenido en el Anexo Único al Oficio COFECE-AI-DGIM-2016-009" (folio 24910), reconociendo la autoría de dichas respuestas.

⁹⁴⁴ Folio 24928.

23. **Documental pública** consistente en el Oficio número DGASF/25/2015 presentado en OFICIALÍA el trece de marzo de dos mil quince⁹⁴⁵ por BANXICO, del cual se desprende, entre otras cuestiones, que BANXICO manifestó que las SIC deben contar con un capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente a dieciséis millones de pesos (desde el último día hábil de dos mil tres), de conformidad con lo señalado en la resolución correspondiente. Al respecto, señaló lo siguiente:⁹⁴⁶

“[...]

3. ¿Existe un monto mínimo de capital para la constitución de una SIC? En caso afirmativo, señale la fecha en que dicho monto fue determinado, la metodología empleada para tal propósito y el mecanismo de actualización de dicho monto.

Con base en la Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo íntegramente suscrito y pagado con el que deberán de contar las SIC's el último día hábil del año 2003, publicado por la CNBV el 27 de junio de 2003 en el DOF, las SIC's deberán contar con un capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente al importe de \$16'000,000.00 [...].”⁹⁴⁷

Adicionalmente, de la “Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad de información crediticia que se denominará Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia”, se desprende que al autorizarse la constitución y operación de CC se indicó que el capital mínimo íntegramente suscrito y pagado de CC sería de \$16,000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.). Dicha resolución fue publicada en el DOF el trece de junio de dos mil cinco y se encuentra disponible en la página de Internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2044473&fecha=13/06/2005, por lo que es un **hecho notorio** para esta autoridad.⁹⁴⁸

24. **Documental privada** consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el nueve de julio de dos mil quince por TUM y DUN,⁹⁴⁹ del cual se desprende que, en el año dos mil catorce, los costos indirectos para la elaboración de productos IC de DUN ascendieron

⁹⁴⁵ Oficio con anexos (folios 586 y 587, y sus anexos en los folios 588 a 647) firmado por el Director General de Asuntos del Sistema Financiero e Integrante del Grupo de Coordinación de BANXICO, en desahogo la solicitud de información y documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-013, (folios 544 a 554), emitido por la DGIM el diecinueve de febrero de dos mil quince en el EXPEDIENTE.

⁹⁴⁶ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por BANXICO en el “Anexo 2”; no obstante, en el cuerpo del oficio BANXICO manifestó lo siguiente: “[...] Adjunto al presente sírvase encontrar un anexo en el cual se da contestación a las preguntas formuladas en el Anexo Único de su oficio número COFECE-AI-DGIM-2015-013”, folio 587.

⁹⁴⁷ Folios 592.

⁹⁴⁸ Como ya se indicó en esta resolución, esta página de Internet fue consultada el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.

⁹⁴⁹ Folios 11613 a 11615 y sus anexos en los folios 11616 a 11625. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al REQUERIMIENTO y al acuerdo emitido por la DGIM el ocho de junio de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 6202 a 6204). Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el “ANEXO 8.1” (folios 11616 a 11625) del escrito anteriormente referido, en el cual dichos emplazados reconocieron la autoría de dicho documento de conformidad con lo siguiente: “En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Reiteramiento [es decir, el acuerdo emitido por la DGIM el ocho de junio de dos mil quince en el EXPEDIENTE], se acude a dar contestación al numeral 8.1 del Cuestionario del Anexo Único, conforme a lo siguiente: ----- ANEXO 8.1 Se proporciona información relacionada con el costo de producción asociado a cada producto elaborado por mis representadas” (folio 11614).

aproximadamente a [REDACTED]

[REDACTED]⁹⁵⁰ Al respecto, la siguiente tabla expresa los montos totales de los costos indirectos de DUN en el año dos mil catorce.⁹⁵¹

Costos indirectos	
	* *
Total DUN ⁹⁵²	[REDACTED]

25. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹⁵⁶ que obra como anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de julio de dos mil quince por CC,⁹⁵⁷ el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "Anexo 9", del cual se desprende que de dos mil trece a dos mil quince el precio de lista de los RC de PM es de [REDACTED]⁹⁵⁸ y el precio de lista de los RCI de PM es de [REDACTED]⁹⁵⁹

26. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹⁶⁰ que obra como anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el ocho de septiembre de dos mil quince por TUM y DUN,⁹⁶¹ el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "Numeral 8.1", del cual se desprende: (i) que los costos indirectos para la elaboración de RC de PM equivalen a [REDACTED]

⁹⁵⁰ Es decir, [REDACTED]

⁹⁵¹ Los montos que se reflejan en la tabla son una transcripción de los que se advierten en la fila "Total DUN", de la columna "Costos Indirectos" e incluyen las sub-columnas [REDACTED]

⁹⁵² Las cifras totales se encuentran en la celda identificada como "Total DUN" del "Cuadro 1. Costos directos e indirectos por macroactividad para TUM y DUN 2014 (pesos)" (folio 11622), el cual fue elaborado con base en la información por [REDACTED] para el año dos mil catorce.

⁹⁵³ Es decir, [REDACTED]

⁹⁵⁴ Es decir, [REDACTED]

⁹⁵⁵ Es decir, [REDACTED]

⁹⁵⁶ Folio 15413.

⁹⁵⁷ Folios 15093 a 15167 y sus anexos en los folios 15168 a 15413. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826), emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE y al acuerdo emitido por la DGIM el veintidós de junio de dos mil quince (folios 8942 a 8967). Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 (el 'Oficio') y el reiteramiento de fecha 22 de junio de 2015 [...], en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 15093).

⁹⁵⁸ En específico véase la fila correspondiente al producto "2" denominado "Reporte de Crédito de Personas Morales".

⁹⁵⁹ En específico véase la fila correspondiente al producto "4" denominado "Reporte de Crédito Consolidado de Personas Morales".

⁹⁶⁰ Folio 16767.

⁹⁶¹ Folios 16479 a 16488 y sus anexos en los folios 16489 a 16767. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al REQUERIMIENTO, así como al acuerdo emitido por la DGIM el veinte de julio de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 14736 a 14768). En el escrito referido los emplazados reconocieron la autoría del elemento aportado por la ciencia de conformidad con lo siguiente: "En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Segundo Reiteramiento, se acude a dar contestación a los diversos numerales reiterados del Cuestionario del Anexo Único, conforme a lo siguiente: [...]" (folios 16482).

PM equivalen a ⁹⁶² y (ii) que los costos directos para la elaboración de RC de ⁹⁶³

27. Documental privada consistente en el ESCRITO DUN, ⁹⁶⁴ por medio del cual TUM y DUN señalaron, entre otras cosas, que

“[...]”

* *

[...]” ⁹⁶⁵

27 (a). Asimismo, DUN y TUM presentaron como anexo 2.1 del ESCRITO DUN, ⁹⁶⁶ la copia simple o impresión que contiene información relativa a la tenencia accionaria de DUN de dos mil diez a dos mil quince. De dichas copias o impresiones, las cuales fueron previamente valoradas, se desprende que, de dos mil diez a dos mil quince,

* *

⁹⁶² Véase en específico la columna “Costos Indirectos” de la sub-fila “Reporte de Crédito” de la fila “DUN” de la tabla denominada “Cuadro 2. Costos directos e indirectos para los productos de TUM y DUN (pesos, 2014)” que se advierte en la hoja de cálculo “Cuadro 2”.

⁹⁶³ Véase en específico las sub-columna “Total” de la columna “Costos Directos” de la sub-fila “Reportes de Crédito” de la fila “DUN” de la tabla denominada “Cuadro 2. Costos directos e indirectos para los productos de TUM y DUN (pesos, 2014)” que se advierte en la hoja de cálculo “Cuadro 2”.

⁹⁶⁴ La respuesta que se transcribe fue proporcionada por TUM y DUN en el “ANEXO 9.5” (folios 5800 y 5801) del ESCRITO DUN, en el cual dichos emplazados reconocieron la autoría de los anexos de conformidad con lo siguiente: “En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO], se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: - - - - - [...] ANEXO 9.5 Se presenta información respecto al tiempo necesario en que incurrieron TUM y DUN para iniciar operaciones y el tiempo necesario para que en la actualidad pudiera entrar al mercado un nuevo competidor” (folios 2122 y 2130).

⁹⁶⁵ Folio 5801.

⁹⁶⁶ Las respuestas que se analizan en este numeral fueron proporcionadas por TUM y DUN en el “ANEXO 2.1” (folios 3510 a 3554) del ESCRITO DUN, en el cual se observa que TUM y DUN reconocieron la autoría de la información relativa a la estructura accionaria de dichos agentes económicos de conformidad con lo siguiente: “RESPUESTA ANEXO 2.1 - - - - - se adjuntan al presente copias de los asientos del Libro de Registro de Acciones de mis representadas, en la cual se desprenden todos los movimientos realizados en la estructura accionaria de mis representadas durante el periodo requerido y donde consta la estructura accionaria actual de las mismas. Asimismo, se adjuntan unas tablas que muestran la estructura de las SIC al cierre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de 2015” (folio 3511).

⁹⁶⁷ Siendo que las ENTIDADES FINANCIERAS son USUARIOS de las SIC.

27 (b). Asimismo, como parte del escrito de veinte de mayo de dos mil quince,⁹⁶⁸ TUM y DUN anexaron el **elemento aportado por la ciencia** consistente en un disco compacto⁹⁶⁹ que contiene, entre otros: (a) el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.4 Unidades y monto con participación TUM y DUN", del cual se desprende que en dos mil catorce DUN facturó [REDACTED] RC de PM (incluyendo los RCI); y (b) el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.5 Total de ventas TUM y DUN", del cual se desprende que en dos mil catorce DUN tuvo ventas netas de RC de PM (incluyendo los RCI) por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] De lo anterior se advierte que el precio promedio al cual DUN vendió RC de PM en dos mil catorce es [REDACTED]⁹⁷⁰

28. **Copias simples o impresiones** de las actas de asambleas generales ordinarias de CC de dos mil diez a dos mil quince, que obran como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de julio de dos mil quince por CC.⁹⁷¹ De dichas actas se desprende información sobre los accionistas de CC, los cuales corresponden a [REDACTED]

29. **Elemento aportado por la ciencia** consistente en el disco compacto⁹⁷³ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,⁹⁷⁴ que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "Anexo 8.4", del cual se desprende que CC comercializó de dos mil doce a dos mil trece cantidades [REDACTED] RC de PM. En específico, se desprende que comercializó [REDACTED] RC

⁹⁶⁸ Al respecto, en el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: "[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] ANEXO 8.6 Se proporcionan estadísticas mensuales durante el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento respecto al número de créditos registrados, número de reportes emitidos, número de CLIENTES con historial y número de reportes facturados, entre otros. [...]", reconociendo el contenido de dicho anexo.

⁹⁶⁹ Folio 5802.

⁹⁷⁰ Dicho número se obtiene de dividir los ingresos de DUN en dos mil catorce por la venta de RC de PM entre el número de RC de PM facturados.

⁹⁷¹ Folios 15093 a 15167 y sus anexos en los folios 15168 a 15413. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826), emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE y al acuerdo emitido por la DGIM el veintidós de junio de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 8942 a 8967). Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIM [sic]-2015-028 (el 'Oficio') y el reiteramiento de fecha 22 de junio de 2015 [...], en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 15093).

⁹⁷² Siendo que las EMPRESAS COMERCIALES y las ENTIDADES FINANCIERAS son USUARIOS de las SIC.

⁹⁷³ Folio 6034 bis.

⁹⁷⁴ Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio número COFECE-AI-DGIM-2015-028 (el 'Oficio') y [...] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...] 8.3 [...]"

de PM en el dos mil doce, ******* en el dos mil trece y *******
******* en el dos mil catorce.

30. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dos de octubre de dos mil quince por TU SRL,⁹⁷⁵ del cual se desprende que, entre otras cuestiones, *******

******* Asimismo, TU SRL transcribe en su traducción al español, una sección del estudio referido en el que se observa que la titularidad de los otorgantes de crédito de los burós de crédito puede constituir una barrera a la entrada a nuevos proveedores y miembros. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:

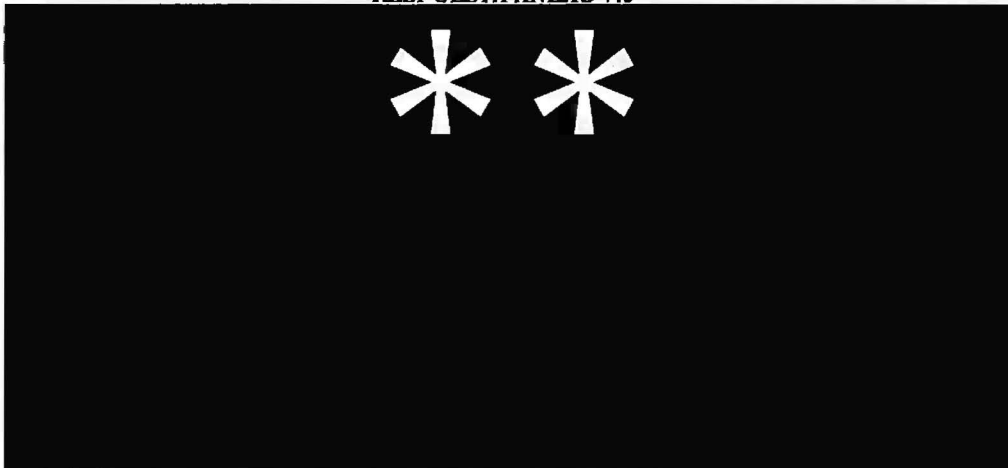
“[...]

ANEXO 7.5

Oficio: COFECE-AI-DGIM-2015-108

7.5 ¿Considera viable la operación de TUM como SIC sin la participación de entidades financieras como accionistas de ésta?

RESPUESTA ANEXO 7.5



ANEXO 7.5a

Oficio: COFECE-AI-DGIM-2015-108

7.5 ¿Considera viable la operación de TUM como SIC sin la participación de entidades financieras como accionistas de ésta? Explique por qué sí o por qué no.

⁹⁷⁵ Folios 21336 a 21347 y sus anexos en los folios 21348 a 21772. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-108 (folios 15511 a 15525) emitido por la DGIM el veinte de agosto de dos mil quince en el EXPEDIENTE. Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TU SRL en el “Anexo 7.5” (folios 21758 a 21762) del escrito antes mencionado, en el cual dicho agente económico señaló lo siguiente: “[...] comparezco para dar contestación al requerimiento de información y documentación formulado por el [DGIM] de esa [COFECE] mediante oficio COFECE-AI-DGIM-2015-108, de fecha 20 de agosto de 2015 [...] se adjuntan al presente las respuestas a los numerales contenidos en el cuestionario formulado en el Anexo Único del requerimiento de información, de conformidad con lo siguiente: [...]” (folios 21336).

	Comercial, con propiedad a cargo de prestamistas	Comercial, sin propiedad a cargo de prestamistas	No comercial, asociación de prestamistas	Propiedad gubernamental (total o parcial)
Pros	<ul style="list-style-type: none"> Usualmente la única manera posible de establecer un buró de crédito para asegurar la participación de prestamistas. La participación del prestamista asegura un nivel de compromiso que garantiza sustentabilidad. Socios tecnológicos aseguran el valor del Buró de Crédito. La perspectiva comercial asegura innovación y un alto estándar de servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> No existen conflictos de interés en el manejo del Buró de Crédito. La perspectiva comercial asegura innovación y un alto estándar de servicio. Abierto a una amplia cobertura del mercado. 		<ul style="list-style-type: none"> Fortalece la confianza del sector privado, los prestamistas y los socios técnicos.
Cons	<ul style="list-style-type: none"> Los conflictos de interés son posibles. Ejemplos tales como la negativa a admitir a un nuevo prestamista o a la introducción de un nuevo servicio. Lento proceso de decisiones debido al gran número de opiniones divergentes que deben ponerse de acuerdo. Existen barreras de entrada a nuevos proveedores y miembros. 	<ul style="list-style-type: none"> Los bancos generalmente no están dispuestos a compartir su información sin tener acciones en el buró. Falta de capital. 	<ul style="list-style-type: none"> Incentivos limitados para innovar. Usualmente un servicio de menor calidad a los burós orientados por ánimo de lucro. Lento proceso de decisión. 	<ul style="list-style-type: none"> No es un uso efectivo de los recursos gubernamentales. Los gobiernos causan conflictos de interés ante su posición y funciones simultáneas como accionistas y supervisor.
Ejemplos	<ul style="list-style-type: none"> CRIF (Italia) CIG (Islandia) SCHUFA (Alemania) Serasa (Brasil) SIMAH (KSA) 	<ul style="list-style-type: none"> Equifax (EU, España) Experian (EU, RU) TransUnion (EU) Compuscan (Sudáfrica) Datacheck (Pakistán) 	<ul style="list-style-type: none"> Común en Latinoamérica, donde la Cámara de Comercio opera una lista de malos deudores. 	<ul style="list-style-type: none"> Sri Lanka Tailandia Emiratos Árabes Unidos

[...]”⁹⁷⁶

31. **Documental privada** consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,⁹⁷⁷ del cual se desprende que a CC le tomó **B** iniciar operaciones como una SIC. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:

⁹⁷⁶ Folios 21758 a 21761.

⁹⁷⁷ Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028, emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 809 a 826); y el escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: “En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 [...], en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]” (folio 1149).

“[...]

9.5 Señale el tiempo necesario en que incurrió su representada para iniciar operaciones y el tiempo necesario para que en la actualidad pudiera entrar al mercado un nuevo competidor. En caso de diferir ambos plazos, señale las causas de dicha diferencia.

RESPUESTA:

Se informa a esa comisión [sic] que a [CC] le tomó B entre las actividades pre-operativas y auditorías por parte de la CNBV, firma de escritura constitutiva, la obtención de la autorización por la Secretaría, y el inicio de sus operaciones en junio de 2005.

[...]”⁹⁷⁸

32. **Copia simple o impresión** de una sección del documento denominado “**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS**”,⁹⁷⁹ de la cual se desprende un pronunciamiento respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (ii) una SIC necesita tener una base mínima de usuarios que provean los datos y compren los RC.

33. **Elemento aportado por la ciencia** consistente en el disco compacto⁹⁸⁰ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce por BANKICO,⁹⁸¹ que contiene, entre otras, una carpeta denominada “3.4 Sociedades de información crediticia” dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada “DOCUMENTOS” en la que se advierte la carpeta “Artículos de investigación” en las que obra el documento electrónico en formato “pdf” con nombre de archivo “Mecanismos para compartir información”. Dicho archivo contiene el documento titulado “MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA, EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA”,⁹⁸² del cual se desprende un pronunciamiento de que existen economías de red en el mercado de IC, las cuales provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número de suscriptores a la misma.

B.3 Fracción III del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: “La existencia y poder de sus competidores; [...]”.

El DPR refiere lo señalado en los puntos de acuerdo Sexto y Séptimo de los “*Criterios Técnicos para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la Concentración del Mercado*” para sustentar que un mercado que muestre una concentración superior a los dos mil puntos presentaría probabilidades considerables de obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica; así como que el IHH puede ser utilizado por la

⁹⁷⁸ Folio 1218.

⁹⁷⁹ Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE (folios 27246 y 27247), y la certificación respectiva fue emitida por el titular de la AI el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).

⁹⁸⁰ Folio 513.

⁹⁸¹ Folios 482 y 483.

⁹⁸² Negrín, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05, Dirección General de Investigación Económica, Banxico.

COFECE en el análisis de la existencia de poder sustancial. Los criterios referidos son un **hecho notorio** para esta autoridad.

Asimismo, de las **pruebas 13 a 15** previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, se desprende: (i) el número de CLIENTES (PM y PFAE) con HC en la BD de CC y de DUN, por mes; (ii) el número de registros de PM y PFAE en la BD de CC y de DUN, por mes; y (iii) el número de USUARIOS de CC y de DUN que adquirieron algún producto para PM.

B.4 Fracción IV del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: “*Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos; [...]*”.

De conformidad con la LRSIC las actividades de recopilación, procesamiento y comercialización de IC están integradas en las SIC (artículos 5 y 20), en este sentido los USUARIOS son proveedores y consumidores de las SIC simultáneamente.

Asimismo, como se señaló al analizar la fracción I de los artículos 58 y 59 de la LFCE, de conformidad con la LRSIC: (a) las ENTIDADES FINANCIERAS deben de proporcionar su IC al menos a una SIC; (b) la BD de las SIC se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS; (c) las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les proporcionen su IC; (d) en términos del artículo 36 y 36 bis de la LRSIC las SIC recopilan o se abastecen de IC, entre otras, de forma indirecta mediante la entrega puntual de información para la elaboración de los RCI o mediante el intercambio de la BPD.

La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.⁹⁸³

Asimismo, de las **pruebas 13 y 15** previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, se desprende el número de USUARIOS de CC y de DUN que adquirieron algún producto para PM.

Aunado a lo anterior, el DPR sustenta sus conclusiones en las siguientes pruebas:

34. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dos de octubre de dos mil quince por TU SRL,⁹⁸⁴ del cual se desprenden manifestaciones

⁹⁸³ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PIF, antes citados: (i) “**LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.**” Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) “**DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.**” Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

⁹⁸⁴ Folios 21336 a 21347 y sus anexos en los folios 21348 a 21772. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-108 (folios 15511 a 15525) emitido por la DGIM el veinte de agosto de dos mil quince en el EXPEDIENTE. Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TU SRL en el “**ANEXO 7.2**” (folios 21751 y 21752) del escrito antes mencionado, en el cual dicho agente económico señaló lo siguiente: “[...] comparezco para dar contestación al requerimiento de información y documentación formulado por el [DGIM] de esa [COFECE] mediante oficio COFECE-AI-DGIM-2015-108, de fecha 20 de agosto de 2015



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

respecto de la importancia del acceso a la IC y, en particular que

**

**

Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:

35. Documental privada consistente en el ESCRITO DUN,⁹⁸⁵ del cual se desprende que, de conformidad con los datos presentados por DUN, en el periodo comprendido de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince se realizaron

consultas respecto de IC de PM (incluyendo PFAE) entre DUN y CC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, de las cuales: (i)

consultas fueron realizadas por parte de DUN a CC, resultando

veces en Hit, es decir, el de las ocasiones, las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un Hit; y (ii)

consultas fueron realizadas por parte de CC a DUN, resultando

veces en Hit, es decir, un de las ocasiones, las consultas realizadas por CC a DUN resultaron en un Hit. Asimismo, de dichos datos se desprende que el

de las consultas de información puntual las realizó DUN a CC, y que en ningún mes de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince el porcentaje de consultas realizado por DUN es menor al

Al respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

"[...]

Transcripción de numeral 4.7- Proporcione el número de consultas totales que TUM y DUN realizaron mensualmente a la base de datos de [CC], y las que estas empresas realizaron en su base de datos, buscando información no clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del presente oficio [es decir, al veinte de abril de dos mil quince] (Número de consultas de [CC] a TUM y de TUM a [CC], de [CC] a DUN y de DUN a [CC]). Desglose por Hit y No-Hit para cada SIC y especifique por tipo de persona física y moral.

[...]

**

[...]

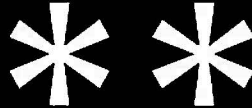
**

[...] se adjuntan al presente las respuestas a los numerales contenidos en el cuestionario formulado en el Anexo Único del requerimiento de información, de conformidad con lo siguiente [...]" (folios 21336 y 21344).

⁹⁸⁵ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "ANEXO 4.7" (folios 4898 a 4902). En el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: "[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] Anexo 4.7 Se proporciona el número de consultas totales que las SIC realizaron mensualmente a la [BD] de [CC], y las que estas empresas realizaron en su [BD], buscando información no clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento. [...]", reconociendo la autoría de dicha respuesta.



50032 Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET



Eliminado: doscientas siete palabras.

986 Al respecto, el número que resulta de sumar [REDACTED]

987 Al respecto, el número que resulta de sumar [REDACTED]



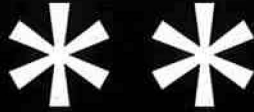
50033

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET



Eliminado: doscientas veintidós palabras.

988 Al respecto, el número que resulta de sumar



[...]”⁹⁸⁹

B.5 Fracción V del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: “El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado [...]”.

36. Documental pública consistente en el SEGUNDO DESAHOGO BANXICO,⁹⁹⁰ mediante el cual, BANXICO hizo referencia a un estudio elaborado por dicha autoridad en el que indicó que otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado, y que los principales productos están dirigidos a PF. Asimismo, BANXICO señaló que resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número de productos de valor agregado utilizando las BD tanto de PF como de PM:

“La importancia específica de las [SIC] y sus efectos en los diversos segmentos del mercado de crédito en México fueron recientemente analizados para el crédito a las PYMES [...]

[...] los elementos vertidos en el numeral 4.3 del ‘Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME)’, son aplicables a cualquier segmento del mercado de crédito en México. A manera de resumen, sin pasar por alto el resto del contenido señalado en el mencionado numeral, se destaca lo siguiente:

[...]

‘Otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado para empresas. Los principales productos de valor agregado ofrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas físicas’⁹⁹¹. Dentro de los

⁹⁸⁹ Folios 4898, 4901 y 4902.

⁹⁹⁰ La respuesta que se transcribe fue proporcionada por BANXICO en el “ANEXO I”; no obstante, en el cuerpo del oficio BANXICO señaló que: “Adjunto al presente sirvase encontrar el Anexo I en el cual se da contestación a los once numerales formulados en el Acuerdo de Reiteración de Información del [EXPEDIENTE] [...]” (folio 868), reconociendo la autoría de dichas respuestas.

⁹⁹¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: “En los sitios de internet de las SIC se describen algunos de estos servicios: estimar la probabilidad de incumplimiento de los clientes y generar calificaciones crediticias (BC Score y Prospector, respectivamente), emitir reportes sobre personas que han cometido fraudes comprobados (Hawk), calcular los indicadores establecidos por la CNBV para el cálculo de reservas (Califica) y emitir alertas sobre cambios de situación de los clientes (Watch)”.

servicios de valor agregado para personas morales, es notoria la ausencia de la calificación crediticia para PYMES a la fecha de publicación de este reporte. De manera similar, el servicio conocido como pre-screening tampoco se ofrece, no obstante que en la LRSIC se permite que las entidades financieras accedan a las valoraciones crediticias 'exclusivamente para determinar la elegibilidad del cliente en la oferta de productos financieros, sin necesidad de contar con la autorización' autógrafa de los clientes. La falta de desarrollo de estos servicios dificulta que los intermediarios de menor escala puedan competir con los oferentes grandes. En EEUU, por ejemplo, las SIC ofrecen reportes sobre la situación crediticia de las personas relacionadas a una empresa; comparación sobre el endeudamiento de una empresa con la industria a la que perteneces y a nivel nacional; monitoreo de los movimientos crediticios de una empresa y alertas de variaciones significativas en un periodo determinado⁹⁹².

[...]

[...] resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número de productos de valor agregado utilizando las bases tanto de personas físicas como de personas morales⁹⁹³.

Adicionalmente, en el EXPEDIENTE obra la copia simple o impresión⁹⁹⁴ del documento denominado "Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresa (PYME)" de abril de dos mil quince, elaborado por BANXICO, en el cual se advierte la transcripción realizada por BANXICO.

37. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹⁹⁵ que obra como anexo del ESCRITO DUN,⁹⁹⁶ el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "3.2 Descripción de Productos", del cual se desprende que DUN sacó al mercado a partir de los años que se indican los siguientes productos de valor agregado para USUARIOS:

* *

⁹⁹² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Algunos de estos reportes elaborados por [DUN] son 'Comprehensive Insight Plus Report', 'Business Information Report', 'Credit eValuator Plus Report' y 'DNBi CreditAdvisor'".

⁹⁹³ Folios 871 a 874.

⁹⁹⁴ Folios 5809 a 5937. Al respecto, dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la DGIM el veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 5807 y 5808). El documento se integró previa certificación (folio 5937) en la cual se hizo constar que era copia fiel de la información publicada en la página de Internet: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7BB0D52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pdf>, refiriéndose la fecha en la cual se obtuvo la información. En ese orden de ideas, esta autoridad pudo corroborar que el documento citado se encuentra en la siguiente página de Internet: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B1C74E16B-F3D9-DBA7-6E7E-80C130C76599%7D.pdf>, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.

⁹⁹⁵ Folio 5802.

⁹⁹⁶ En el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: "[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] ANEXO 3.2 Se describen los productos que ofrecen las SIC diferenciando entre los productos destinados a los USUARIOS y a los CLIENTES. [...]", reconociendo el contenido de dicho anexo.

**

38. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto⁹⁹⁷ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,⁹⁹⁸ del cual se desprende un archivo electrónico en formato ".xls" denominado "3.2" en el cual se advierten los productos básicos y de valor agregado de PF y/o PM que ofrece CC.

39. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre otras cuestiones, la CNBV describió los productos ofrecidos por las SIC.⁹⁹⁹ Al respecto, de la respuesta proporcionada por la CNBV se desprende, respecto de la existencia de productos de valor agregado de CC, que

**

B.6 Fracción VI del artículo 59 de la LFCE:

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe considerarse, entre otras cuestiones: "*Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [...]*".

Asimismo, el artículo 8 de las DR señala lo siguiente:

"Artículo 8. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, se deben considerar los criterios siguientes:

- I. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;
- II. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación, y
- III. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores al acudir a otros proveedores".

⁹⁹⁷ Folio 1315.

⁹⁹⁸ Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826), emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE; y el escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 [...], en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 1149).

⁹⁹⁹ La respuesta que se refiere fue proporcionada por la CNBV en el "Anexo Productos" (folios 666 a 675); no obstante, en el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: "se adjuntan al presente Oficio de respuesta, 31 anexos que contienen las respuestas solicitadas en cada uno de los 29 numerales del Anexo Único del Oficio de referencia [...]" (folio 649), reconociendo la autoría de dicha respuesta.

¹⁰⁰⁰ Dicha información es consistente con lo que señala BANXICO, Folios 598 y 599. De conformidad con dichos elementos, CC [REDACTED] sin embargo, [REDACTED]

**

En este caso, de conformidad con los elementos de convicción previamente analizados:¹⁰⁰¹ (i) la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada por la ausencia de sustitutos factibles; (ii) las SIC sólo pueden abastecerse de la IC aportada por los USUARIOS o por la otra SIC; (iii) CC no tiene una participación significativa en el MR de PM; (iv) no es posible importar o comercializar la información desde otras regiones o países; (v) para CC no existe alternativa más que acudir a DUN para acceder a la IC de los USUARIOS que no están afiliados a CC, por lo que los costos de recurrir a una alternativa, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.

Conclusiones respecto al PS en el MR DE PM

Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que los **elementos aportados por la ciencia** que fueron presentados por DUN y TUM y CC: (i) contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de información formulados por la DGIM durante la investigación del EXPEDIENTE; (ii) es posible atribuir el contenido de dicha información a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y (iii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Asimismo, el **elemento aportado por la ciencia** que fue aportado por BANXICO: (i) se trata de información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO para presentarla ante esta COFECE; y (ii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Ahora bien, del análisis de los elementos de convicción que sustentan la existencia del PS, se advierte que de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince DUN contó con PS en el MR DE PM, de conformidad con lo siguiente:

A. Fracción I del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se desprende que de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince, DUN contó con una elevada participación en el MR DE PM y con la capacidad de restringir el abasto en la recopilación y procesamiento de IC, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder.¹⁰⁰²

Al respecto, de conformidad con la LRSIC: (a) la BD de las SIC se integra con la información que le proporcionan sus USUARIOS; (b) únicamente las SIC pueden realizar la prestación de servicios de recopilación, manejo, envío o entrega de IC y pueden proporcionarles dicha información a sus USUARIOS; (c) las SIC no pueden impedir a sus USUARIOS que proporcionen

¹⁰⁰¹ Véase el análisis del resto de las fracciones del artículo 59 de la LFCE; así como el análisis de las fracciones del artículo 58 de la LFCE, que se realiza en el presente apartado de "Valoración y alcance de las pruebas".

¹⁰⁰² El análisis también considera la existencia de barreras a la entrada y las economías de escala y de red presentes en el mercado. Si bien la existencia de barreras a la entrada y las economías de escala y de red no se prueban en esta fracción, si se advierten de lo señalado en las otras fracciones relacionadas con el análisis de PS. En su conjunto, los elementos referidos en el DPR permiten concluir que DUN efectivamente cuanta con la capacidad para restringir el abasto.

o soliciten información a otras SIC; y (d) las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les proporcionen su IC.

Ahora bien, con la documental pública proporcionada por DUN (prueba 12), se prueba plenamente que dicho agente económico se constituyó mediante escritura de **

Asimismo, de los elementos aportados por la ciencia que fueron proporcionados por DUN y CC (pruebas 13 a 15) se desprende que DUN tuvo cuotas de mercado bastante elevadas, en comparación con CC de dos mil doce a dos mil quince, considerando el número promedio anual de registros, el número promedio anual de expedientes y el número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM. Asimismo, se desprende que ** el número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM de ambas SIC.¹⁰⁰³

Año	Promedio mensual por año de CLIENTES con HC en la BD de PM (miles de expedientes)		Participaciones de mercado	
	DUN	CC	DUN	CC
2012	* *			
2013				
2014				
2015 (parcial)				
Promedio				

Año	Promedio mensual por año de créditos registrados en la BD de PM (miles de registros)		Participaciones de mercado	
	DUN	CC	DUN	CC
2012	* *			
2013				
2014				
2015 (parcial)				
Promedio				

Año	USUARIOS que adquirieron algún producto para PM cada año			Participaciones de mercado		
	Sólo DUN	Sólo CC	Ambas SIC	Sólo DUN	Sólo CC	Ambas SIC
2012	* *					
2013						
2014						
2015 (parcial)						
Promedio						

¹⁰⁰³ Las cifras referidas son similares a las referidas en el DPR; sin embargo, al verificar la información que obra dentro del EXPEDIENTE se observa que las cifras no coinciden exactamente con las señaladas en el DPR. La variación en las cifras no altera las conclusiones.



50037

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Por su parte, de las pruebas 16 y 17 se desprenden pronunciamientos realizados en trabajos de investigación (uno de la COFECE, otro de BANXICO y otros), respecto de que el sector de la IC exhibe efectos de red. Asimismo, de la prueba 17 se desprende un pronunciamiento en un trabajo de investigación de que existen economías de escala en el mercado de IC. Dichas pruebas se administran entre sí y además son consistentes con lo señalado por el propio DUN en el PSFJ, quien afirmó la existencia de economías de escala y de economías de red en el mercado de IC.

Asimismo, de la prueba 18 se desprende que los principales accionistas de DUN son diversos bancos.

Por último, de las pruebas 19 y 20 se desprende que [REDACTED] B [REDACTED] para los USUARIOS de CC y DUN en los contratos marco de dichas SIC.

B. Fracción II del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se desprende la existencia de las siguientes barreras a la entrada para el MR DE PM: (a) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (b) la posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos; (c) las restricciones normativas, ya que se requiere por lo menos [REDACTED] para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC; (d) la presencia de economías de red; y (e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales usuarios.

De conformidad con la LRSIC: (i) las actividades de recopilación, procesamiento y comercialización de IC están integradas en las SIC; y (ii) la SIC deben contar con autorización para operar, para lo cual deben realizar una solicitud que cumpla con lo señalado en dicha normativa.

Asimismo, de las resoluciones que son un hecho notorio para esta autoridad¹⁰⁰⁴ se desprende que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado, sólo CC y DUN contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM.

Respecto de la inversión requerida para establecer una SIC, de las documentales públicas proporcionadas por la CNBV y BANXICO (pruebas 21 a 23), se desprenden: (a) los costos que una SIC debe cubrir por concepto de inspección y vigilancia; (b) la inversión necesaria para poner en marcha una SIC; y (c) el capital social mínimo íntegramente suscrito con el que debe contar una SIC para su constitución. De dichos datos se desprende que la inversión requerida

¹⁰⁰⁴ En específico: (i) la "Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad de información crediticia que se denominará Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia"; (ii) la "Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información crediticia"; (iii) la "RESOLUCION por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad de información crediticia, que se denominará Trans Union de México, S.A."; (iv) la "RESOLUCION por la que se autoriza la organización y operación de una sociedad de información crediticia que se denominará Dun & Bradstreet, S.A."; (v) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo"; y (vi) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo".

Eliminado: cinco palabras.

para que una SIC entre al mercado es de al menos [REDACTED] **
[REDACTED] ¹⁰⁰⁵ sin considerar la posibilidad de que el capital social se utilice para sufragar alguno
de los otros costos. Adicionalmente, de la prueba 24 presentada por DUN se desprende que
en dos mil catorce DUN erogó por conceptos de [REDACTED] **
[REDACTED] la cantidad de [REDACTED] **

Por su parte, respecto de la posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los
costos, al analizar conjuntamente las pruebas 26 y 27 (b), se desprende que considerando los
costos y ventas de DUN para dos mil catorce, se requiere comercializar anualmente [REDACTED] **
[REDACTED] RC de PM para alcanzar el punto de equilibrio de la
rentabilidad. Asimismo, al analizar las cifras de la prueba 27 (b) y 29, se advierte que en dos
mil catorce se comercializaron [REDACTED] ** de RC de PM, ¹⁰⁰⁶ por lo que se requeriría una
participación de mercado de [REDACTED] ** con los datos del dos mil
catorce para ser rentable. Por último, de la prueba 29 se desprende que de dos mil doce a dos
mil catorce CC [REDACTED] **

Respecto de los vínculos accionarios que existen entre las SIC y sus USUARIOS, de las pruebas
27 (a) y 28 se desprende que tanto CC como DUN son propiedad mayoritariamente de sus
USUARIOS. Asimismo, de la prueba 30 se advierte que [REDACTED] **

* *

Adicionalmente, respecto de las restricciones normativas, de las pruebas 27 y 31 se advierte
que [REDACTED] **

[REDACTED] **, mientras a CC le tomó B iniciar operaciones.

Por último, respecto de la presencia de economías de red, de las pruebas 32 y 33 se advierten
diversos trabajos de investigación (uno de la COFECE y otro de BANXICO) de los cuales se
desprenden pronunciamientos de que en el mercado de IC existen economías de red. Lo
anterior fue afirmado por el propio DUN en el PSFJ.

C. Fracción III del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE,
se desprende que en el año dos mil catorce el MR DE PM se encontraba muy concentrado y
que CC (el único competidor de DUN) no representó competencia en el segmento de PM y
no contrarrestó el poder de DUN.

En específico, de los elementos aportados por la ciencia que fueron proporcionados por DUN
y CC (pruebas 13 a 15) se desprende que DUN tuvo cuotas de mercado bastante elevadas en

¹⁰⁰⁵ En específico, [REDACTED] **
[REDACTED] Cantidad que resulta de sumar: (a) los costos que una SIC debe cubrir por concepto de inspección y vigilancia; (b) la
inversión necesaria para poner en marcha una SIC; y (c) el capital social mínimo íntegramente suscrito con el que debe contar
una SIC para su constitución.

¹⁰⁰⁶ En específico, se comercializaron [REDACTED] ** RC de PM.

comparación con CC de dos mil doce a dos mil quince, ya que en dicho periodo contó con el [REDACTED] del promedio anual de registros, con el [REDACTED] del promedio anual de expedientes y con el [REDACTED] de USUARIOS que adquirieron de manera exclusiva productos de IC de PM de DUN.¹⁰⁰⁷

Adicionalmente, tomando las cifras de dos mil catorce, se desprende un IHH de [REDACTED] cuando se mide el promedio anual de expedientes (CLIENTES con HC) y de [REDACTED] cuando se mide el promedio anual de registros (créditos registrados en la BD de PM).¹⁰⁰⁸

D. Fracción IV del artículo 59 de la LFCE: de la prueba 34 advierte un indicio de que, para poder participar en el mercado, las SIC requieren acceso total a la información de los otorgantes de crédito.

En términos de la LRSIC, las SIC pueden abastecerse de IC de forma directa (de los USUARIOS) o de forma indirecta (mediante el intercambio con la otra SIC).

Adicionalmente, de la LRSIC se desprende que los USUARIOS son simultáneamente proveedores y consumidores de las SIC, por lo que, en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD previsto en dicha normatividad, y el análisis de rentabilidad realizado en la fracción II del artículo 59 de la LFCE,¹⁰⁰⁹ las SIC requieren afiliar a suficientes USUARIOS para recibir su IC y venderles sus productos.

De igual forma, de las pruebas 13 y 15 se desprende que la mayor parte de los USUARIOS consumen productos de DUN y [REDACTED] de USUARIOS acude a ambas SIC, por lo que CC puede acceder a una menor cantidad de información de manera directa.

Ahora bien, de la prueba 35 se desprende que de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince DUN realizó el [REDACTED] de las consultas en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, pues comercializa la mayor parte de los RC de PM. En específico, de las [REDACTED] consultas que se realizaron, [REDACTED] fueron realizadas por parte de DUN a CC, y [REDACTED] consultas fueron realizadas por parte de CC a DUN. De igual forma, en ningún mes de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince el porcentaje de consultas realizado por DUN es menor al [REDACTED]

E. Fracción V del artículo 59 de la LFCE: De los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se advierte un pronunciamiento (prueba 36) por parte de BANXICO respecto del pobre desarrollo de productos de valor agregado por parte de las SIC en México, principalmente respecto de PM. Adicionalmente, de las pruebas 37, 38 y 39, se desprenden los productos de

¹⁰⁰⁷ Como se indicó previamente, las cifras referidas son similares a las referidas en el DPR; sin embargo, al verificar la información que obra dentro del EXPEDIENTE se observa que las cifras no coinciden exactamente con las señaladas en el DPR. La variación en las cifras no altera las conclusiones.

¹⁰⁰⁸ Se remite a la nota al pie anterior respecto de las variaciones observadas respecto de las cifras contenidas en el DPR.

¹⁰⁰⁹ Al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

valor agregado ofrecidos por DUN y CC. Si bien con dicha información puede advertirse el comportamiento de DUN y CC en el MERCADO RELACIONADO, no logra probarse que el número de productos de valor agregado refleja un bajo desarrollo en el mercado.

F. Fracción VI del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se desprende que:¹⁰¹⁰ (i) la IC que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el MR DE PM pues carece de sustitutos cercanos, siendo que las SIC sólo pueden abastecerse de los USUARIOS o de la otra SIC; (b) no es posible importar o comercializar la información desde otras regiones o países; y (c) los únicos proveedores de IC son los USUARIOS y la otra SIC, por lo que CC sólo puede acceder a la IC de los USUARIOS que no están afiliados a CC, a través de DUN; por lo que los costos de recurrir a una alternativa, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.

Asimismo, se desprende que CC no tiene una participación significativa en el MR DE PM.

C. Pruebas relativas a la Conducta de DUN

El DPR sustenta en el artículo 36 de la LRSIC: (i) la obligación de proporcionar la totalidad de la BPD a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se solicite; (ii) la obligación de las SIC de acordar los estándares, condiciones, procedimientos y las cantidades a pagar entre sí como resultado del intercambio de la información de la BPD y de presentar dichos acuerdos a la CNBV para su autorización; y (iii) que la BPD se encontraba y encuentra disponible y es normalmente ofrecida a terceros.

Asimismo, sustenta en el artículo 36 bis de dicha normativa: (i) la obligación de las SIC de compartir IC a la otra SIC para que esta última pueda emitir RC y RCE con la información que se encuentre en sus BD y en las BD de las demás SIC; (ii) que el envío de dicha IC debe efectuarse de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los USUARIOS; y (iii) que el SEGMENTO CO debe proporcionarse para elaborar un RC de PM.

Por último, sustenta en los artículos 19 y 62 de la LRSIC las sanciones relacionadas con los artículos 36 y 36 bis de dicha normativa, en específico la posibilidad de que les sea revocada la autorización o que se les imponga una multa a las SIC que omitan transmitir su información a otras sociedades o que la entreguen de manera incompleta o distorsionada.

La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probada por ser de orden público.¹⁰¹¹

Asimismo, son un **hecho notorio** para esta autoridad: (i) la "Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información

¹⁰¹⁰ Véase el análisis del resto de las fracciones del artículo 59 de la LFCE; así como el análisis de las fracciones del artículo 58 de la LFCE, que se realiza en el presente apartado de "Valoración y alcance de las pruebas".

¹⁰¹¹ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJJ, antes citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

crediticia";¹⁰¹² (ii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo";¹⁰¹³ y (iii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo".¹⁰¹⁴ De dichas resoluciones se desprende que: (a) en abril de dos mil doce se modifica la autorización otorgada a CC para que dentro de su objeto se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM; y (b) en junio de dos mil nueve se modifican las autorizaciones otorgadas a TUM y DUN para que TUM únicamente tenga dentro de su objeto recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF y DUN únicamente relativa a PM y PFAE.

De igual forma, son un **hecho notorio** para esta COFECE la exposición de motivos de la LRSIC¹⁰¹⁵ y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la LIC, de la LRSIC, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México,¹⁰¹⁶ de los cuales se desprende, respectivamente, lo siguiente:

"Por otra parte, se busca la posibilidad de que exista intercambio de la información contenida en la base de datos entre distintas Sociedades.

En conclusión, las intenciones que motivan la presente Iniciativa son evitar injusticias cometidas contra los usuarios de la banca y demás entidades por el uso injustificado de la información crediticia, a fin de dar seguridad jurídica a quienes obtienen financiamiento, así como constituir las condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte y, cumplir con el pago por la otra, así como posibilitar la modificación de los errores existentes en la base de datos, establecer criterios homogéneos en cuanto a la interpretación y modificación de la información contenida en el reporte correspondiente, evitar errores en los propios reportes de crédito, publicar los procedimientos y mecanismos para modificar las bases de datos, así como para proteger los derechos e intereses de las personas que se encuentran en dichas bases de datos, a fin de otorgarles seguridad y certeza jurídica en las operaciones que realicen, así como, constituir las

¹⁰¹² Publicada en el DOF el veinte de abril de dos mil doce, disponible en la página de Internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244582&fecha=20/04/2012, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

¹⁰¹³ Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094022&fecha=10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

¹⁰¹⁴ Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094021&fecha=10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

¹⁰¹⁵ Iniciativa del "SEN. ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA", presentada ante la Cámara de Senadores el treinta y uno de octubre de dos mil uno, disponible en la página de Internet: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2001/10/asun_1379_20011031_841502.pdf, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

¹⁰¹⁶ Consultado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del once de febrero de dos mil diez, número 2947-V, disponible en la página de Internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100211-V.html>, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte, y cumplir con el pago de la otra, lo cual sólo se logrará teniendo un sistema financiero sano y equilibrado que no vuelva a quebrantarse. Las operaciones crediticias deben de reactivarse si se quiere un desarrollo económico sustentable, y las condiciones para que ello se dé deben depurarse, pues de lo contrario, cualquier estadística de mejoría económica será siempre ilusoria. Los sectores productivos y financiero serán provechosos en la medida en que pacten sanas prácticas económicas por ambas partes [énfasis añadido]”.

“La nueva normatividad en materia de Sociedades de Información Crediticia, tiene como finalidad resolver el problema de competencia que actualmente existe entre este tipo de sociedades.

Por ello se considera que la alternativa de obligar a las sociedades de información crediticia a emitir reportes que consoliden la información de otras sociedades de ese mismo tipo, elimina las barreras a la competencia y la asimetría en la información entre los reportes que emite cada una [énfasis añadido]”.

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar la imputación:

40. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre otras cuestiones, la CNBV manifestó que a la fecha del PRIMER DESAHOGO CNBV se encontraban autorizadas y en operación únicamente TUM, DUN y CC, al tenor de lo siguiente:¹⁰¹⁷

“[...]

Anexo 18

18. En términos del Art. 6 de la LRSIC señale si a la fecha la CNBV ha emitido opinión alguna con respecto a autorizaciones para la constitución de una nueva SIC [...]

**

han sido debidamente autorizadas y se encuentran en operación: Trans Union de México, S.A, Dun & Bradstreet, S.A. y Circulo de Crédito, S.A. de C.V. [...]

[...]”.

41. Documental privada consistente en el escrito presentado en la OFICIALÍA el seis de enero de dos mil dieciséis por CC.¹⁰¹⁸

¹⁰¹⁷ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por la CNBV en el “ANEXO 18” (folios 708 a 712) y en el “ANEXO 21” (folios 717 y 718); no obstante, en el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: “se adjuntan al presente Oficio de respuesta, 31 anexos que contienen las respuestas solicitadas en cada uno de los 29 numerales del Anexo Único del Oficio de referencia [...]” (folio 649), reconociendo la autoría de dicha respuesta.

¹⁰¹⁸ Folios 23539 a 23566 y sus anexos en los folios 23567 a 23680. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826), emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE y al acuerdo emitido por la DGIM el nueve de noviembre de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 22817 a 22830).

41 (a). Como anexo a dicha documental privada, CC presentó copia simple o impresión¹⁰¹⁹ del: (i) acuse de la solicitud realizada por CC a DUN para el intercambio de la BPD, la cual

** y (ii)

primer testimonio del instrumento notarial número sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta, otorgado ante la fe del titular de la Notaría número doscientos veintisiete del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el cual consta ***

*** A continuación se transcribe una sección de la solicitud realizada por CC a DUN para el intercambio de la BPD:



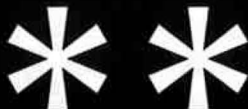
[...]"¹⁰²¹

¹⁰¹⁹ Las copias simples que se refieren fueron proporcionadas por CC en el "Anexo 1.1" (folios 23599 a 23617) del escrito antes citado, el cual señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM[sic]-2016-028 (el 'Oficio') y el reiteramiento de fecha 9 de noviembre de 2015, notificado el 9 de diciembre del mismo año (el 'Reiteramiento') suscritos por el [DGIM] [...], en debido tiempo y forma [...] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...]" (folios 23539).

¹⁰²⁰ El contenido de dicha copia simple o impresión coincide con la documental privada proporcionada por la CNBV mediante el SEGUNDO DESAHOGO CNBV referida como "El escrito de solicitud, con fecha de [...]"; así como con el contenido de la copia simple o impresión de la solicitud realizada por CC a DUN para el intercambio de la BPD, presentada por DUN.

¹⁰²¹ Folios 23599 y 23600.

41 (b). Asimismo, como anexo a la documental privada referida CC presentó copia simple o impresión¹⁰²² del: (i)



... [Énfasis añadido]¹⁰²⁴

42. Documental pública consistente en el SEGUNDO DESAHOGO CNBV, mediante el cual, la CNBV adjunta "3 documentos en copia certificada" para dar contestación a la información requerida por la COFECE relativa a "

**

¹⁰²² Las copias simples o impresiones que se refieren fueron proporcionados por CC en el "Anexo 1.2" (folios 23619 a 23624) del escrito antes citado, el cual señala lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM[sic]-2016-028 (el 'Oficio') y el reiteramiento de fecha 9 de noviembre de 2015, notificado el 9 de diciembre del mismo año (el 'Reiteramiento') suscritos por el [DGIM] [...], en debido tiempo y forma [...] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...]" (folios 23539).

¹⁰²³ El contenido de dicha copia simple o impresión coincide con la documental privada proporcionada por la CNBV mediante el SEGUNDO DESAHOGO CNBV referida como "El escrito de solicitud" [...]

¹⁰²⁴ El contenido de dicha copia simple o impresión coincide con la documental privada proporcionada por la CNBV mediante el SEGUNDO DESAHOGO CNBV referida como "[e]l Oficio Número [...]"]

**

42 (a). Como anexo al SEGUNDO DESAHOGO CNBV, la CNBV presentó las documentales privadas consistentes en las copias certificadas de: (a) el documento identificado por la CNBV como "El escrito de solicitud, con fecha de

"", del cual se desprende que ¹⁰²⁵ y (b) el documento identificado por la CNBV como "El escrito de solicitud

**

"", del cual se desprende que ¹⁰²⁶

42 (b). Adicionalmente, como anexo al SEGUNDO DESAHOGO CNBV, la CNBV presentó la documental pública consistente en "[e]l Oficio Número ¹⁰²⁷ en el que la CNBV proporciona respuesta

"", de la cual se desprende que la CNBV manifestó que:

* *

43. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC, ¹⁰²⁸ del cual se desprende que CC manifiesta que

**

"", Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:

"[...]

4.3 En términos del artículo 36 de la LRSIC, ¿cuáles son los estándares, condiciones y procedimientos seguidos por las SIC's para el intercambio de la BPD así como para la consulta

¹⁰²⁵ Folios 23508 y 23509.

¹⁰²⁶ Folios 23510 y 23511.

¹⁰²⁷ Folios 23512 a 23515.

¹⁰²⁸ Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028, emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 809 a 826); y el escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [...] mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 [...], en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 1149).

de información adicional distinta a la existente en la BPD? Explique el mecanismo empleado en cada caso, indique si existe un formato (físico y/o electrónico) estandarizado y, en caso de ser así, proporcione el mismo. Señale cuál es la periodicidad establecida para dicho intercambio.

Con respecto al término establecido por el artículo 36 de la LRSIC, la información debe ser proporcionada dentro de los quince días naturales siguientes al mes en que se haya realizado la citada captura de información, diga si efectivamente se cumple y en caso de no ser así, las razones por las cuales no se da cumplimiento al mismo.

RESPUESTA:

[...]

[...] [Enfasis añadido]"¹⁰²⁹

44. **Documental privada consistente en el ESCRITO DUN,**¹⁰³⁰ del cual se desprende que DUN reconoce que [...] Al respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

"[...]

Transcripción de numeral 4.4- En términos del artículo 36 de la LRSIC, ¿Cuáles son los estándares, condiciones y procedimientos seguidos por las SIC'S para el intercambio de la BPD así como para la consulta de información adicional distinta a la existente en la BPD? Explique el mecanismo empleado en cada caso, indique si existe un formato (físico y/o electrónico) estandarizado y en caso de ser así proporcione el mismo. Señale cuál es la periodicidad establecida para dicho intercambio.

Con respecto al término establecido por el artículo 36 de la LRSIC, respecto de que la información debe ser proporcionada dentro de los quince días naturales siguientes al mes en que se haya realizado la citada captura de información, diga si efectivamente se cumple y en caso de no ser así, las razones por las cuales no se da cumplimiento al mismo.

¹⁰²⁹ Folios 1181, 1182 y 1186.

¹⁰³⁰ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "ANEXO 4.4" (folios 4767 a 4892) y el "ANEXO 4.6" (folios 4895 a 4897), cuya autoría fue reconocida por dichos agentes económicos de conformidad con lo siguiente: "En cumplimiento a lo establecido en el Requerimiento, se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: [...] ----- 4. Relación entre SIC'S [...] ----- 4.4 Se proporciona información respecto a los estándares, condiciones y procedimientos seguidos por las SIC para el intercambio de la BPD así como para la consulta de información adicional distinta a la existente en la BPD. [...] ----- ANEXO 4.6 Se proporciona el número de registros de la BPD compartidos por las SIC con otras SIC'S en el mercado mensualmente durante el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento. Desglose por tipo de persona física y moral" (folios 2121, 2124 y 2125).

**

[...]

Transcripción de numeral 4.6- Proporcione el número de registros de la BPD compartidos por TUM y DUN con otras SIC'S en el mercado mensualmente durante el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del presente oficio. Desglose por tipo de persona física y moral.

**

[...]”¹⁰³¹

44 (a). Como anexo al ESCRITO DUN, DUN y TUM presentaron las documentales privadas consistentes en el cotejo notarial del CONTRATO DE INTERCAMBIO¹⁰³² y de sus respectivos convenios modificatorios,¹⁰³³ de las cuales se desprende que: (i) El CONTRATO DE INTERCAMBIO

**

45. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el once de febrero de dos mil dieciséis por TUM y DUN,¹⁰³⁴ del cual se desprende que DUN reconoció que: (i)

**

Asimismo,

mediante dicho documento DUN manifiesta que:

**

¹⁰³¹ Folios 4767, 4768, 4895 y 4896.

¹⁰³² Folios 4527 a 4577. Dicho cotejo fue realizado por el Titular de la Notaría número doscientos dos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el trece de mayo de dos mil quince.

¹⁰³³ Folios 4578 a 4587, 4588 a 4597 y 4598 a 45607. Dichos cotejos fueron realizados por el Titular de la Notaría número doscientos dos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el trece y diecinueve de mayo de dos mil quince.

¹⁰³⁴ Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-008, emitido por la DGIM el catorce de enero de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE (23773 a 23781). Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el “ANEXO 2” (folios 24895 a 24903) del escrito antes mencionado, en el cual dichos emplazados reconocieron la autoría de dicho documento de conformidad con lo siguiente: “En cumplimiento a lo establecido en el Requerimiento, [...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: - - - - [...] ANEXO 2 Se realizan manifestaciones respecto de si [CC], ha realizado solicitudes, ya sea en forma escrita o verbal, a DUN en la que le haya solicitado el intercambio de la BPD” (folios 24888 y 24889).

**

**

Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:

"[...]"

ANEXO 2

Número de Oficio- COFECE-AL-DGIM-2016-008

Número de Anexo- Anexo 2

Transcripción de numeral 2- Señale si a la fecha [CC] ha presentado o hecho alguna solicitud, sea en forma escrita o verbal, a DUN en la que le haya solicitado el intercambio de la BPD. En caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, que exista solicitud, exhiba copia simple tanto del documento presentado como de la respuesta recaída al mismo por parte de DUN; ahora bien, en caso de que no haya dado respuesta, mediando solicitud, explique las razones por las que DUN ha omitido u omitió dar respuesta a, [sic] [CC].

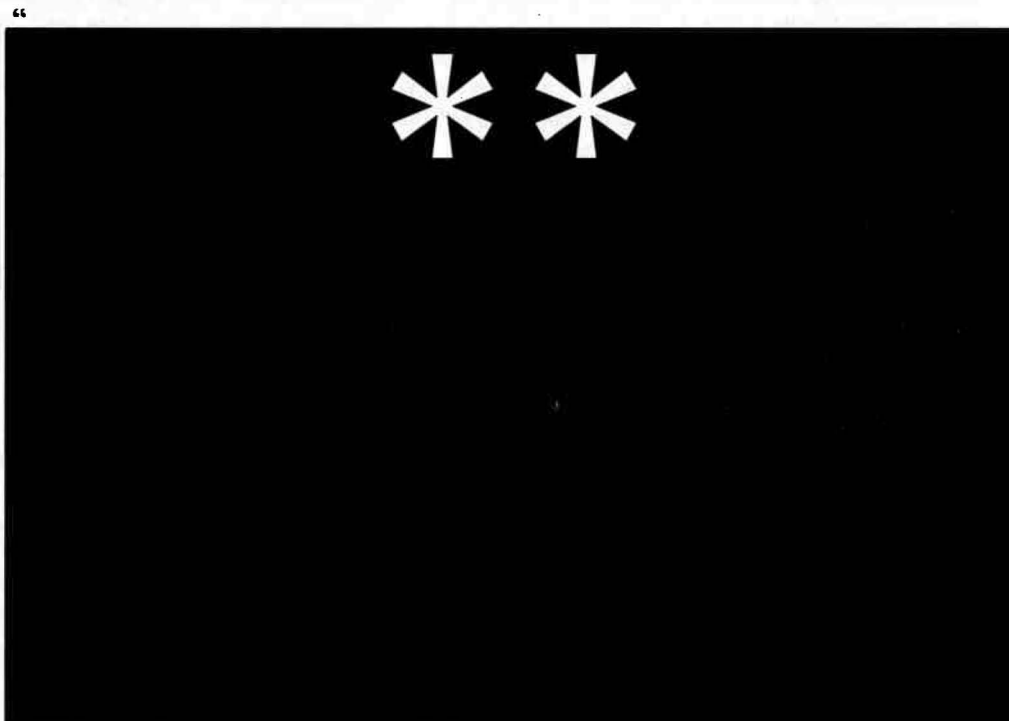
[...]".¹⁰³⁵

¹⁰³⁵ Folios 24896 y 24897.

45 (a). Adicionalmente, DUN y TUM anexaron a su respuesta las copias simples o impresiones de:



[...]"¹⁰³⁷ Al respecto, la copia simple o impresión de la solicitud señala lo siguiente:



[...]"¹⁰³⁸

46. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el seis de junio de dos mil dieciséis por CC,¹⁰³⁹ del cual se desprende que CC manifestó que:



¹⁰³⁶ Folios 24898 y 24899.

¹⁰³⁷ Folio 24900.

¹⁰³⁸ Folios 24898 y 24899. El contenido de dicha solicitud coincide con los documentos presentados por CC y por la CNBV.

¹⁰³⁹ Folios 25114 a 25122 y sus anexos en los folios 25123 a 25227. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-128, emitido por la DGIM el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE (folios 25083 a 25091); y el escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 9 de mayo de 2016, [...] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada [...]" (folio 25114).

**

Al respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

"[...]

2. Mencione si la compartición de información a que se refiere en artículo 36 Bis de la LRSIC se ha cumplido en su totalidad, bajo el principio de reciprocidad.

RESPUESTA:

Se hace del conocimiento de esa Comisión

**

En caso de que su respuesta sea negativa:

a) Precise la fecha en la cual haya advertido la existencia de incumplimiento, omisión o inconsistencia en la compartición de la información que debe estar contenida en el denominado RC, manifestando en qué consiste y de dónde deriva (legal y contractualmente hablando) dicho incumplimiento, omisión o inconsistencia.

RESPUESTA:

A efecto de desahogar el presente inciso, se hace del conocimiento de esa Comisión que

**

b) Precise el o los campos o variables que han sido omitidas, incumplidas o donde se hayan detectado inconsistencias llevadas a cabo por parte de las otras SIC's.

RESPUESTA:

Como se señaló en el inciso anterior,

**

**

c) Señale si hizo del conocimiento las omisiones, incumplimiento o inconsistencias a las otras SIC's. En caso de ser así, acompañe copia certificada del escrito o medio de comunicación por el cual hizo del conocimiento dicha situación.

RESPUESTA:

Se hace del conocimiento de esa Comisión que

**

**

d) En caso de que las otras SIC's hubieren dado contestación al comunicado señalado en la pregunta anterior, favor de presentar copia certificada de dicha contestación.

RESPUESTA:

Se informa a esa Comisión que

**

e) Señale si hizo del conocimiento de alguna autoridad las omisiones, incumplimientos o inconsistencias de las otras SIC's. Acompañe copia certificada del escrito o medio de comunicación por el cual hizo del conocimiento dicha situación, así como la contestación que en su caso le recayó.

RESPUESTA:

A efecto de desahogar el presente inciso se adjunta como ANEXO 2 copia certificada del correo electrónico enviado al

**

[...]”¹⁰⁴⁰

46 (a). Como “ANEXO 2”¹⁰⁴¹ del escrito referido, CC presentó el elemento aportado por la ciencia¹⁰⁴² consistente en el correo electrónico con anexos enviado a la cuenta de correo electrónico “

” del cual se desprende el siguiente texto: “

”. Asimismo, adjuntos a dicho correo electrónico se advierten dos documentos en formato “pdf” que contienen, respectivamente,

**

Al respecto,

señalan lo siguiente:

**

**

¹⁰⁴⁰ Folios 25114 y 25117 a 25119.

¹⁰⁴¹ Folios 25197 a 25214.

¹⁰⁴² Al tratarse de la reproducción certificada por el titular de la notaría doscientos veintisiete de la Ciudad de México.



[...]”¹⁰⁴⁴

46 (b). Por otra parte, de la copia simple o impresión del CONTRATO DUN Y CC de ^{**}
^{**} ⁰⁴⁵ se desprende lo siguiente:



¹⁰⁴³ Folios 25198 y 25201.

¹⁰⁴⁴ Folios 25204 y 25205.

¹⁰⁴⁵ Folios 25125 a 25161. Dicho documento también se encuentra disponible bajo el archivo electrónico en formato “.pdf” denominado “Contrato Dun”, que obra en el disco compacto que se encuentra en el folio 25226, el cual fue exhibido como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el seis de junio de dos mil dieciséis por CC.



10 055

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET



Eliminado: seis párrafos.



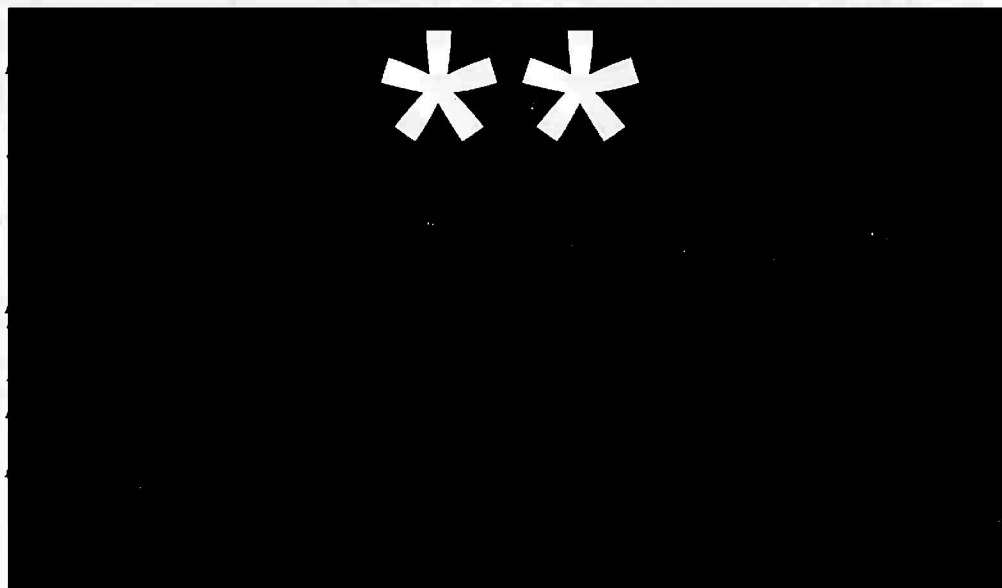
COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA

50056

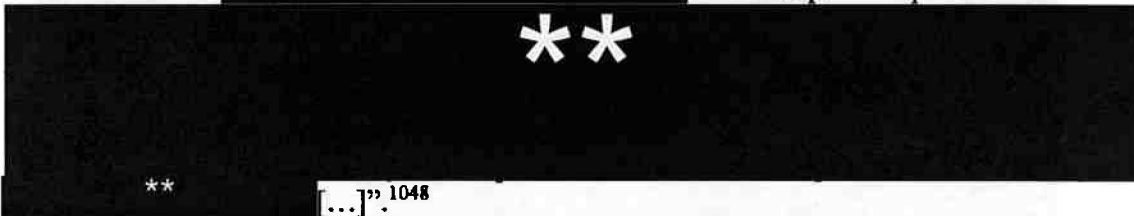
Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET



Eliminado: once párrafos.



46 (c). Además, de la cláusula sexta de la copia simple o impresión del CONTRATO TUM Y CC celebrado el ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ se desprende que la información



47. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis por CC,¹⁰⁴⁹ del cual se desprende que la AI solicitó más RC a CC en los que se pudiera apreciar la inconsistencia relativa al SEGMENTO CO, a lo cual CC manifestó que ¹⁰⁴⁸

¹⁰⁴⁹ Al respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

¹⁰⁴⁶ Folios 25130 a 25139.

¹⁰⁴⁷ Folios 25162 a 25194. Dicho documento también se encuentra disponible bajo el archivo electrónico en formato ".pdf" denominado "Contrato con Trans Union", que obra en el disco compacto que se encuentra en el folio 25226, el cual fue exhibido como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el seis de junio de dos mil dieciséis por CC.

¹⁰⁴⁸ Folio 25177.

¹⁰⁴⁹ Folios 25286 a 25294 y sus anexos en los folios 25295 a 25362. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-128, emitido por la DGIM el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE (folios 25083 a 25091) y al acuerdo emitido por la DGIM el diez de junio de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE (folios 25268 a 25271). El escrito referido señala, entre otras cosas, lo siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 9 de mayo de 2016 (el 'Requerimiento') y al reiteramiento de fecha 10 de junio de 2016, [...] se propone la siguiente información y documentación solicitada" (folio 25286).

"[...] se reitera a [CC] para que adjunte copia certificada de cuando menos dos [RC] por mes, en donde conste la omisión o incumplimiento, correspondientes al periodo del treinta de agosto de dos mil trece a la fecha de emisión del presente acuerdo.

RESPUESTA:

Se hace del conocimiento de esa Comisión que mi representada se encuentra imposibilitada de cumplir con lo que se le requiere por los siguientes motivos:

- a) Esa H. Comisión no indica el nombre de la persona o personas de quien requiere se emitan los [RC], lo cual representa un impedimento para [CC] ya que de emitir un Reporte de una persona sin que medie un mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal del procedimiento, en caso de que mi representada emitiera los Reportes solicitados, estaría cometiendo una violación al artículo 16 Constitucional, artículos 5 y 26 de la LRSIC.

b)

* *

[...]".¹⁰⁵⁰

48. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el cinco de septiembre de dos mil dieciséis por DUN,¹⁰⁵¹ del cual se desprende

* *

siguiente:

"[...]"

ANEXO 3

Número de oficio: COFECE-AI-DGIM-2016-220

Número de anexo: 3

Transcripción del numeral: Manifieste si su representada ha delado de proporcionar a [CC] el segmento de créditos comerciales en la información que le proporciona como consecuencia de la compartición de información a que se refiere el artículo 36 Bis de la LRSIC. En caso de ser afirmativa su respuesta, manifieste la razón por la cual se llevó o ha llevado a cabo por parte de DUN la omisión en la entrega del segmento de información sobre créditos comerciales a [CC] que debiera estar contenida en los RCO's.

¹⁰⁵⁰ Folios 25289 y 25290.

¹⁰⁵¹ Folios 26445 a 26447 y sus anexos a folios 26448 a 26476. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-220 (folios 25387 a 25394), emitido por el DGIM el cuatro de octubre de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE. La respuesta que se transcribe fue proporcionada por DUN en el "ANEXO 3" (folios 26475 y 26476), el cual fue reconocido por DUN de conformidad con lo siguiente: "ANEXO 3 Se realizan manifestaciones y se presenta información respecto de

(folio 26446).

A efecto de dar contestación a lo establecido en el numeral 3 del Anexo Único del Requerimiento, se informa

* *

[...] [Énfasis añadido]¹⁰⁵²

49. **Declaración** de MAGR realizada en la comparecencia celebrada en las oficinas de esta COFECE el dos de marzo de dos mil diecisiete, en su carácter de **A** **A**¹⁰⁵³ mediante la cual señala lo siguiente:¹⁰⁵⁴

"[...]

6. ¿Qué cargo desempeña en esa empresa o empresas?

R.

A

7. Describa las funciones que desempeña en su cargo actual en ambas empresas.

R.

B

8. ¿En qué consiste la coordinación para que las empresas trabajen?

B

[...]

72. ¿Desde cuándo ha participado usted en esta implementación y ejecución de la estrategia comercial en TUM y DUN [sic]

* *

[...]

113. Existe intercambio de [IC] entre las [SIC].

R. Sí

114. ¿Cómo se da este intercambio de [IC]?

R. A través del [RCI] y a través de la [BPD]

115. Entre quiénes se ha dado el intercambio.

* *

116. ¿En qué segmento se ha dado este intercambio de información?

* *

117. Ha realizado [CC] la solicitud a DUN de intercambio de base de la [BPD]

* *

¹⁰⁵² Folios 26475 y 26476.

¹⁰⁵³ Al respecto, el oficio número COFECE-AI-DGIM-2017-028 emitido por la DGIM el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE (folios 27291 a 27297) señala lo siguiente: "[...] se cita al C. [MAGR], para que en su carácter de **A** comparezca personalmente, en las instalaciones de la COFECE [...]" Folio 27295.

¹⁰⁵⁴ Folios 27337 a 27355 y sus anexos en los folios 27356 a 27399 bis 7.

**

119. ¿Participó usted en la reunión referida en su respuesta a la pregunta 117?

R. Sí participé.

120. ¿Quiénes decidieron que era suficiente con el [RCI] la sustitución del intercambio de la [BPD]?

**

121. ¿Quiénes condujeron las negociaciones en dicha reunión?

**

[...]

124. Señale quién o quienes implementaron la decisión de intercambiar la [BPD] para personas físicas con [CC].

**

125. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió, a diferencia de TUM, sustituir la entrega de la [BPD] para [PM] con el [RCI]?

**

[...]

Acto seguido, se le pregunta al compareciente por qué sabe y le consta todo lo manifestado en respuesta a las preguntas realizadas en la presente diligencia de comparecencia por los servidores públicos comisionados. Al respecto, el compareciente indique [sic] que es 'porque trabajo en TUM y DUN como A

[...]".¹⁰⁵⁵

Conclusiones de la comparecencia de MAGR

Como se indicó en el apartado de "Reglas para la valoración de las pruebas" de esta resolución, la comparecencia de MAGR contienen hechos de terceros que, conforme al artículo 101 de las DR, serán valoradas como testimonial.

De la comparecencia anteriormente citada se desprende que MAGR,

A

A manifestó que:

- (i) Existe intercambio de IC entre las SIC, el cual se da a través del RCI y a través de la BPD (preguntas 113 y 114).
- (ii) (preguntas 115 y 116).
- (iii)

¹⁰⁵⁵ Folios 27340 y 27346 a 27353.

(iv)

**

**

(preguntas 117 y 119).

(v)

**

**

(pregunta 125).

Se procede al análisis de los requisitos previstos en el artículo 215 del CFPC:

I. Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y precisión de sus manifestaciones.

En el caso que nos ocupa, no puede actualizarse el elemento previsto en el artículo 215, fracción I del CFPC, consistente en que “[...] los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes”, pues dicho precepto normativo parte de una pluralidad de testigos, y para sustentar la PMR prevista en el artículo 56, fracción V de la LFCE, el DPR usó únicamente la comparecencia de MAGR.

Por lo tanto, MAGR constituyen un testigo singular,¹⁰⁵⁶ pues se refiere a hechos que pudieron ser presenciados por otras personas (como es el caso de empleados de [REDACTED]).

Por otra parte, las manifestaciones de MAGR son claras, precisas y se encuentran vinculadas con hechos que se relacionan con las imputaciones presuntivas de DUN contenidas en el DPR.

II. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

Al respecto, en el acta de comparecencia respectiva se observó que el servidor público que desahogó dicha diligencia le preguntó a MAGR por qué sabía y le constaban los hechos manifestados en la citada acta, a lo cual MAGR indicó que le constaban los hechos narrados

¹⁰⁵⁶ Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJP: a) “**TESTIGO SINGULAR Y TESTIGO ÚNICO. SUS DIFERENCIAS.** En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras de los testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de medio probatorio, pues mientras que la figura del testigo ‘único’ se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presenció o deponente individual habido desde el punto de vista cuantitativo, no obstante, su dicho, si puede estar corroborado con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, etcétera), en cambio, en el caso del testigo ‘singular’, independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas; así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter ‘singular’ se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la ‘singularidad’ y reducido valor convictivo potencial. [énfasis añadido]. Registro: 161,440 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Tomo 3, Noviembre de 2012; Pág. 1947.; b) “**TESTIGO ÚNICO Y TESTIGO SINGULAR. DIFERENCIAS.** En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial. Ahora bien, cuando se desahoga la declaración respectiva, podemos encontrar la figura del testigo único y la del singular, las cuales difieren entre sí en cuanto al número de personas que presenciaron el hecho sobre el cual declaran. En esa tesitura, el testigo singular surge a la vida jurídica cuando existe pluralidad de personas que percibieron la realización de un hecho, pero éste se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de uno de ellos. Mientras que la figura del testigo único se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta en el dicho de la única persona que lo presenció [énfasis añadido].” Registro: 174, 829 [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 1090.



en su comparecencia porque (al momento de su comparecencia) trabajaba en DUN como

A

Asimismo, de los hechos narrados por MAGR se observa que dicha persona física conoció por sí mismo los hechos sobre los que declaró, sin que se observaran inducciones ni referencias de otras personas.

III. Los demás criterios.

Al respecto, DUN no objetó la validez de lo manifestado por MAGR ni su idoneidad. Asimismo, no existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que dicha persona física no tuviera el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibió y declaró. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afectara el consentimiento de MAGR a declarar.

Adicionalmente, no existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que dicha persona fue obligada a declarar o impulsada por engaño, error o soborno.

Por lo que hace a la dependencia de MAGR, dicha persona física claramente indicó que tiene un vínculo laboral con DUN, por lo cual es posible afirmar que se trata de una persona que pudo apreciar los hechos respecto a los cuales declaró por la posición que ocupaba dentro de DUN.

Precisamente por ello, la declaración de MAGR debe ser valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, tomando en consideración los hechos que podría o no afectar los intereses de los declarantes y de su respectiva empresa (como es el caso de DUN). Respecto a los hechos narrados por MAGR que sostienen la imputación presuntiva del DPR de DUN, son elementos que permiten asociar la conducta imputada a dicho agente económico, atendiendo precisamente a que son declaraciones hechas por una persona que tiene un vínculo laboral con DUN.

Conclusiones respecto a la "Conducta"

Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que la prueba 46 (a) que fue presentada por CC: (i) contiene información fiable, en tanto se trata de la reproducción certificada por el titular de la notaria doscientos veintisiete de la Ciudad de México de un correo electrónico; (ii) es posible atribuir el contenido de dicha información a CC, pues fue reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y (iii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Asimismo, el elemento aportado por la ciencia que fue aportado por BANXICO: (i) se trata de información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO para presentarla ante esta COFECE; y (ii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

Eliminado: dos palabras.



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Ahora bien, las pruebas indicadas en los numerales 40 a 49 de esta sección tienen el alcance de probar que DUN omitió proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los cuales se encontraban disponibles y normalmente ofrecidos a terceros, a pesar de la solicitud de CC, como se advierte a continuación:

DUN realizó la conducta unilateral de rehusarse a intercambiar su BPD de PM y el SEGMENTO CO a CC (negativa de proporcionar), quién los solicitó.

De la prueba 40 y las resoluciones que son un hecho notorio para esta autoridad,¹⁰⁵⁷ se desprende que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado (TUM, CC y DUN), sólo CC y DUN contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM.

Por su parte, respecto de la solicitud para intercambiar la BPD y la negativa por omisión de DUN de intercambiarla se desprende lo siguiente:

De la prueba 43 se desprende un pronunciamiento de CC relativo

**

**

Lo anterior, fue corroborado por DUN quien reconoció que el

**

(pruebas 44

y 45); así como por lo manifestado por MAGR (prueba 49). De esta manera, se prueba plenamente la existencia de la solicitud y que DUN omitió compartir su BPD.

Adicionalmente, las manifestaciones anteriores se administran con los documentos presentados por CC (prueba 41 (a) y 41 (b)), la CNBV (prueba 42, 42 (a) y 42 (b)) y DUN (prueba 45 (a)), con los cuales se prueba plenamente que:

**

Lo anterior, no obstante que del artículo 36 de la LRSIC se desprende que el intercambio de la BPD debe realizarse dentro del mes siguiente a la solicitud.

¹⁰⁵⁷ En específico: (i) la "Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de información crediticia"; (ii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo."; y (iii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo".

De igual forma, con el CONTRATO DUN Y CC presentado por DUN (prueba 46 (b)) se prueba que el intercambio de la información entre DUN y CC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, ** por lo que, al administrarse con las pruebas referidas, se prueba que dicho intercambio puntual estuvo vigente hasta un año después de la solicitud de intercambio de la BPD.

Asimismo, al analizar en su conjunto el CONTRATO DUN Y CC y CONTRATO TUM Y CC (pruebas 46 (a) y 46 (b)), presentados por DUN, se prueba que **
**

Por otro lado, respecto de la solicitud del SEGMENTO CO y la negativa de intercambiarlo se desprende lo siguiente:

De la prueba 46 se advierte que CC manifestó que **
** Dicha manifestación se corrobora **
** (prueba 48), el cual prueba plenamente en su contra.

Adicionalmente, dichas manifestaciones se administran con el contenido del correo electrónico enviado **
** de los cuales se advierte que **
** (prueba 46 (a)). Así, queda plenamente probado que DUN no proporciona a CC la información relativa al SEGMENTO CO.

No pasa desapercibido que CC **
** no obstante, dicha manifestación es un indicio que debe administrarse con otras pruebas para generar convicción.

De igual forma, con el contenido del artículo 36 bis de la LRSIC y del CONTRATO DUN Y CC (prueba 46 (b)) se prueba que al solicitar CC el intercambio de información puntual, se incluía la solicitud del SEGMENTO CO. A mayor abundamiento se remite al análisis del argumento "Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO" de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

Finalmente, de la exposición de motivos de la LRSIC y del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la LIC, de la LRSIC, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, se desprende, que mediante la LRSIC y sus reformas, el legislador reconoció la importancia del intercambio de información entre las SIC.

La BPD y el SEGMENTO CO se encontraban disponibles y ofrecidos a terceros en términos de los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Respecto de que la BPD se encontraba disponible y normalmente ofrecida a terceros, se desprende lo siguiente:

De la prueba 40 y las resoluciones que son un hecho notorio para esta autoridad,¹⁰⁵⁸ se desprende que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado (TUM, CC y DUN), sólo CC y DUN contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM, por lo que no es posible encontrar algún otro agente económico al que DUN le haya negado la BPD.

Asimismo, el artículo 36 de la LRSIC se desprende que las SIC están obligadas a intercambiar su BPD cuando se la solicitan, por lo que de conformidad con dicha disposición la BPD se encuentra disponible y ofrecida por ley a terceros.

De igual forma, con el CONTRATO DE INTERCAMBIO presentado por DUN (prueba 44 (a)) se prueba que

Por otra parte, respecto de que el SEGMENTO CO se encontraba disponible y normalmente ofrecida a terceros, se desprende lo siguiente:

El artículo 36 bis de la LRSIC señala que las SIC deben intercambiar IC para la elaboración de los RCI, y que el envío de información se debe efectuar de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los USUARIOS, por lo que de conformidad con dicha disposición el SEGMENTO CO se encuentra disponible y ofrecido por ley a terceros.

Asimismo, de la prueba 46 se desprende un pronunciamiento de CC relativo a que,

D. Pruebas relativas al Objeto y efecto de la conducta

A continuación, se analizan los elementos de convicción utilizados en el DPR para determinar que la conducta realizada por DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

En primer lugar, son un **hecho notorio** las consideraciones realizadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados respecto de la LRSIC, de las cuales se desprende que dicha comisión considero lo siguiente respecto del artículo 36 de la LRSIC (el cual obliga al intercambio de la BPD): "[...] respecto al uso que se dé a la base de datos con

¹⁰⁵⁸ En específico: (i) la "Resolución mediante la cual se modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de Información crediticia"; (ii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo."; y (iii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fijo".

que cuentan estos burós de crédito, se coincide en el otorgamiento del permiso o autorización para que todas las sociedades que participen en el sistema de información crediticia, lo hagan en igualdad de condiciones, evitando con ello las prácticas monopólicas y competencia desleal entre las mismas, lo cual redundará en un mejor servicio a los USUARIOS del sistema. (Artículo 36.) [énfasis añadido]".¹⁰⁵⁹

Asimismo, de conformidad con la LRSIC: (i) las SIC deben intercambiar su BPD con las otras SIC que se lo soliciten; (ii) la SIC deben proporcionar la IC que les soliciten las otras SIC para la emisión de los RC; (iii) los RC deben contener la IC de todas las SIC que operan en el mercado; (iv) se puede sancionar a las SIC que omitan transmitir su información a otras sociedades o que la entreguen de manera incompleta o distorsionada, mediante la revocación de la autorización o la imposición de una multa. La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.¹⁰⁶⁰

Por otro lado, de las pruebas 13 y 14 previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, se desprende: (i) el número de CLIENTES (PM y PFAE) con HC en la BD de CC y de DUN, por mes; y (ii) el número de registros de PM y PFAE en la BD de CC y de DUN, por mes.

De igual forma, se remite a las pruebas 26, 27 (b) y 29, de las cuales se desprende que en dos mil catorce se requeriría una participación de mercado de [REDACTED] para ser rentable y que CC [REDACTED]

Por último, se remite a el CONTRATO DE INTERCAMBIO presentado por DUN (prueba 44 (a)) del cual se desprende que [REDACTED]

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de convicción para sustentar la imputación:

50. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO TUM¹⁰⁶¹ presentado por DUN y TUM como anexo del ESCRITO DUN, del cual se desprende que [REDACTED]

* *

¹⁰⁵⁹ Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, correspondiente al veintisiete de diciembre de dos mil uno, Año II No.4, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio, disponible en la página de Internet: <http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/58/2do/1P/Extra/20011227.html>, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.

¹⁰⁶⁰ Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJJ, antes citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (ii) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro No. 366 087.

¹⁰⁶¹ Folios 5509 a 5553. Respecto al CONTRATO MARCO TUM, en la respuesta del "ANEXO 6.1" del ESCRITO DUN, TUM y DUN señalaron lo siguiente: [REDACTED]



5500-1

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

**

**

Al respecto, dicha copia simple o impresión
señala lo siguiente:

**

51. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO DUN,¹⁰⁶³ presentado como anexo del
ESCRITO DUN, del cual se desprenden que

**

**

Al respecto, dicha copia simple o impresión señala lo
siguiente:

¹⁰⁶² Folios 5518 y 5538.

¹⁰⁶³ Folios 5561 a 5604. Respecto al CONTRATO MARCO DUN, en la respuesta del "ANEXO 6.1" del ESCRITO DUN, TUM y
DUN señalaron lo siguiente:

**

**

[...]"

Folio 5507.

Eliminado: dos párrafos, nueve renglones y cincuenta y cinco palabras.

* *

52. Copia simple o impresión del CONTRATO DUN Y CC de ^{**}
^{**} ¹⁰⁶⁵ del cual se desprende que: ^{**}

* *

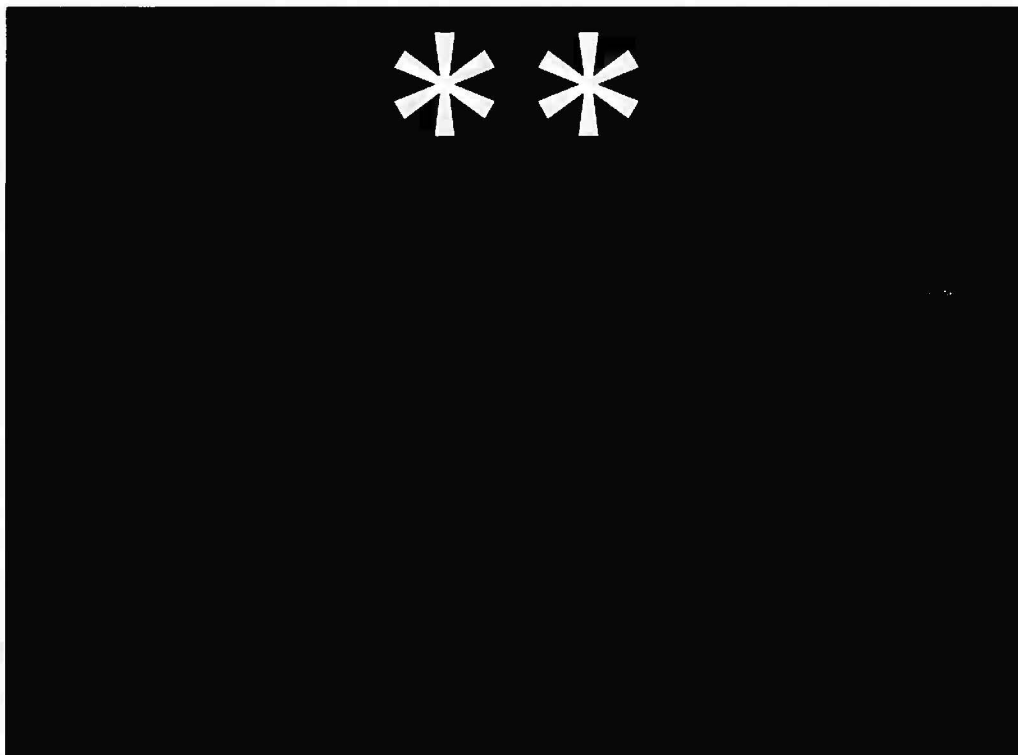
^{**} Al respecto, dicha copia simple o impresión señala lo siguiente:

* *

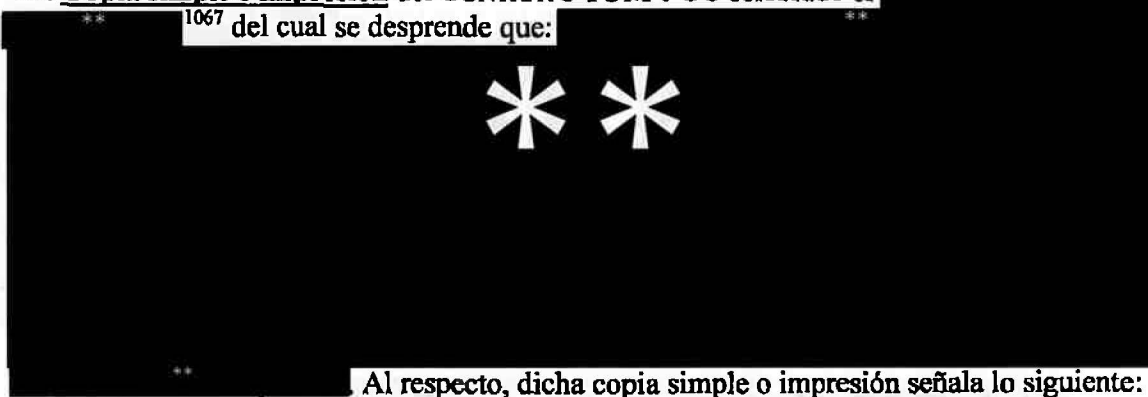
Eliminado: cuatro párrafos, siete renglones y sesenta palabras.

¹⁰⁶⁴ Folios 5570, 5591 y 5592.

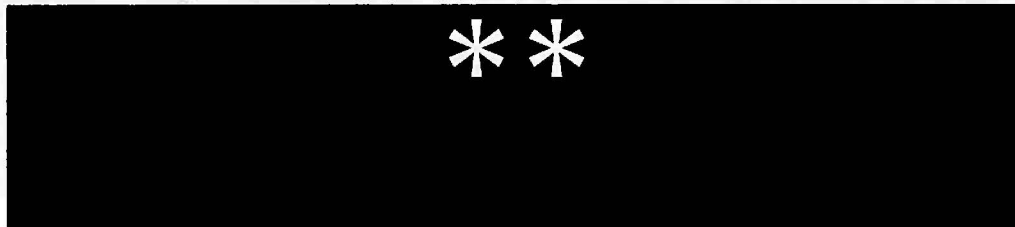
¹⁰⁶⁵ Folios 25125 a 25161. Dicho documento obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el seis de junio de dos mil dieciséis por CC (folios 25114 a 25122 y sus anexos en los folios 25123 a 25227).



53. Copia simple o impresión del CONTRATO TUM Y CC celebrado el ¹⁰⁶⁷ del cual se desprende que:



Al respecto, dicha copia simple o impresión señala lo siguiente:



¹⁰⁶⁶ Folios 21537 a 25139.

¹⁰⁶⁷ Folios 25162 a 25194. Dicho documento obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el seis de junio de dos mil dieciséis por CC (folios 25114 a 25122 y sus anexos en los folios 25123 a 25227).

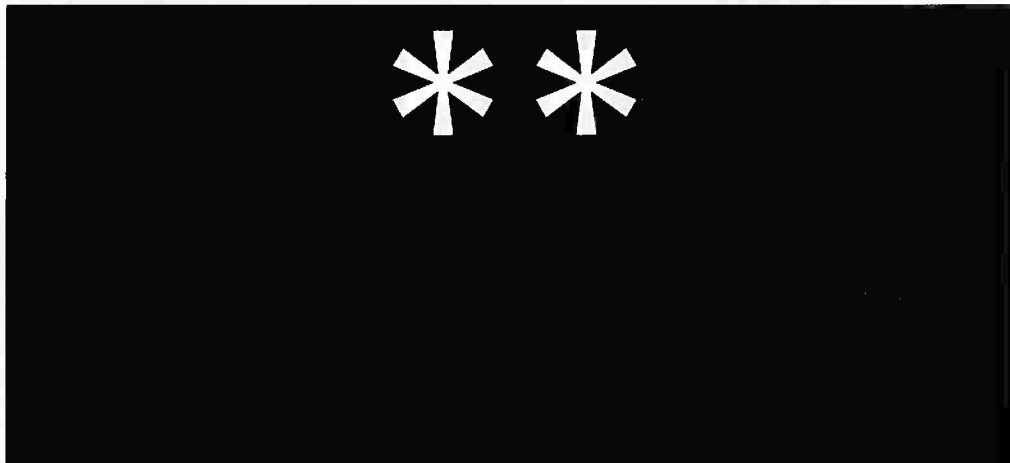
Eliminado: seis párrafos, nueve renglones y veintitún palabras.



50070 Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET



Eliminado: seis párrafos y quince palabras.



54. **Documental privada** consistente en el ESCRITO DUN,¹⁰⁶⁹ del cual se desprende que de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince, el [REDACTED] de las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un HIT, mientras en ese mismo periodo, el [REDACTED] de las consultas realizadas por CC a DUN resultaron en un HIT.¹⁰⁷⁰

55. **Documental pública** consistente en el SEGUNDO DESAHOGO BANXICO,¹⁰⁷¹ mediante el cual, BANXICO hizo referencia a un estudio elaborado por dicha autoridad en el que indicó que otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado, siendo que los principales productos están dirigidos a PF. Asimismo, BANXICO señaló que la importancia de las SIC en México deriva de la existencia de una BD integrada por la información crediticia de los acreditados, que permite reducir los problemas de información asimétrica entre los oferentes de crédito y de riesgo moral.

“La importancia específica de las [SIC] y sus efectos en los diversos segmentos del mercado de crédito en México fueron recientemente analizados para el crédito a las PYMES [...]

[...] los elementos vertidos en el numeral 4.3 del ‘Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME)’, son aplicables a cualquier segmento del mercado de crédito en México. A manera de resumen, sin pasar por alto el resto del contenido señalado en el mencionado numeral, se destaca lo siguiente:

¹⁰⁶⁶ Folios 25167, 25171, 25172 y 25174 a 25177.

¹⁰⁶⁹ Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el “ANEXO 4.7” (folios 4898 a 4902). En el cuerpo del escrito TUM y DUN señalaron lo siguiente: “[...] se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida [...] para lo cual se relacionan los siguientes anexos [...] Anexo 4.7 Se proporciona el número de consultas totales que las SIC realizaron mensualmente a la [BD] de [CC], y las que estas empresas realizaron en su [BD], buscando información no clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento. [...]”, reconociendo la autoría de dicha respuesta.

¹⁰⁷⁰ A mayor abundamiento véase la prueba 35.

¹⁰⁷¹ La respuesta que se transcribe fue proporcionada por BANXICO en el “ANEXO I”; no obstante, en el cuerpo del oficio BANXICO señaló que: “Adjunto al presente sírvase encontrar el Anexo I en el cual se da contestación a los once numerales formulados en el Acuerdo de Reiteración de Información del [EXPEDIENTE] [...]” (folio 868), reconociendo la autoría de dichas respuestas.

[...]

'Otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado para empresas. Los principales productos de valor agregado ofrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas físicas¹⁰⁷². Dentro de los servicios de valor agregado para personas morales, es notoria la ausencia de la calificación crediticia para PYMES a la fecha de publicación de este reporte. De manera similar, el servicio conocido como pre-screening tampoco se ofrece, no obstante que en la LRSIC se permite que las entidades financieras accedan a las valoraciones crediticias 'exclusivamente para determinar la elegibilidad del cliente en la oferta de productos financieros, sin necesidad de contar con la autorización' autógrafa de los clientes. La falta de desarrollo de estos servicios dificulta que los intermediarios de menor escala puedan competir con los oferentes grandes. En EEUU, por ejemplo, las SIC ofrecen reportes sobre la situación crediticia de las personas relacionadas a una empresa; comparación sobre el endeudamiento de una empresa con la industria a la que perteneces y a nivel nacional; monitoreo de los movimientos crediticios de una empresa y alertas de variaciones significativas en un período determinado¹⁰⁷³.

Por lo anteriormente expuesto, y a manera de resumen, se reitera que la importancia de la SIC's en México deriva de la existencia de una base de datos integrada por la información crediticia de los acreditados, que permite reducir los problemas de información asimétrica entre los oferentes de crédito y de riesgo moral, evitando el racionamiento de crédito y la selección adversa, permitiendo la identificación de los clientes que han incumplido con sus compromisos en el pasado. Estos dos efectos positivos, es decir, el que se evite racionamiento del crédito y la selección adversa, se dan para todos segmentos del mercado de crédito en México.

[...]

[...] resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número de productos de valor agregado utilizando las bases tanto de personas físicas como de personas morales¹⁰⁷⁴.

Adicionalmente, en el EXPEDIENTE obra la **copia simple o impresión**¹⁰⁷⁴ del documento denominado "Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresa (PYME)" de abril de dos mil quince, elaborado por BANXICO, en el cual se advierte, entre otras cuestiones, la transcripción realizada por BANXICO respecto a

¹⁰⁷² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "En los sitios de internet de las SIC se describen algunos de estos servicios: estimar la probabilidad de incumplimiento de los clientes y generar calificaciones crediticias (BC Score y Prospector, respectivamente), emitir reportes sobre personas que han cometido fraudes comprobados (Hawk), calcular los indicadores establecidos por la CNBV para el cálculo de reservas (Califica) y emitir alertas sobre cambios de situación de los clientes (Watch)".

¹⁰⁷³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Algunos de estos reportes elaborados por [DUN] son 'Comprehensive Insight Plus Report', 'Business Information Report', 'Credit eValuator Plus Report' y 'DNBi CreditAdvisor'".

¹⁰⁷⁴ Folios 5809 a 5937. Al respecto, dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la DGIM el veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 5807 y 5808). El documento se integró previa certificación (folio 5937) en la cual se hizo constar que era copia fiel de la información publicada en la página de Internet: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo-%7BB0D52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pdf>, refiriéndose la fecha en la cual se obtuvo la información. En ese orden de ideas, esta autoridad pudo corroborar que el documento citado se encuentra en la siguiente página de Internet: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo-%7B1C74E16B-F3D9-DBA7-6E7E-80C130C76599%7D.pdf>, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.

que otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado.

56. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV,¹⁰⁷⁵ del cual se desprende información respecto de los

1076

57. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el diecinueve de junio de dos mil quince por BANCO AZTECA,¹⁰⁷⁷ del cual se desprende que: (i)

Al

respecto, dicha documental privada señala lo siguiente:

"[...]

2. Relación con SIC's

2.1 Indique si su representada actualmente mantiene alguna relación comercial con al menos una o las dos [SIC] existentes en el mercado de información crediticia en México. Señale con qué sociedad(es) y desde cuando [sic] mantiene dicha relación.

¹⁰⁷⁵ Folios 648 a 655, y sus anexos en los folios 656 a 748. En específico, las conclusiones se obtienen de la respuesta proporcionada por la CNBV en el "ANEXO PRODUCTOS" (folios 666 a 675), cuya autoría fue reconocida por la CNBV en el PRIMER DESAHOGO CNBV de conformidad con lo siguiente: "[...] "[s]obre el particular, se adjuntan al presente Oficio de respuesta, 31 anexos que contienen las respuestas solicitadas en cada uno de los 29 numerales del Anexo Único del Oficio de referencia, incluyendo además un anexo denominado 'PRODUCTOS' para una solicitud sin numeral [...]" (folio 649).

¹⁰⁷⁶ Dicha información es consistente con lo que señala BANXICO. Folios 598 y 599. De conformidad con dichos elementos, sin embargo,

¹⁰⁷⁷ Folios 8029 a 8072 y sus anexos en los folios 8073 a 8941, presentado en desahogo al requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-041 (Folios 1060 a 1077) emitido por la DGIM el doce de mayo de dos mil quince en el EXPEDIENTE.

[...]

2.3 Indique, respecto de la SIC o las SIC's con la(s) que mantiene relación comercial a la fecha de emisión del presente oficio, las razones por las que se decidió a establecer una relación comercial con una o ambas, de ser el caso.

* *

[...]”¹⁰⁷⁸

58. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto¹⁰⁷⁹ que obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,¹⁰⁸⁰ que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato “.xls” denominado “Anexo 3.5” en el que se advierten las unidades vendidas de cada producto que comercializó CC de dos mil diez a marzo de dos mil quince.

59. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto¹⁰⁸¹ que obra como anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por TUM y DUN,¹⁰⁸² que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato “.xls” denominado “8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario”, del cual se desprende: (i) las unidades vendidas de cada producto que comercializó DUN de dos mil diez a marzo de dos mil quince; y (ii) que durante dos mil doce a dos mil quince, ^{**} consumieron productos de DUN.¹⁰⁸³

Conclusiones respecto al “Objeto y efecto de la conducta”

Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que los elementos aportados por la ciencia que fueron presentados tanto por DUN y TUM, como por CC: (i) contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o

¹⁰⁷⁸ Folios 8039 y 8040.

¹⁰⁷⁹ Folio 6034 bis.

¹⁰⁸⁰ Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: “En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi representada el 30 de abril de 2015 (el ‘Requerimiento’) mediante oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 (el ‘Oficio’) y [...] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguiente información y documentación solicitada: [...] 3.5 [...]”.

¹⁰⁸¹ Folio 6142.

¹⁰⁸² Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios 6142 a 6191. Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente: “En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Acuerdo de Prórroga, se acude a dar contestación parcial en relación con la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anexos mismos que coinciden con el numeral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: [...] ANEXO 8.3 Se proporciona información respecto a los reportes vendidos, montos facturados, precios y descuentos.” (folios 6138 y 6139), reconociendo el contenido de dicho anexo.

¹⁰⁸³ Al respecto, tal como se advierte de la página 358 del “TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS”, el cual es un hecho notorio para esta autoridad, ^{**}

^{**} La citada página de Internet fue consultada en esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

archivada por dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de información formulados por la DGIM durante la investigación del EXPEDIENTE; (ii) es posible atribuir el contenido de dicha información a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y (iii) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.

En primer lugar, de conformidad con los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC, las BD de las SIC deben interconectarse para elaborar productos de IC. En específico, el artículo 36 de la LRSIC obliga al intercambio de la totalidad de la BPD (intercambio masivo de registros negativos) mientras el artículo 36 bis de la LRSIC obliga a la SIC originadora a incluir en los RC que emite, la IC contenida en las BD de las demás SIC que operan en el mercado, y a la SIC complementaria a proporcionar de manera puntual la IC del CLIENTE respecto del cual la SIC originadora emitirá el RC.

Asimismo, los artículos 19 y 62 de la LRSIC prevén sanciones relacionadas con el incumplimiento de la compartición de IC en términos de los artículos 36 y 36 bis de dicha normativa, en específico la posibilidad de que les sea revocada la autorización o que se les imponga una multa a las SIC que omitan transmitir su información a otras sociedades o que la entreguen de manera incompleta o distorsionada.

Por su parte, respecto del intercambio de la BPD, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados considero que: "[...] se coincide en el otorgamiento del permiso o autorización para que todas las sociedades que participen en el sistema de información crediticia, lo hagan en igualdad de condiciones, evitando con ello las prácticas monopólicas y competencia desleal entre las mismas, lo cual redundará en un mejor servicio a los USUARIOS del sistema".

Aunado a lo anterior, las pruebas indicadas en los numerales 50 a 59 de esta sección, se relacionan con las analizadas en las secciones "MR DE PM: Recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional."; "PS de DUN en el MR DE PM." y "C. Conducta", en el sentido de que la negativa de trato llevada a cabo por DUN: (i) incrementó las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes; (ii) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa; (iii)

B
B
B
B
y (iv) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

De este modo, las pruebas analizadas tienen el alcance de probar que la conducta realizada por DUN (consistente en la negativa de proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los

Eliminado: dos renglones, ocho palabras.

bienes disponibles y normalmente ofrecidos a terceros) tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, tal como se observa a continuación:

De las pruebas 51 y 52 se desprende que el costo que debe pagar un USUARIO como parte del RC de PM por concepto de HIT es de [REDACTED] y que dicho concepto equivale al [REDACTED] del precio base del RC¹⁰⁸⁴ en el que [REDACTED] B

Asimismo, de las pruebas 50 y 53 se desprende que, a diferencia del segmento de PM, en el segmento de PF el precio por concepto de HIT equivale al [REDACTED] del precio base del RC de PF donde [REDACTED] B¹⁰⁸⁵

Adicionalmente, con el CONTRATO DUN Y CC y del CONTRATO TUM Y CC (pruebas 52 y 53) se prueba plenamente en contra de DUN que [REDACTED]

De igual forma, con el CONTRATO TUM Y CC (prueba 53) se prueba que, en términos de dicho contrato, [REDACTED]

Por su parte, de la información referida en la prueba 54 se desprende que CC tiene en proporción más casos de HIT en comparación con DUN y, por tanto, el USUARIO que solicite un RC a CC asume con mayor recurrencia un costo adicional por la información proporcionada por DUN. En específico, de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince, el [REDACTED] de las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un HIT, mientras en ese mismo periodo, el [REDACTED] de las consultas realizadas por CC a DUN resultaron en un HIT. Dicha prueba se relaciona con las pruebas 13 y 14, de las cuales se desprende que DUN cuenta con

¹⁰⁸⁴ Si bien de conformidad con el CONTRATO MARCO DUN (prueba 51) el precio base de los RC de PM [REDACTED] según el CONTRATO DUN Y CC (prueba 52) el precio máximo al que una SIC originadora puede cobrar el RCI de PM a sus USUARIOS es de [REDACTED] y el precio de HIT es de [REDACTED] De esta manera el precio base del RC que se utiliza para calcular el porcentaje es el de [REDACTED]

¹⁰⁸⁵ Si bien de conformidad con el CONTRATO MARCO TUM (prueba 50) el precio base de los RC de PM puede ser de [REDACTED] según el CONTRATO TUM Y CC (prueba 53) el precio máximo al que una SIC originadora puede cobrar el RCI de PF a sus USUARIOS es de [REDACTED] y el precio de HIT es de [REDACTED] De esta manera el precio base del RC que se utiliza para calcular el porcentaje es el de [REDACTED]

una BD mucho más extensa que CC considerando número de registros y número de expedientes.

Adicionalmente, de la **prueba 55** se advierte que de conformidad con BANXICO otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado y de la **prueba 56** se desprende que

De hecho, en esta última prueba se identifica que

Por su parte, de la **prueba 57** se desprende el pronunciamiento de BANCO AZTECA respecto a que las razones por las cuales mantenía una relación comercial con DUN no eran razones de eficiencia, sino porque

Asimismo, con la **prueba 59** se sustenta que, de dos mil doce a dos mil quince, incluso

De igual forma, al administrar las **pruebas 58 y 59**, se advierte que, de dos mil diez a dos mil quince, DUN contó con un promedio de participaciones de mercado en la venta de RC de PM de

Asimismo, si consideramos su participación de mercado de dos mil doce (año en que CC comenzó a comercializar productos de PM) a dos mil quince, DUN tuvo un promedio de en la comercialización de RC de PM. Ahora bien, tal como se indicó al analizar las **pruebas 26, 27 (b) y 29**, para dos mil catorce CC

Por último, del CONTRATO DE INTERCAMBIO (**prueba 44 (a)**) se desprende que

IV.2. Elementos de convicción aportados por DUN

Como se indicó en el apartado "ANTECEDENTES" de esta resolución, durante la tramitación del PSFJ, DUN ofreció diversos medios de prueba mediante la CONTESTACIÓN DUN para desvirtuar la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de la comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE. En ese sentido, se procede al análisis de las pruebas ofrecidas por DUN que fueron admitidas de conformidad con el acuerdo emitido por la DGAJ el diez de agosto de dos mil dieciocho¹⁰⁸⁸ y, en su caso, desahogadas durante el

¹⁰⁸⁶ Lo anterior además se confirma por el hecho de que CC no cuenta con la BPD de DUN y por lo tanto

¹⁰⁸⁷ En específico, de conformidad con las **pruebas 58 y 59**, CC alcanzó una participación de mercado de

¹⁰⁸⁸ Folios 46910 a 46977.

PSFJ; así como a la valoración de las confesiones realizadas por DUN en su CONTESTACIÓN DUN.

Al respecto, en adición a las manifestaciones específicas que realiza la AI respecto de cada una de las pruebas ofrecidas por DUN, en la VISTA DUN la AI indicó que: *“objeta el alcance y valor probatorio de todas las pruebas ofrecidas por DUN, así como de todos los elementos probatorios que pudieran derivarse de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR, toda vez que no desvirtúan las imputaciones realizadas en su contra en el DPR”*.¹⁰⁸⁹

En este sentido, toda vez que la AI objetó las pruebas ofrecidas por DUN, de conformidad con el artículo 203 del CFPC, la verdad del contenido de los documentos privados presentados por dicho agente económico, deberán ser demostrados por otras pruebas.¹⁰⁹⁰

1. Confesión algunas de las manifestaciones realizadas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN implican una confesión por lo que se les confiere valor probatorio pleno respecto de los hechos que resulten contrarios a sus intereses. Particularmente, las siguientes manifestaciones prueban plenamente contra DUN respecto de que: (i) pasó un año entre la solicitud de intercambio de la BPD y la implementación del intercambio puntual; (ii) CC ha operado sin recibir de DUN cierta información; (iii) DUN no intercambio su BPD con CC; (iv) DUN mantuvo altas participaciones de mercado durante el periodo investigado; y (v) los montos que DUN paga a CC por el intercambio puntual son mucho mayores que los que le paga CC a DUN. Al respecto, la CONTESTACIÓN DUN señala lo siguiente:

“[...] respecto diversa observación de la AI [...] consistente en que pasó un año desde la solicitud de intercambio de la BPD y la implementación de la alternativa al intercambio de la BPD, debe precisarse que dicho plazo atendió a la imposibilidad de DUN para realizar el intercambio”.¹⁰⁹¹ “[...] [CC] ha venido operando sin recibir el Verdadero Segmento CO”.¹⁰⁹²

¹⁰⁸⁹ Página 130 de la VISTA DUN.

¹⁰⁹⁰ Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: **“DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECCIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL)**. De conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden federal se aporta un documento privado proveniente de un tercero y el mismo es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción, (solamente para evitar el efecto de la norma de que la no objeción hace que el documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo aporte y quiere beneficiarse de él deba probar la verdad de su contenido por otras pruebas, pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, en tanto no incurrió en externar una negativa que encierra la afirmación de un hecho, inclusive si al objetar explica los motivos y no los prueba, la objeción por sí sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido con otras pruebas, todo lo que será ponderado al resolver la contienda, sobre todo respecto de la valoración del documento a que se ha hecho referencia”. Jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012; Tomo 1; Pág. 405; Registro No. 2 000 570.

¹⁰⁹¹ Página 96 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹⁰⁹² Página 105 de la CONTESTACIÓN DUN.

“Es correcto que el artículo 36 de la LRSIC establece la obligación de intercambio de la BPD. [...] El que no se haya dado el intercambio no obstante exista la obligación legal [...]”.¹⁰⁹³

“[...] las participaciones de mercado de DUN se han mantenido altas a lo largo del periodo investigado [...]”.¹⁰⁹⁴

“[...] los montos que [CC] le factura a DUN son significativamente mayores que aquéllos facturados por DUN a [CC] y además, dicha facturación ha crecido de 2013 a 2017 [...]”.¹⁰⁹⁵

2. Pericial. Dicha fue ofrecida por DUN en el numeral 2 de la CONTESTACIÓN DUN.¹⁰⁹⁶ Asimismo, en el “Anexo 4” de dicho escrito, DUN proporcionó una copia simple o impresión del cuestionario al tenor del cual habría de ser desahogada dicha prueba.¹⁰⁹⁷

Asimismo, de conformidad con el acuerdo emitido por la DGAJ el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho en el EXPEDIENTE, entre otras cosas, se autorizó la sustitución del perito propuesto por DUN en la CONTESTACIÓN DUN y se tuvo por designado a la PERITO.

Al respecto, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se levantó el acta por la que se hizo constar la ratificación del nombramiento y la aceptación y protesta del encargo por parte de la PERITO, con la finalidad de desahogar la prueba pericial en Economía ofrecida por DUN. Asimismo, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la PERITO presentó en la OFICIALÍA la PERICIAL DUN, considerando el cuestionario de preguntas ofrecido por DUN; así como aquellas preguntas que fueron adicionadas por la AI mediante el OFICIO 176.

DUN ofreció la pericial en economía anteriormente descrita en este apartado para demostrar lo siguiente:

“Cuestiones relacionadas con el análisis de [MR]”

- i) *Que la recopilación y procesamiento de [IC] no constituyen un mercado — y por vía de consecuencia tampoco un [MR] — sino actividades que se realizan como parte de la cadena productiva;*
- ii) *Que la provisión de [IC] a las SICs no puede definirse como un [MR], ya que constituye una mera obligación prevista en la LRSIC por la que no se puede cobrar.*

El acreditar las dos cuestiones que anteceden demuestra lo incorrecto del análisis de [MR] por parte de la AI.

“Cuestiones relacionadas con el análisis de [PS]”

- iii) *Que no se puede tener [PS] en un [MR] inexistente, al ser el [PS] una cuestión inherente al concepto de [MR].*

¹⁰⁹³ Página 108 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹⁰⁹⁴ Página 126 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹⁰⁹⁵ Página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹⁰⁹⁶ El escrito por medio del cual se presentó la PERICIAL DUN se encuentra en el folio 47797 y la PERICIAL DUN se encuentra en los folios 47798 a 47880.

¹⁰⁹⁷ Folios 34611 a 34612.

Con estrecha vinculación a lo anterior, que el análisis de [PS] debe de realizarse en el [MR] que se defina, al ser éste último un concepto inherente al primero.

- iv) Que los efectos de red presentados en el sector de [IC] no generan incentivos para que los Usuarios actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, en virtud de que la afiliación no genera costos para los Usuarios. En todo caso, el que los Usuarios se afilien a una SIC - que es la más grande- se debe a factores distintos a los efectos red, como puede ser la calidad de los servicios.
- v) Que los mercados que presentan economías de escala y efectos de red deben de contar con altos niveles de concentración para aprovechar dichas características.
- vi) Que el crecimiento en participaciones de un competidor implica una presión competitiva de la que se desprende la falta de [PS].
- vii) Que el análisis de participaciones de mercado realizado por la AI contiene diversos errores en cuanto a los indicadores empleados y la metodología seguida.
- viii) Que para determinar la existencia de [PS] se debe de analizar la evolución de participaciones de mercado.
- ix) Que si bien una alta participación de mercado es un indicio de [PS], en mercados que presentan economías de escala y efectos de red esto no es suficiente para determinar que existe dicho poder.
- x) Que no se puede restringir el abasto sin fijar el precio y viceversa.
- xi) Que la cuota de mercado que se debe de cumplir para alcanzar la rentabilidad mínima no es una barrera a la entrada.
- xii) Que, desde un punto de vista de la competencia económica, resulta ilógico que el agente económico con [PS] realice más innovación que un nuevo entrante.

El acreditar las cuestiones que anteceden demuestra lo incorrecto del análisis de [PS] por parte de la AI.

Cuestiones relacionadas con la conducta y el objeto y efecto de la misma

- xiii) Que la interpretación de la AI del segundo componente de la negativa de trato (que se trate de bienes o servicios normalmente ofrecidos a terceros) resultó incorrecta.
- xiv) Que no resulta adecuado realizar un análisis de sustitución entre los registros de los Usuarios y la BPD.
- xv) Que de tomar por válida la teoría de objeto y efecto de la AI se estaría generando un efecto de free-riding que resulta contrario a los fines perseguidos por [sic] la competencia económica.
- xvi) Como lejos de desincentivar la innovación en los productos de [IC], que el obligar a compartir la BPD de PM desincentiva la innovación, por el citado problema del free-rider.

El acreditar las cuestiones que anteceden se demuestra el indebido análisis de la AI para colmar el supuesto normativo de 'negativa de trato' y como el análisis de objeto y efecto de la conducta contenido en el DPR resultó incorrecto".¹⁰⁹⁸

Por una cuestión de orden y método en el análisis y valoración de esta prueba, se procede al análisis del cuestionario proporcionado por DUN y a la adición de éste que proporcionó la AI de conformidad con lo siguiente:

¹⁰⁹⁸ Folios 34546 a 34548.

2.1 Cuestionario de DUN

Al respecto, la PERICIAL DUN señala lo siguiente:

“[...]

1. QUE DIGA EL PERITO CUÁL ES LA RELEVANCIA Y PROPÓSITO DE LA DEFINICIÓN DE UN [MR] Y DEL ANÁLISIS DE [PS] EN UNA INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN DE UNA [PMR].

[...]

[...] se entiende que las [PMR] se refieren a conductas específicas¹⁰⁹⁹ que son cometidas dentro del [MR] definido, por agentes que cuentan con [PS] en este y que tienen el objeto o efecto de desplazar o impedir el acceso de otros participantes en el mercado y que en última instancia perjudican a los consumidores. El o los agentes económicos que cometen una [PMR] son entonces sujetos a las sanciones estipuladas en el artículo 127 de la LFCE.

Como se indica, una condición necesaria para que exista una práctica monopólica relativa es la definición del [MR]. Esto es una etapa intermedia de un análisis integral de [PS], ya que la identificación de ausencia de posibles restricciones competitivas en el mercado investigado coadyuva a la determinación de [PS] de el o los agentes económicos que se presumen como probables responsables de la comisión de las prácticas investigadas.

De manera más concreta, la definición del [MR] tiene como objetivo fundamental la identificación de condiciones que facilitan o, por el contrario, acotan la posibilidad de que los oferentes de uno o de un conjunto de bienes o servicios puedan actuar en forma anticompetitiva. Dichas condiciones tienen relación principalmente (aunque no únicamente) con la posibilidad de sustitución de dichos productos, tanto por parte de los consumidores como por parte de otros agentes económicos. Otras condiciones que pueden tomarse en cuenta son: los costos de distribución del bien y de sus insumos relevantes; los costos y posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados; la ausencia o existencia de restricciones de carácter económico o normativo que representen una barrera a la entrada y que puedan impedir la libre concurrencia en el mercado; y, la ausencia o existencia de obstáculos para impedir la salida de oferentes en el mercado sin incurrir en costos significativos.

Las condiciones enunciadas, pueden tener el efecto de reducir o promover las potenciales ganancias que un oferente puede obtener al incrementar los precios de los bienes que provee al mercado.¹¹⁰⁰

Asimismo, la definición de [PS] de un agente económico dentro del [MR] definido es parte fundamental para una investigación de [PMR]. De acuerdo con el artículo 59 de la LFCE, para determinar si uno o varios agentes económicos tienen [PS], se deben considerar los siguientes elementos:

[...]

Dado que la definición del [MR], en el contexto de una investigación de [PMR], tiene como objetivo determinar la ausencia o existencia de [PS] de uno o varios agentes económicos, es imprescindible que dicha definición incluya exhaustivamente cualesquiera bienes o servicios

¹⁰⁹⁹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: “Conductas establecidas en el artículo 56 de la LFCE”.

¹¹⁰⁰ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: “Chang, H., et al, (2011). Market Definition. Assessment of the Relevant Market in Competition Matters. Documento de referencia sobre definición de mercado relevante. Comisión Federal de Competencia. México. Pp. 3-4. Consultado en <http://fdm.edu.mx/libreintercambio/documentos/seminario/1/MarketDefinition.doctoresCFCMX.pdf>.”

sustitutos o potenciales sustitutos del bien o servicio en cuestión, ya sea desde el punto de vista de los consumidores o desde el punto de vista de los oferentes, pues deben ser analizadas las restricciones competitivas que su existencia impone a él [sic] o los agentes económicos investigados.

2. QUE EXPONGA EL PERITO SI CONSIDERA CORRECTA LA DEFINICIÓN DE [MR] DE LA AI EN EL CONTEXTO DE LA PMR INVESTIGADA. EXPLIQUE SU RESPUESTA.

La definición de [MR DE PM] expuesta por la [AI] en el [DPR]¹¹⁰¹ es incorrecta [...]

- 1. El análisis de [MR] se realiza respecto la provisión de [IC], este último, en donde la AI imputa que se realiza la conducta; [...] no obstante, la AI define el [MR] como la recopilación y procesamiento de [IC] de las PM, con una dimensión geográfica nacional¹¹⁰². Es decir, la AI define un [MR] distinto al de su análisis para determinarlo (provisión de [IC]) y distinto al en que se imputa la realización de la conducta investigada. No obstante, como se mostrará más adelante, incluso si se toman ambas actividades en forma conjunta, tanto provisión como recopilación, no es adecuado considerarlas como un mercado.*
- 2. La 'recopilación y el procesamiento de [IC]' no pueden ser considerados como un mercado puesto que se trata de actividades que forman parte de la cadena productiva y se encuentran fuera del comercio.*
- 3. Ni la provisión de [IC] por parte de los Usuarios, ni la recopilación de [IC] no constituyen un mercado (ya sea que se consideren de manera conjunta o individual), principalmente porque no se efectúa ningún pago por el intercambio; y, porque los Usuarios no pueden otorgar sus datos de operaciones crediticias a nadie más que a las [SIC] y estas son las únicas habilitadas para recolectar [IC] y compartirla sin que se considere una violación al secreto financiero.*
- 4. El intercambio de [IC] entre las SIC tampoco constituye un mercado, debido a que los registros crediticios intercambiados tienen un costo fijo de intercambiarse, además de que existe la obligación de hacerlo.*

A continuación, se presenta el análisis detallado.

La 'recopilación y el procesamiento de [IC]' se tratan de actividades de la cadena productiva que se encuentran fuera del comercio

[...] la etapa de procesamiento ni siquiera forma parte de las actividades que se le imputan a DUN [...] tanto la recopilación como el procesamiento de [IC] son únicamente actividades de la cadena productiva para la posterior elaboración y comercialización de los productos de [IC]. Prueba de esto es que las SIC no ofrecen dentro de su gama de servicios la recopilación y procesamiento, sino que realizan estas actividades exclusivamente como parte de su proceso productivo.

[...]

Definición de un mercado

[...] un mercado es un espacio donde concurren consumidores y oferentes de un mismo bien para realizar el intercambio de dicho bien por un precio (típicamente fijado en unidades de un bien numerario llamado dinero) el cual queda determinado por la interacción de las preferencias y

¹¹⁰¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 266-275".

¹¹⁰² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, p. 266".

restricciones presupuestales de los consumidores, así como por los costos de producción y la decisión de los oferentes de maximizar sus beneficios [...] cuando un bien o servicio se intercambia es porque dicho bien refleja simultáneamente el valor que los demandantes otorgan a su uso o consumo y los procesos de producción en que incurrieron los oferentes¹¹⁰³. Por tal razón, para afirmar que un agente económico participa en un mercado, dicho agente tiene que actuar como consumidor, demandando una cantidad específica del bien, estando dispuesto a pagar una determinada cantidad de dinero; o bien, actuar como oferente, produciendo y comercializando el bien en cuestión, y estableciendo un precio de venta del bien, con el objetivo de maximizar sus beneficios.

[...] la AI distingue dos componentes dentro de su definición de mercado:

'Así pues, las SIC recopilan o se abastecen de [IC] de forma directa [...] o de forma indirecta [...]'¹¹⁰⁴

Esto implica que, por un lado, la recopilación y procesamiento de [IC] sucede teniendo a las SIC como demandantes y a los Usuarios como oferentes de su [IC], mientras que, por el otro lado, dicho 'mercado' sucede a través de una SIC como demandante y otra SIC como oferente, cuyo rol va cambiando dependiendo de qué SIC sea la que recibe la [IC] y qué SIC sea la que la provea en cada caso.

[...]

Errónea definición del 'mercado' relevante por falta de entendimiento del proceso productivo de las SIC

[...] en el DPR se indica [...] que el procesamiento lo constituye las actividades posteriores a que se les ha entregado la información [...] en el procesamiento no está incluida ni el intercambio de la [IC] entre los Usuarios y las SIC ni el intercambio de información entre las SIC. Esto porque, de acuerdo con el DPR, dichas actividades se encuentran en el eslabón de 'generación de [IC]'¹¹⁰⁵

Lo anterior es relevante porque denota la falta de claridad de la AI ante el pretendido 'mercado' que ella definió. Por ejemplo, ante la manifestación de DUN de la falta de claridad en la parte del procesamiento [...] la AI declaró lo siguiente [...]

[...]

'(...) el intercambio de lo BPD forma parte de lo recopilación de información crediticio (sic). Mientras que el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de lo LRSIC) conforma (sic) parte del procesamiento de [IC]'¹¹⁰⁶ [Énfasis añadido]

Esto, como se mencionó, es contradictorio con lo que se describe en el DPR en su sección IV, apartado C¹¹⁰⁷, en donde la generación de [IC] incluye tanto el intercambio de la [BPD] como el intercambio puntual, y donde el procesamiento únicamente implica actividades de verificación de la calidad de la información, medidas de seguridad, y eliminación de registros. Por

¹¹⁰³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Mankiw, Gregory (2001), *Principles of Microeconomics*. Cengage Learning, Segunda Edición, pp. 9".

¹¹⁰⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, p. 267".

¹¹⁰⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 108-114".

¹¹⁰⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Respuesta de la AI a las Manifestaciones de DUN, p. 27".

¹¹⁰⁷ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Sobre la elaboración de los productos de [IC]".

consiguiente, se puede ver el error inicial de la AI al definir el 'mercado' dado que, en todo caso (siguiendo el criterio de la AI), el mercado hubiera sido únicamente el de la 'recopilación de [IC] con dimensión geográfica nacional'¹¹⁰⁸, sin incluir el procesamiento.

Asimismo, [...] el análisis de sustitución llevado a cabo por la AI se refiere al proceso de provisión de [IC] y no al proceso de recopilación y procesamiento de información. [...] la AI analizó una práctica que en sentido estricto, se encuentra fuera del marco que definió como [MR].

La provisión de [IC] por parte de los Usuarios no constituye un mercado

Primero, se analiza el 'mercado' definido por la AI cuando los Usuarios actúan como los oferentes de [IC] y las SIC las demandantes.

[...]

[...] esto no es un mercado [...] ya que los Usuarios no pueden otorgar sus datos de operaciones crediticias a nadie más que a las SIC, y estas son las únicas habilitadas para recolectar [IC] y compartirla sin que se considere una violación al secreto financiero. Por consiguiente, existe un intercambio de [IC], sin embargo, dicho intercambio sucede por obligación legal, y no derivado de la interacción entre las preferencias de los consumidores (las SIC) y la decisión de los oferentes de maximizar sus beneficios (los Usuarios). Más aún, ni siquiera existe un pago por el intercambio de [IC] entre los Usuarios y las SIC, tal como lo acredita la AI en el DPR:

[...]

El intercambio de [IC] entre las SIC tampoco constituye un mercado

El intercambio de [IC] también sucede de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD entre SIC, o a través de la entrega puntual [...]

[...]

[...] mientras que únicamente la BPD se debe compartir obligatoriamente de forma mensual y periódica [...] la información restante de la [BD] de cada SIC se debe compartir únicamente de forma puntual. [...]

[...] parte del 'mercado' definido por la AI lo constituye el intercambio de [IC] entre las SIC [...] dado que la conducta imputada el DPR consiste en la negación de intercambiar información entre las SIC [...] la práctica investigada sucede únicamente en esta parte del 'mercado', y no en la provisión de [IC] por parte de los Usuarios hacia las SIC.

Por lo anterior, en adelante se supondrá (sin conceder que sea un mercado) que es este 'mercado' más restringido [...] el que constituye el [MR]. Es decir que, el mercado sería entonces únicamente el intercambio de información entre las SIC, el cual no es parte del proceso de recopilación y procesamiento de la [IC].

Ahora bien, es relevante establecer que el intercambio o provisión de [IC] entre las SIC tampoco constituye un mercado.

¹¹⁰⁸ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Que como se muestra a continuación en la presente respuesta, la suscrita no estima puede constituir un mercado".

Al respecto, se puede decir que dicho 'mercado' se compone de dos oferentes (las SIC) y de dos bienes (la BPD de Personas Morales¹¹⁰⁹ de cada oferente), mismos que simultáneamente actúan como consumidores de su competidor [...] se encuentran obligados por la LRSIC a intercambiar sus correspondientes [BD] de Personas Morales (en lo sucesivo 'PM') con su competidor.

Asimismo, la LRSIC contempla implícitamente que dicho intercambio genera un costo [...] contempla la obligación de pagar una tarifa [...] misma que juega un papel de contraprestación por los costos en los que incurre el agente que otorga su propia información. [...] dicha tarifa es únicamente un monto unitario fijado para contrarrestar los costos incurridos de la SIC que comparte su información. Sin embargo, esta no se determina en cada intercambio a través de la interacción de las preferencias y restricciones presupuestales de los consumidores, y de los costos de producción y la decisión de los oferentes de maximizar sus beneficios. Es decir, la tarifa es fija y es obligatoria por ley, no un precio determinado en mercado alguno.¹¹¹⁰

Por consiguiente, mientras que sí ocurre un pago entre las SIC por el intercambio de [IC], dicho pago no es un precio por el cual una SIC le 'vende' su [IC] a la SIC que la demanda, sino más bien representa únicamente una contraprestación tarifa de intercambio de información que, por ley, se encuentran obligadas a compartir y cuyo representa [sic] un costo que debe de ser cubierto.

[...] la AI define un supuesto '[MR]' en el cual solo existen dos agentes económicos, oferentes y demandantes simultáneamente uno del otro, en el cual existe una tarifa fija y una obligación de realizar el intercambio de los bienes en cuestión.

[...] las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información de registros de crédito, pues no cuentan con capacidad de alterar los precios acordados por el intercambio de información. En cambio, el mercado en el que participan las SIC es el de comercialización de los productos que resultan de recopilar y procesar la [IC].

[...] es claro que el intercambio de información entre las SIC tampoco constituye un mercado.

[...] se considera incorrecta la definición de [MR] expuesta por la AI en el DPR.

3. QUE EXPONGA EL PERITO CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE LA DEFINICIÓN DEL [MR], ESPECÍFICAMENTE DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, PARA EL ANÁLISIS DE [PS].

[...] la definición del [MR] [...] [es] necesaria para realizar un análisis de [PS] de los agentes que pudieron haber realizado prácticas comerciales perjudiciales [...]

[...] resulta imperativo que la definición del [MR] incluya la totalidad de bienes o servicios sustitutos del bien o servicio en cuestión [...] ya que esto tendrá consecuencias directas en la identificación de las restricciones competitivas que tiene producto [sic] en cuestión, y por lo tanto, puede influir en el análisis de [PS] del agente que presuntamente realizó prácticas anticompetitivas en el mercado definido.

[...] el análisis para la determinación de [PS] elaborado por la AI se realizó tomando como base una definición de [MR] errónea, pues se definió un 'mercado' distinto al que se utilizó como marco para elaborar el análisis de sustitución, es decir, el de provisión de [IC]; y,

¹¹⁰⁹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "De acuerdo con el Glosario de Definiciones del DPR, el concepto de Personas Morales engloba tanto personas morales como personas físicas con actividad empresarial".

¹¹¹⁰ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, disponible en (última revisión 28 de septiembre de 2018): <http://dle.rae.es/?id=TvdmYgx>".

adicionalmente, se realizó el análisis en un 'mercado' en el que DUN no participa [...] Más aún, dicho 'mercado' ni siquiera puede ser considerado como tal [...]

[...] no se puede determinar que DUN tenga [PS] en una actividad que no forma parte de su oferta de productos y/o servicios.

[...]

Si el 'mercado' relevante donde se realiza la práctica no es realmente un mercado, no se puede determinar que el o los agentes económicos tengan [PS] en dicho 'mercado' y, por consiguiente, su o sus conductas no se pueden considerar como [PMR].

Adicionalmente, [...] la definición de [MR] expuesta por la AI es condición suficiente para determinar que ningún agente económico en dicho mercado tiene [PS]. Ello, en virtud de que sería una contradicción lógica afirmar la existencia de [PS] en un mercado en el que ningún agente tiene la capacidad de determinar su propio precio y se encuentra legalmente obligado a proveer los bienes que produce a solicitud de su único demandante.¹¹¹¹

[...] la propia definición de [MR] (asumida como la provisión de [IC], dado que el procesamiento ni siquiera forma parte del mercado descrito en el DPR) implica irrefutablemente que DUN no es una agente con [PS].

4. QUE DIGA EL PERITO QUÉ SON LAS ECONOMÍAS ESCALA [SIC], LAS ECONOMÍAS DE ALCANCE Y LOS EFECTOS DE RED Y CÓMO SE MANIFIESTAN EN EL MERCADO DE [IC].

El concepto de economías de escala se refiere a la situación en la que una empresa reduce sus costos unitarios de operación al incrementar su producción; lo anterior significa que el costo promedio de producir disminuye a medida que aumenta la escala de producción.

[...]

[...] las [SIC] son empresas que presentan economías de escala, pues estas deben realizar inversiones sustanciales principalmente en equipos, licencias y desarrollo, las cuales constituyen costos fijos. Posteriormente, la producción de sus productos y servicios consiste primordialmente en la reproducción o repetición de procesos, los cuales representan costos marginales bajos y que no incrementan a medida que incrementa la producción.

[...]

[...] un mercado con economías de escala generalmente presenta lo que en la literatura económica se denominan monopolios naturales¹¹¹² y, solo en el caso en que el mercado en cuestión sea suficientemente grande, pueden existir oligopolios¹¹¹³ con un número reducido de participantes.¹¹¹⁴

¹¹¹¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Tal como se expone a detalle en el numeral 14 de este Dictamen, si la BPD no se ha intercambiado, aunque exista una obligación legal de hacerlo, es porque [CC] no diferencia en su BPD a las PF de las PF con actividad empresarial. En consecuencia, para lograr el intercambio, [CC] tendría que eliminar de su BPD los registros de personas físicas, porque DUN no está autorizado para registrarlos, y esto no es posible porque [CC] no es capaz de identificarlos".

¹¹¹² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Un monopolio natural es un mercado en el cual el precio eficiente que vacía el mercado ocurre en un punto en el que los costos promedio de largo plazo del monopolista continúan decreciendo".

¹¹¹³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en las variables del mercado (como precio y cantidad de equilibrio)".

¹¹¹⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Hirschey, Mark (2009), *Fundamentals of Managerial Economics*, South-Western Cengage Learning, novena edición, p. 466".

[...]

[...] existen economías de escala en el mercado de [IC] en México, las cuales pueden funcionar como barreras a la entrada toda vez que su estructura no permite un número amplio de participantes. [...]

Por su parte, las economías de alcance se refieren a la reducción del costo promedio de una empresa en la producción de dos o más productos o servicios de forma conjunta. [...]

[...]

El mercado de [IC] presenta economías de alcance debido a que, ya que se ha cubierto el monto de la inversión necesaria para entrar en la industria y para consolidar una [BD] robusta, dicha [BD] puede ser utilizada tanto para producir [RC], como para otros productos de [IC].

Las economías de alcance pueden funcionar como barreras a la entrada si la empresa en cuestión produce una amplia variedad de productos generando sinergias entre la producción de estos.

[...]

Finalmente, los efectos de red son aquellas condiciones en las que el beneficio de adquirir un bien o servicio ofrecido por un agente económico en particular depende del número de personas, clientes, o Usuarios que lo utilizan. En general, esto implica que mientras más individuos consuman un bien, estos se beneficiarán en mayor medida.¹¹¹⁵ [...]

Al igual que las economías de escala y de alcance, los efectos de red guardan una relación directa con el nivel de concentración de un mercado. Específicamente, los efectos de red propician la existencia de monopolios u oligopolios naturales, ya que los consumidores obtienen un mayor beneficio al optar por la empresa o las empresas con mayor número de usuarios, por el cual tienen mayor disposición de pago, lo cual inevitablemente favorece a las empresas más grandes, y repercute en mayores niveles de concentración en el mercado.

Los efectos de red, en el contexto de los mercados de [IC], suceden debido a que los consumidores, en este caso las instituciones que utilizan como insumo los productos de [IC] se benefician más de los productos que ofrecen las SIC, si estos son producidos con un mayor volumen de información disponible.¹¹¹⁶ Sin embargo, esto sucede en la medida que los propios Usuarios se afilien a una SIC y le provean la información a su alcance.

5. QUE DIGA EL PERITO SI LOS EFECTOS DE RED Y LAS ECONOMÍAS DE ESCALAS PRESENTADOS EN EL SECTOR DE [IC] GENERAN INCENTIVOS PARA QUE LOS [USUARIOS] SE AFILIE A LA [SIC] MÁS GRANDE. PARA RESPONDER LA PREGUNTA EN CUESTIÓN, EL PERITO DEBERÁ DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA A LAS SICs, EN EL QUE SE ENCUENTRA LA LRSIC.

En primera instancia, los efectos de red presentes en los mercados de [IC] efectivamente generan incentivos para que los Usuarios se afilien a la SIC más grande, porque es esta la que puede proporcionar la [IC] más completa. [...]

[...]

Esto, en conjunto con que existen economías de escala en el mercado de [IC], cuya estructura no permite un número amplio de participantes, genera que pueda existir de manera natural una mayor concentración en el mercado.

¹¹¹⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Beck, Roman (2006), *The Network(ed) Economy: The Nature, Adoption and Diffusion of Communication Standards*. Deutscher Universitäts -Verlag, p. 41".

¹¹¹⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 104 y 105".

Sin embargo, la regulación en México convierte a los RC en bienes idénticos, aun cuando estos son ofrecidos por distintos oferentes, pues de facto convierte al mercado completo en una única red.

Específicamente, la [LRSIC],¹¹¹⁷ en su artículo 36 Bis [...]

[...]

[...] a través del intercambio de información entre las SIC, el cual es obligatorio y regulado por la CNBV, los RC emitidos deberán contener toda la [IC] disponible del Cliente, tanto positiva como negativa¹¹¹⁸, sin importar en cuál o cuáles [BD] se encuentre. Esto convierte a los RC en bienes prácticamente homogéneos, independientemente de la SIC que los emita.

[...]

Por lo anterior, los Usuarios pueden afiliarse a la SIC de su elección sin que exista un sesgo por el tamaño de cada una, pues en cada consulta estarán obligados, ellos o la SIC, a contar con toda la información del [HC] del Cliente en cuestión.

[...]

[...] la LRSIC indica que los Usuarios deben afiliarse a la SIC a la que le compren el RC, y no a todas aquellas que provean información para su elaboración.

Lo anterior implica que la decisión de un Usuario sobre a qué SIC afiliarse, no se encuentra ligada con la cantidad o calidad de información que obtendrá en los RC que consulte, pues le bastará hacerlo a una sola SIC para obtener toda la información disponible en el mercado. Es decir que, ningún usuario tiene incentivos para afiliarse a la SIC más grande, que se encuentren ligados a la calidad de los RC.

La decisión, más bien, depende de factores tales como el precio que las SIC ofrezcan a sus Usuarios por los RC, la calidad del servicio de una u otra SIC (a pesar de que el RC contenga la misma información para ambas SIC) o bien de sus servicios complementarios.

[...]

6. QUE DIGA EL PERITO SI LOS INDICADORES EMPLEADOS POR LA [AI] DENTRO DEL [DPR], EN LAS PÁGINAS 276 A 281, RESULTAN IDÓNEOS PARA CALCULAR PARTICIPACIONES RESPECTO AL MERCADO EN EL QUE TUVO LUGAR LA SUPUESTA PMR.

[...] Dado que la provisión de [IC] no constituye un mercado [...] no se puede determinar que DUN tenga [PS] [...]

Sin embargo, es cierto que el tamaño de las [BD] de las SIC efectivamente es un indicador de la capacidad que tienen las SIC para producir los RC de PM y posteriormente venderlo [...] la AI analiza las participaciones en el mercado medidas con base en los siguientes indicadores (de capacidad de producción):

- i) Promedio mensual por año de CLIENTES con [HC] en la [BD] de PM o número promedio anual de expedientes y,*
- ii) Promedio mensual por año de créditos registrados en la [BD] de PM o promedio anual de registros.¹¹¹⁹*

¹¹¹⁷ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002, cuya última reforma fue el 9 de marzo de 2018".

¹¹¹⁸ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "La información negativa se refiere a la información de cartera vencida y aquella relacionada con operaciones fraudulentas, la cual se encuentra en la [BPD]".

¹¹¹⁹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, p. 276".

La utilización de dichos indicadores es inadecuada para medir participaciones de mercado, principalmente porque: i) los conjuntos considerados para medirlas no son excluyentes; ii) no existe una relación biunívoca entre la capacidad productiva de los expedientes y de los créditos registrados y la producción de RC y de productos de valor agregado ofrecidos; y iii) la dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente refleja acciones de una u otra SIC para ganar la cuota de mercado que la otra SIC perdió.

A continuación, se explica cada una de las razones mencionadas con mayor detalle.

Los conjuntos no son excluyentes

Como se mencionó, las [BD] de cada SIC no son excluyentes, particularmente en el caso del número de expedientes. Esto, debido a que un cliente puede estar registrado en las [BD] de ambas SIC si obtuvo dos créditos con dos Usuarios distintos, cada uno afiliada a una SIC distinta, o si un cliente obtiene un crédito de un Usuario afiliado a ambas SIC.

Al respecto, la AI declara lo siguiente en su [VISTA DUN]:

'La utilización de las participaciones de mercado con base en el número promedio mensual de clientes con [HC] es correcta dado que, si bien las [BD] de PM podrían tener registros en ambas SIC, ello es improbable puesto que, únicamente el [...] de los Usuarios están afiliados a DUN y a [CC]'.¹¹²⁰ [Énfasis añadido]

Lo anterior denota la falta de claridad por parte de la AI al utilizar los indicadores antes mencionados. Esto, debido a que lo relevante para ver que los conjuntos utilizados no son excluyentes son precisamente los clientes con [HC] con distintos Usuarios, y no el número de Usuarios afiliados a ambas SIC [...]

Por lo tanto, cuando la AI asegura que DUN cuenta con cierto nivel de participación de mercado, con certeza se puede asegurar que parte de los clientes contabilizados en dicho porcentaje también está contabilizado en la participación de [CC]. Esto implica que la cifra tomada como el total del mercado es superior al número de clientes existente [...]

[...]

[...] más del [redacted] de las consultas de ambas SIC dieron Hit). Esto implica que existe un número muy significativo de clientes con [HC] en ambas [BD] y, por consiguiente, el indicador utilizado por la AI para medir participaciones de mercado no presenta conjuntos excluyentes entre ambos competidores, lo que lo convierte en un indicador inadecuado.

No existe una relación biunívoca entre la capacidad productiva y la producción en los mercados de [IC]

[...] la utilización de datos de capacidad productiva para calcular participaciones de mercado se justifica cuando el objetivo es tener una aproximación del potencial de producción de las empresas. Sin embargo, es una condición necesaria que exista una relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción.

Esto no sucede con el número de créditos registrados en la [BD] de PM de cada SIC [...] cada cliente tiene un número potencialmente distinto de créditos otorgados [...] incluso cuando el ingreso obtenido por la venta de ambos productos es exactamente igual (dado que el producto es el mismo), el número de registros utilizado es distinto.

En este sentido, dado que el 'mercado' relevante definido por la AI no puede ser considerado como tal, y dado que no se puede determinar que DUN tenga [PS] en algo que no comercializa y

Eliminado: una palabra.

¹¹²⁰ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Respuesta de la AI a las Manifestaciones de DUN, p. 55".

sobre lo que no puede fijar precios o restringir su oferta, la utilización de datos de capacidad productiva ciertamente tampoco permite determinar la existencia de [PS].

La dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente refleja acciones de una u otra SIC para ganar la cuota de mercado que la otra SIC perdió

Finalmente, se debe de considerar que medir participaciones en número de expedientes o en número de créditos registrados en las [BD] de PM es incorrecto, ya que el hecho de que la participación de una u otra SIC disminuya no es necesariamente un reflejo de que su competidor haya realizado una acción para ganar la cuota de mercado que el primer agente perdió. Específicamente, simplemente por una cuestión numérica, el otorgamiento de más créditos en el país puede generar un aumento en la participación de la SIC con menor participación, a pesar de que ambas SIC hayan aumentado su número de registros de manera simétrica¹¹²¹. [...]

En síntesis, dado que: i) los datos para medir la participación de los competidores no son excluyentes entre sí; ii) que no existe una relación biunívoca entre la capacidad productiva y la producción con los indicadores utilizados; y iii) que la dinámica de los indicadores utilizados por la AI puede ser exógena a las SIC; se concluye que dichos indicadores no fueron los adecuados para calcular participaciones respecto al 'mercado' en que tuvo lugar la negativa de trato imputada a DUN en el DPR.

Ciertamente, una buena manera para medir participaciones de mercado sería el número de RC de PM vendidos en conjunto con el número de [RCI] facturados a una u otra SIC. Al hacer dicho análisis, [...] se obtiene que la participación de [CC] ha crecido de forma significativa y consistente durante el periodo analizado, lo que pone de manifiesto la incapacidad de DUN para impedir su acceso exitoso y creciente al mercado.

7. QUE DIGA EL PERITO CUÁL ES LA RELEVANCIA DE CONSIDERAR LA EVOLUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE MERCADO EN EL PERIODO INVESTIGADO Y CÓMO ESTE ANÁLISIS HUBIERA CAMBIADO LAS CONCLUSIONES DE LA DETERMINACIÓN DE [PS].

Las participaciones de mercado ayudan a entender la dinámica competitiva del mercado. [...]

[...] las altas participaciones de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para concluir que un agente cuenta con [PS]. Para determinar la existencia de [PS] es imprescindible analizar factores adicionales.

Uno de estos factores adicionales es la propia evolución en el tiempo de las participaciones de mercado, ya que los cambios en estas reflejan a su vez la dinámica competitiva en el mercado. Por ejemplo, en un caso en el que las participaciones de mercado cambian mucho de un año a otro o en el que la empresa líder es constantemente desplazada, podemos concluir que existen un alto grado de competencia entre los oferentes, sin importar el nivel de las participaciones en sí mismo.

La participación de los agentes económicos en un mercado específico no es estática sino, por el contrario, evoluciona conforme el mismo mercado lo hace. Por tal razón, el nivel promedio de participación en un periodo determinado, si bien puede ser indicativo, presenta el problema típico de utilizar promedios: no permite observar el cambio que tienen las participaciones en el tiempo, ni los valores mínimos y máximos existentes en el periodo de los datos analizados.

Al respecto es relevante mencionar que, mientras que la AI sí consideró en su análisis los niveles de participación de mercado en cada año del Periodo Investigado, sus conclusiones en el DPR derivan únicamente del nivel promedio observado.

¹¹²¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Para más información, consultar el ejemplo mostrado en las Manifestaciones de DUN al DPR, pp. 64-65".

La evolución de las participaciones es también un gran indicio de los efectos que disciplinan el mercado. Por ejemplo, si se observa que las participaciones de mercado disminuyen cuando un agente sube el precio o disminuye la calidad de su producto, es muestra de que los competidores tienen capacidad para restringir las acciones unilaterales de este.

[...] si el análisis de [PS] se lleva a cabo en el contexto de una [PMR] [...] sería razonable observar que, si efectivamente la práctica fue anticompetitiva, la participación de mercado del agente con [PS] aumentara durante el periodo analizado [...] o cuando menos que se mantuviera estática.

En este sentido, el análisis de la evolución de las participaciones de DUN y de [CC] debió elaborarse con mayor detalle por la AI, debido a que en un mercado como el de [IC], con economías de escala y efectos de red, es más probable que se presenten altas concentraciones y menos oferentes. Por lo tanto, el nivel promedio de participación de mercado resulta completamente insuficiente para analizar los efectos competitivos o anticompetitivos de una práctica.

[...] [CC] ha presentado un crecimiento muy considerable y mayor al de DUN en los dos indicadores iniciales considerados por la AI para su análisis de [PS], [...]

[...] el crecimiento de [CC] durante el año en que ingresó al mercado de PM (de 2012 a 2013), fue de 300% en créditos registrados en la [BD] de PM, y de 100% en número de expedientes de PM en la [BD]. Asimismo, [CC] ha mostrado crecimientos sostenibles en años posteriores. Finalmente, se puede observar que el número de expedientes de PM no ha crecido en el caso de DUN. Todo lo anterior señala lo contrario a una imposibilidad de acceso al mercado derivada de una posible conducta anticompetitiva por parte de DUN.

[...]

[...] los créditos registrados han crecido de manera sostenida para ambas SIC y demuestra la incapacidad de DUN de restringir el abasto de información o de inhibir el acceso y el crecimiento de [CC] [sic] Asimismo, se debe hacer notar que para ambas SIC los créditos registrados han crecido en términos absolutos, lo cual denota un mercado en crecimiento que ambas SIC están aprovechando.

[...]

Por el otro lado, el número de expedientes en la [BD] de PM se ha mantenido constante para DUN, sin embargo, ha crecido de manera considerable para [CC] en el periodo 2012 a 2014 (pasando [sic] 100,000 expedientes en 2012 a 300,000 expedientes en 2015 [sic]. De nuevo, esto denota un mercado en crecimiento y demuestra que DUN no ha sido capaz de desplazar a [CC].

[...]

[...]

*[...] la AI argumenta que la participación promedio del periodo 2012 a 2015 de DUN es alta y que la diferencia en participaciones con [CC] es muy significativa. [...] dicho análisis resulta insuficiente e incorrecto ya que no se analiza la evolución de las participaciones en cada uno de los cuatro años y se realizó con un indicador incorrecto (el número de expedientes), ya que los conjuntos de expedientes de cada SIC no son disjuntos. No obstante, inclusive ignorando estos errores, la 'participación' de DUN implica necesariamente que, en promedio, la participación de [CC] es igual a **B** lo cual a su vez implica que en los cuatro años que involucra el Periodo Investigado, ha logrado tener en al menos un año una participación mayor o igual a **B**. Esto, en un mercado que usualmente presenta altas concentraciones, ciertamente refleja una entrada*

Eliminado: dos palabras.

exitosa al mercado. Asimismo [...] la ganancia de una parte del 'mercado' (según lo definió la AI) llevada a cabo por [CC] se ha dado de manera consistente¹¹²².

El argumento anterior aplica de la misma manera para el análisis de participaciones de la AI sobre operaciones de crédito registrada en la [BD] de PM y sobre los Usuarios que adquirieron algún producto de PM, presentados en las tablas 64 y 65 del DPR,¹¹²³ respectivamente. El hecho de que el número de registros, de expedientes y de Usuarios haya podido aumentar de manera considerable en tan solo cuatro años, así como las participaciones de mercado medidas con base en estos indicadores, ciertamente no indica que DUN le haya imposibilitado sustancialmente el acceso a [CC], sino que más bien desmiente.

Finalmente, un buen indicador para medir participaciones de mercado, [...] es el número de RC de PM vendidos, considerando el número de RC Integrados facturados a una u otra SIC para contar con el mercado completo [...]

[...] la participación de [CC] ha presentado un crecimiento consistente y muy significativo, mientras que DUN ha mostrado una disminución consistente en sus participaciones, lo cual es muestra de que no ha impedido el acceso de [CC] al mercado de [IC] ni durante ni después del Periodo Investigado.


[...]

Lo anterior es una consecuencia natural de la regulación que impone la LRSIC, que [...] impide la existencia de [PS] en cualquier agente, pues por cada unidad que alguno comercializa en que hubo Hit, implica necesariamente la venta de un reporte por parte de su competidor. Es decir, cualquier incremento en el volumen de ventas de alguno de los dos agentes implica necesariamente un aumento de las ventas de su competidor.

En síntesis, el nivel promedio de participación en sí mismo es insuficiente para determinar que algún agente tiene [PS] en el mercado. Dado que el mercado de [IC] presenta economías de escala, y dado que [CC] comenzó a operar quince años después que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta. No obstante, el análisis de la evolución de las participaciones durante el periodo, prácticamente omitido en el DPR, ciertamente es un indicativo para poder observar si DUN efectivamente ha tenido el poder de fijar precios o restringir el abasto.

Como se mostró, [CC] presentó un crecimiento significativo en los indicadores propuestos por la AI para el análisis de [PS], así como un incremento sostenido en participaciones de mercado medidas con base en el volumen de RC de PM vendidos durante el Periodo Investigado. Por estas razones, parece haber elementos, distintos al nivel promedio de participaciones de mercado, que indican la entrada exitosa de [CC] al Mercado.

Si la AI hubiera analizado la evolución de las participaciones de mercado, seguramente habría alcanzado las mismas conclusiones, lo cual podría haber repercutido en su análisis sobre las fracciones II, III, IV y V del artículo 59 de la LFCE. Una de sus conclusiones que probablemente habría sido distinta es precisamente la existencia de barreras a la entrada, como por ejemplo la cuota de mercado inicial requerida para alcanzar la rentabilidad mínima, ya que es precisamente la evolución de las participaciones la que permite intuir de manera preliminar que las barreras a la entrada pueden no ser tan restrictivas como la AI sugiere, especialmente cuando el mercado en cuestión muestra un dinámico crecimiento a lo largo del tiempo.


¹¹²² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Al menos de 2012 a 2014".

¹¹²³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 278-280".

8. QUE DIGA EL PERITO CUAL [sic] ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE UN AGENTE ECONÓMICO PARA FIJAR PRECIOS CON LA CAPACIDAD PARA RESTRINGIR EL ABASTO.

En primer lugar, se tomará en cuenta el mercado en competencia perfecta. [...]

[...]

[...] en este tipo de competencia los oferentes no tienen la capacidad de fijar precios y tampoco de restringir el abasto, ya que su producción es una parte mínima del mercado total y únicamente tienen inferencia en la cantidad que producen ellos mismos dado el precio que observan.

[...]

Por otro lado, hay casos en los que no existen condiciones de competencia en un mercado, por ejemplo, en presencia de un monopolio. En este caso, se asume que el monopolista conoce la relación que los consumidores asignan entre el precio de un bien y su cantidad provista y, por lo tanto, tiene la capacidad de fijar el precio del bien que ofrece. El monopolista [...] puede decidir unilateralmente que precio fijar y así maximizar sus ganancias. Sin embargo, dado que los consumidores ajustaran su cantidad demandada de acuerdo con el precio impuesto por el monopolista, decidir el precio al que venderá su producto es equivalente a decidir la cantidad que se comercializará en el mercado. Es decir, el equilibrio al que se llega al fijar precios resulta en una cantidad, por lo que es una forma de restringir el abasto.

Otro tipo de mercado al que puede enfrentarse una empresa es el oligopolio [...] las empresas no pueden fijar un precio ya que este depende de las decisiones individuales de un número de participantes y no es una decisión unilateral. [...] la relación entre precios y cantidades de los demandantes se mantiene, es decir estos reaccionan al precio o cantidad elegida por los oligopolistas, dependiendo de su curva de demanda.

[...] independientemente del tipo de competencia, existe una relación entre los precios y las cantidades, por lo que uno se ajusta a través de la otra, considerando la curva de oferta y demanda, es decir, las preferencias de los consumidores y la naturaleza de los oferentes. Por ejemplo, en el caso específico de un mercado con una empresa que tiene [PS], para llegar a fijar un precio por encima de un nivel competitivo, se observaría de facto una restricción en el abasto de la cantidad.

Es decir, existe una relación biunívoca entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de restringir el abasto, debido a que para cada precio los consumidores elegirán una cantidad determinada y viceversa. [...]

9. QUE DIGA EL PERITO SI LA CONCLUSIÓN A LA QUE ARRIBA LA AI EN EL DPR EN LA PÁGINA 293, SOBRE QUE [DUN] TIENE LA CAPACIDAD DE RESTRINGIR EL ABASTO, PERO NO LA CAPACIDAD DE FIJAR PRECIOS PUEDE SER SOSTENIDA DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO.

[...] el mercado definido por la AI en el DPR no constituye un mercado [...] ninguna SIC tiene la facultad para unilateralmente, restringir el abasto y tampoco de fijar el precio en ese 'mercado'.

[...] las empresas pueden competir de distintas formas. Específicamente, existen dos modelos de competencia económica ampliamente utilizados en la literatura económica: el modelo de Bertrand, que asume que las empresas compiten decidiendo su precio y el modelo de Cournot, en el que se supone que las empresas compiten decidiendo la cantidad que producen.

[...]

Handwritten signature and initials.

Independientemente de la manera en que compite una empresa [...] el proceso de competencia deriva en el equilibrio del mercado. Esto es porque, sin importar el tipo de competencia del que se trate, existe una relación biunívoca de interdependencia entre las cantidades y los precios.

De acuerdo con lo anterior, si DUN tuviera la capacidad de restringir el abasto, de facto implicaría que tendría la capacidad de fijar el precio, ya que su decisión influiría la decisión de su competidor y, ambas cantidades en conjunto influirían en la decisión de los demandantes sobre cuál es el precio que están dispuestos a pagar por la cantidad ofrecida por todas las empresas.

[...] esto no puede suceder porque el intercambio de [IC] ni siquiera tiene un precio de intercambio que haya sido determinado a través de la interacción entre oferentes y demandantes.

10. QUE DIGA EL PERITO SI LA CUOTA DE MERCADO QUE UN AGENTE ECONÓMICO DEBE DE CUMPLIR PARA ALCANZAR LA RENTABILIDAD MÍNIMA PUEDE O NO SER CONSIDERADA COMO UNA BARRERA DE ENTRADA AL MERCADO.

La rentabilidad mínima en el mercado, es decir, la cuota mínima de mercado que un agente debe cubrir para que sus ingresos superen a sus costos, puede ser considerada como una barrera de entrada. [...]

En el caso del mercado de [IC], por ejemplo, los principales factores que deben considerarse son el crecimiento del mismo mercado, el cual tiene el potencial de mitigar los efectos de red en el mercado; la regulación, que puede fomentar la entrada de una nueva empresa para prestar sus servicios con la misma calidad que el o los agentes ya establecidos; las economías de alcance que presenta el mercado de [IC]; y, la experiencia vista en el mercado, en el sentido de ha accedido [sic] un nuevo agente en el mercado.

[...] la escala mínima que se debe alcanzar para llegar al punto de equilibrio se determina a partir del número de unidades que se deben de vender para recuperar la inversión. La escala mínima en sí no es un factor que afecte la decisión de entrar o no a un mercado, sino las posibilidades de conseguir el financiamiento para entrar a dicho mercado, que a su vez depende de las posibilidades para recuperar la inversión.

En el caso de un mercado que está en crecimiento, ciertamente el criterio relevante para determinar la cuota mínima es el número de unidades que se requieren para alcanzar el punto de equilibrio (cuando los ingresos alcanzan a cubrir las inversiones iniciales), ya que la cuota de mercado cambia conforme cambia el tamaño de mercado, mientras que el número de unidades se mantiene fijo. Por ejemplo, en el caso de un mercado que está en crecimiento, la cuota de mercado decrece conforme crece el mercado, si el número absoluto de unidades producidas se mantiene constante, lo que debilita la idea de que la cuota requerida pudiera ser sea una barrera a la entrada.

Asimismo, si el mercado está creciendo, una SIC nueva en el mercado no necesita forzosamente contar con una base de Usuarios distinta a la que ya es atendida por las SIC establecidas, como lo señala la AI,¹¹²⁴ por lo que tampoco la base de Usuarios es una barrera a la entrada.

Por otro lado, la misma LRSIC, en su artículo 36 Bis, obliga a las SIC a intercambiar su información [...] una SIC puede acceder a más información que la que integra su base de Usuarios, por lo que esto tampoco se puede considerar como una barrera de entrada.

[...] es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima de mercado toda vez que ello sería tanto como asumir que existe un modelo único de negocios para participar en un mercado dado.

La cuota de mercado se encuentra en constante evolución y crecimiento gracias a la existencia de las dinámicas competitivas e innovación de los mercados, que constantemente generan nuevas


¹¹²⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, p. 155".

alternativas para participar en el mercado. Por esto, todos los factores anteriores se toman en cuenta para decidir entrar (o no) al mercado, y el hecho de que existan en el mercado de [IC] (a través de las economías de alcance que presenta, es decir, de poder ofrecer más productos de [IC] que solo el RC) disminuye las posibles barreras a la entrada.

En síntesis, es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima de mercado únicamente para RC de PF (como lo hace la AI) toda vez que un competidor, al ingresar en el mercado y cubrir los costos de inversión iniciales, puede cruzar su punto de equilibrio y comenzar a generar utilidades vendiendo no únicamente RC de PF sino otros productos y servicios de [IC].

Finalmente, el que exista evidencia

B

B

11. QUE DIGA EL PERITO QUE SE ENTIENDE POR EL PROBLEMA DE FREE-RIDER Y CÓMO SE MANIFIESTA ESTE PROBLEMA CUANDO UN AGENTE ECONÓMICO ES OBLIGADO A SUMINISTRAR UN BIEN A UN COMPETIDOR, NO OBSTANTE QUE NO COMERCIALICE NORMALMENTE DICHOS BIENES CON TERCEROS.

[...] el problema económico de free-riding se refiere a la situación en que una empresa se beneficia de las acciones y esfuerzos de otra sin pagar o compartir los costos en los que incurre la otra empresa.¹¹²⁶ Este problema suele provocar ineficiencias económicas, que se derivan de la subproducción del bien o servicio en cuestión.

En este sentido, este problema generalmente lleva a niveles de inversión subóptimos por dos motivos:

- i) la empresa free-rider no está dispuesta a invertir, pues puede beneficiarse de las acciones de la otra empresa sin incurrir en los costos; y
- ii) la primera empresa no tiene los mismos incentivos a invertir, ya que compartirá sus ganancias con la empresa free-rider sin que esta última comparta los costos.

Por consiguiente, en el contexto de un mercado en el que un agente está obligado a proporcionar uno de sus insumos a un competidor que lo utiliza de la misma manera, para competir en el mismo mercado, el problema de free-rider se presenta porque la empresa que tiene que compartir su insumo con otras empresas tiene menos incentivos a invertir debido a que tiene que compartir los retornos de su inversión al compartir el insumo; por el otro lado, las empresas llamadas free-riders no tienen incentivos a invertir en tecnologías propias para desarrollar los insumos.

12. QUE DIGA EL PERITO CUÁLES PUEDEN SER LOS EFECTOS DE OBLIGAR A UNA SIC A COMPARTIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU [BD] CON SUS COMPETIDORES.

[...]

En México, la regulación actual del mercado de [IC] presenta dos cuestiones relacionadas con el free-riding. Primero, la obligación de las SIC a proporcionar su [BPD] a las demás SIC que lo soliciten, disminuye los incentivos de la SIC con la [BD] más grande a invertir e innovar, debido a que sabe que, por ley, tendrá que compartir uno de sus insumos principales para la elaboración de [RC] y, por lo tanto, tendrá que compartir los frutos de su inversión habiendo incurrido en el costo de forma individual.

¹¹²⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "CC alcanzó en 2015 B RC de PM considerando los [RCI], superando así la cuota mínima de B que establece la AI. Fuente: archivo de Excel 'RC MarketShare'".

¹¹²⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "OCDE. Glosario de términos estadísticos de la OCDE. Disponible en: <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3227>".

El segundo elemento para considerar es la obligación que tienen las SIC de compartir su información puntual para la elaboración de los [RCI]. Esto implica que una SIC que recién entra al mercado simplemente debe pagar una tarifa de intercambio, lo cual desincentiva a la SIC que solicita la información a invertir, debido a que, mientras la tarifa de intercambio no sea lo desproporcionadamente [sic] alta, dicha SIC podrá mantener sus ventas de [RC] tan completos como lo podría hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de inversión. Asimismo, aun cuando se presente una tarifa de intercambio lo suficientemente alta que mitigue el efecto de free-riding, este no desaparece del todo, ya que la SIC entrante no siempre tendrá los incentivos de buscar y procurar conseguir el mayor número de Usuarios, toda vez que, si no los consigue, aún puede emitir sus RC con la misma calidad que los de la SIC establecida.

Por consiguiente, al obligar a compartir la información de las [BD] entre las SIC, sin que exista una tarifa de intercambio que incentive a ambas SIC a invertir, se incurre en un problema de free-riding que genera ineficiencias de innovación, calidad y subproducción.

Es importante reiterar que existe una contraprestación por este intercambio, lo cual mitiga el problema, pero no lo solventa del todo. Asimismo, [...] la regulación actual obliga a ambas SIC a compartir la información contenida en sus [BD] con la otra SIC, tanto de forma masiva con la BPD, como de forma puntual para los [RCI], por lo que ambas SIC se benefician en parte de la [BD] de la otra SIC y esto en parte reduce los efectos de free-riding que podrían verse manifestados en el mercado.

En resumen, existe un problema de free-riding en el mercado de [IC], en el que el agente con la [BD] más chica se beneficia del agente con la mayor [BD]. Ciertamente, este efecto se mitiga por la imposición de una contraprestación por el intercambio de [IC] entre las SIC; sin embargo, el efecto de free-riding no desaparece y ambos agentes tienen incentivos a subinvertir.

13. CON BASE EN LA TEORÍA ECONÓMICA, QUE DIGA EL PERITO CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE RESULTA RAZONABLE CONSIDERAR AL SANCIONAR UNA PRÁCTICA TIPIFICADA COMO NEGATIVA DE TRATO.

En general, las empresas tienen toda la libertad para elegir si comercian o no los bienes que producen, con otras empresas, sin que esto signifique necesariamente una violación de las leyes de competencia. No obstante, cuando una empresa cuenta con [PS], podría dañarse el proceso de competencia y libre concurrencia si dicha empresa se negara a comerciar un bien con uno de sus competidores, ya sea en el [MR] o en un mercado relacionado.

Los problemas de competencia pueden surgir cuando una empresa con [PS] niega el acceso a un producto y/o servicio en el mercado 'aguas arriba' a un agente con el que compite en el mercado 'aguas abajo'. Para que esto dañe el proceso de competencia y libre concurrencia tiene que ser el caso que la negativa de trato afecte a un agente de forma que limite en forma anticompetitiva su crecimiento en el mercado 'aguas abajo'.

[...] una de las principales preocupaciones que surgen a las autoridades en materia de competencia a nivel mundial al sancionar la negativa de trato es [...]

[...] el problema de free-riding.

[...] al sancionar una práctica tipificada como negativa de trato [...] resulta relevante entender cuál es el sentido de intervenir cuando una empresa realiza una negativa de trato y en qué condiciones es prudente sancionarla. De lo contrario, la autoridad en materia de competencia podría limitar la libertad de las empresas para decidir cómo, con quién y en qué condiciones

comerciar, la cual representa un principio general de competencia para la mayoría de los sistemas legales en el mundo.¹¹²⁷

En este sentido, es relevante analizar cuidadosamente cada uno de los criterios que se deben considerar para determinar que una negativa de trato es anticompetitiva [...]

De acuerdo con la literatura económica, dichos criterios son los siguientes.

1. El control de un insumo necesario o indispensable por parte de un monopolista.
2. La imposibilidad práctica, típicamente relacionada a costos muy altos, pero también a imposibilidades técnicas, para que un competidor pueda reproducir el insumo.
3. La negativa de proporcionar dicho insumo a un competidor.
4. La factibilidad de proporcionar el insumo.¹¹²⁸

Tomando esto en consideración, muchas jurisdicciones, como la jurisdicción europea y la de Estados Unidos, han adoptado criterios más restrictivos para sancionar la negativa de trato. En el caso de la Comisión Europea, se tienen que observar al menos las siguientes condiciones para sancionar la negativa de trato (también conocida como denegación de suministro):

1. 'La denegación se refiera a un producto o servicio objetivamente necesario para poder competir con eficacia en un mercado descendente.
2. Sea probable que la eliminación dé lugar a la eliminación de la competencia efectiva en el mercado descendente.
3. Sea probable que la denegación redunde en perjuicio de los consumidores.¹¹²⁹

La negativa de trato por sí misma no constituye una práctica anticompetitiva, dado que los efectos sobre el bienestar de los consumidores son generalmente ambiguos. Esto, debido a que, como se mencionó, obligar la compartición de un insumo podría inducir hacia la reducción de los incentivos para innovar, así como a incurrir en costos de transacción altos para la empresa obligada (lo cual, en última instancia, repercute en la calidad y en el precio de los bienes o servicios que el consumidor recibe).¹¹³⁰

Finalmente, la empresa que efectúa la negativa de trato debe de poder proporcionar el insumo en cuestión. Es decir, si la conducta de negativa de trato tiene una justificación objetiva y relacionada con el contexto comercial del mercado bajo estudio, dicha conducta puede efectivamente no estar dañando el proceso de competencia en el mercado. Es decir que, la provisión del insumo indispensable debe ser técnica y económicamente factible para la empresa que realiza la negativa de proporcionar el insumo en cuestión, lo que implica que su otorgamiento no debe repercutir en riesgos a la seguridad, procesos y operaciones de la empresa, además de no generar costos adicionales que el proveedor tenga que cubrir.¹¹³¹

Por consiguiente, para determinar que una conducta de negativa de trato puede tener efectos anticompetitivos en el mercado, algunos criterios que resulta razonable verificar son la existencia de un insumo indispensable, la imposibilidad de replicar dicho insumo por parte de los competidores, que la negativa se realice en contra de un competidor, y las condiciones de

¹¹²⁷ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Whish, Richard y David Bailey (2015), *Competition Law*, Elghth Edition. Oxford University Press P. 737".

¹¹²⁸ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Fumagalli, Chiara. Motta, Massimo y Claudio Calcagno (2018), *Exclusionary Practices: The Economics of Monopolisation and Abuse of Dominance*, Cambridge University Press. p. 472".

¹¹²⁹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Comisión de Competencia Europea, Comunicaciones procedentes de instituciones y órganos de la Unión Europea. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, páginas 18, párrafo 81".

¹¹³⁰ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Chen, Yongmin (2011). *Refusal to Deal, Intellectual Property Rights, and Antitrust*, Munich Personal RePEc Archive, University of Colorado".

¹¹³¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007). *Policy Round table: Refusals to Deal*, Comité de Competencia de la OCDE".

factibilidad de que la empresa que realiza la negativa de trato efectivamente intercambie su insumo con otros agentes en el mercado.

[...]

14. QUE DIGA EL PERITO SI LA PMR INVESTIGADA EN EL [EXPEDIENTE] CUMPLE CON LOS CRITERIOS MENCIONADOS EN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR.

[...] no se cumplen en el caso que nos ocupa, por lo que no se puede determinar que la conducta imputada a DUN en el DPR es anticompetitiva y sancionable.

[...]

[...] el concepto de Segmento Co en el DPR es incorrecto [...] el Segmento Co no forma parte de la BPD, puesto que no forma parte del [HC]. Más bien, dicho segmento se refiere únicamente a las 'experiencias comerciales', es decir, se refiere a los montos pendientes de pago incluidos en facturas agrupadas de clientes emitidas por un mismo proveedor, que se actualizan mensualmente. Es relevante mencionar que las 'experiencias comerciales' no constituyen operaciones crediticias en cuanto no constituyen ni créditos ni operaciones análogas. Asimismo, a sabiendas de que el [CONTRATO DUN Y CC] no incluía la compartición de las 'experiencias comerciales', la CNBV aun así aprobó su contenido. Sin embargo, la AI en el DPR considera al Segmento Co como [HC] que DUN negó a compartir a [CC], y por lo cual los RC emitidos por DUN contenían [IC] incompleta, volviendo dichos reportes anticompetitivos en el mercado.

[...]

El control de un insumo indispensables e insustituible

[...] para que un insumo pueda ser considerado como indispensable e insustituible, el dueño del insumo debe estar activo también en el mercado en el que el competidor quiere acceder o en donde quiere operar, lo cual sí sucede en el mercado de la comercialización de productos de [IC] de PM. A su vez, los costos de replicar dicho insumo deben ser muy altos.

Al respecto, se debe de considerar que el insumo relevante para generar los productos de [IC] son los registros de crédito, no la BPD en sí o las 'experiencias comerciales' (que ni siquiera forman parte de los historiales crediticios contenidos en esta última). Ciertamente, la BPD no es más que un compendio de registros que lleva a cabo cada una de las SIC, pero la fuente primaria de información son los Usuarios. En consecuencia, DUN no podría negarle el acceso a [CC] a los registros de [IC] porque no es la fuente primaria de dichos registros. Es decir, la BPD es resultado de una inversión adicional que llevan a cabo las SIC para organizar, compilar y ordenar los registros proporcionados por los Usuarios, pero no es el insumo primario. Adicionalmente, para emitir un [RCI], DUN y [CC] realizan un intercambio puntual de los registros para poder ofrecer RC con toda la [IC] disponible de cada Cliente, por lo que, de nuevo, el insumo primario son los registros en sí, no la BPD o el Segmento Co.

La imposibilidad práctica y razonable de un competidor para replicar el insumo Indispensable

[...] tanto DUN como [CC] han sido capaces de duplicar los registros de la BPD del otro, dado que la fuente primaria de dichos registros son los Usuarios y no las SIC. Esto implica que, si los usuarios le proporcionaran a [CC] los registros de créditos que forman parte de la BPD de DUN, este último podría replicarla, e inclusive adecuarla para que fuera compatible con sus sistemas de programación y procesamiento.

Por el otro lado, a través del intercambio puntual [...] tanto DUN como [CC] han intercambiado los registros de [IC] necesarios para vender sus [RCI] de PM a los Usuarios. Al respecto, el costo de dicho intercambio ha sido similar para ambas SIC antes de emitir sus RC o sus otros

productos de valor agregado. Tal como se mencionó en el numeral 5 del presente Dictamen, el **B** de las consultas realizadas por DUN a la [BD] de [CC] resultó en Hit, mientras que las consultas de [CC] a la base de DUN resultaron en un porcentaje de Hit del **B**.¹¹³² Esto quiere decir que la contraprestación de los Hits causados fue similar para los Usuarios en las dos SIC y, por consiguiente, ambas SIC han incurrido costos similares, derivados de intercambiar de forma puntual la [IC]. Lo relevante es que, aún derivado de estos costos similares en que han incurrido ambas SIC, estas han logrado comercializar sus RC de PM con información completa, pudiendo duplicar la información de la BPD de manera práctica y con un costo razonable. Lo anterior denota que el insumo indispensable para [CC] en sí no es la BPD (y menos el Segmento Co, el cual de entrada no forma parte del [HC] de un Cliente) sino los registros de crédito de cada [BD], los cuales han sido efectivamente intercambiados durante el Periodo Investigado.

La negativa de proporcionar el insumo a un competidor

[...] la compartición de [IC] entre las SIC se encuentra regulada en México por la CNBV [...] la literatura económica sugiere que dicho regulador será el mejor capacitado para dictaminar los términos de intercambio [...] la negativa de trato bajo regulación sectorial implicaría un incumplimiento de la ley sectorial correspondiente, más no necesariamente un efecto anticompetitivo en el mercado.

Al respecto, la LRSIC establece que 'las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información'. De esto se desprende que el plazo que tienen las SIC para acordar los términos y condiciones para intercambiar su información comienza cuando la CNBV formula un requerimiento solicitándoles que lo hagan. Al respecto, la CNBV jamás emitió el requerimiento al que refiere el tercer párrafo del artículo 36 de la LRSIC citado, lo cual constituye una prueba de que tanto [CC] como la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado por [CC] y estuvieron satisfechos con la solución aceptada en las reuniones mantenidas entre DUN, [CC] y la CNBV, para discutir las alternativas al intercambio de la BPD de PM. Es decir, no existió negativa toda vez que no existió un requerimiento por parte del regulador para acordar las condiciones de intercambio de la BPD entre DUN y [CC].

Ahora bien, [...] DUN no negó (ni puede negar) un insumo primario a [CC]. De acuerdo con la AI, la negativa por parte de DUN sucedió de manera tácita (mediante un acto omisivo) al no llevar a cabo el intercambio de la BPD de PM, así como el Segmento Co, ante la previa solicitud de [CC].¹¹³³ Sin embargo, el insumo en cuestión (es decir, la BPD, dado que el Segmento Co ni siquiera forma parte del [HC]) no es más que un compendio de registros de crédito que, como se mencionó, tiene como fuente primaria la información de los Usuarios, por lo que DUN no podría negarle el acceso a [CC] a dichos registros.

La factibilidad de proporcionar el insumo

Asimismo, si la BPD no se ha compartido [...] es efectivamente porque DUN se ha encontrado imposibilitado de hacerlo. [...]

¹¹³² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Se considera el promedio de consultas mensuales que resultaron en un Hit entre agosto 2013 y abril 2015. En el caso de DUN se consideran consultas o PF con actividad empresarial y a PM, mientras que en el caso de [CC] se consideran únicamente consultas a PM. Fuente: Buró de Crédito, Contestación al oficio de requerimiento número COFECE-AI-DGIM-20 15-029 de fecha 20 de abril de 2015, contenido en el Expediente".

¹¹³³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 303-304".

Específicamente, DUN señaló que el problema con intercambiar la [BD] es que DUN no está autorizada para prestar servicios de [IC] de PF, mientras que [CC] sí, por lo que la BPD que [CC] debía intercambiar con DUN no podría incluir información relativa a PF.

[...] Asimismo, con respecto a que pasó un año calendario desde la solicitud de intercambio de la BPD de [CC] y la implementación de la alternativa al intercambio de dicha BPD, se debe mencionar que el plazo respondió a la imposibilidad de realizar el intercambio, por las razones mencionadas, y al hecho de que hubo diversas reuniones con [CC] y la CNBV para discutir alternativas.

[...] que la CNBV haya optado por no sancionar a DUN hasta el momento [...] debe responder a que DUN acreditó que tiene una razón justificada para no hacerlo. Como se mencionó, la teoría económica y la experiencia internacional indican que, en caso de que el sector bajo estudio tenga un regulador propio, dicho regulador será el mejor capacitado para dictaminar los términos de intercambio, derivado de su conocimiento profundo del sector en el que se encuentra.

[...] la AI desestima estos argumentos en vista de que TUM, que solo está autorizado para operar en el segmento de PF, sí intercambia la BPD de PF con [CC]. Sin embargo, TUM sí pudo llevar a cabo el intercambio [...] se encuentra permitido dentro de los términos de las autorizaciones de [CC] y TUM, [...] el hecho de que TUM sí realice el intercambio sirve para evidenciar la intención de Buró de Crédito (grupo de interés económico que conforma tanto a TUM como a DUN) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la LRSIC.

Tampoco debe pasar desapercibido que, aunado a encontrarse legalmente impedido para recibir la información relativa a PF, el recibir la BPD por parte de DUN no solo implica un incumplimiento a su autorización, sino también le implicaría un gasto por información que no podría utilizar, y adicionalmente, un costo extra por decantar la [BD] que [CC] le proporcionaría, para únicamente utilizar la parte para la que DUN está autorizado. Ciertamente, este gasto tendría que estar contemplado en la tarifa de intercambio de la BPD acordada entre ambas SIC.

Finalmente, se debe resaltar que existió consentimiento entre DUN y [CC] para no intercambiar sus BPD¹¹³⁴, [...] El consentimiento se dio entre DUN, [CC] y la CNBV, por no estimarse absolutamente necesario el intercambio de la BPD, dado que la información era intercambiada puntualmente para emitir los RC Integrados. Es decir, no existió una negativa de trato, sino una razón objetiva para no proceder al intercambio.

Claramente, los argumentos anteriores constituyen justificación objetiva del porqué DUN no proporcionó la BPD a [CC].

En síntesis, la conducta imputada a DUN en el DPR, de negar (por omisión) el intercambio de la BPD y la provisión del Segmento Co a [CC], no cumple con los criterios considerados en la teoría económica para considerarla anticompetitiva y sancionable, toda vez que, los insumos a intercambiar (tanto la BPD como el Segmento Co) no son un insumo indispensable; que los registros de la BPD y las experiencias comerciales se pueden duplicar con la información provista por los Usuarios, y la BPD se puede duplicar por el intercambio puntual para la elaboración de los RC Integrados; que DUN no negó ningún requerimiento de intercambio por parte de la CNBV, tal como lo indica la LRSIC; y que existió una razón objetiva, consistente en la ausencia de factibilidad, para que no se haya dado el intercambio de la BPD.

15. QUE DIGA EL PERITO LA RAZÓN DE SU DICHO.


¹¹³⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DPR, pp. 308-309".



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

*Las respuestas al presente peritaje tienen fundamento en mi experiencia profesional como consultora especialista en el análisis económico en materia de competencia económica; mi preparación académica, así como en la bibliografía en la que se hace referencia a continuación.
[...]*

Previo al análisis particular de cada una de las respuestas dadas por la PERITO, se indica que la AI señaló en sus ALEGATOS diversas manifestaciones respecto de la PERICIAL DUN.

De manera general, la AI indica que:

“[...] se considera que [la PERITO] ha transgredido el principio de imparcialidad,¹¹³⁵ que rige a los peritos en cuanto a su participación en los procedimientos judiciales o cuasijudiciales, toda vez que: i) utiliza el dictamen pericial para ampliar las manifestaciones en contra del DPR, en clara contravención del artículo 83 de la LFCE; ii) busca combatir las manifestaciones expresadas por esta [AI], en términos del artículo 83, fracción II, de la LFCE; y iii) realiza diversas manifestaciones con respecto a cuestiones jurídicas que escapan de la materia de la pericial, las cuales corresponden a cuestiones que no le fueron imputadas a [DUN].

[...]

El papel del perito, como figura procesal, es el auxilio en la administración de justicia consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos técnicos o especializados de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio.¹¹³⁶

[...]

Así, la Primera Sala de la [SCJN] sostiene que el objeto de la prueba pericial es auxiliar al juzgador en la evaluación de hechos y circunstancias que requieren de conocimientos técnicos y especializados, de lo que se desprende que los peritos actúan como verdaderos auxiliares en la administración de justicia, en la medida que a través de sus conocimientos en la materia hacen posible el ejercicio de la labor jurisdiccional, al permitir al juez estar en aptitud de dirimir la controversia sometida a su conocimiento.

La Primera Sala concluye que, lo anterior, permite sostener que los peritos, como auxiliares de la justicia, también se encuentran regidos por el principio de imparcialidad [...]

[...]

La Primera Sala sostiene que el principio de imparcialidad funge como una condición esencial que deben respetar todos aquellos que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en permanecer ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.¹¹³⁷

¹¹³⁵ La AI cita el criterio judicial bajo el rubro: “**PERITOS. EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DEBE REGIRSE POR EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, AUN TRATÁNDOSE DE LOS DESIGNADOS POR LAS PARTES**”; Tesis Aislada 1a. XXIX/2018 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 52, Marzo de 2018; Tomo I; Pág. 110; Registro No. 2 016 487.

¹¹³⁶ La AI cita el criterio judicial bajo el rubro: “**PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACIÓN DEL PERITO ES UN CRITERIO ÚTIL PARA SU VALORACIÓN**” Tesis Aislada 1a. CII/2011; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, junio de 2011; Pág. 174; Registro No. 161 783.

¹¹³⁷ La AI cita el criterio judicial bajo el rubro: “**IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL**”; Jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.); 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, febrero de 2012; Tomo I; Pág. 460.; Registro No. 160 309.

En relación con la prueba pericial, si los peritos actúan como auxiliares en la administración de justicia y se encuentran regidos por el principio de imparcialidad en tanto deben permanecer ajenos a los intereses de las partes en controversia, su actuación debe contribuir a resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, por lo que resulta inconcuso que cualquier manifestación o rompimiento de este principio procesal traerla consigo la nulidad de las manifestaciones hechas por el auxiliar de la justicia.

[...]

[...] la contravención al principio de imparcialidad por parte de [la PERITO], se manifiesta debido a que utiliza de [la PERICIAL DUN] para ampliar las manifestaciones de [DUN], a fin de extender y perfeccionar las defensas y excepciones del agente económico emplazado, transgrediendo el principio de preclusión¹¹³⁸ aplicable conforme al artículo 83 de la LFCE y realizando pronunciamientos que extralimitan los planteamientos del cuestionario al cual fue expuesta.

Asimismo, la perita aprovecha para pronunciarse respecto de las manifestaciones de esta [AI], realizadas en términos del artículo 83, fracción II, de la LFCE, buscando combatirlas a través de [la PERICIAL DUN].

Además, emite juicios valorativos respecto de la adecuación de los hechos a determinadas normas jurídicas, juicios deónticos con respecto al actuar de los operadores jurídicos [PLENO] y manifestaciones que buscan objetar el alcance y valor probatorio de los medios de convicción que obran en el EXPEDIENTE presentados por la [AI], a pesar de la advertencia decretada por la DGAJ respecto de que el cuestionario debía responderse sin hacer manifestaciones que vayan más allá de la materia de su pericial.

Aunado a lo anterior, existen manifestaciones de la perita que buscan justificar la conducta de [DUN], invocando hechos que no le fueron preguntados, replicando las manifestaciones de [DUN] en contra del DPR e invocando nuevas defensas y excepciones en torno a la imputación de [DUN], lo cual evidencia que en lugar de exponer reglas epistémicas o las bases científicas para observar determinados fenómenos desde su área de conocimiento, la perita busca esgrimir argumentos y juicios valorativos en favor de [DUN].

En conclusión, derivado del actuar ilícito [...] se solicita se omitan los pronunciamientos de la perita plasmados en su dictamen. [...]»¹¹³⁹

A lo largo de la PERICIAL DUN, la PERITO realiza manifestaciones que buscan combatir lo señalado por la AI en términos del artículo 83, fracción II, de la LFCE; así como manifestaciones respecto a cuestiones jurídicas que escapan de la materia de la pericial y de los conocimientos que acreditó la PERITO.

Adicionalmente, la PERITO realiza afirmaciones que buscan justificar las razones del actuar de DUN (como, por ejemplo, los señalamientos respecto de la imposibilidad de DUN para intercambiar la BPD, la no sanción por parte de la CNBV o el supuesto acuerdo entre DUN, la CNBV y CC), invocando defensas argumentadas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN que

¹¹³⁸ La AI cita el criterio judicial bajo el rubro: "**PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO**" Jurisprudencia 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, abril de 2002; Pág. 314. 1a./J. 21/2002; número de registro 187149.

¹¹³⁹ Páginas 17 a 20 de los ALEGATOS.



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o conocimientos técnicos y que la PERITO no está en posibilidad de afirmar.

En este sentido, dichos señalamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son contrarios a la naturaleza de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la COFECE respecto de cuestiones técnicas o científicas.

Por último, diversos señalamientos de la PERITO fueron referidos por DUN en la CONTESTACIÓN DUN y analizados por esta COFECE en la sección "*II. Manifestaciones contra el DPR*" de esta resolución, por lo que se remite a la misma para evitar repeticiones innecesarias.

Ahora bien, a continuación se analizan las respuestas proporcionadas por la PERITO:

En la pregunta "1" de la PERICIAL DUN, la PERITO se limita a realizar señalamientos generales respecto de la relevancia de la definición del MR para el análisis de una PMR sin relacionar dichas manifestaciones con el presente caso. Asimismo, la PERITO se refiere a cuestiones jurídicas que son ajenas a la materia respecto de la cual se ofreció la pericial y escapan de los conocimientos acreditados por la PERITO y que son propios del órgano que resuelve.

En relación con la pregunta "2" de la PERICIAL DUN, señala que la definición del MR DE PM es incorrecta porque: (i) la AI define un MR distinto al de su análisis y distinto a aquel en el cual se imputa la realización de la conducta; (ii) no puede ser considerada como un mercado porque son actividades que forman parte de la cadena productiva y se encuentran fuera del comercio; (iii) ni la provisión de la IC por parte de los USUARIOS ni la recopilación de IC constituyen un mercado porque no se efectúa ningún pago por el intercambio y porque los USUARIOS no pueden otorgar su IC a nadie más que a las SIC y estas son las únicas habilitadas para recolectar la IC y compartirla sin que se considere una violación al secreto financiero; y (iv) el intercambio de la IC entre las SIC no constituye un mercado debido a que los registros crediticios intercambiados tienen un costo fijo de intercambiarse, además de que existe la obligación de hacerlo.

Al respecto, en el apartado "*A. MERCADO RELEVANTE*" de la sección "*II. Manifestaciones contra el DPR*" de esta resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se explica de manera detallada las razones por las cuales la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado en tanto comprenden a oferentes y demandantes de bienes que intercambian productos a cambio del pago de un precio. Asimismo, se explican las razones por las cuales la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM y las razones por las cuales la conducta imputada se realizó en el MR DE PM.

En específico, en dicho apartado se señaló lo siguiente:

- Si bien la recopilación y procesamiento de la IC son actividades que forman parte de la cadena productiva de la industria de la IC, ello no implica que no puedan constituir un mercado.
- La recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado toda vez que involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes quienes

tienen una valoración por estos bienes y reciben una contraprestación por el intercambio de los mismos.

- La recopilación de la IC comprende la recepción por parte de las SIC de la IC de manera directa, es decir, a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD con la otra SIC. El intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por parte de la SIC que recibe la información.
- En la etapa de procesamiento de la información, de la cual forma parte el intercambio puntual de la IC para la elaboración de RCI, en caso de que haya HIT en la información proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC complementaria. El intercambio puntual de información no forma parte de la recopilación puesto que la SIC originadora ******* *******; asimismo, la SIC demandante solicita dicha IC como parte del procesamiento de una solicitud de IC.
- El hecho de que la recopilación y procesamiento de la IC constituyan un mercado no implica que dichas actividades se ofrezcan como productos en sí mismos, sino que como parte de la recopilación y procesamiento de la IC se incluyen transacciones que permiten constituir un mercado, en específico, la compra y venta de la IC.
- La IC es el producto que se comercializa dentro del MR de PM, por lo que es correcto que la AI haya realizado el análisis de sustitución respecto de la IC. DUN no combate la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la IC por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta.
- La conducta imputada sí se encuentra dentro del MR DE PM pues al negarse DUN a proporcionar IC a través de la BPD, la negativa respectiva se da dentro de la recopilación de IC; asimismo, la negativa de proporcionar determinada información a través del intercambio puntual de IC se da cuando la SIC originadora requiere a la SIC complementaria la información específica de un CLIENTE como parte del procesamiento de una solicitud de un USUARIO o del mismo CLIENTE para emitir un RC.
- Si bien el MR DE PM no fue definido como la provisión de IC, no pasa desapercibido para esta autoridad que, en el proceso de recopilación y procesamiento de IC, existe una SIC que provee la IC y otra que la recopila o procesa. Por lo anterior, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR definido en el DPR.
- Las SIC por disposición legal ofrecen IC a la otra SIC a cambio del pago de una contraprestación, por lo que es incorrecto afirmar que la provisión de IC no forme parte de los productos que ofrece las SIC o que éstas no cobran por la IC que proporcionan.

Eliminado: seis palabras.

- Por lo que hace a la manifestación relativa a que los USUARIOS no cobran por la provisión de IC, por una parte, las políticas de descuentos de las SIC reflejan el valor de la IC que los USUARIOS proporcionan a las SIC y, por otra parte, en los casos en los que la SIC es quien provee la información, dicha actividad sí da lugar al pago de una cantidad determinada, siendo que DUN realizó la conducta imputada en su carácter de oferente y no de demandante de la IC.

Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes precisiones:

La PERITO señala que las SIC no ofrecen dentro de su gama de servicios la recopilación y procesamiento, sino que realizan estas actividades como parte de su proceso productivo. Al respecto, la PERITO pierde de vista que las SIC ofrecen por ley los productos involucrados en dichas actividades (es decir, la BPD y la información puntual).

En este sentido, como se indicó previamente, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM pues como parte de la recopilación y procesamiento de la IC se incluyen tanto la entrega o provisión de la IC por parte de los USUARIOS o de una SIC en su calidad de oferente, como la recepción de dicha IC por parte de la SIC demandante (ya sea en su etapa de recopilación o procesamiento). Es decir, la SIC oferente: (i) provee su BPD que es recopilada por la SIC demandante; y (ii) provee la información puntual en la etapa de procesamiento de una solicitud específica de un USUARIO a la SIC demandante. Así, la provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO por parte de una SIC implica la recopilación y el procesamiento de IC por parte de la otra SIC.

Por otra parte, la PERITO busca justificar que el MR DE PM no es un mercado, con base en una definición de mercado que incluye como elementos la existencia de: (a) consumidores y oferentes; (b) el intercambio de un bien por un precio; y (c) un precio determinado por la interacción de las preferencias y restricciones presupuestales de los consumidores y por los costos de producción y decisiones de los oferentes de maximizar beneficios.

Al respecto, la PERITO omite considerar que en la teoría económica existen definiciones en diversos sentidos para describir el concepto de mercado, siendo que, de conformidad con varias de ellas, la determinación del precio y cantidad de la manera en que lo describe la PERITO no constituye un requisito esencial para la existencia de un mercado. Incluso, utilizar la definición propuesta por la PERITO implicaría que no pueden considerarse como mercados aquellos en los cuales la tarifa se encuentra regulada. En el presente caso, la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado toda vez que involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación por el intercambio de los mismos.

Con independencia de lo anterior, en el MR DE PM, el precio que pagan las SIC por el intercambio de información se estableció por acuerdo entre éstas. De esta manera, fueron las condiciones de ese mercado en particular las que llevaron a la determinación de las tarifas.

Así, en el MR DE PM existen: (a) demandantes y oferentes; (b) el intercambio de un bien por un precio; y (c) el precio es determinado por oferentes y demandantes (más allá de las



autorizaciones que se requieran de la CNBV). Dichos elementos permiten acreditar la existencia de un mercado.

Ahora bien, respecto de la supuesta falta de entendimiento del proceso productivo de las SIC, se indica que si bien es cierto que la AI en el apartado de "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR, al describir la cadena productiva de la industria de la IC, no incluyó dentro de la etapa del procesamiento de IC el intercambio puntual de la IC y lo incluyó dentro de la etapa de generación de IC, en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR sí señaló que: "[...] el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]".¹¹⁴⁰

Al respecto, aunque el apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR sirve para contextualizar el mercado investigado, es en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" donde la AI determina presuntivamente el MR DE PM y es este apartado el que forma parte de la imputación.

De esta manera, en este último apartado, la AI es clara al definir que el procesamiento de la IC incluye el intercambio puntual de IC, lo cual es correcto, ya que desde el punto de vista del demandante¹¹⁴¹ el intercambio puntual se da como parte del procesamiento de un RC específico y la información que obtiene por el intercambio [REDACTED]

Por esta razón, es erróneo lo señalado por la PERITO respecto de que el MR de PM no debió incluir el procesamiento.

Adicionalmente, aun cuando el intercambio puntual de la IC se incluyera dentro de la recopilación, ello en nada cambiaría las conclusiones de este asunto pues la conducta de DUN seguiría actualizándose dentro del MR DE PM, y DUN continuaría teniendo PS.

Por otro lado, la PERITO refiere que el análisis de sustitución llevado a cabo por la AI se refiere al proceso de provisión de IC y no al proceso de recopilación y procesamiento. Como se indicó al analizar los argumentos de la CONTESTACIÓN DUN: (a) como parte de la recopilación de la IC, se incluyen tanto la entrega o provisión de la IC por parte de los USUARIOS o de una SIC en su calidad de oferente, como la recepción de dicha IC por parte de la SIC demandante para su posterior integración a su BD; y (b) en el caso del procesamiento de la IC, el intercambio puntual se da cuando la SIC complementaria entrega o provee la información específica de un CLIENTE a la SIC originadora, quien en su carácter de demandante recibe dicha información como parte del procesamiento de una solicitud específica de un USUARIO o del mismo CLIENTE para emitir un RC. En este sentido, separar la recopilación y procesamiento de la IC de PM de la provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO, no tiene sustento ya que la

¹¹⁴⁰ Página 267 del DPR.

¹¹⁴¹ No debe perderse de vista que en el presente asunto la AI determinó presuntivamente el MR DE PM desde el punto de vista de la demanda.



50111

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

provisión de estos dos productos es parte de la recopilación y el procesamiento, respectivamente.

Por otra parte, la IC es el producto que se comercializa dentro del MR DE PM, por lo que es correcto que la AI haya realizado el análisis de sustitución respecto de la IC e incluso, ni la PERITO ni DUN desvirtúan la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la IC por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta.

Adicionalmente, la PERITO señala que la provisión de IC no es un mercado ya que: (a) respecto del intercambio de IC entre los USUARIOS y las SIC existe una obligación de los USUARIOS de compartir su IC y no se efectúa un pago por el intercambio; y (b) el intercambio de IC entre las SIC tampoco constituye un mercado ya que dicho "mercado" se compone de dos oferentes que simultáneamente actúan como consumidores de su competidor, el intercambio sucede con una tarifa fija y a través de una obligación legal (y no por la interacción entre oferentes y demandantes), además de que las SIC no ofrecen el servicio de intercambiar su información.

Respecto del inciso (a) anterior se indica que no todas las actividades productivas que se pueden identificar dentro de un MR deben de intercambiarse mediante el pago de una contraprestación, siendo que lo importante es que la transacción respecto de la cual se imputa la conducta, implique un intercambio de bienes por un pago determinado.

Asimismo, respecto del inciso (b) se advierte que el intercambio de IC entre SIC sí implica el pago de una contraprestación que deriva de la interacción entre oferentes y demandantes, pues existe un pago o contraprestación por el intercambio de ambos bienes (BPD e intercambio puntual. La tarifa la fijan las SIC, y en su caso, la CNBV únicamente autoriza la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS por los RCI de PM. Además, incluso aunque se considere la existencia de tarifas determinadas por una autoridad a través de la autorización señalada, ello no conlleva la inexistencia del mercado como se indicó.

De igual forma, la obligación de llevar a cabo el intercambio de ninguna manera implica la inexistencia del mercado. Incluso, la PERITO se contradice, pues por un lado indica que el MR DE PM no es un mercado, entre otras cosas, porque las SIC estén obligadas a ofrecer la IC y, por otro lado, indica que "el mercado en el que participan las SIC es el de comercialización de los productos que resultan de recopilar y procesar la información crediticia", siendo que en el mercado de comercialización de productos de IC, las SIC también se encuentran obligadas a proporcionar dichos productos en términos de la LRSIC.

En este sentido, el hecho de que exista cierta regulación en cuanto al abasto y el precio de los productos, sólo implica que el MR DE PM es un mercado regulado, pero no quiere decir que no sea un mercado.

Así, la respuesta a la pregunta "2" de la PERICIAL DUN es insuficiente para demostrar que la definición de MR que propuso la AI en el DPR sea contraria a derecho.

En la pregunta "3" de la PERICIAL DUN, la PERITO argumenta que no puede determinarse que un agente económico tiene PS derivado de los errores existentes en la definición de MR DE

PM. No obstante, toda vez que hace descansar su análisis en la respuesta contenida en el numeral "2", se basa en razonamientos que esta autoridad ya ha descartado, pues con su respuesta al numeral "2" no logró acreditar que la definición del MR DE PM fuera contraria al artículo 58 de la LFCE o que se trate de un mercado inexistente.

Asimismo, la PERITO señala que la definición del MR DE PM es condición suficiente para determinar que ningún agente económico puede tener PS pues sería una contradicción lógica afirmar la existencia de PS en un mercado en el que ningún agente tiene capacidad de determinar su precio y se encuentra obligado a proveer los bienes.

Lo anterior no es así, ya que, por un lado, las SIC sí pueden fijar el precio del intercambio de información y la CNBV, una vez que las SIC determinaron sus propias tarifas, autoriza la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS por los RCI de PM, y, por otro lado, aun cuando los precios se encontraran regulados y aun con la obligación de intercambiar la IC, de facto, el oferente podría restringir el abasto del bien. En este caso, DUN no sólo tiene poder para restringir el abasto de su BPD y su SEGMENTO CO a CC derivado de las participaciones de mercado con las que cuenta y de la existencia de barreras a la entrada, sino que de facto lo restringe, tal como se acredita a lo largo de la presente resolución.

Por otra parte, en la respuesta a la pregunta "4" de la PERICIAL DUN, la PERITO define los conceptos de economías de escala, economías de alcance y efectos de red y señala que en el mercado de IC existen: (a) economías de escala¹¹⁴² ya que las SIC deben realizar inversiones sustanciales en costos fijos, pero los costos marginales son bajos y no incrementan mientras aumenta la producción, que pueden funcionar como barreras a la entrada porque su estructura no permite un número amplio de participantes; (b) economías de alcance¹¹⁴³ porque una vez que ya se ha cubierto el monto de la inversión necesaria para entrar en la industria y para consolidar una BD robusta, ésta puede ser utilizada para producir RC o productos de IC, siendo que pueden funcionar como barreras a la entrada si la empresa en cuestión produce una amplia variedad de productos generando sinergias entre la producción de estos; y (c) efectos de red¹¹⁴⁴ ya que los consumidores se benefician más de los productos que ofrecen las SIC, si estos son producidos con un mayor volumen de información disponible, lo cual sucede en la medida que los propios USUARIOS se afilien a una SIC y le provean la información a su alcance. Asimismo, la PERITO reconoce que las economías de escala y de alcance y los efectos de red propician mercados más concentrados.

¹¹⁴² Según la PERITO es la situación donde una empresa reduce sus costos unitarios de operación al incrementar su producción, lo cual significa que el costo promedio de producir disminuye a medida que aumenta la escala de producción

¹¹⁴³ Según la PERITO es la reducción del costo promedio de una empresa en la producción de dos o más productos o servicios de manera conjunta, es decir, que el costo promedio de producir un bien de manera individual es mayor que produciéndolo en conjunto con otro, puesto que en este último los costos fijos se distribuyen en una multiplicidad de productos.

¹¹⁴⁴ Según la PERITO son aquellas condiciones en las que el beneficio de adquirir un bien o servicio ofrecido por un agente económico en particular depende del número de personas, CLIENTES o USUARIOS que lo utilizan, lo cual implica que mientras más individuos consuman un bien, estos se beneficiarán en mayor medida.



60109

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

Al respecto, lo manifestado por la PERITO es consistente con lo señalado en el DPR, en el que se indica la existencia de economías de escala, efectos de red y barreras a la entrada.

En este sentido, la misma PERITO coincide en que en el mercado de IC los USUARIOS obtienen un mayor beneficio si consumen productos de la red más grande.

Así, lo señalado por la PERITO al responder la pregunta "4" de la PERICIAL DUN, tiende a corroborar lo señalado por la AI respecto de las características estructurales del mercado de IC.

En relación con la respuesta a la pregunta "5", la PERITO señala que los efectos de red en los mercados de IC generan incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC más grande porque es la que puede proporcionar la IC más completa, y que dichos efectos en conjunto con las economías de escala, generan que pueda existir una mayor concentración en el mercado. Como se señaló, lo anterior tiende a corroborar lo señalado por la AI respecto de las características estructurales del mercado de IC.

Por otra parte, la PERITO señala que la regulación en México convierte a los RC en bienes idénticos pues convierte al mercado en una red única, lo que permite que los USUARIOS puedan afiliarse a la SIC de su elección sin que exista un sesgo por el tamaño de cada una, es decir, que la decisión de un USUARIO sobre a qué SIC afiliarse, no se encuentra ligada con la cantidad o calidad de información que obtendrá en los RC que consulte, pues le bastará hacerlo a una sola SIC para obtener toda la información disponible en el mercado. Según la PERITO, lo anterior se da ya que a través del intercambio de información entre las SIC, los RC emitidos deberán contener toda la IC disponible del CLIENTE, sin importar en cuál o cuáles BD se encuentre.

Al respecto, esta autoridad coincide con que la obligación de compartir la información puntual contenida en el artículo 36 bis de la LRSIC busca reducir las asimetrías de información y mitigar la creación de efectos de red dentro de cada una de las SIC y permitir que los USUARIOS accedan a la información completa con independencia de a que SIC se encuentren afiliados.

No obstante, lo señalado por la PERITO lejos de beneficiar a DUN, permite comprender de mejor manera los efectos de su conducta. Es decir, según la PERITO, si se compartiera la información completa, los USUARIOS no contarían con los incentivos relacionados con la calidad o cantidad de información para afiliarse a la SIC más grande, sino sus incentivos dependerían en mayor medida de, entre otros factores, las tarifas finales que ofrezcan las SIC y la calidad de sus servicios. Sin embargo, al omitir DUN proporcionar la información completa para la elaboración de los RC de PM de CC (en específico, el SEGMENTO CO), los RC emitidos por ambas SIC contienen información diferente, lo que genera que los USUARIOS tengan incentivos para consumir productos de la red más grande, es decir, la BD de DUN.

Lo anterior, se acentúa ya que, por el principio de reciprocidad, los USUARIOS que opten por consumir productos de DUN deberán proporcionar su IC a dicho agente económico, lo que genera que la BD de DUN siempre cuente con una mayor fuente de IC.



Adicionalmente, aun cuando los USUARIOS pudieran acceder a la misma IC a través de cualquiera de las SIC, ello no eliminaría (aunque sí reduciría) los incentivos para afiliarse a la SIC con la BD más grande, pues la diferencia en los tamaños de las BD genera que, en promedio, los precios de los RC de la SIC más grande sean menores (pues hay menor probabilidad de hacer HIT).

Por último, se remite a DUN al apartado "B.5. Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características" de la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de esta resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

Respecto a la pregunta indicada en el numeral "6" de la PERICIAL DUN, la PERITO indica que DUN no puede tener PS dado que la provisión de IC no constituye un mercado y que DUN no puede tener PS en algo que no puede comercializar y sobre algo que no puede fijar el precio o restringir su oferta. Como se indicó previamente, no se imputó que DUN tuviera PS en la provisión de IC; no obstante, el MR DE PM, en el cual se incluye la provisión de IC, sí constituye un mercado al existir oferentes y demandantes que intercambian un bien a cambio de un precio, siendo que DUN sí comercializa la BPD y la información puntual para la integración de RCI a través de un precio que se acuerda entre oferente y demandante (la CNBV autoriza la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS por los RCI de PM) y respecto de los cuales puede, de *facto*, restringir el abasto.

Por otra parte, la PERITO señala que los indicadores de número de registros y número de expedientes en las BD de las SIC, usados por la AI en el DPR para medir la participación de mercado de DUN, son inadecuados por las siguientes razones: (i) los conjuntos considerados no son excluyentes, particularmente en el número de expedientes, siendo que el porcentaje de HITS implica que existe un número significativo de CLIENTES con HC en ambas BD, por lo que, cuando la AI asegura que DUN tiene cierto nivel de participación de mercado, parte de los CLIENTES contabilizados en dicho porcentaje también está contabilizado en la participación de CC; (ii) no existe una relación "*biunívoca*" entre la capacidad productiva de los expedientes y créditos registrados y la producción de productos de IC, ya que cada CLIENTE tiene un número potencialmente distinto de créditos otorgados lo que implica que dos productos que generan el mismo ingreso utilicen un número de registros distintos; y (iii) la dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente refleja acciones de una u otra SIC para ganar la cuota de mercado que la otra SIC perdió, pues dicha pérdida puede ser exógena.

Al respecto, se indica que la mayoría de los señalamientos realizados por la PERITO fueron referidos por DUN y analizados por esta COFECE en la sección "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" de esta resolución, por lo que se remite a la misma para evitar repeticiones innecesarias. En específico, se indica lo siguiente:

- (a) Respecto de que los conjuntos considerados no son excluyentes, se indica que, si bien es cierto que las BD de PM no son excluyentes, la intersección entre ambas BD tiene

como límite superior el tamaño de la BD de CC. De este modo, incluso considerando lo que señala la PERITO, las participaciones de mercado en términos de CLIENTES con HC en la BD de PM (expedientes) no podrían variar de forma significativa, toda vez que DUN contó con más del [REDACTED] de expedientes en su BD, por lo que una intersección que incluyera un mayor número de expedientes implicaría que DUN tiene un mayor porcentaje de IC que vuelve a DUN menos dependiente de la BD de PM de CC. Es decir, si fuera el caso de que la intersección alcanzara el límite superior, DUN tendría muchos expedientes que no tendría CC, pero CC no tendría ningún expediente que no se encuentre ya en la base de DUN. Esto hace que la cantidad de IC que tiene DUN tienda al cien por ciento. Por lo anterior, lo señalado por la PERITO en nada cambia las conclusiones a las que arribó la AI.

No pasa desapercibido, lo señalado por la PERITO respecto de que lo relevante para ver que los conjuntos no son excluyentes no es el número afiliados a ambas SIC, pues como se indicó, incluso considerando que todos los expedientes de CC se encuentran en ambas BD, ello no cambiaría la conclusión de que DUN tiene PS, e incluso, dicha consideración permitiría concluir que CC es más dependiente de la BD de DUN y que DUN no depende de la BD de CC.

- (b) Respecto de que no existe una relación “*biunívoca*” entre la capacidad productiva de los expedientes y créditos registrados y la producción de productos de IC, se indica que las variables utilizadas en el DPR para medir las participaciones de mercado de las SIC, no buscan determinar la capacidad productiva de éstas, siendo que en términos de la fracción I del artículo 59 de la LFCE para determinar la participación de mercado se puede utilizar cualquier factor distinto a la capacidad productiva. En el caso, la utilización de datos que permiten evaluar el tamaño de la BD para calcular participaciones de mercado tiene por objeto determinar la existencia de PS en el MR DE PM, más no busca determinar si DUN cuenta con PS en el MERCADO RELACIONADO. Así, si bien el número de registros no es una medida exacta respecto de la capacidad de generación de RC,¹¹⁴⁵ sí da cuenta de la capacidad de recopilación de IC de cada una de las SIC; así como de la dependencia que tiene una SIC respecto de la IC que obra en la BD de la otra SIC y de que tan atractiva es la BD de cada SIC para los USUARIOS.

Medir la capacidad productiva de las SIC a través de los insumos permitiría evaluar más bien el poder de mercado de DUN en el MERCADO RELACIONADO y no en el MR DE PM. Por su parte, la utilización de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre el tamaño de la BD de PM de DUN y el tamaño de la BD de PM de CC permite, junto con los demás elementos analizados (barreras a la entrada,

¹¹⁴⁵ El producto final de la cadena productiva es el RC, el cual se realiza por cada persona que cuenta con un expediente de IC. Dichos expedientes pueden estar formados de pocos o muchos registros de IC. Por ello, muchos registros no necesariamente implican que se puedan generar muchos RC.

economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito), evaluar la capacidad que tiene la SIC con la BD de PM más grande para recopilar y procesar IC de PM, así como para restringir el abasto. Al respecto, CC (quien tiene la BD de PM más pequeña) depende más de la provisión de la información por parte de la SIC que tiene la BD de PM más grande y, por eso, puede ser afectado por la falta de intercambio de la BPD y de la información puntual.

En este sentido, el análisis busca determinar la existencia de PS en el MR DE PM de forma consistente con el análisis de la conducta imputada. Por ello, la existencia o inexistencia de la relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción en este caso resulta irrelevante.

- (c) Respecto de que la dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente refleja acciones de una u otra SIC y puede ser exógena, se indica que ello no implica que el análisis de las participaciones de mercado en términos de expedientes o número de créditos registrados sea incorrecto, ya que la conducta ilegal que se imputa a DUN es la comisión de una PMR, no el hecho de contar con elevadas participaciones de mercado. Es decir, el hecho de que las participaciones de mercado sean o no consecuencia de factores exógenos, en nada modifica la existencia de PS.

Asimismo, como se indicó en el apartado *"La determinación de PS se realizó con base en un MR distinto al definido por la AI"* de esta resolución, a la cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, los indicadores utilizados en el DPR para medir participaciones de mercado son correctos puesto que: (i) por un lado, el tamaño de la BD de DUN es indicativo de la capacidad con la que cuenta DUN como demandante, para recopilar IC; y (ii) por otro lado, permite evaluar la fuerza que tiene DUN como oferente en la recopilación y procesamiento de IC que realiza la otra SIC como demandante de la IC. Así, el tamaño de la BD de DUN permite inferir la capacidad que tiene dicho agente económico para recopilar IC de los USUARIOS, y en función de esto, el grado de independencia o necesidad que tiene respecto de la otra SIC; así como la valía que tiene su BD en el mercado de IC.

Por último, la PERITO indica que una buena manera para medir participaciones de mercado sería el número de RC de PM vendidos en conjunto con el número de RCI facturados a una u otra SIC; no obstante, dicha forma de medir las participaciones de mercado no es correcta, como se explica de forma detallada en los apartados de la presente resolución denominados *"La cuota de mercado que se debe cumplir para que una SIC cubra sus costos operativos no es una barrera a la entrada"* y *"Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años"*, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias.

Por lo anterior, esta autoridad considera que las manifestaciones de la PERITO respecto a la pregunta "6" de la PERICIAL DUN son insuficientes para demostrar que las participaciones de mercado que tomó en cuenta la AI en el DPR no son la mejor manera de estimar el PS que dicho agente económico tiene en el MR DE PM.



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

En relación con las respuestas a la pregunta "7" de la PERICIAL DUN, la PERITO señala que las participaciones de mercado ayudan a entender la dinámica competitiva de un mercado y que las altas participaciones de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para concluir que un agente económico tiene PS. Al respecto, refiere la evolución de las participaciones de mercado como un factor adicional para determinar la existencia de PS ya que refleja la dinámica competitiva en el mercado y es un indicio de los efectos que lo disciplinan, así mismo indica que la utilización de promedios no permite observar el cambio que tienen las participaciones de mercado en el tiempo, ni los valores mínimos y máximos.

En este sentido, la PERITO refiere que el análisis de las participaciones de mercado de DUN y CC debió elaborarse con mayor detalle por la AI porque en un mercado como el de IC (con economías de escala y efectos de red) es muy probable que existan altas concentraciones y menos oferentes, por lo cual el nivel promedio de participación de mercado es insuficiente para analizar los efectos competitivos o anticompetitivos de una práctica.

Asimismo, la PERITO indica que CC ha presentado un crecimiento considerable en número de CLIENTES, expedientes y USUARIOS, e incluso mayor al de DUN en los primeros dos indicadores, lo que desmiente que DUN haya imposibilitado sustancialmente el acceso de CC. De igual forma, refiere que la participación de mercado de CC denota una entrada exitosa al mercado.

Adicionalmente, la PERITO indica que un buen indicador para medir las participaciones de mercado es el número de RC de PM vendidos considerando los RCI facturados de una a otra SIC. Según la PERITO, utilizando dicho indicador se advierte que CC ha presentado un crecimiento constante y significativo, mientras que DUN muestra una disminución consistente, lo que muestra que no ha impedido el acceso a CC.

Por todo lo anterior, la PERITO concluye que parece haber elementos, distintos al nivel promedio de participaciones de mercado, que indican la entrada exitosa de CC al mercado (sin precisar a cuál mercado se refiere), por lo que si la AI hubiera analizado la evolución de las participaciones de mercado seguramente habría alcanzado las mismas conclusiones, lo cual podría haber repercutido en su análisis sobre el artículo 59 de la LFCE. De conformidad con la PERITO, una de las conclusiones de la AI que probablemente habría sido distinta es precisamente la existencia de barreras a la entrada (por ejemplo, la cuota de mercado inicial requerida para alcanzar la rentabilidad mínima), ya que la evolución de las participaciones permite intuir que las barreras a la entrada pueden no ser tan restrictivas como la AI sugiere.

Al respecto, toda vez que los argumentos señalados por la PERITO fueron previamente analizados por esta autoridad, se remite a los apartados "*El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto*" y "*Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años*" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias. En síntesis, en dichos apartados se indicó que:

- El análisis respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto de información en el MR DE PM se encuentra sustentado no solamente en la evaluación de las participaciones de DUN en ese mercado, sino también en el análisis relativo a la

existencia de barreras a la entrada al MR DE PM, la existencia de economías de escala y de red y la alineación de los intereses de DUN con aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito.

- Las cifras presentadas por DUN y por la PERITO refieren participaciones de mercado de DUN muy elevadas, en términos de créditos y expedientes registrados en la BD de PM. Asimismo, las cifras de participaciones de mercado que presenta DUN, como el señalamiento que realiza respecto de la existencia de un mercado concentrado en el que existe una diferencia significativa entre las participaciones de mercado de DUN y CC, coinciden con el análisis del DPR.
- De las participaciones de mercado presentadas en el *"Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos de PM y número de expedientes en las bases de datos de PM"* se desprende lo siguiente: (a) las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM siempre fueron superiores al 90% (noventa por ciento) durante el periodo comprendido entre los años dos mil doce y dos mil quince, por lo que, con independencia de los crecimientos porcentuales que hubiera presentado CC a lo largo del tiempo, sus participaciones de mercado nunca han alcanzado el 10% (diez por ciento) del mercado; (b) el crecimiento de 300% (trescientos por ciento) en el número de créditos registrados de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio significativo en el tamaño de las BD de PM para efectos del cálculo en las participaciones de mercado de DUN y CC, pues en ese periodo el aumento de registros en la BD de PM de DUN fue 3.33 (tres punto treinta y tres) veces más que el de CC y la participación de mercado de DUN pasó del 98.68% (noventa y ocho punto sesenta y ocho por ciento) al 95.50% (noventa y cinco punto cincuenta por ciento); (c) el crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio significativo en el tamaño de las BD de PM pues en ese periodo el aumento en el número de expedientes en la BD de PM de CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno) millones de expedientes al pasar de 0.1 (cero punto uno) a 0.2 (cero punto dos) millones de expedientes, mientras que DUN tenía 3 millones de expedientes, lo que implicó un cambio insignificante en la participación de mercado de DUN que pasó del 96.77% (noventa y seis punto setenta y siete por ciento) al 93.75% (noventa y tres punto setenta y cinco por ciento); (d) las participaciones de mercado de DUN que se obtienen con los datos que presentan la PERITO y DUN son fundamentalmente consistentes con la información referida en el DPR; y (e) respecto de que el número de expedientes en la BD de PM de DUN se ha mantenido constante, se indica que si bien en los datos de la CNBV no se advierte un incremento en dicho indicadores, de la información que obra en el EXPEDIENTE¹¹⁴⁶ se desprende que el promedio mensual por año del número de CLIENTES con HC en la BD de PM de DUN presentó un

¹¹⁴⁶ La información de la CNBV redondea los números a millones de expedientes y la información proporcionada por DUN en el EXPEDIENTE indica los números exactos.

incremento del [REDACTED] en dos mil trece respecto del dos mil doce, de [REDACTED] en dos mil catorce respecto del dos mil trece, y de [REDACTED] para marzo dos mil quince respecto del año anterior.

- Respecto de que la AI debió tener en cuenta el contexto inherente del MERCADO INVESTIGADO y, en particular la evolución y el crecimiento de los indicadores analizados, debe tenerse en cuenta que las variaciones porcentuales de CC son elevadas debido a que su entrada al mercado es más reciente que la de DUN, por lo que cualquier incremento en términos absolutos genera un crecimiento grande en términos porcentuales.
- DUN mantiene más USUARIOS y continúa atrayendo a la mayor cantidad de los nuevos USUARIOS que adquieren algún producto de PM.
- La utilización de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre el tamaño de la BD de PM de DUN y el tamaño de la BD de PM de CC constituye un indicador que sí permite, junto con los demás elementos (barreras a la entrada, economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito) determinar la existencia de PS en el MR DE PM.
- Es erróneo el razonamiento de la PERITO y de DUN relativo a que la autoridad debería tener en cuenta, al calcular la participación de mercado los RC de PM vendidos y los HITS facturados entre las SIC ya que: (a) no es correcto calcular las participaciones de mercado considerando para el MR DE PM y el MERCADO RELACIONADO de manera conjunta; (b) lo que DUN señala implicaría contabilizar dos veces los RC vendidos en aquellos casos en los que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC complementaria cuando ocurren HITS; (c) dicho análisis incrementa artificialmente y sin sustento las participaciones de mercado de CC, pues DUN considera dentro de éstas todos aquellos RCI comercializados por DUN respecto de los cuales DUN pagó a CC una contraprestación; (d) la demanda de información puntual de la SIC originadora a la SIC complementaria es una demanda derivada de la demanda de RC de los USUARIOS de la SIC originadora; y (e) los HITS no reflejan la participación de la SIC que comercializa RC de PM a los USUARIOS.
- Es incorrecto que el hecho de que la LRSIC obligue a los USUARIOS a realizar la consulta de información a ambas SIC impida por completo la existencia de PS de cualquier agente y que cualquier incremento en el volumen de venta de alguna de las SIC implica necesariamente un aumento de las ventas de su competidor pues: (a) la afirmación de que cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la venta de un reporte por parte de su competidor únicamente es válida en el caso de que el USUARIO opte por consultar a ambas SIC de manera separada, lo cual no se da de manera recurrente, ya que como se señaló anteriormente, durante el periodo investigado, menos del [REDACTED] de los USUARIOS

Eliminado: veintiséis palabras.

consumieron productos de ambas SIC; y (b) las cifras que corresponden a la facturación de una SIC a otra por concepto del intercambio de información puntual refleja una parte de las ventas de RC de PM a los USUARIOS por parte de la SIC originadora, pero no las ventas a los USUARIOS de RC de PM que corresponden a la SIC que factura por el intercambio de la información puntual (la SIC complementaria).

De esta manera, aun considerando la evolución en las participaciones de mercado, no cambian las conclusiones a las que arribó la AI.

Asimismo, respecto de lo señalado por la PERITO relativo a que el crecimiento de CC: (i) señala todo lo contrario a un impedimento de acceso derivado de la conducta imputada; (ii) demuestra la incapacidad de DUN para inhibir el acceso o desplazar a CC; y (iii) refleja una entrada exitosa de CC al mercado, se indica que dichas cuestiones no se relacionan con el análisis de PS respecto del cual se realizó la pregunta atendida por la PERITO, sino con el análisis de objeto y/o efecto de la conducta imputada. En este sentido, un agente económico puede contar con PS y no impedir el acceso de otros agentes al mercado.

Se aclara que el análisis de PS no busca analizar los efectos de la conducta, sino la posibilidad con que cuenta un agente económico de generar efectos anticompetitivos a partir de sus decisiones, en este sentido, el hecho de que el nivel promedio de participación de mercado sea o no insuficiente para analizar los efectos competitivos o anticompetitivos de una práctica, en nada desvirtúa la imputación.

Por otro lado, el indicador propuesto por la PERITO (número de RC de PM) además de presentar los errores metodológicos señalados, no permitiría evaluar el PS en el MR DE PM pues la comercialización de productos de IC se encuentra fuera del mercado relevante definido.

Por último, se indica que, por las razones expuestas, lo señalado por la PERITO no permite cambiar las conclusiones a las que arribó la AI. En específico, incluso considerando los incrementos en los indicadores de CC ello no permite concluir la inexistencia de las barreras a la entrada en el MR DE PM, máxime cuando se considera que éstas evalúan una condición del mercado y no la experiencia única de un agente económico. Asimismo, CC participa tanto en el segmento de PF como de PM y cuando ingreso al sector de PM ya llevaba varios años en el segmento de PF.

Respecto a las preguntas "8" y "9" de la PERICIAL DUN, la PERITO señala en síntesis que: (a) con independencia del modelo de competencia con el que una empresa compite (competencia en precios o en cantidades), el proceso de competencia deriva en el equilibrio del mercado porque existe una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios; (b) esta relación biunívoca entre precios y cantidades se da porque para cada precio, los consumidores elegirán una cantidad determinada de bienes y viceversa; y (c) si DUN tuviera la capacidad de restringir el abasto, de facto implicaría que tendría la capacidad de fijar precios, ya que su decisión influiría la decisión de su competidor y, ambas cantidades influirían en la decisión de los demandantes sobre cuál es el precio que están dispuestos a pagar por la cantidad ofrecida por todas las empresas.

Las conclusiones a las que arriba la PERITO parten de un supuesto en el cual las cantidades y el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva, es decir, que ante una modificación en la cantidad o en el precio ofertado, los participantes en el mercado pueden llegar a un nuevo equilibrio entre precios y cantidades.

Al respecto, los razonamientos de la PERITO se basan en modelos genéricos de competencia económica, sin que exista una explicación por parte de la PERITO de cómo dichos modelos son aplicables al caso concreto, máxime cuando existen mercados en los cuales la interacción entre los participantes en el mercado no se da a través de una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios.

En cuanto a la capacidad para restringir el abasto en el mercado, en la regulación aplicable a los bienes relevantes (BPD e IC puntual), los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC establecen la obligatoriedad de proporcionar los mismos:

- En cuanto a la obligación de intercambiar la IC que corresponde a la BPD, el artículo 36 de la LRSIC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre las SIC, una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado.
- En cuanto a la obligación de intercambiar la IC de manera puntual, el artículo 36 bis de la LRSIC señala que las SIC se encuentran obligadas a compartir información entre ellas para la integración de RCI y que los mismos deben incluir toda la información disponible sobre un CLIENTE en el mercado.¹¹⁴⁷
- La fracción V del artículo 62 de la LRSIC prevé la facultad de la CNBV de sancionar con multa de dos mil a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su información a otras SIC en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 bis de dicha ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada.

Las normas referidas obligan al intercambio de IC entre las SIC e intentan prevenir contra las negativas o restricciones al abasto de la IC entre las mismas. Dichas reglas son resultado de reconocer no sólo la importancia de mejorar la asignación, manejo y control del riesgo crediticio a través de mecanismos que reduzcan problemas de información asimétrica, sino también que la propia estructura económica de la industria puede otorgar capacidad a los concesionarios para negar o restringir la oferta de IC a otras SIC. No obstante, dichas normas no evitan que de *facto* un agente económico pueda restringir el abasto de IC.

En cuanto a la capacidad para fijar precios, el artículo 36 de la LRSIC establece que las SIC deben acordar, además de los estándares, condiciones y procedimientos relativos al intercambio de información, las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD y

¹¹⁴⁷ El referido artículo 36 bis de la LRSIC establece como posibilidad que los USUARIOS soliciten RC, de forma separada, a cada una de las SIC. Sin embargo, en esta modalidad, los USUARIOS están obligados a solicitar a las demás SIC su reporte individual correspondiente, con el respectivo costo adicional de solicitar más de uno. En este sentido, si el USUARIO decide no solicitar la IC a más de una SIC, la SIC originadora se encuentra obligada a solicitar la información a la SIC complementaria y ésta se encuentra obligada a entregar la información puntual a la SIC originadora.

que el acuerdo respectivo debe presentarse ante la CNBV para su autorización, al igual que sus modificaciones.

En el caso del intercambio puntual, una vez que las SIC determinaron sus propias tarifas al amparo del artículo 36 bis de la LRSIC, la CNBV autorizó a cada una de las SIC la tarifa máxima que corresponde a los RCI de PM. Al respecto, para los RCI de PM, la CNBV autorizó un precio máximo de [REDACTED] tanto a CC como a DUN.¹¹⁴⁸ Dicha tarifa incluye el costo generado por el intercambio de IC, tanto positiva como negativa, entre SIC.¹¹⁴⁹

De conformidad con los elementos analizados, no es posible considerar que el supuesto del que parte la PERITO en relación con la forma en que se determinan los precios y las cantidades producidas resulte aplicable al MR DE PM, entre otras razones por la forma en que interviene el regulador en relación con la autorización de diversas tarifas.

En este sentido, el perito no acredita la existencia de una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios en el caso del MR DE PM y, en particular, en el caso del intercambio de la BPD y de información puntual para la integración de RCI.

Al respecto, es relevante tener en cuenta que en el presente caso la AI no señaló que DUN no pudiera fijar precios, sino que indicó que DUN no contaba con la capacidad de "alterar los precios" por la existencia de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC, en el que los contratantes se obligaron a respetar los precios acordados.

Así, el análisis realizado por la AI no excluye la posibilidad de que DUN tenga la capacidad de fijar un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones con CC.

El hecho de que en el contexto regulatorio descrito y en virtud del CONTRATO DUN y CC, la capacidad de DUN de restringir el abasto no se refleje en una posibilidad para alterar los precios ya acordados, de ninguna manera implica la inexistencia de poder sustancial por parte de DUN, pues como se indicó, la PERITO parte de un supuesto no acreditado en el cual las cantidades y el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la forma en que se determinan los precios de las tarifas de intercambio en el MR, DUN incluso podría tener la capacidad de fijar precios respecto del intercambio de IC de manera puntual.¹¹⁵⁰

Adicionalmente, la manifestación de la AI no implica que DUN no pueda fijar el precio respecto del intercambio de la BPD, el cual no se encuentra establecido en el CONTRATO DUN

¹¹⁴⁸ Conforme a la cláusula Tercera del CONTRATO DUN Y CC, la tarifa máxima que se cobra al USUARIO es de [REDACTED] **

¹¹⁴⁹ De conformidad con la cláusula Cuarta del CONTRATO DUN Y CC [REDACTED] **

¹¹⁵⁰ Al no haber sido imputada dicha capacidad para fijar precios en el DPR, no es posible concluir que DUN tenga dicha capacidad; no obstante, como ya se explicó, sí es posible concluir que DUN tiene y puede tener capacidad para restringir el abasto con independencia del análisis respecto de la capacidad para fijar precios debido a que en el MR los precios que corresponden a las tarifas de intercambio y las cantidades ofrecidas no se determinan de forma sucesiva o simultánea.



50177

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

y CC. Respecto de dicho bien nunca se estableció un precio derivado de la conducta de DUN relativa a negarse, mediante su omisión, a proporcionar la BPD y fijar las condiciones para este intercambio.

A mayor abundamiento, se remite al apartado *"La imposibilidad para fijar precios implica forzosamente la incapacidad de restringir el abasto"* de esta resolución, para evitar repeticiones innecesarias, en el cual se señaló que la capacidad de fijar precios no es equivalente a la capacidad de restringir el abasto y que la LFCE prevé que para la determinación del PS se debe considerar si el o los agente(s) económico(s) *"pueden fijar precios o restringir el abasto"* como dos variables independientes. En este sentido, la AI no tenía que acreditar la posibilidad de DUN para fijar precios a efecto de concluir que tenía PS.

Por último, en relación con los distintos argumentos de la PERITO tendientes a señalar que el MR DE PM no es un mercado, se remite al análisis contenido en los apartados *"A.1. El MR definido por la AI en realidad no constituye un mercado"*, *"A.2 El MR definido por la AI es diverso a donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN"* y *"A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes"* de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

En adición a lo señalado en dichos apartados se indica que el MR DE PM sí es un mercado al existir oferentes y demandantes que intercambian un bien a cambio de un precio, siendo que la autorización por parte del precio pactado entre dos agentes económicos no implica que no pueda existir un mercado o que no exista la capacidad de fijar precios o restringir el abasto por parte de un agente económico con PS. Como se explicó, existen mercados o situaciones en las cuales no existe una relación biunívoca de interdependencia simultánea o sucesiva entre cantidades y precios, sin que por ello pueda considerarse que no existe un mercado.

En la respuesta a la pregunta *"10"* de la PERICIAL DUN, la PERITO en concordancia con el análisis del DPR, refiere que la rentabilidad mínima en el mercado puede ser considerada como una barrera de entrada.

Asimismo, la PERITO refiere que hay varios factores que se deben de considerar para determinar la magnitud de dicha barrera, en el caso, el crecimiento del mercado, la regulación, las economías de alcance y la experiencia vista en el mercado. No obstante, no analiza cómo éstos se aplican al caso concreto o cómo éstos modifican el análisis realizado por la AI en el DPR, constituyéndose únicamente en manifestaciones generales y abstractas.

Por otro lado, la PERITO señala que la escala mínima en sí no es un factor que afecte la decisión de entrar o no a un mercado, sino las posibilidades de conseguir el financiamiento para entrar a dicho mercado, que a su vez depende de las posibilidades para recuperar la inversión.

En este sentido, las posibilidades de recuperar la inversión se encuentran relacionadas con la posibilidad de alcanzar una escala, pues si ésta no se alcanza, no es posible recuperar los costos en los que incurre el agente económico por operar en el mercado. Así, lo señalado por la PERITO no desvirtúa las conclusiones del DPR, sino que las corrobora.

Adicionalmente, la PERITO señala que en el caso de un mercado que está en crecimiento, ciertamente el criterio relevante para determinar la cuota mínima es el número de unidades que se requieren para alcanzar el punto de equilibrio, ya que la cuota de mercado cambia conforme cambia el tamaño de mercado, mientras que el número de unidades se mantiene fijo. Dicha afirmación tampoco combate el análisis realizado en el DPR, en el cual se puede advertir que la AI se refiere al número de RC de PM que deben ser vendidos para alcanzar el punto de equilibrio. El hecho de que la AI señalara el porcentaje que representaban dicho número de unidades y que CC [REDACTED] es una manera distinta de presentar la información, pero no implica que el análisis se haya realizado en función de una cuota general de mercado, sino que se realizó en función del número de RC de PM que deben comercializarse. Asimismo, el número de unidades necesarias para alcanzar la escala mínima, en un mercado en el que la estructura de costos y precios se mantiene estable en el corto plazo, no se modificaría, lo que sustenta el análisis realizado por la AI.

Por otro lado, la PERITO refiere que, si el mercado está creciendo, una SIC nueva en el mercado no necesita forzosamente contar con una base de USUARIOS distinta a la que ya es atendida por las SIC establecidas, por lo que tampoco la base de USUARIOS es una barrera a la entrada. Al respecto, la PERITO no explica ni justifica su razonamiento y no indica cómo dicha afirmación se relaciona con la pregunta que responde, es decir, si la cuota de mercado que un agente debe cumplir para alcanzar la rentabilidad mínima puede o no ser considerada como una barrera la entrada. No obstante, se indica que contrario a lo señalado por la PERITO una SIC sí necesita hacerse de una BD para ser rentable ya que requiere ser atractiva para que los USUARIOS consuman sus productos y le den su IC. Asimismo, en el mercado de IC no se advierte que los USUARIOS cuenten con los incentivos para afiliarse a más de una SIC.

Adicionalmente, la PERITO señala que en términos de la LRSIC las SIC están obligadas a intercambiar su IC por lo que pueden acceder a más información que la que integra su BD por lo que tampoco puede considerarse una barrera a la entrada. De nueva cuenta, la PERITO realiza manifestaciones que no buscan responder la pregunta que se le plantea sino analizar otras barreras a la entrada que podrían advertirse en el MR DE PM. No obstante, se indica que acceder a la totalidad de la IC no se consideró una barrera a la entrada en la presente resolución, por lo que lo señalado por la PERITO en nada cambia las conclusiones a las que arriba esta COFECE.

De igual forma, la PERITO indica que es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima de mercado toda vez que ello sería tanto como asumir que existe un modelo único de negocios para participar en un mercado dado y que la cuota de mercado se encuentra en constante evolución y crecimiento gracias a la existencia de las dinámicas competitivas e innovación de los mercados, que constantemente generan nuevas alternativas para participar en el mercado, por lo que todos los factores se toman en cuenta para decidir entrar o no al mercado, y el hecho de que existan en el mercado de IC (a través de las economías de alcance que presenta) disminuye las posibles barreras a la entrada.

Eliminado: tres palabras.



50124

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

En este sentido, la PERITO señala que es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima de mercado únicamente para RC de PM toda vez que un competidor podría vender otros productos de IC.

Si bien lo que señala la PERITO es acertado, en el sentido de que una empresa puede alcanzar rentabilidad a través de la comercialización de un conjunto de productos o servicios, la PERITO omite considerar que:

- (a) En el DPR se establece el punto de equilibrio en la rentabilidad considerando los costos en los que incurre DUN únicamente para la elaboración de los RC de PM.

En este sentido, el análisis de rentabilidad es consistente, ya que si bien no contempla los ingresos por la comercialización de productos de valor agregado tampoco incluye sus costos, lo que elevaría la cantidad de ingresos que debe generar un agente económico para ser rentable.

- (b) El análisis de rentabilidad se realiza utilizando costos de DUN, pero busca ser aplicable para identificar la escala de producción que debería alcanzar cualquier empresa para ser rentable a efecto de poder concluir si la misma constituye una barrera a la entrada.

Lo anterior es posible considerando que los RC de PM son productos homogéneos, de tal manera que se puede afirmar que una empresa tan eficiente como DUN podría tener un punto de equilibrio similar considerando un precio promedio de RC de PM. No obstante, no sería posible realizar dicho análisis incluyendo los productos de valor agregado, pues este concepto incluye una gama de productos que pueden llegar a ser muy distintos en cuanto a precios y costos. De tal manera, no sería posible asumir los costos de DUN para otras empresas en el caso de productos que no son homogéneos ni se podría concluir el número de productos que debe de vender una empresa para ser rentable si los costos y precios no son comparables entre las distintas empresas que pudieran entrar al mercado e incluso, entre los distintos productos que ofrece una misma empresa.

- (c) Los RC representan el mayor porcentaje de ingresos para las SIC en México.

Asimismo, la PERITO señala que el que CC haya logrado superar la cuota mínima de rentabilidad es un indicador de que las barreras a las entradas no son restrictivas. Según la PERITO, CC alcanzó en dos mil quince, [REDACTED] B [REDACTED] RC de PM considerando los RCI, superando la cuota mínima de [REDACTED] ** [REDACTED] que establece la AI. Al requerirle la DGAJ a la PERITO que identificara la fuente de dicha información, la PERITO refirió al anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN.

En este sentido, con independencia de lo que se señala en el numeral 8 de la presente sección respecto de la valoración de la prueba ofrecida por DUN como anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se indica que al analizar la información del anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN se advierte que la cifra que utiliza la

Eliminado: ocho palabras.

PERITO¹¹⁵¹ para llegar a la conclusión que señala, incluye la comercialización de RC de PM por parte de CC (incluyendo los reportes consolidados e individuales); así como el ingreso que CC recibe por concepto de HIT en su carácter de SIC complementaria.

Así, la conclusión de la PERITO parte de un análisis erróneo pues la PERITO pretende contabilizar como RC el ingreso recibido por concepto de HIT, siendo que el análisis realizado en el DPR no contempla los costos en los que incurre DUN por dicho concepto y que el precio de Hit es distinto al precio de RC DE PM. Es decir, la PERITO asume los ******* RC de PM como la escala de producción mínima para alcanzar rentabilidad, siendo que dicha cifra se obtiene al considerar costos y precios propios de RC de PM, y posteriormente pretende comparar dicha cifra con una distinta que no es comparable (**B** RC de PM comercializados por CC, incluyendo aquellos en los que CC cobra la tarifa de HIT en su calidad de SIC complementaria).

De esta manera, para poder determinar la rentabilidad de CC considerando los ingresos que obtuvo por concepto de la tarifa de HIT que cobra en su calidad de SIC complementaria, era necesario realizar un análisis en el que se incluyeran los costos del intercambio y los precios de dicha tarifa a efecto de obtener la escala de producción mínima para alcanzar rentabilidad. No obstante, la PERITO no realiza dicho análisis.

Con independencia de lo anterior, aun suponiendo sin conceder que CC **B** desde dos mil quince en el segmento de PM, ello en nada desvirtúa la conclusión respecto de la existencia de la barrera a la entrada, pues lo que busca analizarse es si las condiciones específicas son una barrera de entrada para cualquier participante y no sólo para CC. Al respecto, no debe perderse de vista que CC es un agente económico que participa tanto en el segmento de PF como de PM.

En las respuestas a las preguntas "11" y "12" de la PERICIAL DUN, la PERITO realiza manifestaciones en torno al concepto de *free-rider* y sus efectos en el MR DE PM. En específico, indica que el hecho de que se obligue a las SIC a compartir la información de sus BD genera que se disminuyan los incentivos para invertir e innovar, así como ineficiencias de innovación, calidad y subproducción. Asimismo, refiere que existe un problema de *free-riding* en el mercado de IC en el que el agente con la BD más chica se beneficia del agente con la mayor BD y que dicho efecto se mitiga por la imposición de una contraprestación por el intercambio de IC sin que el efecto de *free-riding* desaparezca.

Al respecto, la PERITO aplica de manera teórica los efectos del *free-riding* al MR DE PM, sin analizar las razones por las cuales considera que la tarifa de intercambio que se cobra por el intercambio puntual o aquella ofrecida por CC para el intercambio de la BPD no son suficientes para desaparecer dicho efecto.

Lo anterior cobra especial relevancia cuando se advierte que el concepto de *free-riding* definido por la misma PERITO se refiere al problema que surge cuando "[...] un agente

¹¹⁵¹ Según la información que obra en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN, dicha cifra corresponde a dos mil trece y no a dos mil quince.



50126

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

económico trata de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él [...]” o a “la situación en que una empresa se beneficia de las acciones y esfuerzos de otra sin pagar o compartir los costos en los que incurre la otra empresa”.

En este sentido, las definiciones referidas por la PERITO implican que el *free-riding* requiere la obtención de un beneficio sin el pago correspondiente; no obstante, en el MR DE PM existe el pago de una contraprestación por el intercambio de la IC y la PERITO no señala argumentos que permitan identificar que la tarifa cobrada u ofrecida en el MR DE PM no es suficiente para evitar el *free-riding*.

La PERITO no realiza señalamientos respecto que la tarifa prevista en el CONTRATO DUN Y CC que corresponde al intercambio puntual y a la tarifa ofrecida por CC como contraprestación por registro intercambiado mediante la BPD (que además, en su caso, DUN podría llegar a negociar a la alta), no le permitan recuperar a DUN los costos relacionados con dichos intercambios (por ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración, generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de su BD que se intercambian con CC) y que dichas tarifas le impidan obtener una tasa razonable de retorno.

A manera de ejemplo, se indica que el precio promedio de RC de PM cobrado por DUN a sus USUARIOS en el dos mil catorce, [REDACTED] B [REDACTED] CC tuvo que pagar a DUN por concepto de intercambio de IC, por lo que no se advierte que la tarifa de intercambio otorgue un beneficio a CC sin pagar o compartir los costos en los que incurre DUN.¹¹⁵² Incluso, si se considera que de acuerdo con información proporcionada por DUN, el costo total medio por RC de PM de DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad de [REDACTED] **, [REDACTED] **, ¹¹⁵³ se observa que la tarifa que corresponde al intercambio puntual se encuentra B [REDACTED] B [REDACTED] por RC de PM de DUN.

En este sentido, la PERITO se limita a señalar que una tarifa de intercambio lo suficientemente alta no desaparece por completo en efecto *free-riding* y que “[...] una SIC que recién entra al mercado simplemente debe pagar una tarifa de intercambio, lo cual desincentiva a la SIC que solicita la información a invertir, debido a que, mientras la tarifa de intercambio no sea lo desproporcionadamente alta, dicha SIC podrá mantener sus ventas de Reportes de Crédito tan completos como lo podría hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de inversión”. Así, pareciera que la PERITO indica que una tarifa alta no desaparece el *free-riding*, pero una tarifa desproporcionadamente alta sí.

Al respecto, la PERITO no justifica por qué a su parecer, una tarifa lo suficientemente alta no desaparece el efecto de *free-riding*, cuando justamente éste consiste en obtener un beneficio sin el pago correspondiente. Asimismo, tampoco indica por qué, a su parecer, la tarifa que se

¹¹⁵² El precio promedio al cual DUN vendió los RC de PM en el año dos mil catorce, considerando los descuentos otorgados bajo este concepto, fue de [REDACTED] **. Por su parte, la tarifa de intercambio es de [REDACTED] **.

¹¹⁵³ Dicha cantidad se obtiene a partir de la suma del Costo Variable Medio ([REDACTED] **) más el Costo Fijo Medio ([REDACTED] **). Lo anterior, de conformidad con la información presentada por DUN que obra en los folios 6142 y

cobra por el intercambio puntual o aquella ofrecida por CC para el intercambio de la BPD no es suficiente para desaparecer el *free-riding* en el caso concreto.

Adicionalmente, la PERITO omite considerar que las SIC tienen incentivos para invertir en sus propias BD, ya que el intercambio de la BPD que prevé la LRSIC implica que sólo se transmite y actualiza la información negativa de los CLIENTES, y entonces las SIC deben recopilar directamente la información positiva de sus USUARIOS; aunado a que una BD más completa les permite generar más productos de valor agregado, más ingresos por concepto de HIT o compartición de la BPD, que sus respectivos USUARIOS enfrenten menos costos asociados al HIT y, en términos del principio de reciprocidad, un número mayor de USUARIOS que consuman sus productos. Asimismo, la información puntual [REDACTED] B, por lo que únicamente pueden utilizarla para la elaboración de RC DE PM.

Aunado a ello, la misma PERITO reconoce que el hecho de que ambas SIC estén obligadas a compartir su IC reduce los efectos de *free-riding*.

En ese orden de ideas, la PERITO no logra justificar la existencia del *free-riding* en el MR DE PM, ya que: (a) por un lado, reconoce que la tarifa de intercambio y el hecho de que ambas SIC estén obligadas a compartir su IC reduce los efectos de *free-riding*; y (b) por otro lado, no acredita que el monto de las tarifas no sea suficiente para desaparecer el *free-riding*; máxime cuando las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su BD.

A mayor abundamiento, se remite a DUN al numeral "La AI no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" de esta resolución, en donde se explica que en este caso no se acredita que la AI solape el *free-riding*.

Por otro lado, la PERITO omite considerar en la presente respuesta, los efectos positivos del intercambio de IC. Al respecto, la misma PERITO al analizar las preguntas 7, 10 y 11 del cuestionario adicionado por la AI reconoce que: "[...] es razonable admitir que la obligación de compartir los registros de [IC] puede generar efectos benéficos en la competencia [...] dicha obligación mitiga las economías de red que existen, homogeneizando los RC de PM y garantizando así un nivel calidad uniforme de estos, independientemente de la SIC que los emita", "[...] Con la obligación de las SIC de compartir su información de acuerdo con los artículos 36 y 36 BIS de la LRSIC, se asegura que los RC solicitados por los Usuarios sean confiables, completos y actualizados, lo que permitirá tomar decisiones lo más acertadas posibles acerca del otorgamiento de créditos" y "[...] El mercado de [IC] es un mercado que presenta asimetrías de información ya que las instituciones otorgantes de créditos no conocen la historia y características de todos los Clientes que llegan a solicitar un crédito [...] la coordinación existente entre los Usuarios y las SIC alivia los problemas de información asimétrica, ya que el acceso a los [RC] o a cualquier otro producto de [IC] permite a los Usuarios identificar a los Clientes que cumplieron y a los que no cumplieron sus obligaciones en el pasado, y así tienen herramientas para tomar la decisión de otorgar o no un crédito de manera informada. [...] la obligación que tiene el Usuario a consultar toda la información disponible en el mercado subsana dicha asimetría [...] contar con información completa es importante para el mercado de [IC] y para los Usuarios, ya que permite tener tasas de interés activas

Eliminado: seis palabras.

más bajas y por ende presenciar la expansión de créditos otorgados [...] la regulación contenida en la LRSIC, en sus artículos 36 y 36 Bis, contribuye a solventar el problema de asimetría de información, ya que un Usuario, sin importar la SIC que consulte, tendrá información confiable, completa y actualizada de determinado Cliente antes de otorgar un crédito”.

De esta manera, incluso aunque existiera un problema de *free-riding*, el cual no se acredita, el mismo estaría mitigado según la propia PERITO por el pago de las contraprestaciones correspondientes. Asimismo, no se advierte que evitar dicho supuesto problema incida favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia superando los posibles efectos anticompetitivos y resultando en una mejora al bienestar del consumidor, máxime cuando la obligación de intercambiar IC mitiga los efectos de red y las asimetrías de información, permitiendo: (a) que los USUARIOS cuenten con RC completos y confiables y, en consecuencia, mejores condiciones en el mercado de otorgamiento de crédito; y (b) la existencia de competidores en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO.

Respecto a las preguntas “13” y “14” de la PERICIAL DUN, la PERITO señala que los criterios para que una negativa de trato sea sancionable son los siguientes: (i) el control de un insumo indispensable e insustituible; (ii) la imposibilidad práctica y razonable de un competidor para replicar el insumo indispensable; (iii) la negativa de proporcionar dicho insumo a un competidor; y (iv) la factibilidad de proporcionar el insumo.

Al respecto, la PERITO señala los supuestos que deben colmarse para que una negativa de trato sea sancionable basándose en criterios establecidos en la doctrina u otras jurisdicciones, las cuales no son obligatorias ni vinculantes para esta COFECE; máxime cuando la LFCE es clara al establecer los parámetros que deben cumplirse para la acreditación de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

En este sentido, para tener por acreditada la conducta imputada, la LFCE requiere que se actualicen los siguientes supuestos: (i) que el o los agentes económicos que llevan a cabo la conducta tengan PS en el MR en que se realiza la PMR; (ii) la acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) que la conducta tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos.

De esta manera, en ningún momento la LFCE impone la actualización de los requisitos que refiere la PERITO.

Con independencia de lo anterior, se analizan las siguientes manifestaciones mediante las cuales la PERITO indica que los criterios para determinar que una negativa de trato tiene efectos anticompetitivos no fueron satisfechos en el presente caso:

- a) El insumo es indispensable e insustituible.



De conformidad con la PERITO, el insumo relevante para generar los productos de IC son los registros de crédito, no la BPD o las experiencias comerciales y DUN no puede negar a CC acceder a tales registros.

Al respecto, si bien la fuente primaria de la IC que recopilan o procesan las SIC son los USUARIOS, los efectos de red presentes en el mercado, aunado a la integración vertical, los pocos incentivos para que los USUARIOS acudan a dos proveedores, las ventajas para el primer entrante, entre otras características del mercado, evitan que CC pueda acceder de manera directa a la IC de éstos (lo que se acentúa por la conducta de DUN que genera que los productos de CC sean más caros y menos confiables). Por ello, CC no puede sustituir la BPD y el SEGMENTO CO de DUN mediante la recopilación de IC de forma directa.

- b) Imposibilidad de replicar el insumo. De conformidad con la PERITO, DUN y CC pueden duplicar los registros de la BPD del otro, dado que la fuente primaria de dichos registros son los USUARIOS y no las SIC. Asimismo, según la PERITO, a través del intercambio puntual de IC, DUN y CC han intercambiado los registros necesarios para vender sus RCI de PM a los USUARIOS, enfrentando un costo de intercambio similar (de las consultas realizadas por DUN a CC [REDACTED] B [REDACTED] resultó en HIT y de las consultas realizadas por CC a DUN [REDACTED] B [REDACTED] resultó en HIT) que les permite comercializar sus RC de PM con IC completa, pudiendo duplicar la información de la BPD de manera práctica y con un costo razonable. La PERITO indica que ello denota que el insumo indispensable para CC son los registros de crédito, los cuales han sido efectivamente intercambiados durante el Periodo Investigado.

Al respecto, tal como se señaló en el inciso anterior, las condiciones del mercado hacen inviable que CC pueda acceder, de manera directa, a la totalidad de IC que constituye la BPD de DUN o que se constituye el SEGMENTO CO. En este sentido, tampoco puede replicar la BPD de DUN y el SEGMENTO CO de DUN.

De igual forma, CC no puede replicar la BPD de DUN utilizando los registros que recibe mediante el intercambio puntual ya que, en términos del CONTRATO DUN Y CC, [REDACTED] **
[REDACTED] Adicionalmente, el intercambio puntual no es una forma viable para replicar la BPD ya que, independientemente de si las probabilidades de HIT son similares,¹¹⁵⁴ el costo del HIT es mucho más elevado que el de un registro de la BPD,¹¹⁵⁵ lo cual implica que, aun cuando CC pudiera replicar la BPD vía el intercambio puntual, esto solo sería posible a un costo muy elevado.

- c) Negativa a proporcionar el insumo. Según la PERITO, al encontrarse regulada la compartición de IC, la CNBV será el mejor capacitado para dictaminar los términos de intercambio; asimismo, un incumplimiento a la regulación sectorial no necesariamente un efecto anticompetitivo en el mercado.

¹¹⁵⁴ Se indica que los porcentajes a los que arriba la PERITO difieren de aquellos a los que llega esta autoridad utilizando los datos que presentó DUN en el EXPEDIENTE.

¹¹⁵⁵ El hit cuesta [REDACTED] **, mientras que CC ofreció un pago de [REDACTED] ** por registro de la BPD.

En este sentido, si bien es cierto que una violación a la regulación sectorial no necesariamente tiene un efecto anticompetitivo, en el presente asunto no se sanciona una violación a la LRSIC, sino a la LFCE, ya que se acreditó que la conducta de DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso a CC, es decir, sí tuvo un efecto anticompetitivo.

Adicionalmente, esta autoridad no vulnera las facultades de la CNBV quien puede regular el intercambio de la IC, si no que sanciona una conducta por omisión de DUN consistente en haberse rehusado proporcionar a CC un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros.

Por otro lado, la PERITO indica que no existió negativa toda vez que no existió un requerimiento por parte del regulador para acordar las condiciones de intercambio de la BPD entre DUN y CC, que la falta de requerimiento constituye una prueba de que CC y la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio y que estuvieron satisfechos con la solución aceptada en las reuniones mantenidas. Dicho argumento escapa del análisis económico propio de la prueba pericial desahogada por la PERITO, pues ni la existencia o no del requerimiento, sus efectos ni la interpretación de la norma corresponden a conocimientos técnicos propios de la prueba respecto de los cuales la PERITO haya acreditado ser experta, ni constituyen aspectos respecto de los cuales esta autoridad requiera del auxilio de la PERITO para poder analizarlos. En este sentido, dichos señalamientos no pueden generar convicción pues no son propios de la naturaleza de la prueba que se analiza. No obstante, toda vez que los mismos fueron previamente analizados por esta autoridad, se remite al apartado *"La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD"* de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

Por último, la PERITO refiere que DUN no puede negarse a proporcionar los registros cuya fuente son los USUARIOS. Al respecto, se indica que en el DPR se imputó a DUN que se negara a proporcionar la IC de forma indirecta a través del intercambio de la BPD y el intercambio puntual (no que se negara a proporcionar los registros que provienen de forma directa de los USUARIOS). Asimismo, tanto en el DPR como en la presente resolución se explica cómo dichas conductas impiden que CC pueda recopilar suficiente IC de manera directa de los USUARIOS.

- d) Factibilidad de proporcionar el insumo. La PERITO señala que la razón por la que la BPD no se ha compartido es porque DUN está imposibilitado a hacerlo bajo las condiciones actuales, ya que CC no diferencia entre la IC de PF y PFAE y realiza diversas manifestaciones al respecto.

De nueva cuenta, dichos argumentos escapan del análisis económico propio de la prueba pericial, no refieren cuestiones respecto de los cuales la PERITO haya acreditado ser experta, ni constituyen aspectos respecto de los cuales esta autoridad requiera del auxilio

de la PERITO para poder analizarlos. En este sentido, dichos señalamientos no pueden generar convicción pues no son propios de la naturaleza de la prueba que se analiza.

No obstante, toda vez que los mismos fueron previamente analizados por esta autoridad, se remite al apartado "*Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC*" de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

No pasa desapercibido que la PERITO refiere que: (a) el concepto de SEGMENTO CO es incorrecto, no forma parte del HC y se refiere a las experiencias comerciales; y (b) la CNBV aprobó el contenido del CONTRATO DUN Y CC, invocando defensas argumentadas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN que no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o conocimientos técnicos y que la PERITO no está en posibilidad de afirmar. En este sentido, dichos señalamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son contrarios a la naturaleza de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la COFECE respecto de cuestiones técnicas o científicas. Asimismo, se indica que dichos planteamientos ya han sido analizados dentro del apartado "*CONDUCTA*" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

Finalmente, respecto a la respuesta a la pregunta "15", se indica que la PERITO indicó las razones que justifican su experiencia y conocimientos; así como la bibliografía en la que, según su dicho, basó sus respuestas. Ninguno de los señalamientos vertidos en relación con esa pregunta desvirtúa el contenido del DPR.

2.2 Adición al cuestionario de la PERICIAL DUN por parte de la AI

Al respecto, la AI adicionó el cuestionario del PERITO de conformidad con el OFICIO 176. Las preguntas adicionadas por la AI fueron analizadas en la PERICIAL DUN de la siguiente manera:

"1. QUE EL PERITO EXPLIQUE QUÉ ES TEORÍA DE DAÑO EN UN CASO DE CONDUCTAS UNILATERALES, BASADO EN LA LITERATURA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Una teoría de daño es una descripción de la manera en que la realización de una práctica por parte de un agente económico, ya sea de manera unilateral o bien consensuada con otro agente, puede generar efectos anticompetitivos en el mercado tales como desplazar, impedir entrada o poner en situación de desventaja, a competidores, perjudicando a éstos y, por extensión, generar efectos adversos a los consumidores.¹¹⁵⁶

La literatura señala que una teoría de daño debe cumplir con las siguientes características.

- i. Debe articular la manera en la que la realización de la práctica daña la competencia, en primer lugar, pero en última instancia, a los consumidores, en términos relativos a una referencia contrafactual apropiada;*
- ii. debe tomar en cuenta no únicamente la estructura del mercado, sino también con los incentivos que tendría el agente que comete la práctica, para dañar la competencia; y*

¹¹⁵⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Zenger, H., & Walker, M. (2012). *Theories of harm in European competition law: A progress report*".

iii. *debe ser consistente con la evidencia empírica.*¹¹⁵⁷

[...]

*No obstante, en el caso de las [PMR], la teoría de daño es fundamental, [...] pueden tener efectos ambiguos sobre el bienestar de los consumidores [...] pueden intensificar el proceso competitivo y generar eficiencias.*¹¹⁵⁸

Por lo anterior, la investigación y el análisis de este tipo de prácticas requiere necesariamente el desarrollo de una teoría de daño, ya que, sin ella, las investigaciones se tornan sobre el análisis y limitación de conductas per se y no sobre las restricciones a la competencia.

2. QUE EL PERITO SEÑALE Y EXPLIQUE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN EN LAS QUE SE ANALIZÓ LA TEORÍA DE DAÑO DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA RELATIVA.

La suscrita hace notar que la pregunta que se contesta no versa sobre cuestiones de economía, sino sobre el conocimiento de precedentes de la Comisión. No obstante lo anterior, se procede a presentar diversas resoluciones que son del conocimiento de la suscrita, en las que se analizó la teoría de daño.

[...]

3. QUE EL PERITO SEÑALE EN QUÉ ARTÍCULO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE CONTAR CON UNA TEORÍA DE DAÑO AL ANALIZAR UN CASO DE [PMR].

En primer término, la suscrita hace notar que la pregunta que se contesta no versa sobre cuestiones de economía, sino sobre el conocimiento de la normatividad de competencia económica en México, cuestión de tipo jurídica. No obstante lo anterior, se procede a dar contestación a la pregunta en cuestión.

[...]

[...] a pesar de que la LFCE no menciona explícitamente el término teoría de daño, sí señala que, para considerar como anticompetitiva una conducta, debe existir un objeto o efecto de esta naturaleza, cuyo sustento debe cumplir con las características de una teoría de daño.

4. QUE DIGA EL PERITO CÓMO SE PODRÍA MEDIR EL [PS] DE UN [MR] CUANDO LA COMPETENCIA ES PRINCIPALMENTE VÍA CANTIDADES Y NO PRECIOS.

Un buen indicador para medir el [PS] de un mercado relevante en el que la competencia sucede principalmente vía cantidades (y no precios) es el [IHH]. Este índice es adecuado ya deriva [sic] naturalmente de un modelo de competencia económica, específicamente, el modelo de competencia de Cournot [...]

[...]

[...] en un mercado en el que se compite vía cantidades, y además en que los bienes son homogéneos (es decir, que cumple los supuestos del modelo de Cournot), un indicador natural para medir posible [PS] es el IHH.

Sin embargo, en el caso que ocupa a esta prueba pericial, no existe un mercado en que se compita vía cantidades. De entrada, en el mercado de comercialización de RC de PM (no definido así el mercado relevante por la AI), los agentes económicos compiten en precios, toda vez que la

¹¹⁵⁷ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Zenger, H., & Walker, M. (2012). *Theories of harm in European competition law: A progress report*; y, Buccirrossi, P. (2016). *Theories of harm and efficiency justifications in abuse of dominance cases*. Belgrado. Junio 3th. 2016".

¹¹⁵⁸ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Comisión Federal de Competencia de México. *Herramientas de competencia [sic] Económica*".

producción de estos productos no presenta limitaciones en su capacidad y, por lo tanto, pueden abastecer toda la demanda que derive del precio que decidan.

[...]

A su vez, el 'mercado' relevante definido por la AI, es decir, la recopilación y el procesamiento de [IC] de las PM, no puede ser considerado como tal.

[...]

Sin embargo, precisamente la definición de poder de mercado deja entrever el absurdo de dicho 'mercado'. Como se mencionó, el poder de mercado es la habilidad de incrementar el precio por encima del nivel competitivo del mercado. Si se considera que la tarifa de intercambio de [IC] entre las SIC es un 'precio', dicho 'precio' es de hecho un precio igual al costo por el intercambio mencionado, por lo que no existe un margen entre los precios y los costos (el cual tendría que existir para hablar poder de mercado, por definición).

A esto se suma que, como se mencionó, la tarifa de intercambio entre las SIC es impuesta por la CNBV y no se decide a través de un proceso de competencia, por lo que ningún agente económico (ni DUN ni [CC]) pueden fijar su 'precio' por encima de la tarifa de intercambio previamente establecida.

Es decir que, si bien el IHH es un buen indicador del poder de mercado cuando los oferentes compiten eligiendo la cantidad que producen, esto no es relevante en este caso, ya que en el mercado de comercialización de RC de PM se compite vía precios, y en el 'mercado' relevante definido por la AI no existe poder de mercado de algún competidor, dado que este no puede ser considerado como un mercado.

5. QUE SEÑALE EL PERITO SI EN EL MERCADO DE 'RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE [IC] DE PM' EXISTE UN PRECIO IMPLÍCITO POR EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS POR EL VOLUMEN DE REGISTROS APORTADOS POR LOS USUARIOS.

No existe un precio implícito en el mercado de la 'recopilación y procesamiento de [IC] de PM' derivado del otorgamiento de descuentos por el volumen de registros aportados por los Usuarios,

[...]

[...]

6. QUE DIGA EL PERITO SI LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS [BD] DE [IC] ES UN INSUMO NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE [IC].

[...] un insumo necesario para generar los productos de [IC] son los registros de crédito.

Las SIC no pueden ofrecer productos de [IC] sin contar con la información mínima necesaria para que los Usuarios se sirvan de dichos productos y puedan otorgar créditos de manera informada. Es decir, sin los registros de [IC], los productos de las SIC (comenzando por los RC) no contarían con información relevante, precisa, oportuna, suficiente y confiable, los cuales constituyen los principios generales de la información que los sistemas de [IC] deben manejar¹¹⁵⁹.

Ahora bien, la negativa de trato que imputa la AI a DUN en el DPR se refiere específicamente a la [BPD] y al Segmento Co. [...]

[...]

¹¹⁵⁹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Banco Mundial (2011), General Principles for Credit Reporting, Financial Infrastructure Series, Credit Reporting Policy and Research, Washington DC".

A diferencia de los registros crediticios contenidos en las [BD] de [IC], ni la BPD ni el Segmento Co son insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del mercado de [IC], toda vez que estos no son el insumo primario y relevante. [...]

[...]

7. QUE DIGA EL PERITO SI COMPARTIR LAS [BD] DE [IC] ES UNA PRÁCTICA RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE [IC]. AL RESPECTO, EXPLIQUE CUÁNDO SE JUSTIFICA QUE NO SEA ASÍ Y SI LOS SUPUESTOS SE CUMPLEN EN EL CASO DE MÉXICO.

Compartir las [BD] de [IC] entre SIC no es una práctica reconocida o común a nivel internacional para fomentar la competencia y el adecuado funcionamiento de los mercados de [IC]. Lo anterior es claro en el caso de Estados Unidos, que cuenta con uno de los mercados más grandes de [IC] en todo el mundo. Asimismo, la obligación de compartir la [BD] de [IC] se justificaría si un Usuario no se pudiera afiliar al número de SIC que le pareciera conveniente, supuesto que por supuesto no se cumple en el caso de México debido a la regulación vigente.

[...]

[...] el intercambio de las [BD] entre SIC no se observa en otros países como una práctica absolutamente necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados de [IC]. Otros mercados, más bien, consideran que mientras existan reglas claras¹¹⁶⁰ de privacidad, claridad, temporalidad, confiabilidad y precisión en las [BD] es más que suficiente¹¹⁶¹ para que las SIC puedan emitir sus reportes y estos les sean útiles a los Usuarios y a los mismos Clientes para el otorgamiento de créditos. Dichos mercados de [IC] funcionan de manera 'autorregulada', es decir, que se basan en los incentivos inherentes que tienen tanto los Usuarios como las SIC, de tener la más y mejor [IC] para producir sus RC y el resto de los productos de [IC] que ofrecen.

La obligación compartir las [BD] de [IC] ciertamente se justifica si los Usuarios no pudieran elegir a la o las SIC que desearan, toda vez que al imponerles una SIC, estas no tendrían el incentivo de proporcionar la información de la mayor calidad, y en ese caso, para asegurar que los RC contuvieran información útil, confiable y completa, las SIC tendrían que compartir sus [BD] entre ellas. Por supuesto, esto no sucede en México y no obstante el intercambio es obligatorio.

No obstante lo anterior, es razonable admitir que la obligación de compartir los registros de [IC] puede generar efectos benéficos en la competencia, si bien definitivamente introduce una distorsión en el mercado.

Por un lado, dicha obligación mitiga las economías de red que existen, homogeneizando los RC de PM y garantizando así un nivel calidad uniforme de estos, independientemente de la SIC que los emita. No obstante, esto genera efectos de free-riding en el mercado, por la falta de incentivos que genera a las SIC para invertir en más y en mejores productos de [IC], así como de buscar la afiliación de más Usuario. Es decir que, la obligación de compartir la información entre SIC desincentiva la competencia en calidad de los productos.

¹¹⁶⁰ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "En el caso de Estados Unidos esta sería el Fair Credit Reporting Act (FCRA)".

¹¹⁶¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Banco Mundial (2011), General Principles for Credit Reporting, Financial Infrastructure Series, Credit Reporting Policy and Research, Washington DC".

Por otro lado, al imposibilitar la competencia en calidad, el intercambio de información entre SIC genera un proceso de competencia en precios más intenso, lo cual en última instancia beneficia a los Usuarios.

Lo que es un hecho irrefutable es que el intercambio de información no depende exclusivamente del intercambio de la BPD, pues este puede darse (y así ha sucedido) mediante la consulta de los registros correspondientes a cada RC de PM. Es de suma importancia resaltar que esta condición ha sido igual para ambas SIC, pues, así como [CC] no ha contado con la BPD de DUN, esta SIC tampoco ha contado con la BPD de [CC].

[...]

8. QUE DIGA EL PERITO SI HAY UNA EXPLICACIÓN ECONÓMICA QUE JUSTIFIQUE QUE EN EL MERCADO DE RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE [IC] DE PM SE NIEGUE COMPARTIR LA BPD MIENTRAS QUE EN EL MERCADO DE PF SÍ SE COMPARTE.

[...] si existe una explicación económica [...] Dicha explicación se basa en los costos de intercambiar la BPD en los que incurrirla una u otra SIC. Sin embargo, el que exista o no una explicación económica resulta irrelevante en el caso [...] toda vez que el intercambiar la BPD constituye una obligación legal [...] si la BPD de PM no se ha intercambiado y no ha existido una sanción por parte del regulador correspondiente, esto debe obedecer a una razón objetiva, además de hacer evidente que no es un asunto en materia de competencia económica, ya que existen alternativas para allegarse de la información contenida en la BPD, como ha sucedido.

De entrada, visto el marco legal, debe de tomarse en cuenta que para poder manejar registros de PF y de PM, se requiere contar con una autorización por parte del regulador. En ese sentido, por ejemplo, el contar con una autorización para manejar [IC] para PM pero no para PF, ciertamente puede justificar el que en un caso sí se comparta la información y en el otro no. Ciertamente, ello no es una razón económica, pero pone en evidencia que esta compartición de una BPD y la no compartición de la otra son cuestiones totalmente ajenas una de la otra y por tanto no resulta dable hacer un comparativo entre ambas. En consonancia con lo anterior, DUN no cuenta con la autorización de prestar servicios de [IC] para PF, sino únicamente de PF con actividad empresarial y de PM.

En un sentido económico, lo anterior es de suma relevancia, toda vez que, aun si DUN y [CC] pudieran intercambiar sus BPD sin incumplir sus respectivas autorizaciones legales, el intercambiar la BPD representaría un gasto mayor e innecesario para DUN. Es decir, si DUN recibiera la información de PF en su totalidad, tendría que pagar por la totalidad de la información y no solo por aquella que puede utilizar (PF con actividad empresarial), lo cual ciertamente no tiene racionalidad económica alguna.

La justificación económica aplica en el mismo sentido para el segmento de PF, en que si se realiza el intercambio de la BPD [...] ambas SIC (TUM y [CC]) están pagando por registros que pueden utilizar, a diferencia de lo que ocurre en el segmento de PM.

El número exacto de registros contenidos en la BPD de [CC] que DUN no podría utilizar (es decir, aquellos de personas físicas) no es del conocimiento de quien suscribe. [...] es mucho mayor [REDACTED] B [REDACTED], lo que implica que dicha proporción de magnitud considerable es la que DUN tendría que pagar por no utilizar.

En síntesis, si existe una justificación económica para que no se intercambie la BPD en el segmento de PM y si en el de PF. Dada la inhabilidad de [CC] de distinguir entre sus registros de PF y de PF con actividad empresarial, a DUN le sería más costoso intercambiar y recibir la totalidad de la BPD de [CC], toda vez que estaría pagando por un número significativo de

Eliminado: doce palabras.

registros que no podría utilizar. Por otro lado, TUM sí se encuentra habilitado para manejar registros de PF con actividad empresarial, por lo que puede utilizar la totalidad de la base que se le proporciona y, por ende, tiene sentido que intercambie su base.

[...]

[...], el hecho de que la CNBV no haya sancionado a DUN o a [CC] por incumplir la ley, al no intercambiar sus BPD, deja entrever que existe una razón objetiva, avalada por un órgano regulador, por la cual dicho intercambio no ha tenido lugar.

Esta razón es la previamente expuesta: DUN no puede intercambiar la BPD con [CC] bajo las condiciones actuales. Lo anterior, porque no está autorizado para prestar servicios en el segmento de PF, y porque [CC] no ha podido diferenciar sus registros de PF del resto en su propia BPD.

9. QUE DIGA EL PERITO SI INCURRIR EN EL COSTO DE LA TARIFA POR EL INTERCAMBIO PUNTUAL DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DE LOS RC PONE EN DESVENTAJA A UNA SIC DE MENOR ESCALA RESPECTO DEL COSTO EN QUE INCURRE POR EL INTERCAMBIO DE LA BPD.

El que exista un mayor o un menor costo por el intercambio puntual de [IC] o por el costo de intercambiar la BPD, y cómo esto puede poner en desventaja a una SIC de menor escala, depende de factores particulares de cada caso. Algunos de estos factores son: el número de registros existentes en cada BPD; el costo establecido por registro al realizar el intercambio de la BPD; las tarifas pactadas por el intercambio puntual de la [IC]; y, las condiciones particulares en que opera la SIC de menor escala.

En el caso que ocupa esta prueba pericial, dichos factores permiten entrever que la SIC de menor escala en México en el segmento de PM ([CC]) no se encuentra en desventaja por tener que compartir la [IC] de forma puntual, con respecto a una situación en la que se intercambia la BPD.

[...]

[...] la CNBV sí ha fijado una tarifa por el intercambio puntual de [IC]. Esta es de ** pesos cuando ocurre un Hit, [...] implica que un incremento de ** del precio base del RC de PM ** cuando ocurre Hit en el intercambio puntual de [IC]. [...]

[...] las consultas que resultaron en Hits entre las dos SIC, estas fueron similares entre DUN y [CC]. Específicamente, en promedio entre 2013 y 2015, el B de las consultas realizadas por DUN a la [BD] de [CC] resultó en Hit, mientras que las consultas de [CC] a la base de DUN resultaron en un porcentaje de Hit del B¹⁶². Esto quiere decir que la contraprestación de los Hits causados fue muy similar para las dos SIC y, por consiguiente, no se presenta en desventaja una SIC de menor escala ante el intercambio de información puntual, pues ambas SIC han pagado la contraprestación mencionada con casi la misma probabilidad entre 2013 y 2015, al emitir un RC de PM.

Esto sucede ya que, a pesar de que [CC] sea la SIC con menor escala, los registros de Clientes que ha conseguido a partir de 2012, afiliando un número significativo de Usuarios nuevos distintos a los de DUN, le son útiles a este último y, por consiguiente, DUN ha pagado por el intercambio puntual de los registros un B de las veces (en promedio).

¹⁶² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Se considera el promedio de consultas mensuales que resultaron en un Hit entre agosto 2013 y abril 2015. En el caso de DUN se consideran consultas a PF con actividad empresarial y a PM, mientras que en el caso de [CC] se consideran únicamente consultas a PM. Fuente: Buró de Crédito, Contestación al oficio de requerimiento número COFECE-AI-DGIM-2015-029 de fecha 20 de abril de 2015, contenido en el Expediente".

En síntesis, la diferencia entre incurrir en los costos por el intercambio puntual de la [IC] o por el intercambio de la BPD, y cómo esto puede o no poner en desventaja a la SIC de menor escala, depende completamente de cada caso. En el caso de México, dado que los Hits observados tanto por DUN como por [CC] son muy similares, no se observa que este último se encuentre en desventaja con respecto a DUN por intercambiar la información de manera puntual.

Por último, es de suma importancia mencionar que, de suceder el intercambio de la BPD en las condiciones actuales, la SIC que se encontraría en desventaja sería DUN, pues estaría pagando un sobreprecio por los registros que requiere, al tener que adquirir, sin alternativa, los registros de personas físicas, los cuales no le es posible utilizar y que representan una proporción importante de la [BD] de [CC].

Finalmente, es relevante hacer notar que el que se intercambie la BPD no necesariamente reduce de forma significativa los costos en los que se incurre por el intercambio puntual de la información, independientemente de la magnitud de cada SIC. Para observar esto, se utiliza la evidencia observada en el caso de PF [...] aun intercambiando sus BPD, ambas SIC presentaron una probabilidad mayor al **B** de tener una consulta que resultara en Hit, por lo que el costo derivado del intercambio puntual de [IC] sigue siendo significativo y, lo más relevante, muy similar entre las dos SIC, independientemente de su escala.

10. QUE EL PERITO SEÑALE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON RC QUE CONTENGAN LA MEJOR Y MÁS COMPLETA INFORMACIÓN DISPONIBLE DEL [HC] DE UN CLIENTE Y CÓMO ESTO PODRÍA AFECTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL OTORGANTE DE CRÉDITO O LAS PROYECCIONES ACTUARIALES-FINANCIERAS DE ÉSTOS.

En primer término, la suscrita hace notar que la pregunta que se contesta no versa sobre cuestiones de economía, sino sobre cuestiones contables. No obstante lo anterior, se procede a dar contestación a la pregunta en cuestión.

[...]

[...] la provisión de RC con información incompleta, pueden llevar a decisiones incorrectas por parte de los Usuarios, lo que elevaría las tasas de interés activas y disminuiría los créditos otorgados¹¹⁶³, generando así una disminución en el bienestar de los Clientes y de los Usuarios.

Para una institución bancaria, la cartera de créditos otorgados es un activo dentro de su estado financiero, por lo que tomar decisiones incorrectas, es decir otorgar créditos a malos pagadores o no otorgar créditos a buenos pagadores disminuiría sus activos. Por otro lado, los pasivos se mantienen constantes, por lo que, considerando el escenario anterior, se puede decir que el valor de la institución bancaria disminuiría.

La regulación actual en el mercado de [IC] solventa este problema. Con la obligación de las SIC de compartir su información de acuerdo con los artículos 36 y 36 BIS de la LRSIC, se asegura que los RC solicitados por los Usuarios sean confiables, completos y actualizados, lo que permitirá tomar decisiones lo más acertadas posibles acerca del otorgamiento de créditos. Es importante insistir en que dicho intercambio sucede mediante el intercambio puntual de registros de [IC] y no depende de manera necesaria del intercambio de la BPD entre las SIC.

11. QUE EL PERITO DIGA CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ASIMÉTRICA QUE PROVOCARÍA PARA UN OTORGANTE DE CRÉDITO CONTAR CON RC CON INFORMACIÓN INCOMPLETA DEL [HC] DE UN CLIENTE.

¹¹⁶³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Negrin, José Luis. Mecanismos para compartir información crediticia. Evidencia internacional y la experiencia mexicana. Diciembre 2000".

La asimetría de información se refiere a la situación en la que un agente involucrado en una transacción tiene más información que su contraparte [...] El mercado de [IC] es un mercado que presenta asimetrías de información ya que las instituciones otorgantes de créditos no conocen la historia y características de todos los Clientes que llegan a solicitar un crédito.

En este sentido, la coordinación existente entre los Usuarios y las SIC alivia los problemas de información asimétrica, ya que el acceso a los [RC] o a cualquier otro producto de [IC] permite a los Usuarios identificar a los Clientes que cumplieron y a los que no cumplieron sus obligaciones en el pasado, y así tienen herramientas para tomar la decisión de otorgar o no un crédito de manera informada.

[...] la obligación que tiene el Usuario a consultar toda la información disponible en el mercado subsana dicha asimetría.¹¹⁶⁴

Es decir que, contar con información completa es importante para el mercado de [IC] y para los Usuarios, ya que permite tener tasas de interés activas más bajas y por ende presenciar la expansión de créditos otorgados.¹¹⁶⁵

Dado lo anterior, es importante mencionar que la regulación contenida en la LRSIC, en sus artículos 36 y 36 Bis, contribuye a solventar el problema de asimetría de información, ya que un Usuario, sin importar la SIC que consulte, tendrá información confiable, completa y actualizada de determinado Cliente antes de otorgar un crédito.

12. QUE EL PERITO DIGA CÓMO LA EXISTENCIA DE UNA TARIFA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE SIC ELIMINA UN POSIBLE PROBLEMA DE FREE RIDER. EXPLIQUE LOS MOTIVOS Y LA RAZÓN DE SU DICHO.

[...] En el caso mexicano, la regulación en el mercado de [IC] presenta dos casos de free-riding:

- i) [...] artículo 36 de la LRSIC, las SIC están obligadas a proporcionar su BPD [...]*
- ii) [...] artículo 36 Bis de la LRSIC, las SIC tienen que compartir su información de manera puntual [...]*

[...] en los dos casos, una tarifa de intercambio, como la que contempla la LRSIC que fije la CNBV después de un acuerdo entre las SIC, mitiga el efecto del free-riding, ya que dicha tarifa es una contraprestación para que la SIC que incurrió en los gastos de compartir su información no tenga que absorber la totalidad de los costos que esto implica.

Sin embargo, dicha tarifa de intercambio no solventa del todo el problema, ya que la SIC con la [BD] más pequeña, aún tiene incentivos de captar la información de la otra empresa en lugar de tomar medidas para mejorar su [BD]. Esto, porque sin una inversión adicional a la contraprestación por el intercambio de información, esta SIC puede emitir [RC] tan completos como la SIC establecida.

Lo anterior deriva en subinversión por parte de la SIC free-rider. Asimismo, la SIC con la [BD] más grande puede seguir incurriendo en costos que no son solventados totalmente por la contraprestación pagada, por lo que también tiene un incentivo para subinvertir.

Un ejemplo de esto es el intercambio de la BPD en el segmento de PM. De llevarse a cabo, dado que DUN no está autorizado para prestar servicios en el segmento de PF, y dado que [CC] no ha podido diferenciar sus registros de PF del resto en su propia BPD, DUN tendría que pagar

¹¹⁶⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Artículos 36 y 36 bis de la LRSIC".

¹¹⁶⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Negrin, José Luis (2000). Mecanismos para compartir información crediticia. Evidencia internacional y la experiencia mexicana. Banco de México: Dirección General de Investigación Económica p. 10".



- 50136

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

por registros que no puede utilizar al intercambiar toda la BPD. Este tipo de costos son muy difíciles de incorporar a la tarifa de intercambio de los registros, por lo que ciertamente DUN seguiría incurriendo en costos no compartidos por [CC].

[...]"

De las respuestas proporcionadas por la PERITO en respuesta a la adición del cuestionario formulada por la AI en el OFICIO 176 se desprende lo siguiente:

Mediante la respuesta a la pregunta "1" de la adición al cuestionario, la PERITO explica el concepto de "teoría de daño", haciendo manifestaciones generales y abstractas, sin indicar cómo se relacionan con el presente caso o cómo podrían cambiar las conclusiones a las que llega la AI en el DPR.

Por su parte, respecto de las preguntas "2" y "3" de la adición al cuestionario (A saber: "2. *Que el perito señale y explique las resoluciones de la Comisión en las que se analizó la teoría de daño de una práctica monopólica relativa*" y "3. *Que el perito señale en qué artículo de la normatividad en materia de competencia económica se establece la obligación por parte de la comisión de contar con una teoría de daño al analizar un caso de [PMR]*"), la PERITO indica que no versan sobre cuestiones de economía; no obstante, en sus respuestas: (a) refiere y describe diversos precedentes de la COFECE y de la CFC, en los que a su parecer la teoría de daño fue determinante para la investigación y su definición; e (b) indicó que en la LFCE no se enuncia el concepto de "teoría de daño" pero que se tienen como requisito algún objeto o efecto de la conducta, cuyo sustento debe cumplir con las características de una teoría de daño.

Al respecto, asiste la razón a la PERITO pues esas preguntas no se refieren a conocimientos propios de un especialista en materia económica, sino que se refieren a conocimientos que se desprenden de los precedentes de la COFECE/CFC y de una lectura a la LFCE.

Adicionalmente, las explicaciones de la PERITO son generales, sin indicar cómo se relacionan con el presente caso o cómo podrían cambiar las conclusiones a las que llega la AI en el DPR.

Con relación a la respuesta de la pregunta "4" de la adición al cuestionario, la PERITO señala en síntesis que un buen indicador para medir el PS de un agente económico cuando la competencia es vía cantidades y no precios es el IHH, pero que en el presente caso no existe un mercado en que se compita vía cantidades puesto que en el mercado de comercialización de RC de PM se compite vía precios y el MR DE PM no puede ser considerado un mercado.

En primer lugar, la referencia a que en el mercado de comercialización de RC de PM se compite vía precios, en nada desvirtúa lo señalado en el DPR al analizar el PS de DUN, en el cual se utilizó el IHH únicamente para medir la concentración del MR DE PM.

Adicionalmente, como ya se indicó, el MR DE PM sí es un mercado,¹¹⁶⁶ por lo que un agente económico puede tener PS en él. En este sentido, la PERITO no realiza argumentos tendientes a desvirtuar el uso del IHH en el MR DE PM.

¹¹⁶⁶ Para evitar repeticiones innecesarias, se remite a lo señalado al analizar la pregunta 2 del cuestionario ofrecido por DUN, en el que se indican las razones por las cuales la Perito se equivoca al considerar que el MR DE PM no es un mercado.



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

De igual forma, el IHH se utilizó en el DPR para estimar el grado de concentración en el mercado, siendo que con base en éste se concluyó la existencia de una alta concentración en el MR de PM. Así, más allá de que tan acertada es la utilización de dicho indicador en el presente caso, la conclusión a la que arriba la AI al utilizarlo, coincide con lo señalado por la PERITO, quien señaló que era importante considerar la evolución de las participaciones de mercado de DUN y CC pues se estaba frente a un mercado que usualmente presenta altas concentraciones.

Asimismo, las respuestas de la PERITO no toman en cuenta que el PS de DUN no se basa exclusivamente en el análisis del IHH, pues además de la alta concentración de mercado se tomó en cuenta la participación de mercado de DUN, la existencia de barreras a la entrada y su capacidad para restringir el abasto.

Por último, la PERITO refiere que el poder de mercado es la habilidad de incrementar el precio por encima del nivel competitivo del mercado, por lo que, si se considera que la tarifa de intercambio de IC entre las SIC es un "precio", dicho "precio" es igual al costo por el intercambio mencionado, por lo que no existe un margen entre los precios y los costos, el cual tendría que existir para hablar poder de mercado. Asimismo, indica que la tarifa de intercambio entre las SIC es impuesta por la CNBV y no se decide a través de un proceso de competencia, por lo que ningún agente pueden fijar su "precio" por encima de la tarifa de intercambio previamente establecida.

Al respecto, se reitera que la tarifa de intercambio no es impuesta por la CNBV, sino que dicha autoridad se limita a autorizar la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS por los RCI de PM. El hecho de que, con posterioridad a la firma de un contrato, las SIC tengan la obligación de cumplir los términos de éste mientras no los modifiquen (como sucede con cualquier obligación contractual), no implica que no puedan fijar precios.

Adicionalmente, la PERITO concluye que la tarifa de intercambio es igual a costos; no obstante, en ningún momento justifica su afirmación, ni indica que cálculos o metodologías la llevaron a dicha conclusión.

Incluso, de la información con la que cuenta esta autoridad, se advierte que el costo de DUN por emitir un RC se encuentra ^{**} de la tarifa de intercambio puntual, siendo que no se advierte que el intercambio puntual le genere costos significativos adicionales a la emisión de un RC.

A mayor abundamiento, considerando la información proporcionada por DUN en el EXPEDIENTE, se advierte que, para dos mil catorce, el costo de un RC era de ^{**}

^{**} 1167

¹¹⁶⁷ Folios 16767 y 5802. Se utilizan datos del dos mil catorce derivado de la información con la que se cuenta en el EXPEDIENTE; sin embargo, se indica que dichas cifras ^{**} a los costos que tenía DUN cuando firmó el CONTRATO DUN Y CC pues los RC vendidos pasaron ^{**}

Eliminado: un renglón y veintitún palabras.



No obstante, el precio de la tarifa de intercambio puntual en los casos de HIT se estableció en

En este sentido, es erróneo que no pueda existir poder de mercado en el MR DE PM.

Con relación a la respuesta de la pregunta "5" de la adición al cuestionario, la PERITO señala en síntesis que no existe un precio implícito en el MR DE PM por el otorgamiento de descuentos por el volumen de registros aportados por los USUARIOS porque dicho mercado en realidad no puede considerarse como tal.

Al respecto, la PERITO reitera diversas consideraciones que ya han sido analizadas en la PERICIAL DUN, por lo que se remite a las mismas para evitar repeticiones innecesarias. Asimismo, se indica que, aunque por razones diversas a las señaladas por la PERITO, esta autoridad coincide con ella respecto de que no existe un precio implícito en el MR DE PM por el otorgamiento de descuentos por el volumen de registros aportados por los USUARIOS, ya que incluso considerando que los descuentos son un precio, estos se dan en el MERCADO RELACIONADO.

No obstante, lo señalado por la PERITO en nada desvirtúa las conclusiones a las que arriba la AI en el DPR.

Por su parte, en la respuesta de la pregunta "6" de la adición al cuestionario, la PERITO indica, en síntesis, que los registros crediticios son necesarios para el buen funcionamiento de los mercados de IC porque sin ellos las SIC no pueden ofrecer productos de calidad, completos y confiables, pero que ello es irrelevante porque los bienes respecto de los cuales la AI imputa una negativa de trato a DUN no son los insumos necesarios o primarios, aunado a que la BPD es un bien que se puede replicar o sustituir sin incurrir en costos excesivos o restrictivos.

En ese sentido, la respuesta proporcionada por la PERITO es consistente con lo señalado en el DPR respecto de que las SIC no pueden ofrecer productos de IC sin contar con la información mínima necesaria para que los USUARIOS se sirvan de dichos productos de manera informada (lo cual confirma la teoría del DPR); sin embargo, la PERITO difiere del análisis de la AI pues sostiene que BPD y el SEGMENTO CO no son insumos necesarios.

Al respecto, se remite a lo señalado al analizar la respuesta de la PERITO a la pregunta 14 del cuestionario ofrecido por DUN, para evitar repeticiones innecesarias.

Asimismo, se indica que la PERITO pierde de vista que, si bien el insumo primario son los registros, las condiciones del mercado (efectos de red, integración vertical, ventajas para el primer jugador y economías de escala) impiden que CC se abastezca de manera directa de una

Eliminado: diecisiete palabras.



80137

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

gran cantidad de IC. En este sentido, el hecho de que DUN no le proporcione la IC a CC, afecta el buen funcionamiento de los mercados de IC porque no puede ofrecer productos de calidad, completos y confiables.

En la respuesta de la pregunta "7" de la adición al cuestionario, la PERITO indica que compartir las BD de IC entre las SIC no es una práctica reconocida o común a nivel internacional y que se justificaría si los USUARIOS no pudieran afiliarse a varias SIC. Adicionalmente, refiere algunas las consecuencias positivas y negativas del intercambio de IC.

Dichas manifestaciones no se relacionan con la imputación del DPR en contra de DUN, ni modifican el análisis de esta. En el presente caso, no se busca analizar cuál sería la mejor regulación para el funcionamiento del sistema de IC, sino determinar si: (i) DUN tiene PS en el MR en el cual cometió la conducta; (ii) la conducta de DUN actualiza la fracción V del artículo 56 de la LFCE; y (iii) la conducta de DUN tuvo por objeto o efecto impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Con independencia de lo anterior, el argumento de la PERITO es incompleto, pues no explica cómo es que las características de los mercados de información crediticia en los EU u otros países resultan aplicables en nuestro país dadas las características del mercado en México y la regulación vigente.

Asimismo, la PERITO se equivoca al señalar que la libertad para los USUARIOS de elegir la SIC a la cual quieran afiliarse elimina la necesidad de obligaciones de compartir la información, pues derivado de la existencia de efectos de red en favor de la SIC más grande, la ausencia de obligaciones de compartir, aun en presencia de libertad para elegir la SIC asociada, generaría que los USUARIOS afiliados a la SIC más pequeña no tengan incentivos a proveer información de calidad, se cambien a la SIC más grande y fomenten la concentración del mercado.

Con relación a la respuesta de la pregunta "8" de la adición al cuestionario, la PERITO insiste en señalar que no existe el MR DE PM e indica que no se comparte la BPD entre DUN y CC, porque el intercambio implicaría una violación a las autorizaciones legales de DUN y CC, aunado a que en caso de que DUN recibiera la BPD de CC, tendría registros que no podría utilizar y por los que tendría que pagar.

En primer lugar, se indica que la PERITO invoca defensas argumentadas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN que no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o conocimientos técnicos y que la PERITO no está en posibilidad de afirmar (la imposibilidad de DUN para intercambiar la BPD y la no sanción por parte de la CNBV). En este sentido, dichos señalamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son contrarios a la naturaleza de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la COFECE respecto de cuestiones técnicas o científicas.

Con independencia de lo anterior, se remite a los apartados "*Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC*" y "*No resultó intrascendente el que mediara consentimiento entre DUN y CC para no intercambiar la BPD de PM, señalado en la comparecencia de MAGR*" de esta resolución, en donde se explica que DUN no logra acreditar la imposibilidad de CC para



distinguir entre PF y PFAE y que incluso de los elementos que obran en el EXPEDIENTE se advierten diversos indicios de los que se desprende que CC sí puede realizar dicha distinción.

De esta manera, no existen elementos que permitan presumir que DUN, en caso de haber intercambiado su BPD, hubiera violado su autorización o hubiera pagado por registros que no hubiera podido utilizar.

Por lo que se refiere a la respuesta de la pregunta "9" de la adición al cuestionario, la PERITO indica que la SIC de menor escala, CC, no se encuentra en desventaja por tener que compartir la IC de manera puntual con respecto a una situación en la que se intercambiara la BPD, derivado de que la contraprestación de los HITS causados fue muy similar para las dos SIC (según la PERITO, de las consultas realizadas por DUN a CC [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] - resultó en HIT y de las consultas realizadas por CC a DUN [REDACTED] B [REDACTED] resultó en HIT). Asimismo, indica que el intercambio de la BPD no necesariamente reduce de forma significativa los costos, lo que se ve en el segmento de PF.

Al respecto, al calcular el porcentaje de HITS con la información que obra en el EXPEDIENTE y que fue proporcionada por DUN, esta autoridad difiere de los porcentajes señalados por la PERITO. En este sentido, de agosto de dos mil trece a abril de dos mil quince, el [REDACTED] ** [REDACTED] de las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un HIT, mientras en ese mismo periodo, el [REDACTED] ** [REDACTED] de las consultas realizadas por CC a DUN resultaron en un HIT.¹¹⁶⁸

Como se advierte, los porcentajes no son similares y CC resiente en mayor proporción la falta de intercambio de la BPD por el aumento en el número de HITS, lo cual incluso fue reconocido por DUN en la CONTESTACIÓN DUN.

Ahora bien, incluso con las cifras proporcionadas por la PERITO se advierte una diferencia cercana al [REDACTED] ** entre el número de veces que los USUARIOS de CC enfrenta el costo de HIT, siendo que la PERITO no logra justificar que dicha diferencia no ponga en desventaja a CC al afectar los incentivos de los USUARIOS para consumir sus productos.

Si bien la magnitud en la que el intercambio de la BPD reduce los costos de HIT depende de cada caso, en el segmento de PM, DUN indica que el no intercambio de la BPD incrementó en [REDACTED] B las posibilidades de los USUARIOS de CC de pagar un HIT.

La PERITO refiere que en el segmento de PF, en el cual sí se intercambia la BPD, las consultas entre las dos SIC resultaron en HIT en más del [REDACTED] ** de las veces. No obstante, la PERITO omite considerar que en el segmento de PF, las BD de CC y TUM son mucho más homogéneas en cuanto a su tamaño y que las PF podrían tener un comportamiento crediticio distinto (es decir, tener múltiples créditos o facturas con diversos USUARIOS afiliados a una u otra SIC). En este sentido, la PERITO no analiza si las condiciones en ambos segmentos

Eliminado: cuarenta y tres palabras.

¹¹⁶⁸ A mayor abundamiento véase la prueba 35 del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.



50181

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

permiten concluir que el intercambio de la BPD en el segmento de PM no reduciría significativamente los costos.

Por último, con relación a la manifestación de la PERITO relativa a que el intercambio de la BPD, pondría en desventaja a DUN pues estaría pagando registros de PF que no le es posible utilizar, como se indicó, de conformidad con los elementos analizados en la presente resolución, no se advierte una imposibilidad para que CC le proporcione a DUN únicamente los registros de PM y PFAE.

Por lo que se refiere a la respuesta de la pregunta "10" de la adición al cuestionario, la PERITO señala que la pregunta que se contesta no versa sobre cuestiones de economía, sino sobre cuestiones contables; no obstante, refiere que la calidad de la IC es clave para el buen funcionamiento del sistema, ya que la poca calidad de la IC de los RC puede llevar al otorgamiento de créditos injustificados, tasas de interés altas y disminución de los créditos otorgados; así como que disminuiría el valor de las instituciones bancarias.

Según la PERITO, la LRSIC resuelve ese problema al asegurar que los RC sean confiables, completos y actualizados.

Lo señalado por la PERITO refuerza la trascendencia para los USUARIOS de contar con información completa, lo que implica que el hecho de que DUN no hubiera proporcionado a CC la totalidad de la IC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, limita la capacidad de CC para atraer a nuevos USUARIOS que lo provean de IC y que consuman sus productos.

Por su parte, respecto a la respuesta a la pregunta "11" de la adición al cuestionario, la PERITO señala que el mercado de IC presenta asimetrías de información porque las instituciones otorgantes de créditos no conocen la historia y características de todos los CLIENTES que llegan a solicitar un crédito, por lo que la coordinación entre USUARIOS y SIC y la obligación de consultar toda la IC disponible en el mercado alivia este problema.

Además, el PERITO DUN señala que la regulación de la LRSIC permite que un USUARIO pueda tener información confiable, completa y actualizada de un CLIENTE, con independencia de la SIC que consulte.

Así, la PERITO reconoce que el intercambio puntual de la totalidad de la IC es importante para el mercado y para los USUARIOS, ya que permite tener tasas de interés activas más bajas y por ende presenciar la expansión de créditos otorgados.

En ese sentido, si bien es cierto que la regulación contenida en la LRSIC tiene como objetivo evitar problemas asociados a la asimetría de la IC de PM, también lo es que eso no ha impedido que DUN realice una negativa de trato que tiene como consecuencia precisamente generar asimetrías en la IC de PM que recibe CC en su calidad de SIC, lo que, según el dicho de la propia PERITO, puede afectar al mercado y a los USUARIOS.

Finalmente, en la respuesta a la pregunta "12" de la adición al cuestionario, la PERITO reitera diversos señalamientos realizados previamente en su pericial y que, por lo tanto, ya fueron analizados por esta autoridad.

Por las razones anteriormente señaladas, el contenido de la PERICIAL DUN: (i) no acredita la pretensión probatoria de DUN; o (ii) en su caso, sustenta señalamientos reconocidos por el propio DPR y, en este sentido, no lo combate.

3. **Documental privada** consistente en el DICTAMEN DUN,¹¹⁶⁹ la cual fue ofrecida por DUN en el numeral 1 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 2" de dicho escrito. DUN relacionó dicha prueba con el contenido de sus manifestaciones contenidas en el capítulo IV de la CONTESTACIÓN DUN y pretende demostrar lo siguiente:

"i) Que el concepto de mercado involucra bienes o servicios que constituyan parte de la cartera de productos ofrecidos por uno o más agentes económicos. Por exclusión, todas aquellas actividades que sean realizadas para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio se encuentran fuera del concepto de mercado.

Lo anterior sirve de sustento económico para afirmar:

a. que la recopilación y procesamiento de [IC] no constituye un mercado – y por vía de consecuencia tampoco un [MR]– sino actividades que se realizan como parte de la cadena productiva, y

b. que la provisión de [IC] a las SICs no puede definirse como un [MR], ya que constituye una mera obligación prevista en la LRSIC por la que no se puede cobrar.

ii) Que no se puede tener [PS] en un [MR] inexistente, al ser el [PS] una cuestión inherente al concepto de [MR].

Con estrecha vinculación a lo anterior, que el análisis de [PS] debe de realizarse en el [MR] que se defina, al ser éste último un concepto inherente al primero.

iii) Las características de los efectos de red y que el que exista una obligación normativa (de compartición) genera que todo un sector funcione como una única red, en la que todos los oferentes se beneficien de los efectos de red.

Lo anterior sirve de sustento económico para afirmar que:


b. Los efectos de red presentados en el sector de [IC] no generan incentivos para que los Usuarios actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, en virtud de que la afiliación no genera costos para los Usuarios. En todo caso, el que los Usuarios se afilien a una SIC – que es la más grande– se debe a factores distintos a los efectos red, como puede ser la calidad de los servicios.

c. Al existir una obligación legal para incorporar la información de todas las SICs, con una tarifa máxima y preestablecida, los efectos de red se conservan, puesto que en términos prácticos el sector funciona como única red.

iv) Que los mercados que presentan economías de escala y efectos de red deben de contar con altos niveles de concentración para aprovechar dichas características.

v) Que el crecimiento en participaciones de un competidor implica una presión competitiva de la que se desprende la falta de [PS].

vi) Que para determinar la existencia de [PS] se debe de analizar la evolución de participaciones de mercado.


¹¹⁶⁹ Folios 34590 a 34605.

vii) *Que, si bien una alta participación de mercado es un indicio de [PS], en mercados que presentan economías de escala y efectos de red esto no es suficiente para determinar que existe dicho poder.*

viii) *Que no se puede restringir el abasto sin fijar el precio y viceversa.*

ix) *Que la inversión inicial es una barrera a la entrada si los costos hundidos de la inversión limitan la entrada de nuevos competidores.*

x) *Que la cuota de mercado que se debe cumplir para alcanzar la rentabilidad mínima no es una barrera a la entrada.*

xi) *Que el posicionamiento de un producto en el mercado no puede ser comparado directamente con el nivel de participación de mercado.*

xii) *El concepto de free-rider y como éste genera efectos anticompetitivos al desincentivar la inversión (asumir un riesgo) en tanto que (a) ello no le generará a un agente una ventana competitiva sobre competidor; y/o (b) genera que un agente prefiera dejar de invertir y aprovechar el esfuerzo de su competidor. El sustento económico de la doctrina del free-rider guarda estrecha vinculación con*

c. la interpretación de la figura de negativa de trato contenida en el sub-apartado 3.3.1.;

d. las consideraciones en torno a la teoría del objeto y efecto de la conducta imputada y como ésta genera un efecto de free-riding; y

e. como lejos de desincentivar la innovación en los productos de [IC], el obligar a compartir la BPD de PM desincentiva la innovación, por el citado problema de free-rider.

xiii) *Una negativa de trato puede tener como ganancia en eficiencia el evitar el efecto de free-rider que resulta anticompetitivo al desincentivar la inversión”.*¹¹⁷⁰

Por su parte, en la VISTA DUN, la AI señaló lo siguiente:

*“[...] esta [AI], considera que, en primer lugar, el [DICTAMEN DUN] resulta irrelevante para el presente procedimiento, pues se trata de un documento privado que no es idóneo para efectos de la pretensión probatoria de DUN. En efecto, conforme al artículo 203, párrafo segundo, del [CFPC], un documento privado, como el [DICTAMEN DUN], sólo hace fe de que se realizaron declaraciones de verdad, pero no tiene el alcance de la veracidad de los hechos declarados.”*¹¹⁷¹

Debe tomarse en cuenta que, al ser un documento privado proveniente de un tercero, la simple objeción de una de las partes sobre la veracidad de su contenido, con base en el numeral 203 del CFPC, es suficiente para que la existencia de las declaraciones de verdad contenidas en el [DICTAMEN DUN] carezcan de alcance probatorio alguno y, DUN deba adminicular otras pruebas que den validez a la existencia de éstas. Esta situación que no ocurrió, pues dentro de los medios de convicción aportados por DUN no se encuentra alguno que refuerce la existencia o

¹¹⁷⁰ Folios 34543 a 34545.

¹¹⁷¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: “En este sentido, destacan diversas aseveraciones del [DICTAMEN DUN] que, al presentarse en un documento privado, no cumplen con lo necesario para ser tomados en cuenta como si los hubiera presentado un experto, [...]”.

validez de dichas manifestaciones. Lo anterior se encuentra respaldado por la jurisprudencia emitida por la Primera Sala.¹¹⁷²

Así, resulta inconcuso que el [DICTAMEN DUN], al no poder acreditar la veracidad de los hechos declarados ni ser suficiente para comprobar la existencia de las declaraciones de verdad contenidas, resulta una prueba irrelevante para el presente procedimiento y, a juicio de [AI], esta no debería considerarse.¹¹⁷³

Adicionalmente, no pasa desapercibido para la [AI] que DUN presenta la 'Pericial en Economía [...]'. Así, la [PERICIAL DUN] y el [DICTAMEN DUN] tienen la misma pretensión probatoria, [...]

Con base en lo anterior, la [AI] reitera el carácter de irrelevante del [DICTAMEN DUN], pues además de lo expresado, resultaría una prueba ociosa, ya que existe una probanza que podría resultar más idónea -la [PERICIAL DUN]- para que se haga el estudio y valoración de la pretensión probatoria del imputado.

Con independencia de lo anterior, en el [DICTAMEN DUN] se señala que la regulación del mercado de [IC] desincentiva a las SIC a invertir e innovar dado que mientras no exista una tarifa de intercambio se incurre en el problema de free-riding. Ello con base en los siguientes argumentos:¹¹⁷⁴

La regulación de intercambio de información entre SIC establecida en el artículo 36 de la LRSIC:

'(...) obliga a las SIC a proporcionar su [BPD] a las SIC que lo soliciten. Lo anterior desincentiva a la SIC con mayor [BD] a invertir e innovar, debido a que, por ley, tendrá que compartir uno de sus insumos principales para la elaboración de [RC] y, por lo tanto, tendrá que compartir los frutos de su inversión habiendo incurrido en el costo de forma individual.'

En el artículo 36 bis de la LRSIC, las SIC:

'(...) tienen que compartir su información para incluir en los [RCI] tanto la información contenida en sus propias [BD] como la contenida en las del resto (...) desincentiva a la SIC entrante a invertir, debido a que, mientras la tarifa de intercambio no sea lo suficientemente alta, dicha SIC podrá mantener vendiendo [RC] tan completos como lo podría hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de inversión.

(...) al obligar a compartir la información de las [BD] entre SIC, sin que exista una tarifa de intercambio que incentive a ambas SIC a invertir, se incurre en un problema de free-riding que genera ineficiencias de innovación, calidad y subproducción.'

Las consideraciones de la [AI] sobre los argumentos expuestos por DUN, son las siguientes:

¹¹⁷² La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECCIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL). [...]'. Jurisprudencia 1a/J. 17/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VII, abril de 2012, tomo I".

¹¹⁷³ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO. [...]'. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-I, Julio-Diciembre de 1989, página 421. [r: 227289]".

¹¹⁷⁴ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Página 13 y 14 del [DICTAMEN DUN]".

En primer lugar, la presencia de free-rider implica la existencia de un agente económico que 'se beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o riesgos'¹¹⁷⁵ y 'trata de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él'.¹¹⁷⁶

Al respecto, tanto en el artículo 36¹¹⁷⁷ como en el artículo 36 bis¹¹⁷⁸ de la LRSIC se establece que las SIC deberán acordar una tarifa por el intercambio de información que será autorizada por la CNBV, lo cual supone que el intercambio de información entre SIC sí implica 'compartir los costos o riesgos' y pagos por el intercambio de información.

En segundo lugar, entendido el problema de free-riding como aquel en el que [CC] pudiera estar aprovechando de las inversiones o los recursos de DUN y por los que [CC] no estuviera pagando, se tiene que el [DICTAMEN DUN] no señala la forma en que esto podría estar ocurriendo porque no precisa las inversiones o los recursos propios de los que se estaría obteniendo una ventaja. Así, el [DICTAMEN DUN] no presenta evidencia de que DUN cuente con empleados diferenciados de los de su competidor y altamente calificados, haber realizado inversión en publicidad o en el mantenimiento de su [BD], o cualquier otro elemento del que [CC] estuviera obteniendo ventaja sin pagar por ello.

Asimismo, [...] ya han sido reproducidos los argumentos y que en obvio de repeticiones innecesarias se solicita se tenga por reproducida como si a la letra se insertase.

Finalmente, esta [AI] no está facultada para pronunciarse respecto del nivel de la tarifa de intercambio de información de las SIC, en virtud de que es acordada entre las SIC y es autorizada por la CNBV".¹¹⁷⁹

Al respecto, la AI señala, en resumen, que las pruebas que el DICTAMEN DUN y la PERICIAL DUN tienen la misma pretensión probatoria, por lo que sería ocioso analizar el DICTAMEN DUN cuando la PERICIAL DUN podría resultar más idónea.

No obstante, esta autoridad considera que la idoneidad de las pruebas ofrecidas por DUN depende de los hechos que dicho agente económico pretende demostrar y del análisis concreto

¹¹⁷⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Página 111 de la [CONTESTACIÓN DUN]. ----- 'En términos generales, se llama free-rider al agente que se beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o riesgos. Definición contenida en el glosario de términos estadísticos de la OCDE, disponible en la siguiente liga: <https://statsecd.org/glossary/detail.asp?D=3222>".

¹¹⁷⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Página 13 del [DICTAMEN DUN]".

¹¹⁷⁷ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Artículo 36. Las Sociedades que por primera vez proporcionen su [BPD] a otras Sociedades deberán transmitírselas en su totalidad, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que éstas se lo soliciten. ----- (...) ----- Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información a que se refiere este artículo. Los acuerdos respectivos deberán presentarse a la Comisión para su autorización, al igual que sus modificaciones. ----- (...)".

¹¹⁷⁸ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Artículo 36 Bis. ----- (...) ----- Las tarifas que las Sociedades deberán ofrecer a sus Usuarios por los [RC] a que se refiere este artículo, serán autorizadas por la Comisión. A la tarifa autorizada, las Sociedades, de manera conjunta, podrán aplicar descuentos (...) ----- (...) ----- En caso de que las Sociedades no hayan determinado la tarifa aplicable a los [RC] a que se refiere este artículo, la Comisión podrá requerirles determinar su precio en un plazo no mayor a quince días. De no hacerlo, será la propia Comisión la que fije dicha tarifa dando publicidad a la resolución correspondiente".

¹¹⁷⁹ Páginas 130 a 136 de la VISTA DUN.

de las pruebas ofrecidas, pues en este caso los medios de prueba referidos son diferentes y se rigen por reglas procesales y de valoración que son diferentes.¹¹⁸⁰

Asimismo, en la VISTA DUN, la AI señala que el DICTAMEN DUN no es idóneo para la pretensión probatoria de DUN pues no tiene el alcance de probar la veracidad de los hechos declarados. Asimismo, objeta el DICTAMEN DUN e indica que en virtud de dicha objeción la existencia de las declaraciones de verdad carece de alcance probatorio alguno y DUN debe adminicular el Dictamen DUN con otros elementos de convicción, sin que haya aportado alguno que refuerce la validez de las manifestaciones.

En este sentido, se indica que la prueba ofrecida tiene el valor probatorio que la normativa otorga a las documentales privadas por lo que es susceptible de probar plenamente contra DUN, pero no en su beneficio. De esta manera, dicha prueba no es idónea para acreditar la pretensión probatoria de DUN.

¹¹⁸⁰ Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis: (I) **"FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR.** La doctrina distingue entre fuentes de prueba y medios de prueba; las primeras, existen antes y con independencia del proceso, los segundos surgen en el proceso y corresponden con lo que ha de valorar el juez para la resolución del juicio. Claramente, las fuentes de prueba pertenecen a las partes, sólo ellas saben de su existencia, son anteriores e independientes del proceso porque, por regla general, a éste se llevan afirmaciones o enunciados sobre hechos producidos con anterioridad a los escritos donde se narran (demanda y contestación) y sólo puede hablarse de confesión, testimonios, etcétera, si existe un proceso, de forma que si éste no surge, existirán simplemente personas que tienen conocimiento de determinados hechos, ya sea por ser protagonistas o percatarse de lo ocurrido, pero no existiría razón alguna para atribuirles la calidad de partes, ni para dar a sus conocimientos la calidad de confesión o de testimonios. Por su parte, los medios de prueba son las actuaciones judiciales a través de las cuales las fuentes de prueba se incorporan al proceso, y cuando ello ocurre, dejan de pertenecer a las partes, pues se prueba para el proceso y, en virtud del principio de adquisición procesal, cualquiera de éstas, o incluso el juzgador, puede prevalerse de ellas, como lo establecen los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esto es, el conocimiento de las partes sobre los actos que dieron lugar al debate (fuentes de prueba) se incorporan al proceso mediante la confesión (medio de prueba); el conocimiento de los hechos litigiosos que personas ajenas al juicio pueden tener (fuente de prueba) se traen al juicio cuando declaran ante el juzgador con la calidad de testigos (medio de prueba); y las características de la cosa o un bien sujeto a controversia (fuente de prueba) se reciben en el proceso a través de la inspección judicial (medio de prueba). Ahora bien, los medios de prueba, por estar relacionados con actuaciones judiciales, pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio juzgador deben observar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. Por tanto, al ejercer su arbitrio judicial en la valoración de los medios de prueba, el juzgador debe atender a la forma en que éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la reglamentación, formas y formalismos previstos en la ley [énfasis añadido]". Registro: 2007985; [TA]; 10a. Época; Primera Sala; SJF; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág.: 718; y (II) **"PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR.** La doctrina establece que son hechos jurídicos: 1. Todo lo que represente una actividad humana; 2. Los fenómenos de la naturaleza; 3. Cualquier cosa u objeto material (haya o no intervenido el hombre en su creación); 4. Los seres vivos y 5. Los estados psíquicos o somáticos del hombre; circunstancias que, al dejar huella de su existencia en el mundo material, son susceptibles de demostrarse. Por su parte, las pruebas son los instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio. Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que por el solo hecho que a una probanza le asistiera pleno valor probatorio, ello releva al juzgador del análisis de su contenido para determinar si la misma tiene relación con los hechos respectivos, situación que sería contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las pruebas [énfasis añadido]". Registro: 170209; [TA]; 9a. Época; TCC; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág.: 2371.

No obstante, se indica que en el DICTAMEN DUN la PERITO se limita a señalar, en su mayoría, aspectos teóricos sin explicar cómo es que dichas teorías aplican al caso concreto y cómo es que permiten arribar a conclusiones distintas a las señaladas en el DPR.

Adicionalmente, refiere cuestiones que fueron analizadas al valorar la PERICIAL DUN o al analizar los argumentos de la CONTESTACIÓN DUN, por lo que se remite al análisis correspondiente para evitar repeticiones innecesarias.

No pasa desapercibido que, si bien el DICTAMEN DUN únicamente prueba plenamente en contra de DUN, diversas manifestaciones se relacionan con lo señalado por la PERITO en la PERICIAL DUN, por lo que de manera adminiculada podrían llegar a generar convicción. No obstante, como se indicó al analizar la PERICIAL DUN, con los señalamientos de la PERITO: (i) no se acredita la pretensión probatoria de DUN; o, (ii) se sustenta señalamientos reconocidos por el propio DPR y, en este sentido, no lo combate.

4. Documental pública consistente en el cotejo notarial del primer testimonio del instrumento notarial número ochenta y un mil novecientos uno, otorgada ante la fe del titular de la notaría número doscientos veintinueve de la Ciudad de México el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.¹¹⁸¹

Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 3 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 5" de dicho escrito. Con el citado medio de prueba, DUN pretende demostrar: "[...] la composición actual del Consejo de Administración de DUN, hecho que guarda relación con lo manifestado [...] en el subapartado 2.4 del presente escrito".¹¹⁸²

Al respecto, la prueba referida tiene el alcance de probar la composición del Consejo de Administración de DUN aprobada mediante asamblea de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete; no obstante, dicha prueba en nada desvirtúa la imputación de DUN contenida en el DPR.

En específico, DUN relaciona la documental pública con los hechos señalados en las páginas 37 a 57 de la CONTESTACIÓN DUN, en las que expresa el argumento relativo a que DUN no se encuentra integrado verticalmente. En este sentido, se remite a lo señalado en el apartado "B.4. DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume" de esta resolución para evitar repeticiones innecesarias.

5. Documental pública consistente en el primer testimonio del instrumento notarial número treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve, otorgado ante la fe del titular de la notaría número ciento setenta y uno de la Ciudad de México el quince de enero de dos mil dieciocho, en el cual se hizo constar una fe de hechos a solicitud de una persona física.¹¹⁸³

¹¹⁸¹ Folios 34614 a 34743. Dicho cotejo notarial fue elaborado por el titular de la notaría número ciento setenta y uno de la Ciudad de México el once de enero de dos mil dieciocho.

¹¹⁸² Folio 34548.

¹¹⁸³ Folios 34745 a 34864.

Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 4 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 6" de dicho escrito.

Con dicha prueba DUN pretende probar que: i) "las 'experiencias comerciales' (Verdadero Segmento CO) no constituyen parte de la BPD"; ii) "DUN, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios DUN[CC], sí entrega a [CC] los registros generados por Usuarios Comerciales"; y iii) "las 'experiencias comerciales' se refiere a facturas y no constituyen parte del [HC]", con lo cual, según DUN, se demuestra "[...] cómo la definición de Segmento CO DPR resulta incorrecta, siendo que las 'experiencias comerciales' no constituyen parte del [HC] y consecuentemente no forman parte de la BPD. En virtud de lo anterior, la probanza de marras acredita cómo DUN, al amparo del [CONTRATO DUN Y CC], no se encontró obligado a compartir el Verdadero Segmento CO con [CC]".¹¹⁸⁴

Por su parte, en la VISTA DUN, la AI señaló lo siguiente:

"[...] esta [AI] -a partir de un examen metódico de la prueba citada-, advierte que los hechos asentados bajo el apéndice 'A' son ilegibles, es decir, el proceso que se describe en la instrumental pública en comento, en los [RC] [...], no puede apreciarse en su totalidad, ya que las mismas carecen de la nitidez necesaria para poder ser estudiados con la debida precisión, y por ende, para su correcta valoración, por lo que se solicita no se le otorgue valor probatorio al resultar ininteligible."¹¹⁸⁵

Asimismo, la [AI] no pasa por alto, que los [RC] anteriormente citados y el 'tercer reporte' de 'TUM (como Cliente) expedido por DUN [...], en la que se muestran las 'experiencias comerciales', señalado por DUN en sus MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR, y que se encuentra inserto en el apéndice -de la documental citada-, contienen una leyenda en su parte inferior que a la letra dice; [REDACTED] B, "¹¹⁸⁶ frase que cobra sentido si se concatena con el artículo 34 de la LRSIC y que dispone:

'Artículo 34.- Los [RC] y los [RCE] no tendrán valor probatorio en juicio, y deberán contener una leyenda que así lo indique'. [Énfasis añadido]

En esa tesitura, aún en el supuesto hipotético que se le otorgara valor probatorio al instrumento público, los [RC] que vienen integrados dentro de esta fe de hechos, no pueden tener fuerza probatoria [...] la [AI] pide no se le otorgue valor probatorio a los [RC] insertos en la documental de marras.

[...] si bien este medio probatorio es un documento de naturaleza pública [...] consiste en una manifestación de particulares, es decir, la fe de hechos solamente asienta que se [REDACTED] B

¹¹⁸⁴ Folio 34551.

¹¹⁸⁵ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "COPIAS ILEGIBLES. IMPEDIMENTO DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA ESTUDIAR LOS PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS POR LA ACTORA CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR EL CONTENIDO DE ELLAS. Las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación se encuentran impedidas para resolver sobre los agravios que se enderezan a controvertir el estudio adecuado de los argumentos expuesto ante la autoridad demandada, si entre las constancias que obran en autos se encuentra la fotocopia de la resolución combatida, y ésta es ilegible, en tal extremo, debe estimarse que el actor no probó los presupuestos extremos de su acción y en consecuencia, la Sala responsable deberá reconocer la validez de la resolución reclamada." Tesis aislada I.4o.A.28 A, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995".

¹¹⁸⁶ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Información que obra en el anexo 6 de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR".

[REDACTED] B
[REDACTED] B
[REDACTED] 1187 en
consecuencia, el fedatario público certificó [REDACTED] B
[REDACTED] B en que aparecían
los sitios web al momento de levantar la instrumental pública en comento.

[...] la [AI] pide no se le otorgue el alcance y valor probatorio que pretende conferir DUN a la documental pública citada, en virtud de que la fe de hechos no describe el proceso de acceso a las diversas páginas web, y la forma de solicitud del [RC] a través de los sitios, o la dirección de las mismas, lo único que se limita asentar el fedatario es que un tercero [...] accedió a, supuestas, páginas web y se dio fe únicamente de las imágenes insertas en esta instrumental, las cuales fueron anexadas en la probanza de marras, por lo que el fedatario público nunca certifica la veracidad su contenido.

En esa tesitura, es menester resaltar lo que el artículo 202 de la norma adjetiva federal prescribe [...]

[...]

[...] los documentos públicos que tengan insertas manifestaciones de hechos de particulares, solo prueban que fueron realizadas ante una autoridad con fe pública, [...] solo puede otorgársele pleno valor probatorio en contra del agente económico imputado, mas no en lo que beneficie [...]

[...]

[...] DUN presenta una secuencia de números y letras, a los que denomina como cadena y que en palabras del agente consiste en una '(f)orma en la que se genera una consulta por parte de la SIC Originadora: consulta que se procesa por la SIC Complementaria para el envío de su respuesta, para que la SIC Complementaria la procese y pueda incluir la información en el reporte integrado' 1188.

Ahora bien, con esta prueba, DUN pretende reforzar los argumentos esgrimidos en las páginas 140 y 141 de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR, que a la letra dicen:

[...]

De lo anterior, se colige que la cadena de información consiste en datos que proceden de un documento 'electrónico', cuya información es generada o comunicada en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, sin embargo, con base en el artículo 210-A del CFPC, para valorar su fuerza probatoria, debe estimarse la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada.

En esa tesitura, esta [AI] objeta la cadena de información, en cuanto a su alcance, valor probatorio y fiabilidad, ya que al no haber sido presentada en los términos que prescribe el artículo 210-A del CFPC, su contenido no puede ser corroborado, y por ende no puede ser verificada su autenticidad [...]" 1189

Al respecto, contrario a lo señalado por la AI, esta autoridad advierte que el apéndice A del instrumento notarial es legible y por lo tanto puede estudiarse con la debida precisión. Asimismo, si bien el notario no describió el proceso de ingreso a las páginas de internet y

1187 La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Información que obra en la página 1 del Anexo 6 de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR".

1188 La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Página 141 de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR".

1189 Páginas 144 a 148 de la VISTA DUN.

solicitud de los RCE, si certificó las fotografías, de las cuales puede desprenderse dicho proceso.

De igual forma, lo señalado en el artículo 34 de la LRSIC no resta valor probatorio a la presente probanza, pues dicha disposición se refiere a que los RC no prueban respecto de la veracidad de la IC contenida en los mismos (por ejemplo, la existencia de los créditos que refiere); sin embargo, ello no implica que no tengan valor para probar que en ellos se refleja o no cierta IC.

Adicionalmente, en relación con lo señalado por la AI relativo a que por tratarse de manifestaciones de particulares sólo puede otorgársele valor probatorio en contra de DUN, se indica que en la fe de hechos el notario certificó el acceso a las páginas de internet de BC y CC, la solicitud de los RCE y los RCE obtenidos. En este sentido, con la fe de hechos se prueba que en efecto se realizaron las solicitudes de los RCE obteniéndose los resultados que se anexan al documento y que el contenido de las fotografías coincide con lo que se advertía de las páginas de internet y de los RCE. Es decir, la fe de hechos no se basa en manifestaciones de particulares.

Por último, la cadena de información al ser un elemento proporcionado por DUN que no cuenta con los elementos para considerarse fiable, únicamente es un indicio que debe administrarse con otros elementos de convicción; no obstante, puede probar en su contra.

Ahora bien, DUN indica que en dicha prueba consta:

"a. La tramitación de un [RCI] de TUM (como cliente) expedido por [CC] (número de consulta B en el que se muestran registros generados por Usuarios Comerciales que fueron compartidos por DUN para la generación de ese reporte con [CC], al amparo del artículo 36 bis de la LRSIC;

b. La tramitación de un [RC] de TUM (como Cliente) expedido por [CC] (número de consulta B en el que consta que no aparece un registro de un Usuario Comercial, mismo que sí aparece en el [RCI] expedido por [CC]. De lo anterior se desprende que dicho registro generado por un Usuario Comercial necesariamente se trata de uno compartido por DUN; y

c. la tramitación de un [RC] de TUM (como Cliente) expedido por DUN [...] en la que se muestran las 'experiencias comerciales' y un registro generado por un Usuario Comercial.

Debe de realizarse una aclaración sobre los [RC] de [CC] [...] ambos reportes contienen una leyenda que dice 'Este reporte no incluye créditos y consultas de otras SIC por su falta de respuesta'. Se aclara lo falso de dicha aseveración, que incluso, denota completa mala fe por parte de [CC]; que desde luego habrá de ser valorada para restarle valor probatorio al dicho de dicho agente durante la investigación.

Lo falso de dicha leyenda se desprende de tomar en consideración los siguiente:

- a. El [RC] de TUM generado por DUN contiene el B*
- b. El [RCI] de TUM generado por [CC] [...] también contiene el B y*
- c. El [RC] de TUM generado por [CC] [...] no contiene el B*

De lo anterior se colige que la única manera en la que [CC] se hizo del registro brindado por un Usuario Comercial, fue porque DUN se lo compartió [...] resulta del todo mal intencionada la

Eliminado: ocho palabras.

leyenda contenida por default en todos los [RC] que genera [CC], indistintamente si hay o no respuesta por parte de la SIC Complementaria.

Abona el anterior [sic], el hecho que en los registros de DUN para el día 15 de enero de 2018, consta que TUM realizó la siguiente consulta que consta en la siguiente cadena:

[...]

Esta consulta [sic] generó como respuesta de DUN como SIC Complementaria la siguiente respuesta en 0.4 segundos, conteniendo diversos registros entre los que se encuentra el [B]

[B]

[...]”.¹¹⁹⁰

Al respecto, de la prueba ofrecida por DUN se desprende que el quince de enero de dos mil dieciocho, el titular de la notaría número ciento setenta y uno de la Ciudad de México se constituyó en el domicilio de BC en donde una persona física le comentó que realizarían tres búsquedas en las páginas de Internet de “Buró de Crédito” y CC para obtener tres RCE que serían emitidos respecto de TUM en su calidad de CLIENTE. Asimismo, el notario público anexó, como parte de la fe de hechos, las fotografías de las que se advierte que, en efecto, la persona física ingresó a la página de BC y CC para obtener tres RCE, los cuales fueron emitidos respecto de TUM en su calidad de CLIENTE (uno de la página de BC y dos de la página de CC); así como el contenido de dichos reportes.

Tal como señala DUN, de los RCE solicitados por TUM a BC y CC se observa que: (i) el RCE emitido por DUN contiene un registro [B]; y (ii) dicho registro se refleja en el RCE emitido por CC con número de consulta [B], pero no en el RCE emitido por CC con número de consulta [B]. De acuerdo con la explicación dada por DUN, el primero de los RCE emitido por CC contiene la información proporcionada por DUN en términos del artículo 36 bis de la LRSIC. En este sentido, se puede presumir que el registro [B] fue proporcionado por DUN a CC como parte del intercambio de información en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.¹¹⁹¹

Ahora bien, la prueba ofrecida por DUN no tiene el alcance de probar que DUN sí entrega los registros generados por “Usuarios Comerciales” por las siguientes razones:

El registro [B] se encuentra dentro de la sección [B] del RCE emitido por CC y dentro de la sección [B] del RCE emitido por DUN. Es decir, no es un registro que se refleje en las secciones en las cuales DUN y CC reportan créditos comerciales.

Asimismo, al comparar el contenido del RCE emitido por DUN con el RCE emitido por CC con número de consulta [B] (el cual según DUN contiene la información enviada por DUN a CC) se obtiene que DUN reporta [B] en la sección de [B]

¹¹⁹⁰ Páginas 139 a 142 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹¹⁹¹ Véanse los folios 34837 a 34840, 34848 a 34850 y 34853.

B del RCE (correspondientes a B
B que no son reportados en el RCE emitido por CC.¹¹⁹²

Así, se advierte una discrepancia entre los créditos registrados en el rubro B
B del RCE emitido por DUN y los créditos registrados en el rubro de
B del RCE de CC, pues en el RCE de DUN
existen B que no se observan en el RCE de CC a pesar de que dicho reporte, según
el mismo DUN, se emitió previa compartición de IC por parte de DUN en términos del artículo
36 bis de la LRSIC.

Es decir, de la prueba señalada se desprende que al quince de enero de dos mil dieciocho un
notario constató que TUM solicitó un RCE de PM a CC (que según el mismo DUN, incluye
registros compartidos por DUN al amparo del artículo 36 bis de la LRSIC) en el cual no se
advierte la información que DUN tiene en su BD respecto de créditos comerciales.

Así, la prueba indicada en este numeral hace prueba plena respecto a los hechos legalmente
afirmados por el notario público y tiene el alcance de probar que, contrario a lo que DUN
pretende, al quince de enero de dos mil dieciocho, DUN no compartía la totalidad de la IC de
PM a CC, en específico, el SEGMENTO CO.

Adicionalmente, la prueba anteriormente referida no demuestra que: (i) las experiencias
comerciales no constituyen parte de la BPD; (ii) que DUN sí entrega los registros generados
por USUARIOS Comerciales (sino todo lo contrario); y (iii) que las "experiencias comerciales"
se refieren a facturas y no constituyen parte del HC.

Lo anterior ya que, con adición a lo señalado, del contenido de la fe de hechos no se desprende
ningún documento o manifestación que refiera si las experiencias comerciales constituyen o
no parte de la BPD ni si dicho concepto se refiere a facturas y constituye parte del HC.

Ahora bien, DUN señala que la leyenda de los RC de CC relativa a que "Este reporte no incluye
créditos y consultas de otras SIC por su falta de respuesta" es falso y denota la mala fe de CC que
deberá ser tomada en cuenta para restarle valor probatorio al dicho de CC durante la
investigación. Al respecto, si bien es cierto que existe evidencia de que DUN sí proporciona
información a CC, el intercambio no se realiza de manera completa, lo que genera que el
reporte de CC no incluya ciertos créditos por la falta de compartición de IC de DUN a CC.

En este sentido, no se advierte mala fe en el contenido del RC de CC y mucho menos dicha
manifestación sirve para restar valor probatorio alguno a lo señalado por CC durante la
investigación del EXPEDIENTE. Máxime cuando B durante la
investigación que no proporcionaba la información completa.

Por todo lo anterior, con la presente prueba no se acredita "[...] cómo la definición de Segmento
CO DPR resulta incorrecta, siendo que las 'experiencias comerciales' no constituyen parte del [HC]

¹¹⁹² Incluso, de la respuesta que consta en la cadena que DUN señala haber generado como SIC complementaria (véanse las
páginas 141 y 142 de la CONTESTACIÓN DUN) no se advierte que DUN haya enviado información sobre dichos registros a
CC.

y consecuentemente no forman parte de la BPD. En virtud de lo anterior, la probanza de marras acredita cómo DUN, al amparo del [CONTRATO DUN Y CC], no se encontró obligado a compartir el Verdadero Segmento CO con [CC]".¹¹⁹³ A mayor abundamiento se remite a lo señalado al analizar los argumentos "Correcta definición del SEGMENTO CO" y "Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

6. Copias simples o impresiones consistentes en los documentos identificados como: (i) "[...] la versión 1.0 del documento intitulado 'Esquema de Carga-Guía para la Transformación y Entrega de [BD] a [CC]' publicado por [CC] el 17 de octubre de 2005";¹¹⁹⁴ y (ii) "[...] la versión 4.0 del documento intitulado 'CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física' emitido el 9 de mayo de 2013 (previamente referido bajo el título de la versión 1.0 contenido en la documental que antecede)".¹¹⁹⁵

Al respecto, dichas pruebas fueron ofrecidas por DUN en los numerales 5 y 6 de la CONTESTACIÓN DUN y fueron proporcionadas como "Anexo 7" y "Anexo 8", respectivamente. Con las pruebas citadas, dicho agente económico pretende acreditar lo siguiente:

"[...] cómo la forma en que [CC] recibía la información de los Usuarios genera que no se pueda identificar entre PFs y PFs con actividad empresarial. Al acreditarse lo anterior, mi mandante demuestra cómo se encontraba impedido de recibir la BPD de [CC], en tanto que ésta incluiría información relativa a PF con o sin actividad empresarial [...] Al no poder recibir la información de [CC], se acredita como DUN se encontró imposibilitado a realizar el intercambio de la BPD".¹¹⁹⁶

Por su parte, en la VISTA DUN, esta autoridad observa que la AI únicamente se pronunció respecto a la prueba indicada en el inciso (ii) anteriormente citado. En particular, la AI señaló lo siguiente:

"[...] si bien esta prueba es un indicio de la existencia de su original, este no puede tenerse por exacto, ya que la copia fotostática pudo haber sido alterada o modificada al momento de su reproducción [...]"

"[...] no cumple con los requisitos que marca el numeral 204 del CFPC y, por ende, no se puede reputar su autoría a [CC] [...]"

"[...] DUN es omiso en administrar esta copia fotostática simple con el resto de los medios de prueba [...] carece de fuerza probatoria suficiente para demostrar la pretensión de la imputada."

"[...] suponiendo sin conceder que [CC] fuera el autor de las declaraciones de verdad contenidas en la copia simple de marras, resultaría innecesaria para el presente procedimiento, puesto que una copia fotostática simple no es idónea para efectos de la pretensión probatoria de DUN [...]"

Por otro lado, [...] no es idóneo para acreditar que DUN se encontró imposibilitado a realizar el intercambio de la BPD¹¹⁹⁷ [...] ya que esta COPIA no es un conjunto de reglas o lineamientos

¹¹⁹³ Folio 34551.

¹¹⁹⁴ Folios 34866 a 34899.

¹¹⁹⁵ Folios 34901 a 34947.

¹¹⁹⁶ Folios 34551 y 34552.

¹¹⁹⁷ Página 43 del ESCRITO DE MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR.

que DUN debía seguir para poder hacer efectivo el intercambio de BPD, pues de un análisis minucioso de la COPIA en cita, se puede determinar que es una guía que tiene por objeto orientar o ayudar a los usuarios a la entrega de información a [CC], más no una serie de disposiciones obligatorias que debía realizar DUN para el intercambio efectivo de BPD con [CC], tal y como se desprende de las secciones que describen el alcance y objetivo de dicha guía:

1. OBJETIVO

Describir como [sic] reportar la información contenida en la [BD] del Otorgante de personas Físicas, para ser entregada a [CC]

2. ALCANCE

El presente documento sirve como consulta tanto para el usuario como al área de Calidad. El esquema de carga está desarrollado en XML en el cual está diseñado para personas Físicas.

Se refuerza lo anterior, con los argumentos expuestos por esta [AI] [...]

En todo caso, esta COPIA solo puede tener valor probatorio pleno en contra de los intereses de DUN y no en lo que lo beneficie, como así lo establecen los artículos 203 y 210 del código adjetivo federal.

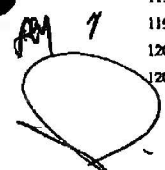
Al tenor de lo expuesto, esta [AI] objeta esta COPIA en cuanto su exactitud, idoneidad, alcance y valor probatorio por las razones expuestas en párrafos anteriores”.¹¹⁹⁸

Tal como señala la AI, las copias simples o impresiones referidas únicamente son un indicio de la existencia de su original y deben ser administradas con otros elementos para generar convicción (máxime al haber sido objetadas por la AI); no obstante, son susceptibles de probar plenamente en contra de los intereses de DUN al haber sido presentadas por dicho agente económico.

Ahora bien, de las copias simples o impresiones referidas se desprende que los esquemas de carga presentados por DUN están encaminadas a establecer una descripción que permita a los USUARIOS de CC identificar cómo deben reportar la información contenida en sus BD para ser entregada a CC;¹¹⁹⁹ sin embargo, no establece lineamientos específicos para la entrega de la BPD ni señala una imposibilidad de CC para distinguir entre PF y PFAE y, en consecuencia, para poder realizar el intercambio de la BPD.

Adicionalmente, “[...] la versión 1.0 del documento intitulado ‘Esquema de Carga-Guía para la Transformación y Entrega de [BD] a [CC]’ [...]”,¹²⁰⁰ es de dos mil cinco, siendo que en dicha fecha CC únicamente tenía autorización para participar en el mercado de PF, por lo que la posibilidad que tenía en esa fecha de separar la información de PF y PFAE resulta intrascendente.

Por su parte, “[...] la versión 4.0 del documento intitulado ‘CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física’ [...]”,¹²⁰¹ se refiere al esquema de carga de PF, razón por la cual no incluye información respecto de PFAE, ya que estas últimas forman parte del segmento de PM.

¹¹⁹⁸ Páginas 136 a 139 de la VISTA DUN.

¹¹⁹⁹ Folios 34868 y 34904.

¹²⁰⁰ Folios 34866 a 34899.

¹²⁰¹ Folios 34901 a 34947.

En este sentido, en el documento “CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física” presentado por DUN se señala lo siguiente:

“[...]

1.OBJETIVO

Describir como [sic] reportar la información contenida en la Base de Datos del Otorgante de personas Físicas, para ser entregada a [CC].

2.ALCANCE

El presente documento sirve como consulta tanto para el usuario como al área de Calidad. El esquema de carga esta desarrollado en XML el cual está diseñado para Personas Físicas.

[...]

Elemento Nombre					
Etiquetas/Inicio/Fin	Nombre del Elemento	Tipo	Longitud	Opcional o Requerido	Comentarios/Reglas de Validación
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<TipoPersona> </TipoPersona>	Tipo de Persona	C	2	Opcional	Valores posibles para elemento: PF= <u>Persona Física</u>

[...] [Énfasis añadido]”

Así, las pruebas ofrecidas por DUN no acreditan su pretensión probatoria y, al contrario, prueban en contra de DUN que CC tiene un esquema de cargo específico para PF (que no incluye a PFAE). Dicho esquema de carga, en conjunto con el esquema de carga de PM de CC (mismo que obra en el EXPEDIENTE) prueban que CC sí puede distinguir entre PF y PFAE. A mayor abundamiento, se remite al apartado “Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC” de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

7. Documental pública consistente en el cotejo notarial del oficio UBVA/DGABV/318/2017, emitido el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por la Directora General Adjunta de Banca y Valores perteneciente a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.¹²⁰²

Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 7 del apartado “6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS” de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como “Anexo 9” de dicho escrito.

Con dicha prueba, DUN pretende demostrar que: “[...] intentó modificar sus estatutos y su autorización para operar como una SIC, para ampliar su objeto y poder prestar servicios con relación a clientes PF y PM; es decir, no únicamente para prestarlo para PF con actividad empresarial y PM [...]”,¹²⁰³ lo cual se relaciona con lo señalado por DUN en el apartado “3.2.2 Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de [CC]” de la CONTESTACIÓN DUN, en particular respecto a lo señalado en las 100 y 101 de dicho escrito, el cual señala lo siguiente:

¹²⁰² Folios 34949 a 34952. Dicho cotejo notarial fue elaborado por el titular de la notaría número ciento setenta y uno de la Ciudad de México el once de enero de dos mil dieciocho.

¹²⁰³ Folio 34553.

"[...] el modificar la autorización de DUN para que la misma abarcara PF sin actividad empresarial no es cosa sencilla e implicaría que DUN acreditase diversas cuestiones ante la SHCP, muchas de ellas que traen aparejada una importante inversión de su parte. Sobre el particular, es de traerse a colación el hecho que el 21 de abril de 2017 DUN solicitó a la SHCP la aprobación de la modificación de sus estatutos justamente para que su objeto incluyera la prestación de servicios relativos al [HC] de PF. A dicha solicitud recayó un oficio de la SHCP en el que se indicó que el autorizar la modificación estatutaria implicaba modificar la autorización correspondiente, para lo cual DUN debía de proporcionar una gran cantidad de información, así como acreditar diversas cuestiones. En atención a la gran complejidad que involucra acreditar lo solicitado por la SHCP, DUN optó por dejar desierta su solicitud. Se exhibe como Anexo 9 copia certificada del Oficio número UBVA/DGABV/318/2017, de fecha 17 de mayo de 2017 emitido por la C. Directora General Adjunta de Banca y Valores perteneciente a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público".

Respecto a esta prueba, de la VISTA DUN se desprende lo siguiente:

"[...] la documental de marras tiene por objeto demostrar que existió una intención de modificar los estatutos sociales de DUN, empero, no explica la relación o coyuntura que existe con las imputaciones del DPR, [...] que no desvirtúa las imputaciones del DPR [...] no tiene relación con los hechos que son materia del presente procedimiento [...]"

"[...] la 'copia certificada' que exhibe DUN [...] no es expedida por la autoridad a la que se le atribuye la titularidad, y por ende, no cumple con los requisitos que marca el numeral 202 del CFPC, es decir, el fedatario público solo constata que el documento presentado ante el concuerda fielmente de donde fue obtenido, sin calificar su autenticidad, validez o licitud, en consecuencia de ello, la documental solo podría probar plenamente en contra del oferente, mas no en lo que lo beneficie.¹²⁰⁴ [...]".¹²⁰⁵

Al respecto, de conformidad con el artículo 160 de la Ley del Notariado del Distrito Federal¹²⁰⁶ (disposición aplicable al cotejo notarial que se analiza en este numeral):¹²⁰⁷ (i) el cotejo realizado acredita que la copia firmada por el notario es fiel reproducción del documento exhibido como original, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de este; y (ii) la copia cotejada tiene el mismo valor probatorio que el documento exhibido como original con el cual fue cotejado. En este sentido, toda vez que el documento exhibido al notario consiste en el oficio anteriormente referido, es posible afirmar que dicho documento tiene el valor probatorio que el CFPC le otorga a las **documentales públicas**.

¹²⁰⁴ La AI cita el criterio de rubro: "NOTARIOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR CONSTANCIAS JUDICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA)".

¹²⁰⁵ Página 149 de la VISTA DUN.

¹²⁰⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el veintiocho de marzo de dos mil, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el dieciocho de diciembre de dos mil catorce. Al respecto, el artículo 160 de la Ley del Notariado del Distrito Federal señala lo siguiente: "Artículo 160.- El cotejo acreditará que la copia que se firma por el notario es fiel reproducción del exhibido como original, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo. - - - - La copia cotejada tendrá el mismo valor probatorio que el documento exhibido como original con el cual fue cotejado, salvo que se trate de documento que lleve incorporado su derecho, supuesto en el cual sólo producirá el efecto de acreditar que es copia fiel de su original".

¹²⁰⁷ Actualmente, dicha disposición se prevé en el artículo 171 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Así, el oficio referido en este numeral, además de probar plenamente respecto a los hechos legalmente afirmados por la SHCP, permite concluir que: (i) el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, el representante legal de DUN presentó un escrito por medio del cual sometió a consideración de la SHCP el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de DUN,¹²⁰⁸ en la cual se acordó la modificación a la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de DUN para que pudiera prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de IC de PF y PM; (ii) la SHCP indicó que con la modificación de los estatutos sociales DUN pretendía ampliar su objeto social, lo cual implicaba una modificación a su autorización para organizarse y operar como una SIC, por lo que la SHCP debía verificar que dicho agente económico contaba con la infraestructura de procesos y sistemas necesarios para la prestación de un nuevo servicio, así como conocer las modificaciones conducentes al programa general de funcionamiento de DUN con motivo de la inclusión de las nuevas actividades; y (iii) derivado de lo anterior, la SHCP requirió a DUN varios documentos y aclaraciones.

En este sentido, con el oficio se acredita que DUN intentó modificar sus estatutos sociales para ampliar su objeto social y poder prestar servicios de PF y PM y la SHCP requirió más información para el análisis de dicha modificación; no obstante, no se acredita que intentó modificar su autorización.

Ahora bien, lo anterior en nada desvirtúa la imputación presuntiva contenida en el DPR, pues en éste no se imputó a DUN responsabilidad alguna por no modificar su objeto social o ampliar su autorización. Adicionalmente, DUN no acredita que era necesario que existiera una modificación a su objeto social o a la autorización de dicho agente económico para que DUN y CC pudieran realizar el intercambio de la BPD e incluso, como se señala en la presente resolución, existen elementos para presumir que CC sí puede distinguir entre la IC de PF y PFAE.

A mayor abundamiento, se remite al análisis realizado en el apartado "*Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC*" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

8. Copia simple o impresión del oficio número [REDACTED] emitido el [REDACTED] de manera conjunta por el Director General [REDACTED] pervisión de [REDACTED] gral de Riesgos C, el Director General Adjunto de Autorizaciones al Sistema Financiero A, la Directora General Adjunta de Supervisión de Administración Integral de Riesgos A, una Directora de Área; todos ellos adscritos a la Dirección General de Supervisión de Administración Integral de Riesgos o de la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, de la CNVB.¹²⁰⁹

¹²⁰⁸ Dicha acta fue celebrada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, y su protocolización se otorgó de conformidad con el instrumento notarial número ochenta y un mil novecientos uno de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del titular de la notaría número doscientos veintinueve de la Ciudad de México.

¹²⁰⁹ Folio 34954 a 34956.

Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 8 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 10" de dicho escrito. Con dicha prueba, DUN pretende demostrar que: "[...] la autorización emitida por SHCP respecto el [CONTRATO DUN Y CC]",¹²¹⁰ lo cual también se relaciona con lo señalado en la página 80 de la CONTESTACIÓN DUN, la cual señala lo siguiente:

"Es importante señalar que la CNBV aprobó los términos en los que fue celebrado el [CONTRATO DUN Y CC], según consta en el oficio [REDACTED] de fecha [REDACTED] emitido por la SHCP, que se exhibe como Anexo 10. Dicha cuestión cobra relevancia si se toma en cuenta que el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la información que se comparta para el reporte integrado sea completa (incluyendo el [HC] del cliente); cuestión que incluso la propia AI reconoce en la página 311 del DPR.¹²¹¹ Ahora bien, a sabiendas de que el [CONTRATO DUN Y CC] no incluyó la compartición de las 'experiencias comerciales' (Verdadero Segmento CO), la CNBV aun así aprobó su contenido".

Por su parte, en la VISTA DUN, la AI señaló lo siguiente:

"[...] la [AI] pide a esta COMISIÓN no le otorgue la calidad de documental privada a la probanza de marraz, toda vez que, al haber sido presentada en copia fotostática simple, solo otorga indicios de la existencia de una original más no de su contenido o veracidad, como así lo exigen los numerales 202, 203, 207 y 217 del CFPC.

[...]

"[...] DUN es omiso en exhibir medio de convicción que acredite haber solicitado a la autoridad correspondiente el documento o constancias donde obra dicho oficio, tampoco se desprende de las MANIFESTACIONES Y PRUEBAS AL DPR alguna declaración en el que refiera que esta probanza no se encuentra disponible y mucho menos identifica el archivo o lugar en que puede encontrarse, elementos que debe cumplir la prueba si el oferente quiere darle el alcance y valor probatorio a su pretensión, como así lo prescribe el artículo 87, fracción I, de las DISPOSICIONES.

"[...] la [AI] refuerza lo expuesto con [...] los argumentos esgrimidos en el apartado '3.1.1. Cuestión previa sobre la definición correcta del SEGMENTO CO' del presente pronunciamiento [...]

"[...] si esta COMISIÓN le otorgara la valoración de una documental de naturaleza privada, esta solo puede tener alcance pleno cuando pruebe en contra de los intereses de DUN y no en lo que lo beneficie, [...]

*En suma, esta [AI] objeta esta copia fotostática simple en cuanto su alcance y valor probatorio [...]"*¹²¹²

Ahora bien, tal como señala la AI, la prueba referida fue presentada en copia simple o impresión por lo que únicamente es un indicio que debe administrarse con otros elementos para generar convicción, máxime cuando fue objetada por la AI.

¹²¹⁰ Folio 34553.

¹²¹¹ La nota al pie respectiva señala lo siguiente: "Ello tal y como se desprende de la siguiente transcripción 'En este sentido, [REDACTED] sino que también, de conformidad con el artículo 36 bis de la LRSIC, las SIC están obligadas a proporcionar la información de manera oportuna, completa y sin distorsiones en relación a la que recibieron por parte de los USUARIOS'".

¹²¹² Páginas 139 y 140 de la VISTA DUN.



50157

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Con independencia de lo anterior, de dicho documento únicamente se desprende: (i) la solicitud de DUN a la CNVB para que le autorizara la tarifa que cobraría a los USUARIOS por los RC de PM a que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC, toda vez que había llegado a un acuerdo con CC; y (ii) que el treinta y uno de julio de dos mil trece, la CNBV indicó que "[...] con fundamento en el artículo 36 Bis, octavo párrafo de la [LRSIC], esta Comisión autoriza la tarifa de **B** que esa sociedad cobrará a sus Usuarios por los reportes de crédito consolidados [...]"¹²¹³.

Así, la CNBV únicamente autorizó la tarifa que DUN cobraría a los USUARIOS por los RCI de PM y en ningún momento autorizó o se pronunció sobre el contenido de las demás cláusulas del CONTRATO DUN Y CC, en específico, en ningún momento estimó que la información compartida para la elaboración del RCI se encontraba completa no obstante que el "Verdadero Segmento CO" no se compartía.

A mayor abundamiento, se remite a lo señalado en el apartado "Correcta definición del SEGMENTO CO" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

9. Copias simples o impresiones consistentes en: (i) "[...] un documento interno generado por el Buró de Crédito (i.e. TUM y DUN) en el que se muestra el número de [RC] emitidos para los años de 2007 a junio de 2017 según información del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y del cual, con base en información propia de TUM y DUN sobre los [RC] emitidos por dichas SICs, se calcula el número de [RC] emitidos por [CC]. Dicho documento fue utilizado para la elaboración de la gráfica 3, contenida en la página 126 del presente escrito";¹²¹⁴ y (ii) "[...] un documento interno generado por el Buró de Crédito (i.e. TUM y DUN) en el que se muestra la facturación de [CC] a TUM y DUN, respectivamente. Dicho documento fue utilizado para la elaboración de la gráfica 4, contenida en la página 127 del presente escrito",¹²¹⁵

Dichas pruebas fueron ofrecidas por DUN en los numerales 9 y 10 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONTESTACIÓN DUN, y fueron proporcionadas como "Anexo 11" y "Anexo 12" de dicho escrito. Con dichos medios de convicción, DUN pretende brindar soporte documental, respectivamente, a: (i) la gráfica identificada con el número 3 que el emplazado señaló en la página 127 de la CONTESTACIÓN DUN;¹²¹⁶ y (ii) la gráfica identificada con el número 4 que se encuentra en la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN de dicho agente económico.¹²¹⁷

Respecto de dichas pruebas, la AI señaló en la VISTA DUN que: (a) solicitaba que no se les otorgara la calidad de documental privada a dichas pruebas, toda vez que, al haber sido presentadas en copia fotostática simple, solo otorgan indicios de la existencia de una original

¹²¹³ Folio 34955.

¹²¹⁴ Folio 34958.

¹²¹⁵ Folio 34554.

¹²¹⁶ El oferente de la prueba indicó en su escrito que la gráfica identificada con el número 3 se encuentra contendida en la página 126 de la CONTESTACIÓN DUN, no obstante, la gráfica se encuentra contendida en la página 127 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹²¹⁷ El oferente de la prueba indicó en su escrito que la gráfica identificada con el número 4 se encuentra contendida en la página 127 de la CONTESTACIÓN DUN, no obstante, la gráfica se encuentra contendida en la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.

más no de su contenido; (b) solo pueden tener alcance pleno cuando prueben en contra de los intereses de DUN y no en lo que lo beneficie; (c) que no tienen relación con los hechos del presente procedimiento, en virtud de que no atacan la imputación del DPR ya que DUN confunde la conducta imputada en el DPR pues la AI concluyó que la conducta realizada fue “impedir sustancialmente el acceso al mercado relevante” y no “desplazar indebidamente a otros agentes del mercado”; y (c) objetaba dichas pruebas en cuanto a su exactitud, idoneidad, alcance y valor probatorio.

Ahora bien, al analizar la prueba presentada como “Anexo 11” a la luz de los argumentos vertidos por DUN en la CONTESTACIÓN DUN, se advierte que dicha prueba contiene unas tablas en las que se advierte información relativa al número de RC emitidos por CC, DUN y TUM; así como el número de RCI en los que cada SIC recibió una contraprestación por concepto de HIT en su calidad de SIC complementaria.

Por su parte, al analizar la prueba presentada como “Anexo 12” a la luz de los argumentos vertidos por DUN en la CONTESTACIÓN DUN, se advierte que dicha prueba contiene unas tablas en las que se advierte información relativa a la facturación de CC a TUM, de TUM a CC, de CC a DUN y de DUN a CC, por concepto de BPD (únicamente en el caso de TUM y CC) y RCI.

Tal como señala la AI, las pruebas referidas fueron presentadas en copias simples o impresiones por lo que únicamente son un indicio que debe administrarse con otros elementos para generar convicción, máxime cuando fueron objetadas por la AI.

Adicionalmente, dichas pruebas son materia del argumento analizado en el inciso “c. Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años” de esta resolución, por lo cual se remite a DUN a dicho apartado a fin de evitar repeticiones innecesarias.

10. Instrumental de actuaciones, presuncional e indiciaria las cuales fueron ofrecidas por DUN en los numerales 11 a 13 de la CONTESTACIÓN DUN. Al respecto, DUN señaló que dichas pruebas fueron ofrecidas en todo lo que beneficiara a sus intereses.¹²¹⁸

Dichas pruebas únicamente tienen el alcance de probar de manera adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las pruebas que ya fueron relacionadas en la presente resolución. Lo anterior toda vez que dichos medios de convicción no tienen entidad propia, sino que dependen de las demás pruebas que ya obran en el EXPEDIENTE. En ese tenor, como se advierte del análisis de los argumentos analizados en esta resolución y de las pruebas existentes en el EXPEDIENTE, estas últimas no benefician a DUN.

V. ALEGATOS

Como se estableció en el apartado de “III. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE” de la presente resolución, algunos de los argumentos señalados por TUM, SEPZ y MAGR resultaron fundados y, en su conjunto, suficientes para desvirtuar las conclusiones a las cuales arribó la AI en el DPR respecto de la comisión de la

¹²¹⁸ Folio 34554.

PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, en este sentido no se considera necesario el análisis de los alegatos presentados por BANORTE, BANCOMER, SANTANDER, SCOTIABANK, SEPZ, TUM y MAGR, pues esto resultaría ocioso ya que lo señalado no cambiaría las conclusiones antes apuntadas.¹²¹⁹

Asimismo, se advierte que BANAMEX, HSBC y TU LLC no presentaron alegatos, por lo que se les tuvo por precluido su derecho para formularlos.

V.1. Alegatos de DUN

Durante el procedimiento se citó a las partes a efecto de que presentaran sus alegatos. Al respecto, DUN presentó su escrito de alegatos el siete de enero de dos mil diecinueve, señalando, entre otras cuestiones, lo siguiente:

Los argumentos vertidos en la CONTESTACIÓN DUN resultan fundados y los hechos ahí contenidos fueron acreditados mediante las pruebas y constancias que obran en el EXPEDIENTE. Por último, las manifestaciones de la VISTA DUN resultan infundadas e insuficientes para desvirtuar lo manifestado en la CONTESTACIÓN DUN y probado durante el procedimiento.

Se manifiesta que la *litis* quedó delimitada por el DPR, sin que lo manifestado por la AI en la VISTA DUN pueda variar las imputaciones contenidas en el DPR, puesto que ello sería contrario al debido proceso y vulneraría mi derecho de audiencia.

A. MERCADO RELEVANTE

A.1. El MR DE PM en realidad no constituye un mercado, porque son actividades de la cadena productiva para la elaboración de productos de IC. La AI no pudo realizar un análisis de sustitución en el procesamiento y recopilación de IC.

Al respecto la AI señaló en la VISTA DUN que el DPR es un documento que debe estudiarse de manera integral y que dentro de la sección IV del DPR se hace referencia a actividades de recopilación y procesamiento IC.

Ciertamente el DPR es un documento que debe de estudiarse de manera integral; no obstante, a efecto de salvaguardar la debida defensa del probable responsable las imputaciones deben de ser realizadas con la mayor precisión posible. Así, si en un DPR se incluyen capítulos específicos en donde se hace un supuesto análisis de dos mercados relevantes distintos, en éste se debe de incluir un análisis del mercado correspondiente sin que sea válido referir a otras partes del DPR para tener por satisfecho el requisito en cuestión.

¹²¹⁹ En cuanto al análisis de los alegatos presentados por la AI en relación con la imputación contenida en el DPR que corresponde a la fracción X del artículo 56 de la LFCE, se observa que los mismos guardan relación con diversas pruebas que fueron desahogadas durante el PSFJ respecto de dicha imputación y se indica que, de conformidad con lo señalado en el apartado "III. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE" de la presente resolución no existen elementos suficientes en el EXPEDIENTE para sustentar la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de la comisión de la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

[Handwritten signature]

Por otra parte, el análisis de sustituibilidad para el MR lo realiza la AI respecto la provisión de IC, omitiéndolo respecto a las actividades de recopilación y procesamiento de IC.

La sección del DPR a la que se refiere la AI únicamente emplea el concepto de "*recopilación*" para referirse a la recopilación de la IC de los CLIENTES, y no la referente al intercambio de información entre SIC. Posteriormente, de manera sucinta refiere a la BPD cuando habla del HC, el cual ciertamente se refiere a información ya procesada. Ello confirma el diagrama contenido en la página 29 de la CONTESTACIÓN DUN, dentro del cual se desprende que la BPD se encuentra fuera del supuesto MR definido por la AI.

De igual manera, al referirse al "*procesamiento*" de IC en el DPR, nuevamente la AI se refiere al procesamiento de la información de los USUARIOS y no al procesamiento de la información de la otra SIC, lo que también confirma lo correcto del citado diagrama.

Asimismo, la AI manifestó en la VISTA DUN que dentro del apartado de MR de la negativa trato se retoman los conceptos de recopilación y procesamiento. Sin embargo, las referencias a las que alude la AI, interpretadas de manera integral con la sección IV DPR, claramente demuestran como la recopilación únicamente se refiere al insumo primario, es decir la recabada de los USUARIOS.

Por otro lado, en la VISTA DUN, la AI indicó que para producir un bien u ofrecer un servicio se requieren múltiples actividades que pueden ser realizadas de manera interna o contratando a un tercero, pero que lo relevante para un mercado es que exista un producto intercambiado por el cual se paga. No obstante, ello no desvirtúa lo señalado en la CONTESTACIÓN DUN consistente en que la recopilación y procesamiento no forman parte de la oferta de las SIC y que el supuesto "*precio*" pagado es en realidad un precio de transferencia por compartir su información a la otra SIC.

En la VISTA DUN, la AI recoge el contenido del DICTAMEN RG, en el que se reconoce que los USUARIOS interactúan como oferentes de la IC y lo señalado en la CONTESTACIÓN TUM respecto a la información que reciben las SIC de los USUARIOS, en la que se refiere al costo de la información proporcionada por los USUARIOS. Al respecto, las consideraciones de la AI se refieren a otro eslabón de la cadena productiva (recopilación de la información de los USUARIOS), por lo que no es relevante para el caso de la BPD, la cual no es ofrecida por las SIC dentro de su gama de productos.

En adición, la AI argumentó en la VISTA DUN que no desvirtuó el análisis de sustitución por el lado de la demanda y de la oferta, ni la existencia de restricciones regulatorias que impiden la sustitución. Lo anterior pese a que, mis argumentos fueron tendientes a evidenciar cómo (i) el supuesto MR, en realidad no puede ser considerado como tal; (ii) la conducta imputada no fue llevada a cabo en dicho

MR; y (iii) asumiendo la existencia del MR, las SIC participan como demandantes. Dichos argumentos desvirtúan de origen la definición de MR de PM.

Finalmente, en la VISTA DUN la AI manifestó que no expuse como la definición del MR me causa agravio, limitándome a señalar que el análisis de MR y el PS se encuentra viciado origen. Contrario a ello, señalé que la indebida definición de MR genera que todo el análisis de la PMR sea fruto de un acto viciado. Así, una indebida definición de MR trae aparejado una indebida determinación de PS, uno de los elementos *sine qua non* del tipo normativo. Adicionalmente señalé que la indebida determinación del MR trae aparejado la ilegalidad de la imputación, en tanto que el artículo 54 establece que la conducta imputada debe de ser realizada en el MR.

A.2. El MR definido por la AI es diverso a donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN.

Si la recopilación y el procesamiento de IC pudieran considerarse como un mercado, la supuesta negativa no se llevó a cabo en éste. Las dos negativas, no constituyen una negativa en recopilar y/o en procesar IC (basta con dar lectura al DPR para tener por acreditado dicho aserto); ello siendo relevante en tanto que el artículo 54, fracción II de la LFCE establece que para que se actualice una PMR el agente económico debe de contar con PS en el mercado en donde se realice la conducta, dicho argumento no requiere de ser probado puesto que se refiere a una cuestión de derecho relativa a los requisitos previstos en el artículo 54 de la LFCE.

Al respecto, en la VISTA DUN la AI señaló que realicé una separación artificial de las actividades de recopilación y procesamiento de IC, pues la BPD y el SEGMENTO CO están comprendidas dentro de la recopilación y procesamiento de la IC.

No obstante, las manifestaciones de la AI son gratuitas y contrarias a los conceptos de recopilación y procesamiento. Literalmente, un mercado de recopilación se refiere, a un servicio de recopilar; lo mismo ocurre respecto al procesamiento. La AI definió incorrectamente el MR y ahora en la VISTA DUN intenta cambiarlo a un "supuesto" mercado de provisión de IC.

Por otra parte, la propia sección IV del DPR valida el diagrama contenido en la página 29 de la CONTESTACIÓN DUN, en la que claramente se realiza una distinción entre la recopilación y procesamiento, y la generación de la BPD.

Finalmente, por lo que respecta al SEGMENTO CO, éste no, forma parte del HC.

A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes.

Al momento de analizar el MR la AI parece referirse a la provisión de IC, suponiendo que el MR lo constituya la provisión de IC, demostré que las SIC participan como demandantes y no como oferentes, siendo que la conducta

7
f AB

imputada se realiza considerando a las SIC desde el lado de la oferta y no de la demanda. Asimismo, señalé que, si bien las SIC pueden participar como oferentes, ello lo hacen de manera indirecta a través de la información que le proporcionan los USUARIOS, sin que estén en posibilidades de sustituir a estos últimos en la cadena productiva por ser éstos la fuente primaria de información. Por otra parte, la información que pueden proporcionar las SIC no es un sustituto de los USUARIOS. Dichos argumentos se refieren a cuestiones que se basan en las consideraciones del DPR y el análisis de la regulación sectorial, por lo que no requieren ser probadas.

En relación con lo anterior, la AI indicó en la VISTA DUN que, las SIC participan como demandantes de IC de PM y como oferentes indirectos de IC de PM en el MR y, en su carácter de oferente es que realicé la conducta, además, la tarifa de intercambio de información es acordada entre las SIC y autorizada por la CNBV.

Sin embargo, dado que existe una obligación de los USUARIOS de compartir su información a las SIC y que ni siquiera se efectúa un pago por el intercambio, el intercambio de IC entre los USUARIOS y las SIC no es un mercado. Asimismo, el intercambio de IC entre las SIC tampoco constituye un mercado, por lo que se niega que DUN pudiera realizar la conducta imputada en su "*carácter de oferente*" dentro de un mercado inexistente. La AI define un supuesto MR en el cual solo existen dos agentes económicos, oferentes y demandantes simultáneamente uno del otro, en el cual existe una tarifa fija (que sirve de contraprestación por el intercambio de información, pero no es un precio) y una obligación de realizar el intercambio de los bienes en cuestión.

Adicionalmente, las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información de registros de crédito, pues no cuentan con capacidad de alterar los precios acordados por el intercambio de información. En cambio, el mercado en el que participan las SIC es el de comercialización de los productos que resultan de recopilar y procesar la IC.

Conclusiones: las conclusiones en el apartado de MR han resultado fundadas y suficientes para que esa COFECE decrete el cierre del expediente sin imputarme responsabilidad.

B. PODER SUSTANCIAL

B.1. Resulta imposible determinar la existencia de PS en un mercado inexistente. Ha quedado acreditada la ilegalidad del DPR, al realizar una determinación de PS sobre un mercado inexistente. Abona a lo anterior lo señalado en la PERICIAL DUN.

B.2. La determinación de PS se realizó con base en un MR distinto (comercialización de productos de IC) al definido por la AI, lo que genera que dicho análisis sea incorrecto y por tanto ilegal. Abona a lo anterior la PERICIAL DUN. Los argumentos contenidos en el apartado correspondiente no se encuentran

sujetos a prueba puesto que únicamente demuestran el actuar incongruente de la AI.

En la VISTA DUN, la AI señaló que el análisis de PS se realiza en el MR DE PM pues las variables utilizadas para medir participaciones de mercado se relacionan con la dimensión de las BD de las SIC. Al respecto, el tamaño de las BD de las SIC no es indicativo de una participación de mercado respecto la recopilación y procesamiento de IC. Las actividades de recopilación y procesamiento son distintas a la provisión de IC.

B.3 Suponiendo que la definición del MR fuera la provisión de IC, implicaría la inexistencia de PS. Sería ilógico afirmar que en un mercado en el que ningún agente cuenta con la capacidad de determinar su precio y se encuentra legalmente obligado a proveer los bienes a su único demandante, existe un agente con PS. Abona a lo anterior la PERICIAL DUN.

En la VISTA DUN, la AI señaló que demostró mi PS en el MR DE PM en virtud de que, a pesar de estar obligado por ley a proporcionar mi BPD a CC, le restringí el abasto. Ello se desvirtúa en la CONTESTACIÓN DUN y los alegatos.

B.4 DUN no se encuentra integrado verticalmente como la AI incorrectamente asume. Resulta falso que exista una integración vertical entre los bancos y DUN. La AI no demostró la existencia de control de alguno de los accionistas de DUN sobre ésta, la que se desvirtuó con la estructura del capital social, integración del Consejo de Administración y de los estatutos sociales de DUN.

Al respecto, la AI señaló en la VISTA DUN que confundí el concepto de "integración vertical" con el de "grupo de interés económico" sustentando que es necesario que se actualice el control en la jurisprudencia I.40A. J/66, que en el apartado de "Características del mercado de información crediticia" del DPR se planteó que los accionistas mantenían un control conjunto sobre las SIC y que en la página 56 de la CONTESTACIÓN DUN reconozco la alineación de objetivos.

Aclaro que no cité la jurisprudencia referida y que dentro del apartado del DPR no se menciona un control conjunto siendo que la AI se encuentra impedida para ampliar el DPR por lo que dicha alusión no puede ser valorada. Asimismo, es falso que en la página 56 de la CONTESTACIÓN DUN haya manifestado que lo que genera que un agente se encuentre integrado verticalmente es cuando éste participa en distintas etapas de la cadena productiva, de manera que sus incentivos se encuentren alineados hacia un objetivo común, ya que en todo momento se menciona que ésta se da cuando existe control. La existencia de control para estar frente a una integración vertical es el argumento total contenido en la página.

La falta de control genera que los incentivos de los agentes aguas arriba y los del agente aguas abajo se encuentren desalineados. Es muy diferente que exista un incentivo para usar un servicio que va a representar un ingreso vía dividendo a

7
A

que exista una integración vertical y en el DPR la AI señaló la existencia de una integración vertical por lo que no es viable ahora modificar lo señalado. No debe de perderse de vista que los ingresos importantes de los bancos provienen de sus actividades de banca, siendo que los ingresos percibidos por concepto del BURÓ DE CRÉDITO **B**. En ese sentido, los bancos deciden emplear los servicios de la SIC que le preste un mejor servicio y no que le genere un ingreso.

Corroborar lo anterior, lo señalado en la CONTESTACIÓN TUM a la que me remito, de la que se desprende que el proveer servicios de IC no es una actividad **B** **B** para un banco, la creación del BURÓ DE CRÉDITO fue para mantener la integridad y calidad de la IC, generando beneficios en el otorgamiento de créditos.

Adicionalmente, la AI señaló en la VISTA DUN que la integración vertical le ha permitido a DUN asegurar el abasto de registros de PM de sus usuarios accionistas. No existe una integración vertical aunado a que las SIC no incurrir en costos por afiliarse a ambas SIC; si éstas deciden afiliarse solo a una SIC, es por factores independientes como la integridad, calidad y fidelidad de la IC.

De igual forma, la AI señaló en la VISTA DUN que la existencia de efectos de red genera incentivos para que el resto de los USUARIOS se afilien a la SIC que cuente con mayor dimensión, por lo que la integración vertical favorece que cuente con un mayor número de registros. No existe una integración vertical y la regulación del sector genera que el sector funcione como una misma red.

Por último, la AI señaló en la VISTA DUN que cuando el control mayoritario está concentrado en unos cuantos USUARIOS, se genera reticencia a compartir la información con la que cuentan con terceras personas (en este caso CC). La experiencia nacional demuestra todo lo contrario, tal y como se vio en el caso de investigación por concentración prohibida de TUM, que fue cerrada en el expediente IO-12-1999, como se estableció en la prueba pericial ofrecida por TUM.

2.5. Es natural que un mercado con economías de escala y red cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas características. Es incorrecto que los efectos de red favorezcan a que los USUARIOS se afilien a la SIC con una BD más grande porque no hay costos de afiliación y porque el RC debe incorporar la IC de todas las SIC con una tarifa máxima preestablecida.

Al respecto la AI estableció en la VISTA DUN que reconoció que el mercado de IC presenta economías de escala y red, y un alto grado de concentración, las cuales resultan en barreras a la entrada inherentes al mercado de IC. No obstante, obvia que estas características no son un indicio de ausencia de condiciones de competencia. Dado que la afiliación de un USUARIO a una SIC no le genera costos y pueden afiliarse a más de una, y que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar la información de todas las SIC existentes, los efectos de red se conservan para todos los competidores y no existen barreras a la entrada, pues el sector funciona como

Eliminado: cuatro palabras.

una única red, lo que implica que la decisión de un USUARIO sobre a qué SIC afiliarse, no se encuentra ligada con la cantidad o calidad de información que obtendrá en los RC que consulte, pues le bastará hacerlo a una sola SIC para obtener toda la información disponible en el mercado y depende de factores tales como el precio, la calidad del servicio o sus servicios complementarios.

2.6. Consideraciones en torno a la supuesta capacidad de DUN para restringir el abasto.

2.6.1. La AI es omisa en motivar su conclusión respecto que DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto. La AI señala que una alta participación de mercado no es concluyente para determinar la posibilidad de fijar el precio o restringir el abasto y posteriormente concluye con base en mi participación de mercado que cuento con la capacidad de restringir el abasto.

En el VISTA DUN, la AI señaló que además de la participación de mercado, consideró la presencia de economías de escala y barreras a la entrada y que dentro del capítulo XII del DPR realiza un análisis para arribar a su conclusión.

La AI únicamente refiere en el DPR que la presencia de economías de escala y barreras a la entrada hace más probable la que la elevada participación de mercado genere la posibilidad de fijar precios o nivel de abasto, es decir, no es concluyente en señalar como en la especie una alta participación de mercado genera que haya tenido la capacidad de restringir el abasto. La referencia al capítulo XI es genérica y éste no se refiere ningún otro elemento en el que descansa su conclusión fuera de la alta participación de mercado.

El DPR carece de fundamentación y motivación para acreditar cómo es que las economías de escala y la supuesta existencia de barreras a la entrada permiten que un agente económico pueda tener la posibilidad de fijar el precio o restringir el abasto con lo cual dicho argumento es gratuito. Ello redundaría en el absurdo de que cualquier mercado en el que existan economías de escala y barreras a la entrada implica un agente económico con poder sustancial.

2.6.2 De aplicar, *mutatis mutandi*, el criterio de la propia AI para concluir que TUM no cuenta con capacidad para restringir el abasto en el mercado de comercialización de RC de PF, se debió concluir que DUN tampoco cuenta con capacidad para restringir el abasto en el MR DE PM.

En el VISTA DUN, la AI señaló que no expliqué como la conclusión respecto a un MR puede aplicar, *mutatis mutandi* a otro. Sí lo explicamos.

Asimismo, en el VISTA DUN, la AI señaló que el hecho de que exista una obligación normativa no implica que de facto lo hagan. Dicha manifestación adiciona el contenido del DPR por lo que no puede tomarse en cuenta. Si dicha posibilidad existía de *facto*, lo debió de haber valorado tanto para el caso de TUM como de DUN.

2.6.3. La imposibilidad para fijar precios implica forzosamente la falta de capacidad de restringir el abasto, lo que fue demostrado en la PERICIAL DUN. Existe una relación biunívoca entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de restringir el abasto, debido a que para cada precio los consumidores elegirán una cantidad determinada y viceversa.

2.6.4. El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto. La AI incurre en errores metodológicos para medir las participaciones de mercado, lo que fue demostrado en la PERICIAL DUN. Además, el análisis no sustenta una capacidad para restringir el abasto al considerar la evolución en las participaciones de mercado de CC. Es natural que tenga una mayor participación que CC por el tiempo que llevó en el mercado. Analizando la evolución de las participaciones se desprende que CC ha tenido una entrada exitosa al mercado.

2.7 Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada.

2.7.1. La inversión inicial requerida no es prohibitiva para ser considerada como una barrera de entrada. En el VISTA DUN, la AI es omisa en realizar manifestación alguna respecto al error de considerar el capital social como una inversión adicional. Adicionalmente, no señala como llega a la supuesta suma de inversión inicial a la que se llegaría de seguir el dicho de DUN [REDACTED] B Finalmente, controvertí la inversión inicial necesaria señalada por la AI, al identificar el error de sumar el capital social a la inversión inicial.

2.7.2. La cuota de mercado que se debe cumplir para que una SIC cubra sus costos operativos no es una barrera a la entrada. El análisis de la AI en relación con la cuota requerida para alcanzar la rentabilidad mínima únicamente considera RC de PM; sin embargo, también se debieron haber incluido en el análisis otros productos comercializados por las SIC, como los RC de PF y los productos de valor agregado, debido a las economías de alcance que se generan. Además, no tiene sentido determinar una barrera a la entrada en función a la cuota mínima cuando el mercado está creciendo. Por otro lado, una SIC puede acceder a más información que la que integra su base de USUARIOS, por lo que esto tampoco se puede considerar como una barrera de entrada. El que exista evidencia de [REDACTED] B [REDACTED] B es evidencia de que se puede alcanzar la rentabilidad mínima.

2.7.3. Los efectos de red no generan un incentivo a afiliarse con la SIC con una BD con más registros puesto que no existen costos ni cuotas de afiliación, por lo que la diferencia en el número de afiliados puede ser atribuida a otras circunstancias.

La regulación obliga al intercambio de información entre las SIC para que el USUARIO pueda consultar un RC con información completa, independientemente de a qué SIC se afilie. Por esta razón, los incentivos de afiliarse a una u otra SIC

Eliminado: un renglón y diez palabras.

no depende del volumen de información de su BD. Además, si se consideran las consultas que resultaron en HIT entre las dos SIC, éstas fueron similares entre DUN y CC y, por consiguiente, no se presenta en desventaja una SIC de menor escala ante el intercambio de información puntual.

2.7.4. Posicionamiento de un producto no es sinónimo de alta participación en el mercado. La medición de las participaciones de mercado está acotada a la definición de dicho mercado, es decir, a los productos y o servicios que formen parte del MR. En cambio, el posicionamiento de un producto, que generalmente tiene más que ver con el posicionamiento de una marca, no está acotada necesariamente a una definición de mercado. Por ende, el posicionamiento de un producto no puede ser comparado directamente con el nivel de participación en un mercado, ya que el posicionamiento se puede dar dentro de los distintos nichos que pertenecen a un mismo mercado o a través de distintos mercados. Por consiguiente, la participación en el mercado no es condición suficiente para determinar que DUN tiene mejor posicionamiento de sus productos y, por ende, que constituye una barrera de entrada a competidores actuales y potenciales.

2.7.5. El análisis elaborado por la AI respecto a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM es infundado. Se evidenció la falta de sustento de la afirmación de la AI.

En la VISTA DUN, la AI señaló que me limité a señalar la alta calificación que recibe México sobre la profundidad de la IC sin desvirtuar que mi alta participación de mercado no se refleja en un mayor desarrollo en productos de valor agregado. Contrario a lo que señala la AI, sí mencioné que la profundidad IC se refiere a la calidad de la IC y las fuentes empleadas.

Además, se remite al diagrama presentado por TUM en el DICTAMEN RG, del cual se desprende la introducción de avances tecnológicos por parte de DUN en provisión de servicios y productos de IC.

3. CONDUCTA

3.1 Cuestión previa sobre la definición correcta del SEGMENTO CO.

El SEGMENTO CO no forma parte de la BPD, puesto que no forma parte del HC.

El Verdadero Segmento CO son las "experiencias comerciales"

B

B

Además,

incluye información de todos los USUARIOS, positiva y negativa a diferencia de la BPD. En momento alguno ha formado parte del HC y en consecuencia tampoco de la BPD de PM de DUN. La AI fue omisa en probar el por qué de la definición del SEGMENTO CO.

Explicué lo que se entiende por Verdadero Segmento CO. Se aclaró que las experiencias comerciales no constituyen operaciones crediticias, lo que se sustentó

Eliminado: diecisiete palabras.

en distintas disposiciones del sector financiero de las que se desprende que no existe siquiera una obligación para las ENTIDADES FINANCIERAS para proporcionar las "*experiencias comerciales*", por lo que sería ilógico que se computaran como parte de la BPD.

Lo anterior se refuerza con que: (i) El CONTRATO DUN y CC fue autorizado por la CNBV, a sabiendas de que no incluía la compartición de "*experiencias comerciales*"; y (ii) El ejercicio realizado ante un fedatario público sobre la tramitación de dos RC a través de CC, un reporte de crédito integrado y un reporte de crédito, ambos de TUM en su carácter de Cliente (PM). De dicho ejercicio también se desprende la mala fe de CC.

En el ejercicio, se usó a TUM como CLIENTE pues se tenía su autorización y fue posterior a la imputación al ser el único momento en que pudo realizar el ejercicio, por ello debe valorarse como el mejor medio probatorio ya que de lo contrario se impondría a DUN una carga probatoria excesiva.

La AI señala en la VISTA DUN que el SEGMENTO CO forma parte del RC en términos del CONTRATO DUN Y CC y del artículo 36 bis de la LRSIC. En dicho contrato se señaló que las experiencias comerciales no forman parte del HC, lo que se corrobora con la fe de hechos realizada, en la que obra el **B** y del que se desprende que sí comparto con CC los registros de Usuarios Comerciales. Lo que no comparte, son las experiencias comerciales, puesto que éstas no forman parte del HC. Igualmente, la obligación contenida en el artículo 36 Bis de la LRSIC se refiere a la información del HC, por lo que no incluye a las "*experiencias comerciales*".

La AI también señaló que resulta irrelevante que la CIRCULAR 17/2014 invocada por DUN contemple la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar las "*experiencias comerciales*", pues el SEGMENTO CO es el definido en el DPR y se refiere a lo reportado por los USUARIOS COMERCIALES. La CIRCULAR 17/2014 contempla la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar la IC, entendida ésta como la relativa a operaciones crediticias y no contempla la obligación de proporcionar las "*experiencias comerciales*". Por ende, no existe una obligación para las ENTIDADES FINANCIERAS proporcionar las "*experiencias comerciales*" y, por ende, sería ilógico que se computen dentro de la BPD o el HC.

3.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN actualizaran el supuesto de negativa de trato, debe distinguirse entre dos negativas distintas, y les resultaría aplicable la LEY ANTERIOR al ser de culminación instantánea.

En la VISTA DUN, la AI se refiere a una conducta continua. Se reitera que en el DPR se refiere a la existencia de acciones, por lo que resulta aplicable analizar la imputación bajo la figura de la conducta continuada y como tal, no se cumplieron con los elementos precisados en la CONTESTACIÓN DUN.

Eliminado: dos palabras.

Además, señala la AI en la VISTA DUN que la temporalidad de las conductas precisadas por DUN, con base en la LRSIC y el CCF no resulta aplicable toda vez que dichos ordenamientos no resultan aplicables al caso concreto. Los ordenamientos sí resultan aplicables en tanto que la obligación de intercambiar en la LRSIC se encuentra prevista justamente en el artículo 36 de la LRSIC y respecto el SEGMENTO CO usé las reglas generales del consentimiento, que resultan aplicables para suplir lo no previsto en el CONTRATO DUN Y CC.

La negativa de proporcionar la BPD de PM y el SEGMENTO CO constituyen una sola infracción, en virtud de la unidad de propósito, identidad de la lesión jurídica e identidad del sujeto pasivo de la conducta imputada.

3.3. Ni el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artículo 56, fracción V de la LFCE resultan aplicables para negativas por omisión.

Al respecto, la AI señaló la AI en la VISTA DUN que la ejecutoria de la acción de inconstitucional 4/2006. Se estima que lo único que el artículo 56, fracción V le permite determinar de manera inteligible al gobernado, es que no puede realizar una conducta positiva consistente en rehusarse a proporcionar. Por tanto, la disposición en cita no permite ser aplicada para conductas omisivas.

Resulta irrelevante que en el acto en el DPR se explique al imputado a qué se refiere el tipo normativo que supuestamente infringió, el argumento en cuestión versa sobre el contenido de la norma al momento de mi conducta.

También, la AI en la VISTA DUN estima el artículo 56, fracción V al referirse a "rehusarse" debe de ser interpretado en sentido amplio para incluir tanto acciones como omisiones, porque si no sería contrario al artículo 28 de la CPEUM. La AI realiza una interpretación extensiva del texto de la LFCE y por tanto es contrario al principio de tipicidad. Por lo que hace a su alusión al texto constitucional, no resulta aplicable al caso concreto.

3.4 Indebida valoración de los elementos probatorios y omisión de la AI para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar responsabilidades.

Sobre lo señalado en la CONTESTACIÓN DUN, la AI señala que confundió sus facultades. La AI fue omisa en emitir un pronunciamiento respecto de los cinco argumentos señalados en la CONTESTACIÓN DUN. El criterio judicial fue incluido únicamente como referencia que robustece lo señalado, respecto el deber de allegarse de mayores pruebas. El planteamiento toral expresado en el argumento 2), es que la función de la AI es esclarecer la verdad no la de imputar responsabilidad.

El realizar una imputación respecto un hecho del que no existe constancia física, le arroja dentro del procedimiento administrativo una carga de allegarse y aportar pruebas de descargo que resultan inexistentes, aunque la AI no es el órgano

resolutor, no obstante, como órgano imputador, con la imputación está arrojando una carga de la prueba excesiva hacia nosotros.

3.5. Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC.

Sobre lo anterior la AI señaló en la VISTA DUN, que resulta ilógico que TUM pueda recibir la totalidad de la BPD de CC (PM y PF) y que yo me encuentre impedido. TUM y CC sí pueden distinguir entre los registros que se comparten respecto a PF y PM, TUM válidamente recibe la totalidad de la BPD respecto a PF (con y sin actividad empresarial) y no la de PM.

La AI además señala en la VISTA DUN, que suponiendo sin conceder que DUN sí se encontrare imposibilitado, nada le impediría intercambiar la BPD de PM. Existía un impedimento legal para intercambiar la BPD parcialmente (sin PFAE). Dicha problemática fue materia de reuniones con la CNBV.

La AI menciona en la VISTA DUN que pretendemos variar la justificación proporcionada en la investigación agregando la referencia a PFAE. No varié mi justificación, únicamente profundicé en la distinción.

También señala la AI en la VISTA DUN que no existe medio de convicción alguno que soporte la imposibilidad señalada por DUN. Sin tener acceso a los sistemas de CC nos encontrábamos impedidos en aportar medios probatorios. No obstante, aportamos los esquemas de cargas.

3.6. La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD.

La AI señala en la VISTA DUN que el hecho que un contrato no revista la forma no es motivo de inexistencia. La consideración es imprecisa en virtud de que en la especie nunca existió un acuerdo de voluntades. El requerimiento de la CNBV es previo a que se forme el contrato, no previo únicamente a que el acuerdo de voluntades conste por escrito. De ahí lo infundado del dicho de la AI.

También señala la AI en la VISTA DUN que de las constancias se desprende que CC sí solicitó el intercambio a DUN y sí informó a la CNBV alguna cuestión (ilegible por estar testado) respecto un acuerdo con DUN para el intercambio de la BPD de PM. Al respecto, sin tener conocimiento por el testado, el hecho es que la CNBV no emitió requerimiento alguno.

Manifiesta la AI en la VISTA DUN que no puedo beneficiarme de mi propia omisión, siendo que la falta de respuesta de DUN es lo que provoca que no se dé un acuerdo entre las SIC. El hecho que resulta indudable es que la CNBV nunca emitió el requerimiento.

3.7. Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO.

La AI señala que en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC, me encontraba obligado a proporcionar la información de manera completa y sin distorsiones. Se precisa que la información en cuestión se refiere al HC lo que no incluye a las "*experiencias comerciales*". Asimismo, dentro del CONTRATO DUN Y CC no se incluyó la obligación de proporcionar las "*experiencias comerciales*".

La AI señaló que mi manifestación de que el Verdadero Segmento CO no resulta relevante carece de sustento o fundamento, ya que no se expone el razonamiento seguido para llegar a ellas. Contrario a ello, señalamos como sustento el que la LRSIC no contempla la obligación de proporcionarlas, además de CC opera sin el Verdadero Segmento CO y que DUN no utiliza el de CC. Asimismo, resulta falso que la falta de compartición de las "*experiencias comerciales*" haya generado un daño en la competencia. En todo caso, si hacemos uso de dicha información es para proporcionar un mejor producto (*competition on the merits*), sin que por ello es que sean indispensables.

3.8 No resultó intrascendente el que mediara consentimiento entre DUN y CC para no intercambiar la BPD de PM, sino todo lo contrario.

Dentro de la VISTA DUN, la AI señaló que con independencia del dicho de MAGR, el incumplimiento a la LRSIC implica que la SIC solicitante no cuente con la información suficiente para competir en el mercado. La AI no es el órgano facultado para aplicar la LRSIC; si existe un común acuerdo entre la parte que se rehúsa y aquella a la que se le rehúsa, no se actualiza la negativa de trato.

Continúa la AI señalando que no existen elementos de convicción que acrediten el dicho de MAGR. El que existan o no elementos de convicción adicionales debió de haber sido expresado en el DPR.

La AI manifestó que DUN no ha realizado el intercambio del SEGMENTO CO. Reiteramos que no existe obligación legal o contractual de proporcionar el Verdadero Segmento CO.

Asimismo, por lo que respecta al Verdadero Segmento CO, este no constituye información indispensable para la elaboración de productos de IC.

3.9 La AI varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido a terceros.

Sobre el apartado en cuestión, en la VISTA DUN la AI señala que con independencia de que los precedentes internacionales no obligan a la COMISIÓN, la interpretación que realizo del caso *Trinko* es incorrecta. El citado caso cobra relevancia para señalar como un "*deber de trato*" regulatorio no debe de ser entendido como que un bien o servicio se encuentra normalmente ofrecido a terceros. Dicho precedente no le resulta vinculante a la COMISIÓN, sin embargo, fue empleado para exponer la correcta interpretación de la figura de la negativa de trato.

Adicionalmente, la AI señaló que el *free-riding* implica obtener un beneficio sin compartir los costos o riesgos, que el intercambio de la BPD genera el pago de una contraprestación por lo que no se actualiza un *free-riding* y que ambas SIC se benefician de obtener la BPD de la otra SIC. La manifestación que realicé en la CONTESTACIÓN DUN fue conceptual; no obstante, la compartición de la BPD sí genera un efecto de *free-riding* en el sentido que, aun cuando el que no invierte paga una tarifa, quien decide invertir en crear su BD asume el riesgo de desarrollo de la BPD, mientras que la otra SIC puede optar por no asumir ese riesgo y únicamente pagar para utilizar la del otro. Dicho riesgo no es reflejado en la tarifa que se cobra a la otra SIC.

Por otra parte, es incorrecto el argumento de la AI consistente en que ambas SIC se benefician de obtener la BPD de la otra. Ello es incorrecto en tanto que una SIC puede invertir poco en el desarrollo de su BPD y aprovechar la inversión del otro que invierte más en su BPD, siendo que el beneficio que obtiene la que invierte poco será mayor al que reciba el que invirtió más. Dicha disparidad de inversión genera un efecto de *free-riding* que desincentiva la inversión.

4. OBJETO Y/O EFECTO DE LA CONDUCTA

4.1. Manifestaciones en relación al supuesto objeto o efecto de la conducta consistente en impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

1. Disminución de posibilidad de NO HIT en consultas para generación de RCI y consecuente incremento en costos de CC. La AI señala que no pruebo que el incremento en las posibilidades de HIT se dé para DUN y CC y que la imputación no es que CC haya intentado hacer crecer su BD y no haya podido. Se precisa que el argumento en cuestión no requiere ser probado, puesto que resulta evidente que el no intercambio de la BPD genera que tanto CC como DUN veamos reducida la posibilidad de dar NO HIT; asimismo, lo señalado por la AI no guarda relación con la teoría del daño que se analiza.

2. La AI señala que el intercambio de la información puntual no constituye un sustituto a la BPD. El problema está en que los USUARIOS no le proporcionen los registros a CC, lo cual es una cuestión ajena a nosotros.

En la VISTA DUN, la AI señaló que los USUARIOS tienen incentivos a afiliarse a la SIC más grande. Como ya fue abordado no existen incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC más grande, en virtud de que los efectos de red se mantienen para ambas SIC con motivo de la regulación. Asimismo, se reitera que la BPD no sustituye a los registros, puesto que para generar un RC es necesario tanto información positiva como negativa, lo único que genera el intercambio de la BPD es la reducción de la probabilidad de dar HIT.

La AI señaló que la conducta limita a CC para afiliarse más nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos, lo que es falso puesto

que estos cuentan con la información de ambas SIC mediante el intercambio puntual que se realiza para un RCI.

3. La única motivación de DUN para llevar a cabo la conducta imputada fue propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información proporcionada por DUN, así como en la comercialización de productos de IC.

Dentro de la VISTA DUN, la AI reitera que el intercambio de la BPD de PM es una de las maneras de que las SIC se allegan de IC, siendo que el intercambio de información puntual de IC es más caro. La información relevante es la de sus propias BD y del intercambio del artículo 36 bis de la LRSIC.

4. La falta de intercambio de la BPD ha limitado la capacidad de CC de afiliarse nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos confiable.

En la VISTA DUN, la AI señala que los USUARIOS tienen incentivos para afiliarse a la SIC más grande y que existen costos que asumen los USUARIOS afiliados a la SIC al presentarse tarifas por el intercambio de información puntual. No es verdad en virtud de que los efectos de red de mantienen para ambas SIC con motivo de la regulación.

Manifestó la AI, que si bien [REDACTED] B [REDACTED] se han afiliado a CC no han adquirido productos de información de PM de CC. Lo señalado resulta irrelevante, puesto que lo único que interesa para efectos del argumento que nos ocupa, es que CC ha podido afiliarse otros USUARIOS.

Se reitera que para realizar RC se requiere información positiva y negativa por lo que la información de la BPD es insuficiente.

5. Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años.

En la VISTA DUN, la AI señala que la participación de CC es baja en comparación con la de DUN y que es erróneo realizar el cálculo del crecimiento de la participación pues se pierde la dimensión real de las cifras. Al respecto, la evolución en el tiempo de las participaciones de mercado refleja la dinámica competitiva en el mercado.

La AI manifestó que las mayores contraprestaciones pagadas por DUN a CC son resultado de la existencia de nuestro poder de mercado y no un probable resultado de que CC cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM y demás productos de IC. Se desestima lo señalado en razón de que el aumento en el número de créditos registrados y de expedientes en la BD de PM de CC.

La AI refiere que el acceso a la IC es una barrera significativa para potenciales entrantes y CC. Dicha barrera tendría sentido en el análisis del objeto y/o efecto de la conducta únicamente si dicha barrera se hubiera generado a partir de la

Eliminado: tres palabras.

supuesta práctica anticompetitiva. El intercambio de la BPD no es una barrera para que CC u otro potencial entrante pueda participar en el mercado.

La AI insistió que la BPD es una forma de abastecimiento indirecto necesario para elaborar productos de IC. Si bien los registros crediticios contenidos en las BD de IC son necesarios para el buen funcionamiento de los mercados de IC, esto resulta irrelevante, porque ni la BPD ni el SEGMENTO CO son los insumos necesarios o primarios y, en el caso particular de la BPD, esta se puede replicar o sustituir sin incurrir en costos excesivos o restrictivos. De suceder el intercambio de la BPD en las condiciones actuales, estaría pagando un sobreprecio por los registros que requiere, al tener que adquirir los registros de PF, los cuales no me es posible utilizar y que representan una proporción importante de la BD de CC.

4.2. La falta de innovación no se encuentra prevista dentro de los objetos o efectos que debe de tener una PMR, aunado a que las manifestaciones de la AI sobre el particular, resultan gratuitas.

En la VISTA DUN la AI manifiesta que en el DPR se planteó la ausencia de innovación como otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la comercialización de productos de IC. La ausencia de innovación no puede ser tomada en consideración al momento de analizar el objeto o efecto de la conducta, puesto que no es uno de los previstos en el artículo 54, fracción III de la LFCE.

También señala la AI que otro de los beneficios sería que se cree a una mayor gama de productos de valor agregado. La AI no ofreció argumentos que conlleven a concluir lo afirmado.

a. Manifestaciones generales

Esta autoridad realizó un estudio pormenorizado de lo manifestado por DUN en sus alegatos, siendo que los mismos no alteran las conclusiones señaladas en la presente resolución, por lo que no se considera necesario plasmar en esta resolución las consideraciones respecto de cada uno de los argumentos referidos por DUN.

Lo anterior, en concordancia con lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.) que establece lo siguiente:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitirseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se

cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, si resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial [énfasis añadido].”

Localización: Jurisprudencia P/J. 26/2018 (10a.); 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 60, noviembre de 2018; Tomo I; Pág. 5; Registro No. 2 018 276.

En relación con los alegatos presentados por DUN se observa que dicho agente económico reitera diversos argumentos o se refiere a cuestiones que ya fueron analizadas en la presente resolución y que, por lo tanto, no modifican las conclusiones a las que arriba esta autoridad.

Adicionalmente, aquellas precisiones o argumentos adicionales referidos por DUN tampoco modifican las conclusiones a las que llega este PLENO.

Sin perjuicio de lo anterior, se indica que, mediante su escrito de alegatos DUN pretende, entre otras cuestiones, combatir las manifestaciones de la AI contenidas en la VISTA DUN; no obstante, tal circunstancia no es acorde con la naturaleza jurídica de los alegatos y de la vista desahogada por la AI.

La finalidad del PSFJ es garantizar los derechos de defensa de los empleados, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, a efecto de que las personas emplazadas como probables responsables de cometer una infracción a la LFCE tengan la oportunidad de desvirtuar la imputación presuntiva realizada por la AI.¹²²⁰

¹²²⁰ Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: “**COMPETENCIA ECONÓMICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).** De la lectura de los artículos 23, 24, fracción I, 30, 31, primer párrafo, 33 y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, vigentes hasta el 28 de junio de 2006, así como de los diversos 23, fracción I, 25, fracción I, 27, párrafo primero, 30, 31 y 52 de su reglamento, se concluye que el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas seguido por la Comisión Federal de Competencia se compone de tres etapas: la primera, de carácter inquisitorio, que tiende a recabar los medios de prueba que permiten presumir la existencia de actos o prácticas prohibidas por la ley y concluye con el oficio de presunta responsabilidad; la segunda en la que se especifican las conductas monopólicas o prohibidas observadas en la etapa anterior, concretando y precisando los hechos, las circunstancias de realización y las normas violentadas; se señala al presunto infractor y las razones que se tuvieron para considerarlo con ese carácter; se ordena su emplazamiento para que en un plazo de treinta días naturales, comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhiba las pruebas que estime pertinentes; se fija un plazo no mayor de treinta días naturales para formular alegatos y culmina con una resolución que debe dictarse dentro de los sesenta días naturales siguientes; además se desarrolla como un procedimiento seguido en forma de juicio donde se

En este sentido, de conformidad con las propias manifestaciones de DUN contenidas en su escrito de alegatos, la imputación que se realizó a los emplazados quedó delimitada por lo señalado en el DPR, "[...] sin que lo manifestado por la AI en el DESAHOGO de la VISTA de la AI pued[a] ampliar o variar las imputaciones contenidas en el DPR, puesto que ello sería contrario al debido proceso y vulneraría el derecho de audiencia [...]".¹²²¹

Así, corresponde a este PLENO determinar si en el DPR (en sus méritos) se prueba la imputación realizada a los emplazados y si ésta es o no desvirtuada mediante las contestaciones y las pruebas de los emplazados, sin que esta autoridad considere las manifestaciones de la AI contenidas en la Vista DUN como una ampliación o modificación de la imputación contenida en el DPR.

De esta forma, el derecho de defensa debe ejercerse respecto de la imputación realizada en el DPR, ya que es ésta la que trasciende a las consideraciones respecto de la determinación o no de la responsabilidad de los agentes económicos.

Adicionalmente, la naturaleza de los alegatos consiste en otorgar a las partes dentro de un procedimiento la oportunidad para recapitular sus argumentos y lo acreditado a través de las pruebas ofrecidas para demostrar que los hechos por ellos afirmados han quedado probados, y que, en su caso, las pruebas de la parte contraria no acreditaron los hechos afirmados por dicha parte.¹²²² No es su objeto controvertir los pronunciamientos que realiza la AI en términos del artículo 83, fracción II, de la LFCE, los cuales, como se indicó, no modifican ni amplían la imputación de los emplazados.

despliegan los actos necesarios para dictar una resolución definitiva, respetando las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de defensa, brindando al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar en su favor; y la tercera tiene como objeto impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento anterior, o bien, la que tenga por no presentada la denuncia o por no notificada una concentración, con la posibilidad alternativa de revocarla, modificarla o confirmarla". Jurisprudencia I.4o.A. J/50; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, mayo de 2007; Pág. 1690. Registro No. 172 585.

¹²²¹ Página 2 del escrito de alegatos de DUN.

¹²²² Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "**ALEGATOS DE BIEN PROBADADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBEN INTRODUCIR PRETENSIONES NOVEDOSAS, AUN CUANDO SE HAGAN VALER COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD SOLICITADA.** Si bien el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que los alegatos de bien probado por escrito, deben considerarse al emitir la sentencia, lo cierto es que las cuestiones que puedan contener no son ilimitadas, sino que se sujetan a recapitular lo expuesto y probado por las partes a partir de la demanda y su contestación así como, en su caso, de la ampliación de aquella y de su contestación, o bien, en dichos alegatos es posible objetar o refutar las pruebas ofrecidas por la contraparte de quien los formula. En ese sentido, no es dable que introduzcan pretensiones novedosas, es decir, que no se hubieran formulado oportunamente para la integración de la litis, pues aun cuando se hagan valer como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, no tienen origen en lo expuesto en el juicio contencioso administrativo y, por ello, esos aspectos deben solicitarse desde la demanda o su ampliación; de lo contrario, se rebasa la materia de la litis y se transgrede el artículo 50 del ordenamiento referido lo que, además, resultaría en perjuicio de la contraparte, al pretenderse el estudio y pronunciamiento de una cuestión respecto de la cual no se le otorgó la oportunidad de defenderse o manifestarse, y sería contrario al principio de equidad" [énfasis añadido]. Tesis Aislada (Administrativa), 10a. época; Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación; I.10o.A.87 A (10a.); Número de registro 2018543.



50177

Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Lo anterior resulta congruente con la naturaleza que corresponde al PSFJ establecido en la LFCE, ya que, en dicho procedimiento, y de forma previa a la etapa procesal para rendir los alegatos, los emplazados ya tuvieron oportunidad de defenderse de la imputación.¹²²³

Al formular el DPR, la AI tiene la obligación de fijar la imputación, incluyendo los hechos y medios de convicción necesarios que le den sustento, así como las disposiciones legales que se estimen violadas, contemplando las consecuencias que pueden derivar de dicha violación. De este modo, la AI no puede modificar o perfeccionar la litis, ni tampoco subsanar omisiones o ampliar la imputación del DPR, a través de las manifestaciones a la vista prevista en el artículo 83, fracción II, de la LFCE.

Por otra parte, al dar contestación al DPR, los emplazados están en condiciones de ejercer simultáneamente sus dos derechos: (i) por un lado formular y probar las alegaciones que se opondan a la imputación; y (ii) por otro, reaccionar a lo expresado en el DPR. Siendo el único momento procesal en que tales derechos pueden ser ejercidos.

Es por ello, que no está previsto en la legislación una vista a los emplazados respecto del desahogo de la vista que realiza la AI en términos de la fracción II, del artículo 83 de la LFCE.

¹²²³ Sirve de sustento la siguiente tesis aislada: **"VISTA AL ACTOR CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA. NO DEBE ELIMINARSE NI ES FORZOSA UNA DÚPLICA AL DEMANDADO PARA ATENDER AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1400 Y 1401 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).** La igualdad procesal de las partes no significa una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una frente a la otra. Es decir, lo determinante de la equidad en el procedimiento es que las partes tengan la oportunidad efectiva de presentar sus pretensiones y los elementos de prueba que los apoyan en igualdad de condiciones, por lo cual, el actor debe tener la oportunidad de formular y probar la acción y de pronunciarse sobre lo expresado en la contestación de demanda; y el demandado, debe tener la oportunidad de formular y probar las excepciones y de pronunciarse sobre lo expresado en la demanda, lo cual tiene lugar en el esquema previsto en los artículos 1400 y 1401 del Código de Comercio, porque: 1) al presentar la demanda, el actor tiene derecho de alegar y ofrecer pruebas para probar su acción, pero no puede contestar o reaccionar a lo expresado por su contraparte porque esta última todavía no ha intervenido en el proceso; 2) al dar contestación a la demanda, el demandado está en condiciones de ejercer simultáneamente sus dos derechos: por un lado alegar y ofrecer pruebas en apoyo de sus excepciones y, por otro, reaccionar a lo expresado en la demanda; 3) en el tercer momento, consistente en la vista dada al actor con las excepciones, en que éste puede hacer efectivo lo que no estaba en condiciones lógicas de realizar al momento de presentar la demanda: responder a lo expresado por su contraparte en la contestación; de modo que el actor requiere dos actos para ejercer las mismas oportunidades que el demandado puede ejercer en uno solo. Así, la igualdad no debe provenir del número de actos en que cada parte pueda ejercer sus oportunidades de defensa, sino en que éstas sean equivalentes. Por tanto, no resultaría válido eliminar el derecho de contradicción del actor respecto a la contestación de demanda, porque en tal caso se encontraría en clara desventaja frente al demandado, siempre y cuando se refiera a los hechos y a las pruebas que no tenía la carga de expresar con su demanda, para que el desahogo de la vista no se convierta en una oportunidad de subsanar omisiones en su escrito inicial y anexos. Asimismo, la circunstancia de que no se prevea una vista al demandado con el escrito de desahogo del actor, es decir, una duplica, no significa que, excepcionalmente, en algún caso sea susceptible que el juez la conceda respecto de algún hecho nuevo que alegare el actor en ese escrito de desahogo, del que resultara importante conocer el punto de vista del demandado o simplemente para darle el derecho de contradicción por considerar que, de no hacerlo, quedaría en desventaja el demandado, a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal de las partes, pues este principio también actúa como criterio de actuación para el juez, al conducir el proceso". Tesis Aislada (Constitucional, Civil), 10a. época; Primera Sala; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo I; Pág. 590; 1a. LXII/2017 (10a.); Número de registro 2014578.

b. Manifestaciones particulares

Como ya se señaló, DUN refiere en sus alegatos, sustancialmente, los mismos señalamientos realizados en su CONTESTACIÓN DUN, en la PERICIAL DUN o en alguna de las pruebas ofrecidas por dicho agente económico dentro del PSFJ,¹²²⁴ o señalamientos que pueden ser atendidos con el análisis realizado por esta autoridad al estudiar dichos documentos. En este sentido, en virtud de que los mismos ya fueron atendidos en la presente resolución, ténganse por aquí reproducidas las respuestas correspondientes en aras de evitar repeticiones innecesarias.

En adición a lo anterior, DUN realiza diversas manifestaciones respecto de lo señalado por la AI en la VISTA DUN que no resultan trascendentes para el análisis de la presente resolución toda vez que combaten manifestaciones realizadas por la AI en la VISTA DUN que no sustentan las conclusiones de esta autoridad. Por ello, se considera innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de dichas precisiones pues sería ocioso, ya que, a pesar de haber sido estudiadas por esta autoridad, en nada trascienden al resultado final.

V.2. Alegatos de AI

En cuanto al análisis de los alegatos presentados por la AI en relación con la imputación contenida en el DPR que corresponde a la fracción V del artículo 56 de la LFCE, se indica que los mismos guardan relación con la PERICIAL DUN que fue desahogada durante el PSFJ. Como se indicó en el apartado “IV.2 Elementos de convicción aportados por DUN” de la presente resolución, el contenido de la PERICIAL DUN: (i) no acredita la pretensión probatoria de DUN; o (ii) en su caso, sustenta señalamientos reconocidos por el propio DPR y, en este sentido, no lo combate.

Por ese motivo, no se considera necesario el análisis de los alegatos presentados por la AI en relación con la Pericial DUN, pues esto resultaría ocioso ya que lo señalado no cambiaría las conclusiones antes apuntadas.

VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS

Una vez analizados los argumentos de DUN y valoradas las pruebas que se encuentran en el EXPEDIENTE, se concluye que existen elementos de convicción suficientes que acreditan la responsabilidad de DUN por la comisión de la PMR prevista en el artículo 56, fracción V de la LFCE, consistente en la negativa de trato de DUN a CC, de conformidad con los siguientes elementos:

A. El MR corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM con una dimensión geográfica nacional

De conformidad con los artículos 58 de la LFCE y 5 de las DR, se acredita que el MR corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM con una dimensión geográfica nacional, por las siguientes razones:

¹²²⁴ Dichas pruebas se analizan en el apartado “IV.2. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN APORTADOS POR DUN” de la presente resolución.

- La IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos, ya que:
 - a) La IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la demanda debido a que no existen alternativas que puedan cumplir con la misma función y al mismo costo que la IC que recopilan las SIC de los USUARIOS o de la otra SIC, siendo que además las SIC no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes dada la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos a una SIC. Adicionalmente, en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD y los contratos marcos de DUN y CC, los USUARIOS proporcionan su IC

Por otro lado, la IC de PF no es un sustituto de la de PM debido a que se tendría información incompleta o diferente. De igual forma, la información proporcionada por las autoridades fiscales y la Lista de Personas Políticamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero, no constituye un sustituto que cumpla con la misma función que la IC, sino que es información complementaria.

- b) La IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la oferta ya que: (i) existen restricciones legales que le impiden a otras instituciones, además de las SIC, acceder a la IC de los USUARIOS; (ii) sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las SIC en términos del secreto financiero, además de que los USUARIOS son quienes principalmente pueden otorgar créditos; (iii) la LRSIC señala que la BD de las SIC se integrará con la información que le sea proporcionada por los USUARIOS; y (iv) no existen proveedores alternativos en el MR de PM, como agencias gubernamentales, que se encarguen de recopilar IC directamente de los USUARIOS o de los propios CLIENTES para después abastecer a las SIC.
- La entrega de IC de los USUARIOS a la SIC es a través de
Así, las SIC pueden abastecerse de los USUARIOS ubicados a lo largo de todo el país, sin que el costo de distribución de la IC dependa de su ubicación, precisamente debido a que la distribución se realiza por medios electrónicos. Asimismo, de la LRSIC se desprende que la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los CLIENTES a las SIC. Por lo tanto, el mercado tiene una dimensión geográfica nacional.
- Las SIC no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados. Las BD de las SIC se integra únicamente con IC de los USUARIOS.
- Los USUARIOS no pueden contratar con un agente económico distinto a las SIC, quienes son las únicas facultadas para recopilar, organizar, enviar y comercializar la IC de PM en territorio nacional.
- No existen proveedores alternativos para la IC de PM. La BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la IC proporcionada de forma directa o indirecta por éstos.

Eliminado: un renglón y trece palabras.

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar la definición de MR DE PM expuesta en el DPR, tal como se desprende del apartado "A. MERCADO RELEVANTE" incluido en la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

B. DUN tiene PS en el MR DE PM

De conformidad con los artículos 59 de la LFCE y 7 y 8 de las DR, se acredita que DUN cuenta con PS en el MR DE PM, de conformidad con lo siguiente:

- DUN contó con altas participaciones de mercado durante el PERIODO INVESTIGADO. Durante el PERIODO INVESTIGADO, DUN contó con el [REDACTED] del promedio anual de registros, con el [REDACTED] del promedio anual de expedientes y con el [REDACTED] de USUARIOS que adquirieron de manera exclusiva productos de IC de PM de DUN. Dichas participaciones son mucho más elevadas que las de CC, su único competidor.

Adicionalmente, la integración vertical favorece que los accionistas de DUN le suministren su registro, lo que aunado a los efectos de red favorece a que más USUARIOS se afilien a DUN para consumir sus productos y en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, le entreguen su IC.

- En el MR DE PM existen las siguientes barreras a la entrada: (a) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (b) la dificultad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos; (c) las restricciones normativas, ya que se requiere por lo menos [REDACTED] para recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC; (d) la presencia de economías de red; y (e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales USUARIOS.
- En el MR DE PM existe una alta concentración de mercado.
- Las SIC requieren acceder a la IC de los USUARIOS para poder participar en el mercado. De esta manera, en términos del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD y el análisis de rentabilidad realizado, las SIC requieren afiliar a suficientes USUARIOS para recibir su IC y venderles sus productos. La gran mayoría de los USUARIOS consumió productos de DUN, lo que implica que CC pudo acceder a una cantidad reducida de IC de manera directa, aumentando su dependencia a la BD de DUN.
- La IC que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos de IC está bien posicionada en el MR DE PM pues carece de sustitutos cercanos, siendo que las SIC sólo pueden abastecerse de los USUARIOS o de la otra SIC. Adicionalmente, CC sólo puede acceder a la IC de los USUARIOS que no están afiliados a CC, a través de DUN; por lo que los costos de recurrir a una alternativa son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.
- DUN tiene la capacidad de restringir el abasto y CC, único competidor de DUN, no pudo contrarrestar su poder.

Eliminado: treinta palabras.

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que tiene PS en el MR DE PM, tal como se desprende del apartado "B. PODER SUSTANCIAL" de la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

C. DUN se rehusó unilateralmente a vender, comercializar o proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los cuales estaban disponibles y eran normalmente ofrecidos a terceros

De conformidad con el artículo 56, fracción V de la LFCE, se acredita que DUN realizó una acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a CC la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, de conformidad con lo siguiente:

- La BPD y el SEGMENTO CO son bienes disponibles y normalmente ofrecidos a terceros (es decir a otras SIC).

De conformidad con el artículo 36 de la LRSIC, las SIC están obligadas a intercambiar su BPD cuando se la solicitan, por lo que de conformidad con dicha disposición la BPD se encuentra disponible y ofrecida por ley a terceros.

Por otra parte, del artículo 36 bis de la LRSIC se desprende que las SIC deben intercambiar IC para la elaboración de los RCI, y que el envío de información se debe efectuar de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los USUARIOS, por lo que de conformidad con dicha disposición el SEGMENTO CO se encuentra disponible y ofrecido por ley a terceros.

- DUN se rehusó a proporcionar su BPD de PM a CC, quién solicitó el intercambio de la BPD.

El [REDACTED] CC notificó a DUN [REDACTED] su solicitud para intercambiar la BPD respecto de información de PM y PFAE, [REDACTED]

[REDACTED] No obstante, DUN omitió responder a dicha solicitud y, como el mismo DUN reconoce, no proporcionó a CC su BPD.

En términos del artículo 36 de la LRSIC, el intercambio de la BPD debe realizarse dentro del mes siguiente a la solicitud. En este sentido, la negativa de DUN se computa desde agosto de dos mil doce, siendo que a la fecha no existen elementos que permitan suponer que dicha conducta ha cesado y, en cambio, de las manifestaciones de DUN se desprende que, por lo menos, continuó hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO INVESTIGADO.

- DUN se rehusó a proporcionar el SEGMENTO CO a CC, quién los solicitó.

Desde agosto de dos mil trece y, al menos, hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO INVESTIGADO, DUN omitió proporcionar a CC la información relacionada con

Eliminado: dos renglones y veintitrés palabras.

el SEGMENTO CO, conforme a lo que señala el CONTRATO DUN Y CC y el artículo 36 bis de la LRSIC.

A partir de la firma del CONTRATO DUN Y CC [REDACTED] CC consultó a DUN en diversas ocasiones para que le proporcionara la información puntual de CLIENTES específicos. En términos del CONTRATO DUN Y CC y el artículo 36 bis de la LRSIC, dichas consultas incluían la solicitud del SEGMENTO CO, por lo cual no era necesario que CC lo solicitara de forma independiente. Lo anterior fue corroborado por [REDACTED]

Adicionalmente, a la fecha no existen elementos que permitan suponer que dicha conducta ha cesado y en cambio, de las manifestaciones de DUN se desprende que, por lo menos, continuó hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO INVESTIGADO.

- DUN omitió proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO unilateralmente.

De la información disponible dentro del EXPEDIENTE resulta claro que CC realizó todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el intercambio. Asimismo, DUN no acredita que existiera algún impedimento o justificación para su negativa. En este sentido, la omisión de proporcionar la IC depende de la voluntad de DUN.

- La omisión de DUN de proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO tiene el carácter de continua, pues se trató de una omisión que se prolongó en el tiempo sin interrupción y sin que exista evidencia de que haya cesado.

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que se rehusó unilateralmente a vender, comercializar o proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los cuales estaban disponibles y eran normalmente ofrecidos a terceros, tal como se desprende del apartado "C. CONDUCTA" de la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

D. Objeto y Efecto de la PMR acreditada.

De conformidad con el artículo 54, fracción III de la LFCE, se acredita que las conductas realizadas por DUN tuvieron por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, de conformidad con las siguientes razones:

- Con su conducta, DUN aumenta el costo¹²²⁵ y vuelve menos completos y confiables¹²²⁶ los RC de PM comercializados por CC, lo que genera que los USUARIOS tengan menos

¹²²⁵ En términos del artículo 36 bis de la LRSIC, las SIC originadora de un RC debe consultar la BD de la otra SIC y en caso de HIT pagar una contraprestación.

¹²²⁶ La negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes.

¹²²⁶ Los RC de PM que emite CC no cuentan con la información que DUN tiene en su BD relativa a créditos comerciales por la negativa de intercambiar el SEGMENTO CO.



**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

incentivos para consumir productos de CC y, en consecuencia, por el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, para otorgar su IC a CC.

- El no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la información completa, particularmente la información correspondiente al SEGMENTO CO.
- La negativa de intercambiar la BPD obstaculiza la integración de la BD de PM de CC e impide a CC contar con mecanismos o alternativas para poder ofrecer productos de valor agregado que resulten atractivos para los USUARIOS, toda vez que la información recopilada a través del intercambio puntual [REDACTED] que contengan toda la información disponible en la industria.
- De esta manera, la omisión de DUN de intercambiar tanto de la BPD como el SEGMENTO CO ha limitado la capacidad de CC de afiliar más y nuevos USUARIOS.
- Al limitar la capacidad de CC de afiliar USUARIOS, DUN afecta la capacidad de CC para recopilar IC de manera directa, lo cual vuelve a CC más dependiente de la BD de DUN, a la cual DUN no le da acceso de forma completa.
- La conducta de DUN no se explica por razones económicas distintas a impedir el acceso a CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO. A DUN no le genera un costo adicional compartir la IC; no obstante, podría recibir una contraprestación por proporcionarla e incluso, en términos de la LRSIC, su omisión podría acarrearle una sanción monetaria o incluso la posibilidad de que les sea revocada su autorización.
- De dos mil doce a dos mil quince, DUN tuvo un promedio de [REDACTED] en la comercialización de RC de PM, siendo que por lo menos hasta dos mil catorce [REDACTED]

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que su conducta tuvo como objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, tal como se desprende del apartado "D. OBJETO Y EFECTO" de la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

Por último, como se indicó en el apartado "E. GANANCIAS EN EFICIENCIA" de la sección "II. Manifestaciones contra el DPR" de esta resolución, contrario a lo que señala DUN, no está acreditado en el EXPEDIENTE que la negativa de trato de dicho agente económico genere ganancias en eficiencia.

VI. SANCIÓN

Toda vez que la PMR que se imputó a DUN continuó consumándose durante la vigencia de la LFCE, el tipo administrativo, su sanción y los elementos para determinar su individualización se rigen por dicha normativa.

Eliminado: treinta y ocho palabras.



En este sentido, tal como se acreditó en la presente resolución, la PMR que se imputó a DUN actualiza los supuestos previstos en los artículos 54 y 56, fracción V, de la LFCE y, en consecuencia, resulta procedente imponer la sanción correspondiente.

Dicha conducta implica una PMR violatoria de la LFCE que se materializó a través de la negativa de DUN de proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO con el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO. Ante este escenario, se realiza un análisis de la conducta anticompetitiva llevada a cabo por DUN para determinar el monto de la sanción correspondiente.

A. Multa

Para realizar el análisis referido deberá atenderse a los elementos contenidos en el artículo 130 de la LFCE, el cual prevé diversos elementos objetivos y subjetivos que deben ser considerados para efectos de determinar la gravedad de la infracción y, en consecuencia, el monto de la multa:

"Artículo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión [énfasis añadido]".

Asimismo, se precisa que las DR establecen parámetros que deben analizarse al estudiar los elementos que determinan la gravedad de la infracción en términos del artículo 130 de la LFCE.

[SIN TEXTO]

Adicionalmente, debe atenderse al principio de proporcionalidad,¹²²⁷ considerando lo siguiente:¹²²⁸

¹²²⁷ En este sentido, véase la siguiente tesis, cuyo texto señala: **“RECARGOS Y SANCIONES, SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD NO DEPENDEN DE QUE GUARDEN UNA RELACIÓN CUANTITATIVA CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS. El artículo 2º del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y las sanciones, entre otros conceptos, son accesorios de las contribuciones y participan de su naturaleza, lo que los sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como son los de proporcionalidad y equidad, principios estos que, tratándose de los recargos y las sanciones, no pueden interpretarse como una relación cuantitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se siga que su monto no pueda exceder de una determinada cantidad, en virtud de que lo accesorio de los recargos y sanciones no reconoce tal limitación porque tienen sus propios fundamentos. Los recargos son accesorios de las contribuciones dado que surgen como consecuencia de la falta de pago oportuno de ellas, esto es, para que se origine la obligación de cubrir recargo al fisco es imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley; de ahí que, si no se causa la contribución no puede incurrirse en mora, ni pueden originarse los recargos, ya que éstos tienen por objeto indemnizar al fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones, mientras que las sanciones son producto de infracciones fiscales que deben ser impuestas en función a diversos factores, entre los que descuellan como elementos subjetivos, la naturaleza de la infracción y su gravedad. Desde esa óptica, el monto de los recargos y, por consiguiente, su proporcionalidad y equidad, dependerán de las cantidades que durante la mora deje de percibir el fisco, mientras que el monto de las sanciones dependerá de las cantidades que por concepto de pago de contribuciones haya omitido el obligado. Así, aquellos requisitos constitucionales referidos a los recargos, se cumplen, tratándose de la ley que los previene, cuando ésta ordena tomar en consideración elementos esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses, como son la cantidad adeudada, el lapso de la mora y los tipos de interés manejados o determinados durante ese tiempo. En cambio, la equidad y la proporcionalidad de las sanciones, sólo pueden aprearse atendiendo a la naturaleza de la infracción de las obligaciones tributarias impuestas por la ley, así como a la gravedad de dicha violación y a otros elementos subjetivos, siendo obvio que su finalidad no es indemnizatoria por la mora, como en los recargos, sino fundamentalmente disuasiva o ejemplar [énfasis añadido]”**. Tesis aislada P. C/98; 9º. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII, diciembre de 1998; Pág. 256. Registro: 194943.

¹²²⁸ También resultan aplicables por analogía los siguientes criterios: i) **“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 81, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Conforme al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sanciones aplicables a los servidores públicos que por actos u omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados. Así, el citado precepto consagra el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones al establecer una variedad de éstas para que la autoridad sancionadora, tomando en consideración la responsabilidad, circunstancias del servidor público y sus antecedentes, entre otros aspectos, imponga la sanción correspondiente, es decir, señala que deben tomarse en cuenta diversas circunstancias a efecto de su individualización. En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 81, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el ámbito federal, al establecer que para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del encargo, se inhabilitará al infractor por 1 año, viola el indicado principio, ya que constriñe a la autoridad administrativa a imponer siempre la misma sanción, sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones exteriores, medios de ejecución y reincidencia, es decir, a todos los servidores públicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción especificada, lo cual impide el ejercicio de la facultad prudente del arbitrio para individualizar y cuantificar la temporalidad de la inhabilitación [énfasis añadido]”**. Tesis Aislada 2ª. XX/2009; 9º. Época; 2ª. Sala; SJF y su Gaceta; XXIX, Marzo de 2009; Pág. 477. Registro 167635; y ii) **“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unas, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe**

- (i) La finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva;¹²²⁹
- (ii) La sanción debe individualizarse atendiendo a criterios objetivos y subjetivos;
- (iii) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado, en principio, atendiendo a elementos objetivos, es decir, al beneficio obtenido por la práctica indebida, así como a los daños y perjuicios generados al interés público con la infracción;
- (iv) Los elementos subjetivos deberán ser considerados para individualizar la sanción, atenuándola o agravándola, de acuerdo con las circunstancias particulares de la conducta del emplazado; y
- (v) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben ponderarse en su conjunto con la finalidad de determinar su graduación.

establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda [énfasis añadido].

Jurisprudencia P/J. 9/95.; 9ª. Época; Pleno; SJF y su Gaceta; II, julio de 1995; Pág. 5. Registro 200347.

¹²²⁹ Esto considerando la exposición de motivos de la LEY ANTERIOR, en la cual se señaló "[...] En materia de sanciones, se prevé que éstas sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo y minimice los incentivos a infringir la ley. Cabe mencionar que, si bien las sanciones pecuniarias aquí propuestas son mayores que las establecidas por otros ordenamientos, esto es justificable en virtud de que las ganancias monetarias de llevar a cabo prácticas monopólicas son, en general, extremadamente altas, de manera que si la sanción pecuniaria fuera pequeña, no se aplacarían las tendencias a infringir la ley, mientras que el daño provocado a la sociedad puede ser enorme. —Las prácticas absolutas tienen un efecto generalizado sobre el mercado. Por ello, y por su gravedad, se prevé que cualquier persona pueda denunciar ante la Comisión la existencia de dichas prácticas. —Respecto a las prácticas monopólicas relativas se prevé que solamente el afectado pueda denunciar dicha situación, ya que éstas pueden ser difíciles de identificar, y sus efectos negativos no siempre son aparentes. —Las sanciones previstas, tanto para las prácticas monopólicas como para las concentraciones, se aplicarán no sólo a las empresas sino también a los administradores responsables de dichas prácticas, de manera que los individuos, en general, tengan pocos incentivos personales para infringir la ley [...]" y de la LFCE "[...] En cumplimiento de su finalidad, la Comisión puede imponer multas y otras medidas punitivas a los agentes económicos que infrinjan las normas de competencia económica incurriendo en una práctica monopólica o concentración ilícita [...] el objetivo de las sanciones pecuniarias por violaciones a la ley pretende ser disuasorio". Al respecto la SCJN ha reconocido que las sanciones que prevé la LFCE tienen un efecto disuasivo "[...] Desde esa perspectiva se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica busca que las sanciones a los agentes económicos sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo y minimicen los incentivos a infringir la ley" [énfasis añadido] Ejecutoria del Amparo en Revisión 453/2012. Asimismo, resulta aplicable por analogía, lo señalado por la SCJN respecto a las sanciones en materia de competencia económica en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha reconocido que las sanciones en esta materia no solo pretenden reponer el daño sino que tienen como finalidad reprimir y disuadir la comisión de ilícitos "[...] Desde el punto de vista de la eficacia de una política sancionatoria es necesario considerar que la sanción óptima permite: (i) compensar el costo social de la infracción; y (ii) lograr que el respeto por las obligaciones legales reporte al potencial infractor un mayor beneficio neto esperado que su incumplimiento [...] de modo que el incumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público, con la vinculación social que le caracteriza, genera una afectación a la Hacienda Pública que debe sancionarse, entre otras cosas, con una multa que reponga el daño que se pretende enmendar y que, además, reprima y disuada la comisión de conductas ilícitas [...] en adición a la disuasión se persigue un equilibrio que permita individualizar las sanciones de forma adecuada y proporcional a cada caso" Ejecutoria del Amparo en Revisión 943/2017.

En este sentido, se procede a analizar los elementos que permiten a esta autoridad graduar el nivel o intensidad de la multa que corresponde y que debe oscilar entre el mínimo y el máximo que establece la LFCE.¹²³⁰

El artículo 127, fracción V, de la LFCE, dispone lo siguiente:

"Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[...]

V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa, con independencia de la responsabilidad civil en que se incurra;

[...]"

Así, conforme a lo establecido en la fracción V y el párrafo segundo del artículo 127 de la LFCE, en el caso de que se demuestre que algún agente económico incurrió en una PMR, la COFECE podrá imponer como sanción, una multa de hasta el equivalente al ocho por ciento de sus ingresos acumulables correspondientes al último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva.

En este caso, de la información que obra en el EXPEDIENTE, se advierte que en el presente caso la multa máxima que podría imponerse a DUN corresponde a la cantidad de **B**

B Dicha cantidad equivale al 8% (ocho por ciento) de los ingresos acumulables de DUN en el ejercicio fiscal correspondiente a dos mil diecisiete.

Lo anterior, de conformidad con la siguiente tabla:

MULTA MÁXIMA			
Agente económico	Año	Ingresos acumulables de 2017	Monto máximo de la sanción (8%)

¹²³⁰ Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: **"COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CUANDO SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA ES REGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONABLE ARBITRIO PARA GRADUAR EL NIVEL O INTENSIDAD DE LA MULTA QUE IMPONGA.** La potestad sancionadora del órgano regulador mencionado cuando se acredite la existencia de una práctica monopólica, que incluye individualizar su determinación, es reglada y sujeta a pleno control judicial, a partir de una clara explicación y motivación de su ejercicio, ya que admite sólo una respuesta jurídica correcta -una multa entre un mínimo y un máximo-, aunque sujeta a un cierto arbitrio, para que la autoridad evalúe, conforme a criterios y conocimientos científicos, los elementos objetivos de la práctica reprochada y subjetivos del infractor al emitir su decisión; de ahí que sea incorrecto sostener que en la individualización de la sanción debe otorgarse un grado de discrecionalidad, en tanto que la ley establece la consecuencia jurídica de incurrir en una conducta anticompetitiva, esto es, la imposición de una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, cuyo monto será definido por la autoridad en uso de su arbitrio, lo cual es jurídicamente controlable. Por tanto, si bien es cierto que aquella goza de cierta discrecionalidad para determinar algunos elementos de las prácticas monopólicas, dada la aplicación y ponderación de conocimientos técnicos, también lo es que la adjudicación de consecuencias jurídicas a dicha conducta es reglada, aunque sujeta a un razonable arbitrio para graduar el nivel o intensidad de la multa que imponga". Tesis Aislada I.1o.A.E.217 A (10a.); 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 48, noviembre de 2017; Tomo III; Pág. 1993; Registro No. 2 015 650.

DUN ¹²³¹	2017 ¹²³²	B	B
---------------------	----------------------	---	---

B. Duración de la práctica

En términos del artículo 185 de las DR, de conformidad con los elementos que obran en el EXPEDIENTE y que fueron previamente valorados, se advierte que la conducta imputada a DUN se actualizó desde el mes de agosto de dos mil doce por lo que hace a su negativa de proporcionar la BPD,¹²³³ y a partir de agosto de dos mil trece por lo que hace a su negativa de proporcionar el SEGMENTO CO.¹²³⁴

Adicionalmente, no se cuenta con evidencia de que a la fecha de conclusión del periodo de investigación, DUN haya suprimido la PMR acreditada, pues del EXPEDIENTE no se desprenden elementos que acrediten que DUN haya intercambiado su BPD con CC o le haya proporcionado a dicho agente económico el SEGMENTO CO al compartirle la información puntual en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.

A mayor abundamiento, existen constancias en el EXPEDIENTE que permiten concluir lo anterior: (a) en la comparecencia celebrada en marzo de dos mil diecisiete, MAGR indicó que "[...]

[...]" y que la LRSIC prevé un plazo de un mes para proporcionar la BPD a partir de la solicitud. (b) DUN no combate lo señalado por la AI en el DPR, relativo a que "[...] a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN, y considerando la información derivada de la investigación, no se cuenta con evidencia de que se haya dado el intercambio de la BPD entre [DUN] y [CC], ni que [DUN] haya compartido a [CC] el SEGMENTO CO en los RC de PM [...]" y (c) en la CONTESTACIÓN DUN, DUN admite que a la fecha de su CONTESTACIÓN DUN no se había realizado el intercambio de la BPD con CC ni se le había proporcionado el SEGMENTO CO y se limita a intentar justificar las razones por las cuales a su parecer no está obligado a entregar dicha IC a CC; en específico, indicó entre otras cuestiones, que : "[...] [CC] ha venido operando sin recibir el Verdadero Segmento CO [énfasis añadido]"¹²³⁵ y que "[e]s correcto que el artículo 36 de la LRSIC establece la obligación de intercambio de la BPD [...] El que no se haya dado el intercambio no obstante exista la obligación legal [...]" [Énfasis añadido]"¹²³⁶

En virtud de todo lo expuesto, se considera que la PMR cometida por DUN, continuó por lo menos hasta la fecha de conclusión de la investigación (once de agosto de dos mil diecisiete).

¹²³¹ Folio 35024.

¹²³² Toda vez que como se señala en el siguiente numeral no se cuenta con evidencia de que a la fecha de conclusión del periodo de investigación, DUN haya intercambiado su BPD con CC o le haya proporcionado a dicho agente económico el SEGMENTO CO, se toman los ingresos acumulables de DUN correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete.

¹²³³ Fecha en que se debió de haber dado el intercambio de la BPD considerando que CC notificó a DUN la solicitud y que la LRSIC prevé un plazo de un mes para proporcionar la BPD a partir de la solicitud.

¹²³⁴ Fecha en la cual de la omisión de DUN de proporcionarle el SEGMENTO CO. Lo que se relaciona con el hecho de que DUN reconoció que no intercambiaba la información que corresponde al SEGMENTO CO y que el intercambio puntual se formalizó el

¹²³⁵ Página 105 de la CONTESTACIÓN DUN.

¹²³⁶ Página 108 de la CONTESTACIÓN DUN.

C. Tamaño del mercado afectado

De conformidad con el artículo 184 de las DR, para determinar el tamaño del mercado afectado se considerará la estimación de las ventas totales del infractor con base en la información que tenga esta COFECE a su disposición.

Como se señaló a lo largo de esta resolución, la conducta imputada a DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, pues por un lado limitó la capacidad de CC de recopilar información (tanto de forma directa como indirecta) y, por otro lado, afectó la capacidad de CC de comercializar productos de IC, pues generó que los RC de PM de CC fueran más caros y menos confiables y evitó que CC contara con una mayor BD para la elaboración de productos de valor agregado.

En este sentido, ambos mercados fueron afectados por la conducta acreditada, por lo que se procede a su medición.

a. MR DE PM

A continuación, se presentan dos tablas elaboradas con información reportada por la CNBV en sus informes anuales, en las cuales se indica el tamaño de las BD de PM en cuanto a número de registros y expedientes, respectivamente. Los indicadores anteriores permiten medir el tamaño del mercado afectado en relación con la recopilación de IC.

Ahora bien, no se cuenta con información del número de registros contenidos en las BD de DUN y CC para los años posteriores a dos mil quince. De igual forma, no se cuenta con información del número de expedientes contenidos en las BD de DUN y CC para los años posteriores a dos mil catorce.

De esta manera, para efectos de medir el tamaño del MR de PM en el periodo en que se realizó la PMR, es decir, por lo menos hasta dos mil diecisiete, se asume que en los años respecto de los cuales no se cuenta con información, las BD se encontraban conformadas por el número de registros o expedientes reportados en el último año respecto del cual se cuenta con información.

Dicha postura es conservadora, teniendo en consideración que el comportamiento observado muestra un mercado en crecimiento.

Año	Millones de créditos registrados en la BD de PM de las SIC
2012	15.2
2013	17.8
2014	18.9
2015	22
2016	22
2017	22

Año	Millones de expedientes en la BD de PM de las SIC
2012	3.1
2013	3.2
2014	3.3
2015	3.3
2016	3.3
2017	3.3

Elaboración propia con información de la CNBV,¹²³⁷ referida por DUN en la página 67 de la CONTESTACIÓN DUN.

b. MERCADO RELACIONADO

Asimismo, se presentan dos tablas elaboradas con información proporcionada por CC y DUN en el EXPEDIENTE, en las cuales se indica el total de productos de IC de PM vendidos por DUN y CC (únicos dos participantes en el segmento de PM) y el ingreso por la venta de dichos productos, de dos mil doce a dos mil diecisiete. Dichos productos incluyen tanto los RC de PM como los productos de valor agregado, ya que el mercado de la comercialización de productos de IC de PM se vio afectado en su totalidad.

En el EXPEDIENTE se cuenta con dicha información hasta marzo de dos mil quince. De esta manera, para efectos de medir el tamaño del MR DE PM por lo menos hasta dos mil diecisiete, se asume que en los años de dos mil quince a dos mil diecisiete, años respecto de los cuales no se cuenta con información, el número de productos vendidos y el ingreso por la venta de dichos productos es igual a la obtenida en dos mil catorce (último año respecto del cual se cuenta con información disponible para todos los meses del año).

Dicha postura es conservadora, teniendo en consideración que el comportamiento observado muestra un mercado en crecimiento.

Año	Número de productos de IC de PM comercializados
2012	B
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Año	Ingresos obtenidos por la comercialización de productos de IC de PM
2012	B
2013	

Eliminado: ocho palabras.

¹²³⁷ Disponible para su consulta en la página de Internet <https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Paginas/Informes.aspx>, consultada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve.



**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

2014	B
2015	
2016	
2017	

* Elaboración propia con información proporcionada por CC (folio 6034 bis, Anexo 3.5) y DUN (folio 6142, Anexo 8.3).

D. Participación del mercado

Con base en lo señalado en el numeral anterior, se procede a analizar la participación de mercado de DUN y CC en cada uno de los rubros utilizados para medir el tamaño de mercado afectado.

a. MR DE PM

Año	Millones de créditos registrados en la BD de PM de cada SIC		Total por año	% de créditos registrados en la BD de PM de cada SIC	
	DUN	CC		DUN	CC
2012	15.0	.2	15.20	98.68%	1.32%
2013	17.0	.8	17.80	95.51%	4.49%
2014	18.0	.9	18.90	95.24%	4.76%
2015	21.0	1.0	22.00	95.45%	4.55%
2016	21.0	1.0	22.00	95.45%	4.55%
2017	21.0	1.0	22.00	95.45%	4.55%

Año	Millones de expedientes en la BD de PM de cada SIC		Total por año	% de expedientes registrados en la BD de PM de cada SIC	
	DUN	CC		DUN	CC
2012	3	.1	3.10	96.77%	3.23%
2013	3	.2	3.20	93.75%	6.25%
2014	3	.3	3.30	90.91%	9.09%
2015	3	.3	3.30	90.91%	9.09%
2016	3	.3	3.30	90.91%	9.09%
2017	3	.3	3.30	90.91%	9.09%

Elaboración propia con información de la CNBV,¹²³⁸ referida por DUN en la página 67 de la CONTESTACIÓN DUN.

b. MERCADO RELACIONADO

Periodo	Número de productos de IC de PM comercializados por SIC		Total por año	% productos de IC de PM comercializados por SIC	
	DUN	CC		DUN	CC
2012	B				
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					

¹²³⁸ Disponible para su consulta en la página de Internet <https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Paginas/Informes.aspx>, consultada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

Periodo	Ingresos obtenidos por la comercialización de productos de IC de PM por SIC		Total por año	% ingresos por SIC por la comercialización de productos de IC de PM	
	DUN	CC		DUN	CC
2012	<div>B</div>				
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					

Elaboración propia con información proporcionada por CC (folio 6034 bis, Anexo 3.5) y DUN (folio 6142, Anexo 8.3).

E. Daño Causado

La PMR actualizada dañó el proceso de competencia y libre concurrencia tanto en el MR DE PM, como en el MERCADO RELACIONADO. En este sentido, se considera particularmente dañina, toda vez que afecta un sector fundamental para el país.

Por su trascendencia en el desarrollo nacional, el artículo 25 de la CPEUM establece que corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Las SIC se desenvuelven como parte del sistema financiero mexicano y son indispensables para el buen funcionamiento de este, por lo que las conductas que afectan los mercados de IC trascienden de manera particular a la economía.

La relevancia de la actividad de las SIC fue reconocida por esta COFECE en el "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS", en el cual señaló lo siguiente:¹²³⁹

"La información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales es muy importante para el desarrollo eficiente de los mercados de crédito. Dicha información reduce costos, aumenta la eficiencia en el manejo del riesgo y hace factible una gran cantidad de créditos que de otra forma no se realizarían. En ausencia de un sistema de información crediticia, el crédito estaría al alcance sólo de una parte de los potenciales receptores: aquellos con garantías o con costos de investigación o monitoreo de solvencia suficientemente bajos en relación con el monto del crédito. De esta forma, la Sociedad de Información Crediticia (SIC) juega un papel importante en la ampliación del crédito, la reducción de tasas de interés, y la eficiencia en la asignación y manejo de los riesgos.

Desde el punto de vista económico, las SICs corrigen fallas de mercado derivadas de información asimétrica. Con información asimétrica los otorgantes de crédito no pueden distinguir entre solicitantes buenos y malos (selección adversa); además, una vez otorgado el crédito, los deudores tienen incentivos a no pagar aun pudiendo hacerlo (riesgo moral).¹²⁴⁰ En ausencia de un sistema de información crediticia, un cliente podría contratar créditos con varias instituciones, las cuales podrían no estar informadas de la exposición total del cliente y sobre su

¹²³⁹ Disponible en la página de Internet: <https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/ResumenEjecutivo26-09-14.pdf#pdf>, consultado el catorce de enero de dos mil diecinueve. Página 330.

¹²⁴⁰ La nota al pie original señala: "Nicholson (2002)."

probabilidad de pagar. Asimismo, los métodos alternativos de determinar la solvencia del cliente podrían ser ineficientes y anti-competitivos. Por ejemplo, un banco podría establecer relaciones de larga duración con un cliente sobre el cual tendría un monopolio de la información, lo que le permitiría cobrar tasas de interés excesivas y extraer rentas.¹²⁴¹ La información asimétrica distorsiona precios y decisiones de otorgamiento del crédito. Las SICs cumplen la función de mitigar estas fallas de mercado.¹²⁴²

Empíricamente, existe evidencia clara de los efectos positivos de las sociedades de información crediticia en la promoción y expansión del crédito.¹²⁴³

[...] [Énfasis añadido]"

Asimismo, fue reconocida por la Primera Sala de la SCJN, quien indicó lo siguiente:

"[...]

172. En efecto, el artículo 36 Bis, en la parte que interesa, señala que las sociedades, al emitir reportes de crédito, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir la contenida en las bases de las demás sociedades de información crediticia. Esto es, configura una obligación específica para el ejercicio de su actividad, sin que la sujete a la celebración de contrato alguno.

173. Cabe destacar que la obligación referida responde, específicamente, a la materia en la cual se encuentra inserta la [LRSIC], a saber, la financiera, en la cual el Estado funge como rector y, por ende, puede sujetar a determinadas modalidades el ejercicio de las actividades para las cuales son autorizadas todas las instituciones del sector financiero, entre ellas, las sociedades de información crediticia, a fin de que se cumpla con su finalidad, esto es la de contribuir al desarrollo económico del país ofreciendo servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer la experiencia de pago de empresas y personas físicas, lo que a su vez, contribuye a formar la cultura del crédito entre la población, al tiempo de promover un sano consumo interno. [Énfasis añadido]."¹²⁴⁴

Como se advierte, la finalidad de la actividad que desarrollan las SIC es contribuir al desarrollo económico del país ofreciendo servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer la experiencia de pago de empresas y PF.

Las SIC corrigen fallas de mercado derivadas de información asimétrica, lo que permite la ampliación del crédito, la reducción de tasas de interés, y la eficiencia en la asignación de créditos y manejo del riesgo crediticio.

Ello es acorde a lo señalado en la Exposición de Motivos del Decreto que reforma los artículos 2 y 23 de la LRSIC:¹²⁴⁵

¹²⁴¹ La nota al pie original señala: "Padilla y Pagano (1997)."

¹²⁴² La nota al pie original señala: "Japelli y Pagano (Diciembre 1993)."

¹²⁴³ La nota al pie original señala: "Brown, Japelli & Pagano (Mayo 2007)."

¹²⁴⁴ Amparo en Revisión 52/2012, Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de mayo de dos mil doce. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Páginas 57 a 58.

¹²⁴⁵ Disponible en la página de Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/073_DOF_01feb08.pdf, consultada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

“Las instituciones que proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, tienen como fin principal contribuir al desarrollo del país prestando servicios que minimizan el riesgo crediticio, al suministrar información que ayuda a conocer la solvencia económica y el comportamiento de empresas así como de personas físicas, lo que a su vez, favorece la formación de una cultura del crédito entre la población” [énfasis añadido].

Asimismo, refuerza lo anterior, lo establecido en la propia Exposición de Motivos de la LRSIC:¹²⁴⁶

“En conclusión, las intenciones que motivan la presente Iniciativa son evitar injusticias cometidas contra los usuarios de la banca y demás entidades por el uso injustificado de la información crediticia, a fin de dar seguridad jurídica a quienes obtienen financiamiento, así como constituir las condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte y, cumplir con el pago por la otra, así como posibilitar la modificación de los errores existentes en la base de datos, establecer criterios homogéneos en cuanto a la interpretación y modificación de la información contenida en el reporte correspondiente, evitar errores en los propios reportes de crédito, publicitar los procedimientos y mecanismos para modificar las bases de datos, así como para proteger los derechos e intereses de las personas que se encuentran en dichas bases de datos, a fin de otorgarles seguridad y certeza jurídica en las operaciones que realicen, así como, constituir las condiciones necesarias para que tanto acreditados como acreditantes, cuenten con las herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte, y cumplir con el pago de la otra, lo cual sólo se logrará teniendo un sistema financiero sano y equilibrado que no vuelva a quebrantarse. Las operaciones crediticias deben de reactivarse si se quiere un desarrollo económico sustentable, y las condiciones para que ello se dé deben depurarse, pues de lo contrario, cualquier estadística de mejoría económica será siempre ilusoria. Los sectores productivos y financiero serán provechosos en la medida en que pacten sanas prácticas económicas por ambas partes” [énfasis añadido].

Así, por la relevancia que tienen para el país el MR DE PM y el MERCADO RELACIONADO, la conducta de DUN es especialmente dañina pues genera afectaciones en el proceso de competencia y libre concurrencia en un mercado que impacta de manera directa el otorgamiento de crédito en el país y, en consecuencia, la economía y el desarrollo nacional.

Adicionalmente, la conducta de DUN es dañina en tanto que afecta la posibilidad de CC de otorgar productos que contengan la totalidad de la IC que podría permitir evaluar de mejor manera el otorgamiento de créditos, minimizando el riesgo.

DUN omitió compartir la BPD y el SEGMENTO CO, actividades expresamente previstas en la legislación de la materia, con el propósito de generar crecimiento constante en el sistema financiero, impulsando el otorgamiento de créditos y la posibilidad en el pago de estos.

Uno de los objetivos del artículo 36 bis de la LRSIC es que se integren RC simétricos y confiables, pues ello es fundamental tanto para la competencia del sector, como para que la evaluación de los riesgos crediticios se efectúe considerando la mayor información posible.

¹²⁴⁶ Disponible en la página de Internet: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2001/10/asun_1379_20011031_841502.pdf, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve.



5.191

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

La posibilidad de realizar una correcta evaluación del crédito es fundamental en tanto aumenta el otorgamiento y puede disminuir las tasas de interés para acceder a estos. Así, cuando una de las SIC emite un RC omitiendo información, se atenta contra el buen funcionamiento del sistema financiero.

Adicionalmente, la falta de compartición de la BPD podría tener como consecuencia que la SIC de menor tamaño no cuente con las herramientas e incentivos para innovar respecto de productos de valor agregado, los cuales también son de mucha utilidad para la evaluación de los riesgos crediticios.

De lo anterior, puede desprenderse que la afectación es significativa y los daños pueden ser transversales.

Adicionalmente, para efectos de obtener un monto que sirva como base para el cálculo de la sanción en el presente apartado se realiza una estimación de daño sobre la base de parámetros objetivos y conservadores.

Para realizar este cálculo estimado se considera que la conducta de DUN sólo se explica si DUN consideraba que el beneficio que podría obtener por la omisión de compartir la IC (por ejemplo, impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO para evitar que los USUARIOS otorgaran su información y consumieran los productos de CC en lugar de los de DUN) era mayor que el ingreso que podría recibir por el intercambio de IC.

En este sentido, únicamente con la finalidad de obtener un monto objetivo para el cálculo de la sanción se considerará como monto del daño, el beneficio que DUN dejó de percibir al negarse a realizar el intercambio de la BPD de PM por realizar la PMR.

Ahora bien, de los elementos que obran en el EXPEDIENTE se advierte que CC solicitó el intercambio de la BPD y ofreció pagar a DUN una tarifa de intercambio de **B** **B** por registro de información relativa a PM.

Ya que DUN no logró acreditar eficiencias derivadas de la negativa de DUN de intercambiar la información de PM con CC, la única racionalidad de dicha conducta es que el sacrificio del beneficio económico, en este caso, el pago de **B** por registro de información relativa a PM, fuera menor que el beneficio económico de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Si bien el beneficio económico que DUN sacrificó no refleja el total del daño realizado al mercado como consecuencia de la práctica, se considera que, dada la información disponible en el EXPEDIENTE, esta es la mejor estimación y permite obtener el valor mínimo de la afectación a dicho mercado. Al haber impedido sustancialmente el acceso a CC, DUN redujo la presión competitiva en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, lo que se tradujo en una afectación a los USUARIOS quienes pagaron precios más elevados, así como a CC quien se vio forzado a ofrecer un producto de menor calidad que DUN (ya que contaba con menos IC que DUN) e incrementar el porcentaje de HIT.

Eliminado: seis palabras.

Para estimar el beneficio económico sacrificado por DUN, se consideró la tarifa de intercambio de [B] propuesta por CC, el total de registros que contiene la BD de DUN y los porcentajes de expedientes de DUN que contienen solo información negativa [B] e información positiva y negativa [B].
[B] 1247

A mayor abundamiento, se explica la metodología utilizada a continuación:

1. **Estimación del tamaño de la BPD:** 1248 La información de la BPD está conformada exclusivamente por información negativa (como créditos vencidos o en estado de incumplimiento). Debido a que en el EXPEDIENTE no se cuenta con información respecto al número de registros de la BPD de DUN fue necesario estimar la misma. Conforme a lo manifestado por DUN, el [B] de los expedientes están conformados solo por información negativa, mientras que el [B] de los expedientes cuenta con información positiva y negativa (es decir, al menos un registro negativo). 1249 Adicionalmente, a partir de la información que obra en el EXPEDIENTE 1250 es posible estimar el promedio mensual de registros por expediente contenido en la BD de DUN. Para ello se dividió el total de registros entre el total de expedientes para todos los meses de los que se tiene información (en la tabla "*Estimación de Daño*" se muestra el detalle de este cálculo). Así, se asume que el [B] de los expedientes cuentan con un total de registros negativos igual al promedio mensual de registros por expediente y, de manera conservadora, que el [B] de los expedientes cuentan con un registro negativo. Esto permite estimar el tamaño de la BPD mensual.

La estimación de la BPD realizada implica que en promedio [B] [B] de los registros que conforman la BD de DUN equivalen a registros con información negativa. Se considera que esta es una estimación conservadora tomando en cuenta que, a partir de la información que obra en el EXPEDIENTE la BPD de PF, es decir, la que contiene solo registros negativos de personas físicas, representa aproximadamente el [B] de los registros totales contenidos en la BD de PF. 1251

2. **Valuación del intercambio de la BPD.** Se multiplicó la tarifa de [B] [B] propuesta por CC para el intercambio de la BPD respecto de los registros de PM por el tamaño de la BPD estimada de DUN en un mes determinado con el fin de estimar el ingreso que habría obtenido DUN por compartir su BPD en dicho mes. Al sumar el ingreso mensual estimado a lo largo de la duración de la PMR es posible obtener el ingreso total

1247 Folio 34530.

1248 Para estimar el tamaño de la BPD de DUN se utilizan los datos proporcionados en el EXPEDIENTE por dicho agente económico, toda vez que presentan mayor desagregación en comparación con los disponibles en los informes anuales de la CNBV. Esto permite estimar de manera más precisa el tamaño de la BPD de DUN y, por lo tanto, el beneficio sacrificado por dicho agente económico.

1249 Folio 34530.

1250 Folio 5802 (anexo "8.6 Consolidado").

1251 Folios 5802 (anexo "4.9 INFORMACION MENSUAL FACTURADO ENTRE SIC's") y 24904 (anexo "COFECE-AI-DGIM-2016-008-PF01").



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

por el intercambio de la BPD para DUN. Es importante resaltar que la tarifa de **B** **B** considerada permite obtener el valor mínimo¹²⁵² del beneficio económico sacrificado por DUN al ser una propuesta firme por CC.

A continuación, se presenta a detalle los cálculos realizados para estimar el beneficio económico sacrificado por DUN al negarse al intercambio de la BPD con CC.

Tabla: Estimación de Daño

	A	B	C=B/A	D	E	F	G=ADC+AE	H=GF
Fecha	Expedientes	Registros BD DUN	Registros por Expediente	%Expedientes con solo Info. Negativa	%Expedientes con Info. Negativa y Positiva	Precio por Registro	Estimación BPD de DUN	Ingreso Sacrificado por DUN por comparar BPD
ago-12								
sep-12								
oct-12								
nov-12								
dic-12								
ene-13								
feb-13								
mar-13								
abr-13								
may-13								
jun-13								
jul-13								
ago-13								
sep-13								
oct-13								
nov-13								
dic-13								
ene-14								
feb-14								
mar-14								
abr-14								
may-14								
jun-14								
jul-14								
ago-14								
sep-14								

Eliminado: doscientas dieciséis palabras.

¹²⁵² Si DUN hubiera otorgado acceso a CC a su BPD, es posible que la negociación de la tarifa llevara a una cuota superior a los **B** considerando que cuenta con la BD de mayor tamaño. Por lo tanto, la metodología propuesta estima el beneficio mínimo sacrificado por DUN.



COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA

50200 Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Fecha	A	B	C=B/A	D	E	F	G=ADC+AF	H=CF
	Expedientes	Registros BD DUN	Registros por Expediente	%Expedie ntes con solo Info. Negativa	%Expediente s con Info. Negativa y Positiva	Precio por Registro	Estimación BPD de DUN	Ingreso Sacrificado por DUN por compartir BPD
oct-14	<div>B</div>							
nov-14								
dic-14								
ene-15								
feb-15								
mar-15								
abr-15								
may-15								
jun-15								
jul-15								
ago-15								
sep-15								
oct-15								
nov-15								
dic-15								
ene-16								
feb-16								
mar-16								
abr-16								
may-16								
jun-16								
jul-16								
ago-16								
sep-16								
oct-16								
nov-16								
dic-16								
ene-17								
feb-17								
mar-17								
abr-17								
may-17								
jun-17								
jul-17								
ago-17								
							\$15,470,965.44	

Eliminado: doscientas ochenta palabras.



80201

**Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET**

**Debido a que en el EXPEDIENTE solo se cuenta con información del total de registros y expedientes hasta abril de 2015, a partir de mayo de 2015 se considera que el total de los registros y expedientes es igual al último dato que se observa en el EXPEDIENTE (abril 2015). De igual forma, el cálculo del promedio de registros por expediente en dichos meses considera el último dato de registros y expedientes observado. Este supuesto es conservador considerando que los datos muestran que el total de registros y expedientes en la BD de DUN ha mostrado una tendencia creciente.*

F. Indicios de intencionalidad

En términos del artículo 130 de la LFCE, la intencionalidad es uno de los elementos que debe considerarse para efecto de la determinación de la gravedad de la infracción y el monto de la sanción que debe imponerse en un caso determinado.

De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, DUN tenía plena intencionalidad de rehusarse a proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO a CC. En específico, DUN optó por no proporcionarle a CC la BPD a pesar de la existencia de su solicitud. Adicionalmente, optó por no proporcionar el SEGMENTO CO al compartir con CC la IC mediante el intercambio puntual.

DUN omitió proporcionar dicha IC de manera consiente, sin que se trate de una negligencia o error por DUN.

Adicionalmente, el artículo 182 de las DR establece algunos parámetros que deben tomarse en consideración al analizar los indicios de intencionalidad:

- i) **La terminación de la PMR antes, al inicio, durante la etapa de investigación o durante el PSFJ:** como se indicó al analizar la duración de la PMR, no se tienen indicios de que la conducta de DUN consistente en negarse a proporcionar su BPD y el SEGMENTO CO a CC haya cesado.
- ii) **La acreditación de que la conducta ilegal se cometió por la sugerencia, instigación o fomento por Autoridades Públicas:** en el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita concluir que la práctica acreditada se haya cometido por sugerencia, instigación o fomento por autoridades públicas.
- iii) **Los actos realizados para mantener oculta la conducta:** en el EXPEDIENTE no se acreditó que DUN haya realizado actos para mantener oculta la conducta e incluso reconoció que no proporcionaba a CC la BPD y el SEGMENTO CO.
- iv) **La acreditación de que la conducta se cometió por instigación de otro Agente Económico, sin que el infractor haya jugado un papel de liderazgo en la adopción e instrumentación de la conducta:** en el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita concluir que la práctica acreditada se haya cometido por instigación de un agente económico, sin que DUN haya jugado un papel de liderazgo en la adopción e instrumentación de la conducta.

G. Afectación al ejercicio de las atribuciones de la Cofece

De conformidad con el artículo 130 de la LFCE, esta COFECE debe considerar si la conducta de los emplazados durante la investigación y el desahogo del PSFJ, afectó el ejercicio de sus atribuciones.



Al respecto, el artículo 183 de la DR refiere que para el cálculo de las sanciones esta COFECE deberá considerar la cooperación de los agentes económicos, durante la investigación y en el trámite del PSFJ.

No se advierten elementos en el EXPEDIENTE que permitan atenuar la sanción correspondiente derivado de lo señalado en los artículos referidos, pues si bien no se obstruyeron las facultades de esta autoridad, tampoco puede interpretarse que la actuación de DUN en la investigación o en el PSFJ fue de cooperación.

Asimismo, DUN no reconoció la existencia de la PMR imputada ni acreditó que la conducta hubiera cesado.

H. Capacidad económica de los responsables

El artículo 130 de la LFCE impone a la COFECE la obligación de considerar la capacidad económica al imponer sus sanciones.

Esta autoridad requirió a los emplazados para que presentaran sus declaraciones anuales de impuestos a efecto de que esta COFECE pudiera verificar, en su caso, su capacidad económica y sus ingresos acumulables.

Sin embargo, toda vez que la COFECE no contaba con la totalidad de la información requerida, el ST requirió diversa información al SAT, a efecto de conocer la capacidad económica e ingresos acumulables de las personas emplazadas en el EXPEDIENTE.

En este sentido, tomando en consideración la información disponible en el EXPEDIENTE, se advierte que DUN contó con ingresos acumulables de B

B en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.¹²⁵³

Conclusiones respecto de la gravedad

Como se indicó, el artículo 130 de la LFCE prevé los elementos que deben considerarse para determinar la gravedad de la infracción:

“Artículo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión [énfasis añadido]”.

En el presente caso, tomando en consideración que la conducta fue intencional, el tamaño del mercado afectado, la participación de DUN en éste, la duración de la práctica, el daño causado y la capacidad económica de DUN; esta autoridad determina que las conductas que se sancionan tienen una gravedad alta.

¹²⁵³ Último año respecto del cual se cuenta con información.

J. Imposición de las multas

El artículo 127, fracción V, de la LFCE prevé que la COFECE podrá imponer como multa hasta el equivalente al 8% (ocho por ciento) de los ingresos del agente económico que incurra en una PMR. Para efectos de individualizar esa multa, esta COFECE debe ejercer un razonable arbitrio y considerar la gravedad del caso concreto, considerando los elementos a que hace referencia el artículo 130 de la LFCE.¹²⁵⁴

La gravedad de la conducta permite individualizar la multa que, en todo caso, debe imponerse considerando que la finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva.¹²⁵⁵ En este orden de ideas, normalmente no será suficiente imponer una multa que sea equivalente al beneficio indebidamente obtenido o al daño cuantificable, pues la multa tendría entonces un carácter meramente restitutorio. Esto haría muy difícil prevenir conductas monopólicas de manera efectiva e, inclusive, podría incentivar a los agentes a cometerlas en perjuicio del interés público.

Adicionalmente, cabe considerar que la estimación del daño para efectos de esta sanción, como ha sido señalado anteriormente, fue realizada sobre parámetros objetivos y conservadores, pues toma la mejor información disponible en beneficio del particular y no incluye todas las afectaciones posibles al mercado, especialmente cuando (como en el caso concreto) el mercado tiene impacto transversal en múltiples actividades económicas.

Es por ello que la normativa de competencia permite a esta autoridad construir la sanción de manera inicial a partir del daño causado como elemento objetivo, y considerar después los demás elementos previstos en el artículo 130 de la LFCE para el efecto de que la sanción quede individualizada según las circunstancias del caso concreto y en atención a la finalidad constitucional de que las sanciones, en esta materia, deben tener un carácter disuasivo.

En el presente caso, tomando en consideración que la conducta fue intencional, el tamaño del mercado afectado, la participación de DUN en éste, la duración de la práctica, el daño causado y la capacidad económica de DUN; esta autoridad determina que las conductas que se sancionan tienen una gravedad alta.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la individualización de la sanción correspondiente.

¹²⁵⁴ Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial antes referido: "**COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CUANDO SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA ES REGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONABLE ARBITRIO PARA GRADUAR EL NIVEL O INTENSIDAD DE LA MULTA QUE IMPONGA**". Tesis Aislada I.1o.A.E.217 A (10a.); 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 48, noviembre de 2017; Tomo III; Pág. 1993; Registro No. 2 015 650.

¹²⁵⁵ Como se señaló anteriormente, y tal como se advierte de la Exposición de motivos de la LEY ANTERIOR y la LFCE, así como de los criterios de la SJCN, las multas tienen una finalidad disuasiva y no restitutoria, que no busca reponer el daño exclusivamente sino disuadir el comportamiento futuro de los agentes económicos. Además, resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada: "**COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O CAUTELARES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 384 Y 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, NO SON DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**". Tesis Aislada I.8o.A.44 A, 9ª época, T.C.C., Gaceta S.J.F.; Tomo XXII, PÁG. 1395; Registro 178035.



De conformidad con los razonamientos expuestos y los elementos aplicables establecidos en el artículo 130 de la LFCE, se considerará que la base de la multa a imponer es el daño causado (elemento objetivo).

Conforme lo explicado anteriormente, el beneficio obtenido o daño causado es apenas un punto de partida de la multa, y el monto que corresponda por ese concepto debe multiplicarse en función de los agravantes que se obtengan en cada caso concreto.

En el presente caso, el daño cuantificado se multiplica por dos en función de que existen elementos que acreditan que la conducta de DUN fue intencional, tal como se señaló en el apartado correspondiente. De igual manera, en el caso concreto existen elementos particulares relacionado con el daño causado y el mercado afectado que suponen afectaciones superiores que permitirían incrementar el monto de la sanción a imponer; no obstante, toda vez que con

B
B no es necesario realizar señalamientos adicionales al respecto.

Por último, se indica que en el presente caso no existen atenuantes conforme la normativa de competencia que permitan imponer una sanción más baja.

Así, por su responsabilidad al haber incurrido en la PMR prevista en los artículos 54 y 56, fracción V, de la LFCE, se impone la multa prevista en la fracción V del artículo 127 de la LFCE con base en el cálculo siguiente:

Multa Máxima LFCE	Consideración sobre su Capacidad Económica	Multa		Total de Multa a Imponer	% de Multa Máxima
		Daño Cuantificable	Agravante por intencionalidad * 2		
B		\$15,470,965.44	\$30,941,930.88	\$27,455,091.12	B

Con base en lo señalado, se impone a DUN una multa de **\$27,455,091.12** (veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil noventa y un pesos 12/100 M.N.), que equivale al **B** de la multa máxima prevista para estas conductas, asimismo, se advierte que DUN cuenta con la capacidad de pagar la multa impuesta en virtud de que la misma equivale al **B** de los ingresos acumulables para el último ejercicio fiscal del que se cuenta con información (dos mil diecisiete).¹²⁵⁶

En adición a lo anterior, se señala que el cálculo anterior es muy conservador ya que: (a) no se cuantificó la omisión de compartir el SEGMENTO CO en virtud de que, si bien se considera que se generó un daño al afectar la calidad y la información de los reportes de CC, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes en el EXPEDIENTE para estimarlo; (b) dicho cálculo subestima el daño pues no considera, por ejemplo, el efecto generado por la falta de compartición del SEGMENTO CO que generó que los RC de CC fueran menos confiables y, en

¹²⁵⁶ La capacidad económica debe considerar el momento en que los agentes económicos habrán de adquirir la obligación de pagar la multa correspondiente; es decir, debe considerarse la capacidad económica real que tiene el agente económico para hacer frente a la multa impuesta, pues sólo así se puede evitar la imposición de multas ruinosas. Véase el contenido de la tesis citada previamente de rubro "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE".



Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

consecuencia, que los USUARIOS tuvieran menos incentivos para entregar a CC su IC y comercializar sus productos; y (c) tampoco se consideró el daño generado a los USUARIOS que tuvieron que pagar un mayor número de veces la tarifa de HIT, ni los USUARIOS que dejó de atraer CC al no tener una BD competitiva.

RESUELVE:

PRIMERO. No se acredita la responsabilidad de Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción X, de la LFCE, en términos de la presente resolución.

SEGUNDO. No se acredita la responsabilidad de: 1) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex; 2) BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; 3) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; 4) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; 5) Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; 6) Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y 7) Trans Union LLC, por haber propiciado la comisión de la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción X de la LFCE.

TERCERO. No se acredita la responsabilidad de las siguientes personas físicas por haber participado directamente en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción X de la LFCE, de conformidad con el artículo 127, fracción X de dicho ordenamiento, esto es, en representación de las personas morales que se indican a continuación:

- i) Sergio Enrique Peña Zazueta, [REDACTED] B [REDACTED] en representación de dicha sociedad.
- ii) Mauricio Aurelio Gamboa Rullán, [REDACTED] B [REDACTED] en representación de dicha sociedad.

CUARTO. Se acredita la responsabilidad de Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracciones V, de la LFCE, en términos de la presente resolución.

QUINTO. Se impone a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia una multa en los términos establecidos en la sección "VII. SANCIÓN" de la presente resolución.


SEXTO. Se ordena dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la versión confidencial de esta resolución, para los efectos legales a que haya lugar.

Eliminado: veintiséis palabras.



-50206 Pleno
Resolución
Expediente IO-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Notifíquese personalmente.- Así lo acordó y firma el PLENO, por unanimidad de votos en la sesión ordinaria de mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de la presente resolución, previa excusa de la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez calificada como procedente, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución; ante la fe del Secretario Técnico de la COFECE, de conformidad con los artículos 2, fracción VIII, 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI, XXVII y LVI del ESTATUTO.


Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta


Jesús Ignacio Navarro Zermeno
Comisionado


Martín Moguel Gloria
Comisionado


Eduardo Martínez Chombo
Comisionado


Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado


José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado


Fidel Geardo Sierra Aranda
Secretario Técnico

